



**DE LOS NIVELADORES A *MARBURY VS. MADISON*: LA GÉNESIS
DE LA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL**

Madrid, 2009

*Universidad Autónoma de Madrid
Facultad de Derecho
Departamento de Derecho Público y Filosofía del Derecho*

Tesis Doctoral de D. Ricardo Cueva Fernández.
Dirigida por el Catedrático de Filosofía del Derecho D. Alfonso Ruiz Miguel.

Para mis padres y hermanos.

Para Esther.

Y para todas aquellas personas de quienes he aprendido algo.

Todas las cosas que tienen sentimiento, y desde que lo tienen, aprecian el mal de la sujeción y corren tras la libertad.

La Boétie

“Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con toda la fuerza común a la persona y los bienes de cada asociado, por la cual, uniéndose cada uno a todos, no obedezca, sin embargo, más que a sí mismo y permanezca tan libre como antes.” Tal es el problema fundamental...

Rousseau

SUMARIO

| | |
|--|----|
| Introducción | 9 |
| I. Los “niveladores”: contexto, antecedentes e ideas | 14 |
| I.1. El contexto previo a su aparición | 14 |
| I.1.1. Los elementos del “constitucionalismo medieval” | 14 |
| I.1.2. Inglaterra en el siglo XVI: la monarquía Tudor | 19 |
| I.1.3. El protestantismo y su justificación de la desobediencia al monarca | 24 |
| I.1.3.1. Reforma y cambios socio-políticos: Lutero y Calvino | 24 |
| I.1.3.2. El calvinismo en Francia y Escocia: hugonotes y presbiterianos | 31 |
| I.1.3.3. El anglicanismo y su disidencia | 35 |
| I.1.4. El ataque a la prerrogativa real en Inglaterra | 37 |
| I.1.4.1. Los nuevos súbditos y sus aspiraciones: la movilidad social como fuente de los futuros cambios políticos | 37 |
| I.1.4.2. El conflicto permanente con el Parlamento | 39 |
| I.1.4.3. La “Petición de Derechos” (<i>Petition of Right</i> , 1628) | 42 |
| I.1.4.4. La intensificación de la disputa eclesiástica durante el reinado de Carlos I: la <i>Grand Remonstrance</i> | 46 |
| I.1.5. La supremacía parlamentaria surgida con la Guerra Civil inglesa | 52 |
| I.1.5.1. La rebelión del Parlamento contra el Rey | 52 |
| I.1.5.2. La defensa ideológica de la supremacía parlamentaria | 53 |
| I.1.6. El surgimiento del radicalismo puritano | 56 |
| I.1.6.1. Independientes frente a presbiterianos | 56 |
| I.1.6.2. La construcción del <i>New Model Army</i> como contrapoder de los puritanos radicales | 58 |
| I.2. Las reivindicaciones niveladoras | 64 |
| I.2.1. El panfleto por la libertad de conciencia como origen del movimiento | 64 |
| I.2.2. Los derechos innatos de los ingleses: reinterpretando la tradición | 67 |
| I.2.2.1. El “Yugo normando” | 67 |
| I.2.2.2. La destrucción de los privilegios eclesiásticos | 70 |

| | |
|---|-----|
| 1.2.2.3. El derecho de propiedad y sus limitaciones | 71 |
| 1.2.2.4. El sistema de justicia..... | 75 |
| 1.2.2.5. El derecho a la representación política..... | 76 |
| I.2.3. La supremacía popular como fuente de legitimidad del <i>Agreement of the People</i> | 79 |
| I.2.3.1. Un nuevo modelo constitucional..... | 79 |
| I.2.3.2. El primer <i>Agreement</i> : antecedentes, creadores, contenido y difusión | 85 |
| I.2.3.3. Los Debates de Putney | 91 |
| I.2.3.3.a) Las tensiones en el <i>New Model Army</i> | 91 |
| I.2.3.3.b) El puritanismo en Putney | 92 |
| I.2.3.3.c) La inmunidad, el punto de partida en Putney..... | 94 |
| I.2.3.3.d) El contrato y las promesas | 96 |
| I.2.3.3.e) La <i>salus populi</i> en Putney | 100 |
| I.2.3.3.f) El sufragio..... | 102 |
| I.2.3.3.g) El veto de los Lores y del Rey | 109 |
| I.2.3.4. El segundo <i>Agreement</i> , y el <i>Officer's Agreement</i> | 111 |
| I.2.3.4.a) Antecedentes inmediatos..... | 111 |
| I.2.3.4.b) Los documentos antes y después de Whitehall. | 114 |
| I.2.3.5. El tercer <i>Agreement</i> . Combate a la desesperada | 118 |
| I.2.4. Los elementos básicos del programa <i>leveller</i> : de los precedentes medievales y clásicos a un nuevo modelo constitucional | 126 |
| I.2.4.1. La juridificación del poder y la mutación de las relaciones sociales | 126 |
| I.2.4.2. Elementos de origen medieval | 128 |
| I.2.4.3. El autogobierno y sus garantías: la herencia clásica..... | 131 |
| I.2.4.4. El <i>Agreement</i> como <i>paramount law</i> reflejada por escrito y aprobada por el pueblo mediante pacto | 134 |
| I.2.5. Originalidad y limitaciones del legado nivelador | 136 |
| I.2.6. ¿ Hubo herencia <i>leveller</i> ? | 138 |
| I.3. De los niveladores a los escritores del Interregno: la <i>Commonwealth</i> de Oliver Cromwell | 141 |
| I.3.1. Introducción: los problemas de una república emergente y sus experiencias constitucionales | 141 |
| I.3.2. Milton: legitimación contractualista, libertad religiosa y minoría selecta.. | 147 |

| | |
|---|------------|
| I.3.3. Hobbes, o la anomalía de una época republicana | 151 |
| I.3.4. Harrington: un proyecto constitucional ambicioso | 156 |
| I.3.5. Neville: una adaptación harringtoniana a las circunstancias | 163 |
| I.3.6. Algernon Sidney o el último republicano | 174 |
| I.3.7. Henry Vane como precursor del poder constituyente | 183 |
| I.3.8. Semejanzas entre los <i>levellers</i> y los escritores del Interregno | 187 |
| II. El constitucionalismo estadounidense | 191 |
| II.1. La independencia de las trece colonias | 191 |
| II.1.1. La práctica del autogobierno y el reconocimiento de los derechos | 191 |
| II.1.1.1. Los tipos de concesiones coloniales | 191 |
| II.1.1.2. El desarrollo del autogobierno en la colonización. | 198 |
| II.1.1.2.a) La desmercantilización de la concesión comercial: Virginia y Massachusetts | 198 |
| II.1.1.2.b) Los pactos autónomos en Nueva Inglaterra | 202 |
| II.1.1.2.c) Federaciones | 210 |
| II.1.1.2.d) Derechos en las colonias | 215 |
| II.1.1.2.e) La organización política del autogobierno | 228 |
| II.1.1.3. Rasgos principales del autogobierno norteamericano | 241 |
| II.1.2. Razones para una secesión | 245 |
| II.1.2.1. El <i>whiggism</i> como antecedente teórico inmediato de la independencia norteamericana | 245 |
| II.1.2.1.a) La aparición de los <i>whigs</i> en Inglaterra: de la Restauración a la Gloriosa | 248 |
| II.1.2.1.b) Locke como teórico de la “revolución” <i>whig</i> | 257 |
| II.1.2.1.c) Los <i>real whigs</i> | 274 |
| II.1.2.1.d) Las “Cartas de Catón” | 278 |
| II.1.2.1.d) 1. El igualitarismo de Trenchard y Gordon | 295 |
| II.1.2.1.d) 2. De los niveladores a Catón: la búsqueda del liberalismo en la tradición republicana | 303 |
| II.1.2.2. La falta de representación de los colonos americanos y la violación de sus “derechos inalienables” | 307 |
| II.1.2.2.a) Los hechos | 307 |
| II.1.2.2.b) Las ideas de 1776: la “Declaración de Independencia” y los panfletos previos | 319 |

| | |
|---|------------|
| II.1.2.2.c) Fuentes de autoridad de los derechos: comparación entre el proceso independentista norteamericano y las premisas niveladoras ... | 336 |
| II.1.2.2.d) Similitud de aspiraciones, diferencias de contexto..... | 345 |
| II.2. El trazado constitucional norteamericano | 351 |
| II.2.1. Las Constituciones estatales..... | 351 |
| II.2.2. La necesidad de un gobierno nacional: el fracaso de la Confederación y la emergencia de un gobierno fuerte | 381 |
| II.2.3. Los principales puntos de fricción en el debate constitucional de 1787 ... | 386 |
| II.2.4. El <i>Federalista</i> | 394 |
| II.2.5. Las Enmiendas..... | 433 |
| II.2.6. La aparición de una jurisdicción constitucional..... | 446 |
| II.2.6.1. La supremacía constitucional y su garantía | 446 |
| II.2.6.2. Marbury vs. Madison..... | 452 |
| II.2.6.2.a) El supuesto..... | 452 |
| II.2.6.2.b) El contexto de la decisión | 457 |
| II.3. La consolidación de los fundamentos de la democracia constitucional moderna | 461 |
| II.3.1. Documento escrito y de carácter contractual..... | 461 |
| II.3.2. Fundando instituciones políticas basadas en el autogobierno y reconociendo derechos | 466 |
| II.3.3. Legitimado popularmente | 467 |
| II.3.4. Sistemas de control para evitar la violación de la norma..... | 470 |
| III. Conclusiones..... | 473 |
| Bibliografía..... | 507 |

Introducción

La historia de las ideas proporciona una herramienta de suma importancia a fin de conocer los orígenes de ciertas instituciones, quiénes fomentaron su desarrollo y bajo qué coyunturas sociales, cuál fue su legado y en qué medida responden aún a nuestras inquietudes actuales. La presente tesis intenta rastrear los orígenes de la *constitución democrática moderna*, que se podría caracterizar con los siguientes rasgos:

- 1) documento escrito que refleja el compromiso de los sujetos a quienes se presupone máxima capacidad racional
- 2) rígido y de rango normativo superior
- 3) fundando instituciones políticas basadas en el autogobierno de la comunidad
- 4) reconociendo derechos inalienables
- 5) legitimado popularmente
- 6) que incluye sistemas de control para evitar la violación de la norma suprema

El principio que guiaría a este modelo es el mismo que orientaba al constitucionalismo “antiguo”, el de fijar límites al ejercicio del poder, el del gobierno limitado. Pero el componente democrático introducía una suerte de legitimidad específica que sólo disponía del antecedente lejano de la antigua *polis* ateniense, en donde, en todo caso, no se recogían los derechos humanos, que aquellos habitantes de la Hélade desconocían. ¿Dónde hallar, pues, el origen de los fundamentos mencionados arriba?

Lo usual ha sido, y no sin matices que permitieran obviar sus peculiaridades, atribuir el instante genésico de aquel paradigma a la Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra, fuente de un sistema constitucional estable que perdura hasta hoy. En él un Parlamento prácticamente soberano había impuesto sus condiciones a la dinastía de Orange. La promulgación de una ley de sucesión, del *Bill of Rights*, la inamovilidad judicial y un régimen electoral también aprobado por las Cámaras, señalaron los límites que el monarca no podía traspasar.

A continuación, los investigadores han solido enlazar aquel modelo con el norteamericano federal de 1787, exponiendo su influencia en él, y luego, en todo caso,

se dirigían al francés de 1791, con su Constitución monárquico-parlamentaria. Se pasaba por alto, de este modo, toda la experiencia revolucionaria de 1642-49, con los *levellers* (“niveladores”) y sus *Agreements of the People* a la cabeza, así como la *Commonwealth* cromwelliana (1649-60) y sus autores más relevantes (Milton, Harrington, Sidney, Vane), o los experimentos de autogobierno acaecidos en América, merced a los *covenants* puritanos y a las asociaciones de los *merchant adventurers*, y luego a la organización provincial y finalmente estatal (desde el siglo XV hasta 1787). En la historiografía al uso, pues, se pretendía, sin solución de continuidad, unir 1688 con 1787, en una especie de *continuum* liberal, ignorando importantes ingredientes de carácter republicano que hubieran servido para dar una explicación mucho más completa acerca del origen del constitucionalismo moderno. El orden de la Gloriosa no disponía de ningún tipo de constitución tal y como la entendemos ahora; era más bien un proyecto abigarrado listo para amoldarse al paso de los tiempos, inscrito en la concepción de las élites inglesas, pero poco propicio a la idea del autogobierno democrático. La configuración estamental de sus cámaras demostraba lo insuficiente de un acercamiento a fórmulas políticas más avanzadas. De hecho, resulta que las revoluciones americana y francesa estuvieron más cerca de la inglesa de 1642 que de la de 1688, debido a que las tres fueron coincidentes en erigir al pueblo como fuente de legitimidad del orden jurídico-político¹. El “pueblo” nace, en la modernidad (entendida como período histórico definitivamente apartado de la tradición), a través de la destrucción del Antiguo Régimen estamental. Una demolición que, a pesar de los famosos Decretos de agosto de 1789, costó regueros de sangre a los franceses, y que en Norteamérica ni siquiera hizo apenas falta acometer, debido a las condiciones geográficas, sociales y económicas que allí existían y que no favorecían la persistencia de aquel modelo social. Una empresa que, y esto ya no es tan conocido, había contado con los *levellers* durante las Guerras Civiles inglesas de 1642-1649, una auténtica revolución en marcha.

Los niveladores, grupo que actuaba en el seno del ejército parlamentario que luchaba contra Carlos I Estuardo y que constituía su ala más radical, pretendieron que el “pueblo” aprobara e impusiera una *Agreement*, es decir, un acuerdo escrito suscrito al modo de un compromiso contractual, que sirviera para poner fin a la guerra, reconociese una serie de derechos al *freeman* u “hombre libre” e instituyese mecanismos de control y decisión democráticos. Tales postulados no quedaron sólo como patrimonio exclusivo del grupo nivelador. En realidad, partían de una práctica social en ámbitos más reducidos, preexistente en las corporaciones artesanales o en

¹ En el preámbulo de la Carta constitucional norteamericana puede leerse “Nosotros, *el Pueblo* de los Estados Unidos”. Esteban, Jorge de (ed.): *Constituciones españolas y extranjeras*, Madrid, Taurus, 1977.

congregaciones religiosas heterodoxas. A su desaparición, gran parte de sus ideas serían recogidas por hombres de la república cromwelliana posterior a la decapitación de Carlos I.

Así se fue depositando un *humus* ideológico sobre el que nacería la experiencia política americana. En primer lugar, porque los procesos sociales que la acompañaron eran favorables a la erección definitiva del *freeman* como sujeto que iba a arrollar de manera rotunda la aristocracia y el clero anglicano. Los colonos del Nuevo Mundo habían forjado fórmulas de autogobierno, partiendo de las figuras del *covenant* religioso y de las sociedades mercantiles. Y en segundo término, porque numerosos autores de la *Commonwealth* habían elaborado y asumido distintas teorías en las cuales ya no cabía otra legitimidad política que la popular.

Es cierto que este fenómeno adquirió un nuevo impulso con el *whiggism* de la Gloriosa, cuyo máximo exponente fue John Locke. Pero también que dicho movimiento no hizo sino reforzar principios que ya se habían asentado con el regicidio de Carlos I en 1649. Con su ejecución cayó la sacralizada legitimidad dinástica. El puritanismo había servido a tal socavamiento, conmoviendo el universo ideológico de la sociedad inglesa y, por ende, sus fundamentos políticos. Luego las élites quisieron un retroceso a posiciones de orden, pero que en cualquier caso nunca recobraría su faz previa a las Guerras Civiles, aunque aquéllas intentaran recuperar sus componentes estamental, monárquico y anglicano. El rey y sus cortesanos, los altos prelados de la iglesia nacional, todos sus seguidores, junto con sus correspondientes privilegios y jurisdicciones especiales, habían caído en 1649. Se buscó así una solución de compromiso entre la inercia del Antiguo Régimen y la hegemonía parlamentaria, la de unas Cámaras dominadas por la *gentry* nacional que se había configurado al calor de las guerras civiles y que deseaba estabilidad social y política, así como una fuerte expansión comercial protegida militarmente frente a otras potencias. Tal fue el acuerdo de 1688. Pero resultaría criticado, al poco, cuando los resortes constitucionales que supuestamente lo habían orientado entraran en proceso de *corrupción*. Los más radicales seguidores del *whiggism*, los *real whigs*, denostaron esta perversión con energía, empleando el utillaje de los viejos republicanos de la *Commonwealth* y gran parte del discurso del bando parlamentario durante las Guerras Civiles. Los norteamericanos, viendo luego reflejado su conflicto con la metrópoli en las experiencias y pensamientos de aquellos hombres, recogieron sus aportaciones, especialmente la de Trenchard y Gordon, y las añadieron a su bagaje político.

Pero las necesidades de los colonias en América eran fruto de un contexto algo distinto al de los *levellers*, los *whigs* o los *real whigs*. Principalmente intentaban erigir una nueva nación, superando sus divisiones internas tras separarse de la madre

patria. Aquellos ancestros ideológicos habían difundido sus ideas dentro de una Inglaterra de remotos orígenes, existente desde hacía siglos y de realidad indudable. Los norteamericanos, en cambio, venían a sostener que *ya no eran ingleses*, lo cual implicaba un esfuerzo añadido. Debían *fundar* una nación, pero al mismo tiempo *descentralizada*, en la cual la *práctica republicana del autogobierno* comunitario quedase definitivamente fortalecida, y bajo la premisa de una fuerte *extensión de la representación*, dada la *inexistencia de barreras estamentales* al modo europeo. Todo ello en medio de la expansión de las ciencias y del comercio, que auguraban una época distinta, ilustrada y de secularización progresiva.

A pesar de ello, de la cualidad novedosa de sus circunstancias, no deja de llamar la atención las grandísimas similitudes de la Constitución federal de 1787 con los *Agreements levellers*. Los motivos de tal coincidencia residen en que, ante problemas parecidos, una y otros ofrecieron soluciones similares, ya que se encontraban dentro de una misma tradición ideológica. Por tanto, la distancia temporal no debe hacernos perder de vista que las Guerras Civiles inglesas sentaron las bases para una nueva forma de entender la legitimidad política que el *whiggism* aupó, pero que sólo los estadounidenses llevaron a la práctica de forma completa.

Mi tesis es que el *concepto de representación moderna* derivaba de fuentes inglesas y que la preocupación por el *control del poder* y por los *derechos*, así como la necesidad de erigir una sola *paramount law* (ley suprema) para un extenso territorio, originaron problemas parecidos dentro de una misma tradición, desembocando en soluciones de carácter parecido. Y no sólo por pura herencia ideológica, sino porque los modelos de organización política democráticos habían sido llevados a las colonias desde fechas tempranas, articulando métodos de autogobierno específicos que luego se implantarían en un ámbito nacional.

El presente trabajo se divide en dos partes. En la primera sus protagonistas son los niveladores. Comienzo describiendo el contexto social, económico, político y religioso que precedió al ascenso de los Tudor en Inglaterra, así como el que se consolidó durante su reinado, con la adopción del anglicanismo y el acaecimiento de cambios robustos en el tejido social y, por añadidura, en una escena política donde los parlamentarios del país empiezan a tomar un papel muy destacado en su evolución. Con causa en su relación directa con esta etapa, además, examino la influencia de la Reforma, especialmente del calvinismo, en el pensamiento político europeo. Luego extiendo mi explicación al choque entre los Estuardo y el parlamento, así como al escenario social que lo circunda. Las Guerras Civiles inglesas (1642-1649), ocupan los siguientes pasajes de esta parte, jalonados por los conflictos religiosos, sociales y de

carácter institucional del momento. Después paso a examinar las principales puntos del programa nivelador y el éxito que obtuvieron, realizando una comparación de los mismos con los más relevantes autores de la *Commonwealth* cromwelliana (Milton, Hobbes, Harrington, Neville, Sidney, Vane), de la que extraigo además sus episodios políticos más destacables. Incluyendo aquí la elaboración del *Instrument of Government*, primera carta constitucional de carácter nacional y republicano que va a entrar en vigor en Inglaterra, aunque fuese de forma efímera.

La segunda parte del presente trabajo se refiere al armazón ideológico que serviría para unir los componentes de la Constitución federal estadounidense de 1787. Comienzo con los modelos de colonización y las estructuras políticas que incorporaban, así como describiendo su evolución posterior. A continuación, traigo a la exposición el *whiggism* de la Gloriosa de 1688 en Inglaterra, así como a sus continuadores más consecuentes, conocidos como los *real whigs*, y que reaccionaron frente a lo que ellos advertían como corrupción de la “constitución” británica. La huella *whig* tuvo indudable importancia en la revolución norteamericana, pero aquí se quiere situar en su justa aportación, habitualmente desmesurada en los tratados al uso, a salvo la historiografía recuperadora del republicanismo de autores como Robbins, Wood, Bailyn o Rahe². Realizada, asimismo, la inevitable comparación de sus ideas con las niveladoras, paso a analizar el conflicto entre los colonos americanos y la metrópoli británica, así como sus consignas principales. Tras esta exposición, emprendo otra comparación nueva entre los *levellers* y el independentismo norteamericano, finalizando la etapa histórica aquí abordada con el proyecto constitucional estadounidense de 1787, los objetivos a que obedecía, sus principios e instituciones, y las Enmiendas de 1791, junto con el nacimiento de la *judicial review* posterior. A modo de conclusiones, de recapitulación que justifique la tesis arriba señalada, se hace un repaso de los fundamentos de la democracia constitucional.

Es pues, objetivo de este trabajo recoger los episodios históricos mas significativos que contribuirían al nacimiento del constitucionalismo democrático moderno, y, específicamente, la génesis de sus elementos, arriba citados; pero sin obviar el período “republicano” que de 1642 a 1660 vivió Inglaterra, y realizando una decuada ponderación entra las fuentes propiamente “liberales” y las republicanas de aquel modelo.

² Vid. “Bibliografía”.

I. Los “niveladores”: contexto, antecedentes e ideas

I.1. El contexto previo a su aparición

I.1.1. Los elementos del “constitucionalismo medieval”

Como bien han señalado diversos autores, resulta difícil narrar la Historia del constitucionalismo moderno si nos empeñamos en marcar una escisión tajante entre la Edad Media y el período posterior inaugurado con el Renacimiento³. Distintos elementos vienen a prolongar su *influencia* una vez agotado el Medievo⁴, e implicarían la existencia de una suerte de “constitucionalismo medieval”⁵.

El primero de ellos es el **pactismo**. En la sociedad de aquella época “falta un poder público rígidamente institucionalizado, capaz de ejercitar el monopolio de las funciones de *imperium* y normativas sobre un cierto territorio a él subordinado”⁶. El imperio, es decir, la potestad de hacer cumplir sentencias, imponer tributos y llamar a las armas, se haya disperso, fraccionado “a lo largo de la escala jerárquica, que va desde los señores feudales de más alto rango hasta cada uno de los caballeros armados, y luego, hasta zonas de aplicación del mismo *imperium* estrechamente limitadas y circunscritas”, como sería el caso de las ciudades o “burgos”. La posesión de la tierra se correspondía con una pirámide perfectamente trazada que descendía del rey al señor, y de allí a los villanos, con determinadas posiciones intermedias posibles⁷. Destacaba, asimismo, la superioridad del monarca en ella: sólo él era verdaderamente el propietario del reino, dentro de un sentido similar al que ahora tiene tal voz⁸. El *vasallaje* era la institución por la cual alguien prestaba juramento de fidelidad a su señor, a cambio de disfrutar de un feudo, que a su vez, y bajo el mismo

³ Fioravanti, Maurizio: *Costituzione*, Bologna, Il Mulino, 1999; trad. cast. de Manuel Martínez Neira, por donde se cita, *Constitución*, Trotta, Madrid, 2001, pg. 33. O Matteucci, Nicola: *Organizzazione del potere e libertà. Storia del costituzionalismo moderno*, Torino, UTET Libreria, 1988; trad. cast. de Francisco J. Ansuátegui Roig y Manuel Martínez Neira, por donde se cita, *Organización del Poder y Libertad. Historia del Constitucionalismo Moderno*, Madrid, Trotta, 1998, pg. 37.

⁴ Fioravanti, 1999, pg. 34, lo sitúa entre la caída romana del siglo V y la aparición de la soberanía estatal moderna en el siglo XV.

⁵ Id.

⁶ Fioravanti, Maurizio: *Le Libertà Fondamentali. Appunti di Storia delle Costituzione Moderne*, Torino, Giappichelli, 1995; trad. cast. de Manuel Martínez Neira, por donde se cita, *Los Derechos Fundamentales. Apuntes para una historia de las constituciones*, Madrid, Trotta, 1996, pg. 27.

⁷ Los primeros datos tan precisos como para poder describir el sistema social del Medievo en Inglaterra corresponden a la época de Eduardo I *Plantagenet* (1272-1307). Vid., al respecto y para una perspectiva completa, la excepcional obra de Maitland, Frederic William: *The Constitutional History of England*, reimp. (de la 1ª ed. de 1908), Cambridge, Cambridge University Press, 1963, pp. 24-34.

⁸ A lo largo de la investigación, aparecerá a menudo el término “propiedad”. Sugerimos tratar el mismo con cuidado, pues no implicaba exactamente el dominio absoluto de la tierra. John Cowell, famoso jurista, aún apoyaba tal teoría en 1605: “*in England no one except the crown, or the king, has full lordship*” (“en Inglaterra nadie excepto la corona, o el rey, tiene completo señorío”); cit. por Aylmer, Gerald E.: “The Meaning and Definition of Property in Seventeenth-century England”, *Past & Present* n. 86, Oxford, Past & Present Society, feb. 1980, pg. 88.

vínculo, podía ceder a sus inferiores de forma similar (subinfeudación)⁹. Inmediatamente por debajo de los más alta nobleza y prelados¹⁰ estaban las órdenes religiosas, los caballeros y campesinos. Prestaban un “servicio” al señor, que era, de forma respectiva, orar por las almas, combatir bajo sus órdenes y pagar rentas en dinero o especie.¹¹

La fragmentación social descrita, pues, engendraba diferentes jurisdicciones: los nobles y el clero tenían las suyas, así como las ciudades¹², y el monarca otra que impartía la llamada “justicia del Rey”. Éste, a su vez, se veía empujado, dada tal dispersión, a realizar pactos con sus súbditos más poderosos, en una especie de extensión del ámbito del contrato de vasallaje que se realizaba en forma colectiva y abarcando todo el reino¹³. Su interés se centraba en garantizar la fidelidad de aquéllos, y así el sufragio de sus gastos y Corte, junto con la recluta de tropas necesaria para hacer frente a otros reyes, a señores feudales rebeldes o a revueltas campesinas. De hecho, y para asegurarse este apoyo de manera estable, se configurarían unos órganos para celebrar reuniones periódicamente, y que acabarían denominándose, según el lugar de Europa, Parlamentos, Estados Generales o Cortes.

Esto me conduce a exponer el segundo elemento de gran influencia en el constitucionalismo moderno: la *politia* o “**constitución mixta**”¹⁴, que pergeñó Tomás de Aquino (1225-1274) y que no guardaba relación directa con el viejo equilibrio de la *politeía* aristotélica o *constitutio* ciceroniana. En éstas, que Polibio reflejó magistralmente en sus *Historias* (siglo II a. C.), lo que se pretendía era subsumir en determinado orden jurídico-político las diferencias y rencillas sociales existentes en la

⁹ “Señor” era, por tanto, una posición de cierta persona con respecto a otra, y en Inglaterra se denominaba *king’s tenants in chief* o *tenants in capite*, los principales de entre ellos, pues sus fundos provenían directamente del rey. Vid. Maitland, *op. cit.*, pg. 24.

¹⁰ “El dignatario eclesiástico, en cuanto propietario de tierra, debía servicios feudales y tenía, a su vez, sus vasallos propios que le debían servicios, y aunque nominalmente tuviera que prestar los servicios seculares que correspondían a su posición por intermedio de agentes seculares, sus intereses coincidían en gran parte con los de la nobleza feudal”. Sabine, George H.: *A History of Political Theory*, 3ª ed. (1ª ed., de 1937), Nueva York, Holt, Rinehart and Winston Inc., 1961; trad. cast. de Vicente Herrero, por donde se cita, *Historia de la teoría política*, México D. F., Fondo de Cultura Económica, 1992, pg. 176.

¹¹ Los villanos, individuos que, aunque no sometidos propiamente a la esclavitud, pues gozaban de la protección de la jurisdicción real frente a la mutilación y el asesinato, tenían un estatus muy parecido, eran los últimos de la pirámide. Sus actos jurídicos, desde vender los animales domésticos hasta el casamiento de una hija, debían contar con asentimiento del señor. Si el villano huía de las tierras, rechazando así trabajar en ellas, era capturado y devuelto a las mismas. A la contra, podía ser expulsado del feudo por el solo deseo del señor. Maitland, *op. cit.*, pp. 33 y 34.

¹² Que tenían sus Cartas, como la de Neuchatel de 1214; vid. en Peces-Barba, Gregorio, Hierro, Liborio, Iñiguez de Onzoño, Santiago, y Llamas, Ángel: *Derecho positivo de los derechos humanos*, Madrid, Debate, 1987, pg. 29.

¹³ Fioravanti, 1999, pg. 47, ofrece los ejemplos de la Carta Magna inglesa de 1215, la Bula de Oro húngara de 1222 y el Privilegio General Aragonés de 1283.

¹⁴ La etiqueta de “constitución mixta” resulta en realidad de cuño moderno, una denominación buscada a posteriori para dar razón de un fenómeno extraño a los ojos contemporáneos. En la Edad Media se hablaba de “constituciones” en plural, en todo caso, tal y como demuestran las *Constitutions of Clarendon* (1164, vid. el texto en la web de la *Constitution Society*, <<http://www.constitution.org/eng/consclar.htm>>), aprobadas por rey, nobleza y clero, y que instauraban normas para dirimir conflictos entre este último (*clerks*) y los legos (*laymen*); no configuraban la estructura jurídica del Reino.

comunidad entre “los pocos” (la aristocracia, *aristoi*, *aristocratia*) y los “muchos” (el pueblo, *demos*, *populum*), procurando un juego de controles y contrapesos que consiguiera el equilibrio social, y por tanto, la estabilidad y la justicia. Sin embargo, en la Edad Media, esa suerte de centro de gravedad ya se suponía, pero bajo una pirámide de subinfeudación. Tomás de Aquino intentó reforzar la justificación en su cúspide del monarca, pero manteniendo la distinción entre el tirano y un rey que ejerciera su poder de acuerdo con la justicia y la equidad, un distingo ya aventurado por el inglés Juan de Salisbury en su *Policraticus* a finales de los años sesenta del siglo XII. En su obra¹⁵, el fundador de la escolástica expresó un modelo político, en el cual figuraba la metáfora organicista de un cuerpo en el cual su corazón era la Corona y en el que los magistrados, obispos y señores feudales podrían aconsejar al rey, *prestándole auxilio* e impidiendo al mismo tiempo que se convirtiera en déspota. De estas premisas, los juristas medievales adoptaron la vieja máxima justiniane *quod omnes tangit ab omnibus approbetur* (lo que a todos toca debe ser aprobado por todos), pero con significado distinto al antiguo: expresando que en ciertas materias, como la recaudación de tributos o la llamada a las armas en defensa del reino, el monarca debía acudir a los estamentos reunidos en asamblea¹⁶. En Inglaterra, y ya desde tiempos de los reyes normandos, el monarca solía reunirse en los llamados *colloquia* con sus magnates eclesiásticos y temporales. En 1295, esas reuniones se habían ampliado a los representantes¹⁷ de las ciudades. “Al principio, los tres estamentos deliberan y hablan al rey separadamente, formando cuerpos distintos. Más tarde, los prelados y nobles adquieren el derecho a consultarse mutuamente, y en 1343 puede considerarse realizada la separación de ambas Cámaras”, la de los Lores y la de los Comunes¹⁸.

El tercer elemento medieval que va a conservarse en el contitucionalismo moderno, aun con una radical transformación, será el reconocimiento de *iura y libertates*. Y es que el monarca, para conseguir el respaldo político y social arriba indicado, va a admitir que sus súbditos tengan ciertos **derechos y libertades**, que habrán de ser respetados por cualquier jurisdicción. Eso sí, siempre enraizados en la

¹⁵ *De Regimine Principum* y *Summa Theologica*, compuestas a partir de 1265.

¹⁶ Fioravanti, 1999, pp. 39-45.

¹⁷ Ni griegos ni romanos conocían el concepto de representación, entendido como la de unos individuos actuando por otros o acudiendo en su lugar a las instituciones políticas. “Estos usos más próximos a los nuestros aparecieron en el latín de los siglos XIII y XIV, y más tarde en inglés, cuando las personas que fueron enviadas a los concilios de la Iglesia o al Parlamento inglés fueron considerados como representantes”. Sauquillo, Julián: “Representación política y democracia”, en Colomer, José Luis, y Díaz, Elías (eds.): *Estado, justicia, derechos*, Madrid, Alianza, 2002, pg. 288. Para un estudio más amplio y profundo sobre la representación, vid., del mismo autor, “Los fundamentos de la representación política: el origen de la relación conceptual entre órgano, pueblo y ley”, *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma*, n. 8, Madrid, Universidad Autónoma, 2004, pp. 63-107.

¹⁸ García Pelayo, Manuel: *Derecho Constitucional comparado*, Madrid, Alianza, 1987, pp. 254 y 255.

configuración *estamental* de la época, se los disfrutaba en tanto en cuanto se perteneciera a algún estamento o, en todo caso, a ciertas entidades o comunidades de carácter territorial, no como individuo. Y claramente enclavados en la indisponibilidad de “un Derecho objetivo, radicado en la costumbre y en la naturaleza de las cosas, que asigna a cada uno su propio lugar, es decir, sus derechos y deberes”¹⁹. El ejemplo típico data de 1215, cuando el monarca Juan Sin Tierra (1199-1216) suscribió, tras las airadas protestas de sus magnates contra él, la llamada Carta Magna. En este documento, aquel rey reconocía a los hombres libres (*liberi homines*, no siervos) del país una serie de libertades, entre las que se encontraban la de no padecer embargos de tierras o rentas para pago de deudas si se poseían bienes muebles suficientes para satisfacerlas, el de no ser castigado sino en proporción al delito cometido y por decisión de los pares, el de comerciar libremente, excepto en caso de guerra, así como los derechos de las ciudades y de la Iglesia de Inglaterra, entre otras²⁰.

El último importante elemento a destacar y que también va a influir en el constitucionalismo moderno es el de la **supremacía la ley**, si bien no concibiéndola al modo actual. En el Medievo las fuentes del derecho son principalmente tres: la *lex naturae* (ley natural), las *consuetudines* (costumbres) y los *statuta* o *constitutiones* (estatutos o “constituciones”). El Derecho natural, bastante difuso, se considera relacionado con el divino y también inmanente a la costumbre, a la que vendría a validar. El Derecho consuetudinario, por su parte, era de origen inmemorial, y al haber obtenido el respaldo de numerosas generaciones, demostraba ser justo. Conformaba una especie de “segunda naturaleza”. Las leyes entendidas de forma semejante al modo actual eran las terceras mencionadas; los estatutos, constituciones o fueros, emanaban de la propia voluntad humana, a través de alguna de las asambleas en las que se hallaban junto al Rey los diferentes estamentos, es decir, la nobleza, el clero y los representantes de los “burgos”, según el principio de que a lo que a todos afectaba debía obtener el consentimiento de todos²¹. Sin embargo, y con respecto a esta última fuente del Derecho, debe hacerse la matización de que su tarea legislativa no se diferenciaba de la judicial y su misión era más bien “declarar” la ley, que se entendía como preexistente bajo la forma de costumbres²². Jurisdicción, o *iuris dictio*, significa “decir el derecho”. La distinción que hoy establecemos en categorías racionales,

¹⁹ Fioravanti, 1995, pg. 28. Pongo Derecho con mayúscula para evitar confusiones, como “conjunto de normas”. El fenómeno aparece en los “pactos” arriba mencionados.

²⁰ Hierro, Liborio, Iñiguez de Onzoño, Santiago, Llamas, Ángel, y Peces-Barba, Gregorio, *op. cit.*, pp. 30 y 31.

²¹ Matteucci, *op. cit.*, pg. 38.

²² Las *Constitutions* de Clarendon mencionadas, precisamente, y según su propio texto expresaba en su encabezamiento, eran “costumbres declaradas por los arzobispos, obispos, condes y barones y por los hombres más ancianos y nobles del reino” (“*customs declared by the archbishops, bishops, earls, and barons, and by the nobler and older men of the kingdom*”) Vid. *op. cit.* El subrayado es propio.

separando el cometido para legislar del impartir justicia, no hubiera sido admitida en el Medievo.

Henry Bracton (1216-1268) siguió el modelo por el que la ley es una confirmación solemne de la costumbre, un Derecho que ya existe por largo tiempo, debiendo hacerse esta operación con el asentimiento de los grandes de Inglaterra. Pero esto no es un simple acuerdo entre ellos, de sus intereses recíprocos, sino que que resulta la expresión del ordenamiento específico *de la comunidad política en su conjunto*. Y a su vez, esas normas serán las *leyes fundamentales* del país, sólo alterables mediante idéntico procedimiento, que contará con el juramento añadido del rey, que así se comprometerá a respetarlas. El monarca queda vinculado a ellas²³. Esta es la doctrina que Bracton presentó en *De legibus et consuetudinibus Angliae*, compuesta entre 1272 y 1277²⁴, y en la que figura este importante pasaje:

El rey no debe tener igual en su reino, porque ello anularía el precepto de que un igual no puede tener autoridad sobre sus iguales. Aún menos debe tener superior ni debe haber nadie más poderoso que él, porque en tal caso se hallaría por debajo de sus súbditos, y es imposible que los inferiores sean iguales a quienes tienen mayor potestad. Empero, *el rey no debe estar sometido a ningún hombre, sino a Dios y a la ley, ya que la ley hace al rey*. En consecuencia, que el rey dé a la ley lo que la ley le ha dado a él, a saber, dominio y potestad, porque no hay rey donde gobierna la voluntad y no la ley.²⁵

Esta concepción encajaba perfectamente con el esquema elaborado por Tomás de Aquino, que se refería a la ley humana, no como un simple medio de regulación de las relaciones sociales, sino como integrante del orden cósmico relativo al gobierno divino²⁶. Bracton, pues, y de acuerdo con el comentario que hace de su obra McIlwain, viene a distinguir entre *gubernaculum* y *iurisdictio*²⁷. El primero corresponde a la prerrogativa derivada de la supremacía política del monarca, referida un poder discrecional que no puede seguir estrictamente leyes previas, y el segundo, limitado por éstas, de acuerdo con lo expuesto algo más arriba y que supone el sometimiento del Rey a Dios, a la justicia divina de origen divino. Se trata del primer

²³ Fioravanti, 1999, pp. 48-50. Los subrayados son propios.

²⁴ Varela Suanzes, Joaquín Varela: "Sovereignty in British Legal Doctrine", *Historia Constitucional. Revista Electrónica*, n. 4, 2003, <<http://hc.rediris.es/04/Numero04.html>>, párrafo 6 (el artículo tiene una versión en castellano en *Fundamentos. Cuadernos Monográficos de Teoría del Estado, Derecho Público e Historia Constitucional*, Junta General del Principado de Asturias, Oviedo, 1998).

²⁵ Sabine, op. cit., pg. 170. El subrayado es propio, y el original en latín decía "*rex non debet esse sub homine, sed sub Deo et sub lege quia lex facit regem*" (García Pelayo, op. cit., pg. 254).

²⁶ Sabine, op. cit., pg. 191.

²⁷ McIlwain, Charles Howard: *Constitutionalism Ancient and Modern*, Ithaca, Cornell University Press, 1947; trad. cast. de Juan José Solozábal Echavarría, por donde se cita, *Constitucionalismo antiguo y moderno*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991, pp. 115 y 116.

magistrado del reino, pero debe obedecer la ley, entendida en los términos antedichos. Su poder es “indivisible, incontrolable, pero limitado”²⁸.

I.1.2. Inglaterra en el siglo XVI: la monarquía Tudor

A partir del siglo XVI se conforma en Europa el llamado “Estado absoluto”²⁹. En realidad, se puede hablar de una “tendencia” absolutista, pues la fórmula que pretendo describir en estas líneas era meramente ideal. Se caracterizaba por una mayor concentración de poder en las manos del monarca, que pretendía así controlar el monopolio de la fuerza. El feudalismo iba a quedar socavado desde el momento en que la Corona se robusteciera mediante un fisco más o menos potente que recaudaba fondos para formar un cuerpo de servidores públicos (desde los diplomáticos hasta altos mandos militares, pasando por secretarios y otros), así como un ejército propio. Para conseguirlo, se utilizaba una racionalidad técnica aplicada a la política y que desprendiera este área de atributos sacralizados, a la manera en la cual lo intentarían conseguir los escritos maquiavélicos³⁰. Tal extremo era posible, porque la secularización de aquella esfera avanzaba ya desde finales del siglo XIV, con el inicio del Renacimiento. Innovaciones tecnológicas, algunas que romperán con el llamado “arte de la guerra” medieval, como las armas de fuego, y una expansión comercial y demográfica constantes ayudarán, asimismo, a derruir algunos de los cimientos más importantes del orden político anterior³¹. El Estado absoluto “intenta absorber toda zona ajena a su poder de intervención y control, e impone uniformidad legislativa y administrativa contra toda forma de particularismo”³². Esto implica

la destrucción del pluralismo orgánico propio de la sociedad cooperativa estamental. Bajo la incesante acción del Estado se eliminan todos los centros de autoridad que reivindican funciones políticas, como la ciudad, las Cortes (*Stati*) y las corporaciones, de manera que no exista ninguna mediación política entre el príncipe, portador de una voluntad superior, y los súbditos. La unificación conduce a la despolitización de la sociedad, que debe ser sólo administrada. En el plano sociológico el Estado absoluto se presenta como Estado administrativo, en la medida en que el príncipe tiene a su disposición un instrumento operativo nuevo, la moderna burocracia, que es una máquina que actúa de manera racional y eficiente con una nueva finalidad. La estructura administrativa aparece como algo externo y separado de la sociedad sobre la cual

²⁸ Matteucci, *op. cit.*, pg. 40.

²⁹ Sabine, *op. cit.*, pg. 250.

³⁰ Maquiavelo será, precisamente, quien comience a referirse en sus escritos al “Estado”.

³¹ Para una visión sucinta pero eficaz, vid. Matteucci, *op. cit.*, pp. 30 y 31.

³² Matteucci, *op. cit.*, pg. 34.

opera; y se basa en el principio de la división del trabajo, en la especialización y la competencia.³³

Todo este modelo, insisto, debe percibirse como *tendencial*, debido a que diversos factores provenientes del Medievo, así como otros nuevos y concurrentes, vendrían a contrarrestar su empuje. En Inglaterra, puede advertirse, así, en qué medida aquellos componentes de la fórmula absolutista fueron frenados por diversas fuerzas.

En este reino, la monarquía ya había iniciado el camino de la centralización con los reyes normandos³⁴, a partir de la creación del *Domesday Book*, registro catastral de habitantes y bienes iniciado en 1085 y que permitía cierto grado de control fiscal, así como con la aplicación del *common law* por los tribunales del Rey. El monarca nombraba jueces itinerantes, que dictaban *writs* (mandatos) dirigidos a los señores locales, ordenando se cumpliera la justicia real, por contener resoluciones específicas sobre litigios concretos. Así se fue conformando a partir del siglo XII un Derecho que, aun derivado de las *leges et consuetudines Angliae* (normas consuetudinarias), recogía los criterios judiciales para decidir sobre casos de naturaleza similar. Y que se apartaba de la aplicación habitual en el continente del Derecho romano, pues el *common law* era de tipo autóctono³⁵, válido para todo el país, un auténtico factor de unificación. Este inicio prometedor para la Corona, lo que vino a establecer es que gozaba de una robustez mayor que la de otras en el continente, mas todo aún dentro del orden feudal. Con los Tudor (1485-1603) es cuando se puede señalar una centralización parecida a la del Estado absoluto. Durante esa etapa dinástica, se crearon nuevos tribunales: la *Star Chamber* (1487)³⁶, en el seno del Consejo Privado del monarca³⁷, el *Court of Requests* (1493)³⁸ y la *High Commission* (1534)³⁹.

³³ Id.

³⁴ Que comienzan a dirigir los destinos del país en 1066, cuando Guillermo el Conquistador es coronado tras la batalla de Hastings.

³⁵ Ruiz Miguel, Alfonso: Una filosofía del derecho en modelos históricos. De la Antigüedad a los inicios del constitucionalismo, Madrid, Trotta, 2002, pg. 107.

³⁶ Cámara Estrellada. Con jurisdicción principalmente en materia penal, se pronunciaba según la equidad, no de acuerdo con el *common law*. Matteucci, *op. cit.*, pg. 80.

³⁷ Creado en la primera mitad del XVI; vid. Stone, Lawrence: *The Causes of English Revolution (1529-1642)*, London, Routledge & Kegan Paul, 1972, pg. 62. "En la Inglaterra de los siglos XVI y XVII, el consejo de Gobierno, presidido por el monarca, que evolucionó a partir del Consejo del Rey, órgano con mayor número de miembros, en el decenio de 1530. Su registro data de 1540 y recibió su propio sello en 1556. Integrado por los principales funcionarios del Estado y de la Casa Real, se reunía a voluntad del soberano para debatir tanto los grandes asuntos de política como las minucias de la administración. A partir del siglo XVIII sus funciones están asumidas por el Gabinete; en la actualidad son puramente formales". Cook, *op. cit.*, pg. 127.

³⁸ Tribunal de Peticiones. Id.

³⁹ Alta Comisión. Con jurisdicción en materia eclesiástica.

Pero los factores de refuerzo de la tendencia absolutista en Inglaterra fueron principalmente la “anglicanización” eclesiástica y la alianza del rey con las nuevas clases emergentes frente al clero y la nobleza.

En relación con el primer fenómeno, debe hacerse constar que la sociedad del Medioevo “tenía, bajo Dios, dos cabezas, el papa y el emperador⁴⁰; dos principios de autoridad, el gobierno espiritual de los sacerdotes y el temporal de los reyes; y dos jerarquías de magistrados, pero no existía división de dos cuerpos o sociedades”⁴¹. Todos los hombres estaban sometidos a ambas, y dentro del mismo reino eran súbditos y creyentes. A menudo aparecían conflictos graves entre ellas, principalmente a causa de las “investiduras”, es decir, del nombramiento de los obispos⁴². Debajo de tales litigios lo que había era un combate por la legitimación del poder “espiritual” y del “temporal”, y por sus facultades de deposición mutua. Su fin sólo se pudo atisbar cuando se alcanzó a construir el Estado moderno, con todas sus capacidades racionalizadoras y bajo un alto grado de secularización. Este hecho, junto con la concurrencia de la Reforma protestante, implicó un cambio de los moldes políticos europeos, bien representado por Enrique VIII Tudor y la fundación del anglicanismo. Y es que, en efecto, con el Acta de Supremacía de 1534 y su institución como jerarca máximo de una iglesia escindida de Roma, la autoridad del Rey inglés halla un punto de apoyo esencial para construir su poder político⁴³. Por añadidura, el cisma le permitió sufragar sus guerras mediante la venta o donación a sus vasallos de tierras pertenecientes al clero, las cuales ocupaban una cuarta parte del país⁴⁴.

Y este punto es el que nos sirve de puente para abordar ahora el apoyo social al reinado Tudor. Esta dinastía optó por el apoyar la expansión de la *gentry*⁴⁵ y la *yeomanry*⁴⁶, es decir, de la pequeña nobleza y de los campesinos independientes,

⁴⁰ Entendido como primero de entre los reyes, no al modo romano.

⁴¹ Sabine, *op. cit.*, pg. 173.

⁴² Vid. al respecto, y sobre sus avatares, Sabine, *op. cit.*, pp. 176 y 177.

⁴³ Al principio, sin embargo, no acogió esta política. De hecho se opuso al incipiente luteranismo: en 1521 obtuvo del Papa León X el título de “Defensor de la Fe”.

⁴⁴ Stone, *op. cit.*, pg. 66.

⁴⁵ El concepto de *gentry* es difícil de entender para el investigador español. Proviene del francés antiguo (*gentilise*) y equivale inicialmente, en esa acepción, a persona noble o de buena cuna, es decir, posee la connotación que une abolengo y virtud. De manera estricta, la *gentry* se distinguía de la alta nobleza (lores o *tenants in chief*) en que iba después en el escalafón jerárquico. Disponía de un modesto título nobiliario. Al principio se hallaba compuesta de pocos individuos, pero luego aumentó, debido a la ampliación de la venta de títulos que realizaría la Corona. Asimismo, y en paralelo, los hombres de la *gentry* fueron incrementando su solvencia económica mediante la compra de terrenos y la intensificación y mejora de su cultivo, extendiendo sus actividades a compañías mercantiles y producción de bienes.

El término ha sido equiparado en algunas ocasiones a “hidalgo”, pero si bien tiene relación por la manera principal de adquirir el título en la época, carece de sus connotaciones: estamos ante un sector de la sociedad inglesa entonces de pujante importancia, y cuya prosperidad sobrepasó a de la hidalguía hispana. “Gentilhombre” quizás se asemeje con mayor precisión. Vid. *Webster's Third New International Dictionary*, reimpr. (ed. original de Springfield, Merriam Webster, 1961), Könneman, Cologne, 1993, pg. 948.

⁴⁶ Se trata del grupo social ubicado justo por debajo de la *gentry*; sin tener título alguno, eran hacendados. Sus explotaciones, de carácter rural, nunca sobrepasaban cierta envergadura y en numerosos casos sólo

desde el momento en que optó por venderles aquellas tierras. Después, encontrándose con que, pese a la sustanciosa desamortización, no conseguía mantener un ejército permanente ni una enérgica burocracia⁴⁷, incrementó aún más el poder local perteneciente a aquellos sectores sociales, distribuido en *shires* y *hundreds*⁴⁸, nombrando de entre sus filas a los *sheriffs*⁴⁹ y jueces de paz⁵⁰, y permitiéndoles adquirir el patronato de las capillas, con el cual señalarían a sus oficiantes. E incluso designándolos para su Consejo Privado, en detrimento de la aristocracia⁵¹. Tanto los miembros de la *gentry* como los de yeomanry *eran freeholders*. Es decir, fueron percibidos como individuos que disfrutaban de independencia personal, al disponer de tierras que podían transmitir libremente. En consecuencia, también se les permitía resultar elegidos por sus pares para formar parte de jurados de la vecindad o a fin de representar sus localidades en el Parlamento⁵². Asimismo, y en consonancia con este apoyo de la Casa de Tudor a las “clases medias” del reino”, sus monarcas respaldaron a los mercaderes, comerciantes y notables de las ciudades, protegiendo la expansión comercial⁵³.

Por todo ello, la actuación de la dinastía hasta 1603 originó que la llegada al trono de los Estuardo después encontrase un país repleto de particularidades, pues en las naciones europeas vecinas el absolutismo era mucho más robusto. La peculiaridad inglesa hacía que una institución de raíz medieval, como lo era el Parlamento, tuviera gran relevancia. John Fortescue (1349-1476) ya había dicho en su *De laudibus legum Angliae* (1468-1471) que el país no era un *dominium regale*, sino un *dominium politicum et regale*, es decir, un reino en el cual ser reunían el gobierno bajo su primer magistrado y la comunidad política radicada en el Parlamento, con todos sus

las trabajaban ellos y su familia. Un ejemplo para comprender su entidad, valga la licencia literaria, sería el Pedro Crespo del *Alcalde de Zalamea*. Vid. *Webster's Dictionary*, *op. cit.*, pg. 2651.

Digamos, además, que no tratándose de una sociedad dividida en castas propiamente, la Inglaterra de los siglos XVI y XVII presenciaba numerosos matrimonios entre individuos de los diversos grupos examinados, lo cual permitía el ascenso social y la unión de propiedades.

⁴⁷ Pese al desarrollo al respecto que consiguió, gracias a su ministro Thomas Cromwell (1485-1540). Sobre todo, abarcó a la administración de la justicia real, con la *Star Chamber* (Cámara Estrellada), en 1487, y la *High Commission* (Alta Comisión), en 1534 (Matteucci, *op. cit.*, pp. 79-80). La justicia real se afianzó, por añadidura, al contar con procedimientos más rápidos y baratos que los del *common law*.

⁴⁸ Cook, Chris, 1989: *Macmillan Dictionary of Historical Terms*, 2ª ed. (1ª de 1983), London, Macmillan Press; trad. cast. de Fernando Santos Fontenla, por donde se cita, *Diccionario de términos históricos*, Madrid, Alianza, 1993, pp. 95 y 120. Los condados (*shire*) se dividían en centurias (*hundreds*).

⁴⁹ Los *sheriffs* eran nombrados por el Rey y poseían funciones de tipo fiscal, militares, de policía, jurisdicción y tareas de gobierno. Rivalizaban con *manorial courts* (tribunales del señorío), de la alta nobleza. También había *County* y *Hundred Courts*, elegidas por *freeholders*, así como con los Jueces de Paz señalados por el monarca entre los notables de cada demarcación. Maitland, *op. cit.*, pp. 41-43

⁵⁰ Matteucci, *op. cit.*, pg. 79.

⁵¹ García Pelayo, *op. cit.*, pg. 259.

⁵² En 1430 el Parlamento aprobó una ley o *act* que pretendía regular el derecho de sufragio, y que exigía ser residente en el condado y tener libre posesión (*freehold*) por valor de 40 chelines (*shillings*) al año, una vez restadas todas las cargas y deudas. Maitland, *op. cit.*, pg. 173.

⁵³ García Pelayo, *op. cit.*, pg. 258; y Matteucci, *op. cit.*, pg. 79.

componentes institucionales y territoriales⁵⁴. En la misma senda, pero aún más rotundo, Thomas Smith (1513-1577), con su *De Republica Anglorum*, compuesta en 1565 y publicada en 1583, se referirá a la “supremacía” del Parlamento, entendido como reunión de la Corona y el resto de poderes de Inglaterra. A la vez, Smith se halla preocupado por distinguir unas potestades que son propias del monarca, como la de declarar la guerra, designar magistrados y cargos del reino, de otras que únicamente pertenecen al Parlamento, como el de declarar la ley o establecer tributos⁵⁵. A propósito de este aspecto, y fruto del encaminamiento hacia la modernidad, en Inglaterra y buena parte de Europa se ha ido advirtiendo la intervención de la voluntad humana en el ordenamiento jurídico, que muy pronto chocaría con la concepción “natural” y tomista del Derecho, hasta entonces con amplio consenso entre los distintos sectores sociales. El mundo medieval había dado cedido paso al Renacimiento y esto iba a conllevar una concepción distinta del orden normativo. Así, por de pronto, en Inglaterra ya no iba a ser sólo expresión de costumbres y pasaba a configurarse como *common law*, leyes parlamentarias (*statute laws*)⁵⁶, decretos y proclamaciones de guerra dictadas por la Corona (*proclamations*), nombramientos públicos (*provisions*) y regulación autónoma de las ciudades. Pero, con tal progresión, ¿cuál era la “ley suprema” entonces? ¿Había acaso alguna? ¿En manos de quién quedaba elaborarla o interpretarla? Esta última pregunta tenía serias implicaciones sobre la titularidad de la hegemonía política en el reino que se considerase⁵⁷.

⁵⁴ Fioravanti, 1999, pg. 64.

⁵⁵ Ibid., pg. 65.

⁵⁶ En Inglaterra, los parlamentarios se dividían en dos Cámaras, Lores y Comunes. Los representantes de la Cámara Alta tuvieron originalmente la condición de *tenants in chief*, siendo sus puestos heredados y pudiendo el Rey nombrar nuevos Lores. Podían también vetar proyectos de ley (*bills*) presentados por los Comunes, y resolver sobre procesos iniciados por la Cámara Baja contra cargos públicos (*impeachments*). Fueron asimismo importante tribunal de apelación. La mezcla de cometidos que a nosotros se nos aparecen como escindidos, por ser unos legislativos y otros judiciales, era intrínseca al papel parlamentario de la época, que aún no había separado unos de otros (vid. *supra*, pp. 17 y 18).

⁵⁷ A modo de ejemplo de la crisis, en 1523, el jurista Christopher Saint Germain (c. 1460-1540) exponía en sus *Dialogues in English between a Doctor of Divinity and a Student in the Laws of England*, el siguiente orden de prelación normativa. En Gough, John Wiedhofft: *Fundamental Law in English Constitutional History*, reimp (de 1ª ed. de 1955), Littleton, F.B. Rothman, 1985, pg. 18:

- 1) Ley natural.
- 2) Diversas costumbres de carácter general, extendidas por todo el reino.
- 3) Varias máximas que se consideran de índole normativa en Inglaterra.
- 4) Costumbres locales.
- 5) *Statutes*, cuando todas las anteriores no bastaban para castigar o premiar de forma equitativa.

Asimismo, los *statutes* podían anular en esa época la costumbre acogida en el *common law*, siempre que lo indicaran expresamente. Y además, los jueces podían acudir a la equidad (*equity*) para moderar el rigor del derecho, en un modo más extenso que el que emplea un magistrado de hoy día. De hecho, el monarca creó jurisdicciones propias que se acogían a esta posibilidad (*equity courts*). *Id.*, pg. 19. Obsérvese que el autor había apartado la ley canónica del esquema normativo secular, que era el realmente importante en su opinión, bajo la hegemonía del monarca. Por supuesto, toda su teoría era sumamente discutible, y no existía ordenamiento con pirámide propiamente kelseniana y jerarquía normativa férrea. *Vid.*, para más información sobre este autor, cuya obra mencionada fue de obligada consulta para los juristas ingleses hasta Blackstone, el libro de Skinner, Quentin: *The Foundations of Modern Political Thought. The Reformation* (Vol. II), Cambridge, Cambridge University Press, 1978; trad.

I.1.3. El protestantismo⁵⁸ y su justificación de la desobediencia al monarca

I.1.3.1. Reforma y cambios socio-políticos: Lutero y Calvino

La importancia de la Reforma en el mundo político y social europeo del siglo XVI es difícil de exagerar. La libre interpretación de los textos bíblicos facilitaba la aparición de muy distintas sectas y agrupaciones religiosas. De forma simultánea, los avances científicos y técnicos, y por tanto de la filosofía racionalista, vendrían a marcar una etapa de progresiva secularización, como ya se ha indicado. Ayudaron a percibir como supersticiones determinados ritos y liturgias. Así, el cristianismo necesitaba una “pureza” más allá de las instituciones y ceremonias anquilosadas, reformar el culto. Y había, asimismo, que instituir su proyección social. Resorte primario para lograrlo sería el hincapié en la “profesión” mundana como medio de agradar a Dios. Tal énfasis supuso huir de la cosmovisión escolástica, en la que *cada individuo ocupaba su lugar en determinado estamento* y el trabajo no era susceptible de valoración ética⁵⁹. Los luteranos, y más aún los adeptos de Calvino⁶⁰, dedicarían en cambio un mayor protagonismo a la tarea mundana, pues aunque para ellos las obras no eran medio de salvación, sí implicaban su “señal”. El protestantismo hizo hincapié en la predestinación divina. La fe salvaba al hombre más allá de su conducta sobre la Tierra, siendo así la gracia un privilegio otorgado por Dios a los “elegidos”.

Pero, sobre todo, y en lo que aquí interesa, la Reforma supuso un cambio de modelos políticos, con importantes repercusiones sociales. Como ya he mencionado con respecto al anglicanismo, conllevaba automáticamente que el gobernante secular pasara a hacerse cargo de la supervisión del culto, así como la disolución de las órdenes religiosas y la expropiación o desamortización de sus bienes.

cast. de Juan José Utrilla, por donde se cita, *Los fundamentos del pensamiento político moderno. La Reforma* (Vol. II), México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1986, pp. 63-65.

⁵⁸ En 1521 se celebró la Dieta de Worms, reunión del emperador Carlos V con los príncipes alemanes. En ella compareció Lutero, a quien apoyaban gran parte de estos últimos y que, de todos es sabido, se opuso al poder papal, aunque al principio sin conocer exactamente las consecuencias que iba a tener su enfrentamiento. El predicador fue excomulgado entre el 17 y 18 de abril (por casualidad histórica, justo cuando los Comuneros de Castilla eran ajusticiados). El Edicto de Worms, de 8 de mayo, declaró reo al hereje, obligándole a huir. En la Dieta de Spira, de 1526, los príncipes alemanes afirmaron “protestar” ante Dios, al rechazar el cumplimiento del Edicto imperial de Worms. De ahí proviene el apelativo de “protestantes” (Egido López, Teófanos: *Las reformas protestantes*, Madrid, Síntesis, 1992, pp. 56 y 93).

⁵⁹ Vid. Weber, Max: *Die protestantische Ethik und der Geits des Kapitalismus* (1905), *passim*; trad. cast., por donde se cita, *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*, Barcelona, Península, 1989. Sobre el argumento central de este libro, el del emparentamiento de tal movimiento espiritual con un incipiente capitalismo, no voy a realizar comentario alguno, excepto el de que en tal ámbito este título ha perdido vigor: vid. Egido López, *op. cit.*, pp. 132-33.

⁶⁰ Seguidores de Jean Cauvin (1509-1564), cuyo nombre latinizado era el de Juan Calvino. El calvinismo fue una rama de la reforma protestante que acentuaba la predestinación aún más que Lutero y sus directos seguidores.

El calvinismo sería el grupo más atraído por la creación de nuevas fórmulas en el ámbito político, naciendo en pequeñas repúblicas, concretamente en los cantones suizos. Se puede afirmar, al respecto, que si bien Lutero pareció preocuparse poco por las repercusiones político-organizativas de su percepción teológica, Calvino después se propuso forjar un modelo estable de carácter institucionalizado, que fuera más allá de la simple protección del príncipe de turno. Su confesión mostró una capacidad expansiva que requirió utillaje intelectual para enfrentarse al enemigo católico. En consecuencia, fueron autores calvinistas (hugonotes en Francia y puritanos en Inglaterra), quienes buscaron justificaciones para la desobediencia a monarcas “papistas” y que quisieran obstaculizar su avance.

Los primeros pasos para encauzar la deslegitimación de los gobernantes católicos, pues, se encuentran primero en los enfrentamientos entre los príncipes alemanes y Carlos V, cuando simpatizantes de Lutero edificaron justificaciones para la desobediencia al emperador. La primera a señalar es la formulada por el dignatario Felipe de Hesse, previo asesoramiento de juristas de su entorno, y que contaba con el antecedente de Guillermo de Occam (c.1285-1349). El opositor a Carlos escribió dos cartas en 1529, remitidas a sendos correligionarios, en las que señalaba que el emperador y los príncipes no estaban en una relación de gobernante y gobernados en sentido incondicional, sino que si aquél rebasaba los límites de su cargo, atacando a alguno de aquéllos o al Evangelio, rompería con la obligación política contraída al ser designado por los príncipes electores y legitimaría así el enfrentamiento contra él. Lutero reaccionó con tibieza ante esta idea, rechazando un enfrentamiento prematuro con Carlos V⁶¹.

Pero una segunda fórmula desobediente fue erigida a raíz de la Dieta de Augsburgo convocada en 1530 por el emperador, ante su intransigente pretensión de acabar con la disidencia luterana. Gregory Brück (1483-1547), canciller de Juan de Sajonia, defendió en su *Si es Legal Resistir a un Juez que está Procediendo Ilegalmente* (1530) que el juez causante de violencia injusta contra un particular (el emperador, en la Dieta, para el caso), quedaba desposeído de autoridad y en consecuencia era posible resistirle como si se tratara de un particular contra quien utilizáramos la legítima defensa. En esta ocasión, Lutero y los principales teólogos de su escuela sí admitieron tal doctrina, ante lo crítico de la situación⁶².

⁶¹ Skinner, 1978b, pp. 201-02. El emperador, desde la Bula de Oro de 1356, era nombrado por los citados dignatarios. De hecho, Guillermo de Occam ya respaldó el argumento citado en sus *Ocho Preguntas sobre el poder del Papa* (*Octo quaestiones de potestate papae*), reconociendo el derecho de los príncipes electores a deponer al emperador si se convertía en un tirano (*ibid.*, pg. 135), y en 1400 se reprodujo la aplicación real de este principio, cuando de hecho expulsaron a Welzel del trono imperial (*ibid.*, pg. 134).

⁶² *Ibid.*, pp. 203-208. Sobre los “daños notorios”, en la pg. 205.

Es claro, pues, que estas dos perspectivas estaban destinadas a fundamentar los choques bélicos de los príncipes alemanes con Carlos V. Pero no iban más allá. No, desde luego, hasta el punto de reconocer autoridad alguna para resistir al poder fuera de aquel ámbito restringido. Pues una gran preocupación de los jefes de la Reforma fue la de controlar las consecuencias de los cambios que podían socavar, en sus planteamientos más extremos, todo el orden social de entonces, y que ellos no rechazaban en modo alguno⁶³. Dentro de las filas disidentes aparecieron otras heterodoxias y el fenómeno a menudo amenazaba las alianzas previas con autoridades seculares cuyo apoyo se percibía como necesario. Con Lutero no finalizaron los cambios políticos y sociales traídos por el protestantismo, ni siquiera la estela de líderes religiosos correspondientes, y por tanto, tampoco los intentos de ofrecer respuesta a posibles legitimaciones o desobediencias al poder⁶⁴. Así que en los territorios donde caló la Reforma se articularon medidas de carácter represivo contra el descontento religioso. Éste, en parte, era de carácter católico. Pero enseguida también de otros grupos religiosos protestantes hostiles al luteranismo. El principal fue inicialmente aquel que dirigía Zwinglio (1484-1531), quien afincado en Zurich desde 1519, mantenía posiciones dogmáticas más extremas que Lutero, lo que le valió su condena y sucesivos enfrentamientos⁶⁵. En cualquier caso, los magistrados zuriqueses respaldaron al rebelde y luego éste, a su vez, temiendo a los grupos de carácter anabaptista que comenzaban a brotar de sus enseñanzas, también decidió buscar la institucionalización del culto que defendía, acompañado de las

⁶³ En este sentido, cabe recordar el durísimo escrito de Lutero, *Contra las hordas ladronas y asesinas de los campesinos*, de 1525, en el que atacaba violentamente la sedición campesina del momento, de índole igualitarista y capitaneada por Thomas Müntzer. Este teólogo defendía de manera apocalíptica la llegada de un Reino de Dios en el que los elegidos serían los más pobres y desfavorecidos, y para el cual había que prepararse ya mismo guerreando contra los señores. Lutero no escatima retórica contra aquellos díscolos: “es voluntad divina que se observe la fidelidad y el deber”, y “no me opongo a que la autoridad golpee y castigue a estos campesinos como le sea posible y lo crea conveniente, incluso sin previo aviso de justicia y equidad, *aunque esa autoridad sea hostil al evangelio*, ya que está en su derecho. Porque en estas circunstancias los campesinos no luchan por la causa del evangelio, sino que abiertamente se han convertido en felones, perjurios, inobedientes y sediciosos, en bandidos y blasfemos, a los que la autoridad pagana tiene la potestad y el derecho de castigar; más aún: tiene el deber de castigar a estos canallas, ya que para ello es portadora de la espada y servidora de Dios contra los que obran el mal (Rom. 13)”. Lutero, Martín: *Obras*, 2ª ed. (1ª, de 1977), Egido, Teófanos (ed.), Salamanca, Sígueme, 2001, pp. 273 y 275, respectivamente. La violenta diatriba fue publicada a primeros de mayo de 1525 y Müntzer sería derrotado el día 25 (Egido, 1992, pp. 178 y 179).

⁶⁴ Lutero, al iniciar su prédica antirromana, y dado que inicialmente no contaba con obispos que le respaldaran, admitió que los párrocos pudieran ser elegidos por los fieles, quienes podrían así controlarlos y sustituirlos cuando quisieran. Las aportaciones para mantener el culto provendrían de una caja común a la que contribuirían todos (Egido, 1992, pg. 86). Pero, en una segunda fase, el mensaje luterano confluyó con el interés político de los príncipes alemanes y las oligarquías urbanas de aquellos territorios.

⁶⁵ Uno de los temas de mayor controversia entre ambos fue el de la comunión, aspecto que puede llamar la atención en nuestros días, pero que en la época se vivía como una polémica fundamental. De otra parte, la belicosidad de Zwinglio era mucho mayor que la del prudente Lutero, lo cual le condujo a morir en combate el 11 de octubre de 1531 en Kappel, cuando espoleaba a los cantones que le seguían contra los de confesión católica. En general, para un análisis de su figura, *vid.* Egido, 1992, pp. 113-20.

correspondientes acciones represivas⁶⁶. De unas ramas brotaban otras, y en medio de tal procreación, el poder secular no acababa de separarse del religioso.

Nos encontramos, pues, con distintos reformadores protestantes que se hallaban preocupados por las sectas y grupos surgidos fuera de su ámbito de control, y cuyas teorías sobre la desobediencia no sólo quedaban sometidas a la exigencia de frenar nuevas herejías, sino también a los vaivenes de la situación política europea y sus equilibrios dinásticos, a examinar si el momento resultaba propicio para oponerse a un monarca incapaz de tolerarles o de, si por el contrario, convenía negociar parcelas de poder con él. Este último aspecto queda sobradamente demostrado por la etapa histórica que rodea el episodio hugonote (1555-1685) y que analizaré luego. Lo que a todos los reformadores abarcaba y en todo momento, eso sí, era su preocupación por no contribuir al desorden que pudiera minar las bases sociales existentes y no originar “males mayores”, en forma de caos social, de los que se decía era necesario combatir. La preocupación, pues, no era ciertamente por la tolerancia en sentido estricto, sino por estrategias que permitieran la penetración en ámbitos territoriales lo más extensos posibles, con todo el número de feligreses que podía conllevar. Otra posibilidad no cabía para unos hombres que carecían siquiera de la capacidad de imaginar, dado el contexto cultura y socio-político, la expansión a través de medios pacíficos en sociedades donde el respeto a la diferencia religiosa fuera real⁶⁷. La fórmula de compromiso a la que se llegaría mucho después con los católicos sería la Paz de Augsburgo de 1555, que reconocería el principio *cuius regio eius religio* (según el cual sólo se permitía profesar la religión del territorio).

En este sentido, Calvino tampoco sería una excepción en todo lo expuesto sobre la Reforma protestante, si bien las teorías sobre la desobediencia al poder hallarían un importante desarrollo más combativo y menos oportunista en varios de sus seguidores. La teoría política del francés adoptado por Ginebra estaba intrínsecamente ligada a su concepción teológica, contenida fundamentalmente dentro

⁶⁶ Con un catecismo (*Breve instrucción cristiana*, de 1523), un compendio de teología (*Comentario sobre la verdadera religión*, de 1525), e incluso un “Tribunal matrimonial” que pasaría a ocuparse pronto de un número mayor de materias, controlando hasta el detalle amplios aspectos de la convivencia. El Consejo de Zurich ejecutó a Félix Manz, uno de los primeros anabaptistas, en mayo de 1527 (Egido, 1992, pg. 183). Sus “hermanos” (así se llamaban entre ellos, dado el intenso igualitarismo que profesaban) huyeron a otros lugares de Europa más o menos cercanos, en donde siguieron sufriendo persecución. Como indica su denominación, únicamente creían en el bautismo adulto, lo cual les atraía el odio de muchos, en parte debido a la alta mortalidad infantil de la época, que hacía temer por la salvación de los niños en aquel ambiente de extrema religiosidad. Se caracterizaban, además, por su rechazo de las jerarquías eclesiásticas e incluso civiles, y cierto tono apocalíptico.

⁶⁷ Una de las excepciones resaltables quizás fuera la de Guillaume Postel (1510-1581), que en su libro *La concordia del mundo* (*De orbis terrae concordia*, aparecido en 1544), sostenía que las verdades religiosas no necesitaban de coacción alguna, sino que se imponían a la larga por sí mismas. Sebastián Castellion (1515-1563), bajo el seudónimo de Martín Bellius, retomó ese argumento de manera desarrollada en su *De los herejes: si se les debe perseguir* (*De haereticis an sint persequendi*, 1554). Castellion fue al principio acompañante de Calvino, pero a raíz de la persecución ginebrina de éste contra Miguel Servet, criticó su crueldad, alejándose de él y marchando a Basilea. Skinner, 1978b, pp. 251-53.

de las *Instituciones de la Religión Cristiana* (*Institutio Christianae Religionis*, 1536), obra concebida en una Basilea que había acogido a su autor tras huir de la persecución desatada en Francia contra el protestantismo por Francisco I (1494-1547).

El reformador adoptaba posiciones luteranas en lo referente a dogmática religiosa, aunque mezcladas con la enseñanza de Zwinglio. Pero, sobre todo, propugnaba un gobierno en el cual los poderes seculares debían ser el brazo armado de los cánones religiosos, si bien establecidos por una iglesia modificada y adversa al ceremonialismo. Se trataba, pues, de conceder un papel de máxima importancia a los ministros de culto, pero entendiendo que se unían con quienes no lo eran, en un mismo cuerpo guiado por idénticas normas. “En Ginebra ese poder lo ejercía un consistorio compuesto del clero y de doce decanos seculares elegidos nominalmente por la corporación municipal”⁶⁸. En sus *Instituciones*, Calvino decía:

el fin del gobierno temporal es *mantener y conservar el culto divino externo, la doctrina y religión en su pureza*, el estado de la iglesia en su integridad, hacernos vivir con justicia, según lo exige la convivencia de los hombres durante todo el tiempo que hemos de vivir entre ellos, instruirnos en una justicia social, ponernos de acuerdo los unos con los otros, mantener y *conservar la paz y tranquilidad comunes*.⁶⁹

En estas palabras no se percibe aún la separación entre iglesia y estado. En lugar de ello, se aboga por un gobierno que reúna potestades disciplinarias amplias. Y ello, porque, en contra de los temidos anabaptistas:

si la voluntad de Dios es que caminemos sobre la tierra mientras suspiramos por nuestra verdadera patria; y si, además, tales ayudas nos son necesarias para nuestro camino, aquellos que quieren privar a los hombres de ellas, les quieren impedir que sean hombres. Porque respecto a lo que alegan, que debe haber en la Iglesia de Dios tal perfección que haga las veces de cuantas leyes existen, tal imaginación es una insensatez, pues *jamás podrá existir tal*

⁶⁸ Sabine, *op. cit.*, pg. 273. Calvino fue llamado por el Consejo de la *República* de Ginebra en 1541, aportando entonces a la ciudad unas Ordenanzas de la Iglesia de Ginebra. Según tal normativa, existían varios tipos de cargos públicos. Los Pastores eran seleccionados por los miembros civiles del Consejo y debían predicar y administrar los sacramentos del bautismo y la cena, interviniendo de forma colegiada con los Ancianos laicos (ambos formaban el Consistorio), en asuntos dogmáticos y de disciplina. La asistencia social la llevarían los Diáconos, auxiliando a pobres y enfermos y, por último, la enseñanza sería cometido de los Doctores (no era posible el analfabetismo en esta ciudad disciplinada desde la infancia). El Consistorio, encargado de administrar la ortodoxia de la fe, emprendió persecuciones y un control estricto. Así, se repudiaba el baile o la bebida, y se quemaban libros (el Amadís) o a herejes (Miguel Servet). Egido, 1992, págs. 126 y 127.

⁶⁹ Calvino, Juan: *Christianae religionis institutio* (1536), trad. cast. de Cipriano de Valera, por donde se cita, *Institución de la religión cristiana*, Madrid, Visor Libros, 2003. Pg. 1169. Subrayados propios.

*perfección en ninguna sociedad humana*⁷⁰. Porque siendo tan grande la insolencia de los malvados, y su perversidad tan contumaz y rebelde, que a duras penas se puede mantener a raya con el rigor de las leyes, ¿qué podríamos esperar de ellos si se les dejase una libertad tan desenfrenada para hacer el mal, cuando casi no se les puede contener por la fuerza?

3. Pero después tendremos ocasión más oportuna para hablar de la utilidad y provecho del orden civil. Al presente solamente pretendo hacer comprender que es una inhumana barbarie no querer admitirlo; ya que su necesidad no es menor entre los hombres que la del pan, el agua, la sal y el aire; y su dignidad, mucho mayor aún. Porque no le atañe solamente aquello que los hombres comen y beben para mantenerse en esta vida - aunque comprende todas estas cosas cuando hace que los hombres puedan vivir juntos - ; no le atañe solamente esto, *sino también que la idolatría, la blasfemia contra Dios y su dignidad, y otros escándalos de la religión no se comentan públicamente en la sociedad*, y a que la tranquilidad física no se vea perturbada; que cada uno posea lo que es suyo; que los hombres comercien entre sí sin fraude ni engaño; que haya entre ellos honestidad y modestia; en suma, *que resplandezca una forma pública de religión entre los cristianos*, y que exista humanidad entre los hombres.⁷¹

No hay nada en esta teoría, así, vinculado esencialmente a los criterios democráticos o a derecho de resistencia alguno tal y como se entienden más tarde, ni tampoco a una estricta separación entre la iglesia y el estado. De hecho, con respecto al problema de la desobediencia, Calvino sostenía que cualquier poder terrenal se instalaba en el mundo gracias al consentimiento divino y que por ello no era lícito rebelarse contra la autoridad instituida, siguiendo así la doctrina paulina:

Al tenerlos en tanto honor y estima hay que estarles sujetos con toda obediencia, sea que haya que obedecer sus órdenes y constituciones⁷², o que haya que pagar los impuestos, o que deba soportar alguna carga pública que se refiera a la defensa común, o que sea preciso obedecer a

⁷⁰ Calvino elude así la tensión apocalíptica de otros grupos religiosos, razón por la que cobra mayor importancia el asunto de la organización política permanente.

⁷¹ *Ibid.*, págs. 1168 y 1169. Subrayados propios.

⁷² Entiéndase en el sentido expuesto de manera muy concreta y positiva por el derecho romano. En este ordenamiento, que, como sabemos, fue heredado por la Edad Media europea, las “constitutiones” eran resoluciones de distintos tipos (edictos, mandatos, decretos, epístolas, rescriptos) que emanaban del extenso poder reunido por el *princeps*, el emperador (Paricio, Javier: *Historia y fuentes del Derecho Romano*, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 1998, pg. 123). Por tanto, debe diferenciarse este contenido del término, no ya sólo del actual, que incluye una tabla de derechos, sino con el de los escritores antiguos como Cicerón, que se refería con al mecanismo de gobierno de la comunidad política. Cfr. *De Republica*, I, xxvi, 41-42, así como xlv, 69. Cit. por la trad. cast. de José Guillén, Madrid, Tecnos, 1986, pp. 28-29 y 46, respectivamente. Si bien en ambos casos se está invocando la permanencia de la norma, su estabilidad. Y aunque fuera siempre muy relativa en el caso de los romanos, dada su perspectiva cíclica y precaria de la existencia.

cietos mandatos. “Sométase toda persona a las autoridades superiores”, dice san Pablo; “quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste” (Rom. 13, 1-2).⁷³

Si bien tal aseveración se encontraba matizada, al hablar de momentos específicos en que los “magistrados inferiores” *debían* resistir al tirano:

Hablo siempre de *personas particulares*. Porque si ahora hubiese autoridades ordenadas particularmente para la defensa del pueblo y para refrenar la excesiva licencia que los reyes se toman, como antiguamente los lacedemonios tanían a los éforos opuestos a los reyes, y los romanos a los tribunos del pueblo frente a los cónsules, y los atenienses a los demarcas frente al senado, *y como puede suceder actualmente que en cualquier reino lo sean los tres estados cuando se celebran cortes*; tan lejos estoy de prohibir a tales estados oponerse y resistir, conforme al oficio que tienen, a la excesiva licencia de los reyes, que si ellos disimulasen con aquellos reyes que desordenadamente oprimen al pueblo infeliz, yo afirmarí que tal disimulo ha de tenerse por una grave traición. Porque maliciosamente como traidores a su país echan a perder la libertad de su pueblo, para cuya defensa y amparo deben saber que han sido colocados por ordenación divina como tutores y defensores.⁷⁴

Por tanto, Calvino entiende que puede existir justificación para la *oposición activa* al gobernante por parte de los magistrados *de carácter inferior*⁷⁵. Si bien éstos no derivan su autoridad del pueblo, sino de Dios. ¿Qué les queda a los súbditos?

En la obediencia que hemos enseñado se debe a los hombres, hay que hacer siempre una excepción; o por mejor decir, una regla que ante todo se debe guardar; y es, *que tal obediencia no nos aparte de la obediencia de Aquel bajo cuya voluntad es razonable que se contengan todas las disposiciones de los reyes, y que todos sus mandatos y constituciones cedan ante las órdenes de Dios*, y que toda su alteza se humille y abata ante Su majestad [...] Por tanto, el Señor es el rey de reyes, el cual, apenas abre sus labios, ha de ser escuchado por encima de todos. Después de Él hemos de someternos a los hombres que tienen preeminencia sobre

⁷³ *Ibid.*, pág. 1187.

⁷⁴ Calvino, *op. cit.*, pg. 1193. Subrayados míos.

⁷⁵ El luterano Martin Bucer (1491-1551), en la edición de 1530 de sus *Explicaciones de los Cuatro Evangelios*, así como en los *Comentarios al Libro de los Jueces* (1554, póstuma), expuso ya que los magistrados inferiores estaban autorizados para desobedecer, dado su carácter protector de la vida y hacienda pertenecientes a los súbditos, defendiendo *al pueblo de Dios* contra todo mal. Los poderes ordenados por el deseo divino eran diversos y no sólo existía el de quien estaba en la cumbre jerárquica. Skinner, 1978b, pp. 211-12. Recordemos, asimismo, la vieja teoría de Occam luego reformulada por Felipe de Hesse; vid. *supra*, pg. 25. Asimismo, Zwinglio también aludía en su obra a los éforos y su potestad casi en el mismo sentido que Calvino, aunque aún en términos más tímidos; Skinner, 1978b, pp. 238 y 239.

nosotros; pero no de otra manera que en Él. Si ellos mandan alguna cosa contra lo que él ha ordenado no debemos hacer ningún caso de ella, sea quien fuere el que lo mande.⁷⁶

Así, que, en consecuencia, Calvino viene también a justificar la desobediencia *pasiva* de los gobernados. Es decir, que aunque a éstos no les quepa adoptar una actitud como la de la magistratura menor en ningún caso, sí les resulta posible omitir la obediencia a un gobierno temporal que sea rebelde al auténtico Señor, a Dios, y que les obligue a ir contra Él. Se trata de una obra que resulta ambigua sobre su posible oposición al poder insituido. Aparece cruzada de referencias que aseguren un margen de maniobra amplio a sus distintos seguidores, de acuerdo con la coyuntura política a la que se enfrenten. Como bien dice Sabine, “la teoría política de Calvino era una estructura un tanto inestable, [...] por una parte subrayaba la maldad de toda resistencia a la autoridad constituida, pero por otra, su principio fundamental era el derecho de la iglesia a declarar la verdadera doctrina y a ejercer una censura universal con el apoyo del poder secular”⁷⁷. La herencia paulina, típica del protestantismo, implicaba la obediencia al gobernante, pero el calvinismo abría la puerta a excepciones y ambigüedades.

I.1.3.2. El calvinismo en Francia y Escocia: hugonotes y presbiterianos

Y es que tanto este teólogo como sus discípulos veían con preocupación las tensiones religiosas existentes en Francia, temerosos de enfrentarse a sus gobernantes, pero sabedores de la magnífica fuerza que habían conseguido allí, de manera similar a lo que sucedía en Escocia. En 1555 ya habían sido enviados predicadores desde Ginebra al país galo, obteniendo conversiones, sobre todo numerosas en la llanura central, el Languedoc, la Provenza y alrededor de la frontera suiza. Así aparecerían los primeros hugonotes⁷⁸. En 1562, el duque de Guisa y sus hombres atacaron una congregación de este signo existente en Vaissy. El príncipe de Condé organizó el contraataque y de este modo comenzaron las guerras religiosas en territorio francés entre protestantes y católicos. La regente Catalina (en el poder de 1560 a 1574) intentó poner paz en el enfrentamiento en numerosas ocasiones, pero la situación continuó siendo inestable y culminó su primera fase en la matanza de San

⁷⁶ Calvino, *op. cit.*, pp. 1193 y 1194. Subrayado propio.

⁷⁷ Sabine, *op. cit.*, pg. 275. Quentin Skinner es coincidente; 1978b, pp. 197-200.

⁷⁸ El término que se les dio fue el de hugonotes, proviniendo de que en 1526 en Ginebra los nacionalistas adversarios de Saboya se aliaron formando el grupo de los juramentados (*eidgenossen*, término popularizado como *eidgenots*).

Bartolomé de 1572, cuando numerosos hugonotes fueron asesinados⁷⁹. Fruto precisamente de estos combates entre el sector católico encabezado por los Guisa y sus oponentes calvinistas fue la necesidad por parte de estos últimos de construir una teoría de la legitimidad política que les suministrara apoyo en tales momentos, e incluso que pudiera ampliar su base⁸⁰, extendiéndola a católicos proclives al entendimiento. En esta tarea encontrarían como aliados potenciales a los llamados “constitucionalistas”.

En efecto, en Francia, el Parlamento (los “Estados Generales”) mantenía ya en 1561 y de forma clara un agudo conflicto con la Corona, que sólo convocaba reuniones para pedir fondos, sin consideración alguna por la asamblea⁸¹. Frente a este absolutismo que así gana fuerza⁸², pensadores como Claude de Seyssel (1450-1520), propugnan la idea de una “constitución mixta” con sus correspondientes contrapesos al poder real, de forma que la judicatura resultara asimismo independiente e inamovible⁸³. Así, la convergencia de estos “constitucionalistas” con el recurso a la desobediencia quedó asumida por varios autores tras la “matanza de San Bartolomé” de 1572, originando una línea de argumentación novedosa y audaz en la historia del pensamiento político, denominada “monarcómaca”. François Hotman (1524-1590) publicó al año siguiente la *Franco-Gallia*, Teodoro de Beza (Théodore de Bèze, 1519-1605) *El Derecho de los Magistrados* en 1574, y un autor bajo seudónimo, la *Vindiciae contra tyrannos (Defensa de la Libertad contra los Tiranos)*⁸⁴ en 1579.

En la obra de Hotman se defiende una constitución antigua francesa en la que el Rey se encuentra subordinado a viejas costumbres y leyes del país, así como al concurso de los demás estamentos en los Estados Generales. Los “éforos” o magistrados, a la manera espartana, van a supervisar el gobierno de los reyes. Este carácter concedido a la asamblea “eforal” es asumido también por el autor de la *Defensa* y por Teodoro de Beza⁸⁵. Pero para estos últimos aquellos magistrados no provienen ya de un orden político establecido por Dios, sino que son *comisionados* del “pueblo”. Tal idea conduce directamente al planteamiento de que los hombres se encuentran en su origen en estado de “libertad natural”, infiriendo que la sociedad

⁷⁹ Los choques y disputas prosiguieron, finalizando con la revocación en 1685 del Edicto de Nantes, baluarte de la tolerancia religiosa, lo cual acarrió la huida de casi todos los hugonotes que permanecían en el país a distintos lugares de Europa y América.

⁸⁰ Eran minoría en Francia, de importancia que aún no se ha aclarado, a situar entre la quincuagésima y la vigésima parte de la población, dependiendo de la época (vid. Skinner, 1978b, pg. 248, nota 4).

⁸¹ *Ibid.*, pp. 263-65.

⁸² Y representado a través de autores como Du Moulin (1500-1566).

⁸³ *Ibid.*, pp. 267- 69, 273, 275.

⁸⁴ Según Skinner, *op. cit.*, pág. 314, fue escrita por Philippe Du Plessis Mornay (1549-1623), aunque tal autoría ha sido rechazada por numerosos investigadores: *vid.* Sabine, *op. cit.*, pg. 281, nota 4. El seudónimo utilizado fue el de Stephanus Junius Brutus.

⁸⁵ Recordemos que Calvino hacía equivaler el poder de esos éforos al de las Cortes.

política de carácter legítimo nace del consentimiento humano. Este modelo nació en la escolástica y origina un argumento “lógico”, apartándose así del “cronológico” propio de la tradición constitucionalista sustentada en unos equilibrios entre poderes con legitimidad histórica⁸⁶.

El creador de la *Defensa*⁸⁷ es quien mejor sintetiza, en cualquier caso, la nueva teoría. El rey realiza un pacto (*Lex Regia, pactum*) con los magistrados, que *representan* el poder popular, a fin de que se erija un compomiso por el cual los súbditos le obedecerán si respeta las leyes del reino y protege su bienestar. El “pueblo” aparece identificado con los Estados Generales, y resulta por tanto un cúmulo de estamentos que vienen a concurrir en asamblea para fijar las normas de convivencia social. Mas nunca renuncia a su poder de forma definitiva, y el monarca que incumpla el acuerdo realizado con sus representantes deviene en tirano. El “pueblo”, así, es “superior” al rey, si bien esa supremacía sólo existe si se le considera en conjunto⁸⁸, y mediando la representación de los magistrados inferiores (nobles, alcaldes, etc), ya que cada individuo por separado se halla subordinado al monarca. Pero lo más peculiar e innovador de esta teoría es que propiamente ya no existe en ella sólo la legitimación religiosa de la desobediencia⁸⁹. Ésta ya no se basará únicamente en el hecho de que el monarca idólatra haya desobedecido la norma divina, incumpliendo así su pacto con Dios (*foedus*)⁹⁰, sino que además justifica desobedecer al rey que no ha protegido el bienestar de sus súbditos o no se ha sometido a las leyes. La impiedad no resulta ya el único motivo posible para la rebeldía. Así, el autor de la *Defensa* ejemplifica esta situación con la del propietario de un feudo que conserva su dominio último, aun cuando haya decidido delegar su administración a alguien; el pueblo tiene como administrador a su gobernante de la misma forma⁹¹.

De manera similar a lo sucedido en Francia y otros lugares del continente, la Reforma halló un lugar idóneo para extenderse en Escocia, ya desde 1540. En este reino, entonces separado de Inglaterra, la fortaleza de los nobles era grande y pronto estos magnates se mostraron proclives al calvinismo y a su sistema de gobierno

⁸⁶ Skinner, *op. cit.*, pp. 323-25, y 329-31.

⁸⁷ Stephanus Junius Brutus: *Vindiciae contra tyrannos*; trad. cast. de Piedad García-Escudero, por donde se cita (introducción histórica de Harold J. Laski, estudio preliminar y notas de Benigno Pendás), Madrid, Tecnos, 2008.

⁸⁸ Vid. “Tercera Cuestión”, pg. 88.

⁸⁹ Que también: vid. “Primera Cuestión: A saber, si los súbditos están obligados o deben obedecer a los príncipes cuando sus mandatos son contrarios a la ley de Dios” (Brutus, *op. cit.*, pp. 17-41).

⁹⁰ Cuestión peliaguda, si se considera las diferencias dogmático-religiosas del momento ya mencionadas. Vid., especialmente, al respecto, la “Cuarta Cuestión” (ibid., pp. 195-212), donde se legitima la intervención de monarcas extranjeros para poteger de la tiranía o la impiedad a súbditos de otros reinos.

⁹¹ “Tercera Cuestión”, en ibid., pg. 88. Vid. también Skinner, 1978b, págs. 339-48.

eclesiástico, el “presbiteriano”⁹². Tal conflicto con los sucesivos monarcas, sin embargo, no logró que el modelo se impusiera, y de hecho, en 1558 la reina católica María de Guisa emprendió una feroz persecución contra los seguidores de Calvino. Entre estos últimos estuvo John Knox (1505-1572). Su fama se extendió a raíz de publicar la *The Appellation from the Sentence Pronounced by the Bishops and Clergy, Addressed to the Nobility and Estates of Scotland*, precisamente en 1558 y contra la condena a muerte que pesaba sobre él. Una obra en la cual llamaba a la nobleza del país a deponer al “ignorante de Dios” o al “perseguidor de los miembros de Dios”, es decir, a la reina María. “Estáis obligados a corregir y reprimir todo aquello que sepáis que está intentando y que sea expresamente *repugnante* a la palabra, el honor y la gloria de Dios”⁹³. Esta aparente incontinencia verbal, en realidad, no sobrepasaba los límites expuestos por Calvino, pues el argumento que justificaba a los magistrados inferiores servía para apelar a la nobleza. De hecho, Knox no llegaba a desprenderse de razonamientos religiosos hasta el punto al que luego llegó la *Defensa de la Libertad contra los Tiranos*. Pero aún así, Calvino desaprobaba las actitudes de su discípulo en la coyuntura específica de Escocia, por parecerle demasiado radicales. Actitud que no evitaría la aparición de un Parlamento escocés reformado en 1560 y el posterior derrocamiento de su soberana aún católica (1568, María Estuardo), surgiendo novedosas exposiciones sobre la legitimación de la desobediencia política.

Así, George Buchanan (1506-1582) comenzó a escribir *El Derecho del Reino en Escocia* (*De Iure Regni apud Scotos*) en 1567, justo cuando la reina abandonó el trono, una obra que sería publicada en 1579. Este humanista había viajado por Francia, donde conoció personalmente a Beza y Mornay, y regresaría después a Escocia con la Asamblea General de la Iglesia Escocesa en el exilio (1560). Las novedades de su obra son varias. Una primera es la de que ya no sólo describe un estado “prepolítico” (como los hugonotes), sino que siguiendo a los estoicos y apartándose del aristotelismo, traza también un estado “presocial”. Así, el hombre no es un ser comunitario por naturaleza, sino que en una primera etapa vive como animal aislado y errabundo que depende de su sola fuerza física⁹⁴.

Otro aspecto innovador de *El Derecho* es que Buchanan se refiere a la *Lex Regia* mencionada por la *Defensa de la Libertad contra los Tiranos*, pero no al *foedus* religioso. Y la responsabilidad del gobernante principal ante el conjunto del pueblo se

⁹² Que deriva del término griego que designa al anciano. Era un sistema de gobierno de la Iglesia por presbíteros, todos ellos de la misma categoría, organizados piramidalmente en cierto territorio, de menor a mayor circunscripción. Vid. “presbiterianismo” en Cook, *op. cit.*, pp. 404 y 405.

⁹³ *Ibid.*, pg. 218.

⁹⁴ El hecho de contemplar estos dos “estados” implica el nacimiento de la teoría contractualista: el pacto de unión sirve para salir del estado presocial, el de sujeción, del prepolítico. Con el primero, los individuos se unen para formar la sociedad; con el segundo acuerdan obedecer todos al mismo gobierno.

menciona ahora sin la intermediación de magistraturas. Por añadidura, la legitimación para la desobediencia ya no está sólo en todo el cuerpo del pueblo, sino también en cierto modo en cada individuo por separado, pues al ser el fin del gobierno la seguridad y el beneficio *de cada uno*, el tiranicidio resulta legítimo⁹⁵.

La idea de “Estado” en sentido “moderno” recibirá parabienes muy pronto, pero como he podido analizar, tras un desgaste lento del modelo anterior teñido de presuposiciones religiosas. Como dice Skinner, tal construcción secularizada “fue imposible mientras se supuso que todos los gobernantes temporales tenían deber de sostener un gobierno no sólo pacífico, sino también piadoso”⁹⁶. Al variar tal perspectiva, aquel concepto se muestra abiertamente, aunque ya tuviese antecesores renacentistas, en especial a Maquiavelo.

I.1.3.3. El anglicanismo y su disidencia⁹⁷

A la transformación social en Inglaterra arriba descrita y comenzada con los Tudor, se le superpuso un conflicto religioso que llegaría a perdurar por siglos. La monarquía inglesa tropezó con divisiones confesionales tras el fallecimiento de Enrique VIII. Después de un breve paréntesis pacífico, de 1547 a 1553, a Eduardo VI le sucedió María I (1553-1558), quien durante su breve reinado intentaría restablecer el catolicismo. Pero Isabel I (1558-1603) acabó con la disidencia romana en el país. Además, dictó en 1563 los Treinta y nueve Artículos, que establecían las normas de la iglesia nacional de forma completa. El anglicanismo se consolida, con su jerarquía de obispos encabezados por la Corona. La importancia de tal patrón fue muy grande, dadas las condiciones políticas de aquellos tiempos. Tal y como bien recuerda Hill, refiriéndose a 1603, fin del reinado isabelino, “todos los ingleses, hombres y mujeres, estaban obligados a ser miembros de la Iglesia nacional y el disentir de ella constituía una ofensa perseguida por la ley. Los herejes eran todavía quemados en la pira”⁹⁸.

⁹⁵ Skinner, 1978b, pp. 349-53. John Althusius (1557-1638) en *La política metódicamente explicada* (1603), también obvió el *foedus*, subrayando su ausencia (ibid., pg. 351). Y el padre Mariana, en *El rey y la educación del rey* de 1599, acogió la teoría del tiranicidio en el catolicismo de la época (ibid., pg. 355).

⁹⁶ Ibid., pg. 362.

⁹⁷ Tanto este apartado como lo relativo a la posterior época estuardiana cuentan con una buena exposición el capítulo 6 de Manning, Brian: *The English People and the English Revolution*, Middlesex, Penguin Books, 1978; y todo el libro de Stone, Lawrence: *The Causes of English Revolution (1529-1642)*, London, Routledge & Kegan Paul, 1972. Cuando existan datos específicos de especial importancia, concretaremos página y obra en notas al pie.

⁹⁸ Hill, Christopher: *The Century of Revolution, 1603-1714*, London, Thomas Nelson and Sons, 1961; trad. cast. de Natalia Calamai, por donde se cita, *El siglo de la revolución*, Madrid, Ayuso, 1972, pág. 15. El incumplimiento de ciertos deberes considerados religiosos, como ausentarse de la iglesia en festivo, e incluso trabajar ese día o cometer adulterio, eran entonces *sancionables por la autoridad*. Moralidad privada y culto público no estaban aún escindidos. Y tampoco tan separados del Derecho como hoy en día.

Y es que la “reina virgen” tuvo que enfrentarse precisamente a esas herejías dentro del propio anglicanismo. Tendencias “puritanas” intentaban destruir el poder personal de los reyes en el culto. Los puritanos entendían que la Reforma no se había completado en Inglaterra y que la Iglesia anglicana se parecía demasiado a la de Roma, situación que había parecido confirmarse con los Treinta y Nueve Artículos. Advertían con preocupación las pretensiones de riqueza y superioridad social esgrimidas por el clero, especialmente en su escalafón más alto. Su principal influencia era la doctrina de Juan Calvino, y ponían el énfasis en la prédica, frente a la oración y el acompañamiento musical de las ceremonias, es decir, en apelar a la “razón” y no a las “sensaciones”. En consecuencia, también rechazaban el ceremonial excesivo, los atuendos vistosos y la simbología gestual. Se trataba, pues, en suma, de un rechazo frontal a cualquier semejanza que el anglicanismo pudiera guardar con la odiada iglesia católica.

Pero es que, por añadidura, el fortín puritano también mantenía diferencias en su seno. Por un lado, estaban los seguidores del escocés John Knox (1505-1572), que pretendían implantar el “presbiterianismo”, y por otro, los grupos “congregacionalistas”. El primero se basaba fundamentalmente en su *Confesión de los Escoceses (Scots Confession)* y sus Libros de *Disciplina y Orden Común (Book of Discipline)*, pretendiendo así establecer una liturgia y culto muy similares a los ginebrinos. Su sistema de gobierno eclesiástico comenzaba en la parroquia, donde el ministro era asistido por un *elder* (anciano) que elegían los fieles. Después venían distintos escalafones, pasándose de uno a otro mediante la elección de delegados, hasta culminar en el “sínodo”. Los diferentes grados jerárquicos iban, progresivamente y a medida que se acercaban a la cumbre, acaparando mayor poder normativo y jurisdiccional. En este sistema, el monarca no resultaba necesario.

Los congregacionalistas, de otra parte, tuvieron su principal impulso en las enseñanzas de Robert Browne (1550-1663). Sostenían que cualquier iglesia podía formarse como congregación unida mediante un acuerdo entre sus miembros y otro con Dios, independientes del Estado. Los ministros, elegidos por los fieles, serían exclusivamente aquellos citados por el Nuevo Testamento, lo cual implicaba la inexistencia de obispos u órganos de parecido poder. El congregacionalismo no tenía, pues, una pretensión tan fuerte como los presbiterianos de edificar una institución omnímoda *nacional*. Browne tuvo que huir a Holanda en 1581, nada más fundar su primera parroquia. Sus herederos, Henry Barrow y John Greenwood (los “barrowistas”), fueron ejecutados en 1593⁹⁹.

⁹⁹ Cook, *op. cit.*, págs. 67 y 53, “brownistas” y “barrowistas”, respectivamente.

Isabel I no estuvo dispuesta a ceder ni un palmo de terreno a la disidencia protestante, fuese congregacionista o presbiteriana, pues desafiaba su autoridad política, al sentar modelos eclesiásticos alternativos al anglicanismo tradicional. Con el tiempo, sin embargo, el puritanismo contaría con un apoyo rotundo del Parlamento, produciéndose así la tan temida erosión del poder monárquico que aquella reina veía con temor.

I.1.4. El ataque a la prerrogativa real en Inglaterra

I.1.4.1. Los nuevos súbditos y sus aspiraciones: la movilidad social como fuente de los futuros cambios políticos

Durante los 120 años anteriores al estallido de la primera Guerra Civil inglesa (1642), la población del país se duplicó. Además, a lo largo de este período los medios de fertilización, los drenajes, la rotación de cultivos y la introducción de otros nuevos contribuyeron al crecimiento económico¹⁰⁰. El comercio interior se expandió mucho, debido a que apenas hubo peajes y aduanas en ríos, caminos y ciudades, a diferencia de lo que ocurría en el resto de Europa. Asimismo, el crédito aumentó, con tasas de interés más bajas que en el continente, a excepción de Holanda. Hubo un crecimiento del flujo de capitales y de las facilidades institucionales para formar sociedades (*join-stock companies*) y realizar depósitos bancarios. Inglaterra se convirtió, junto con las Provincias Unidas, en una sociedad fuertemente orientada hacia el mercado, aunque no todavía plenamente capitalista¹⁰¹.

De hecho, de 1540 a 1640 se incrementaron en número y riqueza las *landed classes* (hacendados), así como los títulos de pequeña nobleza (*baronets*, *knights*, *squires*, *armigerous* y otros). Así, los propietarios se triplicaron cuando la población en el mismo período apenas se había doblado. Vender tierra ya no era inmoral, apareció una fuerte movilidad social.¹⁰² Por añadidura, la inflación proveniente del siglo XVI supuso que los cánones¹⁰³ y laudemios¹⁰⁴ pagados a los *landlords*¹⁰⁵ por los

¹⁰⁰ Vid. Stone, *op. cit.*, pag. 67.

¹⁰¹ Stone, *op. cit.*, pp. 69 y 70.

¹⁰² Vid. Stone, *op. cit.*, pp. 72 y 73.

¹⁰³ "Cantidad que se paga periódicamente a cambio del disfrute o uso de una cosa propiedad de alguien [...] como reconocimiento de esa propiedad". Vid. *Diccionario del uso del español María Moliner*, 2ª ed. (1ª ed., 1966-1967), vol. II, Madrid, Gredos, 1998, pg. 496

¹⁰⁴ "Derecho que se paga al señor de una tierras cuando se enajena la enfiteusis". Ibid., vol. II, pg. 156.

¹⁰⁵ La categoría *landlord*, o si se prefiere, de rentista rural o terrateniente, no puede ser identificada sólo con la de los *tenants in chief*, sino que ha de entenderse como incluyendo también a la *gentry* más poderosa del país.

*copyholders*¹⁰⁶ permanecieran fijos o con un mínimo ascenso. Tal situación produjo plusvalías para los poseedores inmediatos de la tierra, aumentando así la movilidad social de numerosos súbditos, que aprovecharon para independizarse de los grandes terratenientes, convirtiéndose en *freeholders*, y sumándose así a la *gentry* y *yeomanry*¹⁰⁷. Se estaba reforzando un *sector social extenso que gozaba de independencia económica, los “freemen”*. Su origen databa de la venta de tierras eclesiásticas en el reinado de Enrique VIII y la acumulación de plusvalías posterior había permitido a su vez a otros introducirse entre sus filas, comprando terrenos o invirtiendo en el comercio y el crédito de la misma forma. Así, pues, un factor decisivo en la lucha política inglesa surgió desde principios del siglo XVII con la decadencia de ciertos sectores sociales (aristocracia y clero) y el brío de otros nuevos que pugnaban por instalar su hegemonía. Los “hombres libres” deseaban un amplio reconocimiento político, de manera que pudiera conseguir áreas cada vez más extensas del gobierno local y en la participación parlamentaria.

Y sin embargo, a menudo existían intereses contrapuestos entre ellos, pues la *gentry* entendía que pertenecía a un rango social más alto y por tanto trataba de frenar a quienes se encontraban a continuación en la “pirámide”, adoptando posiciones más conservadoras en religión y política. Y tampoco debe olvidarse que entre los *freemen*, los más modestos del área rural tenían como aliados próximos a los artesanos, tenderos y otros oficios de las concentraciones urbanas, que también carecían de cualquier lazo de vasallaje y fidelidad feudal y no se veían vinculados a la *gentry*. Juntos conformarán lo que ha sido denominado por historiadores como Manning, *the middle sort of people*¹⁰⁸.

Otro ingrediente que contribuiría al cambio social sería el hecho de que la *gentry*, ya desde la época Tudor, fuera deslizándose hacia las universidades o las *Inns of Court* (escuelas de leyes). Tanto los juristas, así como también, por ejemplo, los médicos, pasaron a ocupar un papel cada vez más destacado en la Inglaterra posmedieval. Pero es que además gente de origen humilde obtuvo mejoras

¹⁰⁶ Enfiteutas. La enfiteusis es la “cesión perpetua o por largo tiempo del dominio útil de una finca mediante el pago anual de un canon al que hace la cesión, el cual conserva el dominio directo de ella” (*Diccionario de Uso del Español María Moliner*, vol. I, pg. 1118). Los *copyholders* poseían el dominio útil de las fincas basándose en el título existente en el registro del señorío, y acorde con la costumbre del mismo (“*copy of court roll according to the customs of the manor*”, vid. Manning, op.cit., pg. 129). La división entre los tipos de poseedores estribaba en la facilidad o no para transmitir la tierra, tanto *inter vivos* como *mortis causa*. Los *freeholders* tenían la máxima disponibilidad de sus terrenos, los *copyholders* en forma limitada, como se acaba de exponer, y por debajo de ellos estaban los arrendatarios (*leaseholders* o *termors*), que poseían determinada parcela sólo durante un período (quizás toda la vida), pagando una renta al señor (Maitland, op. cit., pg. 35, y *Webster’s Dictionary*, op. cit., pg. 2359), pero que no podían transmitirla ni aun entregándole cantidad alguna, al contrario que los otros. Tampoco tenían acción contra el ocupante ilegal, ya que ésta sólo podía ser ejercitada por el *lessor* que se las había arrendado (Maitland, op. cit., pg. 35).

¹⁰⁷ Manning, op. cit., pp. 128 y 129.

¹⁰⁸ Manning, op. cit., *passim*.

educativas, fundándose numerosos centros de enseñanza, a menudo con maestros que eran disidentes ideológicos puritanos¹⁰⁹. Los colegios contribuyeron, por ende, a reemplazar la mansión señorial como lugar formativo, diluyendo la relación con tal “protector”¹¹⁰.

La movilidad social era un hecho muy consolidado a principios del siglo XVII, y las expectativas de mejora en posición, prestigio y riqueza, originaron de forma simultánea una pugna por conseguir mayor protagonismo político. Estas nuevas ambiciones, robustecidas por la acumulación de prosperidad, estaban bien representadas en el Parlamento. Pero, como acabo de exponer, enfiteutas y arrendatarios se quedaban a medio camino, igual que aquellos sometidos a la presión de monopolistas e intermediarios comerciales. Esta división, así, implicaría también la del bando parlamentario en varias perspectivas que afloraron drásticamente tras la caída del último Estuardo. Existía una *gentry* mayoritariamente poderosa, y que aunque protestante y por tanto recelosa de la aproximación del Rey a potencias católicas, pero que deseaba frenar el avance de sectores sociales inferiores en lo que ella percibía como una estratificación cada vez más inmodificable.

I.1.4.2. El conflicto permanente con el Parlamento

Jacobo I fue acogido favorablemente por la Inglaterra de 1603, así como sus presuntos deseos de pacificación interna y estabilidad en las relaciones internacionales, que se pensaba favorecerían el desarrollo económico. Sin embargo, el nuevo monarca intentó aproximarse aún más a la fórmula absolutista que impregnaba el continente, utilizando así sus poderes con amplitud, y más en concreto la “prerrogativa regia”. Esta facultad del Rey incluía potestades no sometidas al consentimiento de las Cámaras, como aquellas referentes a la disolución y convocatoria parlamentarias, asuntos exteriores, concesión de títulos nobiliarios y monopolios de la industria o el comercio, nombramiento de cargos pertenecientes a la Iglesia y al servicio de la Corona, Cartas que introdujeran en el Parlamento la representación de burgos, capacidad de veto sobre las leyes, inmunidad criminal y política (*the king do no wrong*), elaboración de ordenanzas con el auxilio de su Consejo Privado (*Privy Council*)¹¹¹, acuñación de moneda, regulaciones económicas, mando de la milicia, creación de jurisdicciones, etc. Como podemos comprobar, el

¹⁰⁹ Un ejemplo claro sería el de Thomas Beard, que impartió clases a Oliver Cromwell durante su mocedad (Stone, *op. cit.*, pg. 95). Los colegios contribuyeron, por ende, a reemplazar la mansión señorial como lugar formativo, diluyendo la relación con tal “protector” (ibid., pg. 106).

¹¹⁰ Stone, *op. cit.*, pg. 106.

¹¹¹ Vid. *supra*, pg. 20.

área resultaba ser amplio, y venía justificado aparentemente por las necesidades de gobierno.

Jacobo I intentó, con el palo y la zanahoria de sucesivas convocatorias y disoluciones, que las Cámaras le concediesen una mayor financiación mediante impuestos. Estaba obligado a recurrir a la asamblea debido a la máxima medieval *quod omnes tangit ab omnibus approbetur*. Pero no llegaría a cumplir su propósito, ante el rechazo continuo de los parlamentarios, que ya no temían una amenaza exterior que invadiese Inglaterra y que por tanto no consideraban urgente la aprobación de imposiciones fiscales.

Por añadidura, el enfrentamiento se intensificó por emplear el Rey su prerrogativa para reprimir cualquier tipo de protesta que pretendiese una reforma de la iglesia anglicana. El puritanismo, que había nacido en el reinado anterior, y emigrado a otros lugares como consecuencia de la persecución isabelina, por ejemplo a Holanda, brotó con fuerza a los pies de Jacobo. De forma simultánea a su coronación, surgió así la *Millenary Petition*¹¹². Sin embargo, y pese a dar aparente muestra de buenas intenciones convocando la Asamblea de *Hampton Court* en 1604 (al año siguiente), no admitió prácticamente ninguna propuesta de reforma en el gobierno eclesiástico, destituyendo en represalia a numerosos oficiantes rebeldes. El Parlamento entonces mostró a Jacobo I su descontento ante tal situación, disintiendo del intransigente culto oficial dirigido por la prerrogativa del monarca.

En esos instantes, además, va a concurrir un elemento de conflicto que revestirá a futuro una importancia muy destacable en la teoría constitucional inglesa. Su raíz se halla en los argumentos vertidos por el famoso Justicia Mayor¹¹³ Sir Edward Coke contra Jacobo I Estuardo, ante sus intenciones de fortalecer su *potestas*, y que le valieron la expulsión del *Privy Council* en 1616. Coke nunca expuso una doctrina sistemática sobre las fuentes del Derecho y la ley al modo actual, pero sí que defendió el vigor del *common law* frente a los intentos del monarca por avalar una prerrogativa extensa. Así, por ejemplo, se obstinó en sostener la validez de los *writs de non procedendo rege inconsulto*, a fin de que la Corona no pudiera sustraer jurisdicción a los tribunales del *common law*¹¹⁴, ni declarar la ley marcial él solo¹¹⁵ o establecer la

¹¹² “Petición Milenaria”. Llamada así porque sus autores decían estaba firmada por mil ministros de culto. Demandaba cambios en éste hacia una mayor sobriedad y sencillez, como la eliminación de anillos en las bodas, del signo de la cruz en el bautismo, mayor observancia del “Día del Señor” y atención especial a la prédica (Cook, *op. cit.*, pg. 394). Debe señalarse asimismo la propuesta defendida por los peticionarios de fomentar la participación del bajo clero en directrices que eran hasta entonces sólo episcopales.

¹¹³ *Lord Chief of Justice*. Presidente del Tribunal más elevado en la administración de Justicia inglesa, la *King’s Bench Division* de la *High Court*.

¹¹⁴ Sommerville, Johann P.: *Politics and ideology in England, 1603-1640*, London, Longman, 1986; pg. 87.

¹¹⁵ *Ibid.*, pg. 103.

irretroactividad de las leyes penales¹¹⁶. Su creación más destacada, al respecto, fue la de entender que había una “razón” sostenedora de las leyes, ahora de carácter “artificial” y no “natural”, alcanzada mediante largo estudio y experiencia en la práctica jurídica. Esto implicaba que el rey no tenía por qué poseer autoridad en la materia, sino los juristas del *common law*¹¹⁷, con sus correspondientes argumentaciones. Incluso, esta perspectiva sirvió a Coke para frenar la posible capacidad reguladora irrefrenable de las leyes del Parlamento. Los *statutes* parlamentarios podían ser declarados nulos en ciertas situaciones, tal y como sostendría en el famoso caso *Bonham*:

y aparece en nuestros libros que en muchos casos el *Common Law* controlará las leyes (*acts*) del Parlamento, y algunas veces decidirá que son completamente nulas: porque cuando una ley del Parlamento es contraria a lo que comúnmente se entiende como recto o acorde con la razón, o resulta incompatible [*repugnant*], o imposible de ser llevado a la práctica, el *Common Law* la controlará y declarará nula tal ley.¹¹⁸

Esto no significa que Coke pergeñara lo que luego se iba a configurar como *judicial review* en la tradición norteamericana, y mucho menos el control de constitucionalidad de las leyes moderno al modo kelseniano. La doctrina de Coke apelaba a la *strict interpretation*, es decir, la consideración de que una ley parlamentaria fuese nula si iba contra el *common law*, extremo posible si el legislador se había “equivocado” al redactar su norma luego promulgada. En tales supuestos, el “error” sería enmendado por una interpretación judicial de carácter estricto, es decir, *apegada a los principios de razón y justicia que se entendían inmersos en el ordenamiento*, y que solventaría así la falta de correspondencia citada, de manera que no se aplicara la norma¹¹⁹. Para el famoso jurista, los *statutes* corregían, compendian y explicaban el *common law*, con lo cual, en consecuencia, no podían deteriorarlo, no había conflicto real entre unos y

¹¹⁶ Sabine, *op. cit.*, pág. 334.

¹¹⁷ Para Coke, la costumbre inmemorial era aplicada con un refinamiento a través de la sabiduría, formando así precedentes (Sommerville, *op. cit.*, pg. 92).

¹¹⁸ “And it appears in our books, that in many cases, the common law will control acts of parliament, and sometimes adjudge them to be utterly void: for when an act of parliament is against common right and reason, or repugnant, or impossible to be performed, the common law will control it, and adjudge such act to be void”. *Bonham Case*, 8 Co. 114a, 118a, 77 Eng. Rep. 646, 652 (C.P. 1610). Cit. por Aparisi, Angela: *La Revolución Norteamericana. Aproximación a sus orígenes ideológicos*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1995, pp. 143 y 144. La traducción es propia y la cita, a la manera en que se indica la referencia de los casos en Inglaterra, identifica nombre del asunto, volumen, repertorio, página, y, entre paréntesis, tribunal y año. En este supuesto, el tribunal es el de *Common Pleas*. Vid., asimismo, sobre el caso, Sabine, *op. cit.*, pg. 335.

¹¹⁹ Dorado Porras, Javier: *La lucha por la Constitución (las teorías de la Fundamental Law en la Inglaterra del siglo XVII)*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001, pg. 77.

otro. Coke apelaba, asimismo, a un criterio que en realidad ya estaba siendo utilizado de forma habitual en la práctica del momento, si bien le dio una autoridad mayor¹²⁰.

De otro lado, al subrayar un mecanismo judicial que permitía el ajuste entre la potestad legislativa y los tribunales del *common law*, defendiendo simultáneamente la jurisdicción de estos últimos frente a los de la Corona y los eclesiásticos, motivaría cierto grado de alianza entre aquellos juristas que provenían ya en gran parte de la *gentry*¹²¹, y el Parlamento.

Carlos I continuó la política iniciada por su padre. Con idéntica sucesión de convocatorias y disoluciones parlamentarias, perseguiría sin éxito fondos para el fortalecimiento de su gobierno. En 1625 los parlamentarios se atrevieron a pedirle más de lo que habían solicitado en 1622 a Jacobo. Ahora exigían la facultad de destituir a los ministros del Rey, y entonces sólo debatir su política exterior. La reacción de Carlos fue dispersarlos y aprobar *forced loans* (empréstitos forzados¹²²) y poco después los *tonnage*¹²³ y *poundage*¹²⁴ (impuestos sobre “tonelaje y libra”). Le sucedió la desobediencia de varios miembros de las Cámaras. Paralelamente, las tropas que regresan de la guerra con Francia pasan a alojarse en domicilios particulares, motivando la aparición de consejos de guerra en medio de la población civil.

I.1.4.3. La “Petición de Derechos” (*Petition of Right*, 1628)¹²⁵

Entonces, y ante la persistencia del problema financiero, Carlos Estuardo convoca nuevamente el Parlamento en 1628. El fin era, una vez más, obtener el asentimiento a mayores subsidios. Pero en esta ocasión sus oponentes se han reafirmado y le exigen aprobar una “Petición”, remedio ya apuntado como derecho tradicional de los súbditos a presentar sus quejas ante el gobernante. Intentaban así que permanecieran reconocidos los derechos y libertades que decían poseer desde mucho tiempo atrás,

¹²⁰ Ibid., pp. 77 y 80.

¹²¹ Vid. *supra*, pg. 38.

¹²² El Rey obligaba con ellos a aceptar prestarle dinero por deuda pública.

¹²³ El *tonnage* databa del siglo XII, y era un gravamen sobre el vino importado en toneles. Cook, *op. cit.*, pág. 485.

¹²⁴ Su origen se remonta a un siglo después que el anterior, y era un derecho de aduanas impuesto a importaciones y exportaciones. Solía aprobarse por el Parlamento a favor del monarca, con carácter vitalicio, al inicio de su reinado, y así ocurrió hasta Jacobo I (Cook, *ibid.*). Con Carlos I, sin embargo, los Comunes se negaron a permitir su recaudación durante más de un año.

¹²⁵ La traducción más estricta sería “Petición de Derecho”, en singular. Pero dado que los *iura* formaban al fin y al cabo el *ius*, hemos preferido el término “Derechos”, que además, evita confusiones al realizar el paso de la lengua inglesa a la castellana. Agradezco al profesor D. Liborio Hierro tan valiosa aclaración.

basándose en viejos *Statutes* y la Carta Magna¹²⁶. El Rey acepta la solicitud, si bien disolverá otra vez la asamblea al año siguiente.

La “Petición” contenía los siguientes puntos:

1) En primer lugar, se insistía en que *cualquier impuesto debía ser aprobado por ambas Cámaras de representantes*; los peticionarios defienden “que ningún hombre de aquí en adelante sea compelido a realizar o atender subsidio alguno, empréstito, benevolencia, impuesto o gravamen similar, sin consentimiento común del Parlamento mediante ley [*act*]”¹²⁷. La violación de esta exigencia suponía atentar contra el *derecho de propiedad*¹²⁸ que formaba parte de la ley de las naciones¹²⁹. El Rey no podía establecer imposiciones sobre los “hombres libres” sin que estos consintieran, y además tal asentimiento debía producirse en sede parlamentaria, no siendo válido el de carácter aislado y particular.

Pero es que además la Petición afirma que “fue declarado y promulgado por autoridad del Parlamento, en el vigésimo octavo año del reino de Eduardo Tercero, que ningún hombre, cualquiera que fuese su estado o condición, pudiera ser expulsado de sus tierras o posesiones...ni desheredado...sin permitírsele la defensa en un debido proceso legal”¹³⁰. Es incorporada una garantía contra cualquier intento de restringir el derecho de propiedad, y por ello también el de la herencia. Su origen databa de un *statute* antiguo.

Contra estas aseveraciones, los absolutistas defendieron que aquel derecho debía ceder ante situaciones de “necesidad pública”, pues así lo establecían las leyes divina

¹²⁶ Se alude a esta última como “*the Great Charter of the Liberties*”. Vid. <<http://www.constitution.org/eng/conpur010.htm>>, tercer párrafo; la página web contiene el texto de la *Petition* incluido en Gardiner, Samuel Rawson (ed.): *The Constitutional Documents of the Puritan Revolution, 1625-1660*, 3ª ed. (1ª, de 1889), Oxford, Clarendon Press, 1906, pp. 66-69.

¹²⁷ “*That no man hereafter be compelled to make or yield any gift, loan, benevolence, tax, or such like charge, without common consent by Act of Parliament*” (Gardiner, en id., párrafo 10º).

¹²⁸ Por propiedad se entendió básicamente la de “fundos”, que era por antonomasia a la que hacía referencia el concepto, pero, sin embargo, al aumentar el tráfico de mercancías y el desarrollo técnico, los bienes muebles, que hasta entonces sólo habían sido de manera principal animales y útiles de labranza, ahora incluían otros nuevos como la moneda. Todo esto supone, junto con la teoría sobre el “dominio dividido”, que aquella noción de “propiedad”, fuera más débil hoy día. Nuestro concepto gozó de un desarrollo más bien posterior, en el siglo XVIII, y sobre todo con la codificación del siglo XIX, si bien nunca tuvo, ni siquiera entonces, el valor absoluto que algunos ideólogos quisieran darle.

¹²⁹ Así lo entendía por ejemplo Saint Germain en su edición latina de *Doctor and Student* (1520): “se encuentra extendida por todo el mundo”. Cit. por Aylmer, Gerald E., 1980, pg. 87. Sir John Davies, en su *The Question concerning Impositions*, de 1656, aún insistía en idéntica legitimación: vid. Sommerville, *op. cit.*, pg. 147.

¹³⁰ Gardiner, *op. cit.*, párraf. cuarto. El subrayado es mío. Apenas hace falta recordar que el *due process of law* (“debido proceso legal”) aparecería, casi con idéntica expresión, en la Quinta Enmienda de la constitución estadounidense; en ella se dice que a nadie “se le privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal”. También puede traducirse como “acorde a Derecho”, “según Derecho”, o “justo”.

y natural¹³¹. Y quien iba a establecer bajo qué condiciones, por tanto, era el monarca que hacía frente al peligro exterior. Los más radicales del bando parlamentario, de otra su parte, percibieron al Trono como su principal enemigo, afirmando que para los momentos de “necesidad” ya eran suficientes las leyes habituales. Ambas corrientes, pues, reconocían la existencia de esa “ley fundamental” mencionada por Cicerón en una de sus obras: “*salus populi suprema lex esto*”¹³²; la protección y preservación del reino, de sus bienes y súbditos, es la principal tarea de cualquier gobierno. Sobre lo que se discute es acerca de quién es la autoridad legitimada para poner en marcha resortes extraordinarios ante una situación “anómala”.

El 7 de julio de 1610, la Cámara de los Comunes ya había declarado que la propiedad era un antiguo “*derecho fundamental*”, aprobando el 17 de julio un proyecto de ley (*bill*) con el cual se declararon nulos aquellos gravámenes que fueran promulgados sin consentimiento¹³³.

2) *La libertad frente al arresto arbitrario* también fue sostenida por los hombres del Parlamento. De manera tradicional, y con antecedentes en tratados de juristas como uno de William Stanford en 1557, era opinión generalizada que el rey podía encarcelar a súbditos sin presentar cargos contra ellos. Su justificación fue la de no poner sobre aviso a posibles camaradas de conjura política, y en todo caso, la medida necesitaba aprobación del *Privy Council*¹³⁴. Pero cuando Carlos I detuvo a los desobedientes al *Forced Loan* en 1627, la conformidad se vino abajo. Cinco de ellos presentaron una demanda (*writ*) de *habeas corpus*, una institución contemplada indirectamente ya en la Carta Magna¹³⁵ y que originó el famoso *Darnel's Case*¹³⁶. Pese a tal recurso, los jueces reales fallaron en contra.

La libertad frente al arresto arbitrario sostenida por el *habeas corpus* protegía de acusaciones maliciosas. Incluso de carácter civil, pues entonces uno podía ir a prisión

¹³¹ Sommerville, *op. cit.*, pg. 149. A principios de siglo, apoyando a Jacobo I y su prerrogativa, el Presidente del *Exchequer* (tribunal con jurisdicción en asuntos fiscales) afirmó en el *Bate's Case* que “el poder del rey es doble, ordinario y absoluto”, pues encontrándose ligado al *common law* cuando no hay interés público en juego, y pudiendo variar aquél sólo por intervención parlamentaria, cuando sí aparece en escena “el beneficio general del pueblo”, la Corona sólo está sujeta a las reglas de la “Política y el Gobierno” (cit. en *ibid.*, pg. 152).

¹³² *Las leyes*, III.iii.8: “la salvación del pueblo debe ser [...] ley suprema”. Cit. por la trad. cast. de José Guillén, Madrid, Tecnos, 1986, pg. 219.

¹³³ Cit. por Sommerville, *op.cit.*, pg. 153.

¹³⁴ *Ibid.*, pg. 163.

¹³⁵ Apartado número veintinueve: “[n]ingún hombre libre será detenido, ni preso, ni privado de su propiedad, de sus libertades o libres usos, ni puesto fuera de la ley, ni desterrado, ni molestado de manera alguna, y Nos no pondremos ni haremos poner mano sobre él, a no ser en virtud de un juicio legal de sus pares y según la ley del país. No venderemos, ni negaremos, ni retrasaremos a nadie el derecho o la justicia”. Esteban (ed.), *op. cit.*, pg. 513. El precepto se refiere a diversos privilegios e inmunidades, y los “*pares*” eran aquellas personas de idéntica condición estamental.

¹³⁶ Llamado así, porque el primero de los Cinco fue el parlamentario Darnel. Los otros eran Cobet, Earl, Heveningham y Hampden (*vid.* Maitland, *op.cit.*, pg. 307).

a causa de sus deudas. Uno de los objetivos del derecho era conseguir que los parlamentarios asistiesen a las sesiones, sin obstaculización infundada. Los peticionarios de 1628 introdujeron, así, en la misma frase que aludía a la protección de la propiedad mediante el “debido proceso legal” (o derecho a un proceso justo), idéntica garantía para el derecho frente al arresto arbitrario, así como contra cualquier castigo fijado sin juicio alguno¹³⁷.

3) La libertad de palabra (*freedom of speech*), por otro lado, era una costumbre existente en cada Cámara, por la cual en ellas se podía debatir libremente y sin interferencia de la otra o del Rey. Se refería, pues, sólo a los parlamentarios, ya que la libertad de expresión en sentido genérico pasaría por diversas vicisitudes más bien relacionadas con los conflictos religiosos, cuestión que luego se advertirá. La *freedom of speech*, asimismo, se encontraba restringida indirectamente por la *potestas* real de convocar o disolver las Cámaras a discreción. De hecho, tanto durante el reinado de Jacobo como el de Carlos I, vieron interrumpir sus reuniones por intentar discutir con los monarcas asuntos de política externa.

4) Otra exigencia de los parlamentarios en 1628 fue *abolir la obligación de alojar tropas*¹³⁸. Al poseer el monarca prerrogativa para su reclutamiento y organización, podía asimismo compeler a sus súbditos a hospedarlas, lo cual había dado lugar a abusos durante la guerra del rey Carlos contra Francia. El Rey pretendía reforzar sus propias fuentes de poder, pero tales intenciones no eran bien vistas, ni por numerosos aristócratas, ni por la pequeña nobleza que dirigía los resortes locales de la coacción, desde la vigilancia policial hasta la recaudación tributaria.

En 1629, los Comunes quisieron proceder contra los agentes públicos (*officers*)¹³⁹ que recaudaban impuestos “ilegítimos”. Debía castigarse a los servidores públicos que cometieran crímenes, reduciéndoles al nivel del resto de súbditos y enjuiciándoles. Retomaban así un método similar al que habían utilizado antes contra Sir Giles de Mompesson y Francis Bacon en 1621¹⁴⁰, y luego frente al Duque de Buckingham en

¹³⁷ La frase completa era, pues, “*that no man of what estate or condition that he be, should be put out of his lands or enements, nor taken, nor imprisoned, nor disherited, nor put to death, without being brought to answer by due process of law*” (cit. en la *Petition*, vid. Gardiner, *op. cit.*, en <<http://www.constitution.org/eng/conpur010.htm>>, párrafo cuarto).

¹³⁸ Tal reivindicación llega hasta la constitución estadounidense de 1787 (Quinta Enmienda): “En tiempo de paz ningún militar se alojará en casa alguna sin el consentimiento del propietario; ni en tiempo de guerra, como no sea en la forma que prescriba la ley.” Esteban (ed.), *op. cit.*, pg. 436.

¹³⁹ Pese a su función “pública” se vendían a particulares, como tantos otros empleos de la Corona, inclusive en la judicatura.

¹⁴⁰ Morgan, Edmund S.: *Inventing the People; The Rise of Popular Sovereign in England and America*, New York, W.W. Norton and Co, 1989, pg. 32. Mompesson fue un aristócrata atacado de manera intensa

1626, el del *impeachment*¹⁴¹. Carlos I quiso disolver las Cámaras, pero el *speaker*¹⁴² fue obligado a sentarse, y fueron declarados enemigos del bienestar público quienes pagaran o aconsejasen sufragar el *tonnage* y *poundage* sin aprobación parlamentaria. Pese a tal desafío, Carlos suprimió las reuniones, e inmediatamente recurriría al sistema impositivo que se le había exigido abolir. Ya no hay otro Parlamento hasta 1640.

Los parlamentarios se apoyaban en costumbres de origen inmemorial y legislación vetusta para apoyar sus reivindicaciones. Pero tal normativa muchas veces no había sido interpretada como ellos pretendían, de manera que la Carta Magna medieval tuvo que obtener varias confirmaciones de sucesivos reyes, lo cual indica que no se cumplía. De hecho, algunos parlamentarios no mantenían antes de 1628 el mismo criterio que entonces. Edward Coke afirmó en aquel momento, tras haber apoyado años atrás la prerrogativa de encarcelamiento sin cargos por el Rey, que esa postura había sido errónea¹⁴³. Es verdad que en el debate previo de la *Petition of Right* por los Comunes, John Selden se esmeró en legitimar este derecho, ahora defendido por el antiguo Justicia Mayor, relacionándolo con una “antigua costumbre”¹⁴⁴. Otros, como John Pym, se refirieron también a la ley de Dios¹⁴⁵. Pero estaba claro que, a pesar de estas apelaciones a la tradición o a la voluntad divina, las reivindicaciones eran arrancadas de un enfrentamiento específico, resultando frutos de una evolución imprevista¹⁴⁶.

I.1.4.4. La intensificación de la disputa eclesiástica durante el reinado de Carlos I: la *Grand Remonstrance*

Ya desde el reinado de Isabel I, el puritanismo pretendía una reforma de la iglesia episcopalista nacional, cuya dirección entonces pertenecía a la Corona. Así, desde

por su tendencia al nepotismo; Bacon (1561-1626) fue un destacado filósofo, jurista e impulsor del método científico, además de hombre de Estado.

¹⁴¹ Se amparaba en la idea de que, aunque el Rey no podía ser procesado, esto sí resultaba admisible con respecto a sus servidores más inmediatos, ya que estos quizás quisieran inducirle a error. Como no se podía atacar directamente al monarca, se acudía a este sistema para enfrentarse a él, por lo general con acusaciones de corrupción contra los consejeros malignos que tan mal le auxiliaban en sus tareas de gobierno. El *impeachment* suponía que la Cámara Baja podía someterles a enjuiciamiento de los Lores. Vid. *ibid.*, pp. 31 y 32.

¹⁴² Persona encargada de guardar el orden en los debates de la Cámara Baja. Su figura se prolonga hasta hoy en día.

¹⁴³ Expuesto por Sommerville, 1986, pg. 165. El mismo autor cita en la pg. 166 a Coke, cuando defendió este derecho en el Parlamento, aludiendo a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, último versículo, el cual se refiere a la aseveración del magistrado romano Festo, ante una denuncia presentada contra Pablo de Tarso: “no me parece razonable enviar un preso y no indicar los cargos que hay contra él”.

¹⁴⁴ *Ibid.*, pg. 165.

¹⁴⁵ *Ibid.*, pg. 166.

¹⁴⁶ El propio uso del *habeas corpus* por los Cinco Caballeros, según Maitland (*op. cit.*, pg. 313), contaba con el peso del precedente en contra.

aquel momento histórico, los puritanos, pese a ciertas oleadas de represión, atacaron su disciplina, doctrina y culto. La reacción del episcopalismo fue protagonizada por William Laud (1573-1645), quien ocuparía el arzobispado de Canterbury desde 1633 hasta su muerte. Como otros teólogos de la época, y habiendo leído a Hooker¹⁴⁷, propugnaba que en el credo anglicano y los súbditos permanecieran automáticamente identificados. Esto implicaba una fuerte disciplina sobre el clero, aumentando también su poder jurisdiccional entre los seglares. Los dos elementos dependían, a su vez, de la prerrogativa regia, pues el soberano era cabeza dirigente de los obispos. Laud fue pronto acusado de usurpar las facultades de los tribunales de procedencia secolar, de imponer ceremonias cercanas a las del catolicismo y de extender la creencia arminiana¹⁴⁸. Los parlamentarios, afines al puritanismo, y más en concreto a su variedad presbiteriana, apoyaron estos ataques contra el mandatario presuntamente “papista”. Y más todavía cuando éste consiguiese en octubre de 1633 que el Rey y su *Privy Council* aprobaran la *Declarations of Sports*¹⁴⁹, animando a que los súbditos disfrutasen de diversiones y entretenimientos en domingo, frente a las pretensiones puritanas de dedicar íntegramente el día a la oración y el culto.

Estando el conflicto en tal situación, Carlos impuso el *ship money*¹⁵⁰, así como nuevos cánones o normas religiosas en Escocia, unida a Inglaterra desde la subida al trono de su antecesor, Jacobo I. Pero el *Scottish National Covenant* (Acuerdo Nacional Escocés, de 1638) se opuso a las medidas eclesiásticas. El rey envió tropas a tierras escocesas, mas fracasaron por la falta de fondos, así que Carlos convoca un nuevo Parlamento, reunido en Westminster el 13 de abril de 1640. No dura más de tres semanas (“Parlamento Corto”), y son encarcelados varios de sus más importantes líderes: el Duque de Warwick, John Hampden y John Pym entre ellos¹⁵¹. La guerra con los escoceses prosigue, y estos llegan a penetrar en Inglaterra, ocupando Newcastle. Carlos recurre entonces a convocar sólo un Gran Consejo de Pares, pero los nobles piden que se llame a una nueva reunión parlamentaria. Comenzará sus sesiones el 3 de noviembre y será denominado “Parlamento Largo” (*Long Parliament*)

¹⁴⁷ Richard Hooker (1555-1600) publicó su obra principal, *The Laws of Ecclesiastical Polity*, entre 1594 y 1597, e influiría más tarde en John Locke. Vid. Matteucci, *op. cit.*, pp. 82 y 83, así como, con algo más de extensión, Sabine, *op. cit.*, pp. 32-327.

¹⁴⁸ Los arminianos seguían, según Cook (*op. cit.*, pg. 36), a “Jacob de Arminius (1560-1609), profesor de Leyden que a principios del siglo XVII disintió del calvinismo estricto holandés. Rechazaban las doctrinas de la predestinación y por el contrario hacían hincapié en las enseñanzas de la iglesia sobre el libre albedrío”.

¹⁴⁹ Puede verse en Gardiner, *op.cit.*, en <<http://www.constitution.org/eng/conpur017.htm>>.

¹⁵⁰ “Fondo para Navíos”, en 1635. Este gravamen había sido ocasional, fundado en prerrogativa, y sólo cargaban con él las ciudades portuarias, que así sustituían el suministro de barcos para el rey cuando se producía una amenaza exterior. Tanto la reina Isabel como Jacobo I pidieron el mismo, pero ahora Carlos quiso extenderlos a poblaciones del interior, y ya no aparecía en ese momento como basado en una coyuntura bélica, perdiéndose asimismo el sentido de su ocasión.

¹⁵¹ Hill, 1961, pp. 23 y 24.

por extender sus asambleas durante dos décadas, pese a la guerra civil posterior y las interrupciones más o menos frecuentes debidas a los avatares políticos del momento.

Aparece entonces la petición para abolir el episcopado, la “*Root and Branch Petition*”¹⁵², firmada por unos quince mil londinenses¹⁵³. Los parlamentarios les pidieron que aguardaran a la destitución de Strafford, principal favorito real, así como de Laud y los Lores espirituales de la Cámara Alta¹⁵⁴. Los Comunes presentaron contra Strafford, que se había mostrado implacable en el gobierno irlandés, un *bill of attainder*¹⁵⁵. Consiguieron finalmente que fuera ejecutado, por alta traición, el 12 de mayo de 1641, ante un rey ya débil e impopular que optó por consentir la condena. De manera inmediata, se suceden varios acontecimientos legislativos que introducen medidas drásticas: Ley Trienal por la que las asambleas de Lores y Comunes deben convocarse cada tres años, con el recurso de reunirse automáticamente en caso de que el rey no haga llamamiento, supresión de los tribunales de prerrogativa de la Cámara Estrellada, la Alta Comisión, y el Consejo del Norte de Gales, abolición del *tonnage y poundage* y del *ship money*, confiscación de los dominios episcopales.

Pero la última fricción entre Carlos I y el Parlamento antes de entrar en abiertas hostilidades vendrá provocada por otro acontecimiento de trasfondo confesional, la rebelión irlandesa. Comenzada el 23 de octubre de 1641 por los católicos, trajo como una trágica consecuencia el asesinato de numerosos protestantes. Carlos intenta entonces reclutar un ejército a fin de enfrentarse a la sublevación y solicita ayuda a la asamblea parlamentaria. Pero aquellos representantes sospechan que lo utilizará también para someterles, así que los Comunes, más decididos que los Lores, presentan una *Grand Remonstrance* (“Gran Amonestación”, o “Gran Protesta”). Este documento reunía una serie de quejas dirigidas al monarca. La Gran Amonestación acusaba a varios “grupos y facciones” de haber “no sólo atacado, sino destruido y aniquilado por completo la libertad, la paz y la prosperidad del reino, así como la

¹⁵² Su propia denominación, “Petición de Raíz y Rama” (Gardiner, *op. cit.*, en <<http://www.constitution.org/eng/conpur026.htm>>), quería exponer la necesidad de abolir *todo el sistema eclesiástico, sustituyéndolo por otro completamente nuevo*. A tal fin, se acusaba al episcopalismo de atacar la doctrina de la predestinación (segundo de los agravios), sostener ceremonias “supersticiosas” (6º, mencionándose en su 16º el signo de la cruz bautismal y la genuflexión eucarística), la obstaculización del aprendizaje infantil (7º), censura de publicaciones (8º), defender la prerrogativa real en lo relativo a las propiedades, (10º: “*that all is the King’s, and that he is bound by no law*”), el empleo de libros litúrgicos “papistas” (18º), los cánones abusivos utilizados para excomulgar arbitrariamente a los críticos (19º y 24º), las potestades para autorizar matrimonios (20º), etc.

¹⁵³ Manning, *op. cit.*, pág. 16. Según el mismo autor (*ibid.*, pg. 84), Londres contaba entonces con una población de unos 450.000 habitantes, siendo la misma el ocho por ciento de el total inglés, y de unos 25.000 personas la urbe más populosa inmediatamente tras ella.

¹⁵⁴ *Ibid.*, pg. 16.

¹⁵⁵ El *bill of attainder* (proyecto con el fin de decretar la “muerte civil”) servía para condenar a un cargo público, mediando acusación muy grave, como lo era la de alta traición. Producía la pérdida de todos los bienes y derechos del condenado, de manera que no podía legar nada. Cook, *op. cit.*, pp. 40 y 41.

felicidad y las esperanzas de todos los buenos súbditos de Su Majestad”, elaborando un “proyecto pernicioso y malintencionado de alterar *las leyes fundamentales*¹⁵⁶ y los principios de gobierno sobre los cuales se hallan sólidamente fundadas la justicia y la seguridad del reino”. Los responsables eran “papistas discípulos de los jesuitas”, “obispos y la parte más corrompida del clero”, y los “consejeros y cortesanos” reales¹⁵⁷.

Asimismo, la *Grand Remonstrance* critica a Carlos I por haber realizado una política exterior cómplice de las potencias católicas francesa y española, y le recuerda los episodios más duros de su enfrentamiento con las Cámaras¹⁵⁸.

En lo relativo a la propiedad de la tierra, se le reprocha haber vendido bosques enteros a los “papistas” y despojado a muchos súbditos de sus “derechos sobre las arenas y las orillas del mar”. También de instituir monopolios sobre bienes básicos y transformar tierras de labor en pastizales¹⁵⁹. El fenómeno de las *enclosures*¹⁶⁰, los cercamientos de hectáreas hasta entonces comunales, con el fin de venderlas a terratenientes cercanos a la Corte, era para los parlamentarios un sistema ilícito de recaudar fondos.

De otra parte, el sistema de justicia nacional es asimismo criticado: normas impositivas y sus correspondientes penas desproporcionadas, destitución de jueces de criterio independiente, amenazas y castigos contra abogados y procuradores, permanencia de jurisdicciones inicuas con origen en la prerrogativa real y venta de plazas en la judicatura y el Estado a los “favoritos”¹⁶¹.

Con respecto a la iglesia, esta *Grand Remonstrance* declara que los sermones en la iglesia anglicana han sido instrumento para defender la prerrogativa real frente a la ley y atacar las libertades. El papismo introduce innovaciones conducentes a un

¹⁵⁶ Subrayado mío.

¹⁵⁷ Subrayado también propio. Cit. en Walter, Gerard: *La révolution anglaise*, París, Albin Michel, 1963; trad. cast. de J. M. Zainqui y otros (s.n.), por donde se cita, *La revolución inglesa*, Barcelona, Grijalbo, 1971 (pp. 109 y 110); traducción que utilizamos tras cotejo con el original, que puede verse en Gardiner, *op. cit.*, en <<http://www.constitution.org/eng/conpur043.htm>>.

¹⁵⁸ Gardiner, *op. cit.*, números 2, 5, 6, 7 y 8.

¹⁵⁹ *Ibid.*, agravios 25, 26, 27 y 31.

¹⁶⁰ “Inicialmente, el cercado y la apropiación de tierras de baldíos y páramos, pero más adelante de campos abiertos y de pastos comunes. A partir de 1500 se hicieron frecuentes las renunciaciones relativas a los cercados de antiguos terrenos comunes, especialmente en el norte y en el centro, donde se practicaba mucho la agricultura en campo abierto. Los cercados, ideados para promover la especialización y eficiencia agrícolas en una época de subidas de precios, solían efectuarse en virtud de un acuerdo, pero a menudo surgían controversias cuando los terratenientes hacían caso omiso de los derechos de los villanos. Los cercados se hicieron más numerosos en el siglo XVII, y en el XVIII los terratenientes empezaron a lograrlos mediante proyectos específicos de ley en el Parlamento”. Cook, *op. cit.*, pp. 95 y 96.

¹⁶¹ Gardiner, números 38, 39, 43 y 37, 48.

enfrentamiento ilegítimo contra Escocia, y los cánones son ilegales¹⁶². A “Su Majestad” le

ha sido confiada tanto la ley eclesiástica como la temporal y el cuidado de gobernar a los miembros de la Iglesia de Inglaterra según las reglas de orden y de disciplina establecidas por el Parlamento, gran consejero suyo en todos los asuntos de la Iglesia y del Estado. Confesamos que nuestra intención y el objetivo de nuestros esfuerzos han sido siempre limitar el poder exorbitante que se han atribuido los prelados, por percibirlo como del todo contrario a la Palabra de Dios y a las leyes del país. En este sentido, hemos cursado el *bill* que los separaba de las funciones y empleos temporales, para que pudieran dedicarse por completo al modesto ejercicio de su ministerio¹⁶³. [...] Y declaramos que estamos muy lejos de querer o desear que se afloje el precioso freno de la disciplina y del gobierno de la Iglesia y que se entregue a simples particulares, o congregaciones, la elección de la forma de culto que les agrada, porque estimamos como necesario que se exija en todo el reino una exacta conformidad a la regla prescrita por las leyes, de acuerdo con la Palabra de Dios. Deseamos librar a las conciencias de la observancia de ceremonias inútiles, suprimir las innovaciones y hacer desaparecer los monumentos de la idolatría, y para mejor llevar a cabo esta reforma, deseamos que se reúna un sínodo general de los más graves, piadosos, sabios y sensatos doctores de esta isla, asistidos de algunos doctores extranjeros de nuestra misma religión, y que este sínodo se encargue de examinar las cosas necesarias para la paz y para el gobierno de la Iglesia y de exponer al Parlamento el resultado de sus consultas, para que éste las adopte, confirme y autorice con su sello; [...] A Su Majestad le será humildemente suplicado por ambas Cámaras no confiar el cuidado de sus negocios, tanto en el interior como en el extranjero, a nadie más que a los consejeros, embajadores y ministros que sean de la absoluta confianza del Parlamento, sin lo cual no podremos otorgar a Su Majestad los subsidios que solicita para el mantenimiento de su propio gobierno, ni a los protestantes de ultramar el apoyo que necesitan.¹⁶⁴

En resumen, el punto máximo del enfrentamiento por la supremacía se había alcanzado. Los Comunes reunían una coalición lo suficientemente amplia como para

¹⁶² *Ibid.*, números 56-86. Los “cánones” eran las normas de tipo eclesiástico, que no olvidemos intervenían en un área que hoy pertenecería a la moral privada.

¹⁶³ Los diezmos se encontraban en el trasfondo del problema. Se trataba de un impuesto equivalente a “la décima parte de la producción anuala de los seglares, que se utilizaba para mantener a los ministros de la Iglesia”. Se establecieron en el siglo IV, y se hicieron obligatorios en Inglaterra a partir del siglo IX (Cook, *op. cit.*, pg. 166). En la época que aquí analizamos, y pese a encontrarse aparentemente destinado al clero y a los pobres, los terratenientes gozaban del derecho a recaudarlo, sufragándolo justo quienes estaban inmediatamente por debajo en la escala social: campesinos que no disfrutaban de rentas tan altas. Al tiempo, los ministros de culto pertenecientes a un grado jerárquico superior se dedicaban a trabajar en empleos distintos, dejando sólo a clérigos mal pagados a cargo de la predicación en las parroquias. Hill, *op. cit.*, pp.101-102; Manning, *op. cit.*, pp. 173 y 174.

¹⁶⁴ Gardiner, *op. cit.*, en <<http://www.constitution.org/eng/conpur043.htm>>, agravios numerados por el compilador como 182 a 185; y luego, agravio nº 197.

luchar contra la Corona, y su programa era fácil de leer en la Gran Amonestación. Pero existían diversos conflictos alrededor de aquella alianza. En primer término, las diferencias religiosas que pronto se acentuarían entre presbiterianos e “independientes”. En segundo lugar, el combate iba a ser sostenido por apoyos sociales muy distintos: juristas del *common law*, gran parte de la *gentry*, *yeomen*, clero bajo, mercaderes, tenderos, artesanos, aprendices, manufactureros, asalariados. Un grupo inestable y sujeto a tensiones. La coincidencia estribaba en su enemistad común contra la Corte, el alto clero y los grandes terratenientes cercanos al monarca; el grupo de los privilegiados por monopolios, nombramientos, *enclosures* y prebendas.

La causa parlamentaria fue defendida como *nacional*, frente a intereses “papistas” (es decir, extranjeros, pues no olvidemos que el Papa poseía un poder terrenal, además del espiritual) y corruptos. “Papismo” era sin duda una descalificación utilizada muy a menudo, igual que “jesuita”, por su importancia en el imaginario popular. El recuerdo del *Gunpowder plot* católico de 1605¹⁶⁵, así como la percepción de que Roma había autorizado la doctrina tiranocida de los jesuitas para asesinar a monarcas protestantes, influyeron en esta concepción. Realmente ni Laud ni Carlos I estaban dispuestos a reconciliar al Reino con Roma, ni a reincorporarlo al catolicismo. Pero sí es cierto que mostraban simpatías por las posiciones ideológicas del absolutismo continental. Tal extremo fue aprovechado precisamente por los parlamentarios para autoerigirse en representantes de la causa “patriótica”, entendiendo esta palabra en su acepción de ligada al “bien común” y al puritanismo.

El 15 de diciembre de 1641, los Comunes, no sin un áspero debate para conformarse en mayoría, acuerdan imprimir la *Grand Remonstrance*. El día 21 se producen elecciones al Ayuntamiento londinense (*Common Council*), pasando su control a los opositores puritanos; el Rey destituye al Teniente de la Torre, Sir William Balfour, que había obstaculizado la posible huida de Strafford con anterioridad, y tumultos populares amenazan con destruirla. A partir de ese momento la tensión aflora e incluso muchos se manifiestan ante las puertas de la Cámara Alta, pidiendo la abolición del episcopado. El 4 de enero de 1642, Carlos I ordena entonces apresar a Lord Mandeville, Pym, Hampden, Holles, Haselrig y Strode, acusando a estos representantes parlamentarios de alta traición. Pero se refugian en la *City*, donde son protegidos por marineros, mujeres y aprendices¹⁶⁶. La primera guerra civil inglesa estaba a punto de comenzar.

¹⁶⁵ En ese año, durante el reinado de Jacobo I, se descubrió esta “Conspiración de la pólvora” (*Gunpowder Plot*), que pretendía situar una carga explosiva bajo el lugar de las reuniones parlamentarias. Su preparación fue imputada a diversos cabecillas de simpatía católica.

¹⁶⁶ Véase, para una exposición más exacta, Manning, op.cit., pp. 86-109.

I.1.5. La supremacía parlamentaria surgida con la Guerra Civil inglesa

I.1.5.1. La rebelión del Parlamento contra el Rey

Desde tiempos medievales la institución parlamentaria poseía un carácter especial que la convertía en órgano para la deliberación y aprobación de las leyes o *statutes*. Y sin embargo, al ser conformado de manera estricta por Lores, Comunes y monarca reunidos, su naturaleza resultaba polémica. Así, algunos afirmaron la esencialidad de la Cámara Baja¹⁶⁷, opinión respaldada por la evidencia de un mayor protagonismo de los Comunes a partir de la época Tudor, y ya cada vez más olvidada la concepción del Parlamento como asamblea de los consejeros reales, que fue restringida al Consejo Privado¹⁶⁸. De cualquier manera, la supremacía política necesaria para legislar, correspondía, según una famosa fórmula, al Rey en el Parlamento (*"the king in parliament"*), lo que admitía las prerrogativas reales. Éstas incluían una potestad discrecional y no controlable por las Cámaras. La tarea de gobernar, por tanto, fue principal durante muchos siglos, a despecho de una "representación" que inicialmente guardaba aún connotaciones de "consejo".

A principios del XVII, antes del choque armado entre Rey y Parlamento, el monarca había mantenido las riendas del gobierno, si bien cada vez era más difícil sujetarlas frente a los avances de quienes le atacaban. Ha de advertirse el parecido asombroso entre las políticas Estuardo y lo sucedido simultáneamente en otros rincones europeos: "el refuerzo de las conexiones entre Iglesia y Estado, la eliminación de disidentes por doquier, la creación de una Corte arrolladoramente poderosa, el acaparamiento de poderes financieros y militares, estos resultaron ser los pilares del crecimiento absolutista en Europa"¹⁶⁹. El equilibrio de la antigua "constitución mixta" que aseguraba un entendimiento entre Lores, Comunes y monarca, se había quebrado, surgiendo de forma abierta el combate entre absolutismo y supremacía parlamentaria. Sin embargo, la ruptura no fue asumida totalmente. Así, los dos bandos seguían hablando en términos de "esquema de gobierno" (*frame of government*), *constitutions* o *fundamental constitutions*, es decir, acariciaban aún el modelo antiguo, pese a que los hechos condujeran a su declive. Y los teorizadores del absolutismo entendían que la "irresistibilidad" del Rey no presuponía que éste fuese arbitrario.

¹⁶⁷ Sommerville, *op.cit.*, pg. 176.

¹⁶⁸ A menudo, la fórmula que aprobaba *statutes* era la de "con el consejo y asentimiento", *vid.* Maitland, *op.cit.*, pg. 284.

¹⁶⁹ Stone, *op. cit.*, pp. 132 y 133.

A pesar de todo, las circunstancias compelián a buscar derroteros distintos de los tradicionales. La Corona acumulaba cada vez más prerrogativas, muchas recientes y derivadas del desarrollo económico y su regulación, mientras que los Comunes arremetían contra ellas presentando la *Petition* de 1628 y la *Grand Remonstrance* de 1641. Asimismo, al iniciarse el conflicto más grave tras la publicación de esta última, los parlamentarios aprobaron una Ordenanza Militar (*Militia Ordinance*)¹⁷⁰ con la que retiraban al monarca la dirección castrense. Sin duda, eso sí, sus argumentos seguían arrastrando el lastre de la teoría anterior: se reivindicaba el papel de las Cámaras como supremo Tribunal y Consejo superior de Inglaterra, autorizado por tanto para proveer en situaciones de emergencia, siguiendo así “la *Ley más antigua* de este Reino”, esa “que es *fundamental* y esencial a la *constitución* y *subsistencia* del mismo”, según lo que sería “el deseo por parte del Príncipe”¹⁷¹. Obsérvese, pues, que la referencia es nuevamente a una norma con caracteres de *básica* y *fundadora*, destinada a la *preservación* del “reino”. Pero el conflicto seguía latente. ¿Cómo unir una ley de cuyo origen no se guarda memoria a un momento fundacional? ¿Quién iba a dirimir cuándo se producía un motivo de *salus populi* o emergencia, causa de medidas extraordinarias, y sobre todo, quién se encargaría de aplicarlas? Y lo más importante, ¿de qué Ley se estaba hablando con exactitud?

I.1.5.2. La defensa ideológica de la supremacía parlamentaria

La *teoría contractual* fue relevante desde mediados del siglo XVI en Inglaterra, como se ha visto con anterioridad¹⁷². Y precisamente esta noción fue recogida por Charles Herle (1598-1659) en 1642, quien sostenía que había un

esquema original de este gobierno coordinado de los tres Órdenes en el Parlamento, consentido y elaborado por el pueblo en su primera constitución, y desde entonces corroborado mediante

¹⁷⁰ El 5 de marzo de 1641.

¹⁷¹ *Declaration of the Long Parliament* de 19 de mayo de 1642. Cit. por Gough, op.cit., pp. 82-83. Los subrayados son nuestros.

¹⁷² A Knox, Buchanan y otros, debe añadirse siempre la gran influencia de Hugo Grocio (1583-1645) o Hughes de Groot, jurista holandés famoso por su obra *De iure belli ac pacis* (1625), y gran impulsor de la idea de Derecho natural, entendido éste como orden moral de las cosas según la recta razón. Se trata, pues, de un iusracionalista que parte de nociones estoicas, si bien, como práctico del Derecho que es, intenta que esta teoría se aplique para la resolución de conflictos en el ámbito internacional, por lo que “se apoya no sólo en la razón, sino también sobre las doctrinas generalmente aceptadas y sobre lo que de hecho se practica de manera general”. Vid. Rodríguez Paniagua, Jose María: *Historia del pensamiento jurídico*, Vol. I, de *Heráclito a la Revolución Francesa*, 6ª ed. (1ª, de 1971), Madrid, Universidad Complutense, 1988, pp. 107 y 108. Lo que le sitúa como muñidor del Derecho Internacional moderno. Asimismo, para Grocio tenía gran importancia a fidelidad a lo pactado (*pacta sunt servanda*), lo cual abre perspectivas al contractualismo que pronto comienza a penetrar en Europa, ya que el autor holandés lo relacionaba con la suposición de que cada comunidad política se constituía mediante tal acuerdo, que tenía enclave histórico en un momento específico y que obligaba a quienes lo suscribían (ibid., pp. 109 y 110).

juramento mutuo de rey y pueblo en cada reinado¹⁷³, e inserto a través de la costumbre constante y duradera en el tiempo, inmemorial (como solemos decir).¹⁷⁴

La constitución mixta disponía, así, de un respaldo contractual. Algo en lo que insistía Philip Hunton algo más tarde quien arguyó también en su *A Treatise of Monarchy* (1643) que la forma de limitar la monarquía era el *pacto* establecido por los hombres de la nación ("*nation*") con un rey, sometiéndose a la Corona sólo en las condiciones que fija el acuerdo¹⁷⁵. La soberanía ("*sovereignty*") del monarca inglés está restringida porque: 1) le es imposible hacer leyes sin concurso parlamentario, 2) su poder ejecutivo se encuentra limitado por las "leyes fundamentales del *common law*" ("*fundamental common laws*", por ejemplo, el derecho de los propietarios y la libertad personal) y los *statutes*, 3) la justicia será impartida a través de las instituciones reconocidas, 4) el sucesor a la Corona es designado según la "ley fundamental", y 5) hay límites a su potestad de establecer gravámenes e imposiciones¹⁷⁶.

El apego a la constitución mixta, al conjunto de leyes fundamentales que contenía, quedó roto, sin embargo, con escritos del tono de Henry Parker. Este autor (1604-1652), *barrister*¹⁷⁷ del *Lincoln's Inn*, y que fue además secretario del ejército formado para luchar contra el Rey, surgió pronto como firme defensor de la supremacía parlamentaria¹⁷⁸. Así, afirmaría en 1642, contra la aseveración de Carlos I diciendo que él era el verdadero intérprete de la ley, que

Su Dignidad fue erigida para preservar la Comunidad, no la Comunidad creada para su servicio [...] Esto entonces nos lleva a la trascendente *arjé* de todas las Políticas, a la Ley Suprema (*paramount law*) que dará Ley a todas las Leyes humanas cualesquiera que sean, y que es la *Salus Populi*: la Ley de prerrogativa, ella misma, es servidora de esta Ley [...] Ni puede el derecho de conquista ser utilizado para eximir a los Príncipes de eso que es debido al Pueblo como Autor o Fin de todo poder, ya que la mera fuerza no puede alterar el curso de la naturaleza, ni frustrar el tenor de la Ley.¹⁷⁹

¹⁷³ Cfr. *supra*, pp. 32 y 33, sobre los hugonotes.

¹⁷⁴ *A Fuller Answer to a Treatise written by Dr. Ferne* (1642). Cit. por Gough, op.cit., pg. 88.

¹⁷⁵ Gough, op.cit., pg. 90.

¹⁷⁶ *Ibid*, pp. 90 y 91.

¹⁷⁷ Término que equivale en el ámbito anglosajón a "abogado", aun con todas las inexactitudes que conlleva traducirlo así, sobre todo, considerando la distancia temporal con respecto a hoy.

¹⁷⁸ Sobre este autor ha realizado un estupendo trabajo Mendle, Michael: *Henry Parker and the English Civil War: The Political Thought of the Public's "Privado"*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995.

¹⁷⁹ "*His dignity was erected to preserve the Commonalty, the Commonalty was not created for his service [...] This directs us then to the trascendent 'arjé' of all Politiques, to the Paramount Law that shall give Law to all humane Laws whatsoever, and that is Salus Populi: the Law of Prerogative itself, it is subservient to this Law [...] Neither can the right of conquest be pleaded to acquit Princes of that which is due to the People as the Authors or Ends of all power; for mere force cannot alter the course of nature, nor frustrate the*

La *paramount law*, pues, la ley suprema y superior a todas las demás, es la *salus populi*, el bienestar del ppeblo. De origen “natural”, esta norma conduce a preguntarse acerca de quién tendrá, frente a una situación que ponga en peligro su vigencia, la autoridad suficiente y legítima para tomar decisiones concretas y encaminadas a la preservación común¹⁸⁰. Precisamente Parker iba a percibir a los parlamentarios como los mejores intérpretes eforales (*ephori*) del “pueblo”, fuente del poder que tenía como primera norma la conservación de la comunidad. En su análisis no hubo una defensa de la soberanía al modo de Jean Bodin en sus *Seis Libros de la República* (1576)¹⁸¹, sino una absorción de las viejas teorías calvinistas sobre la posibilidad de rebelión de los magistrados inferiores contra el trono. Aunque Parker afirma que “el poder *soberano* reside en ambas Cámaras del Parlamento, sin poseer el Rey capacidad de veto”, también dijo que “este poder no es reivindicado como habitual; ni con otro propósito que no sea salvar al reino de la ruina”, es decir, para proteger la *salus populi*. Aun siendo “indisputable y *absoluto*” frente al del “Rey y el pueblo”, consistía sólo en “declarar la ley”. Parker mantenía la tradicional visión de las Cámaras como máximo Tribunal del Reino. Afirmar que “no hay obligación más fuerte que la Justicia y Honor de un Parlamento”¹⁸², equivalía a admitir que tal órgano debía obrar rectamente, a la manera del juez que tiene la última palabra sobre un conflicto. Parker, en consecuencia, no asume la idea de soberanía esbozada por el francés¹⁸³ y luego mucho más definida con Thomas Hobbes¹⁸⁴. En sus escritos se encuentra ausente un soberano *perpetuo*, pues los parlamentarios son elegidos sólo por cierto período, y sus facultades no resultan tampoco *originarias*, por derivar del

tenour of Law” (cit. por Gough, 1985, pg.85, *Observations upon some of his Majesty's late Answers and Expresses*, 1642). El párrafo completo aparece en su idioma original, asimismo, en <<http://history.wisc.edu/sommerville/367/parkerobserv.htm>>, página educativa del profesor Sommerville, Johann P.

¹⁸⁰ Tal teoría, utilizada para apoyar a los parlamentarios, también cuenta con otro apologista, Samuel Rutherford en *Lex Rex* (1644), *vid.* Gough, *op. cit.* (págs. 106 y 107).

¹⁸¹ El soberano sería *perpetuo* (su poder resulta irrevocable al no ha sido delegado por otro previamente, es originario) y *absoluto* (sus prerrogativas y poderes no son compartidos con otra autoridad, su potestad es indivisible). Si bien con respecto a este último extremo, Bodin piensa que algunas potestades sí debían ser objeto de convenio con otros sujetos. El autor francés entendía, más específicamente, que la soberanía abarcaba la aprobación o derogación legislativa, declarar la guerra y firmar la paz, decidir como última instancia jurisdiccional, nombrar cargos públicos e imponer tributos. Fioravanti, 1999, pp. 74 y 75.

¹⁸² Cit. en *ibid.*, pág. 86. La cursiva es propia.

¹⁸³ Bodin advertía ciertos límites para el gobernante: posee un cúmulo de prerrogativas sin compartir con otro mando, pero debe respetar un “derecho de los particulares”. Fioravanti, 1999, pp. 72-75.

¹⁸⁴ En este sentido, *vid.* la crítica de Glenn Burgess, de la University of Hull, publicada en *H-Net Reviews in the Humanities and Social Sciences* (<<http://www.h-net.org/reviews/showpdf.cgi?path=1218869065240>>), y realizada contra Mendle, señalando en sus pp. 2 y 3 que cae en el anacronismo quien pretende atribuir a Parker una teoría de la soberanía legislativa al modo moderno.

consentimiento popular¹⁸⁵. Por añadidura, habla de dos cámaras, no de una *indivisible* siquiera. Así que en su obra no se encontraba la noción de un Parlamento soberano en forma completa, es decir, con los rasgos citados (perpetuidad, originalidad e indivisibilidad), aunque sí tuviera un poder absoluto, es decir, durante el tiempo que disfrutaba de él, superior a todos los demás. Por ello resulta preferible referirse al Parlamento parkeriano como sujeto de la “supremacía” y no de la “soberanía” (en cualquier caso, ya no del monarca que se atreve a combatir a los representantes del pueblo). Esta última aún quedaba circunscrita a unos límites que sólo Hobbes luego desbordaría.

La argumentación política de Parker fue justo la empleada por el fiscal Cook en el proceso contra Carlos I:

por la *ley fundamental del reino, la general de las naciones* y el *unánime consentimiento universal de todos los hombres racionales, escritos sobre cada corazón humano* en letras capitales con el plumín de un diamante y de una manera tan legible que quien se preocupe de ello pueda leerla, cuando un ser humano tiene confiada la espada para la protección y *preservación del pueblo*, si la emplea a fin de destruirlo, habiendo sido en realidad puesta en su poder para seguridad del mismo, por la ley de la tierra viene a ser un enemigo del pueblo y merece el castigo más ejemplar y severo que pueda ser imaginado. Y esta es la *primera y necesaria ley fundamental de cualquier reino*, el cual debe *autopreservarse* con normas esenciales de gobierno.¹⁸⁶

I.1.6. El surgimiento del radicalismo puritano

I.1.6.1. Independientes frente a presbiterianos

La lucha frente a Carlos I fue dirigida por un Parlamento en donde la tendencia puritana resultaba hegemónica. En él estaban, por una parte los presbiterianos¹⁸⁷, y por otra, los “independientes”. Estos últimos eran contrarios a una iglesia estatal que

¹⁸⁵ *Observations upon some of his Majesty's late Answers and Expresses* (julio de 1642): “[t]oda la comunidad en su originaria majestad” (“*the whole community in its underived majesty*”), aunque “en virtud de la elección y representación, unos pocos actuarán en nombre de muchos” (“*by virtue of election and representation a few shall act for many*”). Cit. por Woodhouse, Arthur S.P.: *Puritanism and Liberty. Being the Army Debates (1647-49) from the Clarke Manuscripts*, London, J.M. Dent & Sons, 1986, pg. 78, nota 2, de la *Introduction*. Hago constar que las sucesivas ediciones de este libro no han variado paginación desde haberse publicado la obra inicialmente en 1938, tan sólo se han impreso distintos prefacios y añadido notas.

¹⁸⁶ De nuevo, pues, se alude a la *salus populi*. *State Trials*, iv, 1032, cit. por Gough, op.cit., pg. 97. Cfr. los párrafos 134 y 158 del *Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil* de John Locke, y recuérdese que el subtítulo de esta obra fue “*salus populi suprema lex esto*”.

¹⁸⁷ *Vid. supra*, pp. 33 y 34.

rigiese el culto y exigiera la obediencia religiosa de los ingleses a sus normas, siendo los congregacionalistas sus más directos antecesores. Partidarios de formar congregaciones autónomas, estableciendo reglamentación propia y sin control estatal, se oponían a un poder eclesiástico centralizado que pudiera imponer penas sobre los ingleses por incumplimiento de los deberes religiosos. Aún más radicales en su planteamiento y con mayor entusiasmo religioso fueron los “sectarios”, que no admitían siquiera una confesión estatal, aunque fuese bajo condición de tolerancia.

Además había un grupo de “erastianos”¹⁸⁸ en la asamblea. Su modelo era el de una iglesia subordinada al poder temporal. El presbiterianismo se alió con estos últimos, lo cual puede resultar sorprendente en un principio, pues basaba sus directrices en la formación de un clero con pretensiones teocráticas. Pero lo cierto es que ni los presbiterianos ingleses iban a seguir a Calvino tan estrictamente, ni tampoco el erastianismo resultaba defensor de la libertad de culto. A ambas facciones les unió su enfrentamiento con la prerrogativa episcopal y ser opuestos a unos independientes que producirían, a su entender, la “anarquía religiosa” propia de revueltas sociales. Que se aliaran presbiterianos y erastianismo implicaba conservar la mayoría parlamentaria frente a los independientes¹⁸⁹. Los erastianos sostenían el control estatal de la iglesia, lo cual en el instante de iniciarse la guerra civil *quería decir que los parlamentarios decidirían* sobre lo referente a privilegios del clero, ceremonias y disciplina, desarrollo del culto, cánones y financiación. Así, existía un entendimiento entre esta corriente, que ofrecía protección desde el Estado a una confesión que se erigía con *vocación nacional*, el presbiterianismo, y éste a cambio cedía en sus pretensiones “teocráticas”, concediendo la autoridad reguladora al Parlamento. El poder eclesiástico debía ser legitimado de forma estatal, pero no iba a dejar de existir. El programa ya era adelantado por la *Grand Remonstrance*: un sínodo nacional elevaría sus propuestas a los parlamentarios, a fin de establecer la regulación eclesiástica correspondiente.

Por su parte, independentismo y sectas viraban hacia la libertad religiosa tal y como hoy la conocemos, aunque la duda es hasta qué punto no lo hacían por simple estrategia, para garantizar el respeto a sus credos minoritarios. Así, mientras que se puede hablar de un modelo “democrático”, que partiría del autogobierno en las congregaciones, no debemos olvidar que la admisión en ellas dependía muy a

¹⁸⁸ El erastianismo fue atribuido a Erastus, escritor suizo (1523-1583). Cook, op.cit., pg. 192, “erastianismo”. Defendía que la excomunión era un poder atribuible sólo al Estado. La consecuencia extraída por muchos de sus seguidores fue la de sostener que todo el poderío sobre asuntos eclesiásticos correspondiese al gobierno secular. El terreno para la hipótesis política hobbesiana en lo relativo a este punto, quedaba así abonado, mediando John Selden (1584-1654), autor de *De iure naturali et gentium iuxta disciplinam ebraeorum*. Vid. respecto al erastianismo de este último, Sabine, op.cit., pp. 331 y 332.

¹⁸⁹ Woodhouse, op.cit., pg. 15 de la *Introduction* (Ivan Roots).

menudo de quienes ya las conformaban, por lo que al contenido emancipador del primer mensaje se oponía correlativamente la idea del gobierno de los “Santos”, únicos elegidos que podían gobernar. La tendencia democrática dio sus mejores frutos con los *levellers*, la puritana fuertemente imbuida de religiosidad originaría el milenarismo de la pronta venida de ese “Reino de Dios” cuyos representantes más encumbrados fueron los portavoces de la llamada “Quinta Monarquía”, en el período cromwelliano¹⁹⁰.

Sea como fuere, la posición religiosa de los independientes forjó una alianza con el *New Model Army*, cuyos líderes principales, como el propio Cromwell, se identificaban con sus posiciones, y condujo, tras barrer a los presbiterianos, al proceso contra Carlos I. El puritanismo radical no veía con buenos ojos que asunto de tanta importancia como la religión fuera regulado por un gobierno. En todo caso, y aunque las filas del puritanismo hicieron frente común contra el sistema de la prelatura real, tal y como demostró el 13 de febrero de 1642 la aprobación de la *Clerical Disabilities Act*, con la cual los obispos son privados de sus votos entre los Lores¹⁹¹, el conflicto entre independientes y presbiterianos se prolongó con todas sus importantes consecuencias.

I.1.6.2. La construcción del *New Model Army* como contrapoder de los puritanos radicales

A partir de la persecución monárquica contra Pym y los demás líderes parlamentarios, los hechos se suceden con inusitada rapidez. Los Comunes declaran el reino en “peligro”, poco después se retira a Carlos I el mando de la fuerza armada mediante la *Militia Ordinance*¹⁹² y éste responde convocando a los nobles para constituir su guardia personal. A continuación el Parlamento intenta diversas negociaciones con el Rey, pero resultan infructuosas. El día 22 de agosto de 1642, Carlos I declara la guerra a los “rebeldes”.

Inglaterra se vio entonces dividida por un conflicto civil de grandes proporciones. En algunos lugares, como el extremo norte y suroeste, Gales y los condados fronterizos, los realistas controlaban esas zonas. Sin embargo, en otros sitios, multitudes hostiles a Carlos se apoderaron de varios polvorines. Este movimiento popular permitió a los parlamentarios reunir fuerzas y enfrentarse al

¹⁹⁰ Tuvieron la hegemonía en el Parlamento “*Barebones*”, o “de los meros huesos”, que duró sólo desde el 4 de julio hasta el 12 de diciembre de 1653. De sus más destacados miembros fue Thomas Harrison (1606-1660), uno de los “regicidas” ejecutado luego con la Restauración de 1660.

¹⁹¹ Plant, David: “Time Lines - Detailed Outlines” (“Cronología detallada”, <<http://www.british-civil-wars.co.uk/timelines/index.htm>>) en *British Civil Wars, Commonwealth and Protectorate (1638-1660)*, web <<http://www.british-civil-wars.co.uk/>>.

¹⁹² El 5 de marzo (Plant, *ibid.*).

enemigo¹⁹³. Al mismo tiempo, la maniobra monárquica de recurrir a los terratenientes o *landlords* a fin de disponer de sus subalternos y *tenants* siguiendo la estructura piramidal y así componer la tropa, resultó en gran parte fallida, ya que medidas como las *enclosures* o el acoso económico a los enfitetutas y arrendatarios condujeron en amplias zonas rurales a seguir la oposición parlamentaria. El respeto y la lealtad a los “superiores” se había quebrado, a pesar de las presiones que podían ejercer aún amenazando con la expulsión de sus propiedades, eliminando de los jurados a pequeños campesinos independientes y emprendiendo acciones de cuño similar.

Asimismo, cabe hacer una mención destacada de la actitud en ciudades diversas. Londres, y otras como Coventry y Birmingham, con todo su tejido industrial, se mostraron en contra del monarca en forma muy activa. De ellas salieron numerosos voluntarios, prestos a la guerra y espoleados por el miedo a los *cavaliers* realistas¹⁹⁴. Aprendices, artesanos, comerciantes, aguadores... todo un sector social que Manning ha calificado como “*the middle sort of people*”¹⁹⁵, y que guardaba posiciones correlativas a la del campesino de modesta condición, estaba dispuesto a luchar contra las pretensiones monárquicas y el mantenimiento de grupos privilegiados.

En este contexto podemos hablar asimismo de una cierta división entre quienes apoyaban al bando parlamentario. Una buena parte de la *gentry*, aun habiendo comenzado la guerra, intentó alcanzar acuerdos con el Rey por intermediación de la mayoría presbiteriana. Otro sector en ascenso, menos enriquecido, o más impaciente quizá, apoyado en una amplia base social empobrecida, en situación precaria o cuyas expectativas eran frustradas por la concesión de privilegios monopolísticos, estaba persiguiendo reformas mucho más radicales. No apoyaba una paz que condujera al estado de cosas anterior.

El conflicto asomó bajo la presencia de dos modelos de organización militar. El presbiterianismo pensó, amparado en la dirección castrense de Lores como Essex, Manchester o Warwick, que un ejército jerarquizado por nobles dedicados a guerrear y auxiliado por mercenarios escoceses¹⁹⁶ era superior a cualquier otro. Pero cuando líderes como Cromwell izaron sus banderas, tal creencia quedó derruida.

¹⁹³ Manning, op.cit., pp. 184 y 185, y pg. 198.

¹⁹⁴ Aristócratas monárquicos. Vid. Cook, op. cit., pg. 93 (y nótese que “*cavalier*” significa tanto “caballero”, como “arrogante”, vid. Webster Dictionary, pg. 356). Llamaban a sus adversarios puritanos “*roundheads*” (“cabezas redondas”) a causa de su costumbre de llevar corto el cabello, al contrario de la moda nobiliaria (Manning, op. cit., pp. 89 y 90, y Webster Dictionary, op. cit., pg. 1980).

¹⁹⁵ “A principios del siglo a principios del siglo diecisiete el electorado se había expandido y en el momento de las elecciones al Parlamento Largo incluía no sólo a la *gentry* y a los ricos mercaderes, sino también a los *yeomen* y campesinos más pobres de los condados y a los comerciantes y artesanos y algunos de los pobres en muchas ciudades. Para la *gentry* era menos fácil controlar esta incrementada población electora, y más para ella el ser capaz de sostener sus propias opiniones”. Manning, op.cit., pp. 13 y 14.

¹⁹⁶ Bajo el impulso de la *Assembly of Divines* inglesa, que inició reformas a fin de acercar la iglesia anglicana al presbiterio escocés el 1 de julio de 1643, a finales de ese año Inglaterra y Escocia firmaron

El embrión del “Nuevo Ejército Modelo” surgió en las primeras jornadas del enfrentamiento que nos ocupa. Oliver Cromwell había reclutado a un buen número de voluntarios entre gentes humildes y poco habituadas al combate, pero repletas de un entusiasmo que le hizo afirmar su preferencia por tales hombres, conscientes del valor de su lucha y poco respetuosos por ello ante los títulos nobiliarios que no aseguraban el coraje¹⁹⁷. Resulta indiscutible aquella base social del *New Model Army*, su origen “plebeyo”, con ascensos entre la tropa, basados más en consideraciones sobre méritos que en la distinción clasista. De hecho, al aprobar el Parlamento la *Self-Denying Ordinance* (“Ordenanza Autodenegatoria”) el 3 de abril de 1645, los Lores quedaron definitivamente fuera del mando¹⁹⁸. Mediante esta norma ningún miembro de las Cámaras podía ya tener dirección personal y directa en el *New Model Army*, que por otra parte se había constituido en forma definitiva el 15 de febrero, al unificarse bajo el mando de Sir Thomas Fairfax los tres ejércitos que hasta entonces combatían contra el Rey¹⁹⁹. Tales sucesos conducirían al aplazamiento de la intensa lucha entre independientes y presbiterianos, pero no a su erradicación.

Así, entre las filas del *New Model Army* la agitación religiosa y política chocaba con los intereses de cualquier culto “oficial”. Predicadores de muy diferentes sectas contribuían a erigir, por su actitud a lo largo y ancho de todo el país en general, y especialmente por su actividad agitadora en el Ejército, una sensación de amenaza intensa contra los miembros más conservadores de las Cámaras. A su vez, la *Scottish Convention of States*, ligada a los presbiterianos por razones de afinidad ya expuestas, exigió el 1 de noviembre de 1644 que fueran implantadas reformas que suprimiesen las sectas. El avance del *New Model* había originado que en su seno comenzara a defenderse una tolerancia de cultos, bajo la “libertad de conciencia”.

Y sin embargo, conviene puntualizar que tal apología llegaba de la mano del “antipapismo”, de una teoría de la “conspiración” que se remontaba al *Gunpowder Plot* católico de 1605. En el sermón pronunciado por Stephen Marshall el 18 de enero de

el *Solemn League and Covenant*, alianza contra el Rey y para preservar la organización eclesiástica escocesa e introducir los cambios pertinentes en la del otro país e Irlanda. El país norteño, sin embargo, llegó a establecer negociaciones secretas con el monarca en algún momento, lo cual indica hasta que punto perseguía sus propios intereses, viniendo a ser otro partido en la guerra.

¹⁹⁷ Fueron llamados “*ironsides*” (costillas de hierro). Al principio este apodo se atribuyó sólo a la nueva caballería cromwelliana, pero después se aplicó a las tropas del *New Model Army* en general. Vid. el término en el *Webster's Dictionary*, pg. 1195.

¹⁹⁸ Plant, *op. cit.*

¹⁹⁹ Hill, 1961, pg. 129. La dificultad para la aprobación de aquella ley se produjo sobre todo en la Cámara Alta, pero muchos también pusieron obstáculos entre los Comunes. La mayoría de los parlamentarios, aun por escueto margen, optó por aceptar el *New Model Army*, en gran parte debido a las dificultades financieras de pago a la tropa, que se pensó podrían desplazarse dando mayor peso a los voluntarios, menos reacios a que se retrasara su soldada. Al mismo tiempo, los escoceses, aliados ocasionales del Parlamento, habían sido derrotados de forma clara en combates recientes, con lo cual la confianza en su apoyo militar se redujo. Eso sí, la solución pasó por conceder el mando del *New Model* a Fairfax, en vez de a Cromwell, si bien éste obtuvo el cargo de comandante de caballería, lo cual era como decir capitán de un importante grupo de los voluntarios, pues tal condición no era tan común entre las tropas de a pie.

1644 ante parlamentarios y *Common Council* (Ayuntamiento) londinense, los combatientes de la *godly war* ya no tenían como objetivo “salvar” al Rey de sus pérfidos consejeros, sino que la facción enemiga ahora representaba para las tropas el Anticristo, la facción de Satán²⁰⁰. Y cualquiera que deseara pactar con él resultaba sospechoso de traicionar tanto a Inglaterra como a los auténticos fieles puritanos. Tal era la reacción de un amplio sector social que se veía cercado por varios frentes, incluido el de los “quintacolumnistas” que pretendían pactar con Carlos I. Su perspectiva no era del todo errónea y alcanzaba a vislumbrar la concertación secreta que pronto surgió entre el monarca y la Corona francesa, los preladados irlandeses y la *Scottish Convention*, todos ellos aliados potenciales para derrotar al Parlamento.

La espiral de desconfianza condujo a que parlamentarios afines al presbiterianismo propusieran en febrero de 1647 la disolución parcial del *New Model Army*, enviando algunos regimientos a luchar contra los insurrectos irlandeses. Tras una situación momentánea en la cual se había acordado la paz, el marqués de Ormond, su principal garante, fue sustituido por el nuncio papal Cardenal Rinuccini, que reanudó las hostilidades contra Inglaterra.

En esa precisa coyuntura, los conservadores del Parlamento no requerían ya los servicios antes tan demandados. El Rey se encontraba bajo custodia de las autoridades provisionalmente vencedoras, que por medio de sus portavoces entonces más poderosos preparaban un acuerdo con él²⁰¹, y Escocia había quedado satisfecha con el pago en metálico de su apoyo militar.

Pero estas nuevas pretensiones se encontraron con una fuerte oposición, por un lado de signo corporativo, y por otro, netamente política e ideológica. Con aquellos sucesivos combates librados durante un extenso período, las tropas habían entablado batalla para defender al Parlamento contra un enemigo específico, y no preveían la lucha contra los irlandeses levantiscos. Aunque muchos estuviesen dispuestos a acometerla, únicamente aceptaban su nuevo destino en caso de que sus viejos camaradas fuesen los mismos y también los oficiales al mando²⁰². A ello podemos añadirle el montante que se debía a las tropas. Pero al margen de estas reivindicaciones corporativas, existía la sensación de que repentinamente los cambios deseados - económicos, sociales, políticos, religiosos - no se iban a producir y que antiguas jerarquías recobraban su poder anterior. El grupo social situado a la izquierda del presbiterianismo, de hecho, quería derrumbar los últimos privilegios. Y los

²⁰⁰ Manning, *op. cit.*, pp. 275-76.

²⁰¹ El 26 de enero, comisionados parlamentarios llegan a Newcastle para hacerse cargo de Carlos I (Plant, *op. cit.*). La propuesta de las Cámaras fue reunida en las llamadas *Newcastle Propositions*.

²⁰² Woolrych, Austin: “The Debates from the Perspective of the Army”, en Mendle, Michael (ed.): *The Putney Debates of 1647. The Army, the Levellers and the English State*, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, pg. 55.

soldados temían las represalias contra su actuación en la guerra de una Corona restablecida, asunto que haría surgir el debate sobre la “inmunidad”, que luego analizaré.

De esta forma, a finales de marzo de 1647 circula por los cuarteles una petición reivindicativa oponiéndose a la disolución siquiera parcial del *New Model Army* y exigiendo garantías contra posibles tribunales de posguerra. Sus promotores fueron advertidos por el Parlamento de que se les consideraría “enemigos del estado y alteradores de la paz pública”²⁰³. Pero a mediados de abril, soldados de ocho regimientos pertenecientes a la caballería eligen representantes para expresar sus demandas, llamados *adjutators*, *agents* o *agitators* (agitadores). El ejemplo de estos hombres muy combativos y de alta consciencia fue seguido de inmediato por otros pertenecientes a la infantería, en mayo²⁰⁴. A primeros de junio²⁰⁵, el corneta George Joyce traslada la persona del rey al cuartel general de Newmarket²⁰⁶, reuniéndose los regimientos del *New Model* los días 4 y 5 y aprobando el *Solemn Engagement of the Army*²⁰⁷, que insistía en la inmunidad ante posibles represalias por la participación en la guerra de sus soldados y oficiales y el cobro de los atrasos debidos²⁰⁸, rechazando romper filas hasta que no fueran satisfechas sus peticiones. Tal oposición era contraria a lo que el Parlamento había exigido, y además, para mayor escándalo de éste, el *Engagement* fundó un *General Council of the Army*, compuesto de dos oficiales y dos soldados por regimiento. Nueve días después fue publicada una *Representation of the Army*²⁰⁹, en la cual se afirmaba que el *New Model* defendía no sólo sus demandas propias, sino también los “*derechos y libertades fundamentales*”, correspondientes al pueblo, ya que no era “*un simple ejército mercenario*”²¹⁰. Exigía también la purga de los Comunes corruptos (el Ejército ya había denunciado a once de ellos), así como *limitar la duración de los Parlamentos* y proceder a la reasignación de electores en cada distrito²¹¹. El pulso entre *New Model* y Parlamento comenzaba siendo reflejo del de independientes contra presbiterianos. Y traía fundamento ideológico, no sólo de la herencia puritana congregacionalista, sino también de un

²⁰³ *Ibid.*, pg. 57.

²⁰⁴ *Ibid.*, pg. 58.

²⁰⁵ El 4 (Plant, *op. cit.*).

²⁰⁶ Es suceso célebre que el Rey le preguntó dónde estaba la orden escrita de su general. Joyce respondió, señalando a sus quinientos jinetes: “*here is my commission*”. Reseñado por Woolrych, Austin, 1987, *Soldiers and Statesmen. The General Council of the Army and its Debates, 1647-1648*, Oxford, Oxford University Press, pp. 111 y 112.

²⁰⁷ “Solemn Compromiso del Ejército”. Probablemente elaborado por Ireton, cuñado de Cromwell (Woolrych, en Mendle (ed.), *op. cit.*, pg. 59).

²⁰⁸ Un extracto adecuado del documento se halla en Woodhouse, 1986, pp. 401-03 del *Appendix*.

²⁰⁹ El 14 de junio de 1647. Woodhouse, *op. cit.*, pg. 403.

²¹⁰ “*Fundamental rights and liberties...*”: cit. en *ibid.*, pg. 404.

²¹¹ *Ibid.*, pp. 405 y 407.

republicanismo cívico²¹² que había llegado, sobre todo a través de autores renacentistas, nada menos que desde la antigua Roma. El humanismo de este carácter era muy influyente en la Inglaterra de la época, y como ya ha señalado Glover, la escuela secundaria era un buen receptáculo para los autores griegos y latinos. Sus textos contaban con traducciones al inglés desde la segunda mitad del siglo XVI²¹³. Y es que aquellas ideas de milicia ciudadana y limitación de mandatos eran típicos de tal impronta. Maquiavelo había dicho que utilizar mercenarios para la defensa de la república no resulta inteligente, pues sólo pelearían por la paga, sin ofrecer la misma resistencia que unos ciudadanos defensores de su propia libertad política²¹⁴. Una hipótesis extraída del propio autor latino a quien comentaba en las *Décadas*²¹⁵, que coincidía a su vez con la descripción histórica realiza Tácito en el Libro I de sus *Anales* (16-30 y 31-52), o Plutarco en el *Coriolano* de sus *Vidas Paralelas* (V). También el florentino se había referido a la situación en que los magistrados de la república, espoleados por mandatos extensos, habían originado la servidumbre de los ciudadanos²¹⁶.

En este contexto, y justo inmediatamente después de que el *New Model Army* presente la citada *Representation of the Army*, surgirá otra agrupación a la “izquierda” de los independientes. Sus principales activistas imprimían panfletos con inusitado vigor. Serían llamados “*levellers*” (“niveladores”), debido a su defensa de la ampliación del sufragio y su ataque a los privilegios.

²¹² Utilizo la expresión que desarrolla en todos sus aspectos Honohan, Iseult: *Civic Republicanism*, London, Routledge, 2002. Sirve para definir un tipo de comportamiento ciudadano comprometido con la participación política y la comunidad en la que vive, de manera más acentuada que en el modelo liberal.

²¹³ Glover, Samuel Denis: “The Putney Debates: Popular versus Élitist Republicanism”, *Past & Present* n. 164, Oxford, Past & Present Society, ag. 1999, pp. 53 y 54. El académico menciona la traducción de los discursos escritos por Demóstenes en 1570.

²¹⁴ Skinner, 1978a, pg. 189.

²¹⁵ Tito Livio (59 a. C. al 17 d.C.). Y que se refería a su oposición a combatir contra el enemigo si los cónsules y senadores no les daban garantías de aquéllas (*Historia de Roma desde su Fundación*, Libro II, 28, 6-7, conocida también como *Décadas*).

²¹⁶ Así, los “dictadores” eran magistrados que en situaciones de emergencia poseían poderes extraordinarios para dirigir la comunidad. Mas si una concesión otorgada para ello se extendía demasiado, la servidumbre de los ciudadanos comenzaba. También menciona el florentino que en cierto instante los romanos habían confiado a los decemvros la legislación, pero que estos diez hombres se habían vuelto déspotas por no sufrir límites su facultad. En consecuencia, y apoyándose en estos ejemplos históricos también tomados de autores latinos, Maquiavelo propugnaba que una república nunca cediera poder a sus gobernantes, salvo en ciertas condiciones y por un tiempo delimitado. Vid. Skinner, 1978a, pp. 205 y 191 y 192. Los Cuatrocientos Tiranos de Atenas cuya existencia es citada por Tucídides en la *Guerra del Peloponeso* era otro ejemplo clásico de la corrupción del poder y su tendencia a instalar la servidumbre entre los pueblos cuando carece de cortapisas.

I.2. Las reivindicaciones niveladoras

I.2.1. El panfleto por la libertad de conciencia como origen del movimiento

El primer líder *leveller* fue John Lilburne. Probablemente nacido en 1615, trabajó como aprendiz en Londres desde 1630²¹⁷. Sus lecturas, aun diversas, estaban fuertemente influidas por el puritanismo contemporáneo; habiendo leído a Coke, fueron Calvino, Beza, Raleigh²¹⁸ o Foxe²¹⁹ otros de sus autores predilectos. También conocía perfectamente, como otros tantos *levellers*, el *Book of Declarations*²²⁰. Sin embargo, no perteneció a una confesión concreta hasta el final de su vida, cuando se convirtió al cuaquerismo. Su trayectoria podría haber sido la de cualquier simpatizante del alud parlamentario y más en concreto de los congregacionalistas. La distinción surge de un ejemplo vital y una actividad política intensa, sin embargo, iniciados al conocer en 1637 a John Bastwick, ya famoso por su oposición a la Corona²²¹. Lilburne viaja a las Provincias Unidas y allí publica la *Letany* de su mentor, haciendo que lleguen miles de copias a Inglaterra. Pero siendo finalmente delatado y detenido a su regreso, la *Star Chamber* le juzga y condena a ser azotado públicamente. Entonces la actitud del “*honest John*”, como luego se le conocería, fue de abierto desafío al tribunal, ganándose el aprecio de la multitud durante aquel suplicio, instante en el cual demostró inmenso coraje. En *A Cristian Mans Triall*, escrito en marzo de 1638, recuerda que rechazó el *juramento*²²² exigido por el representante de la Corona, diciendo: “si al interrogarme no expone los cargos que existen contra mí, no voy a responder a pregunta alguna”; y “si lo hace, puedo en mi justa defensa no contestar al interrogatorio, *de acuerdo con la Ley de Dios y pienso que también con la del País*”.²²³ No hay duda, pues, de que se trataba de un líder apasionado e imbuido de los ejemplos que creía advertir en el propio Jesucristo o en los narrados por Foxe,

²¹⁷ Los que no eran primogénitos, se veían avocados en aquel período, aunque provinieran de familias de cierta solvencia económica, a colocarse como aprendices. También muchos, cuando sobrevino la guerra civil, acudieron para convertirse en combatientes, en ambos partidos.

²¹⁸ Walter Raleigh, nacido en 1552 y fallecido en 1618. Autor de una *History of the World* escrita en clave puritana y prohibida cuando iba a publicarse en 1614. Fue famoso aventurero y explorador en América. Murió ejecutado, al regreso de un viaje a la Guayana, bajo el cetro de Jacobo I.

²¹⁹ John Foxe (1516-1587) publicó el *Book of Martyrs*, dedicado a quienes murieron a manos de la reina María Tudor, que intentó un regreso al catolicismo entre 1553 y 1558.

²²⁰ Compilación de las declaraciones parlamentarias.

²²¹ En 1637, William Prynne, Henry Burton y John Bastwick fueron condenados por la jurisdicción real, sufriendo mutilación, multa y prisión perpetua (Hill, *op. cit.*, pg. 23). Habían criticado muy severamente a la Corona, haciendo hincapié en la crítica contra el episcopalismo. El Parlamento Largo, tras iniciar sus reuniones el 3 de noviembre de 1640, liberó a los tres el día 28 (Manning, *op.cit.*, pg. 14).

²²² Evidentemente, en la época, con un significado mucho más rotundo que ahora. Vid. Levy, Leonard W.: *Constitutional Opinions. Aspects of the Bill of Rights*, New York, Oxford University Press, 1986, pp. 15-17.

²²³ Cit. por Frank, Joseph: *The Levellers. A History of the Writings of Three Seventeenth-Century Social Democrats: John Lilburne, Richard Overton, William Walwyn*, New York, Russell & Russell, 1969; pg. 17. Subrayado propio.

recogiendo además la tradición del *common law* para sostener sus convicciones²²⁴. Su lucha sin término, que le condujo al principio contra los presbiterianos (tras servir en el *New Model*), pero también contra el Rey y la Cámara señorial, para luego enfrentarse al Parlamento Largo y después a Cromwell, le acarreó continuos procesos y pasar la mayor parte de su vida en prisión²²⁵. Precisamente, pues, el movimiento *leveller* liderado por Lilburne tomó desde el principio como bandera la de la tolerancia religiosa, elemento de referencia que aglutinó alrededor diversas personalidades para forjar un frente común, aun teniendo en cuenta que en aquella época no había partidos políticos propiamente dichos.

En este nuestro caso, quienes se unieron a Lilburne se llamaban William Walwyn²²⁶, Richard Overton²²⁷ y William Wildman²²⁸, todos ellos procedentes de la *middle sort of people*. El análisis de los panfletos que se les atribuyen demuestra una conjunción en torno a la libertad religiosa, aun con diferencias de matiz. Así, Walwyn era afín al independentismo, pero con un cariz antinomianista, es decir, apoyaba la idea de que, como las obras no están relacionadas con la fe, y sólo ésta puede dar la salvación, el valor de la prédica, los rituales, ceremonias y sanciones canónicas es nulo. Por tanto, Walwyn propugnaba la separación de Iglesia y Estado de manera más sólida que los independientes, e incluso abogó por la tolerancia de los “papistas”, siempre que la autoridad reconocida al Pontífice por ellos fuera sólo espiritual²²⁹.

Por su parte, Richard Overton parecía cercano al deísmo, al defender que el hombre era un “animal superior extremadamente lejano” de “Dios”. En abril de 1645 publicó, bajo el seudónimo de “Martin Mar-Priest” una aguda sátira, *The Aaignement of Mr. Prosecution*, en la cual muestra que la persecución es un círculo vicioso, pues los protestantes “odian y persiguen a los papistas porque los papistas les odian y persiguen a su vez”²³⁰. La única escapatoria de tal situación es una completa libertad religiosa, que el autor extiende explícitamente no ya sólo a las religiones monoteístas, islam inclusive, sino también al paganismo. Además, Overton señala que el pueblo ha confiado su gobierno para proteger las libertades, y que por tanto es traición sujetar a las jurisdicciones eclesiásticas sus conciencias, personas o propiedades.

²²⁴ Levy, *op. cit.*, pg. 14.

²²⁵ Vid. *id.*

²²⁶ Nacido en 1600, y también aprendiz en su juventud, fue comerciante de tejidos. Frank, *op. cit.*, pg. 29.

²²⁷ El origen y fecha de nacimiento son oscuros, si bien se sabe que en 1615 estaba en Holanda como miembro de una secta religiosa en el exilio, completando allí su formación; en cualquier caso, hacia 1641 vive en Inglaterra, donde trabaja como editor sin licencia de las autoridades (Frank, *op. cit.*, pp. 39 y 40); recordemos el riesgo que conllevaba tal actividad, debido a la censura del momento, y a la existencia de monopolios para la edición.

²²⁸ Parece ser que estudió leyes y posiblemente fue pasante. Provenía de una familia no perteneciente a la nobleza ni a la *gentry* (*ibid.*, pg. 122).

²²⁹ Así, en *The Humble Petition of the Brownists*, publicada en noviembre de 1641 (Frank, *op. cit.*, pg. 33).

²³⁰ *Ibid.*, pg. 48.

En lo relativo a John Wildman, su papel fue de gran importancia en los Debates de Putney²³¹, como tendremos ocasión de comprobar, siendo autor del *The Case of the Army Truly Stated*²³² y de numerosos panfletos, si bien su actividad próxima a los *levellers* desaparece tras la ejecución de Carlos I. De sus discursos y obra se desprende un gran conocimiento de clásicos republicanos como Polibio, Cicerón o Maquiavelo, y por tanto, una visión laicista alejada de fervores religiosos o polémicas doctrinales, que le haría decir:

Lo relativo a la religión o al culto sacro no es algo verificable [...] No se puede fácilmente determinar a la luz de la naturaleza lo que es pecado [...] No es fácil afirmar con la luz natural que hay un Dios [...] Asimismo, si un hombre considera que existe una voluntad de la Causa Suprema, es difícil concebir con la luz natural cómo es posible el pecado. Y así, el magistrado no puede establecer fácilmente que pecados son contra la luz de la naturaleza, y cuáles no [...] porque el magistrado debe ser estimado como con la capacidad de equivocarse tanto como las personas a las cuales reprime, y resultando más probable que yerre en exceso que quienes no tienen poder en sus manos, es mayor la posibilidad de que destruya lo bueno que de impedir lo maligno.²³³

Todos los niveladores, pues, el cualquier caso, se caracterizaron por defender la libertad religiosa. Y como prolongación de ella, “los derechos y libertades” inglesas, frente a las ambiciones del Parlamento o Carlos I, pidiendo asimismo la abolición de privilegios eclesiásticos y de los Lores. Estas aspiraciones les impulsaron a construir un modelo político y jurídico que sería expresado en los *Agreements*, de 1647 a 1649. Fueron escritores políticos hábiles, con capacidad publicista al margen de toda duda²³⁴ y apoyada en un criterio de que la propagación impresa de sus consignas, argumentos y reivindicaciones cumplía cierta labor pedagógica entre el pueblo²³⁵.

²³¹ Debates que se celebraron entre finales de octubre y principios de noviembre en la iglesia de Putney, entre *levellers*, agitadores y jefes del Ejército.

²³² “El Caso del Ejército, establecido con veracidad”.

²³³ Woodhouse, *op. cit.*, pg. 161 (Debates de Putney).

²³⁴ E incluso literaria. Así, Joseph Frank destaca (*op. cit.*, pp. 86-87), por ejemplo, que en “*A Defiance Against all Arbitrary Usurpations*”, escrito en agosto de 1646 por Overton, este *leveller* combina “el marcado humor de un Dickens, la intriga de una buena historia detectivesca, la indignación de Lilburne, y la perspicacia de Walwyn; como muchas obras en prosa de Milton, aunque en un estilo menos exaltado, *A Defiance* es una obra de arte”.

²³⁵ Tal posibilidad era sin duda real, ya que, como he señalado anteriormente, la educación gozaba desde hacía décadas de una amplitud desconocida en otros países. *Vid.* pg. 38 y 39, *supra*.

I.2.2. Los derechos innatos de los ingleses: reinterpretando la tradición

I.2.2.1. El “Yugo normando”

Pero, resultando reunidos un grupo de personas afines a la libertad religiosa, falta por saber cómo se vieron enseguida impulsados a formar una plataforma política más amplia y ambiciosa. Los acontecimientos que se precipitaron contribuyeron a tal objetivo.

En el otoño de 1644, William Prynne (1600-1669)²³⁶, figura con gran autoridad entre las filas de la causa parlamentaria, había pasado de sus críticas contra los obispos al ataque contra independientes y sectarios, publicando a principios del año siguiente *Truth Triumphant over Falsehood, Antiquity over Novelty*. Fue replicado por John Lilburne, con *A Copie of a Letter*, en la que se oponía a los diezmos y afirmaba: “el perseguir por razones de conciencia no proviene de Dios, sino del Diablo y el Anticristo”²³⁷. Entonces Prynne intenta que los parlamentarios le amordacen, pero cierta opinión ya estaba fraguándose, y William Walwyn va a confluir con la crítica de Lilburne, escribiendo *A Helpe to the right understanding of a Discourse concerning Independency*: el Estado puede instituir una iglesia oficial, pero sólo si los disidentes gozan de completa tolerancia²³⁸.

La amenaza de Prynne es retomada a su vez por Bastwick, autor a quien, recordemos, Lilburne había publicado clandestinamente en las Provincias Unidas. Acusó ante el Parlamento²³⁹ a su antiguo simpatizante de calumniar al *speaker* Lenthall (habría propalado el rumor de su envío por valor de 60.000 libras al enemigo), y el “*honest John*” es citado el 24 de julio de 1645 ante el Comité de Interrogatorios (*Committee of Examinations*) de los Comunes. Allí, rehusó contestar a pregunta alguna hasta no saber de qué se le acusaba, y ante la insistencia, replicó:

Soy un hombre libre, sí, un nacido libre habitante de Inglaterra, y me he encontrado en campaña espada en mano, a fin de aventurar mi sangre y existencia (contra los tiranos) para la preservación de lo que es mi libertad por derecho, y desconozco haber realizado conducta alguna en vida que me haya privado de esa libertad, y en virtud de que soy un *hombre libre* (concibo que) en verdad poseo un derecho a todos los privilegios que me pertenecen como tal, *de la misma forma que el más grande de Inglaterra*, quienquiera que fuese, Lord o Común, y

²³⁶ Vid. pg. 64, nota 221, *supra*.

²³⁷ “*To persecute for conscience is not from God, but of and from the Divell and the Antichrist*” (cit. por Frank, op.cit., pg. 46).

²³⁸ Frank, op.cit., pg. 47.

²³⁹ No olvidemos que este órgano se entendía que era un tribunal.

situó el fundamento de mi libertad en la Carta Magna [...] Señor, los privilegios contenidos en ella son mi *derecho de nacimiento y herencia adquirida*.²⁴⁰

Y sólo unos meses más tarde, en *The Copy of a Letter*, dice:

percibo la Cámara de los Comunes como el supremo poder de Inglaterra, que ha recibido el mismo de una facultad *inherente* al pueblo, y que no puede legislar de acuerdo con sus propios deseos y a placer, sino en concordancia con las *Constituciones fundamentales y Costumbres de la Tierra, proveyendo para la seguridad y preservación del Pueblo*.²⁴¹

Por tanto, la posición de Lilburne es clara: *derechos y libertades* no pueden ser vulnerados, ni siquiera por quien detenta el poder supremo²⁴².

Lilburne pasó a quedar preso en Newgate. Entre dos y tres mil personas, reunidas por Walwyn con toda probabilidad²⁴³, firmaron de una petición presentada el 26 de agosto de 1645 para que fuera liberado, utilizando precisamente así un derecho tradicional en Inglaterra²⁴⁴. El apego a unos derechos y libertades de carácter tradicional, nos conduce de inmediato a preguntarnos sobre el pasado histórico que defendían los *levellers*. Como todo programa político, el nivelador debía ampararse en cierta interpretación histórica de las instituciones establecidas y su origen. “La historia de nuestros antepasados desde que fueron reducidos por los Normandos, evidencia

²⁴⁰ “*I am a free man yea, a free borne Denizen of England, and I have been in the field with my sword in my hand, to adventure my life and my blood (against Tyrants) for the preservation of my just freedome, and I doe not know that I ever did an Act in all my life that disenfranchised me of my freedome, and by virtue of my being a free man (I conceive) I have as true a right to all the priviledges that do belong to a free man as the greates man in England whatsoever he be, whether Lord or Commoner, and the foundation of my freedome I build upon the grand Charter of England [...] Sir, the priviledges contained herein are my Birthright and inheritance*” (*Innocency and Truth Justified*, escrito en diciembre de 1645 y publicado en enero de 1646; cit. por Frank, *op. cit.*, pg. 57). **Las erratas aparentes se encuentran así en el texto original, tal y como ocurre en otros reproducidos en este trabajo; se trata del inglés escrito de la época.**

²⁴¹ “*For my part, I look upon the House of Commons as the supream Power of england, who have residing in them that power that is inherent in the people, who yet are not to act according to their own wills and pleasure, but according to the fundamentall Constitutions and Customes of the Land, which I conceive provides for the safety and preservation of the People*”. Frank, *op. cit.*, pg. 57; el panfleto es de junio de 1646. Cfr. lo expuesto sobre la teoría de Henry Parker, pp. 54-56, *supra*. Las mayúsculas (aquí, cursivas) de Lilburne son significativas.

²⁴² Lilburne menciona sólo a los Comunes, por entender que los Lores estaban vulnerando las antiguas costumbres y leyes del Reino, al atraer para sí y desde 1621 funciones como tribunal de primera instancia (sobre el dato concreto, Maitland, 1963, pp. 245-46) y en varios supuestos, al comienzo de la guerra civil, haber enjuiciado a personas de origen no aristocrático. Tal conducta infringía la Gran Carta que especificaba el derecho a ser juzgado por los propios pares.

²⁴³ Frank, *op. cit.*, pg. 60.

²⁴⁴ Cosa que finalmente sucede el 14 de octubre. Pero mientras, la actividad agitadora no ha disminuido: el día 10, el líder *leveller* publica *Englands Birth-Right Justified*, donde ataca a los prelados, monopolios, diezmos, así como al *Solemn League and Covenant*. También en esas páginas critica lo abtruso de una ley que sólo conocen los juristas y que a menudo ni siquiera se halla en inglés. Al día siguiente de esta publicación, aparece *Englands Lamentable Slaverie*, donde Walwyn defiende a Lilburne, aun advirtiendo algunas diferencias en torno a la libertad religiosa (él pretende un mayor grado de la misma).

que esta *nación* ha permanecido sujeta a esclavitud”²⁴⁵. Así se expresaba la *Remonstrance of Many Thousand Citizens* (“Protesta de Miles de Ciudadanos”) publicada el 7 de julio de 1646 por Richard Overton. Los derechos y libertades inglesas, es decir, *nacionales*, habían sido arrinconados por Guillermo el Conquistador, quien a su vez había repartido cargos, tierras y privilegios entre sus nobles, cuyos descendientes eran aquellos con título de *Lord*, unos “pilllos y ladrones”, según Lilburne, que habían sido privilegiados para “ayudarle a esclavizar y someter a *vasallaje* al pueblo”²⁴⁶. Adviértase, pues, que existe un rechazo del sistema feudal, dadas las características peyorativas de la imputación, y que entonces *hay que remontarse mucho más atrás en el tiempo*. Así, como en tantas ocasiones a lo largo de la Historia, las reivindicaciones apuntan a una presunta realidad situada en un período del que apenas hay datos verificables, en este caso el de un pueblo sajón que se oponía a los invasores normandos y su “yugo”²⁴⁷. Los *levellers*, pues, no argumentaron de forma distinta a la de otros movimientos políticos rebeldes, como los Comuneros castellanos o La Fronda francesa, si bien sus repercusiones y alcance modernizador fueron bien distintos.

Importa, al respecto, percatarse de que hay en sus publicaciones y actividad un intenso rechazo a la tradición, enmascarada bajo la apelación a normas e instituciones vetustas. De hecho, y aun con todos los reparos que pueda tener el anacronismo de ubicarse en momentos históricos con el de la Revolución Francesa, los niveladores mantuvieron durante toda su trayectoria la tendencia a rechazar la jerarquía estamental. Por eso encomiaban el pasado más remoto, un momento en el cual aún la alta nobleza no existía en el país. La Cámara Alta había sostenido al bando parlamentario durante la guerra civil con muchos titubeos y tibieza. Y, en todo caso, sólo en una medida alentada por la envidia, ya que había nobles “descontentos y despechados por el hecho de que el rey hubiera ascendido a otros, y no a ellos mismos, para la dirección de los asuntos de gobierno”²⁴⁸. Para colmo, los Comunes eran procesados ante los Lores, que ejercían así un poder arbitrario, excediendo su facultad de juzgar sólo a quienes fuesen de idéntica condición que ellos. La deslegitimación de la aristocracia era esencial a los niveladores, pues obstaculizaba cambios profundos de carácter social y político mediante sus prerrogativas. Esta postura *leveller* coincidía además con la que en el seno del *New Model Army* pugnaba

²⁴⁵ Manning, *op. cit.*, pg. 285. Y Frank dice que esta teoría poseía orígenes más antiguos, siendo sostenida en la Inglaterra isabelina por autores como Holinshed, Speed y Daniel (Frank, *op. cit.*, pg. 83).

²⁴⁶ Cit. de *Regall Tyrannie discovered* (1647) por Manning, *op. cit.*, pg. 285. Este libro, según Frank (1969, pg.100) es principalmente obra de Lilburne, si bien con huellas de Overton.

²⁴⁷ “Norman yoke”.

²⁴⁸ “A Remonstrance of Many Thousand Citizens” (Richard Overton y William Walwyn, 1646), en Sharp, Andrew (ed.): *The English Levellers*, reimpr. (1ª ed., de 1998), Cambridge, Cambridge University Press, 2004, pg. 39.

contra la dirección aristocrática de la guerra civil, y aniquilaba la vieja idea de “constitución mixta”. Resultaba ilegítimo el veto, ya no sólo del Rey, sino también de aquellos Lores²⁴⁹. Los *levellers* pretendían transformaciones que chocaban con un esquema constitucional completo pertrechado para evitarlas. Los “privilegios” frente a los gobernantes, los derechos y las libertades, debían ser ahora de todos los *freemen*. Por mucho que quisieran acudir al pasado para legitimar este programa, a la Carta Magna o el *common law*, los niveladores estaban innovando²⁵⁰.

1.2.2.2. La destrucción de los privilegios eclesiásticos

De hecho, también los obispos eran percibidos como criaturas de la conquista normanda; su autoridad moral basada en la religión se había utilizado al servicio de la Corona. El abandono del catolicismo por los monarcas, no había derruido una jerarquía eclesiástica opresiva ahora encabezada por el Rey. Los niveladores reivindicaban la “libertad de conciencia” frente a tal situación: “cuando uno sabe que el otro es un enemigo mortal, usará todos los Medios, Fuerza y Política que pueda para someterle. Esto conduce a todas las formas de Tiranía y Derramamiento de Sangre...edificadas sobre este podrido e insaciable principio de obligar las conciencias”²⁵¹. La visión *leveller* amparada en esta idea significaba poder elegir cada uno su propio camino espiritual y supuso también embestir contra las riquezas episcopales y los diezmos; los obispos pretendían “conformar una tribu especial, con relación más cercana a Dios que a los otros hombres”²⁵². Pero esa labor intermediaria entre la Divinidad y el resto de los mortales ya no era fácilmente admitida por el hombre de la época, que había percibido el avance de la Reforma en el país. Se criticaba, así, “la *licencia (patent)* para atribuir la predicación de la Palabra sólo a hombres que visten ásperos y rudos ropajes negros aptos para el engaño [...] y que han sido ordenados por los obispos, y de esta forma por el Papa, y consecuentemente por el Diablo”²⁵³. Sus “mansiones, señoríos, territorios y dominios” ignoraban “los diáfanos arroyos de la Escritura”²⁵⁴. El puritanismo radical, pues, hallaba su desarrollo

²⁴⁹ Como ya hemos aclarado antes, podían ser “espirituales” o “temporales”. Pero lo cierto es que aunque los primeros quedaron barridos de la participación política por la *Clerical Disabilities Act* (vid. pg. 58, *supra*), la aristocracia mantuvo sus posiciones de poder durante bastante tiempo, hasta la decapitación de Carlos I.

²⁵⁰ Walwyn, en *Englands Lamentable Slaverie*, señalaba que la Carta Magna sólo contenía una parte de los derechos y libertades inglesas (Frank, *op. cit.*, pg. 64), siendo un “*messe of pottage*” (“una especie de potaje”, cit. *ibid.*, pg. 65).

²⁵¹ *The Araignment of Mr. Prosecution* (Richard Overton, 1645); cit. por Frank, *op. cit.*: pg. 48.

²⁵² *The Compassionate Samaritane* (William Walwyn, 1644); cit. por Manning, *op. cit.*, pg. 297.

²⁵³ *Englands Birth Right Justified* (John Lilburne, 1645); cit. *ibid.*, pg. 297. Subrayado propio.

²⁵⁴ *The Compassionate Samaritane*; cit. *ibid.*, pg. 297.

más extremo y combativo con los niveladores, las últimas consecuencias de sus planteamientos a favor de la libertad religiosa.

La jerarquía anglicana había sido un fuerte dispositivo de disciplina social, al más puro estilo premoderno, introduciéndose en hábitos y conductas, sosteniendo así los vínculos de obediencia existentes bajo los señores y el rey. La difusora de toda una manera de pensar y percibir las realidades de aquel mundo era esa iglesia que varios príncipes habían encabezado con la Reforma, a fin de impulsar sus propósitos centralizadores. Pero precisamente esta íntima relación, en Inglaterra, iba a provocar una cadena de efectos imprevistos. Su primer eslabón, la *Clerical Disabilities Act*; con ella, el resto de parlamentarios se deshacía de los Lores “espirituales”, aun dejando intactos los diezmos y previendo la institución de un régimen eclesiástico similar al presbiterianismo. Pero la “libertad de conciencia” ya surgida, así como una enérgica proliferación de cultos protestantes, imponían el expediente pacífico de elegir en forma libre la religión que se deseara. Someter el presbiterio al control parlamentario hacía interrogarse sobre la vigilancia del guardián. Y a la vista de los acontecimientos, con persecuciones de continuo pese a resultar desplazado el poder hacia las Cámaras, el puritanismo radical desconfiaba de este camino, deseando conservar el grado de tolerancia que ya había obtenido *de facto* través de su lucha contra Laud. La *Root and Branch* de en 1640 provocó la caída del arzobispo, demostrando hasta qué punto ni siquiera la iglesia nacional “reformada” iba a poder frenar la marea²⁵⁵: no se pedía ya unos simples cambios, sino la abolición del episcopado, y en consecuencia, *suprimir las jurisdicciones*, incluidas cualesquiera sancionadoras que impusiesen doctrina, liturgias y moral. No fue aceptado un organismo centralizador que dirigiera los asuntos religiosos del “todo” al que se pertenecía de forma obligatoria.

1.2.2.3. El derecho de propiedad y sus limitaciones

Los niveladores partían ideológicamente, como la mayoría de su contemporáneos, de una cierta noción de propiedad, si bien alejada de su previa caracterización medieval y con matices propios que la aproximaban a sectores sociales modestos. En consonancia con las transformaciones que se estaban produciendo en Inglaterra, el *freeman* no debía quedar sojuzgado por impuestos injustos que gravaran su propiedad para alimentar estamentos como los terratenientes de la alta nobleza o el clero anglicano. Ni tampoco debía ser obligado a competir con grupos de favorecidos por la Corte con monopolios y concesiones. Por ello, los

²⁵⁵ Así, Manning cuenta que de la “agitación” religiosa fue una constante desde ese momento, asimismo extendida en el *New Model Army*, como ya he tenido ocasión de señalar.

levellers defendieron un programa con relevantes connotaciones económicas, no sólo políticas, exigiendo la abolición de ciertos impuestos y de los monopolios. Empezaré este apartado analizando la primera exigencia.

La desconfianza hacia los impuestos partió de una premisa proveniente de las críticas usuales efectuadas por los parlamentarios contra el *tonnage and poundage*, el *ship money* y otros gravámenes: el derecho de propiedad debía ser defendido contra exacciones ilegítimas. Buena muestra de esta herencia ideológica que los *levellers* asumieron aparece *An Arrow Against All Tyrants and Tyranny, shot from the prison of Newgate into the Prerogative Bowels of the Arbitrary House of Lords and all other Usurpers and Tyrants Whatsoever*²⁵⁶ (12 de octubre de 1646), de Richard Overton. En su panfleto, el autor expone que:

Por naturaleza, es otorgada propiedad al Individuo, y no para que sea invadida o usurpada [...] todos los hombres son iguales y se asemejan en nacer para disfrutar de la propiedad, libertad y emancipación, y como somos alumbrados en este mundo por Dios con la mano de la naturaleza, cada uno teniendo libertad y propiedad naturales e innatas (así quedó escrito en en la tabla perteneciente al corazón de los hombres, a fin de que nunca se disipase), de idéntica forma que vivimos, disfrutamos igual y en manera semejante de ese Derecho y privilegio de Nacimiento.²⁵⁷

Claro es que esto podía extenderse incluso a sectores humildes de la sociedad inglesa, pues la “propiedad” era entendida como concepto amplio que implicaba evitar el robo de los frutos del trabajo personal²⁵⁸, una idea muy cercana a lo apuntado luego por Locke en su *Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil*²⁵⁹. Las imposiciones injustas permitían vivir de ellas a cargos públicos dedicados a “la opresión, el latrocinio y los asesinatos más grandes, para así robar a la pobre gente [...] a fin de mantener su

²⁵⁶ “Una flecha contra todos los tiranos y la tiranía, arrojada desde la prisión de Newgate a las entrañas de la prerrogativa perteneciente a la Cámara de los Lores y a todos los demás usurpadores y tiranos, fueran quienes fuesen”. En Sharp, Andrew (ed.), *op. cit.*, pp. 54-72.

²⁵⁷ Frank, *op. cit.*, pg. 96 (subrayado propio). En *An Appeal from the Commons to the Free People* (1647), Overton aludirá a idéntica idea: “hay una delegación genérica entre los hombres, partiendo de las varias e innatas cualidades que poseen, y dirigida a sus diputados con el objeto de optimizar su existencia, disciplina, gobierno, *propiedad* y seguridad” (en Woodhouse, ed., *op. cit.*, pg. 327). Subrayado propio.

²⁵⁸ Por ejemplo, en *The Second Part of Englands New-Chaines Discovered* (1649), escrito por Lilburne, Overton y Thomas Prince: “de las frentes del pueblo trabajador y pobre” (cit. por Manning, *op. cit.*, pg. 304).

²⁵⁹ Parágrafo 43: “es, pues, el trabajo, lo que pone en la tierra gran parte de su valor; sin trabajo, la tierra apenas vale nada [...] también debemos incluir el trabajo de quienes domesticaron a los bueyes que sacaron y transportaron el hierro y las piedras; el de quienes fabricaron la reja del arado y dieron forma a la rueda del molino, y el de quienes construyeron el horno” (trad. cast. de Carlos Mellizo, Madrid, Alianza, 1990, pg. 69).

pompa, lujos y perversidad”²⁶⁰. El parasitismo de los poderosos quedaba pulverizado en una crítica moral que incluía la recaudación de los diezmos, y que atacó “la asociación de bienestar con poder y privilegio, no la mera existencia del bienestar en sí misma”²⁶¹. Los privilegiados rechazaban trabajar, y obtenían su riqueza del esfuerzo ajeno, amparados en la injusticia de su condición específica y discriminatoria, la cual se reforzaba al establecerse gravámenes fuera de proporción sobre bienes de primera necesidad o que obstaculizaban la manufactura y el comercio creados por una labor honrada que devenía en cualidad ética. Esto no suponía, desde luego, que los *levellers*, como ya he aclarado, se ubicaran en posiciones “socialistas”²⁶². En realidad, lo que sí venían a defender era la pequeña propiedad y un sector social amplio que abarcaba al “*copyholder*”, como demuestra la postura de Lilburne, que en su añadido al segundo *Agreement*, propugnaba la abolición de “*all base tenures*”²⁶³, de la enfiteusis, a fin de que quienes la padecieran pasaran a convertirse en *freeholders* (“libres poseedores”). A ello, asimismo, debemos añadirle cierta preocupación por los más desfavorecidos que impulsaría a los niveladores a defenderlos contra cercamientos de sus tierras comunales²⁶⁴, e incluso apoyar la creación de un sistema asistencial público para el pobre, los inválidos y ancianos, así como otro de la misma índole que sostuviera la alfabetización²⁶⁵. Pero todo esto no puede hacernos olvidar que los *levellers* partían de la noción del *freeman*, el hombre que no mantenía lazos de dependencia legal y social merced a su propiedad, aunque ésta se entendiera en sentido laxo e incluyera un cúmulo de derechos y libertades innatos.

Partiendo de estas premisas, el *excise* fue el tributo más atacado por los niveladores. Era un impuesto sobre transacciones comerciales de carácter nacional que perjudicaba más al pobre que al rico, dado su carácter indirecto. El último consumidor, pues, era su principal víctima. En su lugar, los niveladores abogaron por el establecimiento del subsidio (*subsidy*) como gravamen tradicional más justo, tratándose de un impuesto proporcional sobre bienes e ingresos equivalente a cuatro

²⁶⁰ *The Legall Fundamentall Liberties of the People of England* (1649, J. Lilburne), cit. por Manning, *op. cit.*, pg. 304.

²⁶¹ Manning, *op. cit.*, pg. 306. Para este autor, además, “la cuestión de los diezmos fue potencialmente el asunto más revolucionario de la guerra civil Inglesa porque podía unir las demandas de las masas de pequeños campesinos con el programa religioso de los separatistas” (pg. 314). Al eliminarse la contribución obligatoria para la iglesia estatal, cada grupo religioso mantendría al predicador o ministro religioso que quisiera.

²⁶² Sí se puede entender que eran protosocialistas los *diggers* (“cavadores”) de Gerard Winstanley, también autodenominados a veces *true levellers*. Los “cavadores” fueron llamados así por pretender cultivar tierras baldías y defender la propiedad común del agro. Después de 1649, su importancia decayó. Cook, *op. cit.*, pg. 167.

²⁶³ En la versión que hizo del segundo *Agreement*, publicada el 15 de diciembre de 1648, y que él llamó *Foundations of Freedom*. Vid. su texto en Woodhouse, *op. cit.*, pg. 367.

²⁶⁴ Como se aprecia en la Petición de 11 de septiembre de 1648 auspiciada por los niveladores. Woodhouse, *op. cit.*, pg. 339; párrafo 12. Vid. también pp. 75 y 80, *infra*.

²⁶⁵ En *An Appeal from the Commons to the Free People* (Richard Overton, 1647). Woodhouse, *op. cit.*, pp. 337-38.

chelines de cada libra que correspondiera al valor anual de los terrenos o de dos chelines y ocho peniques por libra una vez evaluados la totalidad de sus bienes, debiéndose de ambas sumas la de cuantía mayor²⁶⁶. En el *Agreement* de 1649, los *levellers* abogaron por el mantenimiento de un único gravamen proporcional que tuviera en cuenta todos los ingresos y riqueza de la persona, juntando bienes muebles y raíces.

Pero es que los niveladores no sólo atacaron el *excise*, sino también el sistema de recaudación. Ésta correspondía en numerosas ocasiones, como ya he indicado antes, a personas que habían comprado el oficio al monarca, al modo medieval. Esto implicaba cargar sobre los hombros de otros menos ricos el peso de las exacciones, de manera muy especial, encima de los pequeños agricultores. Así, y en consonancia con su ataque a los privilegios, los *levellers* también defendieron que los recaudadores fueran elegidos por los *freemen*.

Además, otro de los mayores ataques que los *levellers* percibieron contra el derecho de propiedad fue la concesión de monopolios. La Corona conseguía gran parte de sus ingresos gracias al cobro de licencias para exportar, elaborar o vender bienes. El *aulnage*, o control de la calidad textil, era una medida gubernamental común también²⁶⁷. Esta política fue atacada por aquellos que se consideraban perjudicados por la intermediación protegida de una minoría. Los críticos de tal sistema lo encontraban injusto, obstaculizador del comercio libre que suponían más beneficioso para todos. Las restricciones chocaban con una incipiente mentalidad librecambista²⁶⁸, pero es que, asimismo, en la situación de crisis económica favorecida por el conflicto bélico, se culpaba a tales medidas gubernamentales de empobrecer a la población.

Con todo ello, y de manera más específica, el ataque radical se dirigió frente a las grandes compañías exportadoras londinenses, por elevar sus ingresos gracias a una enorme diferencia entre compra a sus proveedores y venta al adquirente: el precio aparecía distorsionado, sobre todo porque al tener el monopolio comercial, su volumen era en todo momento controlado por tales redes²⁶⁹. No había en esa tarea de intermediación un trato “equitativo”, sino que existía la posición predominante de un privilegiado que imponía condiciones, sin poder desviarse el otro hacia la competencia libre a fin de evitar el abuso. Y para colmo, los monopolistas conformaban la oligarquía

²⁶⁶ Manning, *op. cit.*, pg. 308. En relación con las proporciones monetarias, hay que decir que el *shilling* (chelín) equivalía a la vigésima parte de una libra (*pound*). A su vez, doce peniques sumados eran un chelín. *Webster's Third New International Dictionary*, 1961, pg. 2095 (“*shilling*”).

²⁶⁷ Vocablo proveniente del francés medieval. En Inglaterra este sello real no fue suprimido hasta 1699 (Cook, *op. cit.*, pg. 41).

²⁶⁸ Así, John Wildman en *The Case of the Army Truly Stated* (Woodhouse, *op. cit.*, pg. 429): “cargas públicas u opresiones por comités arbitrarios, injusticia en la ley, monopolios y *restricción del libre comercio*” (subrayado propio).

²⁶⁹ Manning, *op. cit.*, pg. 309.

ciudadana principal: así, dominaban el Ayuntamiento londinense, usurpando sus derechos al pueblo llano, el “único poder y gobierno de la ciudad, cambiando y alterando sus leyes y costumbres a placer, y eligiendo alcaldes y sheriffs, así, y a quien desearan”²⁷⁰. También resultaba criticada la dirección jerárquica existente en esas mismas compañías²⁷¹.

1.2.2.4. El sistema de justicia

Los niveladores criticaron, asimismo, el sistema judicial de la época. Y es justo en este aspecto en uno de los que mejor se percibe su preocupación social por las clases más desfavorecidas. El acceso a los dispositivos judiciales era lento y caro: “los hombres se ven obligados a viajar período tras período, de todas las partes del país a Londres, hastiando sus personas y espíritus, malgastando sus bienes y arruinando a sus familias; no tendiendo esto a nada sino a la vejación del pueblo y al enriquecimiento de los abogados”²⁷². Así como de los jueces, empleados y carceleros, que debían ser pagados, conforme a la herencia medieval²⁷³. Quienes primero sufrían esta situación eran los más humildes, que se encontraban con enormes costes imposibles de sufragar, sin contar con la desventaja que suponían los sobornos y corruptelas ofrecidos por los ricos a jueces, tribunales y abogados.

Para los *levellers*, el sistema era especialmente gravoso²⁷⁴, debido a que la Conquista Normanda había transferido numerosos tribunales de Centurias y Condados a la capital, obligando a buscar justicia allí, bajo un conjunto incomprensible de leyes, a menudo redactadas en lenguas como el francés y el latín, sólo descifrables por leguleyos sin escrúpulos. Éstos, a su vez, ocupaban un buen número de escaños entre los Comunes, impidiendo así la reforma de un sistema en el que hacían todo lo posible para alargar los procedimientos y obtener más ingresos.

Dentro de la crítica al sistema judicial, pues, se hallaba una protesta de los sectores sociales más desfavorecidos. Como forma de paliar los males de la justicia, la institución del jurado fue respaldada plenamente por los *levellers*, es decir, defendieron el *derecho* a ser juzgado por los vecinos de la misma condición, vecinos

²⁷⁰ *Londons Liberty in Chains Discovered* (J. Lilburne, 1646). Cit. por Manning, *op. cit.*, pg. 299.

²⁷¹ Manning, *op. cit.*, pg. 300.

²⁷² *A Helpe to the Right Understanding* (W. Walwyn, 1645), cit. por Manning, *op. cit.*, pg. 292.

²⁷³ En aquella época, la mayor parte de quienes ocupaban puestos en la justicia cobraban al particular diversas sumas. Indiquemos que existían costas procesales *también en el derecho penal*. En esta concepción de “servicio privado”, los insolventes eran quienes más padecían sus consecuencias. En contra de lo que habitualmente se supone, el Medioevo es la mejor representación social del neoliberalismo al estilo de Nozick: los cargos se vendían y compraban, la propiedad era el referente social más claro, la protección militar se pagaba de una u otra forma...y los condenados abonaban a sus represores.

²⁷⁴ Para todo lo dicho en este párrafo, vid. Manning, *op. cit.*, pp. 293-95.

del acusado, como garantía procesal para un juicio justo. Pero no resultó ser la única medida que sostuvieron respecto a este ámbito. Otro problema destacable era la prisión por deudas. En las relaciones contractuales (rentas, suministro de materias primas y manufacturas, transportes), los más ricos podían permitirse el lujo de mantener largos procesos para evitar el pago si adeudaban moneda, servicios o mercancías, o bien de acelerarlos, en caso de que la otra parte sufriera dificultades económicas. En la peor de las situaciones, si acababan en la cárcel, cuando sus sobornos no surtían efecto, podían permitirse un régimen bastante cómodo, dadas las condiciones de preferencia económica que las prisiones establecían para endurecer o no la vida allí²⁷⁵. En cambio, quien no dispusiera de capacidad para afrontar su deuda, dependía de la caridad, fundamentalmente de quien depositara alimentos en la cesta ubicada extramuros²⁷⁶. Los *levellers*, pues, y dado que lo normal en los supuestos mencionados era el de un perjuicio mayor para la clase menos favorecida, exigieron abolir la prisión por deudas²⁷⁷. Y llegaron a incluir esta reivindicación en su *Agreement* de 1649²⁷⁸.

La crítica niveladora contra los juristas, e incluso frente a los tribunales centralizados, coincidía con la dirigida contra el clero y los grandes mercaderes. Se percibía como injusta la imposición de gastos crecientes sobre una muchedumbre “productiva” de ingleses ocupados en sobrevivir y que sin embargo deseaban prosperar. El Rey se mantenía en el trono con ayuda de tales abusos, derivando su poder de quienes eran beneficiarios de los mismos bajo un *régimen de privilegios* que les concedía patentes para *monopolizar* la vida religiosa, económica y de los estrados judiciales.

I.2.2.5. El derecho a la representación política

El concepto de representación resultaba cercano y aceptable para los hombres del XVII. Entonces este concepto se hallaba entregado a una visión estamental: cada grupo poseía ciertos poderes o inmunidades, también privilegios y prerrogativas, pero lo “universal”, aunque habíase abierto paso a través de la idea del *ius gentium* y otras como “razón” e incluso “derecho natural”, estaba aún obstaculizado por la categoría del *estamento*. Cada individuo tenía derechos u obligaciones según cuál fuera el grupo

²⁷⁵ *Ibid.*, pg. 311.

²⁷⁶ Manning, *op. cit.*, pg. 311.

²⁷⁷ Así, Richard Overton en *An Appeal from the Commons to the Free People* (1647), en Woodhouse, *op. cit.*, pg. 337: “que pueda proveerse contra la *práctica cruel* de encarcelar deudores, y que sea posible recobrar los derechos y propiedades justamente detentados con apoyo en términos más clementes que la vía del encarcelamiento” (subrayado propio).

²⁷⁸ Sharp, *op. cit.*, pg. 175 (punto 20)

al que pertenecía. Esto facilitó que se instalara el concepto político de *representación*: los parlamentos, con sus diferentes cámaras, podían ser instituciones ante el que un todo social entendido como “reino” apareciera perfectamente reflejado. Pero pronto varias clases que luchan por ascender rechazan la representatividad del esquema, aun cuando aceptan aquel concepto básico. Desde luego esta no es idea que se relacionara entonces con el término “democracia”. Hoy día hemos unido ambos, y el resultado arroja *democracia representativa*, pero mucho nos tememos que en aquella época ambos no aparecían así, sino que más bien la democracia era identificada con la “*multitudo*” de Cicerón²⁷⁹, con el desorden social.

Así, observaremos que el vocablo “democracia” no es utilizado por los *levellers* o coetáneos en texto alguno: se emplean “*representative*”, “*trust*” (“fideicomiso”), y otros similares. La razón es evidente. “Democracia” implicaba gobierno de la plebe, *sin intermediación alguna por representantes*. La imagen era falsa de manera parcial, pues en la Atenas antigua sí existía representación²⁸⁰, pero allí la técnica del sorteo fue preponderante, y no la electiva, que se suponía viraba hacia el gobierno oligárquico²⁸¹. Con este último procedimiento eran *elegidos los mejores*, los más *virtuosos*, que para Aristóteles no eran exactamente los que gozaban de mayor poder económico en aquella sociedad, pero que por *aproximación* se asemejaban. La elección era edificada sobre la premisa de una ventaja social existente a favor de los más ricos, que a través de relaciones clientelares podían auparse en el poder con mayor facilidad que los humildes. El sorteo era, a la contra, un método democrático que permitía burlar esa posición de partida ventajosa. Esquivaba los resortes fácticos de aquellos hombres a quien quizás muchos no percibían tan cerca de la virtud como su riqueza parecía indicar.

Y sin embargo, la equivalencia entre *virtus* y poder social y político perduró por muchos siglos, llegando a la revolución americana incluso, tras atravesar el

²⁷⁹ *De re publica (Sobre la República)*: III, 33.

²⁸⁰ El modelo democrático más antiguo, y del cual nos consta descripción detallada y documentos escritos, fue el ateniense. Al margen de una asamblea donde todos los ciudadanos mayores de edad y varones podían participar (*ekklesia*), existieron órganos “representativos”, como la *boulé* (consejo) o los tribunales. Por tanto, la perspectiva de considerar puramente asambleario el gobierno ateniense, no resulta acertada; *sí había representantes en él*. Pero el hecho de que pudieran ser acusados por cualquiera y procesados por diversos motivos, así como la utilización del sorteo entre todo el *demos* para muchas de sus designaciones, evitando así la corrupción clientelar del voto, originó que durante siglos ni siquiera fuese tenido en cuenta por autores importantes que, al fin y al cabo, asumían un esquema feudal muy distinto del griego.

²⁸¹ Recuérdense las diferencias: “[d]e los gobiernos unipersonales solemos llamar monarquía al que vela por el bien común; al gobierno de pocos, pero más de uno, aristocracia [...] y cuando la mayoría gobierna mirando por el bien común, recibe el nombre común a todos los regímenes políticos: república [*politeía*] [...] Desviaciones de los citados son: la tiranía, de la monarquía, la oligarquía, de la aristocracia y la democracia, de la república”. Aristóteles: *Política*, Cap. VII. En el VIII aclara que la democracia se ha de identificar con los pobres, que son los muchos, y la oligarquía con los ricos, los pocos.

Renacimiento²⁸². “Noble” o “aristócrata” implicaba superioridad social, económica y moral, todo a la vez²⁸³.

El sistema electivo, por contra, sí tenía un elemento igualitario políticamente, al presuponer la dignidad de unos electores que poseían *idéntico raciocinio* para seleccionar a los más “aptos” como gobernantes. El modelo de las designaciones por elección posee, asimismo, la capacidad de exigir responsabilidades al gobierno en una magnitud mayor que el método del sorteo *si se quiebran las barreras sociales que crean dependencia*, si quedan rotas las cadenas de carácter clientelar que originan la esclavitud y el vasallaje. Justo lo que comenzaba a ocurrir, aunque tímidamente, en la Inglaterra de la primera mitad del XVII. Desde ese momento ya podemos decir que el sorteo no es más democrático que la elección, pues en aquel instante ya es posible empezar a juntar de modo más rotundo dos piezas antes separadas: elegir a quienes se comprometen a ejecutar un mandato y ofrecen mayor confianza para ello, y paralelamente, vigilar su conducta como “comisionados” para el gobierno. *Cualquier teoría democrática de coherencia mínima debe basarse en la “representación”, pues supone capacidad de control sobre los gobernantes y exigir que rindan cuentas de su tarea (“accountability”)*. Justo lo que los atenienses mantuvieron, si bien haciendo hincapié en las acusaciones judiciales, y que luego los *levellers* defenderían bajo premisas basadas más bien en la *responsabilidad tras expirar el mandato*, proclive al rendimiento de cuentas político en vez de al judicial.

Los niveladores no reconocían “privilegios” a hombre alguno para ejercer el derecho al “sufragio”. “Por *naturaleza*”, nadie ha tenido nunca “autoridad alguna, dominio o poder magistrado, sobre o por encima de otro, ni lo tiene o puede ejercerlo ahora, a no ser que sea instituido, u otorgado, es decir, por *mutuo* acuerdo o consentimiento –dado, derivado, o asumido, por mutuo consentimiento y acuerdo...”²⁸⁴. Y “es una máxima de la naturaleza y la razón, que ningún hombre puede ser obligado sin su propio consentimiento, y que resulta una absoluta tiranía, provenga de donde fuere, que alguien imponga una ley sobre el pueblo sin haber sido jamás elegido o encargado por él de hacer leyes”²⁸⁵. El objeto de tal pacto se apoyaba en que “hay quien (*buenos, sabios y juiciosos hombres*) afirma que una autoridad parlamentaria es un poder confiado por el pueblo (que lo eligió) para su bien, seguridad y libertad; y por lo tanto un Parlamento no puede hacer con justicia algo

²⁸² Para una buena panorámica sobre el conflicto entre sorteo y elección a lo largo de la historia, *vid.* Manin, Bernard: *The Principles of Representative Government*, Cambridge, Syndicate of the Press of the University of Cambridge, 1997. Hay trad. cast. de Fernando Vallespín, bajo el título *Los principios del gobierno representativo*, publicado en Madrid por Alianza (1998).

²⁸³ Y que por cierto, hemos advertido al analizar el significado de *gentry*.

²⁸⁴ *The Free-mans Freedome Vindicated* (Lilburne, 1646). Cit. por Manning, *op. cit.*, pg. 321. El subrayado es propio.

²⁸⁵ *Regall Tyrannie discovered*. Cit. *ibid.*

causante de que el pueblo se halle menos seguro o libre de lo que antes se encontraba”²⁸⁶.

Ahora bien, tal noción contractual tenía dificultades para adaptarse a la realidad del momento, según los *levellers*. En primer lugar, existía una desproporción relativa al número de habitantes en cada distrito electoral. Así, Lilburne afirmaba: “injusto como es, Cornwall debe elegir casi cincuenta y cinco parlamentarios; y Yorkshire, dos veces más grande tres más poblada, y rica, no tiene tantos”, añadiendo “mi pobre tierra, Bishopric de Durham, no posee ninguno; y así, por tanto y en verdad, son meros *vasallos y esclavos*, encontrándose en gran medida como los campesinos franceses y los vasallos de Turquía”²⁸⁷.

La inmigración interna en busca de cultivos y hacia la ciudad, una extensión gradual y reciente del derecho al sufragio, la influencia de fenómenos caciquiles y el peso de las oligarquías municipales en la Cámara Baja habían contribuido a cierto desequilibrio geográfico en relación con las proporciones de votantes por distrito. Pero los *levellers* no sólo llegaron a reivindicar una alteración de normas en lo relativo a la proporción representativa, sino también en cuanto al número de electores total en Inglaterra. Así, la idea de que nadie podía quedar obligado por las leyes sin su consentimiento era anexa a la consideración como votante de toda persona independiente de un “señor”. Como luego veremos en los Debates de Putney, los niveladores pelearon, aun llegando a un acuerdo conciliatorio, por incluir en el derecho de sufragio a una población amplia. Para ellos, cualquiera que pudiese ganarse la vida con autonomía era capaz de tal ejercicio, y otros, como los *copyholders*, dado su carácter social “fronterizo”, bien podían convertirse en electorado.

I.2.3. La supremacía popular como fuente de legitimidad del *Agreement of the People*

I.2.3.1. Un nuevo modelo constitucional

Un aspecto relevante y que identificará a los *levellers* de manera muy clara, será el papel que Lilburne y los suyos atribuyan al Parlamento en la escena jurídico-política. La *Remonstrance of Many Thousand Citizens* sostenía que lo otorgado a los parlamentarios mediante su elección por el pueblo es

²⁸⁶ *England's Lamentable Slavery* (William Walwyn, 1645). Cit. por Gough, 1985, pg. 109. El subrayado es mío, en clara alusión a la teoría aristotélica reseñada *supra*, en la página anterior.

²⁸⁷ *Londons Liberty in Chains Discovered* (1646); cit. por Manning, *op. cit.*, pg. 332. Subrayados míos.

un poder de fideicomiso - que resulta siempre revocable, no pudiendo ser de otra forma - sin otro fin que el de nuestro propio bienestar. Y no os elegimos para continuar por más tiempo nuestro fideicomiso que el establecido de manera justa por la conocida constitución de esta república, y así sólo por un año como máximo [...] Nosotros somos vuestros Principales, y vosotros, nuestros Agentes; es una verdad que no podéis por menos que reconocer. Pero si vosotros o algún otro asumierais o ejercitaseis algún poder que no sea derivado de nuestro fideicomiso y sufragio, el mismo no es mas que usurpación y opresión.²⁸⁸

Esto suponía ni más ni menos que aplicar el esquema parkeriano de unos años antes²⁸⁹, que entendía al Rey como comisionado del pueblo, pero mientras que Parker se paraba ahí, no aplicando a los parlamentarios idénticas exigencias, los niveladores iban a llegar más lejos. Su crítica anticipó la “soberanía popular” luego tan exaltada durante la Revolución Francesa. Overton editará en enero de 1646 *Divine Observations Upon the London Minister Letter*, afirmando “mi enemistad es sólo contra la Tiranía, donde quiera que la encuentre, sea en el Emperador, Rey, Príncipe, Parlamento, Presbíteros, o Pueblo”²⁹⁰. Los niveladores defendían la existencia de una serie de derechos y libertades. Podía justificarse el “derecho de resistencia” *activo* que ejerciese el pueblo, e incluso cualquier persona, contra un poder usurpador. Aquel *leveller* añadiría en *An Appeal from the Commons to the Free People* (1647) que

es una ley firme y principio radical en la naturaleza, grabada sobre las tablas del corazón por el dedo divino desde el origen, para cada ser viviente con movilidad, y que está en el aliento de la vida, defender, preservar, guardar y liberarse de todas las cosas dañinas, destructivas y detestables para ella con la máxima energía. Por lo tanto, de aquí se deduce *para todos y cada uno de los hombres* un indudable principio de la razón: sirviéndose de todos los recursos racionales, justos caminos y medios, pueden, para salvar, defender, y liberarse de toda opresión,

²⁸⁸ Sharp, *op. cit.*, pg. 33: “a power of trust - which is ever revocable, and cannot be otherwise - and to be employed to no other end than our own well-being. Nor did we choose you to continue our trusts longer than the known, established constitution of this commonwealth will justly permit. And that could be but for one year at the most [...] We are your principals, and you our agents; it is a truth which you cannot but acknowledge. For if you or any other shall assume or exercise any power that is not derived from our trust and choice thereunto, that power is no less than usurpation and an oppression”. Adviértase el gran parecido con la frase de Locke en su *Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil*, *op. cit.*, parágrafo 240, pg. 230: “¿[q]uién podrá juzgar si el príncipe o el cuerpo legislativo están actuando en violación de la confianza que se depositó en ellos? [...] Y respondo: el juez habrá de ser el pueblo; pues ¿quién podrá juzgar si su delegado o diputado está actuando de acuerdo con lo que se le ha encomendado, sino aquél que le ha encomendado la misión y conserva todavía el poder de destituirlo cuando el depositario del encargo no lo cumpla?”.

²⁸⁹ *Vid. pp. 54-6, supra.*

²⁹⁰ “My enmity is only against Tyranny, where ever I find it, whether in Emperor, King, Prince, Parliament, Presbyters, or People”. Cit. en pg. 68 de Frank, *op. cit.*. El subrayado es mío.

violencia y crueldad, cualquiera que fuere, y (por deber para con su propia seguridad y existencia) no dejar sin intentona justa el zafarse de aquéllas.²⁹¹

Overton afirmaba en otro pasaje del texto la “libertad y propiedad” como derechos de nacimiento²⁹². Por tanto, su alusión a la *salus populi*, al mencionar el instinto para autoconservarse de los seres vivos, en realidad queda ampliada con la apología de tales derechos, común denominador de los niveladores.

Así, podemos afirmar que los *levellers* estaban de acuerdo con el antiguo esquema acerca de la ley, que en realidad unía de forma indisoluble derecho y moral y que poseía tres claves: el derecho divino, el natural y el de gentes. Los niveladores acudirán a los tres a fin de apoyar sus reivindicaciones, pero ha surgido mientras tanto una distinción básica. La teoría del Medievo era de tipo organicista, es decir, articulaba el orden normativo a través de otro estratificado en estamentos. En ella, *el individuo como tal* aún no portaba mas que dos derechos fundamentales, relacionados con la seguridad de su propia vida y el principio de autodefensa, pues los demás derivaban de su condición como perteneciente a un grupo determinado; esos privilegios, libertades, inmunidades y derechos todavía no se contemplaban en el escenario jurídico-político *a título personal*, sino que dependían de *la pertenencia a un estamento*. La crisis aparece cuando determinadas convulsiones ponen en marcha un proceso de movilidad social *demasiado veloz* como para ser paralizado o readaptado por los antiguos intérpretes ideológicos. De hecho, los *levellers*, pese a poseer en muchos casos una fraseología del Medievo e incluso bíblica, han dejado “colarse” en sus manifestaciones a los griegos y latinos de quienes se quejaría Hobbes en el *Leviatán*²⁹³; cuando surge algo nuevo suele acudir a un momento remoto, aunque lo “retorzamos”. En este sentido, resulta llamativa la intención de acercarse a la Roma antigua llevada a cabo por los *levellers*, muy probablemente porque creían que su sistema representativo era más cercano a la elección que al sorteo, al contrario que en Grecia, y ya que apoyaban cierta idea de una “virtud” exigible a los cargos públicos. Pero su proyecto era cualitativamente distinto a cualquier otro anterior. El hombre que comenzaba a caminar sobre diversos lugares de Europa tomaba conciencia de que podía ser un ciudadano independiente apoyado en su propia valía y esfuerzo, y no el

²⁹¹ Woodhouse, *op. cit.*, pg. 325.

²⁹² Ya aparece esta idea de Overton transcrita en la pg. 72, *supra*.

²⁹³ En el capítulo XXI. Ciertamente, Samuel Denis Glover señala en “The Putney Debates: Popular versus Élitist Republicanism” (*Past and Present* 146, agosto de 1999) que la extendida instrucción de aquella época hizo que numerosos activistas ingleses hubieran leído en escuelas y centros educativos a los clásicos de Grecia y Roma. Los Debates de Putney, así como muchos panfletos de aquel instante, demostraban su lectura y estudio, a menudo en el original. Los niveladores y las mentes inquietas de su tiempo buscaron cosechar ahí soluciones y propuestas para los nuevos interrogantes políticos. Además, creían percibir ejemplos palpables de sus aspiraciones en las Provincias Unidas (Holanda) o Suiza.

súbdito sin autonomía personal y con lazos de vasallaje típicos de la concepción “familiar” procedente de la Edad Media.

A su vez, este cambio prevé salvaguardas contra la posible corrupción de los gobernantes, quienes no escapan de una posible depravación. Resulta rechazada la idea político-religiosa que imperaba hasta entonces de que el Rey lo es *por Derecho divino* y que así queda excluido de ser juzgado como el resto de los mortales. Si el monarca no facilita la paz pública, e incluso la impide, conspirando de manera prolongada contra el país (*country*, frente a la *court* que le rodea) y sus derechos y libertades, se hace reo de atentar contra él. Los niveladores pronto no se contentaron con atacar la figura del Rey y extendieron su desconfianza hacia cualquier institución de gobierno.

No obstante, y con respecto al ayer medieval, no todo obtuvo el vilipendio de los *levellers*. Extrajeron de él la idea de *pacto*, aunque esta vieja estructura del vasallaje instituía sólo la protección feudal de la espada y las partes de aquel acuerdo no estaban en posición siquiera similar. Inglaterra, asimismo, ya configuraba una sociedad fuertemente orientada hacia el mercado en 1642²⁹⁴, elemento que relegaba al olvido los antiguos lazos sociales. Pero la lealtad que presuponían se echaba de menos. De hecho no desapareció, por encontrarse en el núcleo de cualquier compromiso en forma de contrato: si no existe recíproca confianza, si no puede predecirse cómo actuará el otro para con uno tras rubricar lo pactado, ninguna sociedad corre sobre rieles pacíficos. Esto lo sabemos hoy igual que ayer, pero en el siglo XVII la cuestión del juramento o la palabra dada era destacadísima. Así, por ejemplo, una de las razones que impulsó a Lilburne a su abandono del Ejército fue su rechazo a firmar el *Solemn League and Covenant*²⁹⁵. Y como veremos más tarde, los *Agreements* pedían la rúbrica de los ingleses.

Otro punto relevante para los *levellers* fue el de la costumbre, aunque bajo un atuendo particular. El *common law* tenía algunos de sus caracteres, pero también incluyó el razonamiento más elaborado de los juristas, creándose así una herramienta que los *levellers* no iban a rechazar: la base casuística para defender ciertos derechos y libertades. Por supuesto, el ardid tenía su punto de apoyo específico, y Coke lo había utilizado; el de escoger precedentes que sirvieran a la buena causa. Aun teniendo en cuenta que de nada valdría siquiera intentarlo si no existe ninguno o resultan desconocidos para casi todos, pues el *common law* no se podía crear de repente para justificar derechos.

²⁹⁴ Stone, *op. cit.*, pg. 70. Este historiador considera que la que más en Europa, junto con las Provincias Unidas.

²⁹⁵ Frank, *op. cit.*, pg. 28.

Con la Carta Magna, que era una normativa de distinta índole, la relación de los *levellers* era igual de ambigua que con el *common law*, denostado con frecuencia por las acusaciones contra sus “leguleyos”. El antiguo documento ataba al pasado, ese que Overton iba a rechazar en *An Appeale*, basándose en que “la razón no tiene precedente; la razón es el manantial de todos los precedentes justos”²⁹⁶. Añadiría en su *Remonstrance* que era un compendio de prescripciones relativas a una “intolerable sujeción”²⁹⁷, y Walwyn sostendría otra crítica recelosa²⁹⁸, aunque afirmase que “el parlamento debería conservar al menos la emancipación (*freedom*) y libertades contenidas en la Carta Magna, como mínimo”²⁹⁹. Necesitados de algún precedente histórico, los niveladores se agarraban al antiguo documento, pero también eran conscientes de que ya no servía para el asalto. Sí recogieron, como se advertirá en próximas páginas, el *afán de permanencia* contenido en su preámbulo: las libertades especificadas allí lo iban a ser de manera “perpetua”³⁰⁰.

Todas estas reflexiones condujeron a Lilburne y los suyos a la conclusión de que debían apoyarse en cierto entramado político para sostener los derechos básicos, una necesidad que intuían. Dado que el bagaje iusfilosófico y político anterior no resultaba suficiente, y que la jerarquía de fuentes legales necesitaba aclararse y adquirir una interpretación definitiva, la “ley suprema” entró en sus publicaciones. Y lo hizo de modo más complejo que la sencilla “*salus populi*”. Ahora el desafío era conseguir un acuerdo que aunase los descontentos con la actividad parlamentaria, inclusive los soldados y oficiales del *New Model Army*, y que estableciese, con vocación de permanencia, una Carta de derechos similar a la del año 1215. Eso sí, acorde con sus innovadoras perspectivas y construyendo un nuevo orden político en el que no cupieran los privilegios. La fuente sería el pueblo, poder original que los *levellers* intentarían reunir a fin de sostener sus *Agreements*, actuando frente a instituciones de autoridad derivada de él, si resultaba indispensable. Primero el enemigo sería el Rey, luego el Parlamento Largo, después los Comunes y por último los Grandes del *New Model*, que uno tras otro habían defraudado a los *levellers*. El sujeto constitucional debía desplazarse definitivamente, hacia una milicia democrática que sería el pueblo en armas³⁰¹, aparecido al calor de las Guerras Civiles.

²⁹⁶ En Woodhouse, *op. cit.*, pg. 323. Toda la frase aparece en cursiva en el original.

²⁹⁷ Frank, *op. cit.*, pg. 85.

²⁹⁸ Cfr. pp. 65 y 67, *supra*.

²⁹⁹ Frank, *op. cit.*, pg. 109.

³⁰⁰ Esteban, Jorge de (ed.), *op. cit.*, pg. 512: “hemos dado y concedido, por nuestra propia y buena voluntad [...] las libertades especificadas a continuación, para que sean por todos poseídas *a perpetuidad* en nuestro reino de Inglaterra” (Carta Magna de Enrique III, año 1215). El subrayado es propio.

³⁰¹ Es obvia en este punto la influencia de Maquiavelo. En *El Príncipe* escribió: “si un príncipe basa la defensa de su Estado en mercenarios, nunca alcanzará la estabilidad o la seguridad”. Cit. por Skinner, Quentin: *The Foundations of Modern Political Thought. The Renaissance* (Vol. I), Cambridge, Cambridge University Press, 1978; trad. cast. de Juan José Utrilla, por donde se cita, *Los fundamentos del*

Pero puede que también los protagonistas de nuestra historia temieran más algunos peligros que otros. Como hemos visto, nunca rechazaron la necesidad de gobiernos, a fin de garantizar el seguro disfrute de los derechos fundamentales, pero presuponían una tendencia al abuso de poder que partía de la previsible corrupción humana. Así, en *A Manifestation* (1648), afirmaron que “estableciendo la suposición de que los hombres sean demasiado acomodaticios y claudicantes ante la tentación mundana, no deberían tener los medios o la oportunidad de agredir a los particulares, o perjudicar a la comunidad, sin percibir alto riesgo y evidente peligro en ello”³⁰². Por tanto, los activistas radicales iban a desconfiar del poder, como capaz de conseguir la corrupción de los hombres que pasaran a disfrutarlo, y tal juicio parecía apoyado por las circunstancias del contexto político. ¿Cómo podían introducir la “supremacía” del pueblo en ese esquema? ¿Acaso no era también corruptible?

La salida del laberinto era su concepto de una *educación popular*. El hombre dotado de razón podía, en un principio, aparecer como ignorante y cercano a la bestia, pero usando de aquélla mediante el entrenamiento adecuado, comprendería los fundamentos de sus libertades y derechos. La apología de una escuela pública por Overton, el autodidactismo de un Lilburne, el uso de la imprenta como propagadora de la rebelión y la defensa de la libertad religiosa, eran direcciones confluyentes en aquel principio. “El pobre pueblo engañado se encuentra aún (en cierto modo) bestializado en su entendimiento, viniendo a ser estúpido y groseramente ignorante acerca de sí mismo y de sus inmunidades de carácter natural [...] careciendo del uso de la Razón”³⁰³. Con esta crítica no paralizadora los *levellers* se aproximaban al humanismo renacentista, que había situado la *virtus* como resultante de un proceso educativo que capacitaba para la vida pública³⁰⁴.

Los *clubs* y tabernas se hacían eco de la agitación radical, así que cabía la esperanza de educar al pueblo en la comprensión política y la *consciencia* de sus derechos, pero no sucedía así con quienes alcanzaban responsabilidades de poder, cuya perfidia no guardaba relación con aquella ignorancia, aunque ambas pudieran complementarse y producir el mismo fruto podrido. La única solución, entonces, era que se promulgara un solemne compromiso estableciendo los mecanismos para la elección de los gobernantes, así como una tabla de libertades y derechos que disfrutaran de inalienabilidad e imprescriptibilidad como derechos de nacimiento

pensamiento político moderno. El Renacimiento (Vol. I), México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1985, pg. 155.

³⁰² Suscribieron *A Manifestation*, Lilburne, Walwyn, Overton y Prince, quienes añadieron a su vez la coletilla “y otros, comúnmente (aunque de manera injusta) llamados niveladores”. El texto completo se encuentra en Sharp, *op. cit.*, pp. 158-167.

³⁰³ Overton, Richard: *A Defiance Against all Arbitrary Usurpations* (1646). Cit. por Frank, *op. cit.*, pg. 88. Siglos más tarde, Stuart Mill compartiría esta visión del ser humano netamente liberal.

³⁰⁴ Vid. Skinner, *op. cit.*, pg. 111.

(*native* o *birth rights*). A lo largo de sus tres *Agreements*, los radicales fijaron la limitación de mandatos, la elección de poderes locales, la posibilidad del *impeachment* contra representantes, la convocatoria del Parlamento a fecha fija, el derecho de sufragio, la libertad religiosa, la igualdad ante la ley, el derecho a la no autoincriminación. Pero ese *Agreement* era del “pueblo” (*Agreement of the People*), en quien residía la “última palabra” antes de aprobarlo, poseyendo derecho a resistir activamente las órdenes y leyes injustas emanadas del poder³⁰⁵. El Parlamento no garantizaba determinadas premisas, y la única forma de frenar entonces la marea de la supremacía popular era la promulgación de un pacto que, aprobado por el pueblo, diera permanencia al poder con plena legitimidad siempre que respetara los “*native rights*”. Esta era la innovación de los *levellers*, auxiliada por los viejos ejemplos republicanos y ro ideas sobre la desobediencia política inspiradas en la Reforma.

Maquiavelo se lamentaba en sus *Discursos*, haciéndose eco del glorioso pasado perteneciente a Roma, de que los oligarcas italianos habían arrumbado las magistraturas del pueblo, propagando la corrupción y esclavitud de sus ciudades³⁰⁶. Pero su propuesta no dejaba de ser la de un gobierno mixto³⁰⁷. Los niveladores iban más allá, quizás inconscientes de la proyección futura que podían obtener sus ideas. Para los *levellers*, quien otorgaba legitimidad a la *paramount law* era el “pueblo”. Expresando tal supremacía, sostuvieron una idea que sintetiza perfectamente John Lilburne:

un Acuerdo Popular no es apropiado que venga del Parlamento [...] lo que es hecho por un Parlamento, como tal, quizás sea deshecho por el próximo; pero un Acuerdo Popular empezado y finalizado entre el Pueblo no puede en justicia ser nunca sometido a la consideración de Parlamentos que lo destruyan.³⁰⁸

1.2.3.2. El primer *Agreement*: antecedentes, creadores, contenido y difusión

Inmediatamente después de que el *New Model* rubricara el *Solemn Engagement of the Army*, los presbiterianos londinenses llamaron a la movilización ciudadana contra

³⁰⁵ “*All lawful powers reside in the people*”, afirmó Lilburne en su *Londons Liberty in Chains discovered* (1646); cit. por Frank, *op. cit.*, pg. 92. Aunque Glover, en *op. cit.*, opina que la autoría auténtica del panfleto fue de John Wildman, pese a ser publicado por Lilburne (pp. 68 y 69), tanto Frank como Manning afirman sin titubeos que el escritor del mismo fue Lilburne.

³⁰⁶ *Discursos*, pp. 83-87.

³⁰⁷ *Discursos*, pg. 35.

³⁰⁸ “*An Agreement of the People is not proper to come from the Parliament, [...] that which is done by one Parliament, as a Parliament, may be undone by the next Parliament: but an Agreement of the People begun and ended amongst the People can never come justly within the Parliaments cognizance to destroy*”. *Legall Fundamental Liberties*, de John Lilburne, cit. en pg. 182 de Frank, 1969.

el Ejército, asustados por su aproximación a la *City*, y los escoceses comenzaron a urdir una invasión contra Inglaterra.

De manera simultánea, los *cavaliers*, antiguos soldados profesionales que habían perdido su “ocupación” tras el reclutamiento paralelo de quienes iban a formar el *New Model Army*, se manifestaron violentamente³⁰⁹, pidiendo sus atrasos. Tal actitud provino de un simple mimetismo ante las reivindicaciones de los *ironsides*, pues el *sprit de corps* de los caballeros era más bien reaccionario y en nada se coordinarían con los hombres del *New Model Army*. Es más, aparecían como una posible tropa de choque para enfrentársele. Su oportunismo en aquellos instantes quedó de manifiesto y también el pánico que crearon entre una gran parte del pueblo residente en la capital³¹⁰.

El llamamiento de los presbiterianos a la milicia ciudadana londinense (*trained band*) obtuvo muy escasa respuesta, presentando entonces el *New Model* ante la Asamblea del país una *Representation of the Army* elaborada el 14 de junio de 1647. En la declaración sostenía varias reclamaciones. En primer lugar, afirmaba que no era “un simple ejército mercenario, cuyo reclutamiento fuera a servir algún poder arbitrario estatal, sino requerido y convocado por diversas manifestaciones del Parlamento para la defensa de nuestros propios derechos y libertades, así como de los del pueblo”³¹¹. En segundo término, los *ironsides* exigían que se pidiese cuentas a los diputados corruptos, concretando poco después quiénes eran en una lista de once nombres. Pronto la tensión entre la mayoría presbiteriana y el Ejército aumenta y Henry Ireton³¹² redacta, con auxilio de un comité militar distinto al *General Council of the Army*³¹³, *The Heads of the Proposals*³¹⁴, ofrecimiento al Rey para contrapesar la obstaculización parlamentaria de reivindicaciones. Carlos I lo rechazaría a finales de julio. Las *Propuestas* abarcaban reuniones parlamentarias bianuales (I.1), redistribución proporcional de votantes (I.5), elección del jurado para impartir justicia en los

³⁰⁹ Plant, *op. cit.*, señala disturbios el día 7.

³¹⁰ Manning, *op. cit.*, pg. 221.

³¹¹ Woodhouse, *op. cit.*, pg. 404. *Vid.* también en pg. 60, *supra*, mi referencia anterior dentro del apartado sobre el *New Model*.

³¹² Fue el primogénito de una familia numerosa, falleciendo su padre cuando sólo contaba con trece años. En 1629 ya había conseguido el grado de bachiller y después comenzó estudios jurídicos. En 1642 reclutó un grupo de caballería para enfrentarse al Rey, y tres años más tarde resultó elegido para estar entre los Comunes. Era cuñado de Oliver Cromwell. *Vid.* “From Reading to Whitehall: Henry Ireton’s Journey” de Taft, Barbara, en Mendle, 2001, pp. 175 y 176.

³¹³ Formado por 12 agitadores y doce oficiales, cuyo método de elección se desconoce (Taft, *op. cit.*, pg. 180).

³¹⁴ Traduzco: “las Propuestas Fundamentales”. Están en Woodhouse, *op. cit.*, pp. 422-26. En esta compilación, el documento aparece con fecha de agosto, pero esto se debe a que hasta entonces las *Heads of the Proposals* no habían sido publicadas oficialmente.

condados (I.11), abolición de cualesquiera jurisdicciones eclesiásticas (XI)³¹⁵ y una extensa amnistía (XVI).

A continuación vino un conflicto entre los “Grandes”³¹⁶ del *New Model*, Rey y Parlamento, en el que cada cual jugó con lo que tenía a mano para no perder sus cartas. Los líderes de la milicia, que de todas maneras disponían de una poderosa fuerza coactiva, no se atrevieron a erigirse claramente en árbitro resolutorio, cosa que quizás podrían haber hecho pese al riesgo de combates contra los escoceses proclives a Carlos Estuardo. Los *levellers* iban a intentar quebrar esta actitud titubeante.

En efecto, el 15 de octubre de 1647 se publica un documento, elaborado básicamente por John Wildman³¹⁷ con el respaldo de los más combativos agitadores de caballería, y que se llamó *The Case of the Army Truly Stated*. El talento intelectual y político del nivelador más capaz y formado del grupo procuró la confluencia entre los *levellers*, cuyas posibilidades de extender su programa no eran muchas, y el descontento de amplios cuadros pertenecientes al *New Model Army*. Entre la milicia se observaba cómo parlamentarios y Grandes se enzarzaban en una disputa sin fin a la que convenía dar conclusión. Wildman, pues, elaboró el *Case* teniendo en cuenta las demandas de los *ironsides*, uniéndolas a las que conformaban el ideario *leveller*, pero sobre todo, el texto pedía la *aprobación de una ley fundamental* y “definitiva”. Así, al mismo tiempo que insistía en el pago a de los atrasos al *New Model* y en la inmunidad para sus componentes, reivindicaciones ambas de tipo corporativo, defendía otras que no eran de tal carácter, como la supresión de diezmos, monopolios e impuestos no proporcionales, y asimismo exigía una “*paramount law [...] unalterable by Parliaments*” (“ley suprema [...] inalterable por los Parlamentos”)³¹⁸.

La redacción de esa *paramount law* tenía su origen en dos preocupaciones. Una, de la que más adelante hablaré con mayor profundidad, fue el miedo a que virajes en las coaliciones de poder impusieran fuertes represalias contra los *ironsides* por su participación en hechos de guerra. La otra es que las Cámaras no quisieran

³¹⁵ Incluyendo la capacidad para imponer penas por desatender los deberes de los feligreses relativos al culto (XII).

³¹⁶ Alto mando del *New Model Army*: traduzco de “*grandees*”, que significa hombres eminentes o de alto rango, “notables”.

³¹⁷ Existe cierta discusión sobre la autoría. C.H. Firth señalaba que Wildman fue “probablemente” el creador del documento (cit. en Mendle, 2001, pp. 103-04); en 1944, Don Wolfe opinaba lo mismo en su *Leveller Manifestoes* (ibid., pg. 104), aunque aseverando la intervención de varias personas en la escritura de aquél; y Joseph Frank atribuyó idéntica autoría (ibid., pg. 132), igual que Woodhouse (ibid., pg. 429); por su parte, Samuel Denis Glover, en op cit., también apoya la redacción fundamental de aquel *leveller*. Últimamente, John Morrill y Philip Baker creen que la autoría corresponde de manera principal a William Sexby, activista del *New Model* que luego aparecerá en los debates de Putney (Mendle, op. cit., pg. 115). Nuestra opinión es que no lo prueban de forma suficiente, siendo su explicación laberíntica en exceso (vid. pp. 106-118, para seguirla).

³¹⁸ Woodhouse, 1986, pg. 433.

disolverse tras un período prudencial, obstaculizando así las demandas de *levellers*, radicales y agitadores del Ejército. El *Case* iba dirigido a Fairfax, la defensa de los derechos y libertades fundamentales se daba por supuesta también entre los jefes del Ejército, formaba parte de un acervo común. Los generales aún no habían procedido a represión alguna en sus tropas y no existía por tanto ruptura con el partido más radical. De momento el enemigo del *New Model* era esa asamblea parlamentaria que se resistía a consentir en las peticiones de los *ironsides*. En este sentido, el *Case* debe interpretarse como un “empujón” a los Grandes, a fin de que asumieran el enfrentamiento. Y que lo hicieran hasta el punto de exigir que “todas las órdenes, votos, ordenanzas, o declaraciones que se han aprobado para obstaculizar peticiones, anularlas, impedir las o proceder a su quema³¹⁹, o encaminadas a encarcelar o acusar a los peticionarios, siendo peligrosos precedentes contra la libertad popular, puedan ser sin dilación eliminadas de los Diarios³²⁰ y su injusticia expuesta ante el pueblo”. Overton y Lilburne estaban entonces en prisión, junto con otros críticos *del Parlamento*, por motivo de sus publicaciones.

Muy pocos días después de la presentación del *Case* a Fairfax, en concreto el 27 de octubre de 1647, fue introducido en los cuarteles el *Agreement of the People*, cuya autoría correspondió principalmente a Walwyn, Overton, Lilburne y Wildman, y que indicaba contar con el respaldo de nueve de los doce regimientos de caballería y siete de la docena de infantería³²¹. El documento era muy breve, y aparecía, ya no como una petición o propuesta, sino como la *paramount law* que debía ser aprobada³²²; su título alude a la voluntad del “pueblo”, al margen de que a quienes lo elaboren les quede por conseguir ese apoyo popular. En consonancia con el proyecto, pues, los parlamentarios no son titulares de la supremacía: “el poder de [...] los Representantes de esta Nación, es inferior [...] al de quienes lo eligen”³²³. Es más, el *Agreement* va a establecer que entiende por “pueblo” elector a los *habitantes* de Inglaterra, especificando *también* que el sufragio hasta entonces no guarda proporción adecuada con el número de ellos que existe en cada condado o localidad³²⁴. Tales

³¹⁹ Alusión al hecho de que en la época, el verdugo oficial aún quemaba los escritos considerados sediciosos, justo lo que le había ocurrido a Lilburne entonces, por ejemplo, con alguna publicación de su mano (Frank, 1969, pg. 85).

³²⁰ Se refiere a los que reflejaban las sesiones parlamentarias.

³²¹ Frank, 1969, pg. 138; Gentles, Ian (“*The Agreements of the people, 1647-1649*”), en Mendle, 2001, pg. 150.

³²² De hecho, al comienzo de la segunda jornada de los Debates de Putney, en los cuales se discutió sobre el documento, Ireton aludirá a él como “un supremo compromiso” (“*an engagement paramount*”); Woodhouse, *op. cit.*, pg. 53.

³²³ “*The power of [...] Representatives of this nation, is inferior [...] to theirs who choose them*” (Sharp, *op. cit.*, pg. 94).

³²⁴ *Id.*

aseveraciones no implicaban la extensión universal del derecho al voto como la percibimos hoy. Aunque sí existía una idea de la representación según la cual, si no todos poseían la condición de *free-born man*, quienes la disfrutaban podían representar a sus esposas, hijos y personas que *dependieran* de ellos en general. Como analizaré más adelante, aquí a su vez nacía la discusión más específica acerca de si gozaban de “independencia” los sirvientes, aprendices, asalariados y mendigos.

Asimismo, el *Agreement* exigía la disolución del Parlamento en una fecha concreta: el último día de septiembre de 1648, “para impedir los numerosos problemas surgidos en forma evidente del largo asiento de idénticas personas como autoridad”³²⁵. El supremo poder tras la deslegitimación del Rey, no accedía a las demandas de *levellers* y soldados, sometiéndoles incluso a persecución. La desconfianza motivada por sus abusos exigía elecciones cada dos años, en día de la semana específico³²⁶.

También quedaba implícitamente anulado cualquier poder de veto del que antes hubieran dispuesto el Rey o los Lores. La autoridad de los representantes de la Nación “es sólo inferior al de quienes les eligen”, extendiéndose “*sin consentimiento o concurrencia de persona alguna*, a la promulgación, cambio y derogación de las leyes, a instituir o proceder a la abolición de cargos públicos y tribunales, a nombrar, destituir o pedir cuentas a los magistrados y cargos públicos de toda clase, a declarar la guerra o la paz, a los asuntos relativos al entendimiento con otras potencias”. A continuación, se amplían estas facultades “a cualquier cosa *que no esté reservada por sus representados explícita o implícitamente para ellos mismos*”³²⁷, es decir, se hace la salvedad de una serie de derechos y libertades, que son los siguientes (cuarto punto del *Agreement*):

1. Los asuntos relativos a la religión no pueden ser regulados por autoridad humana alguna, pues dependen de una opción de la “conciencia”. A pesar de

³²⁵ *Ibid.*, pg. 94 (“to prevent the many inconveniences apparently arising from the long continuance of the same persons in authority”).

³²⁶ *Id.*

³²⁷ *Id.*: “and doth extend, without the consent or concurrence of any other person or persons, to the enacting, altering, and repealing of laws, to the erecting and abolishing of offices and courts, to the appointing, removing, and calling to account magistrates and officers of all degrees, to the making war and peace, to the treating with foreign States”, y, “to whatsoever is not expressly or impliedly reserved by the represented to themselves.” Los subrayados son propios. La expresión “implícitamente” parece aludir a una interpretación que subsiguiera en el tiempo de la tabla a continuación establecida, e incluso al común entender de que existían unos derechos expresados en Actas parlamentarias y *common law*. De cualquier manera, lo que interesaba a los redactores del *Agreement* era introducir una *paramount law* que fijara unos mínimos, quedando pendiente y a debatir si era necesario ampliarlos, pues centraban su atención en restringir la duración de los Parlamentos, suponiendo así que con tal premisa iba a ser difícil el ataque de los representantes contra los *birth-rights*, que por ejemplo ya se habían producido en los casos de algunos *levellers*.

ello, puede existir instrucción oficial, siempre que no se obligue a seguirla. La libertad de conciencia, pues, aparece en el *Agreement*.

2. No debe existir servicio de armas obligatorio. Esto va encaminado a impedir que el Parlamento llame a la guerra sin justa causa, así como a rechazar la división del *New Model* dirigida a licenciar una parte del mismo, enviando a Irlanda a la otra. Del contexto se infiere, sin duda, y en cualquier caso, que el *New Model* no deseaba disgregarse. El sentimiento de camaradería entre sus miembros era opuesto a tal posibilidad. Toda la cláusula es, por tanto, de carácter “defensivo”, contra su destrucción como tropa organizada y con objetivos ilegítimos.
3. Tras la disolución del Parlamento existente hasta entonces, ninguna persona puede ser juzgada por lo dicho o realizado durante las últimas “diferencias públicas”, es decir, en tiempos de guerra civil. A no ser en cumplimiento de resoluciones de las Cámaras sobre tales conductas (extremo acorde con su condición añadida de órganos judiciales). Esta cláusula debe ser interpretada como de protección a cualquiera que hubiese luchado contra el bando monárquico; así lo especificará el segundo *Agreement* (1648)³²⁸. Se venían a reforzar las ordenanzas parlamentarias de 21 de mayo y 7 de junio de 1647, que implicaban mejoras para los *ironsides* de las condiciones de enjuiciamiento por acciones de guerra, quienes así podían escapar de manera más fácil de las demandas maliciosas interpuestas por civiles.
4. Que todas las leyes hechas o que se vayan a elaborar obliguen de la misma forma a todos, sin existir inmunidades que supongan diferencias, siquiera en los procesos. El documento respalda la igualdad ante la ley compeliente, sin excepciones por razón de nacimiento o rango³²⁹.
5. Que la ley debe ser “beneficiosa”, y “no evidentemente encaminada a la destrucción de la seguridad y el bienestar del pueblo”. Así, de manera implícita, el *Agreement* recoge la posibilidad de rebelarse contra ella si esa condición no se cumple. Quienes redactaron el documento no preveían la creación de tribunal alguno, a la manera del control constitucional moderno, así que su único respaldo iba a ser el derecho de resistencia, de origen calvinista.

³²⁸ El texto, en Woodhouse, *op. cit.*, pg. 362. Más adelante examinaré este punto.

³²⁹ “That in all laws made or to be made every person may be bound alike, and that no tenure, estate, charter, degree, birth, or place do confer any exemption from the ordinary course of legal proceedings whereunto others are subjected.” Sharp, *op. cit.*, pg. 95.

I.2.3.3. Los Debates de Putney

I.2.3.3.a) Las tensiones en el *New Model Army*

Ante toda la agitación descrita, Fairfax resolvió que se debatiera el *Case* en el Consejo General del Ejército, que venía reuniéndose cada jueves, desde el 9 de septiembre de 1647, en la iglesia de Putney. Con ello, los principales jefes militares en aquel momento pretendieron combatir varios problemas de manera simultánea. A un lado, la mayoría parlamentaria encabezada por los presbiterianos continuaba enfrentándose con ellos. De otra parte, el Rey rechazaba cualquier acuerdo que supusiese garantías para no vengarse de los defensores de la causa parlamentaria o incluso de la propia asamblea bicameral³³⁰. Enfrente, la tropa y los oficiales descontentos presionaban para no rendirse ni al Rey ni a los parlamentarios. De los *ironsides* convenía asimismo saber cuáles eran sus demandas específicas, calmándoles y frenando tendencias rebeldes.

Cabe la posibilidad, es cierto, de que a Fairfax y demás les preocupara hondamente el estado anímico de sus hombres. Pero los debates que a continuación vinieron mostraron más bien una intención estratégica. El desacuerdo de *levellers* y simpatizantes con el esquema tradicional político de Ireton y Cromwell aparece desde las primeras líneas de la transcripción³³¹. Asimismo, la preferencia inicial de los jefes militares fue debatir sólo el *Case*, pero tras introducirse el *Agreement* en los acuartelamientos hubo que replantear en Putney todo el esquema constitucional hasta entonces presente. A la emergencia del “Nuevo Ejército” correspondía una nueva constitución, *paramount law* que viene a desplazar el antiguo equilibrio entre poderes de la vieja propuesta “mixta”.

Sin duda los radicales y los líderes del *New Model* tenían la pretensión común de hallar algún punto de concordancia que eliminase el fraccionamiento en las filas del Ejército. Llama la atención cuán poco esgrimieron los jefes de la milicia su calidad de mandos (quizás también porque Fairfax, teóricamente general supremo, no asistía a las discusiones). Pero hubo una línea radical de división: Ireton y Cromwell siguen

³³⁰ Pese a resultar rehén del bando enemigo desde su captura a manos del corneta Joyce, tropas enteras de realistas fuera y dentro del país esperaban el momento adecuado para concederle la victoria. Carlos quería sólo ganar tiempo.

³³¹ Efectuada por William Clarke (aunque sólo abarca los días 28 y 29 de octubre, pasando luego al 1 de noviembre, y después sólo existen fragmentos hasta la jornada del 8, cuando los Grandes disuelven la reunión). Los *Clarke papers* fueron descubiertos en el Worcester College de Oxford a finales del siglo diecinueve, cuando su bibliotecario, Henry Pottinger, con fama de bibliófilo excéntrico, mostró los documentos a Charles Firth. Clarke nació alrededor de 1623, estudiando leyes en el Inner Temple, para pasar luego a ser secretario del Consejo General del Ejército de 1647 a 1650, y permaneciendo a continuación en Escocia, tras la victoria de Cromwell sobre sus tropas. De 1654 a 1660, trabajó para el general Monk, que traería a Carlos II tras la caída de la Commonwealth republicana. *Vid.* Le Claire, Lesley: “The Survival of the Manuscript”, en Mendle, *op. cit.*

dependiendo de una clara fidelidad a las Cámaras, mientras que los radicales optan más bien por apelar al pueblo. Dos concepciones políticas diferentes, ninguna de las cuales, como luego se verá, triunfaría después. Asimismo, cualquiera de ellas expone cómo el Ejército aún no tenía realmente una posición separada y autónoma, a la manera “bonapartista”. Tanto los *levellers* y agitadores como los Grandes buscaban un poder distinto al que conceder legitimidad, y el Parlamento estaba cada vez más lejos de servir a su propósito. Pero el radicalismo confiaba en extender sus premisas entre los soldados, siempre bajo la apelación al pueblo como árbitro supremo, y los más altos oficiales no se decidían por esta senda “popular”, pues aún se veían como subordinados a las Cámaras, temerosos de la indisciplina agitadora.

I.2.3.3.b) El puritanismo en Putney

El presente trabajo no va a prestar excesiva atención a las referencias religiosas que contienen los Debates de Putney. Dichas alusiones sirven sólo de manera marginal a la exposición que me ocupa, la teoría político-jurídica del momento. Pero sí resulta conveniente subrayar la tensión entre agentes secularizadores y otros más apegados a una visión puritana. Ambas perspectivas figuraban en las filas del *New Model Army*, haciendo hincapie en resortes psicológicos distintos.

En los Debates, así, se producen a menudo invocaciones a Dios. Los grupos sectarios, numerosos a mediados del siglo XVII en Inglaterra, así como los independientes, propugnaban que el Estado no interviniera en sus comunidades, en esto a diferencia de la facción presbiteriana, que pretendía que tanto los “elegidos” como los que no lo fueran se sometiesen a idéntica disciplina³³². Entre el congregacionalismo y la visión presbiteriana existía una diferencia muy importante. El primero entendía que la interpretación bíblica aún no había alcanzado su nivel más alto en lo referente al conocimiento de la verdad contenida en el Libro. Por tanto, esa hermenéutica era de carácter *progresivo*, portaba la duda y el debate³³³. Las congregaciones se reunían no sólo para el rezo, sino también a fin de disertar sobre la Palabra Divina, y en ellas los seglares podían intervenir más activamente que en otras confesiones religiosas no congregacionalistas. Los resortes organizativos de los grupos religiosos, junto con la discusión en su seno, eran de carácter democrático. Su influencia en los independientes, y por añadidura en toda la actividad radical de aquellos instantes, pueden apreciarse de manera clara en Putney.

³³² Woodhouse, *op. cit.*, pg. 43 de la *Introduction*.

³³³ *Ibid.*, pg. 45

Pero, al mismo tiempo, ese elemento democratizador, progresivo, resulta insuficiente para la perspectiva de los niveladores y afines, que mantienen una postura más secularizadora y menos apegada al puritanismo, la contra que todos aquellos participantes en Putney que intentaron acercar el encuentro algo más a *una asamblea religiosa* y un poco menos a una reunión de carácter político. En la primera jornada, cuando se considera lo apremiante de la coyuntura, con un monarca rechazando tanto los acuerdos ofrecidos por el *New Model* como los del Parlamento, y este último bajo sospecha, aparece la búsqueda de cierta interpretación religiosa sobre aquella situación, expuesta por el teniente coronel William Goffe: “parece que Dios está derribando la gloria de toda la carne. Los mayores poderes del reino han caído en el estremecimiento. Dios ha derribado la gloria del Rey y de su facción, ha derribado un partido de la Ciudad. No afirmo que hará lo mismo con nosotros – espero cosas mejores – pero tendrá la gloria”³³⁴. Es decir, el oficial entiende que existe un designio divino (la “gloria”) y expone a continuación su esperanza de que los reunidos allí puedan ser todavía “instrumentos” en sus manos³³⁵. Las decisiones de Putney, pues, deben tomarse tras “buscar a Dios de manera rigurosa”, por lo cual Goffe añade: “pienso que mañana será el día apropiado” para “que a Dios se le busque públicamente”³³⁶. Por tanto, el teniente coronel afirma el protagonismo *histórico* de la Providencia divina (que ilustra con diversos ejemplos bíblicos del Antiguo Testamento) e intenta convertir el debate, aunque sólo fuere de manera provisional, en la celebración de una *ceremonia religiosa*, proponiendo una jornada de oración.

El instante vino a recordar a los reunidos su bagaje común, puritano, justo cuando se había producido una fuerte discusión entre Wildman y Rainsborough, de una parte, e Ireton y Cromwell, de otra. Lo que las palabras no podían solventar quizás pudiera resolverlo Dios, la inspiración divina. Este discurso religioso surgió varias veces en Putney, y fue muy utilizado por varios intervinientes. Algunos agitadores lo

³³⁴ Woodhouse, *op. cit.*, pg. 20. El “partido” de Londres no era otro que el presbiteriano. La petición del *New Model* para que once de sus miembros fueran expulsados de sede parlamentaria fue incluida en su Declaración de 14 de junio de 1647, como ya hemos visto (pg. 86, *supra*). A finales de julio, tras el intento fallido de los presbiterianos por frenar la aproximación del Ejército a la City mediante una milicia propia, varios hombres del Parlamento abandonaron finalmente las Cámaras (entre los días 16 y 20 de agosto: *vid. Timetable*).

³³⁵ Woodhouse, 1986, pg. 20. Paul Janet dice en su *Philosophie de la Revolution francaise* (París, 1892): “Cuando los acontecimientos [...] provocan, por su inesperada grandeza, el asombro, la admiración, el temor, sucede entonces que el pensador y el creyente difícilmente escapan a la tentación de ver en estas grandes crisis la presencia viva y la mano terrible de la Providencia”. Cit. por Poliakov, León: *Le Causalité Diabolique. Essai sur l'origine des persécutions*, Paris, Calmann-Lévy, 1980; trad. cast. (s.n.), por donde se cita, *La Causalidad Diabólica. Ensayo sobre el Origen de las Persecuciones*, Barcelona, Muchnik Editores, 1982, pg. 15).

³³⁶ Woodhouse, *op. cit.*, pp. 20 y 21.

interrumpieron varias veces, más inclinados como estaban a una visión secularizadora³³⁷.

Sobre esa secularización debe señalarse algo de relevancia. Como ya hemos visto, la fuente calvinista del puritanismo apoyaba un ideal eclesiástico: la “comunidad santa” (*holy community*)³³⁸. “Pura” en su doctrina, y ejemplo de vida social, esta expresión religiosa situaba al hombre en dos enclaves: el mundano, donde la especie aparece sujeta a la naturaleza, y el orden de la gracia, al que sólo corresponden los elegidos. Ambos se encuentran unificados por el mandato divino³³⁹, *pero sólo en última instancia*. La *escisión* secularizadora ya se había producido, de cualquier modo. Y sin embargo, daba lugar a dos diferentes vías. Una era la de los *levellers*, defensora de una extensa libertad religiosa y bajo una *organización democrática del poder*. Los niveladores habían asumido el modelo decisional congregacionalista, que incluía la elección de sus ministros, *trasladándolo al plano político secular*. No ocurrió lo mismo con la tendencia “milenarista”. Creyendo que una especie de “Apocalipsis” iba a suceder, junto con la venida del “Reino”, algunos hombres del *New Model* simpatizaron con la idea de un gobierno ejercido por los “Santos”. Así, el teniente coronel Goffe de nuevo va a exponer en Putney ese proyecto político que aún aparecía de manera inconsciente, pero que luego surgirá con fuerza en el efímero período de la “Quinta Monarquía”³⁴⁰: “[e]n la Revelación quedó dicho que los reyes de la tierra transmitirían su poder a la Bestia, y los reyes de la tierra han dado su poder al Papa. Pero algunos hombres públicos que han parecido negar al Papa la supremacía, han tomado ellos idénticas potestades a las que él sostiene detentar.” Así, la última venida del Mesías se aproxima: “ahora, Jesucristo, en su tarea de los últimos días, va a destruir esta iniquidad hasta el momento misteriosa”. Y en esta tarea tendrá “la compañía de Santos para seguirle, fieles seleccionados y reunidos [...] Muchos de ellos le han sido útiles durante estos últimos cinco o seis años”³⁴¹. El *New Model* lleva a esos “Santos” en su seno. Tal fue la deriva ideológica de la Revolución Inglesa en el período cromwelliano, más que la populista sostenida por los *levellers*³⁴².

I.2.3.3.c) La inmunidad, el punto de partida en Putney

³³⁷ Así, en determinado momento Wildman vuelve al asunto político, en un drástico contraste, a pesar de la perorata religiosa inmediatamente anterior de Cromwell (*vid. ibid.*, pg. 24). Tanto este *leveller* como el coronel Rainsborough, dos de los principales intervinientes en Putney, procuraron no “entretenerse” en sutilezas puritanas o aludiendo Dios, cosas a las que otros sí fueron más proclives, como el propio Cromwell o el ya mencionado Goffe.

³³⁸ Woodhouse, 1986, pg. 38 de la *Introduction*.

³³⁹ *Ibid.*, pg. 39.

³⁴⁰ *Vid. supra*, nota 190, pg. 58.

³⁴¹ 29 de octubre de 1647. Woodhouse, *op. cit.*, pp. 39 y 40.

³⁴² Durante los Debates de Putney, las alusiones religiosas de Cromwell fueron insistentes hasta la extenuación. A modo de ejemplo, *vid. Woodhouse, op. cit.*, pp. 15 y 23.

Edward Sexby, agitador electo por la tropa³⁴³, expuso un problema que preocupaba mucho a los soldados del *New Model Army* y que sirvió de inicial aglutinante para ellos: “[e]l origen de nuestra miseria descansa en dos cosas. Buscábamos satisfacer a todos, y eso era bueno; pero dirigiéndonos a tal fin, no lo hemos obtenido. Hemos trabajado para contentar al rey, y pienso que, excepto si entregamos nuestras cabezas, no lo conseguiremos; y hemos sostenido una casa que tiene las vigas desechas - es decir, el Parlamento, que consiste en un grupo de componentes podridos -”³⁴⁴. Se trata de una afirmación rotunda. La tropa del *New Model* considera que los parlamentarios han traicionado sus expectativas y Sexby equipara su conducta la del Rey, que sólo pretende la destrucción y aniquilamiento de las filas *ironsides*. El Ejército se había instalado en un país no acostumbrado a la nueva organización militar, y con anterioridad el reclutamiento se llevaba a cabo por “señores” que acudían en auxilio del monarca, completándose la fuerza armada con mercenarios venidos de otras naciones. Ahora el Parlamento poseía un mando centralizado cuya estructura y operatividad seguían cánones diferentes a los de la vida civil y el *New Model* guardaba su propia esfera autónoma de reglas y actuación, a semejanza de otros ejércitos extranjeros. Sin embargo, a sus jefes les parecía indispensable cierto sentido de la fidelidad a un superior, sustituyendo al Rey por el órgano parlamentario. Así, Cromwell dice en la jornada del 28 de octubre celebrada en Putney: “hemos sido requeridos por el Parlamento, porque nuestras declaraciones eran de carácter genérico, a fin de que especifiquemos lo que deseábamos expresar.”³⁴⁵ En otro instante, Ireton también hablará de “esa autoridad suprema, el Parlamento”³⁴⁶. Pero, pese a esta posición el malestar en las filas ha crecido, como demuestra la diatriba de Sexby, y el supuesto compromiso con los “representantes” parlamentarios parece haber llegado a un límite. La explicación de este fenómeno reside en el problema de la inmunidad.

Lógicamente, a lo largo de la guerra existieron tribunales de tipo militar para el enjuiciamiento de saqueos y crímenes diversos que pudieran realizar los hombres del *New Model*, bajo codificación y de acuerdo con las convenciones bélicas de tipo internacional y la “ley del país”, así como, esporádicamente, para determinadas

³⁴³ Contaba entonces con treinta y un años de edad, habiendo sido aprendiz antes de alistarse en la guerra primeramente como soldado a las órdenes de Cromwell. Más tarde, entre 1649 y 1650, ascendió de capitán a teniente coronel. Aylmer, 1970, pp. 120 y 121.

³⁴⁴ Woodhouse, *op. cit.*, pg. 2. Primera jornada (28 de octubre de 1647).

³⁴⁵ *Ibid.*, pg. 9.

³⁴⁶ *Ibid.*, pg. 29

infracciones que los civiles cometieran contra la seguridad de la tropa³⁴⁷. Pero no existía una separación clara entre aforamiento militar y civil, y menos aún la coherente compatibilidad de ambos. Era nítido y vigoroso el rechazo de la población a que los soldados fuesen un “cuerpo” escindido en su disciplina y responsabilidades. Así, se intentó conciliar la justicia castrense con una civil paralela que podía juzgarles por la comisión de delitos graves. En otros relativos a deudas e intrusiones en la propiedad, los mandos tenían la última palabra sobre si retener o no la jurisdicción. Lo cual no implicaba especial benevolencia en los casos más específicos de robo y saqueo, rigurosamente castigados por la autoridad militar si concurría prueba razonable³⁴⁸. Este difícil e inarticulado acoplamiento de jurisdicciones no satisfizo a ninguno de los interesados. La población civil creyó percibir una actitud discriminatoria contra ella y a su vez la tropa temía denuncias maliciosas desde fuera de sus filas, en medio de unos campos de batalla no siempre habitados por simpatizantes parlamentarios, sino por personas a menudo neutrales o de adscripción realista. Los hombres del *New Model* nunca defendieron que se les eximiera de castigo por las acciones de iniciativa individual, pero entendían que con otras en las cuales recibían órdenes se situaban continuamente en terreno peligroso, así que las ordenanzas de 1647³⁴⁹ intentaron protegerles en *esos supuestos*, imponiendo fuertes costas a los demandantes civiles si perdían³⁵⁰. Sin embargo, y tras esta regulación, el balance continuó siendo insatisfactorio y aquellos soldados no vieron flaquear las demandas de civiles, encarando a menudo costosos juicios³⁵¹.

Estas circunstancias, y el miedo a que la situación se recrudeciera en caso de recuperar el Rey su dirección gubernamental, fueron resortes para aglutinar las demandas políticas radicales presentadas en Putney. La inmunidad reivindicada iba directamente ligada a ellas, a un *Agreement* que podía ser esa *paramount law* que ni siquiera parlamento alguno pudiese derogar, con lo cual los *ironsides* estarían a salvo de cualquier represalia futura, inmunes al fin.

I.2.3.3.d) El contrato y las promesas

Unido al tema anterior, se encuentra el asunto del compromiso entre los miembros del *New Model Army*. Antes del 28 de octubre de 1647, momento en el cual se abrieron los Debates de Putney, los representantes del Ejército habían realizado

³⁴⁷ Donagan, Barbara: “The Army, the State and the Soldier in the English Civil War”, en Mendle, 2001, pg. 88.

³⁴⁸ *Ibid.*, pp. 89 y 90.

³⁴⁹ *Vid.* pg. 90, *supra*.

³⁵⁰ Donagan en Mendle, *op. cit.*, pp. 93 y 94.

³⁵¹ *Ibid.*, pp. 94-95.

varias declaraciones y peticiones a fin de presentarlas ante el Parlamento. Arrancaban de la intención expuesta por las Cámaras a finales de marzo de 1647 y que suponía que el *New Model* se disolviese en parte, yendo las tropas que quedaran a combatir contra los irlandeses. A partir de ese hecho, los *ironsides*, más allá de grados militares, se unen para imponer condiciones al Parlamento a cambio de su obediencia a tales medidas. A lo largo de los meses aparecen varias declaraciones al respecto, de oficiales inclusive. Sin embargo, el instante decisivo acaece cuando se celebra una reunión general del Ejército el 4 de junio de 1647 en Kentford Heath y los agitadores remiten una *Humble Representation of the dissatisfactions of the Army* a Fairfax³⁵². Al día siguiente, una nueva asamblea en la que intervienen la tropa y los principales mandos aprueba el *Solemn Engagement of the Army*, acuerdo con el que la milicia se compromete a no disgregarse hasta no ver satisfechas sus reivindicaciones de inmunidad y cobro de pagas. La *Representation of the Army* completará nueve días después estas exigencias con la afirmación de que defienden “los derechos y libertades fundamentales” de los ingleses³⁵³.

El debate de Putney se abrió³⁵⁴ con una discusión acerca de cuáles eran los acuerdos que ahora iban a guiar al Ejército. Lo inicialmente a considerar, según Ireton, era el *Case of the Army Truly Stated*³⁵⁵, pero los radicales presentan en la reunión el *Agreement of the People*, por mano de Robert Everard, agente de regimiento³⁵⁶. El teniente coronel Cromwell queda aparentemente sorprendido y dice: “en verdad, este papel contiene graves alteraciones para el gobierno del reino, alteraciones de un gobierno³⁵⁷ que ha existido, creo poder afirmar, desde que hubo nación”³⁵⁸.

A lo cual añade:

¿cómo sabemos, mientras estamos discutiendo estos asuntos, que otro grupo de hombres no se reúne y elabora un documento quizás tan plausible como este? [...] Y no sólo otro y más, sino muchos de este tipo. Siendo así, ¿cuáles piensan que serían las consecuencias de todo ello?

³⁵² *Timetable*. Vertido al castellano su nombre sería el de “Humilde Petición de las insatisfacciones del Ejército”.

³⁵³ *Vid.* pg. 62, *supra*.

³⁵⁴ El 28 de octubre de 1647.

³⁵⁵ Woodhouse, *op. cit.*, pg. 1.

³⁵⁶ Woodhouse, *ibid.*, pp. 6 y 7. Everard aparece designado como “*Buff-coat*”, por su indumentaria, en el manuscrito de Clarke.

³⁵⁷ Entiéndase por “gobierno” el conjunto de instituciones políticas existentes en Inglaterra: por aquel entonces, la tarea gubernamental, frente a la legislativa o la de enjuiciamiento, identificaba al poder, y todas las otras se reunían en ella, por encargarse de ser su brazo ejecutor. El hombre de la época hablaba de “gobierno” como sinónimo de “constitución”, como aquí es el caso, si bien constitución “antigua” (o “mixta”, término que entendemos en sentido similar al que expone Fioravanti, 1999, pp. 55-70).

³⁵⁸ “*Truly this paper does contain in it very great alterations of the very government of the kingdom, alterations from that government that it hath been under, I believe I may almost say, since it was a nation*”. Subrayado propio.

¿Acaso no la confusión? ¿No convertirían a Inglaterra en algo semejante a Suiza, un cantón contra otro, y una tierra frente a otra?'.³⁵⁹

Y poco después el propio Cromwell también dice:

pienso que no estamos sólo para considerar cuáles serían las consecuencias si únicamente existiera este papel, sino a fin de tener en cuenta los caminos y medios que persigan realizar lo propuesto: es decir, si, de acuerdo con la razón y el juicio, los espíritus y temperamento del pueblo nacional están preparados para recibirlo y marchar con él.³⁶⁰

Cromwell ha percibido que el *Agreement* es una ruptura radical en el modelo político inglés, y pasa a rechazarlo en nombre de la tradición histórica, así como negando que quienes lo han elaborado tengan categoría constituyente, e incluso poniendo en duda que el pueblo esté “preparado para apoyarlo”.

Pero el argumento decisivo aparece a continuación: “habiendo recibido su documento, consideraremos qué hacer; y antes de que lo tengamos en cuenta, es adecuado advertir en qué medida estamos obligados, y en cuál somos libres”³⁶¹; Cromwell *alude a compromisos anteriores suscritos por el Ejército*, como el *Solemn Engagement of the Army*, y en general, a las peticiones y declaraciones emanadas de la milicia.

John Wildman aprovecha entonces para disertar sobre los “pactos”; si el compromiso “no fue honesto, no obliga a las personas, así se trate de un juramento”, y pasa a defender que se discuta el *Agreement*. El Comisario General Ireton replica entonces desabridamente: “seguro que este caballero no está familiarizado con *nuestros* compromisos”³⁶² (el *leveller* no asistía como militar a Putney). Aún así, entra a discutir el asunto de los acuerdos en su dimensión abstracta, como sugiere Wildman. Si cualquiera de ellos resulta injusto, “no estoy comprometido *activamente*”; y esta regla del derecho entre particulares sirve ante la autoridad derivada de un *engagement* político. Si luego “se me requiere una cosa injusta o deshonesta, estoy tan obligado a mi compromiso que debo someterme [a él] y sufrir[lo]”, aunque no pueda hacer lo que me impone”³⁶³. Existe la posibilidad de *resistencia pasiva* frente a

³⁵⁹ Woodhouse, *op. cit.*, pp. 7 y 8.

³⁶⁰ *Ibid.*, pg. 8

³⁶¹ *Ibid.*, pg. 9.

³⁶² *Ibid.*, pg. 10; subrayado propio. Ireton, al no ser Wildman un militar, le “indica” que ya tienen ciertos compromisos quienes sí lo son. El enfrentamiento continuará a lo largo de las sucesivas jornadas.

³⁶³ *Ibid.*, pg. 11: “*I am not engaged to be so actively to that authority. Yet if I have engaged that they shall bind me by law, though afterwards I find they do require me to a thing that is not just or honest I am bound so far to my engagement that I must submit and suffer, though I cannot act and do that which their laws do*

los acuerdos injustos, pero han de padecerse, sin resistir, las consecuencias de incumplirlos. La libertad de “conciencia” interna permanece a salvo, mas posiblemente muy a costa del “cuerpo”.

El añadido posterior de Ireton requiere observaciones distintas: romper un pacto por considerarlo injusto según criterio subjetivo supone “desechar cualquier bienestar público, pues la otra parte posee mediante el compromiso [...] un beneficio si lo cumplimos, y de lo contrario, un perjuicio”³⁶⁴. Así, quienes firmaran inicialmente el *Agreement* estarían “poco obligados a soportar la autoridad propuesta en este documento”³⁶⁵, pues luego podrían basarse en una consideración de la justicia subjetiva y deslegitimadora.

Tal intervención sobre el contractualismo no supone que el Comisario General abandonase el esquema político pactista, si bien acoge una fórmula moderada, como luego se verá con el análisis del veto en las *Heads of the Proposals*. Sin defender aún sus *Propuestas*, Ireton simplemente introduce una reflexión genérica, subsumiendo en ella los supuestos del *Solemn Engagement* y las peticiones y declaraciones del Ejército, que eran unos y otras de carácter fuertemente corporativo. Condicionaban la obediencia al Parlamento a que se cumplieran ciertas condiciones. Pero no son un modelo constitucional nuevo, como tampoco, a pesar de sus pretensiones, las *Heads of the Proposals*, cuyo contenido suponía el mantenimiento de prerrogativas típicas de la constitución tradicional.

El *Agreement of the People*, en cambio, sí era innovador. Bien es cierto que recogía exigencias ya planteadas por la milicia en diferentes documentos, como la inmunidad, redistribuir escaños en las demarcaciones, que la duración de cada Parlamento fuese limitada a un período específico y la libertad religiosa. Pero el *Agreement* incluía también otros puntos: rechazo del servicio militar obligatorio, igualdad ante la ley, y que ésta no fuera “evidentemente” destructiva. Y sobre todo, indicaba un instante determinado para la disolución del *Long Parliament*, así como la fecha en que sucesivamente debían convocarse nuevas asambleas en forma bianual. El preámbulo del *Agreement* dice: “estamos totalmente de acuerdo y resueltos a procurar que de aquí en adelante nuestros representantes no sean abandonados ni a la incertidumbre sobre el período [de su mandato] ni a que pierdan su utilidad para los fines que nos proponemos.”³⁶⁶ Y por supuesto el plural se refería al “pueblo”, ya no

impose upon me.” Mi traducción al castellano señala entre corchetes un añadido necesario para comprender el texto.

³⁶⁴ *Id.*: “wherein he hath a benefit if we make it good, wherein he hath a prejudice if we make it not good [...] a principle that will take away all commonwealths”.

³⁶⁵ *Id.*

³⁶⁶ “We are fully agreed and resolved to provide that hereafter our representatives be neither left to an uncertainty for the time nor made useless to the ends for which they are intended”. Sharp, *op. cit.*, pg. 93.

sólo a los *ironsides*; recordemos que el documento era un Acuerdo “*of the People*”, no entre órganos de poder *ya preinstituidos* a la manera de la Carta Magna.

Se trata de un pacto *constituyente* que ha de ser respaldado por *todo el pueblo, como titular ahora de la supremacía*. Y esto es lo que parece advertirle a Ireton en Putney el llamado por Clarke “*Bedfordshire man*”. Este civil expone, refiriéndose a los compromisos corporativos del *New Model Army*: “confieso mi ignorancia sobre estos acuerdos; pero sospecho, o al menos espero, que estos compromisos no han dado cosa alguna perteneciente al pueblo y que sea derecho del mismo”. Y “si se ha prometido más que el propio derecho a alguna persona o personas, y concedido algo que es derecho del pueblo, entonces entiendo tal cosa como injusta”.

La dirección tradicionalista de la “constitución” inglesa es también atacada por el coronel Rainsborough³⁶⁷. El militar alude al modelo de dominación basado en la “conquista normanda”: “si los escritos dicen verdad, han existido numerosas disputas entre los hombres honestos de Inglaterra y quienes les han tiranizado”³⁶⁸. El modelo político ha de quedar *subordinado al pueblo libre*: aunque quienes han gobernado hasta el momento lo hayan hecho siempre, “si el pueblo encuentra que no son adecuados para la categoría de hombre libre que posee”, el interviniente procurará “por todos los medios conseguir algo que pudiera ser más ventajoso” en lo relativo al “gobierno bajo el que vive”³⁶⁹. Por supuesto, tal idea está hablándonos de un “pueblo” *libre, es decir con derechos y libertades de nacimiento y previos a cualquier legitimidad detentada por gobiernos cualesquiera*. Para los radicales, pues, no se trata sólo erigir un sujeto constituyente, sino de sostener derechos.

I.2.3.3.e) La *salus populi* en Putney

Un asunto de trascendencia quedaba aún por aparecer en Putney. El 28 de octubre, tras acordarse el “descanso religioso” propuesto por Goffe, Cromwell acude

Este párrafo se repetirá en el segundo *Agreement*, según indica el propio Woodhouse, *op. cit.*, pg. 356. Se comprueba mediante el documento de Gardiner, *op. cit.*, contenido en <<http://www.constitution.org/eng/conpur074.htm>>, pp. 333-34 de su edición en libro.

³⁶⁷ Thomas Rainsborough, cuyo apellido fue erróneamente transcrito en los Debates por aproximación fonética (“*Rainborough*”, allí), fue descendiente de marineros y servía en la armada inglesa. No se conoce conexión alguna del oficial con los *levellers* anterior a Putney (Aylmer, G. E., 1970, pg. 123). Fue asesinado en Doncaster por monárquicos, cuando intentaban secuestrarle, el 31 de octubre de 1648 (Plant, *op. cit.*).

³⁶⁸ Woodhouse, *op. cit.*, pg. 14.

³⁶⁹ *Id.*: “*But even if they were those which the people have been always under, if the people find that they are not suitable to freemen as they are, I know no reason that should deter me, either in what I must answer before God or the world, from endeavouring by all means to gain anything that might be of more advantage to them than the government under which they live*”.

nuevamente a su reflexión “piadosa”³⁷⁰, pero John Wildman retoma el asunto del pacto, sin eludir el enfrentamiento con los Grandes.

Sobre este punto afirma que la perspectiva de obedecer acuerdos en el área política, aunque sean injustos, puede atacar la autopreservación. Al *leveller* le parece “peligroso” sostener que si el Parlamento “hace algo injustamente” se está obligado a “someterse a las leyes que apruebe”. Según los “principios del derecho y la libertad, y las Leyes de la Naturaleza y de las Naciones”, los hombres pueden protegerse cuando “las personas a quien la autoridad pertenecía fracasaran en hacerlo”³⁷¹. La *salus populi* aparece así para justificar el retorno a la naturaleza cuando se es arrojado a un estado de necesidad. Si el gobierno de la nación no puede cumplir su parte del trato en este punto, el pueblo no le debe obediencia. No sólo la conducta activa de los gobernantes, sino también la pasiva, es causa para la rebeldía. El telón de fondo aquí, aunque puedan extenderse los casos a cualquier vulneración de los derechos y libertades, es el problema de la inmunidad.

Ireton replica con su teoría sobre los compromisos: “no hay fundamento para el derecho que yo conozca” que no sea el de “que debemos conservar los acuerdos hechos unos con los otros”, añadiendo que en cualquier otro plano ignora qué significa. Después afirma: “estamos bajo un pacto, y es el de que si un hombre tiene tierras que ha recibido por transmisión de sus antecesores, la ley le reconoce su derecho”, pues de lo contrario se desencadena la anarquía, ya que “por la Ley de la Naturaleza usted no posee más derecho (*more right*) a esta tierra o a otra que el que yo mismo tengo”. Para impedir esta situación los hombres rubrican un pacto por el que se someten “a la autoridad que resulta establecida entre nosotros a fin de mantener la paz”³⁷².

Tenemos, pues, que Ireton liga *directamente* el derecho de los poseedores al espacio para la decisión política, pues el gobierno resulta instituido a fin de mantener a los seres humanos en el pacífico goce de su propiedad. *Este es el núcleo del modelo sostenido por Ireton*. Por ello se empeña en contrarrestar otras afirmaciones vertidas en Putney. Tanto el “*Bedfordshire man*” como Rainsborough han *hablado de unos derechos preexistentes a la institución de gobierno alguno sin tener en cuenta el “reparto previo” de propiedades*. Este radicalismo estaba separando fortuna social y participación política. ¿Hasta sus últimas consecuencias, defendiendo el derecho al voto para todos? Ahora se ofrecerá una posible respuesta al interrogante.

³⁷⁰ Woodhouse, *op. cit.*, pg. 23.

³⁷¹ *Ibid.*, pg. 24.

³⁷² *Ibid.*, pg. 26.

I.2.3.3.f) El sufragio

Ante la presión radical, el 29 de octubre se pasó a discutir el *Agreement of the People*. Ireton da pie a la controversia del día. Si lo relativo a la redistribución de escaños en los Comunes debía hacerse teniendo en cuenta el número total de habitantes, sin restricción alguna, el Comisario General se declaraba en contra. Para Ireton sólo resulta válida la “constitución civil del reino”, que limitaba en Inglaterra la condición de votante hasta entonces. Tal ley electoral provenía de un Acta (*act*) aprobada bajo Enrique VI (año 1430), según el cual los electores debían ser varones mayores de edad residentes en el condado, *freeholders*, y con un ingreso de al menos cuarenta chelines anuales, una vez deducidas las cargas y gravámenes que correspondieran³⁷³. Por tanto, las limitaciones eran de dos tipos: una referente a la propiedad, y otra al ingreso obtenido.

Con respecto a la redistribución de escaños, tanto Grandes como radicales estaban de acuerdo, como probaba el contenido de la *Head of the Proposals* y diversas alusiones en Putney, pero no con la *titularidad* del derecho a la representación política, es decir, diferían en el concepto de “habitante”. ¿Por qué?. Examinemos, a la luz de Putney, que ocurría en aquellos momentos con el “electorado”.

El enfrentamiento emana de lo que entendían unos y otros por tal término. Ireton ha aludido a la antigua norma, y pasa a concretarla enseguida: “pienso que ninguna persona tiene derecho a un interés o participación en los asuntos del reino, y en determinar o elegir a quienes especificarán a qué leyes nos someteremos”, si “no tiene un *interés establecido y permanente en este reino*”³⁷⁴. Matiza la afirmación aseverando, eso sí, que los ingleses poseen derechos innatos a que se les conceda “aire, lugar, suelo, la libertad de los caminos y otras cosas” aun en el caso de no disfruten de “porción alguna en el interés permanente del reino.”³⁷⁵. Después expone un paralelismo entre la categoría de quienes se encuentran sin derecho a la representación y los extranjeros: “si un extranjero llega a este reino, tendrá libertad para residir aquí, y, ciertamente, como ser humano, tiene aire, la libertad de los

³⁷³ Maitland, *op. cit.*, pg. 173. Tal limitación en lo relativo a suma dineraria, se debió, según el autor, a la importación de plata americana, que tuvo efectos inflacionistas (*vid. id.*).

³⁷⁴ “*I think that no person hath a right to an interest or share in the disposing of the affairs of the kingdom, and in determining or choosing those that shall determine what laws we shall be ruled by here*”, pues “*that hath not a permanent fixed interest in this kingdom*” (Woodhouse, *op. cit.*, pp. 53 y 54; el subrayado es nuestro).

³⁷⁵ “*Men may justly have by birthright, by their very being born in England, that we should not seclude them out of England, that we should not refuse to give them air and place and ground, and the freedom of the highways and other things, to live amongst us - not any man that is born here, though by his birth there come nothing at all (that is part of the permanent interest of this kingdom) to him*”. *Ibid.*, pg. 54.

caminos, protección de las leyes, todo por naturaleza; no le expulsaremos de nuestras costas, ni le impediremos permanecer entre nosotros, ni le daremos muerte porque llegue a nuestra tierra, viaje por nuestro río, arribe a nuestro puerto. Es una obra de hospitalidad, de humanidad, recibirle entre nosotros". El forastero, sin embargo, "estará de acuerdo en someterse a la ley de esta tierra, es decir, la aprobada por la gente que tiene una [...] propiedad estable en el país"³⁷⁶.

Este paralelismo entre extranjero e inglés sin derecho a la "representación", debió resultar insultante para los *ironsides* más modestos de Putney. Se estaba negando a muchos de humilde condición que habían luchado por el Parlamento el derecho a ser electores, nada menos que equiparándoles a un foráneo que no había participado en la guerra civil. No resulta extraño que entonces William Sexby afirme:

advierdo que aunque nuestro fin era la libertad, hay un deterioro de tal pretensión. Nos hemos comprometido con este reino y arriesgado la vida para recobrar nuestros derechos de nacimiento y privilegios como ingleses; y con lo expuesto resulta que no existe ninguno. Hay varios miles de nosotros, soldados, que han arriesgado sus vidas; aunque teníamos escasa porción de propiedad en el país con nuestras fortunas, estábamos en posesión de un derecho por nacimiento. Pero parece que ahora, excepto quien tenga una propiedad permanente en este reino, nadie goza de derecho en el mismo. Me sorprende de que estuviésemos tan engañados.

La amarga ironía de William Sexby, sin embargo, pronto pasa a convertirse en una advertencia: "le expondré brevemente mi decisión. Estoy resuelto a no entregar mi derecho de nacimiento a nadie"³⁷⁷.

Así, aquella exclusión de Ireton no convencía a los radicales y toda la avalancha de réplicas contra sus postulados se produce a lo largo de toda la jornada. Rainsborough dice:

pienso que el más pobre de Inglaterra tiene una vida, como el más grande; y por lo tanto, señor, pienso que resulta claro el hecho de que todo hombre que vaya a vivir bajo un gobierno debería

³⁷⁶ "If a foreigner come within this kingdom, if that stranger will have liberty [to dwell here] who hath no local interest here, he, as a man, it's true, hath air, [the passage of highways, the protection of laws, and all] that by nature; we must not expel [him] our coasts, give him no being amongst us, nor kill him because he comes upon our land, comes up our stream, arrives at our shore. It is a piece of hospitality, of humanity, to receive that man amongst us" (*ibid.*, pg. 66). Lo que hay entre corchetes son anotaciones de Woodhouse para aclarar el texto.

³⁷⁷ "I see that though liberty were our end, there is a degeneration from it. We have engaged in this kingdom and ventured our lives, and it was all for this: to recover our birthrights and privileges as Englishmen; and by the arguments urged there is none. There are many thousands of us soldiers that have ventured our lives; we have had little propriety in the kingdom as to our estates, yet we have had a birthright. But it seems now, except a man hath a fixed estate in this kingdom, he hath no right in this kingdom. I wonder we were so much deceived." Y "I shall tell you in a word my resolution. I am resolved to give my birthright to none". Ambas declaraciones, *ibid.*, pg. 69.

primero someterse al mismo mediante consentimiento; opino que el hombre más humilde de Inglaterra no se encuentra estrictamente obligado al gobierno en relación con el cual no haya tenido voz para subordinarse.³⁷⁸

Jonh Wildman sostiene idéntica postura³⁷⁹, afirmando Maximilian Petty³⁸⁰: “si existe una constitución según la cual el pueblo no es libre, *ha de ser revocada*. La establecida es de cuarenta chelines al año, pero no hace libre al pueblo.”³⁸¹.

Ireton insistirá a lo largo del día en unir propiedad “permanente” y elección de representantes. Los mandos del *New Model* temían que este derecho se extendiera. En determinado momento el coronel Nathaniel Rich será quien mejor exponga tal temor. “Quizás ocurra que por ley la mayoría [...] destruya la propiedad”³⁸².

Frente a tal actitud recelosa surge la crítica opuesta a un Acta que mantiene la extensión del voto restringida. Sus valedores, *levellers* y agentes de los regimientos, pugnan por conceder el sufragio a un mayor número de personas ¿Hasta dónde querían ampliar ese derecho, y por qué?

La escuela radical de la Revolución provenía de una experiencia concreta plagada de panfletos y activismo, de realidades dispersas que se iban a agrupar bajo el primer *Agreement*. Habiendo existido la cualificación para elegir representantes desde 1430, durante el reinado de Jacobo I la *gentry* vislumbra que la extensión del voto podía ser un sostén de relevancia para sus aspiraciones políticas. El *Godwin's case* de 1604 permitió a los Comunes la supervisión de los procesos electorales, apartando de ello a la *Star Chamber*, y desde ese momento la amplitud del sufragio aumentó más de lo que por sí sola la inflación había permitido. Los cuarenta chelines ya eran cifra devaluada, justo paralelamente a lo que ocurría con numerosas rentas satisfechas de forma periódica en el campo, ambas contribuyendo a elevar el número de personas que serían consideradas *freemen*. Con la extensión del voto a un grupo más numeroso, los reducidos contingentes electorales del inicio pasaron a convertirse en otros que podían alcanzar los cuatro mil individuos en una demarcación, originando

³⁷⁸ “I think that *the poorest he that is in England hath a life to live, as the greatest he; and therefore truly, sir, I think it's clear, that every man that is to live under a government ought first by his own consent to put himself under that government; and I do think that the poorest man in England is not at all bound in a strict sense to that government that he hath not had a voice to put himself under*”. *Ibid.*, pg. 53. Subrayado propio. *Vid.* nota 240, pg. 67, *supra*, donde Lilburne se expresa igual en su *Innocency and Truth Justified*.

³⁷⁹ Casi palabra por palabra: “toda persona tiene un derecho en Inglaterra tan claro a elegir su representante como aquel de más importancia”. Woodhouse, *op. cit.*, pg. 66.

³⁸⁰ Petty era del grupo *leveller*, y había trabajado como aprendiz. Nacido alrededor de 1618, con lo cual en los Debates tendría sobre unos treinta años, su intervención nos sirve para clarificar hasta dónde llegaban los niveladores en su defensa del sufragio, como ahora pasaremos a ver. Los datos biográficos (muy pocos) están en Aylmer, 1970, pg. 120.

³⁸¹ Woodhouse, *op. cit.*, pg. 78. “If there is such a constitution that the people are not free, that constitution should be annulled. That constitution which is now set up is a constitution of forty shillings a year, but this constitution doth not make the people free”.

³⁸² *Ibid.*, pg. 63.

incertidumbre en los resultados, a diferencia de situaciones anteriores en las que imperaba cierta relación clientelar. La *gentry* introdujo sus candidatos en la nueva competición por el poder, e intensificó sus esfuerzos por aumentar los sufragios que podían auparla de manera más firme en el Parlamento, e incluso solventar rivalidades de carácter personal, político y religioso existentes en su seno. Pero también otro tema resulta destacado en este asunto: las aglomeraciones urbanas.

En efecto, y como ya vimos, los burgos podían tener representantes propios en los Comunes. Sin embargo, en muchas ocasiones las ciudades no deseaban pagarles o no disponían fondos para hacerlo, con lo cual sus delegados abandonaban el cometido parlamentario. Tal eventualidad quedaba suprimida cuando existían Cartas de la Corona concediendo una representación permanente: en tales ejemplos, los cortesanos dirigían el patrocinio de ciertas localidades, bajo una relación clientelar en la cual los burgueses principales elegían de manera automática a los candidatos de la Corte. Pero entre 1621 y 1628, la *gentry* que se había instalado en las ciudades al margen de la oligarquía tradicional, amparada en el nuevo control instaurado por el *Godwin's case*, comenzó a recuperar burgos “olvidados”. Implantaron en ellos como calificación única para elegir delegados el pago del *scot and lot*, impuesto local, o, en bastantes ocasiones, el mero hecho de disponer de vivienda³⁸³. Esta operación fue dirigida por los Comunes, que sin embargo escogían un doble camino: el principio fundamental era extender el sufragio a todos los habitantes, pero quedaba limitado a urbes específicas en donde la *gentry* tuviese mayor influencia sobre el potencial electorado, de intenso tráfico mercantil y aunque fueran poco pobladas³⁸⁴. Tal objetivo supuso la desigualdad a la que aludían los radicales en la proporción de electores, según se estuviera en una u otra localidad, y resultó agravada más aún por los “burgos de la Corona”³⁸⁵. Por lo tanto, aunque los dos grupos de Putney mantuvieran el criterio de redistribuir los escaños de Inglaterra y coincidiesen en atacar a las oligarquías municipales de real cobijo, no estaban de acuerdo acerca de la alteración del electorado en ciudades dominadas por la *gentry*.

Así, en Putney afloró un problema sobre el “interés permanente y estable en el reino”, que Ireton defendía como calificación para el sufragio. Entendía que el sujeto del derecho político por antonomasia era el *freeholder*, el “poseedor libre”, pero esta categorización daba a entender ciertas exclusiones y sumergía en la penumbra otras.

³⁸³ Plumb, John. H.: “The Growth of the Electorate in England from 1600 to 1715”, *Past & Present*, n. 45, Oxford, Past & Present Society, nov. 1969, pg. 98.

³⁸⁴ *Ibid.*, pg. 99. Morgan, *op. cit.*, pg. 42.

³⁸⁵ Rainsborough dirá en Putney: “[n]o encuentro en la Ley de Dios que un *lord* elija veinte burgueses, un caballero dos, y un hombre pobre ninguno”, refiriéndose a las patentes reales que tenían algunas urbes frente a otras y que canalizaban la intervención del círculo cercano al trono (Woodhouse, *op. cit.*, pg. 56).

El vasallaje feudal estricto había desaparecido³⁸⁶, pero además de permanecer “secuelas” sociales aún extendidas, como el *leasehold* y el *copyhold*, gran parte de su población era ahora asalariada, sirviente o mendiga. Los *levellers* y agitadores pedían en el primer *Agreement* una proporción de escaños según el número de “*inhabitants*” (habitantes) de cada lugar. Esta reivindicación, frente a la estrategia de los Comunes antes mencionada con respecto a los burgos, implicaba pasar a un sufragio que no siguiera un cómputo por pago de impuestos, sino simplemente por *residencia*, lo cual en una ciudad de entonces suponía automáticamente sólo la posesión de una casa, estar al frente de ella. A su vez ese *householder*, tanto en el campo como en la urbe, podía ocurrir que tuviera una serie de personas dependiendo de él. Un *pater familias* tendría a su cargo a menores y esposas, ¿también sirvientes y asalariados?. El término “*inhabitant*” empleado por el *Agreement* dejaba lugar para la duda, e Ireton rechazaba su posible connotación incluyente. Los argumentos para ello fueron dos: la teoría sobre la “dependencia” y el rechazo a que una posible mayoría despojase de la propiedad a los más ricos. Paso a examinar la primera.

Toda la coalición político-social que luchaba por los “derechos y libertades ingleses” poseía un *ethos* característico, basado en la idea de “independencia”, la falta de sometimiento a esclavitud, vasallaje o arbitrariedad alguna. Este *ethos* se extendía desde un sector muy importante de la *gentry* pudiente hasta los *yeomen*, artesanos y tenderos, y podía relacionarse con la famosa teoría romano-republicana aplicable a pueblos e individuos. El esclavo siempre tenía un *dominus*, y por tanto, su voluntad no se encontraba sometida al imperio de la ley, sino a los deseos caprichosos de su señor, y aunque éste soliera obrar de forma benévola, siempre permanecería la amenaza latente de alguna arbitrariedad. *No le correspondía la condición de sujeto sometido únicamente a la ley.*³⁸⁷. Alusiones a ese indeseable estado son continuas en toda la literatura política de la época. Por citar algunos ejemplos: Wildman en *The Case of the Army Truly Stated* (“*como sea que aparece en las leyes positivas y antiguas y justas costumbres, que el pueblo tiene derecho a sucesivas elecciones de Parlamentos* en determinados períodos de tiempo, y que esto no se le

³⁸⁶ Así, Cowling afirma en Putney: “los Comunes de Inglaterra estaban abrumados por los Lores, que disponían de muchos vasallos, pero [...] ahora las cosas no son de esa manera: todos los esclavos han comprado sus libertades”. *Ibid.*, pg. 64 : “*the Commons of England were overpowered by the Lords, who had abundance of vassals, but [...] Now the case is not so: all slaves have bought their freedoms*”. La noción de “independencia” quedaba vinculada a la del “yugo normando”. Wildman también acude a este modelo explicativo: “hemos estado bajo esclavitud [...] nuestras leyes estaban hechas por nuestros conquistadores” (*ibid.*, pg. 65).

³⁸⁷ Mi exposición concuerda con la de Skinner, en su *Liberty before Liberalism* (Cambridge, Cambridge University Press, 1998; pp. 1-16, especialmente), que por otro lado no es nueva en este análisis, pues Schulz ya la menciona en su *Principios del Derecho Romano* de 1934, pp. 163-64 (cito por la ed. en castellano, Madrid, Civitas, 1980). El *Digesto*, como ambos señalan, en su Lib. I, tít. 5, par. 4, prescribía: “la libertad es la facultad natural de hacer lo que uno desee, a menos que esa acción esté prohibida por la ley” (subrayado propio).

debería negar, siendo tan esencial a su libertad que sin ello no es más que *esclavo*³⁸⁸), el inicio del primer *Agreement* (donde se explica que sus objetivos son “evitar el peligro de *volver* a una *condición esclava* y el pesado remedio de otra guerra”³⁸⁹), Lilburne en *Londons Liberty in Chains discovered* (“desconozco el motivo por el cual, a menos que se pueda probar que sois todos *esclavos* y *vasallos*, debais ser regidos por las determinaciones, órdenes y decretos de estos a quienes no habeis elegido”) ³⁹⁰, Rainsborough en los Debates³⁹¹.

Pero la noción de “independencia” no pertenecía sólo a *levellers* y agitadores. En Putney, Ireton, tras especificar que los mercaderes son hombres con interés estable en el reino, *freeholders*, ejemplifica la categoría: “hombres libres sin dependencia”³⁹². Pero a pesar de este punto coincidente, el forcejeo sobre los derechos de sufragio continuó. Los radicales prosiguieron atacando la antigua norma electoral, hasta que Ireton termina por cesar en su defensa e insiste ya sólo en que se considere la cuestión de la propiedad, abandonando el famoso requisito de los cuarenta chelines³⁹³.

A continuación surge otro asunto velado hasta el momento, al afirmar Cromwell que “quizás una parte importante de los *copyholders* por herencia deberían tener voz”³⁹⁴. Como residuo de la Inglaterra medieval, aún sobrevivía tal institución jurídica, y ya hemos visto antes que existía una pugna entre el rentista de esa enfiteusis y quien ocupaba la tierra de manera inmediata³⁹⁵. A pesar de ello, el *copyholder* gozaba de cierta discrecionalidad para transmitir su posición *inter vivos* o *mortis causa*, mediante el pago de un laudemio. Sin embargo, no se le consideraba *freeholder*. Los radicales, pese a considerar acertada la teoría de la “independencia”, entendían que los enfiteutas eran *freemen*, y en consecuencia propugnaban su derecho al voto. Lilburne, a finales de 1648, y casi simultáneamente el llamado *Great Agreement* de John Jubbbs, pidieron la abolición de la enfiteusis a fin de que se convirtiera para el poseedor inmediato en propiedad plena. Tanto un autor como otro suponían posible transformar la injusta situación con auxilio de la ley. Cromwell, como acabamos de

³⁸⁸ Woodhouse, *op. cit.*, pg. 433.

³⁸⁹ Gardiner, 1906, pg. 333.

³⁹⁰ Cit. por Frank, 1969, pg. 93.

³⁹¹ Cuando ironiza sobre la antigua ley de Inglaterra sobre el sufragio a la que se refiere Ireton: “esa que esclaviza al pueblo”. En Woodhouse, *op. cit.*, pg. 61.

³⁹² *Ibid.*, pg. 58.

³⁹³ *Ibid.*, pp. 61-73.

³⁹⁴ “*Perhaps there are a very considerable part of copyholders by inheritance that ought to have a voice*” (*ibid.*, pg. 73).

³⁹⁵ *Vid.* pp. 37 y 38, *supra*.

observar, abogó en Putney, sin embargo, por un término medio consistente en que al *copyholder* pudiera considerársele “hombre libre” a partir de la segunda generación³⁹⁶.

La disputa sobre el derecho a elegir delegados al Parlamento condujo precisamente al teniente general a imprimir un giro a los Debates. Percibe que el argumento de su cuñado sobre la dependencia es compartido por el resto de los intervinientes, pese a sus protestas con respecto a la vieja ley electoral, así que interroga acerca del cambio de la misma: “si nosotros tenemos que alterar estas cosas, no pienso que debamos combatir por cada propuesta específica. Los sirvientes, como tales, no quedan incluidos. ¿Están de acuerdo ustedes entonces en que tampoco quien reciba limosnas?”.³⁹⁷ El teniente coronel Thomas Reade parece contestar negativamente: “no veo causa por la cual un hombre que es nativo deba ser excluido de ese privilegio, a menos que sea siervo voluntario.”³⁹⁸ Y Petty puntualiza: “Entiendo que la razón por la cual excluyamos aprendices, o sirvientes, o a quienes recogen limosna, es la de que *dependen del deseo de otro hombre y temen desagradarle*. Sirvientes y aprendices quedan en el ámbito de sus amos, y así ocurre con quienes reciben limosnas de puerta a puerta; pero si hubiera algún modo general de que no estuviesen ligados así a la voluntad de otro hombre, sería bueno”³⁹⁹. Por tanto, parece que los intervinientes se encuentran a punto de acordar quién es el sujeto elector, mas no sin matizaciones ni reticencias.

La sorpresa para quien lee los Debates es que no se dice una palabra más sobre el asunto, pasándose a otro de inmediato, en relación con el supuesto e inminente peligro que acecha al *New Model*⁴⁰⁰. Sólo se podrá advertir, un poco más adelante, que Rainsborough menciona algo relativo a una propuesta de requerir el ingreso de veinte libras anuales para ejercer el voto⁴⁰¹.

La conclusión a la que llegamos es que los más radicales no admitían la vieja ley del sufragio, pero estaban dispuestos a negociar quién podría ser elector. Como demuestran *Agreements* posteriores, aunque rechazaron la barrera monetaria para este derecho, sí asumieron la teoría de la “independencia”. Sus motivaciones fueron en parte de cálculo político, pues percibieron que ciertas categorías de la población no

³⁹⁶ Se hacía eco probablemente de una opinión muy extendida. En 1621, los Comunes hicieron un proyecto de ley para regular las elecciones, que contenía una cláusula por la cual no sólo se incluía al *freeholder* de los cuarenta chelines, sino también a los enfiteutas por herencia con ingresos de diez libras anuales (Plumb, *op. cit.*, pg. 96).

³⁹⁷ “If we should go about to alter these things, I do not think that we are bound to fight for every particular proposition. Servants, while servants, are not included. Then you agree that he that receives alms is to be excluded?”. Woodhouse, *op. cit.*, pg. 82.

³⁹⁸ *Ibid.*, pp. 82 y 83.

³⁹⁹ *Ibid.*, pg. 83. Subrayados propios.

⁴⁰⁰ Tan sólo, varias páginas más adelante (*ibid.*, pg. 114), Rainsborough se refiere a una propuesta (¿de Ireton?) para requerir un ingreso de veinte libras anuales, pero no hay posteriores comentarios sobre ello.

⁴⁰¹ Woodhouse, *ibid.*, pg. 114.

van a tener gran peso en la lucha contra el antiguo esquema constitucional y sus privilegios y que sin embargo con aquel pequeño coste podrían ofrecer calma a la *gentry* y los Grandes. Eso sí, la tendencia radical fue más inclusiva que el criterio representado por Ireton, quien con sus *Heads of the Proposals* había pretendido la concesión de voto según gravámenes impositivos satisfechos (es decir, el sufragio censitario)⁴⁰².

También puede afirmarse que el discurso de Petty en Putney⁴⁰³, la abolición enfiteútica propugnada por Lilburne y Jubbes, el rechazo *leveller* a los cercamientos de tierras comunales y la propuesta de Overton para crear hospitales dedicados a la asistencia social⁴⁰⁴, implican que los radicales buscaban algún “modo” de perseguir que la “dependencia” fuese eliminada para un número más amplio de personas que el que entonces estaba liberado de sus efectos.

I.2.3.3.g) El veto de los Lores y del Rey

Al final de la jornada del 29 de octubre, Ireton intentó recobrar su proyecto constitucional, *The Heads of the Proposals*, frente a la pugna de agitadores y *levellers* por atenerse al *Agreement of The People*. Así, aparenta sorpresa al exponer que ambos documentos no se diferencian sustancialmente, pues las *Proposals* contenían un nuevo derecho a la representación (censitario) y la solicitud de que el Parlamento se disolviera en el período máximo de doce meses. Pero tampoco puede obviar que su proyecto incluye aún el viejo sistema político, donde los Lores y el Rey mantienen su anterior posición privilegiada de veto contra cualquier *bill* de los Comunes⁴⁰⁵.

Para Maximilian Petty esta potestad no resulta defendible. Lo apropiado es que el pueblo sea el único sujeto con capacidad legítima para aprobar las normas del país. “Pienso que es razonable que todas las leyes estén elaboradas con su sola aceptación”. Y añade: “el poder tanto de los Lores como del Rey fue siempre una rama de la tiranía”⁴⁰⁶. John Wildman respalda esta postura y afirma que cuando la milicia es organizada bajo sus órdenes se conforma un suelo político inestable⁴⁰⁷. Con el añadido de que la inmunidad para los *ironsides* por su conducta bélica sería muy dudosa, pues cualquier ley que se aprobase por la Asamblea podría sufrir el veto real y los soldados sufrir el amargo destino de la horca. Tal es la causa de que sea

⁴⁰² *Ibid*, pg. 85.

⁴⁰³ *Vid. supra*, una pg. más atrás.

⁴⁰⁴ Para pobres, inválidos y ancianos: *An Appeal from the Commons to the Free People* (Richard Overton, 1647), en Woodhouse, *op. cit.*, pp. 337 y 338.

⁴⁰⁵ Woodhouse, *op. cit.*, pp. 88 y 89.

⁴⁰⁶ *Ibid*, pg. 89.

⁴⁰⁷ *Ibid.*, pg. 90.

necesaria una *paramount law* “entre el Parlamento y el pueblo”, posibilitando que los soldados queden exentos de responder a las acusaciones revanchistas por haber peleado contra el Rey⁴⁰⁸.

Ireton sabe que lleva las de perder en este asunto, considerando la exaltación antimonárquica de Putney, y opta por negar, en un acto de logomaquia, que las *Proposals* concedan veto a Carlos I. Así, de una lectura de las mismas se deduce que los Comunes disfrutaban de exclusividad acerca de los asuntos relacionados con las elecciones, pero en todos los restantes pueden verse obstaculizados por el veto real⁴⁰⁹.

Con el paréntesis de reunir un comité nombrado para concluir reuniones paralelas que permitan acercarse a posibles acuerdos, los Debates se reanudan el 1 de noviembre, y la discusión acerca del veto continúa. Wildman alude a este mecanismo, cuando lo hace respecto a quienes desean “preservar la persona del Rey y las de los Lores” tanto como resulte “compatible con la seguridad o el bien del reino”, y entendiendo que el veto resulta “inconsistente con la seguridad del pueblo”, ya que esta última ley “es suprema sobre todas las consideraciones”⁴¹⁰.

Ireton extrae entonces de nuevo su teoría del “interés”, es decir, de la “propiedad”. La Cámara Alta y el soberano poseen un interés particularísimo en el reino, según la constitución antigua (*ancient constitution*⁴¹¹). Pero Wildman niega validez a tal argumentación: no puede haber derecho de veto, porque implica un *poder* “usurpado”⁴¹²; el *leveller* sostiene la *supremacía del pueblo* y rechaza la tradición de la constitución mixta que une condición estamental y correlativa pertenencia a un órgano político. Como hemos visto al hablar del sufragio, el poder y los estamentos, e incluso poder y propiedades, quedan escindidos en el discurso radical.

Ireton intenta, sin embargo, mantener sus premisas de manera porfiada; una siguiente propuesta del Comisario es la de conservar el veto de Lores y Rey sólo en lo que concerniera a leyes que afectasen a sus personas o posesiones. Y ello en consonancia con su defensa del “interés permanente en el reino”. Así, los miembros de la Cámara Alta únicamente podrían ser juzgados por sus pares⁴¹³.

⁴⁰⁸ *Ibid.*, pg. 91.

⁴⁰⁹ *Ibid.*, pp. 422-26.

⁴¹⁰ John Wildman: “some did desire to preserve the person of the King and person[s] of the Lords, so far as it was [consistent] with [the] safety or the good of the kingdom, and other persons do conceive that the preservation of the King or Lords was inconsistent with the people's safety, and that law to be paramount [to] all [considerations]”. *Ibid.*, pg. 108.

⁴¹¹ *Ibid.*, pg. 119.

⁴¹² *Ibid.*, pg. 110.

⁴¹³ *Ibid.*, pg. 115.

Wildman replica poco después que cualquier acuerdo entre los presentes reunidos en Putney “nunca satisfará al piadoso pueblo del reino a menos que *todo* el gobierno permanezca en los Comunes”⁴¹⁴.

I.2.3.4. El segundo *Agreement*, y el *Officer's Agreement*

I.2.3.4.a) Antecedentes inmediatos

Mientras se desarrollaban los Debates de Putney, el Rey proseguía rechazando la concordia con el Parlamento. Por su parte, los escoceses envían emisarios el 5 de noviembre de 1647 para prometer apoyo a Carlos I y el día 11 el monarca huye de Hampton Court, donde estaba custodiado por el *New Model Army*⁴¹⁵. Aunque se refugia en la Isla de Wight, que pertenecía al dominio de las Cámaras, su objetivo era conseguir que se moderase el control sobre sus movimientos.

Esta maniobra fue sin duda tan extraña como lo era una situación difícil de asumir por los Grandes y la Asamblea. Cuando Joyce había capturado a Carlos I a primeros de junio⁴¹⁶, dijo que tal cosa era a fin de garantizar su seguridad. Quien había iniciado la guerra contra los parlamentarios aparecía como persona digna de su protección. Pero tal extremo no resulta chocante si consideramos que para un inglés de la época, en general, y salvando los manifiestos radicales correspondientes, la monarquía estaba inscrita en el corazón del reino, y no se entendía otro sistema político alternativo que no contara con ella. Un hábito mental que por supuesto en nada borra otros factores; los parlamentarios, como hemos visto, sufrían diversas fracturas de índole religiosa, los Grandes aparecían casi como “tercera fuerza”, y para colmo había un cuarto “actor”, Escocia, que tampoco estaba a salvo de algunos conflictos internos. Todos ellos parecían susceptibles de aliarse con el Rey frente a los demás. La citada captura de Carlos emprendida por el corneta Joyce iba en realidad encaminada a impedir que los parlamentarios pactaran con el soberano a espaldas del *New Model*⁴¹⁷.

La guerra civil costaba muchas víctimas, pero los sujetos políticos legitimados eran sólo el Parlamento y la Corona. Los *levellers*, que contaban con escaso apoyo, intentaban desplazar el eje apoyándose en una milicia representativa del “pueblo”. Tal idea, sin embargo, era una innovación peligrosa para los Grandes, que no se atrevían a prescindir del Rey en sus planes políticos.

⁴¹⁴ *Ibid.*, pg. 118. Subrayado propio.

⁴¹⁵ Plant, *op. cit.*

⁴¹⁶ *Vid.* pg. 62, *supra*. Así se expresó Joyce, contando que habían venido “para asegurar la persona de su Majestad” (Woolrych, *op. cit.*, pg. 109).

⁴¹⁷ Cuestión distinta es si la iniciativa partió del propio corneta, o si fue idea de Ireton o Cromwell. Ambas posibilidades parecen abiertas, según los datos recogidos por Woolrych, 1987, pp. 106-114.

Pero es que además de esta perspectiva, la amenaza de rebrote bélico a primeros de noviembre de 1647, cuando parecía posible la paz, no se había extinguido. Unos y otros combatientes tenían miedo de las represalias del bando opuesto, como demuestra el debate sobre la inmunidad. La guerra debía seguir unas “normas”, y la rendición de Oxford a Fairfax en 1646 fue aceptada en términos generosos⁴¹⁸. Mas la “escapada” de Hampton Court ocasionó la resurrección del frente realista (segunda Guerra Civil). Aparecen disturbios sucesivos contra el Parlamento en diversas localidades, levantamientos, muertes de oficiales del *New Model*, y como inflexión drástica, la invasión escocesa de 8 de julio de 1648⁴¹⁹. Este enfrentamiento se agudiza, y el sitio de Colchester llevado a cabo por las tropas de Fairfax hasta el 27 de agosto ya no concluye magnánimamente, como había sucedido en Oxford⁴²⁰.

Por su parte, los *levellers* presentan una *Petition* ante los Comunes el 11 de septiembre de 1648⁴²¹. En ella reivindican los puntos ya anteriormente defendidos en su programa: Parlamentos anuales, supresión del veto de Lores y Rey, leyes contra los monopolios, libertad religiosa, abolición de los diezmos y del *excise*, anulación de las últimas *enclosures*, con el fin de que sean devueltas las tierras comunales o sirvan al auxilio del pobre, reforma procesal para abreviar los procedimientos, etc. Aparecen como novedades la exigencia de eliminar penas desproporcionadas y que los parlamentarios se obliguen de manera definitiva a prohibir la abolición de la propiedad⁴²². Esta última era una clara referencia a lo discutido en Putney; los radicales organizados en torno a Wildman y Lilburne se defendían así contra la denominación “peyorativa” que se les impuso (*levellers*, “niveladores”) y las acusaciones de favorecer la “anarquía”⁴²³.

El 27 de septiembre de 1648, un Tratado supone el fin de las hostilidades entre Escocia y el Parlamento inglés, quedando arrinconados en aquel país los partidarios de continuar la guerra. De inmediato, Henry Ireton escribe a Fairfax expresando la necesidad de que no acudan a las Cámaras presbiterianos y simpatizantes realistas⁴²⁴. Ni él ni Cromwell estaban dispuestos a volver sobre unos pasos que les habían conducido a un segundo conflicto bélico, pese a que nuevamente los

⁴¹⁸ Donagan en Mendle, 2001, pg. 98.

⁴¹⁹ Para todo ello, *vid.* Plant, *op. cit.* El conflicto, por tanto, tuvo un *impasse* y luego prosiguió. Por eso se suele hablar de “guerras civiles”, en plural.

⁴²⁰ Donagan en Mendle, *op. cit.*, pp. 98-99; Taft, en *ibid.*, pg. 189.

⁴²¹ En Sharp, *op. cit.*, pp. 131-139: “*To the right honourable, the Commons of England in parliament assembled. The humble petition of divers well-affected persons inhabiting the City of London, Westminster, the Borough of Southwark, Hamlets and places adjacent*”.

⁴²² *Ibid.*, pg. 137 (puntos 15, y 18, respectivamente; mencionando el texto del segundo exactamente “*abolishing property, levelling men’s estates, or making all things common*”).

⁴²³ Por ejemplo, cuando Cromwell afirma les acusa de apoyar la idea de que cualquier hombre, aquel con el “interés sólo de respirar”, pueda elegir representantes, lo cual conduciría a esa situación caótica (*ibid.*, pg. 59).

⁴²⁴ Tanto este dato, como el del acuerdo, en Plant, *op. cit.*; de idéntica fecha.

parlamentarios intentaban pactar con el Rey desde la apertura de negociaciones en Wight el 18 de septiembre⁴²⁵.

La respuesta del *New Model Army* a esta última maniobra parlamentaria es una *Remonstrance of the Army*, elaborada por un comité cuya organización y llamamiento dependieron de los dos Grandes mencionados⁴²⁶, y que será una *exigencia definitiva* frente a presuntas claudicaciones. No se retorna a las *Heads of the Proposals*, sino que esta *Remonstrance*, tras una conflictiva aprobación por el Consejo de Oficiales⁴²⁷, y siendo presentada ante el Parlamento en fecha 20 de noviembre, establece innovaciones que la hacen distinta al antiguo documento de Ireton. Así, en primer lugar, asevera que el Rey se ha decantado por una institución religiosa cercana al papismo, *debiendo ser sometido a proceso*⁴²⁸, sin posibilidad de acordar ya nada con él. Por añadidura, prevé satisfacer los atrasos a la tropa del *New Model Army*, garantizando inmunidad para las acciones bélicas, excepto aquellas que hubiesen emprendido los realistas. La *Remonstrance* sostiene asimismo que el poder de los representantes goza de la supremacía, siendo tales comisionados los “elegidos” por el “pueblo” que tienen la disposición del “todo” (*whole*). Es decir, *los Lores quedan fuera de la escena política*, no sólo el Rey. Además, las elecciones al Parlamento deben ser periódicas, cada uno o dos años, procediéndose a la redistribución proporcional del voto en el país. La asamblea de aquel momento debe tener fecha cierta para una pronta disolución y en el futuro el ejecutivo será un comité o consejo parlamentario.

Finalmente, la *Remonstrance* del *New Model* exige que las cláusulas citadas y relativas a la representación, así como la ya recurrente sobre la inmunidad, sean aprobadas por “este Parlamento”, o “*por la autoridad de los Comunes*”, y “por un *contrato general o acuerdo del pueblo*, con las correspondientes rúbricas”⁴²⁹.

El comité que elaboró esta *Remonstrance* estaba compuesto de agitadores y oficiales dirigidos por Ireton y Cromwell. El peso de los niveladores en el mismo no fue especialmente destacado. En consecuencia, podemos afirmar que *el ideario radical había calado entre los jefes del Ejército*. Y de forma que a últimos de noviembre *levellers* y Grandes comienzan a reunirse para elaborar otro documento, acordándose

⁴²⁵ *Ibid.*

⁴²⁶ Taft, en Mendle, 2001, pp. 187 y 188. La *Remonstrance* aparece reproducida con gran amplitud en Woodhouse, *op. cit.*, pp. 456-65.

⁴²⁷ Algunos se opusieron, pero varios regimientos piden su respaldo; el Consejo envía unas últimas propuestas al Rey, y éste las rechaza, con lo cual aquél órgano aprueba por último la *Remonstrance*. Días 10, 11, 17 y 18, en Plant, *op. cit.*, respectivamente.

⁴²⁸ Woodhouse, *op. cit.*, pg. 462.

⁴²⁹ *Ibid.*, pg. 463: “*or by the authority of the Commons*”, y “*established by a general contract or agreement of the people, with their subscriptions thereunto*”. Añade también que “*none may be capable of any benefit by the agreement, who shall not consent and subscribe thereunto*” (en esa misma página, inmediatamente a continuación, pasando a la siguiente; “nadie podrá obtener beneficio alguno del acuerdo si no consiente y lo suscribe”).

la formación de un nuevo comité a tal fin. El grupo se compondría de personas nombradas por los independientes, el consejo de oficiales, simpatizantes parlamentarios y niveladores⁴³⁰.

El 6 de diciembre de 1648 se produce la Purga de Pride, cuando el coronel que lleva este apellido impide la entrada al Parlamento de varios representantes proscritos por el *New Model*. Ocurrió tres días después de que la mayoría parlamentaria hubiese rechazado la *Remonstrance* cuyo contenido básico ha sido expuesto⁴³¹.

I.2.3.4.b) Los documentos antes y después de Whitehall.

El comité variopinto que acabamos de mencionar⁴³² presentó el día 11 de diciembre de 1648 un *agreement* nuevo al Consejo de Oficiales, abriéndose a continuación los llamados Debates de Whitehall, por el lugar de las reuniones, y que duraron desde el 14 de diciembre hasta la jornada del 15 de enero de 1649. A los encuentros se sumaron, una vez más, gentes de distinta procedencia; independientes, oficiales, ministros de diferentes cultos, *levellers* (Lilburne, Overton, Walwyn y Wildman, al menos)⁴³³, etc. El fin era llegar a un acuerdo sobre las cuestiones políticas principales, tomando como punto de partida la discusión de aquel último *agreement* elaborado justo antes de las reuniones. Se sugerirían cambios en el texto, y el Consejo de Oficiales luego iba a decidir sobre su acogida o no en la redacción a presentar ante los parlamentarios.

Pero el día 15 de diciembre de 1647, en comenzando los Debates, Lilburne publica una versión del documento realizado por el comité⁴³⁴, probablemente al pensar que en Whitehall algunos de sus puntos para él irrenunciables iban a ser abandonados. A pesar de tal discordancia, el texto editado por Lilburne como *agreement* “original” guarda gran similitud con el que finalmente aprobó el Consejo de Oficiales para presentarlo ante el Parlamento, en fecha 20 de enero de 1649. Constan diferencias sólo en los *añadidos* del *leveller* y como reivindicaciones que reconoce de su autoría. Pero tampoco debíamos obviar los “particulares” que incluye como lista de peticiones elaboradas por el comité. En ella aparecen varios asuntos a legislar por los parlamentarios inmediatamente. Analizaré a continuación las distinciones entre el

⁴³⁰ Taft, en Mendle, 2001, pp. 189 y 190.

⁴³¹ Plant, *op. cit.*

⁴³² No idéntico al de la *Remonstrance*.

⁴³³ Taft, en Mendle, *op. cit.*, pg. 190.

⁴³⁴ Gentles, en Mendle, *ibid.*, pp. 159-60. Decimos “versión” porque hizo un par de “retoques” no reconocidos: suprimió el tercer artículo, referente a Parlamentos bianuales, y amplió la libertad religiosa al eliminar la alusión exclusiva al cristianismo que contenía tal cláusula (*ibid*, pg. 160). Lilburne denominó el texto *Foundations of Freedom or An Agreement of the People* (Woodhouse, *op. cit.*, pg. 355). El texto figura en *ibid.*, pp. 355-67.

Agreement definitivo de los oficiales, el documento realizado por el comité previo y los añadidos de Lilburne⁴³⁵.

En una primera ojeada, se advierte que muchas premisas fundamentales defendidas por el Consejo de Oficiales y el comité inicial son casi idénticas, con sólo ligeros cambios:

- 1) se fija una adecuada proporción del sufragio para concretar las demarcaciones electorales⁴³⁶. El texto del comité especifica cómo van a ser trazadas, repartiéndose un total de trescientos escaños. El documento final también hace lo mismo, pero fija un remanente de cien más que podrá ser distribuido por próximos Parlamentos.
- 2) se establece un sufragio extenso. Pueden elegir representantes parlamentarios los mayores de veintiún años, cabezas de familia y que no sean mendigos, ni sirvientes o asalariados de alguien en particular y de manera permanente. Tampoco que hayan auxiliado al Rey en la guerra. El proyecto inicial del comité exigía además que antes hubieran suscrito el *Agreement*.⁴³⁷
- 3) los representantes del pueblo, en los veinte días posteriores a su primera reunión, nombrarán un Consejo de Estado para que dirija los asuntos públicos hasta que se reúna un ulterior Parlamento⁴³⁸.
- 4) habrá un culto oficial, pero nadie podrá ser sometido al mismo. Abolición de los diezmos⁴³⁹.
- 5) inmunidad por actos de guerra para las tropas que lucharon contra el Rey⁴⁴⁰.
- 6) que “todas las leyes *que se vayan a elaborar desde ahora*, no deben excluir en su aplicación a persona alguna por causa de propiedad, concesión, carta, licencia, grado o nacimiento”⁴⁴¹.
- 7) irretroactividad de las leyes: los parlamentarios no pueden juzgar sobre la persona o propiedad de un hombre con normas no aprobadas antes de

⁴³⁵ Todos, compilados en Woodhouse, *op. cit.*, pp. 355-367. Sin embargo, en tales páginas no se indica el número de algunos apartados pertenecientes al *Officers's Agreement*, así que hemos hecho uso para aclarar esta numeración de la transcripción de este documento efectuada por Gardiner, *op. cit.*, pp. 359-70.

⁴³⁶ Woodhouse, *op. cit.*, pp. 356 y 357 (punto II).

⁴³⁷ *Ibid.*, pg. 357 (punto III.1).

⁴³⁸ *Ibid.*, pg. 360 (V).

⁴³⁹ *Ibid.*, pp. 361-62 (punto VII.1, aunque el asunto de los diezmos se especifica en el Octavo de los “particulares”; IX en el *Officer's Agreement*).

⁴⁴⁰ *Ibid.*, pg. 362 (VII.3, en el documento del comité, VIII.2 en el de los Oficiales).

⁴⁴¹ *Ibid.*, *id.* (VII. 4 en los artículos del comité, VIII.4 para el texto correspondiente al *Officer's Agreement*).

que se produzca esa situación, salvo en el caso de castigo contra cargos públicos por abuso o fraude de la confianza que se les haya otorgado⁴⁴².

- 8) durante el período en que un representante ocupe su lugar en la Cámara no le será permitido ser recaudador o tesorero, ni el desempeño de oficio público alguno, salvo si es para ser incluido en el Consejo de Estado⁴⁴³.

Al margen de tales coincidencias básicas, existían algunas propuestas divergentes entre lo aprobado por el comité previo y el texto que adoptarán los Oficiales. Así, Lilburne recoge la exigencia inicial de que los parlamentarios no podrán obligar a “persona alguna a servir en conflicto bélico, sea por mar o tierra, debiendo la conciencia de cada uno encontrarse satisfecha por la justicia de aquella causa bajo la cual arriesga su vida”⁴⁴⁴. El acuerdo definitivo de los Oficiales dispone sin embargo que existirán las excepciones de “resistir agresiones extranjeras” y la “supresión de súbitas insurrecciones”⁴⁴⁵.

Por añadidura, el apartado 7) arriba expuesto goza de ampliación en el *agreement* inicial, ya que incluye la cláusula de que “cualesquiera privilegios o exenciones” en procedimientos legales y en la aplicación de normas “será nulo de aquí en adelante”⁴⁴⁶.

Pero donde más se nota el cambio de espíritu entre aquel comité y el órgano de la oficialidad es en la lista de particulares que el primero adjuntaba al primitivo proyecto:

- *derecho a la no autoincriminación*. Le está prohibido al Parlamento “castigar u originar que persona alguna sea castigada por no contestar a preguntas dirigidas contra ella en casos penales”,
- ausencia de *dilaciones indebidas* en los procesos. Los parlamentarios no están autorizados para “conservar o instituir proceso legal alguno que dure más de tres o cuatro meses”,
- los procedimientos deben ser en lengua inglesa
- eliminación de restricciones cualesquiera para el comercio interior o de ultramar,
- impuestos proporcionales (quedando exentos quienes “no ganen más de treinta libras”, a salvo su contribución de auxilio al pobre),

⁴⁴² *Ibid.*, pg. 363 (VII. 6, en el escrito del comité, VIII.5 en el de los Oficiales).

⁴⁴³ *Ibid.*, pg. 363 (VII. 7, en el texto de la comisión original, VII en el *Officer's Agreement*).

⁴⁴⁴ *Ibid.*, pg. 362 (VII. 2).

⁴⁴⁵ *Id.*; VIII.1 del *Officer's Agreement*.

⁴⁴⁶ *Ibid.*, pp. 362-63 (VII.5).

- abolición de leyes que puedan rescindir deudas o permitir que los deudores sean encarcelados,
- pena capital sólo para los culpables de dar muerte a alguien o de intentona para derribar el *Agreement* por la fuerza (incluyendo en esta cláusula la petición de que no haya penas desproporcionadas y de que se hagan todos los esfuerzos para evitar la miseria y mendicidad del pueblo),
- poder emplear testigos de descargo en los enjuiciamientos, institución del jurado de doce hombres que sean vecinos (para los casos referentes a *vida, libertad o propiedad*),
- límite para el interés en los préstamos de un seis por ciento,
- imposibilidad de prohibir ejercer cargos públicos por motivos de opinión o práctica religiosa⁴⁴⁷.

A la lista de estos particulares incluidos por el comité redactor originario del segundo *Agreement*, Lilburne sumó otros de su propia cosecha (“añadiré”, dice):

- jurados de doce *freemen* en cada centuria (y que decidirán en procedimientos regulados “de manera sencilla” por el legislativo),
- instituir registros en cada condado (para las transmisiones de propiedad, escrituras, obligaciones),
- que los cargos públicos locales (alcaldes, sheriffs, jueces de paz, alguaciles) sean seleccionados por el pueblo elector según normas elaboradas por los parlamentarios,
- que sean abolidos la enfiteusis y regímenes similares (“*all base tenures*”)⁴⁴⁸.

De todo ello se desprende que la comparación entre proyecto del segundo *Agreement* elaborado por el comité, *Officer’s Agreement* final y programa nivelador de Lilburne indica que este último era el más ambicioso. Pero en las tres redacciones, de cualquier forma, se advierte la preocupación por incluir no sólo derechos relativos a la libertad de conciencia o a la representación política, sino también otros de índole procesal que precisamente hoy se entienden como fundamentales. Si bien son los

⁴⁴⁷ Estos son los once “particulares”; contenidos en Woodhouse, *op. cit.*, pp. 364 y 365.

⁴⁴⁸ Las cuatro propuestas exclusivamente de Lilburne son, pues cuatro, y aparecen en pp. 366 y 367, *ibid.*

levellers, bien representados aquí por su principal portavoz, quienes abogan de manera más vehemente por mejorar el sistema de justicia y eliminar de él arbitrariedades y privilegios. Para conseguir esta reforma, Lilburne no dudaba en volver al “pueblo” como fuente legítima del poder. Por tal motivo retomaba viejas instituciones como el jurado o los nombramientos de autoridades dentro de la demarcación local⁴⁴⁹. Estas premisas serían recogidas por el tercer *Agreement*, obra exclusivamente *leveller*. Pues el de los Oficiales fue pronto abandonado.

Cuando éstos lo presentan, el 20 de enero de 1649, se inicia el juicio contra Carlos I y ni los parlamentarios del *Rump*⁴⁵⁰ ni los jefes del Ejército quieren ya que se apruebe “*paramount law*” alguna. Desean más bien alcanzar la consolidación del nuevo poder de la *Commonwealth*⁴⁵¹, frente al realismo y la amenaza exterior proveniente de Escocia e Irlanda. El Estuardo será decapitado el día 30.

I.2.3.5. El tercer *Agreement*. Combate a la desesperada

Ejecutar al Rey y abolir la Cámara Alta⁴⁵² no sirvieron para poner bridas al descontento del radicalismo existente en el *New Model Army*. Lilburne y otros *levellers* percibían que se estaba formando una conjunción entre los líderes del *Rump* y los generales, concentrándose el poder en sus manos y sin disponer de un acuerdo constitucional que impidiera la arbitrariedad del gobierno.

Así, en febrero de 1649 resurgiría la agitación en las tropas y los Grandes pidieron a la Cámara Baja que se les autorizase imponer una ley marcial contra los revoltosos civiles que originaran indisciplina en los regimientos. Se instaló una contundente censura de prensa entre los *ironsides*⁴⁵³. El contraataque fue la publicación a finales de febrero⁴⁵⁴, por Lilburne y quienes se presentaban como peticionarios “del 11 de septiembre de 1648”⁴⁵⁵, de las *Englands New Chains Discovered*. Este documento⁴⁵⁶, destinado a los parlamentarios, recupera reivindicaciones de las *Foundations of*

⁴⁴⁹ El jurado inglés tiene origen en el “juramento real” para el cual eran convocados los vecinos después de la Conquista Normanda (tras el año 1066), a fin de prometer fidelidad al Rey, así como en la conversión de los procedimientos de ordalías y duelos en otros más pacíficos para los cuales el cuerpo decisorio era uno formado por habitantes del lugar, que al principio sólo eran testigos, pasando luego a juzgar sobre hechos, y finalmente pronunciando veredictos sobre normas aplicables. En el 1194 ya estaban instituidos jurados por todo el país, siendo *elegidos* sus componentes por los caballeros (*knights*) de las centurias y condados. Maitland, *op. cit.*, pp. 7, 13 y 71.

⁴⁵⁰ *Rump Parliament*, “Parlamento Rabadilla” o “Pelón”, el que había quedado tras la Purga de Pride.

⁴⁵¹ República de Inglaterra. Duró desde 1649 hasta 1660, momento en el cual la Restauración permite que Carlos II, hijo del ejecutado, ocupe el trono.

⁴⁵² 6 de enero de 1649. Plant, *op. cit.*

⁴⁵³ Gentles, en Mendle (ed.), pg. 168.

⁴⁵⁴ El 26.

⁴⁵⁵ Es decir, los *levellers* básicamente.

⁴⁵⁶ Vid. Sharp, *op. cit.*, pp. 140-157.

Freedom que no habían sido incluidas en el *agreement* de los Oficiales. Así, encabezadas por la expresión de que “muchas cosas” deben ser “sustituidas por otras”⁴⁵⁷, aparecen exigidas la anulación de privilegios ante la ley *desde este preciso momento*, así como las supresiones del *excise*, los monopolios y del encarcelamiento por deudas. Además, se defiende un sostén para los pobres, junto con procedimientos judiciales rápidos, y se requiere la clarificación de potestades parlamentarias respecto a la libertad religiosa. El Consejo de Estado, asimismo, no puede constituirse hasta que no haya unos Comunes nuevos, por ser peligroso para las libertades⁴⁵⁸.

Por añadidura, el texto propone⁴⁵⁹ que se vigile el estricto cumplimiento de la *Self-denying Ordinance*, pues diversos jefes del Ejército, como Cromwell, ocupan escaño pese a tal Ordenanza⁴⁶⁰, y pide que los máximos oficiales no permanezcan largo tiempo en la dirección del *New Model Army*. *Englands New Chains* insiste, por otra parte, en el tema de los atrasos para la tropa, aunque ya a principios de diciembre ésta se había incautado de fondos pertenecientes al Parlamento⁴⁶¹.

Como novedad destaquemos que las *Englands* propugnan abolir definitivamente la condición de último tribunal que por tradición correspondía a la asamblea parlamentaria. Mantener tal costumbre es “irrazonable”, y “que los legisladores se encarguen de ejecutar las normas” implica “parcialidad, injusticia y vejación para el pueblo”⁴⁶². Al mismo tiempo, y teniendo en cuenta que las jurisdicciones de origen monárquico habían sido abolidas, el Parlamento no podría ahora suprimir tribunal alguno, pues ello significaría la “alteración del modo usual de enjuiciamiento por doce jurados de la vecindad” (“una constitución tan equitativa y justa en sí misma”⁴⁶³). Los *levellers* apoyaban el control del poder parlamentario y la vigilancia de sus decisiones pasaba por descentralizar la justicia, retirando a los diputados *la última palabra en cualquier proceso* y cediéndosela al jurado, que no deja de encarnar un procedimiento democrático.

Pero *Englands New Chains* no fue el único documento escrito por los niveladores entre la decapitación del Rey y el tercer *Agreement*. Richard Overton publica el 21 de marzo *The Hunting of the Foxes from New Market and Triploe-Heaths to Whitehall, By*

⁴⁵⁷ Ibid., pg. 141.

⁴⁵⁸ Ibid., puntos 4 (pg. 143), 7 (pg. 144), 5 (pg. 143) y 1 (pp. 141 y 142), tras ese encabezamiento, y en tal orden.

⁴⁵⁹ Las propuestas finales que vienen a continuación son, respectivamente, la segunda y tercera (ibid., pg. 153).

⁴⁶⁰ La *Self-denying Ordinance* no había sido cumplida en un modo estricto. Así, aunque pocos, algunos altos oficiales pudieron ser representantes parlamentarios, como el propio Cromwell, Henry Ireton, Philip Skippon, Charles Fleetwood, Thomas Harrison y Richard Ingoldsby (Woolrych, en Mendle, 2001, pg. 54).

⁴⁶¹ Plant, *op. cit.*: día 8.

⁴⁶² “It being likewise unreasonable in itself, and an occasion of much partiality, injustice and vexation to the people that the law-makers should be law-executors”. Punto 3 (ibid., pg. 143)

⁴⁶³ “A constitution so equal and just in itself”. Punto 3, ibid., pg. 142.

five small Beagles (late of the Armie), defendiendo a cinco *ironsides* que habían sido juzgados por un tribunal castrense tras presentar queja a Fairfax contra el Consejo de Estado, así como su derecho a presentar peticiones⁴⁶⁴. El 24 de marzo, Lilburne presenta ante la Cámara *The Second Part of England Chaines discovered*, petición en masa que vuelve a solicitar se establezca un *Agreement*, insistiendo en puntos similares a los contenidos en la primera parte de la misma, pero con un tono más iracundo, debido a la represión contra los radicales. La consecuencia es que poco después los *levellers* Lilburne, Overton, Walwyn y Thomas Prince son encarcelados en la Torre de Londres⁴⁶⁵, donde redactarían *A Manifestation*. En ese momento no gozaban de apoyo entre los oficiales, más bien de los soldados, pero a pesar de ello la tropa reaccionó amotinándose en el regimiento del coronel Whalley. Fue ejecutado Robert Lockyer. El funeral supuso una gran concentración de personas entre las cuales muchas portaban el lazo verde, distintivo de los niveladores.

El 1 de mayo de 1649, los presos de la Torre logran publicar el *Agreement of the Free People of England*, tercer proyecto del grupo⁴⁶⁶. Este *Agreement* recogía las fundamentales proclamas *levellers* del momento, en una declaración ya mucho más extensa la originaria de 1647. Puede dividirse en los siguientes bloques:

- 1) Representación⁴⁶⁷. El Parlamento estará compuesto de cuatrocientas personas, elegidas por mayores de veintiún años que no sean sirvientes, mendigos o que hubieran seguido al Rey en la última confrontación, si bien estos últimos podrían recuperar su derecho en una década. La redistribución de escaños se realizaría por el Parlamento, con una adecuada proporcionalidad. Los representantes, asimismo, se sujetan a incompatibilidad para ocupar otros cargos públicos y no podrán ser reelegidos consecutivamente en dos legislaturas. El *Rump* se disolverá el primer miércoles de agosto de 1649, debiendo reunirse el siguiente el día después, con la duración de un año, como todos los que vengan más tarde. No habrá Consejo de Estado, sino un comité parlamentario para dirigir los asuntos públicos durante el tiempo en que no esté reunida, y cuyas sesiones se estipula que al menos abarquen cuatro meses.

⁴⁶⁴ Frank, 1969, pg. 193.

⁴⁶⁵ Frank, *op. cit.*, pp. 195-96.

⁴⁶⁶ El título completo es "*An agreement of the free people of England, tendered as a peace-offering to this distressed nation, by Lieutenant-Colonel John Lilburne, Master William Walwyn, Master Thomas Prince and Master Richard Overton, prisoners in the Tower of London*". En Sharp (ed.), *op. cit.*, pp. 168-178.

⁴⁶⁷ Los puntos 1 (*ibid.*, pg. 170), 3, 4, 5 (*ibid.*, pg. 171), 7 y 8 (*ibid.*, pg. 172) son los más significativos, que pasamos a reseñar.

- 2) Libertad religiosa. Prohibición absoluta de compeler a cualesquiera personas para que cumplan con deberes religiosos, así como de restringir el culto o la profesión de fe. No se especifica que estos deban ser de carácter cristiano⁴⁶⁸. En el próximo Parlamento como muy tarde, los diezmos serán abolidos, previa indemnización a los seglares que los recaudaran con anterioridad⁴⁶⁹. Cada parroquia elegirá a sus propios ministros, estableciendo su remuneración y condiciones de servicio, y siendo los electores aquellos que puedan escoger representantes parlamentarios⁴⁷⁰. Además, no existirá discriminación para ocupar cargo en la república por sostener opinión o práctica alguna en materia religiosa, excepto para quienes mantengan la supremacía del Papa u otra autoridad extranjera⁴⁷¹.
- 3) Milicia. Abolición de la leva obligatoria⁴⁷². Los oficiales del Ejército, exceptuando a los generales y el mando supremo (cuyo nombramiento corresponde a los Comunes), serán elegidos por quienes tengan derecho a la representación parlamentaria⁴⁷³.
- 4) Inmunidad para actos de guerra o declaraciones efectuadas en relación con las últimas “diferencias de carácter público”, exceptuando a quienes apoyaron al Rey⁴⁷⁴.
- 5) Derechos de carácter procesal. En adelante, y desde el momento de aprobar el *Agreement*, eliminación de cualquier privilegio frente a la ley⁴⁷⁵, imposibilidad de leyes retroactivas⁴⁷⁶, derecho a la no autoincriminación⁴⁷⁷, resolución de los casos en seis meses como mucho, leyes sustantivas y procesales en inglés, que cualquiera pueda pleitear por sí mismo o designar la defensa que desee⁴⁷⁸, y prohibición del encarcelamiento por deudas⁴⁷⁹. La pena capital sólo es posible imponerla sobre los culpables de dar muerte a alguien, de crímenes igualmente atroces o de intentar destruir el *Agreement*; y en cualquier caso, siempre guardando proporcionalidad en las penas aplicadas al resto de supuestos criminales⁴⁸⁰. Por añadidura, nadie podrá ser privado de emplear testigos a su favor en casos acerca de la vida, integridad, libertad o propiedad.

⁴⁶⁸ Punto 10 (ibid., pg. 173).

⁴⁶⁹ 23º (ibid., pg. 175).

⁴⁷⁰ 24º (ibid., pg. 175).

⁴⁷¹ 26º (ibid., pg. 176).

⁴⁷² 11º (ibid., pg. 173).

⁴⁷³ 29º (ibid., pg. 176 y 177).

⁴⁷⁴ 12º (ibid., pg. 173).

⁴⁷⁵ 13º (ibid., pg. 173).

⁴⁷⁶ 14º (ibid., pg. 173).

⁴⁷⁷ 16º (ibid., pg. 174).

⁴⁷⁸ Todo ello, en el 17º (ibid., pg. 174).

⁴⁷⁹ 20º (ibid., pg. 175).

⁴⁸⁰ 21º (ibid., pg. 175).

Tampoco de los “privilegios y libertades” contenidos en la “Petición de Derechos del tercer año perteneciente al reinado del difunto Carlos I”⁴⁸¹.

- 6) Descentralización de autoridades. Quienes tengan derecho a elegir representantes parlamentarios, lo tendrán también con respecto a los cargos públicos (“*in any kind to administer the law*”, “para administrar la ley, de la clase que fueren”) de condados, centurias y localidades. La elección será en todos los casos anualmente, “para evitar facciones y partidos”⁴⁸².
- 7) Medidas de tipo económico, y en relación con posibles reformas en este campo. Cualesquiera personas pueden acudir al comercio con ultramar⁴⁸³. En cuatro meses desde la primera reunión del próximo legislativo, como mucho, deben ser abolidos *excise* y aranceles. El único impuesto ha de ser proporcional y sobre el valor en libras de bienes raíces y muebles⁴⁸⁴. Ningún Parlamento podrá “igualar las fortunas (*estates*), destruir la propiedad (*property*) o poner todas las cosas en común”⁴⁸⁵, si bien se tendrá “especial cuidado en apartar a todos los estratos del pueblo del mal, la miseria y la indigencia”⁴⁸⁶.
- 8) Supremacía del *Agreement*: “todas las leyes elaboradas, o que vayan a serlo, de forma que su contenido sea contrario a alguna parte de este Acuerdo, son desde ahora nulas y no válidas”⁴⁸⁷. Era ésta una idea ya apuntada con anterioridad por los *levellers*. El problema es que nunca dejaron claro del todo quién o quiénes, y bajo qué procedimientos, procurarían esa superioridad.

El último combate *leveller* fue representado perfectamente por el *Agreement* expuesto. Los niveladores, basándose en su experiencia política, advertían del peligro de un nuevo poder que en forma omnímoda retuviese la supremacía. Durante las guerras civiles habían sostenido al Parlamento, más cercano a su programa. Pero al caer la monarquía, los Grandes del Ejército toman las riendas del poder. Antes de la

⁴⁸¹ La de 1628. 22º (ibid., pg. 175).

⁴⁸² 27º (ibid., pg. 176).

⁴⁸³ 18º (ibid., pg. 174).

⁴⁸⁴ 19º (ibid., pp. 174 y 175).

⁴⁸⁵ 30º (ibid., pg. 177).

⁴⁸⁶ 21º (ibid., pg. 175).

⁴⁸⁷ “*All laws made or that shall made contrary to any part of this Agreement are hereby made null and void*” (punto nº 30 del *Agreement*, en Sharp (ed.), *op. cit.*, pg. 177). Se trata de una aserto extraído de Coke (vid. pg. 41, *supra*), quien a su vez lo tomó de la ratificación de la Carta Magna de Eduardo I en 1297 (segunda cláusula): “si de aquí en adelante fuera pronunciada por los jueces decisión contra los preceptos de las cartas mencionadas, o algún otro de nuestros ministros sostuviere pleito ante aquellos contra las cláusulas de las cartas, ello quedará anulado y sin efecto” (“*if any judgement be given from henceforth contrary to the points of the charters aforesaid by the justices, or by any other our ministers that hold plea before them against the points of the charters, it shall be undone, and holden for nought*”; cit. por Saldaña, Nieves: “El poeta de la revolución puritana: teoría política de John Milton”, *Historia Constitucional. Revista Electrónica*, n. 2, 2001, <<http://hc.rediris.es/dos/articulos/html/milton/milton1.htm>>, párrafo 57).

decapitación de Carlos I, la Purga de Pride fue admitida por los parlamentarios afines al *New Model Army* como mal menor, pues Ireton y el coronel Harrison querían sencillamente disolver las Cámaras⁴⁸⁸. Los *levellers* desean, como aparece en el tercer *Agreement*, abolir *todo* poder arbitrario y establecer las obligaciones y límites *tanto para la suprema autoridad del pueblo como en relación con aquellas subordinadas*⁴⁸⁹. La única respuesta a sus tribulaciones era sujetar el máximo poder representativo a un acuerdo entre los *freemen* y estableciendo que las autoridades de carácter local fueran elegidas popularmente. Pero sobre todo, *haciendo que aquel pacto básico incluyera unos derechos que hoy llamamos fundamentales*: libertad religiosa, varios derechos de carácter procesal, y otros que, a día de hoy, y más o menos transformados por medio de formulaciones distintas, aún perduran.

Lo que desde luego aún apenas estaba en vigor era un sistema de control institucional, reglado o no, que permitiera controlar el respeto político por el *Agreement*. Teniendo en cuenta aquellos principios que guiaban a los niveladores, lo único que podía oponerse al infractor si éste resultaba ser el Parlamento era el derecho de resistencia (ejercido por la milicia), heredado de los monarcómacos y radicales puritanos, y que conducía a senderos injuridificables. O, en todo caso, mediante el proceso a los representantes que quisieran quebrar el compromiso, tal y como aparecía en el trigésimo apartado del tercer *Agreement*⁴⁹⁰. Los *levellers* no consideraron siquiera el equilibrio de poderes republicano. William Ashhurst ya había realizado una crítica sobre esta insuficiencia, cuando publicara el 26 de diciembre de 1648, tras elaborarse el Acuerdo de los Oficiales, su *Reasons against Agreement*. En dicha obra, el escritor afirmaba que aquel *Officer's Agreement* carecía de especificaciones sobre cómo podía identificarse al “pueblo”, e indicaba que el país sufriría división entre quienes lo ratificaran y aquellos que lo rechazasen⁴⁹¹, y que tampoco existía institución con funciones judiciales para decidir sobre futuras disputas referentes al mismo⁴⁹². El perfeccionamiento constitucional posterior en América

⁴⁸⁸ Plant, *op. cit.*: 6 de diciembre de 1648.

⁴⁸⁹ Tercer *Agreement*, justamente antes del primer punto (Sharp, *op. cit.*, pg. 170). El subrayado es nuestro.

⁴⁹⁰ Vid. Sharp, *op. cit.*, pg. 177.

⁴⁹¹ El Acuerdo de 10 de diciembre de 1648 preveía que para tener derecho al sufragio en las próximas elecciones, quienes así lo desearan debían suscribir su texto antes de disolverse el *Rump*, quedando excluidos en cualquier caso durante siete años quienes hubieran asistido al Rey en la guerra.

⁴⁹² Cit. por Frank, *op. cit.*, pp. 182 y 183. Desde luego, esta perspectiva favorecía teóricamente a los representantes de un modelo político menos abstracto. Hobbes acogió como única *paramount law* la *salus populi* en su sentido más estricto, es decir, la premisa de que el fin de cualquier gobierno era proteger la vida de sus súbditos. Esta “ley suprema” ya no tendría así las cortapisas escrupulosas de Parker (vid. pp. 54-56, *supra*), propias de cierta ligazón medieval entre ética y derecho. Para el autor del *Leviatán*, un esquema como el de los niveladores, e incluso el de la constitución mixta, sólo conduciría al intolerable caos (vid. *infra*, cap. I.3.3). Por su parte, Locke no logró ir mucho más allá en el problema que los *levellers* dejaron sin resolver en lo relativo a la jurisdicción sobre infracciones constitucionales. Sólo le cupo “apelar al cielo”, alusión también al derecho de resistencia (vid. *infra*, pg. 293, nota 1100).

instituyó sistemas para elaborar y reformar la *paramount law* en una asamblea de carácter extraordinario, así como con el fin de vigilar jurisdiccionalmente las leyes y actos del gobierno o sus agencias, e incluso dividió el poder en competencias distintas, bien territoriales, bien separando los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Que deban crearse nuevos modos de control con el objeto de evitar conflictos entre diferentes ramas políticas, o incluso entre una parte importante de la ciudadanía y sus gobernantes, la mayoritaria y otra que no lo es, configura otro tipo de reto distinto al que preocupaba los *levellers*, quienes no consideraron apenas el problema de las minorías, excepto en lo relativo a la libertad religiosa, origen de sangrientas divisiones entonces.

Los *levellers* no terminaron su trayectoria tras el último *Agreement*, pero el movimiento menguó rápidamente. Walwyn escribió a primeros de junio de 1649 su *Walwyns Just Defence*, casi de manera simultánea a la publicación por Lilburne de *Legall Fundamentall Liberties*, y diversos panfletos de Overton también vieron la luz entonces, mientras que los tres continuaban presos y estallaban pequeños motines y revueltas populares. El 24 de octubre se abre el proceso contra Lilburne. La multitud se agolpa durante la vista, y los comisionados del *Rump* le interrogan, buscando imputarle alta traición. Pero el jurado le absuelve, tras un discurso del viejo líder al que la muchedumbre contesta con un “amen”. Tanto él como sus otros tres compañeros de cautiverio son liberados el 8 de noviembre de 1649⁴⁹³.

Pero una idea distinta en este ámbito ya se había producido más de tres décadas antes de que fuera publicado el *Second Treatise of Civil Government, A Healing Question*, de Henry Vane, quien explicaba que la constitución podría prever “una suprema judicatura [...] representativa del todo” que tuviese también poderes legislativos, es decir, una asamblea parlamentaria en el sentido más tradicional del término, con el añadido de un “consejo permanente de estado” que se ocupara del gobierno bajo su control (vid. Gough, 1985, Nota V en pg. 219). Hasta aquí no había novedades. Pero para apartar el órgano supremo asambleario del poder absoluto, Vane sugirió la convocatoria previa y fundacional de otro cónclave que redactara precisamente esa *paramount law* antes de cualquier toma de poderes (vid. *infra*, pp. 184 y 185). Así, Vane daba luz a una asamblea constituyente que debatiera y aprobase la *paramount law*, previa a cualquier otra luego constituida para asumir funciones ordinarias tanto de tipo judicial como legislativo. En realidad, se trataba de idéntico esquema que el de la separación de poderes, pero utilizado en forma diacrónica, en dos momentos diferentes: primero el *pactum unionis* y luego el pacto de sujeción. Este mecanismo será retomado por las trece colonias americanas en su texto de 1787, sirviendo además para prever futuras reformas constitucionales, otro punto que los *levellers* tampoco abordaron en sus *Agreements*.

El control constitucional de las leyes propiamente dicho no aparecería hasta *Marbury versus Madison*, cuando el Tribunal Supremo aplicó en 1803 el artículo VI de su norma suprallegal: “esta Constitución, y las leyes de los Estados Unidos que se expidan con arreglo a ella, y todos los tratados celebrados o que se celebren bajo la autoridad de los Estados Unidos, serán la suprema ley del país y los jueces de cada Estado estarán obligados a observarlos, aun cuando se encuentre en la Constitución o las leyes de cualquier Estado alguna disposición que lo contradiga”. Posiblemente la idea inicial de la Convención sólo había sido instituir la vigilancia de normas territoriales que quisieran romper la unión federal, pero al ser aprobadas las famosas Enmiendas en 1791, también quedaron protegidos varios derechos y libertades de igual forma.

⁴⁹³ Frank, *op. cit.*, pp. 220 y 221. Como dato curioso, hacemos constar que John Lilburne, en *The Innocent's Man's second Proffer*, publicado el 22 de octubre de 1649 mientras aguardaba juicio, solicitó

A continuación los *levellers* desaparecen de la escena política como grupo. Thomas Prince se retiró a su vida familiar y sólo sabemos que estuvo junto a Lilburne en el último proceso que este padecería en 1653⁴⁹⁴. Idéntico abandono de la vida pública asumió Walwyn, aunque su vocación rebelde le acercaría a Harrington años después, e incluso en 1650 redactó un escrito (*Juries Justified*) contra la pretensión de algunos que propugnaban sustituir los jurados locales por jueces designados desde el Parlamento. Fallecería en 1680. También apoyó a Lilburne en el proceso antedicho, igual que Prince⁴⁹⁵ y Richard Overton.

De este último conocemos precisamente su respaldo al “*honest John*” en ese difícil momento, pero poco más: algo sobre sus conspiraciones⁴⁹⁶, nada sobre su destino. Wildman, tras la ejecución del Rey, se retiró del combate político, pero pasaría a ejercer como abogado en 1650. De hecho, entonces y con ayuda de Lilburne, defendió a unos campesinos amenazados por cierta *enclosure*. En aquel año sostuvo asimismo públicamente la ampliación del sufragio en la *City*. Después hizo negocios prósperos, y simpatizó con Harrington. A la caída de Cromwell, conspiró contra Carlos II y fue encarcelado. En 1685 huyó a Holanda y regresaría más tarde con la Gloriosa, ocupando tras su triunfo importantes cargos y falleciendo en 1693⁴⁹⁷.

Así que los nuevos autores del pensamiento político durante el Interregno, también llamado período de la *Commonwealth*, fueron hombres distintos a los *levellers*: el propio Harrington y su *Oceana*, y otros republicanos como John Milton, Marchamont Nedham, Henry Vane, Algernon Sidney. Pero ninguno de ellos, pese a sus puntos de acuerdo con los niveladores, tomó el testigo de Lilburne y los suyos. La vida política de esa nueva *Commonwealth* fue sumamente accidentada y se caracterizó por sujetarse a la férrea mano de Cromwell, que poseyendo el mando del Ejército tras arrinconar a Fairfax y retirarse de la escena Ireton, pudo conservar el poder hasta 1660, no sin numerosos obstáculos. Enfrentamientos con irlandeses y tropas escocesas realistas, guerras contra Holanda por el comercio marítimo, complots monárquicos, ingobernabilidad en medio de continuos choques que le llevaron a disolver varios Parlamentos...Cromwell consiguió unificar Escocia e Irlanda bajo idéntico directorio militar, contribuyendo a la creación del Reino Unido, pero implantando una fórmula autoritaria que no impidió la caída de Richard, su hijo y heredero político, y que se

que se le permitiera viajar a las Indias Occidentales con quienes desearan acompañarle, apoyados los más humildes por una subvención. Frank, *op. cit.*, pg. 219.

⁴⁹⁴ La animadversión casi personal contra Cromwell y su frustración ante la política de la Commonwealth hizo que se enfrentara al gobierno en repetidas ocasiones. Acabó por huir de Inglaterra en 1652, pero regresó y tuvo otro nuevo juicio. Desde entonces, y aun con períodos de “libertad vigilada” o confinamiento a la isla de Jersey, ya nunca recobró totalmente la libertad (Frank, *op. cit.*, pp. 228-240).

⁴⁹⁵ *Ibid.*, pp. 222 y 223.

⁴⁹⁶ Planeó golpes de mano contra Cromwell, aliándose con partidarios de Carlos II, y cuando se introdujo la Restauración, fue encarcelado por atacarla. *Ibid.*, pg. 223.

⁴⁹⁷ *Ibid.*, pp. 224-27.

produjera seguidamente el fenómeno conocido como “Restauración”, con la subida al trono de Carlos II.

Diversos postulados provenientes de la Revolución Inglesa, sin embargo, calaron en un amplio sector de la población y tuvieron plumas autorizadas en distintos autores tras el período convulsivo que vivió el país en medio de sus guerras civiles. Las teorías de Parker o Hunton alcanzaron mayor complejidad y radicalismo en autores como John Milton, James Harrington, Marchamont Nedham o Henry Vane.

I.2.4. Los elementos básicos del programa *leveller*: de los precedentes medievales y clásicos a un nuevo modelo constitucional

I.2.4.1. La juridificación del poder y la mutación de las relaciones sociales

El principal objetivo de los *levellers*, durante toda su trayectoria, fue *juridificar el poder*, someterlo a Derecho. En realidad, tal pretensión era muy antigua y ya Aristóteles había hablado sobre el gobierno de las leyes como distinto del de los hombres en su *Política*⁴⁹⁸. Esta idea pasó de Grecia a Roma, y de ahí a los territorios donde gobernó. Permitía separar el cargo público de las ambiciones y los deseos particulares, derruir la *arbitrariedad*, extraer fuera del dominio de las *pasiones* una norma que se ampararía en la razón⁴⁹⁹.

La perspectiva romana, con premisas diferentes a esa democracia griega de los siglos VI y V a. C, pero siguiendo el pensamiento platónico y aristotélico sobre la *politeia*⁵⁰⁰, estableció una “constitución mixta”. Se trataba de un modo de unión por el cual los miembros de la comunidad pertenecían al mismo cuerpo político. Al mismo tiempo, la entidad constituida abarcaba distintos poderes separados que se contrarrestaban, hallando así un equilibrio para mantener la paz colectiva. Tal situación era de estabilidad, y por tanto de firmeza y *permanencia* para el poder

⁴⁹⁸ Aristóteles: *Política*, Libro III, capítulo 6. Es necesario aclarar, eso sí, que el concepto de ley manejado por los griegos difería del nuestro. Sí se refiere a regularidad de conducta exigida. Pero las fuentes y jerarquización modernas no resultan aplicables a aquella época. *Nómos* va a desplazar a otros términos. Como contraposición a la *physis* (naturaleza), implica convención. Pero lo más destacable es que frente a *thémis*, que viene de la raíz *the-* (“imponer”), y que conlleva “ley eterna y la imposición familiar”, lo establecido desde lo alto, *nómos* no tiene carácter de tal grado de verticalidad: “las *thémistes* y las *díkai* estaban *dictadas* por una autoridad superior, mientras que los *nomói* son las leyes aceptadas por todos, y de esa aceptación, convencional pero firme, reciben su prestigio”. La raíz *nem-* significa repartir; de ahí proviene *nomos*, pero también *tò nómisma* (“la moneda”, justo medida de valor convencional). García Gual, Carlos: “La Grecia Antigua”, en Vallespín, Fernando (ed.), *Historia de la Teoría Política*, Vol. I, cit., Alianza, Madrid, 2002, pp. 64 y 65.

⁴⁹⁹ La obra de Gregory Brück, en la primera mitad del siglo XVI demuestra hasta que punto el imperio de la ley gozó de fuerte anclaje teórico en Europa, atravesando la Edad Media incluso, a través de hombres como Bracton. *Vid.* pg. 18, *supra*.

⁵⁰⁰ “Política”, como la obra de Aristóteles, o “constitución”, como también se traduce ahora.

político. Se basaba a su vez en una división concreta, también en equilibrio; la juridificación de la política se correspondía con un específico *orden social*. Así, patricios y plebeyos poseían diferente lugar en la jerarquía del todo⁵⁰¹. Ambas clases podían elegir cargos públicos, pero la hegemonía, tanto social como política, correspondía al patriciado⁵⁰². Lo que resulta de mayor interés es percibir que tal modelo “equilibrado” recogido por Polibio, y que posteriores eminencias de la vida pública romana (así, Cicerón) defendieron, configuraba una “constitución mixta” o “antigua” que incluía y apagaba no sólo la diferencia social, sino que para ello insituía una correlativa *separación de potestades entre diversas magistraturas*, coincidente con aquella división.

¿Rescataría más tarde esta matriz el Medievo inglés?. La ley creada por voluntad humana estaba a cargo de Comunes, Lores y Rey, reunidos en un “consejo” (*consilium regni*). Pero aquí la idea de equilibrio “republicano” carecía de entidad. El monarca detentaba el gobierno, acompañado de prerrogativas; era el soberano y los demás eran más bien *consejeros*. El sistema adoptado en Inglaterra para instituir las asambleas parlamentarias fue el de “representación”, que a su vez implicaba una teoría organicista acerca del reino. En ella todos los órdenes se hallan dentro de la comunidad, igual que partes de un cuerpo, siendo su “corazón” el Trono. Esto no significaba que la Corona pretendiera regir todos los campos de la vida social al estilo del soberano moderno, aunque ocupase la cumbre de la pirámide con su “prerrogativa”. El orden colectivo no puede ser dispuesto por actor alguno, el conjunto de vínculos sociales, económicos y políticos se entiende como ya dado. *Hay estamentos*. No existe la posibilidad de *fundar* propiamente una constitución política al modo antiguo, que además establezca por escrito una división entre las magistraturas y conceda a cada una de ellas funciones particulares. Relaciones de carácter social y sistema político se encuentran muy interrelacionados, pero con un énfasis mayor que en la antigua Roma. En el Medievo se reconoce que la comunidad es regida por costumbres inmodificables en el ámbito político, hasta un extremo aún más acentuado que en la antigua república de las orillas del Tíber.

⁵⁰¹ De hecho, tal esquema se apoyaba en el relato mítico de que los primeros pertenecían a las familias más antiguas de Roma y de que por tanto su grado superior de influencia y riqueza tenía origen en la fundación de la ciudad.

⁵⁰² La movilidad de clase permanecía limitada por obstáculos como el de impedir los matrimonios contraídos entre personas de distinto origen, el de ser elegible sólo si se pertenecía a los estratos superiores en aquella sociedad, concebir procesos electorales en los que se votaba por grupos (dando preponderancia a los del patriciado, compuestos de un menor número de personas). Manin, 1997, pp. 62-65 de la trad. cast. La jerarquía social era, asimismo, establecida por un censo. Así, las luchas entre ambas clases por el poder político continuaron hasta la aparición del Imperio, que destruirá las instituciones representativas. Vid. Fernández de Buján, Antonio: *Derecho Público Romano. Y recepción del Derecho Romano en Europa*, 5ª ed. (1ª, de 1998), Madrid, Civitas, 2000, pp. 76 y 102-104.

Mas cuando la paz colectiva desaparece, pesan dudas sobre el orden social y político. Urge concretar cuál o cuáles serán los modelos que solventen la crisis. El combate de los estamentos entre sí, con el monarca a su vez maniobrando entre unos y otros, se agudiza y exige mutaciones. Ya no resulta válido un sistema basado en vínculos de lealtad propia de “consejeros”. La Carta Magna fue una primera brecha. El segundo acontecimiento importante, la desamortización de Enrique VIII y su correlativo cisma. El aumento de la movilidad social en una Inglaterra expansiva supuso aupar nuevos sectores que pugnaban por ocupar un lugar de relevancia en el Parlamento, el foro nacional de decisión política, bajo identidad puritana. Con los Estuardo las *arbitrariedades* del poder son percibidas como carga insoportable, ante la percepción de una valía propia como individuos que tanto la *gentry* más próspera como la *sort middle of people* proyectan en la vida social. Tal es así, que sobre todo estos últimos no admiten ya privilegios por su origen en un estamento u otro. Existen derechos y libertades y ningún poder puede vulnerarlos. La *conciencia* de que el Rey está violando normas preestablecidas que someten su poder a Derecho. Los niveladores edificarán los *Agreements* con tales premisas, y en consecuencia, con el *control* directo o indirecto de *unos gobernantes que también han de someterse al imperio de la ley*, especialmente a la *paramount law*. Las técnicas e instituciones que incluyen para vigilar este modelo son distintas a las actuales de jurisdicción constitucional, pero mantienen importantes puntos de contacto. Paso a sintetizarlas, basándome en la exposición ya realizada en las líneas anteriores.

I.2.4.2. Elementos de origen medieval

Los hombres de la primera mitad del XVII en Inglaterra acariciaban a menudo en sus construcciones filosófico-políticas el modelo de **pacto**. La institución del vasallaje, compromiso entre dos personas con derechos y obligaciones, provenía del Medioevo. Sin embargo, no puede olvidarse que su fundamento era el principio de “protección militar”, rechazable por entero en la época estuardiana. Precisamente, los extensos períodos de paz que vivió Inglaterra entonces y los cambios sociales acaecidos contribuyeron a que el país presentara un rostro ya muy distinto al de antaño. Los aristócratas y el Rey estaban quedando deslegitimados rápidamente y diversas clases en ascenso exigían mayor protagonismo político. La Carta Magna había sido una *Lex Regia*, ciertamente, que sujetaba al soberano a su juramento de coronación para respetar derechos y libertades. Pero quienes la rubricaban del otro lado eran sólo los representantes de los estamentos más poderosos. Frente a ello, los *levellers* prefieren adoptar la idea de que el pueblo va a exigir *directamente* una serie

de condiciones a sus gobernantes y será el único sujeto legitimador del poder, sin escisión estamental ni vetos de Lores o Rey. Este ecumenismo tiene raíz a su vez en los puritanos que conciben a todos los hombres como iguales ante Dios y que organizan en la práctica social congregaciones religiosas bajo tal premisa. Una concepción que también recuerda a las hermandades artesanas del Medievo⁵⁰³.

El segundo elemento que proviene de la Edad Media es el de los “**derechos y libertades**”, los *iura y libertates*. Así, tal y como ya he analizado, la *gentry* aprovecha el principio de representación para reforzar sus posiciones y pelea por lo que llamaba “derechos y libertades de los ingleses”, derechos de nacimiento, *native rights*. Los derechos y libertades de carácter fundamental (o innato, para ser más precisos) existentes en Inglaterra en la primera mitad del siglo XVII provenían de una tradición que la jurisprudencia había defendido y reforzado. Fueron los de propiedad, petición, *habeas corpus*, libertad de palabra en el Parlamento, inmunidad ante posibles detenciones por lo expresado allí, derecho al juicio de los propios “pares”, derecho a la representación mediante una vigilancia electoral ejercida por la asamblea parlamentaria, etc. Los *levellers* apoyaron una constitución que fundara el nuevo esquema político-legal, pero que al mismo tiempo *conservara* esos *derechos y libertades ya existían* en Inglaterra. Tal entendimiento venía acompañado por continuas apelaciones a leyes naturales y divinas, a la costumbre y al derecho de gentes, invocando a una pluralidad de fuentes⁵⁰⁴, que surgían de forma indistinta.

Pero, y a diferencia de la situación anterior, y pese a que se basaran en un supuesto instante previo al “*norman yoke*”, e incluso a veces en la Carta Magna, los niveladores se apartaban definitivamente del orden estamental. También en este punto, transformando la herencia medieval en otra de raíz moderna, como había ocurrido con la idea del pacto. Los derechos y libertades se iban a disfrutar, en consecuencia, no ya como propios de una condición social determinada, sino por razón de ser un *free englishman*, un hombre libre con sus *birth-rights*. Tal situación aparecía ante algunos de manera nítida, al sostener las reivindicaciones del *New Model Army*. La inestabilidad provocada por el conflicto bélico civil y sus avatares, conduce a *levellers* y agitadores a exigir la elaboración de un documento que fijara las condiciones del nuevo gobierno, a fin de proteger por igual la demanda de inmunidad y resarcimiento de las tropas, y los *derechos y libertades* pertenecientes al *freeman*.

⁵⁰³ No es casual que diversos niveladores significados hubieran sido aprendices (vid. supra, pp. 63, 65, nota 226, y 103, nota 381), ni que la rebelión contra Carlos I tuviera uno de sus apoyos principales en el artesanado (cfr. supra, pp. 50, 51, 59 y 63, nota 217).

⁵⁰⁴ Esa concepción se extendía a la organización del gobierno, como demuestra la referencia, en plural, a “constituciones”, “leyes fundamentales”, etc.

Entonces se puso en marcha la redacción de un documento que implicara el compromiso de esos “hombres libres”.

Los derechos recogidos en el primer *Agreement* eran pocos; solamente el derecho a la participación política por medio de representantes elegidos, la libertad religiosa y la igualdad ante la ley, se asemejan a alguno de los que existen en nuestras constituciones hoy, siendo coyunturales el de la inmunidad frente a un enjuiciamiento de las tropas parlamentarias, así como la prohibición de ser reclutado en forma obligatoria (si bien esta última contaría ahora con muchos partidarios y guarda similitud con la objeción de conciencia).

El segundo *Agreement* no reúne más derechos, excepto el de irretroactividad de las leyes. Sin embargo, la versión de su comité preparatorio que nos ofrece Lilburne en *Foundations of Freedom* incluye asimismo el derecho a la no autoincriminación, prohíbe dilaciones indebidas en los procedimientos así como la prisión por deudas, establece la proporcionalidad de las sanciones punitivas y un mercado libre frente a los monopolios⁵⁰⁵. Otras libertades, surgidas en aquel contexto social específico, parten de una traslación amplia del derecho de propiedad: impuestos proporcionales, tasa máxima de interés del seis por ciento. También se instituye el jurado para cualquier supuesto jurídico.

El tercer *Agreement* confirma el elevado listón de exigencias establecido en las *Foundations of Freedom* publicadas por Lilburne, si bien con algunas adiciones como la remisión a la *Petition* de 1628, que reclamaba el *habeas corpus* y contenía una demanda que luego daría lugar al famoso aforismo *no tax without representation*⁵⁰⁶. Lo que sí cambia aquí, sin embargo, es el sistema de control para evitar que los representantes vulneren el Acuerdo, más enérgico que en el segundo *Agreement*. Ese mecanismo no es verdaderamente el de nuestro esquema actual en relación con las constituciones, sino el viejo modelo *republicano*, que a través de ciertos escritores renacentistas, había llegado a los *levellers*. La esfera judicial aún no estaba totalmente separada de la legislativa y del gobierno propiamente dicho. En cualquier caso, y antes de pasar a este punto, es importantísimo señalar que muchos de los derechos y

⁵⁰⁵ Gran parte de estos preceptos se inspiraba en la lectura de fuentes clásicas. leyes que suavizaban la condición del deudor fueron pedidas por la plebe a los magistrados en la antigua Roma en diversas ocasiones. A su vez, Solón, famoso dirigente político de la Atenas democrática, se hizo célebre por librar de tal carga a numerosos hombres de su ciudad (Plutarco lo expone en sus *Vidas Paralelas*, *Solón-Publícola*, XV). La proporcionalidad de las penas era también, salvando las distancias con nuestro tiempo y con los *levellers* en cuanto a las infracciones a considerar, una preocupación de los antiguos. No eran éstos demasiado propicios a la Ley del Tali3n, como correspondía a sociedades más centralizadas que no asumían ya el primitivismo de la venganza particular. Muchos preceptos griegos y romanos establecían sanciones en forma de multa, o convirtieron otras de tipo corporal a tal provisi3n. Schulz, Fritz: *Prinzipien des Romischen Rechts*, M3nich y Leipzig, Verlag von Duncker und Humblot, 1934; trad. cast. de Manuel Abell3n Velasco, por donde se cita, *Principios del Derecho Romano*, Madrid, Civitas, 1990, pg. 182.

⁵⁰⁶ Una de las reivindicaciones pertenecientes a la Revoluci3n americana: no hay impuesto sin representaci3n.

libertades fundamentales que hoy propugnamos estaban en el ideario nivelador, y que su introducción en un acuerdo *popular* también se corresponde con nuestra época⁵⁰⁷. Lo único que ocurre es que el concepto de “soberanía popular” en su sentido moderno aún estaba engendrándose. Por eso he preferido hablar a lo largo de este trabajo de “supremacía”. Las fuentes del Derecho, no se olvide, eran diversas y con una jerarquización muy difusa.

Los niveladores apoyaron siempre el principio de **representación**. Pero no al modo medieval, con parlamentos que simplemente asentían o rechazaban las directrices del monarca. Los miembros de la asamblea deben seguir los mandatos de sus electores, aprobando leyes en consecuencia. Y éstas además obligan a todos, sin excepciones por razón del cargo ejercido ni de jurisdicciones o aforamientos especiales. Se produce así un salto de la decisión individual a la colectiva y nadie puede quedar sometido a esta última sin su consentimiento, que va implícitamente ligado a los derechos de dar instrucciones al representante y *revocar sus poderes periódicamente*.

Sin embargo, ante esta situación surge un nuevo problema. Los mandatarios pueden, dada la corrupta naturaleza del hombre, “traicionar” a sus mandantes. Por tanto, la reunión de todo el pueblo debe acordar un compromiso con *límites precisos al poder*.

I.2.4.3. El autogobierno y sus garantías: la herencia clásica

¿Acaso los parlamentarios no estaban corrompiéndose, condescendiendo con un Rey cuya presencia ya no era necesaria en la vida política, y vulnerando también esos mismos derechos y libertades que habían dicho defender?. La experiencia social y política de los ingleses, ya vigente durante los Estuardo, había sido de desconfianza hacia los reyes, pero las Guerras Civiles hicieron que se ampliara a sus representantes. Por tanto, los *levellers* desconfiaban intensamente de cualquier gobierno. Una primera herramienta para controlarlo, si bien alejada todavía de un más perfecto desarrollo posterior, fue la de índole “constitucional”: el *Agreement* como *paramount law*. Y este Acuerdo popular incorporaba a su vez determinados mecanismos que permitían tomar cuentas al poder, en coherencia con su objetivo. Es decir, aproximaba al *autogobierno* a los ingleses. Para ello, los niveladores contaron con una tradición cuyo origen se remontaba a la Atenas democrática, y en general a

⁵⁰⁷ Hasta el extremo de que si uno lee con atención el artículo de Laporta, Francisco J.: “Imperio de la ley. Reflexiones sobre un punto de partida de Elías Díaz”, *Doxa* n. 15-16, Alicante, Universidad de Alicante, 1994, pp. 133-45, advertirá que este concepto, en su acepción actual postulada por el profesor, posee la mayor parte de los derechos que introdujeron los niveladores en sus *Agreements*.

las ciudades-estado griegas, pasando luego por la república romana y llegando hasta los pensadores de la Italia renacentista. Tales textos penetraron en un ámbito sumamente extenso de la educación inglesa. Si, como dicen los historiadores de la dramaturgia, Shakespeare fue muy popular durante los tiempos isabelinos, sus continuas referencias a la cultura clásica, sistemas de gobierno incluidos, eran familiares al menos para gran parte del público que disfrutaba de sus obras⁵⁰⁸. Cuando he realizado en páginas anteriores breves esbozos sobre las biografías de los radicales, no he pasado al detalle de analizar cuál era su formación. Baste saber que el humanismo era muy influyente en ella, y que como ya ha señalado Glover, la escuela secundaria era un buen receptáculo para los autores griegos y latinos. Además, sus textos contaban con traducciones al inglés desde la segunda mitad del siglo XVI⁵⁰⁹.

Así pues, los panfletos de los *levellers* y sus contemporáneos incluían numerosas alusiones a Tito Livio, Aristóteles, Tácito, Plutarco, Cicerón y otros autores de la antigüedad, cuando no citas expresas. Sin olvidar al receptor más importante de los mismos en el Renacimiento, Nicolás Maquiavelo. La extendida instrucción de la época hizo que numerosos activistas ingleses hubieran leído en escuelas y centros educativos a los clásicos de Grecia y Roma. Los Debates de Putney, así como muchos panfletos, demostraban su lectura y estudio, a menudo en el original. Los niveladores y las mentes inquietas de su tiempo buscaron recoger allí soluciones y propuestas para los nuevos interrogantes políticos. Lo que diferenció a los *levellers* de otros coetáneos fue su interpretación particular de los textos, pues pretendían defender un sistema cercano a la democracia. Por decirlo de alguna forma, proyectaban hacia el presente un pasado republicano acorde en mayor medida con el protagonismo del *demos* que con las instituciones de la constitución mixta. Más próximo a los atenienses que a Roma, quizás por influjo del congregacionalismo puritano que propugnaba el autogobierno de los fieles. Las ideas que asumieron son fácilmente analizables.

En primer lugar, encontramos su concepción de la **milicia como “pueblo en armas”**. En los *Discursos sobre las Décadas de Tito Livio*, Maquiavelo había expuesto que los mercenarios sólo pelearían por su paga, sin preocuparse de luchar con energía, y que, además, con un ejército formado por tales secuaces, la libertad política de los ciudadanos fenecería. Con ello se hacía eco de unas ideas propagadas mucho antes por autores como el propio Livio, Tácito o Plutarco. Y que también sostendrían

⁵⁰⁸ Por sólo mencionar algunas, recuérdense *Coroliano*, *Julio César*, o *Timón de Atenas*.

⁵⁰⁹ Glover, 1999, pp. 53 y 54. El académico menciona la traducción de los discursos escritos por Demóstenes en 1570.

levellers y agitadores en Putney⁵¹⁰. Encajaba a la perfección con el combate mantenido por los *ironsides* contra el monarca y respaldaba su petición de inmunidad, *así como el entendimiento de que luchaban por sus libertades*.

El segundo mecanismo que los niveladores defendieron en sus *Agreements* fue **limitar los mandatos** de la autoridad, incluidos jueces, gobierno y parlamentarios. La máxima instancia gubernamental correspondía al Parlamento, pero en abstracto, es decir, no podía quedar implícitamente unida a determinados individuos. *La obediencia al cargo se desligaba de la específica persona que lo ocupaba*, tal y como correspondía a un modelo sometido al imperio de la ley⁵¹¹. Esto era familiar a la Reforma, como hemos visto⁵¹². Y otra vez es en Maquiavelo donde encontramos la alusión correspondiente, basándose en la república romana. Allí los “dictadores” eran magistrados que en situaciones de emergencia poseían poderes extraordinarios para dirigir la comunidad. Mas si una concesión otorgada para ello se extendía demasiado, la servidumbre de los ciudadanos comenzaba. También menciona el florentino que en cierto instante los romanos habían confiado a los decemvros la legislación, pero que estos diez hombres se habían vuelto déspotas por no sufrir límites su facultad. En consecuencia, y apoyándose en estos ejemplos históricos también tomados de autores latinos, Maquiavelo propugnaba que la república nunca cediera poder a sus gobernantes, salvo para un tiempo determinado. De ahí el empeño *leveller* en limitar el período de mandato de *todos* los Parlamentos ante los que se hallaba.

Esta idea del mandato limitado en el tiempo se correspondía con antiguos sistemas de elección existentes en Inglaterra desde tiempos remotos. Así, el jurado y algunos tribunales de la demarcación eran elegidos localmente por los *freemen* cada concreto período⁵¹³. Como es obvio, el mecanismo permitía cierto grado democrático de control, pues podrían pedirse cuentas a quien ejerciera su función de manera errónea o ilegítima, no siendo reelegido entonces. Fue extendido también por los *levellers* a los jefes militares⁵¹⁴, sin duda también en conexión con el comentario de Maquiavelo en sus *Discursos*⁵¹⁵.

⁵¹⁰ Vid. pg. 103, *supra*.

⁵¹¹ Overton dijo en *An Appeale*, refiriéndose a los parlamentarios: “el rechazo, desobediencia y resistencia a sus órdenes personales no es rechazo, desobediencia y resistencia a su autoridad parlamentaria; así que quien se resiste a sus órdenes particulares, no resiste al Parlamento” (Woodhouse, *op. cit.*, pg. 329).

⁵¹² Vid. pg. 25, *supra*.

⁵¹³ *County y Hundred Courts*. Maitland, 1963, pp. 38 y 42.

⁵¹⁴ Punto 29 del último *Agreement* (1649).

⁵¹⁵ Skinner, 1978a, pg. 192.

Los otros sistemas de de control republicanos que garantizaran el autogobierno serían los de **incompatibilidad y rotación de cargos**, provenientes de nuevo de la época romana⁵¹⁶, y que aparecen en los dos Acuerdos mencionados. Con el primero, se prohibía ocupar diferentes puestos públicos al tiempo, y por medio del segundo se impedía la reelección continua de un mismo candidato, obligando a períodos de inelegibilidad para la persona de que se tratase.

Los agitadores y *levellers* no querían que los miembros del Parlamento, sobre todo a medida que parecían incumplir su papel garante de los derechos durante las Guerras, se hicieran fuertes concentrando potestades. Optaron por descentralizarlas y limitarlas en el tiempo y además fijaron mecanismos como el enjuiciamiento de representantes en supuestos de gravedad y que la milicia fuese voluntaria. Casi todos ellos eran resortes republicanos clásicos, pero que aquí no aparecían en forma de constitución mixta, sino basados en la supremacía del “demos”. Del primer *Agreement* al último, las exigencias contra el poder se redoblan. Desde los *sheriffs* hasta los alcaldes, jueces de paz y mandos del ejército, las magistraturas serían elegidas por las mismas personas que seleccionaban a los representantes parlamentarios, es decir, por un segmento amplio de la población inglesa. Los resortes para hacerlo tenían origen en una historia antigua transmitida a través de generaciones, así como en determinadas prácticas de los ingleses, incluidas las de tipo religioso, municipal o reproducidas en los gremios y compañías.

I.2.4.4. El *Agreement* como *paramount law* reflejada por escrito y aprobada por el pueblo mediante pacto

Pero lo que distingue al radicalismo, por un lado, de otros pensadores más o menos coetáneos, como los *commonwealthers*, por ejemplo, de otro, es una distinta lectura de aquel mismo legado filosófico-político. La diferencia consistía en erigir o no al pueblo como sujeto principal del poder. Los *levellers* no se atrevieron a denominar su modelo de organización política como “democracia”, pero ya aparecía sembrada entre sus ambiciosas reivindicaciones su lectura moderna, que la convierte hoy en “representativa” y “constitucional”. Pues resulta evidente que escogieron al pueblo como último origen de las potestades instituidas en la comunidad. Este actor político que para los niveladores goza de la supremacía, incluso frente a los Parlamentos, establece sus condiciones redactando un *Agreement* que no necesita ser ratificado por

⁵¹⁶ Paricio, *op. cit.*, pg. 69.

autoridad alguna de entre las existentes, ni siquiera por el Rey o la Asamblea. El primer Acuerdo fue presentado ante el *General Council of the Army*, el órgano rector de la milicia, del *pueblo* en armas. Y el tercer compromiso se dirigió “*all sorts of people*”, apelando a la rúbrica popular. Sólo el *Officer's Agreement*, que no era obra estrictamente *leveller*, pretendía la aprobación parlamentaria del *Rump*, y aún así el comité inicial había pretendido en su borrador la firma ratificadora del pueblo⁵¹⁷. La perspectiva del radicalismo estaba ya muy cerca de la soberanía popular moderna.

Lo que le distingue es que nunca pergeñó la diferencia entre poder constituyente y constituido, que luego aparecería con la técnica de las convenciones surgida en las trece colonias americanas. Pero el esquema contractual moderno ya había nacido. Los individuos que componen el “pueblo” acuerdan someterse al poder que se erija siguiendo las limitaciones del *Agreement*, aunque los pactos de “unión” (*pactum unionis*) y de “sujeción” (*subiectionis*) aparezcan en el mismo instante cronológico. El primero es el baluarte de una paz que los *levellers* pretendían se estableciera tras las guerras civiles entre los habitantes de Inglaterra, el segundo limitaba los cargos en el poder y su forma de elección. Ambos quedaban reunidos en los *Agreements*.

Así, pues, es posible advertir cuál fue el núcleo del programa *leveller*. *Determinados derechos y libertades no pueden ser vulnerados* y ha de evitarse que el gobierno los viole, fijándolos por escrito, aunque se presuman también otros que no figuran en el documento, así como diversas precauciones contra el poder. Ciertos mecanismos de seguridad sirven para evitar la violación de aquéllos, así como *que el cuerpo político se corrompa* y escape al imperio de la ley. La *paramount law* es un refuerzo especial de índole político-jurídica que impone su criterio a los *comisionados* del pueblo. La constitución o el gobierno “mixtos” no son adecuados para el control del poder. Los *levellers* no temían a la *multitud*. La *representación*, principal en su ideario, junto con el reconocimiento de varios derechos entre los cuales estaba el de propiedad, ya les resultaba suficiente garantía contra el presunto caos que podía crear la turba. Por tanto, el famoso “equilibrio” que respaldaron diversos renacentistas como Maquiavelo, quien sí contaría como discípulos a los *levellers* en temas distintos, fue recuperado por otros autores, pero no así por Lilburne y los suyos. Harrington lo defendería durante la *Commonwealth*. Tanto este pensador como Bolingbroke, Montesquieu o Hume, partidarios también del sistema, influyeron en la Constitución americana de 1787, pero ni los niveladores ni los partidarios de la supremacía parlamentaria al modo de Parker⁵¹⁸ asumieron los postulados de la constitución mixta.

⁵¹⁷ Vid. pg. 78, punto 2.

⁵¹⁸ Vid. *supra*, pp. 54-56.

I.2.5. Originalidad y limitaciones del legado nivelador

A lo largo de esta investigación se ha accedido a la “red” para extraer datos de utilidad. Mecnografiando el término *levellers*, surge una muestra extraordinariamente amplia de admiradores más o menos tendenciosos. Digamos unas pocas palabras sobre sus pretensiones y el legado nivelador.

Con respecto al libertarismo, tanto de “izquierda” como de “derecha”, hay que afirmar que los *levellers* no distinguían en la misma medida que nosotros las esferas de la moral, el derecho y la política. Su concepto de la virtud, ciertamente, podía extenderse a numerosas personas mediante la educación. Pero rechazaba el relativismo ético del que hoy puede hacerse gala desde una óptica liberal y no cognoscitivista. *Las libertades y los derechos provenían de una tradición confirmada racionalmente. No así la estructura del poder político, que requería su mutación inmediata.*

Los *levellers*, de otro lado, nunca pusieron en duda la intervención de las autoridades para auxiliar al pobre o intervenir en la modificación de ciertas situaciones como las padecidas por los enfiteutas. Quizás su lucha contra monopolios y tasas también sitúe sus premisas cerca de los libertarios, pero nunca dejaron de apoyar al Parlamento como institución centralizada, al margen de competencias territoriales que entonces no eran puestas en duda por nadie. Los *levellers* son hijos de un Estado nacional que surgía con toda su fuerza a través del conflicto con áreas periféricas como Escocia e Irlanda, e incluso en abierta rivalidad frente al comercio holandés o los absolutismos continentales.

En cualquier caso, los niveladores sí creían en cierto “institucionalismo”, ese que hizo a Stuart Mill receloso ante puras soluciones típicas del darwinismo social⁵¹⁹ e identificaría a Thomas Hill Green como un liberal de izquierda. Las instituciones eran defendidas por los *levellers* como vías para la participación del pueblo y el control de las potestades de tipo gubernamental, que siempre velarían por la *salus populi*, concepto muy flexible que podía abarcar desde la autodefensa contra la agresión hasta la satisfacción de necesidades básicas. Los estados presocial y prepolítico de Buchanan⁵²⁰ eran parte de su bagaje teórico, dado el contractualismo que sostenían. Pero eso no quiere decir que fuera deseable para los *levellers* permanecer en el estado de naturaleza donde cada individuo se preocuparía sólo de su persona.

⁵¹⁹ Vid. Álvarez Gálvez, Íñigo: *Utilitarismo y derechos humanos. La propuesta de John S. Mill*, Villaviciosa de Odón, Plaza y Valdés, 2009, pp. 328 y 329.

⁵²⁰ El primero requiere para salir de él, un pacto de unión; el segundo, otro de sujeción.

Cierto liberalismo sí podría ser mucho más cercano a su herencia, aunque sólo en la medida en que resulta compatible con el sostenimiento a ultranza de varios derechos y libertades. Si alguna vez el programa liberal se apartó de aquellas premisas no podríamos hablar de su posible afinidad con los *levellers*. No, por ejemplo, cuando en la Europa continental del siglo XIX se mostró propenso al sufragio censitario. La tendencia *leveller* fue liberal, pero de índole populista, como demuestran sus alegatos en contra de una cleptocracia que a través de impuestos y concesiones ilegítimas impidiera la igualdad y que los ciudadanos prosperaran gracias a su propio mérito y esfuerzo. La virtud podía ser desmoralizada ante el avance de una corrupción política que extendiese su imperio sobre la sociedad y robara los frutos del trabajo a cualesquiera personas, vetando la movilidad del individuo. Precisamente para evitar esto y la constitución de facciones amenazadoras, siempre defendidas por el *statu quo* de la división estamental, los niveladores defendieron un control democrático de las instituciones, con la igualdad ante la ley como telón de fondo. El poder tiende a la corrupción y el absoluto corrompe totalmente, sostenía el liberal Lord Acton.

El mensaje de *autogobierno* que los *levellers* propagaron fue entonces el propio de la *tradición clásica*, de los pensadores y estadistas que en Grecia y Roma apuraron la idea de vigilancia ejercida sobre las magistraturas, de *no sometimiento a su arbitrariedad*. Lo cual a su vez les hizo mantener la teoría de la independencia, o como diría Quentin Skinner, de la no-dominación⁵²¹. Los *levellers* representaron la mejor concordancia entre autonomía personal y gobierno democrático, menos próxima a una política de las élites, y en consecuencia, de los “Santos”; vocacionalmente expansiva. Pero que fuera la adelantada del momento no quiere decir que condujese hasta la universalidad tal y como hoy la entendemos. Las mujeres, los sirvientes y mendigos quedaban fuera de la consideración expuesta. No tuvieron esa autonomía reconocida, por hallarse aún envueltos en el mundo patriarcal de la época, con sus “dependientes” sin emancipación.

De cualquier forma, la desconfianza hacia el poder, fruto de una experiencia política e incluso personal propia, les hizo crear un nuevo modelo para la juridificación del sistema político, el *Agreement of the People*. Esta fue su novedosa perspectiva. Poner límites al poder de manera permanente, sin veto estamental posible para impedirlo, configurando una *paramount law* que estableciera competencias y períodos cortos para los cargos públicos, rendición de cuentas directa o indirecta de los

⁵²¹ Skinner, 1998, *passim*. Vid. también, *passim*, Pettit, Philip: *Republicanism. A Theory of Freedom and Government*, Oxford, Oxford University Press, 1997; trad. cast. de Toni Doménech, por donde se cita, *Republicanism. Una teoría sobre la libertad y el gobierno*, Barcelona, Paidós, 1999.

mismos, así como determinados derechos fundamentales de carácter inviolable. El contractualismo resurgía así en su molde más acabado.

El libre juego social era incipiente en las ideas y los niveladores prefirieron atacar la estructura política. Por el camino se obviaron otras discriminaciones no tan evidentes para ellos. Pero todo tiene su entramado contextual. En aquella época, por exponer un ejemplo simple, los métodos contraceptivos modernos no existían. Propugnar, como algunos visionarios religiosos solicitaban, la abolición del matrimonio, y de manera simultánea el “amor libre”, implicaba sumergir a las mujeres en la indefensión más absoluta. Pedir que éstas, los sirvientes, mendigos y aprendices obtuvieran el derecho al voto significaba, teniendo en cuenta su requisito de ser público y no secreto, dar mayor peso a quienes dispusieran de más “clientes” y “familiares” a sus órdenes. Y se trataba de ir en otra dirección; la de posibilitar que todos los hombres libres pudieran participar en el proceso político, no de aumentar la cuota en él de quienes ya eran poderosos. Esto, desde luego, no intenta obviar aquella ignorancia *leveller* de las capacidades poseídas por cualquier ser humano adulto⁵²², pero sí destaco que pusieron en duda claramente el elitismo habitual restrictivo.

I.2.6. ¿ Hubo herencia *leveller*?

Los análisis realizados hasta el momento entienden que nunca ha existido una influencia *leveller* de forma directa y reconocida en el escenario político posterior a sus últimos esfuerzos. En el siglo XVIII hay rastros de que el fantasma nivelador fue agitado en Inglaterra por defensores drásticos de la propiedad privada, quienes acudían a esta denominación para descalificar a enemigos de quienes se presumía una militancia reformista social exaltada. Esta tradición provenía ya de la obra de Nedham e incluso de Harrington⁵²³, y se continuó utilizando en el siglo XVIII de manera similar a la que durante la guerra fría se empleaba para atacar a cualquier enemigo político con visos de progresismo⁵²⁴.

⁵²² Si habláramos de los menores y otros posibles sujetos ya nos saldríamos del tema. No vamos ahora a entrar en la teoría del beneficiario; excede el ámbito de esta investigación y no añade nada al análisis aquí expuesto sobre la época y sus ideas.

⁵²³ Sharp, Andrew (ed.), *op. cit.*, pg. xi.

⁵²⁴ Robbins, Caroline: *The Eighteenth-century Commonwealth man (Studies in the Transmission, Development, and Circumstance of English Liberal Thought from the Restoration of Charles II until the War with the Thirteen Colonies)*, reimp. (ed. original de Cambridge, Harvard University Press, 1968), Indianapolis, Liberty Fund, 2004, pg. 1.

Por su parte, aquellos historiadores que escribieron en el siglo XIX y que más cerca podían permanecer al ideario *leveller* (así, William Godwin⁵²⁵), centraron la atención en escritores republicanos del Interregno como James Harrington, Henry Vane y John Milton, e incluso en Oliver Cromwell. Toda esa serie de apasionados ensayistas decimonónicos que intentaron retratar la *Commonwealth* influyeron de manera enérgica en el “inconformismo”, movimiento que se relacionaba con disidencias protestantes de la iglesia anglicana y que apoyó la reforma social y política del país. De ellos provendría la escuela de pensadores como Bentham, Stuart Mill o Mary Wolstonecraft. Sin embargo, este grupo permaneció ajeno a una posible influencia niveladora, cosa no demasiado extraña si advertimos que los *Clarke Papers* fueron publicados a finales del XIX⁵²⁶.

El estudio sobre el legado *leveller*, por tanto, ya se trataba de su contenido, ya de sus influencias, careció durante mucho tiempo de investigadores que expusieran un análisis profundo acerca de sus dimensiones. Sólo a partir de los años cuarenta del siglo XX los términos del debate iban a quedar mucho más claros. Marxistas como Christopher Hill o David Petergorsky identificaron a los *levellers* con la pequeña burguesía, mientras que afines al constitucionalismo democrático defendieron su tentativa precursora. Durante la lucha contra el nazismo hubo una fuerte necesidad de volver a las raíces de la democracia y los derechos. Desde ese preciso instante los niveladores ya nunca se fueron del todo y, como muestra la bibliografía aquí presentada, no han cesado las obras sobre su trayectoria, fundamentalmente en Estados Unidos e Inglaterra. De hecho, puede detectarse una traza oculta que partiría del “momento” nivelador.

⁵²⁵ Autor de *History of the Commonwealth*. Vivió de 1756 a 1836. Propagó el enciclopedismo francés, especialmente a Helvecio, y su obra principal fue *An Inquiry concerning Political Justice and Its Influence on General Virtue and Happiness* (vid. Horowitz, Irving Louis: *Los anarquistas. I. La teoría*, 3ª ed. en castellano de 1982, Barcelona, Alianza; el original es *The Anarchists*, de 1964, s.l. y s.ed.). Como casi todos los conocedores de la época saben, contrajo matrimonio con Mary Wolstonecraft, quien escribió *Vindicación de los Derechos de la Mujer*. Hija de ambos fue la famosa Mary Shelley, autora de *Frankenstein*.

⁵²⁶ Vid. pg. 91, nota 331, *supra*. Y Sharp, Andrew (ed.), *op. cit.*, pg. xi. El cartismo posee también curiosas similitudes con los *levellers*. Su período de mayor importancia se inició en 1838 y abarcaría dos décadas. Los cartistas combatieron básicamente por que se estableciera en Gran Bretaña una Carta del Pueblo con varios derechos políticos y sociales. La primera Carta del Pueblo fue publicada en 1838 y redactada por William Lovett (1800-1877), fundador en 1836 de la Asociación de Trabajadores de Londres. Formulaba seis reivindicaciones: parlamentos anuales, sufragio universal masculino, igualdad de distritos electorales, sufragio secreto, remuneración de los diputados (puesto que sólo aquellos más pudientes podían dedicarse a la tarea política, dado su tempo de ocio) y abolición de los requisitos sobre propiedad que se les exigía (Cook, *op. cit.*, pg. 90: “Carta del Pueblo” y “cartismo”). Este movimiento fue precursor del moderno socialismo británico. Teniendo el color verde como emblema, nadie ha detectado relación directa demostrable con los niveladores, pese a que sue evidente coincidencias podrían indicar el paso de algún hilo conductor. La atracción de pesadores socialistas por los *levellers* afloró de hecho desde muy temprano, como demuestra el caso de Eduard Bernstein, importante líder perteneciente a la socialdemocracia alemana, que difundió su obra a través de un libro sobre la revolución inglesa publicado en 1895.

Así, Robbins⁵²⁷ señala que pese a que, en efecto, no se obtuvieron los Debates de Putney hasta finales del siglo XIX, los *Agreements* sí resultaban conocidos por muchos, a través de diversas ediciones. Y que gran parte del material escrito por los autores del Interregno estuvo alimentado por la repercusión de aquellas discusiones en el seno del ejército. Varios trabajos históricos contemporáneos extraen la influencia de los panfletos *levellers* en autores radicales que escribieron, no ya sólo durante el período de la *Commonwealth*, sino bastante después⁵²⁸. No son desdeñables las propias influencias niveladoras en los *commonwealthers*. Se desprende de los escritos de Neville, sobre todo de su *Petititon of Divers Well-Affected Persons* de Neville, y que era un escrito que imitaba los *Agreements*, así como de la propia participación de Wildman en el círculo harringtoniano. Tampoco resultan despreciables el *Instrument of Government* de 1653 y los proyectos constitucionales del *Rump* de 1659, tras la muerte de Cromwell⁵²⁹.

Sin embargo, no en la tradición política posterior a los *levellers*, al menos de modo manifiesto, autores significativos *que reconocieran a aquellos hombres como sus precursores*. Y tampoco movimientos políticos activos que admitieran su herencia. Una de las explicaciones al hecho de que no exista hilo conductor diáfano, es la de la propia mala prensa de los *levellers*. Si, como he señalado, se identificaba su mensaje con el de radicales de carácter social⁵³⁰, es lógico que quines conocieran mejor sus ideas desearan ocultar su posible influencia. Asimismo, es muy probable los autores que escribieron con posterioridad a los niveladores, pretendiendo elaborar porpuestas de cierto calado intelectual, estimaran que los *levellers* habían sido sobre todo activistas militantes y no teóricos de altura ni eminencias en filosofía política, sino más bien hombres de acción. Y que, incluso, en este ámbito habían resultado poco pragmáticos.

⁵²⁷ Robbins, *op. cit.*, pg. 1. La autora fue de los primeros historiadores en cuestionar la influencia unilateral lockeana en la revolución de las trece colonias americanas de 1776, sacando a la luz sus aspectos republicanos.

⁵²⁸ Uno de ellos fue John Toland (1670-1722), polemista afín al panteísmo y que escribió entre finales del siglo XVII Y principios del XVIII. Vid. Wootton, David: "Introduction. The Republican Tradition: From Commonwealth to Common Sense", pp. 1-41, en Wootton, David, *op. cit.*, pp. 23 y 24. Según Wootton, Toland estudió en Holanda, donde se implicó en actividades políticas de carácter radical y utilizó la librería de Benjamin Furly, exiliado cuáquero. En ella figuraban los trabajos de Lilburne, William Walwyn e incluso Winstanley. A su vez, el sustrato ideológico de la Inglaterra de la Guerras Civiles pasaría luego de Holanda a Francia, transmitiéndose a personas como D'Holbach, a través del panteísmo de hombres como Toland. Se ha querido derivar este último de *levellers* como Wildman e incluso del *digger* Winstanley.

⁵²⁹ Worden, Blair: "Harrington's *Oceana*, Origins and Aftermath, 1651-1660", en Wootton, David (ed.): *Republicanism, Liberty, and Commercial Society, 1649-1776*, Stanford, Stanford University Press, 1994, pp. 136 y 137. En cuanto al *Rump* de 1659, sólo tenemos esbozos de sus planes constitucionales. Tenía un plan que le aproximaba a los *levellers*, por haber vuelto a un proyecto que había barajado en 1653 para establecer parlamentos unicamerales y consejos ejecutivos para gobernar en los intervalos entre sus sesiones. *Ibid.*, pg. 136.

⁵³⁰ Una de las asociaciones más populares en Inglaterra en la década de 1790 fue la "Asociación para la Preservación de la Libertad y la Propiedad contra Republicanos y Niveladores". Morgan, *op. cit.*, pg. 233.

Pero cabe entonces preguntarse cómo es posible que si nadie reconoció el legado *leveller*, los panfletos y las proclamas de aquellos hombres nos resulten tan extrañamente familiares, tan parecidos a muchas de las consignas revolucionarias norteamericanas de 1776. La explicación puede sintetizarse de la siguiente forma. A lo largo de este trabajo se han expuesto sus ideas especificando que muchas eran patrimonio común del radicalismo inglés. Los niveladores no conformaban un grupo sectario ajeno a la realidad política y social de su época. De hecho, el relativo éxito de su acogida en el *New Model Army* se debió a su gran capacidad de conexión con las reivindicaciones de los *ironsides*. Y como también se ha podido advertir, la propia innovación del *Agreement* fue apoyada por los Grandes del Ejército cuando se elaboró el Acuerdo propuesto por los Oficiales en 1648. El pueblo como sujeto legitimado principal en la escena política, la fundamentación y garantías de unos derechos, la desobediencia frente al gobernante, el imperio de la ley, la libertad religiosa...los *levellers* compartían todas estas ideas con otros muchos hombres de su época. Tal fue así, que precisamente por ello, y ante la edificación cromwelliana de una nueva República, numerosos autores afines a esos postulados decidieron cerrar filas en torno al líder del *New Model* por miedo al contraataque monárquico. Conviene analizar sus principales ideas.

I.3. De los niveladores a los escritores del Interregno: la *Commonwealth* de Oliver Cromwell

I.3.1. Introducción: los problemas de una república emergente y sus experiencias constitucionales

El período republicano se abrió con la ejecución de Carlos I el 30 de enero de 1649, así como con la abolición de la monarquía y de la Cámara de los Lores por la de los Comunes en febrero del mismo año.

La *Commonwealth* fue, en buena parte, un experimento de carácter nacionalista. Bajo el gobierno inglés iban a subordinarse las islas británicas, incluyendo los territorios Gales, Escocia e Irlanda, así como las colonias de ultramar. El ejército de Oliver Cromwell era la médula espinal de una administración que en ningún supuesto, sin embargo, debe ser entendida al modo actual. Se trataba de un gobierno que para su efectividad necesitaba en gran parte de la colaboración por parte de la *gentry* del país, como los anteriores de cuño monárquico. Este sector social gozaba de poder, tanto de hecho como de derecho, para liderar una extensa clientela de campesinos más pobres y sirvientes, retener el control de las localidades y nombrar

u ocupar puestos públicos. Multas y tierras confiscadas a los realistas sirvieron al principio para sufragar la administración y las guerras de la república⁵³¹, pero después no resultaron suficientes y la *gentry* reaccionó cuando se vio amenazada por tributos más elevados⁵³².

Los miembros del *Rump*, el Parlamento con el que se inició el Interregno, eran muy diversos. Algunos resultaban sinceramente radicales, partidarios de la república, de la máxima tolerancia religiosa y de realizar, incluso, reformas sociales. Otros, sencillamente, querían disfrutar de los beneficios de la victoria parlamentaria. Los primeros rechazarían la disolución del Parlamento, pensando en que éste nunca dispondría, en caso de recomposición, de la fuerza política suficiente como para implantar sus objetivos reformistas. Los segundos también se negaban a esa posibilidad, pero sólo porque deseaban conservar sus privilegios⁵³³.

Por su parte, los jefes del ejército, respaldados por un grupo numeroso de oficiales, lo que deseaban eran fondos suficientes como para sufragar las pagas y gastos de la milicia. Su grado de profesionalización y burocratización habían aumentado, eran mucho mayores que al inicio de las Guerras Civiles. La importancia de esta organización y sus facultades para dirigir la política del país quedaron reforzados ante diversas victorias de índole militar. Así, Cromwell dirigió con éxito varias incursiones contra rebeldes irlandeses y escoceses, ya en el año 1650, consiguiendo el reconocimiento internacional de la joven república, y derrotando al año siguiente a un ejército dirigido por Carlos II en Worcester. De hecho, entre 1651 se produce la definitiva anexión de Escocia a la Commonwealth (Irlanda ya era antes dominio inglés). El poderío marítimo se vio también reforzado, con la derrota holandesa de 1653, que vino a consolidar la expansión colonial⁵³⁴. En medio de este contexto, pues, el ejército emerge como titular del gobierno en un país aún dividido por disputas religiosas e incluso algunas de carácter social. Con una inestabilidad e incertidumbre que a duras penas lograban frenar los militares. Pero el control último de Westminster era suyo, y así lo demostraron cuando Cromwell ordenó la disolución del *Rump* en abril de 1653. Éste se había encargado de poner fin oficialmente al orden político monárquico y de vender tierras de la Corona y la Iglesia⁵³⁵; cumplido su papel, tuvo que extinguirse.

Los jefes del ejército eligieron a continuación a los miembros de otro Parlamento para el cual no hacía falta especiales cualificaciones, salvo la de ser

⁵³¹ Hill, 1961, pg. 151

⁵³² Hubo varios boicots a las recudaciones, el último en el invierno de 1659-60. Ibid., pg. 156.

⁵³³ Ibid., pg. 152.

⁵³⁴ Ibid., pp. 131 y 132.

⁵³⁵ Hill, 1961, pg. 131.

aceptables para la cúpula militar, motivo por el que se le llamó *Barebones*⁵³⁶, y cuyos miembros lo eran en gran parte también de diversas congregaciones⁵³⁷. Durante su mandato, extremadamente corto, y que duró sólo unos meses, se realizaron reformas legislativas importantes como la aprobación del divorcio civil, el registro de la misma índole sobre nacimientos, medidas para auxiliar a los deudores, etc. La asamblea se encontraba dividida entre los más radicales y otros más moderados, que trasladaban a su vez esta escisión al seno del ejército, con una fracción simpatizante de los primeros liderada por Thomas Harrison⁵³⁸ y otra que capitaneaba John Lambert (1619-1683), más cercana a los segundos. Estos últimos, que representaban un estrato social más conservador, aprovecharon una sesión de mayor ausencia de los extremistas para disolver el Parlamento en forma definitiva, ofreciendo todos sus poderes a Cromwell. El motivo principal de disputa había sido el de que los reformistas deseaban abolir los patronatos eclesiásticos que permitían a la *gentry* nombrar a los párrocos de las diferentes demarcaciones⁵³⁹.

Inmediatamente después, y bajo la inspiración de Lambert, los oficiales redactaron un documento destinado a ser una constitución para la república, y que tuvo muy corta vida. El Instrumento de Gobierno (*Instrument of Government*) de 16 de diciembre de 1653 era un *documento escrito* promulgado para permanecer como ley suprema del país, que entonces reunía también a Escocia y Gales. El ejecutivo correspondía al *Lord Protector* (Cromwell), quien gobernaba con ayuda de un Consejo (apartado II) nombrado por el Parlamento, siendo todos estos cargos vitalicios (XXV)⁵⁴⁰. El poder para legislar era también del Protector, pero compartido con la asamblea parlamentaria (I, XXII) elegida cada tres años (VII), si bien Cromwell poseía veto suspensivo (XXIV). Asimismo, detentaba el mando del ejército, mediando para consentir en sus directrices el propio Parlamento, o en caso de que éste no se encontrara reunido, el Consejo de Estado (IV). Además, este último debía dar su aceptación mayoritaria al Lord Protector para asuntos relativos a la guerra o la paz (V).

⁵³⁶ La denominación provenía de Praise God-Barbon, uno de sus miembros, y tendero londinense. Hill, 1961, pg. 131 y "The Nominated Assembly", en Plant, *op. cit.*, <<http://www.british-civil-wars.co.uk/glossary/nominated-assembly.htm>>. Este Parlamento fue despreciado por lo más conservadores, debido a su extracción en gran parte popular ("la chusma").

⁵³⁷ Hill, 1961, pg. 131.

⁵³⁸ Vid. *supra*, pg. 58, nota 190.

⁵³⁹ Vid. "The Nominated Assembly", en Plant, *op. cit.*, <<http://www.british-civil-wars.co.uk/glossary/nominated-assembly.htm>>.

⁵⁴⁰ En este apartado del *Instrument* se mencionaban varias personas concretas para ocupar los cargos de Consejeros de Estado. Después se preveía que en caso de fallecimiento o cese, los parlamentarios elegirían nuevos miembros del Consejo. Se podía juzgar a quienes no cumplieran con sus deberes, variando la competencia para ello según el supuesto. Así, en caso de que el Parlamento estuviera reunido, sería una comisión mixta con varios representantes suyos y otros del Consejo, además de otros altos cargos de la nación. Si no, podía decidir el resto del Consejo por mayoría, siempre que el Lord Protector respaldara esta opinión. De otra parte, el *Lord Protector* sería sucedido por quien designase el Consejo (XXXII).

Los Parlamentos se reunirían todos en el tercer día de septiembre (VII). Se señalaba la proporción de escaños entre territorios (IX y X) que respondía a una redistribución buscada a propósito para dar mayor importancia a centros con más riqueza y número de habitantes⁵⁴¹. También aparecían reglas para el sistema de elección (XI-XIII), así como la prohibición de que católicos y rebeldes irlandeses pudieran votar o ser elegidos (XV). Este impedimento se extendía a los realistas durante cuatro legislaturas (XIV). Tenían derecho al sufragio pasivo los varones mayores de veintiún años, y al activo todos aquellos que ingresaran más de 200 libras anuales al año, en forma de cualquier tipo de bienes (XVIII).

La otra única libertad contenida de manera específica en el Instrumento fue la religiosa para los cristianos que no fueran católicos o predicadores “licenciosos”. Resultaba protegida a través del artículo XXXVIII, que declaraba nulas aquellas disposiciones que la atacaran⁵⁴².

El destino del *Instrument* fue el de fenecer al poco tiempo, pese a procurarse su ratificación por la Cámara, ya que los desacuerdos entre los parlamentarios y el ejecutivo fueron continuos, oponiéndose los primeros a medidas que reforzaban a los militares así como la discrecionalidad del gobierno, e incluso debido a que la Asamblea atacó la tolerancia religiosa defendida por Cromwell⁵⁴³. De manera correlativa, la administración militar tropezó con la continua obstaculización de sus tareas por la *gentry* local⁵⁴⁴. El Protectorado se encontraba frente a un parlamento compuesto por numerosos enemigos de la *Commonwealth*, como realistas, presbiterianos, etc, y que incluso entre sus filas republicanas mantenía un grado de oposición alto a la política del ejército. Sus miembros intentaron aprobar distintas enmiendas para reducir las potestades de Cromwell y reforzar los de la Cámara, lo cual finalmente condujo al Lord Protector a disolverla el 22 de enero de 1655, estableciendo un gobierno militar conocido como el de los “mariscales” (*major generals*)⁵⁴⁵.

Después vino el Parlamento del Segundo Protectorado. Instado por sus generales a conseguir más fondos para el ejército, Cromwell decidió que se iniciara un nuevo proceso electoral. El *Instrument* ya preveía la prohibición de que surgieran

⁵⁴¹ Hill, 1961, pg. 153

⁵⁴² Vid. <<http://www.constitution.org/eng/conpur097.htm>>. La página web contiene el texto del *Instrument* incluido en Gardiner, Samuel Rawson: *The Constitutional Documents of the Puritan Revolution, 1625-1660*, 3ª ed. (1ª, de 1889), Oxford, Clarendon Press, 1906.

⁵⁴³ Hill, 1961, pg. 131, y 153-154; Cook, 1983, pg. 269; Martínez Rodríguez, Miguel Ángel (comp.) *La cuna del liberalismo (las revoluciones inglesas del siglo XVII)*, Barcelona, Ariel, 1999, pg. 110, y Plant, *op. cit.*, “The Instrument of Government”, en <<http://www.british-civil-wars.co.uk/glossary/instrument-government.htm>>.

⁵⁴⁴ Hill, 1961, pp. 154 y 155.

⁵⁴⁵ Vid. Plant, *op. cit.*, “The First Protectorate Parliament”, <<http://www.british-civil-wars.co.uk/glossary/protectorate-parliament-1.htm>>.

como candidatos los realistas, pero había otros posibles opositores al Protector entre las filas republicanas, especialmente extremistas religiosos cercanos a la Quinta Monarquía, así que los seguidores del Protector se emplearon a fondo para impedir que se presentaran. Sin embargo, los electores reaccionaron seleccionando a numerosos hombres dispuestos a enfrentarse con Cromwell, así que las primeras sesiones, comenzadas el 17 de septiembre de 1656, estuvieron dirigidas por sus partidarios, a fin de que los díscolos fueran excluidos de la Asamblea. Nada menos que 93 de los 400 parlamentarios fueron expulsados, por ser condenados “*ungodlies*” (no piadosos). Esto suscitó numerosas potestas y el resentimiento aumentó. De hecho, gran parte de los que permanecieron en la Cámara seguían siendo hostiles al ejército.

Se produjo entonces el último intento de que la *Commonwealth* se estabilizara, de la mano de la *Humble Petition and Advice* auspiciada por un grupo de parlamentarios en junio de 1657⁵⁴⁶. Con ella se recobraba la Cámara Alta y se intentaba el acercamiento al esquema político de la monarquía mixta. Más tradicionalista en su contenido, la *Humble* fue proyecto de los *members of Parliament*, a diferencia de lo ocurrido con el *Instrument of Government*, elaborado y aprobado íntegramente por los militares.

La *Humble* insistía en el mandato vitalicio de Cromwell (que rechazó una primera iniciativa para coronarle), estableciendo asimismo que él designaría a su propio sucesor. No existía rey, sino que Oliver era *Lord Protector* con título específico⁵⁴⁷ y que dirigiría el ejecutivo (apartado I). Convocaría Parlamentos, por lo menos trianualmente, y nombraría un Consejo Privado compuesto de veintiún miembros, seleccionados por él contando con la aprobación de aquéllos, que estarían a su vez formados de dos asambleas, la de los Comunes y una más a la que el texto denomina “la otra cámara”. Precisamente ésta tendría entre cuarenta y setenta personas elegidas por el Protector⁵⁴⁸, con el visto bueno de la otra, y dispondrían de sus cargos en forma vitalicia y con poder de veto sobre lo aprobado por la Cámara Baja⁵⁴⁹.

La *Humble* hacía hincapie en la necesidad de que fueran respetados los derechos y privilegios parlamentarios, indicando que sólo podría cesarse a los representantes si así lo juzgaba necesario la propia Cámara a la que pertenecieran

⁵⁴⁶ Vid. Plant, *op. cit.*, “The Humble Petition”, <<http://www.british-civil-wars.co.uk/glossary/humblepetition.htm>>.

⁵⁴⁷ “*His Highness the Lord Protector of the Commonwealth of England, Scotland and Ireland*” (“Su Alteza el Lord Protector de la República de Inglaterra, Escocia e Irlanda”).

⁵⁴⁸ Cromwell situó a sus allegados. Vid. Hill, 1961, pg. 156.

⁵⁴⁹ Vid. Martínez, *op. cit.*, pg. 134, y para el texto de la Petición en sí mismo, Gardiner, *op. cit.*, <<http://www.constitution.org/eng/conpur102.htm>>.

(apartado III). También remachaba la exclusión del proceso electoral de realistas, católicos (“papistas”), y en general de todos aquellos rebeldes que se hubieran sublevado contra el Parlamento o conspirado contra “Su Alteza” (es decir, Cromwell)⁵⁵⁰. Asimismo, establecía qué altos cargos concretos de la nación debían contar con aprobación asamblearia (IX), confirmando la tolerancia religiosa para todos los grupos protestantes (XI)⁵⁵¹. También se afirmaba la inimpugnabilidad de todas las transmisiones de propiedad realizadas desde la caída del rey (XII).

La *Humble Petition and Advice* era un intento de resolver las tensiones entre los generales del Protector y los parlamentarios provenientes de la *gentry*, pero no tuvo demasiado éxito. Tras el fallecimiento de Cromwell, su hijo Richard fue nombrado para sucederle, pero resurgieron aquellos conflictos, que sumados a varias conspiraciones, permitieron en 1660 la Restauración.

Mientras que la *Humble* era una creación algo retrógrada y más alejada del espíritu nivelador, el *Instrument* resulta, sin embargo, coincidente en muchos rasgos con los *Agreements levellers*. En primer lugar, por su idea de que fuera referendado mediante suscripción popular, y en segundo, por la elección de los parlamentarios periódicamente y a fecha fija. Sin embargo, debe entenderse que les diferenciaban, asimismo, la duración mayor de los legislativos de la *Commonwealth*, así como el reforzamiento del ejecutivo que en ella se instalaba a través del Lord Protector y su Consejo, que a su vez suponía el acogimiento de una fórmula de gobierno mixto. A lo que habría que añadir el establecimiento de un derechos de sufragio más restringido que el contemplado por los *levellers* y una tolerancia religiosa también algo menor, aunque más próxima al congregacionalismo y su apertura, de acuerdo con la tendencia del propio Cromwell y sus afines. Esta es época en que conviene pertrechar las conquistas republicanas y los radicales son definitivamente arrinconados, no sin absorber antes gran parte de sus doctrinas. El conflicto iba a mantenerse, sobre todo, entre los partidarios de la *Commonwealth* y los monárquicos que conspiraban, a veces incluso desde el exterior. No era momento para rencillas que dificultaran la supervivencia de los “regicidas”. Esto explicaría probablemente el porqué de la disolución de los niveladores, al margen de episodios aislados, reprimidos a su vez, como la eterna voluntad discordante de Lilburne. Pero numerosos autores llevan consigo la simiente que ya se ha plantado a través del conflicto civil anterior y la lucha latente entre republicanos y realistas. Las bases de la legitimación política que vienen a defender se asemejan, en este sentido, a las de los niveladores, y por ello vamos a

⁵⁵⁰ IV.

⁵⁵¹ Una vez más, los católicos quedaban excluidos expresamente. Y con respecto a la fe protestante, se especificaba que su último fundamento era el dogma de la Trinidad, lo cual podía dejar fuera a algunas sectas.

examinarlas a continuación a través de sus principales obras, que asimismo influirán luego en la revolución norteamericana.

I.3.2. Milton: legitimación contractualista, libertad religiosa y minoría selecta

John Milton (1608-1674) apenas necesita presentación. Poeta difundido universalmente, fue Secretario de Lenguas Extranjeras al servicio del Consejo de Estado durante el período de la *Commonwealth* cromwelliana. Su primera obra importante es la *Aeropagítica* (1644), donde realiza una apasionada defensa de la libertad de expresión frente a la censura previa de las autoridades, así como de la tolerancia religiosa, situándose cercano a los independientes que se enfrentan al presbiterianismo⁵⁵². La ocasión vino de la mano de la Ordenanza aprobada por el Parlamento el 14 de junio de 1643, y que reforzaba el control sobre las publicaciones del momento, obligando sistemáticamente a sus autores a obtener licencia para su difusión⁵⁵³. Esta medida respaldada por los presbiterianos, a fin de controlar cualquier disidencia que se escapara de su ámbito, es a la que se enfrenta Milton, obviando la exigencia de autorización pertinente para su propia obra. En la *Aeropagítica* sostenía que “quien a un hombre mata, quita la vida a una criatura racional, imagen de Dios; pero quien destruye un buen libro, mata la razón misma, mata la imagen de Dios”⁵⁵⁴, relacionando el proyecto censor con el papismo⁵⁵⁵.

⁵⁵² Vid. Dorado Porras, Javier: *La lucha por la Constitución. Las teorías de la Fundamental Law en la Inglaterra del siglo XVII*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2001. pp. 297-356. No pertenecía a ninguna iglesia en particular, dado sus particulares opiniones religiosas. D. M. Wolfe resume bien su perspectiva en este campo, al decir en *Milton and the Puritan Revolution*, New York, T. Nelson and Sons, 1941, pp. 60-61 (cit. por Dorado, 2001, pg. 303, nota 17): “para la Iglesia congregacionista, las ideas del divorcio de Milton hubieran impedido que fuera un miembro de esta Iglesia, aunque no hubiera revelado su honesta y sincera creencia en la poligamia, a la que defiende en la *Christian Doctrine*. Tampoco es probable que muchos independientes devotos aceptaran la falta de creencia de Milton en la Trinidad que también se mantiene en la *Christian Doctrine*. Milton insistía en que el alma muere con el cuerpo, para surgir de nuevo con la resurrección, lo que era una seria herejía. ¿Y qué ocurre con el *Sabbath*? En este tema Milton se aparecería como un hereje para la mayoría de las congregaciones: por él, las Escrituras no establecían sus preferencias sobre un día concreto de la semana para el culto a Dios. Como los anabaptistas, Milton creía sólo en el bautismo adulto, pero éstos, al contrario que Milton, permitían a la mujer participar en el gobierno de la Iglesia. Como los cuáqueros, Milton no creía ni en los rituales ni en el ministerio religioso profesional, Pero al contrario que ellos, creía en la eficacia y justicia de la guerra como instrumento de política cristiana. Cuando se hace claro que Milton no puede identificarse en concreto con ninguna Iglesia, y que no acepta ningún intermediario entre él y Dios, es cuando el principio de Milton se hace claro: ningún ministro ni ninguna Iglesia tiene derecho a intervenir entre Dios y el hombre”.

⁵⁵³ Ibid., pg. 306. El antecedente más inmediato se encontraba en el decreto de la Cámara Estrellada relativo a la imprenta, de 11 de julio de 1637. Ibid., pg. 305.

⁵⁵⁴ Milton, John: *Aeropagítica* (1644); trad. cast. de José Carner, por donde se cita, *Aeropagítica*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1976, págs. 25 y 26.

⁵⁵⁵ “Salió a rastras de la Inquisición, fue asido por nuestros prelados y aferró a algunos de nuestros presbíteros”. Ibid., pg. 27.

La importancia que concede Milton así a la libertad de expresión, entonces ligada de manera más permanente a la libertad religiosa, queda expresada con claridad cuando afirma: “dadme la libertad de saber, de hablar y de argüir libremente según mi conciencia, por cima de todas las libertades”⁵⁵⁶, o: “verdad y entendimiento no son mercancías monopolizables y que admitan el tráfico por cédulas, estatutos y patrones oficiales. Desechemos la idea de convertir en un artículo tipo todo el conocimiento del país, para marcarlo, y licenciarlo como nuestro paño fino y pacas de lana”⁵⁵⁷. Eso sí, como se desprende de las propias páginas de la *Aeropagítica*, aunque partidario de la separación entre la Iglesia y el Estado, Milton era contrario a tolerar el catolicismo⁵⁵⁸, siguiendo la corriente en la que se inscribía y dadas sus propias connotaciones “liberticidas”.

No fue el escritor un hombre preocupado por diseños constitucionales. Sus libros destacados después de la *Aeropagítica* fueron *The Tenure of Kings and Magistrates* (1649) y la *Defensio pro populo Anglicano* o *Defence of the People of England* (1651), siendo en esta última donde da tan sólo unas pinceladas, revestidas, por otra parte, de su habitual talento literario.

En la *Tenure*, publicada pocos días después de la ejecución de Carlos I, y que había sido redactada durante su proceso, intentaba justificar el gobierno del *Rump Parliament* y el enjuiciamiento del monarca, bajo una teoría política basada en el imperio de la ley y de carácter contractualista. Los hombres, poseyendo el derecho natural de autopreservación, acordaban someterse a un poder delegado para reprimir las injurias y violencias que pudieran surgir entre ellos, quedando esta facultad regulada por la ley, y en consecuencia, sometidos esos magistrados también a su imperio. Primero se producía un *pactum unionis* por el cual los individuos “acordaban de común acuerdo el compromiso de no causarse daño y, de forma paralela, protegerse contra cualquiera que ofreciera resistencia u oposición a tal pacto”⁵⁵⁹. A continuación, para asegurar que el acuerdo sea cumplido, aquellos que lo suscriben confieren a magistrados el poder de obligar a quienes lo desobedezcan (*pactum subiectionis*)⁵⁶⁰. Para Milton, si cierta nación quería ser considerada libre, su forma de

⁵⁵⁶ Ibid., pg. 89. Asimismo, parece que el panfleto fue una respuesta airada a la condena presbiteriana previa que se había relaizado contra un tratado escrito por él sobre el divorcio. Ibid., pg. 304, nota al pie nº 24.

⁵⁵⁷ Ibid., pg. 65. Nótese la comparación con los monopolios, afín al mensaje nivelador.

⁵⁵⁸ Ibid., pg. 94.

⁵⁵⁹ “Agreed by common league to bind each other from mutual injury, and jointly to defend themselves against any that gave disturbance or opposition to such agreement”. Cit. por Saldaña, 2001, párrafo 27.

⁵⁶⁰ “Vino a ser necesario establecer alguna autoridad que pudiera restringir mediante la fuerza y el castigo lo que era una violación de la paz y el derecho común” (traduzco de la cita en i glés de Saldaña, 2001, párrafo 27: “it became needfull to ordaine som authoritie, that might restrain by force and punishment what was violated against peace and common right”).

gobierno, igual que quienes lo desempeñaran, debían resultar elegidos por ella⁵⁶¹. Y determinar cuándo los gobernantes sobrepasaban el poder transferido para convertirse en déspotas correspondía “a los Magistrados o, como poco, a los más honestos que haya entre ellos, así como en el pueblo, aunque no sean muchos, y cuyo partido menos haya ambicionado situarse por encima de la ley natural y de la recta razón”⁵⁶².

Por tanto, Milton legitimaría la acción política de un grupo de personas escogido, acentuando al final del Interregno⁵⁶³ este componente “aristocrático” de su programa. La noción de “pueblo” que utiliza es referente al conjunto de personas dotadas de virtudes “tanto generales – las del entendimiento y la voluntad – como especiales – las relativas a nuestros deberes respecto a Dios y de otros hombres –”⁵⁶⁴. Ese será el pueblo, aunque resulte minoría: los Santos reunidos⁵⁶⁵. El giro cada vez más acusado hacia esta perspectiva provino de los diferentes obstáculos que la *Commonwealth* se encontró en su marcha. Siendo Cromwell proclive a la tolerancia religiosa, topó, sin embargo, con sucesivos Parlamentos opuestos a esta postura⁵⁶⁶. De hecho, la situación condujo a Milton finalmente a apoyar el Protectorado que advino tras el Parlamento *Barebones*, a través de su *The Second Defence of the People of England* (1654). Se trataba de texto escrito como extensa apología de Cromwell⁵⁶⁷, respuesta a un libelo anónimo que circulaba en aquel momento, denominado *The Royal Blood Crying to Heaven for Vengeance on the English Parricides*, y con el cual daba respaldo implícito al *Instrument of Government* aprobado en 1653, que se puede calificar de primer documento constitucional republicano en vigor en Inglaterra⁵⁶⁸. La *Humble Petition and Advice* de 1657, más tardía, supuso un

⁵⁶¹ “*The freedom to choose this or that form of government, these or those magistrates, has always been in the power of the free nations of men*” (“la libertad de elegir esta o aquella forma de gobierno, estos u otros magistrados, ha permanecido siempre en poder de las naciones libres”), y “*whoever removes from a people their power for choosing for themselves the form of government they want, removes for certain that in which civil liberty is almost wholly rooted*” (“cualquiera que aparte al pueblo de elegir la forma de gobierno que desee, aparta aquello en lo cual la libertad civil hunde sus raíces casi totalmente”). Las traducciones al castellano son propias, las citas en inglés de Saldaña, 2001, párrafo 34.

⁵⁶² *Tenure*, cit. por Zagorin, 1997, pg. 114.

⁵⁶³ Así denominan los historiadores al período republicano inaugurado en Inglaterra desde el derrocamiento definitivo de Carlos I, en 1648, hasta la Restauración de 1660. Se trata de la utilización de un término derivado del vocablo latino *interregnum*, período que en los supuestos de abdicación, fallecimiento o falta de elección, el poder ejecutivo en Roma republicana pasaba a manos del Senado. De manera individual, y por cinco días cada uno, los senadores asumían el poder consular provisionalmente. Vid. Fernández de Buján, 2000, pg. 97.

⁵⁶⁴ Dorado, *op. cit.*, pg. 337.

⁵⁶⁵ Socialmente, con la clase media puritana (los caballeros y burgueses), en emulación de la premisa aristotélica. Vid. Dorado, pp. 340-341.

⁵⁶⁶ *Ibid.*, págs. 317-322. Un episodio significativo se produjo cuando cierto predicador cuáquero llamado James Nayler (1618-1660), fue azotado, mutilado y torturado en diciembre de 1656, permaneciendo luego en prisión hasta 1659. Vid. Hill, 1961, pg. 132.

⁵⁶⁷ “Tales han sido tus méritos como el más ilustre y gran ciudadano, el director de los consejos públicos, comandante de los más valientes ejércitos, el padre de tu país” (cit. en *ibid.*, pg. 344).

⁵⁶⁸ Vid. *supra*, pp. 143 y 144.

retroceso en relación con el Instrumento, un cambio hacia posiciones cercanas al antiguo régimen político, reinstaurando la Cámara Alta. El Protector muere al año siguiente, siendo sucedido en el cargo, tal y como se preveía, por su hijo Richard. Pero afloran tensiones entre parlamentarios y militares, con enfrentamientos armados entre jefes militares, y de la situación emergerá como hombre fuerte del momento el general Monk. Entonces, Milton publica en febrero *The Ready and Easy Way to Stablish a Free Commonwealth*, proclamando su republicanismo, y rechazando cualquier tipo de gobierno unipersonal. Entre bambalinas se hablaba de un posible retorno de los Estuardo, lo cual podía poner en peligro, incluso físicamente, a quienes habían apoyado la *Commonwealth*.

En su libro, que dirige al propio Monk, Milton esboza por primera vez, y aunque durante toda su trayectoria no había mostrado con anterioridad grandes preocupaciones por él, un esbozo político-insitucional para poder zanjar la crisis del país. Allí insiste en su idea de que el poder sólo puede ser detentado *por delegación del pueblo* (“*sovrantie no transferred but delegated only*”), en concreto a través de un Gran Consejo, elegido por “caballeros y burgueses” (“*Knights and Burgesses*”) que no fueran seguidores (“*addicted*”) del rey o de la Cámara de los Lores, y con personas que ocuparían sus puestos a perpetuidad o, en el peor de los casos, mediando renovaciones parciales del organismo en forma periódica e impidiéndose así la inestabilidad política⁵⁶⁹. Este Consejo se ocuparía de dirigir las fuerzas militares, firmar tratados con otras naciones y recaudar impuestos y elaborar leyes, eligiendo a su vez a un Consejo de Estado más reducido que atendería asuntos que por su oportunidad o confidencialidad así lo requirieran⁵⁷⁰. En cada condado, a su vez, la nobleza y *gentry* principal tendrían potestades ejecutivas, legislativas y judiciales, e incluso podría convocar asambleas de cierta extensión, a fin de vetar o no legislación que proviniera del Gran Consejo y siempre que fuera relativa a asuntos públicos de gran importancia, aun considerando que la misma debería ser escasa⁵⁷¹. Asimismo, los condados organizarían una red educativa suficiente para mantener viva la virtud de los ciudadanos de la república⁵⁷², que no sería una formada por varias “soberanías”, a la manera de las provincias Unidas, sino de un sistema político en el cual varias *Commonwealths* se hallarían “*bajo una sola soberanía delegada*” (“*many*

⁵⁶⁹ Ibid., págs. 21 y 22.

⁵⁷⁰ Ibid.

⁵⁷¹ Ibid., págs. 37 y 38. Sobre la composición de dichas asambleas y sus procedimientos no se especifica nada.

⁵⁷² Ibid., pg. 38.

Commonwealths under one united and entrusted sovranie”) ⁵⁷³, y en el cual la separación Iglesia-Estado será completa⁵⁷⁴.

En resumidas cuentas, y aunque Milton deja apenas esbozado un proyecto constitucional que, por lo demás, nunca se había preocupado de diseñar en ningún momento anterior, sí aparecen en él las tres constantes de su pensamiento político: la delegación popular en los gobernantes, fruto de una teoría contractualista, la selección minoritaria de los mismos, y la defensa de la libertad religiosa en forma de separación Iglesia-Estado. Milton compendia la teoría política de un gupo social puritano que iba más allá del presbiterianismo y que confió en Cromwell para conseguir su programa religioso⁵⁷⁵, así como para consolidar su posición social, prestigio y autoridad política. Pero lo cierto es que las disensiones entre los republicanos y el propio ataque al que se encontraron permanentemente sometidos por fuerzas monárquicas, supusieron el fracaso de la *Commonwealth*, pese a que durante el gobierno de Cromwell Inglaterra consiguiera consolidarse como nación frente a otras potencias.

I.3.3. Hobbes, o la anomalía de una época republicana

Sobre Thomas Hobbes (1588-1679) se han escrito ya numerosas páginas y voy a detenerme sólo de manera muy breve en algunas de sus principales ideas. Como bien subrayan algunos, este autor tuvo la mala suerte de elaborar una serie de textos que no encontrarían acogida en su época, dado que se apartaban de las corrientes ideológicas predominantes entonces⁵⁷⁶. Así, de un lado, los partidarios de los Estuardo le rechazaron por ateo, y los republicanos criticaron su tendencia al absolutismo. En su teoría existen diversos elementos modernos que harán que la influencia de su pensamiento llegue hasta nosotros. De alguna manera, Hobbes anticipa los ingredientes de una individualización social aún más intensa que la vivida en su tiempo, también con toda la carga de desamparo que pueda conllevar. Su método de individuación, atomista, es precisamente lo que mejor ha perdurado hasta hoy. Hay ecos suyos en los utilitaristas, el positivismo, en Hart⁵⁷⁷. Incluso pueden hallarse influencias suyas en los federalistas norteamericanos, como se verá más tarde. Para entender sus ideas adecuadamente, nada como partir de la igualdad

⁵⁷³ *Ibid.*, pg. 39. El subrayado es propio.

⁵⁷⁴ *Ibid.*, pg. 34.

⁵⁷⁵ El lenguaje de este tipo utilizado por Milton recuerda mucho al de los *levellers*, vid. Tulle, Elizabeth: “Biblical reference in the political pamphlets of the Levellers and Milton, 1638-1654” en Armitage, David, Himy Armand y Skinner, Quentin (eds.): *Milton and Republicanism*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995; pp. 63-81. La intención era la de, extrayendo pasajes bíblicos y ejemplos de la historia hebrea, crear imágenes poderosas que incitaran al entusiasmo y la acción (id., pg. 75).

⁵⁷⁶ Sabine, *op. cit.*, pg. 337-38, entre ellos.

⁵⁷⁷ En lo que llama “el contenido mínimo del Derecho natural”.

fisiológica que ya apunta el pensador inglés en su *Leviathan* (1651). Hobbes afirmará allí que los hombres nacen con capacidades muy similares⁵⁷⁸, pero resulta que esto no les favorece, sino que les perjudica, ya que

De esta igualdad en cuanto a la capacidad se deriva la igualdad de esperanza respecto a la consecución de nuestros fines. Esta es la cusa de que si dos hombres desean la misma cosa, y en modo alguno pueden disfrutarla ambos, se vuelven enemigos.⁵⁷⁹

Los hombres, así, pelean continuamente entre ellos por tres principales motivos de discordia, que son la competición, la desconfianza y la gloria, buscando respectivamente un beneficio, la seguridad o la reputación⁵⁸⁰:

es manifiesto que durante el tiempo en que los hombres viven sin *un poder común* que los atemorice a todos, se hallan en condición o estado que se denomina guerra; una guerra que es la de todos contra todos [...] la naturaleza de la guerra consiste no ya en la lucha actual, sino en la disposición manifiesta a ella durante todo el tiempo en que no hay seguridad de lo contrario. Todo el tiempo restante es de paz.⁵⁸¹

El hombre, sin embargo, dispone de

una cierta posibilidad de superar ese estado, en parte por sus pasiones, en parte por su razón.

Las pasiones que inclinan a los hombres a la paz son el temor a la muerte, el deseo de las cosas que son necesarias para una vida confortable y la esperanza de obtenerlas por medio

⁵⁷⁸ “La Naturaleza ha hecho a los hombres tan iguales en las facultades del cuerpo y el espíritu que, si bien un hombre es, a veces evidentemente más fuerte de cuerpo o más sagaz de entendimiento que otro, cuando se considera en conjunto, la diferencia entre hombre y hombre no es tan importante que uno pueda reclamar, a base de ella, para sí mismo, un beneficio cualquiera al que otro no pueda aspirar como él”. Hobbes, Thomas: *Leviathan* (1651); trad. cast. de E. Tierno Galván y M. Sánchez Sarto, por donde se cita: *Del Ciudadano. Leviatán*, Madrid, Tecnos, 1999; cap. XIII: “De la Condición natural del género humano, en lo que concierne a su felicidad y miseria”; pg. 128.

⁵⁷⁹ Ibid., pg. 123.

⁵⁸⁰ Ibid., pg. 124

⁵⁸¹ Cap XIII, pg. 125 (subrayado propio). Para Hobbes, pues, la inquietud constante es el peor de los males. De alguna manera, conecta a la perfección con la preocupación que poco tiempo después se afianza por disponer de sociedades pacificadas y sin agudos conflictos internos, en las cuales el ser humano pueda dedicarse a distintos menesteres que no sean los bélicos. En el tiempo en que los hombres viven sin otra seguridad que su propia fuerza y su propia invención puedan proporcionarles [...] no existe oportunidad para la industria, ya que su fruto es incierto; por consiguiente, no hay cultivo de la tierra, ni navegación, ni uso de los artículos que pueden ser importados por mar, ni construcciones confortables, ni instrumentos para mover y remover las cosas que requieren mucha fuerza, ni conocimiento de la faz de la tierra, ni cómputo del tiempo, ni artes, ni ciencias, *ni sociedad*; y, lo que es peor de todo, existe continuo temor y peligro de muerte violenta; y la vida del hombre es solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve”. El subrayado es propio.

del trabajo. La razón sugiere *adecuadas normas de paz a las cuales pueden llegar los hombres por mutuo consenso*. Estas normas son las que, por otra parte, se llaman *leyes de naturaleza*.⁵⁸²

Hobbes se dedica a socavar firmemente la noción idílica sobre el estado de naturaleza, pues, e incluso a enfrentarse con cualquiera que sostenga que hay una serie de derechos innatos, salvo el de autopreservación:

el derecho de naturaleza, lo que los escritores llaman comúnmente *ius naturalis*, es la libertad que cada hombre tiene de usar su propio poder como quiera, para la *conservación [...] de su propia vida*; y, por consiguiente, para hacer todo aquello que su propio juicio y razón considere como los medios más aptos para lograr ese fin.⁵⁸³

Así que para Hobbes, la vieja ley de la autopreservación existente como suprema ley de todas las sociedades, la *salus populi*⁵⁸⁴, se convierte en una ley de *conservación individual*. La postura atomista del autor de *Leviathan* conlleva esta identificación y de allí va a extraer la consecuencia del pacto entre tales individuos, a fin de vivir sin miedo continuo, siguiendo, según la razón, unas “normas de paz” o “leyes de naturaleza”. En primer lugar, dado el deseo de liberarse de aquel temor del que se parte como premisa, hay

un precepto o regal general de la razón, en virtud de la cual, cada hombre debe esforzarse por la paz, mientras tiene la esperanza de lograrla; y cuando no puede obtenerla, debe buscar y utilizar todas las ayudas y ventajas de la guerra. La primera fase de esta regla contiene la *ley primera y fundamental de la naturaleza*, a saber: buscar la paz y seguirla.⁵⁸⁵

Y, a su vez:

De esta ley fundamental de naturaleza, mediante la cual se ordena a los hombres que tiendan hacia la paz, se deriva esta *segunda ley*: que uno acceda, si los demás consienten también, y mientras se considere necesario para la paz y defensa de sí mismo, a renunciar a este derecho a todas las cosas y a satisfacerse con la misma libertad, frente a los demás hombres, que les sea concedida a los demás con respecto a él mismo.⁵⁸⁶

⁵⁸² Ibid, pg. 127. Subrayado propio.

⁵⁸³ Cap. XIV, pg. 128. Subrayado propio. De hecho, aquí parece encontrarse el único límite al poder del soberano:

⁵⁸⁴ Vid. pg. 44, *supra*.

⁵⁸⁵ Id. Subrayado propio.

⁵⁸⁶ Ibid., pg. 129.

El pacto entra así en escena:

De esta ley de la naturaleza, según la cual estamos obligados a transferir a otros aquellos derechos que, retenidos, perturban la paz de la Humanidad, se deduce una tercera ley, a saber: que los hombres cumplan los pactos que han celebrado. Sin ello, los pactos son vanos, y no contienen sino palabras vacías, y subsistiendo el derecho de todos los hombres a todas las cosas, seguimos hallándonos en situación de guerra.⁵⁸⁷

Se trata de un *pactum unionis*⁵⁸⁸, con el cual acuerdan todos (o la mayor parte de ellos⁵⁸⁹) conceder el poder *soberano*⁵⁹⁰ a un solo hombre o a un gupo de ellos⁵⁹¹. Y bien podrían existir críticos que hablaran de una pérdida de libertad en este modelo propicio a los déspotas. Pero Hobbes, añade, inmediatamente a continuación del párrafo transcrito (cap. XIV⁵⁹²), que

Por libertad se entiende, de acuerdo con el significado propio de la palabra, *la ausencia de impedimentos externos*, impedimentos que con frecuencia reducen parte del poder que un hombre tiene de hacer lo que quiere; pero no pueden impedirle que use el poder que le resta, de acuerdo con lo que su juicio y razón le dicten.⁵⁹³

⁵⁸⁷ Cap XV: pg. 138. De hecho, tan importante en ese acuerdo que se produce injusticia si se rompe un pacto (pg 139).

⁵⁸⁸ "Autorizo y transfiero a este hombre o asamblea de hombres mi derecho de gobernarme a mí mismo, con la condición de que vosotros transferiréis a él vuestro derecho y autorizaréis todos sus actos de la misma manera" (Cap XVII: "De las causas, generación y definición de un estado", pg. 146). Se trata de una utilización de la figura del contrato ("[s]e abandona un derecho por renunciación o por transferencia a otra persona", cap XIV, pg. 130), algo habitual en muchos autores de la época, como se ha visto, pero bajo un semblante de inexorabilidad que obligaría a situarlo fuera de la órbita de sus coetáneos. El sujeto renuncia por este acuerdo, como se podrá apreciar, a casi todo. Poco hay de mandato y mucho de pacto medieval de vasallaje en esta invención hobbesiana.

⁵⁸⁹ Cap XVIII ("De los derechos de los soberanos por institución"), pg. 147: "[d]ícese que un Estado ha sido instituido cuando una multitud de hombres conviene y pactan, cada uno con cada uno, que a un cierto hombre o asamblea de hombres se le otorgará, por mayoría, el derecho de representar a la persona de todos (es decir, de ser su representante). Cada uno de ellos, tanto los que han votado en pro como los que han votado en contra, debe autorizar todas las acciones y juicios de ese hombre o asamblea de hombres lo mismo que si fueran suyos propios, al objeto de vivir apaciblemente entre sí y ser protegido contra otros hombres".

⁵⁹⁰ El soberano hobbesiano debe entenderse a la manera de Bodin, pero sin las connotaciones moderadoras de éste (pg. 170: "[e]l soberano de un Estado, ya sea una asamblea o un hombre, no está sujeto a las leyes civiles, ya que, teniendo poder para hacer y revocar las leyes, puede, cuando guste, librarse de esa ejecución, abrogando las leyes que le estorban y haciendo otras nuevas"). Tiene numerosas potestades (cap XVIII: "De los derechos de los soberanos por institución"): censura (pg. 151), legislación, jurisdicción, declaraciones de guerra y tratados de paz (pg. 152), elección de todos los cargos públicos, premio y sanciones que no sean contemplados en la ley, dirección de la milicia (pg. 153).

⁵⁹¹ Cap XVII ("De las causas, generación y definición de un Estado"), pg. 145: "[e]l único camino para erigir semejante poder común, capaz de defenderlo contra la invasión de los extranjeros y contra las injurias ajenas, asegurándoles de tal suerte que por su propia actividad y por los frutos de la tierra puedan nutrirse a sí mismos y vivir satisfechos, es conferir todo su poder y fortaleza a un hombre o una asamblea de hombres, todos los cuales, por pluralidad de votos, puedan reducir sus voluntades a una voluntad".

⁵⁹² Ibid., pg. 128.

⁵⁹³ Vid. en XIV, pg. 137, al respecto: "[u]n pacto de no defenderme a mí mismo con la fuerza contra la fuerza es siempre nulo, pues [...] aunque un hombre pueda pactar lo siguiente: Si no hago esto o aquello, matadme, no puedo pactar esto otro: Si no hago esto o aquello, no resistiré cuando vengais a matarme".

Así que Hobbes, siguiendo una impecable lógica del mecanicismo materialista, sitúa dos fuerzas contrapuestas en el escenario político: la que procede del propio individuo y la que viene del soberano. Se trata de un enfrentamiento potencial de carácter *físico* en el cual, dadas la legitimación del pacto previo, debe imponerse automáticamente este último⁵⁹⁴. La libertad no tiene las connotaciones que poseía para sus coetáneos republicanos. Lo cierto es que Hobbes quería poner fin de una vez por todas a los enfrentamientos civiles acaecidos en Inglaterra (y cuyo peligro no había desaparecido en la fecha de publicación de la obra, 1651), mediante una fórmula que robusteciera a la vez a la nación y la librería de ideas abstractas, que él veía como fruto del pasado y que no la habían conseguido evitar conflictos políticos y religiosos. De ahí proviene el que haya sido tildado de precursor del positivismo por muchos autores⁵⁹⁵, ya que para Hobbes existe, por encima de cualquier otra consideración sobre distintas fuentes de otra índole, una ley aprobada por el soberano, el “poder común” e indivisible de la sociedad:

Donde no hay poder común, la ley no existe: donde no hay ley, no hay justicia (...) Justicia e injusticia no son facultades ni del cuerpo ni del espíritu [...] Son, aquéllas, cualidades que se refieren al hombre en sociedad, no en estado solitario.⁵⁹⁶

En realidad, todo el *Leviathan* puede entenderse como grandioso comentario crítico de las teorías en boga durante la época en que Hobbes escribe su gran obra. Así, frente a las teorías del derecho divino de los reyes, opone una lógica *materialista* que elude referirse a otro Dios que no sea el *sive natura*⁵⁹⁷. Y, de otro lado, su crítica contra cualquier derecho de resistencia que supusiera algún tipo de alejamiento de la mera ley de autopreservación⁵⁹⁸, así como frente a los defensores de la constitución o el gobierno mixtos. Como ya se ha dicho antes, la preocupación de Hobbes por la procura de una tranquilidad y paz en Inglaterra es tan grande, que va a entender

⁵⁹⁴ Y sólo siempre que esas características se mantengan. Cesa, cuando el soberano no puede ofrecer protección real. Vid. *infra*, página siguiente.

⁵⁹⁵ Norberto Bobbio, entre ellos: vid. *Contribución a la Teoría del Derecho* (ed. de Alfonso Ruiz Miguel), 1ª ed., Madrid, Debate, 1990, pg. 113.

⁵⁹⁶ Cap. XIV, pg. 127.

⁵⁹⁷ Precisamente Spinoza fue seguidor en gran parte de las teorías hobbesianas, si bien conviene dejar claro que les separaban bastantes elementos. Vid., al respecto, Rodríguez Paniagua, *op. cit.*, pg. 131.

⁵⁹⁸ Ateniensés y romanos eran libres, es decir, Estados libres: *no en el sentido de que cada hombre en particular tuviese libertad para oponerse a sus propios representantes*, sino en el de que sus representantes tuvieran la libertad de resistir o invadir a otro pueblo. Cap xxi, pg. 164. El subrayado es propio. “En la lectura de estos autores griegos y latinos los hombres (como una falsa apariencia de libertad) han adquirido desde su infancia el hábito de fomentar tumultos y de ejercer un control licencioso de los actos de sus soberanos; y además de controlar a estos controladores, con efusión de mucha sangre” (cap XXI, pg. 165).

existe un solo “derecho” del súbdito, tan estrictamente entendido que más bien se parece a un hecho dictado por inexorables mecanismos naturales:

La obligación de los súbditos con respecto al soberano se comprende que no ha de durar ni más ni menos que lo que dure el poder mediante el cual tiene capacidad para protegerlos. En efecto, el derecho que los hombres tienen, por naturaleza, a protegerse a sí mismos, cuando ninguno puede protegerlos, no puede ser renunciado por ningún pacto.⁵⁹⁹

En todos los demás supuestos,

como el derecho de representar la persona de todos se otorga a quien todos constituyen en soberano solamente por un pacto de uno a otro, y no del soberano en cada uno de ellos, no puede existir quebrantamiento del pacto por parte del soberano, y, en consecuencia, ninguno de sus súbditos, fundándose en una infracción, puede ser liberado de su sumisión.⁶⁰⁰

En consecuencia, los hombres pueden reunirse para acordar el sometimiento a un poder común, pero no para otros fines más ambiciosos y algo más benevolentes con la libertad humana. Tan sólo a fin de evitar el continuo temor de unos respecto a otros, el peligro permanente que supone no saber que una espada caerá sobre quien incumpla la ley. Un miedo será sustituido por otro, que Hobbes, en medio de la realidad de su época, considera menos dañino. Él publica durante el período de la *Commonwealth*, pero no es un autor que siga la corriente predominante en ella, tal y como indican, tanto el ejemplo de Milton como el de los escritores que ahora se van a analizar.

I.3.4. Harrington: un proyecto constitucional ambicioso

El escritor republicano más importante de la *Commonwealth* fue con toda probabilidad James Harrington (1611-1677). Aunque escribió otros opúsculos, como *Aphorisms Political*, *The Art of Lawgiving* o el *Politicafter* (todos de 1659), su texto más famoso fue *The Commonwealth of Oceana* (1656). En esta obra intentó elaborar con detalle casi maniático un modelo político republicano que permitiría prosperar a los ingleses sin miedo a futuros conflictos civiles, así como permitiendo la expansión exterior frente a otros pueblos y potencias. Se trata, por tanto, nuevamente, de un proyecto nacional, pero en clave republicana, igual que el reflejado por Milton con

⁵⁹⁹ Capítulo XXI (“De la libertad de los súbditos”), pg. 168.

⁶⁰⁰ Cap. XVIII, pag. 148.

anterioridad. Pero se diferenciaba de este último en que no partía de esquemas contractualistas derivados del calvinismo. Su fuente principal era el pensamiento renacentista que había recuperado de los antiguos, muy especialmente el maquiavélico, con una acumulación de datos históricos que venían a respaldar enérgicamente todo un programa constitucional. Inserto en él, asimismo, Harrington realiza un análisis socio-económico sobre las relaciones de propiedad en Inglaterra y acerca de cómo éstas influían en la auténtica urdimbre del poder. Por tal motivo, algunos comentaristas han relacionado a Harrington con Marx, al ser precursor de una perspectiva que relacionaba de manera intrínseca la estructura económica con el sistema político. Precisamente este sociologismo del autor es el que conduce a entender su planteamiento como de “laboratorio”, irreal y artificioso, aunque tuviera ingredientes luego aprovechados por los constitucionalistas norteamericanos. Paso de inmediato a examinar algunos de sus principales aspectos.

Lo primero que señala el autor es que el arte de la política consiste en que coincidan el interés personal y el público, través de una *equal commonwealth* (“república equitativa”). Para ello, hay que adentrarse en un análisis histórico que nos explique los modelos de gobierno. El primero y más antiguo va a ser el correspondiente a la “prudencia antigua”, descubierto a la Humanidad a través del nacimiento del reino de Israel y después seguido por griegos y romanos. El que vino a continuación fue el introducido por las invasiones bárbaras que contribuyeron a la caída del Imperio Romano, dejando como único baluarte del anterior a Venecia y conformando así un modelo de “prudencia moderna”. La distinción entre ambos sistemas reside en que el más vetusto sí procuraba el interés común, de acuerdo con el imperio de las leyes y no de los hombres, mientras que el “moderno” únicamente sirve a los intereses particulares de algún o algunos hombres⁶⁰¹.

Para entender el motivo de este fenómeno hay que acudir a una clasificación que a su vez distingue tres tipos distintos de “razón”. La primera es la correspondiente al interés del particular, al interés privado; una segunda, al Estado a través de su gobierno; y otra tercera, al bien común. El gobierno, a su vez, puede ser de un príncipe, la nobleza o el pueblo, pero resulta ser este último quien más cerca se encuentra de la razón correspondiente al bien común⁶⁰². Pero aquí hay que entender que Harrington entiende este término, una vez más, y como sus inmediatos predecesores, de manera limitada, puesto que enseguida introduce el concepto de

⁶⁰¹ Un gobierno que no se base en las pasiones de los hombres, sino en la ley. Harrington, James: *The Commonwealth of Oceana* (1656); trad. cast. de Enrique Díez Canedo, por donde se cita, *La República de Oceana*, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1987, pp. 60 y 61. Vid. asimismo, al respecto, Dorado, *op. cit.*, pg. 358.

⁶⁰² Harrington, *op. cit.*, págs. 62-63. Refiriéndose a su proyecto, dirá: “esta república es un estado del pueblo” (id., pg. 213). Aquí resuenan ecos de Maquiavelo.

“aristocracia natural”; en todo grupo humano hay una minoría que resulta ser más sabia que el resto y a la que, por tanto, debería corresponder la *deliberación*. Una vez realizada, este segmento selecto, tradicionalmente identificado con las cámaras senatoriales, presentará su propuesta a los otros, quienes serán los que tomen la decisión definitiva sobre ese proyecto, pero sin a su vez debatirlo. Este procedimiento es el único que puede garantizar se respete el interés común de todos los implicados⁶⁰³. Con lo cual, Harrington llega a definir su modelo de “república equitativa” que

es un gobierno establecido sobre una ley agraria equitativa, que se levanta a la superestructura o tres órdenes, el senado que discute y propone, el pueblo que resuelve y la magistratura que ejecuta, por medio de una rotación equitativa, mediante los sufragios del pueblo, emitidos en votación.⁶⁰⁴

Obsérvese que Harrington muestra apego al esquema aristotélico del gobierno mixto⁶⁰⁵ (los “órdenes”⁶⁰⁶), pero añade un elemento muy relevante, que es el de la “ley agraria”. Asimismo, merece subrayarse que, al no decidirse de manera definitiva entre sorteo y elección para seleccionar los cargos públicos, opta por una mezcla de ambos mecanismos, reglada con minucia en páginas posteriores. Para completar este sistema constitucional procede a describir cómo se produce la selección del segmento aristocrático, considerando, como ya se ha visto, que Harrington no creía en una nobleza hereditaria⁶⁰⁷, sino en otra de carácter natural. A tal fin, incurrirá en la concepción típica del momento, que identificaba a los más sabios con quienes poseían mayores extensiones. Tal perspectiva queda establecida cuando se refiere a unas “leyes fundamentales”, en las que reside *todo gobierno*:

son las que establecen qué es lo que un hombre puede llamar suyo, es decir, la propiedad; y cuáles son los medios para que un hombre pueda gozar de lo suyo, es decir, la protección. La primera se llama también dominio y la segunda imperio, o poder soberano.⁶⁰⁸

⁶⁰³ Ibid., págs. 63-65. Para representar su esquema, Harrington acude al ejemplo del pastel y las dos muchachas: para evitar que una se aproveche de la otra, hay que dar a partirlo a una de ellas, a fin de que pueda escoger trozo luego la otra.

⁶⁰⁴ Ibid., pg. 75.

⁶⁰⁵ No la “constitución mixta” medieval. *Vid.* Fioravanti, 1999, pg. 88

⁶⁰⁶ La introducción de un poder judicial netamente separado, corresponde en la teoría política a Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu (1689-1755), autor de *El Espíritu de las Leyes* (1748). No ha de olvidarse que en la Inglaterra de la época, el Parlamento sigue conservando su papel judicial y que existen los jurados compuestos de *freemen*. No se entiende a la manera moderna la entidad del poder judicial.

⁶⁰⁷ Ibid., pp. 84 y 85: las tierras conquistadas por Roma habían pasado ilegítimamente a un Senado corrompido por ese principio.

⁶⁰⁸ Harrington, *op. cit.*, págs. 139 y 140.

A continuación, Harrington viene a indicar que aquellas leyes fundamentales son, de un lado, la ley agraria, referente a la *propiedad*, y de otro, la ley electoral, relativa al sufragio activo y pasivo para cargos temporales; estando ambos ligados por la distribución de las posesiones⁶⁰⁹. Los ciudadanos se dividirían en dos clases, a la manera militar, acordes con sus ingresos. Quedarían escindidos en “infantes” de no más de 100 libras al año en tierras o dinero o bienes, y “caballeros” que rebasaran esta cifra, todos varones mayores de treinta años⁶¹⁰. Esos *freemen* tendrían derecho a elegir tanto a los miembros de una Asamblea Popular (o tribu de prerrogativa) como del Senado, órganos que realizarían sus cometidos siguiendo la dirección de sus respectivas mayorías, y cuyo mandato sería temporal. El Senado nombraría los cargos del gobierno ejecutivo y debatiría los proyectos de ley; la Asamblea aprueba o rechaza su normativa. Pero senadores sólo podrían ser los caballeros u orden ecuestre, grupo que ocuparía asimismo tres séptimos de la Asamblea Popular⁶¹¹. El voto en ambas cámaras sería secreto⁶¹².

Se puede observar en el esquema harringtoniano una pretensión de “equidad” que propugnaba limitaciones a las propiedades. Así, la ley agraria imponía algunas, como que todo aquel que las disfrutara por valor de más de 2000 libras al año y tuviera más de un hijo, debería dividir las entre ellos, obviando el tradicional derecho de primogenitura. Además, ninguna persona que en el momento de constituirse la *Commonwealth* proyectada tuviese terrenos por valor de menos de 2000 libras anuales podría, salvo por herencia, adquirir o recibir otros que supusieran sobrepasar ese límite⁶¹³.

¿Eran irreales las exigencias de esta ley agraria? Lo cierto es que, basándose en las narraciones sobre la Roma antigua realizadas por historiadores como Tito Livio, así como en la lectura de Maquiavelo, su autor estimaba que *hombres con un similar grado de propiedad tendrían el mismo interés en mantenerse libres, y por ende, en conservar la Commonwealth*⁶¹⁴. Es decir, que Harrington se basaba en la experiencia obtenida a través de la guerra civil inglesa, en la cual un victorioso *New Model Army* había conseguido sus éxitos armando, incluso, a pequeños propietarios del reino. Esta victoria militar, a su vez, había conducido a cambios en la propiedad de la tierra

⁶⁰⁹ Ibid., pg. 140 (sobre las “*fundamental laws*”). Para Harrington, la propiedad principal era la de fundos, no prestando tanta atención a otras, pese a que se percatara de que el comercio cumplía un papel de gran importancia económica. *Vid.*, al respecto, Dorado, *op. cit.*, pg. 390, nota 80.

⁶¹⁰ Los mendigos y sirvientes quedarían excluidos, por su falta de independencia personal y social. *Id.*, pp. 116 y 117.

⁶¹¹ Habría en ella 450 caballeros y el resto, hasta 1.050 personas, infantes. *Ibid.*, pp. 190 y 191.

⁶¹² *Ibid.*, pg. 75.

⁶¹³ *Ibid.*, pp. 140 y 141. Harrington establecía alguna variación en la cantidad, con respecto a tierras en Escocia.

⁶¹⁴ *Ibid.*, pg. 103.

(abandono de fundos o expropiación de aquellos que pertenecía a los leales al rey, etc), atrayendo a más personas para la causa republicana. La expansión de Roma, igualmente, había significado una recompensa para quienes habían servido con sus armas a la república, al implicar el reparto de amplios lotes de tierra⁶¹⁵. Harrington hacía continuas referencias a Escocia e Irlanda, con lo cual estaba aludiendo a cierta capacidad expansiva y colonialista de Inglaterra, ahora potenciada con la perspectiva de los avances en ultramar.

Pero la influencia del pasado de Roma para Harrington no acaba aquí. Ya he señalado que la propia población de *Oceana* pretende dividirse en orden ecuestre e infantes, operación que apunta al censo con el que aquella ciudad dividía en grupos de clase a sus habitantes⁶¹⁶. Por añadidura, la división territorial descrita en los viejos textos latinos era imitada también por Harrington, distribuyendo a la población en tribus, centurias y parroquias, que elegirían (aquí sin división de órdenes) jurados, alguaciles, jueces, jefes militares...En este sistema se empleaba una conjunción de mecanismos, mezclando sorteo y votaciones sucesivas, que en todo caso siempre garantizaban la temporalidad de los cargos, y para los cuales el propio autor llegó incluso a computar su cuantía exacta⁶¹⁷. Asimismo, esta estructura servía de base para elegir, mediante elecciones indirectas, tanto la asamblea popular o tribu de prerrogativa, como el senado, a través de las centurias⁶¹⁸.

En cuanto al ejecutivo de *Oceana*, Harrington no le dedica un apartado en especial, sino que a lo largo de su texto va mencionando diversos órganos del mismo y sus atribuciones y formas de elección, considerando que:

no necesitaré detenerme; porque los magistrados ejecutivos de esta república son el estratega en las armas; la señoría en sus varios tribunales (como el de la chancillería y el de hacienda); y también los consejos, en diversos casos, dentro de sus instrucciones; los censores, tanto en su magistratura propia como en el consejo de religión; los tribunos en el gobierno de la privilegiada y en el de lo judicial; y los jueces, con sus tribunales; de todos los cuales ya se dijo o se sabe suficiente.⁶¹⁹

⁶¹⁵ Ibid., pg. 85.

⁶¹⁶ A tal precedente alude el propio Harrington en *ibid.*, pg. 116.

⁶¹⁷ Ibid., pp. 118-126.

⁶¹⁸ Ibid., pp. 135 y 136. Precisamente éstas tenían un aspecto, dados sus puestos más importantes, de clara configuración militar.

⁶¹⁹ Ibid., pp. 212 y 213. Las impronta griega y romana se hallan presentes también aquí, como demuestran los textos de Aristóteles, Tito Livio, etcétera.

En consecuencia, Harrington entiende que el poder ejecutivo es amplio y disperso, a la manera griega y romana⁶²⁰. En cuanto a su composición y forma de selección, algunos cargos ejecutivos centrales lo serían por elección del Senado, y otros, por la Asamblea Popular, pero casi todos debían ser senadores. Se sometían a la temporalidad de sus cargos, y en varios supuestos, a su inelegibilidad⁶²¹.

¿En qué sentido resulta Harrington precursor del modelo constitucional moderno? En primer lugar, por su interés en fijar mediante un documento escrito la regulación de todos y cada uno de los organismos políticos de la nación. Intentaba así recuperar el imperio de la ley en un sentido amplio⁶²², entendido aquí como conjunto de normas permanentes que regularan las instituciones políticas de la comunidad (*frame of government*), dotándola de una estabilidad ajena a la lucha continuada entre facciones. Perseguía arrinconar las ambiciones personales y conseguir el bien común del país. El encargado de aprobar la normativa político-institucional sería un Milord Arconte (*Lord Archon*)⁶²³ que convocaría a los más sabios representantes del pueblo a fin de que le aconsejaran sobre su contenido, bajo la premisa de conseguir un consenso amplísimo en la nación. Harrington va a señalar implícitamente, de este modo, una diferencia entre la ley constitucional y la ordinaria. Pero no expone mecanismo alguno de reforma sobre la primera, no la define exactamente como constitución (aunque sí habla de “leyes fundamentales”, como he indicado) y no dice nada sobre una supuesta soberanía popular, ni sobre derechos innatos. Harrington parecía más bien atento a una realidad política inestable que conducía a Inglaterra periódicamente a violentas sacudidas. En esto, su semejanza con Hobbes, a quien criticaba, resulta evidente. Pero su diseño huía de las premisas establecidas por el autor del Leviatán⁶²⁴. Su principal objetivo era que las facciones quedaran apartadas y el bien nacional defendido *por un ejército miliciano en el que los propietarios, grandes y pequeños, aun con diferente grado, pudieran elegir a sus representantes en el gobierno y los cargos públicos bajo un sistema perfectamente reglado y armónico que asegurara la permanencia de la Commonwealth*. Esta sería la garantía principal de

⁶²⁰ Para el modelo de organización política ateniense, por ejemplo, vid. Ruiz, Ramón: *Los orígenes del republicanismo clásico. Patrios politeia y res publica*, Madrid, Dykinson, 2006; pp. 26-39. Para el romano, vid. Paricio, *op. cit.*, pp. 63-66

⁶²¹ Harrington, *op. cit.*, pp. 166-168. La temporalidad, normalmente de tres años. Igual que marcaba el *Instrument of Government* de 1653.

⁶²² *Ibid.*, pg. 105: lo importante es buscar buenas leyes, porque serán las que hagan a los hombres buenos.

⁶²³ Fundador a la manera de Moisés o Licurgo, ha de entenderse como *alter ego* de Oliver Cromwell.

⁶²⁴ Un punto principal de oposición fue la defensa de la ley, y la responsabilidad que el gobernante adquiría ante ella según Harrington: “si la mano del magistrado es el poder ejecutivo de la ley, *la cabeza del magistrado es responsable ante el pueblo de que su ejecución sea conforme a la ley*; por lo que Leviatán puede ver que la mano o la espada que ejecuta la ley está en ella, y no sobre ella” (*ibid.*, pg. 66, subrayado propio).

unas libertades que en última instancia quedarían apoyadas en el derecho de propiedad. De hecho, sabemos que para el pensador de la época, este derecho a veces se entendía en sentido extenso, es decir, abarcando también el derecho a la vida o a no sufrir determinadas amputaciones corporales, tal y como luego Locke reiteraría. Este esquema harringtoniano daba por supuestas cuestiones en las que su autor no se iba a detener. El único caso al que prestará más atención va ser la libertad religiosa, defendiendo un concepto restrictivo de su alcance, pues aunque defendía la libertad de culto, esta tolerancia no incluía a judíos⁶²⁵, “idólatras”, y por supuesto y como ya era común, al catolicismo⁶²⁶. Habría, en todo caso, una confesión estatal que sería regulada sin intervención del clero en su normativa⁶²⁷, pues “si la convicción de la conciencia privada de un hombre produce su religión privada, la convicción de la conciencia nacional ha de producir una religión nacional”⁶²⁸. Quedará establecido, a tal fin, un Consejo de Religión⁶²⁹, que vertebrará una enseñanza dirigida al aprendizaje de las lenguas bíblicas originales, al objeto de que los fieles puedan interpretarla sin error⁶³⁰.

En resumen, el modelo harringtoniano pretendía la fundación de una república no sólo en lo relativo a las leyes fundamentales sobre sus magistraturas, sino también en cuanto al reparto de la tierra. Intentaba introducir en un molde político “racional” (lo cual de nuevo le emparenta con Hobbes), garantías que estabilizaran la nación. El único problema es que la dinámica de una sociedad con incipientes mercado, agricultura intensiva e industria impedía el estancamiento del individuo. La utopía de Harrington posee una racionalidad planificadora incompatible con los cambios, tanto con la limitación de las posesiones como con la del sufragio en general, y demasiado apegada a los esquemas políticos griegos y romanos, operativos en sociedades con mucha menor movilidad social. El mecanismo que, sin embargo, escapa de este costreñimiento, es la rotación de cargos, la imposibilidad de repetir mandatos, al menos durante ciertos períodos.

⁶²⁵ Significativamente, Cromwell resultó mucho más tolerante con ellos; de hecho, ordenó su readmisión oficial en Inglaterra en 1656. Tanto él como sus allegados veían útil su conexión con negocios europeos, particularmente holandeses, y, de otro lado, pensaban que la siguiente venida de Cristo sólo ocurriría previa su conversión. Vid. web de *The Cromwell Association*, <<http://www.olivercromwell.org/jews.htm>>.

⁶²⁶ Harrington, *op. cit.*, pg. 121.

⁶²⁷ *Id.* Vid. Sabine, 1961, pp. 371 y 372; Zagorin, 1997, pp. 135-41. Aquí puede apreciarse con claridad el erastianismo de Harrington.

⁶²⁸ Harrington, *op. cit.*, pg. 80.

⁶²⁹ Uno de los órganos que Harrington entendía estaban incluidos en el ejecutivo.

⁶³⁰ *Ibid.*, pp. 121 y 122, 172 y 173, 236-240.

Oceana influyó en posteriores figuras de relevancia⁶³¹, pero siempre apoyada en camarillas con escaso o nulo apoyo popular. El club de la Rota que fundó Harrington para extender sus ideas, a la manera de los jardines renacentistas, fue más bien propenso al complot y a estrategias de acercamiento a diversas élites⁶³². Su esencia estaba muy alejada de los niveladores, de los panfletos y el activismo popular. La intención, tanto de él, como de sus sucesores, fue la de atraerse grupos en el poder y así conseguir el objetivo de implantar *Oceana* desde arriba. En todo caso, y como mucho, conspirando para derrocar a unos gobernantes a fin de que otros proclives a sus ideas les sustituyeran. De hecho, Harrington fue apresado y permaneció largo tiempo cautivo, al imputársele participación en el *Derwenwater Plot*⁶³³. Sus deseos se estrellaron contra el muro de la realidad, pero varias de sus ideas sobrevivieron, como demuestran los panfletos que fueron difundidos desde la muerte de Cromwell en 1658 y que alcanzaron el período de la Restauración iniciada en 1660⁶³⁴. Para introducirnos en toda esa fase histórica, nada como hacerlo de la mano de uno de los harringtonianos más ilustres del momento.

I.3.5. Neville: una adaptación harringtoniana a las circunstancias

Uno de los principales seguidores de Harrington fue Henry Neville (1620-1694). Republicano activo, que participó en el Consejo de Estado de la *Commonwealth* en 1651, intentó impulsar varios proyectos hostiles a la Restauración, a través de

⁶³¹ El *Art of Lawgiving*, publicado en febrero de 1659, fue una especie de versión abreviada de *Oceana* (Worden en Wootton, ed., 1994, pg. 126).

⁶³² Se formó en 1659 y disolvió al año siguiente, con la Restauración. Era algo similar al grupo que Maquiavelo y sus amigos formaban en los Oricellari, jardines de Florencia, y formaban parte de él, entre otros, el ex-*leveller* William Wildman y el economista político William Petty (1623-1687). Las reuniones se celebraban en un *coffee-shop* de Westminster (vid. Wootton, David, ed., *op. cit.*, pp. 136 y 137).

⁶³³ Ruiz Ruiz, Ramón: *La tradición republicana. Renacimiento y ocaso del republicanismo clásico*, Madrid, Dykinson, 2006, pg. 198.

⁶³⁴ El propio Harrington publicó el 2 de mayo de 1659 *Pour Enclouer le Canon*, un ruego al ejército para implementar su programa político; y el mismo día salió de imprenta *The Army's Duty*, escrito por Wildman y Henry Neville, de quien hablaré a continuación (de hecho, ambos había probablemente colaborado con anterioridad en *A Copy of a Letter to an Officer in the Army*, de 1654, que ya contenía diversas ideas harringtonianas). Vid. Al respecto, y para más detalles, Worden en Wootton (ed.), *op. cit.*, pp. 131-136. En este artículo se indica la aproximación de Neville a los textos *levellers*, en primer lugar, dada su coincidente oposición tanto al Protectorado como al posible retorno del absolutismo, y en segundo término, por su idéntica estima por las libertades, sobre todo de la religiosa, a diferencia, en este último caso, de la posición netamente harringtoniana (ibid., pp. 135-136). Neville presentó en 1659 una petición al Parlamento que recuerda claramente otras anteriores que los *levellers* habían elaborado, llamada *Humble Petition of Divers Well-affected Persons*, London, (vid. edición de Londres de Becket and Cadell, 1771, en <<http://oll.libertyfund.org/title/916/75738>>, web del *Liberty Fund*).

diversos escritos y de su actividad política, siendo detenido en 1663, y huyendo el siguiente año a Italia. Regresó en 1669 para continuar sus actividades políticas⁶³⁵.

Durante el período de hegemonía cromwelliana, Neville participó con intensidad en el debate sobre la *Humble Petition and Advice* que hizo resucitar la Cámara Alta en la Inglaterra de la *Commonwealth*⁶³⁶. Con este documento se intentaba continuar la tradición de la *ancient constitution*, pero acercándose más al *gobierno mixto* que a recuperar la *constitución mixta*, una tradición de raíz medieval que parecía superada por los acontecimientos.

Y ello por dos razones. En primer lugar, no existía propiamente rey, sino un *Lord Protector*⁶³⁷ que dirigía el ejecutivo. Si bien debía designar él mismo a quien quisiera fuese a sucederle, la figura del monarca permanecía fuera del sistema, dado el rechazo de Cromwell a sostener cetro alguno. El *Lord Protector* convocaría parlamentos periódicamente y contaría con un Consejo de Estado. El Parlamento se hallaría conformado por dos cámaras, la de los Comunes y una más a la que el texto denomina “la otra cámara” y compuesta de entre cuarenta y setenta personas elegidas por el Protector, con el visto bueno de la primera, y que dispondrían de sus cargos en forma vitalicia.

Los harringtonianos, Neville entre ellos, no estaban de acuerdo con el esquema de la *Humble Petition* y pretendieron reformar la Cámara reaparecida a fin de que se asemejara mucho más a la de *Oceana*, en donde era elegida por un grupo amplio de ciudadanos y en forma rotatoria⁶³⁸. Su proyecto fue rechazado, pero los seguidores de Harrington, tanto como él mismo, prosiguieron sus intentos tras el fallecimiento de Cromwell, para luego adentrarse en el período de la Restauración, ya con mayor peligro de sus vidas.

En este sentido, y considerando siempre que los Estuardo sufrían el peso de haber sido acusados desde el reinado de Jacobo I de una fuerte atracción por el catolicismo, una primera resquebrajadura por la cual se pudieron introducir sus opositores harringtonianos fue, una vez más, la abierta por la cuestión religiosa. Así, entre 1679 y 1681 se produjo la llamada “*crisis de la exclusión*”. Durante este período, diversos parlamentarios pugnaron por que se aprobara una ley que prohibiera ser heredero de Carlos II a Jacobo, Duque de York⁶³⁹, y que se había negado a aceptar el

⁶³⁵ Vid. Worden, Blair: “Republicanism and the Restoration, 1660-1683”, en Wootton, David (ed.), *op. cit.*

⁶³⁶ Vid. *supra*, pp. 145 y 146.

⁶³⁷ “*His Highness the Lord Protector of the Commonwealth of England, Scotland and Ireland*” (“Su Alteza el Lord Protector de la República de Inglaterra, Escocia e Irlanda”).

⁶³⁸ Worden, “Republicanism and the Restoration, 1660-1683”, en Wootton (ed.), 1994, pg. 131.

⁶³⁹ *Ibid.*, pg. 450

*Test Act*⁶⁴⁰. El grupo principal de ellos fue liderado por el Conde de Shafestbury y pronto sus simpatizantes serían denominados *whigs*, consiguiendo cierto grado de apoyo popular mediante el fantasma del complot papista, que se relacionaba con una inmediata amenaza de potencias extranjeras. Pero el *Bill of Exclusion* nunca llegó a ser aprobado, pues Carlos, haciendo uso de la prerrogativa real, disolvió varios parlamentos a fin de impedirlo. Cuando en 1681 consigue pasar a los Lores, éstos votaron en contra. Los que se opusieron a su aprobación serían denominados al principio “*abhorrrers*”⁶⁴¹, luego “*tories*”⁶⁴².

Como resultas de toda esta crisis provocada a partir de 1679, Neville escribió *Plato Redivivus, or A Dialogue concerning Government*, publicada en 1681⁶⁴³. En esta obra, su autor intenta recuperar el modelo de gobierno mixto harringtoniano, pero con modificaciones que intentan adaptarse a la terca realidad política del momento. De hecho, finaliza el libro con la divisa “*Nullum numen abest, si sit prudentia*”⁶⁴⁴.

Lo primero que aparece claramente reflejado en el *Plato* es la ambición de su autor. Neville pretende el establecimiento de un modelo político que vaya más allá de una crítica coyuntural a cortesanos y parásitos monárquicos. Se trata de edificar un sistema distinto, que evite de raíz la proliferación de intereses particulares obstaculizadores del bien común. Así, en su Segundo Diálogo, dice por boca del llamado “caballero inglés”:

Los pérfidos consejeros, parlamentarios pensionados, jueces leguleyos, aduladores clericales, los atareados e intrigantes papistas, los asesores franceses, no son causa de nuestra mala fortuna, sino los efectos [...] de un solo origen, el mismo que conlleva la resquebrajadura y ruina de nuestro gobierno: que, habiendo entrado en decadencia desde hace cerca de doscientos años, y conducido en nuestra época próximo a la expiración, de manera que agoniza; y no puede cumplir por más tiempo con las funciones en la vida política; ni encargarse de trabajar por el orden y preservación de la humanidad.⁶⁴⁵

⁶⁴⁰ Esta ley databa de 1673 (Carlos II se vio empujado a aceptarla), e impedía ocupar cargo público alguno a quienes no realizaran un solemne juramento afirmando la supremacía eclesiástica del rey y negando la transustanciación eucarística (conversión del cuerpo de Cristo en pan y vino). Quedaban así fuera de puestos de responsabilidad, tanto los católicos como los no conformistas. Al principio, no se extendía a los Lores, pero a partir de 1678, sí. No fue derogado hasta 1829.

⁶⁴¹ Literalmente, “aborrecedores”, se entiende que del proyecto excluyente.

⁶⁴² Cook, 1989, pg. 515 (“whig”).

⁶⁴³ Vid. Worden, Blair. “Republicanism and the Restoration, 1660-1683”, en Wootton (ed.), *op. cit.*, pg. 146. El texto, *Plato Redivivus, or A Dialogue concerning Government*, Londres, S.I., 1681, se halla en la web de la *Constitutional Society*, específicamente en <http://www.constitution.org/neville/pla_red_.htm>.

⁶⁴⁴ “Si la prudencia está presente, ningún poder divino se halla ausente”.

⁶⁴⁵ “*The evil counsellors, the pensioner-parliament, the thorough-paced judges, the flattering divines, the busy and designing papists, the French counsels, are not the causes of our misfortunes; they are but the effects, (as our present distractions are) of one primary cause; which is, the breach and ruin of our*

Y un poco más adelante, el mismo personaje describe la teoría contractualista:

la necesidad hizo al primer gobierno. Cada hombre, por la primera ley de la naturaleza (que es común a nosotros y los brutos) tenía, como las bestias en un pastizal, derecho a todas las cosas; y no existiendo así propiedad, cada individuo, si era el más fuerte, tenía la posibilidad de apoderarse de todo lo que otro poseyera anteriormente, cosa que implicaba un estado de guerra perpetua. Para remediar esta situación, así a fin de evitar el miedo a que no pudiera ser disfrutada cosa alguna por cualquier particular (ni estuviera vida humana alguna segura), cada hombre consintió en renunciar a ese derecho universal a todas las cosas; y se limitó a un disfrute tranquilo y seguro de la parte que le sería asignada. De esta manera vino a ser propietario; para lo cual, a su vez, era necesario consentir a las leyes y a un gobierno para ponerlas en ejecución.⁶⁴⁶

A continuación, la mención a Aristóteles y su clasificación de las formas de gobierno resulta inevitable, derivando en el siguiente párrafo:

El dominio está fundado en la propiedad. Así que si existen monarquías mixtas, el rey en ellas no tiene toda la propiedad, pues habiendo quienes comparten con él la administración de la soberanía, tienen asimismo una porción de aquélla (ya sea el senado, el pueblo o ambos) o si no tuviera el monarca compañeros en el poder soberano, no los tendría tampoco en el dominio o posesión de la tierra⁶⁴⁷.

Tras lo cual, el caballero inglés viene a definir la forma de gobierno que considera óptima:

government: which, having been decaying for near two hundred years, is in our age brought so near to expiration, that it lies agonizing; and can no longer perform the functions of a political life; nor carry on the work of ordering and preserving mankind".

⁶⁴⁶ "I will take for granted that which all the politicians conclude: which is, that necessity made the first government. For every man by the first law of nature (which is common to us and brutes) had, like beasts in a pasture, right to everything; and there being no property, each individual, if he were the stronger, might seize whatever any other had possessed himself of before, which made a state of perpetual war. To remedy which, and the fear that nothing should be long enjoyed by any particular person, (neither was any man's life in safety,) every man consented to be debarred of that universal right to all things; and confine himself to a quiet and secure enjoyment of such a part, as should be allotted him. Thence came in ownership, or property: to maintain which, it was necessary to consent to laws, and a government; to put them in execution".

⁶⁴⁷ "Dominion is founded in property. So that if there were mixed monarchies, then the king had not all the property; but those who shared with him in the administration of the sovereignty, had their part (whether it were the senate, the people, or both) or if he had no companions in the sovereign power, he had no sharers likewise in the dominion or possession of the land". El reparto de la tierra tiene exacta correlación en el dominio político, como el de *Oceana* (vid. *supra*, pg. 158). La mención favorable a la ley agraria romana aparece en el mismo Diálogo, un poco después del siguiente párrafo que transcribo.

Así que ahora paso a la *democracia*. Que podéis advertir es un gobierno donde la parte principal de la soberanía, así como su ejercicio, descansa en el pueblo, a la manera de un mandato que desempeña por autoridad del senado. Y consistiendo en tres *órdenes* fundamentales: el senado que propone, el pueblo que resuelve, y *el magistrado* que ejecuta. Este gobierno resulta ser mucho más poderoso que una aristocracia; porque ésta no puede armar al pueblo, por temor a que pueda dominar el gobierno; así que prefiere no utilizar como soldados a nadie salvo a extranjeros y mercenarios⁶⁴⁸.

Dentro de este esquema político, inequívocamente harringtoniano, Neville pasa a analizar cuál debe ser el poder del monarca en un régimen idóneo:

por lo que se refiere al poder del rey en los intervalos parlamentarios, no puede ser más que delegado; es decir, meramente el de cuidar que se cumpla el *common law* y los estatutos elaborados por el poder soberano (esto es, aquel compuesto por el parlamento y él mismo), sin variar nada ni suspender, derogar u obviar la ejecución de ley alguna; para esto juró solemnemente en su coronación. Y todo su poder para tal encomienda reside en el *common law*, que es en sí mismo la razón, escrita sobre los corazones de los hombres racionales, así como en los libros de los juristas⁶⁴⁹.

Este recorte del poder real, abarca el veto del monarca; así, el caballero inglés, de nuevo, expone que el rey no debería atreverse a ejercerlo:

nunca hubo solicitud parlamentaria alguna que concerniendo gravemente a los asuntos públicos, presentada al rey, y por él rechazada, no hubiera producido efectos de carácter nefasto [...] tal ha sido la sabiduría y bondad de nuestro gracioso príncipe actual; que en veinte años, o algo más (todo el tiempo que hemos disfrutado de él desde la feliz Restauración), no ha llevado a efecto su veto mas que con respecto a un solo proyecto de ley [...] no es razonable que su majestad

⁶⁴⁸ "So that now I am come to democracy. Which you see is a government where the chief part of the sovereign power, and the exercise of it, resides in the people: and where the style is, at the command of the people, by the authority of the senate. And it does consist of three fundamental orders; the senate proposing, the people resolving, and the magistrates executing. This government is much more powerful than aristocracy; because the latter cannot arm the people, for fear they should seize upon the government; and therefore are fain to make use of none but strangers and mercenaries for soldiers" Subrayado propio: nótese que los órdenes fundamentales son idénticos a los señalados por Harrington (vid. *supra*, pp. 157 y 158).

⁶⁴⁹ "For as to what concerns the king's office in the intervals of parliament, it is wholly ministerial; and is barely to put in execution the common law, and the statutes made by the sovereign power (that is, by himself and the parliament) without varying one tittle; or suspending, abrogating, or neglecting the execution of any act whatsoever: and to this he is solemnly sworn at his coronation. And all his power in this behalf is in him by common law; which is reason itself: written as well in the hearts of rational men, as in the lawyers' books".

rechace ese derecho del que todo inglés disfruta, y que es el de no ser obligado a dispensar sus favores sino hasta donde desee⁶⁵⁰.

A continuación, el debate sobre el veto se extiende a los lores. El noble veneciano que participa en este segundo Diálogo del *Plato Redivivus* interroga al caballero sobre si deben poseer tal potestad, a lo cual éste contesta:

Sí, la tiene, y también los Comunes, pero hay una gran diferencia entre un veto acompañado de voz deliberativa, que es el mantenido por los Pares, y el que pertenece a la corona, que se arroja sin deliberación. Los Pares se hallan coordinados con los Comunes en presentar y modelar leyes; y pueden abandonar proyectos legislativos, de la misma forma que pueden acogerlos, excepto en los asuntos en los que se trate de trabar imposiciones sobre el pueblo. En todo esto nuestro gobierno imita a las mejores y más perfectas repúblicas que hayan existido, en la cuales el senado asistía en la elaboración de las leyes, y por su sabiduría y destreza, pulía, refinaba y dejaba listos asuntos para las asambleas más numerosas; y a veces, por su gravedad y moderación, empujaba al pueblo a un estado más tranquilo; y por su autoridad y crédito detenía la marea y hacía que las aguas permanecieran tranquilas, dando al pueblo tiempo para volver en sí. Así que si no tuviéramos Pares ahora, *basándonos en la vieja constitución, sería necesario crear otros o un senado*. Así que se puede asegurar a nuestros Lores actuales que, aunque sus dependientes y poder han desaparecido, no podemos permanecer sin ellos y no deben temer una posible aniquilación originada por nuestra reforma, como la que sufrieron en los últimos y enloquecidos tiempos.⁶⁵¹

Así que algo más adelante, el mismo personaje expone su única matización a la existencia de Cámara Alta:

⁶⁵⁰ "That there never were yet any parliamentary requests, which did highly concern the public, presented to any king and by him refused, but such denials did produce very dismal effects [...] And such has been the wisdom and goodness of our present gracious prince; that in twenty years, and somewhat more (for which time we have enjoyed him, since his happy Restoration) he has not exercised his negative voice towards more than one public bill [...] it is unreasonable his majesty should be refused that right that every Englishman enjoys, which is not to be obliged to dispense his favours but where he pleases".

⁶⁵¹ "So they are, no doubt; and the commons too:but there is a vast difference between a deliberative vote, which the peers have with their negative; and that in the crown, to blast all without deliberating. The peers are co-ordinate with the commons in presenting and hammering of laws; and may send bills down to them, as well as receive any from them; excepting in matters wherein the people are to be taxed. And in this our government imitates the best and most perfect commonwealths that ever were: where the senate assisted in the making of laws; and by their wisdom and dexterity, polished, filed, and made ready things for the more populous assemblies; and sometimes by their gravity and moderation, reduced the people to a calmer state; and by their authority and credit stemmed the tide, and made the waters quiet, giving the people time to come to themselves. And therefore if we had no such peerage now, upon the old constitution; yet we should be necessitated to make an artificial peerage or senate instead of it. Which may assure our present lords, that though their dependencies and power are gone, yet we cannot be without them: and that they have no need to fear an annihilation by our reformation, as they suffered in the late mad times".

Que los Pares (quienes disfrutan y deben seguir haciéndolo tanto de un poder de veto como de una voz deliberativa en los trámites parlamentarios, excepto en lo relativo a los impuestos) queden exentos de depender en forma absoluta del príncipe; y que por lo tanto, sea declarado por ley, y a futuro, que ningún Par sea nombrado como tal sino por ley parlamentaria, y que entonces luego su posición sea hereditaria en línea masculina.⁶⁵²

Visto, pues, que Neville defiende todavía parte del papel tradicional atribuido a los Lores, pasará a detenerse en una aguda crítica de la prerrogativa real, en el Diálogo Tercero, también con la voz del caballero inglés:

Así que los poderes que se hallan ahora en la corona y que impiden la ejecución de nuestras leyes, obstaculizando en consecuencia nuestra felicidad y satisfacción, son cuatro. Primero, al poder absoluto de firmar la paz o declarar la guerra, así como de suscribir tratados y alianzas con todas las naciones del mundo; el cual implica que, mediando consejeros ignorantes o malvados ministros, muchos de nuestros reyes antes citados han establecido confederaciones y declarado guerras en gran parte contrarias o destructivas *para los intereses de Inglaterra* [...] La segunda gran prerrogativa que el rey disfruta, es la de disponer y dictar mandatos de manera exclusiva y con respecto a la milicia, tanto por tierra como por mar, reclutando fuerzas, guarneciendo y fortificando lugares, fletando buques de guerra, todo en la medida en que pueda realizarlo sin establecer impuestos sobre el pueblo; y todo ello, no sólo en los intervalos del parlamento, sino también durante sus sesiones [...] El tercer punto se refiere a que es potestad del rey nombrar como desee y por el tiempo que estime adecuado, *a todos los cargos públicos* del reino que sean de confianza o utilidad, fueren civiles, militares y eclesiásticos [...] la cuarta ventaja es la de disponer y emplear, a voluntad, todos los ingresos de la corona y el reino, sin tener consideración alguna, excepto en la medida en que quiera, respecto a la necesidad de la armada, o a alguna otra cosa relacionada con la seguridad pública⁶⁵³.

⁶⁵² "That the peers (who do and must enjoy both a negative and deliberative voice in all parliamentary transactions, except what concern levying of money originally) be exempted from depending absolutely upon the prince; and that therefore it be declared by act, for the future, that no peer shall be made but by act of parliament, and then that it be hereditary in his male line".

⁶⁵³ "The powers then which now being in the crown do hinder the execution of our laws, and prevent by consequence our happiness and settlement, are four. First, the absolute power of making war and peace, treaties and alliances with all nations in the world; by which means, by ignorant counsellors, or wicked ministers, many of our former kings have made confederations and wars, very contrary and destructive to the interest of England [...] The second great prerogative the king enjoys, is the sole disposal and ordering of the militia by sea and land, raising forces, garrisoning and fortifying places, setting out ships of war, so far as he can do all this without putting taxations upon the people; and this not only in the intervals of parliament, but even during their session [...] The third point is; that it is in his majesty's power to nominate and appoint as he pleases, and for what time he thinks fit, all the officers of the kingdom that are of trust or profit, both civil, military, and ecclesiastical [...] the fourth advantage; which is the laying out and employing, as he pleases, all the public revenues of the crown or kingdom, and that without having any regard (except he thinks fit) to the necessity of the navy, or any other thing that concerns the safety of the public."

Ante todo esto, al caballero inglés le interroga el noble veneciano, sobre si la solución sería la de que el Parlamento se ocupara de los asuntos citados. El caballero inglés responde:

Señor, yo no despojaría al rey de ellos; y mucho menos los asignaría al Parlamento o permitiría su perpetuación. Es un cuerpo más adecuado para elaborar leyes y castigar a sus infractores, que para ejecutarlas. Así que pediría por medio de un *bill* a su majestad que le pluguiese ejercer aquellas cuatro grandes potestades gubernamentales con el consentimiento de varios consejos nombrados a tal fin [...] Los consejeros han de ser nombrados por el Parlamento⁶⁵⁴.

El caballero expone después un ingenioso sistema de carácter rotatorio, muy a la manera harringtoniana (aludiendo asimismo a Venecia), por el cual los consejeros serán renovados en un tercio anual, impidiéndose su reelección hasta haber transcurrido tres años desde el fin de su mandato.

Pero lo llamativo del texto nevilliano es que el autor dedica mayor atención que su maestro Harrington al asunto de los derechos y libertades. Así, un poco después, y en el mismo Tercer Diálogo, dice, refiriéndose al poder arbitrario de la corona, tan a menudo aparecido en la historia inglesa:

Tal cosa obtuvieron, primero la Carta Magna, después, la petición de Derechos y otras diversas normas parlamentarias: eliminar tal poder, y hacer así que la ley y los jueces fueran los únicos que pudieran disponer de las libertades de nuestras personas.⁶⁵⁵

De forma parecida había hablado ya idéntico personaje al final del Primer Diálogo:

El pueblo, por las leyes fundamentales (esto es, por la constitución del gobierno de Inglaterra), tiene entera libertad en sus vidas, propiedades y personas: y no puede sufrir ni en cuantía mínima, sino de forma acorde con las leyes ya hechas o que sean realizadas en el parlamento y *adecuadamente publicadas*. Y para impedir opresiones que se produjeran en la ejecución de

⁶⁵⁴ "Sir, I would not divest the king of them; much less would I have the parliament assume them, or perpetuate their sitting. They are a body more fitted to make laws, and punish the breakers of them, than to execute them. I would have them therefore petition his majesty by way of bill, that he will please to exercise these four great magnalia of government, with the consent of four several councils to be appointed for that end [...] The councils to be named in parliament".

⁶⁵⁵ "This made, first Magna Charta, then the Petition of Right, and divers other acts besides this last, take that power quite away; and make the law and the judges the only disposers of the liberties of our persons".

estas *buenas leyes* (y que reflejan nuestro derecho innato), todos los procesos deben ser desarrollados ante *doce hombres de nuestros iguales y de nuestro vecindario*⁶⁵⁶.

Pero es que, incluso, y siguiendo también aquí a Harrington, Neville afirma, de nuevo en el Diálogo III, que

ese Parlamento sea elegido en determinado día y sin necesidad de convocatoria previa alguna, de manera que se tenga por supuesto la reunión del pueblo en instante y lugar habituales (como en las iglesias parroquiales cuando escoge cargos públicos) y que los *sheriffs* se hallen listos para presidir y dar fe de la elección. Y que el Parlamento elegido de esta forma se reúna en momento señalado, así como que se siente y suspenda sesiones en la medida en que sus asuntos resulten urgentes, pero indicando el instante en el que vaya a regresar. Y si hubiera necesidad (por motivo de invasión u otra causa) para que se reuniera antes, entonces el Rey llamará a los miembros de los mencionados cuatro consejos, y con el consentimiento de la mayoría de ellos, instará a su reunión más pronta⁶⁵⁷.

En resumen, Neville vino a recuperar el esquema harringtoniano del gobierno mixto, ligeramente escorado hacia la constitución antigua, pero manteniendo las divisas del creador de *Oceana*: ley agraria, rotación y elección de cargos (indirecta para el senado), imperio de la ley y no de los hombres. Su objetivo más inmediato era el de mantener la liquidación republicana de la prerrogativa real, de manera que el monarca se encontrara sujeto a sus consejeros nombrados por el Parlamento. Para ello, y dada la coyuntura política antes indicada, no vacila en hacer ciertas concesiones a los Lores, buscando su apoyo para frenar al rey, si bien con matices que impiden recobren la antigua categoría que poseyeron. De alguna forma, Neville está queriendo expresar que, dado que las propiedades del país ya se hallan algo más repartidas que entre unos pocos y principales terratenientes, a la manera medieval, la Cámara Alta deberá ser elegida para dar lugar a una composición más amplia representativamente que la tradicional. Pero con ello, el autor de *Plato Redivivus* mantiene el elitismo republicano típico de los hombres de la *Commonwealth*, y que

⁶⁵⁶ "The people by the fundamental laws, (that is, by the constitution of the government of England) have entire freedom in their lives, properties, and their persons: neither of which can in the least suffer, but according to the laws already made; or to be made hereafter in parliament, and duly published. And to prevent any oppression that might happen in the execution of these good laws, (which are our birthright) all trials must be by twelve men of our equals, and of our neighbourhood".

⁶⁵⁷ "That a parliament be elected every year at a certain day, and that without any writ or summons; the people meeting of course at the time appointed in the usual place; (as they do in parishes at the church-house to choose officers;) and that the sheriffs be there ready to preside and to certify the election. And that the parliament so chosen shall meet at the time appointed; and sit and adjourn, as their business is more or less urgent; but still setting yet a time for their coming together again. And if there shall be a necessity (by reason of invasion, or some other cause) for their assembling sooner; then the king to call the counsellors of these four councils all together, and with the consent of the major part of them, intimate their meeting sooner".

venía a defender la hegemonía social de los propietarios más importantes, si bien ahora, al contrario que con los Estuardo, incluyendo a el emergente sector social aupado en las últimas décadas, la *gentry*.

Las consignas republicanas extraídas de la Antigüedad grecolatina e incluso de los ejemplos bíblicos, constantes en escritores como Harrington, Milton, y luego Sidney, también se hallan presentes en la obra neviliana, si bien mediando con respecto a los clásicos, la influencia importantísima de Maquiavelo, una vez más, y como en esos mismos autores. Así, cuando Neville hace alusión al gobierno mixto, conformado por elementos aristocráticos y populares, recoge la idea establecida por Maquiavelo en su *Discursos*, quien exponía que el pueblo era el mejor defensor de la libertad, debido a que:

una pequeña parte quiere ser libre para mandar, pero todos los demás, que son infinitos, desean la libertad para vivir seguros. Porque en todas las repúblicas, de cualquier modo que estén organizadas, sólo cuarenta o cincuenta ciudadanos ocupan los puestos de mando, y el príncipe puede estar seguro respecto de estos pocos, o quitándolos de en medio, o dándoles honores en cantidad suficiente para que se sientan contentos, según su condición. Y los otros, a los que les basta con vivir seguros, se satisfacen con facilidad haciendo leyes y ordenamientos en los que, a la vez que se afirma el poder, se garantice la seguridad de todos. Y si un príncipe hace esto y el pueblo ve que no rompe la ley por ninguna circunstancia, comenzará pronto a vivir seguro y contento.⁶⁵⁸

Se trata, pues, de una república, pero con predominio popular. La propia forma de seleccionar Lores apuntala este criterio. Y si Neville acepta la presencia del monarca en su esquema político, es sólo bajo un recorte drástico de sus potestades, que van a quedar controladas por sus consejeros, quienes son al fin y al cabo delegados del Parlamento. Y, sobre todo, porque para la Inglaterra de ese instante, amenazada por las convulsiones y conflictos continuos ya descritos, recuperar aquel símbolo de estabilidad y *unidad nacional* podía convenir al futuro del país. ¿Qué más da que fuera un reino, si bajo su estructura se iba a ocultar una república, con la

⁶⁵⁸ Pg. 80. Otros pasajes de la obra muestran claramente la preferencia maquiavélica por el segmento popular del gobierno, así como su influencia en los autores de la Revolución Inglesa en general; vid., por ej.: “el gobierno del pueblo es mejor que el de los príncipes (pg. 70), “para curar la enfermedad el pueblo bastarán las palabras, y la del príncipe necesita el hierro” (pg. 71), o las indicaciones de que la “multitud” es más constante y sabia que el un príncipe (pg. 166) o de que el pueblo es quien tiene menos posibilidades de equivocarse al elegir a los magistrados (pp. 395-6).

etiqueta simuladora de “monarquía mixta”⁶⁵⁹. Lo que interesaba, a propósito de todas estas disertaciones, era obtener la consolidación de la *unidad nacional inglesa*. Al respecto, la *Commonwealth*, con su columna vertebral en torno al *New Model Army*, había demostrado que partiendo de un ejército miliciano de ciudadanos en armas, el país podía hacer frente a numerosas potencias rivales con éxito, sujetar los dominios de Escocia e Irlanda. No era necesario, pues, regresar a modelos políticos antiguos y esclerotizados. El propio estudio de la Historia Antigua demostraba tal extremo.

Mas, y como ya he señalado, una señal específica identificadora de Neville, no tan marcada por su maestro Harrington, va a ser cierto hincapié en la defensa de las libertades inglesas. Todos los cargos públicos del país, desde los parlamentarios hasta el monarca, estarán sometidos al imperio de la ley, aquí representado por los jueces, es decir, por los veredictos del jurado. Tenemos así la primera garantía de aquellos derechos. Pero es que, por añadidura, el propio poder parlamentario, que se considera de gran importancia⁶⁶⁰, y que , en última instancia derivaba de un derecho de los ingleses, el de elegir a sus representantes, se halla limitado por la existencia de sucesivas elecciones en su Cámara principal, en instante y lugar concretos. Nadie, ni siquiera el rey, podrá disolver a capricho la asamblea, y, en cuanto a convocarla fuera de sus sesiones, sólo cuando sus consejeros se hallen de acuerdo y en caso de urgente necesidad.

Existe, pues, y desde luego, tras toda esa argumentación, un proyecto constitucional específico, de limitación del poder, y aun careciendo de concreciones en detalle, dado que su autor intentaba moverse en las aguas turbulentas de una realidad política cambiante.

Pero hubo aún otro autor que, siendo primo del propio Neville, y relacionado con su actividad política, no fue exactamente harringtoniano y participó activamente contra la Restauración. Tuvo gran influencia luego en la revolución norteamericana, dados sus planteamientos radicales contractualistas.

⁶⁵⁹ En ella vemos, asimismo, el típico esquema racional, luego mantenido por otros pensadores, como Locke, de la división entre ejecutivo y legislativo (la del judicial tardará mucho en aparecer).

⁶⁶⁰ Vid. *supra*, pg. 170: las elaboradas por el Parlamento son “buenas leyes”, y son realizadas en derivación del un “derecho de nacimiento” que es el de elegir representantes. Añádase a esto el propio papel muy destacado de los Comunes en el esquema nevilleiano, al tener la potestad de nombrar lores y consejeros, así como en general de detentar todos aquellos poderes que el rey ya no debía tener y que habían sido tradicionalmente objeto de la prerrogativa monárquica (*vid.* pp. 169-170, *supra*).

I.3.6. Algernon Sidney o el último republicano

Sobresaliente por su personalidad y actividad política, Algernon Sidney (1627-1683) luchó en el *New Model Army* durante la guerra civil inglesa⁶⁶¹ y fue parlamentario durante el *Long Parliament* y luego el *Rump*. Permaneció como miembro del Parlamento Rabadilla por no ser afín al presbiterianismo, sino más bien a los independientes⁶⁶². Sin embargo, debe considerarse el hecho de que se opusiera después al enjuiciamiento de Carlos I por los Comunes⁶⁶³. Incluso llegó a alejarse del *Rump*, negándose a realizar el juramento propuesto por Ireton para ellos y con el que se comprometían con la abolición definitiva de la monarquía y la Cámara de los Lores, el 22 de febrero de 1649⁶⁶⁴. Retornó a la asamblea en 1651, siendo elegido en otoño de 1652 miembro del Consejo de Estado de la Commonwealth. Tras la disolución del *Rump* en 1653, no mostró simpatía por el Protectorado de Cromwell⁶⁶⁵. Ante la Restauración posterior, tuvo que exiliarse de Inglaterra, viajando a Italia, acercándose así a los textos del Renacimiento, en especial a los de Maquiavelo. Tras resultar ejecutado por conspirador contra la monarquía su amigo Henry Vane, comienza a participar activamente en complots contra Carlos II, hasta que en 1683 corra idéntica suerte. Era uno de los principales sospechosos de colaborar en la conspiración de *Rye House*, por sus ataques a la corrupción que el ministro Danby había extendido entre los parlamentarios, obsequiándoles con puestos o pensiones si apoyaban las directrices regias⁶⁶⁶. La obra más conocida de Sidney fue *Discourses concerning Government*⁶⁶⁷, que empezó a escribir en 1681⁶⁶⁸ y que no estaba terminada cuando se le arrestó antes de ser procesado⁶⁶⁹. Si bien además redactó las *Court Maxims* para defender la tolerancia religiosa⁶⁷⁰, en un sentido próximo al de Milton.

Los *Discourses*, que resultaron publicados de manera póstuma, concretamente en 1698⁶⁷¹, fueron una respuesta a *Patriarcha, or the Natural Power of Kings*, texto del monárquico Sir Robert Filmer (1588-1653), publicado también una vez muerto su

⁶⁶¹ Fue nombrado coronel de regimiento el 18 de marzo de 1645, incluso. Dorado, *op. cit.*, pg. 433, nota 4.

⁶⁶² Id., nota 5 (su defensa del divorcio, tal y como sería emprendida también por Milton, representa a modo de ejemplo bastante bien este emparentamiento con ellos frente a la ortodoxia religiosa del presbiterianismo en este punto). Vid., sobre su afinidad con Milton, Sabine, 1961, pp. 379-80.

⁶⁶³ Dorado, *op. cit.*, pg. 434, nota 7 al pie.

⁶⁶⁴ Houston, Alan Craig: *Algernon Sydney and the Republican Heritage in England and America*, Princeton, Princeton University Press, 1991, pp. 24-25.

⁶⁶⁵ Dorado, *op. cit.*, pg. 435.

⁶⁶⁶ Dorado, *op. cit.*, pg. 431, nota 2

⁶⁶⁷ Sidney, Algernon: *Discourses concerning Government*, London, s.n., 1689, en la web de la *Constitution Society*, <http://www.constitution.org/as/dcg_000.htm>.

⁶⁶⁸ Dorado, *op. cit.*, pg. 437.

⁶⁶⁹ Houston, *op. cit.*, pg. 65. Serían publicados mucho más tarde, en 1698: Sabine, *op. cit.*, pg. 378.

⁶⁷⁰ Vid. Dorado, *op. cit.*, pp. 464-465.

⁶⁷¹ Vid. Sabine, *op. cit.*, pg. 378.

creador, en 1680, y que obtuvo asimismo réplica en el Tratado del Gobierno Civil lockeano⁶⁷². El *Patriarcha* mantenía la tesis de que el poder civil derivaba del paternal, legitimado por mandato divino; una tesis de regusto medieval, que recordaba la figura simbólica de padre que tradicionalmente en esa época habían tenido los monarcas.

Sidney fue un claro defensor de tesis contractualistas, y el análisis de la antedicha obra resulta demostrativa de un pensamiento que se había abierto paso con la Guerra Civil inglesa y que representaba el republicanismo de los hombres afines a la *Commonwealth*, aunque lo fueran de manera crítica, como era el caso.

A lo largo de sus *Discourses* el autor va describir una supuesta realidad antropológica y determinados hechos de carácter histórico para respaldar sus tesis políticas. Basta echar un vistazo a su capítulo II, sección I, para percatarse de que su modelo explicativo es semejante al de Locke:

los primeros padres de la humanidad dejaron a todos sus hijos independientes unos de otros, así como con igual libertad para preocuparse de sí mismos: esa libertad se mantuvo, hasta que el número se incrementó, lo cual vino a ser problemático y peligroso para cada uno; y no encontrando otro remedio para el crecimiento de los desórdenes, o dado iban a reproducirse ente ellos, reunieron muchas familias dentro de un cuerpo civil, que pudiera ocuparse mejor de la conveniencia, seguridad y defensa de ellos y sus hijos. Esto implicó la transferencia del derecho particular de cada hombre a la comunidad; y no teniendo nadie otro derecho mas que el que era común a todos, excepto el de los padres sobre sus hijos, eran igualmente libres cuando sus padres murieran; y nada podía inducirles a juntarse, y a disminuir esa libertad natural por reunirse en sociedades, sino las esperanzas de una ventaja pública.⁶⁷³

Se trata, pues, nuevamente, de la noción contractual defendida por muy diversos autores de la época para legitimar el poder político, contra la teoría de tipo patriarcal del Medievo que gustaba de situar al monarca fuera de cualquier esquema

⁶⁷² Tanto Sidney como Locke fueron secretarios de Lord Shafestbury (vid. Dorado, *op. cit.*, pg. 438, nota 15). Anthony Ashley Cooper, primer conde de Shafestbury, fue personaje político importante que vino a liderar la tendencia *whig* que luego impulsaría la Gloriosa, y que tendría éxito sólo tras su muerte en el exilio holandés en 1682. Vid. Locke, John: *A Letter concerning Toleration* (1689-1690); trad. cast., por donde se cita, a cargo de Pedro Bravo Gala, *Carta sobre la Tolerancia*, reimp. (1ª ed., de 1985), Madrid, Tecnos, 1988, pg. XL, nota 37, de la "Presentación" del propio traductor.

⁶⁷³ "The first fathers of mankind left all their children independent on each other, and in an equal liberty of providing for themselves: that every man continued in this liberty, till the number so increased, that they became troublesome and dangerous to each other; and finding no other remedy to the disorders growing, or like to grow among them, joined many families into one civil body, that they might the better provide for the conveniency, safety, and defence of themselves and their children. This was a collation of every man's private right into a publick stock; and no one having any other right than what was common to all, except it were that of fathers over their children, they were all equally free when their fathers were dead; and nothing could induce them to join, and lessen that natural liberty by joining in societies, but the hopes of a publick advantage".

político basado en el consentimiento. En el mismo apartado, así continúa Sidney poco después refiriéndose a la justicia:

La debilidad en que nacemos nos somete, haciendo que seamos incapaces de obtener por nosotros mismos este bien; queremos ayuda en todo, especialmente en las cosas más grandes. La fiera barbarie de una multitud desordenada y sin ley, no sometida a disciplina alguna, resulta totalmente hostil a tal objeto: mientras cada hombre teme a su vecino y no tenga otra defensa que su propia fuerza, debe vivir en esa ansiedad perpetua que es contraria a la aquella felicidad y al temperamento moderado necesario para buscarla. El primer paso para la cura de este mal pestilente es para muchos el juntarse en un solo cuerpo, que todos sean protegidos por la fuerza reunida de todos; y que así los varios talentos que los hombres poseen, con buena disciplina, puedan ser así útiles al conjunto; y es que la principal pieza de madera o piedra que sea colocada por un sabio arquitecto, conduce a la belleza del edificio más gloriosos. Así que llevando cada hombre en su pecho afectos, pasiones y vicios que van contra aquel fin, y al no obedecer hombre alguno al sometimiento a su vecino; nada sujetará la corrección o restricción entre sí que el sometimiento a una misma norma⁶⁷⁴.

Ese gobierno que viene a instaurarse entre los hombres se basa en su propia voluntad, no en ninguna decisión divina. Si bien Dios establece que el hombre debe vivir en sociedad para llevar una vida próspera⁶⁷⁵, *las normas y formas de gobierno son fruto de la decisión humana, que puede optar por diferentes modelos, según la*

⁶⁷⁴ *"The weakness in which we are born, renders us unable to attain this good of ourselves: we want help in all things, especially in the greatest. The fierce barbarity of a loose multitude, bound by no law, and regulated by no discipline, is wholly repugnant to it: Whilst every man fears his neighbour, and has no other defence than his own strength, he must live in that perpetual anxiety which is equally contrary to that happiness, and that sedate temper of mind which is required for the search of it. The first step towards the cure of this pestilent evil, is for many to join in one body, that everyone may be protected by the united force of all; and the various talents that men possess, may by good discipline be rendered useful to the whole; as the meanest piece of wood or stone being placed by a wise architect, conduces to the beauty of the most glorious building. But every man bearing in his own breast affections, passions, and vices that are repugnant to this end, and no man owing any submission to his neighbour; none will subject the correction or restriction of themselves to another, unless he also submit to the same rule".*

⁶⁷⁵ Cap I, Sección 6: "God hath not only declared in Scripture, but written on the heart of every man, that as it is better to be clothed, than to go naked; to live in a house, than to lie in the fields; to be defended by the united force of a multitude, than to place the hopes of his security solely in his own strength; and to prefer the benefits of society, before a savage and barbarous solitude" ("Dios no sólo ha declarado en las Escrituras, sino también escrito en cada corazón humano, que es mejor quedar vestido que ir desnudo; vivir en una casa, que descansar en los campos; ser defendido por la fuerza reunida de una multitud, que ubicar las esperanzas sobre su seguridad sólo en la propia fuerza; y preferir los beneficios de la sociedad, antes que una soledad bárbara y salvaje"). Nótese la íntima relación de este último inciso con el famoso pasaje de Hobbes en el *Leviatán*, referente al estado de guerra: "[e]n una situación semejante no existe oportunidad para la industria, ya que su fruto es incierto; por consiguiente, no hay cultivo de la tierra, ni navegación, ni uso de los artículos que pueden ser importados por mar, ni construcciones confortables, ni instrumentos para mover y remover las cosas que requieren mucha fuerza, ni conocimiento de la faz de la tierra, ni cómputo del tiempo, ni artes, ni letras, ni sociedad; y lo que es peor de todo, existe continuo temor y peligro de muerte violenta; y la vida del hombre es solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve" (op. cit., pg. 125).

coyuntura⁶⁷⁶, pero una vez establecida, tal regulación deberá ser respetada por *toda* la comunidad:

El establecimiento de un gobierno es un acto arbitrario, que descansa totalmente sobre el deseo de los hombres. Las constituciones y formas particulares, todos los grupos de magistrados, junto con la medida de poder dada a cada uno de ellos, y las reglas por las cuales ejercen su cargo, también. La Carta Magna, que abarca nuestras antiguas leyes, así como todos los estatutos derivados, no fueron remitidos por el cielo, sino elaborados de acuerdo con los deseos de los hombres [...] Las diversas leyes y gobiernos que existen o han existido en muchas épocas y lugares, son producto de opiniones varias de quienes tenían el poder de hacerlos [...] Pero pienso, y creo que acertadamente, que un poder arbitrario nunca fue bien ubicado entre hombres algunos y sus sucesores, si éstos no quedaban obligados a obedecer las leyes que hacían. Esto fue entendido correctamente por nuestros ancestros sajones: hicieron leyes en sus asambleas y consejos de la nación; pero todos aquellos que propusieron y consintieron a esas leyes, tan pronto con o la asamblea quedó disuelta, permanecieron sometidos a su poder, así como también el resto de los hombres.⁶⁷⁷

Queda establecida así la premisa de que las regulaciones políticas y sociales derivan de la voluntad humana, con el añadido de que una vez fijadas deben ser obedecidas por todos, es decir, edifican a su alrededor el mandato legal, vinculando a futuro. Esta idea esencial del imperio de la ley será reiterada por Sidney en el Capítulo II, Sección I, de su *Discourses*, cuando ensalce como los mejores gobiernos a aquellos que han sabido darse leyes, ya fueran “reinos legítimos” o ya “repúblicas”, resultando que todos ellos “han sido las nodrizas de la virtud; las naciones que vivieron bajo ellos han prosperado en paz y libertad, o afrontado guerras con gloria y ventaja”. Mientras que, prosigue el autor, no ocurría lo mismo con los sistemas políticos fuera del imperio de la ley, que eran “tiránicos”, vergonzosos por la presencia continua de la violencia y el error. Es verdad, desde luego, que aquí se encuentran los ecos de la *Política* aristotélica. Pero el significado de una acepción en contextos

⁶⁷⁶ La Sección 6 del Capítulo I de los *Discourses* se denomina “Dios permite al hombre elegir las formas de gobierno; y quienes conciben una de ellas, pueden desear derogarla”.

⁶⁷⁷ Sidney, *op. cit.*, Cap. III, Sección 45: “*the establishment of government is an arbitrary act, wholly depending upon the will of men. The particular forms and constitutions, the whole series of the magistracy, together with the measure of power given to everyone, and the rules by which they are to exercise their charge, are so also. Magna Charta, which comprehends our ancient laws, and all the subsequent statutes were not sent from heaven, but made according to the will of men [...] The various laws and governments, that are or have been in several ages and places, are the product of various opinions in those who had the power of making them [...] But I think I may justly say, that an arbitrary power was never well placed in any men and their successors, who were not obliged to obey the laws they should make. This was well understood by our Saxon ancestors: They made laws in their assemblies and councils of the nation; but all those who proposed or assented to those laws, as soon as the assembly was dissolved, were comprehended under the power of them as well as other men*”.

históricos tan diferentes resulta distinto. Así, en la Inglaterra de la época el órgano que principalmente elabora la ley y que ha cobrado fuerza en su legitimidad, tras su enfrentamiento con los Estuardo, no es otro que el Parlamento de Westminster. Al respecto, la trayectoria de Sidney es un vivo ejemplo de esta concepción, y sus disertaciones sobre el sujeto legislador, significativas. Sidney señala que éste se manifiesta en última instancia a través del “pueblo” (en una acepción restrictiva, cierto es, que analizaré luego):

podemos concluir que no hay privilegio unido a forma alguna de gobierno; sino que todos los magistrados son igualmente ministros de Dios, que realizan la tarea para la cual han sido designados; y que el pueblo que los nombra, puede proporcionar, regular y extinguir su poder, así como prescribir su período, extensión y el número de personas, como le parezca adecuado, lo cual no puede ser de otra forma que para su propio bien.⁶⁷⁸

¿Y cuál es esa “tarea” de los magistrados?:

La magistratura no resulta instituida, ni persona alguna ubicada en ella para el incremento de su majestad, sino para la preservación del conjunto del pueblo, y la defensa de la libertad, vida y propiedad de cada particular.⁶⁷⁹

Esa designación de los magistrados para que desempeñen la tarea de gobierno, tiene, además, su origen en un contrato⁶⁸⁰: “muchas naciones han hecho contratos llana y explícitamente con sus magistrados”, y donde no, “resultan implícitos”, pudiéndose castigar a los magistrados que no cumplan sus términos⁶⁸¹. Esta premisa se extiende a los reyes:

⁶⁷⁸ Id., Cap. I, Sección 20, “[t]odo Poder justo de la Magistratura resulta derivado del Pueblo” ([a]ll *just Magistratical Power is from the People*): “we may conclude, that no privilege is peculiarly annexed to any form of government; but that all magistrates are equally the ministers of God, who perform the work for which they were instituted; and that the people which institutes them, may proportion, regulate and terminate their power, as to time, measure, and number of persons, as seems most convenient to themselves, which can be no other than their own good”. En ese mismo apartado se cita el aforismo *vox populi est vox Dei*.

⁶⁷⁹ “The magistracy is not instituted, nor any person placed in it for the increase of his majesty, but for the preservation of the whole people, and the defence of the liberty, life and estate of every private man”. Sección 21, Capítulo III.

⁶⁸⁰ Cap. II, Sección 32.

⁶⁸¹ Si bien, una vez más, y como ocurre con otros casos de la época, no queda claro qué órgano o institución será la que va a enjuiciar ese incumplimiento, Sidney sí pone como ejemplo de limitación para el gobernante el de los cónsules romanos que abandonaban su cargo, tras finalizar el período para el cual eran nombrados, en ese mismo pasaje. Parece, pues, inclinarse por la temporalidad o rotación en el cargo típicamente republicana. Aunque no parece que sea ajeno a la descripción de los antiguos sobre la punición que sufrían a veces. “Al resultar elegidos, los magistrados daban un juramento promisorio que garantizase su correcta actuación al desempeñar su oficio; al finalizar el mismo prestaban otro asertorio de haber actuado honestamente y con respeto a la legalidad vigente. Eventualmente, al concluir su magistratura podía seguirse un proceso criminal público contra ellos” (Paricio, *op. cit.*, pg. 69).

hemos probado que la esencia de los parlamento es tan antigua como nuestra nación, y no hubo tiempo en que no hubiera tales consejos o asambleas del pueblo que tuvieran el poder de la comunidad, y que hubieran elaborado o derogado tales leyes como hubieran querido [...] el poder fue siempre nuestro; y los reyes normandos fueron obligados jurar que gobernarían de acuerdo con las leyes aprobadas por estas asambleas.⁶⁸²

Ahora bien, Sidney muestra asimismo su preferencia por la forma de gobierno que a lo largo de todo sus *Discourses* denomina “gobierno popular o mixto”, explicando de la siguiente manera su génesis:

Algunos grupos reducidos de personas, viviendo en los límites de una ciudad, transfirieron a un depósito común el derecho por el cual se gobernaban a sí mismos y a sus hijos, y, mediando consentimiento de la misma índole para reunirse en un solo cuerpo, ejercieron tal poder sobre cada persona como pareciese más beneficioso para la comunidad; denomino *democracia* perfecta a la de estos hombres. Otros eligieron más bien ser gobernados por un número selecto de aquellos con mayor sabiduría y virtud; y a esto, de acuerdo con el significado del término, se le llamó *aristocracia*. O cuando un hombre era de excelencia mayor que los otros, el gobierno era puesto en sus manos bajo el nombre de monarquía. *Pero la mejor, más sabia y de lejos más grande porción de la humanidad*, rechazando estos tipos, *formó gobiernos compuestos de los tres*, como será demostrado, y que comúnmente recibieron su respectiva denominación del segmento que prevalecía en ellos, así como alabanzas o denigración, según guardaran una buena o mala proporción.⁶⁸³

Esta preferencia por el gobierno mixto queda reflejada en el propio título de la sección 16 perteneciente al Capítulo II (“Los mejores Gobiernos del Mundo estaban

⁶⁸² “We have already proved the essence of parliaments to be as ancient as our nation, and that there was no time in which there were not such councils or assemblies of the people as had the power of the whole, and made or unmade such laws as best pleased themselves (...) the power was always in ourselves; and the Norman kings were obliged to swear they would govern according to the laws that had been made by those assemblies”.

⁶⁸³ Capítulo I, Sección 10 (subrayado propio): “[s]ome small numbers of men, living within the precincts of one city, have, as it were, cast into a common stock, the right which they had of governing themselves and children, and by common consent joining in one body, exercised such power over every single person as seemed beneficial to the whole; and this men call perfect democracy. Others chose rather to be governed by a select number of such as most excelled in wisdom and virtue; and this, according to the signification of the word, was called aristocracy: Or when one man excelled all others, the government was put into his hands under the name of monarchy. But the wisest, best, and far the greatest part of mankind, rejecting these simple species, did form governments mixed or composed of the three, as shall be proved hereafter, which commonly received their respective denomination from the part that prevailed, and did deserve praise or blame, as they were well or ill proportioned”.

compuestos de Monarquía, Aristocracia y Democracia”)⁶⁸⁴, poniendo como ejemplos de los mismos dentro del apartado a la república romana, las ciudades griegas de Esparta y Atenas, los hebreos o Venecia, entre otros.

El Cap. III, Sección 43, de los *Discourses* nos explica por qué esa predilección:

La naturaleza del hombre es tan frágil, que donde la palabra de una sola persona ha tenido fuerza de ley, las innumerables extravagancias y daños que ha producido han sido tan notorios, que todas las naciones que no resultan bárbaras, serviles o embrutecidas, han abominado de ello y han hecho de su principal objetivo ocuparse de encontrar remedios para tal situación, dividiendo y equilibrando así los poderes de su gobierno, de manera que un hombre o unos pocos no tengan la capacidad de oprimir y destruir a quienes deberían preservar y proteger. Esto ha sido tan agradecido a los mejores y más sabios príncipes, como necesario para los más débiles y peores, cosa que ya he probado con los ejemplos de Teopompo, Moisés y muchos otros.⁶⁸⁵

Se trataría, pues, de que “el equilibrio de poderes sea de tal manera, que la corrupción en la que caigan uno o unos pocos hombres no cause un contagio que suponga la ruina del conjunto”⁶⁸⁶.

Lo más llamativo de Sidney es, asimismo, su capacidad para mezclar argumentos tanto históricos como racionalistas al objeto de defender sus postulados políticos. Así, su racionalismo queda patente cuando quiere definir la desobediencia a las leyes. Indicando que el poder de hecho, con sus castigos y recompensas, no es el que puede hacernos cumplir con las normas, señala que:

debemos buscar otra regla para nuestra obediencia, una que, siendo *sanctio recta*, basada en principio de razón y verdad del que se deduzca la justicia pura y sagrada, no quede establecida según el deseo depravado de un hombre, que varía según diferentes intereses, humores y

⁶⁸⁴ “*The best Governments of the World have been composed of Monarchy, Aristocracy, and Democracy*”. La predilección también aparece en el Capítulo II, concretamente en sus Secciones 19 (denominada “La Corrupción y Venalidad que resulta connatural a la Corte, resultan raramente encontradas en los Gobiernos Populares”), 21 (“Los Gobiernos Mixtos y populares preservan la Paz y lideran las Guerras mejor que las Monarquías Absolutas”) y 24 (“Los Gobiernos Populares se hallan menos sometidos a Desórdenes Civiles que las Monarquías; los controlan con mayor habilidad y se recobran más fácilmente de ellos”).

⁶⁸⁵ “*The nature of man is so frail, that wheresoever the word of a single person has had the force of a law, the innumerable extravagances and mischiefs it has produced have been so notorious, that all nations who are not stupid, slavish and brutish, have always abominated it, and made it their principal care to find out remedies against it, by so dividing and balancing the powers of their government, that one or a few men might not be able to oppress and destroy those they ought to preserve and protect. This has always been as grateful to the best and wisest princes, as necessary to the weakest and worst, as I have proved already by the examples of Theopompus, Moses, and many others*”.

⁶⁸⁶ “*By balancing the powers in such a manner, that the corruption which one or a few men might fall into, should not be suffered to spread the contagion to the ruin of the whole*”. Ibid.

pasiones que a menudo reinan en numerosas naciones, y que un día deroga lo que había sido aprobado en otro. La sanción, así, que conserva la denominación de ley, que no deriva su excelencia ni de la antigüedad, o de la dignidad de los legisladores, sino de la justicia y equidad intrínsecas, deberá ser elaborada persiguiendo esa razón universal a la que todas las naciones en todas la épocas deben iguales obediencia y veneración. De esta manera podremos saber si, quien tiene el poder, imparte justicia o no.⁶⁸⁷

Incluso para este comentario de carácter iusnaturalista, el autor recurre al ejemplo histórico: los emperadores romanos que perseguían a los cristianos no tenían la justicia de su parte, aunque sí dispusieran de legiones mercenarias⁶⁸⁸. No resulta tan chocante, en todo caso, este modelo argumentativo. Al fin y al cabo, lo que Sidney intenta conseguir es establecer unos principios políticos *de carácter universal*, apelando a las semejanzas entre varios pueblos en distintas épocas, principalmente griegos, romanos y hebreos.

Para finalizar el análisis sobre la obra del autor inglés, interesa resaltar su concepto republicano de libertad, íntimamente vinculado, como es propio de la tradición de la que proviene, a la vida cívica y el ejercicio de la virtud. Así, dice en el Capítulo II, Sección I, al referirse los sistemas políticos inscritos bajo el imperio de la ley⁶⁸⁹, que en la historia “*hombres sabios y valientes [...] establecieron gobiernos estables y señalaron a los mejores individuos para su administración*”. Así que es el hombre virtuoso, a la manera en que Aristóteles y Platón ya lo planteaban, el actor político principal. Pero para comportarse de tal manera, no podrá ser alguien que dependa de otros, sino una persona independiente: “la diferencia entre *civis* y *servus* es irreconciliable; y ningún hombre, mientras que sea siervo, puede ser miembro de una república. Porque aquél que no tiene poder sobre sí mismo no puede tener parte en el gobierno de otros”⁶⁹⁰. La libertad implica

⁶⁸⁷ Capítulo III, Sección 11: “*we must look for another rule of our obedience, and shall find that to be the law, which being, as I said before, sanctio recta, must be founded upon that eternal principle of reason and truth, from whence the rule of justice which is sacred and pure ought to be deduced, and not from the depraved will of man, which fluctuating according to the different interests, humours and passions that at several times reign in several nations, one day abrogates what had been enacted the other. The sanction therefore that deserves the name of a law, which derives not its excellency from antiquity, or from the dignity of the legislators, but from an intrinsic equity and justice, ought to be made in pursuance of that universal reason to which all nations at all times owe an equal veneration and obedience. By this we may know whether he who has the power does justice or not*”.

⁶⁸⁸ *Id.*

⁶⁸⁹ *Vid. supra.*, pg. 177.

⁶⁹⁰ Cap. II, Sección 5: “*for the difference between Civis and Servus is irreconcilable; and no man, whilst he is a servant, can be a member of a commonwealth; for he that is not in his own power, cannot have a part in the government of others*”.

una independencia respecto al deseo de otros, y con el nombre de esclavo designamos a un hombre que no puede disponer ni de su persona ni de sus bienes, sino que todo lo que disfruta lo tiene por deseo de su señor.⁶⁹¹

Se trata de la libertad republicana (*libertas*) que fundamenta el gobierno para el bien público, tal y como se reitera en la Sección 10 del Cap. II perteneciente a los *Discourses*: este apartado lleva la denominación de “La Libertad produce Virtud, Orden y Estabilidad: la Esclavitud resulta encontrarse acompañada por el Vicio, la Debilidad y la Miseria”⁶⁹². En consecuencia, Sidney se muestra proclive a una república en donde los propietarios, esos hombres que tenían la suficiente independencia como para mantener su virtud y por tanto su amor a la libertad, servirían a su gobierno, ocupando las magistraturas o seleccionando a los hombres que iban a desempeñarlas. Ese era el “pueblo” para Sidney⁶⁹³.

El autor de los *Discourses* fue hombre que, perseguido por su oposición a la monarquía, y habiendo mantenido conflictos con Cromwell y sus seguidores, acabó por pagar con su propia vida tan continuada disensión. Pero, en realidad, sus póstumos *Discourses* muestran la consolidación de una teoría política que ya no iba a retroceder jamás en Inglaterra y que permanecería definitivamente apuntalada con la Revolución Gloriosa de 1688. Filmer, por tanto, no tenía oportunidad alguna de resucitar con éxito los antiguos argumentos sobre el poder monárquico. La práctica política inglesa y sus derroteros no seguirían ya más esa senda. Los conservadores serían en el futuro personas como Burke, de ningún modo apologistas del absolutismo. El propio Carlos II, previa su llegada al trono, había realizado la

⁶⁹¹ “An independency upon the will of another, and by the name of slave we understand a man, who can neither dispose of his person nor goods, but enjoys all at the will of his master”. Reiterado en la Sección 16 del Cap. III: “la libertad consiste sólo en no permanecer sujeto al deseo de hombre alguno, y nada identifica a un esclavo como la dependencia de la voluntad de otro”.

⁶⁹² “Liberty produce Virtue, Order and Stability; Slavery is accompanied with Vice, Weakness and Misery”.

⁶⁹³ Y sin embargo, introdujo una opinión contradictoria en la Sección 16 del Cap. III perteneciente a sus *Discourses*. Tras exponer que la libertad, como opuesta a la esclavitud, consiste en no encontrarse sometido a la voluntad arbitraria de otra persona (vid. *supra*, pg. anterior), extrapola esta idea social al mundo político: “si no hay otra ley en el reino salvo el deseo de un príncipe, no existe tal cosa como la libertad”. Pero es que a continuación, asevera que “la propiedad es, asimismo, un apéndice de la libertad; así que es imposible para un hombre tener un derecho a tierras y bienes si no posee libertad y disfruta de su vida únicamente a placer de otro” (“[p]roperty also is an appendage to liberty; and 'tis as impossible for a man to have a right to lands or goods, if he has no liberty”). En consecuencia, Sidney está haciendo depender el disfrute de las posesiones de instituciones políticas que, sometidas al imperio de la ley, protejan la vida y la propiedad. Lo llamativo del caso es que esta contradicción con el resto de sus premisas no parece preocuparle: está afirmando, de una parte, una posición social que pretende sostenerse por sí misma (la independencia obtenida a través de la propiedad que uno tiene y que le posibilita no estar a la discreción de otro), pero luego señala que esa situación ha de ser protegida por las leyes y los magistrados. Si una se mantiene por sí misma, ¿por qué necesita de la otra? Para ligar esos intereses a una participación política, Sidney va restringir el ámbito de esta última, sin advertir la contradicción, y cierto es que, al modo en que hicieron otros contemporáneos. Romper con este esquema del libre propietario será trabajoso y se producirá con una evolución económica, social y política posterior. Pero los *levellers* ya habían vislumbrado la contradicción, sobre todo en Putney.

Declaración de Breda (4 de abril de 1660), aceptando gran parte del importante papel alcanzado por el Parlamento, y durante su reinado fue aprobada el *Habeas Corpus Act* (1679)⁶⁹⁴.

I.3.7. Henry Vane como precursor del poder constituyente

Henry Vane “el Joven” (1613-1662) fue un famoso político del período que analizamos. Al simpatizar con los puritanos frente al laudismo, en 1635 marchó a las colonias americanas, convirtiéndose en Gobernador de Massachusetts en 1636, regresando poco después a Inglaterra. A continuación inició una intensa actividad parlamentaria, que le hizo chocar a menudo con la prerrogativa real. Participó más tarde en la Guerra Civil, recaudando fondos para el Parlamento, y deslizándose hacia posiciones cercanas a los independientes cuando los presbiterianos intentaron atrincherarse en las Cámaras.

Sus relaciones con Cromwell y los mariscales fueron difíciles. Así, cuando acaeció la Purga de Pride, llegó a retirarse de su escaño⁶⁹⁵, pero luego se le designó miembro del Consejo de Estado de la *Commonwealth* en febrero de 1649. Esta situación más amable decaería, al tener al poco un contratiempo con el detentador del poder *de facto* en el país. En enero de 1650 puso en marcha un proyecto para variar el sistema electoral de la república, de forma que, aunque los parlamentarios presentes mantuvieran sus puestos, se permitiera la admisión a otros de circunscripciones que no se hallaban representadas. El texto en cuestión, *Zeal Examined*, publicado en 1651, le valió el enfrentamiento con Cromwell. El militar deseaba, por contra, una reforma más amplia que diera lugar a un nuevo Parlamento. El jefe del ejército lo disolvería el 20 de abril de 1653⁶⁹⁶.

Siendo Vane defensor del imperio de la ley y de la tolerancia religiosa⁶⁹⁷, el contractualismo también se halla en sus escritos, así como la perspectiva acerca de lo legítimo de resistirse a la autoridad por medio de los magistrados. Pero la novedad introducida por él es su concepción del poder, que le acerca mucho a la hoy tradicional

⁶⁹⁴ Vid. Martínez, *op. cit.*, pp. 142-175 y 160-161. La Declaración fue instada por el general Monck (o Monk, según la transcripción, que a veces varía).

⁶⁹⁵ El enfrentamiento de Cromwell con Vane durante esa disolución (el 20 de abril de 1653) resultó muy grave. El líder del *New Model* le recriminó su conducta escasamente colaboradora durante los años transcurridos del *Rump*. Martínez Rodríguez, Miguel Ángel, 1999: La cuna del liberalismo (las revoluciones inglesas del siglo XVII), Barcelona, Ariel, pp. 121-22, citando los *Portraits and Documents* editados por J.S. Millward). Vid., asimismo, sobre la consideración de los cromwellianos, Zagorin, *op. cit.*, pp. 152-54.

⁶⁹⁶ Vid. “Sir Henry Vane (the Younger), 1613-1662” (<<http://www.british-civil-wars.co.uk/biog/vane.htm>>), en Plant, *op. cit.*.

⁶⁹⁷ En el propio *Zeal Examined* abogaba por una tolerancia religiosa amplísima, rechazando la creación de cualquier soporte estatal para una iglesia, lo cual le hacía alejarse también de Cromwell y los suyos, ya que éstos estaban por políticas más moderadas. Vid. <<http://www.british-civil-wars.co.uk/biog/vane.htm>>.

separación entre poder constituyente y constituido, que sería perfilada en la Consitución norteamericana y y que incluso antes, aunque de forma inconsciente, figuraba de manera implícita en los *Agreements* niveladores. Así, en 1656 Sir Henry Vane acudió a un expediente nuevo para solucionar parte del problema sobre los límites al poder y cómo podía concretarse la presencia de su fuente original. A *Healing Question* fue el documento elaborado como respuesta a una petición genérica efectuada por Cromwell en ese mismo año para solucionar la inestabilidad continua de la república. El texto comienza con la aseveración de que el Ejército no puede seguir ocupándose peamanentemente de los destinos de la república, y que resulta más adecuado crear un sistema que evite la inseguridad del momento. Así que se apela al *honest* o *good party*, que ha luchado contra la arbitrariedad el poder absoluto y que puede estar interesado en el modelo propuesto, considerando que

es necesario que se sostenga un equilibrio correcto entre la soberanía y la sujeción en el ejercicio de todo gobierno recto; aplicar el uso de la espada a promover y sostener la seguridad pública y el bienestar de la totalidad del cuerpo, con preferencia y, si fuera necesario, en oposición, a alguna de las partes [...] La espada no puede, ni ha de esperarse que lo haga, hacer esto si la soberanía se admite reside en algún lugar distinto que no sea la totalidad del pueblo que se ha adherido a la causa, y que deriva de él en sucesivos representantes, la judicatura más equitativa e imparcial para el momento presente⁶⁹⁸ [...] Así que, estamos ante una justa y buena constitución del gobierno, allá donde haya, primero, una unión ordenada de numerosos entendimientos, como judicatura suprema común y pública o soberanía visible, que se sitúe en una vía de ejercicio libre y ordenado, para dirigir y solicitar el empleo del poder gobernante de la espada, a fin de promover el interés o bienestar común del conjunto, sin alboroto o irritación alguno que provenga de él o no; y entonces, en segundo lugar, haya una unión y disposición de la voluntad de todos los individuos, en sus capacidades particulares, para ejecutar y obedecer [...] estas leyes soberanas y mandatos emitidos por sus propios diputados y comisionados.⁶⁹⁹

⁶⁹⁸ "Right balance necessary to be held up between sovereignty and subjection in the exercise of all righteous government ; applying the use of the sword to the promoting and upholding the public safety and welfare of the whole body, in preference, and, if need be, in opposition unto any of the parts [...] The sword never can, nor is it to be expected ever will do this, while the sovereignty is admitted and placed anywhere else than in the whole body of the people that have adhered to the cause, and by them be derived unto their successive representatives, as the most equal and impartial judicature for the effecting hereof". Obsérvese que el papel parlamentario sigue siendo, en parte, el de tribunal superior.

⁶⁹⁹ Where there is, then, a righteous and good constitution of government, there is first, an orderly union of many understandings together, as the public and common supreme judicature or visible sovereignty, set in a way of free and orderly exercise, for the directing and applying the use of the ruling power or the sword, to promote the interest and common welfare of the whole, without any disturbance or annoyance from within or from without; and then, secondly, there is a like union and readiness of will in all the individuals, in their private capacities, to execute and obey (by all the power requisite, and that they are able to put forth) those sovereign laws and orders issued out by their own deputies and trustees.

A continuación, Vane expresa que, por resultar ese poder delegado, sus detentadores no pueden extralimitar las funciones o potestades para las cuales se les ha comisionado, y que se compendian en la búsqueda el bien común, y que, por añadidura, la “rama de la soberanía” (*branch of sovereignty*) referente a la ejecución de las leyes debe subordinarse a él y a esas normas.

Esto plantea a su vez, como sabemos, el problema de dónde fijar los límites para esa asamblea hasta ahora descrita y, que por lo demás, concuerda con la existencia de una Parlamento al uso. ¿Quién y cómo va a limitarla? La solución para la república sería instituir

una convención general de hombres leales, honestos y clarividentes, elegidos para ese propósito con el libre consentimiento de todos aquellos que apoyan esta causa [...] *la cual no tendría propiamente el fin de ejercer el poder legislativo, sino sólo el debatir libremente y acordar los puntos que, a la manera de constituciones fundamentales, serán instituidos y observados de forma inviolable como condiciones sobre las que todo el cuerpo representado ha consentido en convertirse por sí mismo en unión civil y política, bajo la forma percible y administración del gobierno allí establecidos, y de forma que cada individuo miembro del cuerpo suscriba testimonio de su particular o plural consentimiento al mismo: con las condiciones así acordadas.*⁷⁰⁰

Así que tal reunión será la del pueblo en su más alta condición de soberano, (*the people represented in their highest state of sovereignty*), en una asamblea de sus mejores representantes, que producirá así al fin

armonía, rectitud, amor, paz y seguridad en el seno de todo el cuerpo, pues tal será el fruto de tal acuerdo, si el Señor tiene a bien estar entre nosotros.⁷⁰¹

Así, Vane daba luz a una asamblea constituyente que debatiera y aprobase la *paramount law*, previa a cualquier otra luego constituida para asumir funciones ordinarias tanto de tipo judicial como legislativo. Este mecanismo será retomado por las trece colonias americanas en su texto de 1787, sirviendo además para prever

⁷⁰⁰ “A general council, or convention of faithful, honest, and discerning men, chosen for that purpose by the free consent of the whole body of adherents to this cause [...] Which convention is not properly to exercise the legislative power, but only to debate freely, and agree upon the particulars that by way of fundamental constitutions shall be laid and inviolably observed as the conditions upon which the whole body so represented doth consent to cast itself into as civil and politic incorporation, and under the visible form and administration of government therein declared, and to be by each individual member of the body subscribed in testimony of his or their particular consent given thereunto: which conditions so agreed”. Subrayado propio.

⁷⁰¹ “Harmony, righteousness, love, peace, and safety unto the whole body follow hereupon, as the happy fruit of such a settlement, if the Lord have any delight to be among us!”

futuras reformas constitucionales, otro punto que los *levellers* tampoco abordaron en sus *Agreements*⁷⁰². Lo que intentaba el autor era ni más ni menos que buscar algún tipo de solución para la disputa permanente entre los parlamentarios y los jefes del ejército, preocupado, tanto por la tendencia de los primeros a no abandonar el poder (advertida con el *Rump*, y que no podía ser frenada ya por monarca alguno), como por la de los segundos de intervenir continuamente en la política nacional, sometiéndola a su espada.

Así que Vane difundió un esquema que culminaba con la idea de seleccionar un grupo que luego se disolviera tras la elaboración de una norma fundamental o “constituciones fundamentales”. Se daría así luego paso a una asamblea parlamentaria de carácter habitual. Sin duda, esto no hacer perder a Vane ese rasgo elitista compartido por los pensadores de la *Commonwealth*. De hecho, puede observarse que los participantes de la reunión fundante inicial va a ser elegidos de entre “aquellos que apoyan esta justa causa”, lo cual excluiría los lealistas y rebeldes católicos. Acerca de la extensión del sufragio entre los restantes, el autor no dice nada en foma explícita, pero su referencia a los “mejores” muestra su inclinación por un mecanismo restringido, nada chocante, por otro lado, con las premisas de las que partían los *commonwealthers* en general y que ya he analizado⁷⁰³.

De cualquier manera, el proyecto de Henry Vane no tuvo acogida favorable, dado el curso de los acontecimientos, y el escritor incluso permaneció encarcelado unos meses, a finales de 1656, a fin de que no se pudiera presentar a la elección para el segundo Parlamento del Protectorado, y dada su crítica del régimen. Tras la muerte de Oliver Cromwell, se presentó a a las elecciones convocadas por el hijo de éste,

⁷⁰² El control constitucional de las leyes propiamente dicho no aparecería hasta *Marbury versus Madison*, cuando el Tribunal Supremo aplicó en 1803 el artículo VI de su norma suprallegal: “esta Constitución, y las leyes de los Estados Unidos que se expidan con arreglo a ella, y todos los tratados celebrados o que se celebren bajo la autoridad de los Estados Unidos, serán la suprema ley del país y los jueces de cada Estado estarán obligados a observarlos, aun cuando se encuentre en la Constitución o las leyes de cualquier Estado alguna disposición que lo contradiga” (vid. este documento en Esteban, ed., 1977, pg. 433). La idea inicial de la Convención sólo había sido instituir la vigilancia de normas territoriales que quisieran romper la unión federal, pero al ser aprobadas las famosas Enmiendas en 1791, también quedaron protegidos varios derechos y libertades de igual forma. Y quizás no sea casual que las Enmiendas fueran aprobadas tras la revolución francesa de 1789. Parece que la influencia fue mutua.

⁷⁰³ Marchamont Nedham (1620-1678), fue otro hombre que compartió las premisas básicas sostenidas por los demás hombres de la *Commonwealth*, llegando a conspirar durante la Restauración. Famoso articulista de la época, dado a la polémica y con habilidad expositiva en sus textos, publicó en 1656 *The Excellencie of A Free-State*. En el libro, Nedham demuestra haber leído con interés los Discursos maquiavélicos y sostiene que “el Pueblo...es el mejor guardián de sus libertades”, siendo las mismas el tener una administración de justicia barata y sencilla, facultad para sustituir tanto el sistema de gobierno como a los gobernantes, disfrutar de un parlamento con periódicas e ininterrumpidas. Nadie ha de tener autoridad alguna si después no regresa a su condición de particular, pues de otra manera no podrá percibir los efectos de las medidas que ha sostenido (vid. Zagorin, *op. cit.*, pg. 125). Nedham fue un panfletista concido y de quien se dice que cumplía en secreto consignas cromwellianas, pues el oportunismo excesivo que a veces mostraba no ayudan a designarlo como pensador original. Tras él, y con menor talento, hay todo un grupo de publicistas que sostuvieron las ideas republicanas en una u otra forma durante todo el período analizado aquí.

resultando así elegido como parlamentario del Tercer Protectorado en enero de 1659. Pero Richard acabó abandonando el poder al poco, y fue restaurado el *Rump*. Vane intentó hacer entonces de medidor entre los parlamentarios y el ejército, pese a su actitud siempre recelosa ante el primero, siendo nombrado para varios cargos de responsabilidad. En octubre de 1659 las tensiones, sin embargo, seguían manteniéndose, así que John Lambert disolvió la asamblea. Vane siguió contando con la confianza de este militar y sus seguidores, pero nuevos conflictos le llevaron a rehuir responsabilidades de carácter oficial. La Restauración de 1660 supuso la definitiva caída de Vane. En 1662 fue juzgado como regicida, excluido de la amnistía real, y ejecutado tras haber sido encontrado culpable⁷⁰⁴.

I.3.8. Semejanzas entre los *levellers* y los escritores del Interregno

Resulta importante resaltar que aunque en toda la escuela “republicana” hubo muchas ideas comunes con los *levellers* (contractualismo, Parlamentos sucesivos elegidos por sufragio del *freeman*, imperio de la ley), otras resultaron distintas⁷⁰⁵. Así, los niveladores pidieron un nivel de tolerancia que tendía a una abierta *libertad religiosa*, mientras que los escritores del Interregno no. De hecho, estos últimos eran proclives a entender que el gobierno del país debía ser entregado a una minoría puritana selecta, piadosa y dada la virtud (los Santos), como en el supuesto de Milton o Vane, o bien de conceder a ese grupo una parte principal en él, bajo una forma mixta, como en el caso de Harington, Neville o Sidney.

En consonancia con ello, los autores de la *Commonwealth* defendían un sufragio más restringido que Lilburne y los suyos, criterio que Cromwell asumía al fijarlo en su *Instrument* con el ingreso de un mínimo correspondiente a 200 libras al año⁷⁰⁶. Propendían a una exclusión mayor: personas sólo con determinada renta anual y que fueran estrictamente puritanos.

⁷⁰⁴ Vid. Plant, *op. cit.*, <<http://www.british-civil-wars.co.uk/biog/vane.htm>>. Su discurso de defensa, en un proceso que resultó célebre por la coherencia y entereza de Vane, puede leerse en Phillipps, Samuel March (ed.): *State Trials, Or, A Collection of the Most Interesting Trials, Prior to the Revolution of 1688*, vol. II, Londres, W. Walker, 1826, pp. 87-117.

⁷⁰⁵ Dejo aparte ahora el caso de Hobbes, atípico y que conviene relacionarse con el análisis breve del *Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil* de John Locke que hará más tarde, con el que mantiene concomitancias muy directas. Las concordancias del autor del *Leviathan* con los *levellers* son escasísimas, tan sólo en lo referente a su contractualismo y poco más. Mientras que a Hobbes le preocupaba la paz y defendía el sacrificio de otras propuestas para favorecerla a toda costa, los niveladores, casi en el extremo opuesto, habían exigido muchas condiciones para someterse al poder político.

⁷⁰⁶ Si bien Marchamont Nedham parecía defender implícitamente uno tan extenso como el de los *levellers* (Zagorin, 1997, pg. 126).

Otro aspecto distintivo era el empeño de los *levellers* por que se estableciera un compromiso de carácter nacional⁷⁰⁷, reflejado en un solo documento escrito, y que contara con determinadas premisas para sujetar la actividad de los gobernantes. El texto, de un lado, establecería los mecanismos de control frente a ellos, mediante elecciones periódicas y posibilidad de que fueran juzgados, y, de otro, señalaba una serie de derechos y libertades que debían ser siempre respetados por el poder político. Una tradición autóctona considerada valiosa por los niveladores les instaba a combatir por ellos. Les habían servido para defenderse de los abusos intentados por los gobernantes a fin de imponer sus criterios a quienes no habían dado su consentimiento para someterse a los mismos y que en última instancia poseían unos derechos y libertades de carácter inalienable.

Por el contrario, los escritores de la *Commonwealth* no desconfiaron tanto de la nueva experiencia republicana. Para ellos, el enemigo a barrer era identificado con los lealistas y los radicales dados a la exaltación religiosa y a cambios drásticos de carácter social. El suelo sobre el cual desplazar los movimientos de la nueva política se daba por preexistente, no resultaba necesario acudir a la reseña de unos derechos y libertades que, en último término ligados a la tolerancia religiosa, sobrevivirían de por sí, sólo con batir a los enemigos de la república. Hay en estos autores una separación teórica y práctica entre aquellos derechos y libertades y el control del poder, que les hace, incluso, en situación crítica, acudir al mecanismo de la selección aristocrática o vitalicia⁷⁰⁸ para salvar el abismo existente entre un proyecto ideológico inmerso en sus propias contradicciones. La *Commonwealth* quiere ser tolerante, pero persigue a católicos, anglicanos, rebeldes irlandeses, lealistas, *levellers*, cuáqueros⁷⁰⁹. Los escritores republicanos intentan excusar sus errores y acercar a sus dirigentes a las tesis que defienden, algo más abiertas, pero oportunistas y poco ecuménicas.

Es posible decir, de esta forma, que tanto ellos como los niveladores sostuvieron la existencia de derechos instalados entre la ley natural, el mandato divino y las tradiciones inglesas, pero los *levellers* no desearon darlos por sobreentendidos. Su experiencia política les dijo que era mucho más seguro pergeñar un documento de valor permanente y que contara con apoyo generalizado. Obviaron, pese a tal proyecto, el establecer sus correlativos mecanismos de garantía, ofreciendo tan sólo declarar traidor a quien intentase vulnerar cláusula alguna del *Agreement* y situar al pueblo como último juez de cualquier conflicto, pero sin fijar un cauce reglado para su

⁷⁰⁷ Recordemos que todos acababan con la especificación "*of England*".

⁷⁰⁸ Por ejemplo, Milton.

⁷⁰⁹ Bien es cierto que los peligros tuvieron a veces visos de realidad. Respecto a los monárquicos, un ejemplo fue el levantamiento de Penruddock de 1655 (vid. Plant, *op. cit.*, "Oliver Cromwell, 1599-1688", en <<http://www.british-civil-wars.co.uk/biog/oliver-cromwell.htm>>).

intervención directa. Confiaban en que la milicia, el pueblo en armas con sus propios organismos democráticos, podía ser una fuerza indomeñable para cualquier déspota. Por el contrario, los autores del Interregno intentaron rehuir el caos que esta fórmula les suponía, confiando así en un ejército más o menos controlado por una asamblea parlamentaria escogida y que hiciera frente a los enemigos internos y externos de la *Commonwealth*.

Precisamente aquí es entonces preciso insistir en la diferencia ya apuntada entre niveladores y escritores republicanos, referente al concepto de “minoría selecta”. Esta noción conducía a estos últimos a pretender un Parlamento que fuera suficientemente representativo pero en el que sólo cupieran unos pocos. Cuando Milton apelaba a un grupo reducido del pueblo o de los magistrados que podía sublevarse contra el poder, estaba pensando en los “Santos” (*godlies*), hombres honestos y virtuosos. Por el contrario, los *levellers* preferían apelar al “pueblo”. Para ellos esta voz abarcaba un grupo más grande que el que deseaban los partidarios de la *Commonwealth*. *La coalición niveladora era vocacionalmente expansiva*. Un conglomerado social que no sólo incluiría a gente próspera, sino también a campesinos humildes, artesanos y trabajadores por cuenta propia de las ciudades. Por el contrario, Cromwell intentó apoyar su gobierno en una coalición social que excluía a los más modestos y elevó los ingresos requeridos para el sufragio. Su triunfo fue breve. Los representantes de sucesivas asambleas que intentó dominar se opusieron a sus designios de manera continua. Quienes fueron defensores de una coalición más amplia, los *levellers*, ya estaban fuera de combate. Eliminó la democracia organizativa del Ejército para sujetar con fuerza desde el alto mando sus escalafones. La *Commonwealth* consiguió aun así numerosos objetivos, como el sometimiento de Irlanda y Escocia o su triunfo sobre Holanda, pero sucumbió cuando su principal valedora, la *gentry*, se inclinó por nuevas formas de gobierno que no pudieran tenerla en jaque mediante la hegemonía de un poderoso generalato.

La tragedia de los autores de la república fue bien representada por la expulsión del *Rump* que sufrieron Henry Vane y Algernon Sidney, para luego ser ejecutados durante la época restauradora. Por un Milton ciego acosado hasta la muerte, perseguido bajo esos años. Por la exhumación que Carlos II ordenaría, tras llegar al trono, con el fin de partir en pedazos el cadáver de Cromwell y colgar su cabeza sobre una pica. Los intelectuales del Interregno, habiendo perdido su último sostén, el líder político a quien Harrington dirigió su *Oceana* y con cuya dirección política nunca llegaron a coincidir del todo, fueron arrinconados con el fallecimiento de Cromwell en 1658. No habían extendido una base de apoyo suficiente para sus ideas republicanas. Los radicales habían permanecido inquietos, reclamando cambios

drásticos, como pasó con los hombres de la Quinta Monarquía o los *levellers* que quedaban en activo. Los monárquicos le rechazaban y los moderados le temían e impugnaban la amplia potestad que poseían sus generales.

Eso sí, se había producido un experimento novedoso de carácter republicano, en un país densamente poblado y con características económicas y sociales avanzadas para la época y que anticipaban el futuro. Hacía falta que se reprodujeran determinados elementos a fin de resucitar la intentona, y, como demuestra la historia posterior, esto sucedió con premisas más cercanas a los *levellers*, y en el Nuevo Mundo.

II. El constitucionalismo estadounidense

II.1. La independencia de las trece colonias

II.1.1. La práctica del autogobierno y el reconocimiento de los derechos.

II.1.1.1. Los tipos de concesiones coloniales

La independencia de los Estados Unidos de América se forjó en 1776 a través de una práctica del autogobierno fomentada por la lejanía de territorios en los cuales la metrópoli había dispuesto de un dominio difuso. Los habitantes de una franja de Norteamérica que abarcaba, de norte a sur, desde la bahía de Massachusetts, ya muy cerca de la francófona Quebec, hasta la Florida española, y, hacia el oeste, hasta los montes Apalaches, protagonizarían un vuelco en la historia política mundial. Las trece colonias poseían una extensión aún no muy grande, ya que ni siquiera se habían adquirido nuevos territorios a potencias europeas ni iniciado la expansión hacia el Pacífico. Eran las de New Hampshire, Connecticut, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Massachusetts, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina y Georgia. Sus habitantes, de procedencia diversa, habían llegado en varias oleadas y contando con el asentamiento previo de indígenas también de distintas tribus. Eran descendientes de refugiados que habían huido por motivos religiosos de la vieja Europa, emigrantes escapados de hambrunas, comerciantes, aventureros, campesinos y también un puñado de administradores, políticos y oligarcas que habían preferido afincarse en el Nuevo Mundo o bien recoger experiencia y prosperidad antes de regresar luego a sus lugares de origen.

Esta población dispar fue ubicándose en Norteamérica siguiendo experimentos de diversa índole y que perseguían diferentes objetivos. Así, podemos decir que los primeros colonos llegaron a inicios del siglo XVII a Virginia, Maryland y Nueva Inglaterra, diseminándose y extendiéndose luego a otros lugares. Su distribución, aunque aproximada, podemos establecerla siguiendo a los historiadores que han estudiado aquella época y el continente. Sabemos que en Virginia los recién llegados se vieron obligados a afrontar condiciones especialmente duras, originándose luego allí una oligarquía poderosa, fundada en el trabajo de sirvientes y esclavos. Que a Maryland llegarían católicos huidos de Inglaterra, a Massachusetts los puritanos, a Pensilvania los cuáqueros. A su vez, que varias de estas colonias se escindirían en grupos disidentes que crearían otras. Así que uno de los primeros elementos que

existen allí es la disparidad de gentes y procedencias, credos religiosos y extracción social, que engendran una pluralidad difícil de asumir si no se encara con proyectos políticos prestos a dar cabida a diferentes concepciones.

Es ya habitual que se ponga escasa atención en los estudios constitucionales norteamericanos sobre el fenómeno surgido en las colonias. Sin embargo, y como ahora examinaré, resulta imprescindible conocerlo con cierta profundidad, a fin de advertir las características germinales de los que luego sería la democracia estadounidense. Sin este análisis resulta imposible comprender su génesis.

Se puede hablar de tres tipos de colonización iniciales⁷¹⁰. América del Norte carecía al principio, en el siglo XVI, de límites territoriales concretos que la repartiesen entre las potencias europeas. Se trataba de un territorio virgen aún sin definir en cuanto a las características de su dominio. La premisa de partida era explotar los recursos y comunicaciones del Nuevo Mundo, pero con escaso interés en poblarlo. Para Inglaterra, así, se trataba de extraer minerales, productos agrícolas, abrir pasos comerciales, etc., pero no de otros objetivos⁷¹¹. Y la peculiaridad de esta nación fue la de favorecer toda tales actividades sin establecer una dependencia directa de los colonos con respecto a la madre patria, sino reconociéndoles sus propios márgenes de actuación, aunque estuvieran sometidos básicamente a las mismas leyes que el resto de los súbditos de la Corona⁷¹². En esto mantuvo una clara diferencia con naciones como Francia o los Países Bajos. El método utilizado por los monarcas ingleses para explotar el continente fue el de la Carta regia, documento expedido por el monarca a grupos privados y particulares dentro de su prerrogativa, y que en consecuencia, no exigía del consentimiento parlamentario. En la Carta hay, siguiendo la tradición medieval, un *grantor* (concedente) y un *grantee* (concesionario). A cambio de cumplir ciertas condiciones del primero, el segundo va a poder disfrutar de algunos derechos y privilegios, pero siempre en última instancia bajo la soberanía

⁷¹⁰ Matteucci, *op. cit.*, pp. 170-84.

⁷¹¹ Hay una película protagonizada por Sean Connery, *Atmósfera Cero* (*Outland*, 1981), que aborda una intriga criminal ambientada en una explotación comercial fuera del planeta Tierra. En una luna de Júpiter habitada sólo por colonos mineros que trabajan allí durante períodos extensos.

⁷¹² En los documentos coloniales se especificaba que los colonos debían respetar las leyes inglesas en su autogobierno (vid. Matteucci, 179). Así, por ejemplo, en la *Charter of Maryland* de 1632, donde se decía que sólo podría ser aprobada allí toda norma que “fuere acorde a la Razón, y no repugnante ni contraria, sino, en tal grado como pueda concebirse, respetuosa con las Leyes, Estatutos, Costumbres y Derechos de este Nuestro Reino de Inglaterra (*“be consonant to Reason, and be not repugnant or contrary, but -so far as conveniently may be- agreeable to the Laws, Statutes, Customs, and Rights of this Our Kingdom of England”*). Vid. El documento en *Avalon Project*, <<http://www.yale.edu/lawweb/avalon/states/ma01.htm>>; punto VII (*web* de la Universidad de Yale). A propósito de esta aseveración, se percibe el hilo que conducirá de Coke a la legitimación que Otis esgrimiría mucho después sobre la rebelión de los colonos.

de aquél. Y ello aunque pueda gozar de la tierra en *free and common socage*⁷¹³ y no *in capite*, ya que disfruta de la facultad de transmitirla con libertad⁷¹⁴, al igual que ocurría con las acciones societarias. *Patent* poseía un significado parecido, de autorización regia para la explotación, un monopolio, en suma.

Un primer tipo de Cartas intentó promover el establecimiento de explotaciones, por lo cual se ofrecieron grandes extensiones a personas específicas y de solvencia. Esta tarea fue emprendida por la reina Isabel y continuada por los Estuardo, en una escala ya mayor. El modelo partía de los cánones del “dominio dividido” (la división entre dominio útil y titularidad), pero permitiendo la transmisión flexible de las concesiones. Por añadidura, y como he examinado páginas atrás, el señor del fundo gozaba de diversos poderes jurisdiccionales y administrativos sobre él. Se trataba, por tanto, de trasladar, en gran parte, el sistema existente en Inglaterra. Pero quienes aprovecharon este mecanismo también perseguían otros objetivos de importancia. Tal fue el caso de Sir George Calvert, primer Lord Baltimore. Siendo de confesión católica, consiguió de Carlos I una Carta en 1632 que le serviría para dar refugio a creyentes de esta índole que quisieran huir del hostigamiento que sufrían en Inglaterra. El territorio se llamaría Maryland y el hijo de su fundador, Cecilius, que envió allí a sus primeros colonos en 1634 y que en 1649 aprobaría una Ley de Tolerancia Religiosa⁷¹⁵.

La Carta otorgaba la explotación de una determinada extensión

con todos y cada uno de los Puertos, Embarcaderos, Bahías, Ríos y Estrechos pertenecientes a la Zona o Islas antedichas, y todos los Suelos, Plantas, Maderas, Marismas, Lagos, Ríos, Bahías y Estrechos, situados o ubicados en las Demarcaciones, Límites y Divisiones antedichas, con la Pesca de toda clase, incluyendo a Ballenas, Esturiones, otras especies piscícolas reales y demás peces, bien se hallen en el Mar, Bahías, Estrechos, o Ríos, dentro de los territorios Prescritos, y el pescado capturado allí; Y asimismo todos los Filones, Minas y Canteras, tanto visibles como ocultas, ya descubiertas o que se vayan a encontrar en la Zona, Islas o Límites antedichos, de

⁷¹³ Obligaba a pagar algo en renta o en especie, pero no suponía servicio de armas. Vid. Maitland, *op. cit.*, pg. 30.

⁷¹⁴ Vid. Matteucci, pp. 172 y 173.

⁷¹⁵ De todas formas, la colonia siempre contó con mayoría protestante de colonos, lo cual traería conflictos diversos. Vid. Commager, Henry Steele, Leuchtenburg, William E., y Morison, Samuel Eliot: *A Concise History of the American Republic*, Oxford, Oxford University Press, 1983; trad. cast., por donde se cita, de Odón Durán d'Oion, Faustino Ballvé y Juan José Utrilla, *Breve Historia de los Estados Unidos*, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1987, pg. 37.

Oro Plata, Gemas y Piedras preciosas, o de cualquier otro tipo, ya sean Piedras, Metales, o algún otro Material, o Clase de Mineral cualquiera.⁷¹⁶

Asimismo, el documento concedía, entre otras la potestad de imponer “Multas, Prisión y otros Castigos cualesquiera”⁷¹⁷, así como para nombrar cargos públicos del tipo de jueces, alguaciles, magistrados y otros, aprobar indultos o remisiones⁷¹⁸, e incluso construir fortificaciones y organizar la defensa de la colonia⁷¹⁹. Por añadidura, y como aspecto importante, establecía que Lord Baltimore o sus herederos debían convocar a los *freemen*, directamente o por sus delegados, con el fin de que asintieran a las leyes de la colonia (punto VII).

En 1663, el rey Carlos II concedería, además, la *Charter of Carolina* a ocho promotores, en un territorio que partir de entonces llevaría este nombre, situado entre Virginia y Florida⁷²⁰. Las características de la misma eran prácticamente las mismas que las de la anterior, con la única diferencia de que aquí se trataba de un grupo de concesionarios, caballeros o nobles, y no de un solo Lord⁷²¹.

La segunda vía importante para la expansión inglesa en Norteamérica a través de las cartas regias de concesión gozaba de fundamentos comerciales. Se trataba de la sociedad por acciones (*company*, o *joint stock company*), institución

⁷¹⁶ “With all and singular the Ports, Harbours, Bays, Rivers, and Straits belonging to the Region or Islands aforesaid, and all the Soil, Plains, Woods, Marshes, Lakes, Rivers, Bays, and Straits, situate, or being within the Metes, Bounds, and Limits aforesaid, with the Fishings of every kind of Fish, as well of Whales, Sturgeons, and other royal Fish, as of other Fish, in the Sea, Bays, Straits, or Rivers, within the Premises, and the fish t here taken; And moreover all Veins, Mines, and Quarries, as well opened as hidden, already found, or that shall be found within the Region, Islands, or Limits aforesaid, of Gold, Silver, Gems, and precious Stones, and any other whatsoever, whether they be of Stones, or Metals, or of any other Thing, or Matter whatsoever”.

⁷¹⁷ “Imposition of Fines, Imprisonment, and other Punishment whatsoever”, añadiendo: “y aun si fuera necesario, y la cualidad de la ofensa así lo requiriera, la privación de un miembro o de la vida” (“even if it be necessary, and the Quality of the Offence require it, by Privation of Member, or Life”). Punto VII.

⁷¹⁸ Id.

⁷¹⁹ Punto IX.

⁷²⁰ Morison, Commager y Leuchtenburg, *op. cit.*, pg. 50.

⁷²¹ En <<http://www.yale.edu/lawweb/avalon/states/nc01.htm>>. Recordar, asimismo, que uno de los propietarios, Lord Shaftesbury, fue protector de John Locke, quien colaboraría con él para elaborar en 1669 las *Fundamental Constitutions of Carolina* (Eliot, Commager y Leuchtenburg, *op. cit.*, pg. 50, así como Pérez Cantó, María Pilar, y García Giráldez, Teresa: *De colonias a república: los orígenes de los Estados Unidos de América*, Madrid, Síntesis, 1995, pp. 57 y 58). Esta curiosa reconstrucción tenía claro sabor medievalizante, y se basaba en el establecimiento de una organización jerárquica de tal carácter, con señoríos, baronías y distritos. Su puesta en práctica quedó truncada por la propia evolución de los acontecimientos coloniales, de una realidad social renuente a tales atavismos. Lo que no deja de ser chocante para muchos historiadores es que Locke participara en tan inusual proyecto, cuando normalmente este autor ha sido tildado de “protoliberal”. La perspectiva, eso sí, puede adoptarse de manera más adecuada mediando un análisis pormenorizado del texto, pues en el mismo aparecen establecidos los poderes de una cámara de representación parlamentaria (punto septuagésimo primero) y la tolerancia religiosa para cultos no anglicanos (nonagésimo séptimo), además del reconocimiento del jurado (punto nº114). Ciertamente, aún no estamos ante un liberalismo como el decimonónico o, cuanto menos, uno dieciochesco. Pero es que quizás el retrato de Locke que nos llega quizás se halle distorsionado por la realidad liberal netamente americana que luego se desarrolló en la antiguas colonias inglesas y que, evidentemente en el siglo XVII aún no había aflorado, a excepción de alrededor de unos elementos que aparecen dispersos.

jurídica sumamente útil para reunir esfuerzos, y que disfrutaba del monopolio de explotar y comerciar determinadas regiones del continente⁷²², siéndole concedida derechos y privilegios a tal objeto, de manera similar a los casos en que se ocupaban de ello propietarios individuales y que acabo de examinar. Los asentamientos previstos por estas compañías tenían una mínima infraestructura para sus actividades (defensa, logística, administración), en las cuales trabajaban colonos en diversas situaciones jurídicas, los más con una condición muy similar a la de la servidumbre, al menos hasta que redimieran deudas o consiguieran solvencia suficiente como para hacerse con una porción accionarial u otra propiedad garantizada por la compañía.

Las sociedades tomaban como modelo organizativo el de las corporaciones urbanas, como por ejemplo, las de carácter gremial. Así que se basaban en alto grado en la participación en su gobierno por parte de una asamblea de accionistas. Pero es que, además, junto a este rasgo, poseían el de su pretensión de permanencia. Se trataba de que, al margen de posibles cambios en su accionariado o administración, la compañía continuara existiendo en el tiempo, y, para ello, era necesario tuviera una personalidad jurídica. De esta forma, podría intervenir en juicio, suscribir acuerdos privados, dar lugar a sucesiones, e incluso aprobar normas internas. Era una corporación.

Este mecanismo de la colonización por sociedad comenzó ya en el reinado de Jacobo I, a partir de dos grupos de capitalistas que se reunieron, siendo uno de ellos el de la Compañía de Londres y el otro la Compañía de Plymouth. Ambos formaron la Compañía de Virginia, siéndoles asignados dos territorios distintos, pero bajo una misma Carta⁷²³. Por tanto, cada una mantenía una cierta autonomía, pero se hallaban bajo un control común. Precisamente el territorio sobre el que se extendieron fue el primero que la Corona británica delimitó en Norteamérica. De hecho, su ámbito inicial era amplísimo, llegando incluso a terreno que hoy es canadiense; sirva esto de advertencia sobre el hecho de que las denominaciones geográficas aquí indicadas variaban de tanto en tanto y no coincidían necesariamente en sus fronteras con las que luego habría configuradas en vísperas de la revolución de 1776.

En cualquier caso, Virginia tuvo tres Cartas, las cuales siguieron una lenta pero destacable evolución⁷²⁴. La primera, la de 1606⁷²⁵, *no reconocía personalidad jurídica propia* a la Compañía, aunque sí los correspondientes derechos de explotación, e

⁷²² Resultó ser una fórmula de evidente éxito, tal y como habían demostrado las experiencias de la *Society of merchant adventurers*, que operaba desde el siglo XV, la Compañía de Moscovia de 1555, la *Eastland Company* de 1579, la *Levant Company* de 1581, la *East India Company* de 1600, la *London Company* (luego *Virginia Company*) y la *Plymouth Company* (luego *Plymouth Company for New England*) de 1606. Matteucci, *op. cit.*, pg. 175.

⁷²³ Vid. Commager, Eliot y Leuchtenburg, *op. cit.*, pg. 31.

⁷²⁴ Matteucci, *op. cit.*, pp. 176-77.

⁷²⁵ Vid. en <<http://www.yale.edu/lawweb/avalon/states/va01.htm>>.

incluso los de defensa⁷²⁶. Asimismo, hay que considerar, que en la Carta existían dos demarcaciones dentro del área virginiana: una perteneciente a “Hidalgos, Caballeros, Mercaderes y otros” (*Knights, Gentlemen, Merchants and others*), oriundos de Londres, y otra, que iba destinada a personas del mismo tipo, pero de las localidades inglesas de Bristol, Exeter, Plymouth y otras. A su vez, cada una de ellas tenía un Consejo al frente, para ocuparse de los asuntos locales que el rey Jacobo deseara y que así estableciese en Leyes, Ordenanzas o Instrucciones. Estarían formados por trece personas que ocuparían el puesto temporalmente y de acuerdo con el sistema de nombramiento que el monarca también indicase. Pero, sobre todo, por encima se hallaba un Consejo de Virginia único, establecido en Londres y también compuesto de trece miembros, designado por el rey y que dispondría del gobierno superior del territorio.

La Carta, por añadidura, y como va ser usual en estos documento y otros parecidos, contiene los nombres de varias de las personas a quienes se otorga la concesión, dejando abierta la posibilidad de que se incorporen otros “Hidalgos, Caballeros y Mercaderes”, así como los privilegios de explotación correspondiente y los límites territoriales en los que podrían instalar la colonias, sin olvidarse de encomendarles la propagación de la fe cristiana entre los salvajes, para “Gloria de su Divina Majestad”. Asimismo, queda establecido que una quinta parte de la plata y el oro extraídos ha de ser destinada a la Corona, así como un quinceavo del cobre, como único pago por el disfrute de un suelo que se detentará en *free and common socage* y no *in capite*.

La segunda Carta de Virginia⁷²⁷, la de 1609, es parcialmente una confirmación de la anterior, pero adopta unos cambios de gran importancia. Así, en primer término, admite que ha de existir una satisfacción por las penalidades sufridas, y dado la lejanía de la metrópoli. En segundo lugar, reconoce que la sociedad es “un ente o comunidad en perpetuo” (*“one Body or Commonalty perpetual”*). Y por último, permite que la asamblea de los accionistas, por mayoría⁷²⁸, elija y destituya a los miembros del Consejo colonial y a un Tesorero con amplios poderes, entre ellos, los de nombrar otros cargos que fueren necesarios en el territorio, *admitir a nuevos miembros o expulsarles* y aprobar normas.

⁷²⁶ “May also build and fortify within any the same, for their better Safeguard and Defence, according to their best Discretion”.

⁷²⁷ En Avalon Project, <<http://www.yale.edu/lawweb/avalon/states/va02.htm>>.

⁷²⁸ “By the Voice of the greater part of the said Company and Adventurers, in their Assembly for that Purpose”.

La tercera Carta de la Compañía de Virginia, la de 1611⁷²⁹, ratificaba una vez más, y al estilo de las antiguas cartas medievales, los privilegios y derechos de las anteriores, pero ahora reforzando la potestad de los socios, al exigir cuatro reuniones anuales del Consejo y la Asamblea. Los accionistas van tomando poder en la Compañía, pero va a faltar por definir qué ocurre con quienes residen y luchan por abrirse paso en la vida virginiana, es decir, qué papel van a conseguir los colonos. En principio, éstos no tenían por qué ser accionistas, y trabajaban para la Compañía, a menudo durante un tiempo determinado tras el cual redimían su deuda y obtenían algunas hectáreas. Trabajando muchos de ellos como sirvientes durante un tiempo, aspiraban a disponer después de tierras y conseguir así su independencia económica, por medio de distintas figuras jurídicas que facilitaban el cambio de situación y que implicaban incentivos para atraer mano de obra al Nuevo Continente⁷³⁰. Luego examinaré cómo estos sujetos van a cobrar importancia allí.

El tercer **mecanismo colonizador es de “las colonias de la Corona”**. Estos asentamientos dependían directamente del monarca inglés, quien los administraba. Se discutía cuál era el título por el cual detentaba tal potestad. Algunos sostenían que se basaba en su existencia como persona física, con lo cual los parlamentarios no intervenían en la administración colonial. Otros, que se fundamentaba en la persona jurídica del Estado, es decir, en el Parlamento. Los norteamericanos siempre defendieron la primera tesis, pues les permitía mantener su autonomía, con correlativas asambleas propias. La Revolución Gloriosa y el triunfo de los principios *whigs*, vinieron a oponerse, paradójicamente, y como luego analizaré, a las pretensiones de los colonos. En realidad, los Estuardo *en raras ocasiones crearon colonias directamente*, y la asunción de las que no lo fueran en tales resultaba excepcional. Pero ya con la *Commonwealth* hubo cambios de su status jurídico⁷³¹, pasando a finales del XVII en muchos supuestos a ser de titularidad real⁷³². En el momento de producirse la independencia, ocho de las trece colonias existentes pertenecían a la administración de Su Majestad⁷³³. Pero la reacción no consiguió

⁷²⁹ En <<http://www.yale.edu/lawweb/avalon/states/va03.htm>>. Id.

⁷³⁰ Morison, Commager y Leuchtenburg, pg. 34.

⁷³¹ El Parlamento, tras la decapitación de Carlos I, declaró que todas las colonias pertenecían al Estado inglés, a la república. Matteucci, *op. cit.*, pg. 181.

⁷³² *El Board of Trade*, instituido en 1696 para respaldar la política mercantilista, intentaría revocar diversas Cartas, dada la desobediencia de los colonos a seguir las normas parlamentarias de carácter comercial y sobre navegación (id.).

⁷³³ Vid. Matteucci, *op. cit.*, pp. 179 y 180. El monarca nombraba entonces numerosos Gobernadores, y se hallaba auxiliado para la administración colonial por el *Privy Council*. Este Consejo privado fue a partir de 1714, incluso, fue último tribunal de apelaciones para asuntos coloniales; vid. Steele, Ian K.: “Metropolitan administration of the colonies, 1696-1775”, en Greene, Jack P. y Pole, J.R. (eds.): *The Blackwell Encyclopedia of the American Revolution* (1ª ed.), Cambridge, Basil Blackwell, 1991 (reimp. de 1994), pp. 9 y 10.

barrer la experiencia del autogobierno democrático, como se verá. Los norteamericanos habían aprendido a autogobernarse y no iban a abandonar tal hábito tan fácilmente. De hecho, se les tuvo que continuar reconociendo una serie de derechos que habían adquirido a lo largo de décadas de expansión en Norteamérica.

De aquí en adelante voy a continuar una exposición no estrictamente cronológica, aunque adelanto que se ciñe al siglo XVII. He intentado, aunque restringiéndome a este período histórico, partir de dos nociones de carácter principal que se manejan en este trabajo, la del autogobierno y su organización institucional, de un lado, y la de unos derechos inalienables, de otro. Dado que la colonización fue un fenómeno disperso, nada homogéneo, y, como ya he señalado, con tradiciones e influencias diferentes, tanto de tipo social como religioso o jurídico, saltaré de unos lugares geográficos a otros y de específicas fechas a otras no muy lejanas, pero siempre abandonando una linealidad que perjudicaría la comprensión de los conceptos que aquí interesan.

II.1.1.2. El desarrollo del autogobierno en la colonización.

II.1.1.2.a) La desmercantilización de la concesión comercial: Virginia y Massachusetts

Habiendo explicado en el epígrafe anterior las formas coloniales inglesas en Norteamérica, cabe preguntarse ahora como se desarrollaron. Primeramente voy a referirme a la evolución de las compañías comerciales, partiendo del ejemplo virginiano, el más significativo y cuyos prolegómenos ya han sido expuestos.

Como ya he indicado, los accionistas mantuvieron desde un principio una pugna con por obtener un mayor control de la Compañía de Virginia frente a los directivos que nombraba la Corona, y la Carta de 1611 les permitió tomarlo en mayor medida. Paralelamente, los colonos habían llegado ya en gran número a aquellos parajes y se resentían de su escasa participación en el gobierno de la colonia, en donde se hacía sentir todo el poder de la Corona, que permitía sólo una iglesia de carácter anglicano. Así pues, estas personas que trabajaban para la Compañía van tomando consciencia de su situación, esa que les obliga a pasar penalidades en un contexto de peculiares características. Por lo que se sabe, y ya desde un principio, los recién llegados al Nuevo Mundo, fuesen caballeros arruinados, artesanos, ex presidiarios y antiguos vagabundos o simplemente proletarios, se mostraron díscolos con las reglas de las compañías, a las que se hallaban a menudo atados por deudas o relaciones jurídicas desfavorecedoras, más o menos cercanas a la servidumbre. El clima insano, las epidemias y el hambre contribuyeron a que no se mostraran mansos

ante los mandatos que directivos y accionistas que en su mayor parte no vivían allí les remitían desde Inglaterra⁷³⁴. El espíritu comercial de quienes no corrían riesgos se oponía así al de “frontera” de quienes sí debían asumirlos. Todo eso obligaría a realizar reformas en la organización política colonial, al exigir estos sujetos una mayor intervención en ella. Pero esto costó bastante esfuerzo, pues la metrópoli y la mayoría de los accionistas se preocupaban sólo de extraer la mayor riqueza posible de aquel suelo, sin demasiada consideración con unos hombres que, sin embargo, no dejaban de ser *freemen* ingleses en muchos casos. La presión ejercida sobre ellos queda ejemplificada por la ley marcial establecida en Virginia a partir de 1610, regulada por unos artículos que recortaban el movimiento y los derechos de sus pobladores y que perduraría ocho años⁷³⁵. Tras lo cual hubo, sin embargo, un cambio de situación.

Esta modificación provendría precisamente de diversos miembros de la Compañía de Virginia, encabezados por el parlamentario Edwin Sandys, proclive a la tolerancia en materia religiosa. Tales accionistas decidieron atraerse el respaldo de los colonos para sus planes de diversificación productiva de la colonia que en ese momento padecía una fuerte crisis económica. Así que consiguieron se ordenara convocar al gobernador una asamblea en Jamestown, que se celebró el 30 de julio de 1619, y a la que acudieron veintidós *freemen*, dos por distrito del territorio, todos ellos varones mayores de diecisiete años⁷³⁶. El empuje redundó en que desde ese momento quedaría articulada la implicación de los colonos en el funcionamiento de la sociedad, de manera que iban a conformar cuatro asambleas anuales tras conseguir patentes de la compañía para explotar sus propias parcelas. Se iban a organizar en plantaciones y ciudades, remitiendo delegados que propondrían regulaciones y leyes que, a su vez y para ser aprobadas, deberían contar con su adopción por el Consejo y el Gobernador de la Compañía⁷³⁷. Un paquete importante de esas normas apreció configurado como *Laws Enacted by the First General Assembly of Virginia*, aprobadas entre el 2 y el 4 de agosto de 1619⁷³⁸.

Se formó así un poder dual que reprodujo numerosos conflictos y que se vio además influido por los acontecimientos ingleses. De hecho, en 1624, Jacobo I revocó

⁷³⁴ Commager, Leuchtenburg y Morison, *op. cit.*, pp. 32 y 33.

⁷³⁵ *Articles, Lawes, and Orders, Divine, Politique, and Martiall for the Colony in Virginea: first established by Sir Thomas Gates Knight, Lieutenant Generall, the 24th of May 1610, exemplified and approved by the Right Honourable Sir Thomas West Knight, Lord Lawair, Lord Governor and Captaine Generall the 12th day of June 1610. Againe exemplified and enlarged by Sir Thomas Dale Knight, Marshall, and Deputie Governour, the 22nd of June, 1611.* Vid. Lutz, Donald S. (ed.): *Colonial Origins of the American Constitution: A Documentary History*, Indianapolis, Liberty Fund, 1998 (http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=694&chapter=102705&layout=html&Itemid=27).

⁷³⁶ Morison, Commager y Leuchtenburg, pg. 34; Matteucci, pp. 177, 194 y 195. Los colonos eran muy jóvenes, lo que explicaba no exigir una edad mayor.

⁷³⁷ Matteucci, *op. cit.*, pg. 195; y vid. Lutz, id.

⁷³⁸ Lutz, *op. cit.*, <http://oll.libertyfund.org/title/694/102708>.

la Carta de la Compañía. Pese a la escasez de datos al respecto, sabemos que los colonos siguieron celebrando asambleas, intentando originar un auténtico poder paralelo. En 1625 (Jacobo I fallece el 27 de marzo) se reunieron pidiendo se reconociera la *liberty of general assemblies*, que fue rechazada. Las riendas del territorio fueron tomadas por un Gobernador que tan sólo iba a escuchar asambleas (*House of Burgesses*) en función consultiva. Pero lo cierto es que los colonos seguirían reuniéndose por su cuenta, pretendiendo por añadidura probar legislación. Con lo cual Carlos I, principalmente preocupado por los asuntos de Inglaterra en esos instantes y por la necesidad de recaudar fondos para la Corona, decidió en 1638 ordenar al gobernador que convocara oficialmente la asamblea a fin de que obtuviera atribuciones en el área legislativa, si bien estableciendo que aquel y el consejo que designara tendrían poder de veto⁷³⁹.

Así pues, existe un fenómeno de “desmercantilización” de la vida colonizadora, en el supuesto analizado, *por presión social de los colonos*. Alejados de la metrópoli, enfrentados a duras condiciones de vida, entienden que sus esfuerzos no se ven compensados por una distribución adecuada del poder político. Alguien dirige sus destinos desde una distancia infinita. Alguien a quien apenas ven y que además obtiene el provecho económico de su trabajo.

Se va fraguando así una modificación radical en la colonización, que tuvo otra expresión relevante en Massachusetts, pero en este caso, por motivos religiosos. También se trata de una “desmercantilización”, pero de distinto origen.

La Carta de la Bahía Massachusetts de marzo de 1629⁷⁴⁰ fue concedida a un grupo puritano dirigido por John Winthrop, que dirigió a un grupo de pobladores al norte de la franja costera, en la zona conocida como Nueva Inglaterra. No se trataba exactamente de una Compañía. La Carta se concede a un “*Council*”, a cuyos miembros se les nombra expresamente y que proceden todos de Inglaterra. Pero no se habla de *adventurers*, sino propiamente de *freemen*, que van a ser quienes viajen precisamente al Nuevo Mundo y se instalen allí. Los órganos de autogobierno del colectivo van encontrarse, por tanto, y todos ellos, *en la propia colonia*. Estas son diferencias principales con respecto al establecimiento virginiano. Y ello aunque existieran otras concomitancias, como el de tratarse también de una concesión, reconocerse las inmunidades y privilegios ingleses y el derecho a explotar tierras y gozar de sus frutos, o mantener asimismo Massachusetts, en esto coincidiendo con la

⁷³⁹ Matteucci, *op. cit.*, pp. 197 y 198. También en Lutz, *op. cit.*, <http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=694&chapter=102705&layout=html&Itemid=27>.

⁷⁴⁰ En *Avalon Project*, <<http://www.yale.edu/lawweb/avalon/states/mass03.htm>>>.

Virginia de la segunda Carta, una personalidad jurídica propia por ser un “cuerpo colectivo y político, de hecho y denominación” (*body corporate and politique, in fact and name*). Pero la colonia más reciente no adoptaba la apariencia claramente mercantil de la más antigua.

Así, y como dato también distintivo, debe indicarse que la Carta de Massachusetts especificaba con claridad y casi reiteración sus mecanismos de gobierno, alejándose de cualquier control directo de la Corona. Su autonomía política era casi total. Preveía un Gobernador, un Vicegobernador y dieciocho Asistentes, seleccionados de manera anual por los pobladores. Estos se reunirían en cuatro asambleas (*General Courts*) dentro de tal período y en días específicos, a fin de admitir nuevos miembros, elaborar normas internas y elegir cargos públicos. Su convocatoria era obligada, desde el momento en que

el Gobernador, el Vicegobernador y siete o más de los antedichos asistentes de ese momento, se cuidarán de que se celebre durante el último jueves de San Hilario, Pascua, La Santísima Trinidad y San Miguel⁷⁴¹, una asamblea solemne y señalada de carácter general, de manera que serán reconocidas así oficialmente cuatro como las asambleas generales y solemnes de la Compañía⁷⁴².

Era posible que además estas reuniones fueran celebradas en otras fechas distintas de las previstas, a instancia del Gobernador o, en su caso, del Vicegobernador, a fin de que la asamblea aconsejara o respondiera consultas del ejecutivo⁷⁴³, que a su vez, compuesto por estos cargos y los asistentes, celebraría sus propias reuniones.

Las novedades de la Carta, por tanto, son dos. Por una parte, deja claro que *su sede legal va a encontrarse en Norteamérica*; y ello porque los miembros de esta

⁷⁴¹ Períodos de la celebración de vistas habitual en los tribunales ingleses y correspondientes respectivamente al que va del 15 de abril al 8 de mayo, del 11 al 31 de enero, del 22 de mayo al 12 de junio y del 2 al 25 de noviembre: *eastern term*, *hilary term*, *trinity term* y *michaelmas term*, en su forma ortográfica actualizada. *Webster Dictionary*: “term”, pg. 2358.

⁷⁴² “And that there shall or maie be held and kept by the Governor, or Deputie Governor of the said Company, and seaven or more of the said Assistants for the tyme being, vpon every last Wednesday in Hillary, Easter, Trinity, and Michas Termes respectivelie forever, one grease generall and solempe assemblie, which foure generall assemblies shalbe stiled and called the foure grease and generall Courts of the saide Company”.

⁷⁴³ “El Gobernador de la mencionada Compañía cuando sea el instante adecuado para ello, o bien si se halla Ausente por Enfermedad u otra causa, el Vicegobernador en su caso, tendrá Autoridad en todo momento para convocar Asamblea de la antedicha Compañía, y llamarla para el Consejo y Consulta sobre los Negocios y Asuntos de la misma” (“*the Governor of the saide Company for the tyme being, or in his Absence by Occasion of Sicknes or otherwise, the Deputie Governor for the tyme being, shall have Authoritie from tyme to tyme vpon all Occasions, to give order for the assembling of the saide Company, and calling them together to consult and advise of the Bussinesses and Affaires of the saide Company*”).

corporación estarán allí, dirigiendo la propia explotación de aquellas tierras y su administración gubernamental. La asamblea pasaba a quedar compuesta por los propios pobladores, que tienen consciencia de que conforman algo muy parecido a una república autónoma, dado que, y aquí está la segunda diferencia, el Rey carece de potestad directa sobre el desenvolvimiento de sus órganos⁷⁴⁴ y ellos, ya antes de la partida, habían suscrito el *Agreement of the Massachusetts Bay Company at Cambridge, England*, de 26 de agosto de 1629⁷⁴⁵.

Ambas tendencias se vieron a su vez impulsadas por un fenómeno que subyace al documento y que no parece en el caso virginiano. Se trata de que quienes emprenden la aventura americana aquí, se hallan ligados por idéntica fe religiosa.

Winthrop y los suyos era puritanos que deseaban crear una comunidad de vida con impronta de tal carácter; el beneficio económico no se halla en primer plano, al contrario que con los accionistas del supuesto antedicho: la intención es la de crear una "ciudad sobre la colina" (*city upon the hill*). De hecho, como bien señala Matteucci⁷⁴⁶, a fin de ensanchar el colectivo sus miembros emprendieron la cooptación de los siguientes de acuerdo con su pertenencia a idéntica iglesia, y no en consonancia con un posible reparto de accionarial. Eso sí, y como los fundadores, que se sentían designados por Dios para llevar a cabo la tarea de gobierno, no deseaban redistribuir su poder, concedieron a los recién llegados la posibilidad sólo de elegir algunos asistentes del ejecutivo. En 1634 se produjo el conflicto entre unos y otros y hubo que permitir que los últimos pobladores tuvieran mayor representación en la colonia.

II.1.1.2.b) Los pactos autónomos en Nueva Inglaterra

Es claro, como ya he podido analizar, que tanto la Corona como las Compañías y los propietarios de las concesiones de Maryland y luego Carolina intentaron desde el principio de la colonización tener controlado este experimento. El objetivo de tal esfuerzo conjunto entre iniciativa privada y protección del reino era el de enriquecer y aumentar el poderío inglés en todo el orbe conocido. Pero en el suelo norteamericano surge pronto un grupo social que asimismo irá haciéndose más numeroso con el paso del tiempo y que desea mayor margen de autonomía. Se trata de unos colonos que buscan mejores tierras y oportunidades y que en esa tarea no

⁷⁴⁴ Matteucci, pp. 177-78. Morison, Commager y Leuchtenburg, pp. 41 y 42.

⁷⁴⁵ Puede verse el documento en Lutz, *op. cit.*, sitio web <http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=694&chapter=102434&layout=html&Itemid=27>. El acuerdo es muy sencillo, a la manera del *Mayflower Compact* que luego analizaré, pero muestra la voluntad de constituirse como comunidad de los puritanos que lideraba John Winthrop.

⁷⁴⁶ Matteucci, *op. cit.*, pg. 198.

van a poder ser domeñados por los administradores de la metrópoli, bien se trate de particulares, bien de delegados del Trono. E incluso que intentarán zafarse de dirigentes vigilantes de la ortodoxia religiosa, como Winthrop y los suyos en Massachusetts. Los nuevos pobladores se trasladan de unos lugares a otros, en continuo movimiento, e incluso con el objeto de vivir en coherencia con sus ideas y modelos de organización política, y que han conocido a través de sus congregaciones, gremios y, por supuesto, de la experiencia política inglesa que he analizado en páginas anteriores. A menudo variarán su lugar de asentamiento por motivos de disidencia religiosa en el propio seno de la heterodoxia. Las Cartas y concesiones van a servir para dar cobertura a la inquietud de colonos ingleses deseosos de emprender una nueva vida.

Pronto estos mecanismos de “otorgamiento” irán siendo sustituidos por otros que parten de la *voluntad autónoma de los nuevos pobladores*, pasando así a prescindir de la dependencia de concesión alguna. El autogobierno ya se había experimentado en las corporaciones, guildas y ciudades de la Vieja Europa, así que esta herencia bien podía servir para tales propósitos. Y además coadyuvaba a su desarrollo la experiencia de las congregaciones religiosas puritanas a través de los *covenants*⁷⁴⁷, otro elemento que configuraría el paisaje político norteamericano desde un inicio. Nacen así pactos como el del Mayflower del 11 de noviembre de 1620, de *Agreement of the Massachusetts Bay Company* de 26 de agosto de 1629, el *Plymouth Agreement* de 15 de noviembre de 1636, el *Providence Agreement* de 20 de agosto de 1637, el *Government of Pocasset* de 7 de marzo de 1638, la *Combination of the Inhabitants upon the Piscataqua River for Government*, de 22 de octubre de 1641, etc.

El propósito de los colonos al suscribir todos estos acuerdos fue el de constituir cuerpos políticos (“*body politic*” es una expresión muy utilizada en ellos). Los firmantes se reconocían entre sí como miembros de los mismos y consentían en someterse a los mandatos que emanaran de los órganos que se constituyeran a los efectos de

⁷⁴⁷ Este tipo de acuerdo se realizaba ante una alta autoridad que era testigo del mismo y daba fe de su autenticidad. Presuponía un juramento. Al ser de raíz religiosa, el testigo inicial de este tipo de pacto va a ser Dios o, en su defecto, el monarca. Así, el *covenant* o acuerdo religioso para constituir una iglesia, basado lejanamente en los supuestos acuerdos de Dios con el pueblo hebreo, puede identificarse con la siguientes características: 1) Dios es tenido como testigo del acto, 2) se especifica el motivo del mismo (por ejemplo extender la evangelización o vivir de acuerdo con el mandato divino), 3) se crea la iglesia en cuestión, 4) el acuerdo lo suscriben una serie de personas que quieren agrupar a sus familias bajo esa comunidad eclesiástica, 5) quedan especificados los rasgos de tipo piadoso que deben tener las personas reunidas (venerar y honrar a Dios, tener una conversación decente y honrada, etc.). Lutz, Donald S.: *The Origins of American Constitutionalism*, Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1988, pg. 25.

En cambio, *compact* implicaba un trato entre varias personas, pero sin acudir de manera tan inmediata a esa presencia testifical de un tercero más alto; fue el término que utilizaron numerosos autores de la revolución inglesa, como John Milton, así como posteriormente John Locke en su *Segundo Tratado del Gobierno Civil*. Así que tanto esta denominación como las otras citadas, alude a pactos de carácter secularizado, frente al *covenant*, que lo es de carácter religioso. Los *Agreements levellers* tenían un componente claro que procedía de los *covenants* religiosos (vid., sobre las congregaciones, *supra*, pg. 57).

dirigir la convivencia social en el grupo. Y se establecían físicamente sobre ciertas tierras. Estos pactos fueron al principio de carácter rudimentario, no llegando a menudo al medio centenar de palabras y partiendo de grupos sin demasiadas discrepancias en su seno. Poseían asimismo un cierto rasgo de provisionalidad, pues con ellos lo que se intentaba era poner la primera piedra de unas colonias cuyo futuro resultaba incierto, tanto por los obstáculos climatológicos y naturales, como por la posible agresión de extraños o las medidas que el Rey decidiera luego tomar en su política colonial. De hecho, se constituían ante situaciones de vacío político determinado⁷⁴⁸. El sustrato común era, en todo caso, el de conformar una comunidad con cierto grado de autogobierno: tenían un carácter netamente *fundacional*⁷⁴⁹, pretendían crear comunidades con personalidad jurídica e instituciones propias, uniéndose al firmara los colonos un pacto a tal fin. Pese a sus denominaciones diversas (*compact*, *agreement*, *combination*, *government*), y diferentes grados de concreción, sus coincidencias eran claras.

El primer ejemplo del que se dispone sobre estos acuerdos en toda Norteamérica fue flexible y secularizado en apariencia. Sus firmantes, y de acuerdo con una narración ya convertida en leyenda, resultaron ser los Padres Peregrinos del *Mayflower*. Esta comunidad (*pilgrim fathers*) había surgido como grupo puritano separatista del anglicanismo que, habiendo huido a Leyden (Países Bajos) en 1609 y tras diez años de estancia allí, insatisfecho por las escasas oportunidades económicas y la continua amenaza de una invasión, decidió marchar a Norteamérica. Edwin Sandys obtuvo de la Compañía de Virginia entonces existente una concesión para los “peregrinos”, así como el apoyo financiero de algunos comerciantes ingleses que simpatizaron con su proyecto. Pero el barco en el que viajaron sufrió una tempestad y ancló fuera de las fronteras de la Compañía, en los alrededores de Cape Cod⁷⁵⁰. Encontrándose en condiciones muy difíciles, ante la incertidumbre y la desorientación, aquellos puritanos decidieron suscribir un acuerdo, que rezaba así:

⁷⁴⁸ Por ejemplo, en la *Combination of the Inhabitants upon the Piscataqua River for Government*, de 22 de octubre de 1641, ya citada, se decía: “[w]hereas sundry Mischiefs and Inconveniences have befallen us, and more and greater may, in regard of want of Civill Government, his gracious Majesty haveing settled no order for us, to our knowledge, we whose names are underwritten, being Inhabitants upon the River of Pascataqua have voluntarily agreed to combine ourselves into a body Politick...” (“[c]omo fuere que diversos Daños e Inconvenientes han caído sobre nosotros, y que en relación con el Gobierno Civil Su Majestad que sepamos no ha establecido mandato alguno, nosotros, cuyos nombres aparecen abajo, y siendo habitantes del Río de Pascataqua, hemos acordado voluntariamente reunirnos en un *Cuerpo Político*...”). Vid. <http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=694&chapter=102494&layout=html&Itemid=27>, en Lutz, 1998. Subrayado propio.

⁷⁴⁹ Las reglas de la convivencia de carácter más específico, por el contrario, se iban a concretar en lo que se puede denominar, siguiendo a Lutz, “*organic act*” (“decisión organizativa”, “orgánica”) y que analizaré luego, así que ahora voy a referirme a los acuerdos propiamente dichos.

⁷⁵⁰ Morison, Commager y Leuchtenburg, *op. cit.*, pg. 39. Matteucci, *op. cit.*, pp. 185 y 186.

En el Nombre de Dios, Amén. Nosotros, cuyos nombres están abajo escritos, sujetos leales de nuestro Soberano y Señor el Rey Jacobo, que lo es por la gracia de Dios de Gran Bretaña, Francia e Irlanda, así como Defensor de la Fe; habiendo emprendido para la Gloria de Dios, la extensión de la Fe Cristiana y el Honor de nuestro Rey y nuestra Patria, una Travesía al objeto de establecer la primera Colonia en áreas Norteñas de Virginia; realizamos ahora, de manera solemne y entre nosotros, en Presencia de Dios y unos con otros, Pacto y Asociación para reunirnos en un Cuerpo Civil y Político a fin mantener nuestro mejor orden y preservación y fomento de los fines antedichos; y en virtud de ello, de aquí en adelante aprobaremos, promulgaremos y constituiremos en concordancia justas y equitativas Leyes, Ordenanzas, Constituciones y Cargos, de tiempo en tiempo, según se considere más apropiado y conveniente para el bienestar general de la Colonia, y a cuyo fin prometemos toda la obediencia y sumisión debidas. Y para dar fe de todo ello, hemos estampado nuestras Firmas en Cabo Cod el once de Noviembre, durante el año dieciocho del Reinado de Nuestro Soberano y Señor Jaime, en Inglaterra, Francia e Irlanda, y el año cincuenta y cuatro en Escocia. Año del Señor 1620.⁷⁵¹

En este acuerdo pueden advertirse diversos rasgos típicos del *covenant* religioso: se realiza ante Dios, que resulta así testigo, se manifiesta la intención de extender la fe cristiana y suscriben el pacto varias personas⁷⁵². Pero estos rasgos propios de la formación de una congregación religiosa, resulta que se ligan todos a la fundación de un “cuerpo civil y político”. El pacto de 11 de noviembre de 1620 tiene la intención de originar una auténtica comunidad de tipo civil. Los hombres del Mayflower habían aceptado cierta “lógica mundana”⁷⁵³, máxime en las circunstancias en las que se encontraban, pues en aquellos momentos necesitaban la instauración de unos cargos y normativa que no podían referirse a asuntos meramente eclesiásticos. Y ya que habían desembarcado en parajes abandonados, y quedado solos ante el infinito continente, su primera reacción fue la de firmar un acuerdo que legitimara la autoridad entre ellos.

⁷⁵¹ “*In the Name of God, Amen. We whose Names are under-written, the Loyal Subjects of our dread Sovereign Lord King James, by the grace of God of Great Britain, France and Ireland, King, Defender of the Faith &c. Having undertaken for the glory of God, and advancement of the Christian Faith, and the Honour of our King and Countrey, a Voyage to plant the first Colony in the Northern parts of Virginia; Do by these Presents, solemnly and mutually, in the presence of God and one another, Covenant and Combine our selves together into a Civil Body Politick, for our better ordering and preservation, and furtherance of the ends aforesaid: and by virtue hereof do enact, constitute, and frame, such just and equal Laws, Ordinances, Acts, Constitutions and Officers, from time to time, as shall be thought most meet and convenient for the general good of the Colony; unto which we promise all due submission and obedience. In witness whereof we have hereunto subscribed our Names at Cape Cod, the eleventh of November, in the Reign of our Sovereign Lord King James, of England, France and Ireland the eighteenth, and of Scotland the fifty fourth, Anno Dom. 1620.*” Vid. Lutz, 1998, <http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=694&chapter=102425&layout=html&Itemid=27>. Subrayado propio.

⁷⁵² Como los *Watertown Covenant* de 30 de julio de 1630, *Enlarged Salem Covenant* de 1636, *Dedham Covenant* de 1636 y *Guilford Covenant* de 1639.

⁷⁵³ Matteuci, *op. cit.*, pg. 186.

¿Provenía la influencia de esta idea de una impronta exclusivamente religiosa? Sabemos que los fundamentos del contractualismo existían desde la Edad Media, a través del instrumento conciliar, las Cartas reales o el autogobierno de las corporaciones y gildas. Pero también que los Peregrinos descendían de aquellos separatistas ingleses del siglo XVI⁷⁵⁴, que habían querido formar parroquias propias y autorganizadas al margen de iglesia anglicana y que fundarían así las bases del congregacionalismo. De aquella tendencia religiosa eran los grupos huidos a principios del siglo XVII a Holanda y que allí prolongarían su costumbre de organizarse en comunidad y eligiendo sus ministros. Como han acumulado esta experiencia a lo largo de muchos años, en el Nuevo Mundo echarán mano de ella una vez más.

Hay, asimismo, un componente que identifica de manera peculiar al Pacto del Mayflower, y que probablemente también procede del mismo sustrato histórico: la inexistencia de una jerarquía importada rígida y previa a la travesía. Los primeros en desembarcar en el Nuevo Mundo eran grupos de pobladores que mantuvieron jerarquías sociales más o menos estrictas. Traslataban a aquellos territorios desigualdades de rango que provenían de la madre patria. Pero los hombres del Mayflower no lo hicieron, o no por lo menos en el mismo grado, tal y como se desprende el documento que acabo de citar aquí. El separatismo del XVI había calado desde un principio en gente humilde que habitaba Inglaterra y creado unos parámetros igualitarios que le alejaba de otros grupos protestantes, e incluso calvinistas. Este espíritu se mantuvo hasta su llegada a Norteamérica, en gran parte porque en la propia Holanda los Peregrinos no habían logrado integrarse del todo.

Por tanto, con el Pacto del Mayflower se produce una articulación colectiva del consentimiento que dará legitimidad al autogobierno del grupo. Cuarenta y un varones de orígenes sociales humildes accedían a conformar una asociación política. Evidentemente, con toda probabilidad esto sólo era posible en el caldo de cultivo de la congregación protestante, pero las circunstancias acentúan la necesidad que tiene unos de otros y refuerza su compromiso mutuo. Todavía no se trata de un acuerdo que especifique de manera concreta cuáles van a ser las instituciones de la comunidad y cómo han de elegirse, pero el soporte para legitimarlas queda ya establecido. Unos años antes de los *Agreements* niveladores, del *Instrument of Government* cromwelliano. Pero dentro de la misma tradición cultural y política, jurídica y religiosa.

⁷⁵⁴ Vid. *supra*, pg. 36.

Por tanto, los Padres Peregrinos van a ofrecer el primer modelo de acuerdo autónomo⁷⁵⁵ existente en Norteamérica. En él se obvia la nota eclesiástica típica del *covenant*, en parte porque probablemente ni siquiera resultaba necesario aludir a ella en el seno de un grupo tan claramente ligado por lazos religiosos previos, en parte por la influencia de cierta tradición secular. Pero esta última no iba a poder impedir que en Nueva Inglaterra naciera un fuerte impulso al objeto de identificar comunidad civil y eclesiástica⁷⁵⁶. Así que allí van a extenderse dos *tendencias* distintas de autogobierno, según giren o no en torno a exigir aquella doble condición de fiel de una determinada congregación y miembro de la comunidad civil.

Los que sí la requieran tendrán una impronta “regeneradora” puritana y excluyente, como la que surge ya con la fundación de Massachusetts⁷⁵⁷. Para pertenecer a esta colonia creada en 1629 era exigido un juramento de fidelidad que implicaba la pertenencia tanto al orden civil como eclesiástico de la misma⁷⁵⁸. Esto significó que numerosos colonos en desacuerdo, bien con los dogmas religiosos de la comunidad, bien con el propio sistema de pertenencia a ella, optaran por fundar otras nuevas en las cercanías. Del último grupo, el de quienes se oponían al mecanismo de incorporación en su esencia, partieron los experimentos más secularizadores. Se trataba de personas de intensa fe puritana, pero que precisamente por su forma de entenderla defendían la imposibilidad de exigir juramentos que implicaran tomar el nombre de Dios en vano. El separatista Roger Williams sería uno de ellos y más tarde los cuáqueros de William Penn, siendo todos ellos tolerantes con quienes profesaban distintos credos.

En el área, así, se reproducen tensiones parecidas a las que ya he analizado se vieron en la metrópoli entre los diferentes grupos puritanos. El hecho de que Nueva Inglaterra se escapara del radio de acción de Virginia, donde la iglesia oficial era la anglicana, no evitó el nacimiento de ortodoxias que quisieron mantener el control de localidades y plantaciones bajo el gobierno de los puros, elegidos, regenerados o santos. Para ello, sus representantes establecieron sistemas de organización que se basaban en la posibilidad de excluir de la comunidad a quienes no compartieran sus

⁷⁵⁵ Siempre dentro de unos límites. Recordemos que en el Pacto se hace voto de obediencia a la soberanía de Jacobo I.

⁷⁵⁶ Y que emanaba más directamente del *covenant* religioso, que aparece, por ejemplo, en los casos del *Salem Covenant* de 1629 (vid. el texto en Lutz, 1998, <http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=694&chapter=102432&layout=html&Itemid=27>) y el *Watertown Covenant* de 30 de julio de 1630 (ibid., <http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=694&chapter=102437&layout=html&Itemid=27>).

⁷⁵⁷ Commager, Leuchtenburg y Morison, *op. cit.*, pg. 41.

⁷⁵⁸ Vid. “*Introductory Essay*” en Lutz, 1998, <<http://oll.libertyfund.org/title/694/102324>>. Para un ejemplo, vid. *The Oath of a Freeman, or of a Man to Be Made Free* en ibid., <<http://oll.libertyfund.org/title/694/102442>>.

creencias. Así que muchos grupos puritanos insertaron en las colonias de Nueva Inglaterra ciertos mecanismos de autogobierno, pero también la posibilidad de castigar o expulsar de sus tierras a quienes se apartaran de los mandamientos eclesiásticos vigentes en sus confines. A tales intenciones se oponen tanto Williams, como Penn y otros.

Las dos tendencias citadas, una más favorable a la ortodoxia religiosa, y otra de carácter secularizado, quedaron más claramente identificadas en cuanto que ganaron complejidad los sistemas institucionalizados de organización, con documentos más elaborados y detalles de mayor envergadura.

De la colonia de Massachusetts van a separarse Providence (1636), Portsmouth y Newport (1639) o Warwich (1642)⁷⁵⁹, al formarse grupos disidentes que intentaban escapar de su rígida estructura. Providence, fundada en 1637 por Roger Williams, puede apreciarse la entidad del experimento del autogobierno bajo una dimensión más secularizada e influida por el Derecho privado. Sus colonos aprobaron un *Plantation Agreement* en 1640⁷⁶⁰, según el cual iban a elegir cinco magistrados para el gobierno genérico de la comunidad, se reconocía la libertad de conciencia (*liberty of conscience*), quedaban fijadas normas para el arbitraje en litigios entre particulares y los miembros de la colonia perseguirían a aquellos delincuentes cuya captura fuera demandada por sus vecinos agraviados⁷⁶¹. Los redactores del documento representaban al resto de la colonia.

Nosotros...[se cita a cuatro personas], habiendo sido elegidos mediando el consentimiento de nuestro apreciados amigos y vecinos, habitantes de esta localidad de Providence, y existiendo muchas diferencias en su seno, pero deseando aquéllos acogerse a nuestro arbitraje y obedecerlo, por confiarse en que procuraremos seria y cuidadosamente sopesar y considerar tales conflictos, y existir el deseo de traer unión y paz [...] hemos adoptado la forma más adecuada e igualitaria de conseguir esa paz entre nosotros⁷⁶².

⁷⁵⁹ Matteucci, *op. cit.*, pg. 187.

⁷⁶⁰ Existió previamente otro muy sencillo, el *Providence Agreement* de 1637, que decía únicamente lo que sigue: "[w]e whose names are hereunder, desirous to inhabit in the town of Providence, do promise to subject ourselves in active and passive obedience to all such orders or agreements as shall be made for the public good of the body in an orderly way, by the major consent of present inhabitants, masters of families, incorporated together in a Towne fellowship, and others whom they shall admit unto them only in civil things". Véase este escueto texto en Lutz, 1998, <http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=694&chapter=102574&layout=html&Itemid=27>.

⁷⁶¹ Vid. los puntos II y III del documento. Se encuentra en *Avalon Project*, <<http://www.yale.edu/lawweb/avalon/states/ri01.htm>>.

⁷⁶² "We, [...] being freely chosen by the consent of our loving friends and neighbors the Inhabitants of this Towne of Providence, having many differences amongst us, they being freely willing and also bound themselves to stand to our Arbitration in all differences amongst us to rest contented in our determination, being so entrusted we have seriously and carefully indeavoured to weigh and consider all those

Al final del documento se estamparon treinta y nueve firmas, señal de consentimiento otorgado por los *freemen* de Providence. Lo destacable del mismo es que se instituyen unas magistraturas de claro cuño civil, y las reminiscencias de los *covenants* religiosos parecen quedar un tanto acalladas por las de la tradición del Derecho mercantil, en concreto por sus figuras de la sociedad y el arbitraje. Los propietarios de la plantación⁷⁶³ reúnen su fuerza y parcelas, a la manera de una corporación, y mencionan expresamente la “libertad de conciencia”.

Sin embargo, hubo otras colonias en las que venció la tendencia contraria, menos secularizadora. New Haven fue fundada por el mercader londinense Theophilus Eaton y el reverendo John Davenport en 1638⁷⁶⁴. A esa plantación primigenia, que disponía de su propio *covenant*, el *Plantation Covenant at Quinnipiack*⁷⁶⁵, pronto se le unieron otras, así que hubo de realizarse un nuevo pacto de autogobierno, el *Fundamental Agreement* u *Original Constitution of New Haven*, de 4 de junio de 1639⁷⁶⁶. Su preámbulo dice que para ello se parte de

Todos los plantadores libres reunidos en una asamblea general, para debatir sobre la formación de un *gobierno civil* conforme a la voluntad divina, y la propuesta de personas que se consideren, en consonancia con el acuerdo unánime, los más adecuados para llevar adelante la tarea de fundar una *iglesia*⁷⁶⁷.

Aquí existen dos objetivos distintos pero convergentes para este pacto: uno es formar un gobierno de carácter civil, el otro, designar personas que se encarguen de una iglesia local que ha de establecerse de manera obligatoria. Ambas esferas se hallan unidas por su común sometimiento a la Palabra de Dios y no acaban de separarse:

differences, being desirous to bringe to unity and peace [...] we have gone the fairest and the equallest way to produce our peace”.

⁷⁶³ En sentido de granja. No se trataba de plantación con esclavos. *Plantation* y *colony* son en lengua inglesa, de hecho, sinónimos.

⁷⁶⁴ Commager, Leuchtenburg y Morison, *op. cit.*, pg. 43.

⁷⁶⁵ El *Plantation Covenant at Quinnipiack* puede examinarse en Lutz, 1998, <http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=694&chapter=102639&layout=html&Itemid=27>.

⁷⁶⁶ En *Avalon Project*, <<http://www.yale.edu/lawweb/avalon/states/ct01.htm>>. Matteucci, *op. cit.*, pg. 189.

⁷⁶⁷ “All the free planters assembled together in a general meeting, to consult about settling civil government, according to GOD, and the nomination of persons that might be found, by consent of all, fittest in all respects for the foundation work of a church”.

Primera Pregunta.- ¿Son las Escrituras una regla perfecta para la dirección y gobierno de todos en los deberes para con Dios y los hombres, tanto en las familias como en la república, como en los asuntos eclesiásticos? Esto fue ratificado por todos, sin disensión alguna, tal y como quedó expresado por votación a mano alzada.⁷⁶⁸

II.1.1.2.c) Federaciones

Pero lo que, en cualquier caso sí cabe señalar, es que todos los documentos de Nueva Inglaterra trataban de instaurar acuerdos en el seno de sus comunidades, permitiendo unos márgenes de autogobierno propios. Derivado de este sistema, por añadidura, se acogía un mecanismo asambleario que servía para instituir o elegir cargos públicos diversos, siempre sobre una base consensual de partida, voluntaria, y que iban a ser designados periódicamente, *bajo el principio mayoritario*⁷⁶⁹. La diferencia entre unas comunidades y otras era la dificultad para entrar a formar parte de las mismas, para ser un *freeman* con todos sus derechos y privilegios dentro de un territorio determinado.

Este modelo va extendiéndose en cadena a diferentes localidades vecinas, emanando del ya mencionado proceso secesionista. Pero en la primavera de 1638, y en el valle de Connecticut, tres poblaciones distintas (Windsor, Hartford y Weathersfield) se federarán, acordando someterse a una autoridad común⁷⁷⁰. De esta forma, aquel fenómeno de escisiones comienza a moderarse, formándose nuevas entidades políticas que influirían sin duda en el futuro constitucional norteamericano.

En concreto, las normas asumidas por los federados de Connecticut serán denominadas *Fundamental Orders*⁷⁷¹, e irán encabezadas de la siguiente forma:

Como fuere que ha placido a Dios Todopoderoso, a partir de la sabia disposición de su divina providencia, ordenar y disponer las cosas de manera que nosotros los habitantes de Windsor, Hartford y Weathersfield estemos conviviendo y habitando el río de Connecticut y las tierras

⁷⁶⁸ “Query I. *WHETHER the scriptures do hold forth a perfect rule for the direction and government of all men in all duties which they are to perform to GOD and men, as well in families and commonwealth, as in matters of the church ? This was assented unto by all, no man dissenting, as was expressed by holding up of hands*”. El reverendo Davenport planteaba las preguntas, que eran contestadas afirmativa o negativamente por los reunidos.

⁷⁶⁹ Como se acaba de advertir al final justo de la anterior sección, cuando se menciona el mecanismo de la mano alzada, o como señalan el *Providence Agreement* y el *Organization of Government of Rhode Island* (vid. *infra*, pp. 235 y 234, respectivamente).

⁷⁷⁰ Matteucci, *op. cit.*, pp. 188 y 189; Lutz, 1988, pg. 31.

⁷⁷¹ Vid. <http://www.constitution.org/bcp/fo_1639.htm>, web de la *Constitution Society*. Completadas luego por el *Connecticut Code of Laws* (1650), de un gran parecido con el *Body of Liberties*.

aledañas; y sabiendo que donde un pueblo se reúne la palabra de Dios exige, al objeto de mantener su paz y unión, que exista un Gobierno regulado y honesto establecido de acuerdo con Él, con el fin de disponer los asuntos del pueblo en todos los instantes en que la ocasión lo requiera; *nos asociamos y reunimos* para configurar un unico Estado Público o República; para así hacer que tanto nosotros como nuestros sucesores y quienes se nos adhieran de aquí en adelante, nos hallemos todos juntos en una *Asociación o Confederación*, al objeto de mantener y preservar la libertad y pureza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo al cual ahora rendimos culto, así como la disciplina de las Iglesias, en consonancia con la verdad de dicho Evangelio que está siendo practicada entre nosotros; y también para que nuestros asuntos civiles sean guiados y gobernados de acuerdo con Leyes, Reglas, Órdenes y Decretos que sean realizados, ordenados y decretados en coherencia con lo que sigue.⁷⁷²

A continuación, las *Fundamental Orders* desgranar una serie de preceptos que las han convertido en el *primer documento constitucional de la Historia norteamericana*, a juicio de numerosos historiadores, aunque con antecedentes en el *Pilgrim Code of Law* (1636)⁷⁷³. La estructura política que configura se basa en un cierto equilibrio entre las ciudades y la confederación, así como en determinado reparto de poderes y la elección periódica de todos sus cargos. La base del sistema se halla en los habitantes de las tres localidades mencionadas⁷⁷⁴, que eligen diputados

⁷⁷² “For as much as it hath pleased Almighty God by the wise disposition of his divine providence so to order and dispose of things that we the Inhabitants and Residents of Windsor, Hartford and Wethersfield are now cohabiting and dwelling in and upon the River of Connectecotte and the lands thereunto adjoining; and well knowing where a people are gathered together the word of God requires that to maintain the peace and union of such a people there should be an orderly and decent Government established according to God, to order and dispose of the affairs of the people at all seasons as occasion shall require; do therefore associate and conjoin ourselves to be as one Public State or Commonwealth; and do for ourselves and our successors and such as shall be adjoined to us at any time hereafter, enter into Combination and Confederation together, to maintain and preserve the liberty and purity of the Gospel of our Lord Jesus which we now profess, as also, the discipline of the Churches, which according to the truth of the said Gospel is now practiced amongst us; as also in our civil affairs to be guided and governed according to such Laws, Rules, Orders and Decrees as shall be made, ordered, and decreed as followeth”.

⁷⁷³ Lutz, 1988, pg. 42, al respecto. El *Pilgrim Code* abarcaba varias localidades de Plymouth, situadas asimismo en Nueva Inglaterra. Pero se ligaba a Cartas y patentes reales anteriores, así como al *Mayflower Compact*, perdiendo su entidad propia, de un lado; y de otro, sus disposiciones eran muy simples, refiriéndose tan sólo a la elección por los *freemen* de un gobernador y siete asistentes, que formarían un Consejo con poder ejecutivo. Las leyes serían aprobadas por la *General Court*, que contaría con la representación de los *freemen*, siguiendo el principio que regía en la metrópoli con respecto al Parlamento inglés: “ningún impuesto, ley u ordenanza será realizada o nos será impuesta sin consentimiento expresado de acuerdo con la libertades del reino de Inglaterra” (“*no imposition, law, or ordinance be made or imposed upon us by ourselves or others at present or to come but such as shall be made or imposed by consent, according to the free liberties of the state and kingdom of England and no otherwise*”). Vid. el texto en Lutz, 1998, <<http://oll.libertyfund.org/title/694/102474>>.

⁷⁷⁴ En los puntos I y VII del texto se habla de *admitted inhabitants* (“habitantes reconocidos”), categoría que no parece exactamente correlativa con la de *freemen*. Se trataría de personas que no dispondrían de todos los derechos de estos últimos, aunque hubieran sido admitidos como miembros de la colonia. Así, aunque el Punto I menciona que podrían elegir delegados para las *Courts*, el VII de las *Fundamental Orders* hace hincapie en que como Magistrados sólo podían resultar elegidos los *freemen*. Lutz (1988, pg.44) y Matteucci (*op. cit.*, pp. 193 y 194) no se ponen de acuerdo con el grado de intervención: para el primero, los *admitted inhabitants* participaban en las elecciones de primavera, para el segundo no. La

(*deputies*) presentes en dos Asambleas Generales (“*general assemblies or Courts*”) de carácter distinto. La primera, que ha de reunirse forzosamente el segundo jueves de abril, es la *Court of Election*. Como su nombre indica, sirve para seleccionar a quienes asumirán la dirección de la colonia, es decir, a un Gobernador y seis Magistrados. Estaba formada por cuatro diputados de cada localidad, elegidos en cada una de ellas por aquellos que tuvieran derecho al voto. Estos delegados nombraban a los antedichos cargos públicos por un año, transcurrido el cual ya nunca más podrían presentarse como candidatos los elegidos en anteriores ocasiones, excepto el Gobernador, y aunque a éste no se le podría reelegir de manera consecutiva⁷⁷⁵. Tenían todos “potestad de administrar justicia”⁷⁷⁶, entendiéndose la misma en un sentido amplio, de acuerdo con la inexistencia en la época de una separación tajante entre las funciones de gobierno.

La segunda asamblea era la *General Court* del segundo jueves de septiembre, formada por los ya citados representantes de las poblaciones y todos los cargos que ellos mismos elegían en la *Court of Election*. Las *General Courts* poseen el “*supreme power of Commonwealth*”⁷⁷⁷, pudiendo aprobar leyes o derogarlas, consentir recaudaciones, admitir nuevos *freemen* en la comunidad, disponer de las tierras de la colonia que aún no pertenecieran específicamente a los particulares o a las comunidades⁷⁷⁸, interrogar a cualquier persona, y en general, pudiendo entender de “cualquier otro asunto que relativo al bien de esta comunidad” (“*in any other matter that concerns the good of this commonwealth*”)⁷⁷⁹.

Si bien los delegados en las *Courts* provenían de cada una de las tres ciudades de Connecticut, a razón de cuatro por cada una, en el texto analizado se preveía la posibilidad de sumar nuevas poblaciones a la Confederación para que enviaran también a sus diputados, si bien siempre en proporción con sus habitantes. Los “diputados tendrán el poder del conjunto de la ciudad para dar sus votos y autorización a todas aquellas leyes y mandatos que sean para el bien público, y a los que estarán ligadas las susodichas localidades”⁷⁸⁰.

confusión resulta posible a causa de la ambigua redacción de las *Fundamental Orders*, difíciles de desentrañar por su falta de sistematización y ambigüedades, así como por hallarse escritas en un inglés vetusto, de traducción casi imposible.

⁷⁷⁵ Puntos I y IV. Por añadidura, conviene aclarar que el punto IV establecía que el Gobernador debía ser miembro de alguna “iglesia autorizada” (“*approved congregation*”). Esto suponía un cercenamiento parcial de la libertad religiosa, puesto que se hablaba de confesiones en plural, lo cual eximía de pertenecer a alguna en concreto, pero obligaba a formar parte de alguna congregación de las admitidas.

⁷⁷⁶ Punto I: “*Power to administer justice*”

⁷⁷⁷ Punto X.

⁷⁷⁸ Recordemos que había un vasto territorio aún sin habitar, e incluso que a menudo se compraban tierras a los indios.

⁷⁷⁹ Punto X.

⁷⁸⁰ “*Deputies shall have the power of the whole Town to give their votes and allowance to all such laws and orders as may be for the public good, and unto which the said Towns are to be bound*”. Punto VIII.

El mecanismo electoral se encuentra explicado principalmente en los puntos II y VI de las *Fundamental Orders*. El Gobernador que se encuentre en el cargo convocará las *Courts* y, respetando las fechas previas ya marcadas, con antelación de un mes al menos. Pero es que además podrá llamarlas cuando lo considere necesario, siempre que medien catorce días como mínimo, o bien, si la urgencia resulta extraordinaria, de forma inmediata, sometiendo esta perentoridad a la valoración de la asamblea entonces reunida⁷⁸¹. La elección de cargos que luego realicen los diputados en la *Court of Election* está regulada concretamente en el Punto II, donde se indica que se efectuará escribiendo los nombres en papeletas⁷⁸², y con respecto a todos los candidatos, bien se acepten, bien se rechacen.

Asimismo, si no se realizaran las convocatorias previstas de las *Courts*, la mayoría de los *freemen* de la colonia tendría potestad para ordenar a los *constables* de cada localidad que se inicie el proceso electoral correspondiente. Quienes luego se reúnan podrán nombrar un moderador⁷⁸³, cosa que en el supuesto ordinario no hacen, y que tal función corresponde al Gobernador, quien forma parte de la asambleas, junto con al menos cuatro de los Magistrados arriba citados⁷⁸⁴.

Más tarde va surgir, precisamente partiendo de New Haven, un nuevo experimento de confederación como el mencionado arriba de Connecticut. La ciudad de New Haven se unirá entre octubre y noviembre de 1643 con las aldeas de Guilford, Milford y Stanford⁷⁸⁵, bajo un mismo *Frame of Government*⁷⁸⁶.

Este documento comienza precisamente una vez más ligando, y a diferencia del anterior pacto federado, las dimensiones civil y eclesiástica:

Nadie será admitido como ciudadano libre de cualquiera de las colonias⁷⁸⁷ dentro de esta jurisdicción, sino aquellos colonos que sean miembros de alguna de las iglesias autorizadas de Nueva Inglaterra.⁷⁸⁸

⁷⁸¹ Punto VI.

⁷⁸² Que se mostrarían. La elección no sería secreta hasta finales del siglo XIX en Norteamérica y también resultó muy tardía en Inglaterra y otros países.

⁷⁸³ Punto VI.

⁷⁸⁴ Punto X.

⁷⁸⁵ Todas con experiencia de autogobierno, como bien indica Matteucci, *op. cit.*, pg. 188. Asimismo, se puede leer el *Guilford Covenant* del año 1639 en Lutz, 1998, <http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=694&chapter=102635&layout=html&Itemid=27>, y el *Government of Guilford*, de 1643, en *ibid.*, <http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=694&chapter=102646&layout=html&Itemid=27>.

⁷⁸⁶ Según Matteucci, *op. cit.*, pg. 192. O *New Haven Fundamentals*. Vid. Lutz, *op. cit.*, <http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=694&chapter=102648&layout=html&Itemid=27>. O *Government of New Haven Colony*, según la versión contenida en *Avalon Project*, <<http://www.yale.edu/lawweb/avalon/states/ct02.htm>>.

⁷⁸⁷ "Plantations".

Por lo demás, coincide este convenio con el anterior al establecer una serie de reglas de autogobierno. Todos estos *free burghesses* elegirán en cada ciudad o colonia a los tribunales (*courts of plantations*) que decidirán asuntos de pequeña entidad criminales o civiles, en este último caso por valor no superior a veinte libras⁷⁸⁹, existiendo la posibilidad de apelar a un tribunal de todo New Haven. Asimismo, podrán elegir entre ellos gobernador, vicegobernador, secretario, tesorero, jefe de policía u otros magistrados para el ámbito territorial del *Frame of Government*⁷⁹⁰. Estos magistrados elegidos para toda la provincia se reunirán dos veces al año en la localidad de New Haven y con el fin de formar una *Court of Magistrates* para resolver asuntos capitales de índole civil y penal y apelaciones⁷⁹¹. También habrá una *General Court* formada por el gobernador, el vicegobernador y todos los magistrados de la provincia, así como dos delegados de cada colonia, que se reunirá también dos veces al año y en New Haven, en concreto el primer miércoles de abril y el último de octubre⁷⁹². Tendrá como funciones vigilar la pureza de la práctica religiosa con el consejo de los ancianos de las iglesias, aprobar y derogar leyes, resolver apelaciones de los tribunales de carácter inferior y establecer impuestos⁷⁹³.

⁷⁸⁸ "None shall be admitted to be free burghesses in any of the plantations within this jurisdiction for the future, butt such planters as are members of some or other of the approved churches of New England".

⁷⁸⁹ "All such free burghesses shall have power in each town or plantation within this jurisdiction to choose fit and able men among themselves, being church members as before, to be the ordinary judges to hear and determine all inferior cases, whether civil or criminal, provided that no civil cause to be tried in any of these plantation courts in value exceed £20"; apartado 2.

⁷⁹⁰ Apartado III: "All such free burghesses through the whole jurisdiction shall have vote in the election of all magistrates, whether governor, deputy-governor, or other magistrates, with a treasurer, a secretary, and a marshal, etc., for the jurisdiction".

⁷⁹¹ "4. All the magistrates for the whole jurisdiction shall meet twice a year at New Haven, namely the Monday immediately before the sitting of the two fixed general courts hereafter mentioned, to keep a court called the Court of Magistrates for the trial of weighty and capital cases, whether civil or criminal, above those limited to the ordinary judges in the particular plantations; and to receive and try all appeals brought to them from the aforesaid plantation courts; and to call all the inhabitants, whether free burghesses, free planters, or others, to account for the breach of any laws established, and for other misdemeanors, and to censure them according to the quality of the offense".

⁷⁹² "5. Besides the plantation courts and court of magistrates, there shall be a general court for the jurisdiction which shall consist of the governor, deputy-governor, and all the magistrates within the jurisdiction, and two deputies for every plantation in the jurisdiction, which deputies shall from time to time be chosen against the approach of any such general court by the aforesaid free burghesses, and sent with due certificate to assist in the same. All which, both governor and deputy-governor, magistrates and deputies, shall have their vote in the said court. This general court shall always sit at New Haven, unless upon weighty occasion the general court see cause for a time to sit elsewhere, and shall assemble twice every year, namely the first Wednesday in April and the last Wednesday in October".

⁷⁹³ "Which general court shall, with all care and diligence, provide for the maintenance of the purity of religion and suppress the contrary, according to their best light from the word of God and all wholesome and sound advice which shall be given by the elders and churches in the jurisdiction so far as may concern their civil power to deal therein. Secondly, they shall have power to make and repeal laws and, while they are in force, to require execution of them in all the several plantations [...] Fifthly, to settle and levy rate and contributions upon all the several plantations for the public service of the jurisdiction. Sixthly, to hear and determine all causes, whether civil or criminal, which by appeal or complaint shall be orderly brought to them from any of the other courts or from any of the other plantations" (apartado 5).

Pero la experiencia confederativa no va a finalizar aquí. En 1643, Roger Williams arranca al Parlamento una autorización que permitía unirse a las ciudades de Providence, Portsmouth y Newport⁷⁹⁴, denominada *Patent for Providence Plantations*⁷⁹⁵, el 14 de marzo de 1643.

Asimismo, el 19 de mayo de 1643 comienza a funcionar la confederación denominada “Colonias Unidas de Nueva Inglaterra”, que formarán Massachusetts, Plymouth, Connecticut y New Haven. Queda completado de esta manera el proceso federativo de la zona, con Rhode Island provisionalmente aparte. En ese año, así, resulta finalizada una etapa en la que, tras cierto período de escisiones territoriales por motivos económicos, políticos y religiosos, se ha optado por impulsar una experiencia centrípeta. Este capítulo va a ser de gran importancia en Norteamérica, al marcar el camino que luego tomarán las trece colonias tras su independencia⁷⁹⁶.

II.1.1.2.d) Derechos en las colonias

Durante la colonización inicial en Norteamérica surgen inquietudes en torno cómo se va llevar a cabo ésta y las entidades organizativas que conllevará. Pero también acerca de cuál va a ser el grado de reconocimiento de unos derechos y cómo resultarán protegidos. Unos derechos, que, de otra parte, provenían de la tradición inglesa.

Como se ha podido comprobar, ya las Cartas reales reconocen una serie de libertades y privilegios a quienes van a explotar los nuevos territorios. En algunos casos, al propietario de la colonia, en estilo netamente feudal, similar al de la Carta Magna, quien se admite goza de una serie de

Derechos, Jurisdicciones, Privilegios, Prerrogativas, Regalías, Libertades, Inmunidades, y Derechos reales, y Franquicias temporales cualesquiera, tanto por Mar como por Tierra, en la Regiones, Islas, Islotes y Límites anteriormente mencionados.⁷⁹⁷

Pero en otros documentos, y esto muestra la consolidación de la época, se reconocieron los derechos y privilegios habituales en la metrópoli a *todos los colonos*,

⁷⁹⁴ Matteucci, *op. cit.*, pg. 192.

⁷⁹⁵ Vid. en *Avalon Project*, <<http://www.yale.edu/lawweb/avalon/states/ri03.htm>>. Uno de los comisionados que aparece encabezando el documento es Henry Vane.

⁷⁹⁶ Se sucedieron, a lo largo de los dos últimos tercios del siglo XVII, diversas fórmulas de este tipo entre diferentes localidades de Nueva Inglaterra. Vid. Lutz, 1988, pp. 31 y 32.

⁷⁹⁷ “*With all, and singular such, and as ample Rights, Jurisdictions, Privileges, Prerogatives, Royalties, Liberties, Immunities, and royal Rights, and temporal Franchises whatsoever, as well by Sea as by Land, within the Region, Islands, Islets, and Limits aforesaid*”.

como súbditos que eran de Su Majestad; así, en la Carta de la Compañía de Virginia de 1606⁷⁹⁸:

Declaramos ahora, tanto en relación con Nos, como con nuestros Herederos y Sucesores, que todas y cada una de las personas que sean súbditos nuestros y que habiten y residan en todas o alguna de las Colonias y Plantaciones mencionadas, y cada uno de sus hijos que hayan nacido dentro de los Límites y Distritos de las citadas Colonias y Plantaciones, tendrán y disfrutarán todas las Libertades, Exenciones e Inmunidades, allí y en cualquiera de nuestros otros Dominios, y a todos los Fines y Propósitos, como si hubieran vivido y nacido en los confines de nuestro Reino de Inglaterra o en cualquiera de alguno de los otros Dominios nuestros.⁷⁹⁹

Así que la tradición inglesa sobre los derechos de los ingleses se extenderá a los nuevos territorios desde el inicio de la colonización, entendiéndose que el monarca confirma a sus súbditos el disfrute de aquéllos. Pero los propios pobladores van a intentar que se reflejen de forma más específica, sobre todo ante la posible inseguridad jurídica que pudiera originar las conductas u omisiones de un poder de otro modo discrecional. Esta operación no va a implicar exactamente elaboración de *Bill of Rights* o instrumento parecido (recordemos que, de hecho, en Inglaterra aún no nacería hasta 1689). Se encontraba en realidad inserta en la más amplia de elaborar códigos que incluyeran, asimismo, obligaciones.

La primera iniciativa autónoma de los colonos⁸⁰⁰ al respecto fue la aprobación de las *Laws Enacted by the First General Assembly of Virginia*, entre el 2 y el 4 de agosto de 1619⁸⁰¹. Pero, fruto de una intensa preocupación puritana que también, aquí, como ya hemos visto ocurría en Nueva Inglaterra, influyó en los nuevos pobladores, se referían sólo a la punición de la ociosidad, la embriaguez, el juego y el lujo en la vestimenta. Así que en realidad debe aguardarse a la Asamblea General de los colonos de 1624, que aprobaría las *Laws and Orders Concluded by the Virginia General Assembly*⁸⁰², para percibir en un documento realizado por aquéllos una serie

⁷⁹⁸ Vid. *Avalon Project*, <<http://www.yale.edu/lawweb/avalon/states/va01.htm>>.

⁷⁹⁹ “Also we do, for Us, our Heirs, and Successors, *DECLARE*, by these Presents, that all and every the Persons being our Subjects, which shall dwell and inhabit within every or any of the said several Colonies and Plantations, and every of their children, which shall happen to be born within any of the Limits and Precincts of the said several Colonies and Plantations, shall HAVE and enjoy all Liberties, Franchises, and Immunities, within any of our other Dominions, to all Intents and Purposes, as if they had been abiding and born, within this our Realm of England, or any other of our said Dominions”.

⁸⁰⁰ Realmente, una experiencia especificadora de los derechos y su regulación fue, curiosamente, la aprobada por el gobernador de confianza real bajo la militarización de la colonia en 1611 y que se denominaba Leyes y Mandatos, de tipo Eclesiástico, Político y Marcial para la Colonia de Virginia (*Laws and Orders, Divine, Politique, and Martiall for the Colony in Virginea*). Vid. Lutz, 1998, <<http://oll.libertyfund.org/title/694/102705>>.

⁸⁰¹ Vid. *supra*, pp. 195-97, para completar el contexto histórico de esta colonia.

⁸⁰² Lutz, 1998, <<http://oll.libertyfund.org/title/694/102713>>.

de derechos que viniera a acompañar a la meramente alusiva a deberes morales o religiosos. Así, estas *Leyes* concretaban, ciertamente, algunos aspectos relativos al culto, pero también diversas normas que nos resultan familiares ya a estas alturas del presente trabajo. Por ejemplo, establecían que el Gobernador no podría imponer impuestos o contribuciones sobre la colonia sin que así lo permitiera la Asamblea General (apartado octavo), que ningún hombre podría ser llamado a cumplir servicio público alguno sin orden de aquella (noveno, si bien el de armas permitía la autorización del consejo), que no podría arrestarse a sus miembros durante sus sesiones (decimoprimer) y que se reunirían tribunales, incluso en apelación, para celebrar juicios (12º).

Por tanto, aquí tenemos ya por primera vez algunos derechos expresados de manera específica frente a las instituciones de gobierno norteamericanas. Y hubo otra de mayor relevancia aún.

Era el *Massachusetts Body of Liberties*, dividido en siete secciones. En esta colonia, y pese a la tendencia autoritaria de John Winthrop, los miembros de la *General Court* quisieron, ya desde 1635, codificar o reunir una serie de normas que limitaran el poder político allí⁸⁰³. Este es considerado propiamente el primer *bill of rights* posmedieval⁸⁰⁴. El texto comenzaba así:

La humanidad, la educación y la cristiandad exigen que todo hombre goce de unas libertades, inmunidades y privilegios con oportunidad y medida; el respeto hacia ellos ha supuesto siempre la paz y estabilidad de las iglesias y repúblicas y la privación de los mismos ha conducido a la interrupción, cuando no a la ruina de ambas.⁸⁰⁵

En este párrafo con el que se inicia el documento ya se advierte la tensión que va a seguir reproduciéndose a lo largo de todo el nacimiento de los Estados Unidos y que ha originado una larga polémica sobre su condición republicana o liberal⁸⁰⁶. Estas líneas vienen a expresar dos corrientes distintas en el Nuevo Mundo. Una, de raigambre comunitaria, relacionada con la tradición republicana, y otra que todavía se halla en mantillas pero que pronto será su rival imbatible: la tendencia liberal de los derechos y libertades. La primera, también ligada al autogobierno, parte de referencias

⁸⁰³ Matteucci, *op. cit.*, pg. 199.

⁸⁰⁴ El texto se encuentra en Lutz, 1998, <<http://oll.libertyfund.org/title/694/102485>>.

⁸⁰⁵ “*The free fruition of such liberties Immunities and priveledges as humanitie, Civilitie, and Christianitie call for as due to every man in his place and proportion; without impeachment and Infringement hath ever bene and ever will be the tranquillitie and Stabilitie of Churches and Commonwealths. And the deniall or deprivall thereof, the disturbance if not the ruine of both*”.

⁸⁰⁶ Para una síntesis muy completa sobre la polémica, y que recoge los principales autores y textos de ella misma, vid. Gibson, Alan: “Ancients, Moderns and Americans: the Republicanism-liberalism Debate Revisited”, *History of Political Thought*, Vol. XXI, nº 2, verano del 2000, pp. 201-265.

inscritas en la herencia puritana de la congregación. Es la que desea fundar un grupo que nos resulta ser exactamente una sociedad, sino un ente que reúna con mayor fuerza a sus miembros. La otra, más desapegada de esa “calidez”⁸⁰⁷, tan sólo pretende crear un ámbito definido por la ley y en el cual quienes intervengan desarrollen sus capacidades en competencia. La distinción, pues, estriba en fundar una comunidad que luego sirva para erigir un edificio más o menos útil para sus moradores, a fin de resguardarse de las inclemencias o los enemigos exteriores, o en dar lugar a otras que establezcan toda una iglesia, con un ligamen fraternal y de convivencia solidaria a la vez que exigente.

Sea como fuere, este *Body of Liberties* va desgranando un catálogo de preceptos amplio⁸⁰⁸, pero aquí, a diferencia de los anteriores que he mencionado, la premisa es referirse a derechos de los colonos y no tanto a obligaciones, que permanecen tan sólo latentes tras la correlatividad lógica de toda relación jurídica, no plasmados de manera directa. El apartado primero del *Body* dice:

1. No se quitará la vida a nadie, ni se le difamará en su honor o en su buen nombre, ni nadie será arrestado, recluso, desterrado, mutilado o castigado, ni hombre alguno privado de su mujer o de sus hijos, ni se le confiscarán bienes o propiedades, ni nadie se verá perjudicado por ley racial o conducta de la autoridad; salvo autorización de ley expresa del País, siempre que haya sido aprobada por una *General Court* y suficientemente dada a conocer públicamente, o, en caso de que la ley no prevea algún supuesto específico, si proviene de la interpretación que se haga de la palabra de Dios. Y en los casos de pena capital, o relativos a mutilaciones o destierro, en consonancia con la que la *General Court* juzgue que establece aquella palabra⁸⁰⁹.

Y, redundando en lo ya especificado antes por Leyes de Virginia:

5. Nadie se verá obligado a realizar trabajos o servicios públicos a no ser que la obligación se base en alguna decisión de la *General Court*, y disfrute así de una razonable aprobación⁸¹⁰.

⁸⁰⁷ Tomo esta noción de Rivera, Juan Antonio: *Menos utopía y más libertad*, Barcelona, Tusquets, 2005, “Moral fría y moral cálida”, pp. 80-108.

⁸⁰⁸ Incluyendo las relativas a las mujeres, los niños o los animales.

⁸⁰⁹ “1. No mans life shall be taken away, no mans honour or good name shall be stayned, no mans person shall be arested, restrayned, banished, dismembred, nor any wayes punished, no man shall be deprived of his wife or children, no mans goods or estaite shall be taken away from him, nor any way indammaged under Coulor of law, or Countenance of Authoritie, unlesse it be by vertue or equitie of some expresse law of the Country warranting the same, established by a generall Court and sufficiently published, or in case of the defect of a law in any partecular case by the word of god. And in Capitall cases, or in cases concerning dismembring or banishment, according to that word to be judged by the Generall Court.”

⁸¹⁰ “5. No man shall be compelled to any publique worke or service unlesse the presse be grounded upon some act of the generall Court, and have reasonable allowance therefore.”

También se menciona la prohibición de expropiación:

8. No se confiscarán para uso o servicio público cualesquiera bienes o ganado, a no ser por mandamiento basado en decisión del la General Court, ni en el que no medie el pago de un precio o renta razonables en consonancia con los índices de valoración que correspondan al País.⁸¹¹

Asimismo, se reconoce el derecho a obtener respuesta judicial las pretensiones que se crean son susceptibles de su amparo:

12. Todo hombre, sea residente o forastero, libre o no, tendrá libertad para dirigirse ante cualquier Tribunal, Consejo o Asamblea, ya sea verbalmente o por escrito, a fin de plantearle algún problema legal, oportuno y material, o para presentar alguna moción, demanda, petición, ley o comunicación que sean propios de su ámbito, siempre que sea hecho en momento adecuado, y con el orden y respeto debidos.⁸¹²

Hay, además, una proscripción de las penas excesivas:

33. Ninguna persona será arrestada o encarcelada como consecuencia de juicio o ejecución que persiga el pago de deuda o multa alguna, si la ley encontrara medios de satisfacción distintos a tal fin. En caso contrario, quedará arrestado y encarcelado en lugar donde los gastos corran de su cargo y no del demandante, hasta que satisfaga la condena; a no ser que el Tribunal que haya entendido del caso o alguno superior prevea otra cosa.⁸¹³

Así como se prohíbe la reiteración de proceso en el que se arriesgue una condena (*double jeopardy*):

⁸¹¹ “8. No mans Cattell or goods of what kinde soever shall be pressed or taken for any publique use or service, unlesse it be by warrant grounded upon some act of the generall Court, nor without such reasonable prices and hire as the ordinarie rates of the Countrie do afford.”

⁸¹² 12. Every man whether Inhabitant or fforreiner, free or not free shall have libertie to come to any publique Court, Councell, or Towne meeting, and either by speech or writeing to move any lawful, seasonable, and materiall question, or to present any necessary motion, complaint, petition, Bill or information, whereof that meeting hath proper cognizance, so it be done in convenient time, due order, and respective manner”.

⁸¹³ “33. No mans person shall be Arrested, or imprisoned upon execution or judgment for any debt or fine, if the law can finde competent meanes of satisfaction otherwise from his estaite, And if not his person may be arrested and imprisoned where he shall be kept at his owne charge, not the plaintife’s till satisfaction be made: unlesse the Court that had cognizance of the cause or some superior Court shall otherwise provide”. Adviértase la obligación de satisfacer los gastos de reclusión, típicos de la época (vid. *supra*, pg. 76).

42. Ningún hombre se someterá dos veces a la Justicia respecto a un idéntico Crimen, ofensa o Deuda.⁸¹⁴

Los métodos de tortura quedan también proscritos, junto con las penas inhumanas o crueles, exceptuando ciertas circunstancias:

45. Ningún hombre será forzado mediante Tortura a confesar Crimen alguno o a imputarlo a otra persona, a menos que sea en algún caso de pena Capital en el que resulte totalmente culpable por clara y suficiente evidencia; tras lo cual, si esto es así, y hubiera amplios indicios que existir otros conspiradores o cómplices, entonces podrá ser torturado, si bien tales Torturas no podrán ser Bárbaras e inhumanas.

46. En cuanto a castigos corporales, no autorizamos aquellos que resulten ser Bárbaros o crueles.⁸¹⁵

A todo ello se añade la libertad religiosa en un grado relevante, de acuerdo con lo expresado en once subapartados que dividen el número noventa y cinco ("Una Declaración de las Ilbertades que Nuestro Señor Jesucristo ha dado a las Iglesias"⁸¹⁶). De acuerdo con tales preceptos, todos los colonos se hallan obligados a pertenecer a una iglesia (subaptdo. 1), que tendrá las facultades de admitir o expulsar a quien desee, de acuerdo con sus reglas internas, y que además podrán especificar la forma de nombrar a sus ministros (subaptdos. 2-4). Se permiten, asimismo, las reuniones privadas para la práctica religiosa a todos los cristianos, salvo circunstancias justificadas y referentes al orden público (número de asistentes, tiempo, lugar, etc): subapartado 10. Por último, se prescribe la reunión de los dirigentes de las distintas confesiones una vez al mes para acordar puntos de acuerdo (subaptdo. 11).

Este cuerpo de derechos no pudo ser aprobado sin una resistencia fuerte que provenía de los magistrados dirigentes de Massachusetts⁸¹⁷. Así que, una vez más, se trataba de otra concesión arrancada a quienes detentaban el poder, que se veían así obligados a reducir su discrecionalidad, debiendo respetar una serie de derechos y

⁸¹⁴ "42. No man shall be twice sentenced by Civill Justice for one and the same Crime, offence, or Trespasse".

⁸¹⁵ "45. No man shall be forced by Torture to confesse any Crime against himselfe nor any other unlesse it be in some Capitall case where he is first fullie convicted by cleare and suffittient evidence to be guilty, After which if the cause be of that nature, That it is very apparent there be other conspiratours, or confederates with him, Then he may be tortured, yet not with such Tortures as be Barbarous and inhumane. 46. For bodilie punishments we allow amongst us none that are inhumane Barbarous or cruell".

⁸¹⁶ "A declaration of the Liberties the Lord Jesus hath given to the Churches".

⁸¹⁷ Matteucci, *op. cit.*, pp.199-200.

libertades. De hecho, el conflicto resultó tan intenso, que hubo que aclarar algunos extremos importantes:

96. Como quiera que sea que estos específicos ritos, libertades, Inmunidades, Autoridades y privilegios, tanto Civiles como Eclesiásticos⁸¹⁸, quedan expresados bajo la denominación y a título de Libertades, y no exactamente en forma de Leyes, o Estatutos, Autorizamos con pleno consentimiento el considerarlos leyes, rogando firmemente que todos aquellos que constituyan Autoridad así las consideren y no se equivoquen al imponer castigos proporcionales y merecidos imparcialmente que supongan su infracción o violación.⁸¹⁹

Es decir, quienes elaboran el Cuerpo de Libertades saben que no se están aprobando propiamente normas parlamentarias, pero tampoco quieren quedarse en una mera declaración sin valor real. Así que, además de establecer lo antedicho, añaden que:

97. También concedemos plenos poderes a cualquier persona a quien le sea en momento alguno denegados tales derechos o que se vea privado de los mismos, para entablar acciones a fin de defenderlos, Querella o acción contra todo hombre que actuara de aquella forma, y ante cualquier Tribunal u órgano judicial que tenga Competencia propia para entender de ello.⁸²⁰

Eso sí, el *Body of Liberties* nace con cierta provisionalidad, puesto que se prevé pueda ser revisado en los próximos tres años por la Asamblea de la colonia:

98. Finalmente, y dado que es nuestro deber y deseo no hacer de improviso nada que nos concierna, ordenamos que todos aquellos ritos y libertades, serán leídas de viva voz y sopesadas en deliberación por cada General Court que sea elegida dentro de los tres próximos años, de manera que si no fueran modificadas o abolidas permanecerán en vigor y ningún hombre las infringirá sin ser debidamente castigado.⁸²¹

⁸¹⁸ El *Body of Liberties* también se refería a estos asuntos, principalmente en el apartado 95, donde se permitían las reuniones particulares para la práctica de la religión con amplia libertad.

⁸¹⁹ "96. How so ever these above specified rites, freedoms, Immunities, Authorities and priveledges, both Civill and Ecclesiasticall are expressed onely under the name and title of Liberties, and not in the exact forme of Laws, or Statutes, yet we do with one consent fullie Authorise, and earnestly intreate all that are and shall be in Authoritie to consider them as laws, and not to faile to inflict condigne and proportionable punishments upon every man impartiallie, that shall infringe or violate any of them".

⁸²⁰ "97. Wee likewise give full power and libertie to any person that shall at any time be denied or deprived of any of them, to commence and prosecute their suite, Complaint, or action against any man that shall so doe, in any Court that hath proper Cognizance or judicature thereof".

⁸²¹ "98. Lastly because our dutie and desire is to do nothing suddainlie which fundamentally concerne us, we decree that these rites and liberties, shall be Audably read and deliberately weighed at ever Generall Court that shall be held, within three yeares next insueing, And such of them as shall not be altered or repealed they shall stand so ratified, That no man shall infringe them without due punishment".

En resumidas cuentas, pues, los colonos de Massachusetts van a conseguir se apruebe un conjunto de normas que reconocen expresamente ciertos derechos y que por añadidura crean mecanismos a fin de hacer que sean respetados. El Cuerpo de Libertades es un documento que pretende ser protección frente al poder político. El que sea entendido como ley que vincula a todos es resultado de la inserción del principio de legalidad como base sobre la que instalar unos derechos que resultan así amparados con el auxilio de la seguridad jurídica que ello proporciona. Su relevancia reside principalmente en el hecho de que, pese a las instituciones de autogobierno, los *freemen* lo han arrancado por no fiarse de la discrecionalidad de los magistrados principales cuya función es la de aplicar leyes⁸²². En este sentido, y pese a lo abigarrado de sus preceptos, que reúnen normas procedentes de la Carta Magna (la sección 1 deriva de sus puntos 39 y 40) e incluso bíblicas (sección 49), implicó un esfuerzo, liderado por el jurista Nathaniel Ward, a fin de sistematizar en un solo escrito los derechos y libertades de los colonos. Por eso su denominación de “Cuerpo”. Se distinguió así de otros instrumentos legales elaborados y que se referían a una mezcla indiferenciada de organización del gobierno con derechos, como el *Pilgrim Code of Laws* (1636)⁸²³, las *New Haven Fundamentals* (1643)⁸²⁴, las *Fundamentals of West New Jersey* (1681)⁸²⁵ o la *Charter of Liberties and Privileges of New York* (1683)⁸²⁶. En tales documentos y otros de la época, se advierte que a los colonos les resulta muy difícil separar derechos relacionados con el autogobierno, el sufragio activo y pasivo, con otros de carácter procesal o penal como los antedichos. De alguna manera, esos derechos y libertades de los *freeborn*, una vez más, se presuponen, y se hace hincapié en aquellos otros de tipo político que son los que podrían correr mayor peligro de perderse en el contexto de las tensiones políticas y sociales de las colonias, tal y como se ha podido apreciar. Los derechos tan sólo van a emanciparse en Norteamérica de la fuente de legitimidad política democrática muy tímidamente. Allí no se acaba de aceptar la escisión, siquiera conceptual, entre ambas áreas, pues mantienen una vinculación muy estrecha entre sí, tal y como demuestran los documentos de la época.

De cualquier manera, una separación formal se produce en un texto de capital importancia y sumamente parecido a nuestras actuales constituciones, tanto en contenido como en estructura. De hecho, es el que resulta más semejante de todos

⁸²² Matteucci, *op. cit.*, pp. 199 y 200.

⁸²³ En Lutz, 1998, <<http://oll.libertyfund.org/title/694/102474>>.

⁸²⁴ En *ibid.*, <<http://oll.libertyfund.org/title/694/102648>>.

⁸²⁵ En *ibid.*, <<http://oll.libertyfund.org/title/694/102673>>.

⁸²⁶ En *ibid.*, <<http://oll.libertyfund.org/title/694/102671>>.

los hasta ahora descritos. Su impulsor fue William Penn (1644-1718), quien, liderando un grupo de cuáqueros que habían marchado de Inglaterra, estableció la colonia de Pennsylvania en Norteamérica, tras obtener en 1681 una concesión territorial como propietario de Carlos II. El documento se ha conocido como *Frame of Government*,⁸²⁷ y fue aprobado el 5 de mayo de 1682. No puede olvidarse que es una creación llevada a cabo por un propietario colonial, aunque esto choque por lo avanzado de sus propuestas, que incluían unas instituciones elegidas por los *freemen* y una serie de derechos y libertades específicos. Precisamente a esto me refiero cuando indico la diferencia cualitativa del *Frame* en relación con otros instrumentos anteriores. Pues podemos dividirlo en dos porciones básicas (hay también un “prefacio”), según se deriva de su cabecera, en donde se especifica cuál va a ser su contenido y quiénes lo elaboran:

La regulación de gobierno de la provincia de Pensilvania, en América: junto con ciertas leyes que gozan de asentimiento en Inglaterra, por el Gobernador y varios hombres libres de la mencionada provincia. A fin de que sea asimismo explicada y ratifica por el primer Consejo provincial, si a ello hubiere lugar.⁸²⁸

Así que en este texto existirán dos elementos principales: uno que resulta ser propiamente el que señala cuáles son las instituciones del autogobierno colonial y como van a ser seleccionados los hombres que las ocupen (el “*Frame of Government*” propiamente dicho), y, de otro lado, uno distinto en donde se van a enumerar varios derechos cuyos titulares son todos los hombres libres de la colonia (“*charter of liberties*”⁸²⁹). A pesar de ello, el documento no diferencia, una vez más libertad positiva y negativa, puesto que ambas se entienden como dimensiones inescindibles, al ser reunidos todos los derechos, tanto los de participación política como los demás, en la segunda parte del *Frame*.

Allí se dice:

⁸²⁷ Así, Matteucci, *op. cit.*, pg. 201. Pero Lutz lo denomina *Charter of Liberties and Frame of Government of the Province of Pennsylvania in America*, en su transcripción (vid. Lutz, 1998, *Charter of Liberties and Frame of Government of the Province of Pennsylvania in America*, <http://oll.libertyfund.org/title/694/102678>). El encabezamiento de su redacción es el de “*frame and laws of this government*”. Id.

⁸²⁸ “*The frame of the government of the province of Pensilvania, in America: together with certain laws agreed upon in England, by the Governor and divers freemen of the aforesaid province. To be further explained and confirmed there, by the first provincial Council that shall be held, if they see meet*”.

⁸²⁹ “*Laws agreed upon in England*”.

Yo, el citado William Penn, he declarado, concedido, y confirmado, y mediante el presente acto, también me obligo a mí mismo y a mis herederos y legatarios, declarando, concediendo y confirmando a todos los hombre libres, colonos e inversores de o en la antedicha provincia, las siguientes libertades, privilegios y propiedades, *a fin de que pertenezcan y sean disfrutadas por los hombres libres, colonos y habitantes de la mencionada provincia de Pensilvania para siempre*⁸³⁰.

Después se hace mención de las cualificaciones pedidas a los colonos a fin de que ejerciten su derecho a la representación, que son más bien pocas, viniendo a considerar que había un coste bajo para la adquisición de terrenos:

ii. Que todo habitante de la citada provincia que sea adquirente de un mínimo de cien acres, sus herederos y legatarios, y toda persona que haya pagado su pasaje y obtenido cien acres, por valor de diez peniques cada uno, y cultivado diez de ellos, así como todo aquél que habiendo sido sirviente o criado, sea ahora libre de tal servicio y haya conseguido cincuenta acres y cultivado veinte de ellos, y asimismo todo habitante, artesano u otro residente en la mencionada provincia, que pague impuestos al gobierno, será considerado y tratado como hombre libre de la antedicha provincia; y tales personas podrán elegir y ser elegidas para la representación popular en un Consejo provincial, o Asamblea General, de la mencionada provincia⁸³¹.

Asimismo, quedan prohibidos los impuestos para los que no medie ley libremente consentida:

iv. Ningún dinero o bien será confiscado de o pagado por persona alguna de esta provincia mediante impuesto, aduana o contribución, sino mediando ley que se aprobara para tal propósito.⁸³²

⁸³⁰ "I, the said William Penn have declared, granted, and confirmed, and by these presents, for me, my heirs and assigns, do declare, grant, and confirm unto all the freemen, planters and adventurers of, in and to the said province, these liberties, franchise, and properties, to be held, enjoyed and kept by the freemen, planters, and inhabitants of the said province of Pennsylvania for ever".

⁸³¹ "ii. That every inhabitant in the said province, that is or shall be, a purchaser of one hundred acres of land, or upwards, his heirs and assigns, and every persons who shall have paid his passage, and taken up one hundred acres of land, at one penny an acre, and have cultivated ten acres threof, and every person, that hath been a servant, or bondsman, and is free by his service, that shall have taken up his fifty acres of land, and cultivated twenty thereof, and every inhabitant, artificer, or other resident in the said province, that pays scot and lot to the government; shall be deemed and accounted a freeman of the said province: and every such person shall, and may, be capable of electing, or being elected, representatives of the people, in provincial Council, or General Assembly, in the said province".

⁸³² "v. That no money or goods shall be raised upon, or paid by, any of the people of this province by way of public tax, custom or contribution, but by a law, for that purpose made".

La justicia ha de impartirse a favor de todos, y no puede denegarse su administración:

v. Todos los tribunales permanecerán abiertos y la justicia no será vendida, denegada o retrasada.⁸³³

Resultando que esa administración de justicia debe funcionar de manera comprensible:

vii. Que todas las demandas, procesos y documentos en los tribunales serán breves, en inglés, y en estilo ordinario y llano, para que puedan ser así comprendidos y la justicia administrada con rapidez.⁸³⁴

También se reconoce el tradicional derecho a ser juzgado por otros *freemen* de la vecindad (si bien para casos de envergadura se prevé un número mayor):

viii. Que de todos los procesos entenderán doce hombres, en la medida en que se pueda, pares o iguales, siempre de la vecindad y varones.⁸³⁵

No se tolerarán las costas procesales excesivas, encargándose los órganos de la colonia de que no se produzca tal extremo:

ix. Que en todos los supuestos, cualesquiera costas deberán ser moderadas, así como establecidas por el Consejo provincial y la Asamblea General y expuestas en el Tribunal respectivo.⁸³⁶

Las penas pecuniarias tampoco podrán ser desmesuradas:

xviii. Todas las multas serán moderadas y dejarán a salvo posesiones indispensables, mercancías y salarios.⁸³⁷

⁸³³ “v. That all courts shall be open, and justice shall neither be sold, denied or delayed”.

⁸³⁴ “vii. That all pleadings, processes and records in courts, shall be short, and in English, and in an ordinary and plain character, that they may be understood, and justice speedily administered”.

⁸³⁵ “viii. That all trials shall be by twelve men, and as near as may be, peers or equals, and of the neighborhood, and men without just exception”

⁸³⁶ “ix. That all fees in all cases shall be moderate, and settled by the provincial Council, and General Assembly, and be hung up in a table in every respective court;”

⁸³⁷ “xviii. That all fines shall be moderate, and saving men’s *contenements*, merchandize, or wainage. Traduzco “*contenements*” como “posesiones indispensables” (vid., como orientación al respecto, <<http://en.wikipedia.org/wiki/Contentment>>). Se trata de aquellos bienes que van intrínsecamente unidos al disfrute de la habitación (*dwelling*), de la morada propia. En la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil

La prisión debe dar lugar a lo que hoy denominamos “reinserción social”:

x. Que todas las prisiones serán también talleres para felones, vagabundos, vagos y ociosos; existiendo una de ellas en cada condado.⁸³⁸

Los sospechosos van a quedar en libertad provisional si no son acusados de graves delitos y ofrecen fianza suficiente:

xi. Que todos los presos quedarán en libertad si se recibiera fianza suficiente, a menos que se trate de ofensas castigadas con pena capital y donde la prueba sea evidente o alta la presunción en contra del reo.⁸³⁹

Asimismo, quien quede preso no se verá obligado a pagar los costes de su manutención y alojamiento, ni a sus carceleros:

xiii. Que todos los presos se hallarán exentos de pagar honorarios, manutención o alojamiento.⁸⁴⁰

Esta Carta de Libertades contenida en el *Frame of Government*, pues, resulta muy avanzada para la época y recoge lo mejor de la herencia radical inglesa. Tal es así, que sus coincidencias con el programa *leveller* son muy notables. El documento se halla a su vez lejos del *Body of Liberties* de Massachusetts, de fuerte impronta religiosa y que suponía, pese al esfuerzo realizado en su redacción, un conjunto de preceptos inarticulado y que mezclaba la disciplina eclesiástica con la civil, postergando una libertad religiosa más plena. Penn, y en general los cuáqueros, llamaron la atención de hombres como Voltaire en el siglo posterior⁸⁴¹, puesto que suponían un cambio drástico en aquella era. De hecho, resultaban extraños a la tradición que sin embargo se había anclado en parajes cercanos, con su asfixiante

española de 1.881 había un precepto de similar contenido: “tampoco se embargará nunca el lecho cotidiano del deudor, cónyuge o hijos, las ropas de preciso uso de los mismos, el mobiliario, libros o instrumentos indispensables para el ejercicio de la profesión, arte y oficio a que aquél pueda estar dedicado legalmente”.

⁸³⁸ “x. *That all prisons shall be work-houses, for felons, vagrants, and loose and idle persons; whereof one shall be in every county*”.

⁸³⁹ “xi. *That all prisoners shall be bailable by sufficient sureties, unless for capital offences, where the proof is evident, or the presumption great*”.

⁸⁴⁰ xiii. *That all prisons shall be free, as to fees, food, and lodging*.

⁸⁴¹ Vid. la Cuarta Carta de sus *Lettres Philosophiques* (1734). Hay trad. cast. de Fernando Savater, *Cartas Filosóficas* (introd. y notas del propio traductor), Madrid, Alianza, 1988.

puritanismo. Pensilvania es muestra ejemplar de la Ilustración norteamericana, caracterizada por el racionalismo y preocupaciones similares a las de su coetánea francesa o inglesa, europea en general, del otro lado del Atlántico⁸⁴². En la parte primera del texto analizado, anterior a la Carta propiamente dicha y dedicada en realidad a la estructura política de la colonia, se hace una alusión también a esta perspectiva:

xii. Que el Gobernador y el Consejo provincial erigirán y ordenaran el establecimiento de escuela públicas, y animarán a los autores de ciencias útiles e invenciones encomiables en la antedicha provincia.⁸⁴³

Se establece, pues, una política pública a fin de incentivar la indagación sobre descubrimientos científicos e innovación tecnológica. La idea de progreso consustancial a la Ilustración se halla aquí presente de forma diáfana. Pero al hilo precisamente de este ejemplo se advierten las peculiaridades de un modelo que, de un lado es favorable a las luces, pero que por otra parte posee una fuerte raíz comunitaria, republicana. Así, resulta que la regulación de las patentes como propiedad privada sólo alcanzó desarrollo real a partir del siglo XVIII. Con lo cual, si bien se entiende que quienes inventan y realizan hallazgos colaboran para el avance de la comunidad en que viven, las leyes propiamente no les reconocen de forma sistemática⁸⁴⁴ una *propiedad* o derechos de explotación individuales sobre sus invenciones. Existe cierto igualitarismo en el *Frame of Government* de Pensilvania. El precepto arriba indicado acerca de las posesiones requeridas para ser reconocido como *freeman*, ya muestra cierta preocupación de tal índole⁸⁴⁵, pero es que la Carta de la Regulación también contiene otra norma que se orienta de forma similar:

xxviii. Que todos los niños en esta provincia que cuenten con doce años de edad aprenderán alguna habilidad o dedicación útil, a los fines de no resultar desocupados, y a fin de que el pobre pueda trabajar para vivir y el rico empobrezca si no desea hacerlo.⁸⁴⁶

⁸⁴² Muchos pasajes expuestos, como resulta evidente, son muy parecidos a otros de Beccaria en su *De los Delitos y las Penas*, por ejemplo.

⁸⁴³ xii. *That the Governor and provincial Council, shall erect and order all public schools, and encourage and reward the authors of useful sciences and laudable inventions in the said province.*

⁸⁴⁴ Aunque sí para casos específicos. Vid. <http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_patent_law>.

⁸⁴⁵ Vid. *supra*, pg. 224.

⁸⁴⁶ “xxviii. *That all children, within this province, of the age of twelve years, shall be taught some useful trade or skill, to the end none may be idle, but the poor may work to live, and the rich, if they become poor may not want*”.

Este precepto nos recuerda al papel de relevancia que los *levellers* concedían a la educación y luego también los ilustrados dieciochescos, pero tiene el añadido de ese igualitarismo que hace hincapié, no ya sólo en la posible mejora del pobre a través de su esfuerzo, sino además en la pérdida de posición sufrida por el rico en caso de que quiera vivir simplemente de las rentas y no aportar nada a la comunidad. El sistema educativo, erigido tal y como prevé el precepto xii anterior de la Carta, se convierte así en el instrumento para la criba del mérito. Estamos ya muy lejos del sistema estamental europeo y en medio de premisas republicanas, parcialmente mezcladas con la influencia liberal que comienza a abrirse camino en esa época.

Esta idea del autogobierno, pero con un desarrollo avanzado sobre la concepción de los derechos personales, es la que engarza el modelo político de Pensilvania, de manera más nítida que en el resto de las colonias norteamericanas, con aquél defendido por los niveladores. Y que lo aleja parcialmente del ilustrado posterior, que no reconocía con tal energía la posibilidad de autogobierno popular, es decir, unos derechos también, pero aquí incluyendo los derechos políticos en el seno de una democracia de amplia base social. El radicalismo religioso de los cuáqueros y su generosa concepción de la libertad en este terreno, conecta con los *levellers*, no siendo de extrañar que Lilburne sepamos se convirtiera al cuaquerismo poco después de retirarse de la arena política, precisamente tras numerosos procesos bajo los que, en una praxis de confrontación, asumió la defensa directa de los derechos y libertades que consideraba innatos de los ingleses. Tal y como William Penn también se había enfrentado por la libertad religiosa a los tribunales ingleses⁸⁴⁷. Los defensores de la república democrática y sus libertades optaron por el camino pacífico de la resistencia paciente. Ganaron esas posiciones que no habían obtenido en el Viejo Mundo, instalándose en las colonias de Norteamérica y de manera aún más clara en Pensilvania. En el siglo XVIII, tuvieron continuadores como Thomas Paine.

II.1.1.2.e) La organización política del autogobierno

Lutz señala⁸⁴⁸ que se puede realizar una división analítica entre los diferentes documentos coloniales. Así, nos encontraríamos, fundamentalmente, con cuatro elementos:

- 1) Se afirma la fundación de una comunidad

⁸⁴⁷ Lutz, 1988, pp. 61 y 69.

⁸⁴⁸ Ibid., pg. 16.

- 2) Este grupo define por sí mismo valores y metas a compartir a través de distintas generaciones
- 3) Se funda un gobierno para el grupo
- 4) Se especifica esa forma de gobierno, a través de instituciones de decisión colectiva

Hablar aquí de ejemplos puros de alguna de estas posibilidades resulta más bien difícil, con lo cual existen modelos con mayores o menores dosis de los mencionados ingredientes, superpuestos con mayor abundancia en las etapas más avanzadas de la colonización.

Así, que en primer término, cabe decir que no todos los documentos que al principio suponían una conformación autónoma de las comunidades de carácter colonial, hicieron referencia a instituciones específicas, sino que simplemente eran base para fundar un grupo que acordaba seguir un modo de vida bajo determinados principios. Sus normas a menudo eran vagas, sin determinar en demasía. Este era el caso más frecuente en los *covenants* estrictamente religiosos, como los de *Watertown* (1630)⁸⁴⁹, el *Enlarged de Salem*⁸⁵⁰ y el de *Dedham* (1636)⁸⁵¹, así como el de *Guilford* (1639)⁸⁵². También en los del *Mayflower Compact* (1620) o el *Providence Agreement* (1637)⁸⁵³. Todos ellos se limitaron a identificar grupos que se fundaban, sin engendrar órganos propios de autogobierno de manera específica. Tal encomienda se abandonaba a menudo a otro momento posterior, más o menos inmediato, y a veces a la espera de un mayor grado de acuerdo entre los habitantes de la colonia. Pero a medida que los colonos se van instalando en las nuevas tierras, la necesidad de establecer reglas sobre la organización política de aquellos lugares se refuerza y nacen así documentos que contienen más detalles: las *Fundamental Orders* de Connecticut (1638), las *Fundamental Orders* u *Original Constitution of New Haven* (1639), el *Plantation Agreement* de Providence en 1640, el *Pilgrim Code of Law* (1636) o el *Frame of Government of New Haven* (1643).

El autogobierno, aunque sometido siempre, en grado mayor o menor, a la supervisión de un propietario, se fue conformando, así, y tal y como se ha podido apreciar en páginas anteriores, con instituciones que gozaran de una participación más o menos amplia, dependiendo del específico lugar y su normativa. Los órganos habituales fueron un gobernador, jefe de la administración de la provincia, un consejo

⁸⁴⁹ El texto se halla en Lutz, 1998, <<http://oll.libertyfund.org/title/694/102437>>.

⁸⁵⁰ En *ibid.*, <<http://oll.libertyfund.org/title/694/102469>>.

⁸⁵¹ En *ibid.*, <<http://oll.libertyfund.org/title/694/102483>>.

⁸⁵² En *ibid.*, <<http://oll.libertyfund.org/title/694/102635>>.

⁸⁵³ En *ibid.*, <<http://oll.libertyfund.org/title/694/102574>>.

que venía a asesorarle y una asamblea que representaba a los colonos⁸⁵⁴, todos ellos bajo diferentes denominaciones y combinaciones, ya que a veces alguno de estos órganos no existía, y en ciertos casos, incluso, la simplificación del autogobierno fue máxima⁸⁵⁵.

Acerca de la organización judicial, no resulta posible concretar su plena identidad propia, pues en realidad esta función se solapaba con la legislativa y la ejecutiva muy a menudo. La génesis de este solapamiento podría partir así de una idea primigenia que aparece reflejada en el *Plantation Agreement of Providence* de 1640, en donde se eligen magistrados con la atribución principal de arbitrar en los conflictos entre particulares⁸⁵⁶. Así se reúne gobierno y jurisdicción en idénticas personas, aquí encargadas aún de escasas tareas, puesto que la estructura política de la colonia dispone tan sólo de unos breves trazos. En la misma línea se sitúa el *Fundamental Agreement of New Haven* (1639), donde su Quinto punto señala que los *freemen* elegirán:

magistrados y cargos públicos de entre ellos, quienes tendrán la potestad de llevar adelante todos los asuntos públicos de esta plantación, *incluyendo elaborar y derogar leyes, dividir herencias, decidir sobre las diferencias que afloran*, y encargarse de todos los temas y asuntos de similar naturaleza.⁸⁵⁷

Lo mismo ocurre con las *Fundamental Orders of Connecticut* (1638), donde los magistrados principales, incluyendo el Gobernador, van a formar una *General Courts* junto con los delegados de las poblaciones federadas, desempeñando funciones públicas en general⁸⁵⁸. Se reúnen así imitando al Parlamento inglés, como cámaras de

⁸⁵⁴ Vid. pp. 168 y 169, así como 178-81.

⁸⁵⁵ Por ejemplo, en el caso de el documento que instituía el gobierno de *Pocasset* (vid. Lutz, 1998, *Government of Pocasset*, <http://oll.libertyfund.org/title/694/102576>): “Nosotros, que somos hombres libres agrupados en el presente Cuerpo Político, elegimos a William Coddington, Caballero, para que sea Juez entre nosotros, y así convenimos en rendirle el respeto debido de acuerdo con las leyes de Dios” (“*We that are Freemen Incorporate of this Bodie Politick do Elect and Constitute William Coddington, Esquire, a Judge amongst us, and so covenant to yield all due honour unto him according to the lawes of God*”). A lo cual éste respondía: “[y]o, William Coddington, Caballero, habiendo sido llamado y elegido por los Hombres Libres agrupados en el presente Cuerpo Político, a fin de ser Juez entre ellos, convengo en impartir justicia y Juzgar imparcialmente de acuerdo con las leyes de Dios, así como mantener los Derechos Fundamentales y Privilegios de este Cuerpo Político” (“*I, William Coddington, Esquire, being called and chosen by the Freemen Incorporate of this Bodie Politick, to be a Judge amongst them, do covenant to do justice and Judgment impartially according to the lawes of God, and to maintaine the Fundamentall Rights and Privileges of this Body Politick*”). Obsérvese, de nuevo, la alusión al “cuerpo político”.

⁸⁵⁶ Vid. *supra*, pp. 208 y 209.

⁸⁵⁷ “*Query V: [...] magistrates and officers among themselves, to have power of transacting all the public civil affairs of this plantation; of making and repealing laws, dividing of inheritances, deciding of differences that may arise, and doing all things and businesses of like nature*”. El subrayado es propio.

⁸⁵⁸ Vid. *supra*, pp. 211 y 212.

representación que aprobaban normas, pero también a la manera de órganos de enjuiciamiento y aprobación de impuestos.

Esta tendencia a que adoptaran la función judicial los gobernadores, consejos y asambleas, resultaba contrapesada por la *inserción del jurado*, como demuestran los puntos 57 y 63 del *Body of Liberties of Massachusetts*, el viii de la Carta de Libertades incluida en el *Frame of Government of Pennsylvania* o la última acotación del más vetusto (1636) *Pilgrim Code of Law*⁸⁵⁹.

En este último código, precisamente, puede observarse una clara inclinación a reservar la función judicial para los jurados, de manera que el gobernador y sus asistentes sólo la posean para los casos de menor relevancia:

El gobernador y dos auxiliares más como mínimo, en las ocasiones que estimen oportunas, decidirán sobre asuntos triviales, como por ejemplo, acerca de disputas entre particulares por debajo de cuarenta chelines, así como en relación con cualquier supuesto de escasa importancia, y todo ello de acuerdo con lo que la sabiduría divina les dicte.⁸⁶⁰

Debe considerarse que aquí nos encontramos con un sistema legal construido mediante diversas piezas. Por una parte, el *common law* que existe en Inglaterra. Se intenta emular el método del precedente y también adoptar el mecanismo del jurado, pero ello “en la medida en que sea posible”⁸⁶¹. La imposibilidad probablemente procedía, desde luego, del aislamiento geográfico, que a menudo impediría reunir a doce hombres libres para el conocimiento de un proceso. Pero, sobre todo, a causa de la dificultad de conocer la casuística inglesa, pese a que se sabe de la efectiva publicación de numerosos volúmenes jurisprudenciales, incluyendo a Coke y otros, en las propias colonias⁸⁶². Y también, desde luego, se observa la búsqueda de una seguridad jurídica que obliga a que puedan ser resueltos a través de la equidad (“de acuerdo con la sabiduría divina”) y por los magistrados ejecutivos aquellos casos que resulten de escasa importancia, que se instituyan altos tribunales para los supuestos de apelación, o que sean sometidos ineludiblemente a un jurado los relativos a la pena capital.

⁸⁵⁹ “Todos los procesos, sean por asuntos castigados con pena capital, o por conflictos entre unos particulares y otros, serán conducidos por jurados de acuerdo con los precedentes de la ley inglesa, en la medida en que sea posible” (“*all trials, whether capital or between man and man, be tried by juries according to the precedents of the law of England, as near as may be*”).

⁸⁶⁰ “*That the governor and two assistants, at the least, shall, as occasion shall be offered in time convenient, determine in such trivial cases, viz., under forty shillings between man and man, as shall come before them: as also in offense of small nature shall determine, do, and execute as in wisdom God shall direct them*”.

⁸⁶¹ Vid. *supra*, pg. 231, nota 859.

⁸⁶² Matteucci, *op. cit.*, pg. 201; refiriéndose a que John Winthrop trajo volúmenes del famoso jurista inglés para realizar el *Body of Liberties* de Massachusetts.

En la Norteamérica de aquel momento, por tanto, aun no se puede hablar de poder judicial separado, al margen de que se module su ejercicio con varias premisas. Y sin embargo, sí existe una *preocupación por la separación de poderes legislativo y ejecutivo, extraída de la experiencia previa en Inglaterra*. Esta división se concreta en mecanismos que intentan procurar el control de unos órganos sobre otros, persiguiendo la obstaculización del abuso de poder. Numerosos ejemplos tiñen la vida colonial.

El primero y más elemental que aparece, como ya se ha visto, es la propia división en el interior de lo que hoy denominaríamos el “ejecutivo”. Una figura que se repite a menudo es la del **gobernador**, que se ve acompañado con mayores o menores potestades, según los casos, de un grupo de **consejeros, asistentes o auxiliares**, que vienen desde a asesorarle sólo en su labor hasta a dar o no un asentimiento preceptivo para la adopción de determinadas medidas. La separación entre unos puestos y otros viene bien reflejada en el *Massachusetts Agreement on the Legislature* de 1632, donde se dice que “*Governor shall alwaies be chosen out of the Assistants*” (“el Gobernador será elegido siempre entre personas que no sean auxiliares”)⁸⁶³. Este cargo de carácter unipersonal poseía el principal poder de decisión ejecutiva, siendo la cabeza de la administración civil y militar en la colonia, y variando su denominación entre, “*Governor*”, “*President of the Council*” o “*Lieutenant General*”⁸⁶⁴. La más común era la primera⁸⁶⁵, la segunda y tercera más raras. Así, la designación de “Presidente del Consejo” se menciona tan sólo en las *General Laws and Liberties de New Jersey* (1680)⁸⁶⁶ y la de “Teniente General” en el *Act for Establishing the House of Assembly and the Laws to Be Made Therein* de Maryland (1638)⁸⁶⁷.

La figura del gobernador o equivalente, que disponía de facultades tan robustas en algunas ocasiones como la de vetar resoluciones de otros órganos⁸⁶⁸, resultaba nombrada de diferentes maneras, puesto que en algunos casos lo era mediante designación o asunción directa por parte del propietario, de acuerdo con su amplia potestad ya citada y en virtud de la correspondiente Carta⁸⁶⁹, y en otros,

⁸⁶³ El documento se puede leer en Lutz, 1998, <<http://oll.libertyfund.org/title/694/102445>>.

⁸⁶⁴ “Gobernador”, “Presidente del Consejo” y “Teniente General”, respectivamente.

⁸⁶⁵ Por poner tan sólo algunos ejemplos, en la *Organization of Government of Rhode Island* (1642), las *Fundamental Orders of Connecticut* (1639), y el *Frame of Government of New Haven* (1643).

⁸⁶⁶ Se pueden leer en Lutz, 1998, <<http://oll.libertyfund.org/title/694/102337>>.

⁸⁶⁷ En *ibid.*, <<http://oll.libertyfund.org/title/694/102689>>.

⁸⁶⁸ Matteucci, *op. cit.*, pg. 202.

⁸⁶⁹ En Maryland, de acuerdo con el documento que acabamos de citar, el *Lieutenant General* era nombrado por Lord Baltimore, en Pennsylvania, según la *Charter of Liberties*, el propio William Penn. Cuando el rey asumía la propiedad directa de las colonias, como se vio hizo más bien tardíamente en la vida colonial de Norteamérica, lo nombraba él mismo.

elegida por los propios colonos⁸⁷⁰. De la misma manera ocurría con los *assistants* o *councillors*⁸⁷¹. Estos últimos parecían acercarse al papel que tenían los miembros del *Privy Council* en Inglaterra, es decir, el de aconsejar o incluso su consentimiento preceptivo para determinadas decisiones de especial importancia, tal y como expresa la *Charter of Liberties and Privileges of New York* de 1683, cuando señala que el Consejo ha de encargarse del “*advice and consent*” respecto al Gobernador de la provincia⁸⁷². La Carta de la Bahía de Massachusetts de 1629, uno de los documentos coloniales más tempranos, establecía un Gobernador, su Vicegobernador y dieciocho Asistentes, y estos últimos formaban un grupo colegiado que expresaría a través de su parecer mayoritario el apoyo o no a la decisión de los otros cargos. Así:

los mencionados Gobernador, Vicegobernador y Asistentes de la citada compañía, deberán reunirse cada mes, o más frecuentemente si así les place, a fin de regular mejor la marcha de los Asuntos de aquélla, bastando con que siete o más de los Asistentes, junto con el Gobernador o Vicegobernador, puedan hacerlo, para que se entienda existe una Corte o Asamblea de la Compañía a fin de conducir, ordenar y despachar todos los Negocios y Sucesos que se reproduzcan periódicamente y que afecten a la antedicha Compañía o Colonia.⁸⁷³

Se trataba de ofrecer al modelo un órgano colegiado que aportaría prudencia y sabiduría, reflexión en suma, a las decisiones gubernamentales. Algo de este elemento había en el el *Privy Council* del monarca inglés y en referencia a los *counsellors* de los gobernadores que eran directamente propietarios o delegados del *Lord* de la colonia, pero en todos estos casos los consejeros eran elegidos directamente por quien tenía la suprema dirección civil y militar, y nunca por los *freemen*.

Junto a estos órganos del “ejecutivo” es posible hablar de otro que, a imitación de la tradición parlamentaria inglesa, detentaba poderes legislativo y controlaba a

⁸⁷⁰ Por ejemplo, en el caso de la Carta de la Bahía de Massachusetts de 1629 (vid. Matteucci, *op. cit.*, pg. 178) o el *Massachusetts Agreement of Legislature* de 1632, el *Pilgrim Code of Law* de 1636, las *Fundamental Orders of Connecticut* de 1639 o el *Frame of Government of New Haven* de 1643, por citar sólo algunos ejemplos.

⁸⁷¹ A modo también de ejemplo, en idénticos casos.

⁸⁷² El documento se halla en Lutz, 1998, <<http://oll.libertyfund.org/title/694/102671>>.

⁸⁷³ “*The said Governor, Deputie Governor, and Assistants of the saide Company, for the tyme being, shall or maie once every Moneth, or oftener at their Pleasures, assemble and houlde and keepe a Courte or Assemblée of themselves, for the better ordering and directing of their Affaires, and that any seaven or more prsons of the Assistants, together with the Governor, or Deputie Governor soe assembled, shalbe saide, taken, held, and reputed to be, and shalbe a full and sufficient Courte or Assemblée of the said Company, for the handling, ordering, and dispatching of all such Buysinneses and Occurrents as shall from tyme to tyme happen, touching or concerning the said Company or Plantacon*”. A lo que habría que añadir el cometido principal que también desempeñan los Asistentes en la convocatoria de Asambleas de los *freemen* (vid. *supra*, pg. 201).

aquéllos. Se trata de **la asamblea de los colonos**, normalmente de carácter representativo, bien fuera de forma directa o bien mediante la delegación de localidades, e incluso, aunque en raras ocasiones, con la propia intervención personal de los *freemen*. Precisamente a través de su evolución es posible percibir con mayor nitidez la lucha que mantuvo para acentuar los mecanismos democráticos y frenar los que pudieran intervenir contra ellos, siguiendo así el sendero que paralelamente los parlamentarios ingleses habían culminado en 1642, al enfrentarse con Carlos I. Los *freemen* de Norteamérica, como se ha visto, van a pugnar con inversores, consejos de administración e incluso gobernadores⁸⁷⁴, así como contra élites que pretendieran el dominio de las colonias sin contar con ellos⁸⁷⁵. Los resultados de este combate por la representación van a ser desiguales. Allí donde los colonos acordaban someterse a pactos como los de Nueva Inglaterra, sin un propietario omnipresente, quedaban conformados gobiernos en los cuales los nuevos pobladores tenían una capacidad de participación muy alta. De hecho, de sus asambleas, cualquiera que fuese su denominación⁸⁷⁶, provenía la elección de los principales puestos del ejecutivo (gobernadores y asistentes), así como de los cargos públicos que les auxiliaban, como vicegobernadores (*deputy-governors*), agentes del orden (*constables*), tesoreros (*treasurers*), etc...⁸⁷⁷. Todo esto va configurando una práctica de autogobierno que ya era anunciada por documentos como la *Organization of Government of Rhode Island* (1642), cuando los representantes elegidos afirmaban que:

3. Resulta establecido y unánimemente acordado que el Gobierno al que atiende el presente Cuerpo Político en esta Isla, así como la Jurisdicción del mismo a favor de nuestro Príncipe, es una DEMOCRACIA, o Gobierno Popular, es decir, el consistente en el Poder del Cuerpo de los Hombres Libres reunidos en legal forma, *o al menos de la mayor parte de ellos*, a fin de aprobar Leyes Justas por las cuales se regirán, así como delegar de entre ellos Ministros tales que las ejecuten tan fielmente como ello se pueda conseguir entre un Hombre y otro.⁸⁷⁸

⁸⁷⁴ Vid. *supra*, pp. 195-97, donde me refiero al caso virginiano.

⁸⁷⁵ Vid. *supra*, pg. 202.

⁸⁷⁶ En Virginia, ya se vio que al mención era de la *House of Burgesses* (vid. *supra*, pg. 168); el *Massachusetts Agreement on Legislature* (1632) hablaba de *General Court*, como las Fundamental Orders of Connecticut (1639, aquí también denominada "*assemblée*"); y la *Organization of Government of Rhode Island* (1642); en las *General Laws and Liberties of New Hampshire* (1680), era una *General Assembly*.

⁸⁷⁷ Carta de Bahía de Massachusetts (1629), *Frame of Government de New Haven* (1643), entre otros.

⁸⁷⁸ "3. It is ordered and unanimously agreed upon, that the Government which this Bodie Politick doth attend vnto in this Island, and the Jurisdiction thereof, in favour of our Prince is a DEMOCRACIE, or Popular Government; that is to say, It is in the Powre of the Body of Freemen orderly assembled, or the major part of them, to make or constitue Just Lawes, by which they will be regulated, and to depute from among themselves such Ministers as shall see them faithfully executed between Man and Man". *Organization of the Government of Rhode Island*, en Lutz, 1998, <<http://oll.libertyfund.org/title/694/102589>>. El término "executed" demuestra que la ejecución era lo implícito a todo gobierno, al margen de la forma en que se presentara. El subrayado es propio.

Pero este criterio democrático no era excepción en esa área, siendo el que se entendía guiaba hacia lo que era el bien común de la mejor forma posible. Por citar otro ejemplo, baste recordar el sencillo *Providence Agreement* de 1637:

Nosotros, cuyos nombres aparecen al pie, deseosos de habitar la ciudad de Providence, prometemos sujetarnos en activa y pasiva obediencia⁸⁷⁹ a los mandatos y acuerdos que se realicen a favor del bien público de la comunidad, siguiendo un modo pacífico y ordenado que se guíe por el consentimiento mayoritario de los ciudadanos que se hallaran presentes para manifestarlo, cabezas de familia e incorporados al ciudadanía de una localidad, así como de aquellos otros que sean admitidos para el conocimiento sólo de los asuntos civiles.⁸⁸⁰

Así que los colonos se van a organizar en asambleas que intentarán acumular el mayor número de potestades, incluyendo la aceptación o el rechazo de impuestos, la aprobación de leyes, y el nombramiento de los principales cargos públicos de la colonia. En realidad, *tendían* a absorber todas. Donde las reuniones eran detenidas con mayor fuerza era en aquellas provincias que se aproximaban más netamente al modelo inglés de gobierno, esas en las que existía un gobernador con potestades casi idénticas a las que poseía el monarca en la metrópoli (poder de veto, para convocar o disolver asambleas, nombramiento de jueces y cargos y otras prerrogativas diversas), así como un consejo prácticamente calcado del *Privy Council* y una *General Assembly* que representaba a los colonos y que detentaba potestades como las del Parlamento de Londres. Un buen ejemplo de esta fórmula es la ya mencionada y señalada por la *Charter of Liberties and Privileges of New York* (1683), donde se dice:

QUE la Suprema Autoridad Legislativa bajo su Majestad y Alteza Real el Duque de York y Albany, propietario de la antedicha provincia, residirá para siempre en un Gobernador y un Consejo, así como en el pueblo reunido en asamblea general.

QUE el ejercicio de la Principal Magistratura y Administración del Gobierno de la mencionada provincia corresponderá al citado Gobernador, asistido por un Consejo con cuyo auxilio y

⁸⁷⁹ Evidentemente, la referencia a un tipo u otro de obediencia alude a los matices que tradicionalmente se habían incorporado a la teoría política protestante, de manera muy particular, a la calvinista.

⁸⁸⁰ "We whose names are hereunder, desirous to inhabit in the town of Providence, do promise to subject ourselves in active and passive obedience to all such orders or agreements as shall be made for the public good of the body in an orderly way, by the major consent of present inhabitants, masters of families, incorporated together in a Towne fellowship, and others whom they shall admit unto them only in civil things".

Asentimiento, o al menos, con el de cuatro de sus miembros, y que administrará y gobernará la misma de acuerdo con las Leyes⁸⁸¹.

Las potestades de ese gobernador eran en tales supuestos muy amplias y comprendían una amplia discrecionalidad en la convocatoria y disolución de la Asambleas, lo cual restaba a éstas gran parte de su importancia y hacía que resultaran más débiles que en otros lugares del país.

Pero es que, además, observamos otras interesantes manifestaciones de la división del poder en particularidades que irán recreando bajo apariencias distintas la misma preocupación por evitar su concentración, herencia inglesa indudable.

Así, un ejemplo en el que además me he detenido con anterioridad es el de las *Fundamental Orders of Connecticut*, de 1638. En ellas quedaba señalada una clara separación entre dos asambleas diferentes: una tendría la potestad general de aprobar leyes (*General Court*) y otra la de nombrar magistrados (*Court of Election*). El propio sistema contemplado en las *Fundamental Orders* se refería a una **representación de carácter federativo**, ya que esas asambleas estaban formadas siempre por cuatro delegados de las diferentes localidades de Connecticut⁸⁸².

Con lo cual aparece también aquí otro recurso para evitar el abuso de poder y conseguir su reparto entre diversos órganos, que originará a la larga esa edificación de su sistema federal que se identifica hoy tan claramente con los Estados Unidos de América. En aquel momento, y aunque las poblaciones o *Plantations* parten de un cierto aislamiento entre ellas, manteniendo sus propias instituciones, pronto algunas deciden federarse entre sí, dando lugar fórmulas que en el Reino Unido no existían y que, como mucho, sólo gozaban de antecedentes en la Antigüedad. El experimento quedará reiterado en otros lugares de Norteamérica, como se ha tenido ocasión de comprobar en páginas anteriores⁸⁸³, ya que en 1643 la ciudad de New Haven se unió en 1643 con las vecinas poblaciones de Guilford, Milford y Stanford, bajo un mismo *Frame of Government*, y las de Providence, Portsmouth y Newport, con la denominada *Patent for Providence Plantations*, así como fue el año en el que nacería la confederación denominada “Colonias Unidas de Nueva Inglaterra”, que formarán

⁸⁸¹ “*THAT The Supreme Legislative Authority under his Majesty and Royall Highnesse James Duke of Yorke Albany &c Lord proprietor of the said province shall forever be and reside in a Governour, Councell, and the people mett in General Assembly. THAT The Exercise of the Cheife Magistracy and Administration of the Government over the said province shall bee in the said Governour assisted by a Councell with whose advice and Consent or with at least four of them he is to rule and Governe the same according to the Lawes thereof*”. El texto completo del documento en Lutz, 1998, <<http://oll.libertyfund.org/title/694/102671>>.

⁸⁸² Vid. *supra*, pp. 210-13.

⁸⁸³ Vid. *supra*, pp. 213-15.

Massachusetts, Plymouth, Connecticut y New Haven. El federalismo se afirmaba como un mecanismo de importancia en la perspectiva divisoria del poder entre los colonos de Norteamérica y que se irá consolidando progresivamente, tal y como demuestra el hecho de que la propia Connecticut fuera aumentando su extensión gracias al mismo⁸⁸⁴, ya que sus *Fundamental Orders* de 1638 permitían la adhesión de nuevas localidades a la estructura política en ellas diseñada.⁸⁸⁵

Otro capítulo importante en la historia colonial norteamericana y referente a la división del poder es el relativo a posibles separaciones entre **poder constituyente y constituido**. Como sabemos, la teoría sobre esta escisión fue pergeñada de forma sistémica por Sieyès, aunque ya tuviera su primera formulación práctica en la Constitución estadounidense de 1787, asunto que abordaré con mayor profundidad. Este esquema político concibe la presencia del pueblo en dos momentos distintos, resultando una separación de poderes de tipo “diacrónico”, frente a la sincrónica que nos resulta más familiar (reflejada en la tríada de legislativo, ejecutivo y judicial). La teoría sobre el poder constituyente supone que la voluntad popular se manifiesta en dos instantes diferentes: cuando aprueba una constitución o ley fundamental a través de delegados específicamente designados para ello, y cuando elige diputados para ubicarse en el legislativo “ordinario”.

Aunque esta perspectiva es bastante más tardía, los colonos norteamericanos ya insertan algunos de sus elementos en la organización del autogobierno que van a ir conformando. Así, en primer término, debe destacarse la propia rúbrica que en numerosos documentos de la época se estampaba al pie del correspondiente acuerdo⁸⁸⁶. Con ella se comprometían a respetar una serie de normas o principios básicos e, incluso, como hemos visto, a obedecer la autoridad de específicas personas o cargos⁸⁸⁷. En este último supuesto, asimismo, se solían establecer las normas para su selección. Los *freemen* fijaban las normas para su autogobierno a través de documentos que recordaban lejanamente a las cartas medievales y, de manera más cercana, a los *covenants* religiosos. Pero había otro elemento que implicaba una dimensión de aún mayor autonomía en su organización política y que tenía su antecedente más inmediato en el período republicano inglés de la *Commonwealth*. Se trataba de la convocatoria automática de asambleas. En

⁸⁸⁴ Lutz, 1988, pg. 31.

⁸⁸⁵ Vid. *supra*, pg. 211 y 212.

⁸⁸⁶ Por citar algunos ejemplos, que arrancan todos del propio Pacto del Mayflower: el *Plantation Agreement of Providence* de 1640 (vid. *supra*, pag 208) y el *Fundamental Agreement of New Haven* de 1639 (*supra*, pg. 209).

⁸⁸⁷ Lutz, 1988, pg. 34, llega a decir, refiriéndose a la Constitución de 1787: “[c]uando uno lee el preámbulo, que comienza con ‘Nosotros, el pueblo...’, es difícil no pensar en aquello de ‘Nosotros, cuyo nombre aparece al pie’ del Mayflower Compact, el primer contrato político americano”.

numerosos textos analizados arriba se puede advertir, así, en primer lugar, una indicación de fechas específicas para la reunión de las mismas. Por ejemplo, la Carta de Massachusetts de 1629 establecía que los colonos se reunirían en cuatro asambleas (*General Courts*), dentro de un período y días concretos⁸⁸⁸. El *Pilgrim Code of Law* (1636) señalaba también un día específico, el primer martes de junio, para las reuniones de las *General Courts* de los *freemen* que luego seleccionaban gobernador y asistentes. Y la parte del *Frame* contenida en la *Charter of Pennsylvania* (1682) dice que “los mencionados hombres libres elegirán anualmente Miembros para servir en una Asamblea General, como representantes suyos, sin que excedan las doscientas personas y a fin de que se reúnan también anualmente y en el vigésimo día del segundo mes”⁸⁸⁹. Los ejemplos son innumerables⁸⁹⁰.

Pero no hay en esos textos alusión alguna a una capacidad que, sin embargo, sí va a aparecer en las *Fundamental Orders of Connecticut* de 1638. Como se analizó, estas normas fijaban dos reuniones distintas, una para la *Court of Election*, en el segundo jueves de abril, y otra de la *General Court*, en el mismo día de septiembre⁸⁹¹. Y es que en las *Orders* se indicaba el resorte que se pondría automáticamente en marcha en caso de que la autoridad correspondiente no cumpliera con su cometido de convocar asambleas en los antedichos períodos. Entonces, los hombres libres de Connecticut retomarían de forma plena el poder que les correspondía en origen, recuperando su autogobierno:

VI. Queda ordenado, bajo mandato y decreto, que el Gobernador, por sí mismo o mediando el Secretario⁸⁹², enviará llamamientos a los Jefes de policía de cada Ciudad para que convoquen a las dos Cortes ordinarias⁸⁹³, un mes antes de la fecha que corresponda a la reunión [...] Y si el Gobernador y la Mayoría de los Magistrados, por negligencia o expresamente, no convocaran a las dos Cortes ordinarias o a una cualquiera de ellas, así como cuando tampoco lo hiciesen en aquellas ocasiones en que el bien público lo requiriera⁸⁹⁴, los propios Hombres libres o la Mayoría de ellos podrán solicitarlo; y si entonces también se rehusara hacerlo, los citados Hombres Libres o la Mayoría de ellos tendrán la potestad de ordenar a los Jefes de Policía de todas las ciudades el realizar la convocatoria, reuniéndose todos juntos así para elegir de entre

⁸⁸⁸ Vid. *supra*, pg. 201.

⁸⁸⁹ “*The said freemen shall yearly chuse Members to serve in a General Assembly, as their representatives, not exceeding two hundred persons, who shall yearly meet on the twentieth day of the second month*”. Punto XIV.

⁸⁹⁰ Así, el *Frame of Government de New Haven*: vid. *supra*, pg. 213.

⁸⁹¹ Vid. *supra*, pg. 212.

⁸⁹² Cargo establecido obligatoriamente en la federación y que se encargaba de supervisar y atender las tareas administrativas principales para el proceso electoral.

⁸⁹³ Es decir, la *Court of Election* y la *General Court*.

⁸⁹⁴ Se prevé, pues, la posibilidad de *Courts* extraordinarias.

ellos un Moderador, y de esta forma poder dictar cualquier Acto que hubiera sido competencia de una *General Court*.⁸⁹⁵

Este destacable aspecto no llega siquiera a aparecer en la *Charter* de Pennsylvania, que fue una de las más avanzadas de su tiempo, pero que, sin embargo, se hallaba tutelada de manera clara por el propietario de la colonia, William Penn. La capacidad revulsiva que posee resulta insoslayable. Bajo su sencillo ropaje se esconden las consecuencias de la soberanía popular y el sistema de carácter constituyente, convencional, que luego aflorará en las Constituciones estatales y en el *Federalista*.

Nada podemos exponer en este apartado sobre la existencia de **parlamentos bicamerales**. En las colonias pronto podrá apreciarse que no existen divisiones sociales tan fuertes como en Inglaterra, pese a que algunos “propietarios” iniciales eran Lores. Con lo cual los argumentos a favor de una constitución mixta del antiguo estilo no resultaban válidos. Y ello, debido a la facilidad para poder obtener nuevas tierras en el Nuevo Continente que disfrutarán todos aquellos dispuestos a ofrecer su fuerza de trabajo allí (y desde luego, no los esclavos, a quienes se introdujo más bien tardíamente, ya entrando en el siglo XVIII⁸⁹⁶). Los *indentured servants* o siervos escriturados, por ejemplo, personas que debían servir a un señor a cambio del pago de sus deudas, podían adquirir con cierta facilidad algún tipo de posesión, tras haber redimido aquéllas⁸⁹⁷. Aunque la Corona inicialmente concede la explotación de provincias delimitadas, con sus confines naturales indicados en las correspondientes cartas, lo cierto es que los colonos exploran y descubren otros parajes y pasan a ocuparlos; la tierra resulta abundante, aunque a veces de escasa fertilidad o ubicada

⁸⁹⁵ “6. *It is Ordered, sentenced and decreed, that the Gournor shall, ether by himselfe or by the secretary, send out summons to the Constables of eur Towne for the cauleing of these two standing Courts, on month at lest before their seurall tymes[...]* And if the Gournor and Mayor prte of Magistrats shall ether neglect or refuse to call the two Generall standing Courts or ether of them, as also at other tymes when to occations of the Commonwealth require, the Freeman thereof, or the Mayor prte of them, shall petition to them soe to doe: if then yt be ether denyed or neglected the said Freeman or the Mayor prte of them shall haue power to giue order to the Constables of the seuerall Townes to doe the same, and so may meete together, and chuse to themselues a Moderator, and may prceed to do any Acte of power, wch any other Generall Courte may”.

⁸⁹⁶ Serían introducidos en América al principio muy esporádicamente, pero luego, al desarrollarse industrias y cultivos como los del añil, el tabaco y el arroz, se incrementó su importación, hacia 1730. Vid. Commager, Leuchtenburg y Morison, *op. cit.*, pp. 71 y 72, así como Frey, Sylvia R.: “Slavery and anti-slavery” (pp. 379-91) en Greene y Pole, *op. cit.*, pg. 381.

⁸⁹⁷ Los *indentured servants* llegaron a las costas americanas, entonces reducidas a Virginia, a partir de 1624. Unos 1.500 desembarcaban anualmente allí. Trabajaban como criados de un colono de pleno derecho que había pagado sus deudas previas (y que a emduo correspondían al pago de su pasaje hasta el Nuevo Mundo), y lo hacía por un período de tiempo que oscilaba entre cuatro y siete años, dependiendo de la edad y el sexo. Al finalizar su contrato eran colonos libres. Tal fue la capacidad de emancipación que adquirirían que unas décadas después de su primer desembarco, los habitantes de las colonias comenzaron a recurrir a esclavos para el trabajo más penoso en las plantaciones. Vid. Cantó y Giráldez, *op. cit.*, pg. 36.

en parajes aislados, bajo condiciones climatológicas muy adversas y la transmisión de enfermedades desconocidas. El otro gran obstáculo inicial, la población indígena, fue “salvado” mediante una mezcla de hostigamiento armado y la compra de extensiones territoriales.

Asimismo, otro elemento nada desdeñable para analizar la inexistencia de una estratificación social al estilo europeo, va ser la propia homogeneidad de las comunidades protestantes disidentes del anglicanismo. Estos grupos, a menudo formados por personas de origen muy humilde, mantuvieron cierto grado de igualitarismo en su seno, permaneciendo alejados de una iglesia oficial anglicana que era bastión de los intereses nobiliarios. Los hombres y mujeres del Mayflower son un vivo ejemplo de este espíritu.

Todo ello, sin embargo, no implicaba que se perdiera de vista una perspectiva que entendía algunos grupos de personas eran más idóneos que otros, dadas su sabiduría y virtud, para ocupar puestos principales en el autogobierno colonial. Quienes eran más aptos para la deliberación, para la reflexión prudente. Se puede hablar, así, de la presencia de un espíritu aristocratizante adoptado por las élites del Nuevo Mundo, prestas a tomar las riendas sociales y políticas de su comunidad. Pero su conformación ya no obedecería a títulos nobiliarios o de carácter similar, sino que, en todo caso, se “sugería” vinculada a posiciones de educación y riqueza, a fin de identificar mejor la virtud necesaria para conducir a un útil y beneficioso manejo de los asuntos públicos. Parecía exigible así realizar una selección de entre los *freemen*, y aunque de por sí éstos ya gozaran de la independencia necesaria para ejercer derechos políticos. Esta idea quedaba expresada con cierta entidad en diferentes documentos de la época cuyo contenido ya he expuesto un poco más arriba, cuando surge la institución de los asistentes, auxiliares o consejeros⁸⁹⁸. O incluso, cuando en la *Charter of Liberties and Frame of Government of the Province of Pennsylvania in America* (1682) se establece que quienes deben proponer las leyes a la *General Assembly* han de ser el Gobernador y sus Consejeros, quienes a su vez se dividirán en cuatro Comités de diferentes ámbitos, capacitados para introducir enmiendas tras los debates de la asamblea⁸⁹⁹. Tampoco debe olvidarse la existencia de dos Asambleas distintas, una *Court of Election* y otra *General Court* en las *Fundamental Orders of Connecticut*⁹⁰⁰, que establecían la representación en dos cámaras separadas, y aunque este se tratara de un caso conectado a la configuración que preveían de la entidad federativa de la mencionada provincia. Precisamente ésta será

⁸⁹⁸ Vid. *supra*, pg. 232.

⁸⁹⁹ Puntos VII, XIII y XIV.

⁹⁰⁰ Vid. *supra*, pg. 212.

parcialmente la idea recogida en el sistema bicameral luego adoptado por *El Federalista*. Aunque la base aristocrática inglesa no pudo ser acogida, se mostró necesario crear otra basada en la estructura federal de la nueva república.

II.1.1.3. Rasgos principales del autogobierno norteamericano

Resumiendo lo anteriormente expuesto, resulta posible trazar los principales rasgos del autogobierno formado en las colonias norteamericanas:

a) **tendencia a la autodeterminación.** Las colonias van configurando sus propios órganos de gobierno, tanto para la elaboración de normativa como para su aplicación. La metrópoli se halla muy alejada de la vida colonial y tiene dificultades para supervisarla, así que a los americanos les resulta posible instituir una serie de órganos que aprueben y hagan cumplir ciertas normas, sin apenas concurso del Rey y sus autoridades. La práctica que paulatinamente se va consolidando desde esta perspectiva se volverá impostergable, pese a los intentos del monarca por recuperar el control de sus presuntos dominios en fecha tardía. Los colonos aprenden, a través de una experiencia real y dinámica, que pueden autogobernarse sin necesidad de auxilio exterior. Para ello recurren con frecuencia a la convocatoria automática de asambleas y otros órganos. Este sistema también aparecía en el pasado grecolatino, pero en realidad emanaba directamente de, primero, la tradición parlamentaria, y luego, de las doctrinas radicales derivadas de las guerras civiles inglesas. Así, puede recordarse que en 1641 los representantes de esa Asamblea arrancaron del Rey la convocatoria trienal de Lores y Comunes⁹⁰¹. Anteriormente a ese instante, el monarca había realizado los llamamientos a su placer, pero ahora se comprometía a no hacerlo así. Esta fórmula para evitar la perpetuación en el poder va a ser mantenida por las reivindicaciones *levellers*, como la que supondría el primer *Agreement* (1647), reclamando una convocatoria cada dos años del Parlamento⁹⁰², aquí ya incluso, y en un paso más adelante, al margen de lo que desearan sus miembros. También se percibe rastro del mecanismo en la *Humble Petition and Advice* de 1657, que se refería a la convocatoria parlamentaria que debía realizar el Lord Protector, Oliver Cromwell, cada tres años⁹⁰³. El *Bill of Rights* de 1689, aprobado por Lores y Comunes tras su acogida a María y Guillermo de Orange en el trono de Inglaterra, indicaba que

⁹⁰¹ *Supra*, pg. 48.

⁹⁰² *Vid. supra*, pg. 89.

⁹⁰³ *Vid. supra*, pg. 145.

habrían “de reunirse con frecuencia Paramentos”⁹⁰⁴, siendo complementado por leyes más específicas al respecto inmediatamente después.

b) el **documento escrito como prueba de compromiso colectivo**. Aunque muchos de los textos coloniales, sobre todo los del inicio, son declaraciones realizadas por el Rey, pronto surgirán como expresión de la voluntad de un grupo de notables. A continuación, y enseguida, pasarán a ser la de un colectivo, a menudo identificado con una congregación. Aparecen grupos humanos que pretenden fijar unas normas básicas para su convivencia en el Nuevo Mundo y que pueden hacerlo por mantener cierta homogeneidad cultural, étnica y religiosa. Y ello con clara consciencia de que están fundando nuevas comunidades, mediando una base normativa e institucional propia. El intento consiste en fijar de manera permanente y que resulte difícilmente modificable, unas reglas básicas para la convivencia social, como los *levellers* también habían previsto con sus *Agreements*. Tal pretensión queda bien reflejada en la *Charter of Liberties and Frame of Government of the Province of Pennsylvania in America* (1682), cuando afirma en su cláusula XXIII, que

ninguna decisión, ley u ordenanza, cualquiera que ésta fuere, podrá ser dictada por el Gobernador de esta provincia, sus herederos o legatarios, ni por los hombres libres en el Consejo Provincial o la Asamblea General, con el fin de alterar, cambiar o disminuir, la forma o efectos de esta carta, o parte alguna o cláusula de la misma, sin que medie el consentimiento del Gobernador, sus herederos o legatarios, y seis de siete partes de los mencionados hombres libres reunidos en Consejo provincial y Asamblea General⁹⁰⁵.

c) las formas de gobierno adoptadas beben de fuentes políticas inglesas, así que el modelo del **gobierno mixto** goza de autoridad en América. Puede mencionarse como ejemplo culminador de esta tendencia el Prefacio de la *Charter of Liberties and Frame of Government of the Province of Pennsylvania in America* (1682), en donde William Penn dice:

Tercero. Ya sé que los distintos admiradores de la monarquía, la aristocracia y la democracia, que implican respectivamente el gobierno del uno, los pocos o los muchos, afirman que estos son los tres modelos habituales de gobierno. Pero elegí resolver la controversia con una sencilla

⁹⁰⁴ Punto 13. En Esteban (ed.), *op. cit.*, pg. 516.

⁹⁰⁵ “That no act, law, or ordinance whatsoever, shall at any time hereafter, be made or done by the Governor of this province, his heirs or assigns, or by the freemen in the provincial Council, or the General Assembly, to alter, change, or diminish the form, or effect, of this charter, or any part, or clause thereof, without the consent of the Governor, his heirs, or assigns, and six parts of seven of the said freemen in provincial Council and General Assembly.”

característica que ahora señalo, y que pertenecería a los tres: todo pueblo tiene un gobierno libre (cualquiera que sea su estructura), si imperan las leyes y el pueblo tiene participación en su elaboración, constituyendo tiranía, oligarquía o confusión otras fórmulas diferentes.⁹⁰⁶

Por tanto, la forma de gobierno más popular en las colonias será la mixta, en consonancia con una tradición que tenía como ilustres predecesores a Harrington, y tal aspecto se hace notar en las numerosas ocasiones en que se configuran órganos y las relaciones entre ellos. Esto separa dicha conformación de la tendencia niveladora a eludir aquella separación del poder, dadas las connotaciones estamentales que poseía en la Inglaterra de su tiempo. Pero ocurre que, y en esto sí que de forma coincidente con sus aspiraciones, en el Nuevo Mundo se trata de una mezcla que no alude a escisión estamental alguna, sino a la división del poder entre distintas instituciones. Numerosos rasgos se combinaban para asegurar este gobierno mixto, entre los que destacaban la encomienda de funciones distintas y la posibilidad de que unos órganos vetaran a otros⁹⁰⁷.

d) Rotación de cargos e incompatibilidades, colegialidad y veto. Asimismo, se reproducen estos tres rasgos típicos de organizaciones políticas antiguas. Romanos y griegos mantuvieron siempre en el seno de sus instituciones la rotación, las incompatibilidades y la colegialidad⁹⁰⁸.

La primera suponía que no se podía ocupar un puesto público más allá de cierto período determinado. Y, por añadidura, a menudo implicaba la imposibilidad de renovar mandato, al menos durante un específico plazo. Con esto se buscaba evitar la perpetuación en el poder, a fin de evitar la arbitrariedad y el despotismo consiguientes. Recuérdesse, al respecto, la autoperpetuación del Parlamento inglés a raíz de las Guerras Civiles o de la *Septennial Act*⁹⁰⁹.

⁹⁰⁶ “*Thirdly. I know what is said by the several admirers of monarchy, aristocracy and democracy, which are the rule of one, a few, and many, and are the three common ideas of government, when men discourse on the subject. But I chuse to solve the controversy with this small distinction, and it belongs to all three: Any government is free to the people under it (whatever be the frame) where the laws rule, and the people are a party to those laws, and more than this is tyranny, oligarchy, or confusion*”. La influencia de los pensadores ingleses previos queda aún más patente si venimos a considerar el dato de que Penn se supone fue ayudado por Algernon Sidney en su labor, así como las claras influencias harringtonianas (Matteucci, pg. 202). Al *Governor*, dentro de este sistema político, le estaba permitido además vetar la decisión de otros órganos de la colonia (id.).

⁹⁰⁷ Característicamente, el Gobernador podía interponer su veto frente a las resoluciones de otros cargos en unas cuantas colonias. Como ejemplo, vid. el *Charter of Liberties and Frame of Government of the Province of Pennsylvania in America* (1682).

⁹⁰⁸ Vid. *passim* Ruiz, *op. cit.* En general, la elección de magistrados romanos (cónsules, pretores, ediles...) se realizaba anualmente, prohibiéndose la acumulación en una misma persona de varias magistraturas y la reelcción en año consecutivo (vid. Fernández Buján, *op. cit.*, pg. 110).

⁹⁰⁹ Matteucci, *op. cit.*, pg. 146.

Por su parte, las incompatibilidades exigían que no se desempañaran dos o más cargos públicos al mismo tiempo. En relación con el esquema de división política que se acaba de mencionar, resultaba imprescindible que quien ya ejerciese un puesto de responsabilidad política no dispusiera simultáneamente de otro. En la *Massachusetts Agreement on the Legislature* de 1632, se decía, por ejemplo, que el Gobernador sería elegido siempre entre personas que no gozaran de la condición de Auxiliares⁹¹⁰.

A estas dos notas precedentes les acompañaba la de la colegialidad. Entre los romanos implicaba una suerte de decisión colectiva para numerosos asuntos, evitada sólo si se cumplía la posibilidad de que uno de los colegas vetara a otro una específica resolución⁹¹¹. Criterio tan estricto fue luego abandonado y sustituido por el de la decisión mayoritaria en el colegio correspondiente. En cualquier caso, una decisión colegiada suponía cierta garantía de deliberación, de que las decisiones de que se tratara no serían tomadas de forma despótica, unipersonal. Fruto de la misma era la composición y el funcionamiento de órganos tradicionales en Inglaterra, como el *Privy Council*, luego imitado en Norteamérica, aunque sólo en cierta manera, con el nombramiento de “auxiliares”, “asesores”, “magistrados” o “consejeros” que gestionaran ciertos asuntos públicos conjuntamente con él. Este modelo queda patente en documentos coloniales como la Carta de la Bahía de Massachusetts de 1629, que exigía la presencia de un mínimo de Asistentes de siete sobre dieciocho, para formar órgano de gobierno con el Gobernador⁹¹², o las *Fundamental Orders of Connecticut* (1638), que pedía la mayoría de los Magistrados para convocar las Cortes ordinarias⁹¹³. De otra parte, el poder de veto a la manera inglesa ya correspondía a menudo a un gobernador, como se ha visto páginas atrás.

e) el **respeto por los derechos o libertades**. En diversos documentos coloniales, como se ha podido apreciar, aparece expresa o implícitamente indicada la idea de que existen determinados derechos que han de quedar a salvo del poder. La titularidad de unos derechos y libertades no pertenecía sólo a los ingleses que habitaban en Europa, sino también a los *freemen* que residían, trabajaban y, en definitiva, vivían en el Nuevo Continente, y que desde un primer momento resultaron incluso provenir de otros rincones del Viejo Mundo. De esta forma, toda una tradición jurídica con antecedentes remotos en el Medievo inglés iba a cruzar el Atlántico y quedarse allí definitivamente, con una capacidad expansiva que permitió su extensión a inmigrantes de origen no

⁹¹⁰ Vid. *supra*, 201

⁹¹¹ *Intercessio*. Vid. Paricio, *op. cit.*, pg. 69 y Fernández Buján, *op. cit.*, pg. 110.

⁹¹² Vid. *supra*, 233.

⁹¹³ Vid. *supra*, pg. 238.

estrictamente anglosajón, como alemanes, holandeses, suecos o franceses, quienes marchaban de sus respectivos países huyendo del hambre, la falta de oportunidades o la persecución religiosa.

f) **el sujeto del sistema político** que se va formando en Norteamérica, por tanto, va a ser precisamente ese *freeman*, el hombre libre, y no el aristócrata o persona de alta cuna y rancio abolengo. La facilidad para conseguir tierra, aunque fuera tras un período de redención de deudas y bajo servidumbre, potenciaría la existencia de medios de vida propios, esos cuya posesión, como se ha visto, identificaba a un *freeman*, a alguien que no dependía de señor alguno. En consonancia, el derecho al sufragio activo y pasivo, relacionado tradicionalmente en Inglaterra con la independencia de todo señor, también va a extenderse.

Quedan aún sin resolver numerosos problemas que, pese a que comienzan a percibirse ya, aún no resultan tan acuciantes, y siendo que de ellos dependía que se mantuviera o no la sujeción a la metrópoli, como la discusión sobre el sujeto en quien reside la soberanía o de qué manera puede manifestarse. Los niveladores ya habían apuntado en su momento algunas respuestas para estos interrogantes, pero, como se ha podido advertir, el sendero político inglés se labró en distinta dirección a la que ellos trazaban. Hará falta la escisión definitiva de las colonias, animada por acontecimientos ocurridos en Europa, para que comience a funcionar con visos de permanencia todo un nuevo modelo político, la democracia constitucional.

II.1.2. Razones para una secesión

II.1.2.1. El *whiggism* como antecedente teórico inmediato de la independencia norteamericana

Como se ha podido advertir, los colonos norteamericanos no construyeron su organización política inicial siguiendo modelos teóricos de calado intelectual o Utopías elaboradas en alambiques. En cambio, puede percibirse, dada sobre todo la accidentada evolución de sus textos e instituciones, que se basaron de manera muy amplia en la realidad social que les tocó vivir. Ciertamente es que partían de premisas ideológicas determinadas y tal indicación es la que intento seguir en las páginas presentes, a fin de rastrear los orígenes de una tradición común. Pero, hay que insistir en ello, lo que caracteriza al experimento colonial es que no existe grupo o élite plenamente consciente de la realización de un proyecto concreto y fabricado *a priori*

sobre el papel⁹¹⁴. Los *Covenants*, *Cartas*, *Combinations*, *Fundamentals*, etc, tienen afán de permanencia, pero se fueron adaptando y modificando según las variables circunstancias y situaciones, de acuerdo con el contexto vivido en las colonias. En esto, su trazado se asemeja mucho a la experiencia de los radicales en las Guerras Civiles inglesas, dando lugar a que no existieran tampoco aquí teóricos especialmente destacados en torno al desarrollo de sistemas políticos, aunque sí las contribuciones subrayables de William Penn o Roger Williams. El bagaje intelectual proveniente de Inglaterra se daba por supuesto, al igual que sus construcciones teóricas y también la realidad proveniente de los sucesos acaecidos allí desde los primeros Estuardo hasta la *Commonwealth* y la Restauración.

De hecho, el cordón umbilical que unía a los colonos con la metrópoli nunca llegaría a cortarse hasta el último momento, el de su independencia. En 1688 se iban a producir ciertos acontecimientos en las Islas, que si bien no suprimirían la influencia inglesa en las colonias, sí supusieron una definitiva orientación divergente con respecto a otras bases políticas muy distintas y que ya se encontraban en avanzado estado de desarrollo sobre suelo norteamericano. La Gloriosa vino a reorientar las fuerzas que habían apoyado el proceso revolucionario de 1642. Tras el reinado de Carlos II, la Restauración fue heredada por su hijo Jacobo. Pero de nuevo los parlamentarios en aquel instante se opusieron a la continuidad de los Estuardo y procedieron a derribar la dinastía. El nuevo Rey fue Guillermo de Orange, que vino de la vecina Holanda. Con él, y como principal valedor intelectual del modelo político que iba a implantarse, llegó a las costas inglesas John Locke. Su pensamiento constituye un excelente compendio de las ideas asumidas por gran parte de la élite social y política del país. Contractualismo, gobierno mixto y derechos naturales a la libertad, vida y propiedad son los principios expuestos por Locke en su *Segundo Tratado* sobre el Gobierno Civil, junto con la resistencia al poder en caso de que vulnerase las libertades inglesas. En su *Carta sobre la Tolerancia* (1689), el autor aboga también por el respeto a las distintas confesiones, si bien excluye a paganos y católicos y aboga por la punición de los “ateos”. Las ideas de Locke recogen influencias que abarcan desde Buchanan hasta los autores de la *Commonwealth* y contribuyeron en gran medida a forjar el origen ideológico del partido *whig*, cuyos primeros cimientos ya habían sido ubicados por su mentor Shaftesbury⁹¹⁵.

⁹¹⁴ Con alguna excepción, como, por ejemplo, Shaftesbury con su Carta de Carolina. Vid. *supra*, pg. 194, nota 721.

⁹¹⁵ También en algunos episodios históricos durante la Restauración pudieron advertirse emparentamientos, posiblemente porque los iniciadores del “whigismo” se apoyaban en una base social que parcialmente había pertenecido a los *levellers*. Shaftesbury creó en Londres el Club de la Cinta Verde en 1675 (Hill, 1961, pg. 259) y durante la rebelión de Monmouth contra Carlos II, en 1685, algunos de los sublevados portaban este color (Cook, op. cit, pg. 357).

Los *whigs*, aun apoyando el modelo de gobierno mixto, argumentaron siempre a favor de la hegemonía parlamentaria dentro del sistema, amparados en el concepto político contractual. Por el contrario, el partido *tory* defendía el reforzamiento de la Corona y sus prerrogativas. La pugna entre ambas corrientes recorrió varias décadas y vió elevarse el gobierno de gabinete impulsado por Robert Walpole, Primer Lord del Tesoro entre 1721 y 1749. A partir de ese momento se apuntala una parlamentarización de la monarquía inglesa, que permitiría gobernar al Primer Ministro con aquellos compañeros de Gabinete seleccionados por él, siempre que contara con la confianza parlamentaria.

Pero lo más importante para lo que luego fue el nacimiento del imaginario político norteamericano fue que la corriente *whig* daría origen a un grupo de descontentos con la política corrupta de aquel político y que serían denominados *radical*, *old* o *real whigs*. A través de ellos es como quedó reforzada la tradición de los republicanos ingleses del XVII, que ya había penetrado entre los colonos norteamericanos previamente, pues gracias a ellos fueron reeditadas sus principales obras. Entre sus filas estuvieron los periodistas John Trenchard (1662-1723) y Thomas Gordon (¿-1750) o el editor Richard Baron (¿-1776)⁹¹⁶, e incluso, posteriormente, Richard Price o Joseph Priestley. Estos dos últimos, de hecho, fueron coetáneos de los revolucionarios norteamericanos y simpatizaron con su causa⁹¹⁷. Todos ellos estuvieron más o menos emparentados con una perspectiva que podemos denominar “whigismo” radical, pero que no era un movimiento de estructura clara ni organizado, sino que más bien respondía a una tradición política con escasa representación en la

⁹¹⁶ Saldaña, Nieves: “Teoría política de John Milton (II): presencia e influencia en la América nacional y revolucionaria”, *Historia Constitucional - Revista Electrónica*, nº4, junio del 2003, <<http://hc.rediris.es/dos/articulos/html/milton/milton1.htm>>; párrafo 23.

⁹¹⁷ Al respecto, Robbins ha realizado un esquema explicativo bastante acertado, agrupando tres generaciones de *commonwealthmen*, como ella los llama (no confundir con los que denomino arriba *commonwealthers*, y que escribieron durante el Interregno), y siguiendo la denominación acuñada en 1819 en la propia Inglaterra. La primera generación desarrollaría su labor a mediados del siglo XVIII y empezaría su andadura con *Account of Denmark* (1693), de Robert Molesworth (1656-1725). Finalizaría con la última de las *Cato's Letters* (1723), de Trenchard y Gordon, y los tres volúmenes de los *Works* de Walter Moyle, aparecidos entre 1726 y 1727. Aparte de los citados, formarían parte de este grupo, hombres como Andrew Fletcher (1655-1716), John Toland (vid. *supra*, nota 528, pg. 140) y Matthew Tindal (1657-1733). En esta etapa fueron publicados, asimismo, y concretamente entre 1697 y 1701, trabajos anteriores de Milton, Ludlow, Sidney y Harrington. Los autores del período pretendían, entre otros cambios, un sistema federal para el Reino Unido, la reforma parlamentaria y una tolerancia religiosa mayor. Carecieron del apoyo de los *whigs* oficiales, motivo por el que serían denominados *real* u *old whigs*. La segunda generación de los *commonwealthmen* estuvo formada por autores como Francis Hutcheson (1694-1746), Henry Grove (1684-1738), Isaac Watts (1674-1748) o Edmund Law (1703-1787). Aprendieron de ciertos maestros de Glasgow y centros académicos de Cambridge y Warrington. Durante su período se continuaron editando los cánones de la tradición, estudios sobre Harrington incluidos. La tercera generación de los *commonwealthmen* es la de los “radicales”: Richard Price (1723-1791), Joseph Priestley (1733-1804), los hombres de la *Society for Constitutional Information* (Robbins, *op. cit.*, pg. 3). Jacia 1779, en plena guerra con las trece colonias, en Inglaterra habían surgido varios grupos que favorecían la paz con América, y uno de ellos era esta Sociedad, dirigida por el parlamentario Charles James Fox, y que inició sus actividades en 1780 con un programa que apoyaba una extensa reforma política, incluyendo el voto secreto y las elecciones generales de carácter anual (*Encyclopedia Britannica*, <<http://original.britannica.com/eb/article-44906/United-Kingdom#483335.hook>>).

arena política inglesa, pero que no dejaba de jerecer influencia y autoridad en ella, a través de panfletos, libros, magisterio y ediciones de clásicos republicanos. Pese a que se les quiso emparentar con el extremismo antimonárquico, lo cierto es que todos se proclamaban fieles a la Revolución Gloriosa y su protesta se dirigía más bien a corregir los derroteros que había tomado y que la alejaban de sus orígenes ideológicos, la llamada “corrupción” del sistema inglés, respaldada por los jefes *whigs* a partir del ascenso de Jorge I en 1716. El influjo de la Isla se mantendría, por tanto, sólo gracias a los llamados *real whigs*, una facción más radical de la tendencia y crítica con su rumbo político. Aquí hay una herencia republicana, que trae de la mano la reivindicación de la independencia del *freeman* frente a cualquier poder corrupto, aunque fuera el Parlamento, y que calará en los habitantes del otro lado del Atlántico. La misma que había hecho hablar a los *levellers*, en sus *Agreements*, de su intención de impedir “interés corrupto alguno o ventaja particular”⁹¹⁸.

Dados los distintos contextos políticos en los que estos *commonwealthmen* se moverían, sus reivindicaciones también oscilarían en realizar diferente hincapie según las exigencias y posibilidades del momento: asambleas anuales, redistribución de circunscripciones, ampliación de sufragio, libertad religiosa, derechos a salvo del Parlamento, reducción de la prerrogativa real, etc. Lo más importante es subrayar que su influencia en los colonos americanos fue muy amplia, reforzando así buena parte de su utillaje ideológico. Además, y través de ellos, los principales jefes de la rebelión americana retomaron la perspectiva política de un pasado republicano que no habría permanecido en el olvido durante la vida colonial. John Adams, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin o Thomas Paine, entre otros, conocían los textos de aquellos autores del Interregno⁹¹⁹, a quienes se añadieron otras influencias posteriores, como las de los propios *commonwealthmen*, Locke o Montesquieu.

En consecuencia, y dado lo expuesto, conviene que el trabajo aborde ahora la génesis del movimiento *whig* y su posterior deriva. El primer episodio destacable en su trayectoria será la Gloriosa de 1688, pero antes hay que examinar asimismo el contexto de la Restauración.

II.1.2.1.a) La aparición de los *whigs* en Inglaterra: de la Restauración a la Gloriosa

Como ya se ha indicado antes, las tensiones políticas originadas en el gobierno de la *Commonwealth*, sobre todo a raíz de la desaparición de su principal impulsor,

⁹¹⁸ Sharp (ed.), *op. cit.*, pg. 170.

⁹¹⁹ Saldaña, 2003, *passim*.

Oliver Cromwell, engendrarán un periodo de inestabilidad sólo aparentemente paralizado tras la llegada de Carlos II al trono. Pero durante su reinado no desaparecieron los conflictos entre el Parlamento y la Corona. El pasado más inmediato había demostrado que la dinastía Estuardo en sí misma era un elemento prescindible para el sistema político inglés. La *gentry* del país había aceptado el regreso de un monarca como necesidad derivada de los enfrentamientos entre facciones y la perpetua inquietud del ejército. Pero también percibido con claridad que las tareas de centralización nacional necesarias para el desarrollo económico y la prosperidad del país no dependían necesariamente de un rey. La *Commonwealth*, se quisiera reconocer o no, y pese a su extinción, había resultado exitosa en alcanzar numerosos objetivos. Cromwell y sus soldados habían sometido Irlanda y Escocia y fortalecido la política exterior inglesa frente a las potencias católicas e incluso frente a otras protestantes de carácter rival, como las Provincias Unidas. Y no se habían producido cambios revolucionarios serios de tipo social que hubieran puesto en peligro las ambiciones de aquella *gentry*. La conciencia ideológica *nacional*, ese puñado de referencias culturales, lingüísticas, jurídicas y religiosas que conformaba el país inglés, proseguía asentada sobre un suelo firme.

En tales circunstancias, era lógico que los parlamentarios no tuvieran el mismo temor a Carlos II que el que habían padecido (aunque a veces parece que en un grado muy modesto) frente a sus antecesores dinásticos. El juicio y ejecución de Carlos I no acaecieron en territorio inglés sin dejar importantísimas secuelas. En esta experiencia, y pese a sus distintas posiciones, iban a coincidir todos aquellos que ocuparon luego escaños en las Westminster. De hecho, durante este período de la Restauración arrancarían de aquel rey numerosas concesiones, alguna de ellas significativa en la historia constitucional moderna. A ello le añadían el máximo interés en que se garantizara el orden y la seguridad en el país, sin miedo a nuevas convulsiones que hicieran peligrar sus bienes y expectativas. Los enemigos de esa tranquilidad eran los católicos que había en Inglaterra y sus tierras conquistadas, siempre puestos en relación con complots, ficticios o no, y supuestamente dirigidos por potencias extranjeras “papistas”, así como los puritanos o disidentes religiosos, propensos a dejar un reguero de teorías e ideas que incitaban al desorden social. Si la Corona servía a los propósitos de obtener estabilidad, tanto exterior como interior, bienvenida fuera.

Carlos II obtuvo el respaldo del hombre fuerte del ejército en aquel año de 1660, el general Monk, mediando un documento firmado por él, la Declaración de Breda, con la cual el monarca se comprometía a un perdón generalizado para todos aquellos que hubieran combatido contra los Estuardo y la tolerancia religiosa con

todos los grupos protestantes⁹²⁰. Al mismo tiempo, afirmaba respetar los cambios en la propiedad producidos desde el ascenso parlamentario de los cuarenta⁹²¹. En aquellos momentos se hallaban ocupando escaños los miembros del *Rump* que unos cuantos años antes habían sido expulsados de Westminster, quienes decidieron llamar al rey. Éste acudió al llamamiento en mayo y fue recibido muy bien por Monk y los suyos. El Parlamento, entonces denominado *Parliament Convention*, dio vía libre al nuevo régimen y se disolvió en diciembre.

Al año siguiente se convocaría otro nuevo, que además durará nada menos que dieciocho años (1661-1679). Sus componentes tendían a posturas conservadoras, de carácter anglicano. Las primeras medidas aprobadas con su consentimiento constituyeron un paquete conocido como “Código Clarendon”, a causa de que habían sido impulsadas por el principal ministro del rey y que era Edward Hyde (1609-1674), conde de Clarendon. Entre ellas podemos encontrar la *Uniformity Act* de 1662 (unificando el culto religioso anglicano con nuevas normas⁹²²), la *Militia Act* (de 1662 también, y con la cual el rey recupera el mando del ejército a condición de que sean excluidos de él los católicos)⁹²³, la *Conventicle Act* (de 1664, que permite el culto a los no conformistas sólo en privado⁹²⁴) y la Ley de las Cinco Millas (de 1665, con penas para ciertas actividades de predicadores protestantes heterodoxos⁹²⁵). La *Triennial Act* (1664), que establecía elecciones trienales para los escaños parlamentarios⁹²⁶, nunca resultó cumplida, siquiera en grado alguno. Muchos disidentes religiosos se vieron obligados a marchar a al Nuevo Mundo. Desde luego, el catolicismo no era admitido.

⁹²⁰ Martínez, *op. cit.*, pg. 137. El monarca era de educación católica en teoría, pero de talante escéptico.

⁹²¹ “Y porque, en las continuas confusiones de tantos años, y de tantas grandes revoluciones, muchas concesiones y compras de propiedades se han hecho para y por oficiales, soldados y otros, quines las poseen ahora, y que pueden efectuar acciones legales según sus diversos títulos, deseamos igualmente que tales diferencias, y todas las cosas que hagan referencia a tales concesiones, ventas y compras, sean determinadas en el Parlamento, que puede encontrar la justa satisfacción de todos los hombres que están implicados”. Martínez, *op. cit.* pg. 144. Lo cierto es que luego Carlos II recuperaría tierras para la propia Corona, la Iglesia y algunos realistas, pero no alcanzarían ya ni de lejos a devolver aquellas que se habían perdido en el transcurso de las guerras civiles por las instituciones y partidarios del Rey (Hill, 1961, pg. 218).

⁹²² Ley de Uniformidad. Desde 1549 se habían dictado varias. La de 1662 imponía un nuevo libro revisado de oraciones, junto con otra liturgia también remozada. Los predicadores que no se plegaran a ella, debían abandonar su parroquia y la Iglesia anglicana. Cook, *op. cit.*, pp. 494-95.

⁹²³ Matteucci, *op. cit.*, pg. 116.

⁹²⁴ Convertía en ilegal la asistencia de cualquier persona de más de 15 años de edad al culto realizado en reuniones de más de cinco personas, y sin utilizar el Libro de Oraciones anglicano y su liturgia. Las penas iban de la multa al exilio, pasando por el encarcelamiento. Martínez, *op. cit.*, pg. 154.

⁹²⁵ A los ministros expulsados bajo las condiciones establecidas en la Ley de Uniformidad, y otros predicadores sin licencia que rechazaran jurar la ilegalidad de la resistencia y también renunciar a la alteración del gobierno, tanto en la Iglesia como en el Estado, se les prohibía residir a menos de cinco millas de su anterior parroquia o de cualquier ciudad o pueblo, así como ejercer de maestros. La pena era de cuarenta libras. Martínez, *op. cit.*, pg. 154.

⁹²⁶ Vid. Matteucci, *op. cit.*, pg. 116.

En 1667 caerá Clarendon, de resultas de un *impeachment* que los parlamentarios van a presentar contra él. Su causa aparente fue la pretensión de éstos de examinar los libros contables sobre la utilización de fondos para la guerra contra Holanda. A continuación, Carlos II inicia una política peligrosamente cercana a los viejos enemigos de la nación. Procede a aupar en el gobierno a un grupo de personas con simpatías hacia Francia y que contaba en su seno con varios católicos, conocido popularmente como *Cabal* (o “la Cábala”) ⁹²⁷. Los derroteros de su política condujeron a que en 1673 Inglaterra se encontrara de nuevo en guerra con Holanda, pese a la bancarrota estatal del año anterior. Dos días antes de declararse la guerra, por añadidura, Carlos II había suscrito una Declaración de Indulgencia para los católicos y los disidentes protestantes ⁹²⁸, y que dejaba en suspenso la ejecución de las leyes penales contra ellos, dimanadas del Código Clarendon.

Pero también en 1673 se conoció el tratado secreto entre el monarca y el francés Luis XIV con el fin de que este último proporcionara soldados y fondos para gobernar sin restricciones y como príncipe absoluto, hecho que confirmó los peores temores de quienes sospechaban de la política exterior del momento. La reacción parlamentaria supuso la aprobación de una *Test Act* (o Ley de Pruebas) en ese mismo año ⁹²⁹, que pretendía impedir el intento de reclutar para el ejército a católicos y puritanos formulado implícitamente con la Declaración de Indulgencia, aboliendo las leyes penales contra los no anglicanos ⁹³⁰.

A continuación entra en escena en 1674 Thomas Osborne, Conde de Danby, quien intenta apaciguar la difícil citación internacional, obteniendo el matrimonio de María, hija del Duque de York ⁹³¹ y sobrina de Carlos II, con Guillermo de Orange (1677). A pesar de ello, este ministro principal del monarca inglés va a caer en 1679, como fruto de diversas tensiones impostergables para el rey ⁹³². Así, en el año anterior un tal Titus Oates había denunciado la supuesta existencia de un complot papista contra la nación, y por aquel entonces se difundían rumores sobre otro proyecto del

⁹²⁷ Matteucci, *op. cit.*, 115.

⁹²⁸ Hill, 1961, pg. 219.

⁹²⁹ Matteucci, *op. cit.*, pp. 115 y 116. La *Test Act* exigía que para ocupar cargos públicos y magistraturas, incluidas las de carácter militar, se participara en el rito eucarístico anglicano, que repudiaba la doctrina de la trasustanciación. Asimismo, debía prestarse juramento de lealtad al Rey como cabeza del Estado y de la Iglesia nacional. Estuvo vigente hasta 1829 (Cook, *op. cit.*, pg. 301), que fue cuando los católicos obtuvieron la igualdad en sus derechos civiles con los protestantes (ibid., pg. 186). El enconamiento inglés contra la amenaza irlandesa había sido, evidentemente una de las causas de que la completa libertad religiosa en el país no se lograra hasta ese momento, ya bien entrados en el siglo XIX.

⁹³⁰ Matteucci, *op. cit.*, pg. 116. En concreto, el texto se refiere a los “no conformistas y recusantes” (Martínez, *op. cit.*, pp. 156-57). Los primeros, disidentes protestantes del anglicanismo, y los segundos, quienes se negaban a asistir a los servicios de la Iglesia anglicana, que en muchas ocasiones eran católicos (vid. *recusant*, en *Webster Dictionary*, *op. cit.*, y Cook, *op. cit.*, pg. 424).

⁹³¹ Católico y conocido por gobernar con mano férrea una de las colonias norteamericanas.

⁹³² Matteucci, *op. cit.*, pg. 115.

mimo tipo auspiciado por el citado Duque de York, que además de hermano de Carlos II, era el aspirante más inmediato a sucederle⁹³³.

Como resultado de todos esos miedos más o menos fundados, el año 1678 contemplará la aprobación de una segunda *Test Act*, un tratado de paz con Holanda⁹³⁴, y el intento de ciertos parlamentarios de poner en marcha un *Bill of Exclusion*, proyecto de Ley para impedir que el hermano del rey pudiera ocupar el trono. Con él nacen los *whigs*, grupo político liderado por Shaftesbury⁹³⁵, y que pronto se mostrará como aglutinante de una tendencia afín a la tolerancia religiosa extendida los puritanos, a la supremacía parlamentaria por encima de la teoría sobre el derecho divino o hereditario de los reyes, al rechazo a los acuerdos con potencias europeas católicas y a la aproximación a los protestantes. Se trataba de una facción opuesta al grupo de Danby, los *tories*, formado sobre su antagonismo. Estos últimos sí se mostraban partidarios de la teoría sobre el derecho divino de los reyes y la no resistencia al monarca. Así que su afinidad era hacia el anglicanismo más ortodoxo y contrario al control de índole más estricto sobre aquél que deseaban ejercer sus rivales. Los *whigs*, por añadidura, eran representantes de clases urbanas y dedicadas al comercio a pequeña o gran escala, mientras que los *tories*, se identificaban con los terratenientes y propietarios rurales⁹³⁶. Pronto, sin embargo, convergerán ante la situación política del momento.

El último coletazo del *Parliament Cavalier* se produciría en 1679. Entonces los parlamentarios logran que se apruebe, antes de su propia disolución, el *Habeas Corpus Act*, una norma de gran importancia en la historia constitucional. Con ella se intentó poner coto a una serie de desmanes producidos por Carlos II y que habían estado dirigidos a acabar con varios de sus oponentes políticos⁹³⁷. El texto no vino a crear una institución nueva, pues el derecho al *habeas corpus*, que se erigía contra el arresto arbitrario, era ya de raíz inmemorial⁹³⁸, aunque hubiera sufrido varias transformaciones. Lo que ocurre es que, a fin de vulnerarlo, Carlos II y sus ministros habían estado disponiendo el traslado de sus prisioneros fuera de Inglaterra, con el

⁹³³ Mattínez, 140 y Matteucci, 115 y 116.

⁹³⁴ Martínez, 140 y 165.

⁹³⁵ Vid. *supra*, pg. 246.

⁹³⁶ Vid. Matteucci, pg. 114.

⁹³⁷ El texto comenzaba justificando su necesidad con la siguiente fórmula: “[c]onsiderando que los alguaciles, carceleros y otros funcionarios, bajo cuya custodia ha sido detenido algún súbdito del rey por asuntos criminales o supuestamente criminales, se retrasan mucho en cumplimentar los mandamientos del *habeas corpus* que se les dirigen, opiéndose con un seudónimo o varios al *habeas corpus* e incluso más, y con otros trucos para evitar la obediencia debida a tales mandamientos”. En Hierro, Llamas, Íñiguez y Peces-Barba (eds.), *op. cit.*, pg. 85.

⁹³⁸ Cfr. pp. 44 y 46, *supra*: se remontaba nada menos que a la Carta Magna, siendo reivindicado por la *Petition of Right* de 1628.

objeto de que no se aplicara⁹³⁹. Así que la Ley va a implicar un perfeccionamiento de la institución⁹⁴⁰.

El *Habeas Corpus Act* aparece en un principio como el canto de cisne del grupo parlamentario que había encabezado Shafestbury y que, pretendiendo impedir la sucesión del duque de York, había mostrado su simpatía por el de Monmouth, más proclive al entendimiento con los parlamentarios⁹⁴¹. Carlos II había hecho aquella última concesión, pero poco después y en el mismo año, 1679, se había mostrado contrario al *Bill of Exclusion* y eliminado así cualquier posibilidad de acuerdo con las sucesivas convocatorias parlamentarias de ese mismo año y los dos consecutivos⁹⁴².

⁹³⁹ “Punto XI: Y para prevenir encarcelamientos ilegales en prisiones de ultramar queda aclarado por la autoridad antes dicha que ningún súbdito de este reino que sea ahora o en el futuro habitante o residente en este reino de Inglaterra, los dominios de Gales o la ciudad de Berwick-upon-Tweed, podrá ser enviado como prisionero a Escocia, Irlanda, Jersey, Guernsey o Tangeir, ni a ninguna parte de las islas de la guarnición u otro lugar en ultramar, que estén ahora o en el futuro dentro de los dominios de Su Majestad o sus herederos sucesores, y que tales encarcelamientos quedan declarados ilegales, y que si alguno de dichos súbditos está o llega en el futuro a ser encarcelado de esta forma, tales personas podrán entablar una acción por detención ilegal, por tales detenciones, ante cualquiera de los tribunales de su Majestad contra la persona o personas por las que sean encarcelados, detenidos, puestos en prisión, enviados como prisioneros o transportados en contra del auténtico sentido de este Acta”.

⁹⁴⁰ “Siempre que una persona o personas lleven un *habeas corpus* dirigido a un alguacil o alguaciles, carcelero, o ministro, o a otra persona cualquiera, a favor de una persona bajo su custodia, y el mencionado escrito sea notificado al mencionado funcionario o dejado en la cárcel o prisión con cualquiera de los subordinados, guardianes o comisionados de los citados funcionarios o guardianes, que el referido funcionario o funcionarios, o sus subordinados, agentes o comisionados, en los tres días siguientes desde la notificación en la forma antedicha (salvo que la prisión referida sea por traición o felonía evidente y esté especialmente expresada en el auto de prisión), y bajo el pago o promesa de pago de los gastos del traslado del referido prisionero, que serán tasados por el juez o tribunal que expidió el mandamiento y anotados al final del mismo, no excediendo los doce peniques por milla, y bajo la seguridad dada por su propia fianza de pagar los gastos de regreso del prisionero si lo ordena el tribunal o juez ante el que sea llevado conforme al auténtico propósito de este Acta, y de que no se fugará por el camino, dará cumplimiento a tal mandamiento, llevará o mandará llevar la persona detenida o encarcelada ante el Lord Canciller o el Lord Depositario del Gran Sello de Inglaterra en ese momento, o ante los jueces o barones del referido tribunal que haya emitido el referido mandamiento, o ante cualquier otra persona o personas ante las que el referido mandamiento pueda cumplimentarse según su propia orden [...] Y si cualquier persona o personas permanecen arrestadas o detenidas, como antes se dijo, por un delito, salvo por traición o felonía claramente expresada en el auto de prisión, la persona o personas así arrestadas o detenidas (es decir, las personas no convictas o cumpliendo condena por un proceso legal), o cualquiera en defensa de ellas, tendrán derecho a recurrir o pedir, en el tiempo de vacación y fuera de plazo, al Lord Canciller o al Lord Depositario, o a cualquier juez de Su Majestad, de uno u otro tribunal, o a los barones de Hacienda [...] y los referidos Lord Canciller, lord Depositario, jueces o barones, o cualquiera de ellos, a la vista de la copia o copias del auto de prisión y detención, o bajo juramento de haber sido denegadas tales copias por las personas en cuya custodia se halla el prisionero, y con una petición por escrito hecha por esas personas u otras en su defensa testificada y firmada por dos testigos que hayan presenciado el momento de la entrega, tendrán obligación de expedir y otorgar un *habeas corpus* con el sello del tribunal al que pertenezca él como juez, dirigido al funcionario o funcionarios en cuya custodia está la persona detenida arrestada. Inmediatamente será cumplimentado ante el citado lord Canciller, Lord Depositario, juez, barón [...] y en su virtud, como se dijo, el funcionario, funcionarios, sus subordinados o guardianes, o sus comisionados, bajo cuya custodia se encuentre detenida o arrestada la persona, deberá traer tal prisionero o prisioneros, en los plazos antes limitados, ante los citados lord Canciller, Lord Depositario, jueces, barones o alguno de ellos [...] con contestación al mandamiento y a las verdaderas razones de la detención y arresto”. Hierro, Íñiguez, Llamas y Peces Barba, *op. cit.*, pg. 86. Debe recordarse que la justicia y la administración penitenciaria costaban dinero al preso. Cfr., *supra*, pg. 76. Sobre la “traición y felonía evidente” del principio: en estos supuestos, de todas formas, sí había ciertas salvaguardas para el prisionero, pues según el punto VI, debía ser juzgado de la manera más inmediata posible, y se indicaban plazos.

⁹⁴¹ El de Monmouth intentó en 1685 un levantamiento, resultando derrotado y decapitado. Vid. Matteucci, *op. cit.*, 118.

⁹⁴² Vid. Matteucci, *op. cit.*, pg. 115.

De hecho, el conflicto se vio agravado cuando el monarca desencadenó una persecución contra disidentes religiosos y puritanos en 1683, tras el complot de *Rye House*⁹⁴³ contra él. Después de la muerte de Carlos II en 1685, su hermano y sucesor fracasa en los intentos de aplacar el descontento. Por el contrario, Jacobo II contribuyó a que se exacerbara. Primero intentó manipular procesos electorales parlamentarios a su favor, y, después, yendo más allá, procedió a la disolución de la Asamblea. Asimismo, emprendió reformas con las que pretendía introducir al país en el ámbito del catolicismo, acercándose a las naciones de esta confesión religiosa. En 1688 se vio obligado a huir de Inglaterra⁹⁴⁴.

Los llamados “siete inmortales”⁹⁴⁵ reclamaron la venida de María y Guillermo de Orange, desde Holanda, a fin de que ocupara el trono inglés. Este último, en contacto con los dos partidos principales del país, los *whigs* y los *tories*, desembarca en la isla bajo su apoyo y consigue que un Parlamento Convención elegido y reunido tras la fuga de Jacobo vote una ley a favor de la sucesión de los Orange en febrero de 1689. Inmediatamente después, María y Guillermo suscriben un *Bill of Rights* o Declaración de Derechos aprobada por el Parlamento. En consonancia, éste aprueba un *Act of Recognition* confirmando que los titulares del trono de Inglaterra van a ser María y Guillermo de Orange, si bien indicando que su pretensión se apoyaba en la propia decisión parlamentaria y *no en derecho alguno de tipo divino o hereditario*. Quedando clara así, de esta forma, la supremacía de la Asamblea, cuya andadura había comenzado durante las Guerras Civiles inglesas⁹⁴⁶.

Resulta insoslayable la importancia del *Bill of Rights* para lo que luego sería la historia constitucional de los Estados Unidos de América. La idea de plasmar formalmente en un documento varios derechos entendidos como fundamentales tenía antecedentes más o menos remotos, como la Carta Magna, e incluso otros recientes, como la *Petition of Right* de 1628. Pero en esos casos la autoridad del monarca había estado presente con todos sus atributos, bien fuera como graciosa concesión, o como sujeto titular de las máximas potestades y al que se dirigía un ruego determinado. Con la Declaración, sin embargo, y pese a su aspecto formal a veces coincidente con las antiguas *petitions*, el Parlamento inglés está imponiendo a los Orange el respeto a ciertos derechos y libertades de los ingleses como condición para su acceso al trono.

⁹⁴³ “Casa del Centeno”. Se acusó a Algernon Sidney de participar en él, siendo condenado a muerte (cfr. pg. 174, *supra*). Por su parte, Shafestbury y Locke tuvieron que exiliarse (Matteucci, *op. cit.*, 118).

⁹⁴⁴ Vid. Matteucci, *op. cit.*, pp. 118 y 143. Sin embargo, fue favorable a un catolicismo proclive a la tolerancia religiosa y promulgó en 1687 una Declaración de Indulgencia que dejaba sin vigor en Código Clarendon. William Penn, quien en 1670 había escrito *Great Case of Liberty of Conscience*, se mantuvo leal a este monarca. Vid. Bravo Gala, Pedro (ed.), en la *Presentación* de Locke, John: *Carta sobre la Tolerancia*, *op. cit.*, pg. XL.

⁹⁴⁵ Así se llamó a los autores de la misiva, que eran Shrewsbury, Devonshire, Lumley, el obispo de Londres, Edward Russell, Henry Sidney y el ya citado línea atrás, Danby.

⁹⁴⁶ Vid. Matteucci, pg. 143.

Varios son los que contiene el documento y que luego pasarán a la tradición de similares textos en las colonias norteamericanas, así que conviene extraer los principales del *Bill*:

- que toda cobranza de impuestos para la Corona y para su uso, so pretexto de prerrogativa, sin el consentimiento del Parlamento, por un tiempo más largo y de manera distinta a como el Parlamento lo haya decidido, es ilegal.
- que es un derecho de los súbditos presentar peticiones al Rey, siendo ilegales las prisiones y procesamientos de los peticionarios.
- que la formación y sostenimiento de un ejército en el reino en tiempo de paz, sin el permiso del Parlamento, son contrarios a la ley
- que los súbditos protestantes pueden tener para su defensa armas, conforma a su condición, y permitidas por la ley.
- que las elecciones de los miembros del Parlamento deben ser libres
- que la libertad de palabra, de la discusión y de los actos parlamentarios no puede ser objeto de examen ante tribunal alguno, y en ningún lugar que no sea el Parlamento mismo
- que no pueden exigirse fianzas exageradas ni multas excesivas, ni imponerse penas crueles e inusitadas
- que la lista de los jurados elegidos debe ser constituida en buena y debida forma; que los jurados que decidan de la suerte de las personas en las cuestiones de alta traición deben ser propietarios libres [...]
- por último, que para remediar todas esas quejas y agravios, reformar las leyes y procurar su observancia, habrán de reunirse con frecuencia Paramentos.⁹⁴⁷

El documento, pues, y como se deduce de lo ya expuesto en anteriores páginas, es en realidad un compendio de derechos y libertades que el Parlamento

⁹⁴⁷ “* That levying money for or to the use of the Crown by pretence of prerogative, without grant of Parliament, for longer time, or in other manner than the same is or shall be granted, is illegal;

* That it is the right of the subjects to petition the king, and all commitments and prosecutions for such petitioning are illegal;

* That the raising or keeping a standing army within the kingdom in time of peace, unless it be with consent of Parliament, is against law;

* That the subjects which are Protestants may have arms for their defence suitable to their conditions and as allowed by law;

* That election of members of Parliament ought to be free;

* That the freedom of speech and debates or proceedings in Parliament ought not to be impeached or questioned in any court or place out of Parliament;

* That excessive bail ought not to be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted;

* That jurors ought to be duly impanelled and returned, and jurors which pass upon men in trials for high treason ought to be freeholders [...]

And that for redress of all grievances, and for the amending, strengthening and preserving of the laws, Parliaments ought to be held frequently”. En la *Liberty Library de Constitution Society*, <http://www.constitution.org/eng/eng_bor.htm>.

había defendido tradicionalmente contra los abusos del monarca⁹⁴⁸, pero ahora formulado de manera y bajo una situación novedosas. Un texto con el cual se identificarían siempre los *whigs*. Su voluntad de poner freno a la prerrogativa real se amparaba de manera sólida en el *Bill of Rights* y se puede afirmar, que si bien el ascenso de los Orange al trono de Inglaterra fue respaldado también por los *tories*, esta declaración se ha atribuido históricamente al esfuerzo y pretensiones de la facción política que había encabezado Shafestbury. El *Bill of Rights*, asimismo, fue completado con disposiciones como la *Mutiny Act* (también de 1689), que exigía la renovación anual del control sobre el ejército concedido al monarca, la *Toleration Act* (del mismo año), que supuso respetar la libertad de culto para casi todos los protestantes, pero excluyendo a los católicos⁹⁴⁹, o la *Triennial Act* (1694), que obligaba al rey a convocar elecciones parlamentarias cada tres años, así como a celebrar sesiones frecuentes⁹⁵⁰. El *Act of Settlement* de 1701, posteriormente, culminaría el proceso constitucional, al establecer la inamovilidad de los jueces, salvo por mal comportamiento y siempre que así lo establecieran las cámaras parlamentarias⁹⁵¹, así como el impedimento para que la Corona perdonara a quienes estuvieran sujetos a *impeachment* de los Comunes. Por añadidura, la obligaba a despachar asuntos con las firmas del Consejo Privado⁹⁵² y establecía su línea de sucesión⁹⁵³.

⁹⁴⁸ Así parece quedar reflejado en el encabezamiento del *Bill*: “[a]nd thereupon the said Lords Spiritual and Temporal and Commons, pursuant to their respective letters and elections, being now assembled in a full and free representative of this nation, taking into their most serious consideration the best means for attaining the ends aforesaid, do in the first place (as their ancestors in like case have usually done) for the vindicating and asserting their ancient rights and liberties declare”. *Id.*

⁹⁴⁹ Denominada “Ley para eximir a los súbditos protestantes de Sus Majestades que disienten de la Iglesia de Inglaterra de los castigos que les imponen ciertas leyes”. Eximía a los protestantes no anglicanos de las limitaciones del Acta de Uniformidad, imponiéndoles a cambio un juramento de fidelidad y rechazar los que se entendía como “supersticiones romanas”, ordenando a los pastores suscribir la mayoría de los Artículos de la Iglesia de Inglaterra (Bravo Gala, ed., en Locke, *Carta sobre la Tolerancia*, *op. cit.*, pg. XLII). Los católicos quedaban excluidos así de aquellos cargos, pero también los unitarios, grupo no conformista que creía en la unicidad de Dios y que, por tanto, resultaba ser antitrinitario (Cook, *op. cit.*, 496).

⁹⁵⁰ Reforzada al año siguiente con otra que permitía seguir funcionando al Parlamento, aun en caso de que falleciera el rey. Vid. Matteucci, pg. 144.

⁹⁵¹ Apartado III: “That no person who has an office or place of profit under the King, or receives a pension from the Crown, shall be capable of serving as a member of the House of Commons; That after the said limitation shall take effect as aforesaid, judges commissions be made quamdiu se bene gesserint, and their salaries ascertained and established; but upon the address of both Houses of Parliament it may be lawful to remove them;” (“que ninguna persona podrá al mismo tiempo disponer de cargo, puesto o beneficio dependientes del rey, o recibir pensión de la Corona, perteneciendo simultáneamente a la Cámara de los Comunes; y que asimismo, los jueces serán inamovibles salvo mal comportamiento, y sus salarios públicos y fijos; de manera que solo por indicación de ambas Cámaras será posible destituirles legalmente). Vid. el texto completo en *British History On Line*, <<http://www.british-history.ac.uk/report.aspx?compid=46986>>. Para los *whigs*, el Parlamento Caballero (*Cavalier Parliament*) había permitido que los cargos judiciales fueran mera propiedad y garantizado nuevos poderes para la monarquía (Worden, en Wootton, ed., *op. cit.*, pg. 141).

⁹⁵² *British History On Line*, *id.*

⁹⁵³ *Id.*, apartado I.

II.1.2.1.b) Locke como teórico de la “revolución” *whig*

En 1680 fue publicada póstumamente⁹⁵⁴ en Inglaterra la obra *Patriarcha: A Defence of the Natural Power of Kings against the Unnatural Liberty of the People*. Este libro estaba dirigido contra católicos y puritanos, intentando legitimar la autoridad del monarca y desvirtuar las teorías que aquéllos mantenían para fundamentar el derecho de resistencia, bien fuera de ascendencia escolástica, bien protestante. El rey era así la máxima magistratura en el gobierno de iglesia y nadie debía oponérsele. Filmer se aparta de la teología escolástica y del iusnaturalismo y se basa en la supuesta analogía entre la autoridad paterna y la del soberano. Igual que el padre tiene la suprema potestad sobre su hijo, el rey la posee sobre su pueblo; la diferencia se produce por su extensión, más que por otro elemento. El monarca es quien en última instancia el mando de las funciones legislativa, ejecutiva y judicial. Para la primera, en todo caso, dispondrá de un parlamento a fin de aconsejarle, pero que no desempeñará otro cometido de mayor relieve. Para la segunda función, la ejecutiva, goza de su propia administración. Asimismo, y con respecto a la tarea judicial, ninguna de las Cámaras actúa como último tribunal de apelaciones, ni siquiera juntas; el rey imparte justicia mediante la delegación en jueces y tribunales que nombra. Y las libertades han sido graciosamente *concedidas* por el soberano.

Frente a estas ideas reaccionaron varios autores destacables de la época, entre los que destacaron Algernon Sidney, que escribió sus *Discourses* con el texto filmeriano como antagonista, y John Locke, que elaboraría el Segundo *Treatise of Government* entre 1679 y 1683⁹⁵⁵, publicado un año después de la Gloriosa de 1688. Sobre Sidney ya se ha hablado con cierta extensión, y bien merecida sin duda⁹⁵⁶, pero cabe preguntarse por qué la obra de este autor ha sido superada en fama por la de Locke, cuando tantas concomitancias existían entre ellos. Probablemente la exposición de este último fuera más sucinta y menos literaria, constituyendo así razón importante para explicar el fenómeno, pues Sidney padecía de un estilo algo más grandilocuente y referido a una época anterior⁹⁵⁷. Y también es cierto que los *Discourses* nunca

⁹⁵⁴ Los defensores de la Restauración, en un momento especialmente crítico, a causa de la Crisis de la Exclusión (cfr. *supra*, pp 163 y 164), intentaron rescatar viejos escritos como éste. El manuscrito llevaba en el olvido unos treinta años (vid. Sabine, *op. cit.*, pp. 378-79). Había circulado durante las Guerras Civiles (Dorado, *op. cit.*, pg. 431, nota 3).

⁹⁵⁵ Dorado, *op. cit.*, pg. 432, nota 3.

⁹⁵⁶ Dada su contribución al pensamiento que aparece en estas páginas. Cfr. I.3.6, *supra*.

⁹⁵⁷ “En las obras de Sidney y Neville se escuchaban, fuertemente, los ecos de la cultura de los años cuarenta, del contractualismo de origen monarcómaco de Milton, del republicanismo renacentista (con alguna vena barroca) de Harrington: el *Segundo Tratado*, por el contrario, aun permaneciendo atento a los problemas específicos del constitucionalismo inglés, está enteramente construido según la sintaxis del contractualismo clásico, que tiene en la cultura europea del seiscientos su máxima expresión” (Matteucci, *op. cit.*, 128).

llegaron a ser terminados⁹⁵⁸ y que fueron publicados en fecha bastante más tardía que los Tratados, en 1698⁹⁵⁹. Asimismo, la obra de Locke tuvo también mejor fortuna por mostrar un modelo constitucional que engarzaba directamente con la construcción política puesta en marcha por los *whigs* a partir de 1688, aspecto en el que resulta fácil reparar si advertimos que fue publicada una año después⁹⁶⁰. En cualquier caso, lo que está claro es que ambos mantenían una coincidencia muy importante en sus postulados, especialmente en su contractualismo, y que los dos intervinieron en la elaboración de cartas constitucionales en América⁹⁶¹, influyendo también en los líderes de la independencia norteamericana, como se verá y demuestran numerosos documentos. Con respecto a este último punto, cabría decir que Sidney ayudó a mantenerles en contacto con el viejo discurso republicano y Locke con la escena política abierta en Inglaterra tras la Revolución Gloriosa.

Locke mantuvo un diseño político íntimamente relacionado con varias premisas filosóficas. No debemos olvidar que fue el autor del *Ensayo sobre el Entendimiento Humano*⁹⁶². Para Locke la mente es una *tabula rasa* y el ser humano trabaja sobre ella a través de las operaciones de combinación, división, generalización y abstracción⁹⁶³. La ley natural está fundada en la voluntad divina y el hombre la descubre a través de sus sentidos, de su percepción. Resulta así cognoscible, pero no a través de unas ideas innatas⁹⁶⁴, sino mediando un ejercicio activo de la capacidad intelectual. En este sentido, *la tradición no puede ser un argumento por sí solo valioso para defender cosa alguna*. “Locke se refiere al concepto de razón como facultad de extraer conclusiones a partir de principios ya establecidos y que entran en nosotros a través de los sentidos: de la ley de la naturaleza podemos adquirir conocimiento, sirviéndonos del modo justo de aquellas facultades que hemos recibido de la naturaleza”⁹⁶⁵. De manera que el autor inglés sí piensa que existe una ley natural, pero intenta desvincularla de cualquier tipo de tradición. En este sentido, el modelo especulativo que extrae resulta muy similar al de Hobbes (1588-1679) en su *Leviathan* (1651). Sin embargo, surgen inmediatas diferencias entre uno y otro.

La distinción aparece ya cuando se examina qué entienden por “ley natural” y “estado de naturaleza”. Comenzando con la segunda, este concepto incluía

⁹⁵⁸ Dorado, *op. cit.*, pg. 432, nota 3.

⁹⁵⁹ Se supone fueron escritos por Sidney entre 1680 y 1683, momento en el que sería preso y luego juzgado y ejecutado (Sabine, *op. cit.*, pg. 378).

⁹⁶⁰ En 1690, la versión no anónima. Es la fecha de referencia para Dorado, *op. cit.*, pg. 432, nota 3.

⁹⁶¹ Vid. *supra*, pg. 194, nota 721, respecto a Locke, y pg. 243, nota 906, en relación con Sidney.

⁹⁶² *Essay concerning Human Understanding* (1689). El impuso inicial del texto databa de 1671. Vid. Audi, Robert (ed.): *Diccionario Akal de Filosofía*, Madrid, Akal, 2004; trad. cast. de Huberto Marraud y Enrique Alonso, de *The Cambridge Dictionary of Philosophy*. Pg. 610.

⁹⁶³ *Ibid.*, pg. 611.

⁹⁶⁴ Matteucci, *op. cit.*, 129. En esto, una vez más se acerca a Aristóteles y no a Platón.

⁹⁶⁵ *Id.*

situaciones que en pasado habían sido consideradas idílicas y que arrancaban del paraíso terrenal mencionado en la Biblia o de los *Trabajos y Días* de Hesíodo. Se trataba de imaginar una situación presocial y/o prepolítica en la que los hombres no se vieran perjudicados por los inevitables males de su convivencia específica, ubicada en tiempo y lugar determinados. Pero, poco a poco, este estado se va percibiendo como deficiente o simplemente perjudicial, a medida que el hombre europeo comienza a tener un cierto dominio sobre su entorno y las condiciones en que vive, gracias al avance técnico que se va pergeñando ya a partir de la época renacentista. La diferencia, así, entre un mundo civilizado y otro anclado en la barbarie, supera las expectativas que los griegos podían haber mantenido en su habitual distinción primigenia. Pero si bien ese estado de naturaleza podía ser percibido por los ingleses del siglo XVII como negativo, no lo era en la misma medida ni convenía abandonarlo por idénticas causas para todos sus pensadores. El punto de disensión, así, entre Hobbes y Locke, va a ser la noción antropológica que unen ambos con aquel estado. Si bien los dos parten de una premisa individualista, ni el planteamiento, ni las conclusiones de sus hipótesis, son iguales.

Para empezar, el estado de naturaleza aparece con unos rasgos distintos. Es cierto que Locke entiende, como Hobbes, que se trata de

un estado de perfecta libertad para que cada uno ordene sus acciones y disponga de posesiones y personas como juzgue oportuno, [...] sin pedir permiso ni depender de la voluntad de ningún otro hombre.

Es también un estado de *igualdad*, en que todo poder y jurisdicción son *recíprocos*⁹⁶⁶, y donde nadie los disfruta en mayor medida que los demás.⁹⁶⁷

Pero también es verdad que las consecuencias de esta descripción no van a ser tan inmediatamente negativas como en Hobbes, pese a sus concordancias, ya que mientras que sin una autoridad decisoria, para este último no existe la posibilidad de disfrutar de bien alguno⁹⁶⁸, Locke opina que:

Mas aunque éste sea un estado de libertad, *no es, sin embargo, un estado de licencia*. Pues aunque, en un estado así, el hombre tiene una incontrolable libertad de disponer de su propia persona o de *sus posesiones*, no tiene, sin embargo, la libertad de destruirse a sí mismo, *ni*

⁹⁶⁶ Reciprocidad también existente en Hobbes, como en cualquier teoría contractualista.

⁹⁶⁷ Capítulo II (*Del estado de naturaleza*). Parágrafo 4, pg. 36.

⁹⁶⁸ Por supuesto, tampoco de la propiedad, de la que se dispone “solamente por el poder soberano, sin cuya protección cualquier otro hombre tendría igual derecho a la misma” (cap. XXIX, “De las causas que debilitan o tienden a la desintegración de un estado”, pg. 17).

tampoco a ninguna criatura de su posesión, excepto en el caso de que ello se requirido por un fin más noble que el de su propia preservación. El estado de naturaleza tiene una *ley de naturaleza* que lo gobierna y que obliga a todos; y *la razón, que es esa ley*, enseña a toda la humanidad que quiera consultarla, que siendo todos los hombres *iguales e independientes*, ninguno debe dañar a otros en lo que atañe a la vida, salud, libertad o posesiones. Pues como los hombres son todos obra de un omnipotente e infinitamente sabio Hacedor, y todos siervos de un señor soberano enviado a este mundo por orden suya y para cumplir su encargo, todos son propiedad de quien los ha hecho, y han sido destinados a durar mientras a él le plazca, y no a otro⁹⁶⁹[...] *Por la misma razón que cada uno se ve obligado a preservarse a sí mismo y a no destruirse por propia voluntad*, también se verá obligado a preservar al resto de la humanidad en la medida en que le sea posible, cuando su propia preservación no se ve amenazada por ello; y *a menos que se trate de hacer justicia con quien haya cometido una ofensa*, no podrá quitar la vida, ni entorpecerla, ni poner obstáculo a los medios que son necesarios para preservarla, atentando contra la libertad, la salud, los miembros o los bienes de otra persona.⁹⁷⁰

La razón que impera en el estado de naturaleza (y ley natural, por tanto), sirve para justificar la autopreservación, pero también para no causar daño a los demás. Se trata de una ley “que mira por la paz y la preservación de *toda* la humanidad”, no de individuos aislados al estilo del modelo atomista hobbesiano, inserta en una relación de reciprocidad que conviene a tal propósito. Y resulta que, al ser una ley, *necesita de un brazo ejecutor*; en un primer momento, el propio particular agraviado⁹⁷¹. Pero ocurre entonces que surge “la objeción de que no es *razonable* que los hombres sean jueces de su propia causa”. Así que por lo tanto, Locke tiene que conceder que “el *gobierno* civil ha de ser el remedio contra las inconveniencias que lleva consigo el estado de naturaleza”. La *imperfección* de tal estado, pues, obliga a instituir un gobierno entre los hombres.

Pero Locke, aquí diferenciándose de nuevo de Hobbes, viene a establecer los pilares del estado constitucional con su separación de potestades. Así, señala que el gobierno citado no puede ser encabezado por una persona que, “con mando sobre la multitud”, tenga “la libertad de juzgar su propia causa y de hacer con sus súbditos lo que le parezca”⁹⁷². Si tal cosa ocurriera,

⁹⁶⁹ Nótese la raíz cristiana de esta teoría, aunque pudiera tener antecedentes en el estoicismo.

⁹⁷⁰ Parágrafo 6. Pp. 37 y 38.

⁹⁷¹ Esta ley, en consecuencia permite “que cada hombre, en virtud del derecho que tiene de preservar al género humano en general, pueda contener o, si es necesario, destruir aquellas cosas que le sean nocivas, y castigar así a quien haya transgredido esa ley haciendo de este modo que se arrepienta de haberlo hecho [...] y disuadir con el ejemplo a otros para que tampoco lo cometan”. Parágrafo 8, pp. 39 y 40. Obsérvese las funciones reintegradora y preventiva de la pena que defiende Locke.

⁹⁷² Parágrafo 13, pg. 43.

Mucho mejor sería la condición del hombre en su estado natural, donde, por lo menos, los individuos no están obligados a someterse a la *injusta voluntad* del prójimo.⁹⁷³

El estado de naturaleza resulta imperfecto y hay que corregirlo, pero no se parte del vacío. Hay una ley natural que dicta al hombre lo que debe hacerse⁹⁷⁴. El ser humano ha de sortear con la razón ciertos peligros que conlleva el tomarse la justicia por su mano y que crearían una cadena de rencillas y crímenes, dando origen al “estado de guerra”⁹⁷⁵. Para frenarla debe existir un *árbitro*. Nótese que Locke distingue claramente entre *la ley y su ejecución*. Para Hobbes ambas se identifican con el soberano, que así cumple con el mandato expedido por sus previamente aterrorizados súbditos, de manera que se unen bajo su cetro razón y voluntad. Pero aquél opina que puede haber discordancia entre ellas cuando se juntan *en una sola persona*, dando lugar a *resultados injustos*⁹⁷⁶. Así que, aunque *en beneficio de todo el género humano*, debe crearse un *poder común* que administre justicia y consiga el respeto por las leyes, se someterá a varios *controles* a fin de resultar verdaderamente imparcial en su actuación. Así,

como, debido a la fragilidad de los hombres (los cuales tienden a acumular poder), éstos podrían ser tentados a tener en sus manos el poder de hacer leyes y el de ejecutarlas para así eximirse de obedecer las leyes que ellos mismos hacen; y como podrían también tener tentaciones de hacer las leyes a su medida y de ejecutarlas para beneficio propio, llegando así a crearse intereses distintos de los del resto de la comunidad y contrarios a los fines de la sociedad y del gobierno,

⁹⁷³ Id., pg. 44.

⁹⁷⁴ Locke entiende el estado de naturaleza de un modo menos terrible que Hobbes; para él “es un estado de paz, buena voluntad, asistencia mutua y conservación”, mientras que el de guerra es “de enemistad, malicia, violencia y mutua destrucción”. Solo que ocurre es que la línea fronteriza entre un estado y otro, si no hay gobierno civil que dirima conflictos, resulta ser *muy delgada*: “la fuerza, o la intención declarada de utilizar la fuerza sobre la persona de otro individuo allí donde no hay un poder superior o común al que recurrir para encontrar en él alivio, es el estado de guerra” (cap III, parágrafo 19, pg. 49), a lo que habría que añadir que “allí donde no hay lugar a apelaciones [...] por falta de leyes positivas y de jueces autorizados a quienes poder apelar, el estado de guerra continúa una vez que empieza” (id., pg. 49, es decir, que el estado de naturaleza es potencialmente de guerra (Ruiz Miguel, *op. cit.*, pg. 202), existiendo una diferencia de grado y una continuidad entre ambos, pese a que Locke no guarde la unidimensionalidad hobbesiana.

⁹⁷⁵ Cap. III. Que Hobbes dibuja como hipótesis y que sin embargo Locke apreciaba como realidad histórica y social (vid. Ruiz Miguel, *op. cit.*, pp. 198-99): “¿Dónde pueden encontrarse hombres que existan en un estado natural así? ¿Existieron alguna vez? A esta pregunta baste por ahora responder diciendo que, como todos los príncipes y jefes de los gobiernos independientes del mundo entero se encuentran en un estado de naturaleza, es obvio que nunca faltaron en el mundo, ni nunca faltarán hombres que se hallen en tal estado” (id., Cap II, parágrafo 14, pg. 44).

⁹⁷⁶ Locke se aparta del positivismo hobbesiano, como demuestra la siguiente cita: “siempre que se hace uso de la violencia o se cometer una injusticia, aunque estos delitos sean cometidos por manos de quienes han sido nombrados para administrar justicia, seguirán siendo violencia e injuria, por mucho que se disfracen con otros nombres ilustres o con pretensiones o apariencias de leyes” (parágrafo 20, pp. 49 y 50).

es práctica común en los *Estados bien organizados* (donde *el bien de todos*⁹⁷⁷ es debidamente considerado) que el poder legislativo sea puesto en manos de diversas personas, las cuales, *en formal asamblea, tiene cada una, o en unión con las otras*, el poder de hacer leyes; y *una vez que las leyes han sido hechas, la asamblea vuelve a disolverse*, y sus miembros son entonces simples súbditos, sujetos a las leyes que ellos mismos han hecho; lo cual es un nuevo y seguro modo de garantizar que tengan cuidado de hacerlas con la mira puesta en el bien público.⁹⁷⁸

Con lo cual ya podemos hablar de un poder legislativo, al que hay que sumar, por pura necesidad política, otro de carácter ejecutivo:

Pero como esas leyes que son hechas de una vez y en poco tiempo tienen, sin embargo, constante y duradera vigencia y necesitan ser ejecutadas y respetadas sin interrupción, es necesario que haya un poder que esté siempre en activo y que vigile la puesta en práctica de esas leyes y la aplicación de las mismas. De ahí el que los poderes legislativo y ejecutivo suelen estar separados.⁹⁷⁹

Es importante destacar que, de todos estos párrafos y otros del *Segundo Tratado*, se deduce fácilmente que Locke no está refiriéndose a una separación de poderes como la descrita luego por Montesquieu. Su división alude a dos de ellos, al ejecutivo y al legislativo, puesto que entiende que el judicial queda incluido en el primero. Pero es que, además, resulta que el legislativo puede compartirse, con lo cual el autor adapta su modelo racional sobre voluntad y ejecución a una realidad que ya conocemos, pues resulta que “es práctica común en los *Estados bien organizados* (...) que el poder legislativo sea puesto en manos *de diversas personas*, las cuales, *en formal asamblea, tienen cada una, o en unión con las otras*, el poder de hacer leyes”. Locke está aludiendo al sistema del *King in Parliament*⁹⁸⁰, aunque su perspectiva racionalista, poco propensa a la disertación histórica, pretenda eludir tal tradición. El poder legislativo es así desempañado por Lores, Comunes y Monarca, de manera compartida.

Asimismo, Locke no indica que el ejecutivo haya de ser encabezado de forma unipersonal, pese a las apariencias. Esto se demuestra con otros párrafos de su obra, en concreto cuando se refiere a la potestad federativa, que entiende unida a aquél. “Toda la comunidad viene a ser un solo cuerpo en estado de naturaleza con respecto

⁹⁷⁷ Que debe entenderse en un sentido más cercano a la sociedad estamental, atención: el bien de todos y cada uno de los segmentos sociales.

⁹⁷⁸ Capítulo XII: De los poderes legislativo, ejecutivo y federativo del Estado. Párrafo 143, pp. 150-151

⁹⁷⁹ Id, párrafo 144, pg. 151.

⁹⁸⁰ Así, dice algo más adelante que al “ejecutivo supremo”, se le puede encomendar “una doble misión -la de tener parte, tanto en la legislatura como en la suprema ejecución de la ley-”. Pp. 213 y 214.

a todos los demás Estados o personas que están fuera de dicha comunidad⁹⁸¹, por lo que aparece “un poder de hacer la guerra y la paz, de establecer ligas y alianzas, y de realizar tratos con todas las personas y comunidades fuera del Estado”. A este poder se le puede considerar “federativo”⁹⁸², resultando siempre casi unido al de ejecutar⁹⁸³, y ocurriendo además que “es mucho menos susceptible de regirse por previas y vigentes leyes positivas (...) y por eso ha de dejarse a la prudencia y sabiduría de *aquéllos* que tienen en sus manos la misión de administrarlo para el bien público”⁹⁸⁴. Lo que le preocupa a Locke aquí es la *fuerza*, en un sentido físico parecido al hobbesiano, de la que pueda disponer el ejecutivo a fin de acometer sus tareas. Esta preocupación, conectada asimismo con las circunstancias de tiempo y lugar que le tocaba vivir, parecen apoyar que el sujeto detentador de aquél sea un monarca como Guillermo de Orange. Pero el plural de “*aquéllos*” da lugar a duda. La ambigüedad al respecto, presente en todo el *Segundo Tratado*, se debe a que la construcción política lockeana pretende romper con sus connotaciones meramente locales y adquirir un tinte racionalista y universalizador. Locke ha detectado la tradicional distinción entre *gubernaculum* y *iurisdictio*⁹⁸⁵ y se dirige a su concreción bajo una nueva teoría política que sirva para los tiempos en que vive. El *imperio de la ley* asume un primer plano en su perspectiva, y con tal concepto, la asunción de que debe buscarse siempre un gobierno que se someta a él, a la imparcialidad sobre la esfera comunitaria, en suma.

Pero no se puede obviar la otra aportación del *Segundo Tratado*: la legitimación popular, siquiera indirecta, del poder político. Según Locke, el poder se encuentra sometido en última instancia al “pueblo”. Y, aunque la idea que parezca tener sobre su extensión señale sólo a un puñado de *freemen*, la *gentry* que poseía representantes en los Comunes o los Lores que estaban presentes en la otra Cámara, es decir, el pueblo *presentándose* de manera *ordenada*, su esquema conceptual va a servir tiempo después para impulsar procesos revolucionarios de carácter democrático, al margen de la inicial intención de su autor. Así que en realidad, si los mecanismos de separación de funciones mencionados entre legislativo y ejecutivo fracasan y alguno de ellos pretende hacerse con todo el poder⁹⁸⁶, siempre quedará el “pueblo” como último guardián que pueda detenerles. Y éste se contempla como *la*

⁹⁸¹ Ibid., pg. 145. Nótese de nuevo la insistencia en el término “comunidad”.

⁹⁸² Parág. 146, pp. 151 y 152.

⁹⁸³ Parág. 152, pg. 152. Y es que resulta “difícil [...] que estén separados y que se depositen simultáneamente en manos de personas distintas; pues como ambos requieren para su ejercicio la fuerza de la sociedad, casi resulta prácticamente imposible poner la fuerza del Estado en manos distintas” (parágrafo 148, pg. 152).

⁹⁸⁴ Parág. 147, pg. 152. Otra cosa “causaría tarde o temprano el desorden y la ruina” (parágrafo 148, pg. 153).

⁹⁸⁵ Matteucci, *op. cit.*, pp. 136 y 137.

⁹⁸⁶ Ojo, en numerosos párrafos de Locke, función y poder son “*powers*”, lo cual conduce a confusiones en la interpretación del autor (vid. Varela, *op. cit.*, epígrafe 2).

expresión viva de la comunidad de la que habla también Locke, simiente de la futura “nación”, que aflorará con las revoluciones del siglo XVIII. Pueblo es la comunidad primigenia. Pero, para llegar a esta equivalencia, este pensador recurre a una institucionalización de la autoridad política que ahora va a examinarse.

Al respecto, el autor del *Segundo Tratado* sostiene que se sale del estado de naturaleza mediante un pacto, al igual que creía Hobbes, permaneciendo en aquél “hasta que *por su propio consentimiento*, se hacen a sí mismos miembros de alguna *sociedad política*”. Es este un acuerdo muy distinto de los habituales de carácter privado, como también se encarga de indicar Locke, ya que se trata de uno eminentemente *político*⁹⁸⁷. Y tal hecho se manifiesta en que, realmente, el pacto lockeano se divide en dos: un *pactum societatis* (de sociedad, como grupo de individuos todavía sin organización política) y otro *pactum subiectionis* (de sujeción, por el que la comunidad ya pasa a establecer un poder político al que obedecerá)⁹⁸⁸:

El único modo en que alguien se priva a sí mismo de su libertad natural y se somete a las ataduras de la sociedad civil, es mediante una cuerdo con otros hombres, según el cual *todos se unen formando una comunidad*, a fin de convivir los unos con los otros de una manera confortable, segura y pacífica, disfrutando sin riesgo de sus propiedades respectivas y mejor protegidos frente a quienes no forman parte de dicha comunidad. Esto puede hacerlo cualquier grupo de hombres, porque no daña la libertad de los demás, a quienes se deja, tal y como estaban, en estado de naturaleza⁹⁸⁹. Así, cuando un grupo de hombres ha consentido formar una comunidad o gobierno, quedan por ello incorporados *en un cuerpo político* en el que la mayoría tiene el derecho de actuar y decidir en nombre de todos.⁹⁹⁰

La comunidad, por un lado y en una primera fase, y el cuerpo político, por otro, y posteriormente. Este último se guiará por el *criterio mayoritario*, según se indica

⁹⁸⁷ “Hay otras promesa y convenios que los hombres pueden hacer ente sí, sin dejar por ello el estado de naturaleza” (cap II, parágrafo 14, pg. 44). Parece haber aquí una alusión a Hobbes y las analogías que intentaba establecer entre su modelo contractual y los acuerdos entre particulares (vid. *Leviatán*, op. cit., cap XIV, pp. 130-36).

⁹⁸⁸ En el primero, además, rige la unanimidad, y en el segundo, la mayoría. Ruiz Miguel, op. cit., pg. 210.

⁹⁸⁹ Esta premisa apunta al criterio de la unanimidad para constituir la sociedad, como se ha indicado ya, a la manera de los socios de una empresa mercantil. Tal consentimiento puede ser expreso o tácito. Este último puede producirse, ya que “todo hombre que tiene posesiones o disfruta de alguna parte de los dominios de un gobierno, está con ello dando su tácito consentimiento de sumisión; y mientras siga disfrutándolas estará tan obligado a las leyes de dicho gobierno como cualquier otra persona que viva bajo el gobierno en cuestión; y ello será así, tanto si sus posesiones son tierras que le pertenecen a él y a sus herederos para siempre, como si las tiene arrendadas únicamente por una semana, o si, simplemente, está haciendo uso de una carretera viajando libremente por ella; y, en efecto, ha de entenderse que hay un tácito consentimiento de sumisión en el mero hecho de estar dentro de los territorios de ese gobierno” (Cap. VIII, “Del origen de las sociedades políticas”, parág. 119, pg. 130).

⁹⁹⁰ Cap. VIII: “Del origen de las sociedades políticas”, parág. 95, pg. 112. La semejanza de todo este sistema de constitución y acuerdos con el de las sociedades mercantiles, resulta evidente.

después (al contrario de lo que ocurre con el otro, establecido sobre unánime decisión):

Pues cuando un número cualquiera de hombres, con el consentimiento de cada individuo, ha formado una comunidad, ha hecho de esa comunidad un cuerpo con poder de actuar *corporativamente*; lo cual sólo se consigue mediante la voluntad y determinación de la mayoría⁹⁹¹. Porque como lo que hace actuar a una comunidad es únicamente el consentimiento de los individuos que hay en ella, y es necesario que todo cuerpo se mueva en una sola dirección⁹⁹², resulta imperativo que el cuerpo se mueva hacia donde lo lleva la fuerza mayor, es decir, el consenso de la mayoría. De no ser así, resultaría imposible que actuara o que

⁹⁹¹ Precisamente el criterio de la mayoría va a ser otro muy destacable en el autogobierno colonial. Como se ha visto, fue extendiéndose tanto a las decisiones que tomaba el órgano ejecutivo (incluyendo la posibilidad de que fuera exigida una mayoría reforzada, al modo de Massachusetts), como en las del asambleario. Este criterio mayoritario, aunque existente en la Antigüedad, se había abierto paso en las instituciones públicas a lo largo de los siglos, hasta conformarse como principal para muchas decisiones políticas que se tomaran colectivamente: "...el derecho romano [...] abrigaba grandes y serias dudas acerca de la capacidad de obligar que pudiera atribuirse al hecho mayoritario, mientras que no las tenía en absoluto [...] respecto de la unanimidad". Así, por ejemplo en el Senado, para saber cuál iba a ser su voluntad ante determinado asunto (por ejemplo, un senadoconsulto), el presidente separa a los grupos en liza y que disienten entre sí, constata cuál de ellos tenía el tamaño mayor y según este dato indica cuál es la voluntad del órgano. "El fin único del voto en Roma" era "alumbrar el hecho mayoritario y, una vez logrado este objetivo, el proceso termina sin relevancia jurídica alguna para el grupo que resulta minoritario. Los Senadoconsultos republicanos reflejan la voluntad del órgano colegiado sin alusión alguna al resultado de la votación previa que, como se ha visto, ni tenía carácter nominal, ni contemplaba en ningún caso voluntades individuales" (Chueca Rodríguez, Ricardo L.: *La Regla y el Principio de la Mayoría*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, pg. 33). Así, en la Edad Media existía el principio de unanimidad en Cortes y Dietas, con el fin de elegir entre los propios nobles a uno de sus pares como Rey o Emperador (ibid., pp. 37 y 38). Pero el criterio irá variando gracias a determinadas transformaciones acaecidas en los principales órganos de decisión de la Iglesia católica, por inspiración de varios juristas que estudiaban el ordenamiento canónico. Por ejemplo, la Bula De Oro de 1356 suprimió la exigencia de unanimidad para elegir Emperador, sustituyéndola por la mayoritaria (ibid., pg. 38). Estos cambios advinieron cuando se entendió que la *electio* o elección a cargos en la jerarquía eclesiástica era un acto sobrenatural, instrumentado a través de los fieles que participaran en la votación, y que plasmaba los designios divinos establecidos (ibid., pg. 40). Los indicados juristas reformularon, para ello, la *regula iuris romana quod maior pars capituli facit, totum capitulum faere videtur* (ibid., pg. 46). Es más, no por ello se abandonó el criterio de aproximación a la unanimidad, al exigirse dos tercios de los concurrentes para elegir Papas en algunos cónclaves, con el fin de eliminar disensos minúsculos o impedir la intromisión de poderes no eclesiásticos que tenían presencia en la asamblea (ibid., pg. 40). La premisa sobre la que se asientan estas aproximaciones es la de que la decisión mayoritaria tiene más probabilidades de alcanzar la corrección (ibid., pg. 47). La *numerosior pars* es así, por mera probabilidad, la *sanior pars*, aunque esta presunción pueda ser refutada luego con prueba en contrario. El dogma "de la *maior et sanior pars* fue elaborado del siglo XII y en 1179 será reconocido por Alejandro III en el Tercer Concilio de Letrán como regla de validez universal". Así (id., pg. 48) se establecería todo un sistema dirigido al cómputo y regulación del voto en los órganos eclesiásticos. Pero aún estamos lejos de una democracia más o menos extensa, pues "la complejidad de su regulación no proporcionaba ningún tipo de certeza complementaria, por cuanto que en último extremo la decisión siempre se subordinaba a factores de carácter cualitativo, dada la obvia evidencia del dato cuantitativo. En el extremo la *sanioritas* se configuraba como una mera trasposición abstracta de la existencia de un dogma y una autoridad que potencialmente podía definirlo e imponerlo. En caso de conflicto *maior-sanior* la decisión eventualmente es siempre posible por remisión a una jerarquía supraordenada". Cuando esta autoridad no cabía por definición, caso de las elecciones papales, se recurría a los dos tercios del Concilio Trento, que exigiría el voto secreto y renunciar a una interpretación estricta de la tesis sobre la *maior et sanior pars*. Asimismo, y también apartir de la Edad Media, en los entes de base local también se va a acudir a la regla de la mayoría, aunque formalmente se adopte la de la unanimidad. Y ello vendrá dado por prácticas consuetudinarias que intentan burlar la inoperancia provocada por la exigencia de esta última (ibid., pg. 43).

⁹⁹² Evidente huella de la física newtoniana.

continuase siendo un cuerpo, una comunidad, tal y como el consentimiento de cada individuo que se unió a ella acordó que debería ser. Y así, cada uno está obligado, por consentimiento, a someterse al parecer de la mayoría.⁹⁹³

La semejanza de este modelo de constitución y acuerdos con el de una sociedad mercantil, resulta evidente. Así como que Locke, según se ha visto con anterioridad, no podía desconocer su importante papel en la colonización de Norteamérica. Como se ha podido advertir páginas atrás, Hobbes ya aludía a este criterio mayoritario en su *Leviathan*, pero de manera más subrepticia, como mecanismo de decisión en caso de que el soberano fuera una asamblea⁹⁹⁴, mientras que Locke lo convierte en pieza esencial de su construcción política, que se parece a una agrupación empresarial para determinados fines. La autoridad a la que se concede el poder político se configura mediante expresión de la *voluntad mayoritaria*. Existe, forzosamente, un último sujeto colectivo del poder en la comunidad política⁹⁹⁵. Esa mayoría, asimismo, se percibe como *aproximación* al criterio *óptimo* de la *unanimidad* (el empleado para formar la comunidad originaria, la *sociedad*):

Pues si el consenso de la mayoría no fuese recibido como un acto de todos, con fuerza de obligar a cada individuo, sólo el consentimiento de todos y cada uno de los individuos en particular podría hacer que algo fuese tomado como decisión del pleno. Mas ese consenso absoluto es casi imposible de obtener, si consideramos que las enfermedades y las ocupaciones siempre entorpecen que estén todos presentes en una sesión de asamblea, aunque el número de hombres que la componen sea mucho menor que el de los que componen un Estado. A esta circunstancia habría también que añadir la variedad de opiniones y la contrariedad de intereses que inevitablemente tienen lugar en toda colectividad de hombres [...] Una constitución así [...] no lograría vivir un día siquiera.⁹⁹⁶

Así que

⁹⁹³ Id. parág. 96, pg. 112. Se trata de la famosa “obligación política”, de distinto cuño a la jurídica o a la moral (vid. Fernández García, Eusebio: *La obediencia al Derecho*, Madrid, Civitas, 1987, así como Almuera Carreres, Joaquín: “Obligación de obediencia al Derecho y desobediencia civil”, en Colomer, José Luis, y Díaz, Elías, eds., *Estado, justicia, derechos*, Madrid, Alianza, 2002, pp. 315-346, y Garzón Valdés, Ernesto: “Consenso, racionalidad y legitimidad”, en *Derecho, ética y política*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993).

⁹⁹⁴ Cfr. pg.153, nota 502.

⁹⁹⁵ Y no sólo en la base inicial del poder, sino también en su desempeño de mayor legitimidad. Locke no va a negar el importante papel de un monarca en su construcción, pero ya *subordinado* a esa asamblea, que no es otra que el Parlamento.

⁹⁹⁶ Locke, *op. cit.*, parág. 98, pg. 113.

Por lo tanto, quienes quiera que salgan del estado de naturaleza para integrarse en una comunidad, debe entenderse que lo hacen entregando a la mayoría de esa comunidad, o a un número más grande que el de la simple mayoría, si así lo acuerdan, todo el poder necesario para que la sociedad alcance esos fines que se buscaban y que los convocaron para unirse.⁹⁹⁷

Cabe preguntarse si la divergencia del modelo lockeano respecto a Hobbes estriba sólo en esta división del contrato en dos fases, pero hay algo más que les distingue, y no de pequeña importancia. En el siguiente párrafo, el razonamiento es hobbesiano, pero al final, Locke se desliza hacia otros lares:

Pues como en el estado de naturaleza todos son reyes [...], cada hombre es igual a los demás; y como la mayor parte de ellos no observa estrictamente la equidad y la justicia, el disfrute de la propiedad que un hombre tienen en un estado así es sumamente inseguro. Esto lo lleva a querer abandonar una condición en la que, aunque él es libre, tienen lugar miedos y peligros constantes; por lo tanto, no sin razón está deseoso de unirse a la sociedad con otros que ya están unidos o que tienen intención de estarlo con el fin de *preservar su vidas, sus libertades y sus posesiones, es decir, todo eso a lo que doy el nombre genérico de “propiedad”*.⁹⁹⁸

El fin de la sociedad y de la posterior institución de la autoridad correspondiente no es otro que la defensa de esa “propiedad”, entendiendo la misma en sentido amplio, pues el hombre de al época tiende a unir la titularidad de unos derechos con la independencia de un señor, con la posesión de un pedazo de tierra más o menos grande que le permita ser libre a la manera de un *freeman*.

Pero resulta importante considerar, a continuación, de qué tipo de poder político está hablando el autor del *Segundo Tratado*. Los tipos de delegación van a ser diversos, según nos refiramos a la propia mayoría de los miembros (independientes) de la sociedad, que se otorgan así mismos tal poder, o a otras posibilidades que también ellos establecen:

Como ya se ha mostrado, al unirse los hombres por primera vez en sociedad, todo el poder de la comunidad reside *naturalmente* en la mayoría; y ésta puede emplear todo ese poder en *hacer*

⁹⁹⁷ Ibid., parág. 99, pp. 113 y 114. Este párrafo podría entenderse como claramente ligado a los métodos parlamentarios modernos. Pero nótese que la mayoría de que se habla, como se comprobará a continuación, es una de carácter *delegante*. Los individuos forman la sociedad, y esto a continuación engendra una decisión mayoritaria para *atribuir a una autoridad política* diversas potestades.

⁹⁹⁸ Cap. IX: “De los fines de la sociedad política y del gobierno”, parág. 123, pp. 133-34. Esa preservación puede ser captada sin dificultad por la simple ley natural, que considera así que el hombre debe poder disfrutar de tales bienes, pero ocurre que “aunque la ley natural es clara e inteligible para todas las criaturas racionales, los hombres, sin embargo, cegados por sus propios intereses y por no haber estudiado dicha ley debidamente, tienen tendencia a no considerarla como obligatoria cuando se refiere a sus propios casos particulares” (ibid., pg. 134, parág. 124).

*periódicamente leyes para la comunidad, y en ejecutar esas leyes sirviéndose de los oficiales que la mayoría nombra. En ese caso, la forma de gobierno es una democracia perfecta*⁹⁹⁹. *Puede también depositarse el poder de hacer leyes en manos de unos pocos hombres selectos, y en sus herederos o sucesores; entonces tenderemos una oligarquía. Puede también depositarse en manos de un solo hombre, y entonces es una monarquía; si el poder se le concede a él y a sus herederos, tendremos una monarquía hereditaria; y si sólo se le concede a él mientras viva, y el poder de nombrar a su sucesor revierte al pueblo, entonces tendremos una monarquía electiva. Y basándose en estas formas, de gobierno, la comunidad puede combinarlas según le parezca conveniente*".

El modelo lockeano deja claro que todo el poder, tanto legislativo como ejecutivo, proviene de lo que denomina "pueblo", el grupo anclado en un primer contrato de sociedad, y que sólo podrá expresarse mediante el criterio, por aproximación, de su mayoría. Este colectivo concede a diversas personas o a una sola el poder político de la comunidad, a la manera de un depósito, es decir, de forma delegada. Con lo cual, siempre puede *revertir* a la fuente de la que provino. Las radicales consecuencias de tal hilo argumental no pueden pasar inadvertidas y contradicen abiertamente las conclusiones de Hobbes. Si quienes detentan el poder no vienen a cumplir con el objeto del mismo, que la protección de la "propiedad" del individuo, entendida en forma extensa, como se ha visto, pueden encontrarse con su deslegitimación. Locke dice que el legislador es poder *supremo* en el plano político, *pero no que sea soberano*, y a fin de situar en nivel inferior al ejecutivo. En concreto, si bien

[e]ste poder legislativo no sólo es el poder supremo del Estado¹⁰⁰⁰, sino que también es sagrado e inalterable, una vez que está ya en las manos a las que la comunidad lo ha entregado; y ningún edicto de nadie, comoquiera que sea concebido, o cualquiera que sea el poder que lo respalda, tendrá la fuerza y la obligación de una ley,¹⁰⁰¹

ese poder *se ejerce* por

los magistrados de la legislatura *que el pueblo ha escogido o nombrado*. Pues, sin esto, la ley no tendría lo que les absolutamente necesario para ser ley: el consentimiento de la sociedad, sobre

⁹⁹⁹ Evidentemente, y por vía de la literatura clásica, se está pensando en Atenas.

¹⁰⁰⁰ "*Supreme power of the commonwealth*".

¹⁰⁰¹ Cap XI: Del alcance del poder legislativo. Parágrafo 134, pg. 140

la cual nadie puede ostentar el poder de hacer leyes, excepto por consentimiento y autoridad recibidos de la autoridad misma.¹⁰⁰²

Así que, en consecuencia, cuando esos legisladores no atienden a la protección de la "propiedad", ha de considerarse que

Aunque [...] sólo puede haber un poder supremo que es el legislativo y al cual todos los demás deben estar subordinados, sucede, sin embargo, que al ser éste un poder *fiduciario*, con el encargo de actuar únicamente para ciertos fines, el pueblo retiene todavía el supremo poder de disolver o alterar la legislatura, si considera que al actuación de ésta ha sido contraria a la confianza que se depositó en ella (...) *la comunidad conserva siempre un poder supremo de salvarse a sí misma* frente a posibles amenazas e intenciones maliciosas provenientes de cualquier persona, incluso de los legisladores mismos; pues *puede ocurrir que éstos sean tan insensatos o tan malvados* como para planear y llevar a cabo proyectos que vayan contra *la libertad y la propiedad de los súbditos*.¹⁰⁰³

De nuevo se utiliza aquí el vocablo "supremo" (*supreme*), Locke sigue sin hablarnos de "soberanía" alguna. Pero *casi* lo hace implícitamente, pues la *supremacía* del pueblo se instala en un plano a su vez *superior* (en un primer grado, diríamos) al de la supremacía legislativa. Esta última se refiere a una dimensión, la del *pactum subiectionis*, que aparece en segundo lugar y por debajo del otro acuerdo, el *pactum societatis*, que *conforma al pueblo*. Éste tendrá "*derecho de deshacerse de quienes violen esta fundamental, sagrada inalterable ley de auto-preservación, guiados por la cual entraron en la sociedad*"¹⁰⁰⁴.

Pese a todo esto, y aunque Locke entiende la propia preservación de un modo más extenso que Hobbes, como se ha podido comprobar al advertir que "incluye" en ella los rasgos de la "propiedad" en sentido amplio, hay que llegar a las conclusiones últimas de su pensamiento, ya que aclara un poco más adelante que "puede decirse que, en este respecto, la comunidad es siempre el poder supremo; mas no es así mientras se halla bajo alguna forma de gobierno, pues dicho poder del pueblo no puede tener lugar *hasta que el gobierno sea disuelto*"¹⁰⁰⁵. Locke da varios motivos

¹⁰⁰² Id., pp. 140 y 141, inmediatamente a continuación

¹⁰⁰³ Cap. XIII, "De la subordinación de los poderes del Estado", parágrafo 149, pg. 154 y 155. Libertad y propiedad se utilizan a veces de forma intercambiable en la obra de Locke, fruto de la concepción del *freeholder* de la que parte. Nótese, asimismo, que Locke emplea la palabra súbditos ("*subjects*") y no la de ciudadanos, lo cual demuestra que su esquema político se realiza pensando sobre todo en la realidad inglesa.

¹⁰⁰⁴ Id., 155

¹⁰⁰⁵ Id.

para esa *disolución*, que tanta importancia tiene para la posteridad, en el capítulo 19 del *Segundo Tratado (De la disolución del Gobierno)*:

- 1) por la desaparición de la propia sociedad originaria, del *pactum societatis*: “siempre que una sociedad es disuelta, es seguro que el gobierno de dicha sociedad no puede permanecer”¹⁰⁰⁶. La manera más habitual de que ocurra esto, “casi la única (...) es la intromisión de una fuerza extranjera que llegue a imponerse sobre los miembros de la comunidad”¹⁰⁰⁷.
- 2) “El poder legislativo se descompone”¹⁰⁰⁸. No se aclara el por qué de esta descomposición, aunque se supone alude sobre todo a la disgregación de un cuerpo legislativo. Este fenómeno, además, no podría ser subsanado mediante la asunción del poder por alguna persona que no goce de la delegación popular. “Cuando alguien a quien el pueblo no ha designado para ello asume la función de hacer leyes, las estará haciendo sin autoridad; y, por consiguiente, el pueblo no estará obligado a obedecerlas. De este modo, los súbditos vuelven a estar sin sujeción y pueden constituir un nuevo poder legislativo que sea de su gusto, disfrutando de *absoluta libertad para resistir* la fuerza de quienes, sin autoridad, quieren imponerles alguna cosa”¹⁰⁰⁹.
- 3) Al respecto, Locke se preocupa especialmente por los titulares del poder ejecutivo. Así, para delimitar esta inquietud, e inmediatamente a continuación, Locke se refiere al “supuesto” de una forma de gobierno en la cual concurrirían tres figuras. La primera sería la de un individuo (“príncipe”) con aquella potestad y que podría disolver o convocar libremente a los otras dos entidades que se citan después. Las mismas serían una asamblea de nobleza hereditaria y otra de representantes del pueblo elegidos para cierto período¹⁰¹⁰. Locke menciona entonces varias posibilidades en las que aquel príncipe actuaría de manera ilegítima (no someterse a las leyes, impedir que la legislatura se reúna o funciones de acuerdo con los fines de su constitución, alterar el electorado y los sistemas de votación sin consentimiento del pueblo, entregar al pueblo a un gobierno extranjero)¹⁰¹¹, y que se basan diáfananamente en las circunstancias vividas en forma reciente en Inglaterra. De hecho, el autor especificará luego aún más cuando llega a decir que “actúa en contra de lo que se le ha encomendado cuando emplea, la fuerza, el tesoro y los servicios de la

¹⁰⁰⁶ Parágrafo 211, pp. 206 y 207

¹⁰⁰⁷ Id, pg. 206

¹⁰⁰⁸ Parág. 212, pg. 207

¹⁰⁰⁹ Id, pg. 208

¹⁰¹⁰ Parág. 213, pg. 208.

¹⁰¹¹ Id., párrafos 214-217, pp. 208-210.

sociedad para corromper a los representantes de ésta y ganárselos para sus propios fines; o cuando abiertamente coacciona a los electores”¹⁰¹².

- 4) Cuando quien detenta el poder ejecutivo no puede cuidar de que se cumplan *las leyes*. Aquí tampoco habría gobierno¹⁰¹³.
- 5) En general, “Cuando el poder legislativo, o el príncipe, actúan contrariamente a la misión que se les ha confiado”. El primero obra de este modo “cuando trata de invadir la propiedad del súbdito y de hacerse *a sí mismo, o a cualquier otro grupo de la comunidad*”¹⁰¹⁴, *amo y señor de las vidas, libertades y fortunas del pueblo*”¹⁰¹⁵. Si esto sucede así, “el pueblo tendrá entonces el *derecho de retomar su libertad original* y el de establecer un nuevo cuerpo legislativo”. Y “lo que he dicho aquí (...) es también verdad aplicado al ejecutivo supremo”¹⁰¹⁶.

En todo este esquema se vuelve a repetir una división del poder. Locke rechaza el monismo de Hobbes, defendiendo un reparto entre dos instancias principales que él, preocupado por circunstancias concretas, identifica principalmente con el Rey y el Parlamento. Es en ellos en donde sitúa el *ejercicio* del poder político. De hecho, y con respecto al último, no realiza disquisiciones sobre su división en dos cámaras. Su teoría alcanza un nivel de abstracción que servirá para que luego puedan encajar diversas fórmulas. Eso sí, todas concertadas con la nueva fuente de legitimación política, el sujeto *titular* del poder, el *pueblo*. Quienes ejercen el poder lo hacen *en su nombre*¹⁰¹⁷.

En qué medida recogía John Locke la herencia del republicanismo inglés? ¿Se apartó drásticamente de él, construyendo una teoría moderna, casi del siglo XVIII? Para empezar, no creo que resulte conveniente confundir la influencia que obtuvo su *Segundo Tratado del Gobierno Civil* sobre la Ilustración, con la versión que las élites intelectuales de aquella centuria dieron del mismo. Sus rasgos esenciales, de hecho, resultan sólo explicables a través de su lectura de los autores de la *Commonwealth* (Milton, Sidney...). El contractualismo, su reivindicación del papel político del

¹⁰¹² Id., parágrafo 222, pp. 213 y 214. La referencia no esconde las acusaciones existentes en su día contra Jacobo II.

¹⁰¹³ Id., parágrafo 219, pg. 211. “Y el pueblo degenera en una *multitud* confusa, *sin orden ni conexión*”, dice Locke inmediatamente después. La fórmula parece enteramente hobbesiana, aludiendo a una posible devolución al estado de naturaleza. Pero, resulta que, en el parágrafo siguiente, Locke alude a la posibilidad de que el “pueblo”, es decir, la sociedad, el conjunto de individuos en forma *ordenada*, tomen medidas para erigir un legislativo (probable alusión al Parlamento convención que depositó el poder ejecutivo en manos de los Orange). No hay nada, por tanto, de devolución al caos del estado de naturaleza. Esta contradicción y otras, aquí derivada en exageración de un concepto previo, originan incongruencias en el *Segundo Tratado*, que por lo demás, aparecen en más ocasiones.

¹⁰¹⁴ Resulta evidente aquí la herencia republicana. La facción va contra el bien público.

¹⁰¹⁵ Ibid., parágrafo 222, pg. 213.

¹⁰¹⁶ Id. De nuevo se halla la simiente de una teoría sobre el poder constituyente del pueblo.

¹⁰¹⁷ Y aun considerando, sin duda, que Locke se refiere a pueblo (*people*) en un sentido mucho más restringido que los *levellers*, sólo a los propietarios más acaudalados, a los notables.

Parlamento, la idea de tolerancia religiosa que exponía en el Tratado al respecto, tienen raíz en aquellos escritores. Y ellos partían, a su vez, de la movilización popular estimulada por el *New Model Army* y en la que los *levellers* tanta importancia tuvieron. Por eso resulta la disertación de Locke tan cercana a la de los radicales de 1642. Incluido el elemento republicano de la misma, el discurso de la virtud cívica. Y es que, aunque parezca que no existe en su *Segundo Tratado*, no resulta tan difícil de encontrar. Así, cuando se refiere a la posibilidad de que el pueblo recupere su poder originario, menciona que tal circunstancia incluye al legislativo, pero también

al ejecutivo supremo el cual, al habérsele encomendado una doble misión -la de tener parte, tanto en la legislatura como en la suprema ejecución de la ley- actúa en contra de ambas cuando decide establecer como ley de la sociedad su propia voluntad arbitraria. También actúa en contra de lo que se le ha encomendado cuando emplea, la fuerza, el tesoro y los servicios de la sociedad para *corromper* a los representantes de ésta y ganárselos para sus propios fines; o cuando abiertamente coacciona a los lectores y los obliga a que elijan a quienes, mediante ofrecimientos, amenazas, promesas y demás, ya ha convencido para que colaboren con sus planes personales, consiguiendo de ellos que prometan de antemano a favor de qué van a votar, y qué medidas van a tomar.¹⁰¹⁸

Hobbes, en cambio, otro ascendiente ineludible sobre Locke¹⁰¹⁹, podría ser destacado como más cercano al liberalismo de los que lo que algunos suponen, pues su teoría le acerca a la noción de libertad negativa dibujada por Berlin¹⁰²⁰. Frente al autor del *Leviathan*, y pese a otras versiones más extendidas, Locke se aproxima a la herencia aristotélica u organicista, con referencias continuas al bien común. El ejemplo más claro es la idea que mantiene sobre el gobierno, que no sería simplemente el de un Estado mínimo a la manera de Nozick o Hayek: “la finalidad de la ley no es abolir o restringir, sino preservar y aumentar nuestra libertad [...] la libertad no es, como se nos ha dicho, la falta de impedimentos que cada hombre tiene para hacer lo que guste”.

Pero sí hay algo que le acerca muchísimo a los ilustrados dieciochescos, a la escuela liberal. Su modelo antropológico sobre los orígenes de la sociedad y el gobierno pretende ser compatible *con cualquier circunstancia y lugar, pretende ser universal*. En esto también se asemeja a Hobbes, pero se aparta de él y se aproxima más a la siguiente centuria cuando, de nuevo cercano a las revoluciones del XVIII,

¹⁰¹⁸ Id., pp. 213 y 214.

¹⁰¹⁹ Las alusiones de carácter indirecto en el *Segundo Tratado* son muy frecuentes.

¹⁰²⁰ Isaiah Berlin en sus *Two Concepts of Liberty* (1958). Como se sabe, este autor distinguía entre libertad positiva, a autogobernarse, y libertad negativa, de no ser interferido.

habla también de libertades inalienables. Algo que ya habían defendido Lilburne y los suyos. Pero los niveladores ni habían realizado una exposición tan sistemática de su pensamiento, ni se apegaban a la fórmula del viejo gobierno mixto. Como tampoco parecían interesarse por una centralización política que Locke sí buscaba, a través de la figura de ese ejecutivo poderoso, parapetado militar y fiscalmente, que se inclinaba a identificar con la Corona de los Orange. Ni, dado que eran sobre todo panfletistas, se habían preocupado por una racionalización que pudiera permitir, en fase ulterior, una extensión de los derechos a otros lugares que no fueran Inglaterra. En este sentido, sí cabría decir que el más cercano al autor del *Segundo Tratado* resultaba ser Algernon Sidney¹⁰²¹.

John Locke, en cualquier caso, fue el canal de la influencia *whig* en Norteamérica. El *whiggism*, asimilado a su capacidad intelectual, bajo una formulación abstracta e incluso a veces poco definida, podía dejar cierto impronta en los colonos. No así las características más superficiales y localistas de este movimiento político. Porque, en realidad, cuando acaece la Gloriosa los habitantes del Nuevo Mundo ya llevan varias décadas ensayando formas de autogobierno propias. Los *whigs* impulsaron la monarquía constitucional parlamentaria, dando origen a un surtido de adaptaciones que llega hasta hoy en día. Los colonos crearon una república, habiendo ya iniciado un camino propio y apartado de la madre patria desde principios del siglo XVII. Si Inglaterra va a contar con este *Bill of Rights* en 1689, las colonias ya tenían desde 1638 el Massachusetts *Body of Liberties* y desde 1682 la *Charter of Liberties and Frame of Government of the Province of Pennsylvania in America*. Por tanto, lo que hay que pensar es que el *Segundo Tratado del Gobierno Civil* lockeano vino a surgir como un buen molde en el que recoger, sin perder la conexión con esa misma tradición de ciertos derechos impostergables, las inquietudes políticas de unos colonos que temían la arbitrariedad del poder y que estaban dispuestos a acumular el mejor arsenal posible para enfrentarse a ella. John Locke no describió la realidad inglesa de su época, aunque fuera la de una monarquía constitucional. Se hallaba ubicado en un contexto específico y escribía pensando en él, defendiendo la deslegitimación típicamente *whig* del poder arbitrario. En sus textos se perciben las líneas maestras de este grupo, hasta sus últimas consecuencias y aludiendo al viejo derecho de resistencia de los monarcómacos calvinistas y los puritanos¹⁰²². Locke no dio el salto hacia la soberanía popular o la supremacía del pueblo, que los estadounidenses si

¹⁰²¹ Vid. pg. 181, *supra*.

¹⁰²² Por ejemplo, en el parág. 229, pg. 219: “¿Y qué es mejor para la humanidad: que el pueblo esté siempre expuesto a la ilimitada voluntad de la tiranía, o que los gobernantes puedan ser *resistidos* cuando hacen un uso exorbitante de su poder y lo emplean para la destrucción, y no para la protección de las propiedades de sus súbditos?”.

practicarían, pero estrujó todo lo que pudo las posibilidades de crear un mecanismo de análisis y propuesta racionales y coherentes con las pretensiones del *whiggism*. Y bajo su hipótesis del estado de naturaleza y el correspondiente contractualismo, favorecería el fenómeno de la escisión basada en el autogobierno, la *independencia nacional* de los Estados Unidos de América. Su antesala fueron aquellos mecanismos democráticos puestos en marcha por los exiliados de Inglaterra que buscaban mejor fortuna en el Nuevo Mundo y que, sin duda, el propio Locke conocía de primera mano¹⁰²³.

II.1.2.1.c) Los *real whigs*

La influencia *whig* en las colonias americanas se prolongó gracias a los *real whigs*. Como ha podido comprobarse, en la división entre *tories* y *whigs*, el bagaje ideológico de estos últimos parecía concordar en mayor grado, en principio, con las aspiraciones de autogobierno que los colonos norteamericanos tenían y su entendimiento de las libertades. Pues el credo *whig*, que sintetiza a la perfección John Locke, entendía que todo poder derivaba su legitimidad del consentimiento del pueblo y, por tanto, que el órgano político más vinculado con él, el Parlamento, era el que mejor podía representar su voluntad y velar por su derechos¹⁰²⁴. Pero estas ideas no dejaron de ser una base sobre la cual los tercios materiales de la vida política e institucional inglesa comenzaron pronto a mostrar cierta resistencia. En realidad, siendo justificación de la Gloriosa y del recambio monárquico correspondiente, atesoraban un contenido que podía conducir a conclusiones más radicales que la permitidas por el “nuevo” sistema político instaurado, que tantos elementos de la tradición quería conservar. Algunos pensadores que aparecieron inmediatamente después de 1688, sin ser frontalmente contrarios a tal orden político orangista, sí se percataron del potencial que residía en la idea del consentimiento popular y en el modelo del *freeholder*. Su estimación por obras del Interregno, como las de Milton, Sidney o Harrington, fomentó el que sus enemigos les denominaran “*commonwealthmen*”, pese a que realmente a ellos les gustara proponerse como “*old whigs*”. Lo “viejo”, lo relacionado con una tradición prestigiosa y honorable, como se ha podido comprobar, era una constante en la teoría política inglesa.

¹⁰²³ Como demuestra su alusión a las sociedades mercantiles que colониaban América.

¹⁰²⁴ Recordemos, en este sentido, que la separación y clasificación de libertades actual, no era entonces tan tajante. En general, todas ellas, fueran la libertad de expresión vehiculada mediante la prensa, el habeas corpus, etc., se entendía que eran “derechos del pueblo”, comprendido éste como colectivo. De hecho, algunos de esas libertades tradicionales, como el derecho de petición, resultaban obviamente incomprensibles en caso de faltarles tal dimensión.

Los principales escritores de esta corriente fueron Robert Molesworth (1656-1725), John Toland, John Trenchard (1662-1723), Thomas Gordon (¿-1750) y Walter Moyle (1672-1721). En general, los *real whigs* sembraron polémica en función de la coyuntura del momento. Elaboraron textos muy relacionados con hechos de carácter inmediato. Y pese a que contaron con las simpatías de algunos mandatarios, y una cierta influencia intelectual en ciertos círculos, no fueron origen de importantes cambios en la Inglaterra de la época. Mas con esa labor, soterrada y a veces modesta, que pudieron desarrollar a través de la difusión de sus escritos y la reimpresión y edición de el viejo canon republicano, extendieron su herencia a aquéllos a quienes luego sí podría aprovechar. Es decir, a los habitantes de las trece colonias norteamericanas, que leyeron sus obras y sus impresiones. Por tanto, no se puede subestimar este esfuerzo, sin grandes éxitos inmediatos, pero eficaz a la larga.

Temas de disertación preferidos por los *real whigs* fueron la libertad de conciencia y el equilibrio de poderes. La primera se veía violada por el poder religioso aún presente a través de una impostergable iglesia anglicana¹⁰²⁵. La carga racionalista de estos autores, pues, venía a sostener la libertad religiosa que permitiera predicar, reunirse para el culto y enseñar libremente a *todos* los no conformistas¹⁰²⁶. Abogando, asimismo, por la amplia tolerancia de judíos y mahometanos, e incluso, yendo más allá que Locke, de los ateos¹⁰²⁷. En cuanto a la cuestión del equilibrio de poderes, los *real whigs* se hallaban preocupados por la falta de control del Parlamento sobre el ejecutivo, a causa de que éste utilizaba mecanismos corruptores que hacían peligrar a la Asamblea.

El tema de la libertad de conciencia va a ser, pues, principal entre los *real whigs*, y, sin duda, influyente en Norteamérica. Pero, sobre todo, y aquí con aspectos que resultan de mayor relieve para nuestra contemporaneidad, determinante para el pensamiento político de los Padres Fundadores en lo relativo a la actitud frente a la metrópoli y al equilibrio de poderes.

En este sentido, debe subrayarse que ciertos hechos fomentaron la oposición de los *real whigs* al *statu quo* instalado en el sistema y que parecía atentar contra los cimientos “constitucionales” de la tradición, pero ahora bajo un nuevo semblante. Y es que los autores de esa corriente advirtieron que los parlamentarios podían llegar a

¹⁰²⁵ Por ejemplo, los diezmos (vid. *supra*, pag. 50, nota 163) no habían sido abolidos en Inglaterra, pese a la presión que los *levellers* y otros radicales habían efectuado contra ellos, arreciando la polémica en el período de la *Commonwealth*. Sólo quedaron enteramente suprimidos en 1936 (Cook, *op. cit.*, pg. 166). Como se ha podido advertir más arriba, además, existían penas de diversos tipos para quienes pretendían ejercer libremente la prédica (vid. *supra*, pp. 250).

¹⁰²⁶ Incluyendo a los unitarios (Robbins, *op. cit.*, pg. 9), a quienes se les excluía de la Ley de Tolerancia (vid. *supra*, pp. 256, nota 949).

¹⁰²⁷ Locke admitía a los primeros (*Carta sobre la Tolerancia*, *op. cit.*, pp. 63 y 64), pero no a estos últimos (ibid., pg. 57: “[l]as promesas, convenios y juramentos, que son los lazos de la sociedad humana, no pueden tener poder sobre un ateo”).

actuar despóticamente, encabezando un *viraje* hacia la corrupción del delicado equilibrio de poderes constitucional disponible en la Isla europea. Tal posibilidad se manifestó con la famosa política walpoliana.

Como se ha indicado antes, el ejecutivo inglés, encabezado por el monarca que estuviera de turno, tendía a necesitar importantes medios financieros y militares a fin de enfrentarse con otras potencias europeas y consolidar su poder internacionalmente, protegiendo asimismo la expansión económica del país. Y en este último objetivo, desde luego, era coincidente con amplios sectores sociales de la nación, deseosos de conseguir mercados en el exterior para sus productos y manufacturas. *Tories* y *whigs* compartían tales fines¹⁰²⁸. El Parlamento, sin embargo, había sido el vigilante de que aquella tendencia no fuera sofocante para las libertades inglesas, compatibilizándola con un auténtico sistema imperial expansionista. En esta búsqueda de nuevas fórmulas para cohonestar objetivos, la siguiente vuelta de tuerca sería el “gobierno de gabinete”. La manera de asegurar el apoyo de los sectores sociales representados por el Parlamento a la política internacional del trono era darle a este último una responsabilidad aún mayor en el nombramiento que pudieran dirigir el ejecutivo bajo el Rey. El remedio resulta ser, pues, nuevamente y como en tantos otros casos de los que estamos analizando, un mecanismo que no contaba con teorización previa. Tenía antecedentes en el *Cabinet Council* de Carlos I, la Cabal (1667-1673) el *Committee for intelligence* (desde 1679) o la *Junto whig* (1694-1698). Pero es con Jorge I, que sube al trono en 1716 de acuerdo con el *Act of Settlement*, cuando toma la forma de un grupo de ministros encabezado por un *premier* y que se reúne sin la concurrencia del propio Rey. Ese primer ministro es el hombre fuerte que va servir de canal de comunicación entre los ministros y la Corona, así como entre éstos y el Parlamento. La existencia de favoritos del rey, como se ha podido apreciar en páginas anteriores, era algo común en las sucesivas dinastías inglesas, pero ahora van a ser sustituidos por un hombre que trabajará para asegurarse de manera permanente el apoyo parlamentario. Sir Robert Walpole, jefe del partido *whig*, fue el principal impulsor de esta fórmula, que desarrollaría en dos períodos, entre 1715 y 1717, y entre 1721 y 1742. Para destituirle en este último año ya no hizo falta juicio penal alguno derivado de un *impeachment*; la pacificación del sistema político inglés preveía tal eventualidad, simplemente, con la retirada de la confianza del Parlamento.

¹⁰²⁸ Vid. Pocock, John G.A.: *The Machiavellian Moment. Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition*, London, Princeton University Press, 1975; trad. cast. de Marta Vázquez Pimentel y Eloy García, por donde se cita, *El momento maquiavélico* (estudio preliminar, de Eloy García), Madrid, Tecnos, 2002. Pg. 543: en 1697, tras la Guerra de los Nueve Años contra Francia, quedaba claro que Inglaterra necesitaba expedir deuda pública para financiar su expansión comercial, protegiéndola así con soldados profesionales y buques de guerra.

El monarca reina, pero no gobierna¹⁰²⁹; tal cometido lo desempaña un gabinete liderado y presidido por un *premier*, bajo apoyo parlamentario¹⁰³⁰.

Pero este esquema, que tantos frutos ha rendido a sistemas políticos actuales de carácter democrático, trajo en su nacimiento diversas contradicciones con la tradicional “constitución” inglesa, la gran portadora de las libertades que ahora se tambaleaban por causa de las maniobras políticas de quienes se supone habían sido sus principales valedores. Y es que Walpole impulsaba su influencia en el Parlamento con medios que pronto fueron tildados de corruptos. *Pensioners*¹⁰³¹, *placemen*¹⁰³² y *stock-jobbers*¹⁰³³ van a medrar gracias a la política del *premier whig*¹⁰³⁴. La participación política como derecho y deber cívico de los *freemen* que se preocupan de los asuntos públicos, parece definitivamente arrinconada por este procedimiento poco ortodoxo de mantenerse en el poder, que resultó auxiliado por la *Septennial Act* de 1716. Al que acompañaba el aumento de la deuda pública con el fin de pagar un ejército *permanente* (*standing army*) que se imponía por mar y tierra frente a otros reinos. La mayoría de los *tories* adoptaron una postura acomodaticia ante la situación¹⁰³⁵, si bien hubo otros, como Bolingbroke (1778-1751), que reaccionarían enérgicamente¹⁰³⁶. La diatriba más intensa contra el nuevo fenómeno, nada más comenzar su andadura, provino de la pluma de dos escritores adscritos a la corriente de los *real whigs*¹⁰³⁷. Respondían al nombre de John Trenchard y Thomas Gordon y

¹⁰²⁹ Como expresaría el propio Walpole: Matteucci, *op. cit.*, 154.

¹⁰³⁰ Matteucci, *op. cit.*, pp. 154 y 155.

¹⁰³¹ *Pensioner*. Personas que recibían una cantidad periódica tras abandonar un puesto público.

¹⁰³² Compradores de cargos públicos. Los *Place Bills*, que databan de varias décadas atrás (Carlos II), habían intentado frenar la posibilidad de que ocuparan en los Comunes asientos. Hill, 1961, pg. 318.

¹⁰³³ Especuladores. Literalmente, “accionistas”, pero el término era utilizado con ese significado, peyorativamente.

¹⁰³⁴ Que por otra parte, no era nueva en su origen. Así lo aclara Hill (1961, pg. 317): “A partir de 1688, el poder efectivo de conceder cargos fue pasando, lenta pero inexorablemente, de manos del Rey a las de los ministros que controlaban el Parlamento. Gracias a la expansión de la burocracia, existía ahora un número muy superior de miembros del Parlamento cuyos ingresos dependían del gobierno y que podían ser destituidos en cualquier momento”. Ciertamente es que Hill exagera un tanto al hablar de ese control de los ministros, pues, y en esto concordamos también con Matteucci, antes de Walpole más bien tendríamos que hablar de “favoritos” (Matteucci, *op. cit.*, pg. 154).

¹⁰³⁵ Vid. Hill, 1961, pp. 319-22, quien asegura que probablemente no había diferencias esenciales tan grandes entre ambos grupos, que se movían dentro de los mismos límites, en general.

¹⁰³⁶ En 1734, diría en su *Dissertation upon Parties* que la constitución inglesa era “aquel conjunto de leyes, instituciones y costumbres, derivadas de ciertos principios inmutables de la razón y dirigidas a ciertos fines inmutables del bien común, que constituyen el conjunto del sistema según el cual la comunidad ha convenido ser gobernada”, distinguiendo la misma del “gobierno”. En consecuencia, la existencia del gabinete con su *premier* al frente y su correlativa acumulación de potestades, atentaba contra la división de poderes que debía existir entre ejecutivo y legislativo. Fioravanti, 2001, pg. 95. Bolingbroke mantuvo que su tesis sobre la separación de poderes (Rey, Lores y Comunes) se refería, no a rigurosa separación de funciones, sino a la eliminación de toda influencia directa o indirecta que cualquiera de los poderes pudiera ejercer sobre los otros (Pocock, *op. cit.*, pg. 580).

¹⁰³⁷ O como ellos mismos gustaban denominarse, tal y como demuestra una de sus más famosas publicaciones, “*independent whigs*”.

escribirían las *Cartas de Catón* (*Cato's Letters*), influyendo en las colonias norteamericanas de manera insoslayable¹⁰³⁸.

El estudio de esta etapa, pues, ha sido bien estudiado por varios investigadores¹⁰³⁹ y en el presente trabajo no se van a analizar todas las obras del período y el surtido de opiniones que conllevaba. Pero sí a exponer el pensamiento de sus dos principales representantes, los mencionados Trenchard y Gordon, precisamente quienes guardaban una conexión mucho más clara con postulados también defendidos por los *levellers*¹⁰⁴⁰. Y siguiendo así el rastro de coincidencia que conservan, dentro de un mismo legado, respuestas similares ante situaciones también parecidas, aunque lejanas en el tiempo. Al mantener vivas determinadas polémicas dentro del debate intelectual inglés, los *real whigs*, con aquellos dos autores citados en cabeza, contribuyeron a que los colonos norteamericanos pudieran luego retomar idénticas ideas, dentro de un contexto más propicio para su implantación.

II.1.2.1.d) Las “Cartas de Catón”¹⁰⁴¹.

Casi todas las *Letters* apreciaron en el *London Journal*, siendo publicadas semanalmente, desde finales de 1720 hasta el verano de 1723¹⁰⁴². Su contenido les emparenta con los autores de la *Commonwealth* y los *levellers*, influyendo luego en los Padres Fundadores de los Estados Unidos. Su crítica tuvo como punto de partida un supuesto específico. Se trató de la crisis financiera producida por una especulación bajo cobijo gubernamental, en torno a la actividad mercantil de la Compañía de los Mares del Sur (*South Sea Company*)¹⁰⁴³. El endeudamiento público que había

¹⁰³⁸ Rossiter señala que “[n]adie puede pasar un rato con periódicos, inventarios de bibliotecas y panfletos de la América colonial sin darse cuenta de que las *Cartas de Catón*, más que el *Gobierno Civil* de Locke, eran la fuente de las ideas políticas más popular, más citada y más estimada del período colonial”. Rossiter, Clinton: *The First American Revolution: The American Colonies on the Eve of Independence*, New York, Harcourt, Brace & Co., 1956, pp. 224-225; cit por Dorado, *op. cit.*, pg. 502.

¹⁰³⁹ Robbins, con su citada *The Eighteenth-century Commonwealthman*, destaca entre ellos.

¹⁰⁴⁰ Debido, principalmente, a que escribieron sus Cartas acuciados por cierta percepción de la injusticia social provocada por la “burbuja financiera”, lo cual daba un toque igualitarista a sus ideas que no tenían otros *real whigs*.

¹⁰⁴¹ Gordon, Thomas y Trenchard, John: *Cato's Letters, or Essays on Liberty, Civil and Religious, and Other Important Subjects*. Cuatro volúmenes, reunidos en dos bloques, editados y anotados por Ronald Hamowy, Indianapolis, Liberty Fund, 1995. Vid. en <http://oll.libertyfund.org/index.php?option=com_staticxt&staticfile=show.php?title=737&Itemid=29>.

¹⁰⁴² Antes, ambos habían colaborado en artículos de carácter anticlerical publicados en el *Independent Whig*, durante 1720 y 1721. Dorado, 482 y 483. Gordon, un granjero próspero casado con Anne Blanckett, hija de la pequeña nobleza, ya había sido famoso por sus diatribas contra los ejércitos permanentes desde el reinado de Guillermo III. Los orígenes de Trenchard resultan más oscuros, si bien llegaría a casarse, al fallecer Gordon en 1724, con su viuda, la citada Anne. Tras una intensa dedicación al periodismo de combate, se dedicó a traducir a Salustio y Tácito. Vid. Robbins, *op. cit.*, pg. 111.

¹⁰⁴³ La Compañía de los Mares del Sur había sido fundada en mayo de 1711 para comerciar en régimen de *monopolio* en Sudamérica, y a fin de convertir unos nueve millones de libras de deuda nacional. Se suponía que el beneficio de la sociedad iba a ser altísimo, dadas sus expectativas. Los acreedores del Gobierno podían pasar a ser accionistas de la Compañía, viéndose beneficiados por tal cambio. A principios de 1720, más de tres quintas partes de la Deuda nacional se habían convertido en acciones de

contraído el Estado inglés se relacionaba con la especulación de unos particulares que, mediando régimen de monopolio y la privilegiada relación con altos cargos, había conllevado la ruina de muchísimos inversores más pequeños, extendida incluso a los partícipes de otras compañías mercantiles. Y aunque toda esta operación parecía haberse originado con miras a la expansión de Inglaterra en el escenario internacional, algunos autores, como Trenchard y Gordon, pensaron que se había ido demasiado lejos. Las libertades del país quedaban amenazadas con aquella política especulativa, que había originado la ruina económica de muchos de sus esforzados *freeholders*, y con ello la pérdida de los derechos que detentaban, intrínsecamente unidos a la propiedad¹⁰⁴⁴.

Ante tal situación, estos dos periodistas recuperaron parte del discurso republicano, que había sido semienterrado por el ascenso de los *whigs*, presuntos defensores de la difusión de muchos de sus elementos, pero que sin embargo parecían haberlo abandonado completamente. La intromisión de intereses particulares en la marcha de los asuntos públicos era un hecho imposible de eludir, y el viejo utillaje de autores como Harrington, Sidney e incluso Locke, podía servir para dar respuesta inconformista al rumbo gubernamental de los últimos tiempos, con el saqueo del tesoro y cargos públicos, censura y manipulaciones electorales que parecía conllevar¹⁰⁴⁵.

Así, en primer lugar, Trenchard y Gordon pretender indagar en los motivos de la crisis que vive el país, y lo hacen son la clásica *indignatio* de los autores latinos que tan bien demostrarán conocer a lo largo de sus artículos. La injusticia cometida acapara buena parte de sus textos¹⁰⁴⁶. Ambos partían de la clásica noción de origen

la Compañía. Sus directivos habían pagado siete millones de libras y sobornado a ministros y miembros del Parlamento por este privilegio. Asimismo, para distribuir sus acciones, la Compañía había hinchado la apariencia de sus beneficios, de manera que los precios de las acciones se dispararon al alza: al principio, 100 libras en acciones equivalían a 118 en las de la Deuda Nacional, pero desde abril ya eran 300, a finales de mayo, 700, y el 24 de junio ya llegaban a 1.050 libras. De esta forma, se había activado un flujo especulador imparable. Nuevas compañías aparecieron con idénticas intenciones de enriquecimiento. Preocupada por el fenómeno, la Compañía de los Mares del Sur consiguió que el Gobierno aprobara la *Bubble Act* el 24 junio, prohibiendo compras de participaciones de otras sociedades que no fueran autorizadas por el Gobierno. A mediados de agosto, los gerentes de la Compañía de los Mares del Sur demandaron a otras cuatro. Esto supuso a su vez la depreciación de las acciones repartidas por esas compañías rivales, con lo cual, sus propietarios, al verse obligados a enfrentarse a sus consiguientes deudas, tuvieron que vender también sus acciones de la Compañía de los Mares. Se produjo sí un efecto en cadena conducente a que cayera esta última. La crisis resultó gravísima, con inversores que tenía acciones de un valor mucho más bajo que las participaciones de la Deuda Nacional que al principio habían poseído. Dorado, *op. cit.*, pp. 483-85.

¹⁰⁴⁴ Entendida en sentido lato, como corresponde a la comprensión del concepto de *freeholder* que ya ha quedado expuesta líneas atrás. Este era el público principal al que se dirigían Trenchard y Gordon, como indican los títulos de numerosas de sus Cartas, entre ellas de la 69, por ejemplo.

¹⁰⁴⁵ Parte de su crítica sobre el crédito público se basó, asimismo, en Charles Davenant, que escribió a finales del siglo XVII (Pocock, *op. cit.*, pp. 532 y 533)

¹⁰⁴⁶ Por ejemplo, en la Carta 60 ("los buenos servicios al bien común deben ser recompensados", pero, en cambio, habrán de ser "la desgracia, el suplicio y la muerte, el castigo para la felonía y la corrupción") o en la Carta 17 ("los traidores [...] promoverán el lujo, la ociosidad y el derroche, así como una depravación generalizada, por medio, tanto de su propio ejemplo, como por connivencia y estímulo públicos. Esto no

aristotélico, según la cual el poder debía someterse a leyes, con el fin de que las pasiones de los gobernantes no fueran contra el bien común¹⁰⁴⁷. La razón engendra la virtud de la imparcialidad, y su mejor expresión es la ley¹⁰⁴⁸. Es ésta “la norma más relevante en cada país, al menos en cada nación libre, por la cual *la propiedad privada queda reconocida* y el bien público, que es el fin más importante de todas las leyes, resulta asegurado” (Carta 3)¹⁰⁴⁹. La ley queda así vinculada a la defensa de la *propiedad*¹⁰⁵⁰, pero hay que entender que a ella quedan adheridas el resto de libertades, a la manera lockeana¹⁰⁵¹. De hecho la perspectiva iusnaturalista es muy similar a la del *Segundo Tratado del Gobierno Civil*, ya que para el individuo humano:

Entrar en la sociedad política es tan distante de abandonar su derecho natural, que, de hecho, la intención de conservarlo fue la única razón que impulsó a los hombres a adoptar aquella conducta, siendo así la asistencia y protección mutuas el único propósito razonable de todas las sociedades también conformes a la razón. A fin de que tal protección fuera efectiva, se erigió una magistratura, con el poder de defender de la violencia al inocente y castigar a quienes la quisieran ingligir; y no otra puede ser la intención del magistrado en el mundo. Al objeto de llevar a buen fin esta tarea, se le ha confiado al magistrado dirigir y aplicar la fuerza reunida de toda la comunidad, cogiendo parte de la propiedad de cada hombre en la medida en que sea necesario para preservar el conjunto y al objeto de defender a cada uno y su propiedad de ataques exteriores e interiores. Estas son las ataduras que sujetan el poder del magistrado, que abandona su función cuando las rompe. Por las leyes de la sociedad está más limitado y constreñido que cualquiera de los otros hombres que hay en ella.¹⁰⁵²

sólo contribuirá a apartar la mente de los hombres de examinar su comportamiento y políticas, sino que, asimismo, les hará perder a éstos todas las restricciones de la virtud pública y privada. De la inmoralidad y los excesos caerán en la necesidad, y de allí en una servil dependencia del poder”).

¹⁰⁴⁷ Carta nº 33: “[t]he world is governed by men, and men by their passions; which, being boundless and insatiable, are always terrible when they are not controuled” (“[e]l mundo es gobernado por hombres, y los hombres lo son por sus pasiones, las cuales, siendo desenfrenadas e insaciables, resultan siempre terribles cuando no quedan controladas”).

¹⁰⁴⁸ “El ejercicio de la razón no es otra cosa sino el alternar la indulgencia y el control de las pasiones, con mano imparcial, y dándolas a todas ellas unas reglas de juego; es una administración equitativa de los apetitos, por la cual son restringidas de manera que ninguna supere a las otras” (Carta 39). “La ley es la justa razón” (Carta 42). Nótese que se trata de un control de las pasiones, no de su erradicación, por supuesto.

¹⁰⁴⁹ La ley es la norma importante de todo país, al menos de todo país libre, y con la cual la propiedad privada resulta afianzada, y el bien común, que es el fin más relevante de las leyes, asegurado” (Carta 3).

¹⁰⁵⁰ “La preservación de la propiedad es la fuente de la felicidad nacional” (Carta 35)

¹⁰⁵¹ “Toda creencia religiosa de un hombre es algo de su posesión” (Carta 60) y “sin libertad de pensamiento (*freedom of thought*), no puede existir cosa alguna como la sabiduría; y tampoco algo como la libertad pública, sin libertad de expresión (*freedom of speech*); siendo todo ello derecho de *cualquier* hombre, en grado tal como lo permita no dañar y someter al derecho de otro; y este es el único control que debería padecer, la única sujeción que debería conocer.

Este privilegio sagrado, el de la seguridad de la propiedad, es esencial al gobierno libre; y la libertad de expresión, siempre va acompañándolo; y en aquellos países desgraciados donde un hombre no pueda decir que su lengua es propia, a duras penas podrá afirmar que posee alguna otra cosa” (Carta 15).

¹⁰⁵² “The entering into political society, is so far from a departure from his natural right, that to preserve it was the sole reason why men did so; and mutual protection and assistance is the only reasonable purpose

Así que

El derecho del magistrado emana únicamente de los hombres particulares a fin de defenderles, para reprimir los ataques que puedan sufrir y castigar a quienes los emprendan (...) cuando sobrepasa este cometido, sus actos resultan ser de *carácter extrajudicial*, al modo en que lo son los de un particular que actúa ilegítimamente, motivo por el que resultarán *nulos*.¹⁰⁵³

Esta premisa, a su vez, hay que entenderla ligada al hecho de que a ningún hombre, aun en el “estado de naturaleza”, va a “disponer de un derecho a violar la propiedad de otro, y que el prójimo ha adquirido con la habilidad de su trabajo”, con lo cual “tampoco puede (...) transferir al magistrado un derecho que él mismo no tiene”¹⁰⁵⁴. Hay unos derechos *inalienables*, que no resulta posible transmitir y abandonar a manos de nadie, y se es titular de los mismos con carácter innato¹⁰⁵⁵. La libertad se entiende intrínsecamente unida a los mismos, en un sentido similar a la “negativa”:

Por libertad, entiendo el poder que tiene cada hombres sobre sus propias acciones, y su derecho a disfrutar de su trabajo, arte e industria, tanto como no dañe a al sociedad o a alguno de sus miembros, quitándoles algo u obstaculizándoles disfrutar de aquello de lo que él mismo goza. Los frutos de la honesta industria de un hombre son la recompensa justa de essta última, establecida por la equidad natural y eterna, siendo su título el usar de aquéllos de la forma que le parezca adecuada: de forma que, con las antedichas limitaciones, todo hombre es el único señor

of all reasonable societies. To make such protection practicable, magistracy was formed, with power to defend the innocent from violence, and to punish those that offered it; nor can there be any other pretence for magistracy in the world. In order to this good end, the magistrate is entrusted with conducting and applying the united force of the community; and with exacting such a share of every man's property, as is necessary to preserve the whole, and to defend every man and his property from foreign and domestick injuries. These are the boundaries of the power of the magistrate, who deserts his function whenever he breaks them. By the laws of society, he is more limited and restrained than any man amongst them”.

¹⁰⁵³ “The right of the magistrate arises only from the right of private men to defend themselves, to repel injuries, and to punish those who commit them: [...] When he exceeds his commission, his acts are as *extrajudicial* as are those of any private officer usurping an unlawful authority, that is, they are void” (Carta 59). Aquí puede advertirse hasta donde llega la influencia de Coke, e incluso de la vieja doctrina luterana sobre la resistencia al magistrado cuando obra como particular.

¹⁰⁵⁴ “Nor could any man in the state of nature, have a right to violate the property of another; that is, what another had acquired by his art or labour; or to interrupt him in his industry and enjoyments, as long as he himself was not injured by that industry and those enjoyments. No man therefore could transfer to the magistrate that right which he had not himself”. Carta 60.

¹⁰⁵⁵ “All men are born free; liberty is a gift which they receive from God himself; nor can they alienate the same by consent, though possibly they may forfeit it by crimes. No man has power over his own life, or to dispose of his own religion; and cannot consequently transfer the power of either to any body else”. Carta 59.

y árbitro de sus acciones particulares y su propiedad. Un rasgo del que ningún otro hombre que viva sobre la tierra puede despojarles sin usurpación, o bien porque así lo consienta.¹⁰⁵⁶

El problema es que, aunque esto deba resultar así, los gobernantes, buscando su propio interés, a menudo intentan aplastar aquellos derechos, aseveración que Trenchard y Gordon relacionan con el escándalo financiero ocurrido, que *ligan a la existencia de monopolios*¹⁰⁵⁷. En aquellos supuestos, y cuando los resortes previstos políticamente para combatir tales fenómenos fracasan, cabrá la posibilidad de reaccionar a la manera “republicana”, reivindicando la *virtud cívica*:

Naciste para la libertad, y es tu *interés y deber* preservarla. La constitución bajo la que vives es una *monarquía mixta*, donde tus gobernantes tienen todas y cada una de las potestades necesarias para protegerte y defenderte, pero ninguna para perjudicarte u oprimirte. Dispones de una amplia porción del legislativo; tienes el único poder que existe sobre tu propia bolsa; posees un derecho indudable de vigilar y castigar a quienes sean instrumentos de tu opresión: pero depende únicamente de tí el hacer que estos derechos sean realmente tuyos, que puedas disfrutar de tales nobles privilegios.¹⁰⁵⁸

Este llamamiento “republicano”, en el sentido clásico de recuperación de la participación política ciudadana, aparece también un poco después, y en la misma Carta, mostrando muy a las claras que la preocupación de Trenchard y Gordon en su contexto. Ésta se refiere de manera muy directa a la corrupción extendida, no ya sólo entre los representantes parlamentarios por un gobierno que sólo busca el beneficio de ciertos particulares, sino también por los propios candidatos electorales, que la difunden entre los *freeholders*:

¹⁰⁵⁶ Carta 62: “[b]y liberty, I understand the power which every man has over his own actions, and his right to enjoy the fruit of his labour, art, and industry, as far as by it he hurts not the society, or any members of it, by taking from any member, or by hindering him from enjoying what he himself enjoys. The fruits of a man's honest industry are the just rewards of it, ascertained to him by natural and eternal equity, as is his title to use them in the manner which he thinks fit: And thus, with the above limitations, every man is sole lord and arbiter of his own private actions and property. A character of which no man living can divest him but by usurpation, or his own consent”. Carta 62. A propósito de ese consentimiento, alude, entre otras cosas, a la posibilidad de que se soliciten impuestos al *freeman*, sólo con el consentimiento de sus representantes parlamentarios.

¹⁰⁵⁷ “Los monopolios son igualmente peligrosos respecto al comercio, que en política o religión: un mercado libre, un gobierno libre, y una libertad de conciencia, son los derechos y bendiciones de la humanidad”. Carta 91. Una clara coincidencia con los *levellers*, que los criticaban como prebendas del partido de la Corte.

¹⁰⁵⁸ “You are born to liberty, and it is your interest and duty to preserve it. The constitution which you live under is a mixed monarchy, where your governors have every right to protect and defend you, none to injure and oppress you. You have a large share in the legislature; you have the sole power over your own purses; you have an undoubted right to call to account and punish the instruments of your oppression: But it depends upon yourselves alone to make these rights of yours, these noble privileges, of use to you. The best laws give no security if they are not executed, but indeed become worse than no laws and they never will be executed, unless those who are entrusted with the execution of them have an interest in their execution” (Carta 70).

Hay un tipo de hombres que merodean por todo el país a fin de comprar poblaciones; malnacidos que os abordan para votar, con el espíritu, propósito y maneras de un fullero; y que os tratan como ganado que se pudieran comprar por una cantidad mayor o menor, según lo que crean puede ser vuestro precio. ¿Caballeros, podeis soportar este insulto contra vuestra honestidad, razón y libertades?.¹⁰⁵⁹

Pero, y esta sí es una postura que recuerda a Maquiavelo y a Harrington, y desde luego a los *levellers*, más que a Locke, *urge recurrir a diversos mecanismos que afianzen esa virtud cívica, que la respalden y eviten que permanezca inerte ante la corrupción*. Porque resulta que “el único secreto para insituir un gobierno libre, es conseguir que los intereses de los gobernantes y de los gobernados sean tan similares como contribuya a ello” el arte de la política, sin que “pueda preservarse la libertad de otra manera”. Pero resulta que “los hombres” propenden a la “debilidad y depravación”, de modo que “la mayoría actúa contra su deber, tan frecuentemente como se atreve”, así que conviene buscar modos de relacionar el interés propio con el cumplimiento de esa obligación¹⁰⁶⁰. En este sentido, cabe hablar de varios medios para que las personas con cargos se comporten como si fueran virtuosos¹⁰⁶¹.

El primero es un resorte que supone el máximo grado de participación ciudadana en la vida pública: *la milicia o pueblo en armas*. Esta vieja divisa, de origen romano, se encontraba también en textos maquiavélicos y en la movilización radical engendrada por el *New Model Army*, así como en los escritos de los hombres de la *Commonwealth*. Robert Molesworth también la había expuesto en su *Account of Denmark* (1693)¹⁰⁶². Sus bases eran la defensa del territorio contra invasiones de

¹⁰⁵⁹ “There are a sort of men who prowl about the country to buy boroughs; creatures, who accost you for your votes with the spirit and design, and in manner of jockeys; and treating you like cattle, would purchase you for less or more, just as they think they can sell you again. Can you bear this insult, Gentlemen, upon your honesty, your reason and your liberties?”. Carta 70.

¹⁰⁶⁰ “The only secret therefore in forming a free government, is to make the interests of the governors and of the governed the same, as far as human policy can contrive. Liberty cannot be preserved any other way. Men have long found, from the weakness and depravity of themselves and one another, that most men will act for interest against duty, as often as they dare. So that to engage them to their duty, interest must be linked to the observance of it, and danger to the breach of it”. Carta 60. Esta crítica era común a todos los *real whigs* (vid. Morgan, *op. cit.*, pp. 145 y 146).

¹⁰⁶¹ Para nuestros dos autores, “las mejores leyes no dan seguridad si no resultan ejecutadas, sino que, en vez de ello, vienen a ser peor que la inexistencia de normas; resultando que no serán ejecutadas a menos que quienes estén encargados de tal cometido tengan interés en que así ocurra” (Carta 70).

¹⁰⁶² Esta obra fue escrita por Molesworth tras una estancia de varios años en Copenhague, después de haber sido enviado allí por Guillermo III en comisión. Impetuoso e irascible, pese a su gran inteligencia, tuvo diversos problemas con los nacionales de aquel lugar. Cuando regresó a Inglaterra no pudo ocupar ningún puesto preeminente allí. Luego sería parlamentario en varias asambleas. El *Account of Denmark* era una reflexión que arrancaba de la convulsión política que en 1660 se había producido en el país nórdico y que había hecho caer la vieja constitución gótica, implantando el absolutismo. El libro concluía en contra de los ejércitos permanentes y fue muy bien acogida por diversos coetáneos, entre ellos Locke, que pronto formaron en su mayoría el círculo de los *old whigs* en torno a Molesworth. Mucho antes, en 1660, este escritor ya había impreso una *Franco-Gallia* con prefacio propio. Vid. Robbins, pp. 85, y 88-

potencias extranejas que quisieran violar las libertades inglesas, reinos mayoritariamente católicos y vinculados con el absolutismo, y también el de evitar que el monarca tuviera un ejército mercenario a su servicio, que inevitablemente sería recompensado con privilegios que supusieran la opresión del resto de sus súbditos:

Si se ataca un estado libre, todos y cada uno de sus hombres lo defenderán, porque cada uno de ellos tiene algo que defender allí. Aman su condición, tranquilidad y propiedad, y arriesgarán su vida antes que perderlas; porque con ellas, también perderían las bendiciones de su existencia.

Con respecto a los Estados libres, al ser cada hombre un soldado, o convertirse de manera rápida en él, se conseguirá su robustecimiento en la guerra, combate a combate. Sin embargo, los ejércitos de un príncipe absoluto van deteriorándose en cada campaña [...] Concluiré contestando a una objeción: se suele decir que los ejércitos de los tiranos con frecuencia combaten con bravura, y que son valientes; y yo mismo reconozco que esto resulta cierto en numerosas ocasiones: pero me gustaría que se recordara, que en los países absolutistas nada prospera excepto, precisamente, la corte y el ejército. Un tirano debe suministrar a sus expoliadores parte del botín, o de otra manera, bien lucharán con desgana, bien le matarán. La mayoría de los príncipes absolutos deben, por lo tanto, emplear a sus hombres como hombres libres, rindiendo su propio poder y vida; y bajo los tiranos más grandes los hombres de guerra disfrutaban de grandes privilegios, aún mayores que en los Estados libres. Los privilegios e inmunidades de que gozan constituyen un tipo de libertad que les es muy querida, pero terrible siempre para el súbdito.¹⁰⁶³

Así pues, la milicia impide el control de la defensa nacional por parte de unos privilegiados que además tendrían sometidos a vigilancia a los ingleses, y bajo peligro

89. Asimismo, debe subrayarse que la cuestión de los ejércitos permanentes se mantuvo viva gracias a la *Standing Army Controversy*, provocada a causa de que Guillermo de Orange deseaba conservar algunas tropas mercenarias tras la conclusión del tratado de paz de Ryswick en 1697 (vid. Robbins, *op. cit.*, pg. 99). Para más detalles para esta discusión, vid. Scott, Jonathan: *Commonwealth Principles. Republican Writing of the English Revolution*) Cambridge, Cambridge University Press, 2004.

¹⁰⁶³ "In attacks upon a free state, every man will fight to defend it, because every man has something to defend in it. He is in love with his condition, his ease, and property, and will venture his life rather than lose them; because with them he loses all the blessings of life. In free states, every man being a soldier, or quickly made so, they improve in a war, and every campaign fight better and better. Whereas the armies of an absolute prince grow every campaign worse; [...] I will conclude with answering an objection: It may be said, that the armies of tyrants often fight bravely, and are brave; and I own it to be true in many instances: But I desire it may be remembered, that in arbitrary countries nothing flourishes except the court and the army. A tyrant must give his spoilers part of the spoil, or else they will fight but faintly for it, or perhaps put him to death if he do not. The most absolute princes must therefore use their soldiers like freemen, as they tender their own power and their lives; and under the greatest tyrants the men of war enjoy great privileges, even greater than in free states. The privileges and immunities which they enjoy, constitute a sort of liberty, dear to themselves, but terrible always to the subject, and often pernicious to the prince: It being the certain condition of a tyrant, that to be able to oppress his people, or plague his neighbours, he must empower his soldiers to destroy himself". Carta 65. El texto es aderezado con diversos ejemplos de la historia de griegos y romanos, e incluso mencionando los éxitos cromwellianos. Hay en estas líneas, sin duda un cierto aroma pacifista: las guerras tienden a desatarse por el afán saqueador de la soldadesca al servicio del monarca absoluto.

de ser saqueados. Recuérdese que la diferencia en aquella época entre fuerza armada para defenderse de otras potencias y policía interior para reprimir el crimen y garantizar el orden no era tan grande como lo es ahora. Y ello porque se entendía había enemigos dentro del territorio, traidores, espías y quintacolumnistas dispuestos a prestar su apoyo a naciones extranjeras.

Otro resorte para evitar la corrupción que conlleva el poder, era la ley que fomentase la virtud, bien a través de castigos más o menos duros para los culpables, bien con imposiciones frente al lujo o un reparto de la tierra distinto al existente. Todas esas posibilidades era citadas por las fuentes históricas latinas y griegas, de las que se hacían eco autores como el ya citado Maquiavelo. Respecto a las **medidas punitivas**, es claro que Trenchard y Gordon estaban pensando en el *impeachment* y el *bill of attainder* tradicionales en el sistema inglés y que ahora peligraban, dado el gobierno de gabinete instaurado¹⁰⁶⁴. Así, se refieren primero a un poder *extraordinario* que en Roma podía tener el dictador para castigar a aquellos que quisieran corromper al pueblo, repartiendo alimentos gratuitamente para garantizarse su apoyo¹⁰⁶⁵, y luego pasan a examinar el ejemplo de Atenas:

Los atenienses, creciendo celosos por haber perdido sus libertades debido a la usurpación de un particular y demasidado poderoso ciuddano, nunca se atrevieron a confiar aquel poder a un solo magistrado, ni siquiera a un consejo. Ni tampoco lo distribuyeron en partes, sino que lo reservaron a todo el cuerpo del pueblo, en consonancia con la naturaleza del gobierno popular. En este celoso Estado, era un crimen ser famoso, y mucho más desearlo: no permitirían a hombre alguno tenera en su poder esclavizar al país. Y es signo de sabiduría en un Estado y muestra de que auquellos hombres eran sabios, suponer que todos los que tengan la posibilidad de escalviar a los demás, así lo harán. La generosidad, el sacrificio, y las virtudes personales y privadas, no son *en política* sino meras denominaciones, o más bien palabras manidas, que no

¹⁰⁶⁴ De hecho, la última persona ejecutada por un *bill of attainder* fue Sir John Fenwick en 1697. En el siglo XIX se mitigaron sus consecuencias legales. Vid. Cook, *op. cit.*, 41.

¹⁰⁶⁵ Muchas naciones han tenido cargos públicos de carácter especial nombrados para castigar crímenes que no fueran habituales, que no quedaran alcanzados pro la justicia ordinaria. Los romanos tenían un dictador; un magistrado extraordinario e importante, investido de un poder extraordinario y que fue creado por exigencias también extraordinarias; y su cometido quedó limitado solamente al bien común, basándose en un mandato sucinto: salvar al Estado.” Carta 11. Téngase en cuenta que Trenchard y Gordon parten de un iusnaturalismo bastante combativo, que no está dispuesto a que el ansia de justicia pueda quedar obstaculizada por consideraciones propias de “leguleyos”: “[p]ero como las leyes positivas [...] nunca pueden por completo impedir las habilidades de hombres tramposos para evadirlas, o el poder de los grandes para violarlas, de esto se deduce que hay una elaboración diaria de nuevas leyes y nuevas oportunidades también para vulnerarlas diariamente: Así que lo más que puede hacer la sabiduría, la virtud y la ley, es disminuir o modificar, ero nunca abolir por completo, el vicio y la barbarie” (Carta 42). O: “la mayor parte de las leyes no instituyen crímenes, sino que se adecúan y adaptan sus castigos a las acciones que toda la humniadad ha considerado delito antes”ocurriendo que hay crímenes “tan grandes, que ninguna sabiduría humana pudo prever que hombre alguno sería tan perverso y estaría tan desesperado como para cometerlos” (Carta 11).

sriven para nada a los hombres sabios, aunque puedan convencer al vulgo. Los atenienses lo sabían; así que señalaron un método, en consecuencia, para castigar a los hombres de fama, aunque no pudieran probar otro crimen contra ellos excepto precisamente el de disfrutarla. Ese castigo fue llamado ostracismo, o sentencia de la mayoría por votación inscrita en conchas marinas; y por el cual un ciudadano sospechoso era sancionado con el exilio durante diez años.(...) Se piensa que hombres sin embargo valiosos sufrieron el ostracismo; y puede que sea cierto, por lo que yo sé; pero aun así quedó asegurado lo público y durante largo tiempo.¹⁰⁶⁶

El otro medio que Trenchard y Gordon perciben ha sido históricamente importante para hacer frente a la corrupción política, como se ha señalado, es el de las **leyes que eviten una gran diferencia de riquezas entre los miembros de la sociedad:**

*La libertad no puede existir sin igualdad, ni la igualdad quedar por mucho tiempo preservada sin una ley agraria o algo similar; de manera que cuando las riquezas de los hombres viene a ser inconmensurables o excesivamente grandes, un pueblo que desee mantener su propia seguridad debería realizar una estricta indagación sobre cómo se han obtenido, y obligar a aquéllos a rebajar su tamaño, por miedo a que aterroricen a la comunidad o se enseñoreen de ella.*¹⁰⁶⁷

La denominación de ese régimen resulta clara:

¹⁰⁶⁶ "The Athenians, grown jealous by having lost their liberties, by the usurpation of a private, but too powerful citizen, durst never trust this great power to any single magistrate, or even to a council. They would not, however, part with it, but reserved it to the whole body of the people, agreeably to the nature of a popular government. In this jealous state, it was a crime to be popular, much more to affect popularity: They would not allow a man to have it in his power to enslave his country. And, indeed, it is wisdom in a state, and a sign that they judge well, to suppose, that all men who can enslave them, will enslave them. Generosity, self-denial, and private and personal virtues, are in politics but mere names, or rather cant-words, that go for nothing with wise men, though they may cheat the vulgar. The Athenians knew this; and therefore appointed a method of punishing great men, though they could prove no other crime against them but that of being great men. This punishment was called the ostracism, or the sentence of a majority in a ballot by oyster-shells; by which a suspected citizen was adjudged to banishment for ten years [...] Worthy men are thought to have suffered unjustly by this ostracism; and it may be true, for aught that I know; but still it secured the publick, and long secured it". Carta 11.

¹⁰⁶⁷ "As liberty can never subsist without equality, nor equality be long preserved without an agrarian law, or something like it; so when men's riches are become immeasurably or surprizingly great, a people, who regard their own security, ought to make a strict enquiry how they come by them, and oblige them to take down their own size, for fear of terrifying the community, or mastering it. Carta 35. Esta alegación no puede ser entendida en un sentido socialista. Debe repararse en que Trenchard y Gordon aluden, muy a la manera aristotélica, al exceso de riqueza, como se encargan de aclarar un poco más adelante: "[p]ero, por así expresarlo, supone esto que es un crimen ser rico? Sí, desde luego, si ello ocurre a expensas de los públicos o suponiendo un peligro para él [...] Es uno de los efectos del poder arbitrario, que el príncipe tiene demasiado, y el pueblo muy poco; y tal desigualdad puede ser la causa del poder arbitrario ("[b]ut, will some say, is it a crime to be rich? Yes, certainly, at the publick expense, or to the danger of the publick. [...] It is one of the effects of arbitrary power, that the prince has too much, and the people too little; and such inequality may be the cause too of arbitrary power").

Una igualdad en la propiedad supondrá una igualdad en el poder; y una igualdad de poder es una *república*, o *democracia*, en donde una ley agraria, o algo que equivalga a la misma, establecerá una adecuada distribución de la propiedad;¹⁰⁶⁸

Así que tenemos aquí la justificación de la ley agraria, que no es otra que la de viejo cuño harringtoniano: la propiedad determina la participación en el poder político, y como éste debe guardar un equilibrio, ha de evitarse la posibilidad de acumular riquezas excesivas. De otro modo, se introducirían abusos y arbitrariedades por la conducta de los más acaudalados. Pero el conjunto de las Cartas de Catón nos demuestra que tal posibilidad se baraja sólo como argumento de apoyo, una situación hipotética que sirve a nuestros autores para fustigar a la clase política del momento y a sus oscuros negocios. Sus simpatías, es claro, son favorables al “pueblo”, del que forman parte asimismo todos esos pequeños accionistas arruinados por la burbuja financiera antes citada, pero Trenchard y Gordon no proponen ningún cambio revolucionario que sustituya el reparto de la propiedad existente, porque peligrarían las *propiedades* actuales y *con ellas todas las libertades*, pudiendo originar, incluso, el ascenso del absolutismo en Inglaterra:

respecto a la presente distribución de la propiedad, no podemos preservar la libertad de otro modo que respetando el reparto que tenemos actualmente; si intentáramos alterarla, corremos el riesgo de perder la posesión de lo que disponemos, o quizás de caer en una monarquía absoluta.¹⁰⁶⁹

Así que, por lo tanto,

Espero que nadie entre nosotros tenga tan mala cabeza como para imaginar que un hombre o varios, en el actual contexto, puedan obtener *poder suficiente* como para alterar la distribución de las propiedades, realizando luego un reparto por igual.¹⁰⁷⁰

En consecuencia, debe considerarse que, como “sin ello es imposible establecer una república aquí”¹⁰⁷¹, va a permanecer la vieja constitución, con su

¹⁰⁶⁸ “An equality of estate will give an equality of power; and an equality of power is a Commonwealth, or democracy: An agrarian law, or something equivalent to it, must make or find a suitable disposition of property”.

¹⁰⁶⁹ “During the present distribution of property, we can preserve liberty by no other establishment than what we have; and in the attempt to alter it, must run great hazard of losing what we are in possession of, or perhaps of falling into an absolute monarchy”. Carta 85.

¹⁰⁷⁰ “I hope that no one amongst us has a head so wrong turned, as to imagine that any man, or number of men, in the present situation of affairs, can ever get power enough to turn all the possessions of England topsy-turvy, and throw them into average”. Id.

equilibrio (*balance*¹⁰⁷²) **de poderes** entre Lores, Comunes y Rey, la “monarquía mixta”¹⁰⁷³. Los dos periodistas no parecen dispuestos a situarse frontalmente contra el gobierno mixto tradicional, con su combinación de la famosa tríada, pues además conceden a la misma un carácter de institución que incorpora cierto control sobre los gobernantes, al imponer un fraccionamiento que implica la mutua vigilancia entre ellos¹⁰⁷⁴. En esto, se diferencian de los niveladores y se acercan en cambio a Locke, a los *whigs* tradicionales y a experimentos republicanos como el *Instrument of Government*. Es decir, al molde de mayor arraigo en Inglaterra, por encima de los atisbos de soberanía popular que contenían los *Agreements of the People*. Si defienden al pueblo, así, es porque realmente entienden que en la Constitución inglesa el poder que éste tiene asignado ha quedado disminuido por la corrupción. Se trata de restaurar el viejo equilibrio, devolviendo al Parlamento, especialmente a los Comunes, el papel que tenían antes de las maniobras de Walpole y los suyos. Tras referirse a la corrupción que *ha manipulado procesos electorales* y alzado en los escaños hombres favorables al gobierno¹⁰⁷⁵, Trenchard y Gordon mencionan que:

considerando que la constitución ha sido obstinadamente construida a fin de que, aún así, pueda preservar las libertades del pueblo, a pesar de los malévolos intentos de destruirla, habrá que atacarla de frente, si se quiere que caiga, porque por sí sola no lo hará. Habrá que maniobrar, bajo la pretensión de perseguir el bien común, al objeto de *alterar el equilibrio en el gobierno* y

¹⁰⁷¹ “*Without all this it is impossible to settle a Commonwealth here.*” Id.

¹⁰⁷² Las Cartas 17 y 91 mencionan el concepto.

¹⁰⁷³ La constitución de una monarquía limitada es la reunión del rey y lo nobles (sin los cuales aquélla no puede subsistir) y el cuerpo del pueblo, a fin de elaborar leyes: “[t]he constitution of a limited monarchy, is the joint concurrence of the crown and of the nobles (without whom it cannot subsist) and of the body of the people, to make laws”. Carta 61

¹⁰⁷⁴ Vid. nota 1009 (*balance*). Y Carta 59: “en los gobiernos libres hay controles y restricciones indicados y expresados en la propia constitución”.

¹⁰⁷⁵ Carta 17: “donde el pueblo elige diputados para la representación, intentarán sobornar a los electores en la selección de sus representantes, y así tener un órgano de sus propios lacayos; y donde no puedan tener éxito en ello, se esforzarán en corromper a los diputados una vez se hayan elegido, con dinero público”. En caso de no se produjeran esas maniobras, el pueblo elegiría a los más virtuosos: “[e]l pueblo, cuando se le deja sin sujeciones, y mediante su propio entendimiento y observación, juzgará a los hombres por sus buenas o malas acciones, y será capaz de separar el vicio de la virtud, y lo justo de lo injusto: y por tanto, cuando su gobierno no se halla inmerso en la corrupción, los hombres mejores y más virtuosos serán también los más populares, y quien lo haga mejor será más estimado; pero cuando la embriaguez, el dinero o falsos temores intervienen y el gobierno se convierte en facción, el juicio del pueblo resulta viciado y pero que ninguno. Entonces prefiere los peores hombres a los mejores” (“[t]he people, when they are left to themselves, and their own understandings and observation, will judge of men by their good or bad actions, and are capable of separating vice from virtue, and the just from the unjust: And therefore, when their government is not corrupted, the best and most virtuous men will always be the most popular, and he who does best will be esteemed best: But when strong liquor, or money, or false terrors intervene, and government is turned into faction; the judgment of the people is vitiated, and worse than none. They then prefer the worst men to the best”). Carta 51.

reunir bajo un *único poder* a hombres serviles y que poseerán un interés distinto del conjunto del pueblo.¹⁰⁷⁶

De hecho, la Carta 60 van más allá, exponiendo cuál es el sentido del equilibrio constitucional, anticipando así a Montesquieu y al “Federalista”:

el poder y la soberanía de los magistrados en los países libres quedan de tal manera limitados, y divididos en tantos canales, y relacionados con la dirección de hombres tan diferentes, con distintos intereses y perspectivas, que la mayoría de estos últimos rara vez o nunca podría entender que redundan en su beneficio socavar las instituciones básicas. Su emulación, envidia, miedo o interés, hace que *se conviertan en vigilantes y se controlen unos a otros*.

Sin embargo, y aun con tal defensa del gobierno mixto, no está claro, pese a su aparente respeto por la Corona y los Loes, que Trenchard y Gordon no mantengan aquí cierta añoranza de mecanismos como el contemplado por el *Instrument of Government*, es decir, de alguno de tipo republicano, porque, y como demuestran las anteriores alusiones a la ley agraria, ambos autores guardan cierto aprecio por Harrington¹⁰⁷⁷ y un igualitarismo difícil de encajar en la defensa de la vieja constitución (y que analizaré en breve con mayor profundidad). Más parece que en esto guardan una actitud de carácter prudente y estratégico: ante la imposibilidad de crear una *commonwealth* en Inglaterra, dada la correlación de fuerzas existente, lo imperioso es repeler la corrupción que está afectando a los propios representantes de la “porción democrática”¹⁰⁷⁸. Al respecto, y pese a respetar ese equilibrio del gobierno mixto¹⁰⁷⁹,

¹⁰⁷⁶ “*But if the constitution should be so stubbornly framed, that it will still preserve itself and the people’s liberties, in spite of all villainous contrivances to destroy both; then must the constitution itself be attacked and broken, because it will not bend. There must be an endeavour, under some pretence of publick good, to alter a balance of the government, and to get it into the sole power of their creatures, and of such who will have constantly an interest distinct from that of the body of the people*”. Carta 17.

¹⁰⁷⁷ Carta 3: “hablo de esas leyes que gozan de una conocida y directa tendencia a asegurar lo que poseemos y a preservar lo que somos: un pueblo libre no se preserva por otros medios que una distribución igual de la propiedad; todo hombre que dispone de una porción de propiedad, tiene asimismo una parte proporcional en el poder; y las primeras semillas de la anarquía (que normalmente derivan en tiranía) son producidas cuando algunos son ricos ingobernables, y muchos más, pobres hasta la miseria; es decir, que algunos son señores a quienes acompañan todos los medios de opresión, y otros quieren todos los medios de autodefensa”. Obsérvese que aquí hay una alusión a la teoría cíclica de Polibio sobre los sistemas políticos, pues este autor griego que escribía en latín, pensaba que los gobiernos no mixtos tendían a degenerar (Sabine, *op. cit.*, pg. 122), y que, en consecuencia, de la anarquía se pasaba a la tiranía.

¹⁰⁷⁸ Grandes riquezas en hombres particulares suponen siempre peligro para los Estados, porque crean una dependencia demasiado grande para la seguridad de cualquier clase de gobierno; ubican súbditos en un nivel más cercano al de los soberanos; hacen que el noble permanezca en una desigualdad excesiva respecto a otra persona; destruyen, entre los Comunes, ese *equilibrio de propiedad y poder* que es esencial a la democracia o a la *porción democrática* del gobierno, aniquilan su equidad y *alteran su naturaleza* (aun cuando no necesariamente su denominación). Por estos motivos, los Estados que carecen de ley agraria han empleado *otros medios enérgicos o políticos para conseguir sus mismos fines*. Carta 91: “[v]ery great riches in private men are always dangerous to states, because they create greater dependence than can be consistent with the security of any sort of government whatsoever; they place

resulta patente que sus simpatías se dirigen al pueblo. De hecho, parten de la noción maquiaveliana que entiende es el sujeto político más sabio, menos propenso a crear corrupción. En su naturaleza se halla una semilla favorable a la grandeza del Estado y el bienestar de sus miembros¹⁰⁸⁰. No cabe decir lo mismo del príncipe, señalado por sus debilidades, ni tampoco de la nobleza, que suele suponer un peligro para el país¹⁰⁸¹.

Pero el gran problema de esa “porción” popular es que ha de encontrarse *representada*, dada la imposibilidad de que se reúna en asamblea ella misma¹⁰⁸². Es decir, que sus comisionados deben defender los intereses del pueblo y sostener así el bien común¹⁰⁸³. Ocurre que a menudo esto no sucede así, como demuestran los acontecimientos recientes acaecidos en Inglaterra y que han hecho aflorar la corrupción. Al respecto, “cada súbdito tiene derecho a vigilar los avances de quienes podrían traicionar a su país”¹⁰⁸⁴, siendo tal “el principio de los *whigs*, la doctrina de la libertad”¹⁰⁸⁵. Es decir, que el pueblo pueda controlar a quienes se supone son sus representantes. La desconfianza en los titulares del poder político distingue, según Trenchard y Gordon, a los auténticos *whigs*. A la manera en que también les sucedía a los *levellers*, según se ha tenido ocasión de comprobar. Unos y otros se han encontrado con idéntica situación (aunque los motivos de la misma variaran); con la de un Parlamento que *traiciona* la voluntad popular. Y es que, al igual que para los niveladores, la fuente de todo poder para los dos periodistas es el *pueblo*:

subjects upon too near a level with their sovereigns; make the nobility stand upon too great an inequality in respect of one another; destroy, amongst the Commons, that balance of property and power, which is necessary to a democracy, or the democratic part of any government, overthrow the poise of it, and indeed alter its nature, though not its name: For this reason, states who have not an agrarian law, have used other means of violence or policy to answer the same ends’.

¹⁰⁷⁹ “El Rey no puede obrar incorrectamente: y, gracias a Dios, tenemos un monarca que aunque pudiera no lo haría. Pero los principales ministros de los príncipes quizás sí obren mal, y de hecho, frecuentemente ha ocurrido así; así que los representantes del pueblo tienen un derecho indudable a convocarles para que rindan cuentas” (“*that the King can do no wrong: And, I thank God, we have a King that would not, if he could. But the greatest servants to princes may do wrong, and often have done it; and the representatives of the people have an undoubted right to call them to an account for it*”). Carta 13.

¹⁰⁸⁰ “En resumen, el pueblo juzga frecuentemente mejor que sus superiores y no sufre de tantos prejuicios que contribuyan a juzgar erróneamente”. Carta 13 (“*[i]n short, the people often judge better than their superiors, and have not so many biases to judge wrong*”).

¹⁰⁸¹ Vi. *supra*, pg. 289, nota 1078.

¹⁰⁸² Carta 61: “donde el pueblo, a causa del número o la distancia, no se puede reunir, debe enviar comisionados para hablar en su nombre y defender sus intereses” (“*where the people, through number or distance, cannot meet, they must send deputies to speak in their names, and to attend upon their interest*”).

¹⁰⁸³ “El beneficio común del súbdito” (“*the common benefit of the subject*”), Carta 61.

¹⁰⁸⁴ “Every private subject has a right to watch the steps of those who would betray their country” (Carta 13).

¹⁰⁸⁵ “*This is the principle of a Whig, this the doctrine of liberty*”. Carta 13.

Los primeros principios del poder están en el pueblo; y todos los proyectos de los hombres en el poder *deberían* referirse al pueblo, tener como fin solamente su bienestar; y quienquiera que pretenda gobernar sin tenerle en cuenta pronto se arrepentirá.¹⁰⁸⁶

En consecuencia, y como según hemos visto, hay que vigilar a sus representantes, los Comunes, y el sistema propuesto para ello por Trenchard y Gordon, que también había sido previsto por los *levellers* casi hacía ya un siglo, era el de **la rotación de parlamentarios, con elecciones periódicas repetidas** (“cambiándolos tan frecuentemente, que no haya tiempo para corromperles”¹⁰⁸⁷). La Carta 61 explica aún con más detalle el mecanismo y sus razones:

No veo otros medios en la política *humana*¹⁰⁸⁸ a fin de preservar la libertad pública y una forma nonárquica de gobierno de manera conjunta, salvo el de convocar *frecuentes* elecciones de los comisionados del pueblo: esto es lo que los escritores políticos denominan rotación de la magistratura. Los hombres, nada más entrar a ser miembros de la magistratura por primera vez, tienen presente su propia condición: recuerdan lo que sufrieron de los abusos del poder junto con sus convecinos¹⁰⁸⁹, y cuanto lo maldijeron; así que sus propósitos iniciales son los de ser humildes, modestos y justos; y probablemente por algún tiempo, continúen resultando ser los mismos. Pero la posesión de poder pronto altera y vicia sus corazones, que con tal levadura se hinchan hasta alcanzar un tamaño nada natural, dado el engañoso incienso de sus falsos amigos y la sumisión de parásitos postrados. Primero, así, crecen apartándose de los buenos propósitos, y luego directamente los abandonan; a continuación, pierden su moderación; luego, renuncian a todas las medidas relacionadas con su viejo conocimiento y principios; se ven reflejados en magníficas copas, habiendo crecido en presunción, y como una especie diferente de sus convecinos; por todo lo cual vienen a degradarse, al convertirse en insolentes, rapaces y tiránicos, dispuestos a emplear todos los medios posibles, frecuentemente los más viles y opresivos, para elevar sus riquezas tanto como su imaginaria grandeza. Así que entonces, dicho todo esto, el único modo de reubicarles en su antigua condición, y consecuentemente, en la del resto del pueblo, es devolverles a la misma; y dejar que otros con iguales capacidades compartan el poder cuando llegue su turno: esta es asimismo la única forma de cualificar a los hombres y hacerles igualmente adecuados para el dominio y la sujeción.

¹⁰⁸⁶ “*The first principles of power are in the people; and all the projects of men in power ought to refer to the people, to aim solely at their good, and end in it: And whoever will pretend to govern them without regarding them, will soon repent it*”.

¹⁰⁸⁷ “*Changing them so often, that there is no sufficient time to corrupt them*” (Carta 60).

¹⁰⁸⁸ Trenchard y Gordon parten de la idea de que no es conveniente confiar en quienes ocupan parcelas del poder. Lo que se cita ahora, así como el equilibrio de poderes que se acaba de analizar encajan con esta concepción. Los dos autores entienden que el hombre posee disposiciones tendentes a la corrupción y el mal, a la manera del pecado original, aunque también pueda ser virtuoso o empujarse a ello.

¹⁰⁸⁹ En la época no aparece la palabra “connacional”, que procede más bien de la Revolución Francesa. E Inglaterra es un Reino, y por tanto, con súbditos, no conciudadanos.

*Por lo tanto, una rotación en el poder y la magistratura, es necesaria y esencial a todo gobierno libre: de hecho, ella es tal por sí misma; y lo constituye, anima y le suministra conocimiento, tal y como el alma hace con el hombre. Se trata de algo sagrado e inviolable, donde quiera que la libertad se considere también sagrada; y no puede quedar comprometida por lo que dispongan aquellos a quienes se les haya confiado la preservación de las constituciones nacionales: porque aunque tengan la potestad de modular aquel derecho para la mejora pública y para su efectiva seguridad, no pueden tener autorización para retirarlo o, lo que es lo mismo, para dejarlo inútil.*¹⁰⁹⁰

Trenchard y Gordon exigen elecciones frecuentes para atacar la corrupción política, frente al blindaje de la *Septennial Act* de 1716, con la cual se demoraban los procesos electorales, haciendo que los Comunes pasaran a tener un mandato de siete años y no de tres, como había ocurrido antes¹⁰⁹¹. Y resulta muy llamativa la comparación de la representación parlamentaria que ambos autores realizan respecto

¹⁰⁹⁰“I can see no means in human policy to preserve the publick liberty and a monarchical form of government together, but by the frequent fresh elections of the people's deputies: This is what the writers in politicks call rotation of magistracy. Men, when they first enter into magistracy, have often their former condition before their eyes: They remember what they themselves suffered, with their fellow-subjects, from the abuse of power, and how much they blamed it; and so their first purposes are to be humble, modest, and just; and probably, for some time, they continue so. But the possession of power soon alters and vitiates their hearts, which are at the same time sure to be leavened, and puffed up to an unnatural size, by the deceitful incense of false friends, and by the prostrate submission of parasites. First, they grow indifferent to all their good designs, then drop them: Next, they lose their moderation; afterwards, they renounce all measures with their old acquaintance and old principles; and seeing themselves in magnifying glasses, grow, in conceit, a different species from their fellowsubjects; and so by too sudden degrees become insolent, rapacious and tyrannical, ready to catch at all means, often the vilest and most oppressive, to raise their fortunes as high as their imaginary greatness. So that the only way to put them in mind of their former condition, and consequently of the condition of other people, is often to reduce them to it; and to let others of equal capacities share of power in their turn: This also is the only way to qualify men, and make them equally fit for dominion and subjection. A rotation therefore, in power and magistracy, is essentially necessary to a free government: It is indeed the thing itself; and constitutes, animates, and informs it, as much as the soul constitutes the man. It is a thing sacred and inviolable, where-ever liberty is thought sacred; nor can it ever be committed to the disposal of those who are trusted with the preservation of national constitutions: For though they may have the power to model it for the publick advantage, and for the more effectual security of that right; yet they can have none to give it up, or, which is the same thing, to make it useless”.

Pero, además, aunque siendo el aspecto que he tocado el importante en cuanto a la representación parlamentaria que defienden Trenchard y Gordon, también propugnaron, aquí a diferencia de los *levellers*, una ampliación de los escaños de los Comunes (recordemos que el *Agreement* tercero establecía el número de cien como máximo para los representantes populares): “hacer que los comisionados sean tan numerosos que no exista posibilidad de corromper a la mayoría de ellos” (“to make the deputies so numerous, that there may be no possibility of corrupting the majority”, Carta 60). Probablemente ha de relacionarse con la existencia de burgos podridos en aquella época, proclive a que ciertos distritos electorales se encontraran sobredimensionados e impidieran ejercer su derecho a numerosos *freeholders*.

¹⁰⁹¹ “Therefore a law was made in Edward III's time, that Parliaments should be holden once a year. But this law, like the late Queen's Peace, did not execute itself; and therefore the court seldom convened them, but when they wanted money, or had other purposes of their own to serve; and sometimes raised money without them: Which arbitrary proceeding brought upon the publick numerous mischiefs; and, in the reign of King Charles I, a long and bloody civil war. In that reign an act was passed, that they should meet of themselves, if they were not called according to the direction of that law; which was worthily repealed upon the restoration of King Charles II. And in the same kind fit, a great revenue was given him for life, and continued to his brother. By which means these princes were enabled to keep standing troops, to corrupt Parliaments, or to live without them; and to commit such acts of power as brought about, and indeed forced the people upon the late happy Revolution”.

a la existente en las sociedades mercantiles de su época, esas que, como se ha visto, encabezaron gran parte de la colonización norteamericana:

Tenemos algún esbozo de esta política en la constitución de varias compañías, donde la asamblea general de sus socios conforma el legislativo, y su *consentimiento* sanciona las leyes; y donde la administración de sus asuntos se halla puesta bajo la conducta de un cierto número de personas elegidas por el conjunto. Aquí todo hombre afectado advirtió la necesidad de asegurar su porción de la propiedad, ubicando a quienes otorgara su confianza bajo regulaciones, y ante la posibilidad de que fueran renuentes a cuidar del conjunto. Y si se hubiera previsto que una tercera parte de los administradores cesara cada año, de manera que ninguno permaneciera más de tres (tal y como se prometió en un principio), se habría impedido a todos ellos trampear con cortesanos y conseguir grandes propiedades mediante la conspiración a expensas de la compañía.¹⁰⁹²

El *consentimiento*, pues, es la base del gobierno del pueblo mediante la representación:

El dominio que no resulta mantenido por la espada, debe ser conservado mediante el consentimiento; y en este último caso, ¿qué seguridad puede esperar cualquier hombre a la cabeza de los asuntos públicos, sino la que provenga de perseguir el bienestar del pueblo e indagar su idónea voluntad? El gobierno de uno para su propio beneficio es tiranía; y también el gobierno de unos pocos es solamente para su propio bien: pero el gobierno ejercido *para el beneficio* de todos, y con el consentimiento de todos, es libertad; y la palabra gobierno es profanada, y se abusa de su significado cuando viene a implicar otras cosas.¹⁰⁹³

El gran problema con el que asimismo se encontraron Trenchard y Gordon, y tan insatisfactoriamente solucionado como por sus antecesores en el pensamiento político inglés, fue el de qué mecanismo insertar para solventar una crisis creada por

¹⁰⁹² "We have some sketch of this policy in the constitution of our several great companies, where the general court, composed of all its members, constitutes the legislature, and the consent of that court is the sanction of their laws; and where the administration of their affairs is put under the conduct of a certain number chosen by the whole. Here every man concerned saw the necessity of securing part of their property, by putting the persons entrusted under proper regulations; however remiss they may be in taking care of the whole. And if provision had been made, that, as a third part of the directors are to go out every year, so none should stay in above three (as I am told was at first promised), all juggling with courtiers, and raising great estates by confederacy, at the expence of the company, had, in a great measure, been prevented". Carta 60.

¹⁰⁹³ "Dominion that is not maintained by the sword, must be maintained by consent; and in this latter case, what security can any man at the head of affairs expect, but from pursuing the people's welfare, and seeking their good-will? The government of one for the sake of one, is tyranny; and so is the government of a few for the sake of themselves: But government executed for the good of all, and with the consent of all, is liberty; and the word government is profaned, and its meaning abused, when it signifies any thing else". Carta 24

la *colisión entre los diferentes poderes del gobierno mixto*, es decir, cuando alguno de ellos traicionara la confianza del pueblo, que, al fin y al cabo, era el último titular del poder, extralimitándose en sus funciones:

La pregunta es, ¿quién será el juez que decidirá si el magistrado ha resuelto de manera justa y o persiguiendo lo que se le ha confiado?. A esto se le responde adecuadamente, que si quienes se quejan de él pudieran juzgarle, entonces estarían por encima del magistrado principal, cuya autoridad se supone, sin embargo, y en sí misma, la más elevada [...] si, ni los magistrados, *ni quienes se quejan de ellos y resultan agraviados por su actuación*, tienen derecho a decidir definitivamente, el uno respecto al otro, y si no existiera poder alguno al que pudieran hallarse sujetos; entonces cada hombre interesado en el éxito de la solución, debe actuar *conforme a la luz y los dictados de su propia conciencia*¹⁰⁹⁴, y hacerlo de la manera más perfecta que pueda en consonancia con ella. Donde no existe juez o ninguno pueda ser nombrado, cada hombre debe ser el suyo propio; lo cual implica, al no haber juez alguno sobre la tierra, que debemos recurrir al cielo, y obedecer su deseo, declarando nosotros mismos qué es lo que consideramos justo.¹⁰⁹⁵

Y, tras hablar de del conflicto que en pasado había conducido al enfrentamiento entre el Senado y el pueblo de Roma:

Respecto a ese gobierno consistente en la unión de nobles y pueblo, cuando contendieron, ningún hombre podía resolver el conflicto entre ellos; y por lo tanto, cualquiera debió haber estado en libertad de proveer para su propia seguridad y el bien general, en el mejor modo del que fuera capaz. Con aquel supuesto, en el el que cesó el juez común, cada uno fue el suyo propio: al ser el gobierno incapaz de actuar, pereció políticamente: la *constitución* fue disuelta, y no existiendo gobierno que así pudiera denominarse, el pueblo fue devuelto al estado de naturaleza.¹⁰⁹⁶

¹⁰⁹⁴ Aquí hay ecos de la aseveración huntoniana durante las Guerras Civiles Inglesas. Vid. *supra*, pg. 54. Y, por supuesto, al expresión vertida por Trenchard y Gordon aquí no podría ser entendida sin la libertad de conciencia religiosa, cuyos orígenes protestantes y vicisitudes ya hemos examinado, a la hora de resitirse al poder instituido.

¹⁰⁹⁵ "The question is, who shall be judge whether the magistrate acts justly, and pursues his trust? To this it is justly said, that if those who complain of him are to judge him, then there is a settled authority above the chief magistrate, which authority must be itself the chief magistrate [...] But if neither magistrates, nor they who complain of magistrates, and are aggrieved by them, have a right to determine decisively, the one for the other; and if there be no common established power, to which both are subject; then every man interested in the success of the contest, must act according to the light and dictates of his own conscience, and inform it as well as he can. Where no judge is nor can be appointed, every man must be his own; that is, when there is no stated judge upon earth, we must have recourse to heaven, and obey the will of heaven, by declaring ourselves on that which we think the juster side. Carta 59.

¹⁰⁹⁶ "For that government consisting in the union of the nobles and the people, when they differed, no man could determine between them; and therefore every man must have been at liberty to provide for his own security, and the general good, in the best manner he was able. In that case the common judge ceasing, every one was his own: The government becoming incapable of acting, suffered a political demise: The constitution was dissolved; and there being no government in being, the people were in the state of nature

Trenchard y Gordon, así, no logran solucionar el problema de la crisis constitucional; un poco más adelante, dicen que “ninguna constitución puede prever contra lo que ocurra cuando quede disuelta”¹⁰⁹⁷, si bien el poder que acompaña al gobierno regresará entonces “a quienes lo otorgaron”, es decir, al pueblo. El último resorte de vigilancia frente a quienes ejercen el poder es el derecho de resistencia, pues “sobre este principio de que el pueblo juzgue por sí mismo, y resista la fuerza ilegítima, descansa nuestra última y feliz Revolución”¹⁰⁹⁸. El problema añadido aquí es determinar quién constituye el “pueblo” y *cómo va a conformarse su presencia*. La noción de Trenchard y Gordon, como hemos visto, resulta favorable a una concepción amplia; y es de suponer que su petición de aumento en número de escaños discurriera por tales previsiones. Pero no hay una definición, en este sentido, siquiera tan clara como la de los *levellers* en los Debates de Putney, ni tampoco sus alusiones a la milicia tienen el significado, mucho más perentorio, de la Guerra Civil inglesa. Y, desde luego, menos aún un procedimiento de reforma constitucional, porque además ni siquiera se prevé una constitución sin nobles o rey.

II.1.2.1.d) 1. El igualitarismo de Trenchard y Gordon

Un rasgo de importancia en nuestros dos autores es su igualitarismo, con el que parece resucitar una cierta influencia de los *levellers* en numerosos párrafos de las “Cartas de Catón”, y que, como el de aquéllos, parece referido sólo al ámbito político :

He indicado, en una Carta anterior, que el pueblo, cuando no es mal dirigido o corrompido, generalmente realiza un adecuado juicio sobre las cosas. Tiene cualidades iguales a las de sus superiores [...] no existen tales enormes talentos que resulten exigibles para el gobierno, como pretenden hacernos creer quienes ni siquiera los poseen: los sentimientos honestos y las cualidades comunes, son suficientes; y la administración ha sido siempre mejor ejecutada, así

again” (Carta 59). Obsérvese el gran parecido de este párrafo y el anterior con el siguiente, de John Locke: “Si surge una controversia entre el príncipe y algunos miembros del pueblo en una cuestión sobre la que la ley no dice nada, y si el asunto es de gran importancia, pienso que, en un caso así, el árbitro debe ser el conjunto del pueblo [...] Pero si el príncipe, o quienquiera esté en la administración, rechaza ese modo de arbitraje, sólo cabrá el recurso de apelar a los cielos” (*op. cit.*, parágrafo 242, pg. 231). El pasaje es similar al de Trenchard y Gordon. Pero nótese que la crisis política expuesta, en Locke, conlleva reconducir la solución del conflicto al pueblo, categoría que para este autor englobaba a los individuos agrupados de manera “ordenada”, como *sociedad*. Es decir, el litigio devuelve a la situación prepolítica, pero no al estado de naturaleza, el anterior. Sin embargo, las Cartas de Catón si lo hacen, “incurriendo” en manifiesto “hobbesianismo”.

¹⁰⁹⁷ “No constitution can provide against what will happen, when that constitution is dissolved”.

¹⁰⁹⁸ “Upon this principle of people’s judging for themselves, and resisting lawless force, stands our late happy Revolution”.

como la libertad pública mejor preservada, alrededor del origen y nacimiento de los estados, cuando la llana honestidad y el sentido común¹⁰⁹⁹ gobernaron solos los asuntos públicos, y la moral de los hombres no fue corrompida por las riquezas y el lujo, ni su comprensión viciada por títulos y distinciones [...] El pueblo no tiene inclinación a ser bellaco; su fin más alto es la seguridad de su personas y propiedades. Ninguna ambición le impele; no puede obtener la condición de gran señor, ni poseer importantes títulos, así que no desea ninguno. Ninguna pasión ambiciosa o asocial le inspira; no tiene rivales para ocupar un puesto, ni competidores para apartar; no tiene favorito, alcahuete o relación que mantener: no dispone de oportunidad para el disimulo o la intriga; no sirve al fin de facción alguna; no tiene otro interés que no sea el general.

Todo esto puede ser dicho en raras ocasiones de los hombres importantes, quienes, para cultivar la pasión particular, frecuentemente conducen a la ruina pública; quienes para llenar su bolsa con miles, cargan frecuentemente al pueblo con el coste de millones; quienes orpimen por una querida y para salvar a un favorito destruyen la nación; quienes demasiado frecuentemente hunden lo público y dan paso a su fortuna privada; y que, para una placer particular, originan una calamidad general. Así que permaneciendo educados en la perversidad, y mimados por el derroche y el lujo, no sienten nada ante las desgracias de otros hombres, *ni compasión* por quienes las padecen: no tienen noción alguna de las miserias que no sienten.¹¹⁰⁰

¹⁰⁹⁹ Paine, a quien luego me referiré, escribió precisamente una obra de este título.

¹¹⁰⁰ *"I have observed, in a former letter, that the people, when they are not misled or corrupted, generally make a sound judgment of things. They have natural qualifications equal to those of their superiors; and there is oftener found a great genius carrying a pitch-fork, than carrying a white staff [...] Besides, there are not such mighty talents requisite for government, as some, who pretend to them without possessing them, would make us believe: Honest affections, and common qualifications, are sufficient; and the administration has been always best executed, and the publick liberty best preserved, near the origin and rise of states, when plain honesty and common sense alone governed the publick affairs, and the morals of men were not corrupted with riches and luxury, nor their understandings perverted by subtleties and distinctions [...] The people have no bias to be knaves; the security of their persons and property is their highest aim. No ambition prompts them; they cannot come to be great lords, and to possess great titles, and therefore desire none. No aspiring or unsociable passions incite them; they have no rivals for place, no competitor to pull down; they have no darling child, pimp, or relation, to raise: they have no occasion for dissimulation or intrigue; they can serve no end by faction; they have no interest, but the general interest. The same can rarely be said of great men, who, to gratify private passion, often bring down publick ruin; who, to fill their private purses with many thousands, frequently load the people with many millions; who oppress for a mistress, and, to save a favourite, destroy a nation; who too often make the publick sink and give way to their private fortune; and, for a private pleasure, create a general calamity. Besides, being educated in debauchery, and pampered in riot and luxury, they have no sense of the misfortunes of other men, nor tenderness for those who suffer them: They have no notion of miseries which they do not feel".* Carta 24. Obsérvense las notas distintivas del discurso puritano: igualitarismo, derivado de la idea de que todos los hombres son iguales ante Dios, sean grandes o pequeños, compasión y desprecio por quienes se refugian en el vicio. Pretende expresar la virtud en acción, que no se conforma con la esfera privada, sino que, además entiende que el ámbito público debe ser asunto de cualquier hombre, manteniendo su entidad como distinta del que circunda al interés particular. En otra Carta, la idea se reitera: "[t]odo campesino sabe distinguir un buen gobierno de otro malo, a través de sus efectos: sabe si los frutos de su labor son propios, y si los disfruta en paz y seguridad" (Carta 38: "[e]very ploughman knows a good government from a bad one, from the effects of it: he knows whether the fruits of his labour be his own, and whether he enjoy them in peace and security").

Ahora bien, este igualitarismo no es, como tampoco el de los *levellers*, de carácter socialista, se halla alejado del que Winstanley y sus *diggers* habían defendido¹¹⁰¹. No debe entenderse como igualdad en el goce de los frutos de la tierra o de las actividades productivas, sino *en la participación política* de todos aquellos que fueran *freeholders*. El *freeman* es alguien con algún tipo de posesión que le haga mantener su independencia. No puede tratarse de un criado, sirviente o similar. La intervención en los asuntos públicos, pues, se relaciona de manera muy estricta con una situación social previa. Una posición, no tanto a valorar de manera pecuniaria, cosa que sólo se hacía por aproximación, sino a considerar según se tuvieran medios de subsistencia propios, ya fueran un terreno, un oficio o la titularidad de una compañía. Y que se relaciona de forma directa con el espíritu puritano, con la alabanza del esfuerzo y la denigración del lujo y el derroche. De esta forma, Trenchard y Gordon se están rebelando contra la actividad especulativa de la época, pero no contra la institución de la propiedad, aunque se entendiera ésta en un sentido amplio. Como resulta típico del momento aún, pese a las décadas transcurridas desde la existencia de los *levellers*, una idea central en aquella sociedad inglesa es la de hacer coincidir independencia económica, virtud y participación política. La tendencia de los dos autores citados, frente a los acontecimientos de la “burbuja” financiera, es la de pensar que se ha roto esa correlación tradicional. Conviene examinar de cerca este extremo, que en ellos queda más ampliamente desarrollado que en los *levellers*, probablemente porque ya la época no es favorable a tal modelo ideológico, tras la *Fábula de las Abejas* mandevilliana y el auge de una nueva sociedad comercial¹¹⁰².

Ocurre que quienes han ejercido el poder político¹¹⁰³, ya fueran un monarca en el pasado inglés más inmediato, un primer ministro o los parlamentarios, han demostrado que les corrompe. Así que ha de corresponderles un “centinela”: el pueblo, entendido como principalmente como los *freemen*¹¹⁰⁴, para controlarles mediante varios mecanismos. De hecho, otra vez, del pueblo proviene la legitimidad de los gobernantes, pues los “hombres son iguales naturalmente, y ninguno puede alzarse sobre el resto, de otra forma que no sea la fuerza o el consentimiento”¹¹⁰⁵. Y como la utilización de la violencia no resulta justificable, porque va contra la libertad y

¹¹⁰¹ Vid. nota *supra*, pg. 73, nota 262.

¹¹⁰² A la que, por otra parte, y como se verá, Trenchard y Gordon tampoco se oponían.

¹¹⁰³ Su titular parece apuntarse que es el pueblo (vid. *supra*, pg. 295). Quienes lo ejercen son “magistrados” concretos, con una división entre ellos que impide se hable de un soberano en el sentido absolutista, e incluso, siquiera bodiniano. Pero, además de que la expresión resulta confusa (“los primeros principios del poder residen en el pueblo”), en todo caso, y dado también lo ahora expuesto, estamos lejos de la idea de “soberanía popular”, más bien de raíz roussoninana. Nos hallamos más cerca, en realidad, de la noción política tomista (vid. Ruiz Miguel, *op. cit.*, pp. 150 y 151).

¹¹⁰⁴ Niños, mujeres, sirvientes, criados y mendigos también formarían parte de él, pero se entiende quedan representados por los *freeholders*.

¹¹⁰⁵ Carta 45: “[*m*]en are naturally equal, and none ever rose above the rest but by force or consent”.

los derechos que la acompañan, sagrados para el canon de las *Cartas*¹¹⁰⁶, el consentimiento es el único elemento válido para aupar a alguien al poder¹¹⁰⁷. Viene dado porque

para que todos vivan juntos en perfecta igualdad, es necesario que algunos estén por encima de muchos, *pues de otra manera éstos pelearían* para situarse unos sobre otros, usando *el fraude y la violencia*. Y aquí se producirá alguna desigualdad; *el peligro es que sea demasiado grande*: donde hay una igualdad absoluta, todo respeto y temor, dos controles indispensables en la sociedad, desaparecerían¹¹⁰⁸; y donde la desigualdad es demasiado grande, todo trato y comunicación también.¹¹⁰⁹

Esta desigualdad a la que se refieren Trenchard y Gordon, es *de carácter político, y no social*. Se refiere a la institución del “gobierno” (comprendiendo todos los cargos públicos), que *tiende* a percibirse como un mal necesario¹¹¹⁰. Van a existir unos hombres ocupándolo, con el fin de frustrar la injusticia del despojo violento o el fraude. Pero ha de evitarse que se mantengan alejados del resto. Es decir, que deben quedar sujetos a algún control. El *freeman* permanece, pese a la necesidad expuesta, como no dependiente. Hasta aquí, el asunto de la igualdad relativa a la esfera política. Pero, ¿qué ocurre con la de índole social?

A menudo en sus textos Trenchard y Gordon pasan de una a la otra sin solución de continuidad, induciendo al profano a cierta confusión. Y es que el plano político y el social se inclinaban a coincidir en el esquema tradicional del Antiguo Régimen: a cierto estatus, a determinado estamento, le corresponde un lugar concreto en la constitución mixta. Pero, como ya he indicado en el presente trabajo, la categoría del *freeman*, respaldada por el ascenso puritano, amenaza ese antiguo orden de cosas, que entre otras novedades, perdía pie en la legitimación carismática del monarca y la religiosa de cualquier prelaturo e introducía la consigna del esfuerzo personal, del *mérito*, de una nueva “virtud”¹¹¹¹. Poner en cuestión la desigualdad

¹¹⁰⁶ Vid, *supra*, pg. 281. Además, “esta pasión por la libertad en los hombres, y la posesión de la misma, resulta de tal eficacia e importancia, que parece la madre de todas las virtudes” (Carta 62).

¹¹⁰⁷ Entendido aquí como el genérico que se refiere a la legitimidad de todo gobierno, a la manera miltoniana, y no del específico para los representantes, que acabo de citar unas pocas líneas más arriba; aunque ambos guarden clara relación, el primero es anterior en la teoría política, como muestra la línea pactista medieval (vid. respecto a ésta, Ruiz Miguel, *op. cit.*, pp. 152-54)

¹¹⁰⁸ Aquí puede apreciarse una clara influencia hobbesiana, a veces no percibida en Trenchard y Gordon, y que sin embargo aparece en varios rincones de las Cartas de Catón.

¹¹⁰⁹ Carta 43.

¹¹¹⁰ “Frecuentemente el remedio probó ser peor que la enfermedad”. Carta 33. O “la ley es, por lo tanto, un signo de corrupción del hombre” (Carta 42).

¹¹¹¹ Obsérvese que numerosos miembros de la *gentry*, como ya se dijo en este trabajo, habían comprado sus títulos al monarca, tras conseguir la prosperidad de sus tierras desde una posición estamental más baja.

política en el Antiguo Régimen, bien que fuera uno suavizado, como el inglés, suponía necesariamente, y dado el tradicional reparto del poder medieval, hacer lo mismo, aun indirectamente, con la inamovilidad del orden social. Trenchard y Gordon favorecen esta corriente, como habían hecho los *levellers*, pero el fenómeno aún no ha madurado y adquirido las características que luego tendría en la América de 1776 o la Francia de 1789. Así que el utillaje que le cabe emplear a los dos autores, como el de los niveladores, va a ser la *virtud*. Este elemento es el que ha sido relegado por los recientes acontecimientos políticos, con su cascada de consecuencias sociales, haciendo que la corrupción del sistema político redundara en la ruina de numerosos hombres que no lo *merecían*, víctimas de quienes eran, simplemente, sujetos *malvados, viciosos*.

Los dos autores *utilizan la virtud* como elemento con el cual analizar hasta qué punto puede la desigualdad social justificarse *moralmente*. Quienes gobiernan ya han demostrado que sin control no van a ser virtuosos por sí solos. Pero, ¿qué sucede en la estratificación social? Trenchard y Gordon entienden que el hombre en estado de naturaleza se encuentra en una posición *igual* en cuanto a dotes para hacer el bien y mejorar su bienestar, es decir, en cuanto a *capacidades*¹¹¹²:

Ningún hombre ha nacido por encima ni por debajo de los demás [...] La naturaleza es una madre amable y benevolente; no señala favoritos en particular con dotes y privilegios por encima del resto, sino que *mayormente* envía a sus vástagos al mundo pertrechados con los elementos de la comprensión y la fortaleza, para que provean por sí mismos: les da cabeza para que reflexionen sobre su propia seguridad, y manos para ejecutar sus consejos; y *de acuerdo con el uso que hagan de sus facultades, y de las oportunidades que encuentren*, surgen luego entre ellos grados de poder y títulos de distinción, de manera que pierden su igualdad natural.¹¹¹³

Así que aquí hallamos dos razones para que los hombres pasen a distinguirse entre sí, adquiriendo diferentes niveles de poder, distinciones y riqueza: una es, desde luego, el *desarrollo* de las propias capacidades, que se debe al *mérito*, pero la otra no

¹¹¹² Algo que de nuevo les emparenta con Hobbes.

¹¹¹³ "No man was ever born above all the rest, nor below them all; and therefore there never was any man in the world so good or so bad, so high or so low, but he had his fellow. Nature is a kind and benevolent parent; she constitutes no particular favourites with endowments and privileges above the rest; but for the most part sends all her offspring into the world furnished with the elements of understanding and strength, to provide for themselves: She gives them heads to consult their own security, and hands to execute their own counsels; and according to the use that they make of their faculties, and of the opportunities that they find, degrees of power and names of distinction grow amongst them, and their natural equality is lost." Carta 45.

tiene nada que ver con él, y por tanto, *tampoco con la virtud, sino con la suerte, la fortuna*¹¹¹⁴.

Así que la naturaleza, su madre, les reparte; pero la fortuna, que es su niñera, no resulta tan benevolente e imparcial; actúa según su deseo y capricho, a menudo *cruelmente*; y oponiéndose tanto a la justicia como a aquélla, frecuentemente sitúa al loco sobre el hombre sabio, y al mejor por debajo del peor.

De todo ello se deduce que la mayor parte del mundo, atendiendo mucho más a la conducta llamativa y los deslumbrantes efectos de la fortuna, que a *los tranquilos y regulares procedimientos de la naturaleza*¹¹¹⁵, se halla equivocada en su juicio sobre esta materia: confunde la fortuna con la naturaleza, y demasiado a menudo adscribe al mérito y la excelencia el trabajo de la estratagema o la oportunidad.

Aquí tenemos lo esencial a la teoría social de las Cartas: los hombres son iguales en sus capacidades, salvo raras excepciones, y deberían serlo también *de manera aproximada* en la sociedad. Algunos destacarán, porque con su arte o habilidades conseguirán grados mayores de excelencia, y así aumentar incluso su holgura económica. Pero Trenchard y Gordon ya están señalando que a menudo resulta difícil distinguir cuando estamos ante el auténtico mérito y cuando ante un simulacro. En ese momento histórico, desde luego, les resulta imposible hallar parámetros más sofisticados para detectar aquéllos, ni siquiera conceptualizarlos a la manera de John Rawls en su *Theory of Justice*. Pero, por descarte, y enlazando así con su teoría estrictamente política sobre el papel del pueblo, sí se arrojan a atacar los privilegios de ciertos sectores sociales, que sin duda no parecen demostrar mérito ni virtud alguna en su posición. Así, respecto a los nobles:

No concede mucha gloria a la porción más aupada de la humanidad, que su presumido mérito para ser superiores sea frecuentemente fruto de lo que difunden heraldos, mentirosos y el dinero; y que muchos deriven toda su fama de los ancestros que tienen, que vivieron hace un siglo o muchos más.

¹¹¹⁴ A continuación, en la misma Carta: "*Thus nature, who is their parent, deals with men: But fortune, who is their nurse, is not so benevolent and impartial; she acts wantonly and capriciously, often cruelly; and counterplotting justice as well as nature, frequently sets the fool above the wise man, and the best below the worst. And from hence it is, that the most part of the world, attending much more to the noisy conduct and glaring effects of fortune, than to the quiet and regular proceedings of nature, are misled in their judgment upon this subject: They confound fortune with nature, and too often ascribe to natural merit and excellency the works of contrivance or chance.*"

¹¹¹⁵ Expresión que indica no hay grandes cambios en lo previsto naturalmente, y por tanto, tampoco puede haber desmesura en la diferencia de riquezas. Aristóteles no se halla muy lejos.

Los primeros fundadores de las familias relevantes no siempre fueron hombres de virtud o talentosos e inteligentes; y donde así ocurrió, quienes fueron sus descendientes, muy a menudo, y casi de manera general, por confiar en su sangre, empañaron su nombre [...] No hay nada moral en la sangre, el título o la posición: sólo las acciones, y las causas que las producen resultan ser morales. Por lo tanto, es mejor quien hace también lo mejor. La sangre noble no se halla exenta de la locura, ni de la demencia o los crímenes: por el contrario, frecuentemente los engendra o promueve; y los nobles que actúan de manera infame, no derivan así honor alguno de sus virtuosos ancestros, sino que les deshonoran. Un hombre que comete vilezas, no es noble; ni grande, si realiza cosas de escasa entidad: un sobrio campesino sobrio es mejor persona que un señor perverso; y un artesano honesto, mejor que un cortesano bellaco.¹¹¹⁶

La conclusión con respecto a los nobles, y por extensión a los príncipes, parece clara:

confían en su sangre, la cual, hablando en concordancia con lo que es natural, no les concede ventaja; y olvidan su cabeza, que por sí sola, por su propia mejora, sitúa a un hombre sobre otro. No es la sangre o la naturaleza, sino *la destreza* o el *accidente*, el que hace que un hombre supere a los demás.¹¹¹⁷

En la naturaleza, todos los hombres son iguales sustancialmente. Pero, a continuación, debe indicarse que en Gordon y Trenchard hay dos dimensiones distintas, para dos tipos de desigualdad también diferentes. Sintetizaré sus elementos, ya advertidos en las líneas anteriores:

a) En primer lugar, la jerarquización política. Como surge la necesidad el gobierno, a fin de evitar despojos o fraudes injustos, cabe erigir una autoridad que los frene, para beneficio de toda la sociedad¹¹¹⁸. Pero inmediatamente después puede producirse un

¹¹¹⁶ "It is not much to the glory of the upper part of mankind, that their boasted and superior merit is often the work of heralds, artificers, and money; and that many derive their whole stock of fame from ancestors, who lived an age or many ages ago. The first founders of great families were not always men of virtue or parts; and where they were so, those that came after them did frequently, and almost generally, by trusting to their blood, disgrace their name. Such is the folly of the world, and the inconvenience of society, to allow men to be great by proxy! [...] There is nothing moral in blood, or in title, or in place: Actions only, and the causes that produce them, are moral. He therefore is best that does best. Noble blood prevents neither folly, nor lunacy, nor crimes: but frequently begets or promotes them: And noblemen, who act infamously, derive no honour from virtuous ancestors, whom they dishonour. A man who does base things, is not noble; nor great, if he do little things: A sober villager is a better man than a debauched lord; an honest mechanick than a knavish courtier".

¹¹¹⁷ "They trust to their blood; which, speaking naturally, gives them no advantage; and neglect their mind, which alone, by proper improvements, sets one man above another. It is not blood or nature, but art or accident, which makes one man excel others".

¹¹¹⁸ "It is evident to common sense, that there ought to be no inequality in society, but for the sake of society" ("es evidente al sentido común, que no debería existir desigualdad en la sociedad, excepto al que

fenómeno de corrupción, por el cual exista colusión entre intereses particulares y gobierno político. Tal cosa favorece a aprovechados que no tienen mérito ni virtud alguna, y que van contra el bien común, cuyo principal paladín no es otro que el pueblo. La reciente historia inglesa da algunos ejemplos de tal corrupción (empezando por Carlos I), y los acontecimientos de la burbuja financiera, otros tantos. Debe haber una intervención institucional, sobre todo a través de los representantes del pueblo, los Comunes, para perseguir a los malhechores y evitar el fraude a la confianza pública.

b) La segunda dimensión que tiene presente Trenchard y Gordon en torno a la desigualdad es referente a la sociedad y sus divisiones¹¹¹⁹. A ambos les impele recuperar la virtud, siempre entendiendo ésta como capaz de producir efectos sociales de amplio alcance, nunca sólo como ejercicio de cualidades en el ámbito privado. Las *auténticas* diferencias entre los hombres, relativas a una distinción *moral*, únicamente pueden basarse en aquélla. Para ellos, esta aseveración se halla fuertemente anclada en la idea de igualdad cristiana, donde todos los hombres son iguales ante Dios, y éste puede juzgarles sólo *por su conducta*, por su méritos¹¹²⁰. Pero de ahí a pergeñar una redistribución de la riqueza al modo siquiera rawlsiano, no digamos socialista, hay un trecho. Los dos autores no dan el siguiente paso, pues no logran hallar el remedio que impida los efectos nocivos de la ausencia de *fortuna*, una justicia distributiva que pudiera impedir el azar dañino e inmerecido. Todo lo más, la *compasión*. Sí existe en sus escritos, sin embargo, y bajo esta fórmula de la igualdad moral, un socavamiento de los privilegios del Antiguo Régimen y todo su edificio estamental y político,

sirva al bien común”). No confundir con teorías utilitaristas sobre la propiedad, pues aquí los autores se están refiriendo a la utilidad del gobierno, no de otra institución. La propiedad emerge en concordancia con la libertad, ligada a ella y a unos derechos inalienables, *no es instrumental para el individuo*. Tal idea es, en todo caso, posterior, y desarrollada por la “economía del bienestar”, principalmente.

¹¹¹⁹ Habría un tercer ámbito de la igualdad, pero en el ámbito religioso y proveniente de la herencia puritana. Y aquí sí que nuestros dos autores no conceden justificación alguna, ni fáctica ni moralmente, a la presunta autoridad religiosa de los hombres: “[l]a naturaleza ha hecho iguales a los hombres, lo sabemos y advertimos; y cuando el pueblo tiende a pensar de otra manera, no hay exceso de locura y superstición que no llegue a practicar. Así que ha hecho dioses de hombres mortales y rendido honores divinos a muchos que aún vivían. Viendo que no eran más que hombres, sin embargo, les rindieron culto como si fueran dioses”. Carta 45.

¹¹²⁰ Idea, por cierto, ya un tanto alejada de la predestinación estricta tan cara al calvinismo. Y que parece, asimismo, cuando los dos periodistas se refieren a la tolerancia religiosa, en estos términos: “si un hombre es llamado santo, sus peores acciones son santificadas con él; su gran ignorancia y crueldad, y aun su suciedad y sus sueños, son entendidos como sagrados y meritorios [...] De otro lado, sin un hombre es llamado ateo, lo odioso de tal denominación, donde se crea que tal cosa es verdad, mancha sus mejores acciones y virtudes más grandes [...] en mi opinión, no existen tales hombres, pero si así fuera, no puedo pensar que la honestidad y sobriedad de un ateo sean peores que las de otros hombres” (Carta 49). O bien: “[d]onde la justicia es exactamente observada, la religión también; y pretender ser muy estricto sobre la última, sin considerar la primera, sería altamente absurdo y ridículo. La virtud produce necesariamente religión, y ella misma es religión” (Carta 29). A continuación, comparan el caso de James Naylor, que a su entender fue castigado injustamente, con el de los artífices de la burbuja financiera, criminales verdaderamente dañinos para el bien común.

persistente en Inglaterra aunque fuera bajo una forma ya muy adulterada¹¹²¹. Si no existe correlación entre virtud y posición social, resulta imposible legitimar verdaderamente el otorgamiento de una mayor cuota de poder político, ni especiales privilegios jurídicos. En esto, Trenchard y Gordon coincidirían también con los *levellers*, como demuestra este párrafo, por otra parte de espíritu tan similar al *¿Qué es el Tercer Estado?* de Sieyès:

En vosotros, caballeros, residen los primeros principios del bienestar y el poder. De vuestra labor e industria emana todo lo que se puede llamar riqueza, y que debe ser defendido con vuestras manos; el Rey, la nobleza, los gentilhombres, el clero, los dedicados a las leyes y los y oficiales del ejército, todos disfrutan de su grandeza gracias a vuestro sudor y riesgo.¹¹²²

II.1.2.1.d) 2. De los niveladores a Catón: la búsqueda del liberalismo en la tradición republicana

Nos encontramos, así, ante la resurrección del republicanismo de la *Commonwealth*, que aparece bajo una forma política muy similar a la de los *levellers*. Trenchard y Gordon intentan recuperar la milicia como pueblo en armas y listo para defender así sus libertades, y sostienen la punición de altos cargos que tanto nos recuerda a la antesala de la Revolución de 1642 e incluso a la ejecución de Carlos I. Asimismo, aluden al consentimiento renovado periódicamente por el pueblo, como fundamento del poder que poseen sus representantes. Y al derecho de resistencia contra quienes ejerzan el poder más allá de los límites constitucionales, aunque fueran de carácter “mixto”. Conviene trazar una lista de sus diferencias y parecidos entre las Cartas de Catón y los niveladores:

- 1) el populismo de las *Cartas de Catón* resulta coincidente con el de los *levellers*, porque unos y otros se dirigían a idéntica audiencia, la *middle sort of people*, como demuestra el párrafo transcrito un poco más arriba¹¹²³, y que distingue a ese sector social, incluso, de la *gentry* y los *lawyers*. Pero en la efervescencia de las Guerras Civiles, los *levellers* se habían mostrado más agresivos frente a

¹¹²¹ En concordancia, también, con el bagaje puritano que carga contra el clero oficial, aunque sea de manera un tanto indirecta, a través de su defensa de la libertad religiosa (vid. nota anterior), y el ataque al origen divino del poder (vid. nota 1119, pg. anterior).

¹¹²² “For you, gentlemen, are the first principles of wealth and power. From your labour and industry arises all that can be called riches, and by your hands it must be defended: Kings, nobility, gentry, clergy, lawyers, and military officers, do all support their grandeur by your sweat and hazard”. Carta 69.

¹¹²³ Vid. *supra*, pg. anterior.

los privilegios estamentales, dadas la convulsión del momento, que abarcaba la dimensión política, pero también, de forma intensa, la religiosa y social. La postura de Trenchard y Gordon es más moderada, quizás porque el propio desarrollo de la sociedad comercial les obliga a ello. Y también, de manera correlativa, lo es su análisis sobre el sistema político inglés. Así, mientras que los autores de las *Cartas de Catón* admiten como conquista insoslayable el gobierno mixto, los niveladores habían optado por su derribo.

- 2) Por tanto, y aunque unos y otros coincidían en la idea de limitación del poder¹¹²⁴, los *levellers* habían querido establecer una ley suprema a través de los *Agreements of the People*, mientras que los autores de las Cartas de Catón más bien presuponen ese marco contractual en forma hipotética, a la manera lockeana, *whig*, y enlazando así con la tradicional constitución inglesa. Aun su evidente simpatía por la tradición republicana, optan por contentarse con la monarquía, bien que sea “mixta”.
- 3) Ese control del poder parte de la idea de que quienes lo ejercen *tienden* a sobrepasar sus límites y que, por tanto, debe vigilárseles, a fin de que no pisoteen los derechos y libertades. Tal vigilancia ha de ser ejercida principalmente por el *pueblo*, sujeto menos propicio a la corrupción, a la ambición y avaricia hija de unas pasiones desatadas. Y su principal instrumento en esa tarea van a ser los representantes populares (los Comunes), pero, para evitar se ensorbezcan y corrompan, su mandato debe basarse en un consentimiento renovado periódicamente también por el pueblo, fundamento último del poder que poseen. Asimismo, cabe castigar a quienes vayan contra el bien común, a través de procedimientos más o menos formales y que arrancan de la tradición del *impeachment* o el *bill of attainder*. Los *levellers* apuntaban para ello a un Parlamento unicameral, formado sólo por los Comunes, y a la institución del jurado¹¹²⁵; Trenchard y Gordon parecen señalar también al propio Parlamento, en su caso bicameral, pero nada dicen del segundo mecanismo.
- 4) Las libertades defendidas por las Cartas de Catón y los *levellers* son muy parecidas: libertad de pensamiento y expresión, libertad de conciencia, derecho a la representación¹¹²⁶, derecho de petición¹¹²⁷, todas ellas

¹¹²⁴ “La libertad no puede subsistir sin el poder; así que se podría decir que tiene siempre al enemigo a las puertas”. Carta 33.

¹¹²⁵ Punto 30 del tercer *Acuerdo del Pueblo*.

¹¹²⁶ Si bien en los *levellers* era mucho más dependiente de o algo similar al mandato imperativo (vid. pag. 63, por ej.). No es exactamente el caso de las Cartas de Catón, donde se emplean expresiones más débiles, como “*consult*” (Carta 38: en lo países libres se “*consulta* la voz y el interés del pueblo”) o “*consent*” (consentimiento), como ya se ha indicado arriba.

interconectadas, sobre la base de la libertad genérica basada en una mínima propiedad que implicara la independencia de todo señor. Y, a su vez, esa propiedad privada no adquiere su *justo contenido*, cuando los gobiernos autoricen monopolios económicos. De hecho, todas las libertades defendidas abren una dimensión plural de manifestaciones de la libertad humana.

- 5) Hay una dimensión de las libertades que Trenchard y Gordon van a asumir y que, sin embargo, los *levellers* aún no habían entendido de la misma forma. Así, y mientras que estos últimos presumieron que sólo era posible hablar de *native rights*, derechos de los ingleses, las Cartas de Catón aseveraban que sus titulares podían ser *todos los hombres*¹¹²⁸.
- 6) La milicia debe estar formada por los ingleses armados, nunca por tropas mercenarias. En esto, niveladores y periodistas del *London Journal* también coinciden. Aunque la mejor época para plantear este posible muro de contención de los gobernantes era la de las Guerras Civiles, ya que en ellas el New Model Army tenía un papel político principal; no así en el momento de publicarse las *Cato's Letters*, cuando ya el ejército profesional había recuperado terreno.

El contexto de Trenchard y Gordon era distinto al de los niveladores. Precisamente la colonización, ya en alto grado de desarrollo, así como los avances técnicos y científicos, el aumento de transacciones mercantiles, etc, habían propiciado una concepción del género humano mucho más ambiciosa que la antigua *humanitas* latina, insuficiente ahora para hacer frente a nuevos retos. Ese auge de la sociedad comercial también impedía recuperar el trazado de Harrington en su *Oceana*, pues la acumulación de riqueza ya no era sólo a través de la propiedad de tierras¹¹²⁹. El propio capital estaba en proceso de expansión, al margen de que, a menudo, como era en el supuesto que preocupaba a Trenchard y Gordon, muchos comentaristas estimasen que lo hacía a través de mecanismos financieros injustos por dar beneficios a un grupo reducido de privilegiados política y socialmente. Asimismo, ese contexto de

¹¹²⁷ Carta 38, donde se afirma que se halla implícito a todo gobierno libre.

¹¹²⁸ Por ejemplo, en la Carta 59 (vid. *supra*, pg. 281, nota 1055). Y partiendo siempre de la libertad del hombre en el estado de naturaleza, hipótesis que también había utilizado Locke en su *Segundo Tratado del Gobierno Civil* (por ej., en sus párrafos 22, 25 y 26). Algernon Sidney ya había realizado una indagación que mezclaba racionalismo e historicismo (vid. *supra*, I.3.6), que le conducía a hablar de "derechos de la humanidad" frente al tirano, como reconocen los propios Trenchard y Gordon en su Carta 26.

¹¹²⁹ La Carta 90 ("Sobre cuan perniciosos son los monopolios y las compañías de privilegio para el comercio"), muestra claramente el interés de los dos periodistas por el tráfico mercantil.

sociedad comercial es la que pone en contacto a los dos periodistas citados con la Ilustración, con la idea de progreso¹¹³⁰, como demuestra el siguiente párrafo:

toda virtud cívica y felicidad, toda excelencia moral, toda urbanidad, todas las artes y ciencias, son producidas por la libertad; y toda esa maldad, vileza y miseria, resultan directa y necesariamente engendradas por la tiranía; la cual, hallándose edificada sobre la destrucción de toda cosa que es valiosa, deseable y noble, debe subsistir por medios acordes a su naturaleza, y permanecer eternamente enemiga de toda bondad y bendición humanas.¹¹³¹

O este otro:

La ignorancia acompaña a la esclavitud. El pueblo que vive en libertad pensará libremente: pero cuando la mente queda esclavizada por el miedo, y el cuerpo por cadenas, la indagación y el estudio finalizará.¹¹³²

El liberalismo que muestran Trenchard y Gordon al defender la propiedad enlaza bien con esta dimensión “ilustrada” de su pensamiento y con la sociedad comercial en expansión. Pero ambos difundieron un mensaje que evitaba quedarse dentro de los límites de la “libertad negativa”. Habían percibido, a través del legado republicano que heredaban, que las libertades de los hombres se hallaban ligadas intrínsecamente a la participación política; en su época, resultaba que un puñado de personas habían acumulado en sus manos demasiados resortes de poder, y algunos no sólo eran de carácter político, sino también económico. La riqueza injusta de unos, que atacaba al bien común, se encontraba unida al atropello de las libertades de los demás.

¿Qué es la comunidad, sino un colectivo de hombres, donde, asimismo, todo particular es miembro de tal comunidad? Y como el todo debería vincularse con la conservación de cada individuo, así es el deber de cada particular el vincularse al todo en el que se halla incluido.¹¹³³

¹¹³⁰ Como se ha visto, bien se podría tildar de protoilustrados, dado el papel que concedían a la educación, a los propios *levellers* (vid. *supra*, pg. 84).

¹¹³¹ Carta 63: “*all civil virtue and happiness, every moral excellency, all politeness, all good arts and sciences, are produced by liberty; and that all wickedness, baseness, and misery, are immediately and necessarily produced by tyranny; which being founded upon the destruction of every thing that is valuable, desirable, and noble, must subsist upon means suitable to its nature, and remain in everlasting enmity to all goodness and every human blessing*”.

¹¹³² Carta 71. Nótese que esta retórica de la libertad, contraponiendo el señor al esclavo, coincide con la idea central de la no dependencia o, como ha señalado Pettit, “no dominación”.

¹¹³³ Carta 38: “*[w]hat is the publick, but the collective body of private men, as every private man is a member of the publick? And as the whole ought to be concerned for the preservation of every private individual, it is the duty of every individual to be concerned for the whole, in which himself is included*”.

Con lo cual seguían el hilo del discurso que los niveladores habían iniciado mucho tiempo atrás. Intentaban desligar la prosperidad económica de una sociedad comercial en expansión de las actividades especulativas unidas a la corrupción del poder político. Y recuperar así la figura del *freeman*, el hombre independiente de señores arbitrarios. Alguien que tenía el derecho de participar en los asuntos públicos¹¹³⁴, evitando así beneficios económicos injustos y monopolísticos que iban contra las reglas del juego de la propiedad y el mercado en una sociedad de hombres *aproximadamente* iguales.

Trenchard y Gordon, pues, mostraban hasta dónde podían llegar los *real whigs* en sus reivindicaciones; es decir, muy cerca de los viejos republicanos, y desde luego, de los *levellers*. Eran los sucesores díscolos de 1688, y vendrían a aportar importantes premisas ideológicas para los norteamericanos de 1776, tanto republicanas como liberales. Ellos, reformadores infatigables, sirvieron como puente entre los revolucionarios del siglo XVII y los de la centuria posterior.

II.1.2.2. La falta de representación de los colonos americanos y la violación de sus “derechos inalienables”¹¹³⁵

II.1.2.2.a) Los hechos

La independencia de las trece colonias, como ya se ha visto anteriormente, procedió de la experiencia del autogobierno, que conllevaba ir zafándose paulatinamente de la tutela de la metrópoli. Este proceso requirió de un tiempo más o menos largo, y en el que no faltaron choques y desencuentros, pero siempre con largos períodos en los que aquéllas disfrutaban de una intervención mínima en sus asuntos. Ingleses y colonos compartían cultura, una misma lengua y similares instituciones jurídicas, y no parecía necesaria ni deseable escisión alguna, dada la gran capacidad de estos últimos para mantener las riendas de su propia administración, sin apenas interferencia. Esta circunstancia se apuntaló durante las Guerras Civiles de mediados del XVII, momento en el que Inglaterra se hallaba debilitada por sus combates internos. Pero después, las políticas mercantilistas de la

¹¹³⁴ Carta 38: “algunos han dicho que no es asunto del particular mezclarse en el gobierno. Una afirmación temeraria, falsa y deshonest; y quienquiera que la haya pronunciado, o bien no sabe lo que dice, o no se ha preocupado de lo que asevera, o se expresa como esclavo de otros” (“*some have said, It is not the business of private man to meddle with government. A bold, false, and dishonest saying; and whoever says it, either knows not what he says, or cares not, or slavishly speaks the sense of others*”).

¹¹³⁵ “*Unalienable rights*”; “Declaration of Independence” (1776), en Finkelman, Paul, y Urofsky, Mervin I. (eds.): *Documents of American Constitutional and Legal History. Volume I. From the Founding Through the Age of Industrialization*, 2ª ed., New York, Oxford University Press, 2002., pg. 55.

época, con las cuales los diferentes países europeos intentaban mantener cierto grado de autarquía frente al exterior, condujeron al Parlamento a aprobar, desde la década de 1650, diversas Leyes de Navegación (*Navigation Acts*). Con ellas la metrópoli intentaba competir con sus rivales continentales y obligó a las colonias a que varios de sus productos sólo pudieran ser exportados a suelo inglés, principalmente el tabaco. De manera que no resultaba posible vender tales mercancías a terceros que ofrecieran precios más altos por ellas. Asimismo, se imponía que todo el comercio se realizara en bajeles británicos¹¹³⁶. Estas normas eran aprobadas por un Parlamento que establecía las directrices desde Londres y que en el año anterior se había identificado como superior a cualquier otro poder erigido en las colonias, no sin provocar un conato de revuelta en Barbados y Massachusetts, que rechazaban tal principio¹¹³⁷. De manera que la decapitación de Carlos I y la abolición de la Cámara de los Comunes no implicaron cambios favorecedores de la secesión pacífica de las colonias, sino que intentaron reforzar el dominio inglés sobre las mismas. La Restauración también emprendió este objetivo, como demuestra el establecimiento en 1686 del Dominio de Nueva Inglaterra, de New Jersey a Maine, centralizando el gobierno de las colonias en un gobernador y un consejo y eliminando la asamblea. La Gloriosa de 1688 devuelve cierto poder a las manos de los colonos¹¹³⁸, pero al año siguiente se constituyó un *Board Trade of Plantations*, órgano de la metrópoli encargado de sujetar más férreamente los territorios americanos¹¹³⁹. Las colonias, entretanto, aumentaban gracias a la expansión conseguida a costa de otras potencias europeas en la zona¹¹⁴⁰. En cualquier caso, la concepción predominante en Inglaterra, como se deduce de lo expuesto, no va a ser sostenida sólo por monarca. Es más, en muchas ocasiones esta visión imperial tendrá como máximo valedor al Parlamento inglés, fuera el *Rump*, el *Cavalier*¹¹⁴¹ o el *Convention*¹¹⁴². Y esta postura parlamentaria va a ser mantenida después, en el período posterior hannoveriano, engendrando efectos de hondo calado en la construcción política de los Estados Unidos de América, y no sólo en su independencia, como se verá.

De cualquier forma, y pese a todo esto, debe indicarse que la metrópoli siempre intentó poner el freno a actitudes que pudieran ser rechazadas con intensidad por su establecimiento americano, con lo cual optó por una política de mesurada

¹¹³⁶ Perkins, Edwin J.: "Socio-economic Development of the Colonies", en Greene y Pole (eds.), *op. cit.*, pp. 61.

¹¹³⁷ Matteucci, *op. cit.*, 109.

¹¹³⁸ Tully, Alan: "The Political Development of the Colonies after the Glorious Revolution", en Greene and Pole, *op. cit.*, pp. 28 y 29. Y Morgan, *op. cit.*, pp. 125, y 131-33.

¹¹³⁹ Matteucci, *op. cit.*, pp. 145-6.

¹¹⁴⁰ Carolina fue fundada durante la Restauración, período en el cual los holandeses también perdieron Nueva Holanda a manos de los ingleses. Commager, Leuchtenburg y Morison, *op. cit.*, pp. 50-52.

¹¹⁴¹ Parlamento de la Restauración.

¹¹⁴² Conformado para aprobar la subida al trono de los Orange, en 1688.

supervisión, tratando de conciliar sus aspiraciones con los deseos de los colonos. Las que pronto se convertirían en trece demarcaciones, de otra parte, aumentaron gradualmente su prosperidad, como demuestra el fuerte crecimiento demográfico que experimentaron¹¹⁴³.

A partir de 1745 se produce una inflexión política motivada por diversas causas. Principales entre ellas fueron el apaciguamiento de la lucha política en Inglaterra tras la caída de Walpole en 1742 y el tratado de Paz con Francia (*Aix la Chapelle*) firmado en octubre de 1748 por las Coronas francesa y británica. Pero también, la pérdida de autoridad de la burocracia colonial entre los habitantes de América, debido a que se la atacaba por dos frentes: desde el gobierno de la metrópoli se optaba por favorecer a los adeptos a una red clientelar y desde las asambleas americanas se les pedían cada vez más potestades a unos gobernadores que se veían sin recursos. De hecho, aquéllas ordenaban expedir, en contra de las prohibiciones de Londres, grandes cantidades de papel moneda, lo cual suponía la depreciación y consiguiente disminución del valor real de los créditos a favor de los mercaderes de Gran Bretaña. Por añadidura, sus conflictos con los gobernadores se habían incrementado de forma intensa, sobre todo, en lo referente a poderes financieros, inamovilidad de los jueces y ampliación de representantes populares¹¹⁴⁴. Éstos habían asumido numerosas facultades, entre otras, establecer nuevas circunscripciones, determinar sus posesiones, fijar controles, nombrar funcionarios locales, etc¹¹⁴⁵.

El 11 de marzo de 1752, el *Board of Trade* intentó tomar la dirección colonial de manera contundente y una orden real estableció su absoluta potestad para nombrar todos los gobernadores, consejeros, fiscales generales (*attorneys-general*) y secretarios en el Nuevo Mundo, con la correlativa responsabilidad de los mismos ante dicho órgano. Una de sus principales acciones fue la de convertir Georgia en colonia real en 1754, y detrás de estas y otras medidas estaba la intención de rebajar el poder de las cámaras representativas del Nuevo Mundo. Tal y como demostraba su insistencia en que las leyes de allí contuvieran una cláusula que suspendiera su

¹¹⁴³ Greene, Jack P.: "The Origins of the New Colonial Policy, 1748-1763", en Greene y Pole, *op. cit.*, pg. 95 (que sitúa en un 160 por ciento entre 1710 y 1770 la población libre, excluyendo esclavos, crecida en un 235 por ciento); y Adams, Willi Paul (comp.): *Los Estados Unidos de América* (1ª ed. en castellano de *Die Vereinigten Staaten von Amerika*, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 1977, trad. de Máximo Cajal y Pedro Gálvez), Siglo XXI, Madrid, 1979, pp. 16 y 17 (el capítulo es del propio Adams, "Revolución y Fundación del Estado Nacional, 1763-1815"). El crecimiento se debió, tanto al incremento de hijos como a la emigración, siendo contingentes importantes los escoceses-irlandeses (descendientes de pobladores naturales de Escocia y que se habían intentado asentar en el norte de Irlanda), los alemanes, y los hugonotes franceses llegados tras la revocación del Edicto de Nantes en 1685 (vid. Commager, Leuchtenburg y Morison, pp. 66 y 67).

¹¹⁴⁴ Greene, Jack P., *op. cit.*, pp. 96-8. La depreciación intentó frenarse con un *bill* en 1749, pero el Parlamento no llegó a promulgarlo. Ibid., pg. 99. Vid., asimismo, Commager, Leuchtenburg y Morison, *op. cit.*, pp. 72 y 73.

¹¹⁴⁵ Greene, *op. cit.*, pg. 101.

entrada en vigor definitiva hasta que fueran ratificadas por la metrópoli, en sujetar definitivamente la judicatura a la voluntad real o en los apremios para frenar la expedición de moneda siguiendo la *Currency Act* de 1751 (aunque no estuviera en vigor para las colonias). El *Board of Trade* trató de tener éxito allí donde los gobernadores por sí solos antes no lo habían conseguido. Sin embargo, se encontró en 1756, a las puertas de lo que sería la Guerra de los Siete años con Francia, con que su política no había ganado terreno, siquiera parcialmente. De hecho, desde el comienzo del conflicto, los colonos se negaron a dar fondos y medios para enfrentarse en aquélla¹¹⁴⁶.

Esta actitud supuso un nuevo cambio en la postura inglesa, cuando acabada la guerra, pasa a ser Primer Ministro Lord Grenville (abril de 1763). Alarmado por la falta de colaboración presupuestaria de los norteamericanos, incluso en el esfuerzo bélico, de acuerdo con un detallado informe elaborado a tal fin, el Parlamento pasa a tomar cartas en el asunto colonial y aprueba varias normas en 1764 y al año siguiente. Con ellas se alteraban las leyes comerciales aplicables a las colonias y se establecían nuevos métodos para hacerlas respetar, creándose, entre otras cosas, un tribunal del vice-almirantazgo que combatiera a los contrabandistas. Dichas medidas legislativas, que preferían abordar los asuntos coloniales de manera centralizada ya, y no zona a zona, como se había hecho hasta entonces, fueron, concretamente¹¹⁴⁷:

- la *Sugar Act*. Era un arancel sobre la importación de melaza, que servía para hacer ron. Ya desde 1733 existía otro, pero lo que había ocurrido, sin embargo, es que dicha imposición había sido burlada, en connivencia con muchos oficiales aduaneros, en numerosa ocasiones. Así que ahora se aprobaba una nueva norma que rebajaba el arancel para hacer más fácil su aplicación, que resultara efectiva. Pero aún así, los colonos presionaron hasta el final para que fuera aún más bajo. El Parlamento y el gabinete lo justificaron, argumentando que era necesario para sufragar los recientes esfuerzos bélicos de la Guerra de los Siete Años.
- la *Currency Act*. Similar a la de 1751 ya citada. Pero ésta suponía la aplicación definitiva a todas las colonias de una norma sobre la expedición de moneda¹¹⁴⁸.

A estas dos disposiciones se le unieron al año siguiente:

¹¹⁴⁶ Ibid., pp. 100-106.

¹¹⁴⁷ Para todo este asunto, vid. Thomas, Peter D.G.: "The Grenville Program, 1763-1765", en Greene y Pole (eds.), *op. cit.*, pp. 107-111.

¹¹⁴⁸ Se sacó adelante porque además había acreedores interesados en ello, en el propio Parlamento inglés. Vid. *ibid.*, pg. 109.

- la *Stamp Act*. Supuso fijar un impuesto directo e interno. Implicaba que debían adherirse unas estampillas o sellos (timbres) a periódicos, volantes, folletos, licencias, facturas comerciales, anuncios, almanaques, documentos jurídicos, etc., por cantidades determinadas. Se intentó paliar su aplicación, señalando que los recaudadores serían norteamericanos sólo. Aquí la intención de Greville y su apoyo en el Parlamento fueron la de imponer la norma, no sólo debido a los ingresos que podía suponer, sino para dejar clara la supremacía parlamentaria, también sobre las colonias. El propio *premier* mencionó que los colonos estaban virtualmente representados en Westminster; al fin y al cabo, sólo un cinco por ciento de los ingleses estaba representado allí.
- la *Quartering Act*. Conocida asimismo como *Mutiny Act*. Su objetivo era acantonar tropas en domicilios particulares. Tras un duro debate parlamentario, se moderó, estableciendo que sólo podrían ser edificios deshabitados. pero también que la colonia afectada debería proveer a los soldados de luz y leña, lecho y utensilios de cocina, así como de cerveza o sidra, sin poder cobrarlos.

El resultado de estas normas fue una amplia contestación en la sociedad colonial, que imprimió numerosos panfletos. De los más conocidos fueron *The Rights of the Colonies Examined* (1764), escrito por Stephen Hopkins¹¹⁴⁹, así como *The Rights of the British Colonies Asserted and Proved* (1764), de James Otis¹¹⁵⁰, y *Considerations on the Propriety of Imposing Taxes in the British Colonies* (1765), de Daniel Dulany¹¹⁵¹. Pero también hubo una reacción institucional. El 29 de mayo de 1765, en la *House of Burgesses* de Virginia el joven Patrick Henry vino a proponer varias resoluciones (*Virginia Resolves*) que insistían en la divisa “*no taxation without representation*”. Pese a ello, ninguna de las luego aprobadas llamó a la desobediencia al Parlamento. Lo que ocurrió, eso sí, fue que todas resultaron publicadas por la prensa, incluida una séptima en la que Henry hacía tal convocatoria. De hecho, Rhode Island apoyó todas, creyendo que en ellas había recaído una total aprobación por los

¹¹⁴⁹ Stephen Hopkins (1707-1785) nació en suelo americano y fue jurista y político que encabezó la resistencia colonial a Gran Bretaña en la provincia que gobernaba, Rhode Island. Fue uno de los firmantes de la Declaración de la Independencia. Greene y Pole (eds.), *op. cit.*, *Biographies*, pg. 734.

¹¹⁵⁰ James Otis (1725-1783) fue jurista, aunque se dedicó con mucho éxito a la agitación y redacción de panfletos, siendo una de los principales líderes revolucionarios, al frente de los *Sons of Liberty*, junto con Samuel Adams. En 1760 había logrado el puesto de abogado general (*advocate general*) del vicealmirantazgo en Boston, pero lo abandonó por respaldar a los comerciantes de la ciudad contra los *writs of assistance*, los mandamientos de embargo reales. Sufrió secuelas graves tras ser lesionado seriamente por un agente de aduanas en 1769, momento a partir del cual le sobrevino una fase de progresivo enloquecimiento, hasta ser asesinado años después. *Ibid.*, pg. 761.

¹¹⁵¹ Daniel Dulany (1722-1797) fue también jurista y político. Pese a escribir al principio contra la imposición fiscal de la metrópoli, estallada la Guerra de la Independencia quiso permanecer aparentemente neutral, pero quedó como sospechoso de lealismo (*ibid.*, pp. 717-718)

virginianos¹¹⁵². Durante el resto del año, casi todas las colonias tomaron resoluciones parecidas y nueve mandaron delegados a un Congreso en octubre (el *Stamp Act Congress*). Virginia, Carolina del Norte y Georgia no pudieron remitirlos, porque sus gobernadores rechazaron convocar asambleas¹¹⁵³; pero Delaware y Nueva Jersey salvaron el obstáculo seleccionando a varios de manera oficiosa. La crítica de las asambleas, a través de ese Congreso que se disolvería finalmente el 25 de octubre, fue la que la *Stamp Act* era inconstitucional. Se suponía que iba contra las libertades y derechos de los colonos. Así que se pedía a Comunes, Lores y monarca que eliminara los impuestos que ellos no habían aprobado¹¹⁵⁴.

En cualquier caso, y como Gran Bretaña insistió en imponer sus leyes, los norteamericanos optaron por medidas de resistencia más o menos activas, organizándose en grupos como los *Sons of Liberty*, nacidos en Boston¹¹⁵⁵. Así, atacando los bienes de los recaudadores y amedrentándolos, impidiendo a los oficiales aduaneros exigir los timbres, paralizando la actividad judicial ordinaria, suspendiendo la publicación de periódicos o sustituyendo las cabeceras habituales por otras anónimas o distintas. Todos los bienes y documentos con los que trabajaban abogados, mercaderes e impresores, quedaban *de facto* así fuera de la regulación de la *Stamp Act*. Pero es que, además, numerosos capitanes de empresa organizaron boicots rechazando la compra de bienes británicos. Tumultos y desórdenes, una auténtica campaña de desobediencia civil, acompañada, incluso, de ciertas acciones violentas. El objetivo final era la completa derogación de la ley¹¹⁵⁶.

En julio de 1765, Grenville fue sustituido por el Marqués de Rockingham y optó por liderar la supresión de la discutida norma, que fue eliminada en marzo de 1766, pero siendo acompañada por una *Declaratory Act* que venía a subrayar el derecho del Parlamento a legislar sobre las colonias en todos los casos¹¹⁵⁷:

que las citadas colonias y establecimientos en América han sido, son, y por derecho deberían seguir siéndolo, subordinados y dependientes de la Corona imperial y el Parlamento de Gran Bretaña; y que Su Majestad, con el consejo y asentimiento de los Lores espirituales y

¹¹⁵² Thomas, D.G.: "The Stamp Act Crisis and its Repercussions, Including the Quartering Act Controversy", en Greene y Pole (eds.), *op. cit.*, pg. 114.

¹¹⁵³ Debe recordarse que estos cargos tenían la potestad de convocar y disolver asambleas, al modo en que en Gran Bretaña lo hacía el Rey con el Parlamento.

¹¹⁵⁴ Algunos delegados intentaron diferenciar en las resoluciones lo que eran aranceles comerciales, perfectamente lícitos, de lo que suponían los impuestos de afán recudatorio. Pero como para la mayoría no quedaba clara la diferencia, no se asumió tal perspectiva en las resoluciones finales. Ibid, pp. 115 y 116.

¹¹⁵⁵ Para más detalle sobre ellos, vid. Countryman, Edward: "Social Protest and the Revolutionary Movement, 1765-1776", en Greene y Pole, (eds.), *op. cit.*, pp. 186-88.

¹¹⁵⁶ Ibid., 118.

¹¹⁵⁷ Ibid., pp. 119-22

temporales y comunes de Gran Bretaña, reunidos todos en Parlamento, ha tenido, tiene, y en Derecho debería conservar, todo el poder y la autoridad para elaborar leyes y estatutos de fuerza suficiente y con validez para obligar en cualesquiera casos a las colonias y el pueblo de América, súbditos de la corona de Gran Bretaña.¹¹⁵⁸

La crisis, pues, iba a acentuarse próximamente sin remedio. El siguiente capítulo quedó a cargo de las Leyes de *Townshend*.

Charles Townshend, Canciller del *Exchequer*¹¹⁵⁹, vino en 1767 a implantar una serie de impuestos sobre artículos de consumo diarios en las colonias. La última medida de su paquete fue firmada por Jorge III el 2 de julio. Todas ellas intentaban socavar las instituciones del autogobierno colonial, destruyendo las potestades que había asumido. Así, la *New York Restraining Act* declaró no válidas todas las normas del legislativo de esta provincia hasta que obedeciera la *Quartering Act*, ante la que había mostrado clara resistencia. La *Revenue Act* impuso nuevos aranceles sobre la pintura, el cristal, el plomo, el papel y el té importado de Inglaterra, autorizando explícitamente *writs of assistance*¹¹⁶⁰ para respaldar su recaudación. El objeto de los mismos era conseguir dinero para pagar toda la administración colonial, incluyendo gobernadores, jueces de la Corona, oficiales de aduanas y otros funcionarios. Esto evitaría la dependencia de los ingresos obtenidos con la aprobación de los legislativos coloniales. Al poco se añadieron nuevos tribunales del vicealmirantazgo para aplicar estas normas, así como una Junta de Comisarios de Aduanas en Boston¹¹⁶¹. En general, todas estas medidas y mecanismos iban dirigidos a socavar esas cámaras bajas de los norteamericanos que habían prevalecido en numerosas ocasiones sobre los gobernadores y cámaras altas (Consejos¹¹⁶²) existentes.

¹¹⁵⁸ "Declaratory Act", en Finkelman y Urofsky, *op. cit.*, pg. 39 ("That the said colonies and plantations in America have been, are, and of right ought to be, subordinate unto, and dependent upon the imperial crown and Parliament of Great Britain; and that the king's Majesty, by and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, of Great Britain, in Parliament assembled, had, hath, and of right ought to have, full power and authority to make laws and statutes of sufficient force and validity to bind the colonies and people of America, subjects of the crown of Great Britain, in all cases whatsoever").

¹¹⁵⁹ Cargo principal en lo referente a medidas financieras y recaudatorias del reino. Vid. Cook, *op. cit.*, pg. 83.

¹¹⁶⁰ Decretos de ayuda. Quienes lo ejercían eran agentes del fisco (*customs men*) con asitencia de un *local peace officer*, y que facilitaba que pudiera, para mejorar su carrera, perseguir a sospechosos contra quienes realmente no hubiera evidencia alguna. Facilitaban el acceso a domicilios particulares, siendo así una forma de registro sin control judicial. Vid. Reid, John Philip: *Constitutional History of the American Revolution; The Authority of Rights*, Wisconsin, University of Wisconsin Press, 1986, pg. 196

¹¹⁶¹ Vid. Brogan, Hugh: *The Penguin History of the United States of America*, London, Longman, 1990, pg. 147; y Commager, Leuchtenburg y Morison, *op. cit.*, pg. 99. La importación de los artículos citados de otros países estaba prohibida, así que Inglaterra monopolizaba el mercado. Se trataba, además, de bienes imposibles de manufacturarse con iguales cualidades en América. Chaffin, Robert. J.: "The Townshend Act Crisis, 1767-1770", en Greene y Pole (eds.), *op. cit.*, pg. 127.

¹¹⁶² Que, por ejemplo, como ocurría en *Massachusetts Bay* desde la Carta de 1691, hasta entonces habían sido elegidos por la *House of Representatives* o cámaras similares. Vid. Brogan, *op. cit.*, pg. 148.

Pronto surgió la oposición a tales resoluciones, en forma de nuevo boicot al consumo, y respecto a numerosos bienes que fueran de origen inglés, tales como cordajes, sombreros, zapatos, mostaza, etc. John Dickinson escribiría las *Letters from a Farmer in Pennsylvania* (1767)¹¹⁶³, aparecidas en la *Pennsylvania Gazette* entre diciembre de 1767 y febrero de 1768, y Otis y Samuel Adams trabajaron para que la *House of Representatives* de Massachusetts expidiera el 20 de enero de 1768 una petición dirigida al Rey a fin de abolir las *Townshend Acts*¹¹⁶⁴. Algunas otras colonias tomaron resoluciones parecidas en el mismo año, participando asimismo en los boicots, y la doctrina que entendía los colonos no debían pagar impuestos, por no disponer de representación en el Parlamento inglés, fue de uso común en toda América del Norte. Ante este fenómeno, pues, el Secretario Americano recién creado por el gobierno británico, Lord Hillsborough, envió misivas a todos los gobernadores para que disolvieran cualquier asamblea que pudiera intentar el respaldo a las decisiones de la existente en Massachusetts. La respuesta siguió extendiéndose, y los comisionados de la metrópoli actuaron contra las cámaras coloniales, enviando tropas, incluso, al puerto de Boston, para mantener el orden¹¹⁶⁵. Pero la resistencia a las medidas británicas ya estaba en marcha y pronto prácticamente todas las colonias se habían unido a la protesta y los boicots, así que Inglaterra comenzó a considerar la abolición de todas las *Townshend Acts*, excepto en lo referente al impuesto del té, siguiendo las nuevas directrices del ahora Primer Ministro, Lord North. Precisamente el día en que este *Premier* se dirigía a los parlamentarios para conseguir tal objetivo, en Boston se produjo la famosa “masacre”, que causó la muerte de varios colonos a manos de tropas británicas. Cuando llegaron las noticias de la abolición de las *Townshend Acts* en casi todo su contenido, los ánimos se calmaron. Thomas Hutchinson, nacido en suelo americano, fue nombrado gobernador de Massachusetts¹¹⁶⁶. Pero con esto tan

¹¹⁶³ John Dickinson (1732-1738) fue jurista y un notabilísimo escritor político. Escribió las *Letters* de forma anónima, tomando parte luego en la lucha independentista al frente de tropas rebeldes, y luego colagorando para laborar los Artículos de la Confederación, de los que se hablará más tarde. Ocupó cargos en Delaware y Pennsylvania y respaldó la Constitución federal de 1787. Vid. *Biographies*, en Greene y Pole (eds.), *op. cit.*, pp. 715 y 716.

¹¹⁶⁴ Recurso utilizado allí y en gran Bretaña para dirigirse a la Corona, y, como ya se expuso, tradicional en el marco institucional anglosajón. Vid. *ibid.*, pg. 716.

¹¹⁶⁵ Brogan, *op. cit.*, pp. 151-54. Se enviaron dos regimientos al puerto de Boston el 30 de septiembre de 1768, lo cual hizo aflorar otra vez la amenaza del ejército permanente al servicio de un poder opresor. Samuel Adams empezó a hablar de resistencia armada y convocó a una convención de la asamblea de Massachusetts, pese a su disolución por el gobernador de turno, que llegó a reunirse, pero que ante la llegada de los militares no pudo ponerse en marcha de manera efectiva. *Ibid.*, pp. 153-4. Asimismo, cabe destacar el enfrentamiento entre ciudadanos de New York y tropas británicas en Golden Hill, en enero de 1770. Sarson, *op. cit.*, pg. 809.

¹¹⁶⁶ *Ibid.*, pp. 154-58. En la “masacre”, ocurrida el 5 de marzo de 1770, murieron cinco personas, tras varios días de fuertes tensiones, enfrentamientos callejeros, y un ataque a la Oficina de Aduanas. El episodio se ligó por los norteamericanos a otro ocurrido en Inglaterra el 10 de mayo de 1768, cuando una multitud en apoyo del político John Wilkes fue tiroteada en *Saint George's Fields* (Londres), muriendo varias personas. Vid. Bailyn, Bernard: *Los Orígenes Ideológicos de la Revolución Americana*, Buenos Aires, Paidós, 1972 (trad. cast., por la que se citará, de aquí en adelante, de *The Ideological Origins of*

sólo se intentaba compensar el hecho de que la abolición de las *Townshend Acts* dejaban a salvo la exigencia de que todos los gobernadores de las colonias quedaran fuera del control de sus asambleas y bajo el poder de destitución del monarca¹¹⁶⁷.

Además, cualquier pequeña tensión iba a quedar ahora amplificadas de manera no prevista en una época anterior. Tal y como sucedió con el incidente del *Gaspee*, ocurrido en 1772. Mercaderes de Newport capturaron y prendieron fuego a este buque de Su Majestad, por acusarle de robar a la colonia de Rhode Island, pero en realidad, debido principalmente a su celo en el cumplimiento de las *Navigation Acts*. La reacción inglesa fue la de crear una comisión investigadora compuesta de autoridades coloniales y con la potestad de trasladar detenidos a Inglaterra. Esta medida implicó la ausación de utilizar métodos inquisitoriales y condujo a que la *House of Burgesses* virginiana propusiera en primavera de 1773 la creación de comités de correspondencia entre los norteamericanos, ampliando una iniciativa local de Samuel Adams en Massachusetts unos meses antes¹¹⁶⁸.

Lo peor fue que la metrópoli continuó chocando con los colonos. Así, preocupada por la crisis de la Compañía de las Indias Orientales (*East India Company*), el gabinete preparó el proyecto para la aprobación de una *Tea Act*, que preveía que aquélla vendería directamente y sin intermediarios norteamericanos el té que quisiera a las colonias del oeste. De esta forma se abría el campo para un monopolio que perjudicaba a un grupo numeroso de norteamericanos,

the American Revolution, Harvard University Press, Cambridge, 1967), pp. 115-16. En 1764, John Wilkes fue expulsado de los Comunes a causa, principalmente, de un supuesto libelo sedicioso en el número 45 de su periódico *The North Briton*. Escapó de la condena huyendo del país, intentando luego renovar su inmunidad perdida, al regresar para presentarse a las elecciones de Londres el 16 de marzo de aquel año. No ganó tal proceso electoral, pero sí en Middlesex poco después. Mantuvo una nueva publicación, el *St. James Chronicle*, escribiendo ataques contra el gobierno, y siendo así contestado con otra expulsión de los Comunes. Se presentó a continuación a tres elecciones sucesivas, con todas las que volvió a conseguir escaño pero apartado del Parlamento (la última vez, en 1769), dada su popularidad y ya que había capitalizado el descontento de las clases más modestas de Inglaterra, que estaban hartas del rechazo de los tories y whigs a reformas sociales y políticas amplias y le habían convertido en símbolo de su combate y las libertades que comportaba. Precisamente, los wilkitas se agruparon en la *Society for the Defence of the Bill of Rights* (1769) para respaldar al diputado. Pero pronto expusieron ambiciosos objetivos políticos: elecciones anuales al Parlamento, ampliación del sufragio, votación secreta, abolición de los aristocráticos "burgos podridos", medidas contra la compra de votos, prohibición de pensiones y cargos (pensions and places) para los parlamentarios, recuperación del *impeachment*, investigación sobre la conducta de los jueces respecto a los jurados, control y transparencia sobre el gasto público (Vid. Gargarella, Roberto: *The Scepter of Reason*, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2000, pp. 4-7, y <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/643811/John-Wilkes>). El episodio wilkita, conocido por los colonos, demostraba que el Parlamento inglés no respetaba los derechos y libertades de ninguno de sus súbditos, fuera en la Isla, o en el continente americano. Asimismo, surgieron con él similitudes en torno al abuso de la autoridad, como en el caso de las general warrants contra las que había luchado Wilkes y que se asimilaban a los *writs of assistance* empleados contra los colonos (Brogan, *op. cit.*, pg. 158). Las *general warrants* eran unas autorizaciones genéricas para la aprehensión de personas o bienes (*Merriam Webster Dictionary*, "warrant", pg. 2577).

¹¹⁶⁷ Vid. Sarson, Steven J.: "Chronology compiled", en Greene, Jack P. y Pole, J.R.: *The Blackwell Encyclopedia of the American Revolution*, Basil Blackwell, Cambridge (Mass), First Published in 1991, Reprinted in Paperback in 1994, pg. 809.

¹¹⁶⁸ Brogan, *op. cit.*, pp. 159-60. Vid. "Virginia Resolutions Establishing A Committee of Correspondence", de 12 de marzo de 1773 (en *Avalon Project*, <http://avalon.law.yale.edu/18th_century/va_res_corres_1773.asp>).

específicamente a quienes mediaban en el comercio y los contrabandistas que se verían atacados por la correlativa caída de precios, pues el cultivo de esta planta no existía en América y sí muchísimos que la demandaban. El descontento se extendió allí y los legislativos dictaron nuevas resoluciones de repulsa, culminándose esta fase con el “*Tea Party*”, destrucción de cargamentos de té en Boston, ocurrida el 16 de diciembre de 1773. Otras ciudades emprendieron acciones de carácter similar. La respuesta británica, entonces, fue una de las más enérgicas hasta entonces empleadas, resultando aprobadas por el Parlamento las *Coercive Acts* (Leyes Coercitivas)¹¹⁶⁹.

La primera de ellas fue la *Boston Port Act*, de marzo de 1774, en la que se preveía el cierre del puerto de Boston hasta que sus habitantes no pagaran una compensación por el té destruido. Las otras dos fueron de mayo del mismo año. Una, la *Act for regulating the government of Massachusetts*, exigía que el consejo de esta demarcación pasara a ser de designado por la metrópoli, y, asimismo, concedía al gobernador el poder de cesar a jueces inferiores y *sheriffs*, de controlar y restringir las asambleas municipales, e incluso obstaculizaba la institución del jurado. La otra fue el *Act for the Impartial Administration of Justice*, para proteger a los recaudadores y otros empleados de la Corona en Massachusetts también, de manera que si eran acusados se les juzgara en otra colonia distinta, a discreción del gobernador. Por añadidura, el Parlamento inglés aprobó una nueva *Quartering Act* en junio y la *Quebec Act* entró en vigor también en ese mes, imponiendo que en la zona candiense bajo dominio británico el consejo legislador no fuera electivo, extendiendo la autoridad de Quebec a regiones de Ohio e Illinois en las que había comunidades francófonas, y reconociendo los tradicionales derechos de la Iglesia católica en Canadá¹¹⁷⁰.

Entonces, los norteamericanos respondieron de manera solidaria frente a estas medidas. Granjeros de diversos lugares enviaron provisiones a Boston, a fin de que resistiera su aplicación. La *House of Burgesses* virginiana se quejó de ellas, y al ser disuelta por adoptar esta postura, se reunió ilegalmente y decidió proponer la reunión de un nuevo Congreso Continental de todas las colonias, que finalmente se celebró en Filadelfia en 1774. En él, habiendo asistido representantes de todas las demarcaciones excepto de Georgia, los miembros de la asamblea aprobaron el 9 de septiembre varias resoluciones (*Suffolk Resolves*) con las cuales mostraban abiertamente su desobediencia a las *Intolerable Acts* y detallaban medidas a fin de enfrentarse a ellas, casi todas sobre no importación y exportación. Asimismo,

¹¹⁶⁹ Ibid., pp. 161-5. Y Ammerman, David L.: “The Tea Crisis and its Consequences, through 1775”, en Greene y Pole (eds.), *op. cit.*, pg. 199.

¹¹⁷⁰ Brogan, *op. cit.*, pp. 165-66. Fueron denominadas, en general, *Intolerable Acts*, por los colonos. Ibid, pg. 166.

acordaron unos días después formar un Asociación Continental para defenderlas. Autores como Wilson¹¹⁷¹, con su *Considerations on the Nature and Extent of the Legislative Authority of the British Parliament* (1774), Jefferson, con *A Summary View of the Rights of British America* (1774, Visión Sucinta de los Derechos de la América Británica)¹¹⁷², John Adams, con su publicación *Novanglus* (1775)¹¹⁷³, y otros, entraron en la escena pública con sus escritos. Precisamente en abril de 1775 comenzaron los enfrentamientos armados, pero los norteamericanos aún no querían recurrir a una escisión definitiva¹¹⁷⁴. Se reunieron de nuevo en Filadelfia en otro Congreso Continental (10 de mayo de 1775), ofreciendo un trato a Jorge III en julio. En agosto, el rey la rechazó y declaró que las colonias estaban en estado de rebelión. En diciembre, el Parlamento prohibió todo comercio con ellas. Thomas Paine edita en Filadelfia, en febrero de 1776, un panfleto ya claramente rebelde, el *Common Sense*, que obtiene un éxito absoluto entre los colonos y consigue ser publicado por doquier¹¹⁷⁵. En mayo,

¹¹⁷¹ James Wilson (1742-1798). Nacido en Escocia, Wilson tuvo grandísima importancia en la construcción nacional de los Estados Unidos de América, pese a existir escasas reseñas popularizadas sobre ello, fuera del ámbito anglosajón. Jurista y pensador político destacable, aunque discreto, fue uno de los firmantes de la Declaración de Independencia e impulsor decidio de la Constitución de 1787 y de la creación del Banco y fisco nacionales. Problemas financieros compicaron el final de su existencia. Vid. *Biographies*, en Greene y Pole (eds.), *op. cit.*, pp. 791 y 792.

¹¹⁷² Thomas Jefferson (1743-1826) fue jurista, pero con pronta vocación política. A la edad de 33 años, y como ya he selado antes, redactó lo que sería, con ligeros retoques, la Declaración de Independencia. Fue Ministro para Francia, Secretario de Estado, Vicepresidente y Presidente (1801-09) de los Estados Unidos, además de gobernador de Virginia, su tierra natal, y fundador de la Universidad de Virginia (vid. *ibid.*, pg. 378). Thomas Jefferson era un político de excelente reputación, con fama de hombre ilustrado, y sobre todo, con probada habilidad para crear documentos que sintetizaban perfectamente las reivindicaciones americanas, como en el caso de su anterior. Resulta claro, así, que su pluma recogía con destreza las principales ideas sostenidas por los colonos, reuniendo un bagaje intelectual poderoso para fundamentarlas y que incluía, desde el conocimiento sobre los antiguos *covenants* puritanos, hasta el de las aportaciones filosóficas y políticas innovadoras procedentes de Europa continental, pasando por los autores griegos y latinos, la historia de Inglaterra y su jurisprudencia. Por añadidura, Jefferson conocía los principales hallazgos científicos y técnicos de la Ilustración, poseía amplios conocimientos acerca de ciencias naturales, así como del arte y la arquitectura renacentistas. Fue líder de la facción “popular” de los independentistas y simpatizó con la primera fase de la Revolución Francesa. Vid., para todos estos datos y otros alrededor de su personalidad, Weymouth, Lally (dir.): *Thomas Jefferson, el Hombre...su Mundo...su Influencia*, Tecnos, Madrid, 1ª ed (1976), trad. cast. de José Belloch Zimmerman, de *Thomas Jefferson, the Man...his World...his Influence*, George Eidenfeld and Nicolson, Londres, 1973.

¹¹⁷³ John Adams (1735-1826) fue jurista y diplomático, hombre de extensa cultura y amplio conocimiento sobre la historia y los clásicos grecolatinos. Fue presidente de los Estados Unidos tras George Washington, siendo luego derrotado por Jefferson. Para apoyar la causa independentista, dio una nueva vuelta de tuerca a su pensamiento con *Thoughts of Government* (1776). Vid. “Biographies”, en en Greene y Pole (eds.), *op. cit.*, pp. 698 y 699. El *Novanglus* es una colección de artículos escritos bajo tal seudónimo en las *Boston Gazette* durante el año 1774. Vid. el Cap. 8, “Novanglus; or, A History of the Dispute with America, from Its Origin, in 1754, to the Present Time Addressed to the Inhabitants of the Colony of Massachusetts Bay”, en *The Revolutionary Writings of John Adams* (selección y prólogo de C. Bradley Thompson) Indianapolis, Liberty Fund, 2000, <<http://oll.libertyfund.org/title/592/76840>>.

¹¹⁷⁴ Brogan, *op. cit.*, pp. 167-69.

¹¹⁷⁵ Thomas Paine (1737-1809) fue el autor de numerosos escritos de carácter radical. Descendiente de cuáqueros y nacido y criado en suelo inglés, de donde había marchado a América en 1774, tras conocer a Benjamin Franklin, recorrió diversas ocupaciones modestas, entre ellas, la de fabricante de lencería femenina. Recién llegado a las colonias, editaría el *Pennsylvania Magazine*, donde publicaría pronto el citado *Common Sense*. Tomó parte en los combateres armados por la independencia. Hcia 1787, sin haberse desvinculado de su talento ideológico, estaba buscando patrocinadores para la construcción de un puente de construcción avanzada. Entre 1791 y 1792 escribió los Derechos del Hombre, respondiendo a los ataques de Edmund Burke contra la Revolución Francesa. Su trabajo fue condenado en Inglaterra, así que tuvo que huir a Francia, en donde se unió a la Convención Nacional, aun siendo extranjero allí.

el segundo Congreso Continental aconsejó a las trece demarcaciones que instituyeran gobiernos propios. El 4 de julio, aprobaría la Declaración de la Independencia¹¹⁷⁶, el mejor compendio de las ideas que condujeron a la secesión norteamericana. El proceso tuvo su antesala el 7 de junio de 1776, cuando Richard Henry Lee, delegado de Virginia, y siguiendo las instrucciones de allí, vino a exponer que “estas Colonias Unidas son, y por derecho han de serlo, Estados libres e independientes, que resultan desligados de toda alianza con la Corona Británica, y toda conexión política entre ellas y el Estado de Gran Bretaña queda, y ha de permanecer, totalmente suprimida”¹¹⁷⁷. En consecuencia, y aunque dejando transcurrir varios días para no precipitar la decisión, el Congreso Continental nombró el 11 de junio un comité para realizar un documento, conformado por John Adams, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Robert Livingston y Roger Sherman. Sin embargo, en este grupo los demás decidieron que el Jefferson se ocupara de redactar el cuerpo principal del texto¹¹⁷⁸, que luego sufrió sólo algunas modificaciones. El camino secesionista había culminado, pese a las reticencias que sus propios promotores habían mantenido al principio¹¹⁷⁹.

Resultó encarcelado por el Terror y tras el fin de esta etapa, liberado. En 1797 escribió *Justicia Agraria* (*Agrarian Justice*), que defendía impuestos a la herencia para una mejor redistribución de la tierra a favor de los más pobres (vid. *ibid.*, pp. 762 y 763). Paine fue el autor revolucionario en América que probablemente mejor entendió las inquietudes y sentimientos de las clases más humildes y estaba emparentado con la corriente anglosajona republicana más radical. Sus ataques a las monarquías y su defensa de la libertad de conciencia frente a iglesias instituidas le granjearon numerosos enemigos, pero también que pueda ser considerado hoy uno de los hombres del siglo XVIII más próximos a nosotros, opuesto a la esclavitud, amigo de los artesanos y los granjeros, ilustrado y aficionado a la ciencia y la investigación, viajero infatigable e incansable defensor de los *derechos humanos*.

¹¹⁷⁶ Commager, Leuchtenburg y Morison, *op. cit.*, pp. 108-112.

¹¹⁷⁷ Hamowy, Ronald: “The Declaration of Independence”, en Greene y Pole (eds.), *op. cit.*, pg. 265.

¹¹⁷⁸ Según la autobiografía de John Adams, el documento fue redactado por Jefferson porque aquél le convenció de ello, bajo los argumentos de que gozaría de mayor autoridad, al tratarse de un político virginiano, más popular y que escribía mejor. Pero Jefferson, en una carta a Madison de 1835, expuso al comentar el texto de Adams que éste se equivocaba, indicando la existencia del comité citado y que sus demás componentes habían porfiado para que él fuera quien realizase el borrador. Después mostraría tal escrito a Franklin y al propio Adams para que ofrecieran enmiendas, realizando las propuestas verbales que Jefferson tomaría en consideración que darían la última pincelada al texto definitivo, ya que luego aquel comité no variaría nada, aunque sí el Congreso (Becker, Carl L.: *The Declaration of Independence: A Study on the History of Political Ideas*; New York, Harcourt, Brace and Co., 1922, pp. 135 y 136). La versión de Jefferson es la asumida por los historiadores, a la vista de otros datos (vid. Hamowy, en Greene y Pole, eds., *op. cit.*, pg. 265, así como Commager, Henry S.: “La Declaración de Independencia”, en Weymouth, *op. cit.*, pp. 199 y 200).

¹¹⁷⁹ Incluso tras iniciadas las hostilidades con las batallas de Lexington y Concord, en abril de 1775, durante mucho tiempo subsistió la creencia de que era posible una reconciliación con Gran Bretaña. John Dickinson expuso a John Adams que abandonaría la delegación de Nueva Inglaterra, en la que éste también se encontraba, en caso de no optar por una postura de carácter moderado. Adams le replicó que la autoridad estaba en el Congreso Continental, y que habría que seguir lo que dijera. Éste entonces escogió la vía dickinsoniana, pero, decidió también levantar un ejército bajo el mando de Washington, justificando la medida con una *Declaration of the Causes and Necessity of Taking up Arms*. Entonces el rey rehusó aceptar acuerdo alguno. Pero, incluso esto no hizo que flaquearan del todo las esperanzas de reconciliación. Ni siquiera con la *Prohibitory Act* de 22 de diciembre de 1775, que declaraba las colonias fuera de la protección inglesa y el bloqueo a sus puertos. Vid. Becker, *op. cit.*, pp. 125-27. Con esta medida, asimismo, parecía claro que tenía sentido insistir en la reconciliación, mientras que saldría mejor el acordar abrir el comercio a Francia y que ésta en cambio les apoyara, con lo cual el 6 abril 1776, el Congreso abrió los puertos coloniales al comercio mundial (vid. *ibid.*, pg. 129).

II.1.2.2.b) Las ideas de 1776: la “Declaración de Independencia” y los panfletos previos

La revolución norteamericana supuso una quiebra con la tradición política y el inicio de una nueva legitimidad: la del pueblo como sujeto soberano. Es cierto, como se ha visto en páginas anteriores, que esta teoría se encontraba ya embrionariamente en Locke, en autores de la *Commonwealth*, y, desde luego en quienes ocupan la atención de ese trabajo, los *levellers*, que asumieron tal perspectiva. Pero su afianzamiento se produce con el triunfo de los independentistas americanos, que logran así trazar un antes y un después del 4 de julio de 1776, y con ese “nosotros, el Pueblo de los Estados Unidos de América”, que figura en el encabezamiento de la Constitución de 1787. Y ello porque, asimismo, hicieron partícipe de sus intenciones a toda la Humanidad, a la cual se dirigieron con la *Declaration of Independence*: “los *hombres* establecen sus Gobiernos, derivando sus justos poderes del consentimiento de los gobernados”. Para llegar a esta conclusión los norteamericanos habían combatido contra la metrópoli arrebatándole su propio discurso tradicional sobre los derechos, y transformándolo en un sentido universalizador. Hasta el punto de que desembocaría en su secesión de Gran Bretaña. El “Creador” atribuye a los hombres “determinados derechos inalienables, entre los que se encuentran la vida, la libertad, y la búsqueda de la felicidad”¹¹⁸⁰, y “para defender estos derechos los hombres establecen sus gobiernos”, de manera que “cuando cualquier forma de gobierno tienda a destruir estos fines, el pueblo tiene derecho de alterarla o abolirla”. Para ello, se parte de la idea de que “todos los hombres nacen iguales”¹¹⁸¹. El modelo antropológico lockeano del estado de naturaleza, así, según el que los individuos nacen con una igualdad esencial a los ojos de Dios, se relaciona, como en el *Segundo Tratado del Gobierno Civil*, con la posesión de unos derechos innatos. Pero la Declaración no resulta ser sólo una hipótesis abstracta para justificar las libertades de los ingleses, como ocurre con el texto de Locke, sino que va dirigida a todos los hombres¹¹⁸². Sus

¹¹⁸⁰ Según puede extraerse de la Autobiografía de Jefferson, en el borrador figuraba añadido el adjetivo “inherentes” (Jefferson, Thomas: “Autobiography”, en *The Life and Selected Writings of Thomas Jefferson*, eds. Adrienne Koch y William Peden, New York, The Modern Library of Random House, 1944, hay trad. cast. de M. Sáenz de Heredia, por donde se cita, “Autobiografía”, en *Autobiografía y otros escritos*, Madrid, Tecnos, 1987, pg. 24). La Declaración de Independencia, según sus propias palabras, intentaba “expresar la opinión americana y dar a esa expresión el tono y el espíritu que esa ocasión exigía”, con lo cual “toda su autoridad emana, por consiguiente, de la armonización de las opiniones de su tiempo, expresadas en conversaciones, en cartas, en ensayos impresos o en libros elementales de derecho público, como Aristóteles, Cicerón, Locke, Sidney, etc” (“Letters”, en *ibid.*, “Cartas” en la trad. cast., pg. 722).

¹¹⁸¹ “All men are created equal” (*Declaration of Independence*, *op. cit.*, pg. 55).

¹¹⁸² Tan es así que Jefferson había introducido en su borrador inicial un pasaje fustigando enérgicamente el comercio de esclavos consentido por el monarca inglés: “[h]a librado una guerra cruel contra la propia naturaleza humana, violando sus más sagrados derechos, los de la vida y libertad, en las personas de un pueblo distante que nunca le ofendió, cautivando y llevándolo a la esclavitud en otro hemisferio, u ocasionándole una muerte miserable al transportarlo. Esta conducta propia de piratas, oprobio de los

signatarios manifiestan abiertamente ante otros pueblos su intención de emerger como nueva nación, pero, asimismo, apelando a principios universales. Atraerán así la atención y simpatía de aquellos que están alzando la voz contra el Antiguo Régimen en otros rincones del planeta¹¹⁸³, como demostrará la emulación que diversos revolucionarios franceses, sobre todo girondinos, propusieron en su patria¹¹⁸⁴. Estas son las grandes diferencias de su credo con respecto a otros movimientos emancipadores aparecidos con antelación, incuidos los *levellers*, que gustaban más bien de referirse a “derechos de los ingleses”.

Resulta importante, asimismo, destacar que la perspectiva norteamericana no era un experimento de laboratorio perseguido por sesudos sabios que carecieran de contacto con la realidad o con el pasado. Por el contrario, y como se ha podido comprobar, los independentistas partían de hechos específicos que entendían eran injustos, y aplicaban, además, para interpretarlos, la herencia política proveniente de la metrópoli. En este sentido, resulta clara la construcción, extraída directamente del legado intelectual inglés, y que va a ligar, al modo en que éste ya lo hacía,

infieles, es la de un rey Cristiano de la Gran Bretaña. Resuelto a mantener abierto un mercado donde los HOMBRES podrían ser comprados y vendidos, ha prostituido su veto, al suprimir todo legislativo que intentase prohibir o restringir este comercio execrable [...] ahora está incitando a este pueblo a levantarse en armas contra nosotros, para adquirir la libertad de la cual él mismo les ha privado” (“*he has waged cruel war against human nature itself, violating its most sacred rights of life and liberty in the persons of a distant people who never offended him, captivating and carrying them into slavery in another hemisphere, or to incur miserable death in their transportation thither. This piratical warfare, the opprobrium of infidel powers, is the warfare of the Christian king of Great Britain. Determined to keep open a market where MEN should be bought and sold, he has prostituted his negative for suppressing every legislative attempt to prohibit or to restrain this execrable commerce [...] he is now exciting these very people to rise in arms among us, and to purchase that liberty of which he deprived them*”; cit. por Becker, pp. 212 y 213). La alusión al armamento de los negros se debe a que en 1775, el Gobernador Real de Virginia (justo de donde procedía Jefferson) había resuelto conceder la libertad a cualquier esclavo de color que se uniera a los británicos, con lo cual, en efecto, consiguió que se enrolara en su filas un buen número de ellos (vid. “Loyalism and Neutrality”, de Robert M. Calhoon, en Greene and Pole (eds.), pg. 247. El pasaje quedó suprimido por decisión del Congreso, aunque no el que alude a la población indígena (“se ha esforzado para atraer sobre los habitantes de nuestras fronteras a los despiadados indios salvajes”). La esclavitud existía en diversos estados como institución legal, principalmente en el sur. Hubo desacuerdos sobre este tema, como recuerdan las discusiones que luego se produjeron alrededor de la Constitución de 1787 y en la que, finalmente, su Sección Novena perteneciente al artículo I establecería que el Congreso no podría prohibir “antes del mil ochocientos ocho la [...] importación de las personas que cualquiera de los Estados ahora existentes estime oportuno admitir”. Es decir, que el debate, en todo caso, giró en torno a la supresión del comercio, no de la abolición de la esclavitud, que sólo defendió una débil (aunque muy activa) minoría blanca. De hecho, Jefferson mismo, pese a su posición contra ella, mantuvo esclavos en sus tierras (vid., sobre este asunto, Levy, Leonard: “Jefferson como libertario cívico”, en Weymouth, *op. cit.*, pp. 207-236). Paradójicamente, Gran Bretaña llegaría a abolir la esclavitud totalmente en 1834, mientras que Estados Unidos sólo lo haría en 1861, originando detonara la Guerra de Secesión, que duró cuatro años más, entre los estados del Norte y los del Sur. Algunos hombres de la revolución norteamericana, sin embargo, ya habían avanzado ideas antiesclavistas sin paliativos, como por ejemplo, James Otis o Thomas Paine.

¹¹⁸³ De la cual se hizo eco Diderot: vid. “A los insurgentes de América” (1778), en *Escritos Políticos*, estudio preliminar, trad. y notas de Antonio Hermosa Andújar, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989, pp. 321 y 322. Vid, también, en relación con el gobierno limitado que este autor preconizaba, Fioravanti, 2001, pp. 100 y 101.

¹¹⁸⁴ Brissot (1754-1794) y Condorcet (1741-1794). Vid. “The effects of the American Revolution on France and its empire”, en Greene and Pole (eds.), *op. cit.*, pg. 523. En este mismo volumen aparecen varios artículos de interés sobre la influencia norteamericana en muy diversos países. Sobre el ligamen con las colonias de Condorcet, vid., asimismo, Matteucci, 2001, pg. 236.

organización político-institucional y derechos. Así que, en gran parte, la revolución americana supuso llevar hasta sus últimas consecuencias el modelo británico, basado principalmente en un control del poder que implicaba el *sometimiento de los gobernantes al imperio de la ley*. La variación se refiere a los mecanismos para garantizarlo. Vale la pena repasar qué ideas se mantenían en la metrópoli entonces y en relación con este aspecto.

En Gran Bretaña se entendía estaba presente el gobierno mixto de Lores, Comunes y Monarca. William Blackstone (1723-1780), el jurista inglés más renombrado en América, va a señalar, así, en sus *Commentaries on the Laws of England*¹¹⁸⁵, que la máxima autoridad en el sistema político corresponde al legislativo, entendido como reunión de las Cámaras Alta y Baja y la Corona:

Tiene autoridad *soberana* e incontrolable en la elaboración, confirmación, ampliación, restricción, derogación, rechazo, restablecimiento y aclaración *de las leyes*, cualesquiera que sean los asuntos que aborde, bien fueren eclesiásticos, bien temporales, civiles, de carácter militar, marítimo o penal; siendo en él donde la constitución ubica el poder absoluto y despótico, que todos los gobiernos hacen residir en alguna parte (...) Todos los daños y agravios, procesos y resoluciones que vayan más allá del curso habitual de las leyes, se encuentran al alcance de este tribunal extraordinario. Así, puede regular o cambiar la sucesión de la Corona [...] Puede variar la religión establecida en el país [...] puede modificar y crear *ex novo* la constitución del reino y de los propios Parlamentos (como ocurrió con el acta de unión entre Inglaterra y Escocia y las diversas normas para elecciones trianuales y septianuales). Puede, en resumen, hacer todo aquello que no reulte ser naturalmente imposible; y, en consecuencia, algunos no han dudado en denominar a tal capacidad, con una indicación demasiado intrépida quizás, como omnipotencia del Parlamento. Es así cierto que lo que el Parlamento hace, ninguna autoridad sobre la tierra puede deshacerlo.¹¹⁸⁶

¹¹⁸⁵ Esta obra fue utilizada a menudo allí, en parte por la facilidad que suponía su transporte y manejabilidad, que posibilitaron que llegara, incluso, a las áreas rurales (vid. Urofsky, Mervin I., y Finkelman, Paul: *Documents of American Constitutional and Legal History, Volume I, From the Founding Through the Age of Industrialization*, 2ª ed., New York, Oxford University Press, 2002, pg. 33). Vid. también, sobre este autor británico, Fioravanti, 2001, pg. 98 y ss.

¹¹⁸⁶ "It hath sovereign and uncontrollable authority in the making, confirming, enlarging, restraining, abrogating, repealing, reviving, and expounding of laws, concerning matters of all possible denominations, ecclesiastical or temporal, civil, military, maritime, or criminal; this being the place where that absolute despotic power, which must in all governments reside somewhere [...] All mischiefs and "grievances, operations and remedies, that transcend the ordinary course of the laws, are within the reach of this extraordinary tribunal. It can regulate or new-model the succession to the crown [...] It can alter the established religion of the land (...) It can change and create afresh even the constitution of the kingdom and of parliaments themselves; as was done by the act of union, and the several statutes for triennial and septennial elections. It can, in short, do every thing that is not naturally impossible; and therefore some have not scrupled to call its power, by a figure rather too bold, the omnipotence of parliament. True it is, that what the parliament doth, no authority upon earth can undo". Blackstone, W: *Commentaries on the Laws of England*, London, S. Sweet, 1836, pp. 159-160. Subrayado propio.

A este conjunto institucional que Blackstone denomina *parliament*, y que dice es una *corporation* o *body politic*¹¹⁸⁷, le corresponde la *soberanía*, y a ningún otro¹¹⁸⁸. Por sí solas, ni la Corona ni las Cámaras pueden detentarla por separado. El mecanismo para sostener el imperio de la ley y, por tanto, los derechos y libertades tradicionales en Inglaterra¹¹⁸⁹, es, precisamente, depositar el poder legislativo en manos de tres entidades distintas que se van a vigilar mutuamente: “aquí reside la auténtica excelencia del gobierno inglés, que todas sus partes se controlan entre sí”¹¹⁹⁰. Esta teoría era, asimismo, coincidente con la de Montesquieu, en su particular versión de la estructura política inglesa: “para que no se pueda abusar del poder es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder frene al poder”¹¹⁹¹. Pero la realidad de las Islas divergía de este modelo, como se ha visto con anterioridad, al analizar la etapa Walpole. De hecho, la Corona no había vuelto a utilizar su prerrogativa de veto desde 1701, en tiempos de la reina Anne. Las Cámaras representativas del Reino, especialmente la de los Comunes, habían cobrado mayor relieve, mientras que el Rey lo había perdido, negando así la doctrina blackstoniana.

Sin embargo, los colonos norteamericanos, familiarizados con ella¹¹⁹², van a recogerla, utilizándola para reforzar sus argumentos contra la metrópoli. Advierten el

¹¹⁸⁷ *And the king and these three estates, together, form the great corporation or body politic of the kingdom* (“y el monarca y estos tres estamentos, todos juntos, forman la gran corporación o cuerpo político del reino”). Ibid., pg. 153.

¹¹⁸⁸ Cfr. *supra*, pg. 312 (*Declaratory Act*). Debe considerarse que la soberanía a veces se atribuía, si bien incidentalmente, no de forma sustancial, y más que nada por herencia del Medievo y su terminología, al monarca. Así, Jenyns, Soame: “A Scheme for the Coalition of Parties” (1782), en *The Works of Soame Jenyns*, Vol. II, 2ª ed., Londres, T. Cadell, 1793, pg. 265.

¹¹⁸⁹ Ibid., pp. 126 y 127. Como señala Fioravanti, 2001, pg. 99: “la constitución que defendía no puede concebirse como un juego de límites sin contenido, de presos y contrapesos. Siempre era necesario terminar recordando que la excelencia de la forma de gobierno moderada de los ingleses consiste en el hecho de que es lo mejor que los hombres han inventado para obtener una buena y eficaz tutela de los derechos”.

¹¹⁹⁰ *And herein indeed consists the true excellence of the English government, that all the parts of it form a mutual check upon each other* (“y en esto consiste, asimismo, la verdadera excelencia del gobierno inglés, que todas sus partes conforman un control mutuo entre unas y otras”). Ibid., pg. 154.

¹¹⁹¹ Montesquieu: “Del Espíritu de las Leyes”, trad. cast., por la que se cita, de aquí en adelante, de *De l'Esprit des Lois*, de Mercedes Blázquez y Pedro de Vega, Madrid, Tecnos, 1987, pg. 114, en el capítulo IV del Libro IX. La mención del francés no es baladí, ya que aparece nombrado muchas veces en la obra de Blackstone (vid. *op. cit.*, pp. 160, 260, 414, 416, 447 y 453). Existe una especie de camino de ida y vuelta, de Inglaterra a Francia, para luego regresar a la Isla e, incluso, a continuación, con los hechos de 1789, emerger de nuevo en la segunda, que señala la gran importancia del barón. En cierto modo, su versión de la constitución inglesa fue asumida por sus coetáneos ingleses. Y no la de Locke, que parecía demasiado abstracto, con su noción contractualista “dura” y la referencia al consentimiento popular, y que había dejado un tanto apartadas las potestades judiciales, que, sin embargo, resultaban subrayadas por el autor del Espíritu de las Leyes, (vid. Matteucci, *op. cit.*, pg. 220) y por el propio Blackstone, en varios pasajes de su obra citada (vid. su “La administración habitual de justicia pública”, Capítulo I, Sección 12, apartado II).

¹¹⁹² Daniel Dulany, “Considerations on the Propriety of Imposing Taxes in the British Colonies for the Purpose of Raising a Revenue by Act of Parliament” en Jensen, Merrill: *Tracts of the American Revolution, 1763-1776*, Indianapolis, Hackett Publishing, 2003 (reimpresión de la ed. de 1967); pg. 102. Gran Bretaña tiene una “autoridad suprema, conferida al monarca, los lores y los comunes” (“*supreme authority vested in the king, lords, and commons*”). Lo normal es, asimismo, alabar este modelo. Vid., así, un ejemplo de encomio, en Hopkins, Stephen: “The Rights of Colonies Examined” (1764), en *ibid.*, pg. 43 (“esta gloriosa constitución, la mejor que haya existido entre los hombres”). Las traducciones son propias.

choque de dos realidades distintas, que se han ido consolidando paralelamente, una a espaldas de la otra. Por un lado, observan que en el marco institucional inglés, los Comunes han ganado poder en las últimas décadas, desarbolando el viejo gobierno mixto. Y por otra parte, se percatan de que precisamente ellos mismos han erigido órganos de autogobierno propios y de los que no están dispuestos a prescindir, es más, que defienden frente a otros establecidos por la metrópoli, como era el caso de los gobernadores. Hasta ahí, el conflicto se mantuvo dentro de ciertos cauces. Pero la insistencia de la Cámara Baja de Gran Bretaña en fijar ciertos impuestos sobre los colonos, acompañada de medidas expeditivas y poco respetuosas con sus derechos, y que se supone habían quedado confirmados desde la concesión de sus cartas coloniales¹¹⁹³, van a provocar otra vuelta de tuerca. Y ello porque no debe perderse de vista que todos los mecanismos citados se relacionaban directamente con el propósito principal de la protección de ciertos derechos. Éste es el tesoro que los colonos quieren proteger y que les hace revolverse contra el peligro que creen corre. La “constitución” inglesa no incluía solamente el gobierno mixto, sino también, y esto fue lo que pronto cobró aún mayor importancia, una serie de libertades que deben ponerse a salvo contra todo poder¹¹⁹⁴.

Al respecto, los norteamericanos se encuentran a apartir de los 1760's con que no se respeta su derecho a la “propiedad”, entendiéndose ésta en el amplio sentido que le otorgaban Locke, Trenchard y Gordon, en definitiva, el *whiggism* “auténtico”. Se trataba de un derecho principal entrelazado con otros, todos ellos inescindibles para los hombres de aquel momento, aunque nosotros hayamos realizado después diversas clasificaciones conceptuales: la libertad de expresión (*freedom of speech*), el

¹¹⁹³ James Otis, en su “The Rights of the British Colonies Asserted and Proved” (1764), en *ibid.*, pg. 24, dirá que “todo súbdito británico nacido en el continente americano, o en otra parte de los dominios Gran Bretaña, resulta, por ley divina y de la naturaleza, por *common law* y por decisión parlamentaria (excluida de todas las Cartas de la Corona), facultado para ejercer todos los derechos naturales, inherentes e inseparables de nuestros conciudadanos residentes en la propia Gran Bretaña” (“[e]very British subject born on the continent of America, or in any other of the British dominions, is by the law of God and nature, by the common law, and by act of parliament, exclusive of all charters from the Crown, entitled to all the natural, inherent and inseparable rights of our fellow subjects in Great Britain”). En el mismo sentido, Hopkins, *op. cit.*, pp. 43 y 44, así como las Resoluciones primera y segunda de Virginia sobre la Ley del Timbre (1774) (en Finkelman y Urofsky, eds., *op. cit.*, pg. 35), y en la II de las *Resolutions of the Stamp Act Congress* (1765), *ibid.*, pg. 37. También, Dulany, *op. cit.*, pg. 106: “entraron en un pacto con la Corona, la base del cual fue que sus privilegios como súbditos ingleses les serían asegurados de manera efectiva, y transmitidos a la posteridad”. Traducción propia.

¹¹⁹⁴ Reunía, pues, más elementos además de la técnica del gobierno mixto, pues “[p]or constitución entendemos, siempre que se pretenda hablar con propiedad y exactitud, esa reunión de leyes, instituciones y costumbres derivadas de ciertos principios estables de la razón, dirigidos a determinadas metas inmutables del bien común, y que componen el sistema general con respecto al que la comunidad ha acordado resultar gobernada” (*The works of Henry St. John, lord viscount Bolingbroke*, Vol. 2, J. Johnson, London, 1809, pg. 157: “[b]y constitution we mean, whenever we speak with propriety and exactness, that assemblage of laws, institutions, and customs, derived from certain fixed principles of reason, directed to certain fixed objects of publick good, that compose the general system, according to which the community hath agreed to be governed”). Bolingbroke separaba esa constitución del “gobierno”, que a su vez era bueno si obraba de acuerdo con aquellos principios y fines constitucionales (*ibid.*, pg. 158).

derecho a no padecer el acuartelamiento de tropas, la libertad de conciencia, el derecho a un juicio justo con veredicto de jurados, la facultad de presentar peticiones¹¹⁹⁵. Si se pretendían imponer tributos sobre los ingresos personales que, recordemos, eran frutos del esfuerzo y el mérito individual, del trabajo y la virtud¹¹⁹⁶, tal conducta debía justificarse persiguiendo el bien común, la *salus populi*, cometido de cualquier magistrado. Pero para emprender esta acción, resultaba necesario contar con el *consentimiento* de los obligados¹¹⁹⁷, los *freemen*¹¹⁹⁸, que sólo podrían gozar de tal condición en la medida en que se pidiera su asentimiento. Otra teoría no parecía encajar con un pasado más o menos inmediato que arrancaba de las luchas contra el despotismo estuardiano¹¹⁹⁹. *El derecho de participación política no podía separarse del resto de libertades*. Y se concretaba en la capacidad para elegir representantes en asambleas que establecieran las normas principales de la comunidad, incluyendo las de carácter tributario (*no tax without representation*¹²⁰⁰). Ocurría, sin embargo, que, los

¹¹⁹⁵ Recuérdese la *Petition of Right* de 1628 como antecedente.

¹¹⁹⁶ Cfr. *supra*, sobre Trenchard y Gordon, pg. 281. Locke ya había señalado una vía similar: "Todo lo que uno pueda usar para ventaja de su vida antes de que se eche a perder, será lo que le esté permitido apropiarse mediante su trabajo" (*op. cit.*, pg. 59, epig 30.) y "es el trabajo lo que introduce la diferencia de valor en todas las cosas" pg. 67, epig 40.

¹¹⁹⁷ "Todos los hombres resultan, por naturaleza, iguales y libres: ninguno tienen derecho a la autoridad sobre otro sin su consentimiento; todo gobierno legítimo se halla fundado sobre el consentimiento de quienes se encuentran sujetos a él; tal consentimiento fue otorgado con vistas a asegurar e incrementar la felicidad del los gobernados" ("*[a]ll men are, by nature, equal and free: no one has a right to any authority over another without his consent: all lawful government is founded on the consent of those who are subject to it: such consent was given with a view to ensure and to increase the happiness of the governed*"). Wilson, James: "Considerations on the Nature and Extent of the Legislative Authority of the British Parliament" (1774), en *Collected Works* (Hall, Kermit L. y Hall, David Mark, editores), Indianapolis, Liberty Fund, 2007, <http://oll.libertyfund.org/title/2072/156335>. Nótese el empleo del término "felicidad", utilizado también por Jefferson en la Declaración de la Independencia. Algunos apuntan a que, al margen de la posible influencia en esta última, el concepto tenía resonancias "ilustradas", rastreables en Burlamaqui y la Ilustración escocesa. Vid. Hamowy, *op. cit.*, pg. 266, así como Lewis, Jan: "Happiness", en en Greene y Pole (eds.), *op. cit.*, pg. 644.

¹¹⁹⁸ Esta figura continúa presente en la ideología de la época; vid. Jefferson, *op. cit.*, pg. 316: "Nuestros antepasados sajones poseían sus tierras como el resto de su propiedad personal, en absoluto dominio, no sujeto a ningún superior".

¹¹⁹⁹ *Ibid.*, pg. 310; así como la mención sobre el juicio a Carlos I en Dickinson, John: *Empire and Nation: Letters from a Farmer in Pennsylvania*, ed. Forrest McDonald, Indianapolis, Liberty Fund, 1999, <<http://oll.libertyfund.org/title/690/102310>>.

¹²⁰⁰ Otis, *op. cit.*, pg. 26: "[e]l poder supremo no puede tomar de hombre alguno su propiedad sin que medie su consentimiento o bien el de su representante" ("*[t]he supreme power cannot take from any man any part of his property, without his consent in person, or by representation*"). Asimismo, Dulany, *op. cit.*, pg. 105, habla de que existe "el principio de que no puede haber impuesto sin consentimiento, y que un habitante de América sólo puede otorgar en asamblea" ("*the principle that he is not to be taxed without his own consent, and an inhabitant in America can give his consent in no other manner than in assembly*"). La tercera de las Resoluciones de Virginia sobre la Ley del Timbre (*op. cit.*, pp. 35 y 36) también se refiere a idéntico principio: "Que la imposición fiscal del pueblo sobre sí mismo, o realizada por personas elegidas por él para representarle, quienes a su vez son las únicas que pueden saber qué impuestos es capaz de soportar el pueblo o el método más fácil para aumentarlos, por tener que sujetarse ellas mismas a todo impuesto que vaya a ser cargado sobre el pueblo, es la única garantía contra una imposición gravosa, y la característica distintiva de la libertad británica, sin la cual la vieja constitución no puede subsistir" ("*Resolved, That the taxation of the people by themselves, or by persons chosen by themselves to represent them, who can only know what taxes the people are able to bear, or the easiest method of raising them, and must themselves be affected by every tax laid on the people, is the only security against a burthensome taxation, and the distinguishing characteristic of British freedom, without which the ancient constitution cannot exist.*"). También, la Quinta Resolución del *Stamp Act Congress* (*op. cit.*, pg. 37): "V. Que los únicos representantes del pueblo de estas colonias son la personas elegidas aquí por el mismo; y

colonos no gozaban de representación en el Parlamento británico, según ya señalaba la Resolución IV del *Stamp Act Congress* (“el pueblo de estas colonias no se halla, y tampoco podría encontrarse así, dadas sus circunstancias particulares, representado en la Cámara de los Comunes”¹²⁰¹). De hecho, rechazaban la representación “virtual” que habían llegado a oponerles autores como Soame Jenyns, quien se refería en estos términos al asunto debatido:

copyholders, leaseholders y todos aquellos hombres que tienen posesión personal solamente, no eligieron representantes; Manchester, Birmingham y muchas otras de nuestras más ricas y más prósperas localidades mercantiles no remitieron miembros al Parlamento, así que tampoco pudieron consentir mediante representantes suyos, porque no eligieron a persona alguna para representarles. ¿No son ingleses, sin embargo? ¿No soportan impuestos? [...] Plantearé una pregunta, en la que haré descansar toda la contribución al tema: ¿Por qué toda esta imaginaria representación no se extiende a América, en la misma forma que a todas las islas de Gran Bretaña? Si puede viajar a trescientas millas de distancia, ¿por qué no a tres mil? ¿Si puede saltar sobre ríos y montañas, ¿por qué no por encima del océano? Si las ciudades de Manchester y Birmingham no envían representantes al Parlamento, estando, sin embargo, representadas allí, ¿por qué no Albany o Boston se van a ahallar en idéntica situación? ¿No se trata también de súbditos británicos? ¿Ni de ingleses? ¿O sólo son ingleses cuando solicitan protección, pero no cuando les son requeridas contribuciones para que su país pueda protegerles?

Pero es argumentado que las colonias se encuentran bajo gobiernos distintivos, debido a sus Cartas, cada una de las cuales les otorga poder legislativo propio, el único por medio del que podrían quedar sujetas a tributación; y que éste fue el privilegio concedido en su momento, la libertad a la que todo inglés tiene derecho, de manera que si se le retirara sería un esclavo *sin pertenencias* [...] Pero aunque tal cosa hubiera ocurrido, no habría podido ser válida: *tales cartas se derivan de la Corona*, y ninguna de ellas puede ser superior al derecho del legislativo al completo¹²⁰²: se trata de Cartas como las de las corporaciones, que autorizan para aprobar leyes y erigir obligaciones para los propósitos de su propio orden, pero *siempre sujetas a la autoridad superior del Parlamento*; y en algunas de tales Cartas, la forma de ejercer tales poderes queda expresada con expresiones como las de “en consonancia con la conducción de

que ningún impuesto ha sido o puede ser impuesto sobre el pueblo de acuerdo con la constitución, si no es mediando el correspondiente legislativo” (“V. *That the only representatives of the people of these colonies are persons chosen therein, by themselves; and that no taxes ever have been or can be constitutionally imposed on them but by their respective legislatures*”). Vid., por añadidura, la Carta IV de Dickinson en *op. cit.*, <<http://oll.libertyfund.org/title/690/102303>>.

¹²⁰¹ “*That the people of these colonies are not, and from their local circumstances cannot be, represented in the House of Commons in Great Britain*” (Finkelman y Urofsky, eds., *op. cit.*, pg. 37). Vid., asimismo, Wilson, *op. cit.*: “las colonias americanas no se hallan obligadas por las leyes del parlamento británico, porque no se encuentran representadas en él” (“*the American colonies are not bound by the acts of the British parliament, because they are not represented in it*”), y Otis, *op. cit.*, pg. 25.

¹²⁰² Recuérdese que se trata de Rey, Comunes y Lores.

otras corporaciones de Gran Bretaña”; y por lo tanto, no pueden tener más pretensiones al respecto que las que de otra corporación inglesa.¹²⁰³

Esta fue la opinión de los defensores de la metrópoli en la polémica¹²⁰⁴, como ocurrió también en el supuesto de Thomas Whately¹²⁰⁵, Martin Howard¹²⁰⁶, o Samuel Seabury¹²⁰⁷. Implicaba el entendimiento de que existía una representación virtual para los colonos en el Parlamento de Westminster, aunque no hubieran elegido delegados para decidir en él. Daniel Dulany pronto destacaría como crítico de tal noción¹²⁰⁸, exponiendo que

¹²⁰³ “Not one in twenty represented, copyholders, leaseholders, and all men possessed of personal property only, chuse no representatives: Manchester, Birmingham, and many more of our richest and most flourishing trading towns send no members to parliament, consequently cannot consent by their representatives, because they chuse none to represent them ; yet are they not Englishmen ? or are they not taxed? [...] I will ask one question, and on that I will rest the whole merits of the cause: Why does not this imaginary representation extend to America, as well as over the whole island of Great Britain ? Is it can travel three hundred miles, why not three thousand ? is it can jump over rivers and mountains, why cannot it fail over the ocean ? If the towns of Manchester and Birmingham sending no representatives to parliament, are not withstanding there represented, why are not the cities of Albany and Boston equally represented in that assembly ? Are they not alike, British subjects ? are they not Englishmen ? or are they only Englishmen when they solicit for protection, but not Englishmen when taxes are required to enable this country to protect them ? But it is urged, that the colonies are by their charters placed under distinct governments, each of which has a legislative power within itself, by which alone it ought to be taxed ; that if this privilege is once given up, that liberty which every Englishman has a right to, is torn from them, they are all slaves, and all is lost [...] and had they granted it, it could have had no force: their charters being derived from the crown, and no charter from the crown can possibly supercede the right of the whole legislature: their charters are undoubtedly no more than those of all corporations, which empower them to make bye laws, and raise duties for the purposes of their own police, for ever subject to the superior authority of parliament ; and in some of their charters, the manner of exercising these powers is specified in these express words, ‘according to the course of other corporations in Great Britain’ and therefore they can have no more pretence to plead an exemption from this parliamentary authority, than any other corporation in England” (“Objections to the Taxation of our American Colonies by the Legislature of Great Britain, Briefly Considered” (1765), en *The Works of Soame Jenyns*, Vol. II, 2ª ed., Londres, T. Cadell, 1793, pp. 192-195). Jenyns fue nombrado en julio de 1768, Presidente del *Board of Trade* británico. Vid. Sarson, Steven J.: “Chronology Compiled”, en Greene, Jack P. y Pole, J.R. (eds.), pg. 808. Subrayados propios.

¹²⁰⁴ “The Bill of Rights and the American Revolutionary Experience” (James H. Hutson), en Lacey, Michael J., y Haakonssen, Knud (eds.): *A Culture of Rights (The Bill of Rights in philosophy, politics and law- 1791 and 1991)*, Cambridge, Woodrow Wilson International Center for Scholars and Cambridge University Press, Cambridge, 1992. Pg. 66.

¹²⁰⁵ Bailyn, Bernard: *Los orígenes ideológicos de la Revolución Americana*, Paidós, Buenos Aires, 1972 (trad. cast., por la que se citará, de aquí en adelante, de *The Ideological Origins of the American Revolution*, Harvard University Press, Cambridge, 1967), pg. 158. Whately fue Secretario del Tesoro británico y promotor del proyecto de ley que luego derivaría en la *Stamp Act*. Vid. Thomas, Peter D.G.: “The Grenville Program, 1763-1765”, en Greene, Jack P. y Pole, J.R., *op. cit.*, pg. 110., así como Morgan, *op. cit.*, pg. 240.

¹²⁰⁶ Autor, en 1765, de *A Letter From a Gentleman at Halifax*, y para quien el “derecho al voto era un atributo accidental” (Aparisi, *op. cit.*, pg. 347).

¹²⁰⁷ Samuel Seabury (1729-1796) fue ministro anglicano y lealista que ocuparía diversos cargos religiosos de la metrópoli. “Biographies”, en Greene y Pole, *op. cit.*, pg. 777.

¹²⁰⁸ Dulany, *op. cit.*, pg. 96: “Los defensores de la *Stamp Act* admiten, en términos expresos, que las colonias no elijan miembros del Parlamento, pero aseveran que se hallan virtualmente representadas en la misma forma que los lectores de Gran Bretaña” (*The advocates of the Stamp Act admit, in express terms, that the colonies do not choose members of parliament, but they assert that the colonies are virtually reopresented in the same manner with the non-electors in Great Britain*).

No existe una relación directa e inseparable entre los electores de Gran Bretaña y los habitantes de las colonias, que suponga la misma imposición tributaria para unos y otros; por el contrario, ni un solo elector actual en Inglaterra quedará inmediatamente sujeto por un tributo en América, obligado por una norma parlamentaria que sí vincularía y afectaría de forma general a las propiedades de los colonos. Estos últimos serán oprimidos de una millar de maneras, sin gozar de simpatía o alarmar a aquéllos.¹²⁰⁹

Porque resulta que se arrinconaría la identidad de intereses necesaria para toda representación:

La seguridad de los no electores contra la opresión es la de que la misma no recaerá también sobre los electores y los representantes. No pueden resultar dañados sin que a los otros también les ocurra lo mismo.¹²¹⁰

De lo contrario, como explica Wilson en otro panfleto, la sujección común a la ley decaerá:

Los miembros del Parlamento, sus familias, sus amigos y sus sucesores, deben hallarse sujetos, como los de otros, a las leyes. Su interés, así como el de sus familias, amigos y sucesores, no pueden ser distintos del de la nación.¹²¹¹

Sin embargo, y pese a todo lo expuesto, al principio los colonos no optaron por una ruptura total con la metrópoli y, en cambio, intentaron buscar fórmulas conciliadoras¹²¹². Una de ellas, aunque escasamente utilizada, dadas las obvias inconveniencias del transporte marítimo entonces a tan largas distancias, fue la de pedir la representación en el Parlamento británico¹²¹³. La mayoría de las opiniones, sin embargo, y pese a las numerosas disoluciones decretadas por los gobernadores de

¹²⁰⁹ *"There is not that intimate and inseparable relation between the electors of Great-Britain, and the Inhabitants of the colonies, which must inevitably involve both in the same taxation; on the contrary, not a single actual elector in England, might be immediately affected by a taxation in America, imposed by a statute which would have a general operation and effect, upon the properties of the inhabitants of the colonies. The latter might be oppressed in a thousand shapes, without any Sympathy, or exciting any alarm in the former."* Ibid, pp. 99 y 100.

¹²¹⁰ *"The Security of the Non-Electors against Oppression, is, that their Oppression will fall also upon the Electors and the Representatives. The one can't be injured, and the other indemnified."* Ibid., pg. 98. Esto recuerda, evidentemente, a la aseveración de Ireton en Putney; cfr. Woodhouse, op. cit., pg. 54, cuando el cuñado de Cromwell se refiere a la exigencia de que alguien tenga un interés prefijado para que pueda elegir representantes.

¹²¹¹ *"The members of parliament, their families, their friends, their posterity must be subject, as well as others, to the laws. Their interest, and that of their families, friends, and posterity, cannot be different from the interest of the rest of the nation."* Wilson, op. cit.

¹²¹² Becker, op. cit., pp. 101 y 102.

¹²¹³ Posibilidad planteada inicialmente por Otis (op. cit., pg. 39), aunque como complementaria a la continuidad del autogobierno (ibid, pg. 25).

turno, no renunciaba a la habitual labor legislativa de las asambleas provinciales¹²¹⁴. Así que, dentro de esta tendencia, y en un primer instante, se quiso distinguir entre impuestos destinados a gravar la riqueza de las colonias, pero sin salir de ellas, y esos otros que se pretendían destinar a la recaudación de la metrópoli, partiendo de las provincias de Norteamérica:

quizás sea necesario advertir la gran diferencia que hay entre obtener dinero en un país mediante aranceles o tributos, y utilizar e invertir luego esas sumas en el mismo lugar; o bien recaudar ese dinero por idénticos medios y después enviarlas muy lejos de donde son recaudadas. Cuando estemos ante el primero de los supuestos, y aunque las sumas fueran cuantiosas, ese país podría soportarlas [...] Pero en el último caso [...] a partir de que el dinero sea obtenido y enviado de manera inmediata fuera del país, no retornará, a no ser por un tedioso circuito comercial que, en el mejor de los casos, requerirá mucho tiempo; en este último supuesto, todo comercio y toda clase de negocios que dependan de él se embotarán y languidecerán paulatinamente, hasta que, por último, queden totalmente paralizados.¹²¹⁵

Las resoluciones del *Stamp Act Congress* parecieron indicar parecida diferencia¹²¹⁶. Pero las *Townshend Acts* impidieron que se continuara haciendo esta división¹²¹⁷ y otras similares, que de hecho ya habían sufrido antes severas críticas¹²¹⁸. Esta serie de distinciones leguleyescas fueron cayendo progresivamente en el descrédito y fenecieron muy pronto. Wilson escribe en 1774 que *cualquier impuesto*, sin excepción, debe contar con la aprobación de la comunidad, a través de sus representantes, a fin de que pueda ser entendido como legítimo¹²¹⁹. De hecho, también entonces este autor va a exponer la fórmula que, definitivamente, se consolida como la más aceptada entre los colonos en el momento inmediatamente

¹²¹⁴ En lo relativo a este extremo, vid. como ejemplo Adams, *op. cit.*, “Novanglus VII”, <http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=592&chapter=76848&layout=html&Itemid=27>.

¹²¹⁵ “It may be necessary to take notice of the vast difference there is between the raising money in a country by duties, taxes or otherwise, and employing and laying out the money again in the same country; and raising the like sums of money, by the like means, and sending it away quite out of the country, where it is raised. Where the former of these is the case, although the sums raised may be very great, yet that country may support itself under them [...] But where the latter method is pursued [...] as fast as the money can be collected, 'tis immediately sent out of the country, never to return but by a tedious road of commerce, which, at best, must take up much time; here, all trade, and every kind of business depending on it, will grow dull, and must languish more and more, until it comes to a final stop at last”. Hopkins, *op. cit.*, pp. 60 y 61.

¹²¹⁶ Becker, *op. cit.*, pg. 90.

¹²¹⁷ *Ibid.*, pg. 92. Dickinson aún intentaba mantenerla: vid. “Letter II”, *op. cit.*, <http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=690&chapter=102301&layout=html&Itemid=27>.

¹²¹⁸ Otis, *op. cit.*, pg. 31.

¹²¹⁹ Wilson, *op. cit.*, *passim*. El autor rechazó aquella antigua distinción entre impuestos para regular el comercio y tributos con ánimo recaudatorio.

anterior a la independencia¹²²⁰. Se trata del entendimiento de que *los norteamericanos sólo se hallan unidos a la metrópoli en función de su ligamen a una misma Corona*¹²²¹. Así que ni los Comunes, ni menos aún, los Lores, pueden vincular con sus decisiones a las provincias del otro lado del Atlántico. Éstas mantienen sus propias asambleas y no tiene sentido vincularlas con Westminster, puesto que allí no se hallan representados sus pobladores. Tal es la razón de que en la *Declaration of Independence* de 1776 no aparezca mención alguna al Parlamento británico, salvo de forma indirecta, cuando se dice, acusando al Rey, de que “ha conspirado con otros para someternos a una jurisdicción extraña a nuestra Constitución y desconocida por nuestras leyes, dando su consentimiento a esos actos de supuesta legislación”¹²²², enumerando inmediatamente después diversas medidas que habrían empujado a la independencia. Por aquel entonces, se admitía de forma generalizada que su autoridad sobre las colonias era inexistente, subsistiendo tan sólo la del monarca. El vericuetto había sido algo falseado, puesto que, sin duda, y como se ha visto con anterioridad, las asambleas coloniales ya habían combatido a los principales delegados del rey, los gobernadores, desde hacía muchas décadas atrás. Así como contra los consejos de administración de las sociedades con sede en Inglaterra. Lo que ocurre es que a partir de la *Stamp Act*, Westminster se había arrogado facultades que no normalmente no había ejercido de forma tan decidida, habiéndose padecido en

¹²²⁰ Ya expuesta por otros implícitamente antes, todo hay que decirlo, como fue el caso de Hopkins, al referirse a la lealtad a *la Corona* que mantenían los colonos (*op. cit.*, pg. 61).

¹²²¹ Wilson, *op. cit.*: “[q]uienes se arrojaron en la profundidad desconocida, en busca de nuevos países y lugares para vivir, se consideraron aún súbditos de los monarcas ingleses y se comportaron de acuerdo con tal premisa; pero de ello no se desprende que se coinsideraran representados en el Parlamento inglés, ni que pensaran que su autoridad se extendía sobre ellos. Tomaron posesión del país en nombre del rey, hicieron tratados o la guerra con los indios bajo su autridad, tuvieron tierras bajo sus concesiones y le pagaron las rentas que habíand e reservársele, establecieron gobiernos bajo la sanción de su prerrogativa, o en virtud de sus cartas; a estos propósitos, ninguna petición resultó cursada al parlamento, no fue soclitada de esa asamblea ratificación de las cartas o concesiones, como sí en cambio era usual en Inglaterra con respecto a licencias y autorizaciones de mucha menor importancia” (“[t]hose who launched into the unknown deep, in quest of new countries and habitations, still considered themselves as subjects of the English monarchs, and behaved suitably to that character; but it no where appears, that they still considered themselves as represented in an English parliament, or that they thought the authority of the English parliament extended over them. They took possession of the country in the king's name: they treated, or made war with the Indians by his authority: they held the lands under his grants, and paid him the rents reserved upon them: they established governments under the sanction of his prerogative, or by virtue of his charters:—no application for those purposes was made to the parliament: no ratification of the charters or letters patent was solicited from that assembly, as is usual in England with regard to grants and franchises of much less importance”). La fórmula tardó en ser aceptada plenamente y sin paliativos, aunque ya se hubiera tenido siempre en cuenta (vid. Matteucci, *op. cit.*, pp. 179, 180 y 184). Como muestra de ello, puede leerse la Resolución I del *Stamp Act Congress* de 1765: “I. Que los súbditos de Su Majestad en estas colonias obedecen la misma lealtad a la Corona de Gran Bretaña que aquella a la que se someten todos los súbditos nacidos en los confines del reino, así como la obligada subordinación al cuerpo augusto del Parlamento de Gran Bretaña” (“I. That His Majesty's subjects in these colonies owe the same allegiance to the crown of Great Britain that is owing from his subjects born within the realm, and all due subordination to that august body, the Parliament of Great Britain”). Finkelman y Urofsky (eds.), *op. cit.*, pg. 37.

¹²²² “He has combined with others to subject us to a jurisdiction foreign to our constitution, and unacknowledged by our laws; giving his assent to their acts of pretended legislation”. “Declaration of Independence” (1776), en *The Declaration of Independence and the Constitution of the United States of America*, Washington D.C., Georgetown University Press, 2003, pg. 7.

América hasta entonces sólo el largo brazo del trono, como poder ejecutivo del imperio. Pero ahora, los parlamentarios, aquellos que precisamente habían protagonizado luchas tan importantes contra los reyes de épocas anteriores, optaban por ir más lejos que la Corona, comportándose de manera despótica. De modo que el Parlamento podía ser un tirano¹²²³, pese a que ningún legislativo tuviera la potestad de ser arbitrario¹²²⁴. Así que la rebelión de los colonos contra la asamblea inglesa tuvo varias fases, en las cuales se haría hincapié en unos elementos u otros según la coyuntura¹²²⁵, pero el hilo conductor durante todo el período fue el de entender que *no tenían representación real* en los Comunes y, por lo tanto, rechazar que existiera alguna de tipo virtual.

De allí, los rebeldes pasaron al siguiente momento, el que viene explícitamente señalado en la Declaración de Independencia¹²²⁶. Como el principio de representación no quedaba cumplido en lo relativo a su participación política, y dado que sólo permanecían ligados a Gran Bretaña por la Corona, quedaba por saber en qué se traduciría su enfrentamiento con ella. La inclinación de esta última por una política claramente imperial y su concurso con el Parlamento para llevarla a cabo, confirmaron los peores temores de los norteamericanos. El Rey había, en última instancia, obviado la *salus populi*, la propia supervivencia de las colonias. “La alianza con el rey y la obediencia al Parlamento se hallan basadas en principios muy diferentes. La primera, basada en la protección, la segunda, en la representación”¹²²⁷. Ésta, ya se ha visto como quedaba vulnerada. Pero la otra también, arrinconada por políticas que iban directamente contra los colonos, *que atacaban su propia supervivencia como comunidad (nacional)*. Los americanos, al margen de las citas a la autodefensa que se habían supuestamente obligado a tomar en sus manos ante la ausencia de protección de Gran Bretaña¹²²⁸, y que negaban así su legitimidad para exigir impuestos, expresaban que el Rey, en concurrencia con el Parlamento, había procedido a “abolir el libre sistema de Leyes inglesas en una provincia vecina, estableciendo en su lugar un Gobierno arbitrario e instrumento adecuado para *introducir* el mismo Gobierno

¹²²³ Jefferson, *op. cit.*: “no sólo los individuos, sino también las corporaciones de hombres, son asequibles al espíritu de la tiranía” (pg. 305) y “que un conciudadano sea arrancado de las entrañas de su sociedad y de tal forma ofrecido en sacrificio a la tiranía parlamentaria merecerían la eterna infamia que ahora recae sobre los autores de la ley” (pg. 312).

¹²²⁴ “Tercero. Ningún legislativo, sea supremo o subordinado, tiene derecho a convertirse en arbitrario” (“*Third. No legislative, supreme or subordinate, has a right to make itself arbitrary*”). Otis, *op. cit.*, pg. 26.

¹²²⁵ Por ejemplo, el panfleto de Wilson hasta ahora citado, con toda probabilidad era originalmente de 1770. Becker, *op. cit.*, pg. 106.

¹²²⁶ Si bien con la Declaración y Resoluciones del Primer Congreso Continental (octubre de 1774), como inmediato antecedente. Vid. *Avalon Project*, http://avalon.law.yale.edu/18th_century/resolves.asp.

¹²²⁷ “*Allegiance to the king and obedience to the parliament are founded on very different principles. The former is founded on protection: the latter, on representation.*” Wilson, *op. cit.*, punto 5.

¹²²⁸ Frente a indios u otras potencias coloniales. Vid. Hopkins, *op. cit.*, pg. 58.

absolutista en nuestras colonias”¹²²⁹. Aquí hay una alusión al *Act of Quebec* (1774)¹²³⁰. Algo contra lo cual ya se habían manifestado los colonos en 1774, de manera específica frente a

el acta aprobada en la misma sesión para establecer la religión católica romana en la provincia de Quebec, aboliendo el justo sistema de las leyes inglesas, e instaurando allí una tiranía, para gran peligro (dadas las diferencias profundas religiosas, legales y de sistema de gobierno) de las vecinas colonias británicas, con ayuda de cuya sangre¹²³¹ y bienes más preciados fue arrebatado aquel país a Francia.¹²³²

A esta política se le añadía la llevada a cabo con los indios. La Corona no parecía dispuesta a facilitar la expansión de los colonos y había impedido o puesto numerosos obstáculos a la ocupación de más tierras. Una *Proclamation* real de 1763, así, “reservaba a los indios todas las tierras situadas entre los Apalaches, la Florida, el Missisipi y Quebec”¹²³³, trazando la correspondiente línea divisoria¹²³⁴. Visto el crecimiento demográfico antes citado y sus propias expectativas, esta medida fue acogida muy mal por los norteamericanos, que también aludieron a ella en documentos como la Declaración de Independencia (“se ha negado a aprobar leyes que autorizaban el establecimiento de personas en grandes regiones”), o *A Summary View of the Rights of British America*:

Su Majestad [...] no tiene el derecho de otorgar tierras. Por la naturaleza y fin de las instituciones civiles, todas las tierras circunscritas por los límites que cualquier parte en particular haya fijado para sí son asumidas por esa sociedad y quedan sometidas a su reparto; éste pueden hacerlo ellos mismos reunidos colectivamente, o por el legislativo en quien haya delegado la autoridad soberana; y si no fueran distribuidas de ninguna de estas dos maneras,

¹²²⁹ “For abolishing the free System of English Laws in a neighbouring Province, establishing therein an Arbitrary government, and enlarging its Boundaries so as to render it at once an example and fit instrument for introducing the same absolute rule into these Colonies. “Declaration of Independence”, en *op. cit.*, pg. 8. Subrayado propio.

¹²³⁰ Vid. *supra*, pg. 316. Suponía la aplicación en esa zona del Derecho francés, con lo cual no era posible utilizar el *common law* y su correspondiente juicio por jurado (vid. Ammermann, *op. cit.*, pg. 202).

¹²³¹ La alusión a la “sangre” era muy común como recurso literario. Vid. el análisis de Reid, 1986, pg. 66, y cfr. *supra*, pg. 6748, en cuanto a los *levellers*, y pp. 289 y 293, en cuanto a las colonias.

¹²³² “Also the act passed in the same session for establishing the Roman Catholic religion, in the province of Quebec, abolishing the equitable system of English laws, and erecting a tyranny there, to the great danger (from so total a dissimilarity of religion, law and government) of the neighboring British colonies, by the assistance of whose blood and treasure the said country was conquered from France” (Declaration de 1774).

¹²³³ Morison, Leuchtenburg y Commager, *op. cit.*, pg. 94.

¹²³⁴ Clavero, Bartolomé: *El orden de los poderes (historias constituyentes de la trinidad constitucional)*, Madrid, Trotta, 2007, pp. 94-101, y 109.

cada individuo de la sociedad podrá apropiarse de cuantas tierras encuentre vacantes, y la ocupación será su título.¹²³⁵

En resumidas cuentas, pues, diversos derechos que tradicionalmente poseían los ingleses habían sido vulnerados. Y tales violaciones eran atacadas con el “lenguaje de los derechos”¹²³⁶ que poseían los propios colonos a través de su cultura política y jurídica. Una tradición que guardaba relevantes concomitancias con el credo radical, tal y como puede observarse en su lista de agravios de 1776:

- 1) El de no “[a]cuartelar entre nosotros grandes concentraciones militares”¹²³⁷. Como se ha podido apreciar, el gobierno de Jorge III había desplazado tropas a diversos lugares, provocando disturbios en ciudades como Nueva York, e incluso originando la muerte de algunos colonos en los enfrentamientos de la masacre de Boston¹²³⁸. La presencia de sus soldados, como brazo armado del ejecutivo, hacía que se percibiera al “poder militar con independencia y por encima del poder civil”¹²³⁹, más aún con las sucesivas *Quartering Acts*, de 1765 y 1774¹²⁴⁰. De hecho, se había venido a protegerlos, “por medio de juicios ficticios, del castigo que merecían, por crímenes que hubieran cometido contra los habitantes de estos Estados”¹²⁴¹. Se rechazaba así en la Declaración, expresamente, tanto el acantonamiento de tropas, como la creación de fueros especiales para juzgarlas. En suma, reaparecía la amenaza de los “ejércitos permanentes”¹²⁴², pues el monarca “ha mantenido entre nosotros, en tiempos de paz, ejércitos armados, sin haber obtenido el consentimiento de nuestras legislaturas”¹²⁴³. Los ejércitos mercenarios a los que se

¹²³⁵ Jefferson, Thomas: *A Summary View of the Rights of British America* de 1774 (en *The Life and Selected Writings of Thomas Jefferson*, eds. Adrienne Koch y William Peden, New York, The Modern Library of Random House, 1944, hay trad. cast. de M. Sáenz de Heredia, por donde se cita, “Visión sucinta de los derechos de la América británica”, en *Autobiografía y otros escritos*, Madrid, Tecnos, 1987, pp. 317 y 318. En general, el lockeanismo del autor resulta evidente, pero aquí mucho más.

¹²³⁶ Concepto que da título a la obra de Primus, *op. cit.*

¹²³⁷ Esteban, *op. cit.*, pg. 421. “*For quartering large bodies of armed troops among us*”: “Declaration of Independence”, en *op. cit.*, pg. 7.

¹²³⁸ Vid. *supra*, pg. 314.

¹²³⁹ Esteban, *op. cit.*, pg. 421. “*He has affected to render the Military independent of and superior to the Civil Power*”: “Declaration of Independence”, en Georgetown University, *op. cit.*, pg. 7.

¹²⁴⁰ Pp. 309 y 315, *supra*.

¹²⁴¹ “*For protecting them, by a mock Trial from punishment for any Murders which they should commit on the Inhabitants of these States*”.

¹²⁴² Ya en la *Declaration* de 1774, *op. cit.*: “Resolución 9ª- Que va mantener un ejército permanente en estas colonias, en tiempo de paz y sin el correspondiente consentimiento del legislativo de la colonia en donde se ubiquen tales tropas, va contra la ley” (“*Resolved, N.C.D. 9. That the keeping a standing army in these colonies, in times of peace, without the consent of the legislature of that colony, in which such army is kept, is against law*”).

¹²⁴³ “*He has kept among us, in times of peace, Standing Armies without the Consent of our legislatures*. Ya en la *Declaration* de 1774: “*Also the act passed in the same session, for the better providing suitable quarters for officers and soldiers in his majesty's service, in North-America. Also, that the keeping a standing army in several of these colonies, in time of peace, without the consent of the legislature of that*

había opuesto el *New Model Army* y los *levellers* en sus *Agreements*¹²⁴⁴, así como los *real whigs*. Esto nos lleva a otro segundo punto, quizás el más importante de esta sección.

- 2) “Imponernos tributos sin nuestro consentimiento”¹²⁴⁵. En general, ya se ha visto a lo largo del apartado anterior, que la cuestión de los impuestos fue utilizada de continuo contra la metrópoli y sus pretensiones. Pero el conflicto iba mucho más allá, tocando la médula de la representación que luego podría pasarse a denominar democrática: *no tax without representation* era una divisa con carga política transformadora indudable, pese a su ropaje rudimentario, aquel *quod omnes tangit ab omnibus approbetur*¹²⁴⁶. Y además, servía para ligar otras libertades con el derecho de sufragio. Pero es que, asimismo, el ataque de la Gran Bretaña contra los colonos había introducido, en este campo, líneas de avance aún más agresivas, que pueden advertirse en otro pasaje anterior de la propia Declaración: “el Rey ha negado su consentimiento a las Leyes más saludables y necesarias al bien público. Ha prohibido a sus gobernadores que aprobaran Leyes de importancia inmediata y apremiante, con el objeto de que no entraran en vigor hasta que no obtuvieran el consentimiento real y, una vez en suspenso, se ha desentendido totalmente de ellas. Se ha negado a aprobar leyes que autorizaban el establecimiento de personas en grandes regiones, a no ser que estas personas renunciaran a su derecho de representación en la Legislatura”¹²⁴⁷. El monarca,

colony, in which such army is kept, is against law” Dickinson también se refiere al peligro de los ejércitos mercenarios (*op. cit.*, Cartas IX y XI), aludiendo a Maquiavelo.

¹²⁴⁴ Cfr. *supra*, pg. 86; e incluso la referencia a la elección de mandos militares en *supra*, pg. 121.

¹²⁴⁵ “*For imposing Taxes on us without our Consent*”. También en la *Declaration of 1774*, *op. cit.*, “excluyendo toda idea de imposición interna o externa, con afán recaudatorio, en América, sin su consentimiento” (“*excluding every idea of taxation internal or external, for raising a revenue on the subjects, in America, without their consent*”).

¹²⁴⁶ Cfr. *supra*, pp. 16 y 40. Tal y como, asimismo, había afirmado la *Declaration* de 1774, *op. cit.*: “[r]esolución 4ª-Que el fundamento de la libertad inglesa y de todo gobierno libre, es el derecho del pueblo a participar en su propio cuerpo legislativo; y como los colonos ingleses no se encuentran representados, y de sus circunstancias locales y otras se deriva que no pueden serlo en el parlamento británico, tienen atribuido un poder legislador de carácter exclusivo en sus diversos legislativos provinciales, únicos lugares donde puede ser preservado su derecho a la representación, referido a todos los supuestos de tributos y política interna, y sometido sólo al veto de su soberano, tal y como ha sido hasta ahora lo acostumbrado” (“*resolved, 4. That the foundation of English liberty, and of all free government, is a right in the people to participate in their legislative council: and as the English colonists are not represented, and from their local and other circumstances, cannot properly be represented in the British parliament, they are entitled to a free and exclusive power of legislation in their several provincial legislatures, where their right of representation can alone be preserved, in all cases of taxation and internal polity, subject only to the negative of their sovereign, in such manner as has been heretofore used and accustomed*”).

¹²⁴⁷ “*He has refused his Assent to Laws, the most wholesome and necessary for the public good. He has forbidden his Governors to pass Laws of immediate and pressing importance, unless suspended in their operation till his Assent should be obtained; and when so suspended, he has utterly neglected to attend to them. He has refused to pass other Laws for the accommodation of large districts of people, unless those people would relinquish the right of Representation in the Legislature, a right inestimable to them and formidable to tyrants only*”. Traduzco “*legislative*” por “*legislatura*”, siguiendo el *Diccionario* de María Moliner (*op. cit.*, vol. II, pg. 164) y la opción más empleada por otros en el contexto que analizo.

vetaba mediante sus gobernadores las leyes coloniales¹²⁴⁸, o las subordinaba a ratificación suya¹²⁴⁹, y condicionaba la emigración a nuevas tierras al abandono de cualquier forma asamblearia de autogobierno¹²⁵⁰. E incluso, y esto era mucho más grave, a menudo “ha disuelto, repetidas veces, las Cámaras de Representantes, por oponerse, con absoluta firmeza, a sus arremetidas contra los derechos del pueblo”¹²⁵¹, negándose, además, y “durante largo tiempo después de estas disoluciones, a convocar elecciones; por lo cual los poderes legislativos, al ser indestructibles, han vuelto al pueblo en general para que los ejerza”¹²⁵². Monarca y parlamentarios, han procedido a “suspender nuestras propias Legislaturas, declarándose ellos mismos investidos del poder de legislar en nuestro lugar”¹²⁵³. Los niveladores habían combatido durante las Guerras Civiles inglesas la prerrogativa del primero a tales efectos y establecido en sus *Agreements* mecanismos para la convocatoria automática de elecciones parlamentarias, a fecha prevista¹²⁵⁴, con el fin de evitar la autoperpetuación de los representantes y la propia discrecionalidad real. Para ellos, el derecho a la representación era también básico¹²⁵⁵.

- 3) “Cortar nuestro comercio con todas las naciones”. En efecto, la *Prohibitory Act* eliminaba definitivamente la libertad de comercio de los colonos¹²⁵⁶. Estos ya habían atacado antes, como se ha visto en líneas más arriba, las restricciones indirectas aprobadas por el Parlamento y el Rey en forma de tributos que dificultaban aquél, e incluso el bloqueo local anterior que se había establecido contra Boston a causa del *Tea Party*¹²⁵⁷. Unos y otros impedimentos se observaban como protección monopolística que discriminaba injustamente a las colonias. Lo cual aproximaba su queja a la formulada precisamente más de un

¹²⁴⁸ Vid. *supra*, pg. 232. Y un ejemplo en Sarson, *op. cit.*, pg. 807: en marzo de 1767, la Cámara de Massachusetts votó prohibir el tráfico de esclavos, pero Hutchinson vetó la norma.

¹²⁴⁹ Vid. *supra*, pg. 235.

¹²⁵⁰ “¿En qué términos compatibles con la majestad, y al mismo tiempo con la verdad, podemos mencionar una reciente instrucción al gobernador de Su Majestad en la colonia de Virginia, prohibiéndole sancione toda ley de división de un condado salvo que el nuevo condado consienta en no tener representante en la asamblea?”. Jefferson, *op. cit.*, pg. 314.

¹²⁵¹ “*He has dissolved Representative Houses repeatedly, for opposing with manly firmness his invasions on the rights of the people*” (“Declaration of Independence”, en *op. cit.*, pg. 6). Vid. *supra*, pp. 308 y 309. O bien, no convocando los gobernadores asambleas cuando los representantes coloniales lo solicitaban (vid. pg. 312, *supra*).

¹²⁵² “*He has refused for a long time, after such dissolutions, to cause others to be elected, whereby the Legislative Powers, incapable of Annihilation, have returned to the People at large for their exercise*” (“Declaration of Independence”, en *op. cit.*, pg. 6). La alusión al Locke es diáfana (cfr. *supra*, pg. 268).

¹²⁵³ “*For suspending our own Legislatures, and declaring themselves invested with power to legislate for us in all cases whatsoever*”. Ejemplo claro era la *New York Restraining Act* (vid. *supra*, pg. 313)

¹²⁵⁴ Vid. *supra*, pp. 89, 120.

¹²⁵⁵ Vid. *supra*, pg. 88.

¹²⁵⁶ Vid. *supra*, pg. 317.

¹²⁵⁷ Vid. *supra*, pg. 314. Se puede destacar la repuesta dada, como representativa, por Jefferson, *op. cit.*, pp. 309 y 310. Tomada de Grocio (vid. Primus, *op. cit.*, pg. 83).

siglo más atrás por los *levellers*¹²⁵⁸, o por Trenchard y Gordon, no a tanta distancia¹²⁵⁹.

- 4) Otro agravio que los colonos entendían se les había infligido por el rey, en concurso con los miembros del Parlamento, era el de “privarnos, en muchos casos, del beneficio del juicio con jurado”¹²⁶⁰. Quizás nunca se haya insistido lo suficiente en la relevancia de este derecho para los norteamericanos, que además, se ligaba al de un juicio justo (*due process of law*). El derecho a ser juzgado por hombres de la propia vecindad era una garantía contra el abuso del gobierno. En primer lugar, del británico, pero también de cualquier otro instituido en las provincias. Paralelamente, servía para enjuiciar a todo funcionario o cargo público, incluidos los comisionados por la metrópoli. Nadie podía ser privado de su propiedad sin el correspondiente proceso de esta índole, al que se presuponía la tendencia de ser más certero, procurando la condena de quienes eran realmente culpables y absolviendo al inocente, pues en él residía una mayor capacidad de ponerse en el lugar del otro, no aplicando medidas que fueran contra uno mismo. La igualdad que contenía evitaba la arbitrariedad¹²⁶¹. Se percibe así una institución de antigua raigambre, muy ligada al republicanismo y la participación cívica ya desde el siglo XVII inglés, y reivindicada de continuo también por los *levellers*¹²⁶² y los *real whigs*. El detalle añadido aquí es que las diferencias sociales entre los jurados norteamericanos resultaban mucho más escasas que en el caso de la metrópoli¹²⁶³. Junto con esta reivindicación del jurado, asimismo, los colonos tenían bien presente la independencia judicial, vulnerada por Jorge III, quien había “hecho que los Jueces dependan de su única voluntad al nombrarles para el ejercicio de sus cargos, y fijar la cantidad y el pago de sus sueldos”¹²⁶⁴, infringiendo así el principio que guiaba el *Act of Settlement* de 1701¹²⁶⁵.

Relacionado también con el asunto de la administración de justicia, emerge el problema de los *fueros especiales*. Uno de ellos era el militar, ya citado arriba, pero había otros que se habían aprobado y que se percibían también como

¹²⁵⁸ Vid. pp. 71 y 72 (en general); y vid. tercer *Agreement*.

¹²⁵⁹ Vid. *supra*, pg. 278 y 279.

¹²⁶⁰ “*For depriving us in many cases, of the benefit of Trial by Jury*” (“Declaration of Independence”, en *op. cit.*, pg. 8). Vid. *supra*, pp. 316 y 336. También la *Declaration* de 1774, *op. cit.*: “Resolución 5ª: Que las colonias se hallan acogidas al *common law* de Inglaterra, y más específicamente al gran e inestimable privilegio de ser juzgado por iguales de la vecindad, de acuerdo con lo establecido en aquellas leyes” (“*Resolved, N.C.D. 5. That the respective colonies are entitled to the common law of England, and more especially to the great and inestimable privilege of being tried by their peers of the vicinage, according to the course of that law*”).

¹²⁶¹ Reid, 1986, pp. 48-53.

¹²⁶² Vid. *supra*, pg. 75.

¹²⁶³ Reid, 1986, pp. 50 y 51.

¹²⁶⁴ “*He has made Judges dependent on his Will alone for the tenure of their offices, and the amount and payment of their salaries*”.

¹²⁶⁵ Cfr. pg. 256, *supra*.

amenazadores para las libertades de los colonos. Ejemplo eran los Tribunales del Vicealmirantazgo, que se ocuparon desde los inicios coloniales de litigios entre tripulaciones y patronos, así como acerca de violaciones de las *Acts of Trade*¹²⁶⁶, pero que luego extenderían su ámbito, en general, a todos los tributos impuestos en las colonias, no siendo órganos judiciales que aplicaran *common law*¹²⁶⁷. Otro mecanismo que el Parlamento puso en marcha para reafirmar sus potestades fueron las *Dockyard Acts* (1769), que vinieron a resucitar un antiguo *statute* de Enrique VIII, a fin de celebrar juicios sin jurado. Con tal normativa, los residentes en las colonias sospechosos de cometer ciertos crímenes, podían ser trasladados y juzgados en Gran Bretaña. Pero es que, además, estas leyes, en concurrencia con la *Administration of Justice Act* (una de las *Intolerable Acts* de 1774), permitían también su aplicación a funcionarios y cargos de la metrópoli, de manera que pudieran ser sometidos a proceso allí y escapar a la posible severidad de los jurados coloniales. En consecuencia, tal “administración de justicia” se entendía como favorable a la arbitrariedad del poder imperial, y se relacionaba con la antigua lucha del siglo pasado por la aplicación del *common law* frente a los tribunales de prerrogativa como la *Star Chamber*¹²⁶⁸. Este era el sentido de la alusión en la *Declaration* de 1776 sobre “llevarnos al otro lado del mar para ser juzgados por supuestos delitos”¹²⁶⁹. El ataque a las jurisdicciones especiales ya fue expresado también por los *levellers*, al pretender la demolición definitiva de los tribunales de tal carácter¹²⁷⁰, así como el que no se utilizaran fueros específicos para determinadas personas, por motivo de su condición¹²⁷¹.

II.1.2.2.c) Fuentes de autoridad de los derechos¹²⁷²: comparación entre el proceso independentista norteamericano y las premisas niveladoras

¹²⁶⁶ Speck, W.A.: “The Structure of British Politics in the Mid-eighteenth Century”, en Greene y Pole (eds.), *op. cit.*, pg. 10.

¹²⁶⁷ Reid, pg. 52.

¹²⁶⁸ Reid, *op. cit.*, pp. 54-56. Otra cosa es que los jurados norteamericanos permitieran su ejecución fácilmente. *Ibid.*, 54. De hecho, su existencia en América era la que protegía principalmente la libertad de prensa. *Ibid.*, pp. 7 y 8.

¹²⁶⁹ “*For transporting us beyond Seas to be tried for pretended offences*”. También aparece una referencia similar en Jefferson, *op. cit.*, pg. 311: “[a] tenor de la ley para la represión de alborotos y tumultos en el pueblo de Boston, también aprobada en la última sesión del parlamento, un asesinato cometido allí sería juzgado, si al gobernador le place, ante el tribunal real, en la isla de Gran Bretaña, por un jurado de Middlesex [...] Y el desdichado [...], despojado de su privilegio de ser juzgado por pares de su vecindad, desplazado del único lugar donde pueden obtenerse todas las pruebas, sin dinero, sin consejo legal, sin amigos, sin pruebas exculpatorias, es sometido a juicio ante jueces dispuestos a condenar”. Vid. también, Hopkins, *op. cit.*, pg. 53.

¹²⁷⁰ Vid. *supra*, pg. 90.

¹²⁷¹ Vid. *supra*, pg. 69.

¹²⁷² Sigo en este concepto a Reid, *op. cit.*, de acuerdo con el propio título de este libro, si bien intento aclarar puntos que deja un tanto en la confusión. Se trata de un investigador especialista en la revolución

En resumidas cuentas, pues, los colonos aseveraban que Parlamento y Rey habían optado por “quitarnos nuestras Cartas, abolir nuestras mejores Leyes, y alterar fundamentalmente los poderes de nuestro Gobierno”¹²⁷³. La metrópoli intentaba destruir los fundamentos del orden político y normativo *habitual* en las colonias. Un orden al que aludían los panfletos y documentos de la época, y que estaba intrínsecamente unido con cierta cultura de los derechos sin la cual resultaba incomprensible. Al respecto, entre las fuentes de autoridad de tales derechos¹²⁷⁴ no cabe fijar una jerarquía estrictamente, si bien cabe distinguir con cierta nitidez:

a) la “**constitución británica**”. Esta noción no respondía a la actual. Suponía un “conjunto de leyes, instituciones y costumbres”¹²⁷⁵ de carácter normativo, y que servían, entre otras cosas, para *limitar* al poder político¹²⁷⁶. Podían ser muy diversas, como el Parlamento o las distintas magistraturas¹²⁷⁷, la costumbre de renovar los Comunes periódicamente¹²⁷⁸, o la ley del *habeas corpus*¹²⁷⁹. Era un conjunto de contornos imprecisos, que aludía al mismo tiempo al gobierno mixto, a *statutes* parlamentarios y usos diversos. De hecho, como fuente de autoridad para los derechos, se confundía o entrelazaba con las otras que se mencionarán en los apartados siguientes. Los norteamericanos acudían a ella a menudo para defender sus demandas, ya que no dejaban de considerarse súbditos ingleses, y se referían a tal mecanismo denominándolo “esta gloriosa constitución, la mejor que haya existido nunca”¹²⁸⁰. En realidad, y como se ha visto, implicaba el “imperio de la ley” en nuestro

norteamericana, pero que, al abusar de la vista panorámica a veces aclara poco, por lo cual me he servido también de otros escritores y documentos originales en el mismo ámbito, que se desglosarán en las notas al pie de este apartado.

¹²⁷³ “*For taking away our Charters, abolishing our most valuable Laws and altering fundamentally the Forms of our Governments*”. Todas las conductas analizadas parecían coincidir en tal objetivo. Y en el primer caso, el de las Cartas, atacando el mecanismo de autogobierno acostumbrado: así, la *Charter of Massachusetts* fue alterada por la *Massachusetts Government Act*, una de las *Intolerable Acts* (vid. Ammerman, *op. cit.*, pg. 201).

¹²⁷⁴ Así las denomina Reid, *op. cit.*, *passim*. Si bien quien escribe estas líneas intenta aclarar la maraña que a veces cubre su libro.

¹²⁷⁵ Vid. *supra*, pg. 323, nota 1194.

¹²⁷⁶ De hecho, no había diferencia entre la constitución como sistema de gobierno y sistema normativo. Vid. Wood, Gordon S.: *The Creation of the American Republic (1776-1787)*, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1998 (1ª ed., 1969), pg. 261: “[p]ara Blackstone y los ingleses generalmente no existía distinción entre la constitución o sistema de gobierno y el sistema legal. Todos eran lo mismo: cada norma parlamentaria era, en cierto sentido, parte de la constitución, y toda norma, bien fuera producto de la costumbre, bien emanada de la autoridad, era, por tanto, constitucional” (“[f]or Blackstone and for Englishmen generally there could be no distinction between the ‘constitution or frame of government’ and the ‘system of laws’. All were one: every act of Parliament was in a sense a part of the constitution, and all law, customary and statutory, was thus constitutional”).

¹²⁷⁷ *Ibid.*, pp. 174, 186 y 220.

¹²⁷⁸ *Ibid.*, pg. 174.

¹²⁷⁹ *Ibid.*, pg. 187.

¹²⁸⁰ “*This glorious constitution, the best that ever existed anymore*”. *Op. cit.*, pg. 43 (y también en la pg. 62 hay otra mención similar). Asimismo, vid. Otis, *op. cit.*, pp. 22, 27 y 33.

sentido actual¹²⁸¹, permanecer seguro frente a la posible arbitrariedad del gobierno y sus agentes. Pero los radicales del *New Model Army*, como demuestran los Debates de Putney¹²⁸² y los *levellers* más específicamente, con sus distintos *Agreements*, rechazaban la sacralización de cualquier supuesta constitución de origen inmemorial¹²⁸³. De hecho, con estos últimos se había propuesto, en realidad, una *paramount law* inalterable por los Parlamentos¹²⁸⁴. Es decir, un documento rígido y escrito, el “Acuerdo del Pueblo”, que se alejaba de la discutida versión que aparece por boca de Ireton en Putney y que aún manejaba Bolingbroke en el siglo XVIII¹²⁸⁵, y que resultó tan criticada por Paine, coincidiendo así en lo esencial de la respuesta niveladora:

La Constitución de Inglaterra es tan desorbitadamente compleja que la nación puede sufrir durante años sin ser capaz de descubrir en qué sitio reside la falta; unos dirán que en tal lugar, y otros que en aquel otro, y cada médico de la política aconsejará una medicina diferente.¹²⁸⁶

b) El **common law**. Existen varias acepciones para definirlo, pero aquí debe entenderse en su contexto, como ese Derecho distinto de los *statutes* parlamentarios y

¹²⁸¹ Vid. Laporta, Francisco J.: “Imperio de la Ley. Reflexiones sobre un punto de partida de Elías Díaz”, *Doxa* n. 15-16, Alicante, Universidad de Alicante, 1994. En este artículo, su autor afirma que “no es una ‘propiedad’ del Derecho, algo inherente a la mera existencia empírica del orden jurídico, algo que nace ya con la mera norma jurídica, sino que es un postulado metajurídico, una exigencia ético política o un complejo principio moral que está más allá del puro derecho positivo”. Guarda relación, pues, con “algunos rasgos muy particulares”. Estos requisitos serían: a) el ordenamiento al que nos referimos debe estar compuesto de un núcleo principal de normas, entendido como conjunto de reglas que suponga una regularidad en la conducta de los demás ciudadanos y del poder (no puede haber decisiones súbitas o impredecibles), b) posee una estructura interna en la cual la autoridad que emite las normas tiene atribuida esta competencia por una concreta que además circunscribe su ámbito, y en donde el ordenamiento es de carácter general, prospectivo y no retroactivo, estable, público y claro, y c), el mecanismo de adjudicación de normas implica que el ciudadano pueda acudir con facilidad a una agencia insitucional de resolución de conflictos bajo condiciones de imparcialidad y con exigencias de argumentación.

¹²⁸² Vid. Woodhouse, *op. cit.*, pp. 77-80 y 89. Y cfr. con *supra*, pg. 104.

¹²⁸³ Ibid., pg. 50; Ireton dice allí: “la constitución civil de este reino que es original y fundamental, y respecto a la cual estoy seguro de que no existe recuerdo anterior a ella” (“*the civil constitution of this kingdom, which is original and fundamental, and beyond which I am sure no memory of record does go*”). Y ello sin olvidar que a menudo se hablaba de “constituciones”, en plural (vid. Woodhouse, *op. cit.*, pp. 55, en donde Ireton se refiere al statute sobre los ingresos requeridos a fin de elegir representates, como “*the most fundamental constitution*”). La crítica *leveller* llegaba, recuérdese, a la Carta Magna (vid. *supra*, pp. 70, nota 249).

¹²⁸⁴ Vid. *supra*, pp. 85 y 87.

¹²⁸⁵ Vid. *supra*, pg. 323, nota 1194.

¹²⁸⁶ Paine, Thomas: *Common Sense* (1776); trad. cast. de Ramón Soriano y Enrique Bocardo, por donde se cita, “El Sentido Común”, en *El sentido común y otros escritos*, Madrid, Tecnos, 1990, pg. 8. En forma similar se pronuncia este autor en otra obra más tardía publicada en 1791: “[e]l uso constante de la palabra Constitución en el Parlamento inglés revela que no existe tal cosa, y que el todo no es más que una forma de gobierno sin constitución, y que se constituye a sí mismo con los poderes que le placen. Si hubiera una constitución, desde luego que cabría remitirse a ella, y el debate sobre cualquier aspecto constitucional terminaría con el recurso a la constitución. Un miembro dice que esto es constitucional, y otro dice que lo constitucional es lo otro, mientras que el mero hecho de que el debate continúe demuestra que la constitución no existe” (Paine, Thomas: *Rights of Man* (1791-92); trad. cast. de Fernando Santos Fontenla, por donde se cita, *Los Derechos del Hombre* Madrid, Alianza, 1984), pp. 132 y 133.

que venía configurado por tribunales dedicados a aplicarlo de manera especial¹²⁸⁷. Se trataba, en este sentido, de una regulación contenida en sentencias judiciales y basada en la tradición, la costumbre y el precedente¹²⁸⁸. Tenía gran importancia por haber trazado procedimientos diversos que permitían formular demandas con mecanismos que hoy denominaríamos garantistas¹²⁸⁹, como por ejemplo, la institución del jurado y otros que permitían aflorar el principio de contradicción frente al inquisitivo¹²⁹⁰. Es decir, venía ligado a auténticos *derechos procesales*. Otis llega a decir que las libertades pertenecientes a los colonos no derivan sólo del Parlamento británico, sino también del *common law*¹²⁹¹, defendido también por Dulany¹²⁹². La mención de este Derecho por los *levellers* fue continua en sus escritos¹²⁹³. Aunque lo criticaron¹²⁹⁴ por introducir vericuetos legales difíciles para la *sort middle of people* que representaban, sí consideraban que era valioso para conseguir el respeto por ciertas libertades, y sobre todo, para hacerlo valer frente a los tribunales de prerrogativa¹²⁹⁵.

c) la **costumbre inmemorial**. Precisamente, y en relación con un ejercicio *acostumbrado* de ciertas inmunidades, libertades y privilegios, los colonos consideraban que tenían *las mismas* que los demás súbditos británicos que vivían en las Islas y de las que disfrutaban *tradicionalmente*¹²⁹⁶, reclamando así una *igualdad* al respecto. Tal era su *expectativa* cuando habían emigrado a las costas americanas, confirmada a su vez por las Cartas correspondientes:

¹²⁸⁷ Entendido como el Derecho no escrito: “las leyes de Inglaterra son de dos clases: la no escrita del *common law* y la escrita, o estatuto” (“*the laws of England are of two kinds : the unwritten or common law, and the written or statute law*”). Blackstone, *op. cit.*, pg. xxxviii. Para otros sentidos de la expresión, en diferentes contextos, vid. Ruiz Miguel, *op. cit.*, pp. 107 y 108.

¹²⁸⁸ Vid. Brierly, J.L.: *English Law*, Oxford University Press, 1943; trad. cast. (s.n.), por donde se cita, *El Derecho Inglés*, Oxford, Oxford University Press, 1943, pp. 5 y 6.

¹²⁸⁹ Vid. Otis, *op. cit.*, pg. 23.

¹²⁹⁰ La relación del jurado con la oralidad y publicidad del proceso, así como con la libre valoración de la prueba, llega hasta la España de finales del siglo XIX, durante los debates parlamentarios sobre las leyes procesales de carácter penal. Vid. Alejandro, Juan Antonio: *La Justicia Popular en España (Análisis de una experiencia histórica: los Tribunales de Jurados)*, Madrid, Universidad Complutense, 1981, pg. 49. Y tal extremo implicaba apartarse del proceso inquisitivo típico del Antiguo Régimen, con prueba tasada y procedimiento escrito y secreto.

¹²⁹¹ *Op. cit.*, pg. 22. Vid. también las alusiones en pp. 23 y 24. Dulany apoya la idea de que es fuente de autoridad para los derechos: *op. cit.*, pg. 104. Vid., asimismo, al respecto, Reid, pg. 20, y Matteucci, *op. cit.*, pg. 182.

¹²⁹² *Op. cit.*, pg. 107.

¹²⁹³ Vid. *supra*, pg. 64.

¹²⁹⁴ Vid. *supra*, pg. 83.

¹²⁹⁵ Vid. *supra*, pg. 69.

¹²⁹⁶ Aquí se incorporaba la costumbre como *evidencia* de un consentimiento o aquiescencia generalizados; la “larga e ininterrumpida posesión” de los derechos mencionada en las Resoluciones de la Asamblea de Connecticut de junio de 1774 (vid. *ibid.*, pp. 72 y 73). A la manera en que ocurre con el Derecho Internacional, en el que la costumbre tiene un papel destacabilísimo, siendo en realidad el origen de dicho ordenamiento. “El artículo 38 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia alude a la costumbre ‘como prueba’ de una práctica internacional generalmente aceptada como obligatoria” (González Campos, Julio D., Sáenz de Santa María, M^a Paz, y Sánchez Rodríguez, Luis I.: *Curso de Derecho Internacional Público*, vol. I, 4^a ed. (1^a, de 1983), Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1990, pg. 106). Allen, *op. cit.*, pg. 101, dice: “El punto de partida de toda costumbre es el convenio más que el conflicto, así como el punto de partida de toda sociedad es la cooperación más que la digresión”.

Resolución 2ª- Que nuestros antepasados, quienes primero llegaron a estas colonias, cuando emigraron desde la madre patria tenían atribuidos todos los derechos, libertades e inmunidades propias de los súbditos libres nacidos en los dominios de Inglaterra¹²⁹⁷.

Resolución 3ª- Que con tal emigración no abandonaban, renunciaban o perdían derecho alguno de ellos, sino que tanto ellos como sus descendientes se hallan ahora facultados para su ejercicio y disfrute.¹²⁹⁸

Los colonos se habían llevado consigo, como si de propiedades se tratara, sus derechos como ingleses, los cuales, por tanto, pasaban a heredarse (*"their best inheritance"*¹²⁹⁹). Algo que guardaba perfecta coherencia con su percepción de la propiedad, que, como se ha visto, no era sólo el que ahora entendemos estrictamente como tal, sino que también abarcaba otros unidos a él de manera intrínseca: libertad de conciencia, de prensa, para elegir representantes, etc¹³⁰⁰. "América fue conquistada, y su colonización realizada y firmememente establecida a expensas de [...] *quienes derramaron su sangre* para adquirir tierras donde asentarse, ellos quienes derrocharon sus fortunas para hacer efectivo dicho asentamiento"¹³⁰¹, decía Jefferson. Un argumento muy similar al de William Sexby en Putney, más de cien años atrás¹³⁰². Sólo que aquel supuesto se extraía de la lucha de los hombres del *New Model Army* contra el Rey. Quienes han *luchado* por su libertad *merecen* disfrutarla.

d) **Las Cartas** provinciales eran otra prueba de que los habitantes del Nuevo Mundo eran titulares de aquellos derechos y privilegios¹³⁰³. Es más, entraban en la tradición jurídico-política típicamente inglesa de los pactos entre el pueblo y el monarca, que arrancaba de la Carta Magna medieval. Una herencia reforzada con el *covenant*

¹²⁹⁷ Los colonos se percibía que se habían llevado consigo, como si de una propiedad fuera, sus tradicionales derechos como ingleses. Vid. Reid, *op. cit.*, pg. 120.

¹²⁹⁸ "Resolved, N.C.D. 2. That our ancestors, who first settled these colonies, were at the time of their emigration from the mother country, entitled to all the rights, liberties, and immunities of free and natural-born subjects, within the realm of England. Resolved, N.C.D. 3. That by such emigration they by no means forfeited, surrendered, or lost any of those rights, but that they were, and their descendants now are, entitled to the exercise and enjoyment of all such of them".

¹²⁹⁹ "Su mejor herencia", Otis, *op. cit.*, pg. 27, quien luego hace mención parecida en la pg. 113. También, cfr. Wilson, *op. cit.*: "¿Pueden ser culpados los americanos, que descienden de antepasados ingleses y heredan todos sus derechos, ser culpados de pedir el disfrute aún de los mismos?" (*"Can the Americans, who are descended from British ancestors, and inherit all their rights [...] for claiming still to enjoy those rights?"*).

¹³⁰⁰ Cfr. *supra*, pg. 281, sobre Trenchard y Gordon. El *Chief Justice* (Presidente de Tribunal de más alto rango) John Holt estableció la regla de que el derecho de un elector era una *propiedad* de la que no podía ser desposeído sin juicio según *common law* (vid. Reid, 1986, pg. 109).

¹³⁰¹ Jefferson, *op. cit.*, pg. 302 (subrayado propio). Vid., asimismo, pag. siguiente: "gozar imperturbables de los derechos adquiridos con gran riesgo de sus vidas y a costa de sus fortunas". Vid. también alusión a ese esfuerzo en *supra*, pg. 329, nota 1221, por Wilson, *op. cit.*

¹³⁰² Vid. *supra*, pg. 103.

¹³⁰³ Lutz, 1988, pg. 40

religioso, también construido sobre el consentimiento¹³⁰⁴. Y sin embargo, eran de carácter netamente norteamericano y posibilitaban que las asambleas estuvieran legitimadas a su vez para elaborar códigos y leyes diversas:

Resolución 7ª- Que las presentes colonias de Su Majestad tienen atribuidas asimismo todas las inmunidades y privilegios admitidos y confirmados por cartas reales, o asegurados por sus diversos códigos de leyes provinciales.¹³⁰⁵

De manera similar se pronunciaba el joven Alexander Hamilton¹³⁰⁶:

nuestras cartas, las condiciones expresas en que que nuestros progenitores renunciaron a sus países de origen, y vinieron a asentarse aquí, impiden cualquier exigencia de imponernos normas y tributos sin nuestro consentimiento.¹³⁰⁷

Las menciones de la autoridad que suponían las Cartas, cuyo contenido se ha analizado *supra*¹³⁰⁸, fueron numerosas en la época, y utilizadas contra la versión que precisamente los defensores del imperio esgrimían amparándose en ellas¹³⁰⁹. Si éstos venían a sostener que las colonias debían someterse al Parlamento, dado el contenido de esas mismas Cartas, los colonos, por el contrario, afirmaban que su ligamen político con Inglaterra residía en la prerrogativa real, no en las Cámaras¹³¹⁰. Y más concretamente, a veces, subrayaban que provenía de un pacto con la Corona:

¹³⁰⁴ John Winthrop, unos de los fundadores de Massachusetts en el siglo XVII, había además entendido que la emigración era ya un acto de consentimiento con Dios, con otros o con el gobierno (Morgan, *op. cit.*, pp. 126 y 127). Los colonos recogieron este argumento a veces también (Vid. Reid, 1986, pg. 19).

¹³⁰⁵ "Resolved, N.C.D. 7. That these, his Majesty's colonies, are likewise entitled to all the immunities and privileges granted and confirmed to them by royal charters, or secured by their several codes of provincial laws". *Declaration de 1774, op. cit.*

¹³⁰⁶ Hamilton, Alexander: "A Full Vindication of the Measures of Congress" (1774), en *The Revolutionary Writings of Alexander Hamilton* (ed. e Introducción de Richard B. Vernier, con Prólogo de Joyce O. Appleby, Indianapolis, Liberty Fund, 2008, <http://oll.libertyfund.org/title/2121/164942>). Alexander Hamilton (1757-1804) fue un hombre indiscutiblemente importante para la Revolución norteamericana. Jurista, brillante escritor de panfletos como el mencionado, hábil administrador de los asuntos públicos y defensor de un ambicioso programa de desarrollo económico a través de su propuesta de un Banco Nacional, algunos de su textos más famosos fueron los escritos junto con James Madison y John Jay y publicados bajo la común denominación de *The Federalist*, con el fin de apoyar la Constitución de 1787 (vid. "Biographies", en Greene y Pole, eds., *op. cit.*, pp. 729 y 730). Fue acusado de elitista y representante de un sector social conservador, sobre todo, a través del retrato que se quiso hacer de él en su pugna contra Jefferson, pero lo cierto es que mantuvo una visión enérgica que apuntaló a los Estados Unidos como capaz de organizarse nacionalmente y sanear sus finanzas.

¹³⁰⁷ "Our charters, the express conditions on which our progenitors relinquished their native countries, and came to settle in this, preclude every claim of ruling and taxing us without our assent". Nótese que Hamilton habla de "países" en plural, con el fin de abarcar toda la inmigración, incluyendo la no estrictamente inglesa. Con ello venía a sostener una versión complementaria de la anterior línea argumentativa: si de partida no se era titular de aquellos de aquellos derechos y libertades, se habrían adquirido con las Cartas, al llegar al Nuevo Mundo.

¹³⁰⁸ Vid. *supra*, pp. 191-97.

¹³⁰⁹ Cfr. lo expuesto por el lealista Jenyns, *supra*, pg. 325.

¹³¹⁰ Vid. *supra*, pg. 328 y 329.

Entraron en un pacto con la Corona, sobre la base de los serían garantizados sus privilegios como súbditos ingleses, así como transmitidos a sus sucesores. Y a tal fin, fueron precisas Declaraciones y Disposiciones sobre los principios y de acuerdo con el espíritu de la Constitución inglesa; en consonancia, se elaboraron cartas conferidas por la Corona y aceptadas por los colonos.¹³¹¹

Nótese también, que tal y como los norteamericanos se amparaban en las Cartas coloniales para probar la titularidad de los derechos y libertades ingleses, con anterioridad los niveladores y otros autores de la *Commonwealth* también habían esgrimido la Carta Magna como elemento probatorio de idéntico disfrute.

e) la **ley natural** era la última y más expansiva fuente de autoridad. Ya se ha podido percibir el contractualismo que extraía de ella Locke, y que emanaba de abundantes autores muy leídos por los norteamericanos: Grocio¹³¹², Pufendorff¹³¹³, Burlamaqui¹³¹⁴, Vattel¹³¹⁵ y, aunque en menor medida, Rousseau¹³¹⁶. Su importancia se había apuntalado, además, con hechos históricos concretos y relevantes acaecidos en Inglaterra, como la revolución de 1642, la *Commonwealth* y después la Gloriosa de 1688. Ligados a esta noción¹³¹⁷ se hallaban unos derechos también naturales¹³¹⁸:

¹³¹¹ Dulany, *op. cit.*, pg. 106: “they entered into a compact with the crown, the basis of which was, that their privileges as english subjects, should be effectually secured to themselves, and transmitted to their posterity. And as for this purpose, precise declarations and provisions formed upon the principles, and according to the spirit of the english constitution were necessary ; CHARTERS were accordingly framed and conferred by the crown, and accepted by the settlers,” (el subrayado aquí es del original). Esta teoría se mostraba opuesta a una legitimación por “conquista” (cfr. Wilson, *op. cit.*, y Reid, *op. cit.*, pg. 136).

¹³¹² Vid. *supra*, pg. 53, nota 172.

¹³¹³ Samuel Pufendorff (1632-1694) fue historiador y filósofo, nacido en Sajonia que impartió clases en diferentes ciudades alemanas y en Suecia. Influído por Grocio y Hobbes, intentó cohesionarlos con su fe luterana. Sus obras principales fueron *De iure naturae et gentium* (1672) y *De officio hominis et civis* (1673). Vid. Rodríguez Paniagua, *op. cit.*, pp. 143-150, para un estudio bastante completo, así como, para una selección de textos, vid. González Soler, M^a D., Lima Torrado, J., Marín Castán, M^a L., Prada García, A., Roldán Álvarez, C., y Rovetta Klyver, F.: *Cuestiones y Textos de Historia de la Filosofía del Derecho, Moral y Política. Del Renacimiento a Kant*, Madrid, Dykinson, 1997, pp. 341-350.

¹³¹⁴ Jean Jacques Burlamaqui (1694-1748) fue un profesor de Derecho, de origen suizo y que viajó por Francia, Holanda e Inglaterra y famoso entre los norteamericanos principalmente por sus *Principios de Derecho Natural y Político*, que recogían un contractualismo ilustrado. Vid., Korkman, Peter: “Introducción”, en Burlamaqui, Jean-Jacques: *The Principles of Natural and Politic Law* (Korkman, ed.), trad. de Thomas Nugent (1763) de sus *Principes du droit politique* (1751) y *Principes du droit naturel* (1747), Indianapolis, Liberty Fund, 2006, <<http://oll.libertyfund.org/title/1717/75413>> .

¹³¹⁵ Emérico de Vattel (1714-1767), también suizo, y teórico del Derecho Internacional en relación con el Derecho natural. Para un estudio con cierto detalle, vid. Ruiz Miguel, *op. cit.*, pp. 259-262.

¹³¹⁶ Jean Jacques Rousseau (1712-1778) no necesita excesiva presentación. Curiosamente, y como los anteriores, el autor del *Contrato Social* (1762) también era suizo. Para un estudio detenido, vid. Rodríguez Paniagua, *op. cit.*, pp. 235-244.

¹³¹⁷ Bland, Richard: “An Inquiry into the Rights of the British Colonies” (1766), en Jensen (ed.), *op. cit.*, pg. 112: “Men in a State of Nature are absolutely free and independent of one another as to sovereign Jurisdiction, but when they enter into a Society, and by their own Consent become Members of it, they must submit to the Laws of the Society according to which they agree be governed”.

¹³¹⁸ Otis, *op. cit.*, pg. 24 (cit. *supra*). Bland relaciona la “ley de la naturaleza” con el derecho a la representación (*op. cit.*, pg. 118), y el propio Otis (*op. cit.*, pg. 28), con la propiedad: “[s]ostengo que los

*Cuando no podemos recibir luz alguna de las leyes del reino, o de la Historia antigua, para conducirnos en nuestra indagación debemos acudir al recurso de la ley natural, y a esos derechos que emanan de ella.*¹³¹⁹

Esas libertades “no se disfrutaban como gracia o favor otorgados, sino que se poseen como derechos inherentes e impostergables”¹³²⁰. Así también lo venía a afirmar la Declaración de 1774, cuando dice sobre los colonos:

Resolución 1ª- Que tienen los derechos a la vida libertad y propiedad: y que nunca han cedido a poder extranjero alguno y en cualesquiera formas, facultad alguna a *disponer* de aquéllos sin su propio consentimiento.¹³²¹

Todas estas fuentes de autoridad venían a reforzarse entre sí. De hecho, aparecían juntas en numerosas ocasiones, como en este pasaje al comienzo de la *Declaration* de 1774:

que los habitantes de las colonias inglesas en Norteamérica, por las leyes inmutables de la naturaleza, los principios de la constitución inglesa y los las diversas cartas y pactos, tienen los siguientes derechos.¹³²²

Pero aún falta otra más revolucionaria y con un potencial transformador indudable.

hombres, en estado de naturaleza, no pueden tomar mi propiedad sin mi consentimiento; y si lo hacen, me privan de la libertad y convierten en un esclavo” (*“I say men, for in a state of nature, no man can take my property from me, without my consent: If he does, he deprives me of my liberty, and makes me a slave”*).

¹³¹⁹ Bland, *op. cit.*, pg. 116 (el subrayado es propio): “*As then we can receive no Light from the Laws of the Kingdom, or from ancient History, to direct us in our Inquiry, we must have Recourse to the Law of Nature, and those Rights of Mankind which flow from it*”. Richard Bland (1710-1776) fue prominente político virginiano, miembro de la *House of Burgesses* de esta colonia y del Congreso Continental de 1774-75. Vid. “Biographies”, en Greene y Pole (eds.), pp. 705 y 706.

¹³²⁰ “*Nor enjoy them as a grace and favor bestowed; but possess them as an inherent infeasible right*”. Hopkins, *op. cit.*, pg. 47

¹³²¹ “*Resolved, N.C.D. 1. That they are entitled to life, liberty and property: and they have never ceded to any foreign power whatever, a right to dispose of either without their consent*”. *Op. cit.* Subrayado propio.

¹³²² “*That the inhabitants of the English colonies in North-America, by the immutable laws of nature, the principles of the English constitution, and the several charters or compacts, have the following RIGHTS*” (vid. *op. cit.*, advirtiéndose que se alude con “compact” a los “covenants” de carácter autónomo inicialmente). En el mismo sentido, Otis, vid. *supra*, pg. 339; así como Dulany, *op. cit.*, pg. 104: “[d]erivan este derecho del *common law*, que sus cartas han declarado y confirmado” (*[t]hey derive this right from the common law, which their charters have declared and confirmed*). Las deliberaciones de la asamblea de Virginia de 30 de mayo de 1765 exponían que el acto de imponer tributos por el Parlamento británico era “ilegal, inconstitucional e injusto” (cit. por Fioravanti, 1999, pg. 104).

f) Y es que, asimismo, **el pueblo** podía ser fuente de derechos, tal y como lo entendieron los niveladores. Ellos habían sostenido que, si bien los Comunes son superiores a cualquier otro poder (lo cual aparta a un lado al Rey y a los Lores, en consonancia con el radicalismo nivelador), sin embargo, aquella Cámara recibe su autoridad del pueblo, que es así el que goza de la supremacía¹³²³. Sus importantes derivaciones para la teoría política sobre la democracia resultan indiscutibles, sobre todo tras ser recogidas, en el seno de una misma tradición, por los colonos norteamericanos. Estos sostendrían, en efecto, casi con idénticas palabras que los *levellers*, que

el gobierno civil pertenece a Dios, pero siendo los administradores del mismo *el pueblo* en su conjunto, con lo cual podrá ser *delegado* por este último a quien lo desee, resultando esa transmisión de *carácter fiduciario*¹³²⁴ y encaminada al bien común.¹³²⁵

Pero ahora los norteamericanos iban más allá del mero concepto de representación *como barrera*, típico del siglo XVII. Su fórmula situaba al pueblo *como sujeto* último de un poder que ya legislaba, más que declaraba la ley, y que gobernaba en un ámbito extenso, bajo deliberación¹³²⁶. Esta superioridad política ya comenzaba a gestarse con una jerarquía normativa similar a la nuestra, bajo la égida de la soberanía popular. Cuando Otis escribe las líneas anteriores en 1764, haciéndose eco del *whiggism* extendido en las trece colonias y que tan adecuadamente había sido formulado por Locke, éstas aún no han tomado la decisión de escindirse de Gran Bretaña. Pero con la Declaración de Independencia, la secesión impulsa de manera drástica al nuevo sujeto de la legitimidad política, el pueblo:

nosotros, los representantes de los Estados unidos de América, reunidos en Congreso general, [...] en nombre y por la autoridad del buen pueblo de estas colonias, solmnemente publicamos y declaramos, que estas colonias son, y tienen el derecho a ser, Estados libres e independientes.

¹³²³ Vid. *supra*, I.2.3.

¹³²⁴ De confianza, *trust*. Subrayados propios.

¹³²⁵ “*The sum of my argument is, That civil government is of God: That the administrators of it were originally the whole people: That they might have devolved it on whom they pleased: That this devolution is fiduciary, for the good of the whole*”. Otis, *op. cit.*, pg. 39. Para otro supuesto llamativo, vid. Reid, *op. cit.*, pg. 70. Los *levellers* vienen a expresarse de manera parecida, tal y como indico en *supra*, pg. 80.

¹³²⁶ Impulsada, en el caso norteamericano, por una prensa sólida, con amplia libertad de expresión (uno de los derechos que más defendían los colonos era el *freedom of speech*). Vid. Morgan, *op. cit.*, pg. 137.

Y con él, un *derecho a resistir* para defender sus libertades, incluido el derecho de representación¹³²⁷:

para defender estos derechos los hombres establecen sus Gobiernos, derivando sus justos poderes del consentimiento de los gobernados; que cuando cualquier forma de Gobierno tienda a destruir estos fines, el *pueblo* tiene *derecho de alterarla o abolirla*.¹³²⁸

Este derecho de resistencia es la primera aproximación clara que los colonos norteamericanos tienen a un “momento *leveller*”¹³²⁹ muy similar, cuando los niveladores consideran que, primero el Parlamento presbiteriano, y después el *Rump*, se comportan arbitrariamente, como si de unos déspotas se tratase. El derecho de resistencia es provisión que asegura la supremacía popular. Los niveladores saben que resulta un resorte inestable, propenso al desorden, posible origen de una violencia continuada o una revolución “permanente”. Ofrecen así la solución de los Acuerdos del *Pueblo*, de ese sujeto al que ellos reconocen la supremacía política. Los hombres de la Revolución de 1776, encontrándose con idéntico problema, el de la ilegitimidad parlamentaria, tardarán un poco en adoptar una solución constitucional a la manera *leveller*, un documento escrito en el que figuren unas reglas mínimas para el juego político y que valga para toda la comunidad. En el caso de las colonias, de una colectividad que comenzaba a configurarse como *nación*. Pero, como se ha visto, sí hacen aflorar al “pueblo” como principal sujeto político, en su Declaración de Independencia.

II.1.2.2.d) Similitud de aspiraciones, diferencias de contexto

Rotundo, Alexander Hamilton, afirmará que el problema principal entre la metrópoli y los colonos en su disputa es el de

Si preservaremos esa seguridad para nuestras vidas y propiedades que proporcionan la ley de la naturaleza, el ingenio de la constitución británica y nuestras cartas, o si los abandonaremos en

¹³²⁷ Que no debe olvidarse fue arrumbado al impedir los gobernadores reales la convocatoria de las asambleas coloniales. Vid. *supra*, pg. 312.

¹³²⁸ *Declaration of Independence*, en Finkelman y Urofsky (eds.), *op. cit.*, pg. 55.

¹³²⁹ Tomo esta expresión de Pocock, en relación con su “momento maquiavélico”, referido al pensador florentino y su influencia en la revolución norteamericana (vid. “Bibliografía”).

las manos de la Cámara de los Comunes británica, que en realidad no está más legitimada para disponer de aquéllas que el Gran Mogol.¹³³⁰

De todo ello se deduce que los habitantes de América intentaban escapar de la autoridad parlamentaria al principio sin cortar definitivamente los lazos con Gran Bretaña, y para ello, incluso cuando llegaron a diluir aquellas distinciones entre un tipo de impuestos y otros, las colonias entendieron que se hallaban vinculadas a la metrópoli mediante una común subordinación a la Corona. El problema, sin embargo, emerge cuando esta última se muestra pronto claramente inclinada a favor del Parlamento en su litigio contra las asambleas coloniales, y opta por reforzar a su gobernadores, nombrar y destituir jueces a su albedrío, establecer jurisdicciones especiales y acuartelar tropas, especialmente en localidades tan díscolas como Boston. Los norteamericanos arremeten entonces contra la Corona también y ven como ineludible la definitiva secesión de Gran Bretaña. Habían sostenido que esta nación no detentaba un poder imperial respecto a ellos¹³³¹ y estaban obligados a ser coherentes con este argumento. El problema al que se encaraban, de nuevo, había sido el de la arbitrariedad de los gobernantes. Y el objetivo formulado por ellos, conseguir impedirla y *asegurar* unos derechos, es decir, evitar que se concedieran según la gracia o discrecionalidad del Rey o el Parlamento. Admitir tal posibilidad hubiera sido también aceptar que esas mismas libertades les fueran retiradas¹³³² a antojo del auténtico dominador, del “señor” que les gobernaba como si fueran “vasallos” o, simplemente, “esclavos”¹³³³. Este era el espíritu republicano que animaba

¹³³⁰ “*Whether we shall preserve that security to our lives and properties, which the law of nature, the genius of the British constitution, and our charters, afford us; or whether we shall resign them into the hands of the British House of Commons, which is no more privileged to dispose of them than the Great Mogul*”. Vid. Hamilton, *op. cit.* (1774). También, Adams, *op. cit.*, “Novanglus IV”: “[l]a verdad es que la autoridad del parlamento nunca fue reconocida de manera genralizada en América” (“*[t]he truth is, the authority of parliament was never generally acknowledged in America*”). O el “Novanglus III” (ibid.): “[l]a verdad es que el pueblo es el que ha gobernado siempre en América: toda la fuerza de los gobenadores reales y consejos, aun respaldada con flotas y ejércitos, nunca ha sido capaz de imponerse a aquél, que ha resistido a través de sus cámaras de representantes siempre, aprobando sus propio objetivos. Ningún gobernador ha permanecido en pie cuando se situaba frente a una asamblea representativa.” (“*[t]he truth is, that the people have ever governed in America; all the force of the royal governors and councils, even backed with fleets and armies, has never been able to get the advantage of them, who have stood by their houses of representatives in every instance, and have always carried their points. No governor ever stood his ground against a representative assembly*”).

¹³³¹ Adams llega a dar un argumento hartos convincente: puesto que la Gran Bretaña, como unión de Inglaterra y Escocia, no se había constituido sino tras la existencia previa de las colonias americanas, en concreto durante el reinado de Anne de Hannover (1707) no se podía pretender la imposición de un sistema de gobierno al que los habitantes del nuevo Mundo eran ajenos desde el principio. Vid. Adams, John, *op. cit.*, *Novanglus VII*.

¹³³² Reid, 1986, pg. 70.

¹³³³ “Estos que son sometidos a tributo sin su consentimiento, expresado de manera directa o por medio de representante, son esclavos” (“*[t]hose who are taxed without their own consent, expressed by themselves or their representatives, are slaves*”). Dickinson, John: “Letters from a Farmer in Pennsylvania”, en McDonald, Forrest (ed.): *Empire and Nation: Letters from a Farmer in Pennsylvania*

la revolución norteamericana, el de proteger la libertad, apoyada en el disfrute de unos derechos que se hallaban indisolublemente unidos entre sí a través del principal de ellos, el de *autogobierno*:

nuestro *pueblo* es indudablemente *soberano*; toda la posesión, inmueble o no, se halla en las manos de los *ciudadanos*; y no sólo sus representantes, sino también sus senadores y gobernadores, resultan elegidos anualmente; no hay títulos hereditarios, honores, empleos fijos o distinciones; los poderes legislativo, ejecutivo y judicial quedan separados cuidadosamente unos de otros; los poderes de *los unos, los pocos y los muchos*¹³³⁴ quedan perfectamente equilibrados en la legislatura; los procesos por jurado son conservados en toda su entidad, y no existe ejército permanente; el *habeas corpus* se encuentra en pleno vigor; la prensa que goza de mayor libertad que en ninguna parte del mundo. Donde se reúnen todas estas circunstancias, resulta innecesario añadir siquiera que *el único gobierno es el de las leyes*.¹³³⁵

Los parecidos con aquellos *levellers* del siglo XVII resultan obvios. Los colonos norteamericanos se situarían con los hechos de 1776, e incluso antes, a través de declaraciones de autogobierno como los *compacts*, cerca del programa de aquel grupo.

Los niveladores habían aspirado a un sistema político en el cual no existieran estamentos instituidos intrínsecos a él. Se habían visto a sí mismos como los representantes de la plebe que luchaba contra los patricios y que pretendía entrar en las instituciones reservadas a estos últimos o bien acabar con ellas. Los “muchos” eran quienes debían conformar el sujeto político más relevante en Inglaterra. Pero habrá que esperar a que se forje una nueva sociedad en el otro Continente para que sus aspiraciones se traduzcan en todo un esquema constitucional de índole nacional. Un modelo que, ahora sí, atribuiría a muchas más personas al derecho de sufragio¹³³⁶. Inglaterra, permaneciendo encastillada en su división entre Lores y Comunes y la persistencia de un monarca, restringida a la participación de pequeños sectores de la población en sus asuntos públicos y presa de una tradición representada por la *gentry* y que perseguía rehuir modificaciones drásticas, no iba a poder ser modelo para las

(John Dickinson)-*Letters from the Federal Farmer (Richard Henry Lee)*, Indianapolis, Liberty Fund 1999. Cfr. Reid, 1988, pg. 53.

¹³³⁴ Vid. *supra*, pg. 77, nota 281, sobre la *Política* de Aristóteles.

¹³³⁵ “Our people are undoubtedly sovereign; all the landed and other property is in the hands of the citizens; not only their representatives, but their senators and governors, are annually chosen; there are no hereditary titles, honors, offices, or distinctions; the legislative, executive, and judicial powers are carefully separated from each other; the powers of the one, the few, and the many are nicely balanced in the legislatures; trials by jury are preserved in all their glory, and there is no standing army; the habeas corpus is in full force; the press is the most free in the world. Where all these circumstances take place, it is unnecessary to add that the laws alone can govern”. Adams, John, *op. cit.*, Novanglus III.

¹³³⁶ Morgan, *op. cit.*, pg. 137.

aspiraciones democráticas de una nueva nación al otro lado del Atlántico. Lo que sí unirá a los colonos norteamericanos con la metrópoli será la preocupación por la protección de unos derechos y la consecuente división del poder, permaneciendo así ambos países como baluartes de una tradición que, al cabo de bastante tiempo, y sólo entonces, sería denominada como liberal. Las colonias se inclinaron por formas republicanas de autogobierno y la madre patria fue inventora de la monarquía parlamentaria, con su cohorte de aristócratas y financieros apegada a sus ritos sociales y a un fuerte inmovilismo. Los “muchos”, en América, eran en verdad numerosos. Más que en Inglaterra, donde los *real whigs* ya habían criticado la falta de representatividad de unos Comunes escudados tras la desproporción poblacional de los “burgos podridos”¹³³⁷. Este problema no existía en América, donde conseguir convertirse en *freeholder* era relativamente fácil, dada la abundancia de tierras¹³³⁸, y la automaticidad consiguiente de una participación en los asuntos públicos, bien por medio de delegados libremente elegidos, bien de manera directa. A la que coadyuvaba la inexistencia de una sola iglesia oficial excluyente, dada la multiplicidad de cultos allá, y la selección de sus ministros entre los feligreses¹³³⁹. Con todos los matices que se quiera, este contexto era muy distinto del británico¹³⁴⁰, y halagaba, a través de la movilidad social¹³⁴¹, y de manera mucho más ferviente, cualquier esfuerzo

¹³³⁷ *Rotten boroughs*. Vid. Matteucci, *op. cit.*, pg. 145. Se trataba de circunscripciones que seguían enviando representantes a Westminster, pese a estar despobladas, hasta la Ley de Reforma de 1832. La denominación fue inventada por William Pitt (1708-1778), líder político *whig* que intentó un acuerdo con los colonos (“Biographies”, en Greene y Pole, *op. cit.*, pp. 767 y 768). Cook, *op. cit.*, pg. 70. Si bien ya antes Trenchard y Gordon y otros *old whigs* habían criticado este mecanismo perverso (vid *supra*, pg. 292, nota 1090). Recuérdese, asimismo, y de mucho antes, la crítica que los *levellers* también efectuaron a la desproporción entre el número de votantes que podía remitir cada demarcación, y que implicaba *desigualdades* en la representación (vid. *supra*, pg. 105, y punto I del Primer *Agreement*, en Sharp, ed., *op. cit.*, pp. 93 y 94).

¹³³⁸ Que, en consecuencia, eran de precio bajo, “comparadas con las que había en Europa” (Perkins, Edwin J.: “Socio-economic Development of the Colonies”, en Greene y pole, *op. cit.*, pg. 56). Vid. Wood, Gordon S.: *The Radicalism of the American Revolution*, New York, Random House, 1991, pg. 114, donde se confirma este dato y se menciona que la mera posesión de un pedazo de tierra, se consideraba la antesala para pasar a ser propietario de manera inmediata.

¹³³⁹ Exceptuando la tímida mención al papismo en la Declaración de la Independencia (vid. *supra*, pg... 283), las alusiones a conflictos religiosos en los panfletos de la época fueron más bien escasas. La mejor explicación es la expuesta por Gaustad, Edwin S.: “Religion before the Revolution”, Greene y Pole (eds.), *op. cit.*, pp. 64-70. La iglesia anglicana, en vísperas de la independencia, sólo había logrado asentarse hegemonícamente en el sur de las colonias. En Nueva Inglaterra lo hicieron los congregacionalistas (vid. *supra*, pp. 171 y 172). A este mapa deben unírseles la católica Maryland (pese al golpe de mano que la convertiría en demarcación real en 1692). Y los cultos que arrastraban habitantes de origen holandeses, alemán, o sueco, es decir, seguidores de Roma o Lutero, por no considerar a los presbiterianos escoceses y los cuáqueros, dominantes en Pennsylvania, pero entendiéndose allí en abierta tolerancia con menonitas y otros disidentes. Y en Nueva Inglaterra había un foco de abierta libertad religiosa para todos, Rhode Island (vid. *supra*, id). En consecuencia, la proliferación de cultos y confesiones (agudizada por el *Great Awakening* iniciado en 1750, revival espiritual con predicadores que viajaban de una lado a otro con un credo calvinista exaltado y sensitivo), supuso la inexistencia de una iglesia dominante. De hecho, los patriotas que participan en la causa norteamericana lo harán desde muy diversas profesiones religiosas (incluida la católica).

¹³⁴⁰ Para observar las semejanzas y diferencias, vid. Wood, Gordon S.: *The Radicalism of the American Revolution*, New York, Random House, 1993, *passim*.

¹³⁴¹ Vid. Perkins, *op. cit.*, pp. 56 y 57.

democratizador. Una movilidad que había sido el caldo de cultivo en la Inglaterra de mediados del XVII para que emergieran los *levellers*.

Otra similitud de los niveladores con los norteamericanos se produciría, asimismo, cuando estos últimos proclamaran con su Declaración de 1776 un *derecho de resistencia* a fin de conformar un nuevo diseño político con legitimidad popular. O al no aceptar tampoco al monarca inglés, ni la autoridad del Parlamento en tanto en cuanto no respetara determinados derechos, incluido el de la propia representación política.

Pero fuera de esto, también había importantes diferencias entre unos y otros. Los habitantes del Nuevo Mundo iban a establecer un *novus ordo seclorum*, asumiendo *conscientemente* la teoría política de las revoluciones¹³⁴², algo que los *levellers* no llegaron a alcanzar, envueltos como estaban en la sociedad premoderna, aunque se tratara de una con elementos avanzados. Aquéllos, en este sentido, se apartaban de la tradición, pese a que aludieran a menudo a figuras de poder y jurídicas pertenecientes al pasado inglés. La sociedad y la política eran construcciones humanas, por mucho que existieran límites, que los colonos no negaban, provenientes de Dios o la Naturaleza, para la actuación de los poderes públicos y de unos hombres respecto a otros. La Declaración fue un comunicado *a la Humanidad, universalizable* en sus premisas, y en ese sentido debía entenderse, cosa que no había ocurrido antes con la Carta Magna, el *Habeas Corpus Act* o el *Bill of Rights*. Pero tampoco en los panfletos *levellers*. Y esto se debía a un contexto social mucho más favorable, como paso a examinar.

Una vez proclamada su escisión, a los norteamericanos pronto se les hizo evidente la necesidad de consolidar sus objetivos, replegándose a la concreción del entramado institucional, político y normativo que podía apuntalarlos. Al mismo tiempo, pues, una *construcción nacional* y un *sistema de derechos con base democrática* o, como se gustaba de decir entonces, *republicana*. Todo en el seno de una sociedad donde sus miembros comenzaban a estar interesados en las diversas dimensiones del comercio y la vida privada, es decir, en la *activación liberal*, aunque todavía se hallaran bajo el manto de viejos colectivos con lazos patriarcales. En cierto sentido, se trataba un conjunto de familias¹³⁴³, con sus respectivas agrupaciones de clientes. Existía una jerarquización social aún importante¹³⁴⁴, pero habiendo ya encontrado

¹³⁴² Arendt, Hannah: *On Revolution*, New York, Viking Press, 1963; trad. cast. de Pedro Bravo, por donde se cita, *Sobre la Revolución*, Alianza, 1990, *passim*. De ahí puede extraerse una diferencia que podría apoyar a quines negasen a los hechos acaecidos a mediados de siglo en Inglaterra un carácter revolucionario. Faltaba esa consciencia.

¹³⁴³ Vid. Wood, 1993, pg. 44.

¹³⁴⁴ *Ibid.*, pg. 23. En la que se desenvolvían las diferentes relaciones de dependencia. Téngase en cuenta que en la época existían todavía títulos, heredándose sólo algunos de ellos, pero siempre se tendían a

dificultades durante la época colonial para conseguir el mismo grado de implantación que en Inglaterra, ahora era todavía más débil. La convulsión ocasionada por la guerra no fue sólo bélica y política, sino que también afectó a este campo¹³⁴⁵. Con el conflicto se había puesto en evidencia una antigua estratificación, basada en la idea premoderna de que virtud, sabiduría, entendimiento y reflexión se equiparaban con un lugar más alto en la escala social y política de la comunidad. Un modelo en el que los mejores, en todos los sentidos del término, eran quienes se encontraban arriba¹³⁴⁶. De hecho, en él no había claras diferencias entre lo privado y lo público, entre Estado y sociedad, pues la reputación personal era importante siempre y en todo momento, también para desempeñar funciones públicas de rango. Algo que realizaban, y más bien como “carga”, hombres prominentes por su talento e independencia¹³⁴⁷, que a menudo eran obedecidos más por respeto y deferencia comunitarios que por disponer de una fuerza coactiva poderosa¹³⁴⁸. Todo este modelo, sin embargo, va a verse atacado por numerosos frentes. Uno de ellos, fue la propia puesta en cuestión del sistema político británico, que implicaba análogamente atacar su estructura social, al menos en lo que a su concepción de la herencia de cargos, títulos y propiedades se refería. La virtud no era hereditaria¹³⁴⁹, así que el mayorazgo puede que no fuera legítimo¹³⁵⁰. Otro detonante para quebrar el modelo resultó ser el de la propia “economía de guerra”. Ésta se prolongó por ocho años, durante los cuales el esfuerzo material vino a sufragarse con abundante papel moneda, creándose así todo un nuevo mercado. Con ello surgirían negocios y expectativas, dedicaciones profesionales y oficios, manufacturas, compraventa de terrenos, aumento del consumo. Las economías de carácter doméstico y aquellas basadas en el trueque, de gran relevancia en el pasado, iban quedando arrinconadas¹³⁵¹. Los “intereses” en la época pos-revolucionaria serían así diferentes de los anteriores, pues ahora eran más

especificar aunque no fueran propiamente nobiliarios en su sentido más robusto (*esquire, gentleman, yeoman...*). Los jóvenes estudiantes eran educados para ofrecer distintos saludos según cuál fuera la condición de la persona con la que se cruzaban, y sometidos a severa disciplina. Otra estratificación era la introducida por el mando que uno pudiera tener en la milicia, ya que se trasladaba a la vida civil como rango de honor (ibid., pp. 20 y 219). Los sirvientes eran transferidos de un amo a otro, casi como si se tratara de bienes muebles (ibid., pg. 53), y los créditos se concedían por existir algún tipo de relación personal, fundándose las correspondientes redes clientelares (ibid., pp. 67 y 71).

¹³⁴⁵ Wood, 1993, *passim*, así como el artículo de Countryman, Edward: “Social Protest and the Revolutionary Movement (1765-1776), en Greene y Pole (eds.), *op. cit.*, pp. 184-197.

¹³⁴⁶ Téngase en cuenta que esto no guarda relación directa con la una distribución de la riqueza más o menos igualitaria, se trata de elementos ideológicos superpuestos. En la Norteamérica de la época, se encontraba repartida mucho más equitativamente que en el siglo XIX (ibid., pg. 22). Y que en la Europa del momento, sin duda (vid. Perkins, en Greene y Pole, *op. cit.* pg. 56).

¹³⁴⁷ Ibid., pp. 81 y 83.

¹³⁴⁸ Ibid., pg. 85

¹³⁴⁹ Como señalaría Paine. Vid. ibid., pg. 181.

¹³⁵⁰ Wood, 1993, pg. 46: aunque existía el mayorazgo (*entail*) y el derecho de primogenitura, de acuerdo con el Derecho inglés, en Nueva Inglaterra, si no había testamento, se repartía por igual entre los hijos, a salvo una doble porción para el mayor de ellos.

¹³⁵¹ Ibid., pg. 248.

numerosos, menos orientados a las relaciones personales de carácter clientelar o familiar¹³⁵². Una jerarquía social tan rígida quedaba también rota con la propia movilización miliciana, que originaba los mandos fueran elegidos a menudo por la tropa, fenómeno similar al de la selección de ministros en las parroquias correspondientes mediante procedimientos democráticos¹³⁵³. El programa nivelador encontraba aquí un contexto favorable que haría triunfar a otros con parecidas ideas en un momento histórico distinto.

II.2. El trazado constitucional norteamericano

II.2.1. Las Constituciones estatales

Todos estos elementos en presencia, a saber, un republicanismo activo dedicado a la participación en el autogobierno, con fuerte tendencia a la democracia directa¹³⁵⁴, el referente de unos derechos de carácter fundamental, la construcción nacional tras la escisión de Gran Bretaña y las modificaciones sociales acaecidas, necesitaban un molde político de carácter *permanente*, que impidiese a fuerzas centrífugas destruir una unión tan precaria como aquella de la que disponían las trece colonias.

Con respecto al asunto de la conformación nacional, pronto se mostró como robusta, a pesar de las distintas orientaciones religiosas, sociales, demográficas y políticas existentes. Como se ha podido exponer un poco más arriba, el primer intento para unificar la fuerza de los colonos fue el Congreso Continental reunido en septiembre de 1774 en Filadelfia. Sus objetivos fueron los de elaborar una lista de leyes parlamentarias que habrían violado sus derechos y proponer medidas para defenderse de ellos. A tal fin se suscribió un documento conocido como el de la Asociación Continental, en donde quedaban establecidas las normas concretas que se pretendía combatir, así como acuerdos de no importación y exportación para conseguir ese propósito y la delegación a comités que hicieran se cumpliesen¹³⁵⁵. Estas organizaciones populares sirvieron para la inspección de buques, examen de inventarios mercantiles, e, incluso, la recogida de firmas suscribiendo la Asociación¹³⁵⁶.

¹³⁵² Ibid., pg. 247.

¹³⁵³ Ibid., pg. 113.

¹³⁵⁴ Vid. *supra*, pg. 348, e *infra*, pg. 361.

¹³⁵⁵ Vid. Ammerman, *op. cit.*, pg. 203. Estos últimos fueron semilla del activismo de aquellos instantes, participando miles de ciudadanos en ellos. Ibid, pg. 205. No deja de ser notable que, en medio de mecanismos comerciales referidos a la circulación de bienes y al consumo se recurriera a un resorte netamente republicano, de participación ciudadana.

¹³⁵⁶ Id. (nótese la semejanza con la intención que existían tras los *Agreements for the people*, vid. *supra*, pg. 99). Con la profundización de la crisis, estos Comités de inspección se convertirían en Comités de

Actuaron bajo las órdenes directas del Congreso, no de asambleas provinciales¹³⁵⁷, lo cual demuestra que existía un espíritu unitario dispuesto a combatir a los británicos enérgicamente, formándose el embrión de un futuro gobierno supracolonial. Se había reaccionado en común frente a una serie de sucesos, y episodios recientes, como la solidaridad frente a las medidas sufridas por Boston o New York¹³⁵⁸, habían demostrado una gran cohesión. Tras el comienzo de los combates, en abril de 1775, se reunirá un Segundo Congreso Continental en mayo, también en Filadelfia, y puesto que el conflicto ya se estaba convirtiendo en guerra abierta. Las colonias pasan a situarse en “estado de defensa” y se disponen a tomar resoluciones de mayor importancia, siendo la primera de ellas la institución de un ejército propio en junio y la entrega del mando principal de las tropas a George Washington, poco después¹³⁵⁹. La reacción de Jorge III a las resoluciones coloniales fue cada vez más abrupta, originando así que, en paralelo, los norteamericanos fueran cerrando filas en grado mayor, hasta llegar a la Declaración de Independencia de 1776, en donde se exponía la queja por ese paulatino deslizamiento del monarca hannoveriano a tomar medidas gradualmente más despóticas. Pero en todo ese proceso no conviene perder de vista que existen, de manera más o menos acentuada según los lugares, fórmulas de autogobierno apuntadas a lo largo u ancho de toda Norteamérica, y que ahora hay que desarrollar para hacer frente al nuevo vacío de poder originado.

Al respecto, las instrucciones que podía dar el Congreso Continental eran limitadas, sobre todo al inicio de los combates, cuando todavía muchos eran muy renuentes a separarse definitivamente de la metrópoli. Así, por ejemplo, en enero de 1776, Maryland había exigido a sus delegados en el Congreso que no consintieran la escisión, y en mayo, las elecciones en Pensilvania habían dado la victoria también a sus opositores¹³⁶⁰. Sin embargo, otras colonias se mostraban claramente a favor, como era el caso de Massachusetts. Lo que sí podía hacer el Congreso, entonces, tal y como así lo asumiría, era promover que cada uno de los territorios se dotara de nuevas fórmulas de autogobierno *estatal*. Tal indicación se efectuaría sucesivamente a

Seguridad, que asumirían más responsabilidades, entre ellas, las de pedir contribuciones para los gobiernos revolucionarios y reclutar hombres. Ibid., pg. 206.

¹³⁵⁷ Id.

¹³⁵⁸ Vid. *supra*, pp. 313 y 314.

¹³⁵⁹ En julio (Sarson, *op. cit.*, pp. 812 y 813). De los los historiadores del período más señalados se deduce que, pese a concesiones a los más moderados, el Congreso optó con este nombramiento de Washington por dar una mayor cuota de confianza a quienes eran muy escépticos con cualquier tipo de reconciliación con Gran Bretaña, como Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, John y Samuel Adams, o el propio George Washington (vid. Ammerman, David L.: “The Crisis of Independence”, en Greene y Pole, *op. cit.*, pg. 212). Adviértase que entre estas personas inclinadas por la independencia, se había forjado una especie de alianza entre las colonias del norte y el sur, pues Samuel y John Adams eran líderes en Massachusetts, Franklin en Pensilvania, y Washington y Jefferson, hombres de Virginia.

¹³⁶⁰ Sarson, *op. cit.*, pg. 814.

varios de ellos desde junio de 1775¹³⁶¹, para más adelante, en primavera de 1776, señalarlo a todo el conjunto¹³⁶². Con esta convocatoria, asimismo, el Congreso se hacía eco de los esfuerzos ya efectuados por Massachusetts en mayo de aquel año, donde sus asamblea había elaborado un proyecto de Constitución.

Fue, sin embargo, New Hampshire la primera colonia con una Constitución propia, aprobada en enero de 1776¹³⁶³. La elaboración de otras tantas para el resto de territorios prosiguió hasta finales de siglo¹³⁶⁴. Y es que en todo este proceso se experimentaron sistemas constitucionales distintos, y que iban desde el más cercano a la participación popular amplia y directa, el de Pensilvania de 1776, hasta el que optaba por un ejecutivo fuerte y el bicameralismo, como el de Massachusetts en 1780. El modelo nacional se asemejaría en 1787 a este último, pero el otro, más “radical”, mantendría su influencia a lo largo del siglo XIX¹³⁶⁵. En realidad, de hecho, los diferentes esquemas se sucedieron, experimentándose unos y otros en el nivel estatal¹³⁶⁶, con modificaciones que obedecieron a delicados equilibrios entre fuerzas sociales y facciones políticas, el anómalo funcionamiento de la administración de justicia y la vulneración del imperio de la ley en numerosas ocasiones. Este ensayo y error continuos darían los frutos de la Constitución Federal, que intentaría dar soluciones a numerosos problemas planteados¹³⁶⁷.

¹³⁶¹ Poco después, en agosto, Jorge III aceleraría el proceso al declarar a las colonias en “abierta rebelión”, haciendo caso omiso de una petición de paz conocida como la *Olive Branch*, (vid. Sarson, *op. cit.*, pg. 813). Y aunque el Congreso ratificaría el poder real en diciembre, pronunciándose sólo sobre la nulidad del parlamentario (id.). El viejo esquema ya visto, sobre combinación de autogobierno asambleario y poder ejecutivo del monarca, aún se pretendía podía continuar en vigor, pese a los acontecimientos. Sólo con la Declaración de Independencia de 1776 quedaría definitivamente arrinconado.

¹³⁶² Lutz, en Greene y Pole (eds.), *op. cit.* pg. 277.

¹³⁶³ Nótese que los norteamericanos a menudo no solían diferenciar “*constitution*” de “*system of government*” (sistema de gobierno), como demuestran las distintas denominaciones utilizadas. Vid. Adams, Paul Willis, *op. cit.*, pg. 19.

¹³⁶⁴ Rhode Island y Connecticut habían mantenido una capacidad de autogobierno muy poderosa desde principio de los 1660, pudiendo elegir popularmente a sus propios gobernadores. Sólo adoptarían constituciones, así, ya entrado el siglo XIX. Vid. “State constitution-making, through 1781”, en Greene y Pole (eds.), *op. cit.*, pg. 277, así como Adams, Willi Paul: *Republikanische Verfassung und burgerliche Freiheit*, Neuwied, Hermann Luchterhand Verlag, 1973; trad. al inglés de Rita y Robert Kimber, por donde se cita, *The First American Constitutions*, Lanham, Rowman & Littlefield, 2001, pg. 4; que es trad. de Rita y Robert Kimber, de *Republikanische Verfassung und burgerliche Freiheit*, Neuwied, Hermann Luchterhand Verlag, 1973.

¹³⁶⁵ Lutz, en Greene y Pole (eds.), *op. cit.*, pp. 280 y 281, y 284.

¹³⁶⁶ Lutz, 1988, distingue hasta tres “oleadas” constitucionales (pg. 104).

¹³⁶⁷ Para el estudio presente he optado por seleccionar las doce primeras constituciones, pues a partir de la decimotercera ya estaban los principales modelos configurados, y la de Carolina del Sur de 1778 no resultaba innovadora especialmente, por lo que consideramos representativa la que había aprobado en 1776, que sí incluimos en la exposición. Recuérdese, por añadidura, lo reseñado *supra*, sobre Connecticut y Rhode Island. En resumidas cuentas, pues, las constituciones aquí analizadas serán las de **New Hampshire (NH)**, **Carolina del Sur (CS)**, **Virginia (VA)**, **New Jersey (NJ)**, **Maryland (MD)**, **Delaware (DEL)**, **Pensilvania (PA)** y **Carolina del Norte (CN)**, de 1776, las de **Georgia (GA)**, **New York (NY)** y **Vermont (VT)**, de 1777, y la de **Massachusetts (MASS)**, 1780; aprobadas todas en el orden señalado y que figuran en <http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/18th.asp>, excepto la de Virginia (en la web del proyecto *Teaching American History*, del Ashbrook Center for Public Affairs de la Universidad

Antes, precisamente, de ese momento “constituyente” nacional, se distinguen, en cualquier caso, varias características comunes a todas las constituciones estatales de cada una de las antiguas provincias, y que así iniciaban el camino que luego culminaría en una estructura federal:

1) **Legitimidad popular.** Previamente a que apareciera en la Declaración de la Independencia, las diversas constituciones estatales ya contenían alusiones al “pueblo” como último sujeto del poder político. Así, la de New Hampshire mencionada¹³⁶⁸, Carolina del Sur¹³⁶⁹ o Virginia¹³⁷⁰. En la primera se dice que el Congreso que aprueba la constitución del territorio resulta conformado con los representantes del “pueblo de dicha colonia”, elegidos por “sufragio”. Lo mismo ocurre en el segundo caso¹³⁷¹, añadiéndose que “el bien del pueblo” es el “origen de todos los gobiernos”. En este último supuesto, además, los firmantes aseveran ser “los delegados y representantes del buen pueblo de Virginia”, debiendo ser los magistrados de cualquier comunidad “sus fideicomisarios y servidores”¹³⁷². Tras estas constituciones iniciales, las siguientes reiteran el mismo principio político. El bienestar del pueblo es el fin supremo que deben perseguir los gobernantes¹³⁷³, pudiendo aquél derrocarlos si no tienen como fin último “la seguridad y protección de la comunidad”¹³⁷⁴. “Todo poder político reside en el pueblo y deriva únicamente de él”¹³⁷⁵. Tal es su origen¹³⁷⁶. Algunos anteponen cierta lista de agravios para justificar precisamente la rebelión que les separa de la metrópoli, siguiendo el modelo de la

de Ashland <<http://www.teachingamericanhistory.org/library/index.asp?document=2445>>), la de Maryland (web del *National Humanities Institute*, <<http://www.nhinet.org/ccs/docs/md-1776.htm>>) y Massachusetts (<http://www.teachingamericanhistory.org/library/index.asp?document=266>). Asimismo, téngase en cuenta Vermont no fue admitido como Estado en la Unión hasta 1791, aunque su autogobierno comenzara de hecho en 1777. Como era un territorio formado a partir de dos porciones, una originalmente de Nueva York, y otra de New Hampshire, el resto de los estados no quisieron incorporarlo a la unión oficialmente al principio, con el fin de evitar conflictos con ellos. Vid. Adams, Willi Paul, 2001, pg. 4.

¹³⁶⁸ <http://avalon.law.yale.edu/18th_century/nh09.asp>

¹³⁶⁹ <http://avalon.law.yale.edu/18th_century/sc01.asp>

¹³⁷⁰ <<http://www.teachingamericanhistory.org/library/index.asp?document=2445>>

¹³⁷¹ “*I. That this congress being a full and free representation of the people of this colony, shall henceforth be deemed and called the general assembly of South Carolina.*”

¹³⁷² *Virginia Bill of Rights*, Sect. 2: “*magistrates are their trustees and servants*”. Siempre que indiquemos apartado, resolución, sección o artículo de la Constitución sin añadir nada más, me referiré al *frame of government* correspondiente, no al *bill of rights*, supuesto en el que así lo indicaré. En algunos casos, pocos, no es necesario hacer esta distinción, pues no existe *bill*; en ellos nos estamos refiriendo al cuerpo en conjunto de la constitución.

¹³⁷³ Preámbulo de NJ.

¹³⁷⁴ PA, Preámbulo.

¹³⁷⁵ CN, I. Casi con el mismo texto, *Section 2* del *Bill of Rights* de Virginia (1776).

¹³⁷⁶ GA, Preámbulo: “*from whom all power originates*”.

Declaración de Independencia¹³⁷⁷. Los cargos públicos eran elegidos popularmente. Los representantes asamblearios, de forma habitualmente directa¹³⁷⁸.

2) El “pueblo” del que se habla en esas primeras constituciones norteamericanas es identificado con un **sufragio extenso**, tanto activo como pasivo. Y es que hay aquí algo que a veces se olvida por los historiadores políticos de la época. La secesión de Gran Bretaña sólo fue conseguida tras un largo período de combates y agitación revolucionaria, con sus correspondientes rasgos emancipadores. La Guerra de Independencia supuso una radicalización destacable en gran parte de los norteamericanos. Elegirían comités locales¹³⁷⁹, los cuales a su vez convocarían *congresos y convenciones*¹³⁸⁰ provinciales mucho más democratizados y de mayor representatividad que las asambleas coloniales previas¹³⁸¹. No eran los grandes terratenientes quienes dominaban esas reuniones. Un hecho sin precedentes en la Europa moderna, que no había tenido otro momento parecido, salvo el de la agitación política en el *New Model Army* durante las Guerras Civiles inglesas de 1642-49. El modelo de ciudadano activo era, como allí, el *freeholder*. Pero ahora las consecuencias de asumir tal identificación eran distintas. Por una parte, se había diversificado la actividad económica, con lo cual numerosas personas se dedicaban a actividades no ligadas estrictamente con la posesión de la tierra. Y, de otro lado, la facilidad para conseguir ésta resultaba mucho mayor. A ello hay que sumarle la radicalización fruto de la guerra, que introducía un número de sujetos más elevado en la actividad política, así como la alta circulación del dinero a través de créditos y un comercio muy activo, con sus correspondientes consumo y transacciones, favorecedores de expectativas de mejora y bienestar, así como de movilidad social.

En consecuencia, la fase independentista conservó el impulso primario que ya existía durante la época colonial con las asambleas provinciales¹³⁸², manteniendo un

¹³⁷⁷ Todas, menos la de Delaware y Massachusetts, empiezan con la mención de algún agravio o de toda una lista de ellos, en el encabezamiento de las constituciones.

¹³⁷⁸ En algunos supuestos existía la selección popular directa de oficiales de la milicia y ciertos jueces. Los jefes de la milicia, así, en el 6º punto de NH o en X de NJ; o los jueces, en XIX de CS. No deben olvidarse los jurados, reconocidos en casi todas las Constituciones, como otra institución para la intervención popular.

¹³⁷⁹ Sobre tales comités, vid. *supra*, pg. 351. En general, la organización fue de carácter local, dado que las propias divisiones “administrativas en el país” también lo eran; en Nueva Inglaterra predominaban los *towns*, en el sur, los *counties* y en la zona media había una mezcla de ambos. Los gobiernos coloniales propiamente dichos, así, tenía un papel a veces muy reducido con respecto a estas unidades más pequeñas. Vid. Lutz, Donald: “State constitution-making, through 1781”, en Greene y Pole (eds.), *op. cit.*, pg. 276.

¹³⁸⁰ Morgan, *op. cit.*, pg. 245.

¹³⁸¹ Así, Carolina del Sur llegó a tener 180 miembros, el triple de los que habían conformado habitualmente su asamblea provincial anterior; y New Jersey y Maryland más del doble. Vid. Conroy, David W.: “Development of a revolutionary organization (1765-1775)”, en Greene y Pole, *op. cit.*, pg. 229.

¹³⁸² Aunque variando las cifras de una colonia a otra, se considera por los historiadores de la época que entre un cincuenta y un ochenta por ciento de la población adulta masculina podía votar en las elecciones

grado de admisión a participar en los asuntos públicos muy alto, e incluso aumentándolo en muchos territorios¹³⁸³. Este es un importante elemento que ya diferenciaba también del legislativo inglés, en el que la reforma electoral ampliatoria no llegaría hasta avanzado el siglo XIX¹³⁸⁴. Asimismo, las asambleas estatales también crecieron en número de miembros¹³⁸⁵. La representación “virtual” había sido rechazada, y, por el contrario, se intentaba conseguir *una que retratase de la manera más fiel posible la realidad social del país*¹³⁸⁶. Considerando previamente, pues, todos estos criterios, ha de señalarse que, sin embargo, el modelo de ciudadano activo y que detentaba la titularidad plena de una serie de derechos, incluido el de sufragio, debía continuar reuniendo las características del *freeman*. Es decir, de una persona que pudiera depender sólo de sus propios medios, sin servir a otros que pudieran ejercer su dominación¹³⁸⁷. Lo que ocurre es que tal categoría resultó ser inclusiva, acogándose un número elevado de varones adultos. La “dependencia”, pues, iba a ser evaluada de manera muy flexible, aspecto que se recoge en las sucesivas constituciones estatales. En general, se combinaron criterios sobre la propiedad o posesiones de cierto valor, preferentemente tierra cultivable, y aunque pudiera admitirse también la disposición de otros bienes, así como baremos relacionados con el pago de tributos. Ese *freeman* debía tener un “interés permanente”¹³⁸⁸ en la comunidad, que fuera demostrado con su residencia continuada en el territorio durante

coloniales antes de la Revolución. Vid. Zagarri, Rosemarie: “Suffrage and representation”, en Greene y Pole (eds.), *op. cit.*, pg. 652.

¹³⁸³ Vid. Wood, 1991, pg. 250.

¹³⁸⁴ La media estatal era cuatro veces superior que en la Isla. Vid. Lutz, en Greene y Pole (eds.), *op. cit.*, pg. 287. Morgan ofrece datos similares (vid. *op. cit.*, pg. 175), indicando que en la Inglaterra de aquel momento eran excluidos los leaseholders y copyholders, y que en las ciudades variaban los requisitos, yendo desde la cooptación de la corporación municipal a la no exigencia de ninguno para todos aquellos que no *dependieran* de la mendicidad (ibid., pg. 178).

¹³⁸⁵ Wood, 1991, pg. 250.

¹³⁸⁶ Acercándose a la representación “descriptiva” de la que habla Pitkin, H. F.: *El concepto de representación*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1985, trad. de Ricardo Montoro Romero de *The Concept of Representation*, Berkeley, University of California Press, 1972, pg. 65. La autora cita la idea de ciertos autores de que el cuerpo representativo se corresponda con o asemeje a aquello que representa, “mediante un reflejo no distorsionado”. Así, por ejemplo, cit de John Adams, “debería ser un retrato exacto, en miniatura, del pueblo en toda su amplitud, y que debería pensar, sentir, razonar y actuar como este último”.

¹³⁸⁷ Vid. Constitución de Pensilvania, Sección 36 de su Declaración de Derechos: “Todo hombre libre, si no dispusiera de hacienda suficiente, y , a fin de preservar su independencia, debería tener alguna profesión, vocación, comercio o tarea rural cualquiera, con la que se mantenga honestamente y sin caer en necesidad”.

¹³⁸⁸ La de Virginia lo deja claro (Sección 6 de su *Bill of Rights*): “[q]ue todas las elecciones habrán de ser libres, teniendo derecho de sufragio en ellas todos aquellos hombres *que demuestren interés permanente en la comunidad* y vinculación con ella” (“[t]hat all elections ought to be free, and that all men having *sufficient evidence of permanent common interest with, and attachment to, the community, have the right of suffrage*”). Subrayado propio.

un período específico, oscilando éste entre seis y doce meses, y siendo este último el supuesto habitual¹³⁸⁹. La Constitución más progresiva fue la de Pensilvania:

Sección Sexta. Todo hombre libre mayor de veintiún años, habiendo residido en este estado en el año previo a la elección de representantes, y *pagado impuestos* durante ese período, disfrutará del derecho de ser elector; quedando previsto, además, que los hijos de *freeholders* que cuenten con al menos veintiún años de edad dispondrán también de derecho al voto aunque no hayan pagado tributos.¹³⁹⁰

En este caso, así, se exigía para elegir representantes tan sólo el pago de algún impuesto en Pensilvania. Esta tendencia fue consolidándose todavía en grado mayor en las décadas siguientes, hasta que en 1842 el derecho de sufragio vino a dejar de ser en casi toda Norteamérica de carácter censitario¹³⁹¹. De cualquier forma, y como puede observarse en un examen detallado de las constituciones desde 1776, en ellas se fue acentuando el proceso que conducía a la máxima pormenorización de los requisitos para su ejercicio¹³⁹², al tiempo que lo situaba en un área *supralegal*. Es decir, que se buscaba la “constitucionalización” del régimen electoral. Al considerarse de tan gran relieve, no parecía adecuado abandonarlo a leyes ordinarias, sino que resultaba idóneo cobijarlo en los *frames of government* estatales. Incluso, dando detalle sobre la división en distritos que debía servir a los propósitos de asignar representantes a la cámara alta o la baja o para la elección de miembros del gobierno¹³⁹³.

Al respecto, y para señalar la relevancia que los colonos otorgaban al derecho de representación en sus constituciones, baste aludir a que, entre ellos, el voto fue ejercido preferentemente mediante sufragio secreto¹³⁹⁴, algo poco habitual en aquella

¹³⁸⁹ Vid. constituciones de NJ (apartado IV), MD (II), PA (Secciones 7 y 8) y CN (apartados VII-IX), así como las de GA (artículo IX), NY (VII) y MASS (capítulo I, Sección II, artículo II, así como cap. I, Sec. III y art. IV, y capítulo II, Sec. I, art. II).

¹³⁹⁰ “Section 6. Every freemen of the full age of twenty-one Years, having resided in this state for the space of one whole Year next before the day of election for representatives, and paid public taxes during that time, shall enjoy the right of an elector: Provided always, that sons of freeholders of the age of twenty-one years shall be intitled to vote although they have not paid taxes”. Vid. pg. web citada.

¹³⁹¹ Zagarri, *op. cit.*, pg. 653. Aunque faltaron tres estados por incorporarse a esta extensión aún, en concreto, Rhode Island, Virginia y Louisiana. *Id.*

¹³⁹² Incluyendo distinciones entre los requeridos para el sufragio activo y para el pasivo.

¹³⁹³ Constituciones de VA (segunda norma), DEL (arts. 1 y 3), PA (Sect 17 y 19), CN (III), GA (arts. IV-VI), NY (IV y XII) y MASS (*Chapter I, Section II, Arts. I y II*).

¹³⁹⁴ De manera abrumadora, en casi todas las Constituciones: CS, en sus resoluciones II, III, XV, XX, XXII, XXIII; VA, en sus decisiones números 6, 8, 12 y 17; MD, en sus apartados VIII, XV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVI, XXXV, XLII; DEL, arts. 7, 8, 11, 12, 16 y 27; PA, Secciones 9, 11, 14, 19, 32 y 47; CN, apartados II, III, X, XIII, XV, XVI, XXII, XXIV, XXXVII; GA, arts. II, IX, XII, XIII, XVI, XXIII; NY, apartados VI, XV, XVII y XXX; VT, Secciones VIII, X, XXIX, XLIV; MASS, Capítulo I, Sección II, Artículo IV, el II-I-III, el II-III-II, el II-IV-I, y el Cap. IV. En todos los casos, en el *frame of government* de cada Constitución, nunca en el *bill of rights*, eso sí.

época, como demuestra el coetáneo supuesto inglés¹³⁹⁵. De hecho, alguna de aquéllas aún contemplaba el método del *viva voce* en concurrencia (New York, apartado VI) o incluso como método único para determinadas elecciones (Maryland, apartados II, V y XIV). Pero estos casos fueron excepcionales, pues lo previsto era el “*ballot*”, introducir papeleta en urna, tanto para la selección de representantes en cualquiera de las cámaras, como para la de Gobernador o cargos públicos, e incluso tras deliberar en cualquiera de esas asambleas. La Constitución de New York reconocía que “entre el buen pueblo de este Estado ha prevalecido la idea de que el voto secreto tendería a preservar la libertad y un trato equitativo de las personas, mejor que la elección *viva voce*”¹³⁹⁶. Otro sistema podría favorecer la presión o el soborno de los poderosos a fin de conseguir el apoyo de otros ciudadanos que contaran con menos medios. Y más bien esto último, si hay que fiarse del criterio de los historiadores¹³⁹⁷, del fenómeno que ya habían detectado las *Cartas de Catón*¹³⁹⁸, e incluso de algunas Constituciones norteamericanas, como por ejemplo, la de Pensilvania (1776):

Sección 32. Todas las elecciones, ya se celebren entre el pueblo, ya en la Asamblea General, serán mediante sufragio secreto, libre y voluntario: de modo que cualquier votante que reciba regalo o recompensa por su voto, en carne, bebida, dinero o cualquier otra cosa, perderá su derecho a la elección desde ese momento, sufriendo asimismo las penas que futuras leyes establezcan. Y cualquier persona que, directa o indirectamente, entregue, prometa u otorgue tales recompensas al objeto de resultar así elegido, quedará incapacitado para servir durante un año.¹³⁹⁹

Por tanto, aquí puede observarse de nuevo cómo aflora la teoría de la independencia personal tan cara a los *levellers* y a muchos de sus contemporáneos republicanos. El derecho a la representación se entendía de forma correlativa al disfrute de unos medios que facilitarían aquélla. Este era un pensamiento común al hombre de esa órbita cultural, pero la aplicación práctica del criterio, realizada en su vida política por los norteamericanos, era de carácter inclusivo en un grado similar al

¹³⁹⁵ Vid. Morgan, *op. cit.*, pg. 184.

¹³⁹⁶ “*An opinion hath long prevailed among divers of the good people of this State that voting at elections by ballot would tend more to preserve the liberty and equal freedom of the people than voting viva voce*”. Apartado VI.

¹³⁹⁷ Morgan, *op. cit.* pg. 176.

¹³⁹⁸ Vid. *supra*, pg. 283.

¹³⁹⁹ “*Section XXIX. All elections, whether by the people or in General Assembly, shall be by ballot, free and voluntary: and any elector who shall receive any gift or reward for his vote, In meat, drink, monies or otherwise' shall forfeit his right to elect at that time, and suffer such other penalty as future laws shall direct. And any person who shall, directly or indirectly, give, promise, or bestow, any such rewards to be elected, shall, thereby, be rendered incapable to serve for the ensuing year*”. Reproduce exactamente el mismo texto, la Sección XXIX de la Constitución de Vermont (1777), y casi el mismo, la de 1786 de idéntico territorio.

de los niveladores y así más alejado de las restricciones al sufragio que habían triunfado en Inglaterra ya desde tiempos de Cromwell¹⁴⁰⁰. Putney fue el escenario de una discusión previa a la agitación colonial que asumiría premisas de los radicales del *New Model Army*.

3) En todas las constituciones, y siguiendo la tradición colonial previa, se trató de establecer un **control de los gobernantes y de los cargos públicos** en general. Se reproduce así la desconfianza hacia los titulares del poder que ya habían mostrado los radicales del *New Model Army*, luego los *whigs*, y finalmente, con un acento crítico de especial relieve, los *real whigs* como “Catón”. La primera herramienta, la más sencilla, fue la de tomarles **juramento** (*oath*)¹⁴⁰¹, con el fin de asegurarse su fidelidad. Éste debe entenderse de acuerdo con la libertad de conciencia que se abría paso entonces de manera decidida. Por ello, aunque en la Constitución de Carolina del Sur de 1776 no aparecía aún la alternativa de prometerlo (vid. XIII), sí se refleja en todas las demás que vienen a continuación (*affirmation*)¹⁴⁰². Tales medidas no se correspondían exactamente con una apertura laicista, sino con la intención de admitir a cargos públicos a hombres de cultos religiosos que prohibían cualquier tipo de juramento, como era el caso de los cuáqueros o los menonitas¹⁴⁰³.

Otra medida importante para controlar, tanto a los “fideicomisarios” del pueblo, como a quienes eran delegados por sus representantes¹⁴⁰⁴, era que fuesen elegidos para **períodos muy cortos**, preferentemente de mandato anual¹⁴⁰⁵. Este mecanismo había sido habitualmente utilizado en las colonias para numerosos nombramientos y provenía de la tradición republicana, de Grecia y de Roma, y sobre ella habían teorizado autores del Renacimiento como Maquiavelo y Guicciardini, así como de la *Commonwealth*, sobre todo Harrington, sin olvidar que los *levellers* lo vieron como

¹⁴⁰⁰ Vid. *supra*, pg. 144.

¹⁴⁰¹ Aparece en casi todas las constituciones; en las que no, como es el caso de las dos primeras, New Hampshire, Carolina del Sur y Virginia de 1776, más parece que ello se derivase de una falta de detalle por simplicidad pionera. Por cierto, que este sistema del juramento también se utilizó en casi todas las constituciones para la naturalización de residentes, con una fórmula de fidelidad al Estado del que se trataba.

¹⁴⁰² La de New Jersey de 1776 (XXIII) ya se refiere a la posibilidad de prometer solamente, igual que la de Maryland 1776 (XXXV y XXXVI de su *Declaration of Rights*), DEL (22), PA (Sec. 9, 10 y 40), GA (Secciones XIV, XV y XXX), NY (VIII), VT (Sec. VIII, IX y XXXVI), CS (XIII y XXXVI), MASS (Cap. I, Sect I, IV, y Cap. VI).

¹⁴⁰³ De hecho, al menos en dos Estados se exigía una declaración para los cargos más importantes, de profesión de la fe cristiana (Maryland, XXXV de su *Declaration of Rights*, y Massachusetts, Cap. VI de su Constitución). Sobre los cuáqueros, vid. *supra*, pp. 223 y 226. Los menonitas eran disidentes del anabaptismo y seguidores de Mennón, reformador holandés del siglo XVI. *Diccionario del uso del español María Moliner* (2ª ed.), vol. II, Madrid, Gredos, 1998 (“menonita”, pg. 321).

¹⁴⁰⁴ Como se verá, a menudo algunos cargos importantes, como el Gobernador, eran elegidos por ambas cámaras, etc.

¹⁴⁰⁵ La mayoría de representantes y cargos públicos en general, en todas las constituciones. Esta renovación continua ayudó también a quebrar el dominio de quienes conformaban la élite colonial que dominaba la esfera política, junto con la ampliación del electorado. Wood, 1991, pg. 250.

indispensable recurso que incluyeron en sus *Agreements*. Conducía a asegurar el imperio de la ley; ésta sería aplicable por igual a todos¹⁴⁰⁶, ya que el titular de la autoridad pública podía perder cualquier tipo de inmunidad previa. Asimismo, estas “elecciones frecuentes” evitaban que la corrupción caminase por los pasillos del poder y se basaba en una *renovación del consentimiento popular*, aunque nadie lo expresara así entonces. Para asegurar su **rotatoriedad**, de otro lado, en Norteamérica se impedía que una misma persona pudiera renovar su permanencia en el cargo o puesto correspondientes más de un número de veces determinado, dentro de un período mayor¹⁴⁰⁷, otro mecanismo harringtoniano.

Asimismo, se establecen diversas **inelegibilidades e incompatibilidades** para todos. Las más numerosas se referían a la imposibilidad de ocupar dos cargos públicos al mismo tiempo¹⁴⁰⁸, e incluso el ser ministro de culto a la vez¹⁴⁰⁹, aunque en Carolina del Norte además se extendía a quienes hubieran contratado con el gobierno del estado¹⁴¹⁰.

Por añadidura, para mantener a quienes fueran titulares del poder público apartados de su posible corrupción por terceros o de que pertenecieran exclusivamente a las clases más pudientes, se establecía pudieran cobrar **remuneraciones** (Resolución 6ª y 8ª de Virginia, art. 7 y 12 de Delaware, XXI de Carolina del Norte, XXXVII de Carolina del Sur de 1778, entre otras); en algún caso, incluso, fijando su cuantía concreta (XXXIV de Carolina del Norte), y en otros, con especial referencia a los jueces (XXX de la *Declaration of Rights* de Maryland, Sec. 23 y 30 de Pensilvania). Ésta era una diferencia con el republicanismo clásico, en el que, como indicaba el ejemplo romano, quienes ocupaban puestos públicos no eran remunerados, pues se entendía era un honor el detentarlos, y una similitud con los *levellers*, que en sus *Agreements* habían también previsto tal posibilidad¹⁴¹¹.

Además, se determinan diferentes sistemas de control llevado a cabo por las cámaras legislativas sobre cualquier persona que sirviera a la administración estatal, ya fuera sólo como cargo público¹⁴¹² o bien como cabeza de la misma, al ocupar el puesto de gobernador¹⁴¹³ o presidente¹⁴¹⁴. Se trataba del **impeachment**,

¹⁴⁰⁶ Primer *Agreement*. Sharp (ed.), *op. cit.*, pg. 96: “deberán sufrir igualmente contigo las cargas comunes y también disfrutar las libertades” (“*they must equally suffer with you under any common burdens and partake with you in any freedoms*”).

¹⁴⁰⁷ Por ejemplo, en VA (6ª resolución), DEL (art. 7), PA (Sec. 19).

¹⁴⁰⁸ CS (X), PA (Sect. 23, sobre los miembros de la Corte Suprema), CN (XXVII-XXX), GA (XVIII) NY (XXII), MASS (*Chapter VI*, Arts. I y II).

¹⁴⁰⁹ CN (XXXI), NY (XXXIV).

¹⁴¹⁰ CN (XXVII).

¹⁴¹¹ Parte I del tercer *Agreement* (vid. Sharp, *op. cit.*, pg. 170), respecto a los parlamentarios.

¹⁴¹² NY (XXXIII), VT (XX), CN (XXIII) o MASS (Cap. I, Sec. II, art. VIII).

¹⁴¹³ Virginia (14ª resolución).

¹⁴¹⁴ Delaware (art. 23).

procedimiento de carácter político proveniente de la tradición inglesa¹⁴¹⁵ y que consistía en una acusación que podía derivar en juicio de responsabilidad. Sus causas eran, en general, la incompetencia o corrupción en el desempeño de la función pública, y era regla común el atribuir la acusación estricta a un órgano determinado, reservando la acusación a otro distinto. De esta manera, se buscaba conseguir imparcialidad en el proceso. En casi todas las ocasiones, el sujeto legitimado para emprender la acción era la cámara baja, y sólo en un caso, ambas asambleas legislativas¹⁴¹⁶. La decisión casi siempre permanecía en manos de un tercero¹⁴¹⁷, que podía ser la otra cámara¹⁴¹⁸, un alto tribunal¹⁴¹⁹, o el gobernador (en su caso, vicegobernador) y el consejo que le asesoraba¹⁴²⁰. Asimismo, se tendía a que la única consecuencia de unas conclusiones favorables al *impeachment* fuera la de *inhabilitar al acusado*, corriendo otras posibilidades de sanción de cuenta de la jurisdicción ordinaria¹⁴²¹, o al menos, a que no se pudiera castigar al incompetente o corrupto sin una previa tipificación legal¹⁴²². El procedimiento, pues, se alejaba de los antiguos *Bills of Attainder* ingleses, ofreciendo una seguridad jurídica al acusado y estableciendo límites que impidieran que una determinada opinión política pudiera expulsar del poder a miembros de otra distinta mediante métodos arbitrarios. Junto a él, se encontraba la rendición de cuentas (*accountability*) de todo cargo público ante las asambleas¹⁴²³.

Por supuesto, debe indicarse que estos mecanismos eran los constitucionalmente previstos, pero que existía otro en la tradición colonial y que proseguía instalado en la vida política norteamericana, extraído de una concepción tendente a la democracia directa, el de las **instrucciones dirigidas a los representantes**. La noción de soberanía popular tiene aquí, de este modo, un semillero ubicado sobre la propia práctica del autogobierno y que legará importantes contradicciones y problemas al sistema político estadounidense. Y es que en Inglaterra, durante el conflicto entre el Rey y los parlamentarios de mediados del siglo XVII, se había desarrollado, con base en prácticas medievales, un mecanismo en el que se percibía claramente una intervención popular amplia: las instrucciones

¹⁴¹⁵ Vid. *supra*, pg. 276.

¹⁴¹⁶ Entre las Constituciones que acogían la primera fórmula, las de VA, DEL, NY y VT (vid. arts. ya citados), si bien las de este último territorio recogían un modelo unicameral, y la del anterior requerían dos tercios de la asamblea. Y respecto a las constituciones que exigían la acusación de ambas, la de CN (vid. también un poco más arriba).

¹⁴¹⁷ Sólo en el caso excepcional de New York, el juzgador era la misma cámara.

¹⁴¹⁸ En Delaware, donde la cámara alta era el llamado *Legislative Council*, o en Massachusetts, donde lo era el *Senate*.

¹⁴¹⁹ La *General Court*, en Virginia.

¹⁴²⁰ VT. El Vicegobernador (*Lieutenant-Governor*) ocupaba aquí el puesto del Gobernador si éste era el acusado.

¹⁴²¹ New York, Massachusetts.

¹⁴²² Virginia, Delaware.

¹⁴²³ En algún caso, explícita en la Constitución: GA, XLIX.

específicas a los representantes o mandato imperativo¹⁴²⁴. Antes de 1640 se referían a asuntos de carácter estrictamente local (disminuir algún impuesto del mismo tipo, erigir un faro o un puente), pero después comenzaron a referirse a asuntos de índole nacional, superando límites tan específicos. Esta tradición de que, entre un proceso electoral y otro, los titulares del derecho al sufragio pudieran reunirse a fin de remitir sus deseos a su representante, lograría penetrar en la América colonial y llegar hasta el momento que ahora nos ocupa¹⁴²⁵. Sucedió que al iniciarse la guerra contra la metrópoli, su importancia se intensificaría. Diversas constituciones asumen este mecanismo¹⁴²⁶, y quizás el pasaje más significativo al respecto sea este que figura en la pionera, la de Pensilvania:

XVI. Que el pueblo tiene el derecho a reunirse, para deliberar sobre el bien común, *instruir a sus representantes*, y solicitar al legislativo su desagravio, mediante misiva, petición o manifestación.¹⁴²⁷

Como ya se ha podido advertir páginas atrás, los *levellers* sostenían la plena validez de estos postulados, mucho tiempo antes¹⁴²⁸, y se mantendrían en vigor después, pudiéndose trasladar al Nuevo Mundo. De hecho, en la Inglaterra del siglo XVIII, ya atravesados los períodos de la *Commonwealth*, la Restauración y la Gloriosa, quedan datos fehacientes sobre tal permanencia¹⁴²⁹, alimentada por los propios políticos, a fin de atraerse el apoyo plebiscitario mediante una agenda de decisiones que ellos ya elaboraban de forma previa¹⁴³⁰. Distinta fue la fórmula de una deliberación necesaria emprendida por los representantes y que expresaría realmente el interés de

¹⁴²⁴ En teoría política “Se diferencia, habitualmente, entre ‘representación política’ y ‘representación de intereses’. La representación de intereses o representación funcional se sitúa temporalmente en la premodernidad como representación corporativa o de grupos profesionales. En esta representación de intereses existía un ‘mandato imperativo’ que obligaba al representante a seguir ciertas instrucciones -los intereses- del grupo representado [...] Con la Revolución francesa, Robespierre, influido por Rousseau, defiende la vinculación de los representantes en mandatos pero no imperativos, mientras que Sieyès mantiene que los representantes de la Asamblea Nacional no deben estar obligados a cumplir el mandato imperativo porque son representantes de la nación entera y no de una localidad concreta”. Sauquillo, *op. cit.*, pp. 289 y 290. Para una panorámica sobre el concepto de mandato en la democracia, llegando hasta nuestros días, vid. el artículo completo.

¹⁴²⁵ Morgan, *op. cit.*, pp. 211-213.

¹⁴²⁶ *Declaration of Rights* de PA (XVI), CN (XVIII) y VT (XVIII).

¹⁴²⁷ Obsérvese que, pese a su emparentamiento, las instrucciones son, tanto por grado de inclusión en textos de tradición legal, como por su contenido, distintas del derecho de petición.

¹⁴²⁸ Vid. *supra*, pg. 112.

¹⁴²⁹ Así, Thomas Gage, un diputado de los Comunes en 1740, votó prohibir que existieran *placeholders* bajo la Corona, justificando su conducta porque así se la requerían sus electores; sobre esa fecha este tipo de postura era además respaldada por la prensa con las palabras de Richard Overton en *A Remonstrance of Many Thousand Citizens*. Incluso en el proceso electoral de 1774, *whigs* radicales londinenses intentaron que sus candidatos se comprometieran a obedecer las instrucciones que se les dieran una vez elegidos, si bien es cierto que sólo algunos lo hicieron, y que intentos posteriores fuera de la capital resultaron un fracaso. Pero el que tuvieran apoyo fuerte implica que estas ideas se tenían muy en consideración entonces. Vid. Morgan, *op. cit.*, pp. 214 y 215.

¹⁴³⁰ *Ibid.*, pp. 220-22

la comunidad en su conjunto, el bien común. Tal fue la convicción de Edmund Burke, popularizada por su “Carta a los Electores de Bristol” de 1774. Con anterioridad a esta fecha, otros representantes acuciados por las exigencias de sus electores¹⁴³¹ habían formulado idéntica concepción de manera más intuitiva¹⁴³². La realidad política en evolución estaba haciendo difícil asumir premisas de aspecto medieval, puesto que la tarea legislativa resultaba mucho más amplia. Tal es así, que, como se ha visto, y pese a su existencia patente en la realidad norteamericana, sólo tres constituciones allí recogieron de manera expresa el derecho a dirigir instrucciones a los representantes¹⁴³³. Sus máximos adalides serían, al igual que había ocurrido durante las Guerras Civiles inglesas con los *levellers*, radicales como Samuel Adams, quien las había utilizado para presionar a los representantes de Boston contra los impuestos¹⁴³⁴. Pero precisamente es en este ejemplo donde se puede observar su mayor debilidad como fórmula para la iniciativa democrática: operaba más por su carácter de veto, de control por tanto, que de expresión promotora de políticas amplias y *activas*. Algo que haría chocar con la emergencia nacional que se iba fraguando en las trece colonias y a la que darían una respuesta más realista los autores de los *Federalist Papers*.

4) **hegemonía del legislativo, aun con presencia de separación de poderes** (control intrasistémico) y una tendencia fuerte al bicameralismo¹⁴³⁵. La importancia del **principal magistrado del ejecutivo**, cuya denominación se consolidaría definitivamente como la de “gobernador”, tardaría en consolidarse. Al principio, no existe siquiera la distinción de un ejecutivo¹⁴³⁶. El enfrentamiento que de manera generalizada habían mantenido los colonos con la metrópoli hacía que rechazaran la tradicional relevancia de quien era el jefe de la administración. Este hecho conducía a que la primera Constitución (New Hampshire, enero de 1776) llegaba a señalar sólo como órgano unipersonal importante al Presidente de la cámara alta (*Council*). Pero lo cierto es que a partir del siguiente texto constitucional, el de Carolina del Sur, y gradualmente, aunque fuera bajo la denominación de “presidente” y no de la antes citada, los distintos estados incorporan la figura de un jefe del ejecutivo con poderes más o menos robustos, hasta culminar con la Constitución de Massachusetts de 1780,

¹⁴³¹ Y que a veces, de hecho, quizás no lo fueran propiamente, sino que sólo se hallaran residiendo en la demarcación.

¹⁴³² Como el fiscal general (*attorney general*) John Willes en 1734. Vid. Morgan, *op. cit.*, pg. 215. Y de forma algo más desarrollada, predecesor de Burke fue en esto David Hume, quien escribió contra la pretensión del mencionado Thomas Gage. Ibid., pp. 218 y 219.

¹⁴³³ *Bill of rights* citados *supra*, una página más atrás, nota 1426.

¹⁴³⁴ Morgan, *op. cit.*, pg. 213.

¹⁴³⁵ Este existe en la mayoría de las Constituciones analizadas. PA, GA y VT adoptan un sistema unicameral.

¹⁴³⁶ NH y CS.

cuando ya se plasma el modelo luego imitado por la Federal de 1787. No sin extraer para este cargo una nueva legitimidad, eso sí, haciendo que se pasase de un nombramiento dependiente sólo de las cámaras¹⁴³⁷, a otro de carácter popular¹⁴³⁸. Esta exigencia se originó de forma correlativa a su paulatina adquisición de un mayor número de potestades. Siendo su cometido natural la ejecución de las leyes, dictando las medidas concretas más convenientes para ello, los colonos tardaron en darle tantos poderes como los que habían tenido sus antiguos gobernadores coloniales. En la primera Constitución (New Hampshire), ni siquiera existía algo más que la figura del presidente de una cámara alta, porque no se había consumado el enfrentamiento con Gran Bretaña. Pero ya en la segunda (Carolina del Sur, marzo de 1776), se advirtió la necesidad de un comandante en jefe que unificara el esfuerzo bélico, y que contara con un sustituto (*vice-president*). Sin embargo, aún se entendía formaba parte del “legislativo” (*legislative authority*)¹⁴³⁹. Carecía de poder para declarar la guerra o firmar tratados¹⁴⁴⁰, así como de disolver, prorrogar o convocar las cámaras, excepto emergencia que justificara este último supuesto¹⁴⁴¹. Pero sí contaba con un poder de veto sobre cualquier ley aprobada¹⁴⁴², lo cual reforzaba su papel. De cualquier forma, el paso siguiente (Virginia, junio de 1776), fue indicar claramente que era cabeza de un ejecutivo¹⁴⁴³ y otorgarle la potestad de indultar salvo indicación de ley o cámara baja¹⁴⁴⁴, así como el nombramiento de jueces de paz (3º). La cabeza del “*supreme executive power*” fue tomando así un aspecto cada vez más parecido al de los antiguos gobernadores, llegando a compartir potestades judiciales¹⁴⁴⁵ o a nombrar a los titulares de las mismas en escalones elevados, en concurrencia con las cámaras¹⁴⁴⁶. En la Constitución de Massachusetts (1780) ya vino a poder prorrogar en cortos períodos las reuniones asamblearias (II-I-V), o bien en otros más largos, por razones extremas (II-I-VI) así como nombrar algunos de los cargos públicos más importantes (fiscal y letrado general, *sheriffs*, titulares de las fiscalías), aunque con el asentimiento de su Consejo (II-I-IX). Cuando se elabora el texto constitucional de

¹⁴³⁷ CS (III y IV), VA (6º y 8º), NJ (VII), MD (XXV y XXVI), DEL (7,8), CN (XV, XVI), GA (II). El caso de PA, con una Constitución aprobada en fecha intermedia entre DEL y CN, resulta peculiar, pues tanto el legislativo unicameral como el consejo de gobierno eran elegidos por el pueblo, con una renovación rotatoria en el segundo, que presidía una persona por cooptación combinada con decisión de la asamblea (Sección 19). No había gobernador o figura similar, sino un órgano colegiado.

¹⁴³⁸ NY (XVII), VT (XVII), MASS (II-I-III).

¹⁴³⁹ VII.

¹⁴⁴⁰ XXVI.

¹⁴⁴¹ VII.

¹⁴⁴² Id.

¹⁴⁴³ 6º, en relación con el 1º.

¹⁴⁴⁴ 6º.

¹⁴⁴⁵ NJ: IX.

¹⁴⁴⁶ D: 12.

1787, el gobernador es ya una figura importantísima en doce de los trece estados. Sólo Pensilvania ha conseguido evitar su refuerzo, instituyendo un gobierno colegiado.

Junto a este jefe del ejecutivo se sitúa un pequeño grupo de **consejeros**, nombrados también por el legislativo (al completo o una sola cámara), y que se llamará *privy council*¹⁴⁴⁷, simplemente *council*¹⁴⁴⁸, *council of state*¹⁴⁴⁹ o *executive council*¹⁴⁵⁰, según los casos¹⁴⁵¹. En algunos supuestos su control sobre el gobernador era amplio, extendiéndose a la necesidad de su asentimiento para ciertas decisiones¹⁴⁵². Pero lo normal es sólo pudieran hacer uso del “consejo” (*advice*). En su nombramiento, a veces se consideraba un sistema rotatorio de renovación¹⁴⁵³. En alguna ocasión también se exigía cualificación económica para ocupar el cargo de consejero¹⁴⁵⁴.

El **legislativo**, como se ha dicho, tiende a configurarse sobre dos cámaras, una más amplia, o “baja” de representación poblacional, y otra reducida o “alta”¹⁴⁵⁵. La primera intentaba guardar un criterio proporcional, según población total del estado, y siguiendo los baremos que cité antes y que resultaban más bien de base amplia. La segunda, en cambio, utilizaba uno sólo o varios de los siguientes criterios, a saber: equiparar la representación de condados u otras demarcaciones, dándolas el mismo peso, establecer mandatos más amplios que en la cámara baja (utilizando, incluso, la renovación rotatoria en porciones), o, en tercer lugar, exigiendo cualificaciones económicas más elevadas que en aquélla para los sufragios activo o/y pasivo. En cualquier caso, lo que existía bajo la exigencia de constituir una cámara alta era fruto del republicanismo clásico. Se trataba de plasmar el *reparto desigual de la virtud*. El problema era el de encontrar el parámetro o indicador que la pudiera señalar. Y esto resultaba muy difícil en una época y rincón del mundo en los que no tenían importancia los títulos nobiliarios y la tierra era más abundante, en donde las jerarquías eclesiásticas se hallaban muy debilitadas, un lugar en donde, en suma, *no existía consenso* social sobre cómo hacerlo¹⁴⁵⁶.

¹⁴⁴⁷ V: 8º,

¹⁴⁴⁸ M: 8, NY: XVII, V: XVII.

¹⁴⁴⁹ CN: XVI.

¹⁴⁵⁰ GA: II.

¹⁴⁵¹ A menudo, “*council*”, acompañado del vocablo “*legislative*” o no, hacía referencia a la cámara alta, no a este tipo de órgano (CS: II, NJ: III, D: 4). Esta es la razón de que las denominaciones varíen correlativamente, para compatibilizar la identificación de ambos institutos.

¹⁴⁵² Por ejemplo, en MD: XXXIII, para reclutar milicia. O el citado caso de MASS, para nombrar cargos públicos (II-I-IX).

¹⁴⁵³ DEL: 8; GA: II.

¹⁴⁵⁴ MD: XXVI.

¹⁴⁵⁵ Sus denominaciones eran muy distintas, así que no voy a abundar en ellas.

¹⁴⁵⁶ En Pensilvania, por ejemplo, el único requisito para el sufragio, y sólo para el de carácter pasivo, era el de haber residido allí durante los dos años anteriores al proceso electoral (*ibid.*, Sección 7). Pese a que se formulara, una vez más, la pretensión antedicha: “[l]a cámara de representantes de los hombres libres de esta república estará conformada por las personas más destacadas en sabiduría y virtud” (*id.*: “[t]he

Así que aunque el entrecruzamiento de aquellos criterios resulte difícil de valorar *a priori*, dado que se mezclaban los referentes a una estructura territorial local con los de cierta restricción del sufragio, resulta claro que en la selección de la cámara alta se intentaba conseguir un resultado que vetara las decisiones de una asamblea popular más fácilmente “excitable”, propensa a dictar resoluciones que, además, fueran contra los intereses de quienes detentaban mejor posición social como propietarios. Existía en este punto la herencia de diversos autores, desde Aristóteles hasta Harrington, que se habían distinguido por su afán de estabilidad política. Sin embargo, tal interés en la permanencia institucional había chocado ya en varias ocasiones, como demuestra el caso de la democracia pericliana y el episodio *leveller*, con corrientes democráticas que estaban dispuestas sacrificar cierto inmovilismo, en aras de transformaciones políticas y sociales. Los niveladores, en concreto, habían buscado resortes para evitar la emergencia de poderes arbitrarios, por mucho que se hallaran legitimados popularmente. Como pronto analizaré, la contradicción entre criterio democrático y separación de poderes conseguirá solventarse, aun con una provisionalidad que llega hasta hoy, aceptando el solapamiento de la problemática territorial norteamericana con el conflicto social en marcha tras el estallido de la contienda secesionista. Un compromiso algo ininteligible para numerosos espectadores europeos, pero que llega hasta el momento presente, y bajo cláusulas de rigidez constitucional ya analizadas por Bryce¹⁴⁵⁷.

Y es que en los albores de la Independencia, numerosos notables de los diferentes territorios miraban con mucho recelo el ascenso de una plebe que observaba como irreflexiva y propensa a medidas de fuerza contra sus posesiones o su rango social. Pero la “era de Paine”¹⁴⁵⁸ estaba en marcha, y el papel de las cámaras altas en la “constitucionalización” fue más bien secundario, pues, predominaron los textos en los que los proyectos de ley se asignaban a las bajas¹⁴⁵⁹, o, al menos, los de tipo financiero¹⁴⁶⁰, o bien ni siquiera existía una segunda asamblea¹⁴⁶¹. Sólo algunas mantenían dos con un mismo papel¹⁴⁶². Asimismo, cualquiera de ambas asambleas detentaban en todos los casos potestades autorganizativas importantísimas, que les permitían elegir sus propios presidentes o *speakers* y organizarse al modo propio, si bien los *quorums* exigidos para que sus

house of representatives of the freemen of this Commonwealth shall consist of persons most noted for wisdom and virtue”).

¹⁴⁵⁷ Bryce, James: *Flexible and Rigid Constitutions* (1884); hay versión cast. (sin indicación del traductor), *Constituciones flexibles y constituciones rígidas*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1988.

¹⁴⁵⁸ John Adams, cit. por Wootton, David: “Introduction. The Republican Tradition: From Commonwealth to Common Sense”, en Wootton (ed.), *op. cit.*, pg. 2,

¹⁴⁵⁹ VA (5º), MD (LX),

¹⁴⁶⁰ NH (3), NJ (VI) y CS (VII).

¹⁴⁶¹ Pensilvania, Georgia y Vermont eran unicamerales.

¹⁴⁶² En CN (X), de manera explícita, y en NY y Mass, implícita.

decisiones de un tipo u otro fueran válidas, solían venir establecidos ya previamente en las constituciones, como ocurría siempre y en todo caso con los requeridos a los consejeros del gobernador. Asimismo, era común señalar fechas específicas (por ejemplo, segundo martes de mayo) para los diferentes procesos de elección, ya fueran a producirse entre la población, ya de los cargos cuya selección se asignaba a miembros de los diversos poderes.

El **poder judicial** no estaba propiamente configurado en los inicios del constitucionalismo estadounidense. Su papel no quedaba nada claro, pero porque tampoco lo estaba esa división tripartita que ahora utilizamos, siquiera entre los autores más leídos por los colonos, como se verá líneas más abajo. La **disparidad de sistemas para seleccionar jueces** resulta llamativa; mientras que en unos casos se combinaba al legislativo y al ejecutivo para su propuesta, nombramiento y cese¹⁴⁶³, en otras el control de tales extremos para los tribunales más altos correspondía a las cámaras y el de los juzgados de paz al gobernador¹⁴⁶⁴; algunas veces todos los órganos jurisdiccionales estaban sometidos a la selección y destitución de las cámaras sólo¹⁴⁶⁵, o bien a las del Gobernador, con asesoramiento del Consejo¹⁴⁶⁶. La intervención popular directa se producía en ocasiones, eligiendo jueces de paz temporales¹⁴⁶⁷. Por lo demás, y en casi todos los supuestos, los jueces y magistrados se mantendrían en su cargo, salvo mala conducta¹⁴⁶⁸, una herencia del *Act of Settlement* británico¹⁴⁶⁹ que garantizaba la inamovilidad de los jueces, promoviendo su independencia. En pocas constituciones se empleó el sistema de nombramiento temporal, con posible reelección, de todos y cada uno de los cargos judiciales¹⁴⁷⁰, como forma de control directa, ineludible y periódica¹⁴⁷¹. También hubo casos en que uno de los tribunales de mayor importancia estaba compuestos por miembros del ejecutivo y/o el legislativo¹⁴⁷².

Los constituyentes de 1787 tomarían el modelo de la separación de poderes que ya había asomado en constituciones como la de Virginia¹⁴⁷³, Maryland¹⁴⁷⁴,

¹⁴⁶³ CS: XIX y XX; DEL: 12, 17 y 23; PA: 20 y 22; CN: XIII y XXXIII.

¹⁴⁶⁴ VA: 12º y 13º.

¹⁴⁶⁵ NJ: XII (por períodos renovables, como P- XXIII, respecto a los magistrados del Tribunal Supremo de allí).

¹⁴⁶⁶ MD: XLVIII.

¹⁴⁶⁷ PA: 30.

¹⁴⁶⁸ CS: XX (los jueces de paz no, vid. XIX); VA:12º (id. que la primera); MD: XL; DEL: 12 y 17 (altos tribunales, jueces de paz lo eran de forma nata los miembros del Consejo y las Asambleas); CN (XIII y XXXIII); VT (XXVII); MASS (III-I)

¹⁴⁶⁹ Vid. *supra*, pg. 256.

¹⁴⁷⁰ NJ: XII. PA: 23 y 30.

¹⁴⁷¹ NY combinaba ambos criterios: XXIV.

¹⁴⁷² CS (XVI), NJ (IX).

¹⁴⁷³ *Bill of Rights*: "Sec. 3: Que los poderes legislativo y ejecutivo del Estado deberían resultar separados y distinguidos del judicial...".

Carolina del Norte¹⁴⁷⁵, Georgia¹⁴⁷⁶ o Massachusetts¹⁴⁷⁷. E incluso, en las restantes, se suponía tal separación, aunque no se mencionara expresamente. Pero, ¿cuál era su significado, en estos documentos? Los dos autores que más influencia ejercieron sobre ellos, Locke y Montesquieu, mantuvieron distintas concepciones, que conviene analizar a continuación.

Empezando por **Locke**, éste señalaba que debido a que las

leyes que son hechas de una vez y en poco tiempo tienen, sin embargo, constante y duradera vigencia y necesitan ser ejecutadas y respetadas sin interrupción, es necesario que haya un poder que esté siempre activo y que vigile la puesta en práctica de esas leyes y la aplicación de las mismas. De ahí que los poderes *legislativo* y *ejecutivo* suelen estar separados.¹⁴⁷⁸

El problema es que Locke no indica *cómo* lo están, es decir, con qué instituciones identificarlos¹⁴⁷⁹. Y el poder *judicial* no aparece en lugar alguno de su libro, pues cuando él escribe la tradición inglesa reúne varios sujetos distintos que imparten “justicia”. Por un lado, tenemos aún restos de aquella fórmula de origen medieval que entendía que el Parlamento, entendido como reunión de Lores, Comunes y monarca, retenía un poder jurisdiccional, inescindible de la aprobación legislativa¹⁴⁸⁰. Asimismo, existen una serie de jueces de paz y magistrados que son nombrados por el Rey o sus delegados más inmediatos, como *el Lord Chancellor*. Y por último, el jurado de los doce hombres buenos de la vecindad. Es decir, que resulta sin duda difícil hablar de un poder judicial como tal, unificado, respondiendo a una

¹⁴⁷⁴ *Declaration of Rights*: “VI. Que los poderes de gobierno legislativo, ejecutivo y judicial, deberían permanecer siempre como separados y distintos entre sí”. El término gobierno se aparta en su significado de su acepción actual en España: “[e]l significado que la palabra gobierno tiene en los idiomas latinos difiere del que la palabra *government* tiene en los países anglosajones. Esta última significa en efecto, grosso modo, lo que en el continente europeo se designa con la expresión régimen político” (Levi, Lucio: “Gobierno” en Norberto Bobbio, Nicola Matteucci, Gianfranco Pasquino, dir., *Diccionario de Política*, vol. I, A-J, Madrid, Siglo XXI, 2000, pg. 710).

¹⁴⁷⁵ *Declaration of rights*: “IV. Que los poderes supremos de gobierno legislativo, ejecutivo y judicial, deberían permanecer siempre separados y distintos entre sí”.

¹⁴⁷⁶ *Constitution*: “art. I. Los departamentos legislativo, ejecutivo y judicial permanecerán separados y distintos, de manera que ninguno pueda ejercer los poderes que pertenezcan propiamente a otro”.

¹⁴⁷⁷ *Declaration of Rights*: “XXX. En el gobierno de esta República, el departamento legislativo nunca ejercerá los poderes ejecutivo y judicial, o cualesquiera de ellos; el ejecutivo nunca ejercerá los poderes legislativo y judicial, o cualesquiera de ellos; el judicial nunca ejercerá los poderes legislativo y ejecutivo, o cualesquiera de ellos; y todo esto, con el fin de que exista el imperio de la ley (*government of laws*) y no de los hombres”.

¹⁴⁷⁸ Locke, *op. cit.*, pg. 151 (párrafo 144). En el capítulo 12: “De los poderes legislativo, ejecutivo y federativo del Estado” (*Commonwealth*, subrayado propio).

¹⁴⁷⁹ Dejo a un lado el “federativo”, porque al fin y al cabo, Locke dice que se encuentra “unido” al ejecutivo (párrafos 145 y 146, pp. 151 y 152), y complicaría inútilmente mi exposición detenerme en él.

¹⁴⁸⁰ Recuérdese que declarar el Derecho y hacer leyes eran uno y lo mismo. Por supuesto, y sobre todo tras las Guerras Civiles, esto resulta cada vez más difícil de sostener, pero aún no imposible, debido a la concepción de un ordenamiento más elevado que el positivo, ya fuera divino o natural. Añádase a tal premisa la posibilidad de acusación y enjuiciamiento llevado a cabo por las cámaras.

jurisprudencia uniforme construida por alguna instancia superior. Este será un invento decimonónico. Lo que existe es una *función* judicial dispersa entre numerosos sujetos¹⁴⁸¹, que Locke *ni siquiera* entiende como poder al modo de los otros dos ya mencionados. Nos hallamos muy lejos de una versión constitucional de índole posterior.

Pero apártese por un momento esta ausencia. Aun sólo con una división bipartita como la que supone reconocer únicamente a un poder ejecutivo y otro legislativo, es importante advertir que del *Segundo Tratado* emerge una poderosa capacidad de abstracción, universalizadora y racionalista, capaz de alargar su brazo a distintas situaciones en diferentes contextos, fuera del específico en el que se ha engendrado. Se trata de un aparato racional aplicado a la política¹⁴⁸², y que intenta la realización del valor de la *imparcialidad*, entendida como fundamento necesario de una justicia que procurará la protección de los derechos a la vida, libertad y propiedad¹⁴⁸³. Y, por tanto, del *bien común*, frenando a cualquier *facción* que pretenda atacarlas. Pero Locke advierte que *no hay un “equilibrio” perfecto entre poderes*. Y ello por dos razones. Por una parte, ya que entiende que el que predomina en sus estructura sólo puede ser el legislador. El legislativo es el “poder supremo”¹⁴⁸⁴. En la Inglaterra de la época, eso supone aludir indirectamente a Lores, Comunes y Rey reunidos. Y, en segundo lugar, y encajando con lo expuesto, porque no deja de ser una *función*, de nuevo, no se encarna en una sola institución concreta separada del resto de las principales que forman el Estado, o como gusta de decir, la *Commonwealth*. Locke, pues, está intentando dilucidar categorías abstractas, conceptuales. Pero no acude a una mecánica “inexorable”. Su alusión a un derecho de resistencia en determinadas situaciones indica que no confía en tal automatismo. Jefferson sería su principal continuador en América¹⁴⁸⁵.

¹⁴⁸¹ En Locke, todo lo más, hay alusiones también aisladas al fenómeno, como lo demuestra el siguiente pasaje, cuando indica que cuando una persona tiene el “supremo poder de ejecución [...], de esa persona derivan sus poderes subordinados, o, al menos, la mayor parte de ellos, *todos los magistrados inferiores a ella*”. Locke, *op. cit.*, pg. 156, parág. 151. El subrayado es propio.

¹⁴⁸² “Una estructura es racional cuando una ordenación de órganos y de actos está establecida de tal manera que conduce a un objetivo previamente fijado, recibiendo todos los elementos de la serie una disposición y un papel funcional con arreglo a la finalidad prevista. La racionalidad tiene un carácter técnico cuando los órganos y los actos están calculados para lograr una unidad de acción; tiene carácter axiológico cuando se calculan para realizar un valor”. García Pelayo, *op. cit.*, pg. 154.

¹⁴⁸³ “El hecho de que los poderes del Estado estuvieran divididos, no era nuevo en modo alguno; pero sí era nuevo el sentido dado a la división, pues ésta no resultará de una mera concurrencia empírica de poderes, sino de un plan para asegurar los derechos individuales” (García Pelayo, *id.*)

¹⁴⁸⁴ Locke, *op. cit.*, pg. 154, parágrafo 149; y pg. 155, par. 150.

¹⁴⁸⁵ Para un estudio concienzudo sobre el virginiano, en relación con los federalistas y otros políticos contemporáneos, pero muy especialmente, en relación con esa premisa lockeana, vid. Rahe, Paul A.: *Republics Ancient and Modern. Inventions of Prudence: Constituting the American Regime*, Vol. III, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1994, pp. 145-183. Una visión general sobre Jefferson, en Weymouth, *op. cit.*; acerca de su pensamiento constitucional, vid. Mayer, David N.: *The Constitutional Thought of Thomas Jefferson*, Charlottesville, University Press of Virginia, 1994.

A este modelo le vino a suceder otra influencia también palpable en los textos constitucionales norteamericanos, la de **Montesquieu**. El francés, de quien por añadidura se harían eco otros autores muy leídos por los colonos, como Bolingbroke, Blackstone o Burlamaqui, vino a formular en su famoso *Espíritu de las Leyes* una teoría que supuestamente habría extraído de la realidad constitucional inglesa. Según el francés, y tal como señala en su Capítulo VI del libro XI (*De la Constitución de Inglaterra*):

Hay en cada Estado tres clases de poderes (*puissance*): el poder legislativo, el poder ejecutivo de los asuntos que dependen del derecho de gentes y el poder ejecutivo de los que dependen del derecho civil.

Por el poder legislativo, el príncipe, o el magistrado, promulga leyes para cierto tiempo o para siempre, y enmienda o deroga las existentes. Por el segundo, dispone de la guerra y de la paz, envía o recibe embajadores, establece la seguridad previene las invasiones. Por el tercero, castiga los delitos o juzga las diferencias entre particulares. Llamaremos a éste *poder judicial*.¹⁴⁸⁶

Así que el autor distingue, de nuevo funcionalmente, una serie de poderes, pero *introduce el judicial con entidad propia*. En un hipotético caso extremo, estarían todos en manos de una sola persona. Tal fenómeno resultaría enteramente rechazable, pues para Montesquieu el valor principal es “la libertad política [...] con relación a la constitución”¹⁴⁸⁷. Ésta

depende de la tranquilidad de espíritu que nace de la opinión que tiene cada uno de su seguridad. Y para que exista la libertad es necesario *que el Gobierno sea tal que ningún ciudadano pueda temer nada de otro*.¹⁴⁸⁸

De manera que “aun cuando un hombre tuviese en Inglaterra tantos enemigos como cabellos tiene en la cabeza, no le pasaría nada”¹⁴⁸⁹. Resulta claro, pues, que Montesquieu está defendiendo aquí ni más ni menos que a una *estabilidad constitucional* anclada sobre la absoluta obstaculización del predominio de *facción política* alguna en el Estado. En el modelo ideal que va a describir, nadie estará

¹⁴⁸⁶ Montesquieu, *op. cit.*, pg. 115. El subrayado es propio.

¹⁴⁸⁷ Capítulo I del mismo Libro (*op. cit.*, pg. 113). Distingue esta libertad de la “libertad política” que también pueda existir “con relación al ciudadano”, y protegida por la tipificación en leyes penales (según un modelo muy beccarista), de acuerdo con la alusión que allí mismo hace al contenido del libro XII. Este otro tipo de libertad política, no hay que olvidarlo, resulta también muy importante para Montesquieu. La libertad política, pues, en conjunto, es lo más valioso para él en su *Espíritu*.

¹⁴⁸⁸ Cap VI del mismo Libro (*op. cit.*, pg. 115). Subrayado propio.

¹⁴⁸⁹ Id., nota 34.

sometido a la arbitrariedad de posibles enemigos políticos y/o sociales. Se trata de una idea de inspiración *netamente republicana*. A continuación, Montesquieu expone cuál sería la fórmula para hallar aquel fin:

cuando el poder legislativo está unido al poder ejecutivo *en la misma persona o en el mismo cuerpo*, no hay libertad porque se puede temer que el monarca o el senado promulguen leyes tiránicas para hacerlas cumplir tiránicamente.

Tampoco hay libertad si el poder judicial no está separado del legislativo ni del ejecutivo. Si va unido al poder legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, pues el juez sería al mismo tiempo legislador. Si va unido al poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor.

Todo estaría perdido si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales, de los *nobles o del pueblo*, ejerciera los tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias entre particulares.¹⁴⁹⁰

Este es el modelo ideal difundido por Montesquieu, quien también, como Locke, introduce aquí elementos de racionalización relevantes. Pero su realismo sociológico le impide abstraerse del todo de su contexto. La clave estamental entra por la puerta de atrás, subrepticamente, cuando se refiere precisamente a “los nobles” y “el pueblo”, aspecto que desarrollará algo más adelante, cuando divide el legislativo¹⁴⁹¹. El que lo haga con sigilo, desde luego, indica un cambio de situación con respecto a épocas anteriores. La teoría del gobierno mixto se está difuminando, perdiendo sus contornos y transformándose en la **separación de poderes**, que aflora con fuerza en los siguientes párrafos:

es una experiencia eterna, que todo hombre que tiene poder siente la inclinación de abusar de él, yendo hasta donde encuentra límites [...] Para que no se pueda abusar del poder es preciso que, *por la disposición de las cosas, el poder frene al poder*.¹⁴⁹²

¿Qué “disposición”? Montesquieu nos lo aclara un poco más adelante:

¹⁴⁹⁰ Ibid., pp. 115 y 116 (en el mismo cap., el VI del libro XI). Subrayado propio.

¹⁴⁹¹ “Hay siempre en los Estados personas distinguidas por su nacimiento, sus riquezas o sus honores, que si estuvieran confundidas con el pueblo y no tuvieran un voto como los demás, la libertad común sería esclavitud para ellas y no tendrían ningún interés en defenderla, ya que la mayor parte de las resoluciones irían en contra suya. La parte que tomen en la legislación debe ser, pues, proporcionada a las demás ventajas que poseen en el Estado, lo cual ocurrirá si forman un cuerpo que tenga derecho a oponerse a las tentativas del pueblo, de igual forma que el pueblo tienen derecho a oponerse a las suyas.

De este modo, el poder legislativo se confiará al pueblo de nobles y al cuerpo que se escoja para representar al pueblo; cada uno de ellos se reunirá en asambleas y deliberará con independencia del otro, y ambos tendrán miras e intereses separados”. Ibid., pg. 118 (en el mismo cap., el VI del Libro XI).

¹⁴⁹² Cap. IV del Libro antedicho. *Op. cit.*, pg. 114. Subrayado propio.

He aquí, pues, la constitución fundamental del Gobierno al que nos referimos: el cuerpo legislativo está compuesto de dos partes, cada una de las cuales tendrá sujeta a la otra por su mutua facultad de impedir, y ambas estarán frenadas por el poder ejecutivo que lo estará a su vez por el legislativo.¹⁴⁹³

Esta es la estructura de la separación de poderes que va a gravitar sobre las constituciones norteamericanas. La teoría de Montesquieu sobrevive, así pues, gracias a concebir una distribución y coordinación combinadas de forma orgánica¹⁴⁹⁴, que servirá a nuevos propósitos en América, ya despojada del equilibrio social de matriz estamental. Tal extensión de su influencia va a poder manifestarse con mas fuerza, por añadidura, gracias al relieve que el francés vino a conceder al poder de enjuiciamiento. Ningún autor lo había hecho bajo un esquema de separación constitucional como el perfeccionado en su obra, poniéndolo al mismo nivel que los otros dos¹⁴⁹⁵. Siempre mantuvo un intenso recelo del predominio del legislativo que había auspiciado Locke, como se ha visto.

Por tanto, puede sostenerse que en el constitucionalismo norteamericano hay influencias de estas dos corrientes, con puntos en común, pero de índole distinta. Locke, dadas su teoría contractualista y su hincapie en unos derechos naturales del individuo, es más afín a cierto liberalismo emergente. Montesquieu resulta, de otra parte, inclinado al institucionalismo, a dilucidar cómo construir un edificio que evite, de forma inexorable y por su propio mecanismo interno, la arbitrariedad de cualquier sujeto con potestades en el Estado. Los derechos y libertades tiene importancia para él, dados los excursos que realiza en el *Espíritu* sobre una legislación respetuosa con muchos de ellos, pero su alusión resulta más implícita que explícita. Justo lo contrario de lo que ocurre con el inglés, que se centra en remacharlos, aunque deje sin suficientes aclaraciones su teoría constitucional. Montesquieu asume un curioso híbrido de republicanism, Antiguo Régimen y garantías procesales. Locke pulsa las cuerdas de un liberalismo que prefiere la libertad personal a cualquier otra consideración y al que no preocupa tanto la existencia de facciones rivales que hagan peligrar el Estado. En común tienen una preocupación por las pasiones y su

¹⁴⁹³ Capítulo VI, Libro XI, *ibid.*, pg. 121.

¹⁴⁹⁴ Blanco Valdés, Roberto L.: *El valor de la Constitución*, Madrid, Alianza, 2006, pg. 86.

¹⁴⁹⁵ Es más, mantiene alusiones imprecisas al jurado, como en este pasaje: "El poder judicial no debe darse a un Senado permanente, sino que lo deben ejercer personas del pueblo, nombradas en ciertas épocas del año de la manera prescrita por la ley, para formar un tribunal que sólo dure el tiempo que la necesidad lo requiera" (*ibid.*, pg. 116).

desconfianza de la naturaleza del hombre¹⁴⁹⁶, que *tenderá* a abusar de su posición política inevitablemente. Su afán es, así, el de poner límites al poder, una vez más. La diferencia estriba en que Locke, más cercano aquí a los niveladores, es proclive a recurrir al pueblo como último depositario del poder, mientras que Montesquieu intenta buscar las garantías alrededor de un resorte relojero.

Ambos autores influirán en el Nuevo Mundo, como se ha podido comprobar líneas más arriba, si bien con líneas dispares.

5) **declaración de derechos.** La Constitución de Virginia de junio de 1776 vino a incluir un elemento muy importante añadido en su encabezamiento, una Declaración de Derechos o *Bill of Rights*. Su antecedente estaba en la Gloriosa de 1688, pero retenía la influencia aún más directa de las *Resolutions* del *Stamp Congress* de 1765. Fue escrita principalmente por George Mason, aunque Madison influyera en su contenido¹⁴⁹⁷. El modelo era novedoso en el sentido de que recogía, en un solo documento, tanto una serie de derechos que hoy calificaríamos de “fundamentales”, como, a continuación, los apartados o artículos referentes a la organización político-institucional. El contenido de los primeros influiría en el de la Declaración de Independencia de agosto, como demuestra una comparación, aun somera y superficial, de ambos textos. Y si bien no cabe olvidar que ambos se hallaban ligados a las Resoluciones antedichas de 1765 y, en general, a las célebres listas de agravios presentadas por los norteamericanos a la Corona¹⁴⁹⁸. En cualquier caso, la fórmula bicéfala fue adoptada por varias de las Constituciones que vinieron después de la virginiana, como las de Maryland, Pensilvania, Carolina del Norte, Vermont y Massachusetts, e influiría en la futura Carta federal¹⁴⁹⁹. Asimismo, y esto debe subrayarse, las constituciones estatales que no dispusieron de una *Bill of Rights* en su cabecera, *también* contuvieron una serie de derechos que se entendían debían ser respetados por el poder político. Lo que ocurrió, simplemente, es que su inclusión no se previno en una parte específica. Así, es fácil percatarse de que todo el resto de los documentos de la etapa que analizo, los de New Hampshire, Carolina del Sur, New

¹⁴⁹⁶ ¿Corrupta por el pecado original? Para los griegos, corrupta cuando el hombre es débil y se somete a las pasiones. En cualquier caso, la consecuencia es la misma: debe controlarse a los gobernantes en Atenas y también en América.

¹⁴⁹⁷ Rutland, Robert A.: “Bill of Rights and the First Ten Amendments to the Constitution”, en Greene y Pole (eds.), *op. cit.*, pp. 272-74.

¹⁴⁹⁸ De hecho, el recital de agravios aparece en casi todas las Constituciones aquí analizadas, por añadidura, a modo de justificación para establecer todo un nuevo sistema político.

¹⁴⁹⁹ Delaware también aprobó una Declaración de Derechos, pero optó por ubicarla separada de la Constitución, en una ley propia que se promulgó tan sólo un día después de esta última. Vid. Saladino, Gaspare J.: *Delaware (Armed in the Cause of Freedom)*, en Conley, Patrick T., y Kaminski, John P. (eds.): *The Bill of Rights and the States (The Colonial and Revolutionary Origins of American Liberties)*, Madison, Rowman & Littlefield, 1992, pg. 294

Jersey, Delaware, Georgia y New York, también reconocían derechos a sus ciudadanos. Algo que era común a todas las colonias, lo que ocurre es que algunos sintieron la necesidad de darles una presencia más vistosa y elocuente, hacer hincapié en su relevancia, dedicarles una posición eminente y formando un todo particular. Algunos autores contemporáneos, como Edmund Burke, podían entender que provenían de una tradición histórica insoslayable¹⁵⁰⁰, pero como los colonos ya habían percibido que su vulneración se producía demasiado a menudo, optaban ahora por reflejarlos en el frontispicio de su sistema de autogobierno. Y no sólo eso. En realidad, muchas de tales libertades *no estaban en aquella herencia, respondían a una configuración reciente*. O bien tenían un contenido distinto, se habían transformado. Así, la libertad de prensa (*freedom of press*) era nueva, aunque proviniera de la libertad de expresión en el Parlamento (*freedom of speech*)¹⁵⁰¹, y lo mismo ocurría con la libertad de conciencia (*liberty of conscience*), en relación con la tolerancia religiosa. Igual que la exigencia de hacer públicas las sesiones legislativas¹⁵⁰². La crueldad de las penas (*cruel and unusual punishment*) era ahora entendida de una forma más extensa y menos restringida que en el pasado inglés, aunque su interdicción se formulara en una declaración de los Loes que databa de 1316¹⁵⁰³. La apertura hacia los derechos del sistema político norteamericano fue, pues, novedosa y arrojada, sin precedentes en la historia anterior. Emergía con fuerza el desarrollo de una auténtica “lengua de los derechos”¹⁵⁰⁴, que surgían para fortalecerse, incluso frente a poderes legitimados democráticamente. Se iban a mostrar como herramienta de combate político intenso. El precedente de las Declaraciones, el *Bill of Rights* de 1688, no lo olvidemos, había sido proclamado por un Parlamento, a fin de poner límites a la actuación de la Corona. Pero que se elaboraran ahora otros tantos para limitar *a todos los poderes instituidos*, era algo cuyo único episodio anterior sólo puede ser encontrado en los *Agreements levellers*. Iban dirigidos a toda la comunidad dirigida a autogobernarse, no a monarca alguno, ya fuera como petición, exigencia o recital de agravios.

¹⁵⁰⁰ Albert, Peter J., y Hoffman, Ronald: *The Bill of Rights. Government Proscribed*, Charlottesville, Virginia University Press, 1997, pg. 32.

¹⁵⁰¹ Madison señaló que no estaba en la “constitución” británica, como tampoco la libertad de conciencia. Hoffman y Albert, *op. cit.*, pg. 34.

¹⁵⁰² Vid. XV, Constitución de NY.

¹⁵⁰³ Primus, *op. cit.*, pg. 81.

¹⁵⁰⁴ Según manifiesta el propio título de la obra de Primus citada. Y, desde luego, téngase en cuenta que no existían otros configurados de manera reciente por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, como ocurre con el “derecho a la privacidad”, sólo remotamente conectado con la prohibición de registros de domicilios particulares bajo mandatos de tipo general (*general warrants*, vid. *supra*, pg. 313).

Sin ánimo de ser prolijo, paso a detallar la lista de los que más a menudo aparecían¹⁵⁰⁵:

- 1.- vida, libertad, propiedad y búsqueda de la felicidad (*life, liberty, property and happiness*)¹⁵⁰⁶. VA, PA, DEL, MD, VT, MASS.
- 2.- derecho del pueblo a cambiar su gobierno (*right of people to change government*). VA, PA, MD, VT, MASS.
- 3.- libertad de culto (*free exercise of religion*) DEL, MD, CN, VT, MASS; NJ (XVIII), GA (LVI), NY (XXXVIII)¹⁵⁰⁷.
- 4.- libertad de conciencia (*freedom of conscience*)¹⁵⁰⁸ VA, PA, DEL, MD, CN, VT, MASS; NJ (XVIII), NY (XXXVIII).
- 5.- libertad de expresión (*free speech*) PA, VT.
- 6.- libertad de prensa (*free press*) VA, PA, DEL, MD, CN, VT, MASS; GA (LXI)
- 7.- derecho de reunión (*right to assemble*) VA, MD, CN, VT
- 8.- petición y objeción (*petition and remonstrance*) VA, PA, DEL, MD, CN, VT.
- 9.- portar armas (*bear arms*) para defender a la comunidad. PA, CN, VT, MASS
- 10.- derecho a no alojar tropas en tiempo de paz (*no quartering in peacetime*) DEL, MD, MASS.
- 11.- prohibición de alojamiento de tropas sin garantías (*no quartering without warrant*) DEL, MD, MASS.
- 12.- derecho a no declarar contra sí mismo, a la no “autoincriminación” (*self-incriminate*) VA, PA, DEL, MD, CN, MASS.

¹⁵⁰⁵ Incluyo las referencias a Delaware, pese a ser de una Declaración de Derechos que fue aprobada de manera separada al del resto de la Constitución (vid. *supra*, pg. 373, nota 1499). Asimismo, señalo, tras punto y coma, las constituciones que sin contener *Declaration of Rights*, incluían el derecho en cuestión, junto con la indicación del precepto correspondiente, a fin de facilitar su búsqueda, ya que están mezclados con preceptos de índole político-organizativa. Por añadidura, la libertad de que se trate aparece expresada con su habitual denominación original en inglés, entre paréntesis.

¹⁵⁰⁶ Siempre se mencionaban en todos los casos, partiendo de que el hombre era “igual por naturaleza”, aunque no se acertara a reconocer específicamente tal derecho específico a la “igualdad”, y aunque fuera posible deducirlo como principio valorativo de estos incisos y de otros referentes a la supresión de títulos nobiliarios (Constitución de G en XI, Declaración de CN en XXII), prohibición de privilegios personales o corporativos (*Bill de V*, 4, o *Declaration de MD*, VI) y cargos heredados (V, 4, CN, ya citado, MASS, id.), así como de la exigencia de contribuir a las cargas comunes en *proporción* a los ingresos o riquezas de cada uno (VT, IX, y MASS, I-I-IV), o la exigencia de que cada elector sólo pueda emitir un voto (GA, ya citado), o la prohibición de fuero especial para ministros de culto (*Declaration de CN*, XXXIV). En general, asimismo, tanto las constituciones como las declaraciones tenían como sujeto al que iban dirigidas al *freeman*.

¹⁵⁰⁷ Por supuesto, esto inclinaba a tomar medidas equivalentes en el ámbito del sufragio de los cultos, adoptando la postura de que si se obligaba a satisfacerlo, se pudiera elegir la confesión (MD, en XXXIII; VT, III; GA, en LVI; MASS, en III de su *Declaration*). NY, a fin de conseguir la separación entre Iglesia y Estado, optaba por impedir en su *frame of government* que fueran elegidos para ocupar cargos públicos quienes ya detentaran la condición de ministros de culto (XXXIX), al igual que la el *Declaration de CN* (XXXI).

¹⁵⁰⁸ Este derecho se entendía como prohibición de obligar a una persona a sostener un culto que no fuera el suyo.

- 13.- proceso acorde a Derecho, o “proceso justo” (*due process of law*). VA, PA, DE, MD, CN, MASS.
- 14.- compensación por expropiación (*compensatory for property taken*). MD, CN, VT, MASS.
- 15.- prohibición de fianzas excesivas (*excessive bail*) VA, DEL, MD, CN, MASS; GA (LIX).
- 16.- prohibición de castigos crueles e inusuales (*cruel and unususal punishment*) VA, DEL, MD, CN, MASS.
- 17.- prohibición de registros y embargos (*search and seizure*) de tipo genérico. VA, PA, DEL, MD, CN, VT, MASS.
- 18.- proceso público y sin dilaciones indebidas (*speedy and public trial*) VA, PA, DEL, MD, CN, VT, MASS.
- 19.- informar sobre la acusación (*told nature of crime*) VA, PA, DEL, MD, CN, VT, MASS.
- 20.- careo (*confronted with accusers*) VA, PA, DEL, MD, CN, VT, MASS.
- 21.- proponer testigos para la defensa procesal (*witnesses for defense*) VA, PA, DEL, MD, VT, MASS; NJ (XVI).
- 22.- derecho a asesoramiento legal (*right to counsel*) PA, DEL, MD, VT, MASS; NJ (XVI).
- 23.- jurado (*jury*) VA, PA, DEL, MD, CN, VT; NJ (XXII), NY (XLI).
- 24.- derecho a no satisfacer impuestos sin consentimiento previo (*no taxation without consent*). VA, PA, DEL, MD, CN, VT, MASS.
- 25.- elecciones libres (*free elections*). VA, PA, DEL, MD, CN, VT, MASS.
- 26.- elecciones frecuentes (*frequent elections*). VA, PA, DEL, MD, CN, VT, MASS.
- 27.- inexistencia de ejército permanente (*no standing army*) VA, PA, DEL, MD, CN, MASS.
- 28.- control civil de la milicia (*civil control of military*). VA, PA, DEL, MD, CN, MASS.
- 29.- prohibición de leyes de excepción (*no martial law suspending laws*) VA, DEL, MD, CN, MASS.
- 30.- prohibición de obligar a tomar las armas (*no compulsion to bear arms*) para defender a la comunidad. VA, PA.
- 31.- prohibición de leyes retroactivas (*no ex post facto laws*) DEL, MD, CN, MASS.
- 32.- prohibición de acusaciones asamblearias por traición o felonía, de carácter penal (*no bills of attainder*) MD, MASS.
- 33.- *habeas corpus*. VA, PA; GA (LX).
- 34.- prohibición de cobro por administrar justicia (*justice not sold*) DEL, MD, MASS.

- 35.- ubicación del proceso en lugar que no suponga largos desplazamientos (*location of trial convenient*) MD, MASS.
- 36.- jueces y tribunales independientes (*independent judiciary*) DEL, MD, MASS.
- 37.- derecho a que se acuda de forma recurrente a los principios constitucionales (*recurrence to fundamental principles*). VA, PA, CN, VT, MASS.
- 38.- reuniones frecuentes del legislativo (*frequent meeting of legislature*) DEL, MD, MASS.
- 39.- libre expresión en el seno de las cámaras (*free speech in legislature*). MD, MASS.
- 40.- prohibición de monopolios (*no monopolies*). MD, CN.
- 41.- derecho a la aplicación del *common law* (*right to common law*). MD; NJ (XXII), DEL (25), NY (XXXV)¹⁵⁰⁹.
- 42.- derecho a emigrar (*right to migrate*) en busca de la felicidad propia. VA, PA.
- 43.- dar instrucciones a los representantes (*instruct their representatives*). PA, CN, VT.

Como puede apreciarse, todos estos derechos incluidos en los textos constitucionales, muy especialmente en las *Declarations of Rights*, aunque no únicamente, fueron de diferente tipo, incluyendo tanto los de carácter personal, como otros atribuidos a la comunidad de individuos. Muchos de ellos ya estaban en los *Agreements levellers*¹⁵¹⁰. En realidad, como puede deducirse de un análisis más o menos atento, los colonos no establecieron en sus textos distinciones analíticas como las que hoy empleamos¹⁵¹¹. Su amalgama, venía, en cualquier caso, a proteger una serie de situaciones que los americanos veían como *valiosas, moralmente defendibles*. Legitimidad democrática, libertades individuales, e incluso progreso educativo y virtud cívica, iban de la mano en aquellas Constituciones como un todo difícil de escindir¹⁵¹². Tan sólo que, existiendo posibilidades de que los sujetos que ejercieran el poder colectivo, pese a la legitimidad de origen en su ejercicio, quisieran perjudicar a la comunidad, y por ende, al ciudadano, era necesario trazar barreras contra su actuación. Bien común y libertad están indisolublemente unidos en el

¹⁵⁰⁹ En general, se venía a indicar, sin embargo, que cedía ante la propia Constitución o legislación futura que lo modificara (vid., así, en NJ, DE, o NY). Asimismo, en los casos de NJ y MD se enlazaron, en el mismo precepto, con el derecho al jurado.

¹⁵¹⁰ Vid. *supra*, I.2.3. y I.2.3.5.

¹⁵¹¹ Como las de derechos políticos, individuales o sociales. De los primeros en realizar una separación fue Constant, al distinguir los derechos de participación en la cosa pública de aquellos netamente individuales. Vid. al respecto, Sauca Cano, Jose María: *La ciencia de la asociación en Tocqueville. Presupuestos metodológicos para una teoría Liberal de la vertebración social*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1995, pp. 445-50.

¹⁵¹² Es nítida la herencia de un discurso cívico y republicano sobre la virtud en el apartado XIV de la Declaración de Derechos de Pensilvania (y copiado en el XVI de VT y el XVIII de MASS): “una firme adherencia a la justicia, la moderación, temperancia, industria y frugalidad, es absolutamente necesaria para preservar las bendiciones de la libertad, y mantener un gobierno libre”. Asimismo, se contemplaba la creación de escuelas públicas en los *frames of goverment* de PA, CN, GA, VT y MASS.

esquema democrático del autogobierno, siendo su auténtico enemigo el abuso del poder que intenta cruzar límites ineludibles, acordes con la naturaleza y el Derecho. Apenas se vislumbra aún el conflicto entre legitimación democrática de la decisión colectiva y derechos individuales, todavía ocupa su lugar el existente entre pasiones humanas y bien común. El cambio sobrevendrá, sobre todo, a la hora de construir una nueva Constitución nacional. En realidad, con ella los norteamericanos intentarán conseguir algo que no se habían planteado antes, salvo parcialmente, en su combate contra la metrópoli. En 1787 iban a edificar un modelo que permitiera cambios paulatinos para reacomodar una y otra vez y sin descanso el continuo reajuste entre derechos y mayoría¹⁵¹³, siguiendo el hilo conductor que ya habían detectado en la *autonomía personal*¹⁵¹⁴. Algo que ni los atenienses, por mencionar un precedente ilustre, ni mucho menos aún la República romana, podían haber siquiera soñado. Su fundamento era el desarrollo de las atribuciones tanto jurídicas como políticas que la favorecieran, y que tan bien había simbolizado el *freeman* de su venerada Inglaterra.

6) En gran parte de las Constituciones se observa que existe cierta **rigidez** que las distingue de las leyes ordinarias, e incluso del *common law*. Así, ya la de New Jersey, en su apartado XXIII, al final del texto, señala que si la reconciliación con Gran Bretaña fuera imposible, permanecería “firme e inviolable”¹⁵¹⁵. Pero es que la de Maryland indicaba que “no debería ser alterada, modificada o abolida, sino por el legislativo de este Estado, y en la forma que esta Convención prescriba y establezca” (XLII). Delaware a su vez determinaba (art. 30) que no podría ser violada la declaración de derechos, ni ciertos artículos de la propia Constitución, y que los

¹⁵¹³ “Los derechos o, por así decirlo, su contenido, se expanden al mismo ritmo al que se expande la riqueza material y cultural de una sociedad”. Hierro, Liborio: “El concepto de justicia y la teoría de los derechos”, en Colomer, José Luis, y Díaz, Elías (eds.): *Estado, justicia, derechos*, Madrid, Alianza, 2002, pg. 51.

¹⁵¹⁴ La autonomía en la acción sería “condición de la responsabilidad moral”, añadiendo valor “a las acciones y compromisos que proceden de ella”. Poseería “valor en sí misma, tanto en lo que contiene de actividad de juicio reflexivo y de evaluación de planes y formas de vida como en lo que supone al contribuir a hacernos, en gran medida, autores de nuestra propia vida” (Colomer, Jose Luis: *Libertad individual y límites del derecho. El liberalismo y sus críticos*, en Colomer y Díaz, eds., op. cit., pg. 197). Esta filosofía liberal podría engarzarse con otra de cuño democrático, a través de una construcción como la del profesor Hierro: “la justificación de un orden legal deriva de que es necesario para el desarrollo de la autonomía individual; se asume en segundo lugar, que la justificación (o legitimidad) de la competencia normativa deriva de la autonomía de los destinatarios de las normas (del consentimiento); y se asume, por fin, que las normas son justas si y sólo si tienen como contenido la protección y la promoción de esa misma autonomía”(ibid., pg. 33). De acuerdo con este esquema, pues, la autonomía está íntimamente ligada al sistema democrático. De forma parecida opina el profesor Laporta: “el propio proceso democrático tenía que recurrir para legitimarse a sí mismo a la invocación y reconocimiento de exigencias morales de igualdad básica y autonomía individual. Y son estas exigencias éticas, articuladas como derechos, las que constituyen a su vez el núcleo justificatorio de esos catalogos de derechos fundamentales que se han extendido y popularizado con el nombre de *derechos humanos* o *derechos del hombre*” (“Ética y Derecho en el pensamiento contemporáneo”, en Camps, Victoria (ed.), *Historia de la Ética*, Vol. III, Barcelona, Crítica, 2000, pp. 292 y 293).

¹⁵¹⁵ “*Firm and inviolable*”.

restantes preceptos de esta última sólo sería posible alterarlos o abrogarlos con el consentimiento de “cinco séptimos de la asamblea y siete miembros del consejo legislativo”. Pensilvania, por su lado, señalaba explícitamente en la Sección 46 de su texto que “la declaración de derechos es parte de la constitución de esta república, y que nunca debería ser violada por persona alguna”, admitiendo una reforma de sus normas supraleales, en general, sólo si se reunía una convención al objeto de aprobar enmiendas (*amendments*, Sec. 47). La Constitución de Carolina del Norte reiteraría un poco más tarde esa inviolabilidad de su *Declaration of Rights* (XLIV), y la de Georgia su superioridad frente a las “leyes y regulaciones” que fueran “incompatibles (*repugnants*) con el auténtico objeto y significado de cualquier regla o regulación contenidas” en ella, al margen de que se pudiera alterar, de nuevo, mediando la convención reunida a tal fin (LXIII). El texto de Vermont establecía, como los de Pensilvania y Carolina, señalaría que la *Declaration of Rights* era parte de la Constitución y resultaba inviolable (XLIII), y prevenía la reforma convencional también (preámbulo, XLIV). Massachusetts, con el documento mejor estructurado de todos, y en el que los derechos ocupaban una Primera Parte del mismo, determinaría en su *Frame of Government* (Part. II), Capítulo VI, un sistema de enmiendas como el del texto pensilvano.

De resultados de este breve análisis, por tanto, se advierten los intentos por conservar el rasgo de la permanencia, de manera que existan en forma estable unas reglas del juego político comunes a todos los actores de la misma índole¹⁵¹⁶. En consonancia con esta premisa, la intención reside aquí en frenar cualquier contienda entre facciones que de al traste con la supervivencia de la comunidad, o bien que conduzca a la hegemonía despótica de una de ellas. Estas preocupaciones son comunes a todos los norteamericanos y heredadas del sistema británico. Se han podido analizar en los puntos anteriores diversos mecanismos conducentes a tal fin, con origen en los viejos regímenes e la Antigüedad (elección popular de cargos públicos o magistraturas, su temporalidad, incompatibilidades, rotación, potestad de veto), pero nunca como hasta el momento americano se había llegado a establecer el triunfo de la legitimidad popular y con una extensión tan amplia de los derechos de sufragio activo y pasivo. Así, pues, este principio es el que originara la técnica de la “convención” popular, que ya había sido señalada por el Congreso Continental para

¹⁵¹⁶ De modo que, como dice el profesor Moreso: “si las decisiones colectivas son susceptibles de ser afectadas por la debilidad de las voluntades concurrentes, entonces es razonable pensar en introducir mecanismos procesales para la toma de decisiones que introduzcan la racionalidad indirectamente” (Moreso, José Juan: *La Constitución: modelo para armar*, Madrid, Marcial Pons, 2009, pg. 129).

elaborar las constituciones estatales¹⁵¹⁷, imitando su propia conformación. Se trataba de la reunión para deliberar de un grupo de personas elegidas en los condados y demarcaciones de cada territorio estatal, *con el fin* de aprobar por último aquel documento básico. Inmediatamente después, quedaban emanados de tal acto decisorio diversas instituciones, legislativo bicameral y ejecutivo, principalmente, resultando la separación de poderes que arriba cité¹⁵¹⁸. Se trataba, pues, de unir una división diacrónica del poder con otra sincrónica. La diacrónica se produciría porque, una vez conseguido su objeto, la convención desaparece como tal, y ya no vuelve a reunir ese poder decisorio supremo hasta que el pueblo elija nuevos delegados para tal ejercicio, es decir, en terminología posterior, hasta que vuelva a surgir de nuevo como *constituyente*.

Pero ahora aparece otro elemento girando en torno a la permanencia, a la estabilidad política que pretende obtener una constitución. Pues ocurre que, aunque arrancaran de la tradición inglesa, nunca los derechos habían obtenido un reconocimiento tan amplio y robusto, tan presente en el ordenamiento, saliéndose asimismo del estrecho marco de los privilegios al estilo medieval, esos de los que se gozaba por *status* o concesión (*gift*). Ahora se universalizaban. Y conformaban, con el correspondiente *frame of government*, una fórmula expresada por escrito que ofrecía una seguridad jurídica de carácter extraordinario, la Constitución, norma suprallegal considerada más importante que las expedidas por las cámaras legislativas al uso. Esta es la raíz de un modelo moderno cuyos precedentes ya he examinado. Pero no debo dejar a un lado la indicación de que ese concepto aún se está abriendo paso con dificultades y tanteos. Se ha sobrepasado 1776, pero todavía no 1787, y mucho menos, 1807 (*Marbury v. Madison*). Hay una fase inicial del fenómeno, pero la norma de normas no era entendida de una sola pieza, a la manera en que ahora intenta consignarse, sino que alrededor gravitaban muy a menudo, no sólo las referencias a leyes “naturales”, sino también a la tradición inglesa. El propio hecho de que los *Bill of Rights* arriba mencionados fueran declaraciones, nos conduce a evitar concebir un monolito normativo supremo trabado en forma inexorable, sino con una cierta apertura a dimensiones no tan estrictamente reguladas. Sí se podía hablar de tal certeza en cuanto a la organización del poder. Pero en lo relativo al otro gran componente constitucional que se abría paso, los derechos, la indefinición sobre cómo se iban a proyectar en el nuevo marco político y jurídico aún era muy grande. Más si cabe que la actual, por cierto. Suzanna Sherry señala que “la constitución escrita o Carta servía

¹⁵¹⁷ Se hace alusión a estas instrucciones en casi todas ellas, y en todas, aparece reflejada la aprobación del documento por una “*convention*”, o en terminología equivalente, un “*congress*”.

¹⁵¹⁸ Por ejemplo en NH asumía los poderes de la única cámara representativa dispuesta en el esquema constitucional.

como la única fuente o ley fundamental para determinar la estructura interna del gobierno, pero no para describir su manera de relacionarse con la ciudadanía”¹⁵¹⁹. Sin llegar a extremar esta precaución académica, sí coincidimos con ella en que, observando los fallos judiciales previos a 1787, es fácil percatarse de que aún subsiste en ellos la concepción de una constitución como algo más bien similar a lo que Bolingbroke había definido tiempo ha en Inglaterra: un conjunto de “leyes, instituciones y costumbres derivadas de ciertos principios estables de la razón, dirigidos a determinadas metas inmutables del bien común, y que componen el sistema general con respecto al que la comunidad ha acordado resultar gobernada”.

II.2.2. La necesidad de un gobierno nacional: el fracaso de la Confederación y la emergencia de un gobierno fuerte

A partir del 7 de junio de 1776, cuando el delegado sureño Richard Henry Lee demandó una independencia completa de Gran Bretaña, las esperanzas sinceras de muchos líderes coloniales en torno a una reconciliación con la metrópoli irían perdiendo pie definitivamente. Así que el Congreso optó por poner en marcha la redacción de unas normas que sirvieran para mantener unidas a las trece colonias alrededor de cierta estructura organizativa común. Su precedente más inmediato se encontraba en el Plan de Albany de 1754, diseñado por Franklin para hacer frente a indios y franceses, y que había sido abortado por la Corona¹⁵²⁰. Y, por supuesto, en los textos de Rhode Island y Connecticut¹⁵²¹. Tras un debate entre los estados, y en el que se producirían enfrentamientos sobre cuántos votos debían ser asignados a cada uno de ellos, y si tal extremo se determinaría considerando su población esclava también, el documento final, conocido como los Artículos de la Confederación¹⁵²², preveía que ésta mantuviera el monopolio de la defensa y las relaciones exteriores (art. VI) y otorgaba un voto a cada uno de aquéllos (V). Precisamente este último punto tuvo que redactarse así para evitar en la medida de lo posible la disensión, ya que algunos mantenían que debía estimarse el peso poblacional de cada estado, y aquí en seguida surgían desvanencias entre los pequeños y los grandes, así como sobre si se debía computar a la población esclava, lo cual creaba enfrentamientos entre los que utilizaban abundante mano de obra de tal carácter y los que, o apenas lo hacían, o eran abolicionistas. El cómputo de número de habitantes, asimismo, influía

¹⁵¹⁹ Sherry, Suzanna: “The Founder’s Unwritten Constitution”, en *The University of Chicago Law Review*, Volume 54, nº 4, 1987. Pg. 1135.

¹⁵²⁰ Para más detalle, vid. Lutz, *op. cit.*, pg. 127-129.

¹⁵²¹ Vid. *supra*, II.1.1.2.c).

¹⁵²² Suscrito por los representantes estatales el 15 de noviembre de 1777, y ratificados por el último de ellos, Maryland, el 1 de marzo de 1781. Vid. en <http://avalon.law.yale.edu/18th_century/artconf.asp>.

en el debate acerca de la carga financiera a soportar. El art. VIII consideró que, a este último efecto, debía estimarse el valor de las tierras en cada Estado, teniendo en cuenta los inmuebles o mejoras en ellas, de acuerdo con un baremo que establecería periódicamente el Congreso. Sus decisiones, en general, se tomarían por nueve votos al menos (IX-XI), si bien era necesaria la unanimidad para enmendar el documento (XIII), estableciéndose una unión “perpetua” (*perpetual*, id.) que sería identificada como “Estados Unidos de América” (I). Cada estado retenía “su soberanía, libertad e independencia, y todo poder, jurisdicción y derecho que no hayan sido delegados de manera expresa a los Estados Unidos reunidos en Congreso” (art. II)¹⁵²³. Los diferentes estados entraban así en “una liga de amistad mutua, con el fin de sostener su defensa común, la seguridad de sus libertades (...) prestándose asistencia frente a toda fuerza o ataque dirigido contra ellos” (art. III)¹⁵²⁴. Asimismo, se configura una “ciudadanía” de la Confederación, al indicarse en el art. IV que “los libres habitantes de cada uno de los estados (...) tendrán atribuidos todos los privilegios e inmunidades de ciudadanos libres que existan en los diversos estados...”¹⁵²⁵. La extradición automática es también prevista en el mismo precepto: “si cualquier persona culpable o contra la que haya cargos [...] escapara de la justicia, y resultara hallado en otro de los Estados Unidos, quedará, bajo solicitud del gobernador o del poder ejecutivo del estado del que haya huido, capturado y entregado al estado que tuviera jurisdicción sobre la infracción penal. Le será concedido total y completo crédito en cada Estado a los registros, actas y procesos judiciales de los tribunales y magistrados de todos los demás”¹⁵²⁶. Los delegados al Congreso eran nombrados anualmente, según cada estado previera, y si bien siempre era posible su revocación (art. V). De hecho, todas las constituciones existentes contemplaban métodos concretos para su selección. Ni el Congreso ni los estados podrían, asimismo, otorgar título nobiliario alguno, teniendo estos últimos prohibido confederarse entre sí, salvo autorización temporal y material de aquél (art. VI). La Confederación fue un intento de colaboración entre los estados relativamente exitoso, dirigida por un comité interestatal (art. IX) y con un mecanismo de resolución de conflictos de esta índole (id.). Al menos, pudo conducir la guerra y

¹⁵²³ “Each state retains its sovereignty, freedom, and independence, and every power, jurisdiction, and right, which is not by this Confederation expressly delegated to the United States, in Congress assembled”.

¹⁵²⁴ “The said States hereby severally enter into a firm league of friendship with each other, for their common defense, the security of their liberties, and their mutual and general welfare, binding themselves to assist each other, against all force offered to, or attacks made upon them, or any of them.”

¹⁵²⁵ “The free inhabitants of each of these States [...] shall be entitled to all privileges and immunities of free citizens in the several States.”

¹⁵²⁶ “If any person guilty of, or charged with, treason, felony, or other high misdemeanor in any State, shall flee from justice, and be found in any of the United States, he shall, upon demand of the Governor or executive power of the State from which he fled, be delivered up and removed to the State having jurisdiction of his offense. Full faith and credit shall be given in each of these States to the records, acts, and judicial proceedings of the courts and magistrates of every other State”.

asegurar la emancipación americana, siendo representante ante los Estados europeos, tales como sus aliados francés y español, o Suecia y Holanda. Pero se revelaría como insuficiente para otros **objetivos que se convertían en inaplazables, propios de una nación emergente.**

El primero de ellos tenía su raíz en una **importante crisis financiera y fiscal.** Su primer amago se produjo cuando en hacia 1778, aún en plena contienda con Gran Bretaña, una inflación galopante estaba produciendo efectos muy perjudiciales. Ni las medidas de carácter impositivo, ni la demanda o los intentos para fijar los precios, pudieron frenar su alza. La consecuencia es que el ejército se encontró con un suministro mucho menor de pertrechos, la escasez se extendió a la adquisición de alimentos y el dinero pasó a depreciarse extraordinariamente. Ninguna institución de tipo centralizado puso orden en tales circunstancias, y los Estados intentarían solucionar el problema por su propia cuenta, con algunas directrices más o menos escasas del Congreso creado con la Confederación¹⁵²⁷. Sin embargo, el estigma inflacionario seguiría reproduciéndose después de la contienda, alentado por la presión de los deudores sobre los representantes políticos¹⁵²⁸ para que fuera expedido más papel moneda (*paper money*), junto con los correspondientes mandatos legales a los acreedores para que lo aceptaran como medio de pago (*legal tender*). Estos se negaban a aceptar billetes que al cabo del tiempo volvían a perder su valor¹⁵²⁹. Asimismo, tal situación se combinaba perversamente con la desobediencia fiscal, que aumentaba a su vez el déficit público y obligaba a sacar aún más papel moneda, originando un círculo vicioso irrefrenable. La negativa generalizada de los deudores a satisfacer el crédito engendraba conflictos sociales y de carácter seccional muy agudos¹⁵³⁰, sin que hubiera prueba alguna de que fuera a decrecer. Se produjeron así auténticas insurrecciones, como la de Shays, fuente de un pánico muy real entre numerosos acreedores, mercaderes, empresarios e inversionistas¹⁵³¹. Los

¹⁵²⁷ Tras el sitio de Yorktown (octubre de 1781), hubo un auténtico conato de sublevación entre las tropas, debido al retraso en la soldada (Rahe, *op. cit.*, Vol. III, pp. 35 y 36).

¹⁵²⁸ Gargarella, 2000, pg. xxiii.

¹⁵²⁹ El caso se reprodujo de manera especialmente aguda en Rhode Island en 1787 (vid. Morgan, *op. cit.*, pg. 266).

¹⁵³⁰ Kaplanoff, Mark. D.: "Confederation: movement for a stronger union", en Greene y Pole, *op. cit.* pp. 444 y 445. A menudo el préstamo provenía de ciertos territorios, convirtiendo a otros en predominantemente deudores (ibid., pg. 446).

¹⁵³¹ Daniel Shays (1747-1825) fue un veterano de guerra que lideró en otoño de 1786 una insurrección en Massachusetts, motivada por el rechazo a pagar sus deudas por parte de numerosos habitantes de la región. El movimiento cerró diversos tribunales y amenazó con marchar sobre Boston. Resultó dispersado y la represión fue liviana, admitiéndose algunas demandas de los rebeldes, incluso. Vid. Brogan, *op. cit.*, pp. 196 y 197. Sin embargo, hubo otras muchas sublevaciones del mismo tipo: así, en Exeter, New Hampshire, en donde en septiembre de 1786, una multitud enardecida, formada básicamente por granjeros, sitió el legislativo del Estado, exigiendo la cancelación de las deudas existentes (vid. Kaminski

propios gastos del Congreso fueron satisfechos con dificultades, y con ellos el crédito concedido por terceros países. Su capacidad para hacer obligatorio el sistema de recaudación confederal era escasísima, dependiendo siempre de lo que los estados buenamente quisieran cooperar, una colaboración que resultaba muy difícil, dados sus propios contratiempos internos.

El segundo problema al que se enfrentaba la Confederación era la **obstrucción al comercio interestatal**, que a su vez limitaba las posibilidades de hacer frente con éxito al problema financiero. La supuesta ciudadanía común quedaba así bastante malparada, creándose desigualdades originadas por tributaciones y aranceles distintos, e impidiendo el flujo de mercancías que permitieran generar riqueza en la nación¹⁵³².

El tercer factor que traía la coyuntura era el **posible cerco de diversas potencias europeas en la zona**. España había conseguido, entre 1763 y 1783, el territorio de Louisiana y la Florida, poseyendo el control sobre la navegación en el Missisipi y amenazando así los establecimientos norteamericanos del oeste. Francia, asimismo, en caso de conflicto con aquélla, era seguro que no intervendría a favor de los estadounidenses. Por otro lado, y tras el Tratado de Paz de París de septiembre de 1783, los británicos continuaban mostrándose amenazantes, con un comercio protegido de manera rotunda por los ejércitos de la Corona, los territorios de Canadá bajo su cetro, y la negativa a retirarse de algunos bastiones so pretexto del incumplimiento norteamericano de algunas cláusulas del acuerdo citado¹⁵³³. Los indios también eran otro obstáculo a la expansión hacia el oeste, y el comercio con ellos, objetivo a regular de manera que fuera aceptable para todos los colonos. ¿Cómo se produciría la ocupación de nuevos territorios? Incluso, ¿cómo solucionar la disputa por esas tierras entre los Estados ya existentes¹⁵³⁴, o que versaran sobre otras arrebatadas o compradas a los indios o a potencias coloniales europeas?¹⁵³⁵.

y Bernstein, *op. cit.*, pg. 424). Asimismo, ocurrieron incidentes parecidos en Connecticut y Virginia. Vid. Gargarella, 2000, pg. xxiii; así como Morgan, *op. cit.*, pg. 266.

¹⁵³² Klapanoff, *op. cit.*, pg. 449.

¹⁵³³ Vid. Brogan, *op. cit.*, pp. 192 y 193.

¹⁵³⁴ En lugares como Vermont o en otros que reclamaban Pensilvania y Virginia, como el del valle del río Mononhagela, existía la pretensión de configurar nuevos estados, sin contar con que también esa era la ambición de los colonos de ciertas zonas ahora en Tennessee. Los habitantes de zonas fronterizas y los especuladores de tierras solían tener proyectos de este tipo (vid. Adams, Paul Willis, *op. cit.*, pp. 91-93). La expansión hacia el oeste fue una fuente de disputa permanente entre los Estados (vid. Onuf, Peter S.: "The West: Territory, States and Confederation", en Greene y Pole, eds., *op. cit.*, pp. 348-51).

¹⁵³⁵ La situación vino a paliarse, en este último aspecto, con la *Land Ordinance* de 1785, mediante la que el Congreso ordenaba que el territorio cedido por los estados a la Confederación, fuera dividido en municipios de superficie definida y basados en lotes vendidos, con el fin de conformar nuevas repúblicas; pero el paso más importante, fue, sin duda, la Ordenanza del Noroeste (*Northwest Ordinance*) de 1787, que establecía las formas de gobierno básicas que tendrían éstas, típicamente republicano-democráticas. Finkelman y Urofsky (eds.), *op. cit.*, pp. 69 y 70, y 75-79.

Todos **estos elementos parecían empujar a la creación de un gobierno fuerte y estable, con amplias competencias**, que pusiera freno a lo que amenazaba con convertirse en dispersión gradual, o, como gustaban de decir los más conservadores, en “anarquía”. El crédito se encontraba amenazado, el mercado muy débil, la amenaza exterior, militar o mercantil, presente de continuo. Diversos líderes que habían permanecido en el seno de la discusión pública pretendieron una rápida concienciación que hiciera variar el rumbo económico, y por ende social, del país. Los más destacados se hallaban en New York, siendo Philip Schuyler, Gouverneur Morris, y , sobre todo, Alexander Hamilton, sus portavoces, y representaron una facción poco dada a populismos y cercana al modelo financiero inglés. Algún cambio en la situación pareció configurarse con el ascenso a la Superintendencia de Finanzas en mayo de 1781 de Robert Morris, afín a las ideas de los nuevos nacionalistas neoyorquinos. Pero lo cierto es que, y pese a la timidez de sus propuestas reformistas, ancladas sobre todo en un cambio fiscal y la posibilidad de utilizar medios coactivos más rotundos para recaudar impuestos, así como en la creación de un banco nacional, este político no tuvo demasiado éxito. La Confederación estaba lastrada, entre otras cosas, por el impedimento de no producir enmiendas sin unanimidad. El cambio vendría así de la mano de Virginia, un estado que representaba mejor el tipo de pragmatismo que podría variar las circunstancias. Precisamente desde esta perspectiva muy apegada a la realidad del momento, acordaría con Maryland en marzo de 1785 numerosos aspectos sobre la navegación en el Potomac, como la coordinación en las imposiciones fiscales o la jurisdicción. Y lo más, importante, ambos abrieron el comercio a los demás estados durante aquel encuentro celebrado en la casa de Washington, invitando asimismo a Pensilvania a participar en los acuerdos, dada su inmediación geográfica con el río¹⁵³⁶.

James Madison, quien también había jugado un importante papel en la defensa de una unión más cohesionada, sumaría su propia estrategia desde Virginia. En el legislativo de allí formularía la objeción que que aquellos acuerdos debían someterse a la Confederación, dada la prohibición existente en los Artículos de federarse dos o más estados sin su consentimiento. Esta propuesta fue rechazada, pero, y haciendo así gala de su propia astucia, Madison sugirió entonces que se presentaran los acuerdos a todos los demás miembros de la Confederación, a fin de que pudieran juntos renegociarlos y ampliarlos, en una futura y próxima reunión. Tal sugerencia resultó aceptada, celebrándose una Convención en Annapolis en septiembre de 1786, con la participación de ocho territorios más que secundaron la idea. Principalmente, el

¹⁵³⁶ Kaplanoff, *op. cit.*, pg. 453.

eje impulsor incluía a la propia Virginia y los estados costeros con fuertes intereses comerciales. Su éxito fue relativo, pero con la asamblea se sentaron las bases de un proyecto más ambicioso, pues su fruto inmediato resultó ser la convocatoria de otra en Filadelfia en mayo del año siguiente, de la cual, en efecto, saldría la nueva Constitución de los Estados Unidos de América¹⁵³⁷.

II.2.3. Los principales puntos de fricción en el debate constitucional de 1787

La Convención Federal¹⁵³⁸ se reuniría desde el 25 de mayo al 17 de septiembre de 1787, participando en ella doce de los trece estados¹⁵³⁹, y manteniendo en secreto el contenido exacto de sus debates¹⁵⁴⁰. La polémica sobre los intereses en presencia ha perdurado hasta nuestros días, contando con un grupo de investigadores que opinan predominó el capital financiero y comercial¹⁵⁴¹, y otros que enfatizan, sin embargo, la dimensión consensual de sus sesiones¹⁵⁴². Sin ánimo de realizar un estudio sociológico que nos llevaría mas lejos de lo que pretende este trabajo, conviene señalar los puntos principales de partida que vinieron a influir de forma muy relevante en los debates constitucionales de 1787.

Los participantes habían sido en su mayoría miembros del Congreso Continental o bien en el Congreso, bajo los Artículos de la Confederación. Se trataba de juristas, hacendados y mercaderes, sobre todo, y con un nivel de formación más bien elevado¹⁵⁴³. Casi todos los mencionados en anteriores páginas se encontraron

¹⁵³⁷ Ibid., pp. 453 y 454.

¹⁵³⁸ En pasado inglés, habían sido denominadas convenciones a las reuniones del clero o alta nobleza o de ambos, junto con los portavoces del pueblo, y fuera de instituciones en las que participase la Corona (por tanto, eran excepcionales). Así, por ejemplo, la reunión de preladados, nobles y pueblo que aceptó la abdicación de Eduardo II en 1327. A final del siglo XVI, eran reuniones que no tenían encomendado aprobar propuestas del monarca. En 1688, el cuerpo de Lores y Comunes se autodenominó “convención”, hasta que hubo reconocido la coronación que trajo a la casa de Orange. Así que la convención era una especie de Parlamento “imperfecto” a principios de siglo XVIII. Para los colonos americanos el término resultó familiar, bien fuera aplicado al ámbito de la comunidad religiosa bien la reunión de delegados de la unión continental de 1754. Así que los americanos del dieciocho, como sus coetáneos ingleses, vieron la convención como un cuerpo imperfecto que existía fuera de la autoridad regularmente insituida. Aun no considerándose ilegal, pues se relacionaba con el derecho de reunión y las peticiones al rey. Permitió la creación de numerosas asambleas durante la *Stamp Crisis*. Entre los colonos se difundió la idea de que no había más remedio que convocar reuniones desde el momento en que los gobernadores podían disolver cuando quisieran las asambleas generales. Vid. Wood, *op. cit.*, pp. 310-12 y 316.

¹⁵³⁹ Se ausentó Rhode Island.

¹⁵⁴⁰ Rahe, *op. cit.*, Vol. III, pg. 38.

¹⁵⁴¹ El pionero fue Charles A. Beard, con su *An Economic Interpretation of the Constitution of the United States* (1913), quien hoy tendría un importante continuador, aunque con numerosos matices, en el argentino Roberto Gargarella (vid., principalmente, *The Scepter of Reason*, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 2000, así como en *Crisis de la Representación Política*, México D.F., Fontamara, 1997. Gargarella es uno de los principales críticos de la jurisdicción constitucional, si bien desde postulados democráticos.

¹⁵⁴² Lutz (*op. cit.*, passim), Adams (*op. cit.*, passim).

¹⁵⁴³ Kaplanoff, Mark. D.: “The Federal Convention and the Constitution”, en Greene and Pole, *op. cit.*, pp. 457 y 458. Por supuesto, del último dato se deriva que casi toda la tradición política mencionada en el

presentes¹⁵⁴⁴, predominando entre ellos una tendencia nacionalista que pudo establecer la agenda de prioridades sin apenas oposición, y cuyas preocupaciones eran las que acabo de mencionar unas líneas arriba, razón por lo cual querían erigir un gobierno que se dirigiera de forma directa a los estadounidenses, sin la mediación estatal continua. Pero ese nacionalismo incipiente y deseoso de consolidarse hallaba diversos obstáculos. El primer problema con el que se encontró fue precisamente el seccional. Los estados poseían diferente envergadura, tanto en extensión como en número de habitantes. Y con ello, dicho sea de paso, también distintos intereses económicos de carácter regional, ya que existía una dedicación mayor o menor, según lugar geográfico, a ciertas actividades u otras. Todo esto implicaba, desde luego, que los estados pequeños temieran ser engullidos o aplastados por los grandes. Esta fue la cusa principal por la que fracasaría el llamado *Virginia Plan*¹⁵⁴⁵, propuesto el 29 de mayo. Este proyecto, diseñado por James Madison y presentado por Edmund Randolph¹⁵⁴⁶, preveía un legislativo nacional y de carácter bicameral (3), con una cámara baja elegida directamente por los estadounidenses, y otra alta a seleccionar de entre quienes fueran propuestos por los estados, cosa que harían los propios representantes antedichos (4). Siempre todo ello, guardando proporción con el número de habitantes libres de cada estado o con sus aportaciones económicas a la Unión. Asimismo, el Plan preveía un Ejecutivo (7) y Judicatura Nacionales (9) nombradas por el Legislativo, y considerando que la última conservaría su situación mientras mantuviera *good behaviour* (buena conducta). Pero, como ya se ha indicado, los territorios más pequeños se sintieron desprotegidos por el proyecto, más aún considerando que autorizaba a las cámaras

para legislar en todos los casos en los que los Estados por separado resulten incompetentes, o en los que la armonía de los Estados Unidos pudiera ser interrumpida por el ejercicio de la legislación estatal; para vetar todas las leyes aprobadas por los Estados y que en su opinión contravengan los artículos de la Unión; y para demandar la fuerza de la Unión contra cualquier miembro de la misma que no cumpla con los deberes aquí señalados.¹⁵⁴⁷

presente ensayo, y que iba de Aristóteles y Plutarco a Montesquieu, Hume o Pufendorff, pasando por Locke o Sidney, le era muy familiar a todos los constituyentes de la Convención. Vid. al respecto, con detalle, Lutz, *op. cit.*, pp. 138-147.

¹⁵⁴⁴ Hubo importantes ausencias: John y Samuel Adams, Patrick Henry, Jefferson, por diversas razones. Tan sólo rehusó de manera hostil el tercero de ellos. Vid. Brogan, *op. cit.*, pg. 201.

¹⁵⁴⁵ En Finkelman y Urofsky, *op. cit.*, pp. 80-82.

¹⁵⁴⁶ Nacido en 1753 y fallecido en 1813, este jurista comenzó su carrera pública sirviendo como ayuda de camo de Washington en 1775. Fue delegado de la Convención virginiana de 1776, Fiscal General (*Attorney General*) de allí desde 1776 a 1886, miembro del Congreso en 1779, y desde 1781 hasta 1782, así como Gobernador de Virginia de 1786 a 1788. Despues, delegado en la Convención de Annapolis de 1786 y de la Constitucional en 1787. Vid. *Biographies*, en Greene y Pole, *op. cit.*, pg. 771.

¹⁵⁴⁷ "To Legislate all cases to which the Separate States are incompetent; or in which the harmony of the United States may be interrupted, by the exercise of individual Legislation to negative all Laws passed by

El único obstáculo a esta absorción de poderes por el legislativo nacional era el Consejo de Revisión, compuesto por los miembros del Ejecutivo y algunos de la Judicatura Nacional, con el fin de examinar toda resolución del Legislativo, paralizándola si estaba en desacuerdo (que no impidiéndola de manera definitiva, pues las cámaras podían finalmente aprobarla, 8). Por tanto, este Plan se topó con la oposición de los estados más pequeños¹⁵⁴⁸, quienes pusieron en marcha otro el 14 de junio, denominado “New Jersey Plan”¹⁵⁴⁹. Este proyecto reforzaba también una serie de potestades centralizadas, pero conservando la regla de un voto por estado, dentro de un régimen bicameral. También en este Plan se preveía la existencia de una Judicatura federal (5), que sería nombrada por un Ejecutivo a su vez formado por el grupo de personas que designase por el Congreso, y que sería inamovible en tanto en cuanto mantuviera buena conducta (4).

Fue rechazado, iniciándose así enseguida conversaciones que conducirían al “compromiso de Connecticut” de 16 de julio, con el cual los estados acordarían insertar un sistema bicameral en los debates futuros, según el que todos tendrían idéntica representación en la cámara alta y poblacional en la baja, correspondiendo en exclusiva a ésta la potestad de aprobar los presupuestos (money bills)¹⁵⁵⁰. A continuación, se designó un comité (*Comitte of Detail*) al objeto de que elaborara por fin un borrador constitucional, que resultaría expuesto el 6 de agosto. En él quedaron claramente separados los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, el segundo de tipo bicameral. Y si bien en el nuevo esquema se producía un cierto debilitamiento de su hegemonía, dado que ahora, y aunque elegido por él, iba a existir un presidente que dirigiría el gobierno de la nación. El documento, asimismo, fue tolerante con los intereses sureños en mantener el esclavismo, pero la protesta de los estados del norte en coalición con algunos delegados virginianos, hizo que se llegara al arreglo, a finales de agosto, para permitir hasta 1808 el tráfico de esclavos¹⁵⁵¹.

El problema que siguió concurriendo, entonces, fue el de las potestades de carácter presidencial. Ya desde el inicio de los debates convencionales un pequeño

the several States, contravening, in the opinion of the National Legislature, The articles of Union; or any Treaty subsisting under the Authority of the Union-and to call forth the force of the Union, against any Member of the Union, failing to fulfil its duties under the articles thereof”.

¹⁵⁴⁸ No se olvide que los delegados en la Convención lo eran en su condición de representantes de los Estados, no de grupos ideológicos, religiosos o similares propiamente.

¹⁵⁴⁹ Finkelman y Urofsky, *op. cit.*, pp. 82-84.

¹⁵⁵⁰ Kaplanoff, *op. cit.*, pg. 461.

¹⁵⁵¹ *Ibid.*, 462 y 463. Figura en el artículo I, Sección Novena, de la Constitución. Para la traducción se ha recogido el texto de Jorge de Esteban, según la edición mencionada, *supra*, pg. 10. Para el texto original en inglés, vid. <http://avalon.law.yale.edu/18th_century/usconst.asp>.

grupo de nacionalistas, entre los que destacaban James Wilson, Gouverneur Morris¹⁵⁵² y Alexander Hamilton, sostuvieron la necesidad de una administración efectiva cuya existencia sólo podía ser garantizada por un presidente fuerte y con amplios poderes, incluido el de veto, e independiente del legislativo. Pero su opinión quedó al principio apartada y en situación minoritaria, ya que los norteamericanos desconfiaban de esta fórmula tan similar a la experimentada bajo dominio británico. Luego resurgió a finales de agosto. Es entonces cuando comienza a reconsiderarse seriamente y, en efecto, a principios de septiembre se aprueba la configuración básica del sistema¹⁵⁵³ contenido en el artículo II, sección 2, de la Constitución Federal. El Presidente de los Estados Unidos será comandante en jefe de las fuerzas armadas, podrá indultar salvo en casos de responsabilidades oficiales, tendrá capacidad para firmar tratados bajo conformidad de la cámara alta o Senado, y le corresponderá el nombramiento de embajadores, altos funcionarios y magistrados del Tribunal Supremo. El control principal sobre su actuación durante el mandato correspondiente será a través de sus informes al Congreso (art. II, secc. 3) y el posible enjuiciamiento previsto en la Sección 4 del mismo artículo. Como contrapartida, tendrá potestad de veto suspensivo, que sólo podrá ser derribado por dos tercios de cada cámara (Sección 7 del art. I).

El sistema para la elección presidencial provocó discusiones intensas entre los Estados y condujo a formular multitud de propuestas diferentes¹⁵⁵⁴. El motivo fue, una vez más, el de la correlación de fuerzas estatales en presencia. Para algunas era aceptable su selección por los legislativos territoriales, otras sostenían que esto era misión del Congreso, es decir de ambas cámaras, la de Representantes y el Senado, y las había que proponían modelos mixtos o en los que concurrirían los ciudadanos. Una vez acordada la necesidad de un ejecutivo fuerte que hiciera frente a amenazas exteriores, se encargara de las relaciones diplomáticas y dirigiera una administración nacional unificada, faltaba por saber como se garantizaría su independencia de cualquiera de las facciones que habitara el poder legislativo. La solución, amén de su reforzamiento mediante el veto suspensivo mencionado, fue la de que cada Estado nombrase, “del modo que su legislativo disponga, un número de electores igual a total de los senadores y representantes a que el el Estado tenga derecho en el Congreso”, aunque ningún senador, ni representante, ni persona que ocupe un empleo honorífico o remunerado en los Estados Unidos” pudiera “ser designado como elector”. Los

¹⁵⁵² Nacido en Morrisania, New York, y fallecido en la misma localidad, en 1752 y 1816 respectivamente. Jurista y diplomático, Morris destacó como patriota desde el inicio del conflicto con Inglaterra y fue partidario de una centralización más vigorosa. En la etapa del conflicto entre federalistas y republicanos (vid. *infra*), estuvo del lado de los primeros, con lo cual perdió su escaño en el congreso. Vid. “Biographies”, en Greene y Pole, *op. cit.*, pp. 756 y 757.

¹⁵⁵³ *Ibid.*, pg. 465.

¹⁵⁵⁴ Kaplanoff, *op. cit.*, pp. 464 y 465.

electores se reunirían “en sus respectivos Estados” y votarían “mediante papeletas a favor de dos personas” (Presidente y Vicepresidente).

Estos fueron los principales escollos en la Convención norteamericana. El asunto del poder judicial suscitaba aún escaso interés, sin desatar algunos conflictos que acaecerían más tarde, y, desde luego, *sin configuración alguna de una jurisdicción constitucional en sentido estricto*. La Constitución fue aprobada el 17 de septiembre de 1787 por la Convención de Filadelfia. A lo largo de los alienamientos en discusión y votaciones, ninguno de los estados permaneció siempre en minoría, de manera que se forjaron sucesivas coaliciones sin una facción predominante de forma clara en el proceso constituyente. La regla de decisión fue la de la mayoría, pero los delegados intentaron siempre que ésta fuera una de tipo reforzado, con amplio consenso¹⁵⁵⁵. Después vino el proceso de ratificación por cada uno de los estados, que se preveía realizar mediante convenciones elegidas por el pueblo de cada uno de ellos¹⁵⁵⁶. En el artículo VII de la Carta, de acuerdo con el espíritu de los Fundadores, se estableció bastara con la confirmación de nueve Estados para que entrase en vigor. En 1778 ya se había cumplido el requisito, siendo el último en firmar Rhode Island, en 1790¹⁵⁵⁷. Asimismo, en el artículo V del documento se prevía un sistema de reforma rígido, consistente en que “siempre que las dos terceras partes de ambas cámaras” lo juzgasen necesario, el Congreso propondría “enmiendas”, o bien en que “a solicitud de las legislaturas de los dos tercios de los distintos Estados”, mandaría reunirse “una convención con el objeto “ de proponer los cambios. Las enmiendas formarían parte de la Constitución a todos los efectos, siempre que hubieran “sido ratificadas por las legislaturas de las tres cuartas partes de los Estados separadamente”, en el primer supuesto, “o por medio de convenciones reunidas en tres cuartos de los mismos”, en el segundo. La nueva Carta nacional fue fruto de un compromiso, desde luego, que recogía la experiencia constitucional que los Estados habían vivido antes, con un cierto predominio del modelo pergeñado en Massachusetts. Así, se reiteran casi todos los elementos de aquélla, como se deduce de un rápido análisis:

- 1) Legitimidad popular. El texto comienza con la célebre declaración “Nosotros, el Pueblo de los Estados Unidos de América”.
- 2) Sufragio extenso. El documento exigía como únicos requisitos para ser elegido miembro de la Cámara de Representantes haber

¹⁵⁵⁵ Vid. Kaplanoff, *op. cit.*, pp. 458 y 459.

¹⁵⁵⁶ Vid. Dry, Murray: “The Debate Over Ratification of the Constitution”, en Greene y Pole, *op. cit.*, pg. 471.

¹⁵⁵⁷ *Id.*

cumplido “veinticinco años de edad” y sido “ciudadano de los Estados Unidos durante siete años”, y para ser titular del derecho al sufragio activo, se remitía a las “condiciones requeridas para los electores de la Cámara más numerosa de la legislatura local” (artículo I, sección 2). En cuanto al Senado, para formar parte de él, debía haberse cumplido “treinta años de edad” y sido “ciudadano de los Estados Unidos durante nueve años” (id., sección 3). Así, en el ámbito nacional se abandonaban los requisitos de carácter económico, aun con las precauciones de haber detentado durante varios años la ciudadanía y de la elección indirecta por los legislativos estatales para el Senado, tal y como habían hecho algunos estados en sus ordenamientos propios. De idéntica forma ocurre con la elección a Presidente, pues el mismo bastaba con que hubiese cumplido los treinta y cinco años, tuviera la nacionalidad estadounidense en ese momento y hubiera residido en el país durante catorce años, a la que se añadía una vez más la precaución de que fuera elegido mediando compromisarios, es decir, una representación de segundo grado (art. II, sección 1)¹⁵⁵⁸.

- 3) Control de los gobernantes y de los cargos públicos. El juramento o promesa se exigía al Presidente (id.)¹⁵⁵⁹, quien era elegido por cuatro años (art. II, secc. 1), resultando los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado seleccionados por dos y cuatro años respectivamente (Art. I, sec. 2 y 3). Además, este último era renovable por tercios, con un período de transición (I, 3). Por añadidura, “a ningún senador ni representante se le nombrará , durante el tiempo pro el cual haya sido elegido, para ocupar cualquier empleo civil que dependa de los Estados Unidos, [...] y ninguna persona que ocupe un cargo de los Estados Unidos podrá formar parte de cualquiera de las cámaras mientras continúe en funciones” (art. I, sec. 6¹⁵⁶⁰); impidiéndose al Presidente recibir otra remuneración por parte de la nación o de sus Estados, aparte de la que le pueda corresponder como tal (art. II, sec. 1)¹⁵⁶¹ . El *impeachment* o juicio por responsabilidad del Presidente y altos funcionarios nombrados por él, sin connotaciones penales, pero sí

¹⁵⁵⁸ Esteban, *op. cit.*, pg. 429.

¹⁵⁵⁹ Ibid. pg. 430.

¹⁵⁶⁰ Ibid., pp. 425 y 426.

¹⁵⁶¹ Ibid., pg. 429.

con posibles consecuencias destitutorias, y abriendo paso así aun procedimiento criminal posterior (art. III, secc. 4), aparece en las secciones 2 y 3 del artículo I, donde se establece que la cámara baja autorizará su inicio y la alta enjuiciará.

- 4) La separación de poderes aparece también reflejada en el texto. Cada cámara tiene su propias potestades de autorganización (los Representantes, en art. I, sec. 2, los senadores, en la sec. 3 del mismo artículo, y la sec. 5 tiene disposiciones comunes a ambas), así como la inmunidad “en todos los casos, exceptuando los de traición, delito grave y perturbación del orden público”, respecto al arresto “durante el tiempo que asistan a las sesiones de sus respectivas cámaras, así como al ir a ellas o regresar de la mismas”, no pudiendo “ser objeto en ningún otro sitio de responsabilidad alguna con motivo de cualquier discusión o debate en una de las cámaras” (sec. 6)¹⁵⁶². Como se ha visto, además, el Presidente podía vetar las leyes. Y el art. III¹⁵⁶³, sec. 1, confiaba el “poder judicial de los Estados Unidos a un Tribunal Supremo” y a “los tribunales inferiores” que el Congreso insituyera “en lo sucesivo”, resultando que “los jueces, tanto del Tribunal Supremo como de los inferiores, continuarán en sus funciones mientras observen buena conducta y recibirán, en períodos fijos, una remuneración por sus servicios que no será disminuida durante el tiempo de su encargo”. La misión asignada a continuación (sec. 2) era ambiciosa, e iba a originar una evolución de este poder insospechada: “el poder judicial entenderá de todas las controversias, tanto de derecho escrito como de equidad, que surjan como consecuencia de esta Constitución, de las leyes de los Estados Unidos y de los tratados celebrados o que se celebren bajo su autoridad; en todas las controversias que se realicen con embajadores, otros ministros públicos y cónsules; en todas las controversias de la jurisdicción de almirantazgo y marítima; en las controversias entre dos o más Estados, entre un Estado y los ciudadanos de otro, entre ciudadanos de Estados diferentes, entre ciudadanos del mismo Estado que reclamen tierras en virtud de concesiones de diferentes Estados y entre un estado o los ciudadanos del mismo y Estados, ciudadanos o súbditos

¹⁵⁶² Ibid., pg. 425.

¹⁵⁶³ Ibid., pg. 431.

extranjeros”. Ninguna otra Constitución anterior se había atrevido a tanto. Ni siquiera la de Massachusetts, que había llegado a contemplar la posibilidad, y ya harto audaz entonces, de que el legislativo y el ejecutivo pudieran “consultar las opiniones de los magistrados del Tribunal Supremo” de allí sobre “importantes cuestiones legales” (cap. III, art. II).

- 5) la Constitución federal no introdujo *Bill of Rights* alguno, si bien varios de sus preceptos contenían derechos, como era el caso del *habeas corpus* (art. I, sec. 9)¹⁵⁶⁴, la exigencia de juicio previo para dictar condenas y la prohibición de leyes *ex post facto* o que menoscabasen las obligaciones contractuales (id., sec. 10)¹⁵⁶⁵, y la institución del jurado para enjuiciar cualquier delito¹⁵⁶⁶ (art. III, sec. 2). Asimismo, se aludía a que “los ciudadanos de cada Estado tendrán derecho en los demás Estados a *todos los privilegios e inmunidades* de los ciudadanos de éstos” (art. IV, sec. 2)¹⁵⁶⁷. Se acogía una fórmula que permitiera poner en común los derechos existentes en los distintos territorios¹⁵⁶⁸, algo también novedoso.
- 6) La rigidez constitucional era obvia, desde el momento en que se recogía un proceso de enmiendas, ya reseñado, que exigía mayorías amplias. Este mecanismo fue tomado de nuevo de la Constitución de Massachusetts, con alguna innovación propia, como se ha visto, fue uno de los pilares de la noción constituyente. La supremacía normativa aparecía muy claramente en el art. VI: “esta Constitución, y las leyes de los Estados Unidos que se expidan con arreglo a ella, y todos los tratados celebrados o que se celebren bajo la autoridad de los Estados Unidos, serán la suprema ley del país y los jueces de cada Estado estarán obligados a observarlos, aun cuando se encuentre en la Constitución o en las leyes de cualquier Estado alguna disposición que lo contradiga”. El viejo equilibrio de poderes británico quedaba asumido en el nuevo proyecto estadounidense, pero ahora bajo un semblante muy distinto y que irá adaptándose a la coyuntura que toque afrontar, como se analizará a continuación.

¹⁵⁶⁴ Ibid., pg. 427

¹⁵⁶⁵ Ibid., pg. 428.

¹⁵⁶⁶ Ibid., pg. 431.

¹⁵⁶⁷ Ibid., pg. 432. El subrayado es propio.

¹⁵⁶⁸ A la manera en que se pretende hacer hoy con el Derecho comunitario en su derivación hacia los derechos fundamentales.

II.2.4. El *Federalista*

El proceso de ratificación mencionado fue escenario para un combate entre partidarios de la nueva Constitución federal (los “federalistas”) y quienes la rechazaban (“antifederalistas”). Tanto unos como otros eran herederos del legado ideológico constitucional británico. Pero mientras que los segundos permanecían anclados en el canon *whig*, los primeros innovaron en torno a ciertos principios de filosofía política, augurando un sistema distinto a todos los anteriores y logrando el apoyo mayoritario de los estadounidenses al documento de la Convención, no sin diversas vicisitudes y obstáculos. Los federalistas tuvieron como autores principales a Alexander Hamilton, James Madison (ambos presentes en la Convención) y John Jay, quienes, bajo el seudónimo de *Publius*¹⁵⁶⁹, publicarían setenta y siete artículos de octubre de 1787 a mayo de 1788, en tres periódicos diferentes de New York, más otros ocho que saldrán a la luz al publicarse la colección completa en dos volúmenes, casi nada más finalizarse el último de los mencionados¹⁵⁷⁰. El federalismo fue una tendencia política que pretendía erigir un gobierno fuerte y transversal a los Estados, de forma que llegase a actuar de forma directa sobre los ciudadanos:

El gran vicio de raíz que presenta la construcción de la Confederación existente, está en el principio de que se legisle para los ESTADOS o los GOBIERNOS, en sus CALIDADES CORPORATIVAS O COLECTIVAS, por oposición a los INDIVIDUOS que los integran.¹⁵⁷¹

Se trataba, pues, de un federalismo centrípeto y no centrífugo. Los mencionados artículos han sido considerados tradicionalmente como fuentes principales de interpretación para el texto constitucional norteamericano, bajo la denominación de *The Federalist Papers*. Pero lo más importante que cabe destacar es que también abrieron paso a una nueva forma de entender la ciencia política, en consonancia con el *novus ordo seclorum* que emergía de la primera revolución moderna exitosa. La huella del

¹⁵⁶⁹ Extraído del nombre del cónsul de la República romana Valerio Publio (“Públicola”); vid. Plutarco, *Vidas Paralelas*, *op. cit.*, “Públicola”.

¹⁵⁷⁰ Vd. Brogan, *op. cit.*, pg. 207; así como el Prólogo de Gustavo R. Velasco a Hamilton, A., Jay, J., y Madison, J.: *Federalist Papers* (1787-1788); trad. cast. de Gustavo R. Velasco, por donde se cita, *El Federalista*, 2º ed. (1ª, de 1943), México, Fondo de Cultura Económica, 2001, pg. ix. La tarea fue favorablemente comentada por George Washington (Rahe, *op. cit.*, Vol. III, pg. 39). De aquí en adelante, cuando quiera citar esta obra capital, mencionaré el número, así como la página del volumen en castellano. Y cuando sea de relevancia, el que me parece resulta ser su autor: habiendo cotejado varios estudios, y dado que no se sabe con absoluta certeza quien escribía cada uno de los artículos bajo el seudónimo de *Publius*, opto por la versión al respecto de <<http://www.constitution.org/fed/federa00.htm>>, que también utilizo para las referencias en inglés del texto original.

¹⁵⁷¹ *El Federalista* nº 15, pg. 59.

modelo en otras muchas constituciones, especialmente en Latinoamérica, y sin olvidar la estructura comunitaria europea, no puede hacernos dudar de su trascendencia. Al respecto, y como defensa de tal fórmula innovadora, los *Federalist Papers* eran textos vivos, a veces apresurados, que acometían la empresa de convencer a los ciudadanos de toda la Unión de la necesidad de que el documento de 1787 fuera ratificado por todas las convenciones estatales reunidas al efecto¹⁵⁷². Para ello, y no sin gran esfuerzo y sutilidad, debía combinar elementos de la tradición que los colonos habían asumido, con nuevas nociones que permitieran avanzar a una a todos los Estados, garantizando al tiempo la seguridad de los ciudadanos sin perjudicar el ejercicio de su libertades. Asimismo, había que buscar un examen histórico que guiara por dónde no debía marchar la nueva república, al menos, y ya que el camino a emprender ahora no tenía precedentes. Los fundadores de la república norteamericana eran conscientes de estar creando un modelo nuevo¹⁵⁷³, pero eso no les impedía recoger citas históricas y alusiones a la Antigüedad, a ejemplos de las repúblicas europeas que existían habían existido, a los libros y tratados de Harrington, Blackstone, Hume, Locke, Montesquieu, de Lolme. No fueron simples compiladores, pues “lograron [...] una presentación más sistemática de los temas de la ciencia política, ventaja obviamente derivada de la Constitución que formaba la pauta de su trabajo. Enseguida, su tratamiento de esos temas contrasta notablemente con escritos anteriores”¹⁵⁷⁴. Este esfuerzo intelectual venía exigido por la intención de persuadir a una amplia mayoría que consiguiera la promulgación constitucional definitiva. Y, para ello, aun proveniente de un grupo selecto, de una élite política y social, que, nunca lo olvidemos, no podía ser en ningún caso ya aristocrática por sangre, transigieron también con postulados populistas muy extendidos entre los norteamericanos. Los federalistas actuaron a la ofensiva, mientras que los antifederalistas se limitarían a reaccionar contra su avance. La preocupación mayor de los primeros era la estabilidad y el refuerzo gubernamentales, de forma que los problemas que había originado la crisis confederada quedasen eliminados bajo un marco normativo de carácter superior y que no pudiera ser vulnerado con éxito por nadie. Para ello, los federalistas debían aunar la legitimidad popular y los derechos, la erección de una identidad nacional¹⁵⁷⁵ y la conservación de competencias estatales, todo ello inserto en una estructura federal,

¹⁵⁷² “*El Federalista* es menos un tratado de filosofía política compuesto para la posteridad que un trabajo de retórica política dirigido a una audiencia específica” (Rahe, *op. cit.*, Vol. III, pg. 31).

¹⁵⁷³ Rahe, *op. cit.*, Vol. III, pg. 32: pese a la influencia de la Ilustración escocesa en los Fundadores, estos últimos “establecieron tipo de gobierno, al tiempo que configuraban un pueblo”.

¹⁵⁷⁴ Prólogo a *El Federalista*, pg. xiii.

¹⁵⁷⁵ “Aunque es posible que el carácter de nuestros compatriotas no consentirá nunca [...] es razonable esperar, por culpa de los conflictos que surgen poco a poco con motivo de la reglamentaciones de los Estados, que los ciudadanos de cada uno acaben siendo tratados por los otros como extranjeros o extraños”. Hamilton, en *El Federalista* nº 22, *op. cit.*, pp. 86 y 87.

así como la función de legislar, pero también la de gobernar y juzgar en un territorio extenso, los principios republicanos y los liberales, la estabilidad y el cambio, la consolidación de una élite estadounidense y la movilidad social de los habitantes de la Unión. Las ideas básicas del *Federalist* giraban en torno a los siguientes ejes:

a) **la supremacía constitucional.** La primera intención de los constituyentes, apoyada por los federalistas con ahínco, fue la de conseguir un marco normativo que permitiera frenar los problemas y la crisis que vivían los estadounidenses en ese momento. Para ello, quisieron imitar un resorte que ya existía en el ámbito estatal, y que les era tan querido, el de la constitución como *frame of government*. La legitimidad era, de nuevo, pues, popular, tal y como indicaba el preámbulo del texto; el pueblo era quien se autoimponía aquella norma suprema:

NOSOTROS, el Pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una Unión más perfecta, establecer la Justicia, afianzar la tranquilidad interior, proveer a la Defensa común, promover el bienestar general y asegurar para nosotros y para nuestros descendientes los beneficios de la Libertad, promulgamos y sancionamos esta CONSTITUCIÓN para los Estados Unidos de América.

El Federalista nº 39 nos da una idea más definida sobre qué ha de entenderse por “pueblo”:

podemos definir una república, o al menos dar este nombre a un gobierno que deriva todos sus poderes directa o indirectamente de la *gran masa del pueblo* y que se administra por personas que conservan sus cargos a voluntad de aquél [...] Es *esencial* que semejante gobierno proceda del gran conjunto de la sociedad, *no de una parte inapreciable, ni de una clase privilegiada de ella*.¹⁵⁷⁶

La Constitución iba a contener las normas principales sobre este sistema político nacional, estableciendo las atribuciones de los distintos órganos que vendrían a componerlo. Era, pues, primordialmente, un *frame of government*. Su prioridades, las de obstaculizar aquellas fuerzas centrífugas que amenazaban con destruir el desarrollo económico y la defensa frente a enemigos exteriores, así como la de reforzar una administración central creada a tales efectos y dirigida por un jefe del

¹⁵⁷⁶ Pg. 159. El segundo subrayado es propio. El fragmento se basa en Montesquieu, *op. cit.*, pg. 27: “la naturaleza del gobierno republicano consiste en que el pueblo en cuerpo, o ciertas familias, tenga el poder soberano” (Libro III, Cap. II).

ejecutivo con relevante poderes. Junto a ello, urgía mantener representadas las células estatales (Senado), al tiempo que a los habitantes de la Unión (*House of representatives*), y erigir como último guardián de la Carta a los jueces y tribunales del país (principalmente, a la *Supreme Court*). El texto elaborado por la Convención era el último fundamento *normativo* de una comunidad en el concierto internacional, con todas la consecuencias que ello conllevaba:

esta Constitución, y las leyes de los Estados Unidos que se expidan con arreglo a ella, y todos los tratados celebrados o que se celebren bajo la autoridad de los Estados Unidos, serán la suprema ley del país y los jueces de cada Estado estarán obligados a observarlos, aun cuando se encuentre en la Constitución o en las leyes de cualquier Estado alguna disposición que lo contradiga.¹⁵⁷⁷

Así que los Estados Unidos de Norteamérica se engendraban al mismo tiempo que esa ley suprema a la cual estarían subordinadas todas las autoridades, tanto en sus funciones como en la manera básica de desempeñarlas. Se produce un acto fundacional en el que surgen en a la vez sistema político y nación, a través de una norma que someterá a todos de forma común. Por eso a los miembros del Congreso de 17 de septiembre de 1787 se les ha solido llamar “*the Founding Fathers*”.

b) la **convención constituyente**. Por añadidura, esa norma suprema va a resultar ratificada por delegados *expresamente* nombrados para ello por el *pueblo*:

la Constitución habrá de fundarse en el asentimiento y la ratificación del pueblo americano, expresados a través de diputados elegidos con este fin especial.¹⁵⁷⁸

Hasta aquí una irreprochable, desde el punto de vista democrático, legitimidad popular (aunque, luego se mostrará, matizada por una estructura federal novedosa). Pero con este argumento se cuela de rondón otro mecanismo, el de la *rigidez* que impida modificar la Constitución fácilmente¹⁵⁷⁹, persiguiéndose una estabilidad a la que aspiraban los federalistas y sus simpatizantes. “Protege por igual contra esa facilidad extrema que haría a la Constitución demasiado variable y contra esa exagerada dificultad que perpetuaría sus defectos manifiestos”, diría Madison en el *Federalista* n°

¹⁵⁷⁷ Art. VI, Esteban, *op. cit.*, pg. 433.

¹⁵⁷⁸ Hamilton, en *El Federalista* n° 39, pg. 161.

¹⁵⁷⁹ Vid. Bryce, *op. cit.*, *passim*.

43¹⁵⁸⁰. No se trataba, pues, ya sólo de reconocer una supremacía a la norma superior, sino también de ponerla a salvo de reformas más o menos frecuentes, ubicando así la primera piedra para un posterior control de constitucionalidad de las leyes, e imitando el mecanismo de las enmiendas establecido por la Constitución de Massachusetts¹⁵⁸¹:

Siempre que las dos terceras partes de ambas Cámaras lo juzguen necesario, el Congreso propondrá enmiendas a esta Constitución, o bien, a solicitud de las legislaturas de los dos tercios de los distintos Estados, convocará una Convención con el objeto de que proponga Enmiendas, las cuales, en uno y otro caso, poseerán la misma validez como si fueran parte de esta Constitución, desde todos los puntos de vista y para cualesquiera fines, una vez que hayan sido ratificadas por las legislaturas de las tres cuartas partes de los Estados separadamente o por medio de convenciones reunidas en tres cuartos de los mismos, según que el Congreso haya propuesto uno u otro modo de hacer la ratificación; y a condición de que antes del año de mil ochocientos ocho no podrá hacerse ninguna enmienda que modifique en cualquier forma las cláusulas primera y cuarta de la Sección Novena del Artículo primero; y de que a ningún Estado se le privará, sin su consentimiento, de la igualdad de voto en el Senado.¹⁵⁸²

Se produce así una escisión que distingue dos dimensiones del pueblo como sujeto político. Una es la que lo muestra en *potencia*, como sujeto titular de un derecho constituyente. La otra es la referida a su actuación, cuando afirma su *presencia*, a través del ejercicio de aquella facultad. La Constitución entiende que el pueblo se *manifiesta* en el momento en que hay, si no un consentimiento unánime, que sería lo exigido por la teoría del pacto lockeana, sí al menos una mayoría muy reforzada que quiera modificar el texto fundamental. Esta argumentación es contestada por los antifederalistas, e incluso por Jefferson. Entre los primeros, destacó la crítica mayoritarista de Patrick Henry, opuesta al veto que podría ejecutar una minoría de bloqueo:

Una insignificante minoría podría rechazar las enmiendas más saludables. ¿Es éste un modo adecuado de asegurar la libertad pública? ¿Cuál es, Señor, la virtualidad de la democracia? [...] si la aprobación de enmiendas, se deja, Señor, a la veinteava o décima parte del pueblo americano, su libertad habrá desaparecido para siempre.¹⁵⁸³

¹⁵⁸⁰ Pg. 187.

¹⁵⁸¹ Vid. *supra*, pg. 379.

¹⁵⁸² Artículo V. *Op. cit.*, pp. 432-33.

¹⁵⁸³ Cit. en Blanco, *op. cit.*, pg. 126.

La crítica de Jefferson, por su parte, enlaza con la ideología *whig* y el fenómeno de autodeterminación perpetua que favorece:

La cuestión de si una generación humana tiene derecho a vincular a otra no parece haberse planteado [...] creo muy posible demostrar que la mencionada obligación no puede transmitirse [...] nadie puede, por derecho natural, vincular las tierras que ocupe, ni las personas que le sucedieran en su ocupación, al pago de deudas por él contraídas. Pues de lo contrario podría consumir, durante su propia vida, el usufructo de las tierras de varias generaciones venideras; y entonces las tierras pertenecerían a los muertos, y no a los vivos, lo que se opone a nuestro principio [...] Por razones análogas puede demostrarse que ninguna sociedad puede hacer una constitución perpetua, ni tan siquiera una ley perpetua. La tierra pertenece siempre a la generación viviente: pueden, por tanto, administrarla, y administrar sus frutos, como les plazca, durante su usufructo. Son también dueños de sus propias personas y, por consiguiente, pueden gobernarlas como les plazca. Pero personas y propiedades constituyen la suma de los fines del gobierno. Por tanto, la constitución y las leyes de sus antepasados se extinguen, por transcurso natural, con aquellos cuya voluntad les dio el ser. Dicha voluntad pudo preservar el ser hasta que ella misma dejó de ser, y no más. Por tanto, toda constitución, y toda ley, caducan naturalmente pasados treinta y cuatro años [...] Podría alegarse que el hecho de que la generación sucesiva tenga el derecho de derogar la deja tan libre como si la vigencia de la ley se hubiera limitado a treinta y cuatro años [...] Pero el poder de derogar no es equivalente.¹⁵⁸⁴

“Este principio, el de que la tierra pertenece a los vivos y no a los muertos”, se opone al sostenido por los federalistas, y así se lo hará saber Madison a Jefferson en respuesta a la anterior misiva:

¿Un Gobierno reformado con tanta frecuencia no se haría demasiado mutable como para conservar en su favor los prejuicios que la antigüedad inspira y que tal vez constituyen una saludable ayuda para el más racional de los Gobiernos en la más ilustrada era? ¿No engendraría tan periódica revisión facciones perniciosas que de otra manera no podrían cobrar existencia?¹⁵⁸⁵

Jefferson piensa que la contestación a todas estas preguntas es negativa. Los federalistas, jugando con la aprobación ya realizada de forma convencional, un hecho

¹⁵⁸⁴ Carta a James Madison, de 6 de septiembre de 1789, escrita desde París, donde Jefferson era embajador de los Estados Unidos. Vid. Koch y Peden, *op. cit.*, pp. 517-18, y 521.

¹⁵⁸⁵ “Carta a Thomas Jefferson sobre las generaciones”, de 4 de febrero de 1790, en Madison, James: *República y Libertad (Escritos políticos y constitucionales)*, ed., estudio preliminar y trad. de Jaime Nicolás Muñiz, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2005, pg. 102.

consumado, trasladan entonces la carga de la prueba a quienes quisieran cambiar la Constitución. Así, Madison, en la misma carta, habla del asentimiento tácito hasta en tanto en cuanto no halla oposición evidente al texto fundamental¹⁵⁸⁶ y el nº 78 del *Federalista*, de sello hamiltoniano, resulta inequívoco al respecto. Así, a decir de su autor, si bien “el principio fundamental del gobierno republicano” (entiéndase popular, democrático)

reconoce el derecho del pueblo a alterar o abolir la Constitución en vigor [...], sin embargo no sería legítimo deducir de este principio que los representantes del pueblo estarían autorizados por esa circunstancia para violar las prevenciones de la Constitución vigente cada vez que una afición pasajera dominara a una mayoría de sus electores en un sentido contrario a dichas disposiciones [...] Mientras el pueblo no haya anulado o cambiado la forma establecida, por medio de un acto solemne y legalmente autorizado, seguirá obligándolo tanto individual como colectivamente.¹⁵⁸⁷

c) La **separación de poderes**. Los constituyentes se basaron en la separación de poderes ya asumida idealmente en las constituciones estatales¹⁵⁸⁸. Pero, como se ha podido comprobar, sus versiones sobre la misma eran muy distintas. Los federalistas, pese a la relevancia de Locke en la tradición política colonial, se inclinaron por Montesquieu, más concretamente por el modelo que figuraba en la Constitución de Massachusetts. Se trataba de un esquema en el cual, realmente, los tres poderes se entrelazaban, interviniendo unos en el ámbito de los otros, de acuerdo con un sistema de “controles y contrapesos” (*checks and balances*). Así, en el documento nacional, observamos las siguientes potestades:

1.- las del ejecutivo. El Vicepresidente tiene la presidencia del Senado, con voto de calidad en sus decisiones (art. I, sección 3). El Presidente podía designar miembros de esta Cámara si hubiera vacantes durante uno de sus recesos (art. II, Sección 2), así como de recomendar al Congreso medidas (derecho de mensaje, art. II, sec. 3) y convocar y suspender Senado y Cámara de Representantes en ciertas ocasiones (id.), derecho de veto (art. I, sec. 7), o nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo.

2.- del legislativo. El Senado debe dar su consentimiento para que el Presidente pueda nombrar válidamente a los embajadores, ministros plenipotenciarios, cónsules y

¹⁵⁸⁶ Ibid., pg. 104.

¹⁵⁸⁷ Se trata de un precompromiso, pues, al modo de Elster, J: *Ulysses and the Sirenes*, Cambridge, Cambridge University Press, 1979.

¹⁵⁸⁸ Vid. *supra*, pp. 363-67.

magistrados del Tribunal Supremo (art. II, sec. 2). Asimismo, ambas Cámaras pueden vetarse una a la otra (art. I, sec. 7). La Cámara de Representantes es el único sujeto legitimado para acusar por *impeachment* (art. I, sec. 2), y el Senado la que exclusivamente puede juzgar en estos casos (sec. 3).

3.- del judicial. Jurisdicción en única instancia del Tribunal Supremo, en los supuestos en que sean juzgados embajadores, ministros plenipotenciarios o cónsules (art. III, sec. 2). No debe olvidarse asimismo, el control difuso de carácter constitucional ejercido por todos los jueces y tribunales de los Estados Unidos, ya mencionado arriba¹⁵⁸⁹.

Este reparto de facultades fue criticado por diversos adversarios de la Constitución, que pensaron que así no se estaba respetando la configuración propia de Montesquieu¹⁵⁹⁰. Pero Madison va a hacer frente a esta objeción, con su habitual moderación persuasiva:

Una de las principales objeciones inculcadas por los más respetables adversarios de la Constitución es la supuesta violación de la máxima política según la cual los departamentos¹⁵⁹¹ legislativo, ejecutivo y judicial deben ser distintos y diferentes. Dicen que en la estructura del gobierno federal no se ha tenido en cuenta esta precaución esencial a favor de la libertad. Los varios departamentos del poder se hallan distribuidos y mezclados de tal manera que se destruye toda simetría y belleza en el arreglo, exponiendo a ciertas partes esenciales del edificio de verse aplastadas por el peso desproporcionado de otras.

Ninguna verdad política es ciertamente de mayor valor intrínseco, ni está autorizada por tan ilustres defensores de la libertad, como aquella en que se apoya esta objeción. La acumulación de todos los poderes, legislativos, ejecutivos y judiciales, en las mismas manos, sean éstas de uno, de pocos o de muchos, hereditarias, autonombradas o electivas, puede decirse con exactitud que constituye la definición misma de la tiranía. Por lo tanto, si la Constitución federal fuese de veras la causa de una acumulación de poderes o de una mezcla de ellos que

¹⁵⁸⁹ Vid. *supra*, pg. 397.

¹⁵⁹⁰ Existía asimismo una versión radical, hija de la herencia *leveller* y plasmada en la hegemonía del legislativo que habían convalidado las constituciones estatales, muy especialmente la de Pensilvania. Paine, por ejemplo, mostraba las claras reticencias de esta corriente a una división que pudiera recordar algo a la vieja constitución inglesa, con sus lores, comunes y monarca: “[s]i verdaderamente existieran en el mundo dos o más elementos distintos y separados del poder humano, entonces veríamos los diversos orígenes a los que se aplaícían descriptivamente estos términos, pero como no hay más que una especie de hombre, no puede haber más que un elemento de poder humano, y ese elemento es el propio hombre. La monarquía, la aristocracia y la democracia no son más que criaturas de la imaginación, y lo mismo cabe idear mil como tres” (Paine, 1791, pg. 145).

¹⁵⁹¹ Acepto la traducción citada, también en lo relativo a “departamentos”, por *departments* (Nicolás Muñiz escoge el mismo criterio en Madison, *op. cit.*, pg. xlviii), pues en consonancia con lo que expuse arriba sobre el contexto de su utilización, “gobierno” debe entenderse en un sentido amplio, que incluya todos los “poderes”.

ostentase una tendencia peligrosa esa acumulación, sobrarían otros argumentos para infundir a todos la reprobación del sistema. *Sin embargo*, estoy seguro de poner en evidencia lo infundado de este cargo, y que la máxima en que se funda se ha entendido y aplicado de forma completamente errónea. Para rectificar las ideas acerca de este importante asunto, será conveniente investigar *el sentido* en que la conservación de la libertad exige que los tres grandes departamentos del poder sean separados y distintos.¹⁵⁹²

A continuación, pues, Madison se refiere al valor canónico de la *teoría* de Montesquieu al respecto. Dirigiéndose a su concreción práctica, esa Constitución inglesa que el barón tanto admiraba, señala que

el examen mas ligero de la Constitución británica nos obliga a percibir que los departamentos legislativo, ejecutivo y judicial de ningún modo se hallan *totalmente* separados y diferenciados ente sí. El magistrado ejecutivo forma parte integral de la autoridad legislativa. Sólo él posee la prerrogativa de concluir tratados con los soberanos extranjeros, los cuales, ya firmados y con la salvedad de ciertas limitaciones, tienen la fuerza de los actos legislativos. Todos los miembros del departamento judicial son nombrados por él, pueden ser destituidos por él con la aprobación de ambas Cámaras del Parlamento, y componen, cuano quiere consultarlos, uno de sus consejos constitucionales. Una rama del departamento legislativo forma otro gran consejo constitucional del jefe ejecutivo, así como, por otra parte, es el único depositario del poder judicial tratándose de acusaciones contra altos funcionarios, y está investido de la jurisdicción suprema en apelación y en otros casos¹⁵⁹³[...] De estos hechos, que son los que guiaron a Montesquieu, es posible inferir con claridad que al decir: “No puede haber libertad donde los poderes legislativo y ejecutivo se hallan unidos en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistrados”, o “si el poder de juzgar no está separado de los poderes legislativo y ejecutivo”, *no quería decir que estos departamentos no deberían tener una intervención parcial en los actos del otro o cierto*

¹⁵⁹² *El Federalista* n° 47 (pp. 204 y 205). “One of the principal objections inculcated by the more respectable adversaries to the Constitution, is its supposed violation of the political maxim, that the legislative, executive, and judiciary departments ought to be separate and distinct. In the structure of the federal government, no regard, it is said, seems to have been paid to this essential precaution in favor of liberty. The several departments of power are distributed and blended in such a manner as at once to destroy all symmetry and beauty of form, and to expose some of the essential parts of the edifice to the danger of being crushed by the disproportionate weight of other parts.

No political truth is certainly of greater intrinsic value, or is stamped with the authority of more enlightened patrons of liberty, than that on which the objection is founded. The accumulation of all powers, legislative, executive, and judiciary, in the same hands, whether of one, a few, or many, and whether hereditary, selfappointed, or elective, may justly be pronounced the very definition of tyranny. Were the federal Constitution, therefore, really chargeable with the accumulation of power, or with a mixture of powers, having a dangerous tendency to such an accumulation, no further arguments would be necessary to inspire a universal reprobation of the system. I persuade myself, however, that it will be made apparent to every one, that the charge cannot be supported, and that the maxim on which it relies has been totally misconceived and misapplied. In order to form correct ideas on this important subject, it will be proper to investigate the sense in which the preservation of liberty requires that the three great departments of power should be separate and distinct”. Los subrayados son propios.

¹⁵⁹³ Los Lores.

dominio sobre ellos. Su idea [...] no puede tener más alcance que éste: que donde todo el poder de un departamento es ejercido por quienes poseen todo el poder de otro departamento, los principios fundamentales de una constitución libre se hallan subvertidos [...] Si examinamos las constituciones de los distintos Estados [americanos], encontramos que, pese a lo enfático y, en ciertas ocasiones, a lo absoluto de los términos con que se ha establecido este axioma, no hay un solo caso en que los departamentos del poder se hayan conservado completamente aislados y distintos.¹⁵⁹⁴

El sentido inicial de la reflexión madisoniana, es, pues, muy simple; dado que la Constitución que sirvió de modelo a Montesquieu y que de manera tan idónea protegía la libertad¹⁵⁹⁵, contemplaba realmente una separación *parcial* y no completa entre los distintos poderes (y aquí el pensamiento político norteamericano vuelve a sus fuentes inglesas), no cabe acusar a la Constitución federal de desviación tipológica. Ahora bien, queda aún sin aclarar por qué el modelo constitucional norteamericano toma determinada distribución entre los poderes. Pues los ejemplos expresados de la constituciones estatales, obvian que el reparto del peso era diferente en cada una de ellas, y que iba desde la de Massachusetts, parecida al modelo nacional, hasta la de Pensilvania, con hegemonía de un legislativo unicameral. La justificación añadida, pues, surge en el número siguiente del *Federalista*, el 48, donde Madison amplía su discurso:

Todo el mundo está de acuerdo en que los poderes propios de uno de los departamentos no deben ser administrados *completa ni directamente* por cualquiera de los otros. Es también evidente que ninguno de ellos debe poseer, directa o indirectamente, una influencia preponderante sobre los otros en lo que se refiere a la administración de sus respectivos poderes. *No puede negarse que el poder tiende a extenderse y que se le debe refrenar eficazmente para que no pase los límites que se le asignen*¹⁵⁹⁶. Por tanto, después de diferenciar *en teoría* las distintas clases de poderes, según que sean de naturaleza legislativa, ejecutiva o judicial, la próxima tarea, y la más difícil, consiste en establecer medidas prácticas para que cada uno pueda defenderse contra las extralimitaciones de los otros.¹⁵⁹⁷

El objetivo es el de que los poderes puedan controlarse entre sí. ¿En qué basa Madison la superioridad, al respecto, que residiría en la Constitución nacional?. La “mayoría de las constituciones americanas” ha confiado a “unas barreras de

¹⁵⁹⁴ Ibid., pp. 205 y 206. Subrayados propios.

¹⁵⁹⁵ Todo el Libro XI de su *Espíritu de las Leyes* está dedicado a su Constitución.

¹⁵⁹⁶ Que “el poder frene al poder”. Montesquieu, vid. *supra*, pg. 322.

¹⁵⁹⁷ *El Federalista* nº 48, pg. 210.

pergamino la protección contra el espíritu usurpador del poder”, pero no han reparado en que “el *departamento legislativo* está extendiendo por dondequiera la esfera de su actividad y absorbiendo todo dominio en su impetuoso torbellino”. Madison ofrece, pues, argumentos diversos para frenar ese voraz avance. En una república, “la potestad legislativa es ejercida por una asamblea a la que la influencia que piensa tiene sobre el pueblo le inspira una confianza mas intrépida en su propia fuerza”, “puede encubrir, con tanta mayor facilidad, bajo medidas complicadas e indirectas, las usurpaciones que realiza a costa de los departamentos coordinados”, a lo cual ha de añadirse que “es el único que tiene acceso a los bolsillos del pueblo, y posee en algunas constituciones una libertad completa y en todas una influencia preponderante sobre las retribuciones de quienes desempeñan los otros departamentos”. A continuación Madison formula el ejemplo virginiano, citando las *Notas sobre el Estado de Virginia* de Jefferson: “los miembros del judicial y el ejecutivo quedaron bajo la dependencia del legislativo por lo que hace al sostenimiento de sus cargos y algunos para poder continuar en ellos”, y “en muchos casos ha resuelto *sobre derechos* que debían haber sido objeto de una *controversia judicial*, y [...] se está convirtiendo en costumbre el hecho de dirigir al ejecutivo durante todo el tiempo que dura el período de sesiones”¹⁵⁹⁸. El otro ejemplo es el pensilvano, del cual Madison extrae la evaluación realizada por el Consejo de Censores allí instituido, y según el cual “la Constitución fue violada flagrantemente por la legislatura”¹⁵⁹⁹ en una variedad de casos de importancia”, como cuando “un gran número de leyes habían sido aprobadas violando sin necesidad aparente la regla de que *todas las leyes de carácter publico deben ser antes impresas con objeto de que las conozca el pueblo*, a pesar de que ésta es una de las precauciones principales en que la Constitución confía”¹⁶⁰⁰, así como considerando que “el juicio por jurado, establecido por la Constitución, había sido violado, y se había echado mano de poderes no delegados por ésta”, o que “los poderes del ejecutivo habían sido usurpados”, y “los salarios de los jueces, que la Constitución expresamente exige que sean fijos, se habían variado en algunas ocasiones; y los casos pertenecientes al departamento judicial se la habían sustraído

¹⁵⁹⁸ Ibid., pg. 212. Subrayados propios.

¹⁵⁹⁹ También acojo aquí este vocablo que figura en la traducción. *Legislature* equivalía a “legislatura” en el castellano de la época, entendida como órgano legislador, equivalente por tanto a la institución y no a uno de sus mandatos temporales, a “legislativo”, en definitiva. Para no alejarnos en demasía del contexto y el original opto por lo antedicho. Nicolás Muñiz escoge el mismo criterio en Madison, *op. cit.*, pg. xlvii.

¹⁶⁰⁰ Subrayado propio. La publicidad del procedimiento legislativo aparecía, concretamente, en la Sección 14 de la Constitución pensilvana: “Los votos y procedimientos de la asamblea general serán publicados semanalmente durante sus sesiones, incluyendo los pronunciamientos aceptando o rechazando cualesquiera mociones, votaciones o decisiones, siempre que al menos dos miembros lo requieran, y exceptuando en todo caso los supuestos de voto secreto; y cuando se tome nota de las aceptaciones o rechazos así, cada miembro de la asamblea tendrá derecho a incluir las razones de su voto en las actas, si lo deseara”.

a menudo para que conociera de ellos y los resolviera el legislativo”¹⁶⁰¹. La conclusión es clara: “la sola determinación en un pergamino de los límites constitucionales de los varios departamentos no es suficiente salvaguardia contra las usurpaciones que conducen a la concentración tiránica de todos los poderes gubernamentales en las mismas manos”. El reflejar en un documento constitucional la separación de poderes no es suficiente para proteger la libertad; resulta necesario que contemple controles y contrapesos que luego interactúen por sí solos, de manera *automática*, sin necesidad de encontrarse de forma continua con violaciones de la Constitución que tiene difícil respuesta:

el defecto debe suplirse ideando la estructura interior del gobierno de tal modo que sean sus distintas partes constituyentes, *por sus relaciones mutuas*, los medios de conservarse unas a otras *en su sitio* [...] pero la mayor seguridad contra la concentración *gradual* de los diversos poderes en un solo departamento reside en dotar a los que administran cada departamento de los *medios constitucionales* y los *móviles personales* necesarios para resistir las invasiones de los demás. Las medidas de defensa, en este caso como en todos, deben ser proporcionadas al riesgo que se corre con el ataque. *La ambición debe ponerse en juego para contrarrestar la ambición*¹⁶⁰². El interés humano debe entrelazarse con los derechos constitucionales del puesto [...] El hecho de depender del pueblo es, sin duda alguna, el freno primordial indispensable sobre el gobierno; pero la experiencia ha demostrado a la humanidad que se necesitan *precauciones auxiliares*.

Esta norma de acción que consiste en suplir, por medio de intereses rivales y opuestos, la ausencia de móviles mas altos, se encuentra en todo el sistema de los asuntos humanos, tanto privados como públicos.¹⁶⁰³

La visión madisoniana aparece con nitidez. Se trata de una perspectiva teñida de cierta psicología social que aproxima al norteamericano a Bernard Mandeville y Adam Smith. Esto no le hará olvidar, como tampoco le ocurrió al segundo, el importante papel que la virtud cívica podía jugar, pero que ahora aparecía en un segundo plano. Volveré sobre este punto algo más adelante.

En consecuencia,

Si los principios en que se fundan estas observaciones son exactos, como estoy convencido de que los son, y se aplicaran como norma a las Constituciones de los diversos Estados, y a la

¹⁶⁰¹ Ibid., pp. 212 y 213.

¹⁶⁰² “*Ambition must be made to counteract ambition*”.

¹⁶⁰³ Federalista n° 51, pp. 219-21. Subrayados propios.

Constitución federal, se vería que si la última no se apega perfectamente a ellos, las primeras son aún menos capaces de soportar una prueba de esta clase.

Pero, por añadidura, el miedo principal en este ámbito es relativo a los *legisladores*. El defecto de las constituciones estatales es el de que no contempla facultades de autodefensa suficientes de los demás poderes frente al legislativo¹⁶⁰⁴. La federal, por muy imperfecta que resulte, se aproxima en mayor medida al modelo de controles y contrapesos. Madison, impregnado de un poderoso pragmatismo, apoya una Constitución que recorta de manera drástica las potestades del legislativo, respecto a sus antecedentes estatales de carácter territorial. El virginiano, como todos los federalistas y afines, aspira a una estabilidad¹⁶⁰⁵ frente a las amenazas interiores¹⁶⁰⁶ y exteriores¹⁶⁰⁷, el consiguiente refuerzo de la defensa estadounidense¹⁶⁰⁸, a una política fiscal y comercial común¹⁶⁰⁹, a la centralización financiera¹⁶¹⁰, proteger a los acreedores¹⁶¹¹ y evitar la inflación¹⁶¹², así como impedir la

¹⁶⁰⁴ El recelo frente a este poder ya había sido formulado en la Convención, por hombres como Edmund Randolph, Hamilton, Wilson o Gouverneur Morris (Blanco, *op. cit.*, pg. 108, nota 13).

¹⁶⁰⁵ Un buen compendio de sus preocupaciones se encuentra en “Vicios del sistema político de los Estados Unidos (abril de 1787)”, *op. cit.*, pp. 15-24. “Ningún gobierno, como tampoco ningún individuo, será realmente respetable si no posee cierto grado de orden y estabilidad” (*El Federalista* nº 62, Madison, pg. 266).

¹⁶⁰⁶ Rebeliones como la mencionada *supra*, pg. 383, por ejemplo. Madison señala como sexto punto en *ibid.*, pg. 17, este vicio de la Confederación: “[f]alta de garantía de las constituciones y leyes de los Estados contra la violencia interna”.

¹⁶⁰⁷ “La Unión es esencial para la seguridad del pueblo de América contra el peligro extranjero” (*El Federalista* nº 45, *op. cit.*, pg. 195).

¹⁶⁰⁸ “La facultad de reclutar ejércitos se reduce únicamente, por virtud, de la interpretación clara de los artículos de la confederación, al poder de hacer requisiciones en los estados de determinadas cuotas de hombres. En el transcurso de la última guerra, este modo de proceder opuso obstáculos interminables a un sistema de defensa vigoroso y económico” (Hamilton, en *El Federalista* nº 22, pg. 87).

¹⁶⁰⁹ Hamilton señala en *El Federalista* nº 22, que “la ausencia de un poder regulador del comercio” es uno de los problemas que la Confederación no ha podido resolver, siendo el mismo “ocasión de disgusto entre los Estados”. Así, refiriéndose a la diversidad de impuestos indica que “[l]as embarazosas e incíviles reglas de algunos Estados, tan contrarias al verdadero espíritu de la Unión, han dado en distintos casos motivos justificados de queja y malestar a los otros, y es de temer que los ejemplos de esta naturaleza, si no los reprime un régimen nacional, se multipliquen y extiendan hasta convertirse en graves fuentes de animosidad y discordia, así como en perjudiciales obstáculos al intercambio entre las distintas partes de la Confederación” (*op. cit.*, pg. 86). Por el contrario “Un tráfico sin trabas entre los Estados intensificará el comercio de cada uno por el intercambio de sus respectivos productos, no sólo para proveer a las necesidades domésticas, sino para la exportación a mercados extranjeros. Las arterias del comercio se henchirán dondequiera y funcionarán con mayor actividad y energía por efecto de la libre circulación de los artículos de todas las zonas. Las empresas mercantiles dispondrán de un campo más amplio debido a la variedad en los productos de los diferentes Estados. Cuando del producto fundamental de uno se pierda a causa de la mala cosecha o de un cultivo que no dé resultado, podrá llamar en su auxilio al que principalmente rinda otro. La variedad de los productos exportados, no menos que su valor, contribuye a fomentar la actividad del comercio extranjero”. *El Federalista* nº 11 (Hamilton), pg. 45.

¹⁶¹⁰ “El derecho a acuñar no podía producir otro efecto en los distintos Estados que el de multiplicar costosas casas de moneda y diversificar las diversas piezas en circulación”. Madison, en *El Federalista* nº 44, pg. 190.

¹⁶¹¹ “Las leyes que violan los contratos privados y que equivalen a agresiones contra los derechos de los Estados a cuyos ciudadanos perjudican, pueden ser consideradas como otra causa probable de hostilidad entre los territorios; “Hemos notado el afán de represalias excitado por Connecticut a consecuencia de las enormidades perpetradas por la legislatura de Rhode Island, y deducimos lógicamente que, en casos similares y distintas circunstancias, una guerra no de pergaminos, sino armada, castigará tan atroces infracciones de las obligaciones morales y de la justicia social”. *El Federalista* nº 7 (Hamilton), pg. 27.

inseguridad jurídica¹⁶¹³. Su mejor expresión se halla en la Sección 10 perteneciente al artículo I de la propia Constitución federal:

Ningún Estado celebrará tratado, alianza o confederación algunos; tampoco otorgará patentes de corso y represalias; no acuñará moneda, emitirá papel moneda ni legalizará cualquier cosa que no sea moneda de oro y plata como medio de pago de las deudas; tampoco aprobará decretos por los que se castigue a determinadas personas sin que preceda juicio ante los tribunales, leyes *ex post facto* o leyes que monoscaben las obligaciones que derivan de los contratos [...] Sin el consentimiento del Congreso ningún Estado podrá imponer derechos sobre los artículos importados o exportados, salvo los que sean absolutamente necesarios con el fin de hacer cumplir sus leyes de inspección, y el producto neto de todos los derechos e impuestos que establezcan los Estados sobre las importaciones y exportaciones se aplicará en provecho de todo el tesoro de los Estados Unidos; y todas las leyes de que se trata estarán sujetas a la revisión y vigilancia del Congreso.

Sin dicho consentimiento del Congreso ningún Estado podrá establecer derechos de tonelaje, mantener tropas o navíos de guerra en tiempo de paz, celebrar convenio o pacto alguno con otro Estado o con una potencia extranjera, o hacer la guerra, a menos de ser invadido realmente o de hallarse en peligro tan inminente que no admita demora.

Pero todas estas potestades que ahora va tomar en sus manos la Unión, los federalistas son conscientes de no poder sostenerlas sin acudir a la *legitimación popular*, a la democracia representativa que supone la nueva república norteamericana, que se aleja, en esto, pues, de la tradición británica. La Constitución

¹⁶¹² “La ampliación de la prohibición al papel moneda debe complacer a todos los ciudadanos que amen la justicia y conozcan los verdaderos resortes de la prosperidad pública. La pérdida sufrida por América desde que se hizo la paz, debido a los pestilentes efectos del papel moneda sobre la confianza que se debe tener en las asambleas públicas, sobre la industria y la moralidad del pueblo y sobre el carácter del gobierno republicano, constituyen una *neorme deuda* a cargo de todos los estados culpable de esta imprudente medida, y que permanecerá largo tiempo insatisfecha; o más bien una acumulación de delitos que sólo pueden expiarse sacrificando voluntariamente en el altar de la justicia *el poder que ha servido de instrumento de aquéllos*” (es decir, el legislativo). Madison, en *El Federalista* nº 44, pg. 190.

¹⁶¹³ “Los decretos que imponen penas e incapacidades sin juicio previo, las leyes *ex post facto* y las leyes que menoscaben las obligaciones derivadas de contratos, *son contrarios a los principios fundamentales del pacto social* y a todas las reglas de la buena legislación”. Ibid, subrayado propio. La inseguridad jurídica originada por un continuo cambio de leyes que hacía peligrar los derechos, incluidos aquellos de los acreedores, son señaladas de nuevo por Madison en carta a Jefferson; vid. Rahe, *op. cit.*, Vol. III, pg. 37. También: “[l]os efectos internos de una política variable son [...] infortunados, ya que envenena el beneficio de la libertad misma. De poco le servirá al pueblo que las leyes estén confeccionadas por hombres que él ha elegido, si esas leyes [...] se abrogan o revisan antes de ser promulgadas, o sufren cambios tan incesantes que el hombre que conoce la ley hoy, no puede adivinar cómo será mañana. La ley se define como una regla de conducta; ¿pero cómo ha de servir de norma lo que se conoce apenas y carece de fijeza? [...] ¿Qué comerciante prudente arriesgará su fortuna en un nuevo ramo comercial cuando ignora si sus planes resultarán ilícitos antes de que pueda ponerlos en práctica? ¿Qué agricultor o fabricante se esforzará por merecer un estímulo dado a un cultivo determinando o a cierto establecimiento, sino puede tener la seguridad de que su labor preparatoria y sus gastos no le harán víctima de un gobierno inconstante?” (*El Federalista* nº 62, Madison, pg. 265).

en sus principios [...] es puramente democrática, con variaciones en su forma para recabar las ventajas y excluir los inconvenientes propios de las constituciones de gobierno conocidas y establecidas.¹⁶¹⁴

Madison coincide con Wilson:

es evidente que cada departamento debe tener voluntad propia y, consiguientemente, estar constituido en forma tal que los miembros de cada uno tengan la menor participación posible en el nombramiento de los miembros de los demás. Si este principio se siguiera rigurosamente, requeriría que todos los nombramientos para las magistraturas supremas, del ejecutivo, el legislativo y el judicial, procediesen del mismo origen, o sea *del pueblo*, por conductos que fueran absolutamente independientes entre sí.¹⁶¹⁵

Los federalistas, con Madison a la cabeza, entienden que ya no es válida la antigua legitimidad, ni la monárquica, ni la aristocrática (no van a ser aceptadas por los estadounidenses), así que, extrayendo la noción de controles y contrapesos de la antigua constitución británica, van a desprenderla de su componente estamental propio del Antiguo Régimen. Pero, nuevamente, aquella no va a penetrar en el texto federal de una forma absoluta:

algunas complicaciones y gastos suplementarios serían consecuencia de que se llevase a efecto, por lo cual hay que admitir ciertas variaciones respecto del principio.¹⁶¹⁶

¿Qué variaciones? En consonancia con el artículo VI de la Constitución, que consagra la supremacía constitucional, e incluso con la rigidez del art. V, que establece su difícil procedimiento de reforma,

¹⁶¹⁴ Wilson, James: "Discurso inaugural de la Convención de Pensilvania", de 24 de noviembre de 1787, en *Discursos Constitucionales* (estudio preliminar, traducción y notas, de Javier Alcoriza y Antonio Lastra), Madrid, Tecnos, 2003, pg. 58. "Las ventajas de la monarquía son la fuerza, la diligencia y la unidad; sus inconvenientes el dispendio, la tiranía y la guerra. Las ventajas de la aristocracia son la experiencia y la sabiduría que resultan de la educación; sus inconvenientes la disensión de los gobernantes y la opresión del pueblo. Las ventajas de la democracia son la libertad, la precaución, la industria, la fidelidad y la oportunidad de promover los talentos y las habilidades de los ciudadanos sin consideraciones de nacimiento o fortuna; sus inconvenientes son la disensión y la estupidez, pues al requerirse el asentimiento de muchos, sus esfuerzos serán débiles y sus asambleas serán descubiertas muy pronto. Obtener todas las ventajas y evitar todos los inconvenientes de estos gobiernos fue el propósito principal de la última convención" (ibid., pp. 57 y 58).

¹⁶¹⁵ *El Federalista* n° 51, pg. 220

¹⁶¹⁶ Id.

Especialmente por lo que hace a la integración del departamento judicial puede ser inoportuno insistir rigurosamente en dicho principio: primero, porque siendo indispensable que sus miembros reúnan *condiciones peculiares*, la consideración esencial debe consistir en escoger el sistema de elección que mejor garantice que se logran estos requisitos; segundo, porque la tenencia permanente de los cargos que existe en ese departamento debe hacer desaparecer bien pronto toda sensación de dependencia respecto a la autoridad que los confiere.¹⁶¹⁷

Madison ha hallado la clave de la bóveda para el sistema que proponen los federalistas en cuanto a la división tripartita de poderes nacional: la judicatura. Esta brecha, que asume el potencial contenido del art. VI de la Constitución¹⁶¹⁸, también es aprovechada por Hamilton en *El Federalista* n° 78, donde dirá:

La regla que hace de la buena conducta la condición para que la magistratura judicial continúe en sus puestos, representa con toda seguridad uno de los más valiosos progresos modernos en la práctica gubernamental. En una monarquía, crea una excelente barrera contra el despotismo del príncipe; en una república no es menos eficaz contra las usurpaciones y opresiones de la entidad representativa. Y es el instrumento que mejor puede discurrir ningún gobierno para asegurarse la *administración serena, recta e imparcial de las leyes*. Quien considere con atención los departamentos del poder, percibirá que en un gobierno en que se encuentren separados, el judicial, debido a la naturaleza de sus funciones, será siempre *el menos peligroso* para los derechos políticos de la Constitución, porque su situación le permitirá estorbarlos o perjudicarlos en menor grado que los otros poderes. El Ejecutivo no sólo dispensa los honores, sino que posee la fuerza militar de la comunidad. El legislativo no sólo dispone de la bolsa, sino que dicta las reglas que han de regular los derechos y los deberes de todos los ciudadanos. El judicial, en cambio, no influye ni sobre las armas, ni sobre el tesoro; no dirige la riqueza ni la fuerza de la sociedad, y no puede tomar ninguna resolución activa. Puede decirse con verdad que no posee FUERZA ni VOLUNTAD, sino únicamente discernimiento, y que ha de apoyarse en definitiva en la ayuda del brazo ejecutivo hasta para que tengan eficacia sus fallos [...] el departamento judicial es, sin comparación, el más débil de los tres departamentos del poder; que nunca podrá atacar con éxito a ninguno de los otros dos, y que son precisas toda suerte de precauciones para capacitarlo a fin de que pueda defenderse de los ataques de aquéllos.¹⁶¹⁹

¹⁶¹⁷ Id.

¹⁶¹⁸ Vid. *supra*, pg. 393.

¹⁶¹⁹ Pp. 330 y 331. Los subrayados son propios.

Los jueces y magistrados, pues, componen la “*least dangerous branch*”, la “rama menos peligrosa”¹⁶²⁰, capaz de surgir como decisor imparcial entre las otras dos, y, sobre todo, de proteger los derechos de los norteamericanos, siempre y cuando se mantenga *independiente*:

La independencia completa de los tribunales de justicia es particularmente esencial en una Constitución limitada. Por Constitución limitada entiendo la que contiene ciertas prohibiciones expresas aplicables a la autoridad legislativa, como, por ejemplo, *la de no dictar decretos que impongan penas e incapacidades sin previo juicio, leyes post facto y otras semejantes*¹⁶²¹. Las limitaciones de esta índole sólo pueden mantenerse en la práctica a través de los tribunales de justicia.

Pero Hamilton da a continuación un salto aún más audaz:

tribunales de justicia, *cuyo deber ha de ser declarar nulos todos los actos contrarios al sentido evidente de la Constitución*. Sin esto, todas las reservas que se hagan al respecto a determinados derechos o privilegios serán letra muerta.¹⁶²²

Y ello, porque

No hay proposición que se apoye sobre principios mas claros que la que afirma que todo acto de una autoridad delegada, contrario a los términos del mandato con arreglo al cual se ejerce, es nulo. Por lo tanto, ningún acto legislativo contrario a la Constitución puede ser válido¹⁶²³. Negar esto equivaldría a afirmar que el mandatario es superior al mandante [...] en otras palabras, debe preferirse la Constitución a la ley ordinaria, la intención del pueblo a la intención de sus mandatarios. Esta conclusión no supone de ningún modo la superioridad del poder judicial sobre el legislativo. Sólo significa que el poder del pueblo es superior a ambos y que donde la voluntad de la legislatura, declarada en sus leyes, se halla en oposición con la del pueblo, declarada en la Constitución, los jueces deberán gobernarse por la última de preferencias a las primeras. Deberán regular sus decisiones por las normas fundamentales antes que por las que no lo son.¹⁶²⁴

¹⁶²⁰ Así denominó en 1962 a su obra más famosa Alexander Bickel, aludiendo al nº 78 del Federalista.

¹⁶²¹ Subrayados propios: es una clara referencia a la falta de respeto por derechos de propiedad o de crédito de los legislativos estatales cuando expropiaban a personas sospechosas de haber colaborado con los británicos o aprobaban el perdón de numerosos deudores (vid., sobre estos extremos, Gargarella, 2000, pp. xxiii y 37, respectivamente).

¹⁶²² Pg. 332; subrayado propio.

¹⁶²³ Esta noción de validez es precisamente la acuñada por Kelsen.

¹⁶²⁴ Id.

La *judicial review* está a punto de nacer en la práctica. Algo que ya avizoraban los *antifederalistas*, quienes rechazaban esta posibilidad, por muy distintos motivos. El primero de ellos, adelantado por un autor que escribía bajo el seudónimo de *Brutus*¹⁶²⁵, era el amplio poder de decisión que confería la Constitución a los jueces, ya que el según el texto federal:

Los jueces no van a decidir sobre pleitos extrayendo sólo el significado de la constitución en la ley, sino también acudiendo a la equidad.

De acuerdo con tal premisa, estarán facultados para interpretar la constitución de acuerdo con la razón, sin quedar confinados a su letra¹⁶²⁶ [...] Realizarán la interpretación de cada artículo constitucional que pueda venir ante ellos. Y sus decisiones no quedarán restringidas bajo reglas fijas o ya establecidas, sino que surgirán determinadas según lo que les parezca es la razón o el espíritu de la constitución. Las opiniones del Tribunal Supremo, cualesquiera fuesen, tendrán fuerza de ley; porque no hay poder previsto en la constitución que pueda corregir sus errores o controlar sus resoluciones. No existe apelación contra él. Entiendo, de hecho, que la legislatura no puede anular el juicio de este Tribunal, porque éste se halla autorizado por la constitución para tener la última palabra.¹⁶²⁷

Lo cual no parece encajar en absoluto con la separación de poderes:

la competencia propia del poder judicial, en cualquier gobierno, es, si no entiendo mal, declarar cuál es la ley del país. Explicar y hacer que se cumplan estas leyes, que el poder supremo o legislatura hubiera aprobado; pero no el declarar cuáles son las facultades de la legislatura.¹⁶²⁸

¹⁶²⁵ En opinión de la mayoría de los investigadores, se nos informa en la *web* de *Constitution Society*, <<http://www.constitution.org/afp/brutus00.htm>>, el autor de este panfleto era Robert Yates, delegado en la *Federal Convention*, y aliado del antifederalista gobernador de Nueva York, George Clinton.

¹⁶²⁶ “*The judicial are not only to decide questions arising upon the meaning of the constitution in law, but also in equity. By this they are empowered, to explain the constitution according to the reasoning spirit of it, without being confined to the words or letter*”. *Brutus* n° 11, de 31 de enero de 1788, en Borden, Morton (ed.): *The Antifederalist Papers*, Ann Arbor, Michigan State University Press, 1965, en *Constitution Society*, <http://www.constitution.org/afp/brutus11.htm>>). A continuación expone de manera más definida lo que se entiende tradicionalmente por “equidad”, de acuerdo con un pasaje de Blackstone referente a Grocio: la corrección de una interpretación inicial acorde con la ley, pero que al aplicarse estrictamente, desafiaría la universalidad predicable de la norma. Es relativa a esa serie de casos en los que la regla a imponer, si el legislador hubiera previsto la consecuencia de su aplicación, la hubiera formulado de manera distinta. Se trataría de extraer “la esencia” de la ley con esta operación.

¹⁶²⁷ “*They will give the sense of every article of the constitution, that may from time to time come before them. And in their decisions they will not confine themselves to any fixed or established rules, but will determine, according to what appears to them, the reason and spirit of the constitution. The opinions of the supreme court, whatever they may be, will have the force of law; because there is no power provided in the constitution, that can correct their errors, or controul their adjudications. From this court there is no appeal. And I conceive the legislature themselves, cannot set aside a judgment of this court, because they are authorised by the constitution to decide in the last resort*”. *Id.*

¹⁶²⁸ *Brutus* n° 13 (21 de febrero de 1788, op. cit.: “[t]he proper province of the judicial power, in any government, is, as I conceive, to declare what is the law of the land. To explain and enforce those laws, which the supreme power or legislature may pass; but not to declare what the powers of the legislature are”).

Pero es que, además, su preeminencia va a ser especialmente clara, considerando su permanencia en el puesto, elemento que impulsará a los magistrados a extender sus facultades más allá de los límites inicialmente previstos:

Todos aquellos investidos con un cargo permanente conforman un poder tenaz; se sienten interesados, y esto ha venido a ser una suerte de máxima, en transmitir sus puestos a quienes surjan como sucesores, con todos los correlativos derechos y privilegios, de manera que permanezcan incólumes; el mismo principio influirá en ellos a fin de extender su poder, e incrementar sus derechos; todo esto implicará que los tribunales den un significado a la constitución en todas las ocasiones en que tengan oportunidad, y amplíen así la esfera de su propia autoridad.¹⁶²⁹

Se ha intentado imitar así, un modelo específico, el británico, que se halla en un contexto muy diferente:

Los jueces en Inglaterra, es verdad, mantienen sus cargos mientras que observen una buena conducta, pero aun entonces sus decisiones se halla subordinadas a la corrección de la Cámara de los Lores; y, por añadidura, su poder no resulta en modo alguno tan extenso como el que ahora se ha propuesto para el Tribunal Supremo de la Unión [...] el principal motivo para que los jueces en Gran Bretaña deban mantener sus puestos mientras observen buena conducta, es el de ubicarles fuera de la influencia de la Corona [...] pero tal criterio no resulta aplicable a este país, ya que no tenemos una monarquía hereditaria, y quienes nombran a los jueces no disponen de cargos vitalicios ni los transmiten en herencia a sus hijos [...] La única cláusula en la constitución que prevé el cese de los jueces en sus puestos, es la que declara que “el presidente, vicepresidente, y todos los funcionarios de los Estados Unidos serán destituidos mediante *impeachment*, si se les declarara culpables de traición, corrupción u otros crímenes o faltas” [...] Los errores judiciales o el abandono de funciones no se hallan aquí incluidos [...] En Inglaterra los jueces no sólo se hallan subordinados al criterio que sobre sus decisiones siente la Cámara de los Lores, sino que, además, en lo supuestos en que ofrezcan una interpretación sobre las leyes o la constitución del país, y que ésta resulte contraria al sentir del Parlamento, aunque dicho órgano no anulará la resolución del tribunal, tiene autoridad para interpretar mediante una

¹⁶²⁹ Brutus n° 11, op. cit.. “Every body of men invested with office are tenacious of power; they feel interested, and hence it has become a kind of maxim, to hand down their offices, with all its rights and privileges, unimpaired to their successors; the same principle will influence them to extend their power, and increase their rights; this of itself will operate strongly upon the courts to give such a meaning to the constitution in all cases where it can possibly be done, as will enlarge the sphere of their own authority”.

ley nueva otra anterior, impidiendo así que sean vinculantes las aquellas resoluciones judiciales.¹⁶³⁰

Con todo ese poder, además, sólo se puede esperar el atropello de ciertos derechos por los que se había combatido contra los británicos. Con este sistema podría haber personas “sometidas a un largo y ruinoso confinamiento, expuestas a duras e insoportables cargas, a procurar la asistencia de sus testigos, así como a disponer de los medios para su defensa, a gran distancia de sus hogares”¹⁶³¹, bajo una “administración de justicia intolerablemente gravosa, intrincada y dilatoria”¹⁶³².

Los antifederalistas, pues, fieles a sus premisas favorables al autogobierno local y la supremacía *whig* del legislativo, rechazan el cobijo que puedan tener jueces y tribunales bajo la nueva Constitución federal como portadores de la última palabra en las controversias de índole constitucional. Esa usurpación de facultades impediría una auténtica separación de poderes, en resumidas cuentas.

Frente a esta postura, Hamilton tiene clara la función de los jueces:

no es sólo en el caso de las infracciones a la Constitución como la independencia de los jueces puede constituir una salvaguardia esencial contra los efectos de esos males humores circunstanciales que suelen penetrar a la sociedad. En ocasiones, éstos no van más allá de perjudicar en sus derechos privados a una clase determinada de ciudadanos, por medio de leyes injustas y parciales. Aquí también reviste gran importancia la firmeza de la magistratura al mitigar la severidad y limitar el efecto de esa clase de leyes. No sólo sirve para moderar los daños inmediatos de las ya promulgadas, sino que actúa como freno del cuerpo legislativo para aprobar otras, pues percibiendo éste los obstáculos al éxito de sus inicuos designios que son de

¹⁶³⁰ Brutus 15 (20 de marzo de 1788), <<http://www.constitution.org/afp/brutus15.htm>>. “*The judges in England, it is true, hold their offices during their good behaviour, but then their determinations are subject to correction by the house of lords; and their power is by no means so extensive as that of the proposed supreme court of the union [...] the great reason assigned, why the judges in Britain ought to be commissioned during good behaviour, is this, that they may be placed in a situation, not to be influenced by the crown [...] But these reasons do not apply to this country, we have no hereditary monarch; those who appoint the judges do not hold their offices for life, nor do they descend to their children [...] The only clause in the constitution which provides for the removal of the judges from office, is that which declares, that “the president, vice-president, and all civil officers of the United States, shall be removed from office, on impeachment for, and conviction of treason, bribery, or other high crimes and misdemeanors [...] Errors in judgement, or want of capacity to discharge the duties of the office, can never be supposed to be included in these words [...] In England the judges are not only subject to have their decisions set aside by the house of lords, for error, but in cases where they give an explanation to the laws or constitution of the country, contrary to the sense of the parliament, though the parliament will not set aside the judgement of the court, yet, they have authority, by a new law, to explain a former one, and by this means to prevent a reception of such decisions.*”

¹⁶³¹ Brutus 14 (28 de febrero de 1788), <<http://www.constitution.org/afp/brutus14.htm>>: “*kept in long and ruinous confinement, and exposed to heavy and insupportable charges, to procure the attendance of witnesses, and provide the means of their defence, at a great distance from their places of residence.*”

¹⁶³² Id.: “*the administration of justice intolerably burthensome, intricate, and dilatory*”.

esperarse de los escrúpulos de los tribunales, se verá obligado a modificar sus intentos debido a los móviles mismos de la injusticia que medita realizar.¹⁶³³

Es decir, una tarea para los tribunales obstaculizadora de los abusos que los legislativos quieran perpetrar contra los derechos de los ciudadanos, ya fuera acudiendo a la Constitución, ya fuera a la equidad. Era imperativo establecer este resorte añadido para poner freno al a peligrosa inseguridad jurídica que habían sembrado los legislativos estatales, aunque se eludiera aludir a ellos de forma directa.

d) la república extensa (“ampliación de la órbita”) y la representación, remedios contra las facciones . Pero junto a la separación de poderes de “especialización funcional”¹⁶³⁴, los federalistas utilizan, asimismo, otro tipo de división del poder, esta vez relacionado con la *facción*, entendida ésta como grupo de personas que, sin tener en cuenta la totalidad del bien común, aspiran al dominio político sobre la comunidad. En palabras de Madison:

Por facción entiendo cierto número de ciudadanos, *estén en mayoría o en minoría*, que actúan movidos por el impulso de una pasión común, o por un interés adverso a los derechos de los demás ciudadanos o a los intereses permanentes de la comunidad considerada en conjunto.¹⁶³⁵

El concepto de facción, de neta raigambre sociológica, ya había tenido importantes precursores griegos y romanos, y pueden localizarse numerosos pasajes sobre ella en escritores e historiadores tales como Plutarco¹⁶³⁶, Cicerón o Tito Livio, y, desde luego, el renacentista Maquiavelo¹⁶³⁷. Pero tal término aparece en sus obras con un significado aún reducido: se refiere principalmente la lucha por hegemonía entre un sector popular y otro aristocrático, o, en todo caso, entre grupos de este último. En cambio, la sociedad que sirve de contexto a los federalistas ya contempla un mayor número de criterios que pueden dividir a los miembros de una comunidad: crematísticos, religiosos, locales, de carácter profesional o laboral, etc: “un interés de los propietarios raíces, otro de los fabricantes, otro de los comerciantes, uno más de los grupos adinerados y otros intereses menores, surgen por necesidad en las *naciones civilizadas* y las dividen en distintas clases, a las que mueven diferentes

¹⁶³³ *El Federalista* nº 78, pg. 334.

¹⁶³⁴ Blanco, *op. cit.* pg. 104.

¹⁶³⁵ *El Federalista* nº 10, pg. 36. Subrayado propio.

¹⁶³⁶ Por ejemplo, en “Solón” de sus *Vidas Paralelas*, XIII y XIV. Pp. 94 y 95 de la edición que utilizo.

¹⁶³⁷ *Discursos*, *op. cit.*, pp. 85-87.

sentimientos y puntos de vista”¹⁶³⁸, “todas las sociedades civilizadas se encuentran divididas en diferentes intereses y facciones, y es así como hay acreedores y deudores, ricos o pobres, agricultores, comerciantes o manufactureros, miembros de sectas religiosas difernetes, seguidores de diferentes jefes políticos, habitantes de diferentes distritos, detentadores de diferentes clases de propiedad, etc, etc”¹⁶³⁹.

¿Qué hacer entonces, frente a estos peligros que puedan dar al traste con la república, con toda esta diversidad de pasiones e intereses?¹⁶⁴⁰. Pues resulta que “[e]n una república no es sólo de gran importancia asegurar a la sociedad contra la opresión de sus gobernantes, sino proteger a una *parte* de la sociedad contra las injusticias de la otra parte”¹⁶⁴¹.

Debe uno preguntarse, al respecto:

¿[...] qué son las diferentes clases de *legislaturas*, sino abogados y partes en las causas que resuelven? [...] los jueces lo son los partidos mismos y *deben* serlo, y hay que contar con que el partido *más numeroso* o, dicho en otras palabras, *el más fuerte*, prevalezca.¹⁶⁴²

Ante este fenómeno que puede poner en peligro el bien común, y que es propio de la república democrática que aquí se erige, la propuesta ya no va a ser la de una “ley agraria” para redistribuir la propiedad, ni una ley sobre el lujo, ni algún otro subterfugio más o menos artificioso con el que se pueda regresar a una comunidad cerrada de la Antigüedad. Ni tampoco, desde luego, resulta posible o deseable recuperar la vieja aristocracia de antaño, cuyo reconocimiento ahora se prohíbe en diversas constituciones estatales e incluso en la federal¹⁶⁴³. Los “estados”, “órdenes” o

¹⁶³⁸ *El Federalista* n° 10, *op. cit.*, g. 37 (Madison). Subrayado propio.

¹⁶³⁹ Madison, *op. cit.*, pg. 21. Mensaje reiterado en el “Discurso sobre las facciones en la Convención federal” (6 de junio de 1787), en *ibid.*, pg. 29.

¹⁶⁴⁰ Desde luego, el problema esencial con el que éste se enfrenta, la escisión que supone la brecha más difícil de cubrir siempre es la que reactiva ala división entre ricos y probes. Así, que “[e]s tan fuerte la propension de la humanidad de caer en animadversiones muturas, que cuando le faltan verdaderos motivos, los más frívolos e imaginarios pretextos han bastado para encener su enemistad y suscitar los más violentos conflictos”, resulta que “la fuente de discordia más común y persistente es la desigualdad en la distribución de propiedades. Los propietarios y los que carecen de bienes han formado siempre distintos bandos sociales”. *El Federalista* n° 9, pg. 37 (Hamilton).

¹⁶⁴¹ *El Federalista* n° 51, pg. 222 (Madison).

¹⁶⁴² *El Federalista* n° 9, pg. 38. Subrayado propio.

¹⁶⁴³ XL de la *Declaration of Rights* de MD (“[n]ingún título de nobleza, u honor hereditario, podrá ser concedido por este Estado”), XXII de NC (“[n]ingún emolumento hereditario, privilegio u honor del mismo tipo, podrá ser admitido o conferido por este Estado”) y VI de MASS (más rotundo: “[n]ingún hombre, corporación o asociación, tendrá otros títulos o ventajas o privilegios particulares y exclusivos, distintos a aquellos con los que la comunidad quiera distinguirlos por su servicio a la misma; y, en todo caso, tal título no podrá por naturaleza hereditario, ni transmisible a su hijos o descendientes o familiares, resultando que la noción de un hombre que sea por nacimiento magistrado, legislador o juez, es absurda y artificial”), en redacción muy parecida a la de la Sec. 3 del *Bill of Rights* virginiano. La Constitución federal, artículo I, Sección 10, dice, a su vez: “[n]ingún Estado [...] concederá título alguno de nobleza” (*op. cit.*, pg. 428). No deja de ser llamativo que las prohibiciones de las constituciones estatales aparezcan en su declaraciones

estamentos, propios de un sistema en el que la economía de mercado aún pugnaba por hacerse con el papel principal en las relaciones sociales, dan paso ahora a una auténtica sociedad de clases moderna, caracterizada por la igualdad ante la ley, pero al mismo tiempo, por una división engendradora a partir de la propiedad, fuente principal de privilegios y discriminaciones en el mercado¹⁶⁴⁴. Para Madison y sus afines ya no resulta negativa la diversidad de opiniones e intereses, sino que se trata de un producto de esa sociedad, un *hecho* (sociológico)¹⁶⁴⁵:

Hay dos maneras de evitar los males del espíritu de partido¹⁶⁴⁶: consiste una en suprimir sus causas, la otra en reprimir sus efectos.

Hay también dos métodos para hacer desaparecer las causas del espíritu de partido : destruir la libertad esencial a su existencia, o dar a cada ciudadano las mismas opiniones, las mismas pasiones y los mismos intereses.

Del primer remedio puede decirse con verdad que es peor que el mal perseguido. La libertad es al espíritu faccioso *lo que el aire al fuego*, un alimento sin el cual se extingue. Pero no sería menor locura suprimir la libertad, que es esencial para la vida política, porque nutre a las facciones, que el desear la desaparición del aire, indispensable a la vida animal, porque comunica al fuego su energía destructora.¹⁶⁴⁷

El razonamiento resulta claro¹⁶⁴⁸: tal conflicto forma parte de la vida comunitaria, y eliminarlo no resulta posible (“la conclusión a que debemos llegar es que las *causas* del espíritu de facción no pueden suprimirse y que el mal sólo puede evitarse teniendo a raya sus *efectos*”¹⁶⁴⁹, y “es inútil afirmar que estadistas ilustrados conseguirán coordinar estos opuestos intereses, haciendo que todos ellos se plieguen al bien

de derechos, lo cual demuestra que la concepción de los mismos mantenía una apariencia distinta a la actual: la igualdad aflora a través del imperativo expuesto, considerando el impedimento antedicho como un derecho más.

¹⁶⁴⁴ Cavali, Alessandro: “Clase”, en Bobbio, Matteucci y Pasquino, *op. cit.*, pg. 229. Vid. también explicación en *El Federalista* nº 10, pg. 37: “[l]a diversidad en las facultades del hombre, donde se origina el derecho de propiedad, es un obstáculo insuperable a la unanimidad de intereses [...] El primer objeto del gobierno es la protección de esas facultades. La protección de facultades diferentes y desiguales para adquirir la propiedad, produce inmediatamente la existencia de diferencias en cuanto a la naturaleza y extensión de la misma; y la influencia de éstas sobre los sentimientos y opiniones de los respectivos propietarios, determina la división de la sociedad en diferentes intereses y partidos”.

¹⁶⁴⁵ Madison afirma que propiamente sólo existe un único interés entre los hombres, y que éstos sólo van a estar en igualdad cuando aún no se hayan unido en sociedad, sino que se encuentren en estado de naturaleza (vid. “Discurso sobre las facciones en la Convención Federal” (6 de junio de 1787), *op. cit.*, pg. 41).

¹⁶⁴⁶ Entiéndase que Madison no separa, cosa usual en la teoría política de la época, facción, partido e interés. En esto es un seguidor de los clásicos y no rompe con el molde maquiavélico.

¹⁶⁴⁷ *El Federalista* nº 10 (Madison), pp. 36 y 37.

¹⁶⁴⁸ Y no resulta baladí su extracción de la biología y la física; “la Nueva Ciencia de la Política”, según Rahe, *op. cit.*, Vol. III, Capítulo 1 (pp. 31-74). Asimismo, vid. *El Federalista* nº 9, pg. 32: “[l]a ciencia política, como casi todas las ciencias, ha progresado mucho, y ahora se comprende perfectamente la eficacia de ciertos principios que los antiguos no conocían o de los que tenían una idea imperfecta”.

¹⁶⁴⁹ *Ibid.*, pg. 38.

público. No siempre llevarán el timón estos estadistas”¹⁶⁵⁰). Ocurre, eso sí, que, existiendo facciones tanto minoritarias como mayoritarias, y resultando la primeras más fáciles de neutralizar, las segundas requieren una precaución mayor, como demuestra un examen histórico más o menos detenido:

Si un bando no tiene la mayoría, el remedio lo proporciona el principio republicano que permite a esta última frustrar los siniestros proyectos de aquél mediante una votación regular [...] podrá entorpecer la administración, trastornar a la sociedad; pero no podrá poner en práctica su violencia ni enmascararla bajo las formas de la Constitución. En cambio, cuando un bando abarca la mayoría, *la forma del gobierno popular* le permite sacrificar a su pasión dominante y su interés, tanto el *bien público* como *los derechos de los demás ciudadanos*. Poner el bien público y los derechos privados a salvo del peligro de una facción semejante y preservar a la vez el espíritu y la forma del gobierno popular, es en tal caso el magno término de nuestras investigaciones [...] Este examen del problema permite concluir que una democracia pura, por la que entiendo una sociedad integrada por un reducido número de ciudadanos, que se reúnen y administran personalmente el gobierno, no puede evitar los peligros del espíritu sectario [...] Por eso estas democracias han dado siempre el espectáculo de su turbulencia y sus pugnas; por eso han sido siempre incompatibles con la seguridad personal y los derechos de propiedad.¹⁶⁵¹

Lógicamente, Madison está refiriéndose a las democracias de tipo ateniense, aquellas en las que los hombres libres participaban directamente en asambleas decisorias. Un contexto, por otra parte, similar a la de los *meeting-towns* coloniales. Pero el virginiano halla remedio para sus peligros:

las dos grandes diferencias entre una democracia y una república son: *primera*, que en la segunda se delega la facultad de gobierno en un *pequeño número* de ciudadanos, elegidos por el resto; *segunda*, que la república puede comprender un número más grande de ciudadanos y una mayor extensión de territorio.¹⁶⁵²

En realidad, ambas premisas intentan dar la vuelta al típico argumento *whig* tradicional, expresado con precisión por los antifederalistas:

En una democracia pura, el soberano es el pueblo y dicta su voluntad por sí mismo; para ello, todos sus miembros han de reunirse para deliberar y decidir. Este tipo de gobierno *no puede ser*

¹⁶⁵⁰ Id.

¹⁶⁵¹ *El Federalista*, nº 10, pp. 38 y 39.

¹⁶⁵² *El Federalista* nº 10, pg. 39. Subrayado propio, el que no se refiere a los ordinales.

ejercido, por tanto, sobre un país de extensión considerable, sino que debe reducirse a una sola ciudad [...] En una república libre, si bien todas las leyes se derivan del consentimiento del pueblo, éste no otorga dicho consentimiento por sí mismo, personalmente, sino a través de *representantes* que él elige, a los que supone conocedores de la opinión de su electores, y con la integridad suficiente para llevarla a efecto. En todo gobierno libre, el pueblo debe prestar su *consentimiento* a las leyes por las que se rige.¹⁶⁵³

Hasta aquí, el discurso no difiere del federalista, como se ha podido comprobar. Ambos grupos apelan al pueblo, siguiendo la teoría *whig*. La diferencia aflora en el texto de *Brutus*, inmediatamente después:

Éste es el *verdadero* criterio de distinción ente un gobierno libre y uno arbitrario. El primero gobierna según la voluntad del pueblo, expresada conforme al modo que hayan acordado; el segundo se rige por la voluntad de *uno solo* o de *unos pocos*.¹⁶⁵⁴

Donde los federalistas apuran hasta el extremo la noción de pueblo, abstrayéndola y dando lugar a las novedosas argumentaciones políticas que estoy analizando, *Brutus* concibe “voluntad del pueblo” como voluntad *mayoritaria*. Tal es lo que indica su identificación de aquélla como opuesta a la de un solo individuo o unos pocos, y representativa del bien común. Los federalistas, en cambio, escinden al “pueblo”. Lo entienden como equivalente a “comunidad”, mientras que la “mayoría” es percibida simplemente como un *agregado de individuos* que bien podría conformar una *facción*, peligro decisivo para la construcción republicana. Los antifederalistas, por contra, no guardan ese temor; simplemente, establecen una premisa gradualista. A mayor grado de aproximación a la realidad social, a los deseos e intereses de *la mayoría*, mejor será la representación, más fiel a la realidad:

Si el pueblo ha de prestar sus consentimiento a las leyes, a través de personas elegidas y designadas pro él mismo, *la forma de elección y el número de representantes* deben ser tales que éstos compartan el parecer del pueblo, y estén dispuestos y, por tanto, capacitados para expresarlo. Pues si no conocen o no están dispuestos a expresar el sentir del pueblo, no es el pueblo quien gobierna, sino que *unos pocos* ejercen la *soberanía*.¹⁶⁵⁵

¹⁶⁵³ *Brutus* n° 1 (18 de octubre de 1787), en <<http://www.constitution.org/afp/brutus01.htm>>. Utilizo, tras cotejo cuidadoso, la traducción que figura en Lledó, Pablo, y Sánchez Cuenca, Ignacio (eds.): *Artículos federalistas y antifederalistas. El debate sobre la Constitución americana*, Madrid, Alianza, 2002, pg. 225, siendo la trad. del segundo de los editores. Los subrayados sí son propios.

¹⁶⁵⁴ *Ibid.*, pp. 224 y 225. Subrayados propios.

¹⁶⁵⁵ *Ibid.*, pg. 225. “*If the people are to give their assent to the laws, by persons chosen and appointed by them, the manner of the choice and the number chosen, must be such, as to possess, be disposed, and*

Detrás de esta aseveración hay una preferencia por los distritos electorales pequeños y la representación directa y numerosa¹⁶⁵⁶. Se trata de la mayoría en un *territorio pequeño*. La representación es un *mal menor*, un mal necesario al que obliga la propia existencia de demarcaciones que superan el ámbito de una población específica, como ocurre en el caso de los Estados, pero un objetivo a cumplir de la manera más exacta posible, es decir, como representación “descriptiva”¹⁶⁵⁷. Y se expresa a través de la rotación, el impedimento para renovar mandatos, al menos de manera continuada, así como mediante la brevedad de los mismos, señaladas ambas en numerosas constituciones estatales¹⁶⁵⁸ y que defiende el antifederalista *Centinel*, quien escribió varios artículos en la *Philadelphia Independent Gazetteer* y el *Philadelphia Freeman's Journal* entre el 5 de octubre de 1787 y el 24 de noviembre de 1788¹⁶⁵⁹. Por añadidura, los opuestos a los *Federalist Papers* entienden que si ampliamos el área de representación, ocurrirá que ya no estaremos, por tanto, ante

consequently qualified to declare the sentiments of the people; for if they do not know, or are not disposed to speak the sentiments of the people, the people do not govern, but the sovereignty is in a few” (<http://www.constitution.org/afp/brutus01.htm>).

¹⁶⁵⁶ “Para permitir que los profesionales, mercaderes, comerciantes, agricultores, mecánicos, etc, puedan llevar una justa proporción de sus hombres mejor informados a la asamblea legislativa, la representación ha de ser considerablemente numerosa” (*Federal Farmer* nº 2, 9 de octubre de 1787, en *ibid.*, pg. 253). Pertenece a una serie de artículos publicados en el *Poughkeepsie Country Journal* de New York, desde noviembre de 1787 a enero de 1788. Durante mucho tiempo se pensó que su autor era Richard Henry Lee, pero muchos han venido a apoyar últimamente que era Melancton Smith, de New York. También es posible que ambos escribieran en colaboración. Vid. <<http://www.constitution.org/afp/fedfar00.htm>>, encontrándose en los siguientes cardinales los números de la publicación en su original inglés, extraídos nuevamente de Morton, *op. cit.*

¹⁶⁵⁷ Vid. *supra*, pg. 356, nota 1386. Eran “partidarios de una relación de reflejo entre electores y elegidos en las instituciones representativas” (Sauquillo, *op. cit.*, pg. 308)

¹⁶⁵⁸ Vid. *supra*, pg. 359.

¹⁶⁵⁹ Algunos dicen que era Samuel Bryan, otros (los menos) que Eleazer Oswald, propietario del primer periódico citado (vid. <<http://www.constitution.org/afp/centin00.htm>>). Refiriéndose a los miembros de la Cámara de Representantes contemplada por la Constitución Federal, dice que (5 de octubre de 1787): “El período por el que se los elige es demasiado largo para garantizar una adecuada dependencia y responsabilidad hacia sus electores [...] como no hay una exclusión mediante rotación, podrían continuar de por vida, cosa que sin duda ocurrirá, dadas sus posibilidades de influencia [...] Del examen de la organización de este gobierno se deduce que ni es responsable ni rinde cuentas a la gran masa del pueblo, y que, lejos de ser un gobierno regularmente equilibrado, se convertirá en la práctica en una ARISTOCRACIA permanente”. *Artículos Federalistas y Antifederalistas*, *op. cit.*, pp. 249 y 250 (original en lengua inglesa, en Morton, *op. cit.*, reproducido en <http://www.constitution.org/afp/centin01.htm>). A esto se opone *El Federalista* nº 53 (Madison): “una parte del conocimiento para ser un legislador competente se consigue “mediante la experiencia efectiva en el cargo que exige se utilice” (pg. 228), con lo cual los mandatos es conveniente que no sean tan cortos como hasta ese momento lo han sido mediante la cláusula de la anualidad de los cargos tan utilizada en las constituciones estatales. En cualquier caso, unos y otros están de acuerdo en seleccionar a los más aptos mediante la votación; no apoyan el sistema de lotería, el que sería realmente más igualitario de acuerdo con la Antigüedad clásica (vid. Rahe, *op. cit.*, Vol. III, pg. 170). Los federalistas, además, hacen hincapie en la competencia deliberativa de esos representantes (*El Federalista* nº 37, pg. 150, por ej), cosa que parecen obviar los otros. Asimismo, destacan que un número reducido mejora la deliberación (vid., por ejemplo, *El Federalista* nº 58, pg. 249: “cuanto más numerosa es una asamblea [...], más fuerte ha de ser el ascendiente de la pasión sobre la razón. En segundo lugar, cuanto mayor es el número, más grande será la proporción de miembros poco instruidos y de capacidad limitada. Y es precisamente sobre caracteres de este tipo que la elocuencia y habilidad de los menos actúan con toda su fuerza. En las antiguas repúblicas, donde todo el pueblo concurría en persona a las asambleas, un solo orador o un estadista astuto generalmente lograban reinar con el mismo poder que si tuvieran un cetro en la mano”.

una república libre, pues una acumulación demasiado grande y dispar de intereses va a socavar su propia posibilidad:

En una república, los actos, el sentir y los intereses del pueblo han de ser similares. Si éste no es el caso, se producirá una constante confrontación de opiniones y los representantes de una parte se hallarán en continua disputa con los de la otra. Esto supondrá un lastre para el funcionamiento del gobierno e impedirá que se adopten las disposiciones que fomenten el *bien público*. Si aplicamos esta observación a las circunstancias de los Estados Unidos, nos convenceremos de que éstas no nos permiten que tengamos un gobierno único. Los Estados Unidos comprenden una gran variedad de climas. Las producciones de las diferentes partes de la unión son diversas, y sus intereses, por tanto, distintos. Sus usos y costumbres difieren tanto como sus climas y producciones, y sus opiniones no son en absoluto coincidentes. Las leyes y costumbres de los diferentes Estados son en bastantes aspectos muy diversas y en algunos casos opuestas. Cada Estado estaría a favor de sus propios intereses y costumbres y, en consecuencia, un cuerpo legislativo integrado por representantes de las respectivas partes, no sólo sería demasiado numeroso para actuar con algún cuidado o determinación, sino que se compondría de principios tan heterogéneos y discordantes que constantemente estarían enfrentados entre sí.¹⁶⁶⁰

Esta argumentación antifederalista se apoya, asimismo, en la propia Historia y en pensadores de referencia común entre los escritores norteamericanos del momento:

Si debemos respetar la opinión de los mejores y más sabios hombres que han reflexionado o escrito acerca de la ciencia del gobierno, forzosamente habremos de concluir que una república libre no puede prosperar en un país de proporciones tan inmensas, que contiene un número tan elevado de habitantes en continuo aumento, como la totalidad de los Estados Unidos. Entre las ilustres autoridades a que puede acudir en este punto, me contentaré con citar sólo a dos. La primera es el Barón de Montesquieu, *El Espíritu de las Leyes*, cap. XVI, vol. 1: “Es natural que una república tenga sólo un pequeño territorio, pues de otro modo no puede subsistir por mucho tiempo. En una gran república hay hombres de grandes fortunas y, por consiguiente, menos moderados; existen intereses demasiado importantes para confiarlos a un solo individuo, que tiene intereses propios, pues pronto empezaría a pensar que podría disfrutar de felicidad, grandeza y gloria oprimiendo a sus conciudadanos, y que podría elevarse esplendorosamente sobre las ruinas de su país. En una gran república, el bien público es sacrificado bajo mil intereses, se somete a excepciones y depende de accidentes. En una república pequeña, los

¹⁶⁶⁰ Brutus nº 1, *op. cit.*, pg. 225 y 226.

intereses del público se perciben con más facilidad, se entienden mejor y están más al alcance de cada ciudadano; los abusos son menores y, por supuesto, están menos protegidos”¹⁶⁶¹. De la misma opinión es el Marqués de Beccaria.

La historia no nos muestra ningún ejemplo de república libre semejante en extensión a los Estados Unidos. Las repúblicas griegas eran pequeñas, al igual que la de los romanos. En ambos casos, ciertamente, con el paso del tiempo *las conquistas alcanzaron vastas extensiones*, y la consecuencia fue que sus gobiernos pasaron de ser libres a convertirse en los más tiránicos que jamás existieron en el mundo.¹⁶⁶²

Pero este respaldo en la Historia no es obstáculo que arredre a los federalistas. Dando la vuelta al razonamiento, y basándose en la citada teoría de las facciones, fuerzas destructivas para la república, sobre todo cuando se vuelven mayoritarias, entienden que ni la representación en un ámbito amplio, con lo que ella pueda suponer de lejanía del elector, ni la existencia de un gobierno republicano en un territorio extenso, son impedimentos para la construcción federal de los Estados Unidos que auspician bajo la nueva Constitución. Por el contrario, son ingredientes que pueden socorrerla. Así, considerando que hay un número de personas reducido sobre el que descansa el gobierno de la nación, mediante el mecanismo representativo, resulta que éste

afina y amplía la opinión pública, pasándola pro el tamiz de un grupo escogido de ciudadanos, cuya prudencia puede discernir mejor el verdadero interés de su país, y cuyo patriotismo y amor a la justicia no estará dispuesto a sacrificarlo ante consideraciones parciales o de orden temporal. Con este sistema, *es muy posible que la voz pública, expresada por los representantes del pueblo, esté más en consonancia con el bien público que si la expresara el pueblo mismo, convocado con ese fin*. Por otra parte [...] Hombres de natural revoltoso, con prejuicios locales o designios siniestros, pueden empezar por obtener los votos del pueblo por medio de intrigas, de la corrupción o por otros medios, para traicionar después sus intereses. De aquí se deduce la siguiente cuestión: ¿son las pequeñas repúblicas o las grandes quienes favorecen la elección de los más aptos custodios del bienestar público? Y la respuesta está bien clara a favor de las últimas por dos evidentes razones:

En primer lugar, debe observarse que por pequeña que sea una república sus representantes deben llegar a cierto número para evitar las maquinaciones de unos pocos, y que, por grande

¹⁶⁶¹ También este pasaje: “[s]i la propiedad natural de los Estados pequeños es el estar gobernados como Repúblicas, la de los medianos el estar sometidos a un monarca y la de los grandes imperios el estar dominados por un déspota, se deduce que, para conservar los principios del Gobierno establecido, hay que mantener la extensión que tenga el Estado, pues éste cambiará de espíritu a medida que se extiendan o se reduzcan sus límites” (Montesquieu, *op. cit.*, pg. 96., cap XX, libro VIII).

¹⁶⁶² *Ibid.*, pp. 223 y 224.

que sea, dichos representantes deben limitarse a determinada cifra para precaverse contra la confusión que produce una multitud¹⁶⁶³. Por lo tanto, como en los dos casos el número de representantes no está en proporción al de los votantes y es proporcionalmente más grande en la república más pequeña, se deduce que si la proporción de personas idóneas no es menor en la república grande que en la pequeña, la primera tendrá mayor campo en que escoger y consiguientemente más probabilidad de hacer una selección adecuada.

En segundo lugar, como cada representante será elegido por un *número mayor* de electores en la república grande que en la pequeña, les será más difícil a los malos candidatos poner en juego con éxito los trucos mediante los cuales se ganan con frecuencia la selecciones; y como el pueblo votará más libremente, es *probable* que elegirá a los que posean más méritos y una reputación más extendida y sólida.¹⁶⁶⁴

La *representación* en un *territorio amplio*, pues, no supone obstáculo alguno para el buen rumbo de la república, sino que, por contra, sirve a lo designios de proteger el bien común con mayores garantías, ya que: 1) la selección de representantes, al operar sobre un gran número de personas¹⁶⁶⁵, permite extraer con mayor probabilidad una élite gobernante que buscará el interés de la comunidad, y 2) se evitará la fácil corrupción de los distritos pequeños, que posibilitan la elección de candidatos mediante compra del voto y prebendas¹⁶⁶⁶.

Pero es más, resulta que la mera existencia de un ámbito territorial extenso para la república, la “ampliación de la órbita”¹⁶⁶⁷, ya es una herramienta que funciona con el fin de protegerla, extremo que *El Federalista* explica de la siguiente forma:

Ampliad la esfera de acción y admitireis una mayor variedad de partidos y de intereses; hareis menos probable que una mayoría del total tenga motivo para usurpar los derechos de los demás

¹⁶⁶³ El número reducido favorecía al Senado, indicaba el propio *Federalist* n° 63: “es bastante difícil mantener viva la responsabilidad personal entre los miembros de un cuerpo numeroso, tratándose de los actos de ese cuerpo que producen un efecto inmediato, distinto y palpable sobre sus electores.

El remedio adecuado para este defecto consiste en un cuerpo suplementario dentro del departamento legislativo”. Pg. 267; el subrayado es del autor.

¹⁶⁶⁴ *El Federalista* n° 10, pp. 39 y 40. Subrayados propios.

¹⁶⁶⁵ Implícitamente, pues, Madison acepta un derecho de sufragio pasivo amplio, reflejado en la Constitución federal (vid. *supra*, pg. 491).

¹⁶⁶⁶ Vid. *supra*, pg. 283, respecto a la experiencia británica. Pero también la colonial mostraba la corrupción en América, sobre todo en el sur, en donde los notables tenían una clientela muy amplia de proveedores y deudores, y daban todo tipo de obsequios a cambio del sufragio, en su caso con la vigilancia añadida de la votación *viva voce* (vid. Morgan, *op. cit.*, pg. 184). La idea de fondo en la extensión de la órbita federalista, una vez más, es la configuración de un *freeman* autónomo y que pueda elegir *sin dependencia*.

¹⁶⁶⁷ *El Federalista* n° 9 (Hamilton), pg. 33: Yo añadiría a este catálogo de circunstancias que tienden a mejorar los sistemas populares de gobierno civil, por *muy nueva que parezca* a algunos la adición, una más, de acuerdo con un principio en que se ha fundado una objeción contra la nueva Constitución: me refiero a la AMPLIACIÓN de la órbita en que esos sistemas han de desenvolverse, ya sea respecto a las dimensiones de un solo Estado, o a la consolidación de varios más pequeños en una gran Confederación”. Subrayado propio.

ciudadanos, y si ese motivo existe, les será más difícil a todos los que lo sienten descubrir su propia fuerza, y obrar todos en concierto.¹⁶⁶⁸

La diversificación hace la fuerza, paradójicamente. El conflicto la forja, cuando el ámbito en el que se mueve es suficientemente grande. No debe temerse a la pluralidad, pues, ya que resulta ser principal garantía para la supervivencia de una república. Las pasiones van a someterse a la razón, mediante la astucia de incorporar al sistema republicano diversos mecanismos institucionales y que sirvan para la autorregulación del conflicto perpetuo, una suerte de “mano invisible” política. Se ha visto antes el de los controles y contrapesos, así como el de la representación, pero aquéllos se referían a una *especialización*, el primero en medio de la separación de poderes, el segundo, relacionando a la sociedad con los representantes del pueblo. Sin embargo, el de *la ampliación de la órbita actúa en el seno de la propia sociedad y dentro de su confines, no en su gobierno ni sobre sus representantes en el mismo*. La idea es la de que mediante la admisión en la escena política de una multiplicada de intereses y pasiones, de ambiciones y opiniones distintas, *nunca exista una mayoría permanente*¹⁶⁶⁹. Esta es la síntesis de la propia experiencia convencional de Filadelfia¹⁶⁷⁰. De aquel cúmulo de intenciones que se dispersaban y reunían entre sí una y otra vez, en distintas y volátiles combinaciones, indomeñables, había surgido, sin embargo, una Carta común que apuntaba a la meta del interés general, de un futuro favorable a la república. Esta Constitución, a su vez, incluía mecanismos que dividían el poder en variadas formas, pero manteniendo interconexiones entre los órganos de gobierno. Madison intenta extender las últimas implicaciones de tal fórmula. Hasta unos límites más alejados, física y políticamente, cuanto a más distancia se ubique la “frontera americana”, en continua expansión.

e) El modelo federal. El gran obstáculo a las tendencias centrípetas de la Constitución era el caballo de batalla utilizado por los antifederalistas. Así, éstos

¹⁶⁶⁸ *El Federalista* n° 10, pg. 40. Madison reiteraba esta idea ya expresada en su “Discurso sobre las facciones en la Convención Federal (6 de junio de 1787): “en una sociedad de amplias dimensiones el pueblo se encuentra fragmentado en tantos intereses y partidos que se hace poco probable que se llegue a experimentar algún sentimiento común y que se alcance por una mayoría del todo el concierto requerido.” (en *op. cit.*, pg. 43). de otra parte, vuelve a repetirla en *El Federalista* n° 51, al final: “el grado de seguridad depende [...] del número de intereses y sectas; y éste puede aventurarse que dependerá de la extensión del país y del número de personas sometidas al mismo gobierno” (pg. 222).

¹⁶⁶⁹ De esta forma, se articula un fuerte pluralismo, señalado por Tocqueville en su *Democracia en América*. “La importancia que para Tocqueville representa el desarrollo de la actividad industrial y comercial frente a la tradicionalmente agrícola, como observa en los Estados Unidos, no viene dada tanto por sus resultados materiales, como por el pluralismo social mediante el que esta actividad se desarrolla, desplegando un muy superior dinamismo social” (Sauca, *op. cit.*, pg. 517). Algo que ya habían vislumbrado los federalistas y que debía ser sumamente grato a alguien como Hamilton, tan afín a los intereses manufactureros y comerciales.

¹⁶⁷⁰ Vid. *supra*, pp. 352.

perciben al nuevo gobierno como una amenaza a la supremacía constitucional, porque la Carta Magna pretende despojar al pueblo de su poder, al no resultar las instituciones contempladas en ella una representación auténtica de su voluntad. “Este gobierno tendrá unos poderes legislativo, ejecutivo y judicial *absolutos e incontrolables* respecto a todos los objetos a los que se extienda”, dicen¹⁶⁷¹. Esta postura antifederalista advierte peligro para la libertad republicana en la sección 8 del artículo I¹⁶⁷² y el art. VI¹⁶⁷³, relativos al Congreso y los Tribunales, respectivamente, así como en la sección 1 del art. II, sobre el Presidente¹⁶⁷⁴. No es exactamente la separación de poderes, que de todas formas se somete a crítica, dada la preponderancia del legislativo, el impedimento para apoyar aquí la Constitución, sino la concentración de facultades en una cúspide nacional *incontrolada*. Y es que ya el hecho de pretender configurar un gobierno en un ámbito tan extenso, supone una acumulación de poder irrefrenable. Así, el mismo autor antifederalista y en idéntico texto, pese a que enumera diversas fallas de la Constitución, declara que lo hace de forma subsidiaria: “opino que establecer un gobierno único de toda Unión en forma de república es ya una razón suficiente para rechazar el proyecto”¹⁶⁷⁵. Este vértice de poder hace tambalearse, incluso, los propios derechos procesales de los estadounidenses¹⁶⁷⁶.

Los federalistas van oponer, sin embargo, una solución de compromiso que permita el autogobierno de los Estados, haciéndolo encajar con el de carácter nacional que se pretende erigir. Su propuesta es la de un modelo federal, que intenta “mantener el *equilibrio* constitucional entre el gobierno general y los Estados”¹⁶⁷⁷. Para ello, y en primer término, dejan claro que tal simetría depende de un único árbitro, *el pueblo*, con lo cual acuden a la misma fuente de legitimidad que esgrimen los antifederalistas, a fin de utilizar el mismo argumento en dirección contraria:

el gobierno federal y de los Estados no son, en realidad, sino diferentes mandatarios y *representantes fiduciarios del pueblo, dotados de poderes diferentes* y designados *para finalidades diversas*. Los adversarios de la Constitución parecen haber predicho completamente de vista al pueblo en sus razonamientos sobre esta materia y haber considerado a estas dos organizaciones no sólo como rivales y enemigas recíprocas, sino como si estuvieran libres de todo superior común en sus esfuerzos por usurpar las facultades de la otra. Aquí debemos recordar su error a estos señores, diciéndoles que la autoridad final, sea cual fuere la autoridad

¹⁶⁷¹ *Brutus* nº 1, pg. 217.

¹⁶⁷² *Id.*

¹⁶⁷³ *Centinel* nº 1, pg. 247

¹⁶⁷⁴ *Ibid.*, pg. 249.

¹⁶⁷⁵ *Brutus* nº 1, pg. 229

¹⁶⁷⁶ *Vid. supra*, pg. 413.

¹⁶⁷⁷ *El Federalista* nº 33 (Hamilton), pg. 126.

delegada, reside sólo en el pueblo, y que no ha de depender meramente de la ambición o destreza comparativas de los diferentes gobiernos el que cualquiera de los dos consiga ampliar su esfera de jurisdicción a expensas del otro. La verdad, tanto como el decoro, exigen suponer que el resultado ha de depender en todos los casos de los sentimientos y la sanción de sus *electores comunes*.¹⁶⁷⁸

Es más, el mecanismo previsto para la ratificación de la Constitución va a ser puesto en marcha Estado por Estado, de forma separada, con lo cual se respeta la entidad propia de cada uno de ellos:

la Constitución habrá de fundarse en el asentimiento y la ratificación del pueblo americano, expresados *a través de diputados elegidos con este fin especial*; pero [...] dichos asentimientos y ratificación deben ser dados *por el pueblo, no como individuos que integran una sola nación, sino como componentes de los varios Estados, independientes entre sí*, a los que respectivamente pertenecen. Será el asentimiento y la ratificación de los diversos Estados, procedentes de la autoridad suprema que hay en cada uno: la autoridad del pueblo mismo. Por lo tanto, el acto que instituirá la Constitución, no será un acto *nacional*, sino *federal* [...] el acto del pueblo en tanto que forma determinado número de Estados independientes, *no en tanto que componen una sola nación*, se ve obviamente con esta única consideración, a saber, que *no será resultado ni de la decisión de una mayoría del pueblo de la Unión, ni tampoco de una mayoría de los Estados*. Debe resultar del asentimiento unánime de los distintos Estados que participen en él¹⁶⁷⁹, con la única diferencia respecto a su consentimiento ordinario, de que *no será expresado por la autoridad legislativa, sino por el pueblo mismo*. Si en esta ocasión se considerara el pueblo como una sola nación, la voluntad de la mayoría de los Estados Unidos obligaría a la minoría; y la voluntad de la mayoría tendría que determinarse mediante la comparación de los votos individuales, o bien considerando la voluntad de la mayoría de los Estados como prueba de la voluntad de la mayoría del pueblo de los Estados Unidos. Ninguna de estas dos normas se ha adoptado. Cada Estado, al ratificar la Constitución, es considerado como un cuerpo soberano, independiente de todos los demás y al que sólo puede ligar un acto propio y voluntario. En este aspecto, por consiguiente, la nueva Constitución será una Constitución *federal* y no una constitución *nacional*, en el caso de que se establezca.¹⁶⁸⁰

¹⁶⁷⁸ *El Federalista* n° 46 (Madison), pp. 199 y 200.

¹⁶⁷⁹ Con que firmaran nueve, ya entraba en vigor la Constitución, pero con respecto a ellos solamente (art. VII).

¹⁶⁸⁰ *El Federalista* n° 39 (Madison), pg. 161. Subrayados propios, exceto en “nacional” y “federal”, que son del autor.

Hasta aquí el ardid federalista. Madison viene a expresar que el pueblo es uno, obedeciendo a cierta concepción monista. No existen varios “pueblos” en el territorio de la Unión. Sí hay varios “Estados”, por contra. El término “nación” no se utiliza, ni para definir la unidad política estadounidense, ni a con el fin de aplicarlo a cada uno de los territorios. El país resulta demasiado joven para apelar a este concepto que alude a un origen desconocido e inmemorial, tal y como ocurre en Europa, y queda aún más debilitado si se asume la teoría contractualista. En su lugar *Publius* instala al pueblo, intentando burlar así los recelos de sus adversarios. Lo cual no significa que haya desaparecido completamente, pues se hace corresponder con *todo* el ámbito de las antiguas trece colonias. Madison obvia el hecho de que las mayorías en cada Estado que aprobaran este documento (recuérdese que bastaría sean simples) podrían conformar un número más reducido, en realidad, que el grupo de personas que rechazarían la Constitución *si sumáramos todas las que se encontraran en los diversos Estados manteniendo esta postura*. De nuevo se trata de impulsar la política de hechos consumados, la difícil construcción convencional de 1787, de manera que sus adversarios *se van paralizados por su propia imposibilidad de coaligarse entre sí para configurar un modelo alternativo*¹⁶⁸¹. Mientras que la actitud de *Publius* es de ofensiva, edificando escalonadamente un modelo novedoso que de hecho no se sabe hasta dónde puede conducir, los antifederalistas representan una opción puramente defensiva, de retaguardia, que les impide tomar la dirección, *porque que se ven atrapados en un modelo que les obliga precisamente a rechazar ese liderazgo*. Intentan discutir los detalles de la Constitución, pero como niegan la mayor, es decir, la propia posibilidad de una auténtica unificación nacional bajo idéntica estructura política común, pierden pie ante el hecho de que esa comunidad ya está forjada, aunque ahora esto suceda, a diferencia de en Europa, bajo el pueblo que, insisto, es *sólo uno*. La nación es esto precisamente lo que exige, una identificación monista. Madison y sus aliados piensan que es más lo que une a los habitantes de América del Norte que los que les separa. Y están en lo cierto, porque sus conciudadanos van a ratificar la Constitución y el mecanismo funcionará y se adaptará perfectamente a las circunstancias internas e internacionales. El patrón cultural común era demasiado fuerte, las amenazas exteriores unificadoras, y el novedoso entramado federal, de inteligencia pragmática indudable. Un mecanismo, por otro lado, que resulta muy similar al de la república extensa y que, es más, se cruza con él y con la separación de poderes. Recordémoslo:

¹⁶⁸¹ En realidad, se trata de aplicar la teoría de las facciones y su diversidad, antes mencionada, a este nuevo plano.

la Cámara de Representantes derivará sus poderes del pueblo de América, y el pueblo estará representado en la misma proporción y con arreglo al mismo principio que en la legislatura de un Estado particular. Hasta aquí el gobierno es *nacional* y no *federal*. En cambio, el Senado recibirá su poder de los Estados, como sociedades políticas y coiguales, y éstas estarán representadas en el Senado conforme al principio de igualdad, como lo están ahora en el actual Congreso. Hasta aquí el gobierno es *federal* y no *nacional*. El poder ejecutivo procederá de fuentes muy complejas [...] En este aspecto [...] aparece como de carácter mixto.¹⁶⁸²

En suma, los federalistas pretenden se crucen varias líneas de fuerza en torno a múltiples divisiones. Por un lado, tenemos una de carácter “diacrónico”, la que señala el fenómeno de la convención constituyente: el pueblo puede manifestarse en bloque y de una sola vez para elegir a unos representantes que elaborarán o reformarán la Carta, y luego podrá hacerlo de forma separada y en distintos momentos, para elegir a los reponsables de aquellas instituciones que la Constitución ha señalado existan y de acuerdo con los procedimientos acordados en ella. La segunda separación es la funcional típica de los poderes de gobierno, pero entendida en sentido estricto, es decir, desgajada de su pasado estamental. La tercera se basa en un *hecho* que suministra la propia sociedad norteamericana (y no es inocente que aquí se aluda a *una sola*): un ámbito tan extenso como el de la república estadounidense proporciona una gran variedad de intereses, pasiones y opinión, impidiendo la conformación de grupos sociales mucho mas poderosos que otros y que, además, tengan carácter permanente y unívoco en la dirección de sus esfuerzos.

La cuarta división obedece al reparto de competencias y atribuciones entre el gobierno del a Unión y los territoriales. Madison va a identificar ésta y la segunda citada, la de la separación funcional de poderes, como baluarte de los derechos:

En una república unitaria, todo el poder cedido por el pueblo se coloca bajo la administración de un solo gobierno; y se evitan las usurpaciones dividiendo a ese gobierno en departamentos separados y difrentes. En la *compleja república americana*, el poder de que se desprende el pueblo se divide primeramente entre dos gobiernos distintos, y luego la porción que corresponde a cada uno se subdivide entre departamentos diferentes y separados. De aquí surge una doble seguridad para los derechos del pueblo. Los diferentes gobiernos se tendrán a raya unos a otros, al propio tiempo que cada uno se regulará a sí mismo.

Segunda. En una república no sólo es de gran importancia asegurar a la sociedad contra la opresión de sus gobernantes, sino proteger a una parte de la sociedad contra las injusticias de

¹⁶⁸² Ibid., pp. 161 y 162. Recuérdese que el Presidente se elige mediante compromisarios; vid. Art. II, Sección 1, de la Constitución.

la otra parte [...] en la república federal de los Estados Unidos [...] estará dividida en tantas partes, tantos intereses diversos y tantas clases de ciudadanos, que los derechos de los individuos o de la minoría no correrán grandes riesgos por causa de las combinaciones egoístas de la mayoría.¹⁶⁸³

De todo ello, puede deducirse que los federalistas han tenido que dejar atrás la idea de nación, intensamente unificadora, como luego se verá con la reevolución francesa y ya se había avizorado con la inglesa, pero también la posible adopción de la *soberanía* a escala plena. *El Federalista* no niega que el pueblo sea el soberano. Pero lo es en medio de las divisiones expuestas, diacrónicas y sincrónicas, en la dimensión puramente social y en otra política construida con la nueva Constitución¹⁶⁸⁴. Es el único monismo que aceptan, y matizadamente, Madison y los suyos, poco proclives a la teorización abstracta de un Rousseau, por poner un ejemplo recurrente, y más bien amigos de utilizar modelos e instituciones que se adaptaran a una realidad inmediata. La coherencia del *Federalista* alcanza hasta donde puede, porque fue una labor de urgencia, no lo olvidemos, aunque sumamente efectiva y, desde luego, de lleno dentro de la teoría política moderna. Entre otras cosas, porque la comunidad por la que abogan también tiene este último rasgo: se basa en la *fundación*.

f) el papel de la virtud

En *El Federalista* no aparecen demasiadas menciones a la virtud, algo que diferencia a estos artículos de la habitual prosa republicana que ya se ha estudiado. Esto no significa que no fuera un tema de cierta preocupación para sus autores. Lo que sí ocurre es que no se encontraban inmersos en comunidades del mismo tipo que las de Milton, Harrington, y no digamos Maquiavelo o Salustio. Por el contrario, viven en una sociedad con expansión comercial creciente y que ha comenzado ya a girar en gran parte alrededor de las grandes ciudades. De hecho, y en realidad, el proceso ya había comenzado mucho antes en Occidente, y autores que precisamente fueron referencias principales para los norteamericanos, como Montesquieu, percibieron el fenómeno de manera bastante clara:

¹⁶⁸³ *El Federalista*, nº 51, pg. 222.

¹⁶⁸⁴ David B. Truman sostuvo que existía una pertenencia solapada del individuo a varias facciones, que imposibilitaba la hegemonía absoluta de una de ellas: "cada grupo de interés permanecerá probablemente demasiado débil y dividido internamente como para asegurarse una participación en el poder que no guarde relación con su tamaño y objetivos. La dirección general de la política pública surge como resultado de una serie de impactos en el gobierno, relativamente descoordinados entre todos los lados de todas las fuerzas en competencia, sin que ninguna posea una fuerza excesiva [...] de la lucha de intereses surge la política [...] dentro del molde democrático" (*The Governmental Process*, 1951)". Cit. en Held, David: *Models of Democracy*, 2ª ed. (1ª, de 1987) Palo Alto, Stanford University Press, 1996; trad. cast. de Adolfo Gómez Cedillo, por donde se cita, *Modelos de Democracia*, Madrid, Alianza, 2001, pg. 232.

El comercio cura los prejuicios destructores. Es casi una regla general que allí donde hay costumbres apacibles existe el comercio, y que allí donde hay comercio hay costumbres apacibles.

No hay pues que extrañarse de que nuestras costumbres sean menos feroces que en otros tiempos. Gracias al comercio, el conocimiento de las costumbres de todas las naciones ha penetrado en todas partes, y de su comparación han resultado grandes beneficios.¹⁶⁸⁵

Este *ethos* es, pues, muy diferente al de las antiguas repúblicas belicistas, que basaban su “gloria” y riqueza en la contienda permanente con los vecinos, y cuyo ejemplo típico era el de Roma. Los artículos federalistas gustan de comentar temas relacionados con las finanzas o la regulación de los mercados¹⁶⁸⁶. La épica va siendo sustituida por la economía. El propio Montesquieu se había percatado de que el hincapie en la virtud como determinante de la supervivencia de una comunidad era más bien propio de sociedades antiguas: “[l]os políticos griegos, que vivían en un Gobierno popular, no reconocían más fuerza que la virtud. Los políticos de hoy no nos hablan más que de fábricas, de comercio, de finanzas, de riquezas e incluso de lujo”.

Pero todo esto no implica que los norteamericanos se hubieran olvidado de la virtud:

Así como hay un grado de depravación en el género humano que requiere ciertas dosis de vigilancia y desconfianza, también existen otras cualidades en la naturaleza del hombre que justifican cierto grado de estimación y confianza. El gobierno republicano presupone la existencia de estas cualidades en mayor proporción que cualquier otro. Si las descripciones que han trazado algunos de nuestros conciudadanos al impulso del celo político fueran versiones de la naturaleza humana, deduciríamos que los hombres carecen de la virtud necesaria para gobernarse, y que sólo las cadenas del despotismo pueden evitar el que se destruyan y devoren unos a otros.¹⁶⁸⁷

Por tanto, no es que deje de existir la virtud en una sociedad moderna, sino que se hace necesaria cierta cantidad de ella, y más aún en el caso de los dirigentes políticos.

¹⁶⁸⁵ “El espíritu de comercio lleva consigo el de frugalidad, economía, moderación, trabajo, prudencia, tranquilidad, orden y regla” (pg. 45). Libro V, Cap. VI.

¹⁶⁸⁶ Muy especialmente Hamilton; vid, pg. 406, nota 1609, *supra*.

¹⁶⁸⁷ *El Federalista* nº 50, pp. 238 y 239 (Madison). Y: “qué es el gobierno sino el mayor de los reproches a la naturaleza humana? Si los hombres fuesen ángeles, el gobierno no sería necesario. Si los ángeles gobernarán a los hombres, saldrían sobrando lo mismo las contralorías externas que internas del gobierno”. *El Federalista* nº 51, pg. 220.

“La institución del poder delegado implica que existe en la humanidad una porción de honor y virtud, sobre la cual puede cimentarse cierta dosis de confianza”¹⁶⁸⁸. Se quería rechazar así la perspectiva que ofrecían los antifederalistas, y que obligaba a un control de aquéllos mediante la rotación continua y los mandatos cortos¹⁶⁸⁹, así como de un celo cívico de continua vigilancia o fórmulas de democracia más directa, como las instrucciones a los diputados¹⁶⁹⁰.

El fin de toda constitución política es, o debería ser, conseguir como gobernantes a los hombres que posean mayor sabiduría para discernir y más virtud para procurar el bien público; y en segundo lugar, tomar las precauciones más eficaces para mantener esa virtud mientras dure su misión oficial. La elección de los gobernantes constituye el sistema característico del gobierno republicano [...] ¿Quiénes va a ser los lectores de los representantes federales? No van a serlo los ricos, de preferencia a los pobres; ni los sabios, más que los ignorantes; ni los altivos herederos de nombres ilustres, en vez de los humildes hijos de la oscuridad y de la fortuna adversa. Los electores estarán constituidos por la gran masa del pueblo americano. Serán los mismos que ejerzan en cada Estado el derecho de elegir a la rama correspondiente de la legislatura del Estado.¹⁶⁹¹

Con esto se está asegurando que se trata de un gobierno *popular*; pues los convencionales han renunciado a establecer requisito alguno para el sufragio activo, haciendo equivaler su regulación a la que figurara en los respectivos Estados¹⁶⁹². Pero no han abandonado, sin embargo, la idea de reclutar una élite, que si bien no será la aristocracia hereditaria de antaño, si implicará reunir a *los mejores*. Se parte de la idea tradicional de la política clásica: tales personas son *escasas*. Los *muchos* seleccionarán a *los pocos*. De hecho, la propia propuesta de que exista elección acerca el procedimiento a escoger una aristocracia de virtud y sabiduría¹⁶⁹³. Lo que ocurre es que, a diferencia de la Antigüedad, los requisitos para ser candidato son muy pocos. Recuérdese que se asignaba, asimismo, un sueldo a quienes ocuparan

¹⁶⁸⁸ *El Federalista* n° 76 (Hamilton), pg. 325.

¹⁶⁸⁹ Vid. *supra*, pp. 418 y 419.

¹⁶⁹⁰ Vid. *supra*, pp. 361 y 362.

¹⁶⁹¹ *El Federalista* n° 57, pp. 242 y 243.

¹⁶⁹² Para la Cámara de Representantes, art. I Sec. 2; los senadores eran seleccionados por las cámaras legislativas (sec. 3), y el nombramiento de Presidente se basaba en compromisarios nombrados también por ellas (art. II, sec. 1).

¹⁶⁹³ Vid. *supra*, pg. 77, nota 282. Y Montesquieu, *op. cit.*, pg. 21: “la elección por sorteo es propia de la democracia; la designación por elección corresponde a la aristocracia” (Libro II, Cap. II). La intención de los constituyentes americanos era la de construir una república (*supra*, pg. 395), no exactamente una democracia, que ellos identificaban con el sorteo de cargos principales y la concurrencia en asamblea del pueblo. Por añadidura, podían contar con el respando del barón francés, que hablaba de que “[s]i el pueblo entero es, en la República, dueño del poder soberano, estamos, ante una democracia; si el poder soberano está en manos de una parte del pueblo, se trata de una aristocracia” (*ibid.*, pp. 19 y 20).

cargos públicos electivos en las distintas constituciones norteamericanas¹⁶⁹⁴. Pero la idea básica, esa extracción de los pocos para que sean separados de los muchos, sigue siendo relevante, y los federalistas sacarán otra consecuencia de ella, en combinación con el criterio de la “república extensa”:

cada representante de los estados Unidos será elegido pro cinco o seis mil ciudadanos, mientras que en los Estados la elección de un representante corresponde a quinientos o seiscientos. ¿se pretenderá que esa diferencia es suficiente para justificar un sentimiento de adhesión hacia los gobiernos de los Estados y de odio hacia el gobierno federal? Si éste es el punto en el que se funda la objeción, merece nuestro examen.

¿Tiene al poyo del la *razón*? No es posible afirmarlo sin aseverar que cinco o seis mil ciudadanos son menos capaces de elegir a un representante apropiado, o están más expuestos al soborno por parte de un representante indigno, que quinientos o seiscientos. Por el contrario, la razón nos asegura que así como en un número tan grande es verosímil que se encuentre un buen representante, también es menos creíble que la elección no recaiga en él por causa de las intrigas de los ambiciosos o del cohecho de los ricos.¹⁶⁹⁵

Los federalistas, pues, entienden que la representación en una república extensa impide la corrupción de la prebenda y el soborno, tan fácil en distritos más pequeños¹⁶⁹⁶, facilitando así el acceso de la virtud al escenario político *nacional*. Consecuencia que también se va a encontrar en la mayor *probabilidad* de dar con este método con los ciudadanos más valiosos, *que siempre conformarán un grupo reducido*. La pregunta es la de porqué tiene que ser un grupo pequeño. Se trata de lo que algunos han denominado como “la economía de la virtud”¹⁶⁹⁷. Según la teoría federalista, hay una “cantidad” concreta de virtud, es decir, de capacidad específica para conseguir sostener los intereses generales, mediante deliberación, reflexión, entre un número escaso de ciudadanos, que serán quienes disponen de aquélla. Los federalistas entienden que este sector podría reproducirse en el nivel nacional. Ovejero explica adecuadamente este fenómeno, propio del republicanismo elitista: “tiene bajos costos, en tanto sólo deliberan unos pocos, pero también hay bajos incentivos para participar puesto que los beneficios, *en virtud de que la deliberacion apunta al bien*

¹⁶⁹⁴ Vid. *supra*, pg. 491.

¹⁶⁹⁵ *El Federalista* n° 57, pg. 245. Subrayado del autor.

¹⁶⁹⁶ Como parecía demostrar el caso inglés y la crítica de los *real whigs*.

¹⁶⁹⁷ Vid. el artículo de Ovejero, Félix: “Democracia liberal y democracias republicanas. Para una crítica del elitismo democrático”, en *Claves de la Razón Práctica* n° 111, Madrid, Progreso, pp. 18-30.; especialmente, en pg. 25.

general, se distribuyen entre muchos: de ahí que tenga que haber unos pocos virtuosos (los que deliberan)”¹⁶⁹⁸.

Mientras que para los antifederalistas la representación es una suerte de mal menor, como se ha visto, para los defensores de la Constitución es algo positivo, pues *ayuda a crear las condiciones que conduzcan a proteger más adecuadamente el bien común*. Aunque no se le cita, hubieran suscrito las palabras de Burke en su “Discurso a los Electores de Bristol” (“*Speech to the Electors of Bristol*”):

El Parlamento no es un congreso de embajadores que defienden intereses distintos y hostiles, intereses que cada uno de sus miembros, debe sostener, como agente y abogado, contra otros agentes y abogados, sino una asamblea *deliberante* de una nación, con un interés: el de la totalidad; donde deben guiar no los intereses y prejuicios locales, sino el bien general que resulta de la razón general del todo. Elegís un diputado; pero cuando le habéis escogido, no es el diputado por Bristol, sino un miembro del Parlamento. Si el elector local tuviera un interés o formase una opinión precipitada, opuestos evidentemente al bien real del resto de la comunidad, el diputado por ese punto, debe, igual que los demás, abstenerse de ninguna gestión para llevarlo a efecto.¹⁶⁹⁹

Para ubicar los intereses particulares ya se dispone de las autoridades locales, incluyendo las de carácter estatal. Para el bien común, las asambleas, el ejecutivo y el Tribunal Supremo federales. Y sin mandato imperativo o instrucciones reconocidas en rincón alguno de los *Federalist Papers*. Los principales adversarios de la Constitución y sus defensores concordaban en su defensa del mecanismo representativo, lo que ocurre es que, mientras que los primeros lo veían como un mal necesario, dada la magnitud, incluso, de las demarcaciones estatales, los segundos estimaban que era obligada para que el gobierno del país persiguiera verdaderamente el bien común. Y de este desencuentro partían todas las demás diferencias, como las de la extensión de los mandatos o la posibilidad de prorrogarlos, es decir en el modo de articular aquella representación. E incluso conectada a la preferencia por asambleas pequeñas o grandes: como se ha podido comprobar, los antifederalistas gustaban de una representación con un número proporcional alto de personas, mientras que los *Federalist Papers* veían defectos en la misma, tanto por invocar una multitud desordenada que impedía la deliberación (“en todas las asambleas muy numerosas, cualquiera que sea la índole de su composición, la pasión siempre arrebató su cetro a

¹⁶⁹⁸ Ibid., pg. 20.

¹⁶⁹⁹ En *Textos políticos*, versión española e introducción de Vicente Herrero, México, Fondo de Cultura Económica, 1984, pp. 312 y 313. Subrayado propio.

la razón”¹⁷⁰⁰), como porque “es bastante difícil mantener viva la responsabilidad personal entre los miembros de un cuerpo numeroso, tratándose de los actos de ese cuerpo que producen un efecto inmediato, distinto y palpable sobre sus electores”¹⁷⁰¹.

II.2.5. Las Enmiendas

La discusión entre antifederalistas y defensores de la Constitución mantuvo diversos objetos, si bien punto de partida para el agudo enfrentamiento era el reparto de poder entre los Estados y el gobierno de la Unión. Ya antes de terminar los debates de la Convención, sus opositores, o aquellos que la habían abandonado, comenzaron a escribir diversos panfletos y artículos contra ella. A seudónimos como *Brutus*, *Centinel* o *Federal Farmer*, se añadían los de *Fabius*, *Landholder*, *Roderick Razor*, *Constant Reader*, *Rough Hewer*, etc.¹⁷⁰². Por su parte, los partidarios de la Constitución contaron fundamentalmente con los *Federalist Papers*, aunque John Adams y otros, como James Wilson, también fueron autores de textos apologéticos¹⁷⁰³. Benjamin Franklin, George Washington o Thomas Paine estuvieron de acuerdo con esta defensa, aunque no escribieran documentos de relieve. Precisamente, *El Federalista* sería reimpresso una y otra vez, a fin de suministrar apoyo a quienes respaldaban la Constitución. Delaware, Pensilvania y New Jersey la ratificaron en diciembre de 1787; Georgia y Connecticut, en enero de 1788; Maryland, en abril de ese mismo año; Carolina del Sur, en mayo; New Hampshire, Virginia y New York, en verano. A final de año, sólo quedaban Carolina del Norte y Rhode Island, que firmaron el texto en noviembre de 1789 y mayo de 1790, respectivamente¹⁷⁰⁴, si bien recuérdese que con que tuviera la confirmación de nueve Estados ya entraba en vigor para los

¹⁷⁰⁰ *El Federalista* n° 60, pg. 236. Si bien: “[l]o cierto es que determinado número mínimo parece indispensable en todos los casos para asegurar los beneficios de la libre deliberación y consulta y para precaverse contra fáciles combinaciones para propósitos indebidos” (id.). Esos “beneficios de la libre deliberación” son un aspecto importante de la teoría política, moderna, también barruntados por Burke y que consistirían en “no solamente evitar errores, sino también en una función positiva, consistente en suministrar información sobre hechos, expandiendo el panorama de alternativas”, pues “la deliberación es condición necesaria, aunque no suficiente, para conseguir la imparcialidad. Nos provee de puntos de vista que no considerábamos, informaciones que no teníamos. Asimismo, la deliberación permite modificar los argumentos propios para hacerlos aceptables a los otros” (Gargarella, 2000, pg. 96). En la deliberación, “[l]as decisiones están basadas en procesos de pública argumentación que permiten reconocer las mejores razones y descalificar las propuestas sustentadas en la fuerza o los intereses” (Ovejero, *op. cit.*, pg. 24).

¹⁷⁰¹ *El Federalista* n° 63, pg. 267

¹⁷⁰² Vid. Brogan, *op. cit.*, pg. 207.

¹⁷⁰³ De Wilson se ha examinado su actividad en *supra*, pg. 317, nota 1171. Adams publicó, también en 1787, *Defence of the Constitutions of Government of the United States of America*. En esta obra, su autor destacaba que las constituciones norteamericanas se acercaban más a la perfección, cuanto más cerca estuvieran del modelo inglés, pero readaptado a la soberanía popular y la elección de los cargos públicos (vid. Matteucci, *op. cit.*, pp. 206 y 207)

¹⁷⁰⁴ Dry, Murray: “The Debate Over Ratification of the Constitution”, en Greene y Pole (eds.), *op. cit.*, pg. 471.

suscriptores¹⁷⁰⁵, cosa que, en consecuencia, había ocurrido mucho antes. Sin embargo, la generalizada ratificación se consiguió tras disipar los temores de muchos, que pese a sus reticencias con respecto a otros de sus argumentos, sí habían acogido de los antifederalistas el referido a la petición para incluir una Declaración de Derechos en el texto constitucional. Y esto, porque tales adversarios percibieron que este era su talón de Aquiles y arremetieron estratégicamente contra él. Así que los federalistas tuvieron que retroceder aquí y prometer a potenciales aliados la inclusión de varias enmiendas que permitieran incorporar al documento constitucional una tabla de derechos¹⁷⁰⁶. George Mason, uno de los delegados convencionales que había rechazado la Constitución, señalaba este motivo como uno de los principales para su negativa: “no hay Declaración de tipo alguno para preservar la Libertad de Prensa, o el Juicio por Jurado en las procesos civiles; ni contra el Peligro de los Ejércitos permanentes en tiempos de Paz”¹⁷⁰⁷. Brutus secundaba su postura, amparándose en las *Declaration of Rights* estatales:

Para proteger la vida, las cartas de derechos de la mayoría de los Estados han declarado, en relación con los procesos penales, que a nadie se le hará responder de un delito mientras no se le hayan dado a conocer los cargos que se le imputan; no se le podrá obligar a autoinculparse o facilitar pruebas en contra; los testigos de la acusación se mostrarán cara a cara y él habrá de ser escuchado personalmente o a través de su representante. Resulta esencial, para garantizar la vida y la libertad, que los hechos se juzguen en la comunidad donde ocurrieron. ¿Acaso las disposiciones de este tipo no son tan necesarias en el gobierno general como en el de un Estado concreto? Los poderes que se conceden al nuevo Congreso en muchos casos atañen a la vida; se le autoriza a disponer el castigo de diversos delitos capitales [...] Ningún hombre tendrá la seguridad de ser juzgado en el condado donde se haya cometido el presunto delito de que se le acusa; podrá ser trasladado [...] ¿Qué garantía existe de que a un hombre se le ofrecerá una descripción completa y clara de los cargos que pesan contra él? ¿De que se le permitirá presentar cuantas pruebas pueda reunir en su favor? ¿De que verá a los testigos de la acusación cara a cara, o de que se le escuchará plenamente en su propia defensa, personalmente o a través de su representante?

Para preservar la libertad se ha declarado que, “no se exigirán fianzas excesivas, ni se impondrán multas excesivas, ni se infligirán penas crueles o inusitadas” y que “todo mandamiento que se expida, sin el respaldo de juramentos o declaraciones, para registrar

¹⁷⁰⁵ Artículo VII.

¹⁷⁰⁶ Vid. Brogan, *op. cit.*, pg. 210; y Murray, *op. cit.*, pg. 482, así como Lutz, *op. cit.*, pg. 168.

¹⁷⁰⁷ “Objections to the Proposed Constitution” (1787), en Finkelman y Urofsky, *op. cit.*, pg. 105.

lugares sospechosos o aprehender a una persona, sus papeles o su propiedad, será considerado lesivo y abusivo”.

Estas disposiciones son tan necesarias bajo la autoridad del gobierno general como bajo la de cada uno de los Estados [...] Con el fin de garantizar la propiedad de los ciudadanos, todos los Estados han declarado que “en todas las controversias legales relativas a la propiedad, el antiguo método de juicio mediante jurado es una de las mejores garantías de los derechos del pueblo y ha de seguir siendo sagrado e inviolable”.

¿Es que en el ámbito nacional no existe la misma necesidad de asegurar el mantenimiento de este derecho que en el estatal? Sin embargo, nada se dice al respecto. En las cartas de derechos de los Estados se afirma que una milicia bien ordenada constituye la defensa apropiada y natural de un gobierno libre; que, como los ejércitos permanentes en tiempo de paz son peligrosos, no deben ser mantenidos, y que el poder militar ha de estar estrictamente subordinado y bajo el control de la autoridad civil.

Esta misma garantía es igualmente necesaria en esta Constitución, y aún con más motivo, pues el gobierno general tendrá la facultad exclusiva de reclutar y pagar ejércitos, y no estará sometido a ningún control al ejercerla. Sin embargo, en este nuevo sistema no se encuentra nada de esto.

Podría enumerar otra serie de derechos, cuya garantía es igualmente necesaria, como el derecho a que se celebren elecciones libres, a una libertad de prensa inviolable.¹⁷⁰⁸

Los federalistas, por boca de Hamilton, y como comparten el mismo bagaje sobre los derechos, toman una actitud defensiva, negando la necesidad e incluso conveniencia de una *Declaration of Rights* nacional, pero sólo porque

las declaraciones de derechos son originalmente pactos entre reyes y sus súbditos, disminuciones de la prerrogativa real a favor de sus fueros, reservas de derechos que no se abandonan al príncipe [...] no tiene aplicación en el caso de las constituciones, las cuales se fundan por hipótesis en el poder del pueblo y se cumplen por sus representantes y servidores inmediatos. Estrictamente hablando, *el pueblo no abandona nada* en este caso, y como lo retiene todo, no necesita reservarse ningún derecho en particular [...] Voy más lejos y afirmo que las declaraciones de derechos, en el sentido y con la amplitud que se pretenden, no sólo son innecesarias en la Constitución proyectada, sino que resultarían hasta peligrosas. Contendrían varias excepciones a poderes no concedidos y por ello mismo proporcionarían un pretexto plausible para reclamar más facultades de las que otorgan.¹⁷⁰⁹

¹⁷⁰⁸ N° 2, *op. cit.*, pp. 234 y 235. Subrayado propio.

¹⁷⁰⁹ *El Federalista* n° 89, pp. 367 y 368. Wilson apoyó este argumento. Vid. Levy, Leonard W.: *Constitutional Opinions. Aspects of the Bill of Rights*, New York, Oxford University Press, 1986, pg.

Brutus tampoco acepta este último argumento, afirmando que “esta forma de razonar no es consistente, sino engañosa”¹⁷¹⁰, que no es verdadera, pues

De haberlo sido, no habrían establecido ciertas reservas al tiempo que obviaban otras más importantes. Vemos que en la sección 9 del artículo 1, han declarado que el procedimiento de *habeas corpus* no será suspendido salvo en caso de rebelión; que no se aprobarán decretos de proscripción o leyes *ex post facto*; que los Estados Unidos no concederán títulos nobiliarios, etc. Si se conserva todo aquello que no se cede, ¿a qué vienen estas excepciones? ¿Acaso en alguna parte de esta Constitución se otorga la facultad de suspender el *habeas corpus*, de elaborar leyes *ex post facto*, dictar decretos de proscripción, o conceder títulos nobiliarios? Ciertamente, de forma expresa no lo hace. La única respuesta que cabe ofrecer es que estas facultades se hallan *implícitas* en los poderes generales que se confieren.¹⁷¹¹

Este argumento antifederalista, asimismo, se ve reforzado por la supremacía constitucional del Artículo VI¹⁷¹². Ante tal situación

No sólo no es cierto que una carta de derechos sea menos necesaria en la Constitución general que en las de los Estados, sino que, de hecho, ocurre lo contrario. Este sistema, si es posible que el pueblo de América lo apruebe, será un pacto fundacional; y, al ser el último, conforme a la naturaleza de las cosas, anulará cualquier acuerdo anterior incompatible con él. Pues al tratarse de un plan de gobierno acogido y ratificado por todo el pueblo, cualesquiera otras formas existentes en el momento de su adopción habrán de ceder ante él [...] Ningún privilegio reconocido por las cartas de derechos o garantizado por un gobierno estatal puede limitar el poder de la Constitución.¹⁷¹³

Y es que

Los poderes, derechos y autoridad que esta Constitución confiere al gobierno general son tan completos, por lo que respecta a los objetos sobre los que se extienden, como los de cualquier gobierno estatal. Afecta a todo lo que atañe a la felicidad humana: la vida, la libertad, la

111. Subrayado propio. La última opinión fue expresada, asimismo, por Roger Sherman, delegado convencional de Connecticut, durante la discusión constituyente de Filadelfia (Levy, *op. cit.*, pg. 110).

¹⁷¹⁰ *Brutus* nº 2, *op. cit.*, pg. 233.

¹⁷¹¹ *Ibid.*, pg. 236. Subrayado propio. Esta aseveración parecía reforzada por la sección 8 del Artículo I constitucional. Ahí, tras indicar potestades concretas del Congreso, se indicaba que el mismo tenía poder “Para expedir todas las leyes que sean necesarias y convenientes para llevar a efecto los poderes anteriores y todos los demás que esta Constitución confiere al Gobierno de los estados Unidos o a cualquiera de sus departamentos o funcionarios”.

¹⁷¹² *Vid. supra*, pg. 393.

¹⁷¹³ *Brutus* nº 2, *op. cit.*, pp. 236 y 237.

propiedad, se hallan bajo su control. En este caso, por consiguiente, existe la misma razón para contener el ejercicio del poder dentro de sus límites apropiados que en el de los gobiernos estatales.¹⁷¹⁴

Los antifederalistas, pues, vienen a recordar la tradición americana, que se corresponde con la búsqueda de controles efectivos sobre el poder político. Una teoría que era de origen *whig*, y que ponía en conexión contractualismo y derechos:

Existen ciertos derechos fundamentales e inalienables que, al efectuarse el contrato social, deberían reconocerse y establecerse explícitamente. Un pueblo libre e ilustrado, al concluir este contrato, *no confiará* todos sus derechos a quienes gobiernan, sino que fijará *límites* a sus legisladores y gobernantes, que resultarán bien visibles para los gobernantes y para quienes gobiernan; y éstos sabrán que no pueden traspasarlos sin que aquéllos lo descubran, y sin desencadenar una alarma generalizada. Estos derechos habrían de constituir la base de toda una constitución; y si el pueblo se halla en tal estado, o alberga opiniones tan distintas, que *no puede ponerse de acuerdo a la hora de establecerlos y determinarlos, éste es un poderoso argumento en contra de su reunión global en una sociedad única, bajo un único ordenamiento jurídico.*

Por supuesto, este texto obviaba que, mientras que algunos derechos se solían entender como de carácter “natural” (la libertad de expresión o de conciencia), otros eran “modificaciones sociales” (la libertad de prensa o el jurado)¹⁷¹⁵. Pero el *Federal Farmer* quiere hurgar en la llaga. Si se alude a una tradición política común para justificar el cambio, debe acogerse el legado *de manera completa*. No se pueden recoger los mecanismos institucionales republicanos sin acompañarlos de la idea contractualista que giraba en torno a unos derechos previos al ordenamiento. Para construir la edificación centralizada de esa comunidad, la sociedad debe acordar hacerlo así:

Debo confesar que nunca he considerado que el pueblo de estos Estados difiera sustancialmente al respecto, pues han derivado todos estos derechos de una fuente común, el sistema británico, y en la elaboración de sus constituciones estatales han hallado que sus ideas acerca de tales derechos son muy similares. Sin embargo, ahora se dice que los Estados difieren en estos aspectos de forma tan esencial, incluso en la importante cuestión del juicio mediante jurado, que cuando se reúnen en convención son incapaces e ponerse de acuerdo en un texto que instituya dicho juicio, o que reconozca y establezca muchos otros de estos derechos como estipulaciones

¹⁷¹⁴ Ibid., pg. 233.

¹⁷¹⁵ Levy, 1986, pg. 108.

fundamentales del contrato social. De ser cierto, *estamos procediendo a efectuar una integración de Estados sin ninguna base sólida*.¹⁷¹⁶

¿Qué había ocurrido? La estrategia antifederalista retiene el dato de que durante la Convención los delegados tuvieron serios problemas para ponerse de acuerdo acerca de la existencia de ciertos derechos comunes a todos y que la mayoría había optado por apartar el asunto, cansada de los debates que ya habían dejado exhaustos a los delegados, y temerosa de que condujera a un cenagal de discusiones interminables¹⁷¹⁷. La situación en los distintos Estados era diferente, pues muchos tenían *Declaration of Rights*, pero algunos carecían de ella, e incluso cuando disponían de ellos su contenido variaba¹⁷¹⁸. Sin embargo, la tradición referida a unos derechos se hallaba inserta, incluso en el cicatero documento federal, como demostraban varios de sus artículos. Justo los que señalaba Hamilton, en *El Federalista* n° 84¹⁷¹⁹, y a los ya se vió aludía Brutus¹⁷²⁰:

la Constitución propuesta por la Convención contiene varias [...] disposiciones de la índole descrita.

Independientemente de las que se relacionan con la estructura del gobierno, encontramos las siguientes: Artículo 1º, sección 3, cláusula 7: “La sentencia en los casos de acusación por delitos oficiales no tendrá otro efecto que la destitución del cargo y la inhabilitación para ocupar y disfrutar cualquier puesto honorífico, de confianza o remunerado que dependa de los Estados Unidos; pero la persona declarada culpable podrá ser acusada, enjuiciada, juzgada y castigada de acuerdo con la ley”. Sección 9 del mismo artículo, cláusula 2: “El privilegio del recurso de *habeas corpus* no se supenderá, excepto cuando la seguridad pública lo requiera, en los casos de rebelión o invasión”. Cláusula 3: “No se expedirá ningún decreto que imponga penas y prive de derechos sin previo juicio ante los tribunales, ni ninguna ley *ex post facto*”. Cláusula 7: “Los Estados Unidos no expedirán títulos de nobleza y ninguna persona que ocupe un puesto remunerado o de confianza podrá aceptar sin consentimiento de Congreso ningún regalo, emolumento, puesto o título de cualquier clase que sea, procedente de reyes, príncipes o Estados extranjeros”. Artículo 3º, sección 2, cláusula 3: “Todos los crímenes, excepto en los casos de responsabilidades oficiales, serán juzgados ante un jurado y el proceso

¹⁷¹⁶ *Federal Farmer* n° 2, pp. 255 y 256.

¹⁷¹⁷ Vid. Levy, *op. cit.*, pp. 105 y 106.

¹⁷¹⁸ Vid. *supra*, pp. 373 y 374. El propio Hamilton manifestaba este hecho en lo relativo al juicio por jurado para los procesos civiles, al indicar que “resulta disonante y excesivo el afirmar que no se halla segura la libertad en una Constitución que establece el juicio por jurado en los casos criminales pero que no hace lo propio en los civiles, cuando es notorio que en Connecticut [...] no existe ninguna disposición constitucional que provea a su establecimiento en ninguno de los casos”. *El Federalista* n° 83, pg. 365.

¹⁷¹⁹ Pg. 366.

¹⁷²⁰ N° 2. Vid. *supra*, pg. 434.

tendrá lugar en el Estado donde los referidos crímenes se hayan cometido; pero si no se hubieran cometido en ningún Estado, el proceso se celebrará en el lugar o los lugares que el Congreso haya dispuesto por medio de una ley”. Sección 3 del mismo artículo: “La traición contra los Estados Unidos sólo podrá consistir en hacer la guerra contra ellos, o en adherirse a sus enemigos, prestándoles ayuda y apoyo. No se podrá condenar por traición a persona alguna, sin el testimonio de dos testigos del mismo hecho patente, o basándose en confesión hecha en audiencia pública”. Y cláusula 3 de la misma sección: “El Congreso estará facultado para establecer el castigo correspondiente a la traición, pero ninguna condena por traición podrá privar del derecho de heredar o de transmitir bienes por herencia, ni producirá la confiscación, a no ser durante la vida de la persona a que se refiera”.

Luego entonces, los federalistas sí reconocían la existencia de varios derechos que debían ser respetados por las autoridades de cualquiera de los poderes gubernamentales:

¿No es uno de los fines de las declaraciones de derechos el declarar y especificar los privilegios políticos de los ciudadanos con relación a la estructura y administración del gobierno? Pues esto lo hace del modo más amplio y preciso el plan de la convención, el cual incluye algunas precauciones a favor de la seguridad pública que no figuran en ninguna de las constituciones locales. ¿Otro de los fines de la enumeración de derechos consiste en definir ciertas inmunidades y ciertos modos de proceder, relacionados con asuntos personales y privados? Como ya hemos visto, el plan provee también a esta necesidad en un gran variedad de casos.¹⁷²¹

Pero, como bien habían señalado los antifederalistas, ¿por qué reconocer sólo ciertos derechos, bien que fuera insertos en el *frame of government* nacional y no como *bill of rights* separado, y no otros que se estimaban también muy importantes? *Federal Farmer*, *Brutus* y los demás parecen percatarse de que la estructura que se está forjando puede acabar con las libertades tan queridas por los norteamericanos. Había en cambio quienes, como el propio Madison, no se hallaban tan inquietos por esta perspectiva. Les daba más miedo la contraria, una anarquía que luego diera paso al despotismo¹⁷²², según la tradicional teoría polibiana y aristotélica de las formas de gobierno¹⁷²³. En medio se hallaban todos aquellos que, sin oponerse al proyecto

¹⁷²¹ *El Federalista* n° 84, pg. 369.

¹⁷²² “La libertad puede verse amenazada por sus propios abusos tanto como por los abusos del poder; que abundan los ejemplos de lo primero tanto como de lo último, y que en los Estados Unidos es más de temer el primer peligro que el segundo.” *El Federalista* n° 63, pg. 270.

¹⁷²³ Vid. Matteucci, 2001, pg. 22-27.

constitucional, mostraban claras reticencias, debido a que no incluía una carta de derechos propiamente dicha, y entre los que destacaba Jefferson:

no soy del partido de los federalistas. Pero estoy mucho más lejos del de los antifederalistas. Aprobé desde el primer momento la gran mayoría de lo que contiene la nueva Constitución: la consolidación del gobierno; la organización de un ejecutivo, un legislativo y un judicial; la subdivisión del legislativo; el feliz compromiso de los intereses de los Estados grandes y pequeños mediante la distinta forma de votar en cada una de las Cámaras; la votación por personas en vez de por Estados; la facultad de veto cualificado a las leyes otorgada al ejecutivo, que, sin embargo, me habría gustado más si se hubiera asociado al judicial, como en Nueva York; y el poder impositivo [...] Lo que desaprobé, también desde el primer momento, fue la falta de una declaración de derechos para proteger la libertad, *tanto de la rama legislativa como de la ejecutiva del gobierno*; es decir, para garantizar la libertad de religión, la libertad de imprenta, la libertad frente a los monopolios, la libertad frente a la detención ilegal, la libertad frente a un ejército permanente, y un juicio por jurado, determinable en todos los casos por la ley del lugar...¹⁷²⁴

Los federalistas, ya por esas fechas, habían retrocedido y optado por ceder terreno a esta propuesta. Así, tras dominar en las cinco primeras convenciones ratificadoras, se encontraron en la sexta, la de Massachusetts, el segundo Estado más grande de la Unión, con que no obtenían la mayoría suficiente para su objetivo. Por tanto, tuvieron que atraerse el apoyo necesario, respaldando una recomendación adjunta que previera que los representantes en el futuro primer Congreso defendieran la inclusión de varias enmiendas. Lo mismo ocurrió en los siguientes Estados que pasaron a confirmar el texto constitucional¹⁷²⁵. La citada asamblea de la Unión se reuniría en marzo de 1789. Tras un proceso largo, que culminaría el 25 de septiembre de ese año (las dos cámaras entraron en discusión y se cribaron varias propuestas, quedándose en doce), fueron aprobadas las correspondientes Enmiendas. El quince de diciembre serían ratificadas por el undécimo Estado, habiendo caído por el camino dos de ellas¹⁷²⁶. Así se compondría esa suerte de *Bill of Rights* nacional por el que tantos habían peleado. Lo cierto, es que, pese a las críticas que pudieran haberse hecho contra él, los sucesivos reajustes en la práctica constitucional norteamericana han demostrado que nunca resultó superflua y que a partir de los años sesenta tuvo

¹⁷²⁴ Carta a Francis Hopkinson (París, 13 de marzo de 1789), en Jefferson, *op. cit.*, pg. 488.

¹⁷²⁵ Vid. Bernstein, Richard B., y Kaminski, John P.: "The Bill of Rights, 1791", en Schechter, Stephen L. (ed.): *Roots of the Republic. American Founding Documents Interpreted*, Lanham, Rowman & Littlefield, 1990, pg. 426.

¹⁷²⁶ *Ibid.*, pg. 428.

una apertura democratizadora y *pro libertate*. Las enmiendas aprobadas en 1789 fueron:

1ª) aquella por la que el Congreso no aprobaría ley alguna que adoptara “una religión como oficial del Estado” o se prohibiera “practicarla libremente”, o que coartase “la libertad de palabra o de imprenta, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al Gobierno la reparación de agravios”. La separación entre iglesia y Estado fue defendida por Madison¹⁷²⁷, y era la consecuencia lógica de un nuevo orden secular que se apartaba de la confesionalidad, dadas las numerosas sectas en presencia. Este y no otro era el origen del reconocimiento constitucional mencionado. La colonia pionera había sido Rhode Island, con una amplia tolerancia religiosa, que se contraponía a los regímenes cercanos a la teocracia de Connecticut y New Haven¹⁷²⁸. Pero debe considerarse que en Norteamérica, al margen de que fuera reconocida la pluralidad de grupos protestantes, se tendía a favorecer la pertenencia a alguno de ellos¹⁷²⁹, aunque se aceptase también cierto grado de tolerancia, variable de un lugar a otro, respecto a los católicos, e incluso en relación con los judíos y otras confesiones¹⁷³⁰. Existía un fuerte rechazo a la iglesia anglicana, fruto del cual se cerró el paso en los años sesenta y setenta del siglo XVIII a los intentos de sus (escasos) adeptos para formar un episcopado en América¹⁷³¹. E, incluso, el temor al papismo, como se ha señalado, típico de la tradición política inglesa, no feneció del todo a causa de la *Quebec Act*¹⁷³².

Ese carácter novedoso de la libertad religiosa también se reproducía en el caso de la libertad de prensa, que, como había demostrado el caso Wilkes, tenía límites muy claros en la metrópoli¹⁷³³. Así lo manifestaba Madison: “los derechos de

¹⁷²⁷ Vid. “Discurso de la propuesta de la declaración de derechos (8 de junio de 1789)”, en Madison, op. cit., pg. 88.

¹⁷²⁸ Vid. *supra*, pp. 208-211, sobre las *Fundamental Orders of Connecticut* (1639) y la *Original Constitution of New Haven* (1639), así como Primus, op. cit., pg. 107, también en el mismo sentido.

¹⁷²⁹ Vid. Primus, op. cit., pg. 107. Considérese que, por ejemplo, en Rhode Island, aunque no eran perseguidos los católicos y los judíos, no resultaba posible que desempeñaran cargos públicos o votasen (id., nota 66).

¹⁷³⁰ Así, el modelo más generoso era el de la constitución pensilvana, que afirmaba la libertad de conciencia, prohibiendo cualquier obligación para mantener un culto que no fuera el propio (II de su *Declaration of Rights*). Georgia hacía lo mismo, aunque con las limitaciones que pudieran derivar de la paz y seguridad del Estado (LV); limitaciones que también establecía New York para la libertad de culto que reconocía (XXXVIII). Virginia (Sec. 16 de su *Bill of Rights*) indicaba que “el deber para con nuestro Creador, y la manera de cumplir con él, sólo puede ser recogido por la razón y la convicción, no por fuerza o violencia; y por lo tanto, todos los hombres tienen atribuido el libre ejercicio de la religión, de acuerdo con los dictados de su conciencia”. Maryland restringía la protección legal del culto a los cristianos solamente (XXXIII de su *Declaration of Rights*), y otros Estados impedían el acceso a cargos públicos de quienes no fueran portestantes (XIX en NJ) o no profesarn la religión cristiana (MASS, Cap. II, Sec. I, Art. I, y Cap. II, Sec. II, Art. I, así como Cap. VI, referido al juramento obligatorio). Las demás constituciones encajaban en unos u otros esquemas de los descritos.

¹⁷³¹ Primus, op. cit., pg. 109.

¹⁷³² Vid. *supra*, pg. 316. Este temor quedó reproducido en el preámbulo de CS.

¹⁷³³ Vid. *supra*, pg. 314, nota 1166.

conciencia, esos escogidos privilegios del pueblo, no se encuentran salvaguardados en la constitución británica”¹⁷³⁴. De hecho, el acceso de periodistas a las cámaras británicas no se produciría hasta el siglo XIX¹⁷³⁵, mientras que en los Estados Unidos varias Constituciones imponían la publicación de los debates o permitían la asistencia de público en las tribunas¹⁷³⁶.

El derecho de reunión, por otro lado, se hallaba íntimamente ligado a toda la actividad política colonial, incluida la que se había opuesto a la dominación británica a través de los Congresos. El derecho de petición, como se ha visto, era tradicional en la Historia inglesa e intrínsecamente unido a las demás libertades, como demostraba la *Petition of Right* de 1628.

2ª) “Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado Libre, no se restringirá el derecho del pueblo de poseer y portar armas”. Se trataba de otro derecho que provenía de la oposición republicana al *standing army*.

3) ningún militar podrá ser alojado en casa de nadie, sin consentimiento del propietario; y en tiempo de guerra, sólo en la forma que prescriba la ley. También tenía su antecedente en la *Petition of Right* inglesa de 1628, así como en el *Bill of Rights* de 1689.

4) el derecho a encontrarse a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias, con la consiguiente prohibición de que se expidieran mandamientos no basados en motivo verosímil, ratificados mediante juramento o promesa y especificando el lugar de registro y la personas o cosas a detener o embargar. Uno de los casos prerrevolucionarios más conocidos fue el del *North Briton* nº 45¹⁷³⁷, cuando fueron detenidas cuarenta y nueve personas y aprehendidos apeles y documentos diversos en gran cantidad¹⁷³⁸.

5) prohibición de que nadie pueda ser juzgado por delito sin un jurado que le acuse; a ninguna persona se la pondrá más de una vez en riesgo de perder la vida o un miembro por razón de los mismos hechos; ni se la obligará a declarar contra sí misma en proceso penal; ni se la privará de la vida, libertad o propiedad sin el debido proceso

¹⁷³⁴ Madison, *op. cit.*, pg. 91.

¹⁷³⁵ Albert y Hoffman, *op. cit.*, pg. 39.

¹⁷³⁶ Vid. *supra*, pp. 374 y 404.

¹⁷³⁷ 1763, vid. *supra*, pg. 314, nota 1166.

¹⁷³⁸ Kaminski y Bernstein, *op. cit.*, pg. 432.

legal (*due legal process*); ni se podrá ocupar propiedad privada alguna sin justa indemnización.

6) “en toda causa criminal, el acusado gozará del derecho a ser juzgado rápidamente y en público por un jurado imparcial del distrito y Estado en que el delito se haya cometido. Distrito que deberá haber sido determinado previamente en la ley; así como de que se le haga saber la naturaleza y causa de la acusación, de que se le caree con testigos que depondan en su contra, de que se obligue a comparecer los testigos que le favorezcan y de contar con la ayuda de un abogado que le defienda”.

7) se garantiza a juicio por jurado en todos los casos de *common law* con valor controvertido superior a veinte dólares. Este derecho había sido eje de una gran polémica¹⁷³⁹.

8) “no se exigirán fianzas excesivas, ni se impondrán multas excesivas, ni se infligirán penas crueles y desusadas”. Como se ha visto, el origen de esta enmienda es muy antiguo y en los Estados Unidos tenía el importante precedente del *Body of Liberties* de Massachusetts¹⁷⁴⁰.

9) “aunque la Constitución enumere ciertos derechos, no ha de entenderse que niega o menosprecia otros poderes que conserva el pueblo”. Con esta enmienda se dejaba así claro que resultaba infundado el recelo por el hecho de que aparecieran reflejados derechos específicos en la Constitución, de manera que se pudiera suponer que los que no figuraran no se reconocían.

10) “los poderes que la Constitución no delega a los Estados Unidos ni prohíbe a los Estados, quedan reservados a los estados respectivos o al pueblo”. Se rechazaba, pues, cualquier posible derivación que justificara una doctrina de los “poderes implícitos”. Sin embargo, ya Madison se percató de que “incluso si el gobierno se mantiene dentro de esos límites, no por ello deja de tener ciertos poderes discrecionales respecto a los medios, lo que le podría llevar a alguna clase de abuso, de la misma manera que los poderes de los gobiernos de los Estados, que sus propias constituciones se encargan de delimitar, pueden conducir también a un cierto grado de abuso”.¹⁷⁴¹

¹⁷³⁹ *Supra*, pg. 434.

¹⁷⁴⁰ Vid. *supra*, pp. 218-220. Por supuesto, que lo que entonces se entendía por castigos desproporcionados no era lo mismo que ahora; entonces se tenía un concepto menos generoso.

¹⁷⁴¹ Madison, *op. cit.*, pg. 94.

Con las discusión sobre los derechos había surgido un interesante punto de contacto entre federalistas y otros grupos que, aunque deseosos de implantar una constitución nacional, mostraban recelo por las posibles arbitrariedades de un poder indomeñable. Jefferson, como se ha podido comprobar, era uno de quienes, no siendo federalistas, señalaba el camino. Un legislativo y un ejecutivo eran necesarios, y el primero, dividido en dos cámaras. Pero cualquiera de los dos poderes tenía la capacidad de atropellar a los ciudadanos y sus derechos. Una *Declaration of Rights* podría ser la barrera para detener cualquier tipo de desviación antirrepublicana en este sentido. Así lo admitía por fin Madison, de nuevo en su “Discurso de la propuesta de la declaración de derechos” (8 de junio de 1789):

Se podría pensar que todas las barreras de papel frente al poder de la comunidad resultan demasiado débiles como para ser merecedoras de atención. Por mi parte, soy consciente de que no son todo los fuertes que deberían serlo como para satisfacer a todos esos caballeros que se han parado a pensar y examinar penetrantemente la naturaleza de esta defensa. Sin embargo, en la medida en que pueden servir para imprimir un cierto grado de respeto, inclinar a la opinión pública en su favor y suscitar la atención de toda la comunidad, bien podrían constituir un medio para refrenar a la mayoría de cometer actos a los que de otra manera se podría sentir inclinada.¹⁷⁴²

James Winthrop, de Massachusetts, indicaba, en una línea similar, que ese *Bill of Rights* serviría para “asegurar la minoría contra las usurpaciones y tiranía de la mayoría” o, más allá, “necesario para defender al individuo contra la mayoría”¹⁷⁴³. El propio Jefferson señalaba también que

El inconveniente de la declaración es que puede anquilosar la acción útil del gobierno. Pero este mal es de vida corta, moderado y reparable. Los inconvenientes de la falta de declaración son permanentes, desafortunados e irreparables. Progresan constantemente de mal en peor. El ejecutivo de nuestros gobiernos no es el único, si siquiera el principal objetivo de mi recelo. La tiranía de los legislativos es actualmente, y será durante muchos años, un peligro más formidable. La del ejecutivo llegará en su momento; pero será en un futuro remoto.¹⁷⁴⁴

¹⁷⁴² *Op. cit.*, pg. 93.

¹⁷⁴³ Levy, Leonard W.: *Origins of the Bill of Rights*, Yale, Yale University Press, 1999, pg. 30

¹⁷⁴⁴ Jefferson, Carta del 15 de marzo de 1789 a James Madison, *op. cit.*, pp. 491 y 492.

Madison concede así una función pedagógica a la Declaración, coincidiendo en este punto con Richard Henry Lee¹⁷⁴⁵. Pero resulta que los respectivos *bill of rights* no habían servido para frenar las arbitrariedades del legislativo en los diversos Estados en que éstas se habían producido. Actuaciones tales como la condonación o cancelación extemporáneas de deudas o las confiscaciones de propiedades, auxiliadas por normativa *ex post facto*, o los programas inflacionarios de expedición de billetes que iban acompañados de la imperatividad de aceptar moneda determinada para el pago de deudas, estaban destruyendo tanto la fe pública como la confianza de los particulares¹⁷⁴⁶.

Madison encuentra la respuesta a esa crisis en la Constitución federal, que incluiría no sólo una tabla de derechos en su supremacía, sino también la posibilidad de que jueces y tribunales hagan respetarla frente al vapuleo del legislativo. Entonces, sí que podría tener una utilidad precisa:

En contra de una declaración de derechos [...] Se ha dicho que no es necesario sobrecargar la Constitución con una previsión como ésta, que no se consideró de utilidad ya en las constituciones de los distintos Estados. Ciertamente, solo hay unos pocos Estados en los que no se haya producido, en un momento o en otro, una violación de los más importantes artículos, pero de esto no se deriva que éstos no puedan tener, en una u otra medida, un efecto saludable frente a los abusos de poder. Si se produce su incorporación a la Constitución, los tribunales de justicia, en su independencia, se considerarán a sí mismos de una manera específica guardianes de esos derechos, convirtiéndose en un inexpugnable baluarte frente a cualquier irrogación del poder en el ejecutivo y en el legislativo y viéndose así llevados de modo natural a resistir cualquier vulneración de derechos expresamente proclamados en la Constitución y, más en concreto, en su declaración de derechos. Además de esta garantía, existe una gran probabilidad de que la observancia de esta declaración se vea propulsada por el sistema federal, puesto que las legislaturas de los Estados vigilarán celosa y minuciosamente las actuaciones del gobierno

¹⁷⁴⁵ Levy, 1999, pg. 30.

¹⁷⁴⁶ Wood, *op. cit.*, pp. 404-406. A modo de ejemplo, aunque hubo muchas más afirmaciones parecidas (así, la del mismo órgano en Pensilvania, en 1784), el Consejo de Censores de Vermont vino a decir (informa de febrero de 1786) que en este Estado el legislativo estaba usurpando su papel a los otros poderes y alcanzando un control total sobre la Administración de Justicia, al atribuirse el conocimiento de todos los casos por encima de las 4.000 libras, interfiriendo asimismo en las causas entre particulares, paralizando ejecuciones de sentencias o revocándolas, obstaculizando las actuaciones de los tribunales en asuntos sobre propiedad de la tierra o contratos privados y en los que estuviera implicado un acreedor y un deudor...el resultado es que nueve décimas partes de los pleitos se hallaban congelados. Desde 1776, los legislativos estatales habían virado hacia una función omniabarcadora cuyo único precedente se hallaba en los parlamentos medievales: reforzamiento del control sobre la jurisdicción de equidad, modificaciones de los títulos sobre la propiedad de la tierra, anulación de vínculos matrimoniales, el perdón de sanciones pecuniarias (vid. *ibid.*, pp. 407 y 408).

general y serán capaces de resistir las usurpaciones de poder con más efectividad que cualquier otro poder sobre la tierra pueda hacerlo.¹⁷⁴⁷

II.2.6. La aparición de una jurisdicción constitucional

II.2.6.1. La supremacía constitucional y su garantía

La supremacía constitucional que inspiró a los constituyentes de la Convención reunida en 1787, implicaba la búsqueda de algún mecanismo que pudiera protegerla. Como antecedente para esta operación sólo se contaba con el Consejo de Censores de Pensilvania y el Consejo de Revisión de New York¹⁷⁴⁸. Una primera propuesta vino de la mano del Plan Virginia, que, recuérdese, pretendía en su punto nº 6 conceder un poder amplísimo a las dos cámaras nacionales, así como a vetar las leyes estatales que considerasen iban contra la Constitución¹⁷⁴⁹. Su artículo 8 establecía que el Ejecutivo y

un número apropiado de miembros de la judicatura Nacional, deberían conformar un consejo de revisión con autoridad para examinar toda ley de la Legislatura Nacional antes de que pueda entrar en vigor, así como toda ley de los Legislativos particulares antes de que el veto sobre la misma sea definitivo; y que el disenso del mencionado Consejo significará un rechazo, a no ser que la ley de la Legislatura Nacional sea aprobada nuevamente o que el veto sobre una ley de la Legislatura particular sea de nuevo acordado por cada una de las Cámaras.¹⁷⁵⁰

Este sistema fue rechazado por diversos delegados, bajo pretexto de que en él los jueces quedaban presa de un organismo que no les permitiría conservar su imparcialidad: “los jueces deben tener la posibilidad de interpretar las leyes, libres de cualquier prejuicio derivado de haber tomado parte en su formación”¹⁷⁵¹. La separación de poderes parece exigir esta premisa. Lo que ocurrió, de todas formas, es que el Plan fue rechazado porque los Estados pequeños se veían oprimidos por sus

¹⁷⁴⁷ Madison, *op. cit.*, pp. 96 y 97.

¹⁷⁴⁸ Vid. *supra*, y Acosta, José: *Formación de la Constitución y jurisdicción constitucional. Fundamentos de la Democracia Constitucional*, Madrid, Tecnos, 1998, pp. 80 y 85.

¹⁷⁴⁹ Vid. *supra*, pp. 387 y 388.

¹⁷⁵⁰ Finkelman y Urofsky (eds.), *op. cit.*, pg. 81; el número de miembros de las cámaras necesario no se indicaba aún.

¹⁷⁵¹ Rufus King, cit. por Blanco, *op. cit.*, pg. 150. King (1775-1827) fue hijo primogénito de un exitoso mercader, resultando elegido para el Congreso Continental; y fue partidario de un gobierno central más poderoso. Después sirvió como senador del Estado de New York. Vid. *Biographies*, en Greene y Pole, *op. cit.*, pp. 741 y 742.

consecuencias¹⁷⁵². Por tanto, a continuación, otro Plan, el de New Jersey, comenzó a debatirse. En su artículo sexto, establecía que

todas la leyes de los Estados Unidos aprobadas por su Congreso y todos [...] los Tratados firmados y ratificados bajo la autoridad de los Estados Unidos, serán la ley suprema de los respectivos Estados, en la medida en que unos y otros sean relativos a dichos Estados o sus ciudadanos, y la Judicatura de los diversos Estados quedará vinculada a esta premisa en sus decisiones si [...] algún Estado o cuerpo de hombres en uno de ellos se opusiera a la aplicación de dichas normas y tratados, el Ejecutivo Federal se hallará autorizado a demandar el poder de los Estados Confederados [...] para forzar y compeler a la obediencia de tales leyes y la observancia de tales Tratados.¹⁷⁵³

Sin embargo, tampoco este Plan fue aprobado¹⁷⁵⁴, dadas las razones ya expuestas arriba. Por otra parte, el 15 de agosto de 1787, y pese a los esfuerzos de Madison por mantener el Consejo de Revisión, éste resultó definitivamente rechazado¹⁷⁵⁵. Lo que subyacía a todos los sistemas de control era conseguir cierta unificación nacional que impidiera a posibles fuerzas centrífugas desmembrar la Unión. Quedaba en pie la posibilidad de que los jueces ejercieran algún tipo de vigilancia para hacer respetar la Constitución federal. Algo que se traduciría, pero mucho más tarde, como *judicial review*¹⁷⁵⁶. En realidad, entonces se atisbaba con un contenido menos ambicioso del que luego dispondría. Así, aunque la mayoría de la Convención apoyó finalmente este tipo de intervención¹⁷⁵⁷, no llegaba a definirla con detalle. Se trataba de un mecanismo nunca ensayado antes propiamente en ninguna república (no digamos bajo el cetro de un monarca) y rodeado de incógnitas en cuanto a su desenvolvimiento. Nadie podía predecir la gigantesca importancia que adquiriría posteriormente, y tampoco el grado de centralización que supondría¹⁷⁵⁸, si bien ésta

¹⁷⁵² Vid. *supra*, pg. 387.

¹⁷⁵³ Finkelman y Urofsky (eds.), *op. cit.*, pg. 84.

¹⁷⁵⁴ Vid. *supra*, pg. 388.

¹⁷⁵⁵ Blanco, *op. cit.*, ppp. 151-155.

¹⁷⁵⁶ La expresión *judicial review* como denominación técnica del poder judicial de control, no se generaliza en los Estados Unidos hasta la segunda década del siglo XX. Vid. Ahumada, Marian: “*Marbury versus Madison*, doscientos años (y más) después”, *Fundamentos*, n. 4, Oviedo, Junta General del Principado de Asturias y Universidad de Oviedo, 2006, pp. 109-49 (disponible en <<http://web.uniovi.es/constitucional/fundamentos/cuarto/index.htm>>|>), pg. 117 nota 7: “[l]a acuñación de la expresión ‘*judicial review*’ como denominación técnica de la competencia de los jueces para el control de constitucionalidad de las leyes se atribuye a Edward Corwin, que habría comenzado a emplearla en una serie de artículos, muy influyentes en su momento, publicados a partir de 1910 en la *Michigan Law Review* (el primero, «The Establishment of Judicial Review»). La expresión se populariza entre los académicos antes de ser finalmente adoptada por el Tribunal Supremo”.

¹⁷⁵⁷ Acosta, *op. cit.*, pg. 104, y Blanco, *op. cit.*, pg. 155.

¹⁷⁵⁸ Acosta, *op. cit.*, pg. 94, señala: “[d]esde nuestra metodología, revisión judicial de las leyes entendida como control de constitucionalidad de las mismas quiere decir control sobre todas las leyes, que necesita de un órgano supremo central y sólo existirá como sistema a partir de la guerra de Secesión, cuando

era sin duda prioritaria, según se desprende de los propios artículos 3 y 6 del texto constitucional. Unos y otros delegados no se habían puesto de acuerdo para insituir alguna figura más o menos cercana al Consejo de Revisión o, incluso al Consejo de Censores pensilvano¹⁷⁵⁹, con lo cual, sin haberse solucionado todas las tensiones interterritoriales y pretendiendo construir un nuevo modelo federal, la única solución de compromiso era relegar el arbitraje de aquéllas a los jueces, bajo la cobertura que ofrecía cierta tradición que había existido en el Derecho inglés y que tenía su remoto origen en Coke y el *common law*¹⁷⁶⁰. Sin embargo, no dejaba de ser un apaño bastante pobre, ya que esa judicatura era en realidad muy débil en relación con los otros poderes¹⁷⁶¹, como se verá en el propio caso que se considera inaugurador de la *judicial review*, el *Marbury v. Madison*. Antes de este supuesto, que establecía la inconstitucionalidad de una ley federal, parece que hubo algunos otros, entre 1776 y 1787, en los cuales se condenó tal tipo de contravención, pero de leyes estatales en relación con Constituciones de la misma índole¹⁷⁶². Y, desde luego, sólo entendida considerando que no existía un diseño constitucional tan “acabado” (en cuanto a nivel de coherencia) como el que hoy tenemos. Los norteamericanos únicamente disponían de documentos constitucionales que pugaban por convertirse en normas supremas en medio de una pluralidad de fuentes (costumbre, *common law*, tratados

también abarque de manera *continua* el control de las leyes federales. Todo lo anterior es un largo proceso de incubación y de lenta eclosión” (el subrayado es propio). Aunque la idea de primacía de la Constitución ha resultado ser inseparable de esta misma, ya desde su nacimiento, las consecuencias jurídicas concretas para las normas opuestas a tal Carta Fundamental, han surgido más tardíamente, al articularse una garantía jurisdiccional (Blanco, *op. cit.*, pp. 133 y 134). “El Tribunal (Supremo) comenzó a acostumbrar al país al hecho de la *judicial review*, sin proclamarla para ejercerla” (Currie, David P., *The Constitution in the Supreme Court. The First Hundred years 1789-1888*, 1985, pg. 5, cit. por Acosta, *op. cit.*, pg. 111).

¹⁷⁵⁹ En este segundo supuesto, James Wilson hizo un proyecto para un *national jury* de carácter similar. Vid. Acosta, *op. cit.*, pg. 102.

¹⁷⁶⁰ Vid. *supra*, pp. 40 y 41. Y Blanco, *op. cit.*, pg. 141, donde se indica las alusiones a ese tipo de doctrina esgrimidos por Otis y John Adams, si bien descontextualizándola parcialmente. Sobre Otis en particular, asimismo, vid. Acosta, *op. cit.*, pg. 96..

¹⁷⁶¹ Vid. *El Federalista* nº 78, pg. 408, *supra*.

¹⁷⁶² Blanco, *op. cit.*, pg. 144: “entre 1776 y 1787 se producirán más de media docena de casos en que el poder judicial procedera a declarar inconstitucional normas legislativas que se entendían contrarias a la legislación superior de los Estados” (por ejemplo, el mencionado por Sherry, *op. cit.*, pg. 1142: en New Hampshire, en 1786, un tribunal rechazó seguir una ley que privaba del jurado a supuestos de débitos de menor entidad, a causa de que la constitución de allí garantizaba el proceso de tal índole). Acosta, *op. cit.*, pp. 97 y 98, reconoce la existencia de supuestos a regañadientes, pues los criba, basándose en que varias resoluciones no eran con exactitud antecedentes de la *judicial review*. Al respecto, propone como paradigmático un caso de Rhode Island, ya que allí ni siquiera existían propiamente constitución, sino una vieja carta colonial. Lo que ocurre, en realidad, es que en aquel período se entendía como inconstitucionalidad de la ley algo no exactamente igual a lo que vino a continuación; así, era inconstitucional una norma que fuera contra los principios del *common law*, como indica de pasada y sin detenerse el propio Acosta. Vid. Sherry, *op. cit.*, pg. 1134: “por los 1780, la ‘constitución’ de un Estado Americano consistía en su ley fundamental (tanto la positiva como la natural), los derechos inherentes y inalienables de todo ser humano (fueran declarados o no) y la fórmula de un gobierno mixto que protegería mejor los derechos naturales y esa misma ley fundamental”. De hecho, Sherry sostiene que había *varias* leyes fundamentales (vid. *id.*, *passim*). “No era, por tanto, su localización en la Constitución lo que convertía determinadas reglas o principios en fundamentales: estaban en la Constitución porque *eran* fundamentales”; Ahumada, Marian: *La jurisdicción constitucional en Europa*, Cizur Menor, Thomson Civitas, 2005, pg. 191.

internacionales, leyes codificadas o no, y sobre muy diversas materias, etc)¹⁷⁶³, aún de difícil jerarquización. Por supuesto, la doctrina jurídica inglesa incorporaba orden, por ejemplo, a través de la obra de Blackstone, pero esto no eliminaba la dispersión normativa. Y si ésta venía paliada, comparándola con la actual, por su escaso volumen, hay que decir que revertía políticamente una y otra vez, y de manera insoluble, al conflicto entre los Estados y el gobierno de la Unión, es decir, al tema de la soberanía. *Precisamente el asunto cuya solución se buscaba a través de la intervención judicial*¹⁷⁶⁴. La respuesta más ruda a tal problema podía ser la del llamado “Plan Hamilton”, también rechazado durante la Convención: “10. Todas las leyes de los Estados contrarios a la Constitución o a las leyes de los Estados Unidos serán totalmente nulas”.¹⁷⁶⁵ Este era el quebradero de cabeza principal de los constituyentes más favorables a la misma, cómo erigir la Unión haciendo que los Estados se sometieran a ella¹⁷⁶⁶, a sus bases, pero sin atacar el susceptible sentimiento local que pudiese reaccionar en contra.

En cualquier caso, con la Constitución federal y la pretensión política unificadora que favorecía, se abrían nuevas posibilidades (y no digamos ya con la posterior incorporación de ese *Bill of Rights* que conformaron las Enmiendas). Una cosa es buscar un *acomodo* de la ley a la Carta, y otra, *declararla nula* cuando la contradiga (y aún más rotundo, *expulsarla* del ordenamiento, un mecanismo kelseniano muy posterior). Pero juntamente con este elemento, y aunque fuera de manera más imperceptible, solapada, surgía otro de importancia. En realidad, el poder de control judicial iba a seguir una línea de evolución paralela al *legicentrismo* que ya estaba emergiendo en los Estados Unidos. Recuérdese, la ley ganaba una relevancia antes nunca vista, hasta el punto de que los legislativos estatales eran percibidos, y con un grado de consenso que iba más allá de los federalistas, como un poder que se había vuelto peligroso y usurpador de las atribuciones correspondientes a los demás departamentos. Había traspasado esos límites que fijaba el reparto de poderes atribuido a la tradición inglesa. Se había mostrado contrario a lo que entre nosotros Laporta ha denominado el “imperio de la ley”¹⁷⁶⁷; así: a) a la prohibición de decisiones súbitas o impredecibles, b) a un ordenamiento de carácter general, prospectivo y no retroactivo, estable, público y claro, y c) a un mecanismo de adjudicación de normas para resolver conflictos bajo condiciones de imparcialidad y con exigencias de argumentación. Frente a tales arbitrariedades, es cierto que podría alzarse el

¹⁷⁶³ Primus, *op. cit.*, pg. 89.

¹⁷⁶⁴ Acosta, *op. cit.*, pg. 105

¹⁷⁶⁵ Finkelman y Urofsky, *op. cit.*, pg. 84. Como su nombre indica, fue elaborado por Alexander Hamilton.

¹⁷⁶⁶ En julio de 1787, la mayoría de los delegados en la Convención se mostraron de acuerdo en buscar el medio para poder ejecutar la Constitución contra los estados. Acosta, *op. cit.*, pg. 105.

¹⁷⁶⁷ Vid. *supra*, pg. 338, nota 1281.

ejecutivo, con su veto suspensivo. Pero, como bien ha demostrado el ejemplo colonial de los gobernadores, este otro departamento no resulta fiable del todo, y, desde luego, no podía mantener una *imparcialidad* propiamente dicha, es decir, y en sentido republicano, *al margen de los partidos*. Era necesario acudir al poder más débil, el judicial¹⁷⁶⁸, que había rendido buenos frutos en la experiencia inglesa, siempre que se conservara su característica de inamovilidad, la “tenencia permanente” de sus cargos, pues “nada contribuirá tanto como esto a estimular en los jueces ese espíritu independiente que es esencial para el fiel cumplimiento de tan arduo deber”¹⁷⁶⁹, el de administrar justicia.

La intención de los federalistas, en este punto, resulta clara: los jueces tendrán “el deber” de “*declarar nulos* todos los actos contrarios al *sentido evidente* de la Constitución”¹⁷⁷⁰. La argumentación federalista defiende una interpretación que no sea sólo de acomodo, sino que sostenga la supremacía constitucional sin paliativos, bajo principio de precedencia jerárquica:

El ejercicio del arbitrio judicial, al decidir entre dos leyes contradictorias, se ilustra con un caso familiar. Sucede con frecuencia que coexisten dos leyes que se oponen en todo o en parte, ninguna de las cuales contiene una disposición o expresión derogatoria. En semejante caso les corresponde a los tribunales esclarecer y fijar su significado y su alcance. *Si es posible que una interpretación razonable las concuerde y armonice, la razón y el derecho aconsejan de consuno que así se haga; si ello es impracticable, se impone la necesidad de aplicar una con exclusión de la otra*. La regla que ha prevalecido en los tribunales para determinar la validez relativa de las leyes dispone que la última en el tiempo sea preferida a la anterior.

Sin embargo, por lo que hace a los actos incompatibles de una autoridad superior y otra subordinada, de un poder original y otro derivado, la naturaleza de las cosas y la razón indican que se debe seguir la regla inversa. Nos enseñan que el primer acto de un superior debe ser preferido al acto subsecuente de una autoridad inferior y subordinada, y que, consiguientemente, siempre que determinada ley contravenga la Constitución, los tribunales tendrán el deber de apegarse a la segunda y hacer caso omiso de la primera.¹⁷⁷¹

El problema es que esta fórmula resulta más enérgica que la expuesta por la Carta, donde se decía tan sólo que “los *jueces de cada Estado*” estarían “obligados” a observar la “Constitución”, las “leyes” de los Estados Unidos y los “tratados” que éstos

¹⁷⁶⁸ Vid. *El Federalista* n° 78, pg. 409, *supra*.

¹⁷⁶⁹ Pg. 333.

¹⁷⁷⁰ Id.

¹⁷⁷¹ *El Federalista* n° 78, pg. 333. Subrayado propio.

suscribieran¹⁷⁷², aun cuando todas estas normas se opusiesen a alguna de las Constituciones o leyes estatales. De este precepto *no se desprende una papel relevante del Tribunal Supremo y la judicatura federal*; los custodios son aquí los magistrados *estatales*. Pero tal extremo no arredra a Hamilton, ya que aunque “no existe en el plan que estudiamos una sola sílaba que faculte *directamente* a los tribunales nacionales¹⁷⁷³ para interpretar las leyes de acuerdo con el espíritu de la Constitución o que les conceda a este respecto mayor libertad de la que pueden pretender los tribunales de cualquier Estado”, resulta que

sin embargo, admito que la Constitución deberá ser la piedra de toque para la interpretación de las leyes y que siempre que exista una contradicción evidente, las leyes deben ceder ante ella. Pero esta doctrina no se deduce de ninguna circunstancia peculiar al plan de la convención, sino de la teoría general de una Constitución limitada y, hasta donde puede ser cierta, es aplicable con la misma razón a la mayoría, si no ya a todos los gobiernos de los Estados. Por lo tanto, no puede fundarse en esta circunstancia ninguna objeción contra la judicatura federal que no proceda también en contra de las judicaturas locales y que no sirva para condenar a cualquier Constitución que pretenda marcar límites al arbitrio legislativo.¹⁷⁷⁴

Así, pues, los federalistas apoyan una interpretación extensiva de los poderes de la judicatura federal, a fin de controlar a los Estados. Durante todo el período que duró la ratificación sucesiva del documento nacional, el tema del control de constitucionalidad de las leyes siguió coleando. En Virginia, por ejemplo, el debate mantenido por Patrick Henry y John Marshall giraba asimismo sobre si aquella facultad correspondía sólo a los jueces estatales, postura de Henry, o a los federales, posición del otro¹⁷⁷⁵. El problema de la soberanía, pues, seguía mediatizando la discusión. Y, faltándoles el apoyo legal oportuno, los partidarios de la segunda opinión lo buscan en la *Judiciary Act*, aprobada por el Congreso el 24 de septiembre de 1789 (un poco después de las primeras Enmiendas). Su Sección 25 concedía amplias facultades al Tribunal Supremo, exponiendo que

una decisión judicial del tribunal *de ley o equidad* más alto de un Estado¹⁷⁷⁶, y que vaya contra la validez de un tratado, ley o acto aplicados bajo la autoridad de los Estados Unidos; u otra

¹⁷⁷² Art. VI.

¹⁷⁷³ Añado este *subrayado*, que no consta en la traducción que utilizo en todo el presente texto, y que es aquí, sin embargo, importante.

¹⁷⁷⁴ *El Federalista* nº 81, pg. 344. Subrayado del autor.

¹⁷⁷⁵ Blanco, *op. cit.*, pp. 165 y 166.

¹⁷⁷⁶ Nótese que aquí se produce una unificación de los tipos de tribunal, pues resultan sometidos al criterio último de idéntico tribunal “superior común”, cosa que no había ocurrido en el período británico.

resolución judicial del mismo tipo, que se pronuncie a favor de la validez de una ley o acto estatales, y que se impugne por entenderse que éstos son repugnantes a la Constitución, los tratados o las leyes de los Estados Unidos, [...] podrán ser revisadas, y ratificadas o revocadas a continuación, por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, mediante *writ of error*.

Sin embargo, las tensiones entre fuerzas centrífugas y centrípetas no desaparecieron. De hecho, nunca lo harían del todo en la historia norteamericana, si bien las segundas quedaron claramente reforzadas tras la Guerra de Secesión. Grave dentro de la etapa que nos ocupa fue el caso de la sentencia *Chisholm v. Georgia*, dictada a principios de 1793 por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Con ella, se permitía a un ciudadano de un Estado o súbdito extranjero acudir a los tribunales federales en sus acciones contra otro Estado, interpretando en toda su amplitud el Artículo III de la Constitución federal¹⁷⁷⁷. El Congreso, dada la polvareda levantada por las entidades estatales¹⁷⁷⁸, tuvo que aprobar la undécima Enmienda: “[e]l poder judicial de los Estados Unidos no debe interpretarse que se extiende a cualquier litigio de derecho estricto o de equidad que se inicie o prosiga contra uno de los Estados Unidos por ciudadanos de otro Estado o por ciudadanos o súbditos de cualquier Estado extranjero”. Ha de notarse, pues, que los primeros amagos de una construcción de la *judicial review* del Tribunal Supremo estuvieron dirigidos *contra las leyes estatales, no contra las del Congreso nacional*¹⁷⁷⁹. Así lo confirmaría, de manera más indubitada, *Ware v. Hylton* (1796), sentencia de la Suprema Corte que anulaba una ley de Virginia, basándose en que era contraria a un tratado internacional firmado por los Estados Unidos¹⁷⁸⁰.

II.2.6.2. Marbury vs. Madison

II.2.6.2.a) El supuesto

El primer caso claro de control de constitucionalidad de una ley en los Estados Unidos se produjo con la sentencia del Tribunal Supremo “Marbury contra Madison”¹⁷⁸¹, redactada en realidad por su Presidente, John Marshall¹⁷⁸². El argumento básico que utilizó la resolución judicial fue el que ya había empleado Hamilton en *E/*

¹⁷⁷⁷ Vid. *supra*, pg. 392.

¹⁷⁷⁸ Había ocurrido que la decisión citada legitimaba a numerosos acreedores que habían acumulado papel moneda emitido por los Estados de manera masiva y sin consideración a sus auténticas reservas en metálico.

¹⁷⁷⁹ Vid. Acosta, *op. cit.*, pp. 108 y 109.

¹⁷⁸⁰ Vid. Acosta, pg. 110.

¹⁷⁸¹ Vid. <<http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=us&vol=5&invol=137>>, Thomson Reuters.

¹⁷⁸² Ahumada, 2006, pg. 137.

Federalista nº 78¹⁷⁸³. Pero “Marshall convierte un argumento que en última instancia estaba basado en la ponderación de las ventajas sobre los inconvenientes, en un argumento rotundo acerca de ‘lo que es debido’ ”¹⁷⁸⁴. Y si bien “[l]a decisión de este caso no impulsó inmediatamente el ejercicio del control de constitucionalidad de las leyes”, pues, de hecho, “probablemente el Tribunal Marshall fue el Tribunal más ‘deferente’ con el Congreso de la historia de Estados Unidos”, “cuando hizo falta una autoridad judicial a la que remitirse, un precedente no cuestionado (¡de la época de la generación constituyente!) que avalara el ejercicio del poder judicial de control, *Marbury* estaba ahí”¹⁷⁸⁵. Paso a exponer los sucesos que originaron esta oportunidad.

William Marbury había sido nombrado por el presidente John Adams como juez de Paz para el Distrito de Columbia. Aunque tal designación fue formalizada, no dio tiempo a enviarla. El nuevo Secretario de Estado, James Madison, y tras la caída del ejecutivo anterior, fue requerido para que la remitiera, pero no dio prueba de aceptar tal petición. Por tanto, Marbury se dirige al Tribunal Supremo en primera instancia, solicitándole la emisión de un *writ of mandamus* que conminara al Secretario de Estado a enviar la designación mencionada, permitiéndole así ocupar el puesto para el que había sido nombrado por la anterior administración. La parte perjudicada no planteaba cuestión alguna sobre constitucionalidad de una ley, sino que acudía al Tribunal Supremo para que tutelara un supuesto derecho, solicitando que controlase el poder presidencial en materia de nombramiento y continuidad de un cargo público. En un primer instante, y con cautela, el órgano judicial pidió a Madison explicar los motivos por los que no debería remitirle un *writ of mandamus* en este caso. La fórmula constitucional de la separación de poderes, recogida en una recién nacida Constitución federal rodeada de incertidumbres, impulsaba este miramento. El nuevo Secretario no contestó. El Tribunal, entonces, optó por dictar una sentencia que respondía a tres preguntas¹⁷⁸⁶:

Primera. ¿Tiene el demandante derecho a la designación que solicita?

Segunda. Si tiene ese derecho y resulta que ha sido violado, ¿le otorgan las leyes del país un remedio?

Tercera. Si así es, ¿el remedio consistiría en un mandamiento que haya de expedir este Tribunal?

¹⁷⁸³ Vid. *supra*, pg. 409.

¹⁷⁸⁴ Ahumada, 2006, pg. 129

¹⁷⁸⁵ Id.

¹⁷⁸⁶ La traducción es propia, si bien parcialmente deudora de J. M. Vidal en la *web* de la Universidad de Valladolid, <http://www.der.uva.es/constitucional/verdugo/marbury_madison.html>. El original se halla en <<http://www.constitution.org/ussc/005-137a.htm>>

A la primera, el Tribunal contestó que el demandante sí tenía derecho al nombramiento paralizado:

hay que entender que el Sr. Marbury había sido designado para el cargo desde que su designación fue firmada por el Presidente y sellada por el Secretario de Estado (de entonces); y como la ley que crea el cargo confiere el derecho a desempeñarlo durante cinco años, con independencia del Poder Ejecutivo, el nombramiento no puede ser revocado.

A la segunda pregunta, la de si el ordenamiento nacional contemplaba algún remedio para reponer en su derecho Marbury, Marshall respondió que

El gobierno de los Estados Unidos ha sido tildado con insistencia de gobierno de leyes y no de hombres. Ciertamente dejaría de merecer esta elevada estimación, si las leyes no proporcionaran remedio para la violación de un derecho adquirido¹⁷⁸⁷[...] cuando los responsables de los departamentos son agentes políticos o de confianza del Ejecutivo, limitándose a ejecutar la voluntad del Presidente, o, en general, actuando en casos en los que el Ejecutivo dispone constitucional o legalmente de un ámbito de discrecionalidad, resulta clarísimo que estos actos resultan fiscalizables sólo políticamente. Pero cuando la ley establece un deber específico y existen derechos individuales que dependen del cumplimiento de ese deber, está igualmente claro que el ciudadano que se considere perjudicado tiene el derecho de apelar a las leyes de su país en busca de una reparación.

Y, a la tercera pregunta, la de si tal remedio podía ser el mandato pedido al Tribunal, éste contestaba que

La ley que establece los tribunales de los Estados Unidos habilita a la Corte Suprema para “dirigir mandamientos, en los casos en que proceda de acuerdo con los principios y costumbres del Derecho, a cualquier tribunal nombrado, o a personas que ocupen un cargo, bajo la autoridad de los Estados Unidos”¹⁷⁸⁸.

El Secretario de Estado, siendo una persona que ostenta un cargo bajo la autoridad de los Estados Unidos, se encuentra *nítidamente* incluido en la letra de la descripción legal, y si este Tribunal no está legitimado para dirigirle un mandamiento ha de ser porque la ley es

¹⁷⁸⁷ “*The government of the United States has been emphatically termed a government of laws, and not of men. It will certainly cease to deserve this high appellation, if the laws furnish no remedy for the violation of a vested legal right*”. Cuestión nº 2.

¹⁷⁸⁸ Sección 13 de la *Judiciary Act*.

inconstitucional, y, en tal sentido, absolutamente incapaz de conferir la autoridad y asignar los deberes que sus palabras pretenden conferir y asignar, respectivamente¹⁷⁸⁹.

Y es que, en efecto, tal es lo que ocurre; el precepto es inconstitucional, pues

La Constitución deposita la totalidad del poder judicial en un Tribunal Supremo y en tantos tribunales inferiores como el Congreso ordene establecer a lo largo del tiempo [...] afirma que “en todos los casos relativos a embajadores, a otros ministros plenipotenciarios y cónsules, así como en aquellos en que sea parte un Estado, el Tribunal Supremo poseerá jurisdicción en única instancia. En todos los demás casos [...] el Tribunal Supremo conocerá en *apelación*”.¹⁷⁹⁰

Es decir, la Constitución no contempla expresamente la posibilidad de que se atribuya la competencia incluida en la Sección 13 de la *Judiciary Act*, que permitiría remitir aquel *writ of mandamus* al Secretario de Estado Madison. La Carta Magna americana no ha habilitado *expresamente* a las cámaras para aprobar una norma de esta índole, por lo cual el precepto señalado *va contra ella*. Y en consecuencia, resulta ser *nula*. El razonamiento que viene a continuación parece sacado directamente del *Federalista*, y me permito transcribirlo casi totalmente, dada su importancia:

Las funciones del Poder Legislativo están definidas y limitadas, y para que esos límites no se confundan u olviden, la Constitución resulta ser *escrita*. ¿Qué sentido tendría limitar a los poderes, y cual que se haya hecho por escrito, si luego las limitaciones pueden ser ignoradas en cualquier momento por aquellos a quienes se pretende constreñir? [...] Resulta demasiado evidente como para ser cuestionado que, o bien *la Constitución se impone sobre cualquier disposición legislativa que le sea contraria* [*repugnant*], o bien el legislador puede cambiar la Constitución mediante una ley ordinaria.

Entre estas alternativas no hay término medio. O la Constitución es una norma superior y suprema [*paramount law*], inalterable por medios ordinarios, o se encuentra al mismo nivel que las leyes ordinarias, y, como cualesquiera de ellas, puede modificarse cuando al legislador le plazca.

Si la primera alternativa es verdadera, entonces una disposición legislativa contraria a la Constitución no es derecho; si lo es la segunda, entonces las Constituciones escritas son absurdos intentos por parte del pueblo de limitar un poder por su propia naturaleza ilimitable.

¹⁷⁸⁹ Subrayado propio.

¹⁷⁹⁰ Artículo III, Sección 2, de la Constitución federal de 1787. Subrayado propio.

Ciertamente, aquéllos que han elaborado constituciones escritas las consideran como el Derecho fundamental y supremo de la nación, y, en consecuencia, la teoría propia de cualquier Estado de este tipo ha de ser la de que las normas del legislativo contrarias a la Constitución son nulas.

Esta teoría está esencialmente vinculada a la idea de Constitución escrita y, por ello, el Tribunal ha de considerarla como uno de los principios fundamentales (*fundamental principles*) de nuestra sociedad [...] Si una ley contraria (*repugnant*) a la Constitución es nula, ¿vincula a los tribunales y les obliga a darle efectos a pesar de su invalidez?. O, en otras palabras, aunque no sea derecho, ¿constituye una regla tan operativa como si fuera propiamente una ley? Esto supondría arrumbar en la práctica lo que se estableció en la teoría y parece, a primera vista, demasiado absurdo como para insistir en ello. La cuestión, sin embargo, va a ser objeto de un análisis más detenido.

No cabe duda de que es competencia y deber del Poder Judicial decir qué es derecho. Aquellos que aplican la norma a los casos concretos tienen, necesariamente, que explicar e interpretar esa norma. Si dos leyes entran en conflicto, son los tribunales los que deben pronunciarse sobre la eficacia de cada una de ellas.

Así, si una ley se opone a la Constitución, si tanto la ley como la Constitución son de aplicación a un determinado caso, de modo que el tribunal ha de resolver ese caso conforme a la ley, desechando la Constitución, o conforme a la Constitución, desechando la ley, el tribunal tendrá que determinar cual de las dos normas en conflicto rige el caso. Esto forma parte de la esencia misma de la tarea de juzgar [...] Por tanto, aquellos que discuten el principio de que la Constitución debe ser considerada, por los tribunales, como la norma suprema, tienen necesariamente que admitir que éstos han de cerrar sus ojos ante la Constitución y mirar sólo a la ley.

Esta doctrina subvertiría los fundamentos mismos de toda Constitución escrita. Supondría afirmar que una ley enteramente nula de acuerdo con los principios y la teoría de nuestro Gobierno, es, sin embargo, en la práctica, completamente obligatoria. Supondría afirmar que si el legislativo hace lo que está expresamente prohibido, la ley resultante de ello sería en realidad, a pesar de la expresa prohibición, eficaz. Se estaría atribuyendo al legislativo una *omnipotencia real y práctica*, al mismo tiempo que se profesa restringir sus competencias dentro de estrechos límites. Sería tanto como establecer los límites y declarar a la vez que se pueden saltar a placer.

El hecho de que así quedaría reducido a la nada lo que hemos considerado el mayor avance en el terreno de las instituciones políticas, una Constitución escrita, debería ser suficiente en América, donde las Constituciones escritas han sido vistas con tanta reverencia, para rechazar esta tesis [...] [Por ejemplo] en ella se proclama que “no podrán gravarse con ningún impuesto o carga los artículos que se exporten desde cualquiera de los Estados”.

Supongamos que se impone una tasa sobre la exportación del algodón, o del tabaco, o de la harina, y se ejerce una acción judicial para recuperar lo pagado. ¿Debe recaer un pronunciamiento judicial en tal caso? ¿Deben los jueces cerrar los ojos a la Constitución y mirar sólo a la ley?.

La Constitución proclama que “no podrá aprobarse ninguna ley penal que imponga una condena individual o que sea retroactiva”. Si, a pesar de ello, una ley como éstas se aprobase, y se procede contra alguien de conformidad con la misma, ¿debería el tribunal condenar a muerte a personas a las que la Constitución se ha propuesto proteger? [...] De estos textos, y de otros muchos que se podrían seleccionar, se deduce que los redactores de la Constitución contemplaron a ésta como una norma vinculante tanto para los jueces como para el legislador [...] ¿Por qué motivo juraría el juez desempeñar sus funciones de conformidad con la Constitución de los Estados Unidos si luego ella no fuese una norma llamada a disciplinar efectivamente su actividad, si hubiera de permanecer cerrada y no pudiese ser examinada por él?¹⁷⁹¹

Así que, en realidad, y aunque la sentencia del caso *no ordenaba* la remisión del nombramiento de Marbury, establecía el *derecho* de tal persona a obtener su comisión, así como la *nulidad* de una ley específica aprobada por el Congreso. ¿Por qué reunir todos estos elementos, el último de enorme relieve, en una sola decisión?¹⁷⁹² Las razones han de buscarse en el contexto político que rodeaba el caso.

II.2.6.2.b) El contexto de la decisión

Marbury vs. Madison nació inmediatamente tras la lucha por la Presidencia de las elecciones de 1800. En este proceso electoral, los llamados “federalistas” fueron derrotados por los “republicanos”.¹⁷⁹³ Estos dos partidos surgían de una división en el Congreso que no era correlativa a la de los federalistas y “anti-federalistas” existente antes. En realidad, se correspondía con una nueva agrupación de fuerzas, que aun siendo heredera de los debates políticos previos, no reproducía idénticas alineaciones. Durante la primera presidencia, la de George Washington, el jefe del ejecutivo decidió nombrar como Secretario de Estado a Thomas Jefferson, y para la Tesorería, a

¹⁷⁹¹ Subrayados propios.

¹⁷⁹² “El remedio, como reconoce el Tribunal a continuación, existe y es apropiado. Y es sólo porque el Tribunal «no puede» proporcionarlo, que Madison no es obligado mediante el *mandamus* a enviar la comisión y Marbury no consigue la reparación que en derecho le corresponde”. Ahumada, 2006, pg. 140.

¹⁷⁹³ La política norteamericana había acogido el fenómeno de los partidos de manera mucho más rápida de lo esperado Ahumada, 2006, pp. 142 y 143.

Alexander Hamilton¹⁷⁹⁴. Este último “se proponía fortificar el gobierno federal, dando a quienes por entonces dominaban la riqueza del país un verdadero interés en su permanencia. Los demás, suponía él, les seguirían, como siempre les habían seguido”¹⁷⁹⁵. La Cámara de Representantes encomendó a Hamilton un programa para sentar las bases del crédito público, y éste lo hizo basándose en el sistema financiero británico, presentando su informe en enero de 1790. El conjunto de medidas propuestas incluía el compromiso de satisfacer la deuda, impuestos adecuados, asunción del débito de guerra de los Estados por el gobierno federal (una forma de ligar a los acreedores al interés nacional), y un fondo de amortización para estabilizar el precio de la deuda pública y preparar el reembolso de capital. El plan dio excelentes resultados¹⁷⁹⁶. En enero de 1791 presentó otro informe, proponiendo la creación de un Banco de los Estados Unidos. Aquí fue donde ya topó con una amplia oposición que hasta entonces sólo unos pocos habían mantenido contra él¹⁷⁹⁷. En resumidas cuentas, de nuevo la vieja lucha entre centralización y corrientes centrífugas. Pero ahora, hombres como Madison irían contra Hamilton y lo suyos, y entre estos últimos habría viejos antifederalistas como Richard Henry Lee¹⁷⁹⁸. Al mismo tiempo, el conflicto entre federalistas y republicanos se agudizaría con la Revolución francesa, pues los primeros eran más bien contrarios a su influencia y los segundos favorables, en una aproximación que arrastraba posturas religiosas a un lado y menos propicias a ellas en otro¹⁷⁹⁹.

El enfrentamiento culminante se produjo con la aprobación por los federalistas, en 1798, de la *Sedition Act*. “La ley, so pretexto de proteger a los cargos públicos de los libelos, en la práctica, estaba funcionando como un arma de los federalistas para perpetuarse en el poder, difundiendo la idea de que cualquier ataque a los representantes elegidos debía tomarse como un ataque contra la idea del gobierno del pueblo, un acto de traición a la República”. Esta nueva norma permitió cerrar periódicos que simpatizaban con la oposición. “Fueron numerosos los intentos de paralizar la ley por inconstitucional en los tribunales federales -lo que probaría que la idea de que los tribunales podían pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de las leyes era familiar y aceptada por los republicanos-, los suficientes para que quedara claro que los jueces federales y federalistas apoyaban la medida política de su

¹⁷⁹⁴ Commager, Leuchtenburg y Morison, *op. cit.*, pg. 171.

¹⁷⁹⁵ *Ibid.*, pg. 175.

¹⁷⁹⁶ *Ibid.*, pp. 173 y 174.

¹⁷⁹⁷ *Ibid.*, pg. 179. Vid. el contenido del plan para el Banco en <<http://www.constitution.org/mon/ah-bank.htm>>, cuyo decreto de creación fue firmado finalmente por Washington (id.). Asimismo, debe indicarse que Hamilton presentó a finales de 1791 un informe sobre las manufacturas, proponiendo que se incentivara la industria, y que fue rechazado por el Congreso (*ibid.*, pp. 174 y 175).

¹⁷⁹⁸ *Ibid.*, pg. 177.

¹⁷⁹⁹ *Ibid.*, 184

gobierno. Los jueces neutralizaron los ataques a la ley en los tribunales. La clara victoria electoral de los republicanos que habían hecho campaña contra la ley y habían prometido su derogación debe leerse como clara aversión popular a medidas gubernamentales como las de la *Sedition Act*¹⁸⁰⁰ y al bando federalista que las apoyó”¹⁸⁰¹.

Ocurrió después, que, al computar los votos del federalista Aaron Burr y de Thomas Jefferson, hubo que resolver el empate producido por medio de los correspondientes mecanismos constitucionales, lo cual alargó el momento de transición, en el cual el gobierno del entonces Presidente, John Adams, se encontraba en funciones. Así que, “aprovechando este período extra, la administración federalista derrotada se lanzó a una frenética actividad y emprendió todo un programa de reformas para el poder judicial federal”. Primero, con la Ley Judicial (*Judiciary Act*) de 1801, que suprimía la obligación de los magistrados del Tribunal Supremo de recorrer los Circuitos y creaba, en consecuencia, nuevos órganos de Circuito provistos de jueces, expandiendo la jurisdicción federal. Esto parecía determinar, a su vez, mayor volumen de trabajo para el Tribunal Supremo, con lo cual se establecía un mayor número de sesiones para el mismo. Y, segundo, cuando “el Presidente Adams procedió inmediatamente a nombrar a los jueces de Circuito entre más o menos fervientes federalistas. Estos jueces, que recibirían el nombre de ‘jueces de medianoche’, fueron confirmados velozmente por el Senado. Oliver Ellsworth, por su parte, presidente del Tribunal Supremo, decidió también prestar un último servicio a la causa federalista y teniendo en cuenta su salud, dimitió de su cargo a tiempo para dejar a Adams y no a Jefferson la prerrogativa de nombrar sucesor. John Jay, que ya había estado en el Tribunal, lo rechazó y Adams con prisas le ofreció el puesto a su Secretario de Estado, John Marshall. Puesto que el volumen de asuntos en el Tribunal no era grande y dado que en unas semanas se produciría el recambio de poder, Marshall compatibilizó en el primer momento los cargos de secretario de Estado y presidente del Tribunal Supremo.”¹⁸⁰²

Este episodio se completó con el de la aprobación federalista de otra ley, sobre instituciones de gobierno del Distrito de Columbia, que permitiría la creación de 42 nuevos Juzgados de paz con personas designadas por el Presidente por un período de cinco años. La maniobra del nombramiento inmediato se reiteró, pero no fue posible cubrir todos los puestos y enviar todas las comisiones. Precisamente John Marshall, secretario de Estado y presidente del Tribunal Supremo, era el encargado de

¹⁸⁰⁰ <http://avalon.law.yale.edu/18th_century/sedact.asp>.

¹⁸⁰¹ Ahumada, 2006, pg. 142.

¹⁸⁰² Ahumada, 2006, pg. 144.

hacer llegar esas designaciones a los interesados¹⁸⁰³.

En diciembre de 1801, conformado el nuevo Congreso, y ya con mayoría republicana, ésta mostró sus intenciones de modificar la planta judicial. En ese mes se presenta el caso Marbury ante el Tribunal Supremo. La aprobación de la *Repeal Act*, en marzo de 1802, supuso la supresión de la ley que había establecido los Circuitos hacía un año¹⁸⁰⁴. “En esta discusión los federalistas apoyan la noción de la supremacía judicial en la interpretación de la constitución, mientras algunos republicanos defienden la teoría de la independencia de los órganos constitucionales en la interpretación de la constitución”¹⁸⁰⁵. Los primeros, además, expusieron que no se podía retirar de sus puestos a los jueces ya nombrados en virtud de la norma que se pretendía derogar, ya que tenían la condición de inamovibles prevista en la Constitución¹⁸⁰⁶. Cuando el Alto Tribunal se reúne en su período de sesiones de febrero de 1803, estaba aguardando el caso del *mandamus* de Marbury, pero también debían decidir sobre *Stuart v. Laird*, donde se cuestionaba la constitucionalidad de la *Repeal Act* de 1802¹⁸⁰⁷. La decisión del primer supuesto se dictó en el sentido que antes he apuntado:

El éxito estratégico de la decisión habría consistido fundamentalmente en haber permitido al Tribunal salir airoso de una situación en la que tenía mucho que perder, tanto con una sentencia estimatoria (porque era más que una sospecha que el Ejecutivo no acataría la orden del Tribunal), como con una desestimatoria (que se leería como una implícita traición al Presidente federalista, al que de una u otra forma todos los jueces debían su puesto, y una muestra de sumisión a la nueva presidencia republicana), situación resuelta en el último momento mediante un fallo perfectamente inocuo aunque precedido por la denuncia de la actuación ilegítima (pero irremediable) del Ejecutivo y todo tipo de grandes consideraciones sobre el papel de los jueces en el gobierno constitucional.¹⁸⁰⁸

¹⁸⁰³ Ahumada, 2006, pp. 144 y 145. “(Señalemos simplemente que la fecha que consta de la nominación de Marbury como juez de paz por el Presidente Adams es la de 2 de marzo de 1801, su aprobación por el Senado se produjo al día siguiente, 3 de marzo; el día 4 de marzo se produjo, finalmente, el relevo de poder y Jefferson ocupó la Presidencia.)” Ahumada, pg. 145

¹⁸⁰⁴ Ahumada, 2006, pg. 145

¹⁸⁰⁵ Ahumada, 2006, pg. 147

¹⁸⁰⁶ Moran, Thomas Francis: *The Formation and Development of the Constitution* (facsímil de la misma obra editada por George Barrie & Sons, Philadelphia, 1906), New York, Adamant Media Corporation, 2006.

¹⁸⁰⁷ “El señor Laird ganó un pleito por incumplimiento de contrato contra el señor Stuart ante el tribunal de Circuito de Virginia, uno de los nuevos tribunales creados al amparo de la Ley Judicial de 1801. Antes de que la sentencia se hubiera ejecutado completamente, la Ley de 1801 fue derogada por la *Repeal Act* de 1802 que restableció el sistema anterior de tribunales de circuito sin jueces titulares (integrados por jueces de distrito y del Supremo). Stuart objetó que su caso no podía ser trasladado a uno de los tribunales federales de circuito”. Ahumada, 2006, pg. 146, nota 57.

¹⁸⁰⁸ Ahumada, 2006, pg. 130. Añade (pg. 141): “es Beveridge quien construye la historia del caso de tal modo que su momento culminante llega con ‘el golpe de mano’ de Marshall. Según esto, el presidente del Tribunal consiguió, de la manera más hábil e inesperada, afirmar un enorme poder para los jueces sin

Sin embargo, esta explicación contextualizada del fallo *Marbury vs. Madison*, no debe hacernos olvidar fundamental de esta sentencia. Y es que con ella, no sólo se declaraba inconstitucional determinada ley, sino que también se hacía una interpretación sobre la separación de poderes plasmada en 1787 y, asimismo, se reconocía el derecho adquirido de una persona concreta, frente a actuaciones de cualquiera de los poderes que quisiera vulnerarlo. Todos estos ámbitos, puestos en conexión, dotan de su característica singularidad a *Marbury*. Al margen de que la lucha partidista del momento contribuyera también a que el poder judicial se erigiera como árbitro en ciertas situaciones en las que el conflicto entre *facciones* políticas era demasiado intenso. Pero la república, tal y como hubiera soñado Maquiavelo, había respondido al desafío de aquéllas convenientemente, merced a la herencia del viejo gobierno mixto y del imperio de la ley, a la restricción jurídica del poder político. En suma, gracias a la “constitución”.

II.3. La consolidación de los fundamentos de la democracia constitucional moderna

II.3.1. Documento escrito y de carácter contractual

El primer pilar del constitucionalismo democrático moderno fue la redacción de un documento escrito que implicara una suerte de compromiso entre los miembros de cierta comunidad a quienes se presupusiera capacidad suficiente para aprobarlo, y referido a la organización político-institucional de aquélla y al reconocimiento de unos derechos y libertades para sus asociados. En este punto, resulta clara la influencia de las Cartas medievales, y muy especialmente de la Carta Magna de 1215. Sin embargo, dos grandes diferencias existían entre ambos tipos de textos.

Una, bastante obvia, porque en los de cuño medieval el pacto se producía entre el Rey y sus más principales súbditos, mientras que en los *agreements levellers* los suscriptores eran todos los *freemen*. Se estaba lejos de los contratos de dominación medievales. Así, “aunque [...] la idea del pacto tuvo un papel importante primero en la organización feudal del poder y después en los Parlamentos medievales,

provocar rechazo en uno de los momentos más críticos de la historia del Tribunal. Nadie iba a considerar una usurpación del Tribunal la declaración de inconstitucionalidad de una ley que le atribuía jurisdicción. Pero mientras el Tribunal renunciaba a la insignificante competencia que el artículo 13 de la *Judiciary Act* de 1789 le confería, estaba fijando el precedente sobre el cual habría de consolidarse su extraordinario poder para controlar los actos del Congreso y declarar, en su caso, su inconstitucionalidad. Esta forma de narrar la historia ha tenido un éxito incuestionable, y sigue presente en muchos manuales y artículos generales sobre el control de constitucionalidad americano”.

se trataba allí de acuerdos dentro de los poderes existentes con el objeto de *mantener y convalidar* costumbres y privilegios estamentales o, después, de tener alguna audiencia ante el poder del rey, pero nunca de acordar los derechos que corresponden a todos los individuos entre sí y con relación al poder político¹⁸⁰⁹. Este último extremo sí se recogía en los *Agreements*. Existían, en primer lugar, “unos derechos y libertades comunes”¹⁸¹⁰. Es decir, que en los Acuerdos se recogía la extensión a todos los hombres libres de Inglaterra de diversas libertades y privilegios que antes sólo habían correspondido a algunos prelados y barones, produciéndose la *individualización* de aquéllos, al desprenderse de su raíz estamental. Muchos eran de carácter antiguo. Pero resulta que, junto a tales derechos (por ejemplo, el del jurado), los *levellers* sitúan algunas libertades que no revisten rasgo tradicional alguno. Que han aparecido a raíz de la crisis política acaecida con las Guerras Civiles inglesas. Los *levellers* incluyen en su primer *Agreement*, así, nuevos derechos referentes a la representación (redistribución de escaños parlamentarios, mandatos limitados para los representantes), a la libertad de culto, a la inmunidad de los *ironsides* frente a Carlos I, a la eliminación de jurisdicciones estamentales, a la abolición de la capacidad de veto de los Lores o del Rey contra los Comunes¹⁸¹¹. En esta pretensión hay un legado de las viejas *Petitions*, también de origen medieval (“*these things we declare to be our native rights*”)¹⁸¹², pero aquí ya no hay súplica alguna, ni al Rey, ni al Parlamento. El *Agreement* es un documento escrito que pretende reflejar la voluntad de sus firmantes, los hombres libres alzados en armas, estableciendo “reglas fijas de gobierno”¹⁸¹³. Se trataba así de recoger el criterio de seguridad jurídica que parecían haber aportado las cartas feudales del monarca y sus súbditos, pero ya con otra legitimidad distinta. El imperio de la ley es, en este sentido, una característica del constitucionalismo desde tiempos inmemoriales, y la sujeción de los gobernantes a unas normas determinadas, su común denominador siempre a lo largo de la Historia. Pero ahora iba a reflejarse insertando en un documento escrito las reglas del juego político, inescindibles de ciertos derechos y libertades. La codificación, fenómeno rastreable desde las XII Tablas de la República romana hasta el *Body of Liberties* de Massachusetts, es otra buena prueba de ese interés por la seguridad jurídica, pero el rasgo característico de

¹⁸⁰⁹ Ruiz Miguel, *op. cit.*, pg. 205

¹⁸¹⁰ *Primer Agreement*, en Sharp (ed.), *op. cit.*, pg. 93.

¹⁸¹¹ *Ibid.*, pg. 94.

¹⁸¹² *Ibid.*, pg. 95

¹⁸¹³ *Ibid.*, pg. 95. En el *Segundo Agreement*, Sharp (ed.), pg. 169: “[a]fter the long and tedious prosecution of a most unnatural, cruel, home-bred war, occasioned by divisions and distempers amongst ourselves - and those distempers arising from the uncertainty of our government and the exercise of an unlimited or arbitrary power by such as have been trusted with supreme and subordinate authority -”; o (*ibid.*, pg 170): “agree to ascertain our government, to abolish all arbitrary power and to set bounds and limits both to our supreme and all subordinate authority”.

las constituciones modernas es que intentan trasladarlo a la escena política, *el terreno de la facción*.

El experimento *leveller*, primer intento *nacional* de aplicar nociones contractuales modernas, no fue recuperado en un ámbito de tal carácter hasta la Constitución norteamericana de 1787. Antes tuvo presencia a través de pactos como el de Mayflower y los *covenants* religiosos, así como en las compañías mercantiles que iban a expandirse por el Nuevo Mundo. En realidad, el contractualismo suponía individuos en pie de igualdad, bien fuera ante Dios, bien para perseguir un objetivo económico o una combinación de ambos. Sus antecedentes prácticos estaban ya en los gremios de comerciantes y artesanos, en las congregaciones protestantes, en la asociación de los *merchant adventurers*. Y los teóricos, muy pronto serían Milton y Sidney, aún bajo ropajes calvinistas, y luego Hobbes y Locke, ya inmersos de forma completa en un iusnaturalismo racionalista más elaborado. Pero ninguno de ellos, ni los *commowalthers* ni los *whigs* o *real whigs*, a salvo la excepción harringtoniana, se preocuparon de diseñar un documento constitucional al estilo del *Agreement*, que pusiera cimientos nuevos al objeto de edificar una nueva constitución. No acertaron a ofrecer una propuesta sistematizada y coherente que respondiera a la legitimidad popular a la que sí apuntaban en sus tratados y obras. Hubo un intento práctico, el *Instrument of Government* cromwelliano (1653), que quiso recoger esa dimensión, pero sus creadores tampoco fueron consecuentes con aquélla, al desconfiar en última instancia del pueblo y atribuir su aprobación a la élite militar del momento. Aunque Locke mantendría viva la llama del contractualismo en el campo teórico, como también luego los *real whigs*, ni uno ni otros quisieron emprender una nueva construcción práctica con él.

La fórmula sucesoria que supuso la continuación del camino, como se ha indicado, tuvo que ser la Constitución federal norteamericana de 1787. Sus postulados contractuales, netamente modernos por referirse a una *voluntad* racional al margen de la tradición, sólo entonces triunfarán en un ámbito *nacional*. La comunidad expresa su decisión política constituyente a través de unos representantes específicamente elegidos por el pueblo.

II.2. Rango normativo superior (supremacía) y rigidez

Los *levellers* edificaron sus Acuerdos sobre una base ya existente y que ellos aceptaban, la de la hegemonía parlamentaria. Habían apoyado a esta institución en las Guerras Civiles contra el del Rey y sus “cortesanos”, así que su intención era la de conservar la Cámara de los Comunes como principal órgano político de Inglaterra.

Pero no sin ciertas modificaciones relevantes. Así, y defraudados por las expectativas que habían puesto en el Parlamento, desconfiando de que cumpliera su tarea gubernamental sin arbitrariedades, recuperan la teoría republicana que habían extraído de los clásicos grecolatinos y de Maquiavelo. Se trataba de insertar mecanismos para la periodicidad de los mandatos y la rotación en los mismos¹⁸¹⁴, acompañándolos de las correspondientes incompatibilidades que impidieran el sometimiento del bien común al interés particular. Y también, estableciendo una serie de libertades y derechos, como se ha visto, algunos tradicionalmente reconocidos, otros novedosos. El documento resultante debía obligar a todos, parlamentarios incluidos:

nosotros, el pueblo libre de Inglaterra, al que Dios ha dado corazón, medios y oportunidad para ello, y realizándolo con sometimiento a Su Voluntad y en su Nombre, así como deseando que la equidad resultante sea para su gloria y alabanza, acordamos establecer nuestro gobierno, con el fin de *abolir todo poder arbitrario* y poner *ataduras y límites*, tanto a nuestra suprema autoridad como a todas las de carácter subordinado, y suprimir todos los agravios ya conocidos¹⁸¹⁵.

Como puede observarse, eso sí, todavía existen aquí unas connotaciones religiosas que sólo desaparecerán en las primeras constituciones norteamericanas. Pero la base para la supremacía constitucional bajo legitimidad popular queda establecida: “*And all laws made or that shall be made contrary to any part of this Agreement are hereby made null and void*”¹⁸¹⁶. Porque, “Resultando ser [estos] los fundamentos de la libertad, es necesario que se establezcan como inalterables, cosa que no puede ocurrir sino por medio de este acuerdo popular”¹⁸¹⁷. La intención niveladora es la de establecer unas normas inmodificables por Parlamento alguno, y sin prever mecanismo específico para su reforma. Era un Acuerdo del Pueblo que se ubicaba como norma suprema y principalmente dirigida a evitar los abusos de cualquier órgano político o incluso, como bien señalaba el tercer *Agreement*, acciones violentas de grupos armados que quisieran poner fin a su vigencia. Se pretendía la *estabilidad* que permitiera a los ingleses libres disfrutar de sus derechos y privilegios sin miedo a poderes arbitrarios.

¹⁸¹⁴ Vid. *supra*, pg. 120.

¹⁸¹⁵ “*We the free people of England, to whom God hath given hearts, means and opportunity to effect the same, do with submission to His wisdom, in His name, and desiring the equity thereof may be to His praise and glory, agree to ascertain our government, to abolish all arbitrary power and to set bounds and limits both to our supreme and all subordinate authority, and remove all known grievances*”. Primer *Agreement*, en Sharp (ed.), *op. cit.*, pg. 170.

¹⁸¹⁶ Vid. *supra*, pg. 122, nota 487.

¹⁸¹⁷ Vid. Primer *Agreement*, en Sharp (ed.), *op. cit.*, pg. 101: “*these being the foundations of freedom, it's necessary that they should be settled unalterably, which can be by no means but this agreement with the people*”.

La supremacía de una *paramount law* era recogida en el *Instrument of Government* cromwelliano de 1653, pero sólo en lo referente al culto y la profesión religiosa de carácter protestante, que se entendían libres de acuerdo con su cláusula XXXVIII: “*That all laws, statutes and ordinances, and clauses in any law, statute or ordinance to the contrary of the aforesaid liberty, shall be esteemed as null and void*”¹⁸¹⁸. El *Instrument of Government* fue aprobado por un Consejo de oficiales¹⁸¹⁹ y nunca pretendió disponer de legitimidad popular, aunque sí de integrar en el Parlamento a miembros que provinieran de los territorios irlandeses y escoceses conquistados. Ningún método de reforma se preveía en él, si bien la voluntad de que fuera la norma básica de organización política quedaba implícitamente expresada.

Harrington, por su parte, con su *Oceana*, escrita tres años después, tampoco apuntaba a que su modelo fuera aprobado por el pueblo o bien modificado por él, pues se hallaba inscrito en la vieja corriente, que provenía del Aristóteles, sobre el “imperio de las leyes y no de los hombres”, pero no caminaba en dirección hacia la soberanía popular. Al fin y al cabo, consideraba que su alambicado sistema de gobierno mixto según el reparto de propiedad obedecía a unos principios naturales, y este era el principal elemento de la fórmula que proponía.

Los *whigs*, en su lucha contra el *torysm*, apoyaban la hegemonía parlamentaria, con predominio de los Comunes. Las leyes que consideraban fundamentales, como las relativas a la sucesión o al régimen electoral, sólo podrían ser abrogadas por el Parlamento. Este modelo resultó apuntalado con el gobierno de Walpole como *Premier*, que condujo a los *real whigs* a criticar la degeneración del modelo constitucional inicial de *checks and balances*. Pero tampoco ellos expusieron un sistema de rigidez y reforma alternativo al existente, pues ni siquiera se interesaron por engendrar un documento escrito nuevo que uniera todas las piezas constitucionales que entonces estaban dispersas, y mucho menos, mediante una aprobación popular. Simplemente, aspiraban a una movilización de la virtud cívica que frenara la corrupción parlamentaria.

En la América colonial, los norteamericanos habían desarrollado instituciones de autogobierno que no contemplaban procedimiento de reforma alguno, excepto en ciertos Estados. La Constitución estadounidense de 1787 mantuvo ambiciones más robustas. Su objeto no era ya sólo el de poner freno a las asambleas representativas. Trataba de hacerlo de manera que un ambicioso programa de estructuración federal pudiera calar sin conflictos violentos. La supremacía constitucional se dirigía hacia la superación de los gobiernos estatales, es cierto, al objeto de configurar instituciones

¹⁸¹⁸ Vid. *supra*, pg. 144.

¹⁸¹⁹ Matteucci, *op. cit.*, pg. 168.

de carácter nacional que permitieran la preponderancia sobre aquéllos de las normas y toma de decisiones centralizadas. Pero, precisamente, para conseguir una solución al choque entre centrifugismo y centripetismo, estableció un sistema de reforma que diera salida política a las fuerzas tendentes al primero, contrapesada por una rigidez que respaldara al segundo. En este sentido, la Constitución norteamericana tenía objetivos bastantes diferentes de los Acuerdos niveladores, pero compartía la inquietud común por frenar la posible arbitrariedad del poder, así como de instalar una norma suprema que fuera respetada por todos, con afán de permanencia y que pusiera paz a los conflictos (territoriales, sociales, religiosos, políticos) entre diversas facciones y evitase asimismo el predominio de alguna de ellas.

II.3.2. Fundando instituciones políticas basadas en el autogobierno y reconociendo derechos

Los *levellers* conocían la experiencia del autogobierno a través de los gremios artesanos, las congregaciones puritanas y las compañías mercantiles. Pero la emergencia del *New Model Army* les ofreció un ámbito mucho más extenso, nada menos que de carácter nacional. El ejército de Cromwell era la médula de la Inglaterra alzada contra el Rey. En ella, los agitadores comenzaron a organizarse democráticamente. Idénticos parámetros siguieron los colonos del Nuevo Mundo. Es más, se produjo allí un fenómeno de ampliación, por el cual un número considerable de personas pudo acogerse a la condición de *freeman*, incrementándose su participación en los órganos decisorios de compañías, localidades y congregaciones. De manera que este aumento llegó desbordar con cierta amplitud el cicaterismo existente al respecto en Inglaterra. Allí las exigencias para elegir representantes parlamentarios fueron más altas, y contaminadas por la existencia de burgos podridos, hasta bien avanzado el siglo XIX.

El *freeman* es el sujeto que surge ya en la época inglesa Tudor y que dispone de una pléyade de derechos. Ese conjunto de libertades se encuentra indisolublemente unido, pues unas aparecen enlazadas a las otras, sin fractura conceptual. El hombre libre no posee escindida su capacidad para la participación política del derecho a ser juzgado sólo por los pares de su vecindad, o del *habeas corpus*. Podemos insistir, en todo caso, en que el sufragio activo y pasivo se hallan más íntimamente vinculados al autogobierno. Pero existen otros derechos no menos importantes, unidos entre sí mediante la noción de propiedad. Una propiedad que no podemos entender estrictamente en el sentido actual, como libre disposición de bienes muebles o inmuebles, sino como conjunto de atributos que incluyen potestades,

inmunidades, libertades y pretensiones. Todas ellas configuran la esfera de la no dominación, de la independencia del *freeman*, no sometido a poderes ajenos. Y para que éste no se halle *alienado*, sometido a un poder extraño, pronto se advierte que aquéllas deben ser *inalienables*. Su catálogo se va ampliando a través del movimiento *whig* en Inglaterra y luego del de los colonos contra sus autoridades provenientes de Gran Bretaña, pero a veces también frente a las suyas propias: derecho del pueblo a cambiar su gobierno, libertad de culto y de conciencia, libertades de expresión y prensa, al asesoramiento legal, prohibición de leyes de excepción...la *órbita de los derechos resulta ser expansiva*, se puede ampliar progresivamente. Porque los contextos también cambian: “resulta que si [...] la autoestima depende de ciertas bases sociales que permitan a cada uno ser miembro cooperador normal de la sociedad en que vive, entonces las necesidades mínimas que han de ser satisfechas, desde el aporte diario de calorías hasta el nivel de educación, son una construcción social que es función de las posibilidades de satisfacción en un contexto dado, es decir, que cada uno experimenta como una necesidad básica aquello que, si hubiese sido tratado con igual consideración, hubiera podido llegar a alcanzar en su contexto. La conclusión es entonces que no es posible establecer un mínimo fijo como medida de la justa satisfacción de las necesidades del sujeto como agente moral, sino que este mínimo se ve arquimédicamente empujado hacia la posición de los que más han alcanzado y entonces la igualdad como derecho requiere movimientos redistributivos constantes. Esto significa que, aunque podamos cerrar nominalmente el catálogo de derechos humanos, no podemos llegar a cerrar la cantidad y calidad de los bienes necesarios para satisfacer esos derechos. Que los derechos o, por así decirlo, su contenido se expanden al mismo ritmo que el que se expande la riqueza material y cultural de una sociedad”¹⁸²⁰.

Ocurre, pues, que la nómina de derechos se amplía, de forma que a los de carácter inmemorial, esos que aparecían ya en la *Petition of Right* de 1629, se suman otros de configuración legal, e incluso, luego, con la *judicial review*, aparecerán interpretaciones que en realidad extienden las libertades, como demuestra el nacimiento posterior de un “derecho a la intimidad” en la década de los sesenta del pasado siglo.

II.3.3. Legitimado popularmente

¹⁸²⁰ Hierro, Liborio, en Colomer y Díaz (eds.), *op. cit.*, pg. 51.

Una novedad insoslayable que incorporaron los *levellers* a la política moderna fue la legitimidad popular. Y ello de un modo práctico. La movilidad social previa a las Guerras Civiles inglesas, impulsada por la resquebrajadura calvinista, trastocó el orden estamental existente. El conflicto bélico hizo el resto, socavando las jerarquías de aquel instante. Ciertamente es que el concepto de “virtud” no iba a desaparecer; lo que ocurre es que virtuosos ya no serían de manera inmediata quienes poseyeran los títulos nobiliarios y, por tanto, los recursos materiales de carácter principal. Es más, tampoco aquellos que dispusieran supuestamente de los bienes espirituales, los prelados de la iglesia anglicana. El reparto de los puestos de salida no era el previsto por el Antiguo Régimen. Y los *ironsides* habían demostrado que Dios podía estar de su parte en el campo de batalla. *Que los muchos podían ser superiores moralmente a los pocos*¹⁸²¹. Por tanto, urgía redistribuir el reparto del poder político y social, eliminar los agravios (*grievances*), reparar la injusticia. “Cuando hoy hablamos de justicia distributiva seguramente pensamos sobre todo en la distribución social de los bienes económicos, tal vez por asociación con la idea de *redistribución*, que es básicamente económica. Y aunque ése es el núcleo de las principales concepciones de la justicia distributiva, sin embargo *también forman parte de ellas tanto las oportunidades para la asignación de las diferentes posiciones sociales como la participación en el poder político*”¹⁸²². El reino va siendo sustituido por la nación moderna. El primero necesita de estamentos, el segundo de individuos, de ciudadanos. Se pretende dejar atrás aquél, con su orden profundamente estratificador. La denominación *leveller* de los *Agreements* no conduce a equívoco alguno: eran “acuerdos”, pero “populares” (*of the people*). Estamos ante una situación revolucionaria. La Guerra Civil ha sacudido los cimientos institucionales e incluso sociales del Antiguo Régimen, y los niveladores apoyan un cambio político y jurídico radical.

Los *commonwealthers* no llegaron tan lejos. El grado de parentesco, en este sentido, era mucho mayor entre los niveladores y los constituyentes norteamericanos de 1787, que de cualquiera de ellos con el *Instrument of Government* o el proyecto harringtoniano de la *Oceana*. Quien aprobaba el Instrumento cromwelliano, sí, era el pueblo, pero “reunido en Parlamento” (“*assembled in parliament*”). Se temía a la “multitud desordenada” de la que hablaba Sidney. El común denominador de los *commonwealthers* era un elitismo que, aunque republicano, rechazaba, no sólo una extensión del ámbito popular legitimado en la esfera política, sino también cualquier

¹⁸²¹ No numéricamente, algo que quizás podía haber interesado más a Hobbes.

¹⁸²² Ruiz Miguel, Alfonso: “Concepciones de la igualdad y justicia distributiva” en Díaz y Colomer (eds.), *op. cit.*, pg. 212.

tipo de invocación al mismo para autorizar formas de gobierno directo. En su lugar, el Parlamento, como grupo de hombres selectos y de virtud, era el protagonista del modelo cromweliano. El problema práctico surgiría cuando los líderes del ejército no lograran entenderse con él, disolviendo varias asambleas sucesivas. El dominio militar bajo premisas puritanas era intrínsecamente incompatible con una consolidación del orden republicano que tropezaba con *gentry* díscola, por opuesta al congregacionalismo y a la presión fiscal en aumento, así como celosa de su poder local.

Locke, sin embargo, recuperaría algo de la radicalidad de los agitadores del *New Model Army*, al teorizar sobre la legitimidad popular del sistema político en un grado hasta entonces nunca asumido en una obra sistemática (“el consenso del pueblo”¹⁸²³). Pero no llega a incluirla plenamente. Recuérdese: “allí donde el pueblo tomado en su conjunto, o cualquier hombre en particular, son privados de su derecho o están bajo el ejercicio de un poder ilegal y no tienen a quién apelar en este mundo, les queda la opción de *apelar a los cielos* si estiman que el caso es suficientemente importante”¹⁸²⁴. Se trata de una ley *natural* de carácter *extraconstitucional*, la *salus populi*: “aunque el pueblo *no puede ser juez en el sentido de poseer constitucionalmente un poder superior para decidir y dictar sentencia en un caso así*, sí tiene en virtud de una ley que es anterior a todas las leyes positivas de los hombres, y también de autoridad mayor, el derecho de reservarse la última decisión”¹⁸²⁵.

Pero el autor inglés no defiende de manera expresa que el pueblo sea hegemónico políticamente a la manera de un sujeto específico que existe de forma concreta fuera del Parlamento. Figura como hipotético, aunque la ambigüedad surja con sus alusiones indirectas a las Guerras Civiles inglesas y a la victoria del *New Model Army*. Similar fue la postura de los *real whigs*. La corriente *whig*, basada en la hipótesis de la legitimidad popular del poder, aunque una legitimidad sólo en última instancia, primaba a las asambleas frente al ejecutivo. Esa era su inclinación, pero sin pretender erigir un poder constituyente y extraparlamentario que pudiera hacerse presente a voluntad. Algo que, por añadidura, reforzaba el que no existiese siquiera constitución escrita. La constitución inglesa era una superposición de órdenes estamental, emanada de la Historia, y así se quedaría a pesar de las especulaciones sobre un “estado de naturaleza”. En todo caso, los *real whigs*, como Trenchard y Gordon, insistirían en la movilización ciudadana y la virtud cívica para hacer frente al

¹⁸²³ Locke, 1990, párrafo 105, pg. 118.

¹⁸²⁴ Ibid., parág. 168, pg. 170.

¹⁸²⁵ Ibid., parág. 168, pp. 170 y 171.

ejercicio arbitrario del poder. Había una supremacía, pero no una soberanía “popular”. Algo más, en todo caso, de lo que alcanzaban a propugnar los *tories*.

El gran salto se produjo con la revolución norteamericana. Los estadounidenses van a dividir el poder de forma diacrónica, y no sólo sincrónica. Van a separar el constituyente del constituido, aunque todavía no utilizaran este vocabulario, empleado en cambio luego por Sieyès y los revolucionarios franceses. El pueblo, a partir de una convención, elabora una constitución de la que luego emanen las diversas instituciones del gobierno: el ejecutivo, el legislativo (bicameral) y el poder judicial. En un momento posterior seleccionará a quienes van a encarnar tales órganos, siguiendo el mismo procedimiento democrático. *El pueblo aparece como sujeto legitimador para todos los órganos de gobierno y para la norma que regula su selección*. Es más, y como se ha visto, también para introducir ciertos derechos. El mecanismo, extraído de la Constitución de Massachusetts y con antecedentes en la obra de Henry Vane y los experimentos iniciales de los *covenants* federados, queda recogido al alabar la Constitución de 1787 y coronado en su preámbulo, con ese “*We, the people*”. El pueblo es exterior y *anterior* a las instituciones de gobierno, e incluso a los propios Estados, es el sujeto que elabora la ley suprema que da forma a todo el sistema político estadounidense. Aparece así el pueblo con las atribuciones de la soberanía: poder originario, perpetuo, absoluto e indivisible.

II.3.4. Sistemas de control para evitar la violación de la norma

Una de las elaboraciones mas lentas y laboriosas en el constitucionalismo moderno fue la de establecer unos mecanismos de garantía que permitieran proteger la Carta Magna. En este sentido, cabe subrayar que el tipo de legitimidad política escogida daba cuenta también de cuáles podían ser los resortes que se usaran a tales efectos. Si el Rey ya no servía para ampararla, y la aristocracia tampoco, sí en cambio emergía el pueblo como nuevo sujeto sobre el cual recaía la plena titularidad del poder. ¿Cómo saber cuando podría manifestarse y de qué manera? ¿En qué momento se hallaba *presente*? Un derecho a la rebelión no parece razonable, pues obligaría a una continua inestabilidad, a una consulta incompatible con unas reglas del juego fijas, adecuadas al imperio de la ley y a su seguridad jurídica.

Los *levellers* escogieron la vía de legitimar la **desobediencia** popular al déspota que deseaba someter a los *freemen* a la arbitrariedad y a su capricho. El tirano, en tales términos, podía ser tanto el monarca como el Parlamento. También éste podía constituir una facción contraria al bien común y pretender oprimir a los demás, al igual que el Rey, como ya había demostrado bajo la hegemonía

presbiteriana primero, y luego bajo la férula de Cromwell. Los niveladores, amparados en la fortaleza popular instituida con el *New Model Army* frente a Carlos I, trataban de conservarla también contra el Parlamento. Al permanecer armado, el pueblo como milicia podía defenderse, y por tanto también sus Acuerdos, frente al cualquier otro poder que quisiera arrebatarle la *supremacía*. Esta es la dimensión que traduce el derecho de resistencia, la desobediencia activa de que dispone el pueblo.

Este discurso no fue abandonado por la tradición teórica que luego se aborda en el presente trabajo, sino que resultó adoptado por los *commonwealthers*, por Locke y los *real whigs*, y, desde luego, por los colonos que se rebelaron contra el imperio británico en 1776. Las constituciones estatales norteamericanas mantuvieron alusiones al derecho a formar parte de la milicia ciudadana, algo que aparece reflejado en la Segunda Enmienda de la Carta Federal. Pero estos mecanismos no dejaban de ser propensos a la inestabilidad, es decir, contrarios a la permanencia perseguida por toda constitución. Eran antesala de la utilización de la fuerza en situaciones críticas (aquellas, al fin y al cabo, en las que estuviera en peligro la *salus populi*), pero no reglaban procedimientos pacíficos de resolución de controversias *entre facciones* dentro del propio sistema normativo. Ni mucho menos especificaban cuando se estaba contra esa “salud del pueblo”.

Una aportación que supuestamente servía para conseguir estabilidad y prosecución del bien común, sin acudir al expediente extralegal de la desobediencia, fue la del **equilibrio de poderes, la de los controles y contrapesos**, despreciada por los *levellers*. El “gobierno” del país estaba compuesto por distintas instituciones, cada una de las cuales cumplía diferente función, y vigilaba y era observada por las demás. El Rey y las dos Cámaras componían la habitual estructura del poder político nacional, de acuerdo con la tradición inglesa. Pero ocurrirían dos sucesos importantes. En primer lugar, por obra de la “corrupción” walpoliana no podía sostenerse ya este fundamento en la práctica, pues el gobierno de gabinete lo impedía. En su lugar, una minoría facciosa que facilitaba la colusión de intereses parlamentarios y de la Corona contra el pueblo, eliminaba los controles mutuos. Esta crítica de los *real whigs* fue asumida por los norteamericanos, sobre todo, cuando percibieron que el Rey ya no era favorable a concederles cierta protección frente a lo que ellos divisaban como abusos parlamentarios. Se hallaban ante una pinza despótica. Y, por añadidura, en Norteamérica no era posible introducir una segunda cámara de carácter aristocrático, pues la (relativa) igualdad social del Nuevo Mundo socavaba tal opción. Por tanto, el desplazamiento del viejo mecanismo del *checks and balances* se produjo en el sentido de erigir un poder judicial con mayores atribuciones. Los otros serían la Presidencia como cabeza del ejecutivo y las Cámaras como legislativo (una de ellas, territorial, lo

cual añadía otra división). Para ello, se emprendían dos operaciones institucionales de cierto calado y adaptadas a la realidad americana: la legitimación genérica del pueblo para elegir a estos dos últimos poderes, la “desjudicialización” de los mismos (recuérdese el papel como tribunal que había tenido el Parlamento en Inglaterra), y el mantenimiento del jurado como órgano de participación cívica (incluso, en cierto modo, democrática) y con amplias tareas de enjuiciamiento. Estas acciones en realidad, pretendían “restablecer” el imperio de la ley, la seguridad jurídica, pero sin violentar la legitimación democrática e intentando resolver los conflictos interestatales y de los territorios con la Unión. La *judicial review* sólo aparecerá más tarde. Se intentaba sólo recurrir a jueces y tribunales porque habían sido la instancia *imparcial* que en el sistema británico se habían encargado de hacer se respetara el Derecho, merced a su inamovilidad. El problema surgiría debido a que, al tiempo, se intentaba configurar la estructura constitucional estadounidense como regla jurídica suprema, aplicable al área de la política. Pero este ámbito se mostraba resistente a tal pretensión, por ser terreno para las *facciones*.

Lo cual me conduce a hablar a su vez de otro mecanismo, intrínseco a aquella Constitución, según los federalistas, aunque no expresamente recogido en sus líneas, cual fue el de la “**ampliación de la órbita**”. Para Madison, Hamilton y Jay, la extensión del autogobierno a un gran territorio, y en contra de lo que pensaban los clásicos y también los antifederalistas, no eran obstáculos para el buen funcionamiento de un república. Por el contrario, la dispersión de intereses muy diversos haría que nunca un partido tuviera el predominio político absoluto y permanente en la nación, evitándose así la arbitrariedad del gobierno. Este resorte no dependía de institución concreta, sino de la combinación de los poderes en la Carta Magna de 1787, erigiendo una barrera que no sería sólo de mero “pergamino”. Sin embargo, y como se ha visto, tal precaución se mostró como insuficiente, y el Tribunal Supremo de los estados Unidos pasó pronto a figurar como espita que permitiera la salida airosa de conflictos faccionales.

Pues es, en efecto, con el caso *Marbury vs. Madison* (1803), cuando surge el último elemento del modelo; el que puede definirse como “**jurisdicción constitucional**”, o “control de constitucionalidad de las leyes”, y, además, en el caso estadounidense, de carácter difuso. Mediante tal resorte, cualquier juez o tribunal de los Estados Unidos puede dejar de aplicar cualesquiera normas, incluidas las legales aprobadas por las cámaras de representación popular, si fueran contra la Constitución federal. Esto ha conducido a muchos autores a hablar del “**contramayoritarismo**”¹⁸²⁶ de

¹⁸²⁶ Para un excelente resumen de las posturas cercanas a esta posición, vid. Moreso, *op. cit.*, pp. 132-36, quien, asimismo, subraya en la pg. 131, que “no siempre las decisiones de estos órganos [los judiciales o

este esquema, tanto más acentuado cuanto mayor grado de rigidez se exija para la reforma de la Carta Magna. Lo cierto es que hasta llegar a las facultades actuales de la llamada jurisdicción constitucional, hubo que atravesar un período largo de consolidación, no previsto por Marshall en su famosa sentencia arriba indicada. En realidad, con ésta el célebre jurista lo que hizo fue intentar dar solución a un conflicto entre facciones, conservando la estructura constitucional de 1787 en un momento en que aquel peligro se cernía sobre ella.

III. Conclusiones

La presente tesis intenta rastrear los orígenes de la *constitución democrática moderna*, que se podría caracterizar con los siguientes rasgos:

1. documento escrito que refleja el compromiso de los sujetos a quienes se presupone máxima capacidad racional
2. rígido y de rango normativo superior
3. fundando instituciones políticas basadas en el autogobierno de la comunidad
4. reconociendo derechos inalienables
5. legitimado popularmente
6. que incluye sistemas de control para evitar la violación de la norma suprema

Primera: Existen varios elementos del “constitucionalismo medieval” que pasarán a la fórmula democrática moderna.

El primero de ellos, el *pactismo*. En la sociedad de aquella época no existe un poder público que tenga el monopolio de la fuerza o de la regulación: el *imperium* y las potestades que conlleva se hayan dispersos a lo largo de la escala social. El *vasallaje* resulta ser el nexo, mediante juramento de fidelidad, por el que surgen pactos de dominio, es decir, se contraen obligaciones con un señor que ofrece su protección militar.

parajudiciales] son contramayoritarias, algunas veces sólo establecen soluciones a conflictos que la regla de la mayoría no puede resolver”.

El segundo elemento que va a heredar el constitucionalismo moderno del anterior es la extensión de esta fórmula a un ámbito distinto, más netamente político, el de las Cortes, Parlamentos o Estados Generales. Necesitando los monarcas de una mayor centralización que reforzara su poder, pero dependiendo aún de la fragmentación estamental existente, configurarían aquellos órganos para celebrar reuniones de forma periódica. Es la *politia* o “**constitución mixta**” de Tomás de Aquino, quien, pese a pretender el refuerzo político del rey, mantuvo la distinción que debía diferenciarle del tirano, por ejercer sus potestades de acuerdo con la justicia y la equidad. Un modelo político mediado por la metáfora organicista del cuerpo en el cual su corazón es la Corona y los magistrados, obispos y señores feudales podrían aconsejar al rey, auxiliándole para impedir su conversión en déspota. Bajo la máxima *quod omnes tangit ab omnibus approbetur*, ciertas materias, como la recaudación de tributos o la convocatoria para defender al reino, requerían que el monarca pidiera su asentimiento a los reunidos en asamblea.

El tercer elemento medieval que va a conservarse en el constitucionalismo moderno, aun con una radical transformación, será el reconocimiento de *iura* y *libertates*. El rey, para conseguir respaldo político y social, va a reconocer ciertos **derechos y libertades a sus súbditos**, aunque se hallaran enclavados en la configuración *estamental* de la época, pues no se disfrutaba de ellos propiamente como individuo.

El último importante elemento a destacar y que también va a influir en el constitucionalismo moderno es el de la **supremacía la ley**. Para Henry Bracton (1216-1268) la ley es una confirmación solemne de la costumbre, un Derecho que ya existe por largo tiempo, debiendo quedar aprobada con el asentimiento de los grandes de Inglaterra. Pero esto no es un simple acuerdo entre ellos, de sus intereses recíprocos, sino que resulta la expresión del orden específico *de la comunidad política en su conjunto*. Esas normas serán las *leyes fundamentales* del país, sólo alterables mediante idéntico procedimiento, que contará con el juramento añadido del rey, comprometido a respetarlas. Existe el *gubernaculum*, de un lado, y la *iurisdictio*, por otro. El primero corresponde a la prerrogativa derivada de la supremacía política del monarca, referida un poder discrecional que puede no seguir estrictamente leyes previas, y la segunda, sin embargo, se halla limitado por ellas. El poder de la Corona resulta ser indivisible e incontrolable, pero limitado.

Segunda: La movilidad social de la época Tudor en Inglaterra (1485-1603) conforma el contexto favorable a la figura del *freeman*, el sujeto político activo por excelencia de los futuros avances democratizadores.

A partir del siglo XVI se aúpa con fuerza en Europa la tendencia absolutista. Se caracterizaba por una mayor concentración de poder en las manos del monarca, quien pretendía así instituir el monopolio de la fuerza. En Inglaterra, la monarquía ya contaba con el poderoso instrumento de sus Tribunales y el correlativo *common law* aplicable, de tipo autóctono, válido para todo el país y auténtico factor de unificación. Pero los factores de refuerzo de la tendencia absolutista en Inglaterra fueron principalmente la “anglicanización” eclesiástica y la alianza del rey con las nuevas clases emergentes frente al clero y la nobleza.

Y es que, en efecto, con el Acta de Supremacía de Enrique VIII (1534) y su institución como jerarca máximo de una iglesia escindida de Roma, la autoridad del Rey inglés halla un punto de apoyo esencial para construir su poder político. El cisma le permitió sufragar sus gastos mediante la desamortización de bienes de las órdenes religiosas, respaldando así la expansión de la *gentry* y la *yeomanry*, es decir, de la pequeña nobleza y de los campesinos independientes, al facilitarles la adquisición de aquellas tierras. Este sector social en auge cobrará así gran importancia para definir la figura del *freeman*, identificado como el sujeto de todos los derechos, incluidos los de participación política. Aquellos *freeholders* tendrán en sus manos, por ende, los resortes del poder local.

A causa de todo ello, la actuación de la dinastía Tudor hasta 1603 originó que la llegada al trono de los Estuardo después encontrase un país repleto de particularidades, pues en las naciones europeas vecinas el absolutismo era mucho más robusto. La peculiaridad inglesa hacía que una institución de raíz medieval, como lo era el Parlamento, tuviera gran relevancia. El país no era un *dominium regale*, sino un *dominium politicum et regale*, es decir, un reino en el cual se reunían el gobierno bajo su primer magistrado y la comunidad política radicada en el Parlamento, con todos sus componentes institucionales y territoriales, en los cuales el *freeman* tenía gran relevancia.

Tercera: El puritanismo de origen calvinista introduce teorías políticas que socavan la vieja legitimidad monárquica, al justificar la desobediencia al poder instituido cuando va contra la propia conciencia religiosa.

La importancia de la Reforma en el mundo político y social europeo del siglo XVI es difícil de exagerar. La libre interpretación de los textos bíblicos facilitaba la aparición de muy distintas sectas y agrupaciones religiosas. Tal tendencia supuso, asimismo, huir de la cosmovisión escolástica, en la que cada individuo ocupaba su lugar en

determinado estamento y el trabajo no era susceptible de valoración ética. El protestantismo hizo hincapié en la predestinación divina y recuperó la actividad mundana. Y el calvinismo, nacido en los cantones republicanos suizos, sería el grupo más atraído por la creación de nuevas fórmulas en el ámbito político.

Si bien Lutero pareció preocuparse poco por las repercusiones político-organizativas de su percepción teológica, Calvino después se propuso forjar un modelo estable de carácter institucionalizado. Su confesión mostró una capacidad expansiva que requirió de utillaje intelectual. Los hugonotes en Francia y los puritanos en Inglaterra buscaron justificaciones para la desobediencia a monarcas enemigos ("papistas"), llevando al extremo postulados con respecto los cuales el fundador había sido más cauteloso y ambiguo, preocupado por, como el resto de jefes de la Reforma, controlar las consecuencias de los cambios que podían socavar el orden social.

Isabel I Tudor (1558-1603) dicta en 1563 los Treinta y nueve Artículos, que establecían las normas de la iglesia nacional a cuya cabeza se encontraba. Pero sus sucesores tropiezan con las tendencias puritanas que intentaban destruir, o restringir, en el mejor de los casos, el poder personal de los reyes. Estas ideas tendrán un fuerte apoyo social, expresado a través del Parlamento.

Cuarta: La teoría de la *supremacía* (que no soberanía) parlamentaria surge del combate de los Estuardo con los representantes del reino, quebrando la vieja "constitución mixta".

Como se ha podido indicar, y de acuerdo con el *gubernaculum*, el monarca disponía de la "prerrogativa regia". Esta facultad del Rey incluía potestades no sometidas al consentimiento de las Cámaras, desde su propia convocatoria y disolución, hasta el veto o la inmunidad (*the king do no wrong*), el mando de la milicia o la jefatura de la iglesia de Inglaterra. Los parlamentarios se opusieron a la política estuardiana, que retrocedía poco pese a los numerosos enfrentamientos, y que tuvo que encarar con Jacobo I la propuesta de reforma puritanizante de la *Millenary Petition* (1603) o con Carlos I la "Petición de Derechos" (*Petition of Right*, 1628) o la *Grand Remonstrance* ("Gran Protesta", 1641). En esta última los parlamentarios acusaban a varias facciones cortesanas de haber conspirado para alterar *las leyes fundamentales* del reino. El punto máximo del enfrentamiento por la supremacía se había alcanzado. Los Comunes reunían una coalición lo suficientemente amplia como para luchar contra la Corona, y su programa era fácil de leer en la Gran Amonestación. La causa parlamentaria fue defendida como *nacional*, frente a intereses "papistas" (es decir,

extranjeros) y corruptos. La tarea de gobernar, el *gubernaculum*, fue principal durante muchos siglos, a despecho de una “representación” que guardaba connotaciones de “consejo”. Pero a principios del XVII, antes del choque armado entre Rey y Parlamento, el equilibrio de la antigua “constitución mixta” que aseguraba un entendimiento entre Lores, Comunes y Monarca, se había quebrado, surgiendo de forma abierta el combate entre absolutismo y supremacía parlamentaria, en el que además pronto los Comunes sobresaldrían como hegemónicos. Cuando el Parlamento aprobara la Ordenanza Militar (*Militia Ordinance*, 1641) con la que retiraban al monarca la organización castrense, se había cruzado el Rubicón del enfrentamiento de modo irreversible. Se reivindicaba el papel de las Cámaras como supremo Tribunal y Consejo superior de Inglaterra, autorizado por tanto para proveer en situaciones de supervivencia, siguiendo así “la *Ley más antigua* de este Reino”, esa “que es *fundamental* y esencial a la *constitución* y *subsistencia* del mismo”, la *salus populi*. Henry Parker (1604-1652) destacaría como principal valedor de la nueva corriente ideológica, defendiendo esta *paramount law*, y considerando que los parlamentarios eran los mejores intérpretes eforales (*ephori*) del “pueblo”. En consonancia con el legado de Calvino y de sus seguidores hugonotes, sólo podía ejercerse resistencia contra el monarca a través de los representantes intermedios. Representantes que retienen la *supremacía*, no exactamente la soberanía bodiniana. En la obra de Parker se encuentra ausente un soberano *perpetuo*, pues los parlamentarios son elegidos sólo por cierto período, y sus facultades no resultan *originarias*, por derivar del consentimiento popular.

Quinta: Los niveladores oponen a la supremacía parlamentaria, la popular, a través de sus *Agreements*, encontrando eco en el *New Model Army* para sus propuestas.

La lucha frente a Carlos I fue dirigida por un Parlamento en donde la tendencia puritana resultaba hegemónica. En él estaban, por una parte los presbiterianos, y por otra, los “independientes”. Estos últimos eran contrarios a una iglesia estatal que rigiese el culto y partidarios de formar congregaciones autónomas. Sin embargo, la Asamblea se hallaba dominada por los primeros, quienes pretendían la instauración de un sínodo nacional que propusiera reglas unificadoras aprobadas por el Parlamento. Tendían a una cierta organización vertical del poder y eran proclives a un entendimiento final con el Rey. Por el contrario, el independentismo partía de unas estructuras congregacionalistas más bien “horizontales” y era menos propenso a la negociación con el monarca. Esta corriente democratizadora engendró una rama

política más radical, los *levellers*. Los independientes, y por ende, los niveladores, gozaron de gran influencia en las filas del *New Model Army*, creado en el verano de 1642 por Oliver Cromwell y Henry Ireton y que acogía combatientes de origen social modesto, facilitando su promoción interna y erigiéndose en alternativa a los ejércitos tradicionales de Inglaterra, dirigidos por la nobleza.

En todo caso, y aunque las filas del puritanismo hicieron frente común contra el sistema de prelatura real, tal y como demostró el 13 de febrero de 1642 la aprobación de la *Clerical Disabilities Act*, con la cual los obispos fueron privados de sus votos entre los Lores, el conflicto entre independientes y presbiterianos se prolongó con importantes consecuencias. Una buena parte de la *gentry*, aun habiendo comenzado la guerra, intentó alcanzar acuerdos con el Rey por intermediación de la mayoría presbiteriana. Otro sector en ascenso, menos enriquecido, o más impaciente quizá, apoyado en una amplia base social empobrecida, en situación precaria o cuyas expectativas eran frustradas por la concesión de privilegios monopolísticos, estaba persiguiendo reformas mucho más radicales. La espiral de desconfianza entre independientes y presbiterianos condujo a que estos últimos propusieran en febrero de 1647 el demembramiento del *New Model Army*. El malestar en el Ejército se tradujo en una agitación sin precedentes, en la cual se combinaban peticiones específicas, como el pago de la soldada, con otras de carácter ideológico y político, jurídico y social. Las antiguas jerarquías no podrían recobrar su poder y así lo venían a manifestar en junio de 1647 acciones como la de Newmarket, y documentos como el *Solemn Engagement of the Army*, que fundaba un *General Council of the Army*, compuesto de representantes de los oficiales y los soldados en forma paritaria. La *Representation of the Army*, de la misma época, afirmaba que el *New Model* defendía los “*derechos y libertades fundamentales*” correspondientes al pueblo, ya que no era “*un simple ejército mercenario*”. Además, exigía una purga de los Comunes, así como limitar la duración de los Parlamentos y proceder a la reasignación de electores en cada distrito. De esta manera, viejas ideas republicanas que se remontaban a la Roma antigua, en concreto las de representación, control de los gobernantes y milicia popular, así como el entendimiento de que los ingleses tenían una serie de *birth-rights* o derechos innatos, resultan ser los dos grandes anclajes programáticos de la agitación radical en el *New Model Army*. Una agitación que, en consonancia con su biografía y anteriores panfletos, resultará asumida de manera más coherente por los niveladores.

Los *levellers* entendían que el Rey se mantenía en el trono derivando su poder de quienes eran beneficiarios de un *régimen de privilegios* que les concedía patentes para *monopolizar* la vida religiosa (iglesia anglicana, diezmos), económica (aduanas, licencias y autorizaciones) y jurídica (jurisdicciones y fueros especiales). Así que eran

partidarios de eliminar la base estamental del sistema político, que al mismo tiempo se hallaba unido inextricablemente a cierto orden social. Esto hace que admitan la representación, pero sólo de índole popular, pues para ellos la Cámara de los Lores es un bastión del privilegio. Sostienen, como contrafigura, la del *freeman*, el hombre libre que vive de su propio esfuerzo y al margen de lazo alguno de dependencia, merced a su “propiedad”, entendida en un sentido laxo que incluyera un cúmulo de “*native rights*”.

Pero más allá de este punto de partida, los niveladores advirtieron, primero con aprensión, y luego con auténtico temor, la posibilidad de un Parlamento pudiera corromperse y atacar los valores que ellos defendían. Así que, para frenarle, era necesario anteponer a sus deseos la voluntad popular, edificada mediante los *Agreements*. El pueblo iba a ser ahora el sujeto de la legitimidad del poder político, requiriendo un cambio que supusiera la erección de otra supremacía diferente a todas las expuestas con anterioridad en Inglaterra. Los individuos que componen el “pueblo” acuerdan someterse al poder que se erija siguiendo las limitaciones del *Agreement*, aunque los pactos de “unión” (*pactum unionis*) y de “sujeción” (*subiectionis*) aparezcan en el mismo instante cronológico. El primero es el baluarte de una paz que los *levellers* pretendían se estableciera tras las Guerras Civiles entre los habitantes de Inglaterra, el segundo limitaba los cargos en el poder y su forma de elección. Ambos quedaban reunidos en los *Agreements*. El Acuerdo del Pueblo, la *paramount law*, era un pacto supremo, realizado con *afán de permanencia*, a fin de proteger el seguro disfrute de los derechos fundamentales, siempre amenazados por una tendencia al abuso de poder que partía de la previsible corrupción humana de los gobernantes. Esta fórmula tropezó con la oposición de los jefes del *New Model Army*, quienes aún confiaban en algún tipo de acuerdo con el Rey que les permitiera reintroducir la vieja “constitución mixta”, como demuestran los Debates de Putney y el proyecto de la *Head of the Proposals*. Pero la deslealtad de Carlos I, que conduciría a una segunda Guerra Civil, conllevó que Cromwell pusiera en marcha la Purga de Pride, a fin de expulsar del Parlamento a quienes contemporeizaran con la voluntad real (diciembre de 1648), y después, el procesamiento del monarca (enero de 1649). Paralelamente, un Comité formado por independientes, el Consejo de Oficiales, parlamentarios opuestos al Rey y niveladores, elaboró un segundo *Agreement* (Whitehall, diciembre de 1648-enero de 1649), demostrando que la fórmula *leveller* había calado entre los altos mandos militares. De hecho, Carlos I será ejecutado al tiempo que la Cámara de los Lores resulta abolida por el *Rump Parliament* (6 de enero de 1649). El poder queda centralizado alrededor de personas próximas a Cromwell, quien desde ese momento se dedica a continuación a frenar a los niveladores y radicales que puedan aterrorizar

a la *gentry* y minar la estabilidad tan arduamente conseguida. Lilburne y los suyos publicarán un tercer *Agreement* el 1 de mayo de 1649, insistiendo en mecanismos como el de la representación periódica, incompatibilidades y rotación de cargos públicos, milicia de los *freemen*, elección de cargos locales, distintos derechos (desde la libertad de conciencia hasta varios de tipo procesal), y la abolición de monopolios y diezmos. El texto es el más completo y prolijo de los redactados por el grupo, el más combativo, pero su empresa acaba agonizando ante los adversos acontecimientos posteriores.

Sexta: La *Commonwealth* fracasó en implantar el constitucionalismo democrático, pero sus pensadores y experimentos políticos suministraron fórmulas e ideas que pasarían al Nuevo Mundo para erigirlo con éxito.

Los nuevos autores del pensamiento político durante el Interregno, también llamado período de la *Commonwealth*, fueron hombres distintos a los *levellers*: John Milton, James Harrington, Henry Neville, Algernon Sidney, Henry Vane. Ninguno de ellos, pese a sus puntos de acuerdo con los niveladores, y su segura influencia, tomó el testigo de Lilburne y los suyos. La vida política de esa nueva *Commonwealth* resultó ser sumamente inestable: enfrentamientos con irlandeses, tropas escocesas y realistas, guerras contra Holanda por el comercio marítimo, complots monárquicos, exaltación religiosa de puritanos reformistas, dificultad para grantizarse el apoyo de la *gentry* local; una ingobernabilidad que condujo a Cromwell a disolver varios Parlamentos. El líder del *New Model Army* intentó, incluso, aunque sin éxito, que prosperase una Constitución republicana, el *Instrument of Government* (1653), y luego otra demasiado cercana a la de carácter mixto (*Humble Petition and Advice*, 1657), con idéntico resultado.

Y sin embargo, la atmósfera ideológica de la época llegaría a permear en escritores posteriores del Reino Unido, como los *whigs* y los llamados *commonwealthmen*, o los colonos del Nuevo Mundo. Y ello porque el poder de atracción de determinadas ideas políticas, como el contractualismo, el imperio de la ley, la milicia ciudadana, la legitimidad popular, los derechos y libertades o la representación, se basaban en una práctica real. Las congregaciones, los gremios artesanos, los jurados locales, los comités de soldados del *New Model Army* o la elección de cargos públicos, todo ello había supuesto una experiencia sumamente valiosa que permitía aseverar que nuevas fórmulas políticas eran posibles.

Séptima: El autogobierno colonial en Norteamérica parte de las Cartas de concesión reales, y se instala a través de las vías del *covenant* religioso y la sociedad por acciones. Conforman el ingrediente “republicano” del constitucionalismo democrático y posee rasgos imprescindibles para la futura conformación de la democracia constitucional estadounidense.

La independencia de los Estados Unidos de América se forjó en 1776 a través de una práctica del autogobierno fomentada por la lejanía de territorios sobre los cuales la metrópoli había mantenido un dominio difuso. América del Norte carecía al principio, en el siglo XVI, de límites territoriales concretos que la repartiesen entre las potencias europeas. Se trataba de un territorio virgen aún sin definir en cuanto a las características de su dominio. La premisa de partida era explotar los recursos y comunicaciones del Nuevo Mundo, pero con escaso interés en poblarlo. La peculiaridad inglesa fue favorecer tales actividades sin establecer una dependencia directa de los colonos con respecto a la madre patria, sino reconociéndoles cierta autonomía política, combinada con la titularidad de los derechos y libertades de la Isla. El método utilizado por los monarcas ingleses para explotar el continente fue el de la Carta regia, en la que había, siguiendo la tradición medieval, un *grantor* (concedente) y un *grantee* (concesionario). A cambio de cumplir ciertas condiciones del primero, el segundo va a poder disfrutar de algunos derechos y privilegios. Se trata de un documento expedido por el monarca a particulares, grupos religiosos y sociedades comerciales. siempre dentro de su prerrogativa, y que, en consecuencia, no exigía del consentimiento parlamentario.

Al margen de los casos de dominio y administración directas de la Corona, **un primer tipo de Cartas** ofreció grandes extensiones a personas específicas y de solvencia. Esta tarea fue emprendida por la reina Isabel y continuada por los Estuardo, en una escala ya mayor. El concesionario gozaba de diversos poderes jurisdiccionales y administrativos sobre su propiedad, que se asemejaba así a un señorío, si bien, como en el caso de Lord Baltimore en 1632 (fecha en que se le concede Maryland), podía tratarse de alguien que también buscara refugio para su confesión religiosa, algo que también ocurriría con William Penn en 1681 (Pensilvania). **La segunda vía importante** para la expansión inglesa en Norteamérica a través de las cartas regias era la sociedad por acciones (*company*, o *joint stock company*), que disfrutaba del monopolio de explotar y comerciar determinadas regiones del continente. Los asentamientos previstos por estas compañías tenían una mínima infraestructura para sus actividades (defensa, logística, administración), en las cuales trabajaban colonos en diversas situaciones jurídicas, los más con una condición muy similar a la de la

servidumbre, hasta que redimieran deudas o consiguieran solvencia suficiente como para hacerse con una porción accionarial u otra propiedad. Las sociedades eran corporaciones, al modo de los gremios artesanos de las urbes o de sus Ayuntamientos. Se basaban en alto grado en la participación en su gobierno por parte de una asamblea de accionistas y, al margen de posibles cambios en su accionariado o administración, poseían personalidad jurídica. Este mecanismo de la colonización por sociedad comenzó ya en el reinado de Jacobo I, con la Compañía de Virginia (1606). En este mismo caso, pronto los colonos, que habían llegado ya en gran número a aquellos parajes, demandaron mayor participación en su gobierno, consiguiendo que se les convocara a asambleas con diversos poderes desde 1619, no sin numerosos conflictos antes y después de esa fecha. Así pues, existe un fenómeno de “desmercantilización” de la vida colonizadora en el supuesto, *por presión social de los colonos*.

Algo más tardíamente, aparecen Cartas que llegan admitir una **autonomía** amplísima en el gobierno colonial. Tal fue el caso de la de Massachusetts (1629), concedida a un grupo puritano dirigido por John Winthrop, que dirigió a un grupo de pobladores al norte de la franja costera atlántica, en la zona conocida como Nueva Inglaterra. Tenía personalidad jurídica propia, pero esta vez porque era un “cuerpo colectivo y político, de hecho y denominación” (*body corporate and politique, in fact and name*). Preveía un Gobernador, un Vicegobernador y dieciocho Asistentes, seleccionados de manera anual por los pobladores. Estos se reunirían en cuatro asambleas (*General Courts*) dentro de tal período y en días específicos. Pero, sobre todo, lo relevante es que habían suscrito, ya antes de la partida, el *Agreement of the Massachusetts Bay Company* en *Cambridge*. Pues Winthrop y los suyos era puritanos que deseaban crear una comunidad de vida con impronta religiosa; el *covenant* religioso de tipo congregacional tomaba protagonismo, de una forma que ya tímidamente y a menor escala había apuntado el pacto del Mayflower (1620), y que más tarde acogiera el *Plymouth Agreement* (1636), el *Providence Agreement* (1637), el *Government of Pocasset* (16389, o la *Combination of the Inhabitants upon the Piscataqua River for Government* (1641). El propósito de los colonos al suscribir todos estos acuerdos fue el de constituir cuerpos políticos (“*body politic*”). Los firmantes se reconocían entre sí como miembros de los mismos y consentían en someterse a los mandatos que emanaran de sus órganos, orientados a dirigir la convivencia social en el grupo sobre determinadas tierras. Estos pactos fueron al principio de carácter rudimentario, partiendo de grupos sin demasiadas discrepancias en su seno. El sustrato común era, en todo caso, el de conformar una comunidad con cierto grado de autogobierno: tenían un carácter netamente *fundacional*, pretendían crear

comunidades con personalidad jurídica e instituciones propias, firmando un pacto los colonos a tal fin. Pero, en muchos de tales acuerdos, nacía una fuerte inclinación a identificar comunidad civil y eclesiástica, tal y como había sucedido con el calvinismo original. Así que allí van a extenderse dos *tendencias* distintas de autogobierno, según giren o no en torno a requerir aquella doble condición de fiel de una determinada congregación y miembro de la comunidad civil al mismo tiempo, o no opten por tal exigencia. Los que sí la imponían tendrán una impronta “regeneradora” puritana y excluyente, como la que surge ya con la fundación de Massachusetts. Esto significó que numerosos colonos en desacuerdo, bien con los dogmas religiosos de la comunidad, bien con el propio sistema de pertenencia a ella, optaran por fundar otras nuevas en las cercanías. Del último grupo, el de quienes se oponían al mecanismo de incorporación en su esencia, partieron los experimentos más secularizadores. Se trataba de personas de intensa fe puritana, pero que precisamente por su forma de entenderla defendían la imposibilidad de exigir juramentos. El separatista Roger Williams sería uno de ellos y más tarde los cuáqueros de William Penn, siendo todos ellos tolerantes con quienes profesaban distintos credos.

El proceso secesionista, sin embargo, pasó luego a una fase federativa. Ya en la primavera de 1638, y en el valle de Connecticut, tres poblaciones distintas (Windsor, Hartford y Weathersfield) se federarán, acordando someterse a una autoridad común. La estructura política que configuran se basa en un cierto equilibrio entre las ciudades y la confederación, así como en determinado reparto de poderes y la elección periódica de todos sus cargos. De esta forma, el proceso de escisiones comienza a moderarse, formándose nuevas entidades políticas que influirían sin duda en el futuro constitucional norteamericano, tales como las aparecidas en 1643 con el *Frame of Government* que unirá a New Haven con Guilford, Milford y Stanford, la *Patent for Providence Plantations* que permitía unirse a las ciudades de Providence, Portsmouth y Newport, o la confederación denominada “Colonias Unidas de Nueva Inglaterra”, que formarán Massachusetts, Plymouth, Connecticut y New Haven.

El autogobierno colonial, por último, posee una serie de rasgos principales:

a) **tendencia a la autodeterminación.** Las colonias van configurando sus propios órganos de gobierno, tanto para la elaboración de normativa como para su aplicación. La metrópoli se halla muy alejada de la vida colonial y tiene dificultades para supervisarla, así que a los americanos les resulta posible instituir una serie de órganos que aprueben y hagan cumplir ciertas normas, sin apenas concurso del Rey y sus autoridades. Esta práctica se irá paulatinamente consolidando y se convertirá en irreversible. Los colonos recurren para asumirla a la frecuente convocatoria automática

de asambleas y otros órganos. Este sistema también aparecía en la Antigüedad, pero en realidad emanaba directamente de la tradición parlamentaria y las doctrinas radicales derivadas de las Guerras Civiles inglesas.

b) el **documento escrito como prueba de compromiso colectivo**. Aunque muchos de los textos coloniales, sobre todo los del inicio, son declaraciones realizadas por el Rey, pronto surgirán como expresión de la voluntad de un grupo, a menudo una congregación. Aparecen agrupaciones que pretenden fijar unas normas básicas para su convivencia en el Nuevo Mundo y que pueden hacerlo con una mayor o menor homogeneidad cultural, étnica y religiosa. Y ello con clara consciencia de que están fundando nuevas comunidades, mediando una base normativa e institucional propia. El intento consiste en fijar de manera permanente y que resulte difícilmente modificable, unas reglas básicas para la convivencia social, como los *levellers* también habían previsto con sus *Agreements*.

c) el modelo del **gobierno mixto** goza de autoridad en América, no así el de la constitución mixta. La desigualdad estamental choca con el *covenant* religioso y su habitual igualitarismo. Asimismo, en América abunda la tierra y resulta más fácil conseguirla. No tanto conservarla frente a un medio hostil, lo cual obliga a una interdependencia mayor entre los colonos, cualquiera que fuera su condición. Todos son factores que apuntan a la imposibilidad de fundar instituciones duraderas basadas en el antiguo orden. Numerosos rasgos se combinaban para asegurar este gobierno mixto, entre los que destacaban la encomienda de funciones distintas o la posibilidad de que unos órganos vetaran a otros y que buscaba el equilibrio y la vigilancia entre ellos, tan queridos de Polibio y Harrington.

d) **rotación de cargos e incompatibilidades, colegialidad y veto**. La primera suponía que no se podía ocupar un puesto público más allá de cierto período determinado. Y, por añadidura, a menudo la imposibilidad de renovar mandato, al menos durante un específico plazo. Con esto se buscaba evitar la perpetuación en el poder, a fin de impedir la tiranía consiguiente. Por su parte, las incompatibilidades exigían que no se desempeñara dos o más cargos públicos al mismo tiempo. A estas dos notas precedentes les acompañaba la de la colegialidad, pues una decisión colegiada suponía cierta garantía de deliberación, de que las decisiones de que se tratara no serían tomadas de forma despótica o irreflexiva.

e) el **respeto por los derechos o libertades**. En diversos documentos coloniales, como se ha podido apreciar, aparece expresa o implícitamente indicada la idea de que existen determinados derechos que han de quedar a salvo del poder. La titularidad de unos derechos y libertades no pertenecía sólo a los ingleses que habitaban en Europa, sino también a los *freemen* que residían, trabajaban y, en definitiva, vivían en el Nuevo Continente. De esta forma, toda una tradición jurídica con antecedentes remotos en el Medievo inglés iba a cruzar el Atlántico y quedarse allí definitivamente, con una capacidad expansiva que permitió se extendiera a inmigrantes de origen no estrictamente anglosajón. Los propios pobladores van a intentar que aquellos se reflejen de forma más específica, sobre todo ante la posible inseguridad jurídica que pudiera originar las conductas u omisiones de un poder de otro modo discrecional, con un momento decisivo en la Asamblea General de los colonos virginianos de 1624, que aprobaría las *Laws and Orders Concluded by the Virginia General Assembly*. Este esfuerzo continuaría con el *Massachusetts Body of Liberties* (1635), el *Pilgrim Code of Laws* (1636)¹⁸²⁷, las *New Haven Fundamentals* (1643)¹⁸²⁸, las *Fundamentals of West New Jersey* (1681)¹⁸²⁹, la *Charter of Liberties and Privileges of New York* (1683)¹⁸³⁰, y, sobre todo, con el *Frame of Government* de Pensilvania de 1682.

f) el **sujeto del sistema político** que se va formando en Norteamérica, por tanto, va a ser precisamente ese **freeman**, el hombre libre, y no el aristócrata o persona de alta cuna y rancio abolengo. La facilidad para conseguir tierra, aunque fuera tras un período de redención de deudas y bajo servidumbre, potenciaría la existencia de medios de vida propios, esos cuya posesión, como se ha visto, identificaba a un *freeman*, a alguien que no dependía de señor alguno. En consonancia, el derecho al sufragio activo y pasivo, relacionado tradicionalmente en Inglaterra con la independencia de todo señor, también va a extenderse.

Octava: La herencia ideológica *whig*, absorbida por los colonos a través de la Gloriosa de 1688 y del Segundo Tratado del Gobierno Civil, resulta luego matizada en tono republicano por la influencia de los *commonwealthmen* o *real whigs*.

¹⁸²⁷ En Lutz, 1998, <<http://oll.libertyfund.org/title/694/102474>>.

¹⁸²⁸ En *ibid.*, <<http://oll.libertyfund.org/title/694/102648>>.

¹⁸²⁹ En *ibid.*, <<http://oll.libertyfund.org/title/694/102673>>.

¹⁸³⁰ En *ibid.*, <<http://oll.libertyfund.org/title/694/102671>>.

Como se ha podido advertir, los colonos norteamericanos partían de premisas ideológicas determinadas. El bagaje intelectual y práctico proveniente de Inglaterra se daba por supuesto, y también la realidad proveniente de los sucesos acaecidos allí desde los primeros Estuardo hasta la *Commonwealth* y la Restauración. De hecho, el cordón umbilical que unía a los colonos con la metrópoli nunca llegaría a cortarse hasta el último momento, el de su independencia. El *whiggism*, triunfante en 1688, iba a suponer su última influencia y también su punto de no retorno.

Su mejor representante fue John Locke. Gobierno mixto, contractualismo y derechos naturales a la libertad, vida y propiedad son los principios expuestos por este autor en su *Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil*. El primero se situaba bajo hegemonía parlamentaria, sin embargo, algo con lo que simpatizaron los norteamericanos, propensos a reforzar el poder de sus asambleas, más cercanas al “pueblo”. Por el contrario, el partido *tory* defendía el reforzamiento de la Corona y sus prerrogativas. Los *whigs* eran el referente más inmediato de los colonos, porque habían arrancado al Rey, símbolo de la arbitrariedad durante la Restauración, el *Habeas Corpus* de 1679, y luego, con la Gloriosa, habían conseguido el *Bill of Rights*, las *Mutiny* y *Toleration Acts* (para el control del ejército y la tolerancia religiosa respecto a los cultos protestantes, respectivamente), así como la *Triennial Act* (convocatorias trienales del Parlamento) en 1694. El *Act of Settlement* de 1701, después, habría impulsado aún más estos avances, al establecer la inamovilidad de los jueces, salvo por mal comportamiento y siempre que así lo establecieran las cámaras parlamentarias, junto con el impedimento para que la Corona perdonara a quienes estuvieran sujetos a *impeachment* de los Comunes, obligándola, asimismo, a despachar asuntos con asentimiento del Consejo Privado y a aceptar determinada línea de sucesión.

Pero Robert Walpole, Primer Lord del Tesoro entre 1721 y 1749, apuntalaría la parlamentarización de la monarquía inglesa con métodos turbios. Lo que permitía gobernar al Primer Ministro con aquellos compañeros de Gabinete seleccionados por él era una confianza parlamentaria basada en el reparto de prebendas y cargos. Y por añadidura, resultaba que la representación en el Parlamento quedaba mermada por la existencia de burgos podridos, la compra de votos y otras maniobras corruptoras de la *gentry* y la nobleza más poderosa, todo ello sobre un sufragio sumamente restringido. Naturalmente, alguien tuvo que contar esto a los colonos americanos, y fueron los denominados *radical*, *old* o *real whigs*, quienes lo hicieron. A través de ellos quedó reforzada la tradición de los republicanos ingleses del XVII, que ya había penetrado entre los colonos norteamericanos previamente, sobre todo gracias a la reedición de sus principales obras. Una herencia a la que unieron su crítica de la mencionada

situación en Inglaterra. No conformaban un movimiento organizado, pero no dejaron de ejercer cierta influencia y autoridad en la arena política inglesa, a través de sus publicaciones y su magisterio. Aquí hay una herencia republicana, que trae de la mano la reivindicación de la independencia del *freeman* frente a cualquier poder corrupto, aunque fuera el parlamentario, y que calará en los habitantes del otro lado del Atlántico. La misma que había hecho hablar a los *levellers*, en sus *Agreements*, de su intención de impedir “interés corrupto alguno o ventaja particular”¹⁸³¹. Dados los distintos contextos políticos en los que estos *commonwealthmen* se moverían, sus reivindicaciones también oscilarían en realizar diferente hincapie según las exigencias y posibilidades del momento: asambleas anuales, redistribución de circunscripciones, ampliación de sufragio, libertad religiosa, derechos a salvo del Parlamento, reducción de la prerrogativa real...lo más importante es subrayar que su influencia en los colonos americanos fue muy amplia. A través de ellos, los principales jefes de la rebelión americana retomaron la perspectiva política de un pasado republicano que, de esta manera, no permanecería olvidado durante la vida colonial.

Pero los *real whigs* no pretendían el derrocamiento de la monarquía exactamente. Respaldaban la también “vieja” constitución, con su **equilibrio** (balance) **de poderes** entre lores, comunes y rey, la “monarquía mixta”. Se diferenciaban así en esto de los niveladores y en cambio se acercaban a Locke, a los *whigs* tradicionales y, en todo caso, se emparentaban parcialmente (teoría del gobierno “mixto”) con Harrington o experimentos republicanos como el *Instrument of Government*. Es decir, al molde de mayor arraigo en Inglaterra, por encima de los atisbos de soberanía popular que contenían los *Agreements of the People*. Si los *real whigs* defienden al pueblo, así, es porque realmente entienden que en la constitución inglesa el poder que éste tiene asignado ha quedado disminuido por la corrupción. Se trata de restaurar el viejo equilibrio, devolviendo al Parlamento, especialmente a los Comunes, el papel que tenían antes de las maniobras de Walpole y los suyos.

Trenchard y Gordon, pues, mostraban hasta dónde podían llegar los *real whigs* en sus reivindicaciones; muy cerca de los viejos republicanos y, desde luego, de los *levellers*. Eran los sucesores díscolos de 1688, y vendrían a aportar importantes premisas ideológicas para los norteamericanos de 1776, tanto republicanas como liberales. Ellos, reformadores infatigables, sirvieron como puente entre los revolucionarios del siglo XVII y los de la centuria posterior.

¹⁸³¹ Sharp (ed.), *op. cit.*, pg. 170.

Novena: Los colonos norteamericanos perciben que sus derechos son vulnerados por la metrópoli y, basándose en su propia experiencia de autogobierno, deciden emanciparse definitivamente de aquélla. Para ello acuden a todo el arsenal ideológico de la tradición inglesa que pudiera servirles para deslegitimar tanto al Rey como al Parlamento inglés; por tanto, a los autores de la Commonwealth y a los *real whigs*.

Desde 1650, Inglaterra inaugura una política mercantilista similar a la de otras potencias europeas, restringiendo el comercio con terceros que desde América quisiera realizarse libremente. Tal orientación fue mantenida desde el mandato de Cromwell hasta Jorge III con la complicidad parlamentaria, aunque los colonos lograran sostener, no sin cierta pugna, sus instituciones de autogobierno.

Pero la prosperidad y crecimiento demográfico de las colonias originaron, junto con la mencionada autonomía política y el remanente ideológico de la *Commonwealth* y los *real whigs*, que las trece colonias se dirigieran por el camino secesionista. Los norteamericanos habían disfrutado de una serie de derechos y libertades parejos a los de sus consúbditos ingleses, incluido el de la representación política, y no estaban dispuestos a renunciar a ellos. Entendieron, primeramente, que el Parlamento de Westminster, en el cual no tenían representación *real*, era el principal artífice de sus desgracias (tributos sin consentimiento, límites a la expedición de moneda, creación de fueros especiales, acantonamiento de tropas, disolución de las asambleas coloniales o mayor fiscalización de la mismas, restricciones al comercio, etcétera) e intentaron así defender una teoría según la cual sólo se hallaban unidos a la metrópoli mediante la Corona. Pero, en un segundo momento, y al advertir que ésta coadyuvaba a lo que entendían era un sometimiento despótico, optaron por la escisión.

Para proceder a la legitimación de su independencia acuden al expediente de universalizar sus premisas ideológicas con la *Declaration of Independence* (1776): “los *hombres* establecen sus Gobiernos, derivando sus justos poderes del consentimiento de los gobernados”. El “Creador” atribuye a los hombres “determinados derechos inalienables, entre los que se encuentran la vida, la libertad, y la búsqueda de la felicidad”, y “para defender estos derechos los hombres establecen sus gobiernos”, de manera que “cuando cualquier forma de gobierno tienda a destruir estos fines, el pueblo tiene derecho de alterarla o abolirla”. La revolución americana supuso llevar hasta sus últimas consecuencias el modelo británico, basado principalmente en un control del poder que implicaba el *sometimiento de los gobernantes al imperio de la ley*, haciendo uso del *derecho de resistencia*.

Décima: El objetivo perentorio de los norteamericanos, de manera casi inmeditamente posterior a su independencia, fue la constitución de un sistema político nacional de carácter estable y que hiciera frente a diversas tendencias centrífugas.

Los norteamericanos ya contaban con un experimento unificador inaugurado con el Congreso Continental de 1774, amparado en asociaciones y organizaciones de base popular extensa. Sin embargo, y como ya se observaron rencillas entre los delegados territoriales desde un principio, cuando algunos rechazaban la separación de la metrópoli y otros no, y preveyendo futuros conflictos similares, los colonos acuerdan dotarse, en cada una de sus demarcaciones, de sistemas de organización política autónoma propios, aplazando el robustecimiento de los lazos entre ellas. Más tarde este aspecto cobrará urgencia, cuando surjan problemas ineludibles como la crisis financiera y fiscal, la obstrucción del comercio interestatal y la amenaza latente de potencias europeas, circunstancias a las que la Confederación de 1777 apenas podrá ya enfrentarse poco después. La Convención Federal se reuniría desde el 25 de mayo al 17 de septiembre de 1787, participando en ella doce de los trece estados. Los participantes habían sido en su mayoría miembros del viejo Congreso Continental o bien del existente luego bajo los Artículos de la Confederación. Predominaba entre ellos una tendencia nacionalista que pudo establecer la agenda de prioridades y cuyas preocupaciones eran las que acabo de mencionar, motivo por el cual querían poner en marcha un gobierno que se dirigiera de forma directa a los estadounidenses. Ese nacionalismo incipiente y deseoso de consolidarse hallaba el obstáculo de la riña seccional: los estados poseían diferente envergadura, tanto en extensión como en número de habitantes, y distintos intereses económicos de carácter regional. Las discusiones sobre el peso de cada una de las dos cámaras y sus respectivos sistemas de elección, acerca de las potestades presidenciales y cómo seleccionar al máximo magistrado, alrededor del control sobre los poderes estatales o del asunto de la esclavitud, pusieron en evidencia que el acuerdo final tendría un frágil sostén. Pese a ello se consiguió un trato, pero no sin que a continuación fuerzas centrífugas dispares, lideradas por los llamados “antifederalistas”, cuestionaran la legitimidad del nuevo régimen político federal.

Undécima: Los constituyentes federales de 1787 partieron para la elaboración de la norma suprema nacional de la experiencia estatal previa del mismo cuño, extrayendo los elementos de legitimidad popular, sufragio extenso, control de

los gobernantes y de los cargos públicos, separación de poderes, derechos a salvo del poder y supremacía y rigidez constitucionales.

Al iniciar las trece colonias su proceso independentista, se sucedieron diferentes esquemas estatales, desde el más cercano a la participación popular amplia y directa, el de Pensilvania de 1776, hasta el que optaba por un ejecutivo fuerte y por el bicameralismo, como el modelo de Massachusetts (1780). Unos y otros se orientaron a través de equilibrios delicados entre fuerzas sociales y facciones políticas. Se distinguen, en cualquier caso, varias características comunes a todas las constituciones estatales de cada una de las antiguas provincias, y que luego serían asumidas en 1787:

a) **Legitimidad popular.** Las diversas constituciones estatales contemplan que todo poder político reside en el pueblo y deriva de él. En el preámbulo de la Carta Constitucional norteamericana puede leerse “Nosotros, *el Pueblo* de los Estados Unidos”, dando lugar así a una plena afirmación de la soberanía popular que hasta entonces no había sido reconocida en ningún sistema político.

b) El “pueblo” del que se habla en esas primeras constituciones norteamericanas es identificado con un **sufragio extenso**, tanto activo como pasivo. La Guerra de Independencia supuso una radicalización destacable en gran parte de los norteamericanos. Elegirían comités locales, los cuales a su vez convocarían *congresos* y *convenciones* provinciales mucho más democratizados y de mayor representatividad que las asambleas coloniales previas. No eran los grandes terratenientes quienes dominaban esas reuniones. Esta situación no había tenido precedentes en la Europa moderna, que carecía de otra similar, salvo aquella creada por la agitación política en el *New Model Army* durante las Guerras Civiles inglesas de 1642-49. La representación “virtual” había sido rechazada, y, por el contrario, se intentaba conseguir *una que reflejase de la manera más fiel posible la realidad social del país*. El modelo de ciudadano activo y que era titular de una serie de derechos, incluidos los de representación política, iba a continuar siendo el del *freeman*, pero ahora de forma altamente inclusiva, acogiendo un número muy elevado de varones adultos. Su independencia iba a ser evaluada de manera muy flexible. En general, en las constituciones estatales se combinaron criterios sobre la propiedad o posesiones de cierto valor, preferentemente tierra cultivable, así como baremos relacionados con el pago de tributos; lo que importaba era que ese *freeman* tuviera un “interés permanente” en la comunidad. Esta tendencia fue consolidándose todavía en grado

mayor en las décadas posteriores, hasta que en 1842 desaparecería todo grado de sufragio censitario en el país.

La Constitución federal de 1787 recogió esta inclinación, exigiendo como únicos requisitos para ser elegido miembro de la Cámara de Representantes haber cumplido “veinticinco años de edad” tras haber sido “ciudadano de los Estados Unidos durante siete años”, resultando además que, con respecto al derecho al voto, el texto se remitía a las “condiciones requeridas para los electores de la Cámara más numerosa de la legislatura local” (artículo I, sección 2). Para formar parte del Senado la Constitución requería haber cumplido “treinta años de edad”, después de haber sido “ciudadano de los Estados Unidos durante nueve años” (id., sección 3). Y para ocupar el cargo de Presidente bastaba con tener al menos treinta y cinco años, la nacionalidad estadounidense y haber residido en el país durante catorce años (art. II, sección 1).

c) En todas las constituciones, y siguiendo la tradición colonial previa, se estableció el **control de los gobernantes y de los cargos públicos**. Se reprodujo así la desconfianza hacia los fideicomisarios del poder que ya habían mostrado los radicales del *New Model Army*, luego los *whigs*, y finalmente los *commonwealthmen*. Fueron así habilitadas fórmulas como el **juramento** o promesa del cargo, los **mandatos muy cortos** (preferentemente anuales, que aseguraran la *renovación del consentimiento popular*), la **rotatoriedad** (no era posible que una misma persona pudiera renovar su permanencia en el puesto público correspondiente más de cierto número de ocasiones, dentro de un período mayor), diversas **inelegibilidades** e **incompatibilidades** (las más numerosas, referidas a la imposibilidad de ocupar dos cargos públicos al mismo tiempo), el establecimiento de **remuneraciones** (para mantener a quienes fueran titulares del poder público apartados de su posible corrupción por terceros o de el que pertenecieran exclusivamente a las clases más pudientes), sistemas de control llevados a cabo por las cámaras legislativas sobre cualquier persona que sirviera a la Administración (**accountability**, o rendición de cuentas en general, e **impeachment**, encaminado a un juicio de responsabilidad). En la Constitución federal, se exigía al Presidente juramento o promesa y era elegido por cuatro años (art. II, secc. 1), resultando los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado seleccionados por otros dos y cuatro, respectivamente (Art. I, sec. 2 y 3). Por añadidura, a ningún senador ni representante se le nombraría, para el período de su mandato, a fin de que ocupara empleo alguno que dependiese de los Estados Unidos, y ninguna persona que tuviese esta tarea podría formar parte de las cámaras mientras continuase en funciones (art. I, sec. 6); impidiéndose al

Presidente recibir otra remuneración por parte de la nación o de sus Estados distinta de la que le pudiera corresponder como tal (art. II, sec. 1). El *impeachment*, o juicio por responsabilidad, del Presidente y altos funcionarios nombrados por él, aparece en las secciones 2 y 3 del artículo I.

d) **presencia de separación de poderes.** En distintos planos, que paso a indicar.

La importancia del **principal magistrado del ejecutivo**, cuya denominación se consolidaría definitivamente como la de “gobernador”, tardaría en anclarse, pero gradualmente los distintos estados incorporan la figura de un jefe del ejecutivo con poderes robustos, haciéndolo virar, asimismo, hacia la legitimidad popular más o menos directa. Cuando se elabora el texto constitucional de 1787, el gobernador es ya una figura importantísima en doce de los trece estados; sólo Pensilvania ha conseguido evitar esta situación, instituyendo un gobierno colegiado.

El **legislativo** tiende a configurarse sobre dos cámaras con potestades autorgonzativas importantísimas, una más amplia, o “baja”, de representación poblacional, y otra “alta”, de carácter reducido. La primera intentaba guardar un criterio proporcional, según población total del estado. La segunda, en cambio, utilizaba uno sólo o varios de los siguientes criterios, a saber: equiparar la representación de condados u otras demarcaciones, dándolas el mismo peso, establecer mandatos más amplios que en la cámara baja (utilizando, incluso, la renovación rotatoria en porciones), o, en tercer lugar, exigiendo cualificaciones económicas más altas que en aquélla para los sufragios activo o/y pasivo. Se trataba de plasmar el presupuesto *reparto desigual de la virtud*, de la reflexión y sabiduría necesarias para tomar decisiones políticas adecuadas a la comunidad. El problema era el de encontrar el parámetro o indicador que la pudiera señalar. Algo que, en una época y rincón del mundo en los que no tenían importancia los títulos nobiliarios y la tierra era abundante, resultaba muy difícil, porque *no existía consenso* social sobre cómo hacerlo. En este plano, la contradicción entre criterio democrático y separación de poderes conseguirá solventarse aceptando el solapamiento de la problemática territorial norteamericana con el conflicto social latente entre diversos sectores de la población.

El **poder judicial** no estaba propiamente configurado en las Constituciones estatales. Su papel no quedaba claro, porque tampoco lo estaba la división tripartita que ahora utilizamos, siquiera entre los autores más leídos por los colonos, como Locke o Montesquieu. La disparidad de sistemas para seleccionar jueces resulta llamativa; mientras que en unos casos se combinaba al legislativo y al ejecutivo para su propuesta, nombramiento y cese, en otras intervenían alternativa o conjuntamente las cámaras, el Gobernador o el pueblo. Lo que sí ocurría, sin embargo, es que en

casi todos los supuestos los jueces y magistrados se mantendrían en su cargo salvo mala conducta, una herencia del *Act of Settlement* británico que garantizaba la inamovilidad de los jueces, promoviendo su independencia e imparcialidad. Y que se intentaba establecer órganos de jurisdicción que no coincidieran exactamente con los que asumían los poderes legislativo y ejecutivo.

El establecimiento de una separación de poderes en la que se consolidara el bicameralismo y desapareciera la hegemonía del legislativo, se instalará de forma definitiva con la Constitución federal de 1787, insertando un enérgico ejecutivo presidencial y un poder judicial propiamente dicho, cercanos todos a Montesquieu, pero raigambre estamental alguna.

e) **las Declaraciones de Derechos.** La Constitución de Virginia de junio de 1776 vino a incluir en su encabezamiento una Declaración de Derechos o *Bill of Rights*. Su antecedente estaba en la Gloriosa de 1688, pero retenía la influencia aún más directa de las *Resolutions* del *Stamp Congress* de 1765. El modelo era novedoso en el sentido de que recogía, en un solo documento, tanto una serie de derechos que hoy calificaríamos de “fundamentales”, como, a continuación, los apartados o artículos referentes a la organización político-institucional. Esta fórmula bicéfala fue adoptada por varias de las Constituciones que vinieron después de la virginiana, como las de Maryland, Pensilvania, Carolina del Norte, Vermont y Massachusetts. Pero es que, en todo caso, las otras Constituciones estatales que no dispusieron de un *Bill of Rights* en su cabecera, como New Hampshire, Carolina del Sur, New Jersey, Delaware, Georgia y New York, o la propia federal de 1787, sin embargo *también* contuvieron una serie de derechos que entendían debían ser respetados por el poder político, aunque no los incluyeran en una parte específica (aumentados en el último supuesto con las Enmiendas de 1791). Lo único que sucedía es que aquéllas habían sentido la necesidad de darlos una presencia más clara, hacer hincapié en su relevancia, dedicarles una posición eminente. Algunos autores contemporáneos, como Edmund Burke, podían entender que provenían de una tradición histórica insoslayable, pero como los colonos ya habían percibido que su vulneración se producía demasiado a menudo, muchos estados norteamericanos optaban ahora por reflejarlos en el frontispicio de su sistema de autogobierno. En realidad, muchas de tales libertades *no habían existido en aquella herencia, respondían a una configuración reciente*. O bien tenían un contenido distinto, se habían transformado. La apertura hacia los derechos del sistema político norteamericano fue, pues, novedosa y arrojada, sin precedentes en la historia anterior. Emergía con fuerza a partir del desarrollo de una auténtica “lengua de los derechos” que a veces, incluso, iba a oponerse a poderes legitimados

de manera democrática, a mostrarse como herramienta de combate político intenso. El *Bill of Rights* de 1688 había sido proclamado por un Parlamento a fin de poner límites a la actuación de la Corona. Pero que ahora sirviera para limitar a *todos los poderes instituidos*, sin excepción, era algo cuyo único antecedente sólo puede ser encontrado en los *Agreements* de mediados del siglo XVII. También iban dirigidos a la comunidad dirigida a autogobernarse, pero no a monarca alguno, ya fuera como petición, exigencia o recital de agravios. Venían a proteger una serie de situaciones que los americanos veían como *valiosas, moralmente defendibles*. Legitimidad democrática, libertades individuales, e incluso progreso educativo y virtud cívica, iban de la mano en aquellas Constituciones como un todo difícil de escindir.

f) en gran parte de las Constituciones se observa que existe cierta **rigidez** que las distingue de otras normas, con el fin de afirmar su **superioridad** sobre ellas; permanecería “firme e inviolable”, “no debería ser alterada, modificada o abolida” sino por el legislativo y en la forma que una **Convención** previera, no podría ser violada su Declaración de Derechos o varios de sus artículos, o se exigían mayorías reforzadas para cambiarla. Se advierten los intentos por procurar su permanencia, de manera que existieran en forma estable unas reglas del juego político. En consonancia con esta premisa, la intención reside aquí en frenar cualquier contienda entre facciones que de al traste con la supervivencia de la comunidad, o bien que conduzca a la hegemonía despótica de una de ellas. Para retornar a la legitimidad popular en lo relativo a esta pretensión, fue creada la técnica de la “convención” popular, que ya había sido instada por el Congreso Continental en 1776¹⁸³². Se trataba de la reunión para deliberar de cierto grupo de personas elegidas *con el único fin* de aprobar una Constitución. Inmediatamente después, quedaban emanados de tal acto decisorio diversas instituciones, que bien podían ser un legislativo bicameral y un ejecutivo. Esta técnica fue asumida por Massachusetts en 1780, no sólo para engendrar el documento constitucional correspondiente a este territorio, sino también para conformar su sistema de reforma. El texto federal de 1787 acogió idéntica fórmula. Y su rigidez constitucional era obvia, desde el momento en que se recogía un proceso de enmiendas que exigía mayorías amplias: en el artículo V del documento se prevía un sistema de reforma consistente en que “siempre que las dos terceras partes de ambas cámaras” lo juzgasen necesario, el Congreso propondría “enmiendas”, o bien en que “a solicitud de las legislaturas de los dos tercios de los distintos Estados”, mandaría reunirse “una convención con el objeto “ de proponer los cambios. Las enmiendas

¹⁸³² *Supra*, 325

formarían parte de la Constitución a todos los efectos, siempre que hubieran “sido ratificadas por las legislaturas de las tres cuartas partes de los Estados separadamente”, en el primer supuesto, “o por medio de convenciones reunidas en tres cuartos de los mismos”, en el segundo.

Decimosegunda: Los federalistas defienden la Constitución de 1787, a fin de conseguir trabajar sobre ella para conseguir un gobierno nacional fuerte. A tal efecto intentan reforzar el rasgo de su supremacía, legitimada a través del modelo de la convención constituyente en la que podía expresarse la soberanía popular, y frenar mediante los procesos de reforma rígidos de la Carta la inestabilidad a que aquélla pudiera dar origen. Su mayor preocupación era impedir el avance de fuerzas centrífugas, lideradas por los antifederalistas, para lo cual realizan una interpretación del documento que obtiene el refrendo mayoritario de los distintos Estados.

El proceso de ratificación de la Carta de 1787 fue escenario para un combate entre partidarios de la nueva Constitución federal (los “federalistas”) y quienes la rechazaban (“antifederalistas”). Tanto unos como otros eran herederos del legado ideológico constitucional británico. Pero mientras que los segundos permanecían anclados en el canon *whig*, los primeros innovaron en torno a ciertos principios de filosofía política, augurando un sistema distinto a todos los anteriores y logrando el apoyo mayoritario de los estadounidenses. Alexander Hamilton, James Madison y John Jay publicarían bajo el seudónimo de *Publius* setenta y siete artículos, de octubre de 1787 a mayo de 1788. El federalismo fue una tendencia política que pretendía erigir un gobierno fuerte y transversal a los Estados, de forma que llegase a actuar de forma directa sobre los ciudadanos. Para ello, y no sin gran esfuerzo y sutilidad, debía combinar elementos de la tradición, que los colonos habían asumido, con nuevas nociones que permitieran avanzar al unísono a todos los Estados, garantizando al tiempo la seguridad de los ciudadanos sin perjudicar el ejercicio de sus libertades. Los fundadores de la república norteamericana eran conscientes de crear un modelo nuevo. Las ideas básicas de los *Federalist Papers* giraban en torno a los siguientes ejes:

a) **la supremacía constitucional.** La primera intención de los constituyentes, apoyada por los federalistas con ahínco, fue la de conseguir un marco normativo que permitiera frenar los problemas y la crisis que vivían los estadounidenses en ese momento. Para ello, quisieron imitar un resorte que ya existía en el ámbito estatal, y que les era muy

querido, el de la constitución como *frame of government*. Su legitimidad era popular, tal y como indicaba el preámbulo del texto. El pueblo era quien se autoimponía aquella norma suprema, entendiendo como tal a “la gran masa del pueblo”, no “una parte inapreciable”, ni “una clase privilegiada” de la comunidad o “república” (*El Federalista* nº 39). Su prioridades eran las de obstaculizar aquellas fuerzas centrífugas que amenazaban con destruir el desarrollo económico, y, la defensa frente a enemigos exteriores, así como el refuerzo de administración central creada a tales efectos y dirigida por un jefe del ejecutivo con relevantes poderes. El texto elaborado por la Convención era el último fundamento *normativo* de la comunidad (artículo IV).

b) la **convención constituyente**. Esa norma suprema va a resultar ratificada por delegados *expresamente* nombrados para ello por el *pueblo* (*El Federalista* nº 39). Con este apoyo en la legitimidad popular se justifican parámetros de *rigidez* que impidan modificar la Constitución fácilmente, persiguiéndose la estabilidad del modelo (*El Federalista* nº 43). Ya no se trataba, pues, sólo de reconocer una supremacía a la norma superior, sino también de ponerla a salvo de reformas más o menos frecuentes, ubicando así la primera piedra para un posterior control de constitucionalidad de las leyes, y asumiendo el mecanismo de las enmiendas. Se produce así una escisión que distingue dos dimensiones del pueblo como sujeto político. Una es la que lo muestra en *potencia*, como sujeto titular de un derecho constituyente. La otra es la referida a su actuación, cuando afirma su *presencia*, a través del ejercicio de aquella facultad. La Constitución entiende que el pueblo se *manifiesta* en el momento en que hay, si no un consentimiento unánime, que sería lo exigido por la teoría del pacto lockeana, sí al menos una mayoría muy reforzada que quiera modificar el texto fundamental. Esta argumentación es contestada por los antifederalistas (oposición al veto *de facto* originado por una minoría de bloqueo), e incluso por Jefferson (rechazo de que una generación tenga derecho a vincular a otra).

c) la **separación de poderes**. Los constituyentes se basaron en la separación de poderes ya asumida idealmente en las Constituciones estatales, pero inclinada hacia el modelo de Montesquieu. Los federalistas la defienden, pero bajo un esquema en el cual los tres poderes se entrelazan, *interviniendo unos en el ámbito de los otros*, de acuerdo con un sistema de “controles y contrapesos” (*checks and balances*). La “ambición” debía “contrarrestar la ambición”, de manera que se pudiera “suplir, por medio de intereses rivales y opuestos, la ausencia de móviles mas altos”, de acuerdo con “todo el sistema de los asuntos humanos, tanto privados como públicos”. Este reparto de facultades fue criticado por los antifederalistas, que pensaron que así no se

estaba respetando la configuración propia del *Espíritu de la Leyes*. En realidad, el objetivo de los *Federalist Papers* fue frenar al “departamento” legislativo que había vulnerado la seguridad jurídica demasiado a menudo en los ámbitos estatales, así como a las entidades territoriales en la medida en que impidieran constituir un frente común frente a las amenazas interiores y exteriores, u obstaculizaran el consiguiente refuerzo de la defensa estadounidense, una política fiscal y comercial común y la centralización financiera.

En cuanto a esta separación de poderes, resulta que, aunque el principio orientativo para nombrar a los principales magistrados de dichos departamentos fuese el de la legitimidad popular, no parecía conveniente aplicarlo en todo su rigor con el departamento judicial, y que aquí lo relevante para la imparcialidad en sus tarea se suponía era la permanencia en el cargo salvo mal comportamiento (*El Federalista* nº 51 y nº 78). Los jueces y magistrados, pues, componen la rama menos dañina, capaz de surgir como dirimente imparcial entre las otras dos, y, sobre todo, de proteger los derechos de los norteamericanos, siempre y cuando se mantuviera *independiente*. De hecho, los tribunales debían “declarar nulos todos los actos contrarios al sentido evidente de la Constitución”, lo cual encajaba a la perfección en un esquema político en que el que la norma suprema era redactada por una Convención Constituyente popular (*El Federalista* nº 78). Así se cierra el círculo que une legitimidad popular e imperio de la ley, entendido éste como baluarte de la seguridad jurídica y de un conjunto de derechos y libertades. La *judicial review* está a punto de nacer. Algo que ya avizoraban los *antifederalistas*, quienes rechazaban esta posibilidad, porque atentaba contra la separación de poderes, y por el motivo de que la judicatura tendría la última palabra en todos los asuntos y extendería sus facultades más allá de lo previsto, a causa de su inamovilidad.

d) la república extensa (“ampliación de la órbita”) y la representación, remedios contra las facciones. Junto a la separación de poderes de especialización funcional, los federalistas utilizan, asimismo, otro tipo de división del poder, esta vez relacionada con la *facción*, entendida ésta como grupo de personas que, sin tener en cuenta la totalidad del bien común, y siguiendo sólo sus pasiones o intereses, aspiran al dominio político de la comunidad. El concepto de facción era de raigambre sociológica y procedía de la Antigüedad, refiriéndose a la lucha por hegemonía entre un sector popular y otro aristocrático, o, en todo caso, entre grupos de este último. En cambio, la sociedad que sirve de contexto a los federalistas ya contempla un mayor número de criterios que pueden dividir a los miembros de una comunidad: crematísticos, religiosos, locales, y de carácter profesional o laboral. Resulta que “en una república

no es sólo de gran importancia asegurar a la sociedad contra la opresión de sus gobernantes, sino proteger a una *parte* de la sociedad contra las injusticias de la otra parte” (*El Federalista* nº 51). Los “estados”, “órdenes” o estamentos, propios de un sistema en el que la economía de mercado aún pugnaba por hacerse con el papel principal en las relaciones sociales, dan paso ahora a una auténtica sociedad de clases moderna, caracterizada por la igualdad ante la ley, pero al mismo tiempo, por una división engendrada a partir de la propiedad, fuente principal de privilegios y discriminaciones en el mercado. Para Madison y sus afines no resulta negativa la diversidad de opiniones e intereses (a diferencia de los antiguos y a semejanza de Maquiavelo), sino que se trata de un producto de esa sociedad, un hecho *sociológico* que debe asumirse en el plano *político*. Así se manifiesta *El Federalista* nº 10, que señala, por añadidura, que, existiendo facciones tanto minoritarias como mayoritarias, y resultando la primeras más fáciles de neutralizar, las segundas requieren una precaución mayor, como demuestra un examen histórico más o menos detenido. Este peligro, intenso en la democracia al estilo ateniense, no se va a reproducir en una república representativa como la norteamericana, ya que en ella hay “un número más grande de ciudadanos y una mayor extensión de territorio”. Los antifederalistas, sin embargo, frente a estas construcciones algo más complejas, insisten en concebir la “voluntad del pueblo” como voluntad *mayoritaria*: a mayor grado de aproximación a la realidad social, a los deseos e intereses de *la mayoría*, *mejor* será la representación, más fiel a la realidad. Detrás de esta aseveración hay una preferencia por los distritos electorales pequeños y la representación directa y numerosa. Se trata de la mayoría en un *territorio pequeño*. La representación es un *mal menor*, un mal necesario al que obliga la propia existencia de demarcaciones que superan el ámbito de una población específica, como ocurre en el caso de los Estados, pero un objetivo a cumplir de la manera más exacta posible, es decir, como representación “descriptiva”. Y se expresa a través de la rotación, el impedimento para renovar mandatos y su brevedad, señalados todos en numerosas constituciones estatales. Asimismo, los opuestos a los *Federalist Papers* entienden que si ampliamos el área de representación, ocurrirá que ya no estaremos ante una república libre, pues una acumulación demasiado grande y dispar de intereses va a socavar su propia posibilidad.

Los federalistas asumen justo la posición contraria: el mecanismo representativo ayuda a seleccionar mejor “un grupo escogido de ciudadanos, cuya prudencia puede discernir mejor el verdadero interés de su país”, es decir, defender el interés público y no el de la facción. Permite mayores posibilidades de alcanzar una elección sabia, eludir el interés corrupto localista (*El Federalista* nº 10). Es más, al ampliar la “órbita” quedarán admitidos una gran variedad de “partidos e intereses”, con

lo cual será menos probable que una mayoría aplaste a los demás grupos e individuos (*id.*). La diversificación hace la fuerza, forjada por el conflicto, siempre que se desarrolle en un ámbito suficientemente grande.

No cabe temer la pluralidad, pues, ya que resulta ser principal garantía para la supervivencia de una república. Las pasiones van a someterse a la razón, mediante la astucia de incorporar al sistema republicano diversos mecanismos institucionales y que sirvan para la autorregulación del conflicto perpetuo, una suerte de “mano invisible” política. Una de las dimensiones en donde actúa es la de los controles y contrapesos en medio de la separación de poderes, otra la *representación*, escindiendo al pueblo de sus representantes. Y la tercera, la *ampliación de la órbita que actúa en el seno de la propia sociedad y dentro de su confines, no en su gobierno ni en sus representantes*: la idea es la de que mediante la admisión en la escena política de una multiplicada de intereses y pasiones, de ambiciones y opiniones distintas, *nunca exista una mayoría permanente*. Se trata de una síntesis de la propia experiencia convencional de Filadelfia. A lo largo de los distintos alienamientos allí en discusión y votaciones, ninguno de los Estados permaneció siempre en minoría, de manera que se forjaron sucesivas coaliciones sin una facción predominante de forma clara. La regla de decisión fue la de la mayoría, pero los delegados intentaron siempre que ésta fuera una de tipo reforzado, con amplio consenso.

e) El modelo federal. Los antifederalistas perciben al nuevo gobierno como una amenaza a la supremacía constitucional, porque la Carta pretende despojar al pueblo de su poder, al no resultar las instituciones contempladas en ella una representación auténtica de su voluntad. No es exactamente la separación de poderes, que de todas formas se somete a crítica, el impedimento para apoyar aquí la Constitución, sino la concentración de facultades en una cúspide nacional *incontrolada*. Y es que ya el hecho de pretender configurar un gobierno en un ámbito tan extenso, supone una acumulación de poder irrefrenable. Este vértice hace tambalearse, incluso, los propios derechos de los estadounidenses.

Los federalistas van a oponer, sin embargo, una solución de compromiso que permita el autogobierno de los Estados, haciéndolo encajar con el de carácter nacional que se pretende erigir. Su propuesta es la de un modelo federal, que intenta “mantener el *equilibrio* constitucional entre el gobierno general y los Estados” (*El Federalista* nº 33). Para ello, y en primer término, dejan claro que (*El Federalista* nº 46) “la autoridad final, sea cual fuere la autoridad delegada, reside sólo en el pueblo” (americano, continental). Es más, el mecanismo previsto para la ratificación de la Constitución va a ser puesto en marcha Estado por Estado, de forma separada, con lo

cual se respeta la entidad propia de cada uno de ellos. Este sistema federal “*no será resultado ni de la decisión de una mayoría del pueblo de la Unión, ni tampoco de una mayoría de los Estados*”. Prevé que los Estados que quieran se unan a él, a través de la decisión de sus ciudadanos. “*En este aspecto, por consiguiente, la nueva Constitución será una Constitución federal y no una constitución nacional, en el caso de que se establezca*” (*El Federalista* nº 39). Pero Madison viene a expresar que el pueblo es *único*, obedeciendo a cierta concepción monista (como cuando habla del “pueblo de América” representado en la Cámara de Representantes, *id.*). No existen varios “pueblos” en el territorio de la Unión. Sí hay varios “Estados”, por contra. El término “nación” es obviado, tanto para definir la unidad política estadounidense como para aplicarlo a cada uno de los territorios. El país resulta demasiado joven para apelar a este concepto que alude a un origen desconocido e inmemorial, tal y como ocurre en Europa, y queda aún más debilitado si se asume la teoría contractualista. En su lugar *Publius* se refiere al “pueblo”, intentando burlar así los recelos de sus adversarios. Un pueblo que es, recuérdese, soberano. Pero lo es en medio de las divisiones expuestas, diacrónicas y sincrónicas, en la dimensión puramente social y en otra política construida con la nueva Constitución. Es el único monismo que aceptan, y matizadamente, Madison y los suyos, poco proclives a la teorización abstracta de un Rousseau, por poner un ejemplo recurrente, y más bien amigos de utilizar modelos e instituciones que se adaptaran a una realidad inmediata. La coherencia del *Federalista* alcanza hasta donde puede, porque fue una labor de urgencia, no lo olvidemos, pero sumamente efectiva y, desde luego, que penetró en la teoría política moderna.

f) **el papel de la virtud.** En *El Federalista* no aparecen demasiadas menciones a la virtud, algo que diferencia a estos artículos de la habitual prosa republicana que ya se ha estudiado. Esto no significa que no fuera un tema de cierta preocupación para sus autores. Lo que ocurre es que no se encontraban inmersos en comunidades del mismo tipo que las de Milton, Harrington, y no digamos Maquiavelo o Salustio. Por el contrario, viven en una sociedad con expansión comercial creciente, con un *ethos* muy diferente al de las antiguas repúblicas belicistas, que basaban su “gloria” y riqueza en la contienda permanente con los vecinos, y cuyo ejemplo típico era el de Roma. Los artículos federalistas gustan de comentar temas relacionados con las finanzas o la regulación de los mercados. La épica va siendo sustituida por la economía, siguiendo aquí también a Montesquieu. Pero, insisto, sin perder el rastro de la virtud, y ya que el gobierno republicano presupone su existencia en “mayor proporción que cualquier otro”, pues de lo contrario, los hombres sólo podrían ser gobernados por déspotas (*El Federalista* nº 50). Por tanto, no es que deje de existir la virtud en una sociedad

moderna, sino que se hace necesaria, por contra, cierta cantidad de ella, y mas aún en el caso de los dirigentes políticos, aunque resulte que es escasa. Y como los federalistas aceptan el gobierno popular, se tratará de que los *muchos* seleccionen a *los pocos*. De hecho, el propio sistema de elección nos aproxima a escoger una aristocracia de virtud y sabiduría. Hay una “economía de la virtud”, existe una “cantidad” concreta de virtud, es decir, de capacidad específica para conseguir sostener los intereses generales, mediante deliberación, reflexión, entre un número escaso de ciudadanos, que serán quienes disponen de ella.

Decimotercera: Las Enmiendas fueron una cesión de los federalistas para evitar que el frente antifederalista fuera demasiado poderoso e hiciera peligrar el mantenimiento de la Constitución de 1787. Sin embargo, unos y otros compartían la “lengua de los derechos”, con lo cual la inserción se realizó en un breve período y sin excesivas dificultades.

La discusión entre antifederalistas y defensores de la Constitución se sostuvo sobre diversos asuntos, si bien el punto de partida para este enfrentamiento fue el reparto de poder entre los Estados y el gobierno de la Unión. El caballo de batalla antifederalista que permaneció en pie de manera más poderosa fue el de que no había Declaración de Derechos alguna en la Constitución federal, al modo de ciertas constituciones estatales. Los federalistas replicaron que las Declaraciones eran de origen medieval, pactos entre los reyes y sus súbditos y que carecían de sentido en un régimen político legitimado popularmente. E incluso que, además de innecesarias, podrían imponer que todas las libertades no incluidas en ellas fueran inexistentes. Esto último era inaceptable para una época en la que, como se ha señalado, los derechos se encontraban en expansión. Pero, pese a estos argumentos contrarios, los antifederalistas advirtieron intuitivamente que si se aludía a cierta tradición política para justificar el evento constitucional, debía acogerse el legado *de manera completa*. No parecía legítimo recoger los mecanismos institucionales republicanos sin acompañarlos de la idea contractualista que giraba en torno a unos derechos previos al ordenamiento. Y, como habían señalado los antifederalistas, ¿por qué reconocer sólo ciertos derechos, bien que fuera insertos en el *frame of government* nacional, y no como *Bill of Rights* separado, y no otros que se estimaban también muy importantes? *Federal Farmer*, *Brutus* y los demás afines parecen percatarse de que la estructura que se está forjando puede acabar con las libertades tan queridas por los norteamericanos. Otros, como el propio Madison, no se hallaban tan inquietos por esta perspectiva. Les daba más miedo la contraria, una anarquía que luego diera paso al

despotismo, según la tradicional teoría polibiana y aristotélica de las formas de gobierno. En medio se hallaban todos aquellos que, sin oponerse al proyecto constitucional, mostraban claras reticencias, debido a que no incluía una carta de derechos propiamente dicha, y entre los que destacaba Jefferson. Los federalistas, tras dominar en las cinco primeras convenciones ratificadoras, se encontraron en minoría en la sexta, la de Massachusetts, el segundo Estado más grande de la Unión, con lo que no obtenían el respaldo suficiente para su objetivo. Así que tuvieron que atraerse el apoyo necesario, aprobando una recomendación adjunta que previera que los representantes en el futuro primer Congreso defendieran la inclusión de varias enmiendas. Lo mismo ocurrió en los siguientes Estados que pasaron a confirmar el texto constitucional. La citada asamblea de la Unión se reuniría en marzo de 1789. Tras un proceso largo que culminaría el 15 de diciembre de ese año, quedaron ratificadas las correspondientes Enmiendas. Así se compondría esa suerte de *Bill of Rights* nacional por el que tanto se había discutido. Y lo cierto es que, pese a las críticas que pudieran haberse hecho contra él, los sucesivos reajustes en la práctica constitucional norteamericana han demostrado que nunca resultó superfluo y que a partir de los años sesenta tuvo una apertura democratizadora y *pro libertate*. Pese a que los federalistas habían hecho hincapie en que para conservar las libertades lo importante eran sólo unos mecanismos institucionales insertos en la Constitución.

Decimocuarta: La jurisdicción constitucional no estaba prevista en todas sus consecuencias y nació de manera principal para hacer frente a fuerzas centrífugas que pudieran aniquilar la incipiente unión política nacional; tan sólo después, y mediante una evolución posterior, vino a conformarse como máxima expresión de la vieja y tradicional noción del imperio de la ley.

Vistos los principales escollos de la Constitución federal en las conclusiones anteriores, debe indicarse que el asunto del poder judicial suscitaba aún escaso interés, sin desatar algunos conflictos que acaecerían más tarde, y, desde luego, *sin configuración alguna de una jurisdicción constitucional en sentido estricto*.

La supremacía constitucional que inspiró a los constituyentes de la Convención reunida en 1787 implicaba la búsqueda de algún mecanismo que pudiera protegerla. Como antecedente para esta operación sólo se contaba con el Consejo de Censores de Pensilvania y el Consejo de Revisión de New York. Una primera propuesta vino de la mano del Plan Virginia y luego otra, del de New Jersey, pero fracasaron, así como el proyecto de Consejo de Revisión de James Madison. Lo que subyacía a todos los sistemas de control era conseguir cierta unificación nacional que impidiera a posibles

fuerzas centrífugas desmembrar la Unión. Quedaba en pie la posibilidad de que los jueces ejercieran algún tipo de vigilancia para hacer respetar la Constitución federal, contemplada en la Carta y que sólo sucho más tarde se traduciría como *judicial review*, de contenido más ambicioso. Se trataba de un mecanismo nunca ensayado antes y rodeado de incógnitas en cuanto a su desenvolvimiento, si bien parecía claro que implicaba aspiraciones de un mayor grado de centralización federal. De hecho fue una solución de compromiso entre los distintos territorios a tal fin. Unos y otros delegados no se habían puesto de acuerdo para insituir alguna figura más o menos cercana al Consejo de Revisión o, incluso al Consejo de Censores pensilvano, con lo cual, sin haberse solucionado todas las tensiones interterritoriales y pretendiendo construir un nuevo modelo federal, la única solución de compromiso era relegar el arbitraje de aquéllas a los jueces, bajo la cobertura que ofrecía cierta tradición que había existido en el Derecho inglés y que tenía su remoto origen en Coke y el *common law*. Sin embargo, esa judicatura era en realidad aún muy débil en relación con los otros poderes, como se aprecia en el propio caso que se considera inaugurador de la *judicial review*, el *Marbury v. Madison*. Antes de este supuesto, que establecía la inconstitucionalidad de una ley federal, parece que hubo algunos otros, entre 1776 y 1787, en los cuales en los cuales se señalaron contravenciones, pero sólo de leyes estatales en relación con Constituciones de la misma índole. Desde luego, tal mecanismo tan sólo puede entenderse, siempre y cuando consideremos que no existía un diseño constitucional como el hoy existente en países con jurisdicción constitucional. Los norteamericanos tan sólo disponían de constituciones que pugnaban por convertirse en normas supremas, pero en medio de una pluralidad de fuentes (costumbre, *common law*, tratados internacionales, leyes codificadas o no y sobre muy diversas materias, etc), aún de difícil jerarquización. Esta situación revertía políticamente una y otra vez, y de manera insoluble, al conflicto entre los Estados y el gobierno de la Unión. Precisamente el asunto cuya solución se empezó a perseguir a través de la intervención judicial.

Con la Constitución federal y la pretensión política unificadora que favorecía, se abrían nuevas posibilidades. Una cosa era buscar un *acomodo* de la ley a la Carta y otra *declararla nula* cuando la contradijera. En realidad, el poder de control judicial iba a seguir una línea de evolución paralela al *legicentrismo* que ya estaba emergiendo en los Estados Unidos. La ley ganaba una relevancia antes nunca vista, hasta el punto de que los legislativos estatales eran percibidos, y con un grado de consenso que iba más allá de los federalistas, como un poder que se había vuelto peligroso y usurpador de las atribuciones correspondientes a los demás departamentos. Había traspasado esos límites que fijaba el reparto de poderes atribuido a la tradición inglesa, mostrando

tendencias contrarias a la seguridad jurídica. Frente a tales arbitrariedades, es cierto que podía alzarse el ejecutivo, con su poder de veto suspensivo. Pero, como bien había demostrado el ejemplo colonial de los gobernadores, este otro departamento no resultaba fiable del todo, y, desde luego, no podía mantener una *imparcialidad* propiamente dicha, es decir, y en sentido republicano, *al margen de los partidos*. Era necesario acudir al *poder más débil*, el judicial (la rama menos peligrosa), que había rendido buenos frutos en la experiencia inglesa, siempre que se conservara su característica de inamovilidad, la “tenencia permanente” de sus cargos, que implicaba su independencia.

La intención de los federalistas, en este punto, resulta clara: los jueces deberán “*declarar nulos* todos los actos contrarios al *sentido evidente* de la Constitución” (*El Federalista* nº 38). Sus textos defienden una interpretación que no sea sólo de acomodo, sino que sostenga la supremacía constitucional sin paliativos, bajo principio de precedencia jerárquica. El problema es que esta fórmula resulta más enérgica que la expuesta por la Carta, donde se decía tan sólo que “los *jueces de cada Estado* estarán obligados” a observar la “Constitución”, las “leyes” de los Estados Unidos y los “tratados” que suscribieran (art. VI). De este precepto *no se desprende una papel relevante del Tribunal Supremo y la judicatura federal*, pues el control se queda en los magistrados *estatales*. Tal extremo no arredrará a Hamilton, quien afirmará que tal consecuencia se desprende de “la teoría general de una Constitución limitada” (*El Federalista* nº 81). Así, pues, los federalistas apoyan una interpretación extensiva de los poderes de la judicatura federal, a fin de controlar a los Estados. Y, faltándoles el sostén legal oportuno, sus partidarios lo buscan en la *Judiciary Act*, aprobada por el Congreso el 24 de septiembre de 1789 (un poco después de las primeras Enmiendas). Incidentes como el originado por la sentencia *Chisholm v. Georgia* (dictada a principios de 1793 por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y con la que se permitía a un ciudadano de un Estado o súbdito extranjero acudir a los tribunales federales en sus acciones contra otro Estado, interpretando en toda su amplitud el Artículo III de la Constitución federal) o la sentencia *Ware v. Hylton* (1796, que anulaba una ley de Virginia basándose en que era contraria a un tratado internacional firmado por los Estados Unidos), demuestran que los primeros pasos para una construcción de la *judicial review* por el Tribunal Supremo estuvieron dirigidos *contra las leyes estatales, no contra las del Congreso nacional*.

El primer caso claro de control de constitucionalidad de una ley en los Estados Unidos se produjo con la sentencia del Tribunal Supremo “Marbury contra Madison”, redactada en realidad por su Presidente, John Marshall. El argumento básico que utilizó la resolución judicial fue el que ya había empleado Hamilton en *El Federalista* nº

78, pero aquí Marshall convierte un argumento elaborado bajo la ponderación de las ventajas sobre los inconvenientes de índole política, en otro rotundo acerca de lo que era acorde a Derecho. William Marbury había sido nombrado por el presidente John Adams (afín al federalismo) como juez de para el Distrito de Columbia. Aunque tal designación resultó formalizada, no dio tiempo a enviarla. El Secretario de Estado del gobierno jeffersoniano entrante, James Madison, fue requerido para que la remitiera. Pero al no hacerlo, Marbury se dirigió al Tribunal Supremo, solicitándole la emisión de un *writ of mandamus* que conminara al Secretario de Estado a enviar su designación. El Tribunal entonces optó por dictar una sentencia que: 1) afirmaba que el demandante tenía derecho al nombramiento paralizado, 2) que cuando la ley establecía un deber específico y existían derechos individuales que dependían del cumplimiento de ese deber, estaba igualmente claro que el ciudadano que se considerara perjudicado tenía el derecho de apelar a las leyes de su país en busca de una reparación, y 3) que tal remedio podía ser el mandato solicitado aquí, pero que 4) aunque la ley que establecía los tribunales de los Estados Unidos habilitaba a la Corte Suprema para dirigir mandamientos, en los casos en que procediera de acuerdo con los principios y costumbres del Derecho, a cualquier tribunal nombrado o a personas que ocupasen un cargo bajo la autoridad de los Estados Unidos, tal precepto era inconstitucional, pues la Carta no contemplaba *expresamente* la posibilidad de que se atribuyera la competencia incluida en la Sección 13 de la *Judiciary Act*, que permitiría remitir aquel *writ of mandamus* al Secretario de Estado Madison. La Constitución no ha habilitado *expresamente* a las cámaras para aprobar una norma de esta índole, por lo cual el precepto señalado *va contra ella*. Y en consecuencia, resulta ser *nula*. Así que, en realidad, y aunque la sentencia del caso *no ordenaba* la remisión del nombramiento de Marbury, establecía el *derecho* de tal persona a obtener su comisión, así como la *nulidad* de una ley específica aprobada por el Congreso.

Pero, ¿por qué reunir todos estos elementos, el último de enorme relieve, en una sola decisión?. Se han buscado las razones en el contexto político que rodeaba al caso.

Marbury vs. Madison nació inmediatamente tras la lucha por la Presidencia de las elecciones de 1800, proceso electoral en el que los llamados “federalistas” fueron derrotados por los “republicanos”. Estos dos partidos surgían de una división en el Congreso que no era correlativa a la de los “federalistas” y “antifederalistas” existente antes. En realidad, se correspondía con una nueva agrupación de fuerzas, que aun siendo heredera de los debates políticos previos, no reproducía idénticas alineaciones. Durante la primera presidencia, el Tesorero Alexander Hamilton se propuso fortalecer el gobierno federal, primeramente con un programa para sentar las bases del crédito

público basado en el sistema financiero británico (1790) y que consiguió poner en marcha, y luego instando la creación de un Banco de los Estados Unidos (enero de 1791). En su política, sobre todo al raíz del segundo paso mencionado, Hamilton chocaría con numerosos opositores, resurgiendo la vieja lucha entre centralización y corrientes centrífugas, pero ahora con una nueva correlación de fuerzas en la que Madison iría de la mano con viejos antifederalistas como Richard Henry Lee. El enfrentamiento culminante se produciría con la aprobación por los federalistas de la *Sedition Act* (1798), que con el pretexto de proteger a los cargos públicos de los libelos, pasó a actuar como herramienta de sus defensores para perpetuarse en el poder. Los jueces de simpatía federalista neutralizaron los ataques a la ley, pero los republicanos, habiendo hecho una intensa campaña contra ella, obtuvieron una clara victoria electoral.

Antes de abandonar el poder, los federalistas emprendieron reformas que modificaran el poder judicial federal, primero con la Ley Judicial (*Judiciary Act*) de 1801, que expandía su jurisdicción, y segundo, con el nombramiento de jueces afines. En diciembre de 1801, conformado el nuevo Congreso y ya con mayoría republicana, ésta mostró sus intenciones de invertir las modificaciones federalistas en la planta judicial. En ese mes se presenta el caso *Marbury* ante el Tribunal Supremo y pronto se origina una situación en la que los federalistas apoyan la supremacía judicial en la interpretación de la Constitución, exponiendo que no se podía cesar a los jueces ya nombrados en virtud de la norma que se pretendía derogar, ya que tenían la condición de inamovibles prevista en la Constitución. Había, pues, una opción estratégica entre facciones en juego que explicaría el posterior fallo de *Marbury vs. Madison*.

Sin embargo, esta explicación contextualizada del fallo *Marbury vs. Madison* no debe obviar que con él no sólo se declaraba inconstitucional determinada ley, sino que también se hacía una interpretación sobre la separación de poderes plasmada en 1787 y, asimismo, *se reconocía el derecho adquirido de una persona concreta, frente a actuaciones de cualquiera de los poderes que quisiera vulnerarlo*. Aspectos todos ellos que dotan de su característica singularidad a *Marbury*. Al margen de que la lucha partidista del momento contribuyera también a que el poder judicial se erigiera como árbitro en ciertas situaciones en las que el conflicto entre *facciones* políticas era demasiado intenso. Lo importante es que la república, cumpliendo el sueño de Maquiavelo, había respondido al desafío con éxito, armado con la herencia del viejo gobierno mixto y del imperio de la ley. Había sometido las ambiciones políticas al Derecho, bajo la “constitución”.

Bibliografía

- Abellán, Joaquín: "Sobre el concepto de república en las décadas finales del siglo XVIII", *Revista de Occidente*, n. 242, Madrid, Fundación Ortega y Gasset, dic. 2001, pp. 107-19.
- Acosta, José: *Formación de la Constitución y jurisdicción constitucional. Fundamentos de la Democracia Constitucional*, Madrid, Tecnos, 1998.
- Adams, John: *The Revolutionary Writings of John Adams*, Thompson, C. Bradley (ed.) Indianapolis, Liberty Fund, 2000. <<http://oll.libertyfund.org/title/592/76840>>.
- Adams, Willi Paul (ed.): *Die Vereinigten Staaten von Amerika*, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 1977; trad. cast. de Máximo Cajal y Pedro Gálvez, por donde se cita, *Los Estados Unidos de América*, Siglo XXI, Madrid, 1979.
- Adams, Willi Paul: *Republikanische Verfassung und burgerliche Freiheit*, Neuwied, Hermann Luchterhand Verlag, 1973; trad. al inglés de Rita y Robert Kimber, por donde se cita, *The First American Constitutions*, Lanham, Rowman & Littlefield, 2001.
- Águila, Rafael del, et al.: *La Democracia en sus textos*, Madrid, Alianza, 1998.
- Ahumada, Marian: "Marbury versus Madison, doscientos años (y más) después", *Fundamentos*, n. 4, Oviedo, Junta General del Principado de Asturias y Universidad de Oviedo, 2006, pp. 109-49. <<http://web.uniovi.es/constitucional/fundamentos/cuarto/index.html>>
- Ahumada, Marian: *La jurisdicción constitucional en Europa*, Cizur Menor, Thomson Civitas, 2005.
- Albert, Peter J., y Hoffman, Ronald: *The Bill of Rights. Government Proscribed*, Charlottesville, Virginia University Press, 1997.
- Alejandro, Juan Antonio: *La justicia Popular en España. Análisis de una experiencia histórica: los tribunales de jurados*, Madrid, Universidad Complutense, 1981.
- Alembert, Jean Le Rond D', y Diderot, Denis: *Artículos políticos de la Enciclopedia*, Porras, Antonio, y Soriano, Ramón (eds.), Madrid, Tecnos, 1986.
- Allen, Carleton Kemp: *Law in the Making*, 7ª ed. (1ª, de 1927), Oxford, Clarendon Press, 1963; trad. cast. de Antonio Ortiz García, por donde se cita, *Las fuentes del Derecho Inglés*, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1969.
- Álvarez Gálvez, Íñigo: *Utilitarismo y derechos humanos. La propuesta de John S. Mill*, Villaviciosa de Odón, Plaza y Valdés, 2009.
- Ammerman, David L.: "The Crisis of Independence", en Greene y Pole, *The Blackwell Encyclopedia of the American Revolution*, cit., pp. 211-22.
- Ammerman, David L.: "The Tea Crisis and its Consequences, through 1775", en Greene y Pole (eds.), *The Blackwell...*, cit., pp. 198-210.
- Añón Roig, María José, y García Añón, José (eds.): *Lecciones de derechos sociales*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2004.
- Aparisi, Angela: *La revolución norteamericana. Aproximación a sus orígenes ideológicos*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1995.
- Arendt, Hannah: *On Revolution*, New York, Viking Press, 1963; trad. cast. de Pedro Bravo, por donde se cita, *Sobre la Revolución*, Alianza, 1990.
- Aristóteles: *Constitución de los atenienses*, trad. cast. de Manuela García Valdés, Madrid, Gredos, 1984.
- Aristóteles: *Política*, trad. cast. de Patricio de Azcárate, Madrid, Espasa Calpe, 2001.
- Armitage, David, Himy, Armand y Skinner, Quentin (eds.): *Milton and Republicanism*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995.

- Audi, Robert (ed.): *Diccionario Akal de Filosofía*, Madrid, Akal, 2004; trad. cast. de Huberto Marraud y Enrique Alonso, de *The Cambridge Dictionary of Philosophy*. Pg. 610.
- Austin, Michel y Vidal-Naquet, Pierre: *Economies et sociétés en Grèce ancienne*, París, Librairie Armand Colin, 1972; trad. cast. de Teófilo de Lozoya, *Economía y Sociedad en la antigua Grecia*, Barcelona, Paidós Ibérica, 1986.
- Aylmer, Gerald E.: "The Meaning and Definition of Property in Seventeenth-century England", *Past & Present* n. 86, Oxford, Past & Present Society, feb. 1980, pp. 87-97.
- Aylmer, Gerald E.: "Communication: Gentlemen Levellers?", *Past & Present* n. 49, Oxford, Past & Present Society, nov. 1970, pp. 120-25.
- Bailyn, Bernard: *The Ideological Origins of the American Revolution*, Cambridge, Harvard University Press, 1967; trad. cast. de Alberto Vanasco, por donde se cita, *Los orígenes ideológicos de la Revolución Americana*, Paidós, Buenos Aires, 1972.
- Barranco Avilés, María del Carmen: "Notas sobre la libertad republicana y los derechos fundamentales como límites al poder", *Derechos y Libertades*, n. 9, Madrid, Instituto Bartolomé de las Casas, 2000, pp. 65-91.
- Beccaria, Cesare: *Dei delitti e delle pene* (1764); hay trad. cast. de Juan Antonio de las Casas, *De los delitos y de las penas*, Madrid, Alianza, 1988.
- Becker, Carl L.: *The Declaration of Independence: A Study on the History of Political Ideas*, New York, Harcourt, Brace and Co., 1922.
- Béjar, Elena: "Republicanism en fuga", *Revista de Occidente*, n. 242, Madrid, Fundación Ortega y Gasset, diciembre del 2001, pp. 76-90.
- Beltrán Adell, Francisco: "El republicanismo en Suiza", *Isegoría* n. 33, Madrid, CSIC, 2005, pp. 207-217.
- Bergeron, Louis, Furet, François, y Koselleck, Reinhart: *Das Zeitalter der europäischen Revolution, 1780-1848*, Frankfurt am Main, Fischer Bücherei, 1969; trad. cast. de Francisco Pérez Gutiérrez, por donde se cita, *La época de las revoluciones europeas, 1780-1848*, Madrid, Siglo XXI, 1978.
- Berlin, Isaiah: "Two Concepts of Liberty" (1958), en *Four Essays on Liberty*, Oxford, Oxford University Press, 1969, trad. cast., por donde se cita, de Ángel Rivero Rodríguez, *Dos Conceptos de Libertad*, Madrid, Alianza, 2001.
- Bernal Pulido, Carlos: "El concepto de libertad en la teoría política de Norberto Bobbio", *Revista de Economía Institucional*, vol. 8, n. 14, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, primer semestre del 2006, pp. 55-75.
- Bernstein, Richard B., y Kaminski, John P.: "The Bill of Rights, 1791", en Schechter, Stephen L. (ed.): *Roots of the Republic. American Founding Documents Interpreted*, Lanham, Rowman & Littlefield, 1990.
- Bertomeu, María Julia, y Domènech, Antonio: "El republicanismo y la crisis del rawlsismo metodológico (Nota sobre método y sustancia normativa en el debate republicano)", *Isegoría*, n. 33, Madrid, CSIC, 2005, pp. 51-75.
- Betegón Carrillo, Jerónimo, Laporta San Miguel, Francisco Javier, Páramo Argüelles, Juan Ramón de, y Prieto Sanchís, Luis (eds.): *Constitución y derechos fundamentales*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 2004.
- Blackstone, William: *Commentaries on the Laws of England*, London, S. Sweet, 1836.
- Blanco Valdés, Roberto L.: *El valor de la Constitución*, 2º ed. (1ª, de 1995), Madrid, Alianza, 2006.
- Bland, Richard: "An Inquiry into the Rights of the British Colonies" (1766), en Jensen (ed.), *Tracts of the American Revolution, 1763-1776*, cit., pp. 108-26.
- Bloch, Marc: *La société féodale*, París, Albin Michel, 1968; trad. cast. de Eduardo Ripoll Perelló, por donde se cita, *La Sociedad Feudal*, Torrejón de Ardoz, Akal, 1986.

Bobbio, Norberto, Matteucci, Nicola, y Pasquino, Gianfranco (eds.): *Dizionario di politica*, 2ª ed. (1ª, de 1976), Torino, UTET (Unione Tipografico-Editrice Torinese), 1983; trad. cast. de Raúl Crisafio, Alfonso García, Miguel Martí, Mariano Martín y Jorge Tula, por donde se cita, *Diccionario de Política*, 2 vols., 12ª ed., Madrid, Siglo XXI, 2000.

Bobbio, Norberto: *Liberalismo e democrazia*, 2ª ed. (1ª, de 1985), Milano, Franco Angeli, 1986; trad. cast. de J. Fernández Santillán, por donde se cita, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1989.

Boëtie, Etienne de la: *Discours de la servitude volontaire* (1546); trad. cast. de Jose María Hernández - Rubio, por donde se cita, *Discurso de la Servidumbre Voluntaria o Contra el Uno*, Madrid, Tecnos, 1986.

Bolingbroke, Henry St. John: *The Works of Henry St. John, Lord Viscount Bolingbroke*, Vol.II, Goldsmith, Oliver y William (eds.) London, J. Johnson *et alia*, 1809.

Borden, Morton (ed.): *The Antifederalist Papers*, Ann Arbor, Michigan State University Press, 1965, <<http://www.constitution.org/afp/brutus11.htm>>.

Brailsford, H.N.: *The Levellers and the English Revolution*, 2ª ed. (1ª en Cresset Press, 1961), Nottingham, Spokesman, 1983.

Brierly, J.L.: *English Law*, Oxford University Press, 1943; trad. cast. (s.n.), por donde se cita, *El Derecho Inglés*, Oxford, Oxford University Press, 1943.

Brogan, Hugh: *The Penguin History of the United States of America*, London, Longman, 1990.

Brutus, Stephanus Junius: *Vindiciae contra tyrannos*; trad. cast. de Piedad García-Escudero, por donde se cita (introducción histórica de Harold J. Laski, estudio preliminar y notas de Benigno Pendás), Madrid, Tecnos, 2008.

Bryce, James: *Flexible and Rigid Constitutions* (1884); hay versión cast. (sin indicación del traductor), *Constituciones flexibles y constituciones rígidas*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1988.

Burgess, Glenn: "Henry Parker and English Political Thought in the 1640s", en *H-Net Reviews in the Humanities and Social Sciences*, H-Albion, H-Net Reviews, mar. 1997. <<http://www.h-net.org/reviews/showpdf.cgi?path=1218869065240>>.

Burke, Edmund: *Textos políticos*; trad. e introducción de Vicente Herrero, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1984.

Bushman, Richard L.: "English Franchise Reform in the Seventeenth Century", *The Journal of British Studies*, Chicago, Chicago University Press, vol. III, n. 1, 1963, pp. 36-56.

Calhoun, Robert M.: "Loyalism and Neutrality", en Greene and Pole (eds.), *The Blackwell...*, cit., pp. 247-59.

Calvino, Juan: *Christianae religionis institutio* (1536); trad. cast. de Cipriano de Valera, por donde se cita, *Institución de la Religión Cristiana*, Madrid, Visor Libros, 2003.

Carrión Morillo, David: *Tocqueville. La libertad política en el Estado social*. Madrid, Delta, 2007.

Cavali, Alessandro: "Clase", en Bobbio, Matteucci y Pasquino (eds.), *Diccionario...*, cit., pp. 225-32.

Chaffin, Robert. J.: "The Townshend Act Crisis, 1767-1770", en Greene y Pole (eds.), *The Blackwell...*, cit., pp. 126-45.

Chueca Rodríguez, Ricardo L.: *La regla y el principio de la mayoría*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993.

Cicerón, Marco Tulio: *Sobre la República. Sobre las leyes*; trad. cast. de José Guillén, Madrid, Tecnos, 1986.

Clavero, Bartolomé: *El orden de los poderes (historias constituyentes de la trinidad constitucional)*, Madrid, Trotta, 2007.

Clavero, Bartolomé: *Happy Constitution. Cultura y lengua constitucionales*, Madrid, Trotta, 1997.

- Colomer, José Luis, y Díaz, Elías (eds.): *Estado, justicia, derechos*, Madrid, Alianza, 2002.
- Commager, Henry Steele, Leuchtenburg, William E., y Morison, Samuel Eliot: *A Concise History of the American Republic*, Oxford, Oxford University Press, 1983; trad. cast., por donde se cita, de Odón Durán d'Oion, Faustino Ballvé y Juan José Utrilla, *Breve Historia de los Estados Unidos*, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1987.
- Conley, Patrick T., y Kaminski, John P. (eds.): *The Bill of Rights and the States The Colonial and Revolutionary Origins of American Liberties*, Lanham, Rowman & Littlefield, 1992.
- Conroy, David W.: "Development of a Revolutionary Organization (1765-1775)", en Greene y Pole (eds.), *The Blackwell...*, cit., pp. 223-30.
- Constant, Benjamín: *De l' esprit de conquete et de l'usurpation dans leurs rapports avec la civilisation européenne* (1813), y *De la liberté des anciens comparée à celle des modernes* (1819); trad. cast. de Marcial Antonio López y M. Magdalena Truyol Wintrich, respectivamente, por donde se cita, *Sobre el Espíritu de Conquista. Sobre la libertad en los antiguos y en los modernos* (estudio preliminar de María Luisa Sánchez Mejía) Madrid, Tecnos, 2002.
- Constitution Society: <<http://www.constitution.org/>>
- Cook, Chris, 1989: *Macmillan Dictionary of Historical Terms*, 2ª ed. (1ª de 1983), London, Macmillan Press; trad. cast. de Fernando Santos Fontenla, por donde se cita, *Diccionario de términos históricos*, Madrid, Alianza, 1993.
- Countryman, Edward: "Social Protest and the Revolutionary Movement (1765-1776)", en Greene y Pole (eds.), *The Blackwell...*, cit., pp. 184-97.
- Dagger, Richard: *Civic Virtues. Rights, Citizenship, and Republican Liberalism*, New York, Oxford University Press, 1997.
- Davis, James C.: "Derechos humanos y revolución inglesa" (trad. de Miguel Ángel Ramiro Avilés), *Derechos y Libertades*, n. 14, Madrid, Instituto Bartolomé de las Casas, 2006, pp. 17-40.
- Davis, James C.: "La igualdad de derechos en la revolución inglesa: el republicanismo de James Harrington y el significado de la igualdad" (trad. de Miguel Ángel Ramiro Avilés), *Derechos y Libertades*, n. 7, Madrid, Instituto Bartolomé de las Casas, 1999, pp. 189-205.
- Díaz, Elías: *Sociología y Filosofía del Derecho*, 2ª ed. (1ª, de 1971), Madrid, Taurus, 1980.
- Diccionario del uso del español María Moliner* (2ª ed.), Vol. II, Madrid, Gredos, 1998.
- Dickinson, John: *Empire and Nation: Letters from a Farmer in Pennsylvania*, McDonald, Forrest (ed.), Indianapolis, Liberty Fund, 1999, <<http://oll.libertyfund.org/title/690/102310>>.
- Diderot, Denis: *Escritos Políticos*, Andújar Hermosa, Antonio (ed.), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989.
- Donagan, Barbara: "The Army, the State and the Soldier in the English Civil War", en Mendle (ed.), *The Putney Debates of 1647. The Army, the Levellers and the English State*, cit., pp. 79-102.
- Dorado Porras, Javier: *La lucha por la Constitución (Las teorías de la Fundamental Law en la Inglaterra del siglo XVII)*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001.
- Dry, Murray: "The Debate Over Ratification of the Constitution", en Greene y Pole (eds.), *The Blackwell...*, cit., pp. 471-85.
- Dulany, Daniel: "Considerations on the Propriety of Imposing Taxes in the British Colonies for the Purpose of Raising a Revenue by Act of Parliament" en Jensen (ed.), *Tracts ...*, cit., pp. 94-107.
- Dunn, John (ed.): *Democracia, el viaje inacabado, 508 a.C.-1993*, (trad. cast. de Jordi Fibla de Democracy. *The unfinished journey 509 BC to AD*, Oxford, Oxford University Press, 1993), Barcelona, Tusquets, 1995.
- Elster, Jon: *Ulysses and the Sirenes*, Cambridge, Cambridge University Press, 1979.
- Encyclopedia Britannica*: <<http://www.britannica.com/>>
- Esteban, Jorge de (ed.): *Constituciones españolas y extranjeras*, Madrid, Taurus, 1977.

Fernández de Buján, Antonio: *Derecho Público Romano. Y recepción del Derecho Romano en Europa*, 5ª ed. (1ª, de 1998), Madrid, Civitas, 2000.

Fernández-Albertos, José: "Dividir lo indivisible. Separación de poderes y soberanía popular en James Madison", *Revista de Estudios Políticos*, nueva época, n. 128, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, abril-junio 2005, pp. 293-316.

Ferrara, Alessandro: "El desafío republicano", *Claves de la Razón Práctica*, n. 139, Madrid, Progreso, 2006, pp. 4-12.

Find Law: <<http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=us&vol=5&invol=137>>

Finkelman, Paul, y Urofsky, Mervin I. (eds.): *Documents of American Constitutional and Legal History. Volume I. From the Founding Through the Age of Industrialization*, 2ª ed. (1ª, del 2001), New York, Oxford University Press, 2002.

Finley, Moses I.: *Democracy, Ancient and Modern*, New Brunswick, Rutgers University, 1973; trad. cast. de Antonio Pérez Ramos, por donde se cita, *Vieja y Nueva Democracia*, Ariel, Barcelona, 1980.

Fioravanti, Maurizio: *Costituzione*, Bolonia, il Mulino, 1999; trad. cast. de Manuel Martínez Neira, por donde se cita, *Constitución (de la antigüedad a nuestros días)*, Madrid, Trotta, 2001.

Forster, Robert, y Greene, Jack P.: *Preconditions of Revolution in Early Modern Europe*, Baltimore, John Hopkins University, 1970; trad. cast. de Blanca Paredes, por donde se cita, *Revoluciones y Rebeliones de la Europa Moderna*, Madrid, Alianza, 1982.

Francisco, Andrés de: "La república contra el *demos*: razones de un desencuentro histórico", *Claves de la Razón Práctica* n. 135, Madrid, Progreso, 2003, pp. 31-37.

Frank, Joseph: *The Levellers. A History of the Writings of Three Seventeenth-Century Social Democrats: John Lilburne, Richard Overton, William Walwyn*, reed. (1ª ed., de Cambridge, Cambridge University Press, 1955), New York, Russell & Russell, 1969.

Frey, Sylvia R.: "Slavery and anti-slavery" en Greene y Pole (eds.), *The Blackwell...*, cit., pp. 379-91.

Fuenteseca, Pablo: *Derecho Privado Romano*, Madrid, Pablo Fuenteseca, 1978.

Furet, Francois, y Ozouf, Mona (eds.): *Dictionnaire Critique de la Révolution Française*, Paris, Flammarion, 1988; trad. cast. de Jesús Bravo, Néstor Míguez, Mauro Armiño, Daniel de la Iglesia y Ricardo Artola, *Diccionario de la Revolución Francesa*, Madrid, Alianza, 1989.

García Gual, Carlos: "La Grecia Antigua", en Vallespín, Fernando (ed.), *Historia de la Teoría Política*, Vol. I, cit., Alianza, Madrid, 2002.

García Medina, Javier: "Tres perspectivas republicanas sobre la relación entre libertad, derechos y ley: Rousseau, Kant y Pettit", *Derechos y Libertades*, n. 16, Madrid, Instituto Bartolomé de las Casas, 2007, pp. 101-35.

García Pelayo, Manuel: *Derecho Constitucional comparado*, Madrid, Alianza, 1987.

Gardiner, Samuel Rawson (ed.): *The Constitutional Documents of the Puritan Revolution, 1625-1660*, 3ª ed. (1ª, de 1889), Oxford, Clarendon Press, 1906.

Gargarella, Roberto, y Ovejero, Félix: "Democracia representativa y virtud cívica", *Claves de Razón Práctica*, n. 105, Madrid, Progreso, 2000, pp. 69-75.

Gargarella, Roberto: "El carácter igualitario del republicanismo", *Isegoría* n. 33, Madrid, CSIC, 2005, pp. 175-89.

Gargarella, Roberto: *Crisis de la representación olítica*, México D.F., Fontamara, 1997.

Gargarella, Roberto: *La justicia frente al gobierno*, Barcelona, Ariel, 1996.

Gargarella, Roberto: *Las teorías de la justicia después de Rawls. Un breve manual de filosofía política*, Barcelona, Paidós, 1999.

Gargarella, Roberto: *The Scepter of Reason*, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 2000.

Garzón Valdés, Ernesto, y Laporta, Francisco José (eds.): *El derecho y la justicia*, 2ª ed. (1ª, de 1996), Madrid, Trotta, 2000.

- Garzón Valdés, Ernesto: "Algo más acerca del 'coto vedado' ", *Doxa*, n. 6, Alicante, Universidad de Alicante, 1989, pp. 209-13.
- Garzón Valdés, Ernesto: "Representación y democracia", *Doxa*, n. 6, Alicante, Universidad de Alicante, 1989, pp. 143-63.
- Garzón Valdés, Ernesto: *Derecho, ética y política*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993.
- Gaustad, Edwin S.: "Religion before the Revolution", Greene y Pole (eds.), *The Blackwell...*, cit., pp. 64-70.
- Geggus, David. P.: "The Effects of the American Revolution on France and its Empire", en Greene y Pole (eds.), *The Blackwell...*, cit., pp. 518-27.
- Gentles, Ian: "The Agreements of the People and their Political Contexts, 1647-1649", en Mendle (ed.), *The Putney Debates...*, cit., pp. 148-74.
- Georgetown University Press: *Declaration of Independence and the Constitution of the United States of America*, Washington D.C., 2003.
- Gibson, Alan: "Ancient, Moderns and Americans: the Republicanism-liberalism Debate Revisited", *History of Political Thought*, vol. XXI, n. 2, Exeter, University of Exeter, 2000, pp. 261-307.
- Giner, Salvador: "Las razones del republicanismo", *Claves de la Razón Práctica* n. 81, Madrid, Progreso, 1998, pp. 2-13.
- Glover, Samuel Denis: "The Putney Debates: Popular versus Élitist Republicanism", *Past & Present* n. 164, Oxford, Past & Present Society, ag. 1999, pp. 47-80.
- Goldsmith, Maurice M.: "Republican Liberty Considered", *History of Political Thought*, vol. XXI, n. 3, Exeter, University of Exeter, 2000, pp. 543-59.
- González Campos, Julio D., Sáenz de Santa María, M^a Paz, y Sánchez Rodríguez, Luis I.: *Curso de Derecho Internacional Público*, vol. I, 4^a ed. (1^a, de 1983), Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1990.
- González Soler, M^a D., Lima Torrado, J., Marín Castán, M^a L., Prada García, A., Roldán Álvarez, C., y Rovetta Klyver, F.: *Cuestiones y textos de Historia de la filosofía del derecho, moral y política. Del Renacimiento a Kant*, Madrid, Dykinson, 1997.
- González, Ana Marta: "Republicanism: orígenes historiográficos y relevancia de un debate", *Revista de Occidente*, n. 242, Madrid, Fundación Ortega y Gasset, 2001, pp. 121-45.
- Gooch, George P.: *English Democratic Ideas in the Seventeenth Century*, 2^a ed. (1^a ed., 1898), Nueva York, Harper & Row, 1959.
- Gordon, Thomas y Trenchard, John: *Cato's Letters, or Essays on Liberty, Civil and Religious, and Other Important Subjects*. Cuatro volúmenes, reunidos en dos bloques, editados y anotados por Ronald Hamowy, Indianapolis, Liberty Fund, 1995. <http://oll.libertyfund.org/index.php?option=com_staticxt&staticfile=show.php?title=737&Itemid=29>.
- Gough, John Wiedhofft: *Fundamental Law in English Constitutional History* reimp. (de la 1^a ed. de 1955), Littleton, F.B. Rothman, 1985.
- Greene, Jack P. y Pole, J.R. (eds.): *The Blackwell Encyclopedia of the American Revolution*, reimp. (de la 1^a ed. de 1991), Cambridge, Basil Blackwell, 1994.
- Greene, Jack P.: "The Origins of the New Colonial Policy, 1748-1763", Greene and Pole (eds.), *The Blackwell...*, cit., pp. 95-106.
- Guizot, François: *Histoire de la révolution d'Angleterre* (1826-27); trad. cast. de Diego Fernández Mardón, *Historia de la Revolución de Inglaterra*, Madrid, Fernando Gaspar, 1856.
- Hamilton, A., Jay, J., y Madison, J.: *Federalist Papers* (1787-1788); trad. cast. de Gustavo R. Velasco, por donde se cita, *El Federalista*, 2^o ed. (1^a, de 1943), México, Fondo de Cultura Económica, 2001.

Hamowy, Ronald: "The Declaration of Independence", en Greene y Pole (eds.), *The Blackwell...*, cit., pp. 264-68.

Harrington, James: *The Commonwealth of Oceana* (1656); trad. cast. de Enrique Díez Canedo, por donde se cita, *La República de Oceana*, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1987.

Held, David: *Models of Democracy*, 2ª ed. (1ª, de 1987) Palo Alto, Stanford University Press, 1996; trad. cast. de Adolfo Gómez Cedillo, por donde se cita, *Modelos de Democracia*, Madrid, Alianza, 2001.

Herbert, Gary Bruyce: *A Philosophical History of Rights*, New Brunswick, Transaction Publishers, 2003.

Herreros López, Juan Manuel: "Igualdad y mercado de trabajo", en Carrasco Durán, Manuel, Pérez Royo, Francisco Javier, Urías Martínez, Joaquín, y Terol Becerra, Manuel José (eds.), *Derecho constitucional para el siglo XXI. Actas del VIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional*, Vol. I, Cizur Menor, Thomson-Aranzadi, 2006, pp. 843-64.

Herreros Vázquez, Francisco: "La confianza política en la tradición republicana de Cicerón hasta Madison", *Revista de Estudios Políticos*, nueva época, n. 125, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2004, pags. 325-348.

Herreros Vázquez, Francisco: "Las elecciones y la tradición republicana", *Revista Española de Ciencia Política*, n. 12, abril del 2005, pp. 53-73.

Herzog, Don: "Some Questions for Republicans", *Political Theory*, vol. 14, n. 3, Newbury Park, SAGE Publications, 1986, pp. 473-493.

Hierro Sánchez Pescador, Liborio: "El concepto de justicia y la teoría de los derechos", en Colomer, José Luis, y Díaz, Elías (eds.), *Estado, Justicia...*, cit., pp. 11-73.

Hierro Sánchez Pescador, Liborio: "Los derechos humanos en la sociedad democrática", *Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid*, n.15, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2007, pp. 109-24

Hierro Sánchez Pescador, Liborio: *Estado de Derecho. Problemas actuales*, 2ª ed. (1ª ed., de 1998), México D.F., Fontamara, 2001.

Hierro, Liborio, Iñiguez de Onzoño, Santiago, Llamas, Ángel, y Peces-Barba, Gregorio,: *Derecho positivo de los derechos humanos*, Madrid, Debate, 1987.

Hill, Christopher: *The Century of Revolution, 1603-1714*, New York, Thomas Nelson and Sons, 1961; trad. cast. de Natalia Calamai, por donde se cita, *El siglo de la revolución*, Madrid, Ayuso, 1972.

Hill, Christopher: *The World Turned Upside Down. Radical Ideas During the English Revolution*, London, Maurice Temple Smith, 1972; trad. cast. de María del Carmen Ruiz de Elvira, por donde se cita, *El mundo trastornado (el ideario popular extremista en la revolución inglesa del Siglo XVII)*, Madrid, Siglo XXI, 1983.

Hobbes, Thomas: *Leviathan* (1651); trad. cast. de E. Tierno Galván y M. Sánchez Sarto, por donde se cita, *Del Ciudadano. Leviatán*, Madrid, Tecnos, 1999.

Hohfeld, Wesley Newcomb: "Some fundamental legal conceptions: as applied to judicial reasoning", *Yale Law Journal* n. 23, New Haven, Yale University Press, 1913, pp. 16-59; trad. cast. de Genaro R. Carrió, por donde se cita, *Conceptos Jurídicos Fundamentales*, México D.F., Fontamara, 2001.

Honohan, Iseult: "Enfoques republicanos contemporáneos sobre la democracia y su potencial cosmopolita", *Isegoría*, n. 33, Madrid, CSIC, 2005, pp. 161-174.

Honohan, Iseult: *Civic Republicanism*, London, Routledge, 2002.

Hopkins, Stephen: "The Rights of Colonies Examined" (1764), en Jensen (ed.), *Tracts...*, cit., pp. 41-62.

Horowitz, Irving Louis (ed.): *The anarchists*, Nueva York, Dell Publishing, 1964; trad. cast. de Joaquina Aguilar López, María Esther Benítez, José Fernández Sánchez, Carlos Martín

- Ramírez, Manuel Pérez Ledesma y Sofía Yvars Fernández, por donde se cita, *Los Anarquistas*, vol. I, Madrid, Alianza, 1982.
- Houston, Alan Craig: *Algernon Sydney and the Republican Heritage in England and America*, Princeton, Princeton University Press, 1991.
- Hutson, James H: "The Bill of Rights and the American Revolutionary Experience", en Lacey y Haakonssen (eds.), *A Culture of Rights. The Bill of Rights in philosophy, politics and law - 1791 and 1991*, cit., pp. 62-97.
- Isaac, J.: "Republicanism vs. Liberalism? A Reconsideration", *History of Political Thought*, vol. 9, n. 2, Exeter, University of Exeter, 1988.
- Jenks, Edward: *A Short History of English Law (from the earliest times to the end of the year 1927)*, London, Methuen, 1927.
- Jensen, Merrill: *Tracts of the American Revolution, 1763-1776*, reimp. (de la 1ª ed. de 1967), Indianapolis, Hackett Publishing, 2003
- Jenyns, Soame: "Objections to the Taxation of our American Colonies by the Legislature of Great Britain, Briefly Considered" (1765), en *The Works of Soame Jenyns*, Cole, Charles N. (ed.), Vol. II, 2ª ed. (1ª, de 1789), London, T. Cadell, 1793, pp. 192-195.
- Kaminski, John P., y Bernstein, Richard B.: "The Bill of Rights, 1791", en *Roots of the Republic: American Founding Documents Interpreted* (Schechter, Stephen L., ed.), Lanham, Rowman & Littlefield, 1990, pp. 423-40.
- Kaplanoff, Mark. D.: "Confederation: movement for a stronger union", en Greene y Pole (eds.), *The Blackwell...*, cit., pp. 443-56.
- Kaplanoff, Mark. D.: "The Federal Convention and the Constitution", en Greene y Pole (eds.), *The Blackwell...*, cit., pp. 457-70.
- Katz, Claudio: "Thomas Jefferson's Liberal Anticapitalism", *American Journal of Political Science*, vol. 47, n. 1, Dallas, Midwest Science Political Association, 2003, pp. 1-17.
- Kelsen, Hans: *Vom Wesen und Wert der Demokratie* (1920, 2ª ed. corregida, de 1929); trad. cast. de Rafael Luengo Tapia y Luis Legaz Lacambra, *Esencia y valor de la democracia*, Madrid, Guadarrama, 1977.
- Klappenbach, Augusto: "Egoísmo y altruismo", *Claves de la Razón Práctica*, n. 52, 1995, Madrid, Progreso, pp. 78-80.
- Klappenbach, Augusto: "El liberalismo angélico y las sendas de elefantes", *Claves de la Razón Práctica*, n. 135, 2003, Madrid, Progreso, pp. 79-82.
- Koch, Adriane, y Peden, William (eds.): *The Life and Selected Writings of Thomas Jefferson*, New York, The Modern Library of Random House, 1944; trad. cast. de Antonio Escohotado y Manuel Sáenz de Heredia, por donde se cita, *Autobiografía y otros Escritos* de Thomas Jefferson, Barcelona, Tecnos, 1987.
- Lacey, Michael J., y Haakonssen, Knud (eds.): *A Culture of Rights. The Bill of Rights in philosophy, politics and law; 1791 and 1991*, 1ª ed., Cambridge, Cambridge University Press, 1992.
- Laporta San Miguel, Francisco J.: "El ámbito de la constitución", *Doxa*, n. 24, Alicante, Universidad de Alicante, 2001, pp. 459-84.
- Laporta San Miguel, Francisco J.: "El cansancio de la democracia", *Claves de Razón Práctica*, n. 99, Madrid, Progreso, 2000, pp. 20-25.
- Laporta San Miguel, Francisco J.: "Los problemas de la democracia deliberativa", *Claves de Razón Práctica*, n. 109, Madrid, Progreso, 2001, pp. 22-28.
- Laporta San Miguel, Francisco J.: "Sobre el concepto de derechos humanos", *Doxa*, n. 4, Alicante, Universidad de Alicante, 1987, pp. 23-46.
- Laporta San Miguel, Francisco J.: "Sobre la teoría de la democracia y el concepto de representación política: algunas propuestas para debate", *Doxa*, n. 6, Alicante, Universidad de Alicante, 1989, pp. 121-42.

- Laporta San Miguel, Francisco J.: *El imperio de la ley. Una visión actual*. Madrid, Trotta, 2007.
- Laporta, Francisco J.: "Ética y Derecho en el pensamiento contemporáneo", en Camps, Victoria (ed.), *Historia de la Ética*, Vol. III, Barcelona, Crítica, 2000, pp. 221-295.
- Laporta, Francisco J.: ¿Qué derechos tenemos?, *Doxa*, n. 4, Alicante, Universidad de Alicante, 1987, pp. 23-46.
- Laporta, Francisco J.: "Imperio de la ley. Reflexiones sobre un punto de partida de Elías Díaz", *Doxa* n. 15-16, Alicante, Universidad de Alicante, 1994, pp. .
- Laporta, Francisco J.: "Sobre el uso del término 'libertad' en el lenguaje político", *Sistema*, n. 52, Madrid, Fundación Sistema, 1983, pp. 23-63.
- Le Claire, Lesley: "The survival of the manuscript", en Mendle (ed.), *The Putney Debates...*, cit., pp. 19-35.
- Levi, Lucio: "Gobierno" en Bobbio, Norberto, Matteucci, Nicola, y Pasquino, Gianfranco (eds.), *Diccionario de Política*, vol. I, A-J, Madrid, Siglo XXI, 2000, pp. 710-12.
- Levy, Leonard W.: *Origins of the Bill of Rights*, Yale, Yale University Press, 1999
- Levy, Leonard W.: *Constitutional Opinions. Aspects of the Bill of Rights*, New York, Oxford University Press, 1986.
- Levy, Leonard: "Jefferson como libertario cívico", en Weymouth (ed.), *Thomas Jefferson...*, cit., pp. 207-236.
- Lewis, Jan: "Happiness", en en Greene y Pole (eds.), *The Blackwell...*, cit., pp. 641-47.
- Lichtheim, George: *A Short History of Socialism*, New York, Praeger Publishers, 1970; trad. cast. de Josefina Rubio, por donde se cita, *Breve Historia del Socialismo*, Madrid, Alianza, 1979.
- Lledó, Pablo, y Sánchez Cuenca, Ignacio (eds.): *Artículos federalistas y antifederalistas. El debate sobre la Constitución americana*, Madrid, Alianza, 2002.
- Locke, John: *A Letter concerning Toleration* (1689-1690); ed. en cast., por donde se cita, a cargo de Pedro Bravo Gala, *Carta sobre la Tolerancia*, reimp. (1ª ed., de 1985), Madrid, Tecnos, 1988.
- Locke, John: *The Second Treatise of Civil Government* (1689); trad. cast. de Carlos Mellizo, por donde se cita, *Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil*, Madrid, Alianza, 1990.
- Lucas, Javier de: "Sobre la justificación de la democracia representativa", *Doxa*, n. 6, Alicante, Universidad de Alicante, 1989, pp. 187-99.
- Lutero, Martín: *Obras*, 2ª ed. (1ª, de 1977), Egido, Teófanos (ed.), Salamanca, Sígueme, 2001.
- Lutz, Donald S. (ed.): *Colonial Origins of the American Constitution. A Documentary History*, Indianapolis, Liberty Fund, 1998.
<http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=694&chapter=102705&layout=html&Itemid=27>.
- Lutz, Donald: "State constitution-making, through 1781", en Greene y Pole (eds.), *The Blackwell...*, cit., pp. 276-88.
- Macpherson, C.B.: *The Political Theory of Possesive Individualism*, Oxford, Oxford University Press, 1962; trad. cast. de Juan Ramón Capella, por donde se cita, *La Teoría Política del Individualismo Posesivo*, Barcelona, Fontanella, 1979.
- Madison, James: *República y libertad. Escritos políticos y constitucionales*, Nicolás Muñiz, Jaime (ed.), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2005.
- Maitland, Frederic William: *The Constitutional History of England*, reimp. (de la 1ª ed. de 1908), Cambridge, Cambridge University Press, 1963.
- Mandeville, Bernard: *The Fable of the Bees; or Private Vices, Public Benefits* (1729); trad. de José Ferrater Mora, por donde se cita, *La fábula de las abejas o los vicios Privados hacen la prosperidad pública*, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1982.

Manin, Bernard: *The Principles of Representative Government*, Cambridge, Syndicate of the Press of the University of Cambridge, 1997; trad. cast. de Fernando Vallespín, por donde se cita, *Los principios del gobierno representativo*, Madrid, Alianza, 1998.

Manning, Brian: *The English People and the English Revolution*, Middlesex, Penguin Books, 1978.

Mansilla, Hugo C.F.: "Las teorías clásicas del buen gobierno y su significación actual", *Revista de Estudios Políticos*, nueva época, n. 29, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, sept-oct. 1982, pp. 163-76.

Maquiavelo, Nicolás: *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio* (1513-17); trad. cast. de Ana María Martínez Tarancón, por donde se cita, *Discursos sobre la Primera Década de Tito Livio*, Madrid, Alianza, 1987.

Maquiavelo, Nicolás: *Il Principe* (1513), trad. cast. (s.n.), *El Príncipe*, 18ª ed. (1ª ed., de 1939), Madrid, Espasa Calpe, 1981.

Martí, Jose Luis: *La república deliberativa. Una teoría de la democracia*, Madrid, Marcial Pons, 2006.

Martínez Rodríguez, Miguel Ángel (ed.): *La cuna del liberalismo (las revoluciones inglesas del siglo XVII)*, Barcelona, Ariel, 1999.

Martínez, Francisco José: "Entre el mito Bático y el mito de Venecia: identidad nacional y republicanismo en la Holanda de Espinosa", *Isegoría* n. 33, Madrid, CSIC, 2005, pp. 219-34

Mason, George: "Objections to the Proposed Constitution (1787)", en Finkelman y Urofsky (eds.), *Documents of American Constitutional...*, cit., pp. 103-05.

Matteucci, Nicola: *Organizzazione del potere e libertà. Storia del costituzionalismo moderno*, Torino, UTET Libreria, 1988; trad. cast. de Francisco J. Ansuátegui Roig y Manuel Martínez Neira, por donde se cita, *Organización del poder y libertad. Historia del constitucionalismo moderno*, Madrid, Trotta, 1998.

Mayer, David N.: *The Constitutional Thought of Thomas Jefferson*, Charlottesville, University Press of Virginia, 1994.

Maynor, John W.: *Republicanism in the Modern World*, Cambridge, Polity Press, 2003.

Mc Ilwain, Charles H.: *Constitutionalism Ancient and Modern*, Ithaca, Cornell University Press, 1947; trad. cast. de Juan José Solozábal Echavarría, por donde se cita, *Constitucionalismo antiguo y moderno*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991.

Mendle, Michael (ed.): *The Putney Debates of 1647. The Army, the Levellers and the English State*, Cambridge, Cambridge University Press, 2001.

Mendle, Michael: *Henry Parker and the English Civil War. The Political Thought of the Public's "Privado"*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995.

Mill, John S.: *Representative Government* (1861); trad. cast. de Marta C.C. de Iturbe, por donde se cita, *Del gobierno representativo* (presentación de Dalmacio Negro Pavón), Madrid, Tecnos, 1985.

Milton, John: *Aeropagitica* (1644); trad. cast. de José Carner, por donde se cita, *Aeropagitica*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1976,

Montagut, Teresa: "Republicanism y Estados de bienestar", *Claves de la Razón Práctica*, n. 112, Madrid, Progreso, 2001, pp. 41-6.

Montesquieu: "Del Espíritu de las Leyes", trad. cast., por la que se cita, de aquí en adelante, de *De l'Esprit des Lois*, de Mercedes Blázquez y Pedro de Vega, Madrid, Tecnos, 1987

Moran, Thomas F.: *The Formation and Development of the Constitution*, (facsimil de la misma obra editada por George Barrie & Sons, Philadelphia, 1906), New York, Adamant Media Corporation, 2006.

More, Thomas: *De optimo statu reipublicae deque nova insula Utopia* (1516); trad. cast. de F.L. Cardona y T. Suero, *Utopía*, Barcelona, Bruguera, 1983.

- Moreso, José Juan: *La Constitución: modelo para armar*, Madrid, Marcial Pons, 2009.
- Moreso, José Juan: "Lenguaje jurídico", en Garzón Valdés, Ernesto, y Laporta, Francisco José (eds.): *El derecho y la justicia*, 2ª ed. (1ª, de 1996), Madrid, Trotta, 2000, pp 105-116.
- Morgan, Edmund S.: *Inventing the People; The Rise of Popular Sovereign in England and America*, New York, W.W. Norton and Co., 1989.
- Mossé, Claude: *Histoire des doctrines politiques en Grèce*, Paris, PUF, 1969;; trad. cast. de R. de la Iglesia, por donde se cita, *Las Doctrinas Políticas en Grecia*, Barcelona, A. Redondo, 1970.
- Neville, Henry: *Plato Redivivus, or A Dialogue Concerning Government*, 2ª ed. (1ª, de 1680), London, R. Dew, 1681. <http://www.constitution.org/neville/pla_red_.htm>.
- Nino, Carlos Santiago: *The Constitution of Deliberative Democracy*, New Haven, Yale University Press, 1996; trad. cast., de Roberto P. Saba, por donde se cita, *La Constitución de la Democracia Deliberativa*, Barcelona, Gedisa, 1997.
- Olfield, Adrian: *Citizenship and Community. Civic republicanism and the modern World*, London, Routledge, 1990.
- Onuf, Peter S.: "The West: Territory, States and Confederation", en Greene y Pole (eds.), *The Blackwell...*, cit., pp. 346-55.
- Otis, James: "The Rights of the British Colonies Asserted and Proved" (1764), en Jensen (ed.), *Tracts...*, cit., pp. 19-40.
- Ovejero Lucas, Félix: "Republicanism: el lugar de la virtud", *Isegoría* n. 33, Madrid, CSIC, 2005, pp. 99-125
- Ovejero Lucas, Félix: *Proceso abierto. El socialismo después del socialismo*, Barcelona, Tusquets, 2005.
- Ovejero, Félix, y Martí, José Luis (eds.): *Nuevas ideas republicanas. Autogobierno y libertad*, Barcelona, Paidós, 2004.
- Ovejero, Félix: "Democracia liberal y democracias republicanas. Para una crítica del elitismo democrático", en *Claves de la Razón Práctica* n° 111, Madrid, Progres, pp. 18-30.
- Ovejero, Félix: "Tres miradas republicanas sobre la democracia", *Claves de la Razón Práctica*, n. 132, Madrid, Progres, 2003, pp. 20-30.
- Ovejero, Félix: *La libertad inhóspita*, Barcelona, Paidós, 2002.
- Paine, Thomas: *Common Sense* (1776); trad. cast. de Ramón Soriano y Enrique Bocardo, por donde se cita, "El Sentido Común", en *El sentido común y otros escritos* (eds., id.), Madrid, Tecnos, 1990.
- Paine, Thomas: *Rights of Man* (1791-92); trad. cast. de Fernando Santos Fontenla, por donde se cita, *Los Derechos del Hombre* (introd., cronología y notas, id.), Madrid, Alianza, 1984.
- Paricio, Javier: *Historia y fuentes del Derecho Romano*, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 1998.
- Pease, Theodore Calvin: *The Leveller Movement*, Washington, American Historical Association, 1916.
- Peces-Barba Martínez, Gregorio, y Fernández, Eusebio (eds.): *Historia de los derechos fundamentales. Tránsito a la modernidad; Siglos XVI Y XVII* (Vol. I), Madrid, Dykinson, 1998.
- Pendás, Benigno: "Nostálgicos de Oceana: Viejos y nuevos republicanos en la historia de las ideas", *Revista de Occidente*, n. 242, Madrid, Fundación Ortega y Gasset, diciembre del 2001, pp. 91-105.
- Pereira Menaut, Antonio C.: *El ejemplo constitucional de Inglaterra*, Madrid, Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 1992.
- Perkins, Edwin J.: "Socio-economic Development of the Colonies", en Greene y Pole (eds.), *The Blackwell...*, cit., pp. 53-63.

Pettit, Philip: *Republicanism. A Theory of Freedom and Government*, Oxford, Oxford University Press, 1997; trad. cast. de Toni Doménech, por donde se cita, *Republicanism. Una teoría sobre la libertad y el gobierno*, Barcelona, Paidós, 1999.

Phillipps, Samuel March (ed.): *State Trials, Or, A Collection of the Most Interesting Trials, Prior to the Revolution of 1688*, vol. II, London, W. Walker, 1826.

Pinzani, Alessandro: "Gobierno de las leyes y/o gobierno de los ciudadanos. ¿Hay compatibilidad entre republicanismo y democracia liberal?", *Isegoría* n. 33, Madrid, CSIC, 2005, pp. 77-97.

Pitkin, Hanna F.: "Are Freedom and Liberty Twins?", *Political Theory*, vol. 16, n. 4, Newbury Park, SAGE Publications, nov. 1988, pp. 523-52.

Pitkin, Hanna F.: *The Concept of Representation*, Berkeley, University of California Press, 1972; hay trad. cast., por donde se cita, de Ricardo Montoro Romero, *El concepto de representación*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1985.

Plant, David: *British Civil Wars, Commonwealth and Protectorate (1638-1660)*, web <<http://www.british-civil-wars.co.uk/timelines/index.htm>>

Plumb, John. H.: "The Growth of the Electorate in England from 1600 to 1715", *Past & Present*, n. 45, Oxford, Past & Present Society, nov. 1969, pp. 90-116.

Plutarco: *Vidas Paralelas*, 3 vols.); trad. cast. de Antonio Ranz Romanillos, Barcelona, Planeta, 1990-91.

Pocock, John G.A.: *The Machiavellian Moment. Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition*, London, Princeton University Press, 1975; trad. cast. de Marta Vázquez Pimentel y Eloy García, por donde se cita, *El momento maquiavélico* (estudio preliminar, de Eloy García), Madrid, Tecnos, 2002.

Poliakov, León: *Le Causalité Diabolique. Essai sur l'origine des persécutions*, Paris, Calmann-Lévy, 1980; trad. cast. (s.n.), por donde se cita, *La Causalidad Diabólica. Ensayo sobre el Origen de las Persecuciones*, Barcelona, Muchnik Editores, 1982.

Primus, Richard A.: *The American Language of Rights*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.

Rahe, Paul A.: *Republics Ancient and Modern. Inventions of Prudence: Constituting the American Regime*, Vol. III, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1994.

Rahe, Paul A.: *Republics Ancient and Modern. The Ancien Régime in Classical Greece*, Vol. I, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1994.

Raphael, Ray: *A People's History of the American Revolution*, 2ª ed. (1ª, del 2001), New York, Harper Collins, 2002.

Rawls, John: *A Theory of Justice*, Cambridge, Harvard University Press, 1971; trad. cast. de María Dolores González Soler, por donde se cita, *Teoría de la Justicia*, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1979.

Raz, Joseph: *The Morality of Freedom*, Oxford, Oxford University Press, 1986.

Reid, John Philip: *Constitutional History of the American Revolution; The Authority of Rights*, Wisconsin, University of Wisconsin Press, 1986.

Reid, John Phillip: *The Concept of Liberty in the Age of the American Revolution*, Chicago, University Of Chicago Press, 1988.

Revelli, Marco (ed.): *Putney. Alle Radici Della Democrazia Moderna. Il Dibattito tra i Protagonisti Della Rivoluzione Inglese*, Milano, Baldini & Castoldi, 1997.

Richards, David A. J.: "La intención de los constituyentes y la interpretación constitucional" (trad. de Enrique Alonso García), *Revista del Centro de Estudios Constitucionales*, n. 1, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1988, pp. 141-72.

Rincón i Verdera, Joan Carles: "El republicanismo de Pettit y el estado ético de Aranguren (no-dominación y acceso a la política desde la ética): una aproximación formal a ambas teorías", *Derechos y Libertades*, n. 15, Madrid, Instituto Bartolomé de las Casas, 2006, pp. 101-34.

- Rivera, Juan Antonio: "¡Salud, virtuosos republicanos!", *Claves de la Razón Práctica* n. 92, Madrid, Progreso, 1999, pp. 22-29.
- Rivera, Juan Antonio: "¿Es realmente bueno el bien común?", *Claves de la Razón Práctica* n. 155, Madrid, Progreso, 2003, pp. 40-50.
- Rivero, Ángel: "El discurso republicano", en Águila, Rafael del, y otros: *La Democracia en sus Textos*, Madrid, Alianza, 1998, pp. 49-113.
- Rivero, Ángel: "Republicanismo y neo-republicanismo", *Isegoría* n. 33, Madrid, CSIC, 2005, pp. 5-17.
- Robbins, Caroline: *The Eighteenth-century Commonwealth man (Studies in the Transmission, Development, and Circumstance of English Liberal Thought from the Restoration of Charles II until the War with the Thirteen Colonies)*, reimp. (ed. original de Cambridge, Harvard University Press, 1968), Indianapolis, Liberty Fund, 2004.
- Rodríguez Paniagua, Jose María: *Historia del pensamiento jurídico*, Vol. I, de Heráclito a la Revolución Francesa, 6ª ed. (1ª, de 1971), Madrid, Universidad Complutense, 1988.
- Rossiter, Clinton: *The First American Revolution: The American Colonies on the Eve of Independence*, New York, Harcourt, Brace & Co., 1956.
- Rousseau, Jean Jacques: *Du Contrat Social* (1762); hay trad. cast. de Consuelo Berges, por donde se cita, *El Contrato Social*, Madrid, Aguilar, 1969.
- Rubio Carracedo, José: *¿Democracia o representación? Poder y legitimidad en Rousseau*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1990.
- Rubio Carracedo, José: *Ciudadanos sin democracia. Nuevos ensayos sobre ciudadanía, ética y democracia*, Granada, Comares, 2005.
- Ruiz Miguel, Alfonso: "Concepciones de la igualdad y justicia distributiva" en Díaz, Elías y Colomer, José Luis (eds.), *Estado...*, cit., pp. 211-278.
- Ruiz Miguel, Alfonso: "Confirmaciones y precisiones mínimas", *Doxa*, n. 6, Alicante, Universidad de Alicante, 1989, pp. 201-07.
- Ruiz Miguel, Alfonso: "Constitucionalismo y democracia", *Isonomía*, n. 21, México D.F., Instituto Tecnológico Autónomo de México, oct. 2004, pp. 51-84.
- Ruiz Miguel, Alfonso: "Derechos liberales y derechos sociales", *Doxa*, n. 15-16, Alicante, Universidad de Alicante, 1994, pp. 651-74.
- Ruiz Miguel, Alfonso: "La igualdad política", *Derechos y Libertades*, n. 11, Madrid, Instituto Bartolomé de las Casas, 2002, pp. 65-98.
- Ruiz Miguel, Alfonso: "La jurisprudencia de Adam Smith, entre la ética y la economía", en Iglesias Prada, Juan Luis (ed.), *Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Aurelio Menéndez*, Vol. 4, Madrid, Civitas, 1996, pp. 5495-5526.
- Ruiz Miguel, Alfonso: "La representación democrática de las mujeres", *Anales de la Cátedra Francisco Suárez*, n. 35, Granada, Universidad de Granada, 2001, pp. 239-64.
- Ruiz Miguel, Alfonso: "La teoría política del optimismo obsesivo: C. B. Macpherson", *Sistema*, n. 52, Madrid, Fundación Sistema, 1983, pp. 45-64.
- Ruiz Miguel, Alfonso: "Los derechos de participación política", en Betegón Carrillo, Jerónimo, Laporta San Miguel, Francisco Javier, Prieto Sanchís, Luis, y Páramo Argüelles, Juan Ramón de (eds.), *Constitución y derechos fundamentales*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 2004, pp. 723-48.
- Ruiz Miguel, Alfonso: "Los derechos humanos como derechos morales, ¿entre el problema verbal y la denominación confusa?", en Muguerza Carpintier, Javier, y Peces-Barba Martínez, Gregorio (eds.), *El Fundamento de los Derechos Humanos*, Madrid, Debate, 1989, pp. 321-26.
- Ruiz Miguel, Alfonso: "Modelo americano y modelo europeo de justicia constitucional", n. 23, *Doxa*, n. 23, Alicante, Universidad de Alicante, 2000, pp. 145-60.

- Ruiz Miguel, Alfonso: "Problemas de ámbito de la democracia", *Doxa*, n. 6, Alicante, Universidad de Alicante, 1989, pp. 97-120.
- Ruiz Miguel, Alfonso: *La justicia de la guerra y de la paz*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1988.
- Ruiz Miguel, Alfonso: *Una filosofía del derecho en modelos históricos. De la antigüedad a los Inicios del constitucionalismo*, Madrid, Trotta, 2002.
- Ruiz Ruiz, Ramón: "La alternativa republicana a la democracia conemporánea: participación y virtud cívica", *Sistema*, n. 194, Madrid, Fundación Sistema, 2006, pp. 73-93.
- Ruiz Ruiz, Ramón: *La Tradición republicana. Renacimiento y ocaso del republicanismo clásico*, Madrid, Dykinson, 2006.
- Ruiz Ruiz, Ramón: *Los orígenes del republicanismo clásico. Patrios politeia y res publica*, Madrid, Dykinson, 2006.
- Rutland, Robert A.: "Bill of Rights and the First Ten Amendments to the Constitution", en Greene y Pole (eds.), *The Blackwell...*, cit., pp. 271-75.
- Sabine, George H.: *A History of Political Theory*, 3ª ed. (1ª ed., de 1937), Nueva York, Holt. Rinehart and Winston Inc., 1961; trad. cast. de Vicente Herrero, por donde se cita, *Historia de la teoría política*, México D. F., Fondo de Cultura Económica, 1992.
- Saladino, Gaspare J.: *Delaware (Armed in the Cause of Freedom)*, en Conley, Patrick T., y Kaminski, John P. (eds.), *The Bill of Rights and the States. The Colonial and Revolutionary Origins of American Liberties*, Madison, Rowman & Littlefield, 1992, pp. 274-307.
- Saldaña, Nieves: "El poeta de la revolución puritana: teoría política de John Milton", *Historia Constitucional. Revista Electrónica*, n. 2, Oviedo, Universidad de Oviedo, 2001, <<http://hc.rediris.es/dos/articulos/html/milton/milton1.htm>>.
- Saldaña, Nieves: "Teoría política de John Milton (II): presencia e influencia en la América nacional y revolucionaria", *Historia Constitucional. Revista Electrónica*, n. 4, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y Universidad de Oviedo, 2003 <<http://hc.rediris.es/dos/articulos/html/milton/milton1.htm>>
- Sánchez-Bayón, Antonio: *Manual de sociología jurídica estadounidense: del poder, lo sagrado y la libertad en la modernidad occidental*, Madrid, Delta, 2008.
- Sarson, Steven J.: "Chronology Compiled", en Greene y Pole (eds.), *The Blackwell...*, cit., pp. 794-827.
- Sastre Ariza, Santiago: "La recuperación de la política. Algunas reflexiones sobre el republicanismo". *Claves de la Razón Práctica*, n. 156, Madrid, Progreso, 2005, pp. 30-41.
- Sauca Cano, Jose María: *La ciencia de la asociación en Tocqueville. Presupuestos metodológicos para una teoría Liberal de la vertebración social*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1995
- Sauquillo, Julián: "Los fundamentos de la representación política: el origen de la relación conceptual entre órgano, pueblo y ley", *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma*, n. 8, Madrid, Universidad Autónoma, 2004, pp. 63-107.
- Sauquillo, Julián: "Representación política y democracia" Colomer, José Luis, y Díaz, Elías (eds.): *Estado, Justicia...*, cit., pp. 281-314.
- Savonarola, Girolamo: *Tratado sobre la república de Florencia y otros escritos políticos*, Fernández Buey, Francisco (ed.), trad. y notas de Juan Manuel Forte, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2000.
- Schulz, Fritz: *Prinzipien des Römischen Rechts*, München y Leipzig, Verlag von Duncker und Humblot, 1934; trad. cast. de Manuel Abellán Velasco, por donde se cita, *Principios del Derecho Romano*, Madrid, Civitas, 1990.
- Scott, Jonathan: *Commonwealth Principles. Republican Writing of the English Revolution*, Cambridge, Cambridge University Press, 2004.

- Scott, Jonathan: *Commonwealth Principles. Republican Writing of the English Revolution* (Cambridge, Cambridge University Press, 2004).
- Sharp, Andrew (ed.): *The English Levellers*, reimp. (1ª ed., de 1998), Cambridge, Cambridge University Press, 2004.
- Sherry, Suzanna: "The Founder's Unwritten Constitution", en *The University of Chicago Law Review*, vol. 54, n. 4, Chicago, University of Chicago, 1987.
- Shklar, J.: "Montesquieu and the New Republicanism", en G. Bock, Q. Skinner y Viroli, Maurizio (eds.): *Machiavelli and Republicanism*, Cambridge, Cambridge University Press, 1990.
- Sidney, Algernon: *Discourses Concerning Government*, London, s.n., 1689.
- Sieyès, Emmanuel Joseph: *Escritos políticos*, ed. de David Pantoja Morán, México D.F., Fondo de Cultura Económico, 1993.
- Skinner, Quentin, y Van Gelderen, Martin: *Republicanism. A Shared European Heritage*, Vol. II, Cambridge, Cambridge University Press, 2002.
- Skinner, Quentin: "Classical Liberty and the Coming of the English Civil War", en Skinner y Van Gelderen, *Republicanism...*, cit., Cambridge, Cambridge University Press, pp. 9-28.
- Skinner, Quentin: "El tercer concepto de libertad" (trad. de Carmen Castells), *Claves de la Razón Práctica* n. 155, Madrid, Progreso, 2005, pp. 4-8.
- Skinner, Quentin: "La libertad de las repúblicas: ¿un tercer concepto de libertad?", *Isegoría* n. 33, Madrid, CSIC, 2005, pp. 19-49.
- Skinner, Quentin: *Liberty before Liberalism*, Cambridge, Cambridge University Press, 1998.
- Skinner, Quentin: *Machiavelli*, Oxford, Oxford University Press, 1981; trad. cast. de Manuel Benavides, por donde se cita, *Maquiavelo*, Madrid, Alianza, 1984.
- Skinner, Quentin: *The Foundations of Modern Political Thought. The Renaissance* (Vol. I), Cambridge, Cambridge University Press, 1978; trad. cast. de Juan José Utrilla, por donde se cita, *Los fundamentos del pensamiento político moderno. El Renacimiento* (Vol. I), México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1985.
- Skinner, Quentin: *The Foundations of Modern Political Thought. The Reformation* (Vol. II), Cambridge, Cambridge University Press, 1978; trad. cast. de Juan José Utrilla, por donde se cita, *Los fundamentos del pensamiento político moderno. La Reforma* (Vol. II), México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1986.
- Sommerville, Johann P.: *Politics and Ideology in England, 1603-1640*, London, Longman, 1986.
- Speck, W.A.: "The Structure of British Politics in the Mid-eighteenth Century", en Greene y Pole (eds.), *The Blackwell...*, cit., pp. 3-8.
- Steele, Ian K.: "Metropolitan Administration of the Colonies, 1696-1775", en Greene y Pole (eds.), *The Blackwell...*, cit., pp. 9-16.
- Stone, Lawrence: *The Causes of English Revolution (1529-1642)*, London, Routledge & Kegan Paul, 1972.
- Tácito: *Anales*; trad. cast. de J.L. Moralejo, Madrid, Gredos, 1984.
- Taft, Barbara: "From Reading to Whitehall: Henry Ireton's Journey", en Mendle (ed.), *The Putney Debates...*, cit., 2001, pp. 175-96.
- The Cromwell Association*: <<http://www.olivercromwell.org/>>
- Thomas, D.G.: "The Stamp Act Crisis and its Repercussions, Including the Quartering Act Controversy", en Greene y Pole (eds.), pp. 113-25.
- Thomas, Peter D.G.: "The Grenville Program, 1763-1765", en Greene y Pole (eds.), *The Blackwell...* pp. 107-12.
- Thomas, Peter D.G.: "The Grenville Program, 1763-1765", en Greene y Pole (eds.), *The Blackwell...*, cit., pp. 107-111.

Thompson, Christopher: "Maximilian Petty and the Putney Debate on the Franchise", *Past & Present* n. 88, Oxford, Past & Present Society, ag. 1980, pp. 63-9.

Tito Livio: *Historia de Roma desde su fundación*, trad. de J.A. Villar Vidal, Madrid, Gredos, 1990.

Tocqueville, Alexis de: *De la démocratie en Amérique*, (1835 y 1840, en dos vols.), trad. cast. de Dolores Sánchez de Aleu, por donde se cita, *La democracia en América* (2 vols.), Madrid, Alianza, 1985.

Tocqueville, Alexis de: *L' Ancien Régien et la Révolution* (1856), trad. cast. de Dolores Sánchez de Aleu, por donde se cita, *El Antiguo Régimen y la Revolución* (2 vols.), Madrid, Alianza, 1982.

Torres del Moral, Antonio: "Democracia y representación en los orígenes del Estado constitucional" *Revista de Estudios Políticos*, n. 203, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, sept-oct 1975, pp. 145-212.

Torres del Moral, Antonio: "Modelo y antimodelo en la teoría política de Rousseau", *Revista de Estudios Políticos*, n. 212, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1972, pp. 93-165.

Tucídides: *Historia de la Guerra del Peloponeso*; trad. de Juan José Torres Esbarranch, Madrid, Gredos, 2000.

Tulle, Elizabeth: "Biblical Reference in the Political Pamphlets of the Levellers and Milton, 1638-1654" en Armitage, David, Himy Armand y Skinner, Quentin (eds.), *Milton and Republicanism*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, pp. 63-81.

Tully, Alan: "The Political Development of the Colonies after the Glorious Revolution", en Greene and Pole (eds.), *The Blackwell...*, cit., pp. 28-38.

Varela Suanzes, Joaquín Varela: "Sovereignty in British Legal Doctrine", *Historia Constitucional. Revista Electrónica*, n. 4, Oviedo, Universidad de Oviedo, 2003, <<http://hc.rediris.es/04/Numero04.html>>

Velasco, Juan Carlos: "La noción republicana de ciudadanía y la diversidad cultural", *Isegoría* n. 33, Madrid, CSIC, 2005, pp. 191-204

Vidal, Ernesto: "Observaciones a Javier de Lucas", *Doxa*, n. 6, Alicante, Universidad de Alicante, 1989, pp. 215-17.

Vidal, Ernesto: "Representación y democracia: problemas actuales", *Doxa*, n. 6, Alicante, Universidad de Alicante, 1989, pp. 165-85.

Vidal, Gore: *Inventing a Nation. Washington, Adams and Jefferson*. New Haven, Yale University Press; trad. cast. de Jaime Zulaika, por donde se cita, *La invención de una nación. Washington, Adams y Jefferson*, Barcelona, Anagrama, 2003.

Vile, Maurice J.C.: *Constitutionalism and the Separation of Powers*, Oxford, Oxford University Press, 1967; trad. cast. de Xohana Bastida Calvo, revisada por Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, por donde se cita, *Constitucionalismo y separación de poderes*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2007.

Villacañas Berlanga, Jose Luis: "Max Weber entre liberalismo y republicanismo", *Isegoría* nº 33, Madrid, CSIC, 2005, pp. 127-141.

Viroli, Maurizio: *For Love of Country*, Oxford, Oxford University Press, 1995; trad. cast. de Patrick Alfaya MacShane, *Por Amor a la Patria*, Madrid, Acento, 1997.

Voltaire: *Lettres philosophiques* (1734); hay trad. cast. de Fernando Savater, "Cartas filosóficas" (introducción y notas del propio traductor), Madrid, Alianza, 1988.

Waldron, Jeremy: *Law and Disagreement*, Oxford, Oxford University Press, 1999; trad. cast., por donde se cita, de José Luis Martí y Águeda Quiroga, *Derecho y Desacuerdos*, Madrid, Marcial Pons, 2005.

Walter, Gerard: *La révolution anglaise*, París, Albin Michel, 1963; trad. cast. de J. M. Zainqui y otros (s.n.), por donde se cita, *La revolución inglesa*, Barcelona, Grijalbo, 1971.

Walzer, Michael: *The Revolution of the Saints. A Study in the Origins of Radical Politics*, Cambridge, Harvard University Press, 1965; trad. cast., por donde se cita, de Silvia Villegas, *La Revolución de los Santos. Estudio sobre los orígenes de la política radical*, Buenos Aires, Katz, 2008.

Weber, Max: *Die protestantische Ethik und der Geits des Kapitalismus* (1905); trad. cast. (s.n.), *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*, Barcelona, Península, 1989.

Webster's Third New International Dictionary, reimp. (ed. original de Springfield, Merriam Webster, 1961), Könneman, Cologne, 1993.

Weymouth, Lally (ed.): *Thomas Jefferson (the Man...his World...his Influence)*, George Weidenfeld and Nicolson, London, 1973; trad. cast. de José Belloch Zimmerman, por donde se cita, *Thomas Jefferson (el hombre...su mundo...su influencia)*, Tecnos, Madrid, 1976.

Wilson, James: *Collected Works*, Hall, Kermit L. y Hall, David Mark (eds.), Indianapolis, Liberty Fund, 2007, <<http://oll.libertyfund.org/title/2072/156335>>.

Wilson, James: *Discursos constitucionales*, Alcoriza, Javier, y Lastra, Antonio, eds., Madrid, Tecnos, 2003

Winstanley, Gerrard: *The Law of Freedom or true Magistrty restored*, George H. Sabine (ed.), New York, Russell & Russell, 1965; trad. cast. de R. Garzaro, por donde se cita, *El derecho de libertad, o la verdadera magistratura restaurada*, Salamanca, Librería Cervantes, 1985.

Wirzubski, Ch.: *Libertas as a Political Idea at Rome During the Late Republic and Early Principate*, Cambridge, Cambridge University Press, 1968.

Wolfe, D. M.: *Milton and the Puritan Revolution*, New York, Thomas Nelson & Sons, 1941.

Wood, Gordon S.: *The Creation of the American Republic (1776-1787)*, 2ª ed (1ª, de 1969), Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1998.

Wood, Gordon S.: *The Radicalism of the American Revolution*, New York, Random House, 1993.

Woodhouse, Arthur S.P. (ed., con *Introduction* de Ivan Roots): *Puritanism and Liberty, Being the Army Debates (1647-49) from the Clarke Manuscripts with Supplementary documents*, 3ª ed. (1ª ed., de 1938), London, J.M. Dent & Sons, 1986.

Woolrych, Austin: "The Debates from the Perspective of the Army", en Mendle, Michael (ed.): *The Putney Debates of 1647 – The Army, the Levellers and the English State*, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, pp. 53-78.

Woolrych, Austin: *Soldiers and statesmen. The General Council of the Army and its Debates, 1647-1648*, Oxford, Clarendon Press, 1987.

Wootton, David (ed.): *Republicanism, Liberty, and Commercial Society, 1649-1776*, Standford, Standford University Press, 1994.

Wootton, David: "Introduction. The Republican Tradition: From Commonwealth to Common Sense", en Wootton (ed.), *Republicanism...*, cit., pp. 1-41.

Worden, Blair: "Harrington's Oceana, Origins and Aftermath, 1651-1660", en Wootton, David (ed.), *Republicanism...*, cit., pp. 111-138.

Worden, Blair: "Republicanism and the Restauration, 1660-1683", en Wootton, David (ed.), *Republicanism...*, cit., pp. 139-193.

Yale University: <<http://avalon.law.yale.edu/>>

Zagarri, Rosemarie: "Suffrage and Representation", en Greene y Pole (eds.), *The Blackwell...*, cit., pp. 648-653.

Zagorin, Pérez: *A History of Political Thought in the English Revolution*, Bristol, Thoemmes Press, 1997 (1ª ed., de 1954).

Zan, Julio de: "La utopía kantiana de la comunidad ética", *Isegoría* n. 33, Madrid, CSIC, 2005, pp. 143-159.

Zuckert, Michael P.: *Natural Rights and the New Republicanism*, Princeton, Princeton University Press, 1994.

